# SENADO DE PUERTO RICO

## DIARIO DE SESIONES

*PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE LA DECIMOTERCERA ASAMBLEA LEGISLATIVA*

*SEPTIMA SESION ORDINARIA*

*AÑO 2000*

**VOL. LI** **San Juan, Puerto Rico** **Sábado, 24 de junio de 2000** **Núm. 54**


A las once y cuarenta y ocho minutos de la mañana (11:48 a.m.) de este día, sábado, 24 de junio de 2000, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia de la señora Mercedes Otero de Ramos, Presidenta Accidental.

### ASISTENCIA

Senadores:

Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock, Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Migdalia Padilla Arvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Manuel Rodríguez Orellana, Jorge Andrés Santini Padilla y Mercedes Otero de Ramos, Presidenta Accidental.

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Se reanuda la Sesión.

### INVOCACION

El Padre Angel Morales y el Reverendo David Valentín, miembros del Cuerpo de Capellanes del Senado de Puerto Rico, proceden con la Invocación.

**PADRE ANGEL MORALES**: Pidiendo la intervención de nuestro Señor en todos nuestros trabajos, vamos a escuchar un fragmento de la Epístola de los Romanos, escrita por San Pablo.

"Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis. Alegraos con los que se alegran; llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir los unos para con los otros. Si complacerse en la altivez, atraídos más bien por lo humilde. No se complazcan en su propia sabiduría, sin devolver a nadie mal por mal, procurando el bien ante todos los hombres en lo posible y en cuanto de nosotros dependa en paz con todos los hombres. No tomando la justicia por cuenta nuestra, queridos míos. Dejemos lugar a la cólera, pues dice la Escritura, mía es la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor.

**REVERENDO DAVID VALENTIN:** Gracias, Padre Santo, por tu Palabra que es lumbrera a nuestro camino. Y como dice, Padre, tu Palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Ti.

Padre, te pedimos, Padre, que esa sabiduría empiece, Señor, a rugir aquí en este lugar, en la Casa de las Leyes. Y te pido, Padre amado, que tu ayudes a cada uno de los queridos Senadores y Senadoras y

todos los que aquí trabajan, Padre amado, derrame tu gracia sobre cada uno de ellos y ayúdalos. Porque esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.

## INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes de Comisiones Permanentes:

De la Comisión de Hacienda, siete informes, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 2531 y de las R. C. de la C. 3155; 3404; 3419; 3434; 3435 y 3437, sin enmiendas.

De la Comisión de Hacienda, dos informes, proponiendo la aprobación del P. de la C. 3297 y de la R. C. de la C. 3429, con enmiendas.

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Vivienda, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 2471, sin enmiendas.

De la Comisión de lo Jurídico, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 3232, sin enmiendas.

De las Comisiones de lo Jurídico; y de Hacienda, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del Sustitutivo al P. de la C. 400, con enmiendas.

De las Comisiones de Educación y Cultura; y de Hacienda, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2684, con enmiendas.

De las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Asuntos de la Mujer, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 833, con enmiendas.

De la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 3198, con enmiendas.

De la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, tres informes, proponiendo la aprobación de los P. de la C. 3062; 3202 y 3254, sin enmiendas.

De las Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas; y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, un informe conjunto, proponiendo la no aprobación del P. del S. 1979.

De las Comisiones de Asuntos de la Mujer; y de Salud y Bienestar Social, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 2304, sin enmiendas.

De la Comisión Conjunta para el Estudio del Seguro de Responsabiliadad Obligatorio para Vehículos de Motor, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2443, sin enmiendas.

## RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

La Secretaría da cuenta de la primera relación e informa que ha sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones conjuntas, de la lectura se prescinde, a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz.

## PROYECTOS DEL SENADO

P. del S. 2636

Por el señor Meléndez Ortiz:

"Para enmendar la Ley Número 163. De 11 de agosto de 1995 con el propósito de asiginarle fondos al Departamento de Hacienda para permitirle repagar el balance pendiente de pago del préstamo que recibió del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico."

(ASUNTOS MUNICIPALES; Y DE HACIENDA)

*P. del S. 2637
Por el señor Rodríguez Colón; la señora Arce Ferrer; los señores Meléndez Ortiz, Iglesias Suárez, McClintock Hernández; las señoras Berríos Rivera, Carranza De León; los señores Dávila López, González Rodríguez, Marrero Padilla; la señora Lebrón Vda. de Rivera; el señor Navas De León; la señora Padilla Alvelo; los señores Pagán González, Parga Figueroa, Peña Clos, Rivera Cruz, Rodríguez Negrón y Santini Padilla:

"Para enmendar el inciso (a) del Artículo 11; el apartado (1) del inciso (a) y añadir los apartados 4, 5 y 6 del inciso (b), y el inciso (d) del Artículo 18; enmendar el inciso (a) del Artículo 19; y los incisos (a) y (b) del Artículo 25 de la Ley Núm. 21 de 26 de junio del 1997, según enmendada, conocida como "Ley de Venta de Deudas Contributivas", a fin de aclarar sus disposiciones para facilitar la transacción de venta de deudas contributivas."
(HACIENDA)

***ADMINISTRACION**

La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones conjuntas:

**PROYECTOS DE LA CAMARA**

P. de la C. 332
Por el señor García San Inocencio:

"Para crear un "Programa sobre enseñanza de Gobierno y Derechos Civiles" en las instituciones de enseñanza pública de Puerto Rico."
(EDUCACION Y CULTURA)

P. de la C. 2556 (Por Petición)
Por el señor García Colón:

"Para enmendar el Artículo 608 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico", a fin de incluir dentro de las exclusiones a los usuarios de drogas inyectables debidamente identificados como participantes en programas de reducción de daños."
(DE LO JURIDICO; Y DE SALUD BIENESTAR SOCIAL)

P. de la C. 2791
Por el señor López Santos:

"Para modificar los límites territoriales del Municipio de Guaynabo para incluir dentro de su jurisdicción el sector Pajilla que colinda con los caminos del Faro y La Pajilla, que pertenecen a la jurisdicción territorial del Municipio de Aguas Buenas."
(ASUNTOS MUNICIPALES; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES)

P. de la C. 2958
Por el señor Mundo Ríos:

"Para enmendar los Artículos 38 y 95 de la Ley Hipotecaria de 1979, a fin de atemperarlos con lo dispuesto en la Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 1999, conocida como "Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario"."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2984
Por la señora Ruíz Class:

"Para enmendar el Artículo177 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Codigo Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a los fines de aumentar la pena dispuesta para las distintas modalidades del delito de usurpación la pena de restitución."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 3013
Por la señora Ruíz Class:

"Para enmendar el Artículo 89 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de eliminar la frase "entrenado para atacar"."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 3064
Por los señores Jiménez Cruz y Cintrón García:

"Para enmendar los Artículos 1 y 2; añadir un nuevo Artículo 4, se reenumera los Artículos 4 y 5 como Artículos 5 y 6; se añade un nuevo Artículo 7 y se reenumeran los Artículo 6, 7 y 8 como los Artículos 8, 9, 10 de la Ley Núm. 173 de 31 de agosto de 1996, y se enmienda el párrafo tercero del Artículo 14 de la Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, según enmendada, mejor conocida como "Ley para Autorizar el Sistema de Lotería Adicional; a los fines de cambiar el título de la Ley; establecer un pareo de fondos estatales de arrendamiento a todo aquel veterano que cualifique para la Casa Estatal de Veterano, y proveerle anualmente los fondos al referido programa y para otros fines."
(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS; DE VIVIENDA; Y DE HACIENDA)

P. de la C. 3138
Por el señor Acevedo Méndez:

"Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 7 de 19 de julio de 1985, según enmendada, a fin de aumentar las multas mínima y máxima establecidas como penalidad por el incumplimiento en el proceso de certificación de los planes y documentos finales de construcción que requieran permisos o endosos de las agencias, necesarios para la expedición de permisos de construcción a otorgarse por la Administración de Reglamentos y Permisos."
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA)

P. de la C. 3160
Por el señor Sánchez Fuentes:

"Para enmendar los incisos (a) y (b) del Artículo 3, enmendar el inciso (a) del Artículo 4, añadir un inciso (d) al Artículo 8 y enmendar el Artículo 16 de la Ley Núm. 284 del 21 de agosto de 1999, conocida como la "Ley Contra el Acecho en Puerto Rico", a fin de corregir el alcance de la definición de lo que constituye acecho para efectos de dicha Ley, ampliar el alcance de las disposiciones sobre las órdenes de protección, y enmendar los formularios que forman parte de la legislación."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 3233
Por el señor Vega Borges:

"Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 12 de 19 de octubre de 1954, según enmendada, conocida como la "Ley de Retiro de la Judicatura", a fin de aumentar a cinco por ciento (5%) el aumento periódico de las anualidades pagaderas de conformidad con dicha ley y para proveer fondos."
(COMISION ESPECIAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA ENTENDER CON LEGISLACION REFERENTE A LOS SISTEMAS DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS Y PENSIONADOS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO)

P. de la C. 3238
Por el señor Cintrón García:

"Para adicionar los incisos (b), (c) (d) a la Sección 19 de la Ley Núm. 52 de 11 de agosto de 1989, según enmendada, mejor conocida como 'Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional" a los fines de que consten en forma codificada reglas que expongan requisitos mínimos que todo banco y entidad bancaria internacional que opere en Puerto Rico debe seguir para proteger la intimidad de la información que obtiene sobre sus clientes y para otros fines."
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICA)

P. de la C. 3274
Por la señora Ramos Rivera:

"Para autorizar al Secretario de Educación de Puerto Rico a celebrar un referéndum entre los maestros y miembros del Departamento de Educación, para que éstos decidan si los servicios en puestos cubiertos por el Sistema de Retiro para Maestros deben ser excluidos o incluidos en el acuerdo entre el Secretario de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos y el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a fin de determinar extender o no los beneficios del Sistema de Seguro Social Federal a los maestros y miembros del Departamento de Educación como un beneficio adicional para estos servidores públicos."
(COMISION ESPECIAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA ENTENDER CON LEGISLACION REFERENTE A LOS SISTEMAS DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS Y PENSIONADOS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO; Y DE EDUCACION Y CULTURA)

P. de la C. 3307
Por los señores Acevedo Méndez, Díaz Sánchez, Pérez Ortiz, Lugo González y la señora Juarbe Beníquez:

"Para enmendar el inciso (k) y añadir el inciso (p) del Artículo 5 de la Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Ley Núm. 23 del 20 de junio de 1972, a los fines de añadir el mecanismo de expropiación forzosa como modo de adquisición; ampliar el alcance de los modos de adquisición a todos los programas que administra esta agencia y facultar al Secretario para llevar a cabo los procesos de adquisición a nombre y en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluido el proceso de expropiación forzosa y para asignar la facultad de tomar dinero a préstamo."
(RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES Y ENERGIA)

P. de la C. 3360
Por el señor Valle Martínez:

"Para enmendar el Artículo 2.26 y adicionar un subinciso (36) al inciso (a) del Artículo 24.02 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito", para disponer para la expedición de tablillas especiales para automóviles clásicos y clásicos modificados; y establecer el monto de los derechos anuales a pagarse por los automóviles con tablillas especiales para automóviles antiguos, clásicos y clásicos modificados."
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA)

P. de la C. 3363
Por el señor Acevedo Méndez:

"Para adicionar un inciso (f) al Artículo 7 de la Ley Número 111 de 12 de julio de 1985, según enmendada, conocida como "Ley para la Protección y Conservación de Cuevas, Cavernas o Sumideros de Puerto Rico", a fin de facultar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para realizar labores de limpieza en las cuevas, cavernas, sumideros cuando dicho recurso natural así lo necesite, a pesar de que el dueño del predio o finca que ubica el acceso a utilizar para entrar no lo permite."
(RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES Y ENERGIA)

P. de la C. 3375
Por los señores Mundo Ríos y Ramos Meléndez:

"Para establecer la "Ley de Retiro Temprano de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico", a los fines de autorizar y conceder el retiro temprano a los empleados públicos de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial del Gobierno de Puerto Rico; disponer el beneficio de pensión; disponer los requisitos de edad y años de servicios para el retiro temprano: fijar el por ciento de retribución promedio a utilizarse en el computo de la pensión: y para otros fines."
(COMISION ESPECIAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA ENTENDER CON LEGISLACION REFERENTE A LOS SISTEMAS DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS Y PENSIONADOS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO)

## MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones de Trámite Legislativo:

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado el P de la C. 3536 y solicita igual resolución por parte del Senado.

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo Legislativo, reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final la R. C. de la C. 3325 y previo consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó nuevamente en el Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, tomando como base el texto enrolado, con las siguientes enmiendas:

**En el Texto:**

Página 1, línea 2: sustituir "de Fondos No Comprometidos" por "del Fondo de Mejoras Públicas"

Página 1, líneas 8 y 9: sustituir "inmediatamente después de su aprobación" por äl 1ro. De julio de 2000"

**En el Título:**

Página 1, línea: sustituir "de Fondos No Comprometidos" por "del Fondo de Mejoras Públicas"

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo Legislativo acordó disponer que sea devuelto al Senado el P. del S. 2567, según fuera solicitado, con el fin de reconsiderarlo.

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo Legislativo acordó dar el consentimiento solicitado por el Senado para pedir al Gobernador la devolución de la R. C. del S. 2188, con el fin de reconsiderarla.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso (b) de este turno se da cuenta de una comunicación de la Cámara, informando que dicho Cuerpo reconsideró la Resolución Conjunta de la Cámara 3325 y pide igual acción de parte del Senado. Vamos a solicitar que esta medida se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día de Hoy.

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿¿Hay objeción? No hay objeción, que así se apruebe.

SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso (c) se da cuenta de otra comunicación de la Cámara, informando que dicho Cuerpo acordó devolver al Senado el Proyecto del Senado 2567. Esta medida, señora Presidenta, vamos a solicitar que sea devuelta a la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales.

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿¿Hay objeción? No hay objeción, que así se apruebe.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso (d) de este turno, también, se da cuenta de una comunicación de la Cámara, informando que acordó dar el consentimiento solicitado por el Senado para pedir al Gobernador la devolución de la Resolución Conjunta del Senado 2188, con el fin de reconsiderarla. Toda vez que no tenemos las enmiendas, si alguna, para esta medida, solicitamos se deje para acción posterior.

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, que así se apruebe.

## SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones:

De la Oficina del Contralor, tres comunicaciones remitiendo copia de los Informes de Auditoría Número CP-00-20 sobre las operaciones fiscales de la Universidad de Puerto Rico, Colegio Universitario de Arecibo; M-00-41 sobre las operaciones fiscales del Municipio de Moca y TI-00-13 sobre las operaciones fiscales del Departamento de la Familia, Oficina de Sistemas de Información.

De la Oficina de Presupuesto del Senado, una comunicación, remitiendo el Presupuesto Consolidado Año Fiscal 2000-01 del Senado de Puerto Rico.

## MOCIONES

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se forme un primer Calendario de Ordenes Especiales del Día que incluya las siguientes medidas: Proyecto del Senado 2456, Proyecto del Senado 2489, Proyecto del Senado 2624, Proyecto de la Cámara 3325, Proyecto de la Cámara 2888, Proyecto de la Cámara 2995, Proyecto de la Cámara 2969, Resolución Conjunta de la Cámara 2927, Resolución Conjunta de la Cámara 3173, Resolución Conjunta de la Cámara 3308, Resolución Conjunta de la Cámara 3421, Resolución Conjunta de la Cámara 3398, Resolución Conjunta de la Cámara 3410, Resolución Conjunta de la Cámara 3417, Resolución Conjunta de la Cámara 3411, Resolución Conjunta de la Cámara 3406, Resolución Conjunta de la Cámara 3408.

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, que así se apruebe.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señora Presidenta, vamos a solicitar que se releve a las Comisiones de Asuntos Municipales; y de Desarrollo de la Capital de tener que informar el Proyecto del Senado 1930, y que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, que así se apruebe.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señora Presidenta, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos Municipales de tener que informar el Proyecto del Senado 2303 y 2491, y que los mismos se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, que así se apruebe.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de lo Jurídico de tener que informar el Proyecto del Senado 2491, toda vez que está en segunda instancia.

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, que así se apruebe.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Hacienda de tener que informar la Resolución Conjunta del Senado 2396, y que la misma se incluya en el Calendario.

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, que así se apruebe.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, solicitamos que se releve a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía de tener que informar el Proyecto de la Cámara 3197, y que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, solicitamos que se releve a la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura de tener que informar la Resolución Conjunta de la Cámara 2645, y que la misma se incluya en el Calendario.

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señora Presidenta, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Reglas y Calendario de tener que informar la Resolución Concurrente del Senado 70, y que la misma se incluya en el Calendario.

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Y solicitamos se releve a la Comisión Conjunta de la Asamblea Legislativa para la Concesión de la Medalla de Excelencia Deportiva de la Legislatura de Puerto Rico de tener que informar la Resolución Concurrente de la Cámara 66, y que la misma se incluya en el Calendario.

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba.

## ASUNTOS PENDIENTES

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que los Asuntos Pendientes, permanezcan pendientes para el próximo día de Sesión.

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba.

## CALENDARIO DE LECTURA

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2456, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Etica Gubernamental y Contra la Corrupción; y de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas.

## "LEY

Para adicionar los incisos (d), (e) y (f) al Artículo 5.1 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada conocida como "Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" a fin de proteger a todo ciudadano privado o cualquier funcionario o empleado público de actuaciones adversas en su contra por parte de su patrono por haber denunciado actos ilegales en el servicio público.

## EXPOSICION DE MOTIVOS

El Gobierno de Puerto Rico está comprometido con una responsabilidad moral y ética de promover y preservar la integridad de los funcionarios e instituciones públicas para el bienestar general del pueblo. Para ello es necesario crear un mecanismo en el cual los empleados se sientan con la libertad y confianza de poder denunciar actos delictivos en el servicio público sin temor de perder sus empleos y de no verse afectados por informar dichos actos, que son de gran importancia, para conservar la integridad y moral en el Gobierno.

Para restaurar la confianza del pueblo en su Gobierno y funcionarios públicos, es preciso adoptar medidas legislativas que sean eficaces a fin de proteger a las personas que observan irregularidades en la labor de los funcionarios o empleados públicos que menoscaben sus labores gubernamentales y vulneran los principios básicos de una ética y moral de excelencia.

Por los fundamentos antes expuestos, se pretende mediante esta Ley, proveer un mecanismo efectivo para que todo empleado que tenga conocimiento de actividades delictivas en el servicio público

pueda denunciar el acto sin temor de perder su empleo o ser víctimas de represalias por parte de su patrono.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.- Se adicionan los incisos (d), (e) y (f) al Artículo 5.1 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 5.1-Capacidad para Promover Investigaciones

(a) . . .

(d) Todo patrono de un empleado privado o de cualquier funcionario o empleado del Gobierno de Puerto Rico no podrá relevar, disciplinar o tomar ninguna acción adversa contra sus empleados por haber denunciado actos ilegales en el servicio público.

(e) Ningúnun patrono podrá afectar los derechos e intereses de los empleados como represalia por éstos haber informado sobre actos ilegales en el servicio público.

(f) Cualquier empleado que sea relevado de su cargo, disciplinado, o haya estado sujeto a una actuación adversa hacia su persona por haber denunciado actos ilegales en el servicio público, podrá presentar una querella ante el Secretario de Justicia o al empleado que éste disponga para recibir dichas querellas, para hacer la debida investigación y determinar si se puede resolver la querella utilizando un remedio administrativo o si se tiene que llevar una acción civil ante los Tribunales de Justicia, después de ciento ochenta (180) días de haber presentado la querella."

Sección 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

**"INFORME CONJUNTO**

**AL SENADO DE PUERTO RICO:**

Vuestras Comisiones de Etica Gubernamental y Contra la Corrupción; y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 2456, tienen a bien proponer a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguientes enmiendas:

**En el Texto:**

| | |
|---|---|
| Página 2, línea 1 | Después de " 1.-" , tachar " Se adicionan los incisos (d), (e) y (f) al Artículo 5.1", y sustituir por "Se adiciona un nuevo inciso (i) al Artículo 3.2; |
| Página 2, línea 3 | Tachar toda la línea y sustituir por "Artículo 3.2 Prohibiciones Eticas de Carácter General"; |
| Página 2, línea 4 | Tachar "(a)" y sustituir por "(A)"; |
| Página 2, líneas 5 a la 16 | Tachar todo su contenido y sustituir por: "(i) Ningún servidor público podrá, directa o indirectamente, despedir, amenazar, discriminar, o en forma alguna tomar represalias contra un servidor público, ex servidor público, cualquier persona privada o miembro de su unidad familiar porque éste ofrezca o intente ofrecer verbalmente o por escrito cualquier testimonio, expresión o información sobre alegadas violaciones a esta Ley, sus Reglamentos o cualquier otra conducta constitutiva de delito ante un foro legislativo, administrativo o judicial, |

estatal o federal, o porque solicite información respecto a la aplicabilidad de esta Ley o sus Reglamentos ante la Oficina de Etica Gubernamental, los Comités de Etica, Oficiales de enlace, o cualquier servidor con funciones investigativas, dentro de los noventa (90) días de advenir en conocimiento de las alegadas violaciones. Se entenderá por represalias cualquier acción u omisión perjudicial respecto a los términos, condiciones, compensación, ubicación, beneficios o privilegios del empleo o contrato con el Gobierno o servicios ofrecidos por el Gobierno."

**En el Título:**

Página 1, línea 1 — Tachar " Para adicionar los incisos (d), (e) y (f) al Artículo 5.1", y sustituir por "Para adicionar un nuevo inciso (i) al Artículo 3.2.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

El P. del S. 2456 propone enmendar la Ley de Etica Gubernamental, Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, a fin de proteger a todo ciudadano privado o a cualquier funcionario o empleado público de actuaciones adversas en su contra por parte de su patrono por haber denunciado ante las autoridades pertinentes actos ilegales en el servicio público, dentro de los noventa (90) días de advenir a conocimiento de las alegadas violaciones.

Vuestras Comisiones llevaron a cabo vista pública sobre la medida el 16 de junio de 2000, con la comparecencia de la Oficina de Etica Gubernamental, la Oficina del Contralor, el Departamento del Trabajo y Recurso Humanos y el Departamento de Justicia, habiendo todos endosado la misma por ser cónsona con la política pública vigente en nuestro ordenamiento jurídico.

Respetuosamente sometido,

Fdo.
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y
Asuntos Federales

Fdo.
Sergio Peña Clos
Presidente
Comisión de Etica Gubernamental
y Contra la Corrupción"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2489, y se da cuenta de un informe de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas.

**"LEY**

Para enmendar el Artículo 117-A de la Ley Núm. 115 de 24 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de tipificar como delito transmitir anuncios obscenos a través de la televisión.

## EXPOSICION DE MOTIVOS

Antes de la aprobación del Código Penal vigente, las conductas delictivas en Puerto Rico estaban tipificadas en el Código Penal de 1902, para cuya redacción se utilizó como modelo el Código Penal de California. Ante la gran preocupación pública sobre el auge de la criminalidad, se aprobó la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" que fue un reflejo diáfano y genuino de los valores de la sociedad puertorriqueña de aquella época. Es un cuerpo de ley que se ha enmendado acorde con los tiempos que vivimos y se ha ido manteniendo lo suficientemente abarcador y flexible para proyectarse hacia un futuro previsible, sin abandonar la idea de lograr la corrección y rehabilitación del delincuente. El Código Penal estatuye todo lo relativo a material obsceno en los Artículos 112 a 117-C.

Es de conocimiento general que la obscenidad es una actividad que derrota los ideales de espiritualidad, moralidad y decencia. Una actividad que vaya en contra de esos valores debe reprocharse para evitar que se utilicen los nuevos adelantos tecnológicos para explotar sexualmente al ser humano. La Asamblea Legislativa considera necesario enmendar el Artículo 117-A del Código Penal para incluir los anuncios en que se presente material obsceno, independientemente del producto que se desea mercadear. De esta manera, se promueven los más deseables principios de la convivencia social como lo son el amor, la ternura y la unidad familiar.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 117-A de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 117-A.- Transmisión o retransmisión de material obsceno.

Toda persona que a sabiendas, distribuya cualquier material obsceno *o se anuncie utilizando material obsceno* a través de televisión, radio o cualesquiera medios electrónicos u otro medio de comunicación, será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses o multa que no excederá de quinientos (500) dólares o ambas penas a discreción del tribunal. En caso de violaciones subsiguientes a este artículo, convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de dos (2) años y cinco (5) meses. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cuatro (4) años o multa fija de cincuenta mil (50,000) dólares o ambas penas **[o]** *a* discreción del tribunal. De mediar circunstancias atenuantes, la pena fija establecida podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año y ocho (8) meses o multa fija de veinte mil (20,000) dólares o ambas penas a discreción del tribunal. Disponiéndose, que en caso de violación subsiguiente a lo dispuesto en este artículo, por parte de persona jurídica, el tribunal podrá imponer pena de suspensión o de cancelación, según se dispone en los Artículos 52 y 53 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974."

Sección 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

## "INFORME

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de lo Jurídico, previo estudio y análisis del P. del S. 2489, tiene el honor de recomendar la aprobación del mismo con las siguientes enmiendas.

**Al Texto:**

| | |
|---|---|
| Página 2, línea 4: | Después de "obsceno" adicionar ", *transmita*" |

**En La Exposición De Motivos:**

| | |
|---|---|
| Página 1, Párrafo 1, línea 5: | Después de "Puerto Rico" eliminar "que" y sustituir por ". Este Código" |
| Página 1, Párrafo 1, líneas 9 y 10: | Después de "delincuente." Eliminar todo su contenido |
| Entre primer párrafo y segundo párrafo | Insertar el siguiente texto: "El Código Penal penaliza todo lo relativo a material obsceno en los Artículos 112 a 117-C. En su Artículo 112 define "materia obscena" como aquella que considerada en su totalidad por una persona promedio y aplicando patrones comunitarios contemporáneos apela al interés lascivo, o sea, un interés morboso en la desnudez, sexualidad o funciones fisiológicas; y es materia que representa o describe en una forma patentemente ofensiva conducta sexual, y considerado en su totalidad carece de un serio valor literario, artístico, político, religioso, científico o educativo." |
| Página 1, Párrafo 2, línea 4: | Después de "humano" eliminar todo su contenido |
| Página 2, línea 1: | Antes de 117-A insertar "La Asamblea Legislativa considera necesario enmendar el Artículo." |

**Al Titulo:**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 3: | Después de "transmitir" eliminar "anuncios obscenos" y adicionar "o anunciarse utilizando material obsceno", después de "televisión" adicionar ", radio o cualesquiera medios electrónicos u otro medio de comunicación." |

## ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 2489 tiene como propósito enmendar el Artículo 117-A de la Ley Núm. 115 de 24 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de tipificar como delito transmitir anuncios obscenos a través de la televisión.

En Puerto Rico, los Artículos 112 a 117B del Código Penal de Puerto Rico, definen material obsceno, tipifican como delito y penalizan las conductas obscenas. Específicamente, el Artículo 112 define material obsceno y conducta obscena de la siguiente manera:

(a) Materia obscena – significa materia que considerada en su totalidad por una persona promedio y aplicando patrones comunitarios contemporáneos apela al interés lascivo, o sea, un interés morboso en la desnudez, sexualidad o funciones fisiológicas; y es materia que representa o describe en una forma patentemente ofensiva conducta sexual, y considerado en su totalidad carece de un serio valor literario, artístico, político, religioso, científico o educativo.

La atracción del material al interés lascivo en el sexo se juzga en referencia al adulto promedio a menos que se desprenda de la naturaleza del material, o de las circunstancias de su diseminación, distribución o exhibición, que está diseñado para grupos de desviados sexuales en cuyo caso, dicha atracción se juzgará con referencia al grupo a quien va dirigido.

En procesos por violación a las disposiciones de este Código donde las circunstancias de producción, presentación, venta, diseminación, distribución, o publicidad indican que el acusado está explotando comercialmente el material por su atracción lasciva, la prueba de este hecho constituirá prueba prima facie de que el mismo carece de serio valor literario, artístico, político, religioso, científico o educativo.

El hecho de que el acusado sabía que el material mostraba personas de menos de dieciséis (16) años de edad dedicadas a conducta sexual, según se define en el inciso (f) de este mismo Artículo, es un factor que debe tomarse en consideración al determinar que el material es obsceno.

Cuando la conducta prohibida se lleve a cabo para, con o en presencia de menores de dieciséis (16) años, será suficiente que el material esté dirigido a despertar un interés lascivo en el sexo.

(e) Conducta obscena – significa cualquier actividad física del cuerpo humano, bien sea llevada a cabo sólo o con otras personas, incluyendo pero sin limitarse a cantar, hablar, bailar, actuar, simular, o hacer pantomimas, la cual considerada en su totalidad por la persona promedio, y según los patrones comunitarios contemporáneos, apela al interés lascivo, o sea, interés morboso en la desnudez, sexualidad o funciones fisiológicas y representa o describe en una forma patentemente ofensiva conducta sexual, y carece de un serio valor literario, artístico, político, religioso, científico o educativo.

Para la evaluación de esta medida la Comisión contó con las ponencias de la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones de Puerto Rico y la Oficina de Servicios Legislativos, quién endosó la medida expresando: "... la enmienda a este artículo trata específicamente sobre la distribución de anuncios obscenos, entendemos que evitará cualquier defensa que pudiera levantarse sobre que el artículo es vago y que se puede interpretar que los anuncios no están incluidos." La Oficina de Servicios Legislativos quién endosó la medida y sugirieron algunas enmiendas los cuales se incorporaron en el informe.

La Comisión celebró reunión ejecutiva y en la misma se hizo en análisis y evaluación de la información disponible.

Por las consideraciones antes expuestas, vuestra Comisión de lo Jurídico, recomienda la aprobación del P. del S. 2489, con las enmiendas contenidas en este informe.

Respetuosamente sometido,

Fdo.
Jorge Andrés Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2624, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas.

**"LEY**

Para enmendar los sub-incisos (ii), (iii) y (iii), del inciso (g) del Artículo 22 de la Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999 conocida como "Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico" a los fines de reglamentar distintas modalidades de anuncios y aceras y otras propiedades públicas.

## EXPOSICION DE MOTIVOS

La nueva Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico establece una serie de procedimientos a través de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) para la obt.ención de permisos para la ubicación de rótulos y anuncios a través de Puerto Rico. La misma reconoce distintas modalidades de rotulación existentes en Puerto Rico y establece reglas para su exposición pública.

La Ley se concentra, principalmente, en rótulos adosados a los edificios o eregidos dentro de solares y otros predios de terreno pero, al hacer alusión a las aceras, se limita a reglamentar los cobertizos para las paradas de autobuses y las cabinas telefónicas. Es evidente que, por olvido involuntario, no se incluyeron los puestos de revistas, las cabinas fotográficas, los depósitos de desperdicios, los cajeros automáticos y otros, en los que se exhiben letreros o anuncios.

Entendemos que en estos casos es la municipio a quien debiera corresponder la facultad de autorizar su ubicación, pero entendiendo que la ubicación de los mismos no necesariamente se limitaría a las aceras y las propiedades municipales, se hace necesario aclarar los alcances de la presente ley para subsanar su actual defecto.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.- Para enmendar los sub-incisos (ii), (iii) y (iii), del inciso (g) del Artículo 22 de la Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999 conocida como "Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico" de la siguiente manera:

"Artículo 22.- Disposiciones específicas sobre anuncios

(a) . . .

(b) . . .

(g) Anuncios ubicados en parques de recreación activa intensa y en otras estructuras en Distritos P y de Propiedad Pública o en áreas no zonificadas de acuerdo con lo siguiente:

(i) . . . . .

(ii) En estructuras utilizadas como paradas de guagua y puestos de venta de revistas podrán ubicarse anuncios perpendiculares a la vía pública, su iluminación será no intermitente y el tamaño total será no mayor de cincuenta (50) pies cuadrados sin extenderse sobre el techo o pared lateral de la estructura. Para cada anuncio en parada de guaguas y puestos de venta de revistas se obtendrá un permiso individual. Las estructuras utilizadas para paradas de guagua deberán tener techo, área para sentarse y zafacón, así como un contador para la energía eléctrica.

(iii) Las estructuras en las paradas de guaguas y puestos para la venta de revistas donde se ubican anuncios no podrán invadir la servidumbre de paso y deberán permitir en todo momento el libre paso seguro por la acera (sin que tengan que desviarse o salir a la calle) a los peatones y a aquellas personas con impedimento físico o que se tengan que transportar en sillas de ruedas u otros equipos especiales.

(iv) Las estructuras en las paradas de guaguas y puestos para la venta de revistas donde su ubican anuncios, las cuales en alguna forma no cumplen con cualesquiera de los requisitos establecidos en este Artículo, deberán ser conformadas con dichos requisitos o removidas en un término de noventa (90) días a partir de la fecha de vigencia de esta Ley. En cuanto al requisito de obtener los permisos correspondientes para cada uno de los anuncios ubicados en las paradas de guagua y puestos para la venta de revistas deberá cumplirse con lo establecido en los Artículos 5,7, 23, 24 y 25 de esta Ley.

(h) Los anuncios a instalarse en los tablones de expresión pública cumplirán con los requisitos del Reglamento del Departamento de Transportación y Obras Públicas que regulan los mismos desde el 13 de junio de 1976. El Departamento de Transportación y Obras Públicas será responsible de mantener los tablones de expresión pública en buen estado.

(i) En estructuras utilizadas como cabinas telefónicas, cabinas de fotografía, depósitos de desperdicios, cajeros automáticos podrán ubicarse anuncios paralelos o perpendiculares a la vía pública, su iluminación será no intermitente y el tamaño total será no mayor de veinte ~~(20)~~ 10 pies cuadrados en cada lado sin extenderse sobre el techo o paredes de la estructura.

(j) Podrán instalarse anuncios en las fachadas o sobre el terreno en los terminales de autobuses u otros vehículos de transportación pública y en los estacionameintos de vehículos livianos con un tamaño máximo conforme a las disposiciones de este Artículo."

Sección 2.- Esta ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; previo estudio y consideración del P. del S. 2624, se recomienda a este Alto Cuerpo la aproción de la medida con las siguientes enmiendas sugeridas:

**En La Exposicion De Motivos:**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 1 | eliminar "Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico" y sustituir por "" Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico"" |
| Página 1, línea 3 | eliminar "obt.ención" y sustituir por "obtención" |
| Página 1, línea 12 | eliminar "la" y sustituir por "al" |

**En El Texto Decretativo:**

| | |
|---|---|
| Página 2, línea 11 | eliminar "guagua" y sustituir por "guaguas" |
| Página 3, línea 20 | eliminar "veinte" y sustituir por "diez" |
| Página 4, línea 2 | eliminar "estacionameintos" y sustituir por "estacionamientos" |
| Página 4, línea 5 | eliminar "ley" y sustituir" por "Ley" |

**En El Titulo:**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 3 | eliminar "y" sustituir por " ," |

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

El propósito del P. del S. 2624, es para enmendar los sub-incisos (ii), (iii) y (iii), del inciso (g) del Artículo 22 de la Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999 conocida como "Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico" a los fines de reglamentar distintas modalidades de anuncios, aceras y otras propiedades públicas.

La nueva Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico establece una serie de procedimientos a través de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) para la obtención de

permisos para la ubicación de rótulos y anuncios a través de Puerto Rico. La misma reconoce distintas modalidades de rotulación existentes en Puerto Rico y establece reglas para su exposición pública.

La Ley se concentra, principalmente, en rótulos adosados a los edificios o eregidos dentro de solares y otros predios de terreno pero, al hacer alusión a las aceras, se limita a reglamentar los cobertizos para las paradas de autobuses y las cabinas telefónicas. Es evidente que, por olvido involuntario, no se incluyeron los puestos de revistas, las cabinas fotográficas, los depósitos de desperdicios, los cajeros automáticos y otros, en los que se exhiben letreros o anuncios.

Entendemos que en estos casos es al municipio a quien debiera corresponder la facultad de autorizar su ubicación, pero entendiendo que la ubicación de los mismos no necesariamente se limitaría a las aceras y las propiedades municipales, se hace necesario aclarar los alcances de la presente ley para subsanar su actual defecto.

En Reunión Ejecutiva celebrada, luego de estudio y análisis del P. del S. 2624, los miembros de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; recomiendan la aprobación con las enmiendas sugeridas.

Respetuosamente sometido;

Fdo.
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3325, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Educación y Cultural, sin enmiendas.

**"LEY**

Para enmendar el inciso (r) del Artículo 2.04 de la Ley Núm. 149 de 5 de julio de 1999, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico", a fin de disponer que las escuelas podrán organizar programas con la cooperación de instituciones y entidades de la comunidad.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

Dentro del precepto constitucional que consagra el derecho de toda persona a la educación y que ordena que el Gobierno sostenga un sistema de escuelas públicas no sectario, se ha establecido el Sistema de Educación Pública de Puerto Rico, cuyo fin esencial es desarrollar en los educandos las destrezas y conocimientos básicos para realizar por sí mismos un proceso de aprendizaje que en razón del cambio social y de la eceleración de la tecnología y el conocimiento, se extenderá a lo largo de sus vidas. La educación debe ayudar a nuestros niños y jóvenes a descubrir, avivar y encauzar las aptitudes y el talento particular de cada uno hacia actividades que enriquezcan sus vidas y promuevan a la vez, el bienestar, la calidad de vida y la armonía de la comunidad.

La vida moderna, contrario a la vida de años atrás, abunda en oportunidades y alternativas. La radio, el cine, la televisión y otro sinnúmero de innovaciones tecnológicas expone al niño, desde pequeño, a muchas y diferentes formas de conductas que él no está preparado para entender, tales como el crimen, la violencia, la corrupción y el sexo. La familia y la sociedad en general han sufrido cambios que afectan el

proceso de formación de valores en nuestros estudiantes. Hoy día, más que nunca, es necesaria la cooperación de todos los sectores de la comunidad para lograr que los estudiantes desarrollen el máximo de sus potencialidades como seres humanos, tanto en el aspecto intelectual como en el emocional y el social, y se integren con éxito a la sociedad.

Esta Asamblea Legislativa considera que una forma adicional de lograr que los estudiantes adquieran valores que gobiernen su vida diaria y sean la fuerza básica en sus vidas, es facultando a las escuelas para que puedan establecer programas con la cooperación de organizaciones y entidades de la comunidad, compartiendo con éstas la responsabilidad del proceso formativo de éstos.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (r) del Artículo 2.04 de la Ley Núm. 149 de 15 de julio de 1999, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 2.04.-Autonomía de las Escuelas

Las escuelas funcionarán con la autonomía que esta Ley les otorga en las áreas académica, fiscal y administrativa. A esos efectos:

Establecerán sus prioridades institucionales

(a) ...

(r) Organizarán programas con la cooperación de instituciones y entidades de la comunidad para enriquecer la experiencia educativa de sus estudiantes y llevar a cabo cualquier otra función para hacer más efectiva la gestión educativa de la escuela."

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de Educación y Cultura, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 3325, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

El Proyecto de la Cámara 3325 propone enmendar el Artículo 2.04 de la Ley 149 de 5 de julio de 1999, según enmendada , conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Educaciónde Puerto Rico", a fin de disponer que las escuelas podrán organizar progranmas con la cooperación de instituciones y entidades de la comunidad.

El propósito del Proyecto de la Cámara 3325 es facultar a las escuelas del Sistema de Enseñanza Pública a establecer aquellos programas necesarios en la que nuestros estudiantes desarrollen al máximo sus potenciales como ciudadanos en nuestra sociedad, tanto en su aspecto intelectual, emocional y social.

La Sección 5 en la carta de Derechos, Artículo II de la Constitución del estado Libre Asociado de Puerto Rico, dispone el derecho de toda persona a una educación que propenda al desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. El sistema de instrucción pública será libre de costo y no sectario. Cónsona con la disposición constitucional, la Ley 149 de 5 de junio de 1999 según enmendada, conocida como Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico, faculta a las escuelas, autonomía en las áreas académicas, fiscales y administrativas. La aprobación de este proiyecto concederá adicionalmente la oportunidad a los estudiantes a abarcar áreas de enseñanza con la ayuda de entidades que actualmente se encuentran en la

comunidad en que éstas ubican. La experiencia educativa que obtengan nuestros estudiantes con la cooperación de las comunidades donde estas ubiquen, enriquecerán a éstos, promoviendo el bienestar, la calidad de vida y la armonía en toda la comunidad.

La Asamblea Legislativa considera cumple su responsabilidad concediéndole a todos los estudiantes del sistema de enseñanza pública las oportunidades necesarias para el desarrollo en el proceso formativo de éstos.

Por la razones antes expuestas, vuestra Comisión de Educación y Cultura recomienda la aprobación del Proyecto de la Cámara 3325, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Fdo.
Carmen L. Berríos Rivera
Presidenta
Comisión de Educación y Cultura"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2888, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, con enmiendas.

**"LEY**

Para enmendar el inciso (3) y adicionar un nuevo inciso (16) al Artículo 11 y enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 214 de 14 de octubre de 1995, según enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar el Negocio de Intermediación Financiera" a los fines de incluir las manifestaciones falsas y la competencia desleal o ilegal entre las prácticas prohibidas, incluir a directores, oficiales y empleados como personas a las cuales se les prohibe incurrir en ciertas prácticas, señalar como infractores a cualquier persona que tome parte, instigue o coopere en la comisión de las prácticas prohibidas, tipificar como delito grave algunas de estas prácticas e imponer la pena de restitución y para otros fines.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, creada en virtud de la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada, posee facultades de fiscalización, supervisión y reglamentación sobre las instituciones financieras que operan o hacen negocios en Puerto Rico. Bajo las leyes que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras administra se encuentra la Ley Núm. 214 de 14 de octubre de 1995, según enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar el Negocio de Intermediación Financiera", la cual regula a toda persona o agente que ofrezca los servicios de intermediación financiera según definidos en el artículo 2A de dicha ley.

Esta ley, además de regular el otorgamiento de licencias y su revocación, establece los requisitos, normas, deberes, restricciones y penalidades que aplican a aquellas instituciones o individuos cuyo negocio sea la intermediación financiera.

Algunas de las prácticas prohibidas relacionadas a los negocios regulados por la Ley Núm. 214, supra, conllevan conducta que de no incurrirse en el ejercicio del negocio de intermediación financiera, constituirían delito grave bajo las disposiciones del Código Penal de 1976, según enmendado.

Actualmente, bajo la Ley 214, supra, dicha conducta está tipificada como delito menos grave. Es necesario que se efectúen enmiendas a fin de precisar cuales de las prácticas prohibidas deben tipificarse como delito grave, de forma tal que la penalidad por incurrir en esa conducta esté a la par con la conducta similar según tipificada en el Código Penal. Además, se añade entre las prácticas prohibidas el hacer manifestaciones falsas y el incurrir en prácticas de competencia desleal o ilegal, un párrafo señalando el que toda persona que tome parte, instigue o coopere en estas prácticas, incurrirá en violación, independientemente de si se lucró o no, y se impone la pena de restitución en aquellos casos en que corresponda.

Esta Asamblea Legislativa entiende que las enmiendas a la Ley Núm. 214 de 14 de octubre de 1995, según enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar el Negocio de Intermediación Financiera", incluidas en esta medida, tendrán un efecto preventivo para que en el futuro personas inescrupulosas no se aprovechen de las necesidades económicas de algunas personas, haciéndolas víctimas del engaño y el fraude.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se enmienda el inciso (3) y adicionar un nuevo inciso (16) al Artículo 11 de la Ley Núm. 214 del 14 de octubre de 1995, según enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar el Negocio de Intermediación Financiera", para que se lea como sigue:

"Artículo 11.-Prácticas prohibidas

Ningún Concesionario, Miembro de la Junta de Directores, de los Comités, Funcionario Ejecutivo, Oficial, Empleado o Agente del Concesionario bajo las disposiciones de esta Ley, podrá:

(1) . . .

(3) Hacer promesas a clientes con el propósito de tratar de inducirlos a llevar a cabo negocios a sabiendas de que dicha promesa no será cumplida o hacer cualquier manifestación falsa sobre un hecho material con el propósito de inducirlos a error.

(4) . . .

(16) Incurrir en prácticas de competencia desleal o ilegal.

Asimismo incurrirá en violación toda aquella persona que tome parte, instigue o coopere en la comisión de estos actos, independientemente de si la persona obtuvo o no lucro económico personal."

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 18 de la Ley Núm. 214 de 14 de octubre de 1995, según enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar el Negocio de Intermediación Financiera", para que se lea como sigue:

"Artículo 18.-Penalidades

El Comisionado queda autorizado a imponer y cobrar multas administrativas no menores de ($100) dólares ni mayores de cinco mil ($5,000) dólares por cada violación a las disposiciones contenidas en las reglas y reglamentos promulgados en virtud de la misma.

Cuando la naturaleza de la infracción a esta Ley o a las reglas o reglamentos u órdenes y resoluciones emitidas por el Comisionado lo justifiquen, además de la imposición de la multa administrativa autorizada en el párrafo precedente, el Comisionado promoverá acción criminal contra el infractor.

Cada violación a las disposiciones de esta Ley o a las disposiciones contenidas en las reglas o reglamentos promulgados en virtud del mismo o a las órdenes y resoluciones emitidas por el Comisionado constituirá delito menos grave (misdemeanor) castigable con multa no mayor de quinientos ($500) dólares o con reclusión que no exceda de seis (6) meses o ambas penas a discreción del tribunal, excepto la violación a los incisos 3, 6, 8, 9 y 13 del Artículo 11, lo cual constituirá delito grave, castigable con multa no

mayor de cinco mil ($5,000) dólares por cada violación o con una pena establecida de seis (6) años de reclusión o ambas penas a discreción del tribunal. La pena de reclusión para delito grave podrá ser aumentada hasta un máximo de diez (10) años de mediar circunstancias agravantes; de mediar circunstancias atenuantes se podrá reducir a un mínimo de cuatro (4) años. En cualquiera de los dos casos el Tribunal impondrá la pena de restitución cuando corresponda, además de la pena establecida."

Sección 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Pública, previo estudio y análisis del P. de la C. 2888, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación del mismo con las siguientes enmiendas:

**En El Texto**

| | |
|---|---|
| Página 3, línea 21 | Después de "tribunal" eliminar "," y sustituir por ".". Eliminar "excepto la violación" y sustituir por "Se exceptuarán las violaciones". Y en la misma línea, después de "11", eliminar "lo" y sustituir por "la". |

**En La Exposición De Motivos**

| | |
|---|---|
| Página 2, línea 5 | Tachar "cuales" y sustituir por "cuáles". |

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

El P. de la C. 2888 propone enmendar el inciso (3) y adicionar un nuevo inciso (16) al Artículo 11 y enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 214 de 14 de octubre de 1995, según enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar el Negocio de Intermediación Financiera" a los fines de incluir las manifestaciones falsas y la competencia desleal e ilegal entre las prácticas prohibidas, incluir a directores, oficiales y empleados como personas a las cuales se les prohibe incurrir en ciertas prácticas, señalar como infractores a cualquier persona que tome parte, instigue o coopere en la comisión de las prácticas prohibidas, tipificar como delito grave algunas de estas prácticas e imponer la pena de restitución y para otros fines.

**INVESTIGACION**

En reunión ejecutiva celebrada el 2 de junio del 2000, se evaluaron los comentarios por escrito del Departamento de Justicia, Asociación de Banqueros Hipotecarios de Puerto Rico, Comisionado de Instituciones Financieras, Asociación de Bancos y de la Oficina de Servicios Legislativos.

**Departamento De Justicia**

El Departamento de Justicia no tiene objeción de carácter legal a la aprobación del Proyecto de la Cámara 2888. Justicia favorece que se prohiba a un miembro de la Junta de Directores o Funcionario Ejecutivo u Oficial, hacer manifestaciones falsas sobre un hecho material con el propósito de inducir a un consumidor a error. En cuanto a equiparar la sanción y tipificación como delitos graves de las conductas

señaladas en los incisos 3, 6, 8, 9 y 13 del artículo 11, no tienen objeción legal. Tales modalidades están relacionadas con el fraude, la falsa representación, el desfalco de fondos y falsificación de documentos, por lo que deben ser penalizadas con rigor.

**Asociación De Banqueros Hipotecarios De Puerto Rico**

La Asociación de Banqueros Hipotecarios de Puerto Rico entiende que la banca hipotecaria es una industria altamente reglamentada por muchas entidades gubernamentales, de forma tal que proteje a cabalidad al consumidor mediante los reglamentos existentes. Expresa que el Comisionado de Instituciones Financieras es quien en primera instancia regula todos los ejercicios de esta industria y están sujetos a distintas penalidades. Además, están regulados por la Federal Housing Administration (FHA), Veterans Administration (VA), Federal Housing Loan Mortgage Corporacion (Freddie Mac), el Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) y el Government National Mortgage Association (GNMA).

**Asociación De Bancos De Puerto Rico**

La Asociación de Bancos de Puerto Rico expresa en su ponencia que estas enmiendas no aplican a los bancos miembros de la Asociación, ya que son pretendidos para la Ley 214 que excluye por definición a los bancos. Sin embargo favorece la aprobación de la medida, ya que redundaría en beneficio a la economía de Puerto Rico y a la de la comunidad en general.

**Oficina De Servicios Legislativos**

La Oficina de Servicios Legislativas expone en su ponencia que el proyecto básicamente persigue armonizar la Ley Núm. 214, supra, con las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 97 de 5 de junio de 1973, según enmendada, conocida como "Ley de Instituciones Hipotecarias".

Entiende que el lenguaje que se pretende añadir en el inciso 3 del Artículo 11 corresponde a idéntica disposición contenida en el inciso (2) del Artículo 7A de la Ley Núm. 97, y el nuevo inciso (16) al (19) de la misma Ley. De aprobarse la enmienda propuesta al Artículo 18 de la referida ley, a fin de convertir en delito grave la violación a los incisos 3,6, 8,9 y 13 del Artículo 11, que corresponde a idéntica disposición contenida en el Artículo 7A de la Ley Núm. 97, en relación con los concordantes incisos 2, 5, 7, 9 y 18 del Artículo 7A de la misma, eliminaría la imposición de triple daño contenida en la legislación vigente, y privaría al Comisionado de la capacidad de imponer dicha sanción en casos en que el Comisionado, por la naturaleza de la infracción, decida no promover acción criminal contra el infractor.

En cuanto a tipificar conducta como delito grave para ponerla a la par con el Código Penal, entiende que básicamente se trata de aquella conducta que podría tipificarse como apropiación ilegal bajo la definición amplia de los Artículos 165 y 166 del Código Penal, con la salvedad de que cuando se trata de dinero, para que se considere como delito grave bajo as disposiciones del Código Penal, deberá estar envuelta una suma mayor de doscientos dólares.

**Comisionado de Instituciones Financieras**

El Comisionado de Instituciones Financieras, según su ponencia, expresan que los negocios de intermediación financiera son de gran importancia al prestar los servicios para gestionar y obtener el financiamiento para la adquisición de bienes inmuebles, entre otros, por lo que están revestidos en un alto interés público, económico y social. Con el fin de establecer unas salvaguardas en este tipo de negocio, el Artículo 11 de esta ley dispone ciertas prácticas prohibidas a los concesionarios. Esta disposición debe ir más allá de los concesionarios y alcanzar a otros individuos que toman un rol activo en la industria, como son los directores, oficiales y empleados del concesionarios. Con la aprobación de este proyecto se añade entre las prácticas prohibidas el hacer cualquier manifestación falsa a los clientes, con el propósito de inducirlos a error, así como la competencia desleal y añade que incurrirá en violación toda aquella persona

que tome parte, instigue o cooperre en la comisión de las prácticas prohibidas, independientemente de si se lucró o no, y se impone la pena de restitución en aquellos casos en que corresponda.

Por otro lado, algunas de las prácticas prohibidas relacionadas a los negocios regulados por la Ley Núm. 214, supra, conllevan conducta que de no incurrirse en el ejercicio del negocio de intermediación financiera, constituirían delito grave bajo las disposiciones del Código Penal, según enmendado. Actualmente, bajo la Ley 214, supra, dicha conducta está tipificada como delito menos grave. Por consiguiente, resulta necesario que se efectúen las enmiendas al Artículo 18, a fin de precisar cuales de las prácticas prohibidas deben tipificarse como delito grave, de forma tal que la penalidad por incurrir en esa conducta esté a la par con la conducta similar según tipificada en el Código Penal.

**CONCLUSION**

Luego del estudio y análisis del P. de la C. 2888, concluímos que la aprobación de la misma ayudará a promover y hacer más efectiva la administración pública, adaptando la ley a las necesidades actuales de este mercado.

Por todo lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Pública recomienda la aprobación del P. de la C. 2888 con las enmiendas sugeridas.

Respetuosamente sometido,

Fdo.
Migdalia Padilla Alvelo
Presidenta
Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor
Corporaciones Públicas"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2995, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas.

**"LEY**

Para añadir el apartado (c) a la Sección 2010 y enmendar el apartado (a) de la Sección 2011 del Capítulo 2 del Subtítulo B de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de establecer que los impuestos correspondientes bajo estas secciones se computarán utilizando como base la temperatura corregida a 60 grados Farenheit (F).

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994" (Código), establece en la Sección 2011 que el impuesto sobre el petróleo crudo, productos parcialmente elaborados y productos terminados derivados del petróleo y cualquier otra mezcla de hidrocarburos, será computado sobre la cantidad de barriles determinados a temperatura ambiente. Además, en el caso de la gasolina, combustible de aviación y diesel, se dispone por reglamento que los arbitrios que impone la Sección 2.005 de la derogada Ley de Arbitrios de 1987, equivalente a la Sección 2010 del Código, se aplicarán sobre la cantidad del galonaje total determinada a

base de la temperatura normal observada. Estas cantidades así determinadas representan la base para la imposición de los respectivos arbitrios.

La práctica prevaleciente en los mercados mundiales, con relación al petróleo, es utilizar una temperatura estándar de 60 grados Farenheit (F) para determinar volumen. Por lo tanto, las facturas y documentos de embarque del petróleo importado a la Isla reflejan el volumen a base de esta temperatura estándar en la industria.

Por consiguiente, las disposiciones antes citadas del Código y el reglamento obligan a los funcionarios del Departamento de Hacienda y a los importadores y distribuidores a hacer constantemente conversiones de temperatura para determinar de la base tributaria de estos productos. Esta situación también afecta a los importadores y a los distribuidores, ya que los cambios en temperatura repercuten en fluctuaciones a las cantidades de estos productos, lo cual crea un estado de incertidumbre sobre el pago de arbitrios.

Esta Ley enmienda las Secciones 2010 y 2011 del Código para establecer que la base para determiniar los arbitrios será equivalente a una temperatura de 60 grados F. El propósito es simplificar la tarea de conversión a que están obligados los funcionarios del Departamento de Hacienda. Además, se persigue estandarizar las tomas de medición del producto a una sola temperatura al momento de imponer el arbitrio. Con la aprobación de esta pieza se armonizarían las leyes contributivas de Puerto Rico con las prácticas prevalecientes en el mercado petrolero mundial.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.-Para añadir el apartado (c) a la Sección 2010 del Capítulo 2 del Subtítulo B de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Sección 2010.-Combustible

(a) ...

(b) ...

(c) El impuesto de todas las transacciones y trasiegos de los combustibles gravados en esta Sección será computado a base de una temperatura corregida a 60 grados Farenheit (F). El volumen de combustible sujeto al pago de arbitrios será el total de galones despachado desde los tanques del proveedor a los tanques o camiones del importador, distribuidor o fabricante local, según sea el caso y así lo evidencien las medidas tomadas y certificadas por el inspector autorizado antes y después del comienzo del trasiego."

Artículo 2.-Para enmendar el apartado (a) de la Sección 2011 del Capítulo 2 del Subtítulo B de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Sección 2011.-Petróleo Crudo, Productos Parcialmente Elaborados y Productos Terminados Derivados del Petróleo y cualquier otra mezcla de hidrocarburos.

(a) En adición a cualquier otro arbitrio fijado en este Subtítulo, se impondrá, cobrará y pagará un impuesto por el uso en Puerto Rico de petróleo crudo, de productos parcialmente elaborados o de productos terminados derivados del petróleo y de cualquier otra mezcla de hidrocarburos a los tipos fijados en la siguiente tabla:

| Precio Indice por Barril | | | |
|---|---|---|---|
| Hasta | $16.01 | $24.01 | Sobre |
| a | a | | |
| $16.00 | $24.00 | $28.00 | $28.00 |
| Arbitrio por barril o fracción | | | |
| $6.00 | $5.00 | $4.00 | $3.00 |

En el caso de refinerías o petroquímicas que como parte del proceso de refinación de petróleo se obtenga una ganancia en volumen del producto final, dicha ganancia estará sujeta al impuesto establecido bajo esta sección.

A los fines de esta sección, el término "uso" incluirá la introducción, uso, consumo, venta, adquisición y traspaso en Puerto Rico del petróleo crudo o productos de petróleo gravados en esta sección. El impuesto de todas las transacciones y trasiegos de los combustibles gravados en esta Sección será computado a base de una temperatura corregida de 60 grados Farenheit (F). El volumen de combustible sujeto al pago de arbitrios será el total de barriles despachados desde los tanques del proveedor a los tanques o camiones del importador, distribuidor o fabricante local, según sea el caso, y así lo evidencien las medidas tomadas y certificadas por el inspector autorizado por Aduana Federal y el Departamento de Asuntos al Consumidor, antes y después del comienzo del trasiego. El impuesto será computado a base de la cantidad en barriles determinados a temperatura ambiente. Queda expresamente derogada cualquier disposición en el Reglamento de la Ley de Arbitrios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1987 vigente a la fecha de aprobación de este Subtítulo o cualquier determinación administrativa del Secretario de Hacienda que no esté de acuerdo con estas disposiciones.

(b) ..."

Artículo 3.-Esta Ley comenzará a regir veinte (20) días después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO:**

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del **P. de la C. 2995**, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

El **P. de la C. 2995**, propone añadir el apartado (c) a la Sección 2010 y enmendar el apartado (a) de la Sección 2011 del Capítulo 2 del Subtítulo B de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de establecer que los impuestos correspondientes bajo estas secciones se computarán utilizando como base la temperatura corregida a 60 grados Farenheit (F).

Según la Exposición de Motivos de la medida que nos ocupa, la práctica prevaleciente en el mercado del petróleo a nivel mundial para determinar volumen es utilizar la temperatura equivalente a 60 grados F. Por lo tanto, las fuerzas y documentos de embarque del petróleo importado a Puerto Rico reflejan el volumen a base de esta temperatura estándar en la industria. La diferencia entre la forma en que se determina el volumen de estos productos en el mercado mundial con lo establecido a nivel local conlleva unas conversiones de temperatura en el cómputo de la base de estos productos. Esta práctica afecta a los importadores y a los distribuidores, ya que los cambios en temperatura tienen como consecuencia flutuaciones en las cantidades de estos productos, creando cierta incertidumbre sobre el pago de arbitrios.

Con la aprobación de esta medida se pretende enmendar las Secciones 2010 y 2011 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico, para que el arbitrio se aplique sobre la cantidad de barriles determinada a temperatura de 60 grados F para simplificar el proceso y armonizar estas disposiciones con las prácticas prevalecientes en el mercado petrolero mundial. A su vez, entendemos que la fiscalización del cobro del arbitrio sería más efectiva y podría redundar en ingresos adicionales.

La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del **P. de la C. 2995** sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Fdo.
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2969, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas.

**"LEY**

Para establecer el Programa para el Sustento de Personas de Edad Avanzada, adscrito a la Administración para el Sustento de Menores; establecer mecanismos administrativos y judiciales para que personas de edad avanzada con necesidad de alimentos de sus descendientes puedan utilizar dichos mecanismos para facilitar la localización de alimentantes, el establecer el monto de pensiones alimentarias para personas de edad avanzada; el cobro y distribución de las mismas y procedimientos y remedios especiales con el fin de llevar a cabo los propósitos de esta Ley; para establecer metodología de utilización de recursos ya existentes dentro del Gobierno de Puerto Rico y proveer fondos para estos propósitos.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986 fue aprobada con el propósito de crear la Administración para el Sustento de Menores ("ASUME"). La ley estableció un mecanismo administrativo para asegurar que padres con obligaciones alimentarias para con sus hijos satisfacieran las mismas a tenor con las leyes vigentes, asegurando la protección y el bienestar de esos hijos o dependientes. Esta ley llenó así una gran necesidad en Puerto Rico. Mediante la aplicación de esta ley se ha logrado que miles de padres o guardianes cumplan cabal y puntualmente con sus obligaciones alimentarias.

Por sus términos, la Ley Núm. 5, *supra*, se limitó a establecer un mecanismo para que las necesidades de nuestros menores fueran atendidas. Al presente, esa ley ignora un segmento significativo de la población que, al amparo de nuestras leyes, tiene pleno derecho de exigir alimentos. Según lo expresa el Artículo 143 del Código Civil, existe una obligación recíproca de proveer alimentos de ascendientes para descendientes y vice versa. Los padres pueden exigir pensiones alimentarias de sus descendientes, en la medida que haya necesidad por parte del ascendiente, y capacidad financiera de parte de sus descendientes. El derecho de una persona de edad avanzada para exigir una pensión alimentaria a sus descendientes es prácticamente desconocido en Puerto Rico. En tiempos recientes, pocas solicitudes de pensión alimentaria de ese tipo han sido atendidas por los tribunales. No se puede concluir, sin embargo, que la inexistencia de peticiones de pensiones alimentarias para beneficio de personas de edad avanzada significa que no exista su necesidad. Primero, muchos de estas personas de edad avanzada ignoran el derecho existente en ley, a menudo careciendo de recursos económicos para obtener representación legal y exigir dichas pensiones alimentarias. Tercero, en Puerto Rico no existe un mecanismo administrativo

como el existente a través de ASUME, que facilite la labor de lograr la determinación, recaudación y distribución de las pensiones alimentarias para personas de edad avanzada.

Los asuntos relacionados al sustento de personas de edad avanzada serán más notables en años venideros, ya que nuestros conciudadanos viven vidas más largas. El número de personas que tendrían la potencial necesidad de solicitar una pensión alimentaria para personas de edad avanzada será cada vez mayor. La Asamblea Legislativa encuentra que es necesario facilitar a nuestros conciudadanos, las personas de edad avanzada que con tanto esfuerzo y sacrificio criaron generaciones subsiguientes, los mecanismos de la Administración para el Sustento de Menores, a fin de solicitar y recibir pensiones alimentarias para personas de edad avanzada. La Asamblea Legislativa entiende que la Administración para el Sustento de Menores posee los medios, sistemas, y demás mecanismos para emprender la tarea que se le encomienda mediante esta Ley. Únicamente con el fin de salvaguardar el pareo de fondos federales asignado a la Administración para el Sustento de Menores, se crea por esta Ley el Programa para el Sustento de Personas de Edad Avanzada como entidad separada. A pesar de esto, se faculta al Administrador de la Administración para el Sustento de Menores a hacer disponible los recursos que sean necesarios, en términos de infraestructura, para cumplir los propósitos de esta Ley, disponiendo un mecanismo donde, de ser así requerido, el Administrador cargará al presupuesto del Programa para el Sustento de Personas de Edad Avanzada los gastos atribuíbles a la utilización de recursos de la Administración para el Sustento de Menores.

Esta medida tiene como objetivo establecer un mecanismo administrativo que atienda el sustento de personas de Edad Avanzada, paralelo a aquel que existe para beneficio de menores en Puerto Rico. Este mecanismo será implementado y administrado por la Administración para el Sustento de Menores con el fin de permitir acceso a esta agencia a personas de edad avanzada que soliciten pensiones alimentarias para personas de avanzada a ser pagaderas por sus descendientes o personas legalmente obligadas a ello. Esta Ley también dispone mecanismos aplicables a la adjudicación de pensiones alimentarias para personas de edad avanzada tanto en el proceso administrativo similar al ya implementado en ASUME como en el foro judicial. Se exime del pago de aranceles de presentación a escritos judiciales que, como única causa de acción, soliciten una orden de alimentos. Se añade, como criterio permisible para establecer el monto de pensiones alimentarias para personas de edad avanzada, el impacto económico que tendría el éxito de pleitos o demandas de las cuales se pueda beneficiar el alimentante. Se armoniza el lenguaje del estatuto con aquel de la Ley Núm. 5, *supra,* asegurándose que las asignaciones de fondos federales para ASUME no fueren afectadas por las disposiciones de esta Ley y se asignan fondos del tesoro estatal para el año fiscal 2000-2001.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.-Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como "Ley de Mejoras al Sustento de Personas de Edad Avanzada de Puerto Rico".

Artículo 2.-Los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa:

Administración.—La Administración para el Sustento de Menores creada por la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada.

(1) Administrador.—El Administrador de la Administración para el Sustento de Menores.

(2) Alimentante.—Cualquier persona que conforme a disposiciones de leyes aplicables tenga la obligación de proveer alimentos a alimentitas de edad avanzada.

(3) Alimentista Edad Avanzada.—Cualquier persona de edad avanzada que conforme al Código Civil de Puerto Rico tiene derecho a recibir alimentos de sus descendientes, incluyendo cualquier agencia del Gobierno de Puerto Rico a la cual un Alimentista de edad avanzada haya cedido sus derechos de alimentos y ésta haya suministrado los mismos.

(4) Alimentante deudor.—Toda persona natural que por Ley tiene la obligación de proveer una pensión alimentaria para alimentitas de edad avanzada y que ha incurrido en atrasos en el pago de la pensión alimentaria para personas de edad avanzada por una cantidad equivalente a un mes o más.

(5) Asistencia gubernamental.—Comprende las ayudas gubernamentales federales o estatales a las personas de edad avanzada en forma temporal para adelantarles fondos para sus gastos, a ser recobrados al alimentante.

(6) Cuenta.—Todo tipo de cuenta en institución financiera incluyendo cheques, depósitos, ahorros, fondos mutuos, pensiones, acciones, bonos, certificados de depósitos, reserva de créditos, línea de crédito, tarjeta de crédito o débito y similares.

(7) Departamento.—El Departamento de la Familia del Gobierno de Puerto Rico.

(8) Deuda.—La suma total de la pensión alimentaria para personas de edad avanzada vencida y no pagada, incluyendo los intereses y los gastos incidentales al proceso de su determinación y cobro.

(9) Día laborable.—Día en el cual las oficinas del Gobierno de Puerto Rico están abiertas para ofrecer sus servicios regulares.

(10) Empleado.—Cualquier persona que se considere empleado según se define este término en el Capítulo 24 del Código de Rentas Internas Federal de 1986, pero no incluye empleados de agencias federales, o del Estado Libre Asociado que lleven a cabo funciones de inteligencia o contrainteligencia, si el jefe de dicha agencia ha determinado que informar con relación a ese empleado de acuerdo con las disposiciones de esta Ley podría poner en peligro la seguridad del empleado o cualquier investigación o misión de inteligencia o contrainteligencia en proceso.

(11) Persona de Edad Avanzada.—Toda persona mayor de sesenta (60) años de edad en adelante.

(12) Error de hecho.—Significa, en el contexto de la apelación de las órdenes del Administrador al juez administrativo, un error en la cantidad del pago corriente o atrasado, o en la identidad del alegado alimentante.

(13) Estado.—Comprende todos los de los Estados Unidos de Norteamérica, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes Estadounidenses o cualquier territorio o posesión sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos. El término incluye: (a) una tribu india, y (b) una jurisdicción o país extranjero que haya decretado una ley o establecido procedimientos para dictar y hacer valer órdenes de pensión alimentaria para envejecientes que sean sustancialmente similares a los procedimientos establecidos por esta Ley.

(14) Ingresos.—Comprende cualquier ganancia, beneficio, rendimiento o fruto derivado de sueldos, jornales o compensación por servicios personales, incluyendo la retribución recibida por servicios prestados como funcionario o empleado del Gobierno de Puerto Rico, del Gobierno de los Estados Unidos de América, de cualquier estado de la Unión de los Estados Unidos de América, o de cualquier subdivisión política de los mismos, o de cualquier agencia o instrumentalidad de cualesquiera de las mencionadas entidades en cualquiera que sea la forma en que se pagaren; o de profesiones, oficios, industrias, negocios, comercio o ventas; o de operaciones en propiedad, bien sea mueble o inmueble, que surjan de la posesión o uso del interés en tal propiedad; también los derivados de intereses, rentas, dividendos, beneficios de sociedad, valores o la operación de cualquier negocio explotado con fines de lucro o utilidad; y ganancias, beneficios, rendimientos, fondos, emolumentos o compensación derivados de cualquier procedencia, incluyendo compensaciones como contratista independiente, compensaciones por desempleo,

compensaciones por incapacidad, beneficios de retiro y pensiones o cualquier otro pago que reciba un alimentante, procedente de cualquier persona natural o jurídica.

(15) Ingreso neto.—Aquellos ingresos disponibles al alimentante, luego de las deducciones por concepto de contribuciones sobre ingresos, seguro social y otras requeridas mandatoriamente por ley. Se tomarán en consideración, además, a los efectos de la determinación del ingreso neto, las deducciones por concepto de planes de retiro, asociaciones, uniones y federaciones voluntarias, así como los descuentos o pagos por concepto de primas de pólizas de seguros de vida, contra accidentes o de servicios de salud cuando el alimentista sea beneficiario de éstos. La determinación final se hará según toda la prueba disponible, incluyendo estimados, estudios y proyecciones de ingresos, gastos, estilo de vida y cualquier otra prueba pertinente.

(16) Institución Financiera.—Cualquier banco o asociación de ahorros; cooperativa de crédito federal o estatal; asociación de beneficios, ahorros o pensiones; fondo de pensiones, ahorros o pensiones; compañía de seguros, de fondos mutuos, acciones o bonos; o similar.

(17) Juez Administrativo.—Abogado nombrado según se dispone en esta Ley para intervenir en los procedimientos adjudicativos relacionados con los asuntos sobre sustento de personas de edad avanzada y que está facultado, sin que se entienda como una limitación, para hacer determinaciones de hecho y conclusiones de derecho, emitir órdenes, resoluciones y decretos referentes a pensiones alimentarias para personas de edad avanzada, recaudaciones o retención de ingresos.

(18) Orden de embargo.—Cualquier orden, determinación, resolución o mandamiento de un tribunal con jurisdicción o emitida mediante el procedimiento administrativo establecido en esta Ley requiriendo la incautación y remisión al tribunal o al Programa, según sea el caso, de bienes muebles o inmuebles, incluyendo ingresos o fondos en manos de terceros pertenecientes a un alimentante deudor.

(19) Orden de pensión alimentaria para personas de edad avanzada. Cualquier determinación, resolución, orden, mandamiento o sentencia para fijar, modificar o hacer efectivo el pago de una pensión por concepto de alimentos emitida a tenor con los reglamentos y las Guías Mandatorias para Fijar y Modificar Pensiones Alimentarias Para Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico adoptadas al amparo de esta Ley, por un tribunal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o mediante el procedimiento administrativo establecido en esta Ley.

(20) Orden de retención.—Cualquier determinación, resolución, mandamiento u orden de un tribunal con jurisdicción o emitida mediante el procedimiento administrativo establecido en esta Ley, requiriendo a un pagador o patrono que retenga de los ingresos de un alimentante una determinada cantidad por concepto de pensión alimentaria para personas de edad avanzada y la remita al Programa.

(21) Organización laboral.—Tiene el significado que se le da al término en la sección 2(5) del National Labor Relations Act e incluye cualquier entidad (también conocida como oficina de empleo) que sea utilizada por la organización y el patrono para cumplir con los requisitos descritos en la sección 8(F)(3) de dicha ley de un acuerdo entre la organización y el patrono.

(22) Persona encargada.—Persona natural o jurídica que puede ser un establecimiento para el cuidado de personas de edad avanzada, pariente o tutor responsable del cuido diario del alimentista y de la administración de sus bienes, si ha sido designado por un Tribunal.

(23) Pagador o patrono.—Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, de la cual un alimentante tiene derecho a recibir ingresos, según se define este término en este Artículo.

Para propósitos del Registro Estatal de Nuevos Empleados, patrono tiene el significado dado a dicho término en la sección 3401 de Código de Rentas Internas Federal de 1986 e incluye cualquier entidad gubernamental y cualquier organización laboral.

(24) Procedimiento administrativo expedito.—El procedimiento administrativo rápido que establece esta Ley para fijar, modificar y hacer efectivas órdenes de pensiones alimentarias para personas de edad avanzada, que garantiza el derecho a un debido proceso de ley para las partes afectadas.

(25) Procurador Auxiliar.—Abogado nombrado conforme dispone esta Ley para representar al Programa para el Sustento de Personas de Edad Avanzada en la prestación de los servicios de sustento de Alimentistas de Edad Avanzada al amparo de esta Ley.

(26) Programa de asistencia temporal.—Es el "Programa de Ayuda Temporal a Familias Necesitadas" según establecido bajo el Título IV-A de la Ley de Seguridad Social Federal.

(27) Programa.—Programa para el Sustento de Personas de Edad Avanzada que se establece por virtud y operación de esta Ley.

(28) Secretario.—Secretario del Departamento de la Familia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(29) Servicio o Servicios de Sustento de Personas de Edad Avanzada.—Asistencia y las gestiones de todo tipo, administrativas y judiciales, que autoriza esta Ley para implantar la política pública sobre sustento de personas de edad avanzada, incluyendo, entre otros asuntos, la representación legal, la localización de las personas obligadas por ley a proveer alimentos, el pago de ciertos gastos incurridos en los procedimientos y el recaudo y la distribución de las pensiones alimentarias para personas de edad avanzada.

(30) Servicios comunitarios.—Obligación impuesta por el tribunal o mediante el procedimiento administrativo establecido en esta Ley, a la persona que viole sus disposiciones o las reglas o reglamentos u órdenes emitidas en relación a los procedimientos de sustento de personas de edad avanzada, de prestar servicios o realizar trabajo en beneficio de la comunidad en una institución pública o privada sin fines de lucro, tomando en consideración su ocupación, profesión o destrezas, en horario parcial o a tiempo completo, para que la remuneración sea para el pago o abono al balance de la deuda de la pensión alimentaria para personas de edad avanzada, a tenor con las Guías Mandatorias que esta Ley establece.

(31) Tribunal.—Cualquiera de las secciones del Tribunal de Primera Instancia, excepto cuando se especifique de otro modo.

Artículo 3.—Declaración de Política Pública

Se declara que es política pública del Gobierno de Puerto Rico procurar que las personas legalmente responsables contribuyan, en la medida en que sus recursos lo permitan, a la manutención y bienestar de sus ascendientes de edad avanzada mediante el fortalecimiento de los sistemas y la agilización de los procedimientos administrativos y judiciales para la determinación, recaudación y distribución de las pensiones alimentarias para personas de edad avanzada. Las disposiciones de esta Ley se interpretarán liberalmente a favor de los mejores intereses de la persona de edad avanzada que necesita alimentos.

Las personas de edad avanzada que requieren alimentos son a menudo incapaces de proveerse sus necesidades básicas; y siendo que la obligación de alimentar se fundamenta en el derecho a vivir, se configura como un derecho inherente a la persona, irrespectivo de su edad. Proveer para alimentos de personas de edad avanzada está revestido del más alto interés público, y es una obligación consagrada en el Código Civil de Puerto Rico. Existe una obligación recíproca de los descendientes para con sus ascendientes, siempre en la medida que tuvieren la capacidad financiera para ello, de proveer sustento económico en situaciones que esos ascendientes tuvieren la necesidad de ello.

El incumplimiento de las obligaciones morales y legales por parte de descendientes para con sus ascendientes de edad avanzada constituye uno de los problemas que serán más notables y apremiantes en nuestra sociedad del siglo veintiuno. Causas de este problema lo son el deterioro de los valores sociales, la desintegración de la unidad familiar y la lamentable tendencia a olvidar a aquellos que, durante sus años productivos, se sacrificaron para dar lo mejor, dentro de sus capacidades, a sus descendientes.

Ante el grave problema del incumplimiento de la obligación alimentaria para personas de edad avanzada es necesario poner en vigor una política pública de responsabilidad familiar mutua. Además, es posible hacerlo porque, en la mayoría de los casos, el incumplidor tiene la capacidad económica para satisfacer su obligación.

Una de las quejas más frecuentes en casos de alimentos se refiere a su lenta tramitación. Esto ocasiona que el alimentista necesitado carezca de bienes básicos entre tanto el Estado resuelve controversias sobre alimentos. Para acortar este período es necesario que el procedimiento relacionado con el sustento de personas de edad avanzada se ubique en un solo organismo administrativo. Con ello se evitará la fragmentación de un proceso que no debe admitir dilaciones.

Artículo 4.—Deberes recíprocos

Los padres e hijos, los cónyuges, los ex cónyuges y los parientes están obligados recíprocamente a ayudarse y sostenerse económicamente, según dispuesto en el Código Civil y en la jurisprudencia interpretativa. Los descendientes de una persona de edad avanzada o las personas legalmente obligadas a ello podrán ser responsables de su manutención y el tribunal o el Administrador podrá ordenarles pagar una suma justa y razonable por concepto de pensión alimentaria para personas de edad avanzada a tenor con el Artículo 27 de esta Ley. El deber de mantener a las personas de edad avanzada continúa aún cuando, por orden del tribunal o administrativa, se haya ubicado a la persona de edad avanzada en un hogar de cuido de o cuando la persona de edad avanzada se encuentre bajo la custodia de otra persona, o de una agencia o institución pública o privada.

Artículo 5.—Creación del Programa para el Sustento de Personas de Edad Avanzada.

Se crea el Programa para el Sustento de Personas de Edad Avanzada adscrito a la Administración, como un componente operacional y programático separado, bajo la coordinación, supervisión, evaluaciones y fiscalización del Administrador.

El programa se regirá por los sistemas de personal, reglamentos, normas y procedimientos que rigen en la Administración para el Sustento de Menores.

El Programa establecerá y administrará sus sistemas de contabilidad y manejo de cuentas, compras y suministros, administración de expedientes y archivos y cualquier otro sistema de apoyo administrativo y operacional, de acuerdo con la reglamentación, normas y procedimientos aprobados por el Secretario. Además, establecerá un sistema de manejo, reproducción, conservación y disposición de documentos sujeto a lo dispuesto en las disposiciones de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada.

El Programa, en el desempeño de las funciones que le confiere esta Ley, estará exento del pago de toda clase de derechos, aranceles, impuestos, patentes, y arbitrios, estatales o municipales, así como de contribuciones.

El Programa estará facultado para que los cheques, expedientes, registros y documentos puedan ser copiados, fotografiados, digitalizados, microfilmados, o guardados en forma de facsímil, o carácteres digitales o en forma similar, en tamaño completo o reducido. Los originales podrán ser decomisados. Las copias selladas o certificadas por un funcionario autorizado del Programa tendrá igual validez como prueba que el original. Las copias constituirán prueba de autenticidad de los mismos para cualquier fin legal en procedimientos administrativos, judiciales y trámites privados.

El Administrador, con la aprobación del Secretario, establecerá los sistemas que sean menester para su adecuado funcionamiento y operación. Por delegación del Secretario, nombrará el personal que considere necesario y llevará a cabo las acciones administrativas y gerenciales necesarias para el mejor

cumplimiento de los propósitos de esta Ley, así como de cualesquiera otras leyes locales y también de los reglamentos promulgados por el Secretario y adoptados en virtud de esta Ley. Se autoriza al Administrador para, en el desempeño de sus funciones, delegar las facultades y deberes que le impone esta Ley, excepto la facultad para reglamentar y nombrar personal.

Artículo 6.—Prestación de servicios de sustento de personas de edad avanzada.

(1) El Programa prestará los servicios de sustento de personas de edad avanzada autorizados por esta Ley en los siguientes casos:

(a) Cuando la persona de edad avanzada solicite beneficios bajo la Ley Núm. 171 de 30 de junio de 1968, según enmendada, conocida como "Ley de Sustento para Ancianos".;

(b) cuando son requeridos los servicios bajo el Artículo 14 de esta Ley;

(c) cuando le sea referido el caso por el Programa de Asistencia Temporal del Departamento de la Familia, por cualquier agencia u organismo gubernamental o por el tribunal, si la persona cuyo caso es referido recibe asistencia bajo el Programa de Ayuda Temporal para Personas Necesitadas, recibe beneficios o servicios bajo el Programa de Servicios a Adultos, Programa de Ayuda a Familias Médico-Indigentes (Medicaid), sujeto a determinaciones sobre justa causa para no cooperar hechos a tenor con ésta y otras leyes aplicables

(3) El Programa, al proveer los servicios autorizados por este Artículo, deberá:

(a) Establecer salvaguardas contra el uso no autorizado o la divulgación de información relacionada con los procedimientos de esta Ley, incluyendo lo siguiente:

(i) Ninguna información sobre el paradero de una parte será divulgada a otra parte contra la cual se ha emitido una orden de protección respecto a la primera parte.

(ii) Ninguna información sobre el paradero de una parte será divulgada a otra parte si el Programa tiene motivo fundado para creer que el revelar la misma podrá resultar en daño físico o emocional a la primera parte.

(iii) Ninguna información relacionada con los récords financieros de la persona en una institución financiera será divulgada a menos que sea con el único propósito y en la medida necesaria para establecer, modificar o hacer efectiva una obligación alimentaria para personas de edad avanzada de dicho individuo. La divulgación no autorizada estará sujeta a sanciones civiles a tenor con la legislación federal aplicable.

(iv) Ninguna información relativa a contribución sobre ingresos será divulgada o utilizada para un propósito en contravención de la Sección 6103 del Código de Rentas Internas Federal de 1986, según enmendado, sujeto a las penalidades aplicables.

(v) Ningún empleado del Programa, o la Administración, o ambos, tendrá acceso o intercambiará información mantenida por la Administración más allá de lo necesario para el desempeño de las funciones del Programa, la Administración, o ambos.

(vi) Ninguna información será divulgada si ello violare alguna otra legislación federal o estatal aplicable.

(b) Fijar e imponer sanciones administrativas, incluyendo, sin que se entienda como una limitación, la destitución del empleado, por el acceso no autorizado o la divulgación de información confidencial según se dispone en este Artículo.

Artículo 7.—Fondo especial.

Se crea bajo la administración del Administrador un fondo especial, que se conocerá como "Fondo Especial para Servicios y Representación de Casos de Sustento de Personas de Edad Avanda".

Los fondos que reciba la Administración por servicios prestados, donativos, incentivos, ingresos, multas, cargos, intereses, penalidades, gastos, costas, honorarios o asignación para llevar a cabo los objetivos de esta Ley y los provenientes de cualquier otro concepto autorizado en esta Ley serán contabilizados en los libros del Secretario de Hacienda en forma separada de cualesquiera otros fondos que reciba el Departamento a los fines de que se facilite su identificación, administración y uso por parte del Programa.

El Administrador utilizará los recursos de este Fondo Especial para los propósitos y fines autorizados en esta Ley, sujeto a las condiciones y restricciones aplicables, incluyendo el pago de gastos necesarios en la prestación de los servicios de sustento de personas de edad avanzada a las personas que así lo soliciten.

Dichos fondos serán contabilizados sin año económico determinado y se regirán conforme las normas y reglamentos que adopte el Secretario en armonía con las disposiciones vigentes para la administración de fondos similares.

Artículo 8.—Funciones del Secretario.

El Secretario es el funcionario responsable del cumplimiento cabal de la política pública enunciada en esta Ley a fin de atender de manera integral y eficiente los asuntos relacionados con la obligación legal de proveer alimentos a personas de edad avanzada. El Secretario tendrá los siguientes poderes y funciones:

(a) Asesorar al Gobernador de Puerto Rico y hacer las recomendaciones correspondientes a la Asamblea Legislativa en la formulación de la política pública relacionada con la responsabilidad correspondiente al sustento de peronas de edad avanzada.

(b) Revisar y aprobar el plan estatal sobre los servicios de sustento de personas de edad avanzada, así como llevar a cabo las obligaciones impuestas en esta Ley. El Secretario remitirá copia del Plan Estatal a la Asamblea Legislativa como parte del proceso presupuestario de la Administración.

(c) Supervisar, evaluar, auditar y velar por que se implante la política pública enunciada en esta Ley.

(d) Aprobar la organización interna del Programa.

(e) Aprobar el sistema de personal y los sistemas administrativos y de apoyo operacional del Programa.

(f) Establecer las normas, criterios y mecanismos para coordinar las funciones administrativas y operacionales del Programa con las de los demás componentes del Departamento.

(g) Disponer para organizar la prestación de los servicios del Programa a distintos niveles en coordinación con los demás componentes del Departamento.

(h) Supervisar, evaluar y auditar el funcionamiento y las operaciones del Programa.

(i) Requerir todos aquellos informes que estime pertinentes para el cumplimiento de sus responsabilidades.

(j) Realizar todos aquellos otros actos necesarios y convenientes para el logro de los propósitos de esta Ley.

Artículo 9.—Administrador; facultades y poderes.

(1) El Administrador tendrá las responsabilidades, facultades y poderes necesarios y convenientes para poner en vigor las disposiciones de esta Ley, incluyendo, sin que se entienda como una limitación, los siguientes:

(a) Llevar a cabo todas las gestiones y acciones necesarias, administrativas y judiciales, para hacer cumplir los propósitos de esta Ley.

(b) Preparar, modificar y someter al Secretario el plan estatal para los servicios de sustento de personas de edad avanzada, así como el presupuesto necesario para llevar a cabo las obligaciones impuestas por esta Ley.

(c) Concertar acuerdos y coordinar administrativamente con las agencias, departamentos u organismos gubernamentales pertinentes y la Rama Judicial, así como con otras instituciones, públicas o privadas, la adopción de medidas dirigidas a lograr el cumplimiento de la política pública establecida en esta Ley, así como sus propósitos y objetivos.

(d) Identificar y localizar a descendientes o cualesquiera otras personas legalmente obligadas a proveer alimentos a personas de edad avanzada en todos los casos que sea necesario o cuando así se le solicite para cumplir con los propósitos de esta Ley, conforme se dispone en el Artículo 16 de esta Ley.

(e) Promover las acciones legales que correspondan para recuperar las pensiones alimentarias de las personas de edad avanzada cuyo derecho a alimentos ha sido cedido a favor del Departamento o cualquiera de sus programas, administraciones o sub-agencias, así como también ser depositario de dichas pensiones, conforme se dispone en el Artículo 15 de esta Ley y cobrar a terceros por servicios prestados.

(g) Prestar los servicios de sustento de personas de edad avanzada autorizados por esta Ley a cualquier persona particular que así lo solicite, aunque no cualifique para recibir beneficios del Programa de Asistencia Económica, en acciones judiciales y administrativas para establecer o fijar, modificar y hacer cumplir la obligación de prestar alimentos de cualquier persona obligada por ley a ello. Se incluye específicamente en esta categoría de personas aquellas personas, naturales o jurídicas, que tengan a su cargo el cuido diario de el alimentista de edad avanzada. La representación legal ofrecida por el Administrador de conformidad con lo dispuesto en esta Ley será siempre en el mejor interés de la persona de edad avanzada.

(h) Designar a los Procuradores Auxiliares para representar al Programa en los procedimientos de sustento de personas de edad avanzada y ante otras agencias, organismos gubernamentales y los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Administrador podrá solicitar del Secretario de Justicia el nombramiento de estos abogados como fiscales especiales para que, como parte de sus funciones, puedan actuar en procedimientos de naturaleza criminal por violaciones a las leyes, reglamentos u órdenes que administra el Programa. Esta facultad puede ser delegada por el Secretario de Justicia en el Subsecretario, los Secretarios Auxiliares y en el Jefe de la División de Investigaciones y Procedimiento Criminal del Departamento de Justicia.

(i) Prestar los servicios necesarios para cobrar, recaudar y distribuir las pensiones alimentarias para personas de edad avanzada conforme a la reglamentación que adopte.

(j) Determinar qué personas de los que adeudan pensiones alimentarias reciben o han reclamado beneficios por desempleo bajo las disposiciones de la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según enmendada, conocida como "Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico".

Si el deudor recibe o ha reclamado compensación por desempleo, el Programa podrá llevar a cabo las gestiones necesarias para cobrar el dinero adeudado por concepto de pensiones alimentarias para personas de edad avanzada, de los beneficios por desempleo solicitados por el deudor.

(k) Mantener un registro de personas que adeudan pensiones alimentarias para personas de edad avanzada. Así también deberá divulgar los servicios de sustento de personas de edad avanzada autorizados por esta Ley y los criterios, requisitos de eligibilidad y los costos de los mismos, si alguno.

(l) Establecer un amplio y vigoroso programa educativo para promover el cumplimiento de la obligación moral y legal de los descendientes y personas responsables de proveer alimentos a las personas de edad avanzada; coordinar y promover el que personas y entidades educativas, caritativas, cívicas y religiosas, sociales, recreativas, profesionales, ocupacionales, gremiales, comerciales, industriales y agrícolas fomenten la política pública de responsabilidad para el sustento de personas de edad avanzada y recabar la cooperación de todos los medios de comunicación masivos públicos y privados, con o sin fines de lucro, para que aporten al proceso educativo del cumplimiento de la responsabilidad de alimentar a personas de edad avanzada, a fin de lograr el fortalecimiento de la institución fundamental de la sociedad, la familia. Para lograr estos propósitos se faculta al Programa para organizar todo tipo de actividades y utilizar todos los medios de comunicación personal, grupal o masiva, incluyendo la producción y colocación de anuncios en la radio, prensa, televisión y otros medios de comunicación, incluyendo la red informática Internet. El Programa publicará la disponibilidad de los servicios de sustento de personas de edad avanzada por lo menos trimestralmente, incluyendo la información sobre sus costos y los lugares donde podrán solicitarse. Además, promoverá el uso de procedimientos para el reconocimiento voluntario de la responsabilidad alimentaria para con la persona de edad avanzada a tenor con esta Ley.

(m) Solicitar, recibir y aceptar fondos y donaciones para prestar los servicios autorizados por esta Ley y formalizar contratos y cualquier otro instrumento que fuera necesario o conveniente en el ejercicio de cualesquiera de sus poderes, lo mismo que contratar los servicios técnicos necesarios, tanto para llevar a cabo investigaciones, procesamiento de casos y datos, recaudaciones de pensiones alimentarias para personas de edad avanzada y cualquier otra gestión necesaria para cumplir con los propósitos de esta Ley, con individuos, grupos, corporaciones, cualquier agencia federal, el Gobierno de los Estados Unidos, el Gobierno de Puerto Rico, sus agencias o subdivisiones políticas.

(n) Realizar investigaciones y estudios para determinar y evaluar la naturaleza de los servicios a prestarse.

(o) Adoptar, con la aprobación del Secretario, los reglamentos y procedimientos necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta Ley. Expresamente se faculta al Administrador a determinar mediante reglamento, aquellas reglas y normas necesarias para la conducción de los procedimientos administrativos y de aquellos servicios por los cuales requerirá el pago de una cantidad razonable y el reembolso de los gastos incurridos en la prestación de servicios, así como a determinar a quién se le va a requerir dicho pago, los criterios para ello, la cantidad a pagarse y la forma de pago.

(p) Establecer, con la aprobación del Secretario, la organización interna del Programa y los mecanismos de coordinación e integración programática y operacional necesarios para un tratamiento integral de la familia, de acuerdo con las funciones y deberes del Departamento.

(q) Sin menoscabo de lo dispuesto en otras leyes, el Administrador o la persona que éste designe podrá certificar traducciones oficiales de un idioma a otro, de o al inglés, español u otros idiomas, de documentos, órdenes, sentencias o resoluciones administrativas o judiciales relacionados a sus funciones.

(r) Establecer un Registro Estatal de Casos de Pensiones Alimentarias para Personas de Edad Avanzada que deberá contener elementos uniformes de información, de acuerdo a lo requerido en esta Ley, para todas las órdenes de pensiones alimentarias para personas de edad avanzada emitidas en Puerto Rico a partir de la entrada en vigor de esta Ley, a fin de mantener récord de los pagos en todos los casos registrados y actualizarlos con la información obtenida a través de la comparación e intercambio con las agencias de bienestar público y de Ayuda a Familias Médico Indigentes (Medicaid) del Gobierno de Puerto Rico, sujeto a la Sección 6103 del Código de Rentas Internas Federal de 1986.

(s) Llevar a cabo pareos regulares de información contenida en el Registro Estatal de Nuevos Empleados, creado en virtud de la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, con el Registro Estatal de Casos de Pensiones Alimentarias para Personas de Edad Avanzada con el fin de iniciar la retención de ingreso, cuando corresponda.

(t) Siempre que exista evidencia prima facie de que un alimentante o que un individuo contra quien está pendiente una acción de pensión alimentaria para personas de edad avanzada transfiere propiedad o ingreso para evadir el pago corriente o futuro de pensión alimentaria para personas de edad avanzada, radicar una moción ante el tribunal para solicitar que se anule dicha transferencia, o, en la alternativa, obtener un remedio en el mejor interés del alimentista de edad avanzada, a tenor con la Ley de Transacciones Comerciales, Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995, según enmendada, y establecer procedimientos para garantizar que dicha acción será tomada cuando sea necesario.

(u) Concertar acuerdos con instituciones financieras que realizan negocios en Puerto Rico para desarrollar y operar, en coordinación con éstas, un sistema de intercambio automatizado y pareo de datos, que podrá ser llevado a cabo a través de la utilización del sistema de datos de la Administración. A cada institución financiera se le requerirá que provea trimestralmente, el nombre, dirección de récord, número de seguro social u otro número de identificación de contribuyente, e información que identifique a cada alimentante que mantiene una cuenta en dicha institución y que adeude pensión alimentaria para personas de edad avanzada, según identificado por el Administrador por su nombre, número de seguro social u otro número de identificación de contribuyente. Así también, se autoriza a la Administración a compartir la información obtenida mediante estos acuerdos con otras agencias del Gobierno de Puerto Rico a fin de administrar las leyes contributivas o verificar elegibilidad financiera para programas de beneficencia. Los acuerdos concertados de conformidad con este Artículo deberán proveer que, en contestación a una notificación de gravámen emitida conforme al Artículo 34 de esta Ley, podrán ser congelados o liberados a favor del Programa, según sea el caso, los activos que correspondan a la deuda alimentaria para personas de edad avanzada que estén en poder de la institución financiera concernida.

(2) El Administrador o la persona a quien éste designe, tendrá autoridad para tomar las siguientes acciones administrativas expeditas, sin necesidad de obtener una orden

de algún tribunal de Puerto Rico, o de un Juez Administrativo para tomar las siguientes acciones: (a) Ordenar exámenes genéticos con el propósito de establecer filiación o grado de consanguinidad.

(b) Emitir citaciones para el descubrimiento de cualquier información financiera o de otra índole necesaria para establecer, modificar o hacer efectiva una obligación alimentaria para personas de edad avanzada.

(c) Requerir a todos los patronos, incluyendo patronos con y sin fines de lucro y gubernamentales, que provean con prontitud información sobre el empleo, compensación y beneficios de cualquier persona reclutada como empleado o contratista.

(d) Obtener acceso a la siguiente información para llevar a cabo las funciones del Programa, sujeto a la inmunidad de responsabilidad de las entidades que provean dicho acceso y a todas las salvaguardas de seguridad de información e intimidad dispuestos en esta Ley y otras leyes estatales:

(i) Récords mantenidos por todas las agencias y entidades gubernamentales y municipales, incluyendo sin que se entienda como una limitación, el Registro Demográfico, el Departamento de Hacienda, récords relacionados con propiedades muebles e inmuebles, licencias ocupacionales y profesionales, récords sobre propiedad y control de corporaciones, sociedades y otros negocios, récords de seguridad de empleo del Departamento de Transportación y Obras Públicas, récords penales, y

(ii) a tenor con una citación o requerimiento, determinados récords en poder de entidades privadas, tales como utilidades públicas, compañías de cable televisión e instituciones financieras, relacionados con personas contra quienes se ha instado o está pendiente alguna reclamación sobre pensión alimentaria para personas de edad avanzada, que consistan de los nombres y direcciones de dichas personas y, en cuanto a las instituciones financieras, información sobre activos y pasivos.

(e) En cualquier acción sobre pensión alimentaria para personas de edad avanzada ante el tribunal de Puerto Rico o Juez Administrativo, luego de notificar al alimentante y al alimentista de edad avanzada, ordenar al alimentante u otro pagador a cambiar el receptor al Programa;

(f) En cualquier acción sobre pensión alimentaria para personas de edad avanzada ante el tribunal de Puerto Rico, ordenar la retención de ingresos y en los casos con pensiones alimentarias para personas de edad avanzada atrasadas, incluir una cantidad de hasta el treinta por ciento (30%) de la pensión alimentaria corriente para personas de edad avanzada además de ésta para hacer efectiva la pensión alimentaria para personas de edad avanzada atrasada, más

(g) en los casos con pensión alimentaria para personas de edad avanzada atrasada, embargar bienes localizados en Puerto Rico:

(i) emitiendo una orden para embargar pagos periódicos o globales de la agencia de desempleo, la agencia de compensación al trabajador, de sentencias, transacciones y premios de la lotería, y emitiendo una orden para congelar y embargar activos del alimentante en

poder de instituciones financieras o para congelar y embargar los fondos de retiro públicos o privados del alimentante más

(ii) imponer gravámenes de conformidad con el Artículo 34 de esta Ley para forzar la venta de propiedad y la distribución de las recaudaciones.

(3) Las acciones administrativas para hacer efectivas las pensiones alimentarias para personas de edad avanzada tomadas a tenor con la cláusulas (a), (e), (f) y (g) del inciso (2) de este Artículo estarán sujetas al requisito de notificación a la parte afectada, y dicha notificación deberá proveer aviso del derecho a presentar una solicitud de reconsideración ante el Juez Administrativo basada en error de hecho.

(4) El incumplimiento voluntario de cualquier citación o requerimiento expedido por el Administrador, a tenor con el inciso (2) de este Artículo será sancionado conforme a lo dispuesto en el Artículo 11 de esta Ley.

Artículo 10.—Director para el Programa para Sustento de Personas de Edad Avanzada

El Administrador designará un Director para el Programa para Sustento de Personas de Edad Avanzada con la anuencia del Secretario. El Director asistirá al Administrador y al Subadministrador en el desempeño de sus funciones con respecto al Programa y su salario será pagado de las partidas presupuestarias del Programa. Conforme a otras disposiciones de esta Ley, el Administrador podrá delegar en el Director todas sus atribuciones con el propósito de cumplir las funciones, obligaciones y responsabilidades del Administrador.

Artículo 11.—Juez Administrativo; nombramiento; facultades.

Se crea el cargo de Juez Administrativo que será nombrado por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado. Los nombramientos de los Jueces Administrativos serán por un término de seis (6) años y hasta que sus sucesores sean nombrados y devengarán un sueldo anual de cuarenta mil (40,000) dólares. El Administrador, con la aprobación del Gobernador y el Secretario, adoptará las reglas y reglamentos que regirán el adiestramiento, suspensión o destitución de los Jueces Administrativos. El Juez Administrativo deberá ser un abogado con por lo menos tres (3) años de haber sido admitido al ejercicio de la profesión.

Se nombrará hasta un máximo de dos (2) jueces administrativos, según surja la necesidad. En cumplimiento de las leyes y los códigos de ética judicial y profesional, con el fin de buscar la verdad y hacer justicia, respetando los derechos de las partes, y según el reglamento que adopte el Secretario, tendrán las siguientes facultades y deberes:

(a) Tomar juramentos y dirigir y permitir que las partes utilicen el descubrimiento de información que agilice el trámite y la solución de las controversias, recibir testimonio y cualquier otra evidencia a través de grabaciones en cintas de sonido y video sonido para establecer el récord del caso.

(b) Dirigir, ordenar y permitir que las partes lleven a cabo reuniones y conversaciones transaccionales. Aceptar el reconocimiento voluntario de la obligación de alimentar al envejeciente y las estipulaciones o acuerdos que establecen el monto de las pensiones alimentarias para envejecientes a pagarse, a tenor con las Guías Mandatorias para Fijar y Modificar Pensiones Alimentarias para Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico adoptadas según se dispone en esta Ley.

(c) Ordenar y notificar la celebración de una vista cuando sea necesario o cuando el promovido no comparece luego de haber sido debidamente notificado y dictar orden de pensión alimentaria para personas de edad avanzada, su modificación o la imposición de remedios o penalidades según corresponda.

(d) Evaluar la evidencia y emitir una orden final de alimentos para personas de edad avanzada, su modificación o la imposición de remedios o penalidades, según corresponda, que contenga las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho referentes a fijar, modificar y hacer efectivas las órdenes de pensión alimentaria para personas de edad avanzada.

(e) Determinar que cualquier persona ha violado o está violando una orden, citación o requerimiento legal del Administrador, de un Juez Administrativo o del tribunal e imponer las sanciones, multas y penalidades que se establecen en esta Ley y los reglamentos que adopte el Secretario.

(f) Motu proprio, o a moción de parte, si existe evidencia de que un alimentante está atrasado en el pago de la pensión alimentaria para personas de edad avanzada, emitir una orden para requerir pagos para saldar la deuda a tenor con un plan de pagos, o requerir que el alimentante que no esté incapacitado, participe en actividades de trabajo, según definidas en la Sección 607 de la Ley de Seguridad Social Federal, incluyendo, sin que se entienda como una limitación, adiestramiento en el trabajo, programas de servicios comunitarios, empleo subsidiado por el sector público y adiestramiento vocacional educacional.

(g) Considerar solicitudes de reconsideración de las órdenes del Administrador fundamentadas en errores de hecho.

(h) Considerar querellas administrativas o apelaciones de personas afectadas por ellas.

Artículo 12.—Procurador Auxiliar para Sustento de Personas de Edad Avanzada; facultades.

El Procurador Auxiliar para Sustento de Personas de Edad Avanzada será nombrado por el Administrador para trabajar a tiempo completo por el término que éste determine, el cual podrá extender por términos siguientes y subsiguientes de acuerdo con las necesidades del Programa.

El Procurador Auxiliar para Sustento de Personas de Edad Avanzada, sin que se entienda como una limitación, tendrá los siguientes poderes y facultades:

(a) Tomar juramentos y declaraciones y ordenar, bajo apercibimiento de desacato, la comparecencia de testigos y la producción de libros, cartas, documentos, papeles, expedientes y todos los demás objetos que sean necesarios para un completo conocimiento de los asuntos bajo investigación relacionados con su jurisdicción y encomienda.

(b) Realizar toda clase de investigaciones pertinentes y necesarias de las personas y entidades y de los documentos relacionados con los asuntos bajo su jurisdicción o encomienda, para lo que tendrá acceso a los archivos y récords de todas las agencias y entidades del Gobierno de Puerto Rico, y sus municipios.

(c) Requerir la colaboración de las agencias e instrumentalidades gubernamentales y coordinar con éstas para que le provean cualquier recurso o asistencia que estime necesario para el efectivo cumplimiento de su encomienda.

(d) Inspeccionar, obtener o usar el original o copia de cualquier planilla de contribución sobre ingresos de acuerdo con las leyes y la reglamentación aplicables para llevar a cabo los objetivos de esta Ley.

(e) Representar al Programa en todos aquellos asuntos autorizados por esta Ley en los cuales ésta sea parte o tenga interés y en todos los recursos ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico y el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico.

El Procurador Auxiliar para Sustento de Personas de Edad Avanzada podrá investigar y actuar en procedimientos de naturaleza criminal según se dispone en el inciso (1) (h) del Artículo 9 de esta Ley. Asimismo, estará facultado para acudir al tribunal y solicitar que se castigue por desacato civil o criminal a cualquier persona que se niegue a descubrir la información requerida según se dispone en este Artículo, como en el caso de cualquier otra violación de ley relacionada a sus funciones.

Artículo 13.—Compras y suministros.

Todas las compras y contratos de suministros y servicios que haga el Programa se harán sin sujeción a las disposiciones del Programa de Compras y Suministros de la Administración de Servicios Generales contenidas en la Ley Núm. 164 de 23 de julio de 1974, según enmendada. El Administrador realizará todas las compras y contratos de suministros y servicios, excepto servicios personales y profesionales, mediante subasta. Cuando el costo estimado para la adquisición o ejecución del servicio no exceda de veinticinco mil (25,000) dólares, el mismo podrá efectuarse sin subasta formal mediante un sistema competitivo de por lo menos tres (3) cotizaciones. Tampoco será necesario una subasta, cuando:

(a) Una emergencia requiera la entrega inmediata de materiales, efectos o equipo, o la prestación de servicios; o

(b) se necesiten piezas de repuesto, accesorios, equipo o servicios suplementarios para equipo o servicios previamente suministrados o contratados; o

(c) se requieran servicios o trabajos profesionales, especializados o expertos y el Administrador, por causa justificada, estime que en interés de una buena administración se deberán formalizar los contratos sin mediar subasta, o

(d) los precios no estén sujetos a competencia, porque no hay más que una fuente de suministro o porque están reglamentados por ley. En tales casos, la compra de tales materiales, efectos o equipo, o la obtención de tales servicios, podrá hacerse en mercado abierto, previa cotización de por lo menos tres suplidores, en la forma usual y corriente en los negocios.

El Administrador se reservará el derecho de adquirir la buena pro en una subasta pública a base de otras consideraciones objetivas y razonables adicionales a las del precio.

Artículo 14.—Solicitud de servicios.

A los fines de la prestación de los servicios autorizados por esta Ley, se considerará como una solicitud de servicios:

(1) Una solicitud de servicios según promulgada por el Administrador. Los beneficiarios del Programa de Asistencia Temporal del Departamento de la Familia que ya no reciben dichos beneficios, no tendrán que presentar una solicitud para continuar recibiendo los servicios del Programa. Cuando sean necesarios los servicios de representación legal, el Administrador designará al Procurador Auxiliar para Sustento de Personas de Edad Avanzada como representante legal en el mejor interés de la persona de edad avanzada. Para propósitos de este Artículo, se considerará como hecha una solicitud de servicios que sea recibida por funcionarios del Programa mediante via telefónica. Dichas solicitudes serán corroboradas mediante una visita al lugar de residencia de la persona de edad avanzada que interese recibir los beneficios del Programa en un término no mayor de dos (2) días laborables a contarse inmediatamente luego del día laborable en que se haya recibido la solicitud.

(2) Al iniciarse la petición de remedios o al tramitarse la solicitud ante el foro administrativo o judicial, se entenderá que el foro en donde se radique primero tendrá jurisdicción exclusiva. Se faculta al Administrador, según se dispone en esta Ley, para modificar administrativamente cualquier orden de pensión alimentaria para personas de edad avanzada cuando las circunstancias legales, reglamentarias o de custodia real así lo justifiquen, para fines de:

(a) iniciar la retención de ingreso;

(b) variar el receptor del pago;

(c) ordenar cubierta de seguro médico;

(d) ordenar pagos para abonar a deudas, en adición a la pensión corriente, y

(e) modificar la pensión corriente a tenor con el Plan de Revisión y Modificación de Obligaciones Alimentarias para Personas de Edad Avanzada.

Artículo 15.—Elegibilidad para recibir asistencia; condiciones.

(1) Como condición para ser elegible para recibir asistencia económica temporal, el solicitante o persona que reciba asistencia económica bajo la categoría de Programa de Asistencia Temporal del Departamento cederá al Programa cualquier derecho a alimentos que pueda tener en su propio beneficio o en beneficio de cualquier otro miembro de la familia por quien o para quienes se esté solicitando la asistencia.

(a) No obstante lo dispuesto en el Artículo 149 del Código Civil de Puerto Rico, se entenderá que la solicitud o recibo de los pagos de asistencia económica constituyen de por sí una cesión del derecho a alimentos por el monto de la ayuda económica recibida. La cesión del derecho a alimentos será efectiva con respecto a pensiones al corriente y pensiones vencidas y desde el momento en que se determine la elegibilidad para recibir asistencia económica. Esta cesión terminará con respecto a pensiones al corriente, en el momento en que termine la elegibilidad del envejeciente beneficiario. Con respecto a pensiones vencidas durante los períodos en que la persona de edad avanzada o su encargado haya recibido asistencia económica, dicha cesión terminará al momento en que el Programa haya recuperado el monto total pagado por dicha asistencia.

(b) La cesión del derecho de alimentos será exclusivamente a los fines de incoar las acciones legales que correspondan para el Estado recuperar, de la persona legalmente obligada, las cantidades que adelante para la persona de edad avanzada o al solicitante, desde que el derecho a alimentos sea exigible según el Artículo 147 del Código Civil de Puerto Rico.

(c) El solicitante y quien reciba la ayuda económica estarán obligados a entregar al Programa los pagos directos recibidos por concepto de pensiones alimentarias para personas de edad avanzada, una vez sea efectiva la cesión del derecho a alimentos, hasta el momento en que el Programa haya recuperado el monto total pagado por razón de asistencia económica.

(2) Toda persona que solicite o reciba asistencia económica, sujeto a la notificación del derecho a reclamar justa causa para no cooperar, vendrá obligada:

(a) A ofrecer continuamente su cooperación al Programa para identificar y localizar a los descendientes de la persona de edad avanzada para quien se está solicitando asistencia económica o pensión alimentaria para personas de edad avanzada y para obtener los pagos por concepto de alimentos o por cualquier otro beneficio a que pueda tener derecho;

(b) a poner a la disposición del Programa toda la información y evidencia que tenga en su poder o que razonablemente pueda obtener, y

(c) a testificar en cualquier procedimiento para hacer cumplir la obligación legal de proveer alimentos para personas de edad avanzada.

La negativa a cooperar será notificada al Programa de Asistencia Temporal pero no menoscabará el derecho de las personas de edad avanzada a recibir la asistencia económica que les corresponda por disposición de ley y reglamento. El Administrador, tomando en consideración el mejor interés de la persona de edad avanzada y las circunstancias del caso, podrá eximir al solicitante o a la persona que reciba la asistencia económica de la obligación de brindar la cooperación requerida. El peso de la prueba para establecer justa causa por no cooperar recaerá en el alimentista de edad avanzada y deberá ser corroborada y estar basada en evidencia demostrativa de que puede anticiparse razonablemente que la cooperación resultaría en daño físico o emocional, o por medio de cualquier otra evidencia que le sea requerida por el Programa.

Artículo 16.—Servicio de localización de personas; facultad para investigar.

(a) La Administración ofrecerá a los beneficiarios del Programa el servicio de localizar a las personas que incumplen su obligación de prestar alimentos a personas de edad avanzada o que son alimentantes potenciales. Para estos efectos y para lograr y hacer efectivas las pensiones alimentarias para personas de edad avanzada, el Administrador solicitará la información y la asistencia que considere necesaria de cualquier departamento, agencia, corporación pública u organismo del Gobierno de Puerto Rico o de los municipios de otros estados o jurisdicciones, así como de individuos, entidades privadas y corporaciones o sociedades, a los fines de identificar y localizar los descendientes o a las personas legalmente obligadas a prestar alimentos, determinar ingresos, gastos y bienes del o los alimentantes, o para cualquier otra información que sea necesaria para cumplir con los propósitos de esta Ley.

El Administrador o el funcionario del Programa que éste asigne, tendrá facultad para llevar a cabo las investigaciones que estime necesarias, y a tales fines, podrá tomar juramentos y declaraciones y requerir, bajo apercibimiento de desacato, la comparecencia de testigos y la presentación de datos, libros, cartas, documentos, papeles, expedientes y toda la información que sea necesaria y pertinente para un completo conocimiento de los asuntos bajo investigación relacionados con las funciones que le confiere esta Ley con el propósito de que pueda cumplir con las responsabilidades que se le asignan. Se ordena, no obstante lo dispuesto en otras leyes, a los directores o secretarios de otros departamentos, agencias, corporaciones públicas u organismos del Gobierno de Puerto Rico o de los municipios, así como a los funcionarios o agentes de corporaciones o entidades privadas, a suministrar aquella información pertinente y necesaria que el Administrador solicite, incluyendo la recopilación de datos y listas escritas o a través de medios computadorizados. La información así solicitada se suministrará libre de costos y aranceles. Se proveerá acceso por parte del Programa, a cualquier información sobre la ubicación del alimentante que obre en cualquier sistema utilizado por los negociados de vehículos de motor u organismos de seguridad pública del Gobierno de Puerto Rico para localizar individuos.

Si la persona se negare a ofrecer la información solicitada, el Administrador podrá recurrir al Tribunal de Primera Instancia y solicitar que se ordene el cumplimiento de la citación. El Tribunal dará preferencia al curso y despacho de dicha petición y podrá dictar órdenes haciendo obligatoria la presentación de los datos o información requerida previamente por el Administrador. El Tribunal de Primera Instancia tendrá facultad para castigar por desacato la desobediencia de esas órdenes.

Ninguna persona podrá negarse a cumplir una citación del Administrador o de su representante, o a producir la evidencia requerida o rehusar contestar cualquier pregunta en relación con cualquier investigación, porque la evidencia que se le requiere podría incriminarle o le expondría a un proceso criminal o a que se le destituya o suspenda de su empleo, profesión u ocupación, pero el requerimiento de testimonio o información estará sujeto a lo dispuesto en la Ley Núm. 27 de 8 de diciembre de 1990, conocida como "Ley de Procedimiento y Concesión de Inmunidad a Testigos".

La información obtenida será de carácter confidencial y se utilizará únicamente para los propósitos autorizados por esta Ley. Cualquier persona que divulgue, dé a la publicidad, haga uso de, o instigue al uso de cualquier información obtenida de conformidad con las disposiciones de este Artículo, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses o multa que no excederá de quinientos (500) dólares o ambas penas a discreción del tribunal. Todo empleado o funcionario que por descuido, acción u omisión, divulgue, ofrezca o publique cualquier información confidencial estará, además, sujeto a las acciones disciplinarias que correspondan.

(b) A fin de facilitar la localización y hacer efectivas acciones contra alimentantes, las agencias de gobierno que emiten las siguientes licencias o mantienen récords relativos a los siguientes asuntos, deberán desarrollar procedimientos apropiados para garantizar que las solicitudes para obtener dichas licencias, o los récords sobre dichos asuntos, contengan el número de seguro social del respectivo solicitante o individuo sujeto a dicho asunto, respectivamente: licencias profesionales, licencias de vehículos de motor, licencias ocupacionales, licencias de matrimonio, decretos de divorcio, órdenes de pensión alimentaria para

personas de edad avanzada, decretos y reconocimientos de paternidad, y récords y certificados de defunción.

Artículo 17.—Registro Estatal de Nuevos Empleados. Acceso por parte del Programa.

(1) La Administración permitirá el acceso del Programa a información contenida en el Registro Estatal de Nuevos Empleados creado en virtud de las disposiciones de la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada. Tal acceso consistirá en facilitar el pareo electrónico de información contenida en el Registro Estatal de Casos de Pensiones Alimentarias para Personas de Edad Avanzada con la información contenida en el Registro Estatal de Nuevos Empleados. El Administrador establecerá un cargo anual, a ser desembolsado de los fondos asignados al Programa, de las sumas necesarias para implementar los servicios de pareo electrónico descritos en este Artículo.

(a) El Administrador realizará, a intérvalos no menores de treinta (30) días, una comparación computadorizada de los números de seguro social de los empleados informados por los patronos y de los alimentantes conforme aparecen en el Registro Estatal de Casos de Pensiones Alimentarias para Personas de Edad Avanzada del Programa, según dispone el Artículo 32 de esta Ley.

(b) Si la comparación de los respectivos números de seguro social coincide, el Administrador transferirá e incluirá en el Registro Estatal de Casos de Pensiones Alimentarias para Personas de Edad Avanzada los datos informados a tenor con el inciso (1) de este Artículo.

(c) Si el caso identificado en el Registro Estatal de Casos de Pensiones Alimentarias para Personas de Edad Avanzada contiene una orden de pensión alimentaria para personas de edad avanzada en vigor y es elegible para la retención de ingresos a tenor con esta Ley, el Administrador remitirá una orden y notificación de retención de ingresos al patrono de conformidad con el Artículo 33 de esta Ley.

(2) El Programa utilizará la información recopilada en el Registro Estatal de Nuevos Empleados para localizar alimentantes y establecer, modificar y hacer efectivas las obligaciones alimentarias a favor de las personas de edad avanzada.

Artículo 18.—Procedimiento administrativo expedito.

(a) Además de los remedios y a la acción judicial de alimentos que puedan incoar las personas con capacidad para reclamar alimentos para sí o a nombre y en representación de la parte realmente interesada, según dispuesto en el Código Civil, las Reglas de Procedimiento Civil y otras leyes aplicables, cuando se soliciten los servicios autorizados en esta Ley, o motu proprio, el Administrador originará un procedimiento administrativo expedito para establecer o modificar la orden de pensión alimentaria para personas de edad avanzada o exigir a la persona responsable por ley el cumplimiento de la obligación de prestar alimentos a envejecientes. El término Procedimiento Administrativo Expedito utilizado en este Artículo significa que, desde la fecha en que la petición es radicada hasta su resolución final, el noventa por ciento (90%) de los casos se resuelvan dentro del término máximo de tres (3) meses; noventa y ocho por ciento (98%) de los casos se resuelvan dentro del término de seis (6) meses y la totalidad de los casos, o el cien por ciento (100%) se resuelvan dentro del término de doce (12) meses.

(b) El procedimiento administrativo se llevará a cabo de la siguiente manera:

(1) Cuando el Administrador o su representante autorizado reciba una solicitud de servicios, o cuando motu proprio genere una solicitud de servicios, inmediatamente deberá proceder a revisarla, estudiar las disposiciones legales pertinentes y completar la información necesaria para tramitar el caso con la que esté disponible en el Programa o haya que requerirle a otras agencias, entidades o personas.

(2) El Administrador le requerirá a la parte a la que está dirigida la reclamación o que pueda resultar afectada, por escrito o mediante comunicación constatable, notificándole, o por correo y si se desconoce su dirección mediante aviso público, que comparezca dentro de un término razonable que no será menor de cinco (5) días ni mayor de treinta (30) días. Hará un resumen de la petición y el derecho aplicable, apercibiendo a la parte de las consecuencias legales de la reclamación y que de no comparecer en el tiempo requerido se podrá dictar lo solicitado sin más citarle ni oírle; concediéndole una oportunidad razonable para defenderse y presentar su versión; requiriéndole que conteste las alegaciones; que acepte, rechace, objete, impugne, aclare o adicione los hechos y aspectos legales; y que presente los documentos o pruebas que substancien o controviertan las alegaciones, argumentos o hechos de la petición. El Administrador podrá a su vez requerirle a la parte afectada que presente documentos o pruebas, o que complemente un formulario, o proceder a emitir orden de mostrar causa por la que se deba o no se deba aceptar las alegaciones y pruebas para hacer las determinaciones que correspondan en forma provisional o permanente.

(3) Notificación, comunicación y citación a las partes. En los procedimientos que se llevan a cabo bajo las disposiciones de esta Ley para establecer, modificar o hacer efectivas pensiones alimentarias paras personas de edad avanzada, el Administrador hará las gestiones razonables para notificar, comunicar o anunciar a las partes que se ha iniciado una investigación o caso que le afecta o le podría afectar sus derechos. Luego de comparecer la parte por derecho propio o representada por abogado, se le notificará de todas las órdenes o resoluciones que emita el Administrador o el Juez Administrativo.

Copia de las órdenes que impongan o modifiquen una obligación de alimentos, incluyendo aquellas órdenes que denieguen una petición de modificación de pensiones alimentarias para personas de edad avanzada a tenor con el Plan de Revisión y Modificación de Ordenes de Pensión Alimentarias Para Personas de Edad Avanzada del Programa, deben ser notificadas a las partes dentro de catorce (14) días desde la fecha en que se emitió la orden.

(4) Investigación compulsoria. En los procedimientos que se llevan a cabo bajo las disposiciones de esta Ley para establecer, modificar o hacer efectivas pensiones alimentarias para personas de edad avanzada, se investigará la situación y capacidad económica del alimentante como del alimentista de edad avanzada. Se faculta al Administrador para requerir la presentación de copias certificadas de cualesquiera planillas de contribución sobre ingresos rendidas para los últimos tres (3) años contributivos precedentes, así como certificaciones patronales o cualquier otro documento que acredite su sueldo o salario o constancia de cualquier otro ingreso, acreencias o sobre bienes muebles e inmuebles de que disponga.

El Administrador preparará y proveerá a las partes un formulario para obtener la información necesaria sobre la situación económica, las necesidades de la personas de edad avanzada y la capacidad económica del alimentante y del alimentista de edad avanzada. Además, se le solicitará presentar u ofrecer cualquier documento o prueba, o petición de documentos, exámenes o pruebas, de cualquier circunstancia que constituya un factor que pueda influenciar en la determinación justa y razonable de la pensión alimentaria para personas de edad avanzada. El formulario se completará con afirmación certificada con apercibimiento de perjurio, y una vez sea complementado debidamente con toda la información requerida deberá someterse al Programa. El acto de someter un formulario no exime a las partes de su obligación contínua de suministrar toda aquella otra información que sea necesaria para determinar su situación económica particular.

Además del formulario requerido, se podrán utilizar los mecanismos de descubrimiento de información, según se establece en esta Ley y las Reglas de Procedimiento Civil. Se autoriza a todo abogado admitido a la práctica de la profesión legal que represente cualquiera de las partes como abogado

de récord, en función pública, en tiempo y forma razonable y según el reglamento que a estos efectos se adopte, a emitir y firmar citaciones a partes o testigos para deposiciones, comparecencia a evaluaciones, exámenes médicos, vistas e inspecciones, notificaciones, requerimientos de información, documentos, admisiones y pruebas, apercibiendo a la persona que está sujeta a la imposición de sanciones por el Administrador, el Juez Administrativo o a ser castigado por desacato por el tribunal. Si la persona incumpliera con lo requerido podrá ser sancionada por el Administrador, el Juez Administrativo y a requerimiento de parte, el tribunal podrá castigarlo por desacato. La persona afectada por una solicitud de descubrimiento de información podrá solicitar al Administrador o al Juez Administrativo una orden protectora mediante adecuada notificación a las partes dentro del término establecido por reglamento.

Se apercibirá a las partes que el Administrador podrá imputar a la parte que se negare a descubrir la información dentro del término requerido o no contestare debidamente o con evasivas, el ingreso promedio del oficio, ocupación, profesión del alimentante, según toda la prueba disponible, incluyendo estimados, estudios y proyecciones de ingresos, gastos, estilo de vida y cualquier otra prueba pertinente y continuar con el procedimiento administrativo autorizado por esta Ley, incluyendo hacer una determinación en rebeldía.

(5) Acuerdos o estipulaciones sobre pensiones alimentarias para personas de edad avanzada. Cuando las partes logren un acuerdo sobre pensión alimentaria para personas de edad avanzada, el acuerdo se someterá al Administrador para su aprobación de conformidad con las Guías Mandatorias para Fijar y Modificar Pensiones Alimentarias Para Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico adoptadas según dispone esta Ley. No obstante, el Administrador, a su discreción podrá ordenar la celebración de una vista administrativa para constatar que las necesidades de la persona de edad avanzada serán adecuadamente satisfechas de acuerdo a capacidad del alimentante y el alimentista de edad avanzada para cumplir con lo estipulado.

(6)(A) Obligación de proveer alimentos. En los casos en que se requiere establecer, modificar o hacer efectiva una pensión alimentaria para personas de edad avanzada, el Administrador o la persona en que éste delegue notificará a todas las partes la alegación de su obligación de proveer alimentos. La notificación podrá ser enviada al alimentante por correo certificado con acuse de recibo a su última dirección conocida, o le será entregada personalmente conforme el reglamento que adopte el Programa para efectuar dicho diligenciamiento personal, o mediante notificación publicada en un periódico diario de circulación general. La notificación se entenderá válida de hacerse a la última dirección conocida que obre en el Registro Estatal de Casos de Pensiones Alimentarias para Personas de Edad Avanzada para fines de cumplir con el debido proceso de ley. Las partes tienen la obligación contínua de informar cualquier cambio en su dirección residencial, postal y de su empleo.

En caso de que el alimentante no pueda ser notificado por los medios antes señalados, la notificación se hará constar por escrito y se procederá a publicar un edicto, el cual puede ser un aviso con múltiples notificaciones, en un periódico de circulación general en Puerto Rico. El edicto que se publique debe contener la siguiente información:

(1) el nombre de las partes que reclaman alimentos para personas de edad avanzada;

(2) que de establecerse la relación ascendiente-descendiente, o aquella relación ascendiente-persona legalmente obligada a alimentar, se le impondrá al alimentante una pensión alimentaria para personas de edad avanzada según sus bienes y capacidad para generar ingresos a tenor con el Artículo 27 de esta Ley;

(3) la suma fijada o la modificación de la pensión alimentaria para personas de edad avanzada, o ambas;

(4) la fecha en que deberá efectuar los pagos de la pensión y el requerimiento de pago de la suma provisional o la establecida, o la suma adeudada por concepto de pensión alimentaria para personas de edad avanzada fijada;

(5) el derecho a presentar oportunamente su objeción al Administrador y defensa a las alegaciones contenidas en la notificación. Además, se le apercibirá que de no presentar objeción oportunamente se tomarán como ciertas las alegaciones hechas en la notificación de obligación de proveer alimentos y el Administrador emitirá una orden de alimentos a tenor con lo dispuesto en la notificación inicial.

(B) Procedimientos para objetar la notificación de la obligación de proveer alimentos. El alimentante podrá presentar su objeción y defensa dentro de los veinte (20) días contados a partir de la fecha de la notificación. Las únicas defensas admisibles serán los errores de hecho; que no existe obligación de proveer alimentos; que la suma fijada como pensión alimentaria para personas de edad avanzada está equivocada; o que la persona no es el obligado a prestar alimentos o el alimentante deudor. No será defensa la alegación de que existen otras personas que también pueden tener una obligación de proveer alimentos a la persona de edad avanzada. Sin embargo, el recurrido podrá incluir, mediante notificación al Administrador, otros descendientes o personas legalmente obligadas a alimentar que puedan tener obligaciones alimentarias para con la persona de edad avanzada y que puedan ser sujetos a la jurisdicción del Administrador y del Programa.

En caso de que el alimentante presente oportunamente objeción o defensa, o ambos, el Administrador o la persona que éste designe, las revisará para determinar su validez. De quedar establecida la relación ascendiente-descendiente o de persona legalmente obligada a alimentar, el Administrador emitirá una orden de alimentos dentro de los veinte (20) días de habérsele presentado la objeción o defensa a la notificación inicial y notificará al alimentante de su derecho a solicitar reconsideración de la orden del Administrador y a la celebración de una vista informal, a presentar evidencia, a una adjudicación imparcial y que la decisión tomada estará basada en el expediente.

(C) Reconsideración ante el Juez Administrativo. Cualquier parte adversamente afectada por la orden de alimentos del Administrador podrá solicitar reconsideración al Juez Administrativo dentro del término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de la orden. De no solicitar reconsideración dentro del término señalado, la orden de alimentos será final y firme.

En caso de que el alimentante presente oportunamente su solicitud de reconsideración, el Administrador referirá el caso al Juez Administrativo para que éste celebre una vista administrativa dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de la solicitud de reconsideración. El Juez Administrativo hará determinaciones de hecho y derecho y emitirá su decisión al concluir la vista. Se evitará el rigor excesivo en la celebración de las vistas administrativas.

La solicitud de reconsideración no exime al solicitante de cumplir con cualquier orden o decisión del Administrador o Juez Administrativo, ni operará en forma alguna a modo de suspensión o posposición de la vigencia de la misma, a menos que medie una orden especial del Administrador o Juez Administrativo, previa determinación de que el alimentante sufrirá daños irreparables de no decretarse tal suspensión.

(D) Todas las órdenes emitidas a tenor con este Artículo deberán contener una disposición que requiera a todas las partes en el caso informar al Administrador sobre cualquier cambio en su dirección residencial, lugar de empleo o ambos, o cambios en la cubierta de seguro médico disponible, dentro de los diez (10) días de haber ocurrido dicho cambio. La Administración deberá presentar la orden y la planilla que se requiere completar a tenor con el Artículo 32 de esta Ley, dentro de los veinte (20) días desde la fecha de emisión de la orden, en el Registro Estatal de Casos de Pensiones Alimentarias para Personas de Edad Avanzada.

Toda orden, resolución o sentencia para fijar o modificar una pensión alimentaria para personas de edad avanzada o para asegurar la efectividad del pago de las pensiones alimentarias para personas de edad avanzada establecida mediante el procedimiento administrativo, tendrá para todos los efectos de ley, la

misma fuerza y efecto que una orden, resolución o sentencia establecida a través del procedimiento judicial ordinario.

La deuda por incumplimiento en el pago de la pensión alimentaria para personas de edad avanzada podrá reclamarse utilizando cualesquiera de los mecanismos para hacer efectivas las pensiones alimentarias para personas de edad avanzada contemplados en esta Ley.

Artículo 19.—Revisión judicial.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme", la parte adversamente afectada podrá, dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o decisión final del Juez Administrativo, presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal del Circuito de Apelaciones. Será requisito jurisdiccional para poder acudir en revisión judicial el haber solicitado oportunamente la reconsideración de la orden de la cual se recurre.

Artículo 20.—Petición.

Los procedimientos judiciales bajo esta Ley se comenzarán con la radicación de un escrito que contenga toda la información disponible y verídica bajo juramento o afirmación con apercibimiento de perjurio, sobre el peticionario, sobre el alimentante (o posibles alimentantes) y sobre la persona de edad avanzada a ser alimentada lo siguiente:

(a) Nombre y dirección residencial y postal incluyendo si tiene teléfono o el teléfono más cercano.

(b) Número de Seguro Social Federal.

(c) Si paga o recibe alimentos y su cuantía.

(d) Si existe una Orden de alimentos y copia de ella o descripción del caso.

(e) Si paga o recibe beneficios de un plan médico.

(f) En relación al alimentante y al peticionario, si está empleado, nombre, dirección y teléfono del patrono (incluyendo dirección de la oficina central o sección de nóminas de su trabajo) y el salario semanal, quincenal o mensual que percibe; o si tiene negocio propio toda la información con relación a partidas de activos, pasivos, ingresos, gastos e inventarios del mismo.

(g) En relación a las personas de edad avanzada, se informará el sexo, fecha de nacimiento, sitio de nacimiento, edad, ocupación, y si está impedido el tipo y grado de impedimento.

La Contestación a la Petición deberá contener la misma información anterior y de la misma forma.

De la información ser provista por un abogado en representación de alguna de las partes, la misma se entenderá que es una certificación de que la información es verídica según su mejor información y creencia y bajo su responsabilidad como funcionario del tribunal.

Radicada la petición, será deber de la Secretaría del Tribunal expedir inmediatamente al peticionado el emplazamiento o citación correspondiente.

El alimentista de edad avanzada o su representante no necesitará radicar una demanda formal contra el alimentante como condición precedente a la radicación del escrito. No se desestimará la acción por la falta de meras formalidades en el escrito radicado, ni se exigirá arancel de presentación alguno, siempre que la única causa de acción presentada en el escrito sea de alimentos para para personas de edad avanzada. Para los efectos de determinar el tiempo que toma el trámite de un caso bajo esta Ley, sin embargo, se entenderá que comienza la acción en la fecha en que se diligenció la notificación de la acción, según se dispone en el inciso (2) del Artículo 23 de esta Ley. En cualquier acción en la cual se soliciten alimentos para personas de edad avanzada, ya sea en forma colateral o principal, las partes notificarán al Administrador a fin de que en aquellos casos donde haya habido una cesión del derecho de alimentos de conformidad con el Artículo 15 de esta Ley, éste participe como parte indispensable.

Artículo 21.—Examinadores.

(1) El Presidente del Tribunal Supremo dispondrá, de conformidad con el inciso (3) de este Artículo, el nombramiento de un número suficiente de Examinadores para presidir las vistas sobre

pensiones alimentarias para personas de edad avanzada con el fin de asegurar un procedimiento expedito en estos casos. Los Examinadores estarán adscritos al Tribunal de Primera Instancia.

Según usado en este Artículo, un procedimiento expedito significa un proceso que reduce el tiempo de tramitación de una orden para fijar o modificar una pensión alimentaria para personas de edad avanzada o para asegurar la efectividad del pago de las pensiones alimentarias para personas de edad avanzada, de tal modo que el noventa por ciento (90%) de los casos se resuelvan dentro del término máximo de tres (3) meses; noventa y ocho por ciento (98%) de los casos se resuelvan dentro del término de seis (6) meses y la totalidad de los casos, o el cien por ciento (100%) se resuelvan dentro del término de doce (12) meses. Los términos señalados en este inciso se contarán desde la fecha en que se diligenció la notificación de la petición, según establecido en el inciso (2) del Artículo 23 de esta Ley, hasta la fecha de su disposición final por el tribunal.

Se entiende como fecha de disposición final aquella en que se archive en autos una orden de pensión alimentaria para personas de edad avanzada o una orden para hacer efectiva una pensión alimentaria para personas de edad avanzada, o en que se desista de la petición de alimentos, o se desestime la petición en sus méritos o por falta de jurisdicción sobre el promovido o demandado, o la fecha en que el Examinador refiera el caso al Juez del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior, por falta de autoridad del Examinador para entender en las controversias, conforme se dispone en el inciso (2) de este Artículo y en los incisos (2) y (3) del Artículo 26 de esta Ley.

(2) El Examinador, no obstante las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil, sobre los Comisionados, hará determinaciones de hecho y conclusiones de derecho y recomendará remedios a un juez del Tribunal de Primera Instancia, en cualquier procedimiento referente a pensiones alimentarias para personas de edad avanzada.

El Examinador tendrá autoridad para:

(a) Tomar juramentos y dirigir y permitir que las partes se envuelvan en el descubrimiento de información que agilice el procedimiento y la resolución de las controversias, conforme al Artículo 24 de esta Ley, recibir testimonio y cualquier otra evidencia, así como para establecer un récord del caso.

(b) Aceptar el reconocimiento voluntario de la obligación de alimentar y las estipulaciones o acuerdos que establecen el monto de las pensiones alimentarias para personas de edad avanzada a pagarse.

(c) Celebrar vista cuando el promovido no comparece luego de haber sido debidamente notificado y recomendar que se dicte orden de pensión alimentaria para personas de edad avanzada.

(d) Recibir y evaluar la evidencia y rendir un informe al tribunal que contenga las determinaciones de hechos, conclusiones de derecho y sus recomendaciones referentes a fijar, modificar y hacer efectivas las órdenes de pensión alimentaria para personas de edad avanzada.

(e) Determinar que cualquier persona ante tal Examinador ha violado o está violando una orden del tribunal, sujeto a la confirmación por un juez del Tribunal de Primera Instancia quien impondrá la sanción, desacato o penalidad que corresponda en ley para tal violación.

(3) Los Examinadores serán abogados licenciados a ejercer la práctica de la abogacía ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Los Examinadores serán nombrados por el Juez Presidente del Tribunal Supremo, para trabajar a tiempo completo por aquel término que éste determine y podrán volverse a nombrar por términos siguientes y subsiguientes, según las necesidades del sistema.

El Juez Presidente adoptará las reglas que gobernarán la selección, nombramiento, remoción, compensación y adiestramiento de los Examinadores.

Artículo 22.—Acuerdos o estipulaciones.

Cuando las partes logren un acuerdo sobre pensión alimentaria para personas de edad avanzada, se someterá al Administrador para su aprobación de acuerdo con las Guías Mandatorias para Fijar y Modificar Pensiones Alimentarias para Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico adoptadas según dispone esta Ley. No obstante, el Examinador podrá ordenar a su discreción la celebración de una vista informal para constatar que las necesidades del alimentista de edad avanzada serán adecuadamente satisfechas y la capacidad del alimentante para cumplir con lo estipulado.

Cuando el acuerdo se logre antes de iniciado el procedimiento ante el Examinador o en aquellos casos bajo consideración de un juez del Tribunal de Primera Instancia, el acuerdo logrado sobre pensión alimentaria para personas de edad avanzada se someterá directamente al juez para su aprobación.

Artículo 23.—Notificación de la acción.

(1)(a) Al radicarse en el tribunal una petición o escrito sobre la obligación de prestar alimentos a personas de edad avanzada, incluso aquéllas en que se reclamen alimentos para otro pariente que tenga a su cargo el cuido de la persona de edad avanzada, y la parte promovida resida en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el secretario del tribunal procederá de inmediato a señalar la vista ante el Examinador para una fecha dentro de un plazo no menor de quince (15) días ni mayor de veinte (20) días, contados desde la fecha de radicación de la petición y expedirá, no obstante lo establecido por las Reglas de Procedimiento Civil, un documento de notificación personal y citación para vista, requiriendo a la parte promovida que muestre causa de por qué no debe dictarse una sentencia, resolución u orden según solicitado en la petición o escrito.

(b) La notificación-citación, junto con una copia de la petición, deberá ser diligenciada o notificada por la parte promovente con no menos de cinco (5) días de antelación a la fecha de la vista enviándola a la parte promovida, por correo certificado con acuse de recibo a su dirección, si ésta es conocida, estableciendo este conocimiento mediante declaración jurada al efecto; al momento de presentar la petición; o personalmente mediante el procedimiento utilizado para el diligenciamiento de emplazamientos. En los casos en que hayan transcurrido dos (2) años o más desde la última orden sobre pensión alimentaria para personas de edad avanzada, durante los cuales no se haya suscitado incidente judicial alguno entre las partes, se notificará la acción mediante el procedimiento utilizado para el diligenciamiento personal de emplazamientos. Cuando se desconozca la dirección del alimentante o éste no pueda ser localizado, se citará para vista mediante la publicación de un edicto en un periódico de circulación general diaria en Puerto Rico.

(c) Cuando la parte promovida haya sido citada con menos de cinco (5) días de anticipación a la fecha de la vista, según señalada por el secretario del tribunal, el Examinador, conforme se dispone en el Artículo 25 de esta Ley, recomendará de inmediato una pensión alimentaria para personas de edad avanzada provisional en esa ocasión y señalará la vista del caso para dentro de diez (10) días, a menos que una o ambas partes manifiesten al Examinador su determinación de hacer uso de los mecanismos de descubrimiento de prueba regulares, conforme se disponen en las Reglas de Procedimiento Civil, en cuyo caso se señalará la vista para la fecha más próxima viable, conforme las disposiciones del Artículo 24 de esta Ley. El juez adoptará o modificará la pensión alimentaria para personas de edad avanzada provisional recomendada y emitirá orden al efecto. La pensión alimentaria para personas de edad avanzada provisional permanecerá en vigor hasta que el tribunal haga una nueva determinación o resolución.

(2) Para los efectos de determinar el tiempo que toma el trámite de un caso bajo esta Ley se comenzará a contar el término desde:

(a) La fecha en que se haya diligenciado la notificación-citación, si se siguió el procedimiento establecido para el diligenciamiento personal de emplazamientos;

(b) la fecha de publicación del edicto, si el promovido fuere citado para vista siguiendo ese procedimiento;

(c) la fecha de recibo de la notificación-citación, según conste en el acuse de recibo correspondiente, si el promovido fuere notificado por correo certificado con acuse de recibo.

Artículo 24.— Descubrimiento compulsorio de información.

En los procedimientos judiciales relacionados con pensiones alimentarias para personas de edad avanzada, el descubrimiento sobre la situación económica del alimentante y alimentista de edad avanzada será compulsorio.

De solicitarlo cualesquiera de las partes, la presentación de copias certificadas de la planillas de contribución sobre ingresos rendidas para los tres (3) últimos años contributivos precedentes así como una certificación patronal del sueldo o salario, será compulsoria.

La Oficina de Administración de los Tribunales preparará un formulario para servir de guía respecto de la información mínima requerida sobre la situación económica de las partes, las necesidades del alimentista de edad avanzada y la capacidad de pago del alimentante. El formulario completado y juramentado, u otro documento similar, también juramentado, que contenga toda la información requerida deberá radicarse en la secretaría del tribunal y notificarse a la otra parte con antelación a la vista y sujetará al declarante a las penalidades dispuestas para el delito de perjurio.

El rendir el formulario no constituirá excusa respecto de la obligación contínua de las partes de revelar todas las circunstancias que permitan determinar su particular situación económica.

El rendir este formulario o de otro documento similar no constituirá impedimento para el uso de los mecanismos de descubrimiento de prueba, según establecido en las Reglas de Procedimiento Civil. No obstante, la decisión de usar los mecanismos de descubrimiento de prueba no será razón para suspender la vista señalada por el secretario del tribunal, según establecido en el Artículo 23 de esta Ley. En esa vista se determinará el monto de una pensión alimentaria para personas de edad avanzada provisional a ser recomendada al juez y se señalará nueva vista para la fecha más próxima viable. La pensión provisional así fijada permanecerá en vigor hasta que el tribunal dicte una nueva resolución u orden.

Cuando se utilicen los mecanismos regulares de descubrimiento de prueba, no se concederán prórrogas para cumplir con los términos establecidos por las Reglas de Procedimiento Civil, excepto mediante la demostración rigurosa de justa causa.

Las sanciones provistas en las Reglas de Procedimiento Civil por negarse a descubrir o por contestar en forma evasiva las preguntas formuladas como parte del procedimiento de descubrimiento de prueba, serán aplicadas con todo el rigor, incluyendo la imposición de honorarios de abogado.

Artículo 25.—Orden provisional de pensión.

Además de lo dispuesto en los Artículos 23, 24 y 26 (2) de esta Ley, el Examinador recomendará la fijación de una pensión alimentaria para personas de edad avanzada provisional cuando, a solicitud de cualesquiera de las partes o por alguna otra razón, se disponga la posposición de una vista, faltare alguna información o pruebas, se refiera el caso al juez o se transfiera el caso a otra sala o sección del tribunal, o cuando las necesidades del alimentista de edad avanzada sean tan urgentes que así se requiera. Existirá una presunción rebatible que existirá la urgencia requerida en todos los casos de alimentos para personas de edad avanzada. La pensión provisional permanecerá en vigor hasta que el juez haga una nueva determinación o dicte una resolución.

Artículo 26.—Tramitación.

(1) El Examinador celebrará la vista sobre pensión alimentaria para personas de edad avanzada, y dentro de un término de veinte (20) días, someterá al tribunal un informe con sus recomendaciones el cual contendrá determinaciones de hechos y conclusiones de derecho.

Las Reglas de Evidencia se aplicarán a los procedimientos ante el Examinador.

(2) En los casos ante el Examinador en que surjan controversias complejas, el Examinador recomendará se emita una orden de pensión alimentaria para personas de edad avanzada provisional, conforme se dispone en el Artículo 25 de esta Ley, y referirá el caso para el trámite judicial ordinario.

(3) Cuando haya reconocimiento voluntario de la obligación de alimentar al alimentista de edad avanzada el Examinador recomendará se dicte una sentencia a esos fines estableciendo la obligación del alimentante, así como el monto de la pensión alimentaria para personas de edad avanzada a ser fijada.

(4)(a) El hecho de que el escrito o petición sobre pensión alimentaria para personas de edad avanzada solicite la modificación de una orden expedida anteriormente por un tribunal competente, no privará al Examinador de actuar conforme lo dispuesto en el Artículo 25 de esta Ley, y de hacer recomendación al tribunal para mantener o establecer una pensión alimentaria para personas de edad avanzada distinta, con carácter provisional, a aquella cuya modificación se solicita.

(b) En los casos en que, a juicio del juez del Tribunal de Primera Instancia, una de las partes en el litigio haya presentado frívolamente una controversia con el consiguiente resultado de impedir la intervención del Examinador y retrasar el proceso de adjudicación final de la pensión alimentaria para personas de edad avanzada, el tribunal impondrá sanciones económicas a esa parte y/o a su abogado, incluyendo el pago de honorarios de abogado a favor de la otra parte.

(5) El informe de un Examinador incluirá determinaciones de hechos, conclusiones de derecho y recomendaciones sobre la pensión alimentaria para personas de edad avanzada, el cual será referido al Tribunal de Primera Instancia.

El juez del Tribunal de Primera Instancia podrá hacer suyas las determinaciones, conclusiones y recomendaciones del Examinador o hacer sus propias determinaciones de hecho o conclusiones de derecho con o sin vista previa y emitir la orden, resolución o sentencia que corresponda, la cual será notificada al alimentante y alimentista de edad avanzada, la persona a cargo de su cuido o al Secretario de la Familia, según sea el caso. Toda orden, resolución o sentencia para fijar o modificar una pensión alimentaria para personas de edad avanzada o para asegurar la efectividad del pago de las pensiones alimentarias para personas de edad avanzada, establecida mediante el procedimiento expedito dispuesto en esta Ley tendrá, para todos los efectos de ley, la misma fuerza y efecto que una orden, resolución o sentencia establecida a través del procedimiento judicial ordinario.

(6) Todas las órdenes de pensión alimentaria para personas de edad avanzada emitidas por el tribunal a tenor con una recomendación del Examinador, o motu proprio, deberán contener una disposición que requiera a todas las partes en la acción que informen al Programa sobre cualquier cambio en su dirección residencial, lugar de empleos o ambos, o cambios en cubierta de seguro médico disponible, dentro de los (10) diez días de haber ocurrido dicho cambio. El tribunal deberá remitir al Programa la orden y la planilla que se requiere completar de conformidad con el Artículo 32 de esta Ley dentro de los treinta (30) días de la fecha de expedición de la orden, para que sea registrada en el Registro Estatal de Casos de Pensiones Alimentarias para Personas de Edad Avanzada.

Artículo 27.—Orden sobre pensión alimentaria para personas de edad avanzada - Determinación y modificación.

El Administrador, en coordinación y consulta con el Director Administrativo de la Oficina de la Administración de los Tribunales, preparará y adoptará Guías para Determinar y Modificar las Pensiones Alimentarias para Personas de Edad Avanzada. Estas guías se aprobarán de conformidad con las disposiciones de la Ley Núm 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme". Las guías deberán estar basadas en criterios numéricos y descriptivos que permitan el cómputo de la cuantía de la obligación alimentaria para personas de edad avanzada. Las mismas serán revisadas de acuerdo al índice general de precios al consumidor por lo menos cada cuatro (4) años a partir de la fecha de su aprobación, para asegurar que las pensiones alimentarias para personas de edad avanzada resultantes de su aplicación sean justas y adecuadas. El Administrador, con cargo al presupuesto del Programa, asumirá y responderá de los gastos en que se incurra en la preparación, adopción e impresión de las guías y podrá venderlas a un precio justo y razonable. Los

ingresos recibidos por concepto de tales ventas serán depositados en el Fondo Especial para Servicios y Representación de Casos de Sustento de Personas de Edad Avanzada creado por esta Ley.

En todo caso en que se solicite la fijación o modificación, o que se logre un acuerdo o estipulación de una pensión alimentaria para personas de edad avanzada, será mandatorio que el tribunal o el Administrador, según sea el caso, determine el monto de la misma utilizando para ello las guías adoptadas a tenor con lo dispuesto en esta Ley.

Se presumirá que la pensión alimentaria para personas de edad avanzada resultante de la aplicación de las guías es justa, adecuada y en el mejor interés del envejeciente. Dicha presunción podrá ser controvertida por cualesquiera de las partes utilizando los criterios establecidos por el Gobierno de Puerto Rico. Si a base de la evidencia presentada para rebatir la presunción, el tribunal o el Administrador, según sea el caso, determinare que la aplicación de las guías resultara en una pensión alimentaria para personas de edad avanzada injusta o inadecuada, así lo hará constar en la resolución o sentencia que emita y determinará la pensión alimentaria para personas de edad avanzada luego de considerar, entre otros, los siguientes factores:

(1) Los recursos económicos del o los alimentantes y de la persona de edad avanzada;

(2) la salud física y emocional de la persona de edad avanzada;

(3) las consecuencias contributivas para las partes, cuando ello sea práctico y pertinente;

(4) las contribuciones no monetarias del o los alimentantes al cuidado y bienestar de la persona de edad avanzada, más

(5) la expectativa de recibir beneficio económico alguno de cualquier litigio, pleito, proceso de arbitraje o mediación o demanda pendiente de adjudicación, irrespectivamente del foro o jurisdicción donde se ventile, la causa de acción o fundamentos legales, de la cual el alimentante o alimentista de edad avanzada sea parte o beneficiario, dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha de la emisión de la orden o sentencia del tribunal que establece la pensión alimentaria para personas de edad avanzada.

También hará constar cuál hubiera sido el monto de la pensión resultante al aplicar las Guías Mandatorias para Fijar y Modificar Pensiones Alimentarias para Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico adoptadas según dispone esta Ley.

Para la determinación de los recursos económicos del obligado a pagar una pensión alimentaria para personas de edad avanzada, se tomará en consideración, en adición al ingreso neto ordinario, el capital o patrimonio total del alimentante. Se considerarán iguales criterios del alimentista de edad avanzada para el cómputo proporcional a serle imputado a éste.

Los pagos por concepto de pensiones alimentarias para personas de edad avanzada y de aumentos en las mismas serán efectivos desde la fecha en que se radicó la petición de alimentos o se emitió la orden por el Administrador. Bajo ninguna circunstancia el tribunal o el Administrador reducirá la pensión alimentaria para personas de edad avanzada sin que el alimentante haya radicado una petición a tales efectos, previa notificación al alimentista de edad avanzada o acreedor. La reducción de la pensión alimentaria para personas de edad avanzada será efectiva desde la fecha en que el Tribunal o el Administrador decida sobre la petición de reducción o el Administrador modifique la pensión establecida conforme al reglamento de revisión periódica que se adopte. Todo pago o plazo vencido bajo una orden de pensión alimentaria para personas de edad avanzada emitida a través del procedimiento administrativo expedito o a través del procedimiento judicial establecido en esta Ley constituye desde la fecha de su vencimiento, una sentencia para todos los efectos de ley y por consiguiente, tendrá toda la fuerza, efectos y atributos de una sentencia judicial, incluyendo la capacidad de ser puesta en vigor, acreedora a que se le otorgue entera fe y crédito en Puerto Rico y en cualquier estado y no estará sujeta a reducción retroactiva en Puerto Rico ni en ningún estado, excepto que en circunstancias extraordinarias el tribunal o el Administrador podrá hacer efectiva la reducción a la fecha de la notificación de la petición de reducción al alimentista o acreedor o de la notificación de la intención de modificar, según sea el caso. No se permitirá

la reducción retroactiva del monto de la deuda por concepto de las pensiones alimentarias para personas de edad avanzada devengadas y no pagadas.

La modificación de los acuerdos o de las sentencias, resoluciones u órdenes sobre pensiones alimentarias para personas de edad avanzada podrá ser solicitada por el alimentista de edad avanzada, el alimentante, el tribunal o el Administrador. Bajo ninguna circunstancia se modificará una pensión alimentaria para personas de edad avanzada dentro del procedimiento para objetar la retención en el origen de ingresos del alimentante, conforme dispone el inciso 4, Artículo 33 de esta Ley.

Se dispone, además, que toda orden de pensión alimentaria para personas de edad avanzada será revisada y modificada cada tres (3) años desde la fecha en que la orden fue establecida o modificada, en caso de que se presente una solicitud de revisión y modificación por el alimentante, el alimentista de edad avanzada, o el Programa. Toda orden de pensión alimentaria para personas de edad avanzada emitida por el tribunal o la Administración deberá apercibir a las partes de su derecho a solicitar una revisión y modificación de su orden, y para aquellos casos bajo la jurisdicción del Programa, dicha notificación se continuará expidiendo al menos una vez cada tres (3) años. No obstante cualquier ley o disposición al contrario, el requisito de cambio significativo o imprevisto en las circunstancias de alguna de las partes se cumple si la aplicación de las Guías Mandatorias para Fijar y Modificar Pensiones Alimentarias para Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico adoptadas según se dispone en esta Ley, resultare en una cantidad diferente a la pensión corriente actualmente ordenada. La necesidad de proveer para el cuidado de salud de una persona de edad avanzada en una orden también dará base para la modificación de la pensión alimentaria para personas de edad avanzada.

Además de realizar la revisión y modificación de una orden mediante las Guías Mandatorias para la Fijación y Modificación de Obligaciones Alimentarias para Personas de Edad Avanzada, la revisión cada tres (3) años podrá estar basada en la aplicación de un ajuste del costo de vida. En caso de que las órdenes sean modificadas a base del ajuste en el costo de vida, cada parte tendrá el derecho a impugnar el resultado dentro de los treinta (30) días desde la fecha de notificación del ajuste. Durante dicho término la orden podrá será modificada mediante la aplicación de las Guías Mandatorias para la Fijación y Modificación de Obligaciones Alimentarias para Personas de Edad Avanzada.

El Administrador o el tribunal, a solicitud de parte o a su discreción, podrá iniciar el procedimiento para revisar o modificar una orden de pensión alimentaria para personas de edad avanzada en cualquier momento y fuera del ciclo de tres (3) años, cuando entienda que existe justa causa para así hacerlo, tal como variaciones o cambios significativos o imprevistos en los ingresos, capacidad de generar ingresos, egresos, gastos o capital del alimentante o alimentista, o en los gastos, necesidades o circunstancias de la persona de edad avanzada, o cuando exista cualquier otra evidencia de cambio sustancial en circunstancias.

El Administrador establecerá por reglamento del Programa los procedimientos para llevar a cabo la revisión, determinar cuándo procederán las modificaciones y proveer sobre la notificación de la misma.

Artículo 28.—Formas de pago.

El pago de una pensión alimentaria para personas de edad avanzada podrá hacerse, entre otros, del sueldo o salario; de otros ingresos, periódicos o no, recibidos por el alimentante de otras fuentes que no sean del producto de su trabajo tales como rentas e intereses. En el caso de la pensión alimentaria para personas de edad avanzada, el tribunal o el Administrador deberá determinar de conformidad con las Guías Mandatorias para Fijar y Modificar las Pensiones Alimentarias para Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico adoptadas, según dispone esta Ley, la suma que mejor responda a los mejores intereses y bienestar de la persona de edad avanzada.

Artículo 29.—Unidad estatal de recaudaciones.

(a) el Programa establecerá una unidad estatal de recaudaciones que será responsable del cobro y distribución de todos los pagos de pensiones alimentarias para personas de edad avanzada efectuados en Puerto Rico. Alternativamente, el Programa podrá utilizar la Unidad Estatal de Recaudaciones establecida

por la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986 para llevar a cabo las funciones de recaudaciones dispuestas en este Artículo. De ser necesario, el Administrador establecerá anualmente el cargo a hacerse contra las partidas presupuestarias del Programa por este uso, si lo hubiere.

Toda orden disponiendo sobre una pensión alimentaria para personas de edad avanzada indicará que el alimentante o en el caso de que aplique la retención de ingresos, el patrono u otra fuente de ingreso periódico, deberá pagar la misma al Administrador en los lugares que se designen. El Secretario establecerá por reglamento la forma en que el obligado, patrono u otra entidad, deberá pagar la pensión alimentaria para personas de edad avanzada en los lugares designados, incluyendo pero sin que se entienda como una limitación, transferencias electrónicas, tarjetas de crédito y débito.

Para cumplir con los propósitos de esta Ley, no obstante que exista una orden de pensión alimentaria para personas de edad avanzada que requiera que el pago se deposite en la secretaría del tribunal o que se remita al alimentista de edad avanzada, el Administrador podrá ordenar que el alimentante remita los pagos al Programa en el lugar que éste designe.

(b) La unidad de recaudaciones, utilizando sistemas automatizados al máximo posible y para asistir y facilitar el cobro y recaudaciones de pagos de pensión alimentaria para personas de edad avanzada, deberá, como mínimo:

(1) suministrar a las partes información sobre el status actual de los pagos de pensiones alimentarias para personas de edad avanzada;

(2) distribuir las cantidades remitidas como pago de pensiones alimentarias para personas de edad avanzada por los patronos u otras fuentes de ingreso periódico dentro de los dos (2) días laborables a partir de su recibo, siempre que exista información suficiente para identificar al beneficiario y que, en cuanto a pagos atrasados, no haya apelación pendiente respecto a los atrasos;

(3) remitir notificación de retención de ingresos, al patrono u otra fuente de ingreso periódico dentro de los dos (2) días laborables a partir del recibo de la notificación de que la retención debe efectuarse y notificación sobre la localización de la fuente de ingreso que deberá retenerse; o según se provee en el Artículo 17 de esta Ley;

(4) identificar y resolver las fallas administrativas al no efectuar pagos puntuales, y establecer un proceso expedito que resolverá los casos en los cuales el alimentante haya efectuado su pago a la Administración y el mismo no haya sido desembolsado al alimentista, en un término no mayor de treinta (30) días calendarios de haber recibido el Administrador querella al respecto por parte del alimentante, alimentista, o ambos, y dar seguimiento a los pagos para identificar prontamente las fallas en efectuar pagos puntuales, y

(5) utilizar procedimientos automáticos para hacer efectivas las obligaciones alimentarias para personas de edad avanzada en casos en los cuales no se han realizado pagos a tiempo.

(c) El Administrador hará disponible al Programa aquellos sistemas de cómputos ya existentes en la Administración a fin de cumplir con los requisitos dispuestos en este Artículo. Disponiéndose, que el Administrador calculará el costo anual razonable de aquellos servicios de información de datos y sistemas de cómputos utilizados por el Programa, provenientes de sistemas de la Administración, y cargará contra el presupuesto del Programa dicha suma, con el solo propósito de hacer desembolsos a las autoridades federales, si estos desembolsos le fueren requeridos al Administrador o a la Administración.

Artículo 30.—Honorarios de abogado.

(1) En cualquier procedimiento bajo esta Ley para la fijación o modificación de una pensión alimentaria para personas de edad avanzada o para hacer efectiva una orden de pensión alimentaria para personas de edad avanzada, el tribunal, el Administrador o el Juez Administrativo deberá imponer al o los alimentantes el pago de honorarios de abogado

razonables a favor del alimentista de edad avanzada, de éstos haberse incurrido, cuando éste prevalezca.

(2) El tribunal, el Administrador o el Juez Administrativo podrá imponer al o los alimentantes el pago de honorarios de abogado razonables a favor del alimentista de edad avanzada al fijarse una pensión provisional, si el alimentista persona de edad avanzada o persona que solicitare alimentos a favor del envejeciente asi lo requeriere.

Artículo 31.—Pagos; cobro y distribución.

(a) El Administrador podrá cobrar, recibir, endosar, depositar y distribuir el importe de los pagos de pensión alimentaria para personas de edad avanzada a los alimentistas de edad avanzada según se dispone:

(1) Si las cantidades recibidas por concepto de pensión alimentaria para personas de edad avanzada no pudieran ser entregadas prontamente al alimentista de edad avanzada, las mismas permanecerán bajo la custodia del Administrador en una cuenta de banco especial que devengue intereses. En estos casos, se faculta al Administrador para endosar y depositar en la referida cuenta los cheques bancarios, giros postales y cualesquiera otros valores librados a favor del alimentista envejeciente o del Administrador. El Administrador podrá girar contra la referida cuenta para atender las reclamaciones del alimentista de edad avanzada a quien corresponde el referido pago. Los desembolsos contra esta cuenta se efectuarán conforme a la reglamentación que adopte el Administrador, con la aprobación del Secretario en coordinación con el Secretario de Hacienda. El Administrador podrá recibir, endosar y depositar cualquier valor en pago de pensión alimentaria para personas de edad avanzada que esté a su nombre, o a nombre de cualquier otro funcionario en quien haya delegado, o de un empleado del Programa o cuando esté a favor de una persona que no pueda ser identificada o se desconozca su dirección; o cuando se desconozca la dirección del librador o la procedencia de dichos valores; o por cualquier otra causa similar.

La facultad que se le concede al Administrador para el recibo, endoso y depósito de cheques bancarios, giros postales y otros valores expedidos en pago de alimentos se hace extensiva a cualesquiera otros valores de la misma naturaleza que tenga bajo su custodia al entrar en vigor esta Ley y los que se reciban en el futuro.

(2) En caso de muerte del alimentista de edad avanzada con derecho a recibir una suma por el concepto expresado, se autoriza al Administrador a devolver el importe de las cantidades recibidas por el Programa, pero no pagadas al alimentista de edad avanzada, al o los alimentantes. Dichas sumas a devolver no devengarán intereses. Sin embargo, nada de lo dispuesto en este subinciso será aplicable a montos por concepto de pensiones alimentarias atrasadas.

(3) Cuando las personas de edad avanzada con derecho a un pago fueren incapacitadas o incapaces de administrar dichos fondos, el mismo se hará al tutor o a la persona, natural o jurídica, que estuviere a cargo de dichos envejecientes si, previa la investigación correspondiente, fuere en beneficio del mejor interés de la persona de edad avanzada.

(b) Efectuado el pago de la pensión alimentaria para personas de edad avanzada en la forma provista en esta Ley, el Administrador, sus agentes y empleados quedan relevados de toda responsabilidad futura con respecto a dichos desembolsos.

El importe de la pensión alimentaria para personas de edad avanzada de un alimentista de edad avanzada que no ha podido ser localizado pasará al Fondo Especial creado en el Artículo 7 de esta Ley transcurridos cinco (5) años sin que se haya reclamado el mismo. El Administrador deberá publicar un aviso en un periódico de circulación general con el nombre del alimentista envejeciente, su última dirección conocida, forma de reclamar el importe de la pensión y

cualquier otra información que se disponga por reglamento. Pasados sesenta (60) días de haberse publicado el aviso sin que se haya reclamado el importe de la pensión el mismo pasará al Fondo Especial.

(c) El Administrador deberá transferir periódicamente el importe de los intereses devengados por las cantidades depositadas en la cuenta de banco especial autorizada por este Artículo al Fondo Especial de Servicios y Representación de Casos de Sustento de Personas de Edad Avanzada creado en el Artículo 7 de esta Ley. Estos fondos se destinarán única y exclusivamente para los siguientes fines: (a) para sufragar los gastos en que incurra el Administrador para localizar a los alimentantes o prestar servicios al alimentista de edad avanzada, y (b) para fortalecer y agilizar los procedimientos autorizados en esta Ley.

(d) En los casos en que el alimentista de edad avanzada reciba una cantidad mayor a la que le corresponda, el Administrador emitirá una orden para que devuelva la misma. El Administrador podrá ordenar el pago de penalidades en caso de que el alimentista de edad avanzada no devuelva la cantidad pagada en exceso.

Artículo 32.—Medidas para asegurar la efectividad del pago - Información.

(a) Cuando mediante sentencia, orden o resolución judicial o administrativa se haya establecido el pago de una pensión alimentaria para personas de edad avanzada, tanto el alimentista de edad avanzada como el o los alimentantes, radicarán mediante moción al tribunal o al Administrador una planilla que recoja, entre otra información, la siguiente:

(1) Nombre completo, dirección residencial, teléfonos, edad, fecha y lugar de nacimiento y número de seguro social del alimentista de edad avanzada, alimentante y el nombre completo, dirección, teléfonos, seguro social y edad de los otros dependientes. Se indicará, además, a cuáles de los dependientes se le prestan alimentos, expresando el nombre, dirección, seguro social, teléfonos, y cuantía de la pensión alimentaria para personas de edad avanzada de los alimentantes. Si la persona no tiene número de seguro social debido a su estatus de inmigración, deberá suministrar el número de identificación contributiva asignado por el servicio de rentas internas federales (*Individual Tax Identification Number,* o ITIN).

(2) Nombre, dirección, teléfonos, número patronal de seguro social del patrono y lugar de trabajo del alimentante y del alimentista, si alguno. Su sueldo, salario e ingresos; las otras fuentes de ingreso y cantidades de sus ingresos; créditos a su favor y el nombre y dirección de sus deudores, o personas o entidades sean o no de carácter financiero que le administren o donde haya depositado bienes; propiedades muebles que posee cuyo valor individual sea mayor de mil dólares ($1,000), dirección de donde se encuentran y el nombre, dirección, teléfonos y número de seguro social de quien los tenga en su posesión; propiedades inmuebles que posee, incluyendo las direcciones y los datos de inscripción registral respectivos.

(3) Expresión de si ha solicitado, recibe o ha recibido alguna asistencia económica del Departamento, indicando bajo qué nombre y las fechas correspondientes.

(4) Existencia de cualquier litigio, pleito, proceso de arbitraje o mediación o demanda pendiente de adjudicación, irrespectivamente del foro o jurisdicción donde se ventile o de la causa de acción o fundamentos legales, de la cual sea parte o beneficiario y cualquier otra información esencial y necesaria para cumplir los propósitos de esta Ley, según le sea requerida por el tribunal o el Administrador.

Todas las órdenes judiciales y administrativas deberán establecer que la obligación de suministrar la información antes detallada es de naturaleza contínua y cualquier cambio en las circunstancias de la persona acreedora y de la persona legalmente responsable deberá ser notificada de inmediato, mediante moción al tribunal y al Administrador.

El incumplimiento voluntario de las disposiciones de este Artículo será constitutivo de violación a esta Ley y podrá conllevar la imposición de multas, penalidades, intereses, honorarios, gastos y costas por el Administrador y, además, desacato civil o criminal por el tribunal.

(b) La información suministrada por las partes a tenor con este Artículo en una acción de pensión alimentaria para personas de edad avanzada deberá remitirse al Registro Estatal de Casos de Pensiones Alimentarias para Personas de Edad Avanzada del Programa, según dispuesto en los Artículos 18 y 26 de esta Ley. A discreción del tribunal, o del Juez Administrativo, constituirá cumplimiento con este Artículo remitir la siguiente información mínima dentro del cuerpo de la orden de pensión alimentaria para personas de edad avanzada, en lugar de remitir una planilla completa de información personal y económica:

(1) Nombres y direcciones de ambas partes.

(2) Números de seguro social de ambas partes.

(3) Nombres y direcciones de los patronos de ambas partes, si están empleados.

(4) Fechas de nacimiento del alimentante y el alimentista de edad avanzada.

(5) Información sobre la cubierta de cuidado médico de las partes, si alguna.

(6) Cualquier otra información que la Administración requiera.

(c) El Registro Estatal de Casos de Pensiones Alimentarias para Personas de Edad Avanzada del Programa deberá, además de recopilar la información antes citada, mantener y actualizar la siguiente información para todos los casos registrados:

(1) La cantidad de pago periódico de pensión alimentaria para personas de edad avanzada y otras cantidades, incluyendo atrasos, intereses o penalidades por pagos atrasados y costas vencidas o adeudadas bajo la orden.

(2) Recaudaciones sobre cantidades adeudadas.

(3) Distribución de cantidades recaudadas.

(4) Cuantías de los gravámenes impuestos de conformidad con esta Ley.

(5) Acciones judiciales o administrativas tomadas en el caso.

Artículo 33.—Retención de ingresos; orden y notificación.

(1)(a) El Tribunal o el Administrador, conforme a las disposiciones de esta Ley, al momento de fijar o modificar una pensión alimentaria, emitirá inmediatamente una orden fijando o modificando la pensión alimentaria para personas de edad avanzada y requiriendo al patrono del alimentante o a cualquier persona que sea pagador con relación al alimentante, conforme se define en el Artículo 2 de esta Ley, que retenga o descuente en el origen, de los ingresos del alimentante, independientemente de si existen o no atrasos en el pago de pensión alimentaria para personas de edad avanzada, las cantidades señaladas en la orden para satisfacer el pago de la pensión alimentaria para personas de edad avanzada, y de cualquier deuda por razón de pensiones vencidas y no pagadas. Estas cantidades serán determinadas al momento de emitirse la orden de retención. Esta orden no se emitirá separada de aquella que contenga la adjudicación, revisión o modificación del derecho del alimentista a la pensión o que adjudique cualquier otra controversia entre las partes, salvo que las partes lleguen por escrito a un acuerdo alterno mediante el cual se provea otra alternativa, o cuando el tribunal o el Administrador determine que existe justa causa para no notificar la orden de inmediata retención o el descuento en el origen de los ingresos del alimentante. En estos casos excepcionales, la orden de retención de ingresos no se notificará al patrono o pagador al momento de fijación o modificación de la pensión alimentaria para personas de edad avanzada, pero se apercibirá al alimentante que la misma será ejecutable en el momento que éste incurra en un atraso equivalente a un mes en el pago de pensión alimentaria para personas de edad avanzada. Cuando ocurra dicho incumplimiento, el Secretario del Tribunal o el Administrador procederá de conformidad con el procedimiento establecido en el inciso 1(b) de este Artículo.

Todas las órdenes de pensión alimentaria para envejecientes emitidas o modificadas deberán indicar al alimentante su obligación de informar constantemente al tribunal o al Administrador sobre cualquier cambio de patrono o pagador.

Las conclusiones de que existe justa causa para no ordenar la inmediata retención de ingresos deberán basarse en determinaciones o explicaciones escritas del tribunal o el Administrador, según sea el caso, en torno al motivo por el cual la expedición de una orden de retención de ingresos atentaría contra los mejores intereses de la persona de edad avanzada y en los casos que requieran una modificación de una pensión alimentaria para personas de edad avanzada, en la prueba de puntualidad en los pagos.

El formulario de Orden de Retención de Ingresos será preparado por el Administrador y, dentro de los treinta (30) días siguientes, será revisado por la Oficina de Administración de los Tribunales para ser usado por los tribunales y el Administrador.

(b) En los casos en los cuales no se hubiere notificado una orden de inmediata retención conforme al inciso anterior de este Artículo y un alimentante incurra en un atraso equivalente a un mes en el pago de la pensión alimentaria para personas de edad avanzada, el secretario del tribunal o el Administrador, según sea el caso, automáticamente notificará la orden al patrono o pagador del alimentante para la retención en el origen de su ingreso. Así también el tribunal o el Administrador, según sea el caso, emitirá la correspondiente orden de retención en el origen de ingresos del alimentante, si el alimentante voluntariamente solicita dicha retención, siempre que tenga menos de treinta (30) días de atraso en el pago de la pensión alimentaria para personas de edad avanzada o si el alimentista de edad avanzada lo solicita y se determina de conformidad con los procedimientos y estándares establecidos en los incisos (2) y (3) de este Artículo que dicha solicitud debe concederse.

(2) Cuando por cualquier motivo el Tribunal o el Administrador, según sea el caso, no hubiera emitido una orden de retención inmediata de ingresos al momento de fijación o modificación de la pensión alimentaria para personas de edad avanzada y el alimentante incurre en atraso en el pago de la pensión equivalente a un mes, el secretario del tribunal o el Administrador, por sí, sin necesidad de recurrir a intervención judicial o administrativa adicional o a solicitud de parte interesada, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al atraso equivalente a un mes de pensión alimentaria para personas de edad avanzada, expedirá y notificará la orden inmediata de retención de ingresos al patrono o pagador del alimentante, y la notificará al alimentante y al alimentista de edad avanzada, informando y apercibiendo al alimentante de lo que sigue:

(a) Su obligación de saldar la deuda, los términos de la orden de la pensión alimentaria para personas de edad avanzada y de la orden de retención inmediata, la cantidad total de los atrasos y las cantidades de los ingresos a ser retenidas por concepto de la pensión y por concepto de la deuda, así como para sufragar el costo de la retención que realice el patrono o pagador conforme se dispone en el inciso (9)(c) de este Artículo.

(b) El derecho que tiene a objetar la retención, no obstante las únicas defensas admisibles son los de errores de hecho; que no existe deuda o que las cantidades correspondientes a la deuda o a la pensión indicadas están equivocadas o que la persona no es el alimentante deudor.

(c) Las condiciones y términos del procedimiento para objetar la retención, conforme se dispone en el inciso (3) de este Artículo.

(d) Si existe deuda de pensión alimentaria para personas de edad avanzada, el Administrador o el secretario del tribunal automáticamente fijará una cantidad razonable para abonar a la misma. El Administrador o el secretario del tribunal podrá fijar hasta un máximo de treinta (30%) porciento de la cantidad establecida como pago de pensión alimentaria corriente para personas de edad avanzada como plan de pago para saldar la deuda.

(3)(a) Procedimiento para objetar la orden de retención.

La petición objetando la retención deberá radicarla en el tribunal o ante el Administrador, según sea el caso, dentro de un plazo de diez (10) días a partir de la notificación de la orden inmediata de retención de ingresos, previa notificación al alimentista de edad avanzada.

(b) El Tribunal o el Administrador, según sea el caso, considerará la petición objetando la orden de retención y notificará la resolución recaída a las partes dentro de los quince (15) días contados desde la radicación, en término, de la petición.

(c) El tribunal o el Administrador, según sea el caso, notificará la resolución y órdenes correspondientes al patrono o pagador, al alimentante y al alimentista de edad avanzada, dentro del plazo de quince (15) días dispuesto en el inciso (3b) de este Artículo. De proceder la objeción a la retención inmediata de ingresos, se ordenará la devolución de las cantidades pagadas en exceso según corresponda.

(4) Si el alimentante ha realizado pagos durante el tiempo en que se esté tramitando la orden de retención inmediata de ingresos, se le acreditarán y se ajustará la cuantía, pero ello no impedirá la ejecución de la orden de retención de ingresos.

(5) Cuando corresponda notificarle al patrono o pagador la orden de retención de ingresos en el origen, conforme se dispone en este Artículo, el secretario del tribunal o el Administrador, según sea el caso, notificará prontamente al patrono o pagador del alimentante deudor, y al alimentista de edad avanzada, la orden de retención de ingresos, señalándole su obligación de retener o descontar en el origen de los ingresos del alimentante, las cantidades señaladas en la orden para satisfacer el pago de la pensión y de cualquier deuda por razón de pensiones vencidas y no pagadas, e informándole además, y apercibiéndole, conforme se dispone en el inciso (9) de este Artículo. La notificación de la orden de retención de ingresos podrá realizarse por medios electrónicos. Cuando el patrono o pagador sea una agencia gubernamental cuyos fondos estén bajo la custodia del Secretario de Hacienda, el secretario del tribunal o el Administrador, según sea el caso, notificará la orden de retención a ambas agencias simultáneamente. La orden de retención contendrá los términos y condiciones de la retención que deberá efectuar, así como de sus responsabilidades bajo esta Ley, conforme se dispone en el inciso (9) de este Artículo. La notificación de la orden de retención y la certificación del monto de la deuda correspondiente serán notificadas al patrono o pagador, al alimentante y al alimentista de edad avanzada.

(a) La orden será efectiva desde su notificación y continuará en vigor mientras subsista la obligación de prestar alimentos o hasta que sea suspendida o dejada sin efecto, modificada o revocada por el tribunal o el Administrador, según sea el caso. El pago de la deuda por razón de atrasos en el pago de la pensión alimentaria para personas de edad avanzada no constituirá, por sí solo, base para dejar sin efecto o revocar la orden de retención de ingresos en el origen.

(b) En casos en que el alimentante cambie de patrono o haya un nuevo pagador, el secretario del tribunal o el Administrador, según sea el caso, inmediatamente que se le notifique del cambio, procederá conforme a lo dispuesto en el primer párrafo de este Artículo.

(c) La orden será válida y ejecutable, no obstante las disposiciones de la Ley Núm. 17 de 17 de abril de 1931, según enmendada.

(d) El patrono o pagador efectuará la retención y remitirá prontamente al Administrador las cantidades retenidas por concepto de pensión alimentaria para personas de edad avanzada dentro de los plazos señalados en el inciso diez (10) de este Artículo, las cuales serán remitidas al alimentista de edad avanzada dentro de un plazo de dos (2) días laborables, contados desde la fecha en que se recibieran.

(6) En ningún caso la cantidad a ser retenida del sueldo o salario del deudor alimentante para el pago de la pensión corriente de cada mes, para el pago de los atrasos, si los hubiere, y para sufragar el costo de la retención que realice el patrono o pagador, conforme se dispone en el inciso (9)(c) de este Artículo, podrá exceder de los límites dispuestos por la Sección 303(b) del Consumer Credit Protection Act, no obstante lo dispuesto en el Código de Enjuiciamiento Civil.

(7) Si existiera más de una notificación para la retención de ingresos en su origen con respecto a un mismo alimentante, el patrono o pagador depositará en la Administración el total de las cantidades reclamadas hasta los límites impuestos por la Sección 303(b) del Consumer Credit Protection Act, según apliquen al alimentante y conforme lo indique el tribunal o la Administración. El tribunal o la Administración, dentro de los límites mencionados, prorrateará las cantidades retenidas entre los alimentistas, pagando preferentemente las pensiones que correspondan a menores, las que correspondan a alimentistas de edad avanzada y las pensiones corrientes por sobre las pensiones atrasadas, hasta los límites impuestos por la Sección 303(b) del Consumer Credit Protection Act, no obstante lo dispuesto en el Código de Enjuiciamiento Civil.

(8) No se determinará responsabilidad contra el patrono o pagador por retener inadvertidamente cantidades en exceso de los límites dispuestos por la Sección 303(b) del Consumer Credit Protection Act , cuando para ello haya descansado la buena fe en los límites señalados bajo dicha sección por el Tribunal o el Administrador en su orden. El patrono o pagador, sin embargo, tiene la obligación de informar al Tribunal o a la Administración, según fuera el caso, cualesquiera excesos ordenados por el tribunal o la Administración.

(9) La notificación al patrono o pagador comprenderá los siguientes extremos:

(a) El nombre y número de seguro social del alimentante, así como cualquier otro número o dato para la identificación de éste, la cantidad a ser retenida del sueldo o salario mensual del deudor alimentante para el pago de la pensión corriente de cada mes;

(b) la cantidad a ser retenida para el pago de los atrasos, si los hubiera, y fecha en que cesará esta retención;

(c) la cantidad máxima que el pagador o patrono podrá retener del ingreso del alimentante para sufragar el costo de cada retención que realice, cuando y conforme lo determine el Administrador mediante reglamento;

(d) aviso de sus obligaciones y responsabilidades como patrono o pagador bajo esta Ley, así como los términos y procedimientos, conforme se dispone en los incisos (6) al (8) y (10) al (14) de este Artículo, respectivamente;

(e) aviso de su obligación como patrono o pagador de continuar haciendo las deducciones o retenciones hasta que se notifique lo contrario, y

(f) aviso de que deberá notificar al tribunal o a la Administración, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a la terminación de empleo de los alimentantes o a la terminación de la obligación de pagar al alimentante, la ocurrencia de este hecho en unión a la última dirección conocida de éste, así como también el nombre y dirección del nuevo patrono o pagador, de conocerlos.

(g) Cuando el alimentante termina su empleo, y es acreedor de cualesquiera cantidades por concepto de liquidación, el patrono o pagador deberá gestionar con el Administrador un Certificado de Estado de Cuenta. En el mismo se certificará cualquier atraso de más de (1) un mes sin pagar la pensión o el plan de pagos

establecido. De existir atrasos, se descontará de las cantidades a ser entregadas al alimentante por concepto de liquidación, aquélla que corresponda para pagar los atrasos y se le remitirá al Administrador.

(10) Todo patrono o pagador, presente o futuro, deberá honrar las órdenes de retención de ingreso emitidas por un tribunal competente o por el Administrador, según sea el caso, previa notificación al efecto. Constituye obligación del patrono o pagador efectuar la primera retención no más tarde de siete (7) días laborables después de la primera fecha en que la cantidad debió haber sido pagada o acreditada al empleado luego de recibir notificación del tribunal o el Administrador, así como también remitir las cantidades retenidas subsiguientemente para cada período de pago dentro de los siete (7) días laborables de la fecha en que se efectúa el pago al empleado a la Unidad Estatal de Recaudaciones del Programa o de la Administración, conforme lo dispuesto en el Artículo 29 de esta Ley.

Cuando el patrono o pagador sea una agencia gubernamental cuyos fondos estén bajo la custodia del Secretario del Departamento de Hacienda, la agencia en la cual presta servicios el alimentante deudor, vendrá obligada a procesar el aviso de cambio en nómina correspondiente, ante el Departamento de Hacienda, dentro de los cinco (5) días laborables siguientes a la fecha de recibo de la orden. El Departamento de Hacienda vendrá obligado a efectuar la retención de la suma dispuesta en la orden, en el próximo período de pago siguiente al recibo del aviso de cambio en nómina. Asimismo, el Departamento de Hacienda vendrá obligado a remitir las cantidades así retenidas a la Administración en la fecha de pago al alimentante deudor.

(11) El patrono o pagador podrá englobar en un solo cheque certificado o giro bancario todas las cantidades retenidas a todos los alimentantes por razón de esta Ley, debiendo en tal caso acompañarlo de una lista que contenga el nombre y número de seguro social de cada alimentante, el número del caso y sala del tribunal o de la Administración y las cantidades individuales retenidas a cada uno y la fecha de retención. El requisito de envío de las cantidades retenidas mediante cheque certificado o giro bancario no será de aplicación al Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas o municipios o a aquellos patronos o pagadores que paguen a través de transferencias bancarias electrónicas.

(12) La retención ordenada bajo esta Ley tiene prioridad sobre cualquier otra retención o reclamación contra el ingreso del mismo alimentante. No obstante lo dispuesto en los Artículos 1821 a 1825 del Código Civil de Puerto Rico, la retención de ingresos bajo esta Ley se efectuará sin sujeción a otros embargos o gravámenes, anteriores o posteriores, o a cualquier otra reclamación de otro acreedor, con excepción de otros casos de alimentos conforme se dispone en el inciso (7) de este Artículo, y tendrá preferencia sobre el pago de otras deudas, incluyendo aquellas por concepto de salarios y contribuciones. El pago remitido, según haya sido requerido por la orden de retención, constituirá una defensa por parte del pagador o patrono contra cualquier reclamación del deudor o acreedores de éste por la suma que haya sido pagada.

(13) Cuando un patrono o pagador dejare de retener o remitir el ingreso retenido conforme a una orden de retención, o no cumpliera con cualesquiera deberes impuestos por esta Ley, a solicitud del acreedor, el tribunal o el Administrador motu proprio, según sea el caso, previa notificación al patrono o pagador, y notificación para la celebración de vista, dictará sentencia u orden por el total de la cantidad que el pagador o patrono dejó de retener y remitir, más las multas, gastos e intereses que podrán imponer, y ordenará la ejecución de

ésta sobre la propiedad del patrono o pagador, excepto en el caso en que el patrono o pagador sea un municipio, departamento o agencia del Gobierno de Puerto Rico.

(14) Ningún patrono podrá reducir el salario, despedir, suspender, cambiar la categoría, rehusar emplear, imponer o intentar imponer condiciones onerosas de trabajo ni amenazar o de otro modo discriminar contra un empleado o un solicitante de empleo por haber autorizado una retención de salario, comisión u otro ingreso para el pago de pensiones alimentaria para personas de edad avanzada, o por haber sido requerido por orden del tribunal o el Administrador, según sea el caso, a hacer tal retención.

Toda información recibida por el patrono del tribunal o del Administrador, en conexión con el pago de pensiones alimentarias, será considerada de índole confidencial. El patrono no revelará ninguna información sobre pensiones alimentarias a pagar por sus empleados a persona alguna, salvo que sea estrictamente necesario para cumplir cabalmente con las disposiciones impuestas por esta Ley.

Cualquier patrono o pagador que incurra en la conducta prescrita en este inciso será responsable civilmente del pago de una suma igual al doble del importe de los daños que su acto haya causado al empleado o solicitante de empleo. El empleado tendrá derecho a la reinstalación en su empleo, en caso de despido, suspensión o cambio de categoría, y a que el patrono cese en su conducta, más las costas y honorarios del abogado. El solicitante de empleo tendrá derecho a que se le instale en el empleo en cuestión o uno de igual categoría y a las costas y honorarios de abogado.

El Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos podrá representar a los empleados y a los solicitantes del empleo ante los tribunales para determinar si la actuación del patrono constituye una violación a esta Ley y para hacer efectivos los derechos de éstos.

Artículo 34.—Embargo de bienes.

(1) Los pagos de pensión alimentaria para personas de edad avanzada, incluyendo cualesquiera penalidades, tarifas o costas relacionadas, en atraso por más de treinta (30) días constituyen un gravamen por el monto de la deuda sobre todos los ingresos activos, bienes muebles e inmuebles del alimentante. Tal gravamen surge como cuestión de derecho, no obstante cualquier legislación en contrario. El aseguramiento de efectividad mediante los correspondientes embargos no requerirá notificación judicial previa o vista.

Cualquier tribunal, el Administrador o Juez Administrativo con competencia sobre asuntos referentes a pensiones alimentarias para personas de edad avanzada, a petición del alimentista o a su discreción concederá mediante orden, bajo las Reglas de Procedimiento Civil y de esta Ley, un embargo, el embargo de fondos en posesión de un tercero, la reclamación y entrega de bienes muebles, el embargo de los ingresos de cualesquiera fuentes de un alimentante, el embargo de bienes muebles o inmuebles, y cualquier otra medida apropiada para asegurar el pago de pensiones alimentarias para personas de edad avanzada atrasadas. El gravamen se establecerá y notificará simultáneamente al alimentante concediéndole un término no menor de diez (10) días para objetarlo y apercibiéndole de su derecho a vista informal, siempre que el alimentante no tuviese derecho a notificación previa. Si el alimentante no objeta la orden de embargo dentro del término expresado o se declara sin lugar su objeción, la orden de embargo advendrá final y firme y ejecutable.

Cuando se gestiona el embargo después de una determinación de deuda por razón de atrasos, procederá el embargo mediante moción ex parte y sin la prestación de una fianza por parte del alimentista de edad avanzada o del Administrador, según sea el caso, conforme disponen las Reglas de Procedimiento Civil y esta Ley. La orden ex parte será efectiva al notificarse.

(2) El pago del total de la cantidad especificada en la notificación de atrasos que se haya enviado al alimentante deudor por el Registro Estatal de Casos de Pensiones Alimentarias para Personas de Edad Avanzada del Programa tendrá el efecto de paralizar el diligenciamiento de la orden de embargo.

(3) Un mero error de cómputo en la determinación de los atrasos en una orden de embargo y el pago de la cantidad señalada, si menor a la verdadera, no tendrá el efecto de satisfacer la deuda existente en su totalidad. Si el cómputo erróneo fue certificado por el Programa y la cantidad embargada fuera mayor que la adeudada, no se impondrá responsabilidad alguna al alimentista de edad avanzada acreedor, al Administrador de los tribunales o a funcionario alguno del Tribunal General de Justicia ni la Administración, o cualquier funcionario de dichas entidades. La Administración procederá de inmediato a devolver las cantidades que tenga en su poder y, de ser necesario, emitirá una orden al alimentista de edad avanzada para que deposite en la Administración cualquier dinero recibido en exceso de lo debido. La Administración, cuando corresponda, procederá a remitir el exceso depositado al alimentante.

(4) La orden de embargo podrá ser diligenciada por el alimentista de edad avanzada, o su representante legal, u otra persona particular.

(5) Cualquier embargo bajo esta Ley se efectuará, sin sujeción a otros embargos o gravámenes y a lo dispuesto en los Artículos 1821 a 1825 del Código Civil de Puerto Rico, con excepción de los gravámenes hipotecarios anteriores; y tendrá preferencia sobre el pago de otras deudas incluyendo aquellas por concepto de salarios y contribuciones. El pago remitido, según haya sido requerido por la orden de embargo constituirá una defensa por parte del pagador o patrono contra cualquier reclamación del deudor o de acreedores de éste por la suma que haya sido pagada.

(6) Todas las personas o entidades que cumplan con cualquier notificación u orden de embargo emitida a tenor con este Artículo tendrán inmunidad absoluta de responsabilidad civil o criminal, respecto al cumplimiento con los términos de dicha notificación u orden.

Artículo 35.—Retención de reintegros de contribuciones estatales.

(1) El Administrador remitirá al alimentante deudor una notificación sobre la intención de referir su nombre al Secretario de Hacienda a fin de que retenga su reintegro contributivo para el pago de la deuda de pensión alimentaria para personas de edad avanzada.

En la notificación al deudor se le indicará:

(a) Los términos de la orden de la pensión alimentaria para personas de edad avanzada y la cantidad total de atrasos, según certificados por el Administrador;

(b) el derecho que tiene a objetar la retención de cualesquiera reintegros;

(c) el término de diez (10) días, contados a partir de la fecha de la notificación de la solicitud para oponerse al referido;

(d) que sólo podrá someter evidencia sobre errores de hecho en relación con la existencia de la deuda, la cantidad de la deuda, así como que no es el alimentante deudor, y

(e) que de no presentar objeción a la retención de los reintegros dentro del término de diez (10) días de habérsele notificado, se referirá su nombre al Secretario de Hacienda a fin de que retenga su reintegro contributivo para el pago de la deuda de pensión alimentaria para personas de edad avanzada.

Una notificación de este referido que contenga la información indicada en las cláusulas (a) al (e) de este inciso también será enviada al alimentista de edad avanzada.

En caso de que el alimentante deudor presente oportunamente su objeción a la retención, el Administrador considerará la objeción dentro de los diez (10) días de haberla recibido.

El Administrador considerará cualquier objeción a la intención de retener el reintegro contributivo y efectuará una revisión de las objeciones. Ambas partes serán notificadas de la determinación que se emita dentro de los quince (15) días contados desde la radicación, dentro del término, de la objeción. En caso de que proceda la retención, el Administrador inmediatamente informará del caso al Secretario de Hacienda

para que retenga aquellas cantidades en su poder por concepto de reintegros contributivos pertenecientes al alimentante deudor. El Secretario de Hacienda retendrá y enviará a la Administración las cantidades a tenor con este Artículo.

(2) El Secretario de Hacienda remitirá, de tener el reintegro aún en su poder, la totalidad del reintegro por contribuciones si es igual o es una cantidad menor que la ordenada; o sólo la cantidad ordenada, si el reintegro por contribuciones fuera mayor, al Administrador. El Secretario de Hacienda notificará, igualmente, la dirección residencial y el o los números de seguro social del alimentante así, como si éste tiene tuviera una deuda contributiva.

En caso de no tener en su posesión reintegro alguno del alimentante al momento de recibir la solicitud del Administrador, el Secretario de Hacienda así lo informará al Administrador.

En estos casos la solicitud del Administrador de retención de reintegro contributivo permanecerá vigente por un término de tres (3) años o hasta que se produzcan reintegros a nombre del alimentante que satisfagan la deuda de la pensión alimentaria para personas de edad avanzada o hasta que el Administrador solicite que sea dejada sin efecto, lo que ocurra primero, en estos casos el Administrador vendrá obligado a actualizar por lo menos anualmente la información referida al Secretario de Hacienda.

La retención de los reintegros contributivos bajo esta Ley tendrá preferencia sobre cualquier otra reclamación sobre los mismos dineros, incluyendo deudas por concepto de contribuciones, no obstante disposiciones al contrario en otras leyes. Por consiguiente, en los casos en que esté vigente una orden de retención de reintegros contributivos, no se permitirá la aplicación del reintegro al pago de otras deudas contributivas del alimentante hasta que sea satisfecho en su totalidad la deuda por concepto de pensiones alimentarias atrasadas.

(3) El Administrador, antes de entregar al acreedor alimentista de edad avanzada la cantidad remitida por el Secretario de Hacienda, verificará el monto de la deuda en ese momento por si hubiese habido algún pago del alimentante y, de haberse ésta reducido o saldado, retendrá la parte sobrante del reintegro recibido o la totalidad, según sea el caso, y remitirá al alimentante la diferencia, si no existe deuda contributiva del alimentante, luego de pagar lo que proceda al alimentista de edad avanzada y notificar al Secretario de Hacienda.

(4) Si la cantidad remitida por el Secretario de Hacienda al Administrador por concepto de reintegros de contribuciones excede la cantidad de la deuda por concepto de atrasos y no procede retener el exceso, el Administrador enviará prontamente al alimentante las cantidades sobrantes. Si existe deuda contributiva del alimentante, el Administrador remitirá dicho exceso al Secretario de Hacienda.

(5) El Administrador podrá disponer por reglamento, con la aprobación del Secretario, la cantidad a cobrar como honorarios a los alimentistas de edad avanzada que no cualifican para asistencia económica, por razón del servicio ofrecido para la retención de reintegros contributivos.

(6) En los casos en que el alimentista de edad avanzada no cualifique para asistencia económica bajo la categoría de Asistencia Temporal, pero ha sido anteriormente beneficiario de dicho Programa, el Administrador deberá informar al alimentista de edad avanzada la totalidad del reintegro que retendrá para cobrar cualquier asistencia económica adelantada y no recobrada.

El Administrador, con la aprobación del Secretario, establecerá mediante reglamento los procedimientos para la retención de reintegros contributivos estatales.

Artículo 36.—Fianza o garantía.

El acreedor alimentista de edad avanzada, en los casos donde el alimentante haya incurrido en mora en el pago de pensión alimentaria en uno o más ocasiones, conforme dispone la Regla 69 de Procedimiento Civil, podrá solicitar al tribunal o al Administrador que ordene al alimentante, o el tribunal o Administrador motu proprio, previa notificación concediéndole diez (10) días para objetar la misma, ordenará que deposite una suma de dinero suficiente, o presente una fianza u otra garantía de pago determinada por el tribunal o el Administrador para asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria.

En los casos en que se solicite el depósito de una fianza, o suma de dinero u otra garantía de pago por razón de que existan indicios de que el alimentante contempla dejar la jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico, el tribunal o el Administrador ordenará prontamente que el alimentante cumpla con el depósito ordenado.

El alimentante será notificado de cualquier petición que solicite la ejecución de la garantía de pago o de la fianza prestada, según determinada por el tribunal o el Administrador. Se le apercibirá de su derecho a oponerse a la ejecución de la garantía o al cobro de la fianza prestada.

La presentación por el deudor alimentante ante el secretario del tribunal o el Administrador de una petición jurada de suspensión dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la notificación de la petición de ejecución, paralizará la ejecución de cualquier garantía o fianza. Solamente se admitirán como defensa errores de hecho: sobre la existencia o cantidad de la deuda, la cantidad a ser ejecutada o la identificación del deudor alimentante. Dicha petición deberá ser considerada por el tribunal o Administrador y notificada la resolución recaída dentro de los diez (10) días siguientes a su radicación. De proceder, se ordenará la ejecución de la fianza o el cobro de los dineros dados en garantía.

Artículo 37.—Información sobre deudas del alimentante.

(1) A los fines de este Artículo, "agencias de información sobre crédito del consumidor" significará cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, que mediante el cobro de honorarios u otra forma de pago, o mediante acuerdos cooperativos de trabajos sin fines de lucro se dedique regularmente, en todo o en parte, a la práctica de recopilar o evaluar información sobre el crédito u otra información sobre los consumidores con el propósito de preparar y proveer evaluaciones sobre consumidores a terceras personas.

(2) Cualquier agencia de información sobre crédito del consumidor que satisfaga los criterios del inciso (1) de este Artículo, podrá solicitar al Administrador que certifique información sobre deuda por atrasos de personas que estén obligadas a pagar pensiones alimentarias para personas de edad avanzada. El Administrador, por sí, podrá informar a la agencia de crédito, previa notificación al alimentante, de su intención de informar sobre la deuda de pensión alimentaria para personas de edad avanzada atrasada.

(3) Cuando el solicitante cumpla con los requisitos señalados anteriormente, y el alimentante en cuestión adeude más de un mes por razón de atrasos en el pago de pensiones alimentarias para personas de edad avanzada, el Administrador notificará al alimentante de la solicitud o la intención de informar la deuda por concepto de atrasos. Se le apercibirá de su derecho a objetar el informe, a presentar la evidencia que estime necesaria para refutarlo o satisfacer la deuda existente. Igualmente se le informará que tiene diez (10) días, contados a partir de la fecha en que se notificó la intención de informar, para objetar o para satisfacer la deuda. Sólo podrá oponer como defensa la inexactitud de las cantidades envueltas o la inexistencia de la deuda y si es o no el alimentante deudor. Si el alimentante está en mora adeudando pensión alimentaria y ha transcurrido el término de diez (10) días de haber sido notificado de que se le podría informar a la agencia de información de crédito, el Administrador deberá informar a las agencias de información de crédito y hacer disponible la información sobre la deuda por concepto de atrasos a la agencia que así lo solicite, salvo que el alimentante satisfaga la deuda en su totalidad o se acoja a un plan de pago y cumpla fielmente con el mismo. El deudor queda apercibido que de incumplir con el plan de pago establecido se informará la deuda a la agencia de crédito, sin necesidad de notificación adicional.

Si el alimentante objetara la notificación de la información de la deuda por el Administrador, el Administrador evaluará las alegaciones y la evidencia presentada por el alimentante y determinará si procede o no proveer dicha información a la agencia de información de crédito. Notificará, además, al alimentante deudor sobre su determinación.

(4) El Administrador utilizará las disposiciones de este Artículo, de tal manera que todos los alimentantes en el Registro Estatal de Pensiones Alimentarias para Personas de Edad Avanzada que satisfagan los criterios establecidos en el inciso (3) de este Artículo salvaguardándoles su derecho a objetar,

serán reportados trimestralmente a todas las agencias de información de crédito que realizan negocios en Puerto Rico, definidas en el inciso (1) de este Artículo. Los informes deberán incluir, como mínimo, el nombre y número de Seguro Social del alimentante, y la cantidad de pensión alimentaria para personas de edad avanzada adeudada, y serán actualizados trimestralmente.

(5) Siempre que sea pertinente para establecer, modificar o hacer efectiva una obligación alimentaria para personas de edad avanzada, y si la información no está disponible de otra forma, la Administración solicitará un informe de crédito del alimentante de conformidad con la sección 604 del Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C. §§ 1681 (b)(4) y (5)).

Artículo 38.—Medidas adicionales.

(1) Será condición para obtener o mantener una licencia, permiso, endoso o privilegio ocupacional, profesional o de otro tipo, tales como la licencia de conducir vehículos de motor, licencia ocupacional o profesional, licencia del tiro al blanco, licencia para la venta de artículos, licencia de portar armas, contratación y empleo con el Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades públicas, o municipios, que la persona obligada a satisfacer una pensión alimentaria para personas de edad avanzada esté al día o ejecute y satisfaga un plan de pagos al efecto, y que no haya incumplido con las órdenes, citaciones, requerimientos, resoluciones o sentencias de un tribunal o el Administrador en virtud de esta Ley. Las agencias gubernamentales, o municipales encargadas de otorgar endosos, patentes municipales, permisos o licencias, o con la facultad de contratar en cualquier forma con personas naturales, tendrán treinta (30) días a partir de aprobada esta Ley para incorporar esta disposición en los reglamentos aplicables bajo su jurisdicción y establecer como sanción al incumplimiento de la misma la negación o suspensión o cancelación de cualquier licencia, permiso, endoso, patente municipal o privilegio ocupacional o profesional o de otro tipo.

(2) Además de las medidas autorizadas en esta Ley, en aquellos casos en que el Programa haya hecho gestiones razonables de cobro de la pensión alimentaria para personas de edad avanzada, según lo establezca el Reglamento del Programa, para hacer que el alimentante deudor cumpla con su obligación de prestar alimentos, el Administrador podrá notificar al alimentante deudor sobre su intención de solicitar ante la agencia administrativa o municipio correspondiente la suspensión de cualquier permiso, licencia, endoso o privilegio ocupacional, profesional, o de otro tipo, tales como la licencia de conducir vehículos de motor, licencia ocupacional o profesional, licencia de tiro al blanco, licencia para la venta de artículos, licencia de portar armas, contratación y empleo con el Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades públicas y municipios, por el incumplimiento de la obligación de prestar alimentos.

Se apercibirá al alimentante deudor sobre su derecho a objetar la suspensión, pero las únicas defensas admisibles serán las de errores de hecho: que no existe deuda o que las cantidades correspondientes a la deuda o a la pensión señaladas están equivocadas o que no es el alimentante deudor.

El alimentante deudor tendrá diez (10) días para objetar la intención de ordenar la suspensión. Si el deudor satisface la deuda totalmente o ejecuta y satisface un plan de pagos dentro de ese período, el Administrador estará impedido de solicitar al organismo regulador la suspensión de las licencias, permisos o privilegios que se enumeran en este Artículo.

Si el deudor no satisface la deuda totalmente o si no ejecuta y satisface un plan de pagos, el Administrador hará determinaciones de hechos y conclusiones de derecho y notificará las mismas al alimentante y a la agencia reguladora correspondiente, que procederá con la suspensión de la licencia dentro de un término no mayor de treinta (30) días.

(3) El Administrador notificará al alimentante deudor la intención de ordenar la publicación de fotografías e información sobre el alimentante deudor, incluyendo la deuda acumulada, características físicas y cualquier otra información que permita su identificación, en periódicos de circulación general en Puerto Rico, así como en otros medios de difusión pública, incluyendo la red informática Internet, apercibiéndole de su derecho a objetar; pero las únicas defensas admisibles para efectos de que el

Administrador considere la objeción son las de errores de hecho, que no existe deuda o las cantidades correspondientes a la deuda o a la pensión señaladas están equivocadas o que no es el alimentante deudor.

El alimentante deudor tendrá diez (10) días para objetar la intención de ordenar la publicación. Si el deudor satisface la deuda totalmente o se compromete y satisface un plan de pagos, el Administrador estará impedido de ordenar la publicación.

Las anteriores medidas estarán disponibles cuando se hayan agotado todos los mecanismos para hacer efectivas las pensiones alimentarias que estén contemplados en los Artículos 33 a 37 de esta Ley.

(4) En caso de que el alimentante deudor pretenda evadir la jurisdicción del Administrador, porque rehúse ser notificado, rehúse cumplir con el requerimiento de pruebas o documentos o no comparezca a las vistas o reuniones a que sea citado, o evada la jurisdicción trasladándose a residir en otro estado, el Administrador podrá solicitar al tribunal que le imponga desacato y emita una orden de arresto en ausencia.

Artículo 39.—Otros remedios.

Los remedios provistos en esta Ley son adicionales a los existentes que no sean incompatibles con ellos.

El procedimiento ante el tribunal de desacato, civil o criminal, con la resultante reclusión carcelaria del alimentante o el alimentista de edad avanzada que incumpla con sus obligaciones o las órdenes emitidas por el tribunal o el Administrador, que sea hallado incurso en desacato, se incorpora a esta Ley como medida efectiva para hacer valer las disposiciones legales.

Toda moción para solicitar orden de desacato por incumplimiento de pensiones alimentarias se señalará, diligenciará, resolverá y notificará por escrito dentro de un término no mayor de veinte (20) días siguientes a su presentación.

La notificación requerida para realizar estos remedios puede realizarse en forma individual o general indicándole al alimentante la deuda existente y la intención del Administrador de iniciar todos los remedios que provee la ley.

Artículo 40.—Penalidades; multas administrativas.

Cualquier violación de esta Ley o de los reglamentos adoptados a su amparo para la cual no se haya provisto penalidad expresa, constituirá delito menos grave y será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses o multa que no excederá de quinientos (500) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal. El tribunal, además, retendrá la autoridad de imponer desacato civil o criminal por el incumplimiento de las órdenes del tribunal o del Administrador o el Juez Administrativo.

El Administrador o el Juez Administrativo podrá imponer multas de hasta un máximo de cinco mil (5,000) dólares, compensaciones, intereses, recargos, gastos, costas, honorarios, penalidades o hasta tres (3) meses de servicios comunitarios por violación de las disposiciones de esta Ley, las leyes que administra la Administración o los reglamentos u órdenes emitidas por el Administrador o el Juez Administrativo, y mediante solicitud al tribunal desacato, civil o criminal.

Artículo 41.—Disposiciones Presupuestarias

Se asigna al Programa, con cargo a fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, la suma de quinientos mil (2,500,000) dólares para las operaciones del Programa para el año fiscal 2000-2001.

Artículo 42.—Esta Ley entrará en vigor el 1 de julio de 2000, a los efectos de que se comienze la redacción y adopción de todas las reglas, reglamentos, normas y guías que sean necesarias para la organización y funcionamiento del Programa. En lo relativo a la prestación de servicios al público, incluyendo la fijación y modificación de pensiones alimentarias, el proceso comenzará no antes del 1 de julio de 2001."

**"INFORME CONJUNTO**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; de Salud y Bienestar Social; y de Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del P. de la C. 2969, recomiendan a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas;

**En la Exposición de Motivos:**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 2 | eliminar "ley" e insertar "Ley' |
| Página 1, línea 5 | eliminar "ley" e insertar "Ley' |
| Página 1, línea 6 | eliminar "ley" e insertar "Ley' |
| Página 2, línea 9 | eliminar "a menudo careciendo" e insertar "Segundo, carecen" |

**En el Texto Decretativo:**

| | |
|---|---|
| Página 5, líneas 15 y 16 | eliminar desde "todos los de los" hasta "Islas Vírgenes Estadounidenses" e insertar lo siguiente; "los estados libre asociado de Puerto Rico, Islas de las Marianas del Norte, Kentucky, Virginia, Pensylvania y Massachusetts, los demás estados de los Estados Unidos de América, y los territorios de las Islas Vírgenes Estadounidenses, Guam, Samoa Americana, el Distrito de Columbia" |
| Página 6, línea 4 | después de "personales," insertar lo siguiente; "excluyendo dietas o reembolsos por gastos presumiblemente incurridos," |
| Página 11, línea 11 | después de "Artículo 4.-Deberes recíprocos" insertar y "Limitaciones a deberes recíprocos" |
| Página 11, línea 12 | antes de "Los padres" insertar "a." |
| Página 11, después de línea 21 | insertar el siguiente texto: "b. La determinación de una suma "justa y razonable", referida en el Artículo 4 de esta Ley, comprenderá, de ser así solicitado por todos los descendientes o personas responsables de alimentar, consideraciones objetivas sobre la prudencia y razonabilidad en el manejo de los asuntos financieros del alimentista de edad avanzada, durante un periódo no mayor de treinta y seis (36) meses, contándose retroactivamente de la fecha de la solicitud de servicios hecha por, o a favor de, el alimentista de edad avanzada. Cónsono con los procedimientos establecidos por esta Ley, el tribunal o el Administrador tomarán este aspecto en consideración al momento de llegar a determinar el monto, si alguno, de una pensión alimentaria para envejecientes." |
| Página 13, línea 23 | después de "aplicables" insertar punto "." |
| Página 15, línea 14 | eliminar "Avanda" e insertar "Avanzada" |
| Página 16, línea 14 | eliminar "peronas" e insertar "personas" |

Página 77, línea 10 después de "treinta" insertar "por ciento" y después de "(30%)" eliminar "por ciento"

Página 98, línea 22 eliminar "(2,500,000)" e insertar "(500,000)"

## ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito del P. de la C. 2969 es establecer el Programa para el Sustento de Personas de Edad Avanzada, adscrito a la Administración para el Sustento de Menores; establecer mecanismos administrativos y judiciales para que personas de edad avanzada con necesidad de alimentos de sus descendientes puedan utilizar dichos mecanismos para facilitar la localización de alimentantes, el establecer el monto de pensiones alimentarias para personas de edad avanzada; el cobro y distribución de las mismas y procedimientos y remedios especiales con el fin de llevar a cabo los propósitos de esta Ley; para establecer metodología de utilización de recursos ya existentes dentro del Gobierno de Puerto Rico y proveer fondos para estos propósitos.

El Artículo 143 del Código Civil, establece una obligación recíproca de proveer alimentos de ascendientes para descendientes y vice versa. Los padres pueden exigir pensiones alimentarias de sus descendientes, en la medida que haya necesidad por parte del ascendiente, y capacidad financiera de parte de sus descendientes. El derecho de una persona de edad avanzada para exigir una pensión alimentaria a sus descendientes es prácticamente desconocido en Puerto Rico. En tiempos recientes, pocas solicitudes de pensión alimentaria de ese tipo han sido atendidas por los tribunales. No se puede concluir, sin embargo, que la inexistencia de peticiones de pensiones alimentarias para beneficio de personas de edad avanzada significa que no exista su necesidad.

Se expresa en la medida que hay un grave problema de incumplimiento de la obligación alimentaria para personas de edad avanzada por lo que se hace necesario poner en vigor una política pública de responsabilidad mutua. Muchas de estas personas de edad avanzada ignoran el derecho existente en ley, a menudo careciendo de recursos económicos para obtener representación legal y exigir dichas pensiones alimentarias. En Puerto Rico no existe un mecanismo administrativo como el existente a través de ASUME, que facilite la labor de lograr la determinación, recaudación y distribución de las pensiones alimentarias para personas de edad avanzada. Es por esta razón que mediante esta medida se establece un sistema paralelo al de ASUME, implementado y administrado por éste, con el propósito de que se atienda el sustento de persona de edad avanzada.

Para el estudio de esta medida se tomaron en consideración las ponencias sometidas ante la Comisión de lo Jurídico Civil de la Cámara de Representantes y el informe presentado por ésta. Además las comisiones que suscriben celebraron audiencia pública el día 26 de abril de 2000, a la cual comparecieron el Departamento de Justicia, representado por la Lcda. Perla Iris Rivera; la Oficina de Gerencia y Presupuesto, representados por la Lcda. Belia Ocasio; el Departamento de la Familia, representado por el Sr. Andrés Díaz; ASUME, representado por la Lcda. Olga Hernández; la Administración de los Tribunales, representada por la Lcda. Aida Juarbe Meléndez; y la Administración de Familias y Niños, representada por el Sr. Eddie García Fuentes, Director Programa de Servicios a Adultos

El Departamento de la Familia indicó estar a favor de la medida e hicieron recomendaciones, además expresaron lo siguiente;

> "Entendemos que la creación del programa para el Sustento de Envejecientes es una medida de avanzada que pretende responder a los problemas que estamos enfrentando al comenzar el nuevo milenio...El deber del Estado es proteger a los ciudadanos desvalidos, que dependen de otras personas para algunas o todas sus actividades del diario vivir. Nuestros ancianos, al igual que nuestros niños, son un nutrido grupo importante en nuestra

> sociedad...La presente medida tiene la importancia de habilitar un mecanismo para que las personas de edad avanzada puedan reclamar su derecho a pensión alimentaria en el Programa a crearse. También hace posible lo dispuesto por la ley Núm. 32 de 29 de mayo de 1984, Artículo 26, en cuato a que el Departamento pueda incoar acciones administrativas y judiciales contra los obligados a alimentar para reclamar por los servicios prestados y pagados por esta Agencia a esas personas de edad avanzada La política pública exporesada en la Exposición de Motivos del presente proyecto, establece las bases para la creación del Programa de Sustento de Envejecientes, lo cual coincide con lo dispuesto en el Plan de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 1995, que redenominó a esta Agencia como Departamento de la Familia."

La Oficina para los Asuntos de la Vejez Oficina del Gobernador; y la Administración Para el Sustento de Menores indicaron no tener objeción a la medida sujeto a recomendaciones hechas. La Administración de los Tribunales expresó sus dudas en relación a la medida. El Departamento de Justicia, indicó no tener objeción legal a la medida.

Además se invitó a la audiencia pública a la Asociación de Pensionado, quienes sometieron sus comentarios por escrito en los que expresan estar de acuerdo en principio con la medida y endosan la misma ya que consideran que este Proyecto habrá de crear conciencia sobre la responsabilidad de los hijos en atender las necesidades de sus padres.

El Sr. Bordanada fue citado también a la audiencia pública, en representación de AARP, quien indicó que sometería comentarios por escrito pero a la fecha de aprobación de esta medida no se había recibido ningún documento al respecto en la Comisión.

En años recientes, se ha reconocido la necesidad de garantizar a las personas de edad avanzada la vigencia de los derechos que le otorgan las leyes y la Constitución de Puerto Rico. De igual manera se ha reconocido el derecho de los envejecientes de vivir en un ambiente de dignidad libre de presiones, coaciones o manipulaciones por parte de familiares, personas particulares, o por parte del Estado. Por lo que reconociendo esta necesidad de garantizar éstos derechos se ha legislado al respecto através de leyes tales como, la Ley Núm. 121 de 12 de julio de 1986 la cual estableció la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico, la Ley Núm. 23 de 4 de febrero de 1995, la Ley Núm. 32 de 9 de mayo de 1984, la cual estableció la Ley para el Sustento de Ancianos, entre otras leyes que reconocen la importancia de proteger a estos ciudadanos que durante su vida productiva se sacrificaron por el bienestar de sus hijos.

Este Programa para el Sustento de Envejecientes, proveerá a los solicitantes elegibles los servicios de localización de los alimentistas responsables, determinará la necesidad alimentaria de las personas de edad avanzada y la capacidad alimentaria de los alimentistas correspondientes, sujeto a limitaciones en cuanto a deberes recíprocos en cuanto a la determinación de lo que se considerará una suma "justa y razonable". Esto considerando la prudencia y razonabilidad en el manejo de los asuntos financieros del alimantistas de edad avanzada.

De esta manera se reconoce la importancia de buscar un mecanismo probado, como es el de ASUME, poderoso y eficiente para que esas personas de edad avanzada, que así lo necesiten, puedan valerse por sí mismas. Los miembros de las comisiones que suscriben consideran que es apremiante atender las necesidades particulares de las personas de edad avanzada y entienden que es importante garantizar los mejores intereses de éstos, proveyendo medidas, que como ésta, promuevan la mayor estabilidad y el bienestar físico y emocional de éstos.

En reunión ejecutiva celebrada luego de estudiar la medida y la información disponible los miembros de las comisiones que suscriben recomiendan la aprobación del P. de la C. 2969 con las enmiendas sugeridas.

Respetuosamente Sometido,

Fdo.
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales

Fdo.
Norma Carranza
Presidenta
Comisión de Salud y Bienestar Social

Fdo.
Roger Iglesias
Presidente
Comisión de Hacienda"

---

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2927, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, con enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para ordenar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, luego de la celebración de la vista pública provista por la Ley Núm. 133 del 1 de julio de 1975, conocida como "Ley de Bosques de Puerto Rico" a proclamar los manglares en la Playa de la Sardinera, en el Municipio de Hatillo como Bosque Estatal.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

En la porción de la playa arenosa al oeste de Punta Maracayo, en el Municipio de Hatillo, es en donde se identifica el manglar, el cual está asociado a ciénagas estuarinas. Es necesario hacer un deslinde de la zona marítimo terrestre perteneciente a dicho manglar debido a que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales entiende que el manglar y las ciénagas estuarinas son terrenos mareales que se extienden en un patrón horizontal desde la Playa Sardinera hasta el sur de Punta Maracayo.

La Resolución de la Cámara 1845 aprobada el 27 de octubre de 1997 ordenó a la Comisión de Recursos Naturales y Calidad Ambiental de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre las circunstancias que están afectando el desarrollo y la conservación de los manglares de Hatillo. Es de honda preocupación que la eliminación total de este mangle creará, entre otras cosas, áreas estériles y desérticas a toda la vida silvestre en dicho sector y la erosión de terrenos aledaños, en detrimento de los beneficios del manglar al ambiente, la estética y la vida en general.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ha identificado afecciones e impactos negativos ambientales al referido recurso, lo que demuestra la necesidad de la protección del recurso mediante la proclama de éste como Bosque Estatal, lo que propiciará rehabilitación de la zona.

Es necesario evaluar y determinar las actividades antropogénicas que afectan el equilibrio ecológico del manglar y tomar medidas correctivas para conservar el mismo. Hay que evitar la destrucción progresiva del manglar para el disfrute de los beneficios inherentes del mismo para ésta y futuras generaciones.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se ordena al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, luego de la celebración de la vista pública provista por la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975,conocida como "Ley de Bosques de Puerto Rico" a proclamar los manglares en la Playa de la Sardinera, en el municipio de Hatillo como Bosque Estatal.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales establecerá un acuerdo de comanejo con el Municipio de Hatillo, entidades gubernamentales y con organizaciones privadas sin fines de lucro para la preparación del Plan de Manejo.

Sección 2.-Se ordena a la Junta de Planificación a zonificar estos terrenos bajo el Distrito B-2 o bosque de mangle.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO:**

Vuestra Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, luego del estudio y análisis de la R.C. de la C. 2927, tiene el honor de recomendar su aprobación con las siguiente enmienda.

**En El Texto:**
Página 2, línea 6, tachar "comanejo" y sustituir "co-manejo"

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

La R.C. de la C. 2927 tiene como propósito ordenar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, luego de la celebración de la vista pública provista por la Ley Núm. 133 del 1 de julio de 1975, conocida como " Ley de Bosques de Puerto Rico" a proclamar los manglares en la Playa de la Sardinera, en el Municipio de Hatillo como Bosque Estatal.

Como bien expresa la Exposición de Motivos de la presente pieza legislativa, en la porción de la playa arenosa al oeste de Punta Maracayo, en el Municipio de Hatillo, es en donde se identifica el manglar, el cual está asociado a ciénagas estuarinas. Es necesario hacer un deslinde de la zona marítimo terrestre perteneciente a dicho manglar debido a que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales entiende que el manglar y las ciénagas estuarinas son terrenos mareales que se extienden en un partrón hoirzontal desde la Playa Sardinera hasta el sur de Punta Maracayo.

La Resolución de la Cámara 1845 aprobada el 27 de octubre de 1997 ordenó a la Comisión de Recursos Naturales y Calidad Ambiental de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre las circunstancias que están afectando el desarrollo y la conservación de los manglares de Hatillo. Es de honda preocupación que la eliminación total de este mangle creará, entre otras cosas, áreas estériles y desérticas a toda la vida silvestre en dicho sector y la erosión de terrenos aledaños, en detrimento de los beneficios del manglar al ambiente, la estética y la vida en general.

La Comisión de Recursos Naturales y Calidad Ambiental de la Cámara de Representantes, presentó la R. C. de la C. 2927 en vista pública el martes, 21 de marzo de 2000 y los siguientes presentaron ponencias: Gobierno Municipal de Hatillo, Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

**GOBIERNO MUNICIPAL DE HATILLO**

El Alcalde de Hatillo, Hon. Juan Luis Cuevas, informó lo siguiente a la Comisión:

- La Administración Municipal no tiene objeción a la que antes mencionada propiedad se proclame como Bosque Estatal, siempre y cuando el Municipio de Hatillo, Puerto Rico no pierda el título de propiedad de los manglares que actualmente pertenecen al mismo. Es decir, que sigan siendo propiedad municipal.
- Que fue con mucho sacrifico que este Municipio logró adquirir esta propiedad y es obligación hacer el máximo esfuerzo para que esta propiedad siempre se mantenga en su estado natural y luzca limpia y atractiva para el deleite de nuestro pueblo y las personas que la visiten.
- Están de acuerdo con que esta propiedad forme parte de los Bosques a ser conservado en Puerto Rico, con la condición antes indicada.

**JUNTA DE PLANIFICACIÓN**

En la ponencia presentada a la Junta de Planificación (JP) explican que en la reunión del 25 de septiembre de 1996, se adoptó mediante la Resolución 96-008-JP-ZIT, la Zona de Interés Turístico de Camuy, Hatillo y Quebradillas. Este estudio aprovecha para proteger terrenos agrícolas de alto potencial y recursos naturales de importancia en la zona. Ejemplo de ello son todas las áreas costeras que fueron calificadas con los siguiente distritos: conservación de recursos - uno (CR-1), preservación de recursos (PR) y bosques de mangle (B-2). Las áreas a las que se hace referencia han sido clasificadas con éstos distritos de protección.

Los manglares de la Playa La Sardinera en el Municipio de Hatillo fueron calificados B-2 y todos los terrenos aledaños, que son áreas de amortiguamiento fueron clasificadas CR-1 mediante los estudios pertinentes.

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES**

El Departamento de Recursos Naturales y Ambiental (DRNA) cumplió con la Resolución de la Cámara 1845 y presentó la información disponible en esta agencia sobre los manglares de Hatillo. Posteriormente el DRNA presentó a la Comisión la ponencia con respecto a la R.C. de la C. 2791 que ordena al Secretario del DRNA recomendar a la JP designar como área de manglares del Barrio Bajura del Municipio de Isabela. En la ponencia recomiendan la proclama de los manglares como Bosque Estatal por el Gobernador, luego de la vista pública provista por la Ley de Bosques o Ley Núm. 133 del 1 de julio de 1975. Por consiguiente, recomendaron la proclama de los manglares de Camuy en el que se puede llamar el Bosque Costanero del Noroeste.

Indicaron que en la reunión celebrada el 4 de febrero de 2000, con relación a una transacción sobre una querella sobre la construcción de un paseo tablado en Punta Maracayo, en el Municipio de Hatillo se comprometió la administración municipal de dicho Municipio a proclamar los manglares como Bosque Estatal.

La Comisión recomienda la aprobación de la **R.C. de la C. 2927** debido a que contribuye a la conservación y preservación de un área que ha sufrido grandes presiones de desarrollo. El beneficio que se deriva de áreas de manglar redunda en ésta y futuras generaciones. La proclama de los manglares en la Playa Sardinera en el Municipio de Hatillo como Bosque Estatal es provista por la Ley Núm. 133 del 1 de julio de 1975, conocida como "Ley de Bosques de Puerto Rico". La delimitación del área a ser proclamada será manejada bajo la política pública forestal con las limitaciones de usos que ésto conlleva acorde con el ecoturismo, educación ambiental y veredas interpretativas.

La proclamación como Bosque Estatal de los manglares de Camuy, Hatillo e Isabela conformarán el Bosque Costanero del Noroeste. Los terrenos que formarán este Bosque contribuirá a la integración de este ecosistema en el área costera que comprende estos municipios.

Por los fundamentos antes expuestos, vuestra Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, previo estudio y consideración, tiene a bien recomendar la aprobación de la RC. de la C. 2927 con la enmienda sugerida.

Respetuosamente sometido,

Fdo.
Carlos Pagán González
Presidente
Comisión de Recursos Naturales,
Asuntos Ambientales y Energía"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 3173, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Educación y Cultura; y de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para designar las runias de la Ermita de Nuestra Señora del Rosario de Barinas en el Municipio de Yauco como lugar de valor histórico de Puerto Rico.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

Las ermitas son iglesias rurales que se levantan en lugares apartados de los centros de población ya existentes.

La Ermita de Barinas fue el primer lugar de adoración del Pueblo de Yauco y se construyó bajo la adbocación de Nuestra Señora del Rosario, nombre con el que aparece reconocido el pueblo en documentos oficiales después de su fundación en 1756. Durante los primeros siglos de nuestra historia, las ermitas, además de servir para ofrecer los servicios religiosos a las comunidades, se utilizaron para impartir doctrina cristiana (cristianizar) a los hijos de los indios y los esclavos negros.

Las ruinas históricas de la Ermita de Barinas se localizan al extremo norte del Barrio de Barinas, colindante con el Pueblo de Yauco hacia el sur. Los terrenos donde ubica la estructura pertenecieron a la antigua Hacienda La Florida. La ruina histórica está ubicada al oeste de la Carretera Estatal 335, Km. 0.3, al norte de la Carretera Estatal Núm. 2. La propiedad pertenece a la Sucesión Mario Mercado Riera, que administra la señora Eileen M. Coffey.

El pueblo de Yauco se funda en la región al norte de la antigua Ermita de Nuestra Señora del Rosario, y en ese lugar se dispone la construcción de la iglesia del pueblo que se localizó en el mismo sitio donde se ubica la actual iglesia del pueblo.

Una vez construida la iglesia de Yauco, la Ermita de Barinas quedó como lugar de Romería, donde los feligreses acudían a celebrar misa el día de la Virgen del Rosario, que se celebra el primer domingo de octubre y en los días de los Tres Santos Reyes cada 6 de enero. Ambas festividades revisten suma

importancia para los católicos de esa región de la Isla. Esta costumbre continúa hasta nuestros días y el primer domingo de octubre, se lleva a cabo la procesión que lleva la imagen de la Virgen del Rosario desde la iglesia del pueblo hasta el sitio de la Ermita de Barinas, donde se celebra una misa y luego se regresa la imagen de nuevo a la iglesia.

Es necesario señalar que, luego de varios estudios realizados por arqueólogos, historiadores y otro personal experto en el lugar donde enclavan las ruinas, se pueden señalar aspectos de gran importancia y relevancia en relación a las ruinas históricas de la Ermita de Nuestra Señora del Rosario de Barina. Primeramente, el sitio histórico donde localiza la Ermita ha sufrido grandes alteraciones e impactos como resultado de las distintas actividades que han ocurrido en el lugar de índole, agrícola, industria y doméstica, las cuales han dejado su indeleble huella en el recurso. También, la estructura histórica exhibe un estado ruinoso que evidencia, además, los efectos de los múltiples usos que ha tenido. No obstante ello, estas ruinas son reconocidas por la comunidad y conforman un verdadero hito para este pueblo.

La tradición, el uso cultural y religioso del lugar y el hecho de que la comunidad reconoce este sitio como su antigua iglesia, presupone que el lugar ha tenido en el pasado y mantiene en el presente, un verdadero vínculo histórico con los ciudadanos de Yauco y áreas aledañas.

Consciente con toda esta manifestación cultural, esta Asamblea Legislativa cree necesario designar las ruinas de la Ermita de Nuestra Señora del Rosario de Barinas, lugar de valor histórico de Puerto Rico; propiciando su conservación para ser parte de nuestro acervo cultural.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Designar las ruinas de la Ermita de Nuestra Señora del Rosario de Barinas en el Municipio de Yauco como lugar de valor histórico de Puerto Rico.

Sección 2.-La Junta de Planificación, en coordinación con el Instituto de Cultura Puertorriqueña, y el Municipio de Yauco procederá a incluir en su Listado de Lugares Históricos, la Ermita de Nuestra Señora del Rosario de Barinas, localizada en el Municipio de Yauco.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestras Comisiones de Educación y Cultura; y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración de la Resolución Conjunta de la Cámara 3173, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación, con las siguientes enmiendas.

**En La Exposicion De Motivos:**

| | |
|---|---|
| Página 1, Líneas 1 y 2 | después de "son" eliminar todo su contenido y sustituir por "santuarios o capillas generalmente pequeños, situados en despoblados y que suelen no tener culto permanente." |
| Página 1, Línea 4 | eliminar "adbocación" y sustituir por "advocación" |
| Página 1, Línea 13 | después de "Mario Mercado Riera," eliminar "que administra" y sustituir por "la cual se encuentra bajo la administración de" |
| Página 1, Línea 18 | eliminar "Romería" y sustituir por "romería" |

Página 1, Línea 19 después de "octubre y," eliminar "en los días de los Tres Santos Reyes cada 6 de enero" y sustituir por "cada 6 de enero, día de los Tres Santos Reyes"

Página 2, Línea 1 eliminar "católicos" y sustituir por "fervientes o feligreses"

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

El propósito de la Resolución de la Cámara 3173 es designar las ruinas de la Ermita de Nuestra señora del Rosario de Barinas en el Municipio de Yauco como lugar de Valor histórico.

La Ermita de Barinas es un lugar de pelegrinación para devoción a la Virgen del Rosario, la cual se celebra el primer domingo del mes de octubre y los días 6 de enero de cada año natural, día de los Tres Santos Reyes.

La Junta de Planificación así como el Instituto de Cultura Puertorriqueña se expresaron al respecto en la que se emitieron recomendaciones y las cuales son conforme con la situación existente. La importancia que reviste la designación del lugar como uno de valor histórico, permitirá conservar para nuestra próxima generación, parte de nuestra historia cultural.

Por la razones antes expuestas, vuestras Comisiones de Educación y Cultura; y de Gobierno y Asuntos Federales, recomiendan la aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara 3173, con las enmiendas contenidas.

Respetuosamente sometido,

Fdo.
Carmen L. Berríos Rivera
Presidenta
Comisión de Educación y Cultura

Fdo.
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 3308, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Educación y Cultura; y de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para designar la Escuela Elemental del Barrio Florida del Municipio de Naguabo como "Escuela Elemental Lutgarda Rivera Reyes".

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La profesora Lutgarda Rivera Reyes nació en el Municipio de Naguabo, el 16 de junio de 1921. Es hija de Don Marcos Rivera y Doña Dionisia Aeropajita Reyes, quienes la criaron junto a otros siete hermanos.

La profesora Lutgarda Rivera Reyes estudió sus grados primarios en las Escuelas Ramón Rodríguez y Eugenio Brac del pueblo de Naguabo. Se graduó de escuela superior y luego obtuvo el grado de maestra normalista en la Universidad de Puerto Rico.

Comenzó su vida profesional como maestra en la Escuela Segunda Unidad de Daguao. Luego trabajó enseñando séptimo grado en la Escuela José Ortiz Guzmán y posteriormente se trasladó a enseñar en la Escuela Elemental del Barrio Florida, donde laboró hasta acogerse al retiro después de treinta (30) años de dedicación al magisterio.

La profesora Lutgarda Rivera, en su desempeño profesional organizó clubes de inglés, 4H y la Cruz Roja Juvenil. Además fungió como maestra encargada por muchos años y con distintos directores que depositaron su confianza en ella para encargarse de las funciones administrativas fuera del recinto escolar.

La profesora Lutgarda Rivera Reyes, es modelo de inspiración para que muchos jóvenes se dediquen a la profesión del magisterio. La influencia de la Profesora Rivera como educadora ejemplar ha sido decisiva en la formación profesional de muchos naguabeños que fueron sus discípulos. Por todas estas razones es que la designación de la Escuela Elemental del Barrio Florida, del Municipio de Naguabo, con el nombre de Lutgarda Rivera Reyes, es un justo reconocimiento a sus ejecutorias profesionales y la culminación de una vida dedicada a la educación.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se designa la Escuela Elemental del Barrio Florida del Municipio de Naguabo como "Escuela Elemental Lutgarda Rivera Reyes".

Sección 2.-La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas adscrita al Instituto de Cultura Puertorriqueña, dará fiel cumplimiento a las disposiciones de esta Resolución Conjunta, sin sujeción a lo dispuesto en la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME CONJUNTO**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestras Comisiones de Educación y Cultura; y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración de la Resolución Conjunta de la Cámara 3308 tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación, con las siguientes enmiendas.

**En El Título:**

Página 1, líneas 1 y 2 después de "Para" eliminar todo su contenido y sustituir por "ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que denomine la Escuela Elemental del Barrio Florida del Municipio de Naguabo, con el nombre de "Escuela de la Comunidad Elemental Lutgarda Rivera Reyes" y para que el Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tome las medidas necesarias para la celebración de un acto apropiado.

**En El Texto:**

| | |
|---|---|
| Página 2, Líneas 1 a la 6 | eliminar todo su contenido y sustituir por:<br>"Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que denomine la Escuela Elemental del Barrio Florida del Municipio de Naguabo, con el nombre de "Escuela de la Comunidad Elemental Lutgarda Rivera Reyes."<br>Sección 2.- La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tomarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Resolución Conjunta.<br>Sección 3.- El Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispondrá para la celebración de un acto apropiado a efectuarse no más tarde de un año a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta." |
| Página 2, línea 8 | eliminar "3" y sustituir por "4" |

## ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito de la Resolución de la Cámara 3308 es para designar la Escuela Elemental del Barrio Flaorida de Naguabo como "Escuela Elemental Lutgarda Rivera Reyes."

La medida hace honor a la educadora Lutgarda Rivera Reyes al proponer que la Escuela Elemental del Barrio Florida de Naguabo, lleve su nombre.

Al estudiar la trayectoria de servicio prestado a la niñez urbana y elemental por más de una generación, tenemos que reconocer el apostolado magisterial vivido por la profesora Rivera. Este digno ejemplo de esfuerzo, dedicación, amor y devoción a los niños debe ser motivo de imitación por otros maestros que todavía están prestando sus servicios.

La profesora Rivera, desarrolló entre los familiares y demás miembros de la comunidad escolar a la cual sirvió por tantos años, lazos afectivos en la experiencia filial de padres y madres que entregaban al inicio de cada año escolar a sus hijos al cuidado suyo"para que se los educara".

Las Comisiones consideran que la R. C. de la C. 3308 es apropiada y reconcoe en valía y dedicación a la profesora Rivera dando su nombre a una escuela que por muchos años se conoció con el nombre del barrio dondes está ubicada.

Todos los edificios escolares deben denominarse con el nombre de algún servidor que haya laborado con dedicación en favor de nuestros estudiantes y la comunidad.

Por la razones antes expuestas, vuestras Comisiones de Educación y Cultura; y de Gobierno y Asuntos Federales, recomiendan la aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara 3308, con las enmiendas contenidas.

Respetuosamente sometido,

Fdo.
Carmen L. Berríos Rivera
Presidenta
Comisión de Educación y Cultura

Fdo.
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 3421, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de veinticinco mil quinientos (25,500) dólares, para la realización de actividades dirigidas a mejorar la salud y calidad de vida, así como el bienestar social, deportivo y cultural de esa municipalidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados, la transferencia de los mismos e indicar su procedencia.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Bayamón la cantidad de veinticinco mil quinientos (25,500) dólares, para la realización de las siguientes actividades dirigidas a mejorar la salud y calidad de vida, así como el bienestar social, deportivo y cultural en dicha municipalidad:

| | | |
|---|---|---|
| (a) | Aportación al Departamento de Recreación y Deportes del Municipio, para brindar ayuda a la Liga deSoftball Superior de dicho municipio, de la cual Jaime Rodríguez es su apoderado | 2,500 |
| (b) | Aportación a la División Escolar municipal, para brindar ayuda económica al joven Andy Arreaga (Núm. Est. 841-00-0377) en gastos de matrícula y libros en el Colegio Regional de Bayamón | 1,500 |
| (c) | Aportación al grupo "Los Cantores de Bayamón", para promover nuestra música típica y cultural al estado de Hawaii, por invitación de Puerto Rican Centennial Celebration Commission, cuyo director es José Raúl Marrero | 8,000 |
| (d) | Aportación a la Institución Casa Familiar Virgilio Dávila, representada por Sister Ana María Adrover, PO, para programa de tutoría a los jóvenes del residencial | 3,000 |
| (e) | Aportación a la Oficina de Relaciones Públicas del Municipio, para ayudar a realizar una actividad en homenaje a las madres bayamonesas | 5,000 |
| (f) | Aportación a la División Escolar del Municipio para brindar ayuda económica al joven Marlon A. Vázquez (SS898-6410), quien estudia en la Universidad Autónoma de Guadalajara, México | 2,000 |
| (g) | Aportación a Pedro Santos, payaso de profesión, para que asista a la Convención Anual de la organización "Clowns of America International" que tendrá lugar en | |

| | | |
|---|---|---|
| | la ciudad de Fort Worth, Texas el 22 de abril de 2001 | 1,000 |
| (h) | Aportación a la División Escolar del Municipio, brindar ayuda económica al joven Javier Chico Irizarry, para SSN 583-73-0576, que le permita cubrir parte de sus gastos de estudio en el Colegio Tecnológico Universitario | 400 |
| (i) | Aportación al Municipio, para transferir a la Puerto Rico Special Cadets, Inc., una organización sin fines de lucro, que opera en el Centro Comunal de la Urb. Bella Vista de dicho municipio, para que adquiera materiales y equipos necesarios en la educación y entrenamiento de jóvenes | 500 |
| (j) | Aportación al Municipio, para transferir al Equipo de Natación de Bayamón, una entidad deportiva sin fines de lucro, cuya Junta de Directores es presidida por Mayra Rodríguez, para sufragar en parte los costos de materiales y equipos necesarios en esta disciplina deportiva | 1,000 |
| (k) | Aportación al Municipio para brindar ayuda económica a Mariluz Velázquez Rosado, SSN 584-80-2675, calle Rita AA-30, Urb. Villa Rica de Bayamón, para cubrir en parte el costo de unos estudios neurológicos que le exigen su condición de salud, no cubiertos por su plan médico | 600 |
| | **TOTAL** | **$25,500** |

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas, estatales, municipales y federales.

Sección 3.-Se autoriza al Municipio de Bayamón a realizar transferencias de los fondos aquí asignados, según corresponda, para cumplir con los propósitos consignados en el Artículo 1 de esta Resolución Conjunta.

Sección 4.-Los fondos aquí asignados provendrán de la partida de cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil (5,555,000) dólares, a ser distribuidos mediante legislación.

Sección 5.-El municipio de Bayamón someterá a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes un informe sobre la realización de los propósitos que se establecen en el Artículo 1 de esta Resolución Conjunta.

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al 1ro. de julio de 2000."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la **R. C. de la C. 3421,** tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

La **R. C. de la C. 3421,** propone asignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de veinticinco mil quinientos (25,500) dólares, para la realización de actividades dirigidas a mejorar la salud y calidad de vida, así como el bienestar social, deportivo y cultural de esa municipalidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados, la transferencia de los mismos e indicar su procedencia.

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en la Sustitutiva a la Resolución Conjunta Núm. 3043 de 5 de mayo de 2000. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la **R. C. de la C. 3421** sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Fdo.
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 3398, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para asignar a varios Municipios y al Departamento de Recreación y Deportes –Región Carolina, la cantidad de trescientos mil ($300,000) dólares para realizar obras y mejoras permanentes, que propendan al bienestar y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36, según se detalla en la Sección 1 y para autorizar el pareo de los fondos asignados.

**RESUELVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO**

Sección 1.-Se asigna a varios Municipios y al Departamento de Recreación y Deportes –Región Carolina, la cantidad de trescientos mil ($300,000) dólares para realizar obras y mejoras permanentes que propendan al bienestar y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36, según se detalla a continuación:

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **MUNICIPIO DE CULEBRA** | |
| a. | Municipio de Culebra<br>(Para Compra del Edificio del Tribunal<br>de Justicia de dicho Municipio) | $50,000 |
| | **SUB-TOTAL** | **$50,000** |
| **2.** | **DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES – REGIÓN CAROLINA** | |
| a. | Departamento Recreación y Deportes<br>Región de Carolina<br>(Para mejoras permanentes y reparación<br>del Centro Comunal de Vistas del Convento<br>de la Urbanización Monte Brisas, Fajardo, PR) | $10,000 |
| | **SUB-TOTAL** | **$10,000** |

| | | |
|---|---|---|
| **3.** | **MUNICIPIO DE CEIBA** | |
| a. | Corporación de Desarrollo Económico de Ceiba<br>(Para ayudar a personas de escasos recursos económicos<br>del Distrito #36, para instalaciones de postes de energía eléctrica,<br>Fondos a ser transferidos.Ave. Lauro Piñero #252 Altos<br>PO Box 203, Ceiba, PR 00735<br>Tel. 885-3020 | $10,000 |
| b. | Corporación de Desarrollo Económico de Ceiba<br>(Para diversas ayudas a personas de escasos recursos económicos<br>del Distrito #36, para mejorar sus viviendas y calidad de vida;<br>fondos a ser transferidos.)<br>Ave. Lauro Piñero #252 Altos<br>PO Box 203<br>Ceiba, PR 00735<br>Tel. 885-3020 | $20,000 |
| c. | Luris E. López<br>SS # 581-92-5498<br>(Para ayuda de compra de materiales de<br>construcción a personas de escasos<br>recursos económicos)<br>PO Box 280<br>Ceiba, PR 00735 | 500 |
| d. | Tabernacle Academy Private School, Inc<br>(Entidad sin fines de lucro bajo el registro<br>#29,241-S.F. Ayuda para construcción de<br>un salón para prestarle servicios a niños<br>de escasos recusos económicos de la comunidad.)<br>PO Box 1168<br>Ceiba, PR 00735<br>Tel. 863-3981 | 3,000 |
| | **SUB-TOTAL** | **$33,500** |
| **3.** | **MUNICIPIO DE VIEQUES** | |
| a. | Municipio de Vieques<br>(Para diversas ayudas a personas<br>de escasos recursos económicos<br>del Distrito #36, para mejorar<br>sus viviendas y calidad de vida.) | $30,000 |
| b. | Awilda Gerena Corcino<br>SS #580-96-6824<br>(Para ayuda de compra de materiales de<br>construcción a personas de escasos recursos económicos)<br>P.O. Box 1261<br>Vieques, PR 00765<br>Tel. 741-1277 | 1,300 |
| c. | Gladys Adams<br>SS #584-03-4098 | 700 |

(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
Calle Gladiolas #489, Bo. Esperanza
Vieques, PR 007695

d. Eliut Ramos Julián 900
SS #584-41-4214
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
PO Box 1250
Vieques, PR 00765
Tel. 741-2793

e. María Palacios 700
SS # 584-84-0582
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
Calle Bromelias #377, Bo. Esperanza
Vieques, PR 00765
Tel. 741-2614

f. Juan García Rivera 600
SS #582-70-2887
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
HC02 Box 11713
Vieques, PR 00765
Tel. 741-0627

g. Perla I. Rivera 500
SS # 063-38-5247
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
Buzón. E-142, Bo. Leguillouw
Vieques, PR 00765
Tel. 741-1392

h. Eugenia Ortiz Torres 900
SS # 583-38-9292
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
PO Box 765
Vieques, PR 00765
Tel. 741-3557

i. Cruz Anduce Acosta 500
SS # 580-82-3458
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
Box 684
Vieques, PR 00765

j. Carmen D. Pimentel Parrilla 1,500
SS # 580-82-2171

(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
HC01 Box 8122
Vieques, PR 00765
Tel. 741-4103

k. Gladilis Ilarraza Martínez 800
SS # 583-55-7052
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
Box 28
Vieques, PR 00765
Tel. 741-2396

l. Migdalia Ruiz Rivera 300
SS # 580-04-2857
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
HC01 Box 7413
Vieques, PR 00765

m. Verónica Cruz Ponce 500
SS # 583-41-6250
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
HC02 Box 11913
Vieques, PR 00765
Tel. 741-4596

n. Hilda M. Ponce Rivera $300
SS # 583-68-7414
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
HC02 Box 11905
Vieques, PR 00765
Tel. 741-4596

o. Sara Ramos Julián 300
SS # 584-41-*7397
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)

p. Elizabeth Estrada Barreto 800
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
Box 715
Vieques, PR 00765
Tel. 741-0758

q. Santos Ayala Rivera$ 900
SS # 4584-03-1392
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
HC01 Box 8722

| | | |
|---|---|---|
| | Vieques, PR 00765<br>Tel. 741-1241 | |
| r. | Hector Jesús Esperanza<br>SS# 584-23-2089<br>(Para ayuda de compra de materiales de construcción a personas de escasos recursos económicos)<br>Box 232<br>Vieques, PR 00765<br>Tel. 741-0455 | 800 |
| s. | Sandra Medina de Jesús<br>SS # 584-37-4226<br>(Para ayuda de compra de materiales de construcción a personas de escasos recursos económicos)<br>HC02 Box 11911<br>Vieques, PR 00765<br>Tel. 741-2793 | 700 |
| t. | Elizabeth Navarro Santiago<br>SS # 580-08-4436<br>(Para ayuda de compra de materiales de construcción a personas de escasos recursos económicos)<br>HC02 Box 11906<br>Vieques, PR 00765<br>Tel. 741-5044 | 1,500 |
| u. | Aida Soltero<br>SS # 582-70-3303<br>(Para ayuda de compra de materiales de construcción a personas de escasos recursos económicos)<br>HC02 Box 11819<br>Vieques, PR 00765<br>Tel. 741-1956 | 800 |
| v. | Veteranos Viequenses Unidos, Inc.<br>(Para la construcción de la Casa del Veterano Viequense, entidad sin fines de lucro)<br>#275 Calle Buena Vista<br>Vieques, PR 00675<br>Tel. 741-1047 | 30,000 |
| | **SUB-TOTAL** | **$75,300** |
| 4. | Municipio de Luquillo | |
| a. | Misión Cristiana Fuente de Agua Viva<br>(Pavimentación área de acceso servicio comunitario Bo. Pitahaya de Luquillo)<br>P O Box 729<br>Puerto Real, PR 00740-0729 | 3,000 |
| b. | Atlántic Community Development, Corp<br>(Para mejoras permanentes del área recreativa del Parque de Pelota | 15,000 |

ubicado en el Sector de Estancias del Atlántico)
HC01 Box 7372
Luquillo, PR00773

c. Municipio de Luquillo 4,500
(Para pavimentación carretera 988 km 3.4
Bo. Río Chiquito, Luquillo)

d. Víctor L. Fargos Peréz 1,000
SS # 584-35-6054
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
H-C01 Box 8484
Luquillo, P.R. 00773
Tel. 889-2092

e. Ana M. López Matienzo 800
SS # 584-38-0170
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos
Calle Esperanza # 59
Luquillo, P.R. 00773
Tel. 889-0806

f. Mayron Rodríguez 900
s.s. 584-37-5832
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
Villa Angelina Calle 2 Parcela 10
Luquillo, P.R. 00773
Tel. 889-7581

g. José Franceschini Lugo 1,000
SS # 584-07-1398
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
Sector Las Viudas Bo. Sabana Carr.993
Luquillo, P.R. 00773
Tel. 889-1051

h. Víctor Ortiz Robledo 900
SS # 583-66-7106
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
Bo. Juan Martín Parc. Borrás #109
Luquillo, P.R. 00773
Tel. 889-2861

i. Elizabeth Correa Figueroa 1,000
SS # 581-84-2855
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
P.O. Box 1501
Luquillo, P.R. 00773

j. María Lagrandiel 1,000
SS # 584-12-1759
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
Mata de Plátano Parc. H-36
Luquillo, P.R. 00773
Tel. 889-2927

k. Carlota López Rijos 500
SS # 580-44-3899
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
P.O. Box 735
Luquillo, P.R. 00773
Tel. 889-7311

l. Justa Sánchez Castro 400
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
Urb. Brisas del Mar C/E2 # E D 16
Luquillo, P.R. 00773

m. Justino Quiñones 400
SS # 581-21-0233
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
Parc. 193 C/8- Bo. Fortuna
Luquillo, P.R. 00773
Tel. 889-2584

n. Alicia Cátala Gutiérrez $700
SS # 580-72-4881
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
Calle Florida #155
Luquillo, P.R. 00773
Tel. 889-2017

o. Bernabé Laboy Collado 1,000
SS # 582-25-3615
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
Estancias del Atlántico Calle 7 K30
Luquillo, P.R. 00773
Tel. 889-4688

p. Andrea Robledo 500
SS # 580-86-7542
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
HC o1 Buzón 8630
Luquillo, P.R. 00773
Tel. 889-2861

q. Mercedes R. Herrera 500
SS # 597-46-1741
(Para ayuda de compra de materiales de construcción a personas de escasos recursos económicos)
Parcelas Fortuna, Sector Solís #284
Luquillo, PR 00773
Tel. 889-4046

r. Doris Rodríguez Rodríguez 1,000
SS # 584-49-1550
(Para ayuda de compra de materiales de construcción a personas de escasos recursos económicos)
Calle C D-10 Urb. Cosóta Azul
Luquillo, PR 00773
Tel. 889-3773

s. Iris L. González 1,000
SS # 583-52-0620
(Para ayuda de compra de materiales de construcción a personas de escasos recursos económicos)
HC01 Box 7379
Luquillo, PR 00773

t. Lillian Rodríguez Quiñonez 1,000
SS # 584-02-4385
(Para ayuda de compra de materiales de construcción a personas de escasos recursos económicos)
PO Box 613
Luquillo, PR 00773
Tel. 889-4873

u. Jose I. Rodríguez Ríos 500
SS # 584-94-6981
(Para ayuda de compra de materiales de construcción a personas de escasos recursos económicos)
HC01 Box 8084
Luquillo, PR 00773

v. Pablo Cuadrado Rodríguez 500
SS # 584-56-4823
(Para ayuda de compra de materiales de construcción a personas de escasos recursos económicos)
Villa Angelina Calle 2 #36
Luquillo, PR 00773
Tel. 889-1821

w. Ana Mojica Fragoso 1,000
SS # 584-56-0408
(Para ayuda de compra de materiales de construcción a personas de escasos recursos económicos)
Box 942
Luquillo, PR 00773

x. Rosemary Encarnación 1,000

SS # 583-67-7358
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
Estancias del Atlántico, Calle 7 # K-31
Luquillo, PR 00773

y. Tomás Rosa 800
SS # 584-45-3435
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
Parcelas Fortuna Calle 10 Bzn. 3078
Luquillo, PR 00773

**SUB-TOTAL** **$39,900**

**4. MUNICIPIO DE FAJARDO**

a. Municipio de Fajardo 10,000
(Para la Restauración del Templo de la Iglesia Católica,
Monumento Histórico de dicho municipio.)

b. Municipio de Fajardo 40,000
(Aportación para remodelación de la
Asamblea Municipal de Fajardo)

c. Club de Leones de Fajardo $2,000
Para mejoras permanentes de la casa club,
entidad sin fines de lucro)
Sector Las Croabas
Fajardo, PR 00738

d. Club Aries de PR Capítulo de Fajardo 2,000
Para mejoras permanentes de a casa club,
entidad sin fines de lucro.)
Fajardo, PR

e. Escuela de la Comunidad Gabino Soto 2,000
(Para mejoras a la Oficina de Orientación y Trabajo Social)

f. Luz M. Ríos 1,500
SS # 584-78-7222
(Para terminar su casa la cual sufrió un incendió .)
Res. Puerto Real Edif. 16 #78
Puerto Real, Fajardo 00740

g. Yeida l. Correa Sánchez 500
SS # 581-93-3121
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
HC866 Box 8722, Parcelas Saldaña Calle 1 #69
Fajardo, PR 00738

h. Migdalia Correa Agosto 500
SS # 583-51-9779
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
Calle José De Diego #52

Fajardo, PR 00738
Tel. 860-0492

i. Dominga Santiago Rivera 1,000
SS # 580-07-6386
(Para ayuda de compra de materiales de construcción a personas de escasos recursos económicos)
PO Box 383
Fajardo, PR 00738
Tel. 860-2341

j. Domingo Martinez Rivera 1,000
SS # 583-68-6013
(Para ayuda de compra de materiales de construcción a personas de escasos recursos económicos)
Proyecto Fema N-2, Urb. Veve Calzada
Fajardo, PR 00738
Tel. 860-5341

k. Emérita Matta Rosa 500
SS # 584-70-3063
(Para ayuda de compra de materiales de construcción a personas de escasos recursos económicos)
Extensión Meléndez Calle B #93
Fajardo, PR 00738
Tel. 860-0290

l. Natividad Ocasio Monett 350
SS # 582-43-0594
(Para ayuda de compra de materiales de construcción a personas de escasos recursos económicos)
Urb. Fajardo Gardens , Calle 20 #FF-21
Fajardo, PR 00738
Tel. 860-4183

m. María Ramos Quiñonez 800
SS # 584-70-8574
(Para ayuda de compra de materiales de construcción a personas de escasos recursos económicos)
Parc. Luis M. Cintrón, Calle 16 #468 Apto. 407
Fajardo, PR 00738

n. Edna Torruellas Collazo 500
SS # 584-77-3004
(Para ayuda de compra de materiales de construcción a personas de escasos recursos económicos)
HC66 Box 8722
Fajardo, PR 00738
Tel. 863-8360

o. Aurelio Carrillo Peña 340
SS # 580-78-0442
(Para ayuda de compra de materiales de construcción a personas de escasos recursos económicos)

Urb. Veve Calzada #126
Fajardo, PR 00738
Tel. 863-0576

p. Teddy Fontánez Carrillo 300
SS 584-61-7419
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
Parc. 92-A Bo. Río Arriba
Fajardo, PR 00738
Tel. 863-2313

q. Sonia Chaparro Badillo 500
SS # 583-46-8011
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
HC 866 Box 5170
Fajardo, PR 00738

r. Mario Castro Miranda 600
SS # 584-94-4882
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
HC66 Box 8792
Fajardo, PR 00738

s. Yadira Salgado Rivera 800
SS # 582-41-0915
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
Proyecto Veve Calzada #3, Calle 19 #D-15
Fajardo, PR 00738
Tel. 863-0651

t. Casimiro Cruz Viera 350
SS # 582-05-1984
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
HC 866 Box 5170
Fajardo, PR 00738

u. Nicolas Rivera Roberto 400
SS #580-78-1191
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
Correo General
Fajardo, PR 00738
Tel. 860-1342

v. Aida L. Osta Castro 500
SS # 583-55-9755
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
Ext. Altamira #G-44 Calle 6

Fajardo, PR 00738

w. Virginia Sanabria 400
SS #582-72-2539
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
Calle Francisco Rebollo #211
Fajardo, PR 00738
Tel. 863-6712

x. Kathryn Bartalone 500
SS #141-32-2265
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
Bo. Naranjo K3.3 Carr. 976
Fajardo, PR 00738

y. Carmen L. Ramos Mendoza 360
SS # 850-58-8136
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
HC66 Box 9005
Fajardo, PR 00738
Tel. 801-1907

z.. Julio Pagán Santiago 500
SS # 580-78-0445
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
PO Box 118
Puerto Real, 00740
Tel. 863-5893

aa. Olga Salgado 500
SS # 069-58-8063
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
Proyecto Veve Calzada, Calle 12 #N-7
Fajardo, PR 00738
Tel. 863-1685

bb. Julia Vélez Ayala 500
SS # 584-42-9481
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
Urb. Veve Calzada #92
Fajardo, PR 00738
Tel. 863-2748

cc. María Maldonado 200
SS # 581-04-5657
(Para ayuda de compra de materiales de
construcción a personas de escasos recursos económicos)
Proyecto Veve Calzada #E-14

| | | |
|---|---|---|
| | Fajardo, PR 00738<br>Tel. 801-2412 | |
| dd. | Juan Robles Cintrón<br>SS # 582-72-3491<br>(Para ayuda de compra de materiales de construcción a personas de escasos recursos económicos)<br>PO Box 113 Puerto Real, PR 00740<br>Tel. 860-0746 | 1,000 |
| ee. | Departamento de la Familia<br>Fajardo, PR<br>(Para diversas ayudas a personas de escasos recursos económicos del Distrito #36, para mejorar sus viviendas y calidad de vida; fondos a ser transferidos.) | 20,900 |
| | **SUB-TOTAL** | **$91,300** |
| | **GRAND TOTAL** | **$300,000** |

Sección 2.-Los fondos aquí asignados provendrán de la suma de doce millones ($12,000,000) de dólares que serán distribuídos mediante legislación.

Sección 3.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta, podrán ser pareados con fondos federales, estatales o municipales.

Sección 4.-Los Municipios de Vieques, Culebra, Ceiba, Luquillo, Fajardo y el Departamento de Recreación y Deportes de la Región de Carolina, someterán un informe respectivamente, a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, sobre el uso y distribución de estos fondos tan pronto se cumpla con los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta y en el estricto cumplimiento de la Ley.

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la **R. C. de la C. 3398,** tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

La **R. C. de la C. 3398,** propone asignar a varios Municipios y al Departamento de Recreación y Deportes-Región Carolina, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares para realizar obras y mejoras permanentes, que propendan al bienestar y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36, según se detalla en la Sección 1 y para autorizar el pareo de los fondos asignados.

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en la Sustitutiva a la Resolución Conjunta Núm. 3022 de 18 de abril de 2000. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la **R. C. de la C. 3398** sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Fdo.
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 3410, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para asignar al Municipio de Arecibo, Distrito Representativo Núm. 14, la cantidad de treinta y siete mil seiscientos (37,600) dólares, para la realización de obras y mejoras permanentes, para autorizar la transferencia, contratación de las obras y el pareo de los fondos asignados.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO**

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Arecibo, Distrito Representativo Núm. 14, la cantidad de treinta y siete mil seiscientos (37,600) dólares, a ser distribuidos como se detalla en esta Resolución Conjunta:

| | | |
|---|---|---|
| a) | Para transferir al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, Capítulo de Arecibo, para mejoras a la Casa Capitular | $3,000.00 |
| b) | Para transferir a la Asociación Recreativa del Barrio Esperanza del Municipio de Arecibo, para la construcción de canastos y otras mejoras a la Cancha Bajo Techo de esa misma comunidad | 3,000.00 |
| c) | Para transferir a la Escuela de la Comunidad Domingo Ruíz de Arecibo, para mejoras a las facilidades físicas | $5,000.00 |
| d) | Para transferir al Hogar Colegio La Milagrosa de Arecibo, encargada Sol Elena Cintrón Maldonado, para mejoras al Hogar | 5,000.00 |
| e) | Para transferir a la Asociación Recreativa ARVAJA en el Municipio de Arecibo, para mejoras en las facilidades recreativas | 2,000.00 |
| f) | Para construcción de un busto en torno al Ex-Alcalde de Arecibo José A. Cedeño (QEPD), en la Avenida que lleva su nombre, y otras mejoras relacionadas a este proyecto en el Municipio de Arecibo | 19,600.00 |

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, estatales o municipales.

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la cantidad de doce millones (12,000,000) de dólares a ser distribuidos mediante legislación.

Sección 4.-Se autoriza al Secretario de Hacienda a efectuar anticipos provisionales de cualesquiera fondos disponibles en el Tesoro Público del Gobierno de Puerto Rico, para ser aplicados a sufragar el propósito establecido en esta Resolución Conjunta.

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la **R. C. de la C. 3410,** tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

La **R. C. de la C. 3410,** propone asignar al Municipio de Arecibo, Distrito Representativo Núm. 14, la cantidad de treinta y siete mil seiscientos (37,600) dólares, para la realización de obras y mejoras permanentes, para autorizar la transferencia, contratación de las obras y para autorizar el pareo de los fondos asignados.

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en la Sustitutiva a la Resolución Conjunta Núm. 3022 de 18 de abril de 2000. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la **R. C. de la C. 3410** sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Fdo.
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 3417, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para asignar a la Universidad de Puerto Rico, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, la cantidad de once millones (11,000,000) de dólares para el pago de internos y residentes del Recinto de Ciencias Médicas y para autorizar el pareo de los fondos asignados.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se asigna a la Universidad de Puerto Rico de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, la cantidad de once millones (11,000,000) de dólares para el pago de internos y residentes del Recinto de Ciencias Médicas.

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con aportaciones federales, municipales y/o estatales.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al 1ro. de julio de 2000."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 3417, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

La R. C. de la C. 3417 propone asignar a la Universidad de Puerto Rico, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, la cantidad de once millones (11,000,000) de dólares para el pago de internos y residentes del Recinto de Ciencias Médicas y para autorizar el pareo de los fondos asignados.

Los fondos para los propósitos que se detallan en esta medida están contenidos dentro del marco presupuestario del Gobierno de Puerto Rico, por lo que la Comisión de Hacienda no tiene objeción a la aprobación de esta Resolución Conjunta.

Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Fdo.
Roger Iglesias Suarez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 3411, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para enmendar el inciso (a) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 411 de 28 de julio de 1994, a fin de modificar el destino de los fondos.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

Después de haberse aprobado la Resolución Conjunta Núm. 411 de 28 de julio de 1994, los vecinos de la Urbanización Madrid de Juncos le comunicaron al Hon. Gilberto Conde Román, Alcalde, su rechazo a que se construyera un techo en la cancha de dicha urbanización.

Ante dicha situación el Hon. Gilberto Conde Román y el autor de esta medida acordaron que el dinero asignado para la cancha de la Urbanización Madrid, sería utilizado para techar la cancha de la Urbanización Los Almendros de dicho municipio.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Para enmendar el inciso (a) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 411 de 28 de julio de 1994, para que se lea como sigue:

"Sección 1.-Asignar al Municipio de Juncos la cantidad de ochenta mil (80,000) dólares, para realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 33 según se indica a continuación:

a) Para la construcción de techo a la cancha de
La Urbanización Los Almendros $ 35,000.00

b) ...

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la **R. C. de la C. 3411,** tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

La **R. C. de la C. 3411,** propone enmendar el inciso (a) de la Resolución Conjunta Núm. 411 de 28 de julio de 1994, a fin de modificar el destino de los fondos.

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en esta Resolución Conjunta Núm. 411 de 28 de julio de 1994. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la **R. C. de la C. 3411** sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Fdo.
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 3406, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de mil setecientos cuatro (1,704) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para compra de equipo, materiales, medicina, accesorios de oficina, escolares, deportivos, reparación de viviendas a personas de escasos recursos, donativos a estudiantes y personas necesitadas, aportaciones a instituciones cívicas, culturales y deportivas que operen sin fines de lucro, y para otras obras y actividades de interés social.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales, la cantidad mil setecientos cuatro (1,704) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para compra de equipo, materiales, medicina, accesorios de oficina, escolares, deportivos, reparación de viviendas a personas de escasos recursos, donativos a estudiantes y personas necesitadas, aportaciones a instituciones cívicas, culturales y deportivas que operen sin fines de lucro, y para otras obras y actividades de interés social.

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la **R. C. de la C. 3406,** tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

La **R. C. de la C. 3406,** propone asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de mil setecientos cuatro (1,704) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para compra de equipo,materiales, medicina, accesorios de oficina, escolares, deportivos, reparación de viviendas a personas de escasos recursos, donativos a estudiantes y personas necesitadas, aportaciones a instituciones cívicas, culturales y deportivas que operen sin fines de lucro, y para obras y actividades de interés social.

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en esta Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la **R. C. de la C. 3406** sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Fdo.
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 3408, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de tres mil quinientos (3,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 506 de 21 de agosto de 1999, para ser transferidos a Senescencia Community Action, Inc., para realizar mejoras permanentes en dicho centro.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de tres mil quinientos (3,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 506 de 21 de agosto de 1999, para ser transferidos a Senescencia Community Action, Inc., para realizar mejoras permanentes en dicho centro.

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la **R. C. de la C. 3408,** tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

La **R. C. de la C. 3408,** propone asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de tres mil quinientos (3,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 506 de 21 de agosto de 1999, para ser transferidos a Senescencia Community Action, Inc., para realizar mejoras permanentes en dicho centro.

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en esta Resolución Conjunta Núm. 506 de 21 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la **R. C. de la C. 3408** sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Fdo.
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1920, el cual ha sido descargado de las Comisiones de Asuntos Municipales; y de Desarrollo de la Capital.

**"LEY**

Para crear el Centro Municipal de Resolución de Conflictos, que tendrá por objeto prestar servicios de mediación, arbitraje y amigables componedores para la resolución de conflictos, controversias y pleitos, ya iniciados o potenciales; para proveer el método de compensación; para disponer los procedimientos a seguirse y para establecer la revisión judicial.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

En los antecedentes históricos de nuestras estructuras de gobierno, que heredamos de los reinos medievales de la península ibérica, la figura del alcalde como jefe civil del municipio ha estado presente. Desde lo antiguo y hasta el inicio del siglo XIX las facultades del alcalde incluían diversas funciones en la administración de la justicia, además de servir como mediador entre partes de una forma informal.

Con el desarrollo de las instituciones de gobierno durante el siglo XIX, las funciones judiciales de los alcaldes pasaron a jueces letrados.

En los albores del siglo XXI, la situación en los tribunales de justicia es una de sobrecarga de trabajo, y, en muchos casos, de demoras largas en la adjudicación de los casos civiles se producen con demasiada frecuencia.

A pesar de las diversas medidas que se han tomando por las tres ramas de gobierno para acelerar la administración de la justicia, son necesarias medidas adicionales y complentarias para acercar al ciudadano a procesos rápidos y expeditos para la solución de conflitos y disputas.

El Municipio de San Juan puede y debe aportar a la solución a estos problemas, y para ello esta Ley le encomienda la creación de un Centro Municipal de Resolución de Conflictos que contará con mediadores, árbitros y amigables componedores, que resolverán las controversias que por acuerdo de partes, o por ley, se traigan ante su consideración.

El Municipio de San Juan es lugar ideal para esta nueva iniciativa, dado que se ubica en el centro de la mayor concentración poblacional de Puerto Rico, y en donde, también se desarrolla el mayor volumen de negocios.

Esta medida va dirigida a promover la armonía y conciliación de intereses entre partes en conflicto, o potencial conflicto, y constituye, sin duda, un servicio público de valor incalculable a los residentes de la Ciudad Capital.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.- Por la presente se crea el Centro Municipal de Resolución de Conflictos, que tendrá por objeto prestar servicios de mediación, arbitraje y amigables componedores para la resolución de conflictos, controversias y pleitos, ya iniciados o potenciales.

Artículo 2.- Definiciones:

a) "Amigables componedores": personas designadas por el alcalde para la adjudicación de una controversia traida voluntariamente por las partes ante su consideración, referida por un Juez de Primera Instancia o así dispuesto por el Código Civil o por leyes especiales.

b) "Arbitros": abogados designados por el alcalde para la adjudicación de una controversia traida voluntariamente por las partes ante su consideración, referida por un Juez de Primera Instancia o así dispuesto por el Código Civil o por leyes especiales.

c) "Mediadores": personas designadas por el alcalde para mediar y conciliar criterios entre partes que voluntariamente somentan ante su consideración alguna controversia.

Artículo 3.- Designación de amigables componedores, árbitros y mediadores.

El alcalde del Municipio de San Juan podrá designar, uno o un número impar de amigables componedores, árbitros y mediadores para actuar en los casos o controversias que se traigan ante su consideración, de entre el personal del municipio o de personas en el sector privado.

Artículo 4.- Compensación.

Los amigables componedores, árbitros y mediadores que no sean empleados del municipio recibirán la compensación que dispoga el alcalde, que será pagada en su totalidad por las partes.

En caso de que los amigables componedores, árbitros y mediadores designados sean empleados del municipio, las partes pagarán las tarifas por este servicio que disponga la Asamblea Municipal de San Juan por ordenanza.

Artículo 5.- Procedimiento.

La Asamblea Municipal de San Juan dispondrá por ordenanza los procedimientos a seguirse ante los amigables componedores, árbitros y mediadores. Las decisiones de los amigables componedores no contendrán consideraciones de derecho, las de los árbitros sí.

Artículo 6.- Revisión Judicial.

Las decisiones de los amigables componedores y árbitros sólo serán revisables por juicio *de novo* ante el Tribunal de Primera Instancia, en casos de fraude, colusión o conflicto de intereses de las personas que actuaron como amigables componedores o árbitros.

Artículol 7.- Vigencia.

Esta ley entrará en vigor el primero de enero del 2001."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2303, el cual ha sido descargado de las Comisiones de Asuntos Municipales; y de Desarrollo de la Capital.

**"LEY**

Para enmendar el Artículo 13.012 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos" a los fines de permitir que dentro de los poderes

otorgados a los municipios este la facultad de conceder variaciones de uso y variaciones de intensidad en construcción o uso para aquellos proyectos dentro de sus límites territoriales.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La Ley de Municipios Autónomos fue creada con la intención de mejorar los servicios básicos que el Gobierno le ofrece al pueblo mediante la descentralización de los mismos. Para lograr este objetivo fue necesario transferirle poderes a la estructura sociopolítica más cercana y con mayor conocimiento de las necesidades de la gente, los municipios.

Mediante convenios y un estricto orden jerárquico, se le han otorgado responsabilidades adicionales a nuestros municipios y estos a su vez han ofrecido mas servicios al público. En cuanto a su extensión territorial, cada municipio debe someter un plan de ordenación territorial en el que presentan a la Junta de Planificación sus planes para desarrollar los terrenos dentro de su demarcación, incluyendo los usos para cada terreno y la infraestructura que será construida. Esto facilita y agiliza el desarrollo económico y social de los municipios al reducir la burocracia relacionada a los obtención de permisos y certificaciones en las agencias centrales.

No obstante, la Ley 81, reservó para determinación de la Junta de Planificación el otorgar variaciones de uso y variaciones de intensidad en construcción o uso, aún para aquellos municipios con Jerarquía V, la más alta concedida por la Ley, aun cuando la variación no afecta a otro municipio, ni los planes del gobierno central. Esto no es cónsono con el espíritu de la Ley 81 y a los fines de corregirlo se presenta esta medida.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 13.012 de la Ley Núm 81 de 30 de agosto de 1991 para que lea como sigue:

"Artículo 13.012.- Transferencia de Competencias sobre la Ordenación Territorial.-

El municipio podrá, siguiendo el procedimiento y las normas establecidas en el Capítulo XIV de esta ley, solicitar al Gobernador la transferencia de ciertas facultades de la Junta de Planificación y de la Administración de Reglamentos y Permisos sobre la ordenación territorial incluyendo querellas, autorizaciones, permisos, y variaciones de uso e intensidad. La transferencia se realizará en conformidad con lo siguiente:

(a).....

(b).....

(c) .....

(d)....

(e)....

De conformidad con lo anteriormente expresado el municipio podrá solicitar las siguientes facultades sobre la ordenación territorial:

(a) *Jerarquía I.-.....*

(b) *Jerarquía II-.....*

(c) *Jerarquía III-.....*

(d) *Jerarquía IV-.....*

*(e) Jerarquía V-....*

(1)....

La Junta de Planificación y la Administración de Reglamentos y Permisos, no obstante las transferencias realizadas, se reservarán la facultad de considerar lo siguiente:

(a)...

(b)...

(*c*) Proyectos municipales, no delagados expresamente en un convenio o no incluidos en el Plan de Ordenación.

Ningún municipio que tenga la facultad de.....

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2491, el cual ha sido descargado de las Comisiones de Asuntos Municipales; y de Desarrollo de la Capital.

**"LEY**

Para autorizar a los municipios de Puerto Rico a disponer mediante venta de los solares municipales en usufructo a los ocupantes de los mismos por el valor nominal de $ 1.00, reconociéndose el usufructo hasta los ocupantes de tercera generación de los usufractuarios originales, facultar a la Oficina de Asuntos Municipales a promulgar la reglamentación al efecto y para otros fines.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

Es política pública del Gobierno de Puerto Rico alentar a la ciudadanía en la solución de sus problemas mediante la menor intervención gubernamental.

La construcción y eventual adquisición de viviendas para las familias humildes ha sido uno de los asuntos que con más responsabilidad e interés hemos atendido administrativa y legislativamente.

Se han construído miles de unidades de vivienda, se han financiado cientos de hogares, se han concedido miles de títulos de propiedad conviertiéndolos en propietarios de sus solares.

No obstante, aún quedan en Puerto Rico cientos de familias habitantes en su inmensa mayoría de nuestros centros urbanos, que poseen y ocupan una estructura propia o heredada de sus antecesores, pero enclavadas en terreno municipal, lo que les limita su posiblidad de mejorarlas y/o disponer de ellas para beneficio de sus familias. Muchos de estos solares se convierten en predios baldíos que a la larga crean inconvenientes al propio municipio, toda vez que al fallecimiento del usufructurario original y no pudiéndose disponer del solar los herederos frustados desaparecen entrando en franco deterioro las estructuras, creando problemas ambientales, estéticos y legales a los dueños y al propio municipio.

En otras ocasiones, el depender del Departamento de Hacienda para la tasación de un predio y su eventual disposición crea unos inconveninetes burocráticos que desalientan a las personas de escasos recursos económicos que desean adquirir su título de propiedad para sí mismos o sus herederos.

Es por eso, que esta Asamblea Legislativa considera prudente y necesario atender los intereses de la ciudadanía y la del propio municipio, que verá aumentar la cantidad de propietarios municipales y por consiguiente su margen prestatario entre otros beneficios, además de disponer de solares desocupados y atender el reclamo de miles de humildes ciudadanos que interesan tener los documentos que les acreditan como dueños del solar donde construyeron su vivienda y ha sido de la familia por generaciones enteras.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1. – Autorizar a los municipios de Puerto Rico a disponer mediante venta de los solares municipales en usufructo a los ocupantes de tercera generación de los usufructuarios originales.

Artículo 2. – La Oficina de Asuntos Municipales promulgará el Reglamento que será utilizado para la disposición de los solares, debiéndo tomar como base el Reglamento para la Disposición de Solares utilizado en virtud de lo dispuesto en la Ley 132 promulgado y en vigencia en el Departamento de la Vivienda.

Artículo 3. – Se extiende el privilegio de solicitar y obtener título de propiedad sobre un solar utilizado en usufructo como vivienda hasta los descendientes en tercera generación del usufructuario original conforme a los registros municipales y/o estatales, que tuviesen constituída su vivienda única sobre el solar municipal.

Artículo 4. – Se ordena al Registrador de la Propiedad a inscribir libre de costos la Certificaciones de Títulos de Propiedad que emitan los municipios tranfiriendo la titularidad y dominio de los solares a favor de los usufructuarios debidamente cualificados.

Artículo 5. – Se concede ciento veinte (120) días a la oficina de Asuntos Municipales para la promulgación de la Reglamentación correspondiente.

Artículo 6. – Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2396, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para asignar a la Administración de Corrección la cantidad de doscientos mil dólares ($200,000.00) de fondos no comprometidos del Presupuesto General para sufragar los costos de la Primera Cumbre Correccional de las Américas.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

Las sociedades que componen el Hemisferio Occidental tienen serios problemas de criminalidad y delincuencia que se reflejan en la realidad de millones de seres humanos encarcelados y privados de su libertad. Por tal razón, es necesario que formulemos cambios fundamentales en los sistemas de justicia criminal a través de las Américas. El establecimiento de reformas en los sistemas correccionales favorece una mejor atmósfera en la consecución de derechos humanos básicos para los ciudadanos que son procesados.

Los sistemas correccionales de los países del Hemisferio Occidental contienen distintas particularidades debido a su historia, cultura y realidad social. Sin embargo, un análisis de éstas señala patrones de factores comunes y el relato de experiencias únicas que deben ser compartidas por profesionales correccionales desde una visión internacional.

La importancia de obtener una perspectiva internacional del problema planteado con la participación de organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, entidades privadas e individuos, ayuda al análisis, el estudio y el establecimiento de recomendaciones. El intercambio de información, de experiencias, del conocimiento y las destrezas en el campo correccional brinda una oportunidad de colocar las reformas y los cambios correccionales en un contexto más abierto que permitirá mejorar el sistema.

La Cumbre Correccional de las Américas es el evento que permitirá, por primera vez en la historia, la reunión en un mismo foro de profesionales del gobierno y de la empresa privada en el área correccional, oficiales judiciales, representantes de grupos comunitarios, activistas de reformas

correccionales y oficiales de libertad bajo palabra de Latinoamérica, el Caribe y Norteamérica. Esto permitirá discutir las nuevas tendencias en los sistemas correccionales, evaluar los procesos realizados para observar en donde se ha sido efectivo, y llevará al intercambio que contribuirá a la creación de una nueva política pública correccional para toda América.

A tales fines, se le asigna la suma de doscientos mil dólares ($200,000.00) de fondos no comprometidos del Presupuesto General a la Administración de Corrección para llevar a cabo las actividades relacionadas con este importante evento hemisférico.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.- Se asigna a la Administración de Corrección la suma de doscientos mil dólares ($200,000.00) de fondos no comprometidos del presupuesto general.

Sección 2.- Los fondos asignados en esta Resolución Comjunta serán consignados en un apartado denominado Primera Cumbre Correccional de las Américas.

Sección 3.- Se autoriza a las agencias del Gobierno de Puerto Rico a prestar los servicios y recursos económicos, de personal, materiales, equipo y facilidades que le solicite la Administración de Corrección, sujeto a las disposiciones de ley que las rigen y a la aprobación del jefe ejecutivo de la agencia de que se trate.

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3197, el cual ha sido descargado de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía..

**"LEY**

Para establecer la política pública sobre veredas de viandantes, ciclistas de montaña, veredas acuáticas y ecuestres en Puerto Rico, crear el Registro de Veredas Naturales, la Junta Asesora y el Comité Técnico para implantar la política pública de esta Ley.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

En los últimos años se ha reconocido la importancia del ejercicio para la salud humana y han surgido organizaciones en Puerto Rico que promueven caminatas y el ciclismo de montaña. Por esto, es necesario que el estado facilite lugares para que los ciudadanos puedan llevar a cabo estas actividades en un ambiente natural. Los dueños de los terrenos donde haya veredas naturales pueden beneficiarse en estas actividades mediante un cargo por uso siempre y cuando no alteren o mejoren las características naturales de los terrenos. Además, estos terrenos podrán ser designados como bosques auxiliares y disfrutar de los incentivos provistos por la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, conocida como "Ley de Bosques de Puerto Rico". En Puerto Rico existen muchas veredas en bosques estatales y otros terrenos públicos naturales pero éstas no son conocidas por los ciudadanos. Además existen en Puerto Rico caminos reales construidos en el siglo pasado y caminos de acceso a las playas que han sido cerrados a pesar de ser de uso público y por tanto bienes de dominio público. Por eso es necesario un registro de los caminos reales y de accesos a las playas para estos propósitos.

El Gobernador Pedro Rosselló, dió el primer paso al suscribir el 29 de abril de 1994 el documento final del Puerto Rico Statewide Comprehensive Outdoor Recreation o Plan 1994-1998(SCORP). Dicho documento constituye la política pública para la recreación al aire libre del Gobierno de Puerto Rico. En su capítulo 5 se presenta el plan de veredas naturales en Puerto Rico como una descripción general y una matriz de 116 lugares donde existen o se pueden establecer veredas, y posibles corredores de veredas. Es imperativo convertir la política pública del capítulo 5 del SCORP en ley y terminar el trabajo iniciado por el documento de hacer un registro completo que esté disponible al público. Es la obligación del estado promover la salud mental y física del individuo por lo que se debe fomentar la participación de la ciudadanía en estas únicas actividades recreativas. Además dicho registro ayudará a fomentar el ecoturismo y atraer turistas a nuestra isla.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.-Política Pública

Por la presente se declara que la política pública del Gobierno de Puerto Rico es fomentar el ciclismo de la montaña, la navegación en Kayaks o canoas y la caminata. A tales efectos, se ordena a los departamentos, agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico a identificar áreas bajo su jurisdicción donde existen o se puedan establecer o construir veredas o caminos para viandantes o ciclistas de montaña. Se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a establecer veredas o caminos de tierra o grava para viandantes en todos los bosques estatales, reservas naturales y otros terrenos públicos bajo su administración. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales establecerá veredas acuáticas, ecuestres y de ciclismo de montaña en aquellas áreas donde las condiciones topográficas lo permitan y no haya impactos significativos al medio ambiente.

Además, se declara que los caminos reales que fueron construídos en el siglo pasado y los accesos existentes desde tiempo inmemorial a las playas y zona marítima-terrestre son de uso público y no podrán ser cerrados excepto por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales por razones de conservación de recursos naturales. Estos caminos deberán ser convertidos por el Gobierno de Puerto Rico en veredas naturales para ser incluidos en el Registro creado en el Artículo 2.

Artículo 2.-Creación de Registro

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en coordinación con el Comité Técnico, que más adelante se creará, preparará un registro que deberá incluir la ubicación de los terrenos administrados por esta agencia en un mapa topográfico del Servicio Geológico Federal, el nombre oficial del terreno, el acceso a la vereda por carretera pública, la longitud de las veredas, las características naturales principales de los terrenos, un mapa que identifique los caminos o veredas, los usos principales permitidos en las veredas, usos relacionados que no estén directamente relacionados con las veredas, el nombre y teléfono de las personas autorizadas por esta agencia mediante concesión a ofrecer los usos principales y relacionados y cualquier otra información que entiendan que es pertinente. El registro podrá incluir también caminos o veredas en terrenos privados según lo dispuesto más adelante en el Artículo 4 de esta Ley. El registro estará disponible en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y en el Departamento de Recreación y Deportes. Se le proveerá copias a los ciudadanos de cualquier información contenida en el mismo, sujeto a un pago por reproducción de documento. Además se deberá publicar el Registro en la Red del Internet.

Artículo 3.-Junta Asesora

Se ordena a la Junta Asesora creada en el 1994 coordinar con los municipios y el sector privado la política implantada en esta Ley. Esta Junta debe incluir un representante de una asociación o federación de Vehículos Campo Traviesa (V.C.T.). La Junta deberá crear un comité técnico que estará a cargo de

cooperar con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en la preparación del registro de veredas naturales.

Artículo 4.-Reglamentación

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales establecerá los requisitos de los terrenos donde se establecerán las veredas naturales motorizadas y no motorizadas. El Departamento de Recreación y Deportes podrá establecer requisitos mediante reglamentación para la celebración de competencias de ciclismo de montaña y vehículos de campo traviesa. Los terrenos con caminos y veredas que cumplan con los requisitos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y con la reglamentación del Gobierno de Puerto Rico serán incluídos en el registro creado por esta Ley.

Artículo 5.-Certificación

Los dueños de los terrenos donde existan veredas naturales podrán solicitar la inclusión en el registro. Esta solicitud deberá contener una descripción del terreno, con sus principales características naturales y cualquier otra información pertinente que sea requerida por el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. El Secretario procederá a certificar el terreno como un área natural con veredas naturales cuando el dueño haya convenido por escrito cumplir con los requisitos establecidos por esta Ley y la reglamentación aprobada al amparo de ésta. Además el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales promoverá que estos terrenos sean dedicados a bosques auxiliares al amparo de la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, conocida como "Ley de Bosques de Puerto Rico".

Artículo 6.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. "

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2645, la cual ha sido descargada de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas ceder en usufructo al Municipio de Isabela, el solar y las edificaciones que formaban parte de la Escuela Ulises Pellot del barrio Galateo Bajo de dicha municipalidad, a los fines de habilitar un centro de vida independiente y rehabilitación para personas con limitaciones visuales y auditivas.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La Región Oeste de la Isla de Puerto Rico está desprovista de centros en los que se brinde ayuda a personas de limitaciones visuales y auditivas. Dichas personas tienen que trasladarse al área metropolitana para recibir adiestramientos de cómo realizar su vida de forma independiente lo que dificulta su acceso a estas oportunidades.

La Escuela Ulises Pellot del barrio Galateo Bajo fue cerrada y su población escolar trasladada a otra escuela, por lo que ya no resulta de uso público. La misma podría ser remodelada o reconstruida para los fines propuestos. A estos efectos, se debe ceder en usufructo dicha edificación escolar y el terreno donde enclava la misma al Municipio de Isabela.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas ceder en usufructo al Municipio de Isabela, el solar y las edificaciones que formaban parte de la Escuela Ulises Pellot del barrio

Galateo Bajo de dicha municipalidad, a los fines de habilitar un centro de vida independiente y rehabilitación para personas con limitaciones visuales y auditivas.

Sección 2.-Autorizar al Municipio de Isabela para realizar todas las gestiones necesarias para que se efectúe lo que dispone esta Resolución Conjunta, ante cualquier Departamento, Agencia, Junta, Oficina o Corporación del Gobierno de Puerto Rico.

Sección 3.-Eximir en el otorgamiento del instrumento público para la cesión en usufructo de la Escuela Ulises Pellot, a tenor con lo dispuesto en esta Resolución Conjunta, de la cancelación de derechos notariales, y del pago de derechos de clase alguna en la inscripción en el Registro de la Propiedad.

Sección 4.-Eximir al Municipio de Isabela de la obligación de prestar fianza.

Sección 5.-El usufructo que aquí se ordena concluirá seis (6) meses antes de que vaya a iniciarse en ese inmueble la construcción de alguna obra pública por el Gobierno Estatal; cuando el Municipio de Isabela no le haya dado ningún uso público al inmueble por espacio de dos (2) años; o cuando el Municipio de Isabela y el Departamento de Transportación y Obras Públicas así lo convengan.

Sección 6.-Una vez advenga en posesión del inmueble cedido, el Municipio de Isabela será responsable del mantenimiento y de las reparaciones, ordinarias o extraordinarias, que sea necesario realizar.

Sección 7.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Concurrente del Senado 70, la cual ha sido descargada de la Comisión de Reglas y Calendario.

**"RESOLUCION CONCURRENTE**

Para derogar el inciso (k), enmendar los incisos (b), (d), (e), (g), (i), (j), (l), (m), (s) y (x), y renumerar los incisos (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x) e (y), como (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w) y (x) de la Sección 2; enmendar la Sección 3; enmendar los incisos (c), (j) y (m), y añadir un nuevo inciso (n) de la Sección 5; enmendar la Sección 11, de la Resolución Concurrente del Senado Núm. 11, y para otros fines.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, en su empeño por cumplir cabalmente sus funciones, ha establecido a través de los años entidades de apoyo cuya asistencia ha sido de vital importancia para el desempeño de la labor legislativa. A esos fines, se creó la Oficina de Consultas Legislativas mediante la Ley Núm. 397 de 12 de marzo de 1947.

El 14 de noviembre de 1953, los presidentes de las Cámaras Legislativas encomendaron la realización de un estudio y preparación de un informe con las recomendaciones pertinentes hacia la creación de una Oficina de Servicios Legislativos en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, similar a la que funciona para el Congreso de los Estados Unidos y otros Cuerpos Legislativos estatales. El informe solicitado fue sometido a la Comisión de Actividades Conjuntas de la Asamblea Legislativa, y luego de realizarse varias enmiendas, fue aprobado por unanimidad el 27 de enero de 1954. Con la aprobación de este informe, quedó constituida la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

Desde ese entonces, la Oficina de Servicios Legislativos ha realizado una significativa y valiosa aportación en la gestión legislativa de nuestra Isla, rindiendo su necesaria labor con un alto sentido de misión de servicio al pueblo y a la Legislatura. La Oficina sirve a todos los legisladores de Cámara y Senado, de todos

los partidos políticos, que solicitan y utilizan sus servicios profesionales, así como a las comisiones y organismos legislativos.

La Oficina realiza una diversidad de funciones, de gran importancia para la misión que desempeña la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Entre las funciones principales que realiza esta Oficina están las siguientes: considerar y resolver consultas legales que les son sometidas; la redacción de anteproyectos de ley y de resoluciones, así como la revisión de medidas legislativas que preparan los legisladores; redactar opiniones de índole legal y constitucional a la Asamblea Legislativa y a los miembros que la componen en torno a legislación propuesta; la realización de estudios e informes relacionados con legislación y otros asuntos legislativos; proveer asesoramiento a las distintas comisiones legislativas y a los legisladores que interesan sus servicios para anteproyectos de legislación especial o general; facilita el proceso de buscar, obtener y mantener información de actualidad en torno a las interrogantes y problemas a que se enfrenta la Legislatura, relacionada con la organización y funcionamiento del Gobierno; traduce al inglés y al español anteproyectos de ley y resoluciones, estudios e informes de interés legislativo y las leyes aprobadas por el Gobernador, entre otras.

Las funciones que realiza la Oficina de Servicios Legislativos son de tal naturaleza que no solamente informan y contribuyen al proceso legislativo, sino que son necesarias y vitales para el continuo e ininterrumpido funcionamiento de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

Debido a la calidad, precisión y dedicación plena en el asesoramiento legal que la Oficina de Servicios Legislativos le ha brindado a la Asamblea Legislativa a través de los años, y particularmente por el hecho de tratarse de una instrumentalidad dentro de la misma rama de gobierno, se ha entendido apropiado dotar a la Oficina de Servicios Legislativos con la facultad de brindar representación legal a los miembros de la Asamblea Legislativa, sus dependencias, empleados y funcionarios, según se dispone en la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada.

En aras de poder cumplir con todos sus deberes y responsabilidades de manera más eficiente, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico enmienda la Resolución Concurrente del Senado Núm. 11 para así fortalecer la gestión de este baluarte legislativo.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1. Se deroga el inciso (k); se enmiendan los incisos (b), (d), (e), (g), (i), (j), (l), (m), (s) y (x); y se renumeran los incisos (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x) e (y), como (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w) y (x) de la Sección 2 de la Resolución Concurrente del Senado 11, para que se lea como sigue:

"Sección 2.- La Oficina de Servicios Legislativos en adelante la "Oficina", como organismo de apoyo al quehacer legislativo tendrá las siguientes funciones y facultades:

a) .....

b) *A solicitud de* **[Preparar y distribuir entre las]** agencias y entidades del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo los municipios, *preparará y distribuirá* modelos para la redacción de proyectos **[de resolución concurrente]**, *resoluciones* y otros documentos legislativos.

c) .....

d) **[Preparar y distribuir]** *A petición de cualquier miembro de la Asamblea Legislativa preparará y distribuirá* digestos que indiquen la práctica de otros cuerpos legislativos en asuntos de índole similar.

e) **[Realizar]** *Podrá realizar* estudios sobre las prácticas y procedimientos legislativos utilizados por la Asamblea Legislativa y someter recomendaciones para su mejoramiento y actualización *y participará en programas educativos o seminarios sobre la estructura, funcionamiento y el proceso legislativo de la Asamblea Legislativa.*

f) .....

g) **[Efectuar un estudio sistemático]** *A petición de cualquier miembro de la Asamblea Legislativa efectuará estudios* sobre de las leyes de Puerto Rico en vigor, con miras a su revisión y análisis continuo.

h) .....

i) **[Preparar]** *A petición de cualquier miembro de la Asamblea Legislativa efectuará* estudios sobre el impacto fiscal, económico, ambiental y social de cualquier proyecto, **[de]** resolución concurrente o resolución.

j) Preparar *anualmente* un Prontuario General de las leyes de Puerto Rico.

**[k) Recopilar, analizar y difundir información, así como realizar investigaciones y estudios sobre asuntos gubernamentales de carácter económico y fiscal, de comportamiento social y transformaciones sociológicas, de todo género en el campo de la administración pública, ambientales, técnicos y científicos para futura acción legislativa.]**

**[l)]** *k)* Informar a *las Comisiones con jurisdicción de* la Asamblea Legislativa sobre **[toda decisión judicial, estatal o federal que interprete]** *decisiones judiciales, estatales o federales que interpreten* la Constitución de los Estados Unidos de América o la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y **[cuya decisión requiera]** *que requieran* enmendar la legislación local a fin de cumplir con el mandato constitucional.

[m)] *l)* Recopilar e informar a *los Presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, así como a las Comisiones con jurisdicción de* la Asamblea Legislativa cualquier **[proyecto de resolución concurrente o resolución federal]** *medida legislativa federal* que pueda requerir acción legislativa local.

[n)] *m)*...

[o)] *n)*....

[p)] *o)*....

[q)] *p)* .....

[r)] *q)*....

**[s)]** *r)* **[Participar en programas educativos o seminarios sobre la estructura, funcionamiento y el proceso legislativo de la Asamblea Legislativa.]** *A solicitud escrita del Presidente de la Cámara de Representantes o del Presidente del Senado brindará representación legal a la Asamblea Legislativa o a cualesquiera de sus Cuerpos y comparecer en nombre de éstos ante el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico o ante un Tribunal de los Estados Unidos, sujeto a lo dispuesto en la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada.*

**[t)]** *s)* ...

**[u)]** *t)* Mantener una Sala de Primera Ayuda, que preste servicios y ayuda médica *en caso de emergencia* a los legisladores, funcionarios, empleados y visitantes de la Asamblea Legislativa y sus dependencias.

**[v)]** *u)* .....

**[w)]** *v)* .....

**[x)]** *w)* Cumplir con la Res. Conj. Núm. 234 de 22 de julio de 1995, *que dispone sobre la Oficina del Historiador Oficial de Puerto Rico.*

**[y)]** *x)* Cualquier otra función o deber necesario para llevar a cabo los propósitos de esta Resolución Concurrente."

Artículo 2. Se enmienda la Sección 3 de la Resolución Concurrente del Senado 11, para que se lea como sigue:

"Sección 3.- Los Presidentes del Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico nombrarán un Director, quien dirigirá la Oficina y desempeñará el cargo hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión del mismo.

El Director será el principal funcionario ejecutivo de la Oficina de Servicios Legislativos y estará encargado de todos los aspectos administrativos de ésta a tenor con las directrices que para ello establezcan los

presidentes de ambos Cuerpos Legislativos *y a lo dispuesto en esta Resolución Concurrente*. El cargo de Director sólo podrá ser desempeñado por una persona mayor de edad, de reconocida capacidad profesional, de reputación moral y conocimientos en el campo de la administración pública y la gestión legislativa. Los presidentes de ambos Cuerpos Legislativos podrán destituir al Director por conducta ilegal, inmoral o impropia, por incompetencia manifiesta, por desatender sus deberes, por estar incapacitado total y permanentemente, por haber incurrido en negligencia en el desempeño del cargo o cuando éstos lo estimen necesario para llevar a cabo los propósitos de la Oficina de Servicios Legislativos. El Director devengará el sueldo que determinen los presidentes de ambos Cuerpos Legislativos."

Artículo 3. Se enmiendan los incisos (c), (j) y (m); y se añade un nuevo inciso (n) a la Sección 5 de la Resolución Concurrente del Senado 11, para que se lea como sigue:

"Sección 5.- El Director tendrá las siguientes facultades y poderes:

(a) ....

(c) Clasificar al personal, establecer sus salarios, conceder aumentos, efectuar transferencias o despidos y destacar empleados para emplear sus destrezas técnicas en cualesquiera de los Cuerpos Legislativos, sujeto todo ello al reglamento que se apruebe a esos efectos. *Este reglamento se establecerá según lo dispuesto en el inciso (e) de esta Sección.*

(d) ....

(j) Adquirir por compra, arrendamiento, donación o de cualquier otra forma y mantener y disponer, por venta o arrendamiento de propiedad inmueble y mueble, de todo tipo que sea necesaria para o como resultado del ejercicio de la autoridad brindada por esta Resolución Concurrente. El Director tendrá que obtener autorización previa de ambos Presidentes para la compra o disposición de todo bien inmueble y bienes muebles que excedan de **[cinco]** *quince* mil **[(5,000)]** *(15,000)* dólares que no hayan sido contemplados en el presupuesto fiscal de la Oficina. El Director no tendrá que obtener dicha autorización para compras ordinarias que **[no excedan de cinco mil (5,000) dólares o]** estén contempladas en el presupuesto de la Oficina. *El Director adoptará, mediante reglamento, las normas y reglas necesarias para el cumplimiento de este inciso.*

(k) ....

(m) Preparar y someter **[el]** *un* informe anual **[que se requiere mediante el Artículo 13]** *no más tarde del 31 de diciembre de cada año, según dispuesto en la Sección 11* de esta Resolución Concurrente.

*(n) El Director podrá delegar en el Subdirector o, en la ausencia de éste, en cualquier otro director de Unidad, las funciones que establece la Sección 5 de esta Resolución Concurrente a los fines de cumplir adecuadamente con su mandato. Esta delegación deberá realizarse por escrito."*

Artículo 4. Se enmienda la Sección 11 de la Resolución Concurrente del Senado 11, para que se lea como sigue:

"Sección 11.- La Oficina de Servicios Legislativos someterá a la Asamblea Legislativa un informe annual de todas sus actividades durante el año natural **[anterior]** *que concluye*, no más tarde del **[28 de febrero]** *31 de diciembre* de cada año."

Artículo 5. Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Concurrente de la Cámara 66, la cual ha sido descargada de la Comisión de la Asamblea Legislativa para la Concesión de la Medalla de Excelencia Deportiva de la Legislatura de Puerto Rico.

"RESOLUCION CONCURRENTE

Para que la Asamblea Legislativa otorgue la Medalla de Excelencia Deportiva de la Legislatura de Puerto Rico a Don Reynaldo Luis "Pochy" Oliver Martínez, en reconocimiento a su vida dedicada a la juventud y al deporte puertorriqueño, por recomendación de la Comisión Conjunta de la Asamblea Legislativa para la concesión de este galardón.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Don Reynaldo Luis Oliver Martínez es el nombre de la persona que todos conocemos como "Pochy" Oliver, El Gallito Mayor o sencillamente "Pochy". Es el joven nacido en Ponce el 26 de marzo de 1932, que representó los colores del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, al que descubre a temprana edad en el Barrio Berlín de Ponce otro de los inmortales del deporte puertorriqueño el legendario Profesor Manuel González Pató a quien Pochy considera su segundo padre.

Pochy, obtuvo un Bachillerato en Educación con concentración en Educación Física de la Universidad de Puerto Rico, a la que representó en Béisbol, Tenis, Baloncesto, Volibol, Softbol, y en todos los eventos del Atletismo. Hubo ocasiones en las cuales él solo hacía más puntos en las Justas de Atletismo que el grupo completo de otras instituciones. Cursó estudios de Maestría en New York University. Comenzó su cátedra en el Recinto de Río Piedras en el año1963 y es el Coordinador de Programa de Deportes Interuniversitarios, posición que ocupa desde 1965. En el año1993 fue ascendido a Catedrático.

Estableció marcas en el evento de jabalina en los "Penn Relays" imponiéndose entre otros al entonces campeón mundial del evento, y en los Juegos Centroamericanos de 1954. Ganó medalla de bronce para Puerto Rico en los Juegos Panamericanos. Participó en las Olimpiadas en Finlandia en el año 1952 donde se izó la bandera monoestrellada por primera vez, fuera de Puerto Rico, y Australia en el año (1956). En este mismo año (1956), firma como pelotero profesional con los Cardenales de San Luis y jugó en Puerto Rico con Ponce en el año (1957), San Juan en el año (1962) y en Estados Unidos en la categoría Triple A. Fue además adiestrador de los Cangrejeros de Santurce por dieciseis (16) años.

Desde el año 1980, ostenta el puesto de Director Técnico de la Liga Atlética Universitaria, organiza las Justas de la Liga Atlética Universitaria y las del sistema de la Universidad de Puerto Rico. En 1979, fue nombrado Director Técnico de Atletismo en los Octavos Juegos Panamericanos celebrados en San Juan y ha sido coordinador técnico en casi todos los campeonatos de atletismo que se celebran en Puerto Rico.

Ese es a grandes rasgos Pochy Oliver, el atleta y siempre hombre del deporte. Siempre con ánimo, entusiasmo y deseoso de ayudar a sus semejantes, especialmente a los estudiantes. Su amor por el prójimo no tiene límites. Su carácter amable y disposición son sello distintivo de este buen puertorriqueño que es símbolo patrio de la buena convivencia y de saber cultivar la amistad dentro y fuera del deporte.

Al otorgar esta medalla, la Asamblea Legislativa reconoce a un ser humano cuya vida ha sido, es y siempre será el deporte y la juventud puertorriqueña. Del Barrio Berlín de Ponce para todo Puerto Rico, en palabras de Don Gabino Irizarry, "el atleta más polifacético que haya parido nuestra patria".

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Otorgar la Medalla de Excelencia Deportiva de la Legislatura de Puerto Rico a Don Reynaldo Luis "Pochy" Oliver Martínez en reconocimiento a su vida dedicada a la juventud y al deporte puertorriqueño, por recomendación de la Comisión Conjunta de la Asamblea Legislativa para la concesión de este galardón.

Sección 2.-La Asamblea Legislativa entregará el galardón a Don Reynaldo Luis "Pochy" Oliver Martínez, en una Sesión Conjunta Especial a la que se invitará a familiares, compañeros y amigos.

Sección 3.-Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Relación de Proyectos radicados en Secretaría.

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba.

## RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

La Secretaría da cuenta de la segunda Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones Conjuntas y Resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, de la lectura se prescinde a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz.

## PROYECTOS DE LA CAMARA

P. de la C. 3391
Por el señor Chico Vega:

"Para enmendar el Artículo 1215 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, a los fines de capacitar a los menores entre las edades de 18 y 21 años que posean negocio o industria para ejercer todos los actos civiles relacionados con su administración, sin la necesidad del consentimiento de sus padres."
(COMISION CONJUNTA PERMANENTE PARA LA REVISION Y REFORMA DEL CODIGO CIVIL DE PUERTO RICO DE 1930)

P. de la C. 3426
Por el señor Cintrón García:

"Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 y 18 de la Ley Núm. 171 de 31 de agosto de 1996, según enmendada, a los fines de atemperar sus disposiciones a los nuevos y contínuos cambios en los procesos o tecnologías relacionados al uso, manejo y disposición de neumáticos; enmendar disposiciones relacionadas con tarifas; y para otros fines."
(RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES Y ENERGIA; Y DE TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO)

P. de la C. 3428
Por el señor Misla Aldarondo:

"Para enmendar el Artículo 15.02 de la Ley Núm. 144 de 10 de agosto de 1995, conocida como "Ley General de Corporaciones de 1995", según enmendada, a fin de disponer que si una corporación dejare de radicar el informe anual requerido por Ley durante dos (2) años consecutivos, automáticamente quedará suspendida su personalidad jurídica, sin perjuicio y no podrá demandar ni ser demandada."
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO)

P. de la C. 3433
Por el señor Misla Aldarondo:

"Para establecer que todo profesional que sea contratado por una parte en un procedimiento judicial o administrativo para que intervenga como perito, depositará el adelanto o depósito de la cantidad total de honorarios, en los casos en que así lo solicite, en una cuenta bancaria especial."
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES)

P. de la C. 3436
Por el señor Vega Borges:

"Para enmendar el Artículo 196 de la Ley Hipotecaria de 1979, según enmendada."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 3437
Por el señor Vega Borges:

"Para enmendar el Artículo 1774 del Código Civil de Puerto Rico, para disponer los derechos que tendrá el acreedor hipotecario en un procedimiento de ejecución cuando su título no ha sido inscrito para disponer que esta ley tendrá vigencia durante cinco años."
(COMISION CONJUNTA PERMANENTE PARA LA REFORMA Y REVISION DEL CODIGO CIVIL DE 1930)

P. de la C. 3450
Por la señora Ruíz Class:

"Para enmendar el Artículo 107-A de la Ley Núm.- 115 de 22 de Julio de 1997, según enmendada, conocida como "Codigo Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de aumentar las penalidades dispuestas para el delito de Prostitución, y para otros fines."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 3480
Por el señor Vega Borges:

"Para enmendar el Artículo 1 (d) de la Ley Número 91 aprobada el 30 de mayo de 1970, según enmendada, a los fines de aclarar los derechos que se pagan por las notas marginales en los casos de los procedimientos ejecutivos ordinarios de hipoteca, según dispone el Artículo 185.1 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 3518
Por el señor Quiles Rodríguez:

"Para enmendar los Artículos 4 y 11 de la Ley Núm. 51 de 30 de junio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley de la Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe" a los fines

de atemperar la composición de la Junta de Directores de la Corporación a los cambios habidos a raíz de la Ley de Reforma de Salud, disponer sobre vacantes en caso de incapacidad y excluirla de la Ley de Sistema de Retiro de Empleados Públicos facultándola para crear su propio sistema."
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; Y LA COMISION ESPECIAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA ENTENDER CON LEGISLACION REFERENTE A LOS SISTEMAS DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS Y PENSIONADOS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO)

## RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA

R. C. de la C. 3336
Por el señor Díaz Sánchez:

"Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales evaluar la viabilidad de desarrollo de un bosque urbano en el terreno donde ubica el vertedero de San Juan y a la Autoridad de Desperdicios Sólidos a evaluar la compatibilidad con el Programa de Manejo de Desperdicios Sólidos el establecimiento de un centro de reciclaje en estos predios."
(RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES Y ENERGIA)

R. C. de la C. 3440
Por el señor García de Jesús:

"Para ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV) a otorgar título de propiedad de la parcela 330 de las Parcelas Rosa Sánchez, Sector Quilí del Municipio de Yabucoa, al matrimonio de Armando Rivera Colón S. S. 584-15-2535 y Maritza Castro Cruz S. S. 581-23-0363, conforme a lo establecido en la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, según enmendada."
(VIVIENDA)

R. C. de la C. 3459
Por el señor Vega Borges:

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales y al Departamento de la Familia, la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para que sean distribuidos de acuerdo a lo dispuesto en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 3460
Por el señor Misla Aldarondo:

"Para asignar la cantidad de seis millones setecientos treinta mil (6,730,000) dólares mediante las siguentes agencias y/o entidades del Gobierno Estatal y Municipal de Puerto Rico para la realización de las obras y mejoras permanentes descritos en la Sección 1 con el fin público de proveer para el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía; y para autorizar la aceptación de donaciones, el traspaso, la contratación de las obras y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 3462
Por los señores Misla Aldarondo y Vega Borges:

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, a los fines de ser transferidos a las personas y organizaciones aquí descritas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia."
(HACIENDA)

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se comience con la consideración del Calendario de Ordenes Especiales del Día.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba.

**CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA**

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2456, titulado :

"Para adicionar los incisos (d), (e) y (f) al Artículo 5.1 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada conocida como "Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" a fin de proteger a todo ciudadano privado o cualquier funcionario o empleado público de actuaciones adversas en su contra por parte de su patrono por haber denunciado actos ilegales en el servicio público."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contendidas en el informe.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2489, titulado :

"Para enmendar el Artículo 117-A de la Ley Núm. 115 de 24 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de tipificar como delito transmitir anuncios obscenos a través de la televisión."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contendidas en el informe.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueban.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2624, titulado :

"Para enmendar los sub-incisos (ii), (iii) y (iii), del inciso (g) del Artículo 22 de la Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999 conocida como "Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico" a los fines de reglamentar distintas modalidades de anuncios y aceras y otras propiedades públicas."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que esta medida se deje para un turno posterior.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 3325, titulado :

" Para enmendar el inciso (r) del Artículo 2.04 de la Ley Núm. 149 de 5 de julio de 1999, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico", a fin de disponer que las escuelas podrán organizar programas con la cooperación de instituciones y entidades de la comunidad."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2888, titulado :

"Para enmendar el inciso (3) y adicionar un nuevo inciso (16) al Artículo 11 y enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 214 de 14 de octubre de 1995, según enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar el Negocio de Intermediación Financiera" a los fines de incluir las manifestaciones falsas y la competencia desleal o ilegal entre las prácticas prohibidas, incluir a directores, oficiales y empleados como personas a las cuales se les prohibe incurrir en ciertas prácticas, señalar como infractores a cualquier persona que tome parte, instigue o coopere en la comisión de las prácticas prohibidas, tipificar como delito grave algunas de estas prácticas e imponer la pena de restitución y para otros fines."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueban.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay enmiendas al título.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2995 titulado :

"Para añadir el apartado (c) a la Sección 2010 y enmendar el apartado (a) de la Sección 2011 del Capítulo 2 del Subtítulo B de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de establecer que los impuestos correspondientes bajo estas secciones se computarán utilizando como base la temperatura corregida a 60 grados Farenheit (F)."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que esta medida se deje para un turno posterior.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2969, titulado :

"Para establecer el Programa para el Sustento de Personas de Edad Avanzada, adscrito a la Administración para el Sustento de Menores; establecer mecanismos administrativos y judiciales para que personas de edad avanzada con necesidad de alimentos de sus descendientes puedan utilizar dichos mecanismos para facilitar la localización de alimentantes, el establecer el monto de pensiones alimentarias para personas de edad avanzada; el cobro y distribución de las mismas y procedimientos y remedios especiales con el fin de llevar a cabo los propósitos de esta Ley; para establecer metodología de utilización de recursos ya existentes dentro del Gobierno de Puerto Rico y proveer fondos para estos propósitos."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueban.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay enmiendas al título.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2927, titulada :

"Para ordenar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, luego de la celebración de la vista pública provista por la Ley Núm. 133 del 1 de julio de 1975, conocida como "Ley de Bosques de Puerto Rico" a proclamar los manglares en la Playa de la Sardinera, en el Municipio de Hatillo como Bosque Estatal."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueban.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 3173, titulada :

"Para designar las runias de la Ermita de Nuestra Señora del Rosario de Barinas en el Municipio de Yauco como lugar de valor histórico de Puerto Rico."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueban.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 3308, titulada :

"Para designar la Escuela Elemental del Barrio Florida del Municipio de Naguabo como "Escuela Elemental Lutgarda Rivera Reyes".

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueban.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe las enmiendas al título contenidas en el informe.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 3421, titulada :

"Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de veinticinco mil quinientos (25,500) dólares, para la realización de actividades dirigidas a mejorar la salud y calidad de vida, así como el bienestar social, deportivo y cultural de esa municipalidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados, la transferencia de los mismos e indicar su procedencia."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 3398, titulada :

Para asignar a varios Municipios y al Departamento de Recreación y Deportes -Región Carolina, la cantidad de trescientos mil ($300,000) dólares para realizar obras y mejoras permanentes, que propendan al bienestar y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36, según se detalla en la Sección 1 y para autorizar el pareo de los fondos asignados.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 3410, titulada :

Para asignar al Municipio de Arecibo, Distrito Representativo Núm. 14, la cantidad de treinta y siete mil seiscientos (37,600) dólares, para la realización de obras y mejoras permanentes, para autorizar la transferencia, contratación de las obras y el pareo de los fondos asignados.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 3417, titulada :

"Para asignar a la Universidad de Puerto Rico, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, la cantidad de once millones (11,000,000) de dólares para el pago de internos y residentes del Recinto de Ciencias Médicas y para autorizar el pareo de los fondos asignados."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 3411, titulada :

Para enmendar el inciso (a) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 411 de 28 de julio de 1994, a fin de modificar el destino de los fondos.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 3406, titulada :

Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de mil setecientos cuatro (1,704) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para compra de equipo, materiales, medicina, accesorios de oficina, escolares, deportivos, reparación de viviendas a personas de escasos recursos, donativos a estudiantes y personas necesitadas, aportaciones a instituciones cívicas, culturales y deportivas que operen sin fines de lucro, y para otras obras y actividades de interés social.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 3408, titulada :

Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de tres mil quinientos (3,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 506 de 21 de agosto de 1999, para ser transferidos a Senescencia Community Action, Inc., para realizar mejoras permanentes en dicho centro.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1920, titulado :

Para crear el Centro Municipal de Resolución de Conflictos, que tendrá por objeto prestar servicios de mediación, arbitraje y amigables componedores para la resolución de conflictos, controversias y pleitos, ya iniciados o potenciales; para proveer el método de compensación; para disponer los procedimientos a seguirse y para establecer la revisión judicial."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2303, titulado :

"Para enmendar el Artículo 13.012 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos" a los fines de permitir que dentro de los poderes otorgados a los municipios este la facultad de conceder variaciones de uso y variaciones de intensidad en construcción o uso para aquellos proyectos dentro de sus límites territoriales."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba.

- - - -

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Orlando Parga Figueroa, Presidente Accidental.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2491, titulado :

"Para autorizar a los municipios de Puerto Rico a disponer mediante venta de los solares municipales en usufructo a los ocupantes de los mismos por el valor nominal de $ 1.00, reconociéndose el usufructo hasta los ocupantes de tercera generación de los usufractuarios originales, facultar a la Oficina de Asuntos Municipales a promulgar la reglamentación al efecto y para otros fines."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, tenemos que dejar bien claro en el récord que la compañera Mercedes Otero está actuando hoy de Portavoz de la Delegación del Partido Popular y en el mismo día ha sido Portavoz y Presidenta en funciones del Senado de Puerto Rico, y queremos felicitarla.

SRA. OTERO DE RAMOS: Muchas gracias al señor Portavoz. La verdad es que es un honor para mí hacer el trabajo que sea necesario para que nuestra institución quede siempre como el mejor modelo frente al pueblo.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): Siempre es edificante cuando los partidos políticos tienen recursos de extraordinaria calidad humana en los que delegar funciones tan importante.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Gracias, señor Presidente.

Estamos en el Proyecto del Senado 2491, solicitamos su aprobación sin enmiendas.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): ¿No hay objeción? No habiendo objeción, así se dispone.

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para retornar al turno de Mociones.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): ¿No hay objeción? No habiendo objeción adelante.

## MOCIONES

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el Calendario, cuando comenzamos, habíamos actuado en el Proyecto del Senado 2489, por una equivocación de número. Vamos a solicitar en este momento la reconsideración de esa medida.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): ¿No hay objeción? No habiendo objeción, así se dispone.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se llame la medida.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): ¿No hay objeción? No habiendo objeción, adelante.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2489, en reconsideración, titulado :

"Para enmendar el Artículo 117-A de la Ley Núm. 115 de 24 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de tipificar como delito transmitir anuncios obscenos a través de la televisión."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que esta medida se deje para un turno posterior.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): ¿No hay objeción? No habiendo objeción, así se dispone.

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Entonces, señor Presidente, habíamos dejado en turno posterior el Proyecto del Senado 2624, vamos a solicitar que se llame en este momento.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): ¿No hay objeción? No habiendo objeción, así se dispone.

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2624, titulado :

"Para enmendar los sub-incisos (ii), (iii) y (iii), del inciso (g) del Artículo 22 de la Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999 conocida como "Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico" a los fines de reglamentar distintas modalidades de anuncios y aceras y otras propiedades públicas."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): No ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se dispone.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): ¿No hay objeción? No habiendo objeción, así se dispone.

PRES. ACC. (SR. MELENDEZ ORTIZ): Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): ¿No hay objeción? No habiendo objeción, así se dispone.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 2396, titulada :

"Para asignar a la Administración de Corrección la cantidad de doscientos mil dólares ($200,000.00) de fondos no comprometidos del Presupuesto General para sufragar los costos de la Primera Cumbre Correccional de las Américas."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): ¿No hay objeción? No habiendo objeción, así se dispone.

- - - -

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): Señora Senadora.

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, tenemos objeción a esta medida ¿Me permite hacer algunos comentarios sobre ella.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): Adelante.

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, esta medida es para asignar a la Administración de Corrección la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, de fondos no comprometidos del Presupuesto General, para sufragar los costos de la Primera Cumbre Correccional de las Américas. Si bien es cierto que nosotros debemos de participar en cada cumbre para demostrar lo que hemos hecho, no es menos cierto que en estos momentos el Sistema Correccional pasa por una crisis donde ahora mismo los oficiales de custodia están sin uniformes porque no había dinero suficiente para darles tres (3) uniformes a cada guardia. Y los custodios, donde hay diecisiete mil (17,000) custodios - un poquito más - tampoco han podido tener sus uniformes porque tampoco hubo el dinero suficiente para hacerles por lo menos dos (2) uniformes. Yo creo que gastar doscientos mil (200,000) dólares en una cumbre cuando realmente el Sistema Correccional está padeciendo de unas situaciones difíciles donde no se están comprando los uniformes ni para los guardias ni para los confinados es algo que nosotros no podemos avalar. Yo creo que hay unas prioridades y dentro de esas prioridades nosotros entendemos que realmente que deberían adjudicarse aquellas cosas que son necesarias, no solamente para la seguridad del pueblo, sino también para mejorar, para motivar, especialmente a los empleados que tienen que trabajar con esta medida. Yo entiendo que ante las circunstancias que tenemos de un Sistema Correccional que deja mucho que desear en estos momentos tengamos una Primera Cumbre de la Américas, ¿para demostrar qué? Lo mal que estamos. Realmente esto no se sostiene. Yo me siento muy orgullosa de que nosotros tengamos muchas cumbres en aquellas áreas donde nosotros podemos aportar. Pero ahora mismo, el caso Morales Feliciano, que esta pendiente en un tribunal, ha escrito unos informes nefasto con relación a la salud correccional y con relación al Sistema Correccional donde dice que ha habido negligencia y que ha habido negligencia deliberada. Y nosotros ahora vamos a estar en esa Cumbre, para demostrarles a los demás el informe que el mismo Tribunal ha sometido sobre lo mal que funciona el Sistema Correccional. Nosotros entendemos que nos tenemos que abstener de esta medida. No porque la Cumbre no se dé, sino porque creemos que debe haber dinero envuelto para pagar una cumbre cuando hay tanta necesidad en el Sistema Correccional.

SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): Señor Portavoz.

SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Señor Presidente, por las razones que ha dicho la distinguida compañera no me puedo abstener, tengo que votarle en contra. Yo no veo como es posible no votarle en contra a esto por todo lo que ella dijo y además en una situación en que, ayer mismo, tenemos conocimiento ya público de que se escaparon cuatro (4) más de unas instituciones correccionales. Yo creo

que esto es doscientos mil (200,000) dólares para gastos publicitarios. Eso es lo que es. No es para una Cumbre, es para gastos publicitarios para tratar de lavarle la cara publicitariamente a un Sistema Correccional que no está funcionando, que no está haciendo lo que debe hacer y que no está cumpliendo, ni siquiera con la ley, con el derecho aplicable. Por esas razones yo quiero consignar mi voto en contra de esta medida.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): Señora Senadora.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, si alguien ha sido critica consistente del sistema nuestro es esta Senadora que preside la Comisión de Seguridad Pública. Que me consta muchos de los defectos de los que todavía adolece al sistema, que lo hemos señalado y que no lo escondemos. Sin embargo, nosotros tenemos que estar claros en que ha habido un cambio significativo durante esta Administración en términos del Sistema Correccional y de Rehabilitación. Esta propia Asamblea Legislativa, que se ha beneficiado de los sabios, prudentes y muy buenos consejos de la señora senadora Otero de Ramos, una de las mejores administradoras del Sistema, una de las personas que más conoce en Puerto Rico sobre este tema, han sido incorporados en mucha legislación que hemos atendido con mucha responsabilidad y con mucha seriedad.

Nosotros tenemos instituciones, son posiblemente, no el mejor ejemplo para presentar, pero sin embargo tenemos instituciones que son un buen ejemplo para presentar. Tenemos un Cuerpo de Oficiales Correccionales que no estará en su óptima condición de equipos, pero sin embargo, es un Cuerpo de Oficiales Correccional que sirve de ejemplo a otros que no tienen ni una tercera parte de lo que nosotros hemos logrado que este Cuerpo nuestro vaya adquiriendo. El Sistema Correccional, vuelvo y repito, no es perfecto pero tiene muchos adelantos y progresos que no tan sólo a nivel de Tribunal se han ido señalando y se han ido corrigiendo, Puerto Rico no es la única jurisdicción que ha sido objeto de pleitos a nivel de Tribunal entre confinados y el sistema. Pero el nuestro es uno que puede servir de modelaje a aquéllos que todavía están en la época de los curantismo y que tienen calabozos, que todavía tienen personas en condiciones infrahumanas, que todavía tienen personas que la propia alimentación, vestimenta, se las tienen que proveer los familiares. Personas que no son atendidos en lo absoluto en el área de la salud, ni de la rehabilitación. Y personas, que por lo menos en el nuestro, disfrutan de treinta cinco (35) pies cuadrado en las celdas que les corresponde pagar; porque están allí, no en un hotel. Están allí porque han incumplido con toda la reglamentación social. Fueron procesados, juzgados y convictos. Pero hay personas todavía en este sistema que vendrán a observar a estas personas que están tan hacinados que más, que mejores están los animales en la calles que lo que pudieran estar los otros confinados en el sistema. No es, ningún Sistema Correccional es para sentirse orgulloso en ningún país. Porque orgulloso se tendría que sentir el país que no tuviera Sistema Correccional. Sin embargo, nosotros tenemos uno que dentro de las circunstancias y dentro de la realidad es adecuado y aceptable. Propenso a mejorar. Reconocemos que tenemos que mejorar. Pero no tenemos porque sentirnos avergonzado de ello y debemos compartir con todas esas personas los conocimientos, la experiencia y los adelantos y buscar las alternativas para mejorarlo todavía más.

Bajo esa premisa, señor Presidente, entendemos que este dinero que se aporta para esta Cumbre es sencillamente una aportación del Gobierno para que las demás personas que vienen de otras jurisdicciones se puedan beneficiar de nuestras experiencias y nos puedan sugerir alternativas para mejorar el nuestro, si es que ellos la tienen. No vemos nada impropio en que se celebre, por el contrario, creo que todos lo debíamos apoyar porque todos vamos a aprender mucho de lo que aquí va a ocurrir.

Bajo esa premisa, señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida.

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, para un turno de rectificación.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): Señora senadora Mercedes Otero.

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, yo había decidido abstenerme, pero después de oír las palabras de la compañera y de reconocer que ella como Presidenta de la Comisión de Seguridad ha trabajado tanto para mejorar las alternativas del Sistema, y el primer problema que nos hemos encontrado es la poca comunicación entre la Secretaria y los demás miembros del Sistema Correccional, pues, no entiendo como podemos ahora votarle ni siquiera abstenido a una resolución donde no ha habido comunicación con esta Comisión de Seguridad. Se nos negó en dos (2) ocasiones la entrada a las cárceles, para ver lo que estaba bien y para ver lo que estaba mal. Y entonces ahora se hace una Cumbre para demostrarle al hemisferio lo bien que estamos. O sea, yo realmente me siento bien incómoda y no tengo que decir que hay algunas cosas que han mejorado, porque sí han mejorado. Pero la mayor parte de las cosas, empezando por la comunicación, empezando por el respeto a los Senadores que somos representantes del pueblo, pues me parece mí que realmente no se sostiene el que vayamos a decir en una Cumbre lo bien que estamos y entonces internamente no se nos permita ni siquiera una comunicación adecuada. Así es que por esas razones en vez de abstenerme le voy a votar en contra.

Pero definitivamente esto demuestra que lo que se va a decir es, pues hemos hecho esto bueno pero a nosotros que nos conste, que no nos han dejado entrar ni siquiera a las instituciones, no sabemos si esas cosas que está diciendo la Secretaria como publicidad son reales. Porque las cartas que yo recibo a diario y los presos que me llaman por celulares prohibidos, que a veces me da hasta bochorno porque no me quieren dar el nombre para yo poder decir que están haciendo mal, llamando desde unos celulares dentro de las instituciones, que nosotros tengamos que avalar una medida como ésta. Así es que votaremos que no.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, muy cierto es que la comunicación no ha sido de todo efectiva, pero esta Comisión se ha impuesto, ha obtenido sus resultados y se ha dado a respetar. Y nos tenemos reparos en que, independientemente de que haya algunas discrepancias entre la Administradora, la Secretaria y la Comisión, se puedan reconocer los logros y se pueda obtener información que ayude a mejorar el sistema y que a nosotros, propiamente, como legisladores, nos ayude, también, a establecer un nuevo proceso o a mejorar la legislación vigente.

Señor Presidente, que se apruebe la medida.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, la medida estaba aprobada cuando la compañera pidió el turno para unas expresiones.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 3197, titulado :

"Para establecer la política pública sobre veredas de viandantes, ciclistas de montaña, veredas acuáticas y ecuestres en Puerto Rico, crear el Registro de Veredas Naturales, la Junta Asesora y el Comité Técnico para implantar la política pública de esta Ley."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): ¿No hay objeción? No habiendo objeción, aprobada.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2645, titulada :

"Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas ceder en usufructo al Municipio de Isabela, el solar y las edificaciones que formaban parte de la Escuela Ulises Pellot del barrio Galateo Bajo de dicha municipalidad, a los fines de habilitar un centro de vida independiente y rehabilitación para personas con limitaciones visuales y auditivas."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): ¿No hay objeción? No habiendo objeción, aprobada.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Concurrente del Senado 70, titulada :

"Para derogar el inciso (k), enmendar los incisos (b), (d), (e), (g), (i), (j), (l), (m), (s) y (x), y renumerar los incisos (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x) e (y), como (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w) y (x) de la Sección 2; enmendar la Sección 3; enmendar los incisos (c), (j) y (m), y añadir un nuevo inciso (n) de la Sección 5; enmendar la Sección 11, de la Resolución Concurrente del Senado Núm. 11, y para otros fines."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): ¿No hay objeción? No habiendo objeción ...
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Señor Presidente, que se consigne mi abstención.
PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): ... aprobada, consignando la abstención del senador Rodríguez Orellana.
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, para consignar la abstención nuestra, también.
PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): Se consigna la abstención de la Delegación del Partido Popular.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Concurrente de la Cámara 66, titulada :

"Para que la Asamblea Legislativa otorgue la Medalla de Excelencia Deportiva de la Legislatura de Puerto Rico a Don Reynaldo Luis "Pochy" Oliver Martínez, en reconocimiento a su vida dedicada a la juventud y al deporte puertorriqueño, por recomendación de la Comisión Conjunta de la Asamblea Legislativa para la concesión de este galardón."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para esta medida, vamos a solicitar que se deje en un turno posterior.
PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): ¿No hay objeción? No habiendo objeción así se decide.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración de la Resolución Conjunta de la Cámara 3325, titulada :

"Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas la cantidad de trescientos cincuenta mil (350,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para llevar a cabo estudio y mensura de los terrenos de la Sucesión Rullán, donde ubican alrededor de 50 familias en el Sector Acueductos del municipio de Adjuntas, para la adquisición de los mismos y mejoras a la infraestructura y para autorizar el pareo de los fondos asignados."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 3325 la estamos entendiendo. Vamos a solicitar que esta medida se apruebe según fue aprobada por la Cámara.
PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): ¿No hay objeción? No habiendo objeción, aprobada.

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): Señor Portavoz
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para retornar al turno de Mociones.
PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): ¿No hay objeción? No habiendo objeción, así se dispone.

## MOCIONES

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la reconsideración del Proyecto del Senado 1920.
PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): ¿No hay objeción? No habiendo objeción, así se dispone.

## CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del Proyecto del Senado 1920, titulado :

"Para crear el Centro Municipal de Resolución de Conflictos, que tendrá por objeto prestar servicios de mediación, arbitraje y amigables componedores para la resolución de conflictos, controversias y pleitos, ya iniciados o potenciales; para proveer el método de compensación; para disponer los procedimientos a seguirse y para establecer la revisión judicial."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que esta medida se deje para un turno posterior.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): ¿No hay objeción? No habiendo objeción, así se dispone.

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Estamos en el turno de Mociones. Vamos a solicitar que se forme un segundo Calendario de Ordenes Especiales del Día, que incluya las siguientes medidas: Sustitutivo al Proyecto del Senado 2570, Resolución Conjunta de la Cámara 3163, Resolución Conjunta de la Cámara 3162, Proyecto del Senado 2189, Proyecto del Senado 2613, Proyecto del Senado 2535, Proyecto del Senado 2471, Resolución Conjunta del Senado 2531, Resolución Conjunta del Senado 2532, Resolución Conjunta de la Cámara 3151, Resolución Conjunta de la Cámara 3389, Resolución Conjunta de la Cámara 3404, Resolución Conjunta de la Cámara 3405, Resolución Conjunta de la Cámara 3407, Resolución Conjunta de la Cámara 3419, Resolución Conjunta de la Cámara 3420, Resolución Conjunta de la Cámara 3429, Resolución Conjunta de la Cámara 3434, Resolución Conjunta de la Cámara 3435, Resolución Conjunta de la Cámara 3437.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): Señor Portavoz, es para verificar que en la Resolución Conjunta de la Cámara 3155, creo que usted dijo 151.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, señor Presidente, es la Resolución Conjunta de la Cámara 3155.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): ¿¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se dispone.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, solicitamos que se forme un Calendario de Lectura de las medidas incluidas en el Calendario. Al cabo de la Lectura, señor Presidente que se decrete un receso de treinta (30) minutos.

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): ¿¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se dispone.

## CALENDARIO DE LECTURA

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee Sustitutivo del Proyecto del Senado 2570, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Educación y Cultura; y de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas.

## "LEY

Para adicionar el Artículo 7-A a la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, conocida como "Ley del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)", a fin de crear el cargo de Procurador Auxiliar Especializado en Educación en la Oficina del Procurador del Ciudadano.

## EXPOSICION DE MOTIVOS

El Sistema de Educación de Puerto Rico ha sufrido grandes cambios a través de los años. Desde sus comienzos, su propósito primordial ha sido garantizarles a todos los puertorriqueños el derecho a una

educación libre de costo para elevar su nivel de escolaridad y consecuentemente la calidad de vida, dentro de los valores morales y éticos que rigen nuestra cultura.

Hoy día, la sociedad exige que el Gobierno continúe ofreciendo un programa educativo que responda a las necesidades cambiantes de nuestra realidad sociocultural. Dentro de este sistema educativo, surgen controversias entre los padres, maestros o estudiantes que podrían afectar la consecución de los objetivos del Sistema y de los logros del estudiantado. El Procurador Auxiliar Especializado en Educación proveerá orientación a los maestros, estudiantes, padres o empleados del Sistema que aleguen la violación de algunos de sus derechos o el incumplimiento de alguna obligación de ley y ayudará a dirimir diferencias entre éstos, asegurándose el cumplimiento del proceso de la reforma estructural y funcional del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.- Se adiciona el Artículo 7-A a la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, para que se lea como sigue:

"*Artículo 7-A.- Procurador Auxiliar Especializado en Educación*

*Se crea el cargo de Procurador Auxiliar Especializado en Educación en la Oficina del Procurador del Ciudadano, el cual será desempeñado por una persona mayor de edad, que haya residido en Puerto Rico durante los cinco (5) años anteriores a la fecha de su nombramiento, y que además sea de reconocida capacidad profesional y probidad moral y que tenga conocimientos y experiencia en el campo de la educación, administración pública y la gestión gubernamental.*

*El Procurador Auxiliar Especializado en Educación, quien devengará un salario igual al que devengan los jueces del Tribunal de Primera Instancia, será designado por el Procurador del Ciudadano.*

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestras Comisiones de Educación y Cultura; de Gobierno y Asuntos Federales; y de Hacienda, luego de un ponderado análisis de la medida de epígrafe del cual surge un gran número de enmiendas que dan margen a la sustitución de la misma, se honran en rendir este Informe Conjunto recomendando la aprobación del Sustitutivo al P. del S. 2570, el cual se incluye.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

El. P. del S. 2570 estaba dirigido en su origen a crear la Oficina del Procurador de la Educación adscrita a la Asamblea Legislativa, disponer su organización y funcionamiento; establecer sus deberes y facultades; disponer los procedimientos para la implementación de esta Ley; y asignar fondos.

A medida de justificación, en parte de su exposición de motivos la medida indica que hoy día la sociedad exige que el Gobierno continúe ofreciendo un programa educativo que responda a las necesidades cambiantes de nuestra realidad sociocultural. Dentro de este sistema educativo, surgen controversias entre los padres, maestros o estudiantes que podrían afectar la consecución de los objetivos del Sistema y de los logros del estudiantado. El Procurador Auxiliar Especializado en Educación proveerá orientación a los maestros, estudiantes, padres o empleados del Sistema que aleguen la violación de algunos de sus derechos o el incumplimiento de alguna obligación de ley y ayudará a dirimir diferencias entre éstos, asegurándose

el cumplimiento del proceso de la reforma estructural y funcional del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico.

**ANALISIS**

Estas Comisiones celebraron vista pública sobre el contenido en la medida en las que participaron y aportaron sus respectivos testimonios funcionarios del Departamento de Educación, de la Oficina del Procurador del Ciudadano y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La fecha de esta audiencia fue el viernes 2 de junio de 2000.

Los testimonios vertidos en torno a esta medida hacen necesaria la introducción de enmiendas de tal magnitud que las Comisiones firmantes han creído prudente y conveniente la radicación de un proyecto sustitutivo que recoja todas las recomendaciones que durante el transcurso de la consideración de esta medida fueron recibidas y aceptadas.

El Sustitutivo al P. del S. 2570 que se acompaña a este informe refleja los siguientes cambios a lo propuesto en la medida original:

1. Se adiciona un Artículo 7-A a la Ley del Procurador del Ciudadano para crear el cargo de Procurador Auxiliar Especializado en Educación en la Oficina del Procurador del Ciudadano.
2. El Procurador Auxiliar Especializado en Educación devengará un salario igual al que devengan los jueces del Tribunal de Primera Instancia.
3. El Procurador Auxiliar Especializado en Educación será designado por el Procurador del Ciudadano.

Por todo lo antes expuestos, vuestras Comisiones de Educación y Cultura; de Gobierno y Asuntos Federales; y de Hacienda, recomiendan la aprobación del Sustitutivo al P. del S. 2570 que se incluye.

Respetuosamente sometido;

(Fdo.)
Carmen L. Berríos Rivera
Presidenta
Comisión de Educación y Cultura

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales

(Fdo.)
Hon. Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 3163, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Educación y Cultura, con enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para designar la Cancha de la Urbanización Los Dominicos, del Municipio de Toa Alta, como "Cancha José "Cheo" Medina Rivera".

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

Desde que llegó el señor José (Cheo) Medina Rivera a la Comunidad Los Dominicos hace más de veinte años, se integró a la labor cívica de ese sector, trabajando desinteresadamente junto a un grupo de ciudadanos residentes que querían desarrollar una comunidad íntegra.

Fue Presidente de la Asociación de Residentes desde el 1990 hasta el 1994 y luego se integró a la directiva de la Asociación Recreativa. Publicó el periódico de la comunidad "El Informante" y por tres años organizó "El Maratón del Pavo" que llegó a tomar renombre a nivel regional con la participación de deportistas de municipios aledaños.

Desde 1987 organizó y dirigió el Torneo de Volibol Femenino de Los Dominicos que este año está en su edición decimotercera y ha alcanzado reconocimiento a nivel estatal. Así también hizo con el Torneo de Baloncesto Masculino, organizándolo y colaborando por más de dieciseis (16) años, torneo que le ha permitido a muchos jóvenes de Los Dominicos lograr becas en distintas universidades de Puerto Rico y los Estados Unidos.

Cheo, como comúnmente se le conoce, está casado con Sonia Milagros Romero Salgado hace veinticuatro (24) años. Es el segundo de cinco hijos del matrimonio de Claudio Medina Vázquez y Luz María Rivera Rivera. Tiene dos hijos, Sonia Yadira y José Manuel, a quienes ama entrañablemente y que han sido para él fuente de inspiración en su labor cívica, en su trabajo y en la fe inquebrantable que tiene en Dios.

Es graduado de la Escuela Superior Papa Juan XXIII y posteriormente de la Escuela Vocacional Miguel Such de Río Piedras. Durante los últimos 22 años se ha desempeñado como Director de la Imprenta del Hotel Caribe Hilton. Su labor profesional de excelencia, al igual que su labor cívica ha sido premiada en múltiples ocasiones. En 1991 fue seleccionado como "Empleado Símbolo del Hotel Caribe Hilton", premio que le mereció ser reconocido en un acto oficial de esta cadena internacional de hoteles.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se designa la Cancha de la Urbanización Los Dominicos del Municipio de Toa Alta, como "Cancha José "Cheo" Medina Rivera".

Sección 2.-La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura Puertorriqueña, tomará las medidas necesarias para dar fiel cumplimiento a las disposiciones de esta Resolución Conjunta, sin sujeción a lo dispuesto en la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada.

Sección 3.-El Departamento de Recreación y Deportes dispondrá para la celebración de un acto apropiado en ocasión de tal designación, no más tarde de un año a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta.

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de Educación y Cultura; previo estudio y consideración de la Resolución Conjunta de la Cámara 3163, recomiendan a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida, con las siguientes enmiendas.

**En el Título:**

Página 1, Línea 1 y 2 eliminar todo su contenido y sustituir por "Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura Puertorriqueña que denomine a la Cancha de la Urbanización Los Dominicos, del Municipio de Toa Alta, con el nombre de "Cancha José "Cheo" Medina Rivera", y para que el Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico tome las medidas necesarias para la celebración de un acto apropiado".

**En el Resuelvese:**

Página 2, Líneas 1 a la 6 eliminar todo su contenido y sutitutir por
Sección 1.-Se ordena a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura Puertorriqueña que denomine a la Cancha de la Urbanización Los Dominicos del Municipio de Toa Alta, con el nombre de "Cancha José "Cheo" Medina Rivera".
Sección 2.- La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura Puertorriqueña, tomarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Resolución Conjunta."

## ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito de la Resolución Conjunta de la Cámara 3163 es para designar la Cancha de la Urbanización Los Dominicos, del Muncipio de Toa Alta, con el nombre de "Cancha José "Cheo" Medina Rivera".

Las comunidades son honradas por el desempeño de sus habitantes. En el caso del Municipio de Toa Alta, es uno que representa esta acierto en la aportación de el señor José (Cheo) Medina Rivera para la comunidad Los Dominicos a la cual ha servido por los últimos veinte (20) años.

El señor Medina, ha ocupado diversas posiciones en su larga trayectoria de servicios cívicos y deportivos. Publicó un periódico local (El Informante) para mantener su Comunidad al día con todos los asuntos.

Organizó el "Maratón del Pavo" de gran trascendencia, de igual forma el Torno de Volibol Femenino de los Dominicos el cual lleva trece (13) años celebrándose. Organizó además el Torneo de Baloncesto Masculino, por más de dieciseis (16) años. Ha formado una familia ejemplar con su esposa Sonia Milagros Romero Salgado y los hijos Sonia Yadira y José Manuel.

El denominar la Cancha de la Urbanización Los Dominicos de Toa Alta como Cancha José "Cheo"Rivera, es hacer justicia al quehacer cívico desinteresado de este gran toalteño. Es necesario añadir que es graduado de la Escuela Vocacional Miguel Such de Río Piedras lo cual lo cualifico en el oficio de

artes gráficas, durante los últimos 22 años de ha desempeñado como Director de la Imprenta de del Hotel Caribe Hilton, recibiendo el mérito de ser "Empleado Símbolo del Hotel Caribe Hilton de 1991".

En reunión ejecutiva celebrada, luego de la análisis de la medida y por las razones previamente expuestas los miembros de la Comisión de Educación y Cultura; recomienda la aprobación de la R. C. de la C. 3163, con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carmen L. Berríos Rivera
Presidenta
Comisión de Educación y Cultura"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 3162, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Educación y Cultura, con enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para designar el Parque Recreativo de la Urbanización Los Dominicos, del Municipio de Toa Alta, como "Parque Recreativo Florentino "Pirata" Rivera".

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

El señor Florentino Rivera ha luchado, desde niño en el Barrio Pasarell del Municipio de Comerío, por alcanzar ideales de excelencia hasta lograrlos; así también, cuando llegó a Los Dominicos se integró a los movimientos cívicos que comenzaron a surgir para la década de los ochentas. En 1979 comenzó a planificar el Primer Torneo de Baloncesto con el fin de promover la sana convivencia entre la juventud y sus padres. Desde entonces, por varios años fue Presidente del Comité de Deportes y Director de Torneo. Del 1987 al 1989 fue Presidente de la Asociación de Residentes de Los Dominicos y en 1991 y 1992 el Departamento de Recreación y Deportes, así como la Compañía de Fomento Recreativo le reconocieron por sus ejecutorias como "Líder, Promotor y Forjador de Juventudes y Ciudadanos del Futuro".

Fue ese afán por alcanzar metas que parecen imposibles lo que lo llevó a pensar, primero en una cancha bajo techo para Los Dominicos, en una época donde ni siquiera se soñaba con las canchas bajo techo para las comunidades, logrando su propósito. Más adelante soñó con una pizarra eléctrica para la cancha, también cuando solo las canchas profesionales y las de algunos prestigiosos colegios las tenían y también lo logró.

Sus logros han dejado huellas indelebles en la comunidad y fuera de ella. Formó parte en su empresa de la producción de un evento que también ha dejado huellas en la juventud puertorriqueña: Las Justas Colgate y siempre dice presente cuando se le solicita cooperación para beneficio de los jóvenes deportistas.

Está casado con Nelly Rivera, con quien procreó tres hijos; los tres destacados deportistas en los Torneos de la Comunidad. Posee un Bachillerato en Administración de Empresas con especialización en Mercadeo del hoy Colegio Universitario de Bayamón (CUB).

Forjador de ideas y sueños; hacedor de tareas difíciles, de las que nadie se atreve hacer realidad y que él solo con su empeño y su quehacer logra convertir en provechosa gestión para quienes las disfrutan.

Es un "pirata" que navega por los mares de las injusticias y las desventajas para poder entregarles tesoros llenos de vivencias que hacen realidad el amor y la sana convivencia en aquellos entornos donde se desempeñan.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se designa el Parque Recreativo de la Urbanización Los Dominicos del Municipio de Toa Alta como "Parque Recreativo Florentino "Pirata" Rivera".

Sección 2.-La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura Puertorriqueña, tomará las medidas necesarias para dar fiel cumplimiento a las disposiciones de esta Resolución Conjunta, sin sujeción a lo dispuesto en la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada.

Sección 3.-El Departamento de Recreación y Deportes dispondrá para la celebración de un acto apropiado en ocasión de tal designación, no más tarde de un año a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta.

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de Educación y Cultura; previo estudio y consideración de la Resolución Conjunta de la Cámara 3162 recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida, con las siguientes enmiendas.

**En El Título:**

Página 1, Líneas 1 y 2 — eliminar todo su contenido y sustituir por "Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que denomine al Parque Recreativo dela Urbanización Los Dominicos, del Municipio de Toa Alta, con el nombre de "Parque Recreativo Florentino "Pirata" Rivera", y para que el Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico tome las medidas necesarias para la celebración de un acto apropiado".

**En El Resuelvase:**

Página 2, Líneas 1 a la 6 — eliminar todo su contenido y sustituir por "Sección 1.- Se ordena a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que denomine el Parque Recreativo de la Urbanización Los Dominicos del Municipio de Toa Alta, con el

nombre de "Parque Recreativo Florentino "Pirata" Rivera".

Sección 2.- La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Instituto de Cultura Puertorriqueña, tomarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Resolución Conjunta."

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

El propósito de la Resolución Conjunta dela Cámara 3162, es para designar el Parque Recreativo de la Urbanización Los Dominicios, del Municipio de Toa Alta, como "Parque Recreativo Florentino "Pirata" "Rivera".

Oriundo de Comerío; Florentino Rivera se ubicó en la Urbanización Los Dominicos del Municipio de Toa Alta, llevando a feliz término sus ambiciones que desde niño florecieron en el Barrio Pasarell.

Desde su llegada para el año 1979, comenzó a planificar el Primer Torneo de Baloncesto pro sana convivencia entre la juventud y su padres. Presidió el Comité de Deportes y Director de jóvenes. Presidió la Asociación de Residentes de Los Dominicos por dos años.

La Compañia de Fomento Recreativo lo reconoció como "Líder, Promotor y Forjador de Juventudes y Ciudadanos del Futuro".

Por su esfuerzo logró equipar la cancha con un techo y una pizarra electrónica que solo tenían las canchas profesionales. Un evento que organizó con gran sacrificio para la juventud es el de las Justas Colgate.

Casado con la señora Nelly Rivera, con quien procreó tres hijos, los tres destacados deportistas en los Torneos de la Comunidad. Es graduado del Colegio Universitario de Bayamón. Se le conoce cariñosamente como Florentino "Pirata" Rivera.

En reunión ejecutiva celebrada, luego del análisis de la medida y por las razones previamente expuestas los miembros de las comisión de Educación y Cultura; recomienda la aprobación de la R. C. de la C. 3162, con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carmen L. Berríos Rivera
Presidenta
Comisión de Educación y Cultura"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2189, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Municipales, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales" a fin de establecer el proceso de elección de alcalde a la Junta de Gobierno del Centro, cuando ocurra una vacante.

## EXPOSICION DE MOTIVOS

El Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales es la entidad de servicios fiscales cuya responsabilidad primaria es recaudar, recibir y distribuir los fondos públicos provenientes de las contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble que corresponden a los municipios. El Centro, en coordinación con los municipios, tiene la responsabilidad de llevar a cabo los procesos de tasación, notificación, imposición, cobro y distribución de la contribución de la propiedad.

El Centro está dirigido por una Junta de Gobierno integrada por nueve (9) miembros, de los cuales siete (7) son Alcaldes en representación de todos los municipios de Puerto Rico y los restantes dos (2) miembros lo son el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento y el Comisionado de Asuntos Municipales. La implantación de la política pública definida por la Junta al igual que las operaciones del Centro serán responsabilidad del Director Ejecutivo.

En la actualidad la Ley 80, supra, establece que cuando ocurra una vacante entre los alcaldes incumbentes de la Junta será cubierta convocando a todos los alcaldes a una asamblea de elección. De los siete (7) miembros alcaldes de la Junta, cuatro (4) de los alcaldes miembros de la Junta deberán pertenecer al partido que hubiere ganado el mayor número de municipios en las elecciones generales. Los restantes tres (3) miembros se seleccionarán de entre los demás alcaldes que hayan ganado municipios en dicha elección general. Para cubrir dicha vacante se convocará a una asamblea a todos los alcaldes incumbentes y se constituirá quórum por dos terceras (2/3) partes del total de alcaldes.

La intención de esta medida va dirigida a que solamente sean convocados los miembros alcaldes del mismo partido de aquel alcalde que generó la vacante. De esta forma se elegirá un nuevo miembro alcalde de la Junta de entre los mismos miembros del mismo partido, esto a su vez evitará convocar alcaldes de otro partido para solucionar controversias de alcaldes de otra colectividad.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales" para que se lea como siga:

"Artículo 5 Junta de Gobierno – Integración

El Centro será .....

a) Elección de Alcaldes miembros de la Junta - .....

b) Asamblea de Elección – **[ La Asamblea para los miembros iniciales de la Junta que representará a los municipios se celebrará no mas tarde de treinta (30) días siguientes a la fecha de aprobación de esta ley.]** La Asamblea para la elección de los Alcaldes miembros de la Junta deberá celebrarse no más tarde de los treinta (30) días siguientes al segundo lunes del mes de enero siguiente a cada elección general.

El quórum .....

c) Vacantes.- Toda vacante que ocurra entre los alcaldes miembros de la Junta será cubierta dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de efectividad de la misma [ ,

**siguiendo el mismo procedimiento que se utilizó para elegir el Alcalde que generó la vacante].** El nuevo miembro ocupará el cargo por el término no cumplido del miembro sustituido. Para cubrir dicha vacante solamente se *covocarán y* considerarán aquellos alcaldes pertenecientes al mismo partido del miembro que ocasionó la vacante. *El quórum para dicha asamblea quedará constituido por dos terceras (2/3) partes del total de alcaldes incumbentes pertenecientes al mismo partido y se requerirá el voto afirmativo de la mayoria de los presentes en la Asamblea para declarar electo al alcalde miembro de la Junta.* Cuando un alcalde que sea miembro de la Junta cese en su cargo de alcalde, por cualquier causa, quedará vacante automáticamente la posición que ocupaba en la Junta."

Artículo 2.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente despúes de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de Asuntos Municipales previo estudio y evaluación del P. del S. 2189, tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida con enmiendas.

**En el Texto:**

| | |
|---|---|
| Página 3, línea 7 | despues de "partido" añadir ". De no haber el quórum de 2/3 partes en la primera convocatoria se convocará nuevamente y constituirá quórum el cincuenta por ciento (50%) del total de los alcaldes incumbentes pertenecientes al mismo partido;" |

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

El propósito del P. del S. 2189 propone enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según enmendada conocida como "Ley del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales" a fin de establecer el proceso de elección de Alcalde a la Junta de Gobierno del Centro, en cuanto ocurra una vacante.

La presente medida fue discutida en vista pública el miércoles 8 de marzo de 2000 en el salón María Martínez. A dicha vista fueron citados a deponer las siguientes agencias:

a) La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM)
b) La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (CRIM)
c) El Centro de Recaudaciones e Ingresos Municipales
d) La Federación de Alcaldes de Puerto Rico
e) El Departamento de Justicia

En su memorial el Departamento de Justica entiende claramente el propósito y alcance de la medida. El presente proyecto clarifica el proceso que actualmente se utiliza cuando exista una vacante a la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. El Departamento de Justicia establece que es razonable que se convoque a la asamblea de elección de dichos funcionarios aquellos alcaldes pertenecientes al mismo partido del miembro que ocasionó la vacante. La propuesta enmienda, además considera que el quórum de 2/3 partes necesario para tomar dicha votación debe ser contando los

alcaldes del mismo partido que el alcalde que ocasionó la vacante. En resumen el Departamento de Justicia no tiene objecion legal a la aprobación final de esta medida, ya que considera que su intensión es facilitar los procesos de elección de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales, cuando se genera una vacante.

El Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales presentó su memorial donde planteó su posición con respecto al proyecto en discusión . Este propone una enmienda sobre el quórum para la susodicha asamblea. Entienden que debe de ser el cincuenta por ciento (50) más uno de todos los alcaldes. Se desprende de la realidad y de las demás ponencias que esta opción en nada garantiza ni responsabiliza a los miembros del partido del Alcalde que ocasione la vacante. La mera ausencia de los Alcaldes del mismo partido del que generó la vacante a la Asamblea de sustitución, inmoviliza el proceso de elección.

La intención legislativa va encaminada a garantizar el que se pueda sustituir o llenar una vacante creada por cualquier Alcalde, no importando de que partido sea. Esta medida obliga a la delegación de cualquier partido a aceptar la responsabilidad contraída con el pueblo y con la Junta de Gobierno del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales.

La Federación de Alcaldes presenta una preocupación con relación a que no se establezca el quórum en la primera convocatoria. Recogemos la enmienda propuesta por la Federación de Alcaldes. De no haber el quórum de 2/3 partes en la primera convocatoria, se convocará una segunda asamblea donde el quórum será el cincuenta por ciento (50) del total de alcaldes incumbentes pertenecientes al mismo partido y se requerira el voto afirmativo por la mayoría de los presentes en la Asamblea para declarar electo el Alcalde miembro de la Junta. Recogida la enmienda se asegura en esta que el partido al cual perteneció el alcalde que provocó la vacante responda con diligencia y responsabilidad, a cubrir dicha vacante.

Las sugerencias fueron atendidas luego de ser analizadas por la Comisión y se incorporan aquellas enmiendas que entendemos reponden a las inquietudes y a la intención del legislador, y que definitivamente mejoran circunstancialmente la pieza legislativa.

Por todo lo antes expuesto la Comisión de Asuntos Municipales, luego del estudio correspondiente de la medida, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación del Proyecto del Senado 2189 con las enmiendas contenidas en este informe.

Respetuosamente Sometido,

(Fdo.)
Carlos A. Dávila López
Presidente
Comisión de Asuntos Municipales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2613, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de lo Jurídico; y de Salud y Bienestar Social, con enmiendas.

**"LEY**

Para enmendar la Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, en su Artículo 24 inciso C (1), a los fines de que los menores cuyas medidas dispositivas impuestas sean menor de seis (6) meses puedan estar bajo la custodia de la Administración de Instituciones Juveniles.

## EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley de Menores de Puerto Rico en su Artículo 24 enumera las medidas dispositivas a imponerse a un menor cuando el Tribunal lo encuentre incurso en una falta. Las medidas dispositivas son variadas. Tal y como está redactada la Ley en el Articulo 24, la custodia o detención del menor solamente puede darse para los casos en que se le imponga al menor un término mayor de seis (6) meses en su medida dispositiva. Por otro lado, tenemos que el Artículo 27 inciso 3, establece que cuando el Tribunal encuentre al menor incurso en conducta que incurrida por un adulto constituya delito menos grave, adjudicará la comisión de una falta clase I y podrá imponer hasta un término máximo de seis (6) meses.

No existe armonía entre el Artículo 24 inciso C (1) y el Artículo 27 inciso 3 de la Ley de Menores. Por un lado, el Artículo 27 inciso 3 dispone que el Tribunal podrá imponer custodia (detener) a un menor por un término máximo de seis (6) meses en los casos clase I mientras que el Artículo 24 inciso C (1) dispone lo contrario. Esto es que la custodia o detención del menor solamente puede darse para los casos en que al menor se le impongan más de seis (6) meses en su medida dispositiva.

El propósito de esta legislación es corregir esta incongruencia que dificulta la sana administración de la Justicia. Resulta imperativo mencionar que los Tribunales de Menores confrontan serias dificultades en la aplicación de la Ley toda vez que existen menores que habiendo cometido faltas clase I (menos graves) y habiéndose encontrado incursos en la falta, no cumplen con las condiciones de la probatoria. A estos menores el Tribunal no puede revocarle la probatoria e ingresarlos a Centros de Detención ya que las medidas dispositivas impuestas son de seis (6) meses o menos.

Por tanto, los menores continuarán con su mal comportamiento lo que los lleva, muchas veces, a incurrir en faltas mayores y es entonces cuando el Tribunal puede actuar.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.- Se enmienda el inciso C (1) del Artículo 24 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 24.- Imposición de medidas dispositivas al menor incurso en falta.

...

(A) ...

(B) ...

(C) Custodia- Ordenar que el menor quede bajo la responsabilidad de cualquiera de las siguientes personas:

(1) La Administración de Instituciones Juveniles. Esta institución a través de la División de Evaluación y Clasificación determinará la ubicación del menor y los servicios que le serán ofrecidos.

(2) Una organización o institución pública o privada adecuada.

(3) El Secretario de Salud en los casos en que el menor presente problemas de salud mental.

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

## "INFORME CONJUNTO

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestras Comisiones de lo Jurídico; y de Salud y Bienestar Social, previo estudio y análisis del P. del S. 2613, tienen el honor de recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas.

**En el Texto:**

Página 2, línea 1: Después de "inciso" eliminar "C (1)" y sustituir por "( c ) (1)"

Página 2, línea 3: Después de "Imposición de" eliminar todo su contenido y sustituir por:
"Medidas Dispositivas al Menor Incurso en Falta
Cuando el Tribunal hubiere hecho una determinación de que el menor ha incurrido en falta, podrá imponer cualquiera de las siguientes medidas dispositivas:
(a) ..."

Página 2, líneas 4 a 6: Eliminar todo su contenido

Página 2, línea 7: Eliminar "( C )" y sustituir por "( c )"; después de "Custodia" eliminar "-" y sustituir por ".-"

Página 2, línea 9: Eliminar "La Administración de Instituciones Juveniles. Esta institución" y sustituir por "El Administrador de Instituciones Juveniles determinará"

Página 2, línea 10: Después de "Clasificación" eliminar "determinará"

**En la Exposicion de Motivos:**

Página 1, Párrafo 1, línea 1: Después de "Rico" adicionar "," y después de "24" adicionar ","

Página 1, Párrafo 1, línea 3: Después de "está" eliminar "redactada la Ley en el Artículo" y sustituir por "redactado en el Artículo"

Página 1, Párrafo 1, línea 4: Después de "darse" eliminar "para" y sustituir por "al Administrador de Instituciones Juveniles en"

Página 1, Párrafo 1, línea 6: Después de "27" eliminar "inciso 3" y sustituir por "en su inciso (a) (3)"; al final de la línea después de "en" adicionar "una" y después de "conducta" adicionar "que constituya una falta clase I"

Página 1, Párrafo 1, línea 7: Después de "que" adicionar "de ser" y eliminar "adjudicará la comisión de una falta"

Página 1, Párrafo 1, línea 8: Eliminar "clase I"; después de "imponer" adicionar "como medida dispositiva la custodia del menor"

Página 1, Párrafo 2, línea 1: Eliminar todo su contenido y sustituir por:
"No existe una relación clara entre el inciso ( c ) (1) del Artículo 24 y el inciso (a) (3) del Artículo 27 de la Ley de"

Página 1, Párrafo 2, línea 2: Después de "Menores" adicionar "de Puerto Rico"; después de "lado, el" eliminar "Artículo 27 inciso 3" y sustituir por "el inciso (a) (3) del Artículo 27"

Página 1, Párrafo 2, líneas 4 a la 6: Después de "el" eliminar "Artículo 24 inciso C (1) dispone lo contrario" y sustituir por "inciso ( c ) (1) del Artículo 24 dispone que para otorgar la

| | |
|---|---|
| | custodia del menor al Administrador de Instituciones Juveniles tiene que ser por un término mayor de seis (6) meses"; eliminar desde "Esto"hasta "dispositiva" |
| Página 2, Párrafo 1, línea 1: | Después de "corregir esta" adicionar "aparente" |
| Página 2, Párrafo 1, línea 2: | Después de "que" eliminar "los Tribunales de Menores" y sustituir por "el Tribunal General de Justicia en los casos de menores" |
| Página 2, Párrafo 1, línea 3: | Eliminar "confrontan" y sustituir por "confronta"; después de "Ley" eliminar "toda vez que existen" y sutituir por "Núm. 88. Existen"; después de "menores que" adicionar "," |
| Página 2, Párrafo 1, línea 4: | Después de "clase I" eliminar "(menos graves)" |
| Página 2, Párrafo 2, líneas 5 a la 7: | Después de "condiciones" eliminar todo su contenido y sustituir por "para que el Administrador de Instituciones Juveniles pueda asumir la custodia cuando la medida dispositiva dictada por un juez conlleve una custodia por un término menor de seis (6) meses." |
| **En el Titulo:** | |
| Página 1: | Eliminar todo su contenido y sustituir por: "Para enmendar el inciso ( c ) (1) del Artículo 24 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico", a fin de eliminar el requisito de seis (6) meses para otorgarle la custodia, como medida dispositiva, al Administrador de Instituciones Juveniles." |

## ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 2613 tiene como propósito enmendar el inciso ( c ) (1) del Artículo 24 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico" a fin de eliminar el requisito de seis meses a la medida dispositiva para que el Secretario de la Administración de Instituciones Juveniles asuma la custodia de un menor.

La Exposición de Motivos señala que el Artículo 24 de la Ley de Menores de Puerto Rico establece que cuando un Tribunal hace una determinación de que un menor ha incurrido en una falta, podrá imponérsele varias medidas dispositivas. Una de éstas es otorgarle la custodia al Administrador de Instituciones Juveniles. No obstante, en estos casos, la custodia del menor sólo puede darse si la medida dispositiva es mayor de seis meses. Por otro lado, el inciso (3) del Artículo 27 establece que cuando el Tribunal encuentre al menor incurso en una conducta que, de haberse cometido por un adulto constituiría un delito menos grave, le impondrá hasta un máximo de seis meses.

Luego, establece que no hay armonía entre ambos artículos. Entiende que el inciso (a) (3) del Artículo 27 podrá imponer una custodia por un término máximo de seis meses. Sin embargo, el Artículo 24 le otorga la custodia al Administrador de Instituciones Juveniles sólo en aquellos casos en que se imponga una medida dispositiva de más de seis meses.

Por último, establece en la Exposición de Motivos que la presente medida tiene como propósito de corregir la incongruencia previamente descrita entre ambos Artículos. A consecuencia de la diferencia, los Tribunales confrontan serias dificultades en la aplicación de esta ley debido a que aquellos menores que se encuentran incursos de cometer faltas de clase I, no cumplen con las disposiciones para una probatoria.

La Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico" se aprobó con el propósito de proveer para el cuidado, protección, desarrollo, habilitación y rehabilitación de los menores y proteger el bienestar de la comunidad; proteger el interés público tratando a los menores como personas necesitadas de supervisión, cuido y tratamiento, a la vez que se les exige responsabilidad por sus actos; y garantizarle a todo menor un trato justo, el debido procedimiento de ley y el reconocimiento de sus derechos constitucionales.

Esta ley, en el inciso ( c ) (1) del Artículo 24 disponía la custodia al Secretario de Servicios Sociales como una de las posibilidades a la imposición de medidas dispositivas. En aquel entonces, no se establecía término alguno de su medida dispositiva para otorgarle la custodia a dicho Secretario. Luego, el 12 de agosto de 1995, se aprobó la Ley Núm. 183, la cual enmendó el inciso ( c ) (1) del Artículo 24 con el propósito de otorgarle la custodia al Administrador de Instituciones Juveniles en vez del Secretario de Servicios Sociales. Además, limitó la custodia sólo cuando la medida dispositiva sea por un término mayor de seis meses.

Conforme con lo establecido, un menor que incurra en una falta clase I, a quien se le imponga como medida correctiva la custodia por un término máximo de seis meses, no podría otorgársele la misma al Administrador de Instituciones Juveniles, quedando como alternativas una organización, institución pública o privada o al Secretario del Departameno de Salud.

Este proyecto tiene como propósito ofrecerle al tribunal la opción de otorgar la custodia al Administrador de Instituciones Juveniles en aquellos casos donde se imponga una medida dispositiva por un término menor de seis meses. Esta medida es necesaria, debido a que armoniza el articulado en conflicto y le ofrece una alternativa adicional a los jueces del sistema general de justicia en el cuidado, protección, desarrollo, habilitación y rehabilitación del menor conforme con los propósitos desglosados en le Ley Núm. 88.

Para la evaluación de esta medida contamos con la presencia de la Oficina de Servicios Legislativos los cuales sugirieron varias enmiendas las cuales se incorporaron en el informe. Además contamos con la opinión del Colegio de Abogados quienes avalan la medida y sugieren una enmienda la cual no se adoptó.

Por los fundamentos antes expuestos, vuestras Comisiones de lo Jurídico; y de Salud y Bienestar Social, recomiendan la aprobación del P. del S. 2613, con las enmiendas contenidas en este informe.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Jorge Andrés Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico

(Fdo.)
Norma Carranza De León, M.D.
Presidenta
Comisión de Salud y Bienestar Social"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2535, y se da cuenta de un informe de la Comisión Especial para el Estudio, Evaluación y Seguimiento Continuo y Permanente al Funcionamiento Administrativo, Operacional y Fiscal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 170 del 23 de julio de 1974, conocida como Ley Orgánica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, a fin de establecer una aportación para proyectos de remedio o limpieza ambiental de 25% del cargo establecido por cada unidad a ser conectada al sistema de alcantarillados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico; para enmendar el Artículo 1 de la Ley 170, con el propósito de enmendar la definición de unidad aclarando que para los proyectos de remedio o limpieza ambiental, una unidad equivale a 400 galones de agua de descarga al día en lo que respecta el sistema de alcantarillado; y para enmendar el Artículo 1 de la Ley 170 para definir el concepto de proyecto de remedio o limpieza ambiental.

## EXPOSICION DE MOTIVOS

Los proyectos de remedio o limpieza ambiental, según se conocen en el campo ambiental, tienen como propósito principal reparar, corregir, remediar o limpiar un daño causado al terreno, subsuelo, aguas superficiales o aguas subterráneas, el cual pone en riesgo de contaminación o ha contaminado estos medios. Los costos de limpieza o remedio en estos proyectos son extremadamente elevados por la necesidad de usar avanzados equipos de tratamiento y alta tecnología necesaria para remediar terrenos o agua contaminada. Estos costos se elevan aún más al añadirles los gastos relacionados con los permisos, autorizaciones, concesiones y cargos necesarios para llevar a cabo los trabajos de limpieza. Lamentablemente, al contrario de otras jurisdicciones en los Estados Unidos, las agencias en Puerto Rico encargadas por velar y proteger el ambiente no proveen excepciones, incentivos o mecanismos alternos para facilitar la viabilidad de estos proyectos de remediación ambiental.

Entre las prioridades principales del Gobierno de Puerto Rico se encuentra la de preservar, conservar y proteger el ambiente y los recursos naturales de tal manera que las futuras generaciones puedan utilizar y disfrutar de los mismos. Contrario a la inacción de pasadas administraciones, el actual Gobierno de Puerto Rico se ha propuesto establecer e implantar medidas necesarias para incentivar la remediación y limpieza de nuestro ambiente y recursos naturales.

En los proyectos de remediación ambiental de aguas subterráneas contaminadas se utilizan sofisticados equipos o unidades de remoción de contaminantes cuya operación consiste en la extracción de aguas subterráneas y posterior tratamiento y descarga de las mismas. A pesar de que práctica más común en los casos de limpieza de aguas contaminadas es la reinyección de las aguas ya tratadas al acuífero, en muchas situaciones las condiciones y formaciones geológicas del área no son propicias o compatibles para la reinyección. En estas circunstancias, uno de los métodos más viables para descargar las aguas tratadas es por medio de la conexión al alcantarillado que conecta con las plantas de tratamiento de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Los cargos existentes por conexión al sistema de alcantarillado son de $500 por cada unidad a conectarse (conexión inicial a base del total de galones a descargarse en un día o aumento en descarga) al sistema de la Autoridad. De acuerdo al *Reglamento Para la Imposición y Cobros de Cargos por el Derecho a Conectarse y Usar los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados de la Autoridad*, el término Aunidad@ para proyectos de remedio o limpieza ambiental se determina como un caso más de los no identificados en la Ley 170 del 23 de julio de 1974, es decir acudiendo a lo establecido en el *Reglamento de Normas de Diseño de la Autoridad*. Según este último Reglamento, una unidad para estos casos consiste actualmente de 350 galones diarios. A base del total de agua a descargarse en un día, el cargo por conexión se traduce en $500 por cada 350 galones de agua tratada a descargarse al día al sistema de alcantarillado. Tomando en consideración las grandes cantidades de agua subterránea que se extraen para tratamiento y posterior descarga, el cargo resulta sumamente excesivo. Más aún cuando los proyectos de

remediación, ya sean de carácter voluntario o por medio de orden, contribuyen a gran escala a la restauración del medio ambiente y los recursos naturales.

Existe un interés del Gobierno de Puerto Rico en promover y facilitar la viabilidad de los proyectos de remedio ambiental, para que personas y entidades tomen la iniciativa de llevar a cabo tan importantes limpiezas en un espacio o ambiente reglamentario flexible. Igualmente, existe un interés en que estos proyectos concentren sus recursos y presupuestos en la preparación de estudios técnicos necesarios y la utilización de tecnologías científicamente aceptadas para la más eficaz limpieza viable del medio o recurso natural a remediarse.

Consideramos como un incentivo positivo para promover la limpieza de nuestros recursos de agua, la reducción en el cargo existente por conexión al sistema de alcantarillado y el aumento en lo que respecta al equivalente de cada unidad para estos proyectos de remedio ambiental. Tomando en atención la presente situación financiera de la Autoridad y el número reducido de proyectos existentes o que podrían utilizar la opción de descarga al alcantarillado, entendemos razonable y apropiado que los proyectos de remedio o limpieza ambiental aporten un veinticinco por ciento (25%) del cargo establecido por conexión de cada unidad al sistema de alcantarillado de la Autoridad, entendiéndose que cada unidad equivale a 400 galones de agua a descargarse al día en lo que respecta al sistema de alcantarillado. El Gobierno de Puerto Rico comprende que el beneficio restaurador de estos proyectos se reflejará positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos y futuras generaciones de nuestro pueblo. Por tal razón, dicho beneficio general es mayor que cualquier interés particular que se pudiese ver afectado como resultado de la aprobación de esta importante ley.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1 - Se enmienda el párrafo (c) del Artículo 1 (Cargos por conexiones y usos del sistemaBDefiniciones) de la Ley Núm. 170 del 23 de julio de 1974, para que lea como sigue:

(c) *Unidad.*CSignifica una casa de vivienda o apartamiento con uno o más dormitorios; cada cuarto de hotel; cada cuarto de hospital para un solo paciente (entendiéndose que los cuartos para varios pacientes constituirán una unidad distinta para cada dos pacientes); para proyectos de remedio o limpieza ambiental, 400 galones de agua a descargarse al día en lo que respecta al sistema de alcantarillado; y en el caso de edificios o estructuras para otros usos comerciales o para usos industriales, 400 galones de consumo estimado de agua al día en lo referente a uno u otro sistema.

Artículo 2 - Se enmienda el Artículo 1 (Cargos por conexiones y usos del sistema Definiciones) de la Ley Núm. 170 del 23 de julio de 1974, para añadirle un nuevo párrafo (g) que lea como sigue:

(g) *Proyecto de remedio o limpieza ambiental.*-- para los fines aquí establecidos, significa acción propuesta o llevada a cabo, ya sea voluntariamente o por orden de alguna agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o del gobierno federal, con el propósito de limpiar, reparar, restaurar, o corregir un daño hecho al subsuelo, el cual pone en riesgo de contaminación o ha contaminado un cuerpo de agua.

Artículo 2 - Se enmienda el Artículo 3 (BPermanentes) de la Ley 170 del 23 de julio de 1974, para que lea como sigue:

El cargo o derecho provisional establecido en la sec. 165 de este título continuará en vigor hasta que comience a regir un cargo permanente por el mismo derecho de conexión y uso del sistema de la Autoridad que ésta apruebe de acuerdo con lo dispuesto en las secs. 144 y 158 de este título, para lo cual se le faculta adicionalmente por las secs. 164 a 167 de este título.Para proyectos de remedio o limpieza ambiental, dicho cargo permanente por conexión y uso del sistema de alcantarillado será el 25% del cargo establecido o ha establecerse por cada unidad a ser conectada al alcantarillado de la Autoridad.

Artículo 3 - Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión Especial para el Estudio, Evaluación, y Seguimiento Continuo y Permanente al Funcionamiento Administrativo, Operacional y Fiscal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, previo estudio y consideración del P. del S. 2535 recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas:

**En el Texto:**

| | |
|---|---|
| Página 4, línea 15 | Tachar "cuerpo de agua" y sustituir por "abasto de agua potable." |
| Página 5, línea 1 | Añadir luego de "...alcantarillado de la Autoridad." lo siguiente: "La descarga de proyectos de remedio o limpieza ambiental al alcantarillado sanitario será autorizada siempre y cuando el sistema de recolección y la planta de tratamiento de aguas usadas de la AAA tengan la capacidad hidráulica de poder aceptar y procesar la misma. Además, la descarga deberá cumplir con los límites de descarga, condiciones y normas establecidas por el Programa de Pretratamiento de la AAA y no impactar negativamente la operación, mantenimiento y cumplimiento del sistema recolector y planta de tratamiento a la cual interese descargar." |

## ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 2535 tiene el propósito de enmendar la disposición relativa a cargos por conexiones y usos del sistema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (en adelante, la "AAA") para establecer un cargo especial para proyectos de remedio o limpieza ambiental de 25% del cargo establecido por cada unidad a ser conectada al sistema de alcantarillado sanitario de la AAA. El cargo existente para todo usuario (excepto proyectos de vivienda pública) que desee conectarse al sistema de alcantarillado es de $500.00 por cada unidad a conectarse al sistema. Con la enmienda propuesta se pretende establecer que dichos proyectos de remedio o limpieza ambiental paguen solo 25% (id est. $125.00) de los $500.00 por cada unidad a conectarse.

La medida propone además definir el concepto de proyecto de remedio ambiental y aclarar que en el caso de estos proyectos, para propósitos de conexión al alcantarillado, una unidad equivale a 400 galones de agua de descarga al día en lo que respecta al sistema de alcantarillado. Actualmente, para estos proyectos, la AAA ha interpretado que una unidad equivale a 350 galones de agua de descarga.

Varias entidades como la Asociación de Industriales de Puerto Rico y la Cámara de Comercio de Puerto Rico han apoyado y recomendado la aprobación de esta medida. Estas entidades nos han explicado la importante labor que llevan a cabo estos proyectos para limpiar y remediar condiciones de contaminación ambiental en lugares donde existen terrenos o aguas contaminadas. Nos indican además,

que estos proyectos utilizan costosos y avanzados sistemas de tratamiento de aguas, que superan el tratamiento que la AAA le proporciona a las aguas usadas que reciben las plantas de tratamiento de la AAA. Igualmente, aclaran que en comparación con los estados de la nación norteamericana, los cargos de conexión al alcantarillado sanitario en Puerto Rico son muchos más elevados. A manera de ejemplo, datos suministrados sobre cargos de conexión al alcantarillado en condados del estado de la Florida revelan que el cargo por conexión más elevado es de $138.00 por cada 1,000 galones (equivale a una unidad) a descargarse en un día.

Ambas entidades reconocen que el impacto fiscal a la AAA sería insignificante, ya que los proyectos de remedio ambiental que actualmente descargan al sistema de alcantarillado de AAA o que podrían optar por conectarse a dicho sistema son limitados. Nos indican que la opción más común en los proyectos de remedio o limpieza ambiental que tratan y limpian aguas subterráneas contaminadas es la reinyección de las aguas tratadas a la fuente subterránea. Aclaran que en ocasiones no es viable la reinyección por razones de condiciones geológicas del área. En estos casos, y de existir conexión cercana al sistema de la AAA, se opta por descargar las aguas ya tratadas al sistema de alcantarillado sanitario de la AAA. Basado en un listado de proyectos de remedio o limpieza ambiental del Area de Superfondo y Emergencias Ambientales de la Junta de Calidad Ambiental, entendemos que existen alrededor de 20 proyectos de remedio o limpieza ambiental en diferentes etapas de limpieza. La mitad de estos proyectos envuelven la limpieza y tratamiento de aguas subterráneas contaminadas.

Por otra parte, estas entidades también mencionan que contrario a los sistemas flexibles de permisos, autorizaciones y concesiones especiales para estos proyectos en los Estados Unidos, los proyectos de remedio o limpieza ambiental en Puerto Rico son tratados como si fuesen cualquier industria pesada requiriéndoles la obtención de los mismos permisos, autorizaciones y endosos para operar.

Nuestra Comisión Especial también recibió comentarios positivos a la medida de la propia AAA. La ponencia enviada por el Director de Operaciones de la AAA, suscrita por el señor Guy Jacques Barlet, con fecha del 22 de junio de 2000, respalda la aprobación del P. del S. 2535 sujeto a que se añada lenguaje a los efectos de condicionar las descargas de proyectos de remedio ambiental a las plantas de tratamiento de la AAA. Entre las condiciones para poder descargar se encuentran la disponibilidad de capacidad hidráulica de las plantas de tratamiento de la AAA y el cumplimiento con las normas establecidas por el Programa de Pretratamiento de la AAA. Esta Comisión Especial entiende que las condiciones sugeridas por la AAA son razonables y válidas ya que buscan la protección de los sistemas y plantas de tratamiento de la AAA.

Esta Comisión Especial reconoce lo importante que es la limpieza de nuestro medio ambiente. Igualmente, entiende que el cargo especial propuesto es razonable. En ningún momento se le está eximiendo del cargo, sino que es una reducción que ayudará a que los proyectos cuya opción viable sea la conexión al sistema alcantarillado sanitario así lo hagan y puedan mantenerse en operación utilizando sus presupuestos primordialmente en el eficiente tratamiento avanzado de las aguas contaminadas. Entendemos que contrario al elevado número de usuarios industriales y comerciales que se conectan al sistema de alcantarillado sanitario (y que solicitan aumentos en sus descargas), el número de proyectos de remedio ambiental conectados o que pudiesen conectarse es mínimo. Por consiguiente, el efecto económico en la AAA en términos fiscales es negligible. Por otro lado, tomamos conocimiento de los elevados costos de limpiar lugares contaminados.

Por lo antes expuesto, la Comisión Especial para el Estudio, Evaluación, y Seguimiento Continuo y Permanente al Funcionamiento Administrativo, Operacional y Fiscal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 2535 sujeto a las enmiendas aquí expuestas.

Respetuosamente Sometido,

(Fdo.)
Charlie Rodríguez
Presidente
Comisión Especial"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2471, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Vivienda, sin enmiendas.

**"LEY**

Para enmendar el último párrafo del Artículo 17 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos" a fin de que se establezca un proceso único de obtención y renovación de permisos en los casos de construcción de vivienda de bajo costo, cuando ésta sea realizada por una persona de escasos recursos con ayuda de familiares o amigos y sea levantada por etapas.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

El aumento en el costo de la vivienda para familias de escasos recursos ha motivado a muchas personas a construir sus propios hogares, utilizando como mano de obra su propio esfuerzo y la ayuda de familiares o de amigos. Muchas veces, las viviendas son construidas por etapas, de acuerdo con los recursos y el tiempo disponible del dueño, lo que dificulta la obtención de los permisos de construcción o la renovación de los mismos. Esta dificultad ha fomentado la proliferación de construcciones que no han sido evaluadas por las autoridades pertinentes y como consecuencia, carecen de los permisos necesarios para obtener, posteriormente, los permisos de uso.

El propósito de esta medida es facilitar la obtención y renovación de permisos de construcción para viviendas de bajo costo, desalentando así las construcciones ilegales. Para lograrlo es necesario facultar al Administrador de la Administración de Reglamentos y Permisos para que establezca mediante reglamento un proceso único de obtención o renovación de permisos que se ajuste a las particularidades de los casos en los que una persona de escasos recursos hace su propia vivienda por etapas.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1. - Se enmienda el último párrafo del Artículo 17 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 17.-

. . .

Para obras de bajo costo, a dedicarse para usos residenciales por familias de escasos recursos, según se establezca por el Administrador, no se requerirá la presentación de planos, bastando sólo con la presentación de un croquis o gráfica ilustrativa de la obra. *En estos casos, cuando la obra sea realizada por su dueño con ayuda de familiares o amigos y sea levantada por etapas, de acuerdo con sus recursos económicos, el Administrador establecerá un proceso único para la obtención y renovación de permisos."*

Sección 2. – Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Vivienda, previo estudio y consideración del P. del S. 2471, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito del P. del S. 2471 es enmendar el último párrafo del Artículo 17 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos" a fin de que se establezca un proceso único de obtención y renovación de permisos en los casos de construcción de vivienda de bajo costo, cuando ésta sea realizada por una persona de escasos recursos con ayuda de familiares o amigos y sea levantada por etapas.

En la exposición de motivos nos dice que el propósito de esta medida es facilitar la obtención y renovación de permisos de construcción para viviendas de bajo costo, desalentando así las construcciones ilegales. Para lograrlo es necesario facultar al Administrador de la Administración de Reglamentos y Permisos para que establezca mediante reglamento un proceso único de obtención o renovación de permisos que se ajuste a las particularidades de los casos en los que una persona de escasos recursos hace su propia vivienda por etapas.

El aumento en el costo de la vivienda para familias de escasos recursos ha motivado a muchas personas a construir sus propios hogares, utilizando como mano de obra su propio esfuerzo y la ayuda de familiares o de amigos. Muchas veces, las viviendas son construidas por etapas, de acuerdo con los recursos y el tiempo disponible del dueño, lo que dificulta la obtención de los permisos de construcción o la renovación de los mismos. Esta dificultad ha fomentado la proliferación de construcciones que no han sido evaluadas por las autoridades pertinentes y como consecuencia, carecen de los permisos necesarios para obtener, posteriormente, los permisos de uso.

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales solicitó opinión el pasado 17 de mayo de 2000, a la Junta de Planificación y la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE).

La Junta de Planificación en su opinión sometida el 6 de junio de 2000, nos indica que: "Según establecido en el Artículo 17 de la Ley Número 76 del 24 de junio de 1975, Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos, "para obras de bajo costo a dedicarse a usos residenciales para familias de escasos recursos, según se establezca por la Administración de Reglaentos y Permisos, no se requerirá la presentación de planos y bastando sólo con la presentación de un croquis o gráfica ilustrativa de la obra a realizarse". La presente medida legislativa añade una descripción más específica al Artículo, en donde el Administrador de la A.R.P.E. establecerá un proceso único para la obtención de renovación de permisos.

Tomando en consideración lo antes expuesto, recomendamos la aprobación de esta pieza legislativa."

La Oficina de Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) en su ponencia sometida el 1 de junio de 2000, nos expresa lo siguiente: "Ciertamente la propuesta tiene un fin social muy válido en cuanto a los servicios a la comunidad y en cuanto a la propiciación del goce y disfrute de la propiedad se refiere. No obstante, hay que tomar en consideración varios aspectos que muchas veces no los identificamos claramente al momento de enfrentarnos a éste tipo de necesidad."

En reunión celebrada y por las razones previamente expuestas las comisiones que suscriben, luego de análisis de la medida y de la información disponible, recomiendan la aprobación del P. del S. 2471 sin enmiendas.

Respetuosamente Sometido,

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales

(Fdo.)
José E. Meléndez
Presidente
Comisión de Vivienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2531, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para reasignar al Departamento de la Familia, la cantidad de cinco mil (5,000.00) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para ayuda a personas de escasos recursos económicos en el Distrito Senatorial de San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.- Se reasigna al Departamento de la Familia, la cantidad de cinco mil (5,000.00) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para ayuda a personas de escasos recursos económicos en el Distrito Senatorial de San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

Sección 2.- Los fondos reasignado en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas, estatales, municipales y federales.

Sección 3.- El Departamento de la Familia, someterá un informe a la Comisión de Hacienda del Senado sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta.

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO:**

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la **R. C. del S. 2531**, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

La **R. C. del S. 2531**, propone reasignar al Departamento de la Familia, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para ayuda a personas de escasos recursos económicos en el Distrito Senatorial de San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados en el marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la **R. C. del S. 2531** sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2532, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para reasignar al Departamento de Educación la cantidad de veinte mil (20,000.00) dólares de los fondos consignados en la Sustitutiva a la R.C. del S. 2241 a ser transferidos a la Escuela Esperanza (Antigua Palés Matos), para mejoras permanentes en la planta física; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.- Se reasigna al Departamento de Educación la cantidad de veinte mil (20,000.00) dólares de los fondos consignados en la Sustitutiva a la R.C. del S. 2241 a ser transferidos a la Escuela Esperanza (Antigua Palés Matos), para mejoras permanentes en la planta física.

Sección 2.- Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones privadas, estatales, municipales o federales.

Sección 3.- El Departamento de Educación someterá a la Comisión de Hacienda un informe final sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta.

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

**AL SENADO DE PUERTO RICO:**

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la **R. C. del S. 2532**, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas:

**En el Texto:**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 1 | Después de "Educación" insertar "," |
| Página 1, línea 2 | Después de "dólares" insertar "," y en la misma línea, después de "2241" insertar "de 21 de marzo de 2000," |

**En el Título:**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 1 | Después de "Educación" y de "dólares" insertar "," |
| Página 1, línea 2 | Después de "2241" insertar "de 21 de marzo de 2000," |

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

La **R. C. del S. 2532**, propone reasignar al Departamento de Educación, la cantidad de veinte mil (20,000.00) dólares, de los fondos consignados en la Sustitutiva a la R.C. del S. 2241 de 21 de marzo de 2000, a ser transferidos a la Escuela Esperanza (Antigua Palés Matos), para mejoras permanentes en la planta física; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados en el marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la **R. C. del S. 2532** con las enmiendas sugeridas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 3155, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para reasignar al Municipio de Vega Baja, la cantidad de cuarenta y un mil (41,000) dólares procedentes de las Resoluciones Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, 346 de 8 de agosto de 1998 y 556 de 21 de agosto de 1999, para transferir a la Ferretería Jaime del señor Jaime Cortez ubicada en el Centro Comercial Cortez en materiales para reparación de viviendas según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos asignados.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Vega Baja, la cantidad de cuarenta y un mil (41,000) dólares procedentes de las Resoluciones Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, 346 de 8 de agosto de 1998 y 556 de 21 de agosto de 1999, para materiales para reparación de viviendas según se desglosa, conforme a los reglamentos establecidos por la Ley de municipio autónomos

1. Arwinda Narváez Maldonado
   S.S. 581-44-6964
   Palo Alto #31
   Manatí, P.R.
   Vega Baja, P.R. 00693
   Tel. 884-2859
   Aportación 400.00
2. Ana V. González Molina
   S.S. 583-86-9060
   Calle Nogal 157 K. La Trocha
   Vega Baja, P.R. 00693
   Aportación 400.00
3. Miguel A. Rosado Miranda
   S.S. 584-29-9352
   Alto de Cuba #39
   Vega Baja, P.R. 00693
   Aportación 500.00
4. Nora Ponce Otero
   Calle T-Buzón 119, Pueblo Nuevo
   Vega Baja, P.R. 00694
   Tel. 858-1136
   Aportación 400.00
5. Carmen Rivas Alvarez
   S.S. 583-82-9877
   Calle 1 Buzón 119- Int., Pueblo Nuevo
   Vega Baja, P.R. 00693
   Aportación 400.00
6. Guillermina Otero Rodríguez
   Calle 1 Buzón 121, Pueblo Nuevo
   Vega Baja, P.R. 00693
   Tel. 1136
   S.S. 028-26-4830

Aportación 400.00

7. María Rodríguez
S.S. 854-63-6932
HC-02 Box 44617
Vega Baja, P. R. 00693
Tel. 807-3722
Aportación 500.00

8. Rose Pérez Freytes
S.S. 583-75-7906
HC 83 Box 7177
Vega Alta, P.R. 00692
Tel. 270-2486
Aportación 500.00

9. Irene Barroso Meléndez
Calle Marte #52, Bda. Sandín
Vega Baja, P.R. 00693
Tel. 855-9212
S.S. 581-84-4532
Aportación 500.00

10. Blanca Barroso Meléndez
Calle Marte #73, Bda. Sandín
Vega Baja, P.R. 00693
Tel. 855-9212
S.S. 580-92-8379
Aportación 500.00

11. Luis R. Santos
Calle Martes #73, Bda. Sandín
Vega Baja, P.R. 00693
S.S. 582-75-8977
Aportación 500.00

12. Patricia Caceres Pabón
P.O. Box 8939, Bo. Sabana
Vega Baja, P.R. 00693
Tel. 855-4008
S.S. 482-84-8458
Aportación 400.00

13. Ruth J. González
Bo. Almirante Sur, P.R. Box 592
Vega Baja, P.R. 00694
Tel. 855-8111
S.S. 583-63-1477 500.00

14. Carmen M. Vázquez Maysonet
Calle 10, La Ponderosa Buzón K
288, Vega Baja, P.R. 00692
Tel. 883-3577
S.S. 583-31-8885
Aportación 1,000.00

15. Marga De León Troche
Extensión Betances 136
Vega Baja, P.R. 00693
S.S. 582-02-6705
Aportación 700.00

16. Arlene Colón Carrasquillo
Bo. Sabana Hoyos, Sector Santana
HC-83 Box 7154, V.A. 00692
Tel. 270-3684
S.S. 020-60-5138
Aportación 1,500.00

17. Cristobalina Carrasquillo Serrano
Bo. Sabana Hoyos, Sector Santana
HC-03 Box 7154
Vega Alta, P.R. 00692
Tel. 270-3684
S.S. 584-34-4838
Aportación 1,500.00

18. Santos Vega Cruz
Almirante Norte-sector La Roseta
HC-02 Box 45836, V.B., P.R. 00693
S.S. 583-64-6638
Aportación 400.00

19. Santos Vega Meléndez
Almirante Norte-sector La Roseta
HC-02 Box 45836, V.B., P.R. 00693
S.S. 582-98-5866
Aportación 400.00

20. Daisy J. Otero Otero
Calle 3 Parc. 54, Parc. Arraiza
HC-02 46633, Vega Baja, P.R.
Tel. 807-0311
S.S. 582-63-7258
Aportación 500.00

21. Carmen Andujar Rivera
HC-02 45802, Sector Acerola
Vega Baja, P.R.
S.S. 580-70-9602
Tel. 858-5458
Aportación 400.00

22. David Otero Marrero
HC-02 Box 46620
Vega Baja, P.R. 00693
Tel. 858-5162
S.S. 582-71-3566
Aportación 400.00

23. Fanny Concepción Malpica

Calle 18 #405, Bo. Sabana Branch
P.O. Box 8918, V.B., P.R. 00693
Tel. 855-2987
S.S. 584-76-8996
Aportación 500.00

24. Maribel Vega Saez
HC-02 Box 44410
Sector Miranda, Almirante Sur, V.B.
Tel. 807-4408
S.S. 110-56-5834
Aportación 400.00

25. Marisela Silva Santos
Calle Martes #57, Bo. Sandín, V.B.
Tel. 855-0607
S.S. 584-45-0725
Aportación 500.00

26. Milagros Ocasio Navedo
Calle Aguilar, No. 22, Parcelas Carmen
Vega Alta, P.R.
Tel. 883-0758
S.S. 582-29-4959
Aportación 1,000.00

27. Teresa Santos Guzman
Calle Escorpio #17, Bo. Sandín
Vega Baja, P.R. 00693
Box 1311, V.B. 00693
Tel. 855-0607
S.S. 580-92-5460
Aportación 500.00

28. Ada Colón Figueroa
P.O. Box 612, V.B.
Carr. 155 Km. 62.2, V.B.
S.S. 582-08-6043
Aportación 600.00

29. Emily Andino Díaz
Parc. Marquez No. 10
Calle Ceiba
Tel. 858-1738
S.S. 583-71-7685
Aportación 300.00

30. Juan Antonio Torres
Calle 3 Buzón 2325
Bo. Arenales, V.B., P.R.
S.S. 581-27-0208
Aportación 700.00

31. Carlos E. Santa SAntos
P.O. Box 2158

Vega Baja, P.R. 00694
Tel. 855-6088
S.S. 584-17-1351
Aportación 500.00

32. Angel Méndez Berríos
Calle Inmaculada B14
Colinas del Marqués
Correo General-V.B.
Tel. 858-8103
Aportación 600.00

33. Franklin Cruz
Calle L D-52, Jardines, V.B.
Tel. 858-0479
S.S. 584-53-2214
Aportación 300.00

34. Javier González Vega
HC-02 Box 47033
Vega Baja, P.R.
Tel. 855-8093-Res./858-2162-Trab/
S.S. 086-54-6445
Aportación 500.00

35. Joanna Rosario Cintrón
Bo. Sabana C-690
Vega Baja
Correo General
S.S. 582-83-2973
Aportación 500.00

36. Germán Torres
Calle 13 Parc. 435, Sabana Branch V.B.
Tel. 855-6847
S.S. 582-82-0516
Aportación 500.00

37. Daisy Ramos Quiñones
Calle 5 P 40, Breña-Cerca Colmado Pizeria
Tel. 270-3301-(comadre)
S.S. 584-79-1230
Aportación 400.00

38. Lilliam Rosado Rivera
P.O. Box 2183
Vega Baja, P.R.
Tel. 855-2753
S.S. 584-73-0583
Aportación 500.00

39. Sonia M. Rodríguez Rivera
Box 1316
Vega Baja, P.R.
Tel. 858-1953

S.S. 051-50-6482
Aportación 500.00

40. Edwin Quiñones Colón
Calle Revollo #5212, Río Abajo, V.B.
Tel. 858-8451
S.S. 583-29-9550
Aportación 700.00

41. Ana Pantoja Figueroa
Sabana Branch #313 Parc. 454
Vega Baja, P.R.
Tel. 858-6721
S.S. 128-46-9629
Aportación 250.00

42. Benito Martínez Torres
Calle 13 #464, Sabana Branch, V.B.
S.S. 581-22-0828
Aportación 200.00

43. Iris M. Meléndez Concepción
Calle 13 Parc. #77, Sabana Branch, V.B.
Tel. 858-5395
Aportación 1,000.00

44. Gladymir Adorno Calvente
Calle 3 Bo. Breña
Vega Alta
Tel. 275-4678 (madre Aida)
S.S. 584-73-5943
Aportación 500.00

45. Jesús Negrón Rodríguez
Bo. Carmelita Calle 1 Bzn. 18
Vega Baja, P.R.
Tel. 855-0304
S.S. 581-44-0278
Aportación 400.00

46. Nayda Vega Paz
P.O. Box 2619
Vega Baja, P.R.
Tel. 461-2118
S.S. 584-74-6324
Aportación 800.00

45. Antonio Montañez Carrasquillo
Calle Santa María 5362, Brisas del Rosario
S.S. 115-52-6921
Aportación 400.00

46. Flordaliza Montañez Vélez
Calle Santa María 5362, Brisas del Rosario
Tel. 855-2284
S.S. 586-12-1320

Aportación 800.00

47. Carmen M. Torres Altreche
Bda. Sandín Calle Marte Bzn. 12
S.S. 583-61-5891
Aportación 800.00

48. María Molina Maisonet
Calle Marte #73 A, Bda. Sandín, V.B.
Tel. 855-6697
S.S. 583-30-6876
Aportación 500.00

49. María E.Figueroa Correa
Calle Marcos López, Las Granjas, V.B.
Tel. 855-2901
S.S. 584-60-4545
Aportación 300.00

50. Eroina Lozada Otero
Apartado 428
Vega Baja, P.R.
Tel. 858-0289
S.S. 582-98-7392
Aportación 500.00

51. Nancy Ortega Rodríguez
P.O. Box 578
Vega Baja, P.R.
Tel. 858-5471 / 858-5415
S.S. 583-19-6856
Aportación 500.00

52. Yolanda Burgos Rodríguez
HC-01 Bzn. 23615
Vega Baja, P.R.
Tel. 855-8414
S.S. 584-98-9448
Aportación 500.00

53. Carmen Burgos Rodríguez
HC-01 Bzn. 23615, Bo. Algarrobo, V.B.
Tel. 855-8414
S.S. 584-52-0337
Aportación 400.00

54. Diane Cabrera Torres
Calle 1 Bzn #20, Parcelas Amadeo
Vega Baja, P.R.
Tel. 512-3013 Res. /855-3757 Trab.
S.S. 582-87-8790
Aportación 500.00

55. Encarnación Meléndez Rosario
Parc. Amadeo Calle D
Vega Baja, P.R.

Tel. 855-4401
S.S. 582-65-6827
Aportación 800.00

56. Modesto Soto Serrano
Calle Hugo Bo. Colombo, Casa B-2
Vega Baja, P.R.
S.S. 581-31-3306
Aportación 300.00

57. Carmelo Morán Corea
Sector Roca Dura Bzn. 1606
Calle Pebles, Almirante Norte
S.S. 583-24-0867
Aportación 750.00

58. Concepción Aponte Canales
Calle 9A Bzn. 93
Pueblo Nuevo, V.B.
S.S. 584-03-1452
Aportación 300.00

59. María E. Cruz Carrión
P.O. Box 1897
Vega Baja, P.R.
S.S. 135-54-9790
Aportación 800.00

60. Francisca Rosado Tapia
Calle Crisantemo, Ojo de Agua 3178
Vega Baja, P.R.
Tel. 807-1957
S.S. 584-81-2926
Aportación 500.00

61. Carmen Ortega Rivera
Apartado 1246
Vega Baja, P.R.
Tel. 858-0121
S.S. 581-89-7388
Aportación 700.00

62. Gloria E. Santos Navedo
HC-02 Box 40936
Vega Baja, P.R.
Tel. 858-2429
S.S. 583-15-3773
Aportación 1,000.00

63. Marga de León Troche
Extensión Betances 136
Vega Baja, P.R.
S.S. 582-02-6705
Aportación 400.00

64. María L. Ríos Barroso

Calle Marte #73, Bda. Sandín, V.B.
Tel. 855-5162
S.S. 584-25-9156
Aportación 400.00

65. Orlando Otero Colón
Calle Principal #5075, Río Abajo, V.B.
Tel. 858-3909
S.S. 582-27-0636
Aportación 500.00

66. Sonia Rodríguez Rodríguez
Calle Ceiba 314, Parcelas Márquez, V.B.
Tel. 858-3386
S.S. 581-11-5207
Aportación 400.00

67. Luis A. Rodríguez
Carr. 160, Almirante Norte
Tel. 445-2250
S.S. 134-58-7826
Aportación 800.00

68. Juan Ramón Díaz
Calle Geranio No. 35, , Ojo de Agua, V.B.
Tel. 645-4615
S.S. 581-11-7238
Aportación 2,000.00

69. Yesenia Silva Dávila
Carr. 646 Sector La Cooperativa
Bo. Almirante Sur
HC-02 Box 43364, V.B.
Tel. 855-4374
S.S. 583-71-3422 800.00

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, estatales o municipales.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO:**

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la **R. C. de la C. 3155,** tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

La **R. C. de la C. 3155,** propone asignar al Municipio de Vega Baja, la cantidad de cuarenta y un mil (41,000) dólares, procedentes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, 346

de 8 de agosto de 1998 y 556 de 21 de agosto de 1999, para transferir a la Ferretería Jaime del señor Jaime Cortez ubicada en el Centro Comercial Cortez en materiales para reparación de viviendas según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los asignados.

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en estas Resoluciones Conjuntas Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, 346 de 8 de agosto de 1998 y 556 de 21 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la **R. C. de la C. 3155** sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Roger Iglesías Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 3389, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para reasignar al Departamento de la Vivienda, División de Vivienda Rural, Región de Aguadilla, la cantidad de veintiocho mil (28,000) dólares provenientes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 920 de 29 de diciembre de 1999 y 346 de 8 de agosto de 1998, para la realización de obras de construcción, reparación de viviendas, compra de materiales, obras de asfalto, construcción de cunetones, construcción de muros de contención y otras obras permanentes y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de la Vivienda, División de Vivienda Rural, Región de Aguadilla, la cantidad de veintiocho mil (28,000) dólares provenientes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 920 de 29 de diciembre de 1999 y 346 de 8 de agosto de 1998, para la realización de obras de construcción, reparación de viviendas, compra de materiales, obras de asfalto, construcción de cunetones, construcción de muros de contención y otras obras permanentes.

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con aportaciones privadas, municipales y/o federales.

Sección 3-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la **R. C. de la C. 3389**, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La **R. C. de la C. 3389**, propone reasignar al Departamento de la Vivienda Rural, Región de Aguadilla, la cantidad de veintiocho mil (28,000) dólares provenientes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 920 de 29 de diciembre de 1999 y 346 de 8 de agosto de 1998, para la realización de obras de construcción, reparación de viviendas, compra de materiales, obras de asfalto, construcción de cunetones, construcción de muros de contención y otras obras permanentes y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en la Resolución Conjunta Núm. 920 de 29 de diciembre de 1999 y 346 de 8 de agosto de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la **R. C. de la C. 3389** sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 3404, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de dos mil ciento setenta y tres dólares con quince centavos (2,173.15), provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 22 de agosto de 1999, para la compra de equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 24 de Ponce y para autorizar el pareo de fondos.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Ponce la cantidad de dos mil ciento setenta y tres dólares con quince centavos (2,173.15), provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 22 de agosto de 1999, para la compra de equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 24 de Ponce.

Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas, estatales, municipales o federales.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO:**

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la **R. C. de la C. 3404,** tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

La **R. C. de la C. 3404,** propone reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de dos mil ciento setenta y tres dólares con quince centavos(2,173.15), provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 22 de agosto de 1999, para la compra de equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 24 de Ponce y para autorizar el pareo de fondos.

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en esta Resolución Conjunta Núm. 555 de 22 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la **R. C. de la C. 3404** sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 3405, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de nueve mil setecientos cincuenta (9,750) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para compra de equipo, materiales, medicina, accesorios de oficina, escolares, deportivos, reparación de viviendas a personas de escasos recursos, donativos a estudiantes y personas necesitadas, aportaciones a instituciones cívicas, culturales y deportivas que operen sin fines de lucro, y para otras obras y actividades de interés social.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de nueve mil setecientos cincuenta (9,750) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para compra de equipo, materiales, medicina, accesorios de oficina, escolares, deportivos, reparación de viviendas a personas de escasos recursos, donativos a estudiantes y personas necesitadas, aportaciones a instituciones cívicas, culturales y deportivas que operen sin fines de lucro, y para otras obras y actividades de interés social.

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la **R. C. de la C. 3405,** tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

La **R. C. de la C. 3405,** propone asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de nueve mil setecientos cincuenta (9,750) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para compra de equipo, materiales, accesorios de oficina, escolares, deportivos, reparación de viviendas a personas de escasos recursos, donativos a estudiantes y personas necesitadas, aportaciones a instituciones cívicas, culturales y deportivas que operen sin fines de lucro, y para otras obras y actividades de interés social.

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en esta Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la **R. C. de la C. 3405** sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 3407, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, previamente asignados a través de la Resolución Conjunta Núm. 892 de 28 de diciembre de 1999, para ser transferidos a la Asociación de Residentes de Venus Gardens Sur, para la reparación del Centro Comunal.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, previamente asignados a través de la Resolución Conjunta Núm. 892 de 28 de diciembre de 1999, para ser transferidos a la Asociación de Residentes de Venus Gardens Sur, para la reparación del Centro Comunal.

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

**AL SENADO DE PUERTO RICO:**

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la **R. C. de la C. 3407**, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con enmiendas.

**En el Título:**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 4 | Después de "Comunal" añadir "; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados" |

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

La **R. C. de la C. 3407**, propone reasignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, previamente asignados a través de la Resolución Conjunta Núm. 892 de 28 de diciembre de 1999, para ser transferidos a la Asociación de Residentes de Venus Gardens Sur, para la reparación del Centro Comunal; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en la Resolución Conjunta Núm. 892 de 28 de diciembre de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la **R. C. de la C. 3407** con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 3419, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para reasignar al Municipio de Quebradillas veinticinco mil (25,000) dólares asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 556 del 21 de agosto de 1999, para techar la cancha en las parcelas del Bo. Terranova, para autorizar la transferencia, contratación de las obras y el pareo de los fondos.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Quebradillas veinticinco mil (25,000) dólares asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 556 del 21 de agosto de 1999, para techar la cancha en las parcelas del Bo. Terranova.

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, estatales o municipales.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO:**

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la **R. C. de la C. 3419,** tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

La **R. C. de la C. 3419,** propone reasignar al Municipio de Quebradillas veinticinco mil (25,000) dólares asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 566 del 21 de agosto de 1999, para techar la cancha en las obras y el pareo de los fondos.

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en esta Resolución Conjunta Núm. 566 de 21 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la **R. C. de la C. 3419** sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 3420, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de ocho mil (8,000) dólares a los fines de transferir a las instituciones desglosadas en la Sección 1, para sufragar los gastos en que incurran por concepto de adquisición de materiales y equipos necesarios y la celebración de actividades afines a sus disciplinas y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de ocho mil (8,000) dólares a los fines de transferir a las instituciones desglosadas en esta Sección para sufragar los gastos en que incurran por concepto de adquisición de materiales y equipos necesarios y la celebración de actividades afines a sus disciplinas:

| | |
|---|---|
| (a) Federación de Boxeo Aficionado de P.R. | 5,000 |
| (b) Levittown Rebels Baseball Club, Inc., Complejo Deportivo, 7ma. Sección de Levittown, Toa Baja, P.R. | 3,000 |
| **TOTAL** | **$8,000** |

Sección 2.-Los fondos de esta Resolución Conjunta podrán ser parearse con aportaciones privadas, estatales, municipales y del Gobierno de Estados Unidos.

Sección 3.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a transferir a las indicadas organizaciones deportivas la totalidad de los fondos aquí asignados, para cumplir con los propósitos consignados en el Artículo 1 de esta Resolución Conjunta.

Sección 4.-Los fondos aquí asignados provendrán de la partida de cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil (5,555,000) dólares, a ser distribuidos mediante legislación.

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al 1ro. de julio de 2000."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la **R. C. de la C. 3420,** tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

La **R. C. de la C. 3420,** propone asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de ocho mil (8,000) dólares, a los fines de transferir a las instituciones desglosadas en la Sección 1, para sufragar los gastos en que incurran por concepto de adquisición de materiales y equipos necesarios y la celebración de actividades afines a sus disciplinas y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados.

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en la Sustitutiva a la Resolución Conjunta Núm. 3043 de 5 de mayo de 2000. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la **R. C. de la C. 3420** sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 3429, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para asignar a la Junta de Libertad Bajo Palabra de Puerto Rico la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, para gastos de funcionamiento en el año fiscal de 2000 - 2001; y para autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La Junta de Libertad Bajo Palabra, creada en virtud de la Ley Núm. 118 de 22 julio de 1974, según enmendada, esta ubicado como un importante componente operacional de la Sombrilla del Departamento de Corrección y Rehabilitación según dispuesto en su Plan de Reorganización Número 3 del 9 de diciembre de 1993.

Hoy en día la Junta promueve la rehabilitación del delincuente, a través de la revisión de sus casos para la otorgación o revocación del privilegio de Libertad Bajo Palabra. La Junta cumple tambien con un mandato legal y otro a legislarse en la presente Sesión Ordinaria de esta Asamblea Legislativa.

La Ley Núm. 90 del 27 de julio de 1995, referente a la notificación de víctimas de delitos impone una responsabilidad importante en la Junta en el proceso de concesión de libertad bajo palabra y salvaguardar los derechos de las víctimas.

Durante la presente Sesión Ordinaria se aprobó un proyecto de ley que aumentará el número de miembros de la Junta. El proyecto de ley ampliará la jurisdicción y el alcance de la Junta al redefinir sus funciones y consolidar en una redenominada entidad (Junta de Libertad Condicional) los programas de concesión de libertad a confinados de otros componentes operacionales del Departamento Sombrilla de Correción y Rehabilitación. Todo esto añade a la Junta una necesidad apremiante de mayores recursos. Estos recursos adicionales le permitirán cumplir y rendir un servicio mas efectivo y encaminar su agenda de trabajo para el año fiscal 2000 - 2001 con sus nuevas redefinidas funciones y aumento en miembros.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes tiene la documentación relativo a la disponibilidad para el año fiscal 2000 - 2001 de recursos presupuestarios del Fondo de Contingencia de la Loteria para sufragar esta asignación especial y por ende se puedan hacer disponibles para ser asignados a los fines y propósitos contemplados en esta Resolución Conjunta de vital importancia para Puerto Rico.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se asigna a la Junta de Libertad Bajo Palabra de Puerto Rico la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, para gastos de funcionamiento en el año fiscal 2000 - 2001.

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones privadas o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos de América.

Sección 3.-Consta en los expedientes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes la documentación relativo a la disponibilidad de fondos adicionales para el año fiscal 2000 - 2001 indicando la disponibilidad de recursos presupuestarios del Fondo de Contingencia de la Loteria para sufragar esta asignación especial.

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor el 1 ro. de julio de 2000."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO:**

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la **R. C. de la C. 3429**, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas:

**En la Exposición de Motivos:**

| | |
|---|---|
| Página 1, segundo párrafo, línea 3 | Tachar "tambien" y sustituir por "también" |
| Página 2, continuación del cuarto párrafo, línea 2 | Tachar "mas" y sustituir por "más" |
| Página 2, primer párrafo, línea 2 | Tachar "relativo" y sustituir por "relativa" |
| Página 2, primer párrafo, línea 3 | Tachar "Loteria" y sustituir por "Lotería" |

**En el Texto:**

| | |
|---|---|
| Página 2, línea 1 | Después de "Rico" insertar "," |
| Página 2, línea 7 | Tachar "relativo" y sustituir por "relativa" |
| Página 2, línea 9 | Tachar "Loteria" y sustituir por "Lotería" |

**En el Texto:**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 1 | Después de "Rico" insertar "," |

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

La **R. C. de la C. 3429**, propone asignar a la Junta de Libertad Bajo Palabra, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, para gastos de funcionamiento en el año fiscal de 2000-2001; y para autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia.

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados en el marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la **R. C. de la C. 3429** con las enmiendas sugeridas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 3434, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de treinta y cinco mil (35,000) dólares, a los fines de ser transferidos al Mesón de los Redimidos, Inc. ubicado en el Municipio de Bayamón, para la compra de un vehículo de motor y una planta eléctrica; y para autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

El Ministerio "Mesón de los Redimidos, Inc.", institución sin fines de lucro, la cual fue fundada el 14 de junio de 1994. Dicha institución tiene el propósito de ayudar a pacientes "HIV" el cual se atienden proveyendo un albergué cristiano para pacientes con SIDA que en su gran mayoría son deambulantes y tambien resultan estar marginados por sus familiares y la sociedad en general. Una razón por el discrimen hacia éstos pacientes es por dos condiciones médicas que manifiestan "Tozoplasmosis" y "Zitomegalovirus" esta institución como misión se enfoca hacia cubrir las necesidades de esto grupo excepcional dentro de la población de pacientes con "HIV"; por ende la asignación de fondos de parte de esta Asamblea Legislativa es altamente meritoria.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.- Se asigna a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de treinta y cinco mil (35,000), a los fines de ser transferidos al Mesón de los Redimidos, Inc. ubicado en el Municipio de Bayamón, para la compra de un vehículo de motor y una planta eléctrica.

Sección 2.-La Administración de Servicios Generales someterá a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, un informe final de los propósitos establecidos en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, provendrán de la cantidad de cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil (5,555,000) dólares consignados en el Departamento de Hacienda para ser distribuidos mediante legislación.

Sección 4.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones privadas o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos de América.

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 ro. de julio de 2000."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la **R. C. de la C. 3434,** tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La **R. C. de la C. 3434,** propone asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de treinta y cinco mil (35,000) dólares, a los fines de ser transferidos al Mesón de los Redimidos, Inc. ubicado en el Municipio de Bayamón, para la compra de un vehículo de motor y una planta eléctrica; y para autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia.

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en la Sustitutiva a la Resolución Conjunta Núm. 3043 de 5 de mayo de 2000. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la **R. C. de la C. 3434** sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 3435, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para asignar a la Compañía de Fomento Recreativo la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares, a fin de ser transferidos a la Asociación Recreativa de Vecinos Unidos de Villa Borinquen, Inc., para la realización de mejoras a las facilidades deportivas y recreativas de la Urb. Villa Borinquen de Puerto Nuevo en el Municipio de San Juan; y para autorizar la contratación de las obras y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna a la Compañía de Fomento Recreativo la cantidad de cuarenta mil mil (40,000) dólares, a fin de ser transferidos a la Asociación Recreativa de Vecinos Unidos de Villa Borinquen, Inc., para la realización de mejoras a las facilidades deportivas y recreativas de la Urb. Villa Borinquen de Puerto Nuevo en el Municipio de San Juan.

Sección 2.-La Compañía de Fomento Recreativo someterá a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, un informe final de los propósitos establecidos en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.

Sección 3.-Se autoriza a la Compañía de Fomento Recreativo a contratar con contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, y a traspasar parte o la totalidad de los fondos asignados a entidades privadas sin fines de lucro para el desarrollo de las obras y mejoras a que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.

Sección 4.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones privadas o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos de América.

Sección 5.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la cantidad de doce millones (12,000,000) dólares consignados en el Departamento de Hacienda para ser distribuidos mediante legislación.

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro de julio de 2000."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la **R. C. de la C. 3435,** tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

La **R. C. de la C. 3435,** propone asignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares, para ser transferidos a la Asociación Recreativa de Vecinos Unidos de Villa Borinque, Inc., para la realización de mejoras a las facilidades deportivas y recreativas de la Urb. Villa Borinquen de Puerto Nuevo en el Municipio de San Juan; y para autorizar la contratación de las obras y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia.

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en la Sustitutiva a la Resolución Conjunta Núm. 3022 de 18 de abril de 2000. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la **R. C. de la C. 3435** sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 3437, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para reasignar al Municipio de San Germán, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 403 de 10 de agosto de 1998, para la construcción y reconstrucción de la cancha ubicada en la Urb. Reparto Universitario de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de San Germán, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 403 de 10 de agosto de 1998, para la construcción y reconstrucción de la cancha ubicada en la Urb. Reparto Universitario de dicho municipio.

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos estatales, federales o municipales.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

**AL SENADO DE PUERTO RICO:**

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la **R. C. de la C. 3437,** tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

La **R. C. de la C. 3437,** propone reasignar al Municipio de San Germán, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 403 de 10 de agosto de 1998, para la construcción y reconstrucción de la cancha ubicada en la Urb. Reparto Universitario de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en esta Resolución Conjunta Núm. 403 de 10 de agosto de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la **R. C. de la C. 3437** sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): Según fuera aprobado, decretamos un receso de treinta (30) minutos legislativos.

- - - -

**RECESO**

- - - -

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Carlos Dávila López, Presidente Accidental.

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para ir al turno de Mociones.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

**MOCIONES**

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión Permanente de Informes Gubernamentales de tener que informar el Proyecto de la Cámara 3367, y que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Trabajo, Asuntos al Veterano y Recursos Humanos; a la Comisión de Vivienda; y a la Comisión de Hacienda de tener que informar el Proyecto de la Cámara 3064, y que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos Urbanos de tener que informar la Resolución Conjunta de la Cámara 3074 y que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Gobierno de tener que informar el Proyecto del Senado 1969.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura de tener que informar el Proyecto del Senado 2281.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos Municipales; y de Hacienda de tener que informar el Proyecto del Senado 2636.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos Urbanos de tener que informar la Resolución Conjunta del Senado 2535.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitar, también, que se releve a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía de tener que informar el Proyecto de la Cámara 3363.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Que el mismo se incluya en el Calendario, también.

También, que se releve a la Comisión de Vivienda de tener que informar la Resolución Conjunta de la Cámara 97, y la misma se incluya en el Calendario.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, solicitamos que se releve a la Comisión de Hacienda de tener que informar la Resolución Conjunta de la Cámara 3427, y que la misma se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos Internos de tener que informar la Resolución del Senado 3539, y que la misma se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para corregir el récord. Se esta relevando a la Comisión de Hacienda la Resolución Conjunta de la Cámara 3427, y que se incluya en el Calendario.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se forme un Calendario de Lectura de las medidas incluidas en el Calendario.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

## CALENDARIO DE LECTURA

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3367, el cual ha sido descargado de la Comisión de Permanente de Informes Gubernamentales y Profesiones Reglamentadas.

## "LEY

Para reglamentar la práctica de Tecnología Veterinaria; crear la Junta Examinadora de Tecnólogos Veterinarios y Técnicos en Salud Animal de Puerto Rico; establecer sus funciones, poderes, deberes, facultades y fijar penalidades.

## EXPOSICION DE MOTIVOS

La Tecnología Veterinaria es una de las prácticas aliadas a la salud que aplica conocimientos y técnicas específicas y especializadas en pro del mejoramiento de la salud de los animales. Tanto el Tecnólogo Veterinario como el Técnico en Salud Animal asisten al médico veterinario en casi todas sus

funciones en clínicas privadas de animales grandes y pequeños o en dependencias de gobierno donde aplica conocimientos en las áreas de radiología, enfermería, farmacología, apoyo quirúrgico, análisis clínico entre otras.

También asisten al investigador científico en el desarrollo de estudios que envuelven el uso de animales. Ayuda al personal veterinario en las divisiones de Zoonosis, Epidemiología y Enfermedades Infecciosas. Además, lleva a cabo inspecciones en plantas procesadoras de productos derivados de animales, así como inspecciones de restaurantes y supermercados para asegurar la higiene en el manejo de alimentos de origen animal, extendiendo estas inspecciones hasta el lugar donde se crían estos animales. Está capacitado para trabajar en laboratorios clínicos veterinarios y de investigación donde se analizan fluídos de animales o se utilizan animales vivos. También orienta a la comunidad sobre aspectos de la salud animal que pueden afectar la salud pública. El velar por el buen uso, cuidado, trato digno y mantenimiento adecuado de los animales es una de las responsabilidades más importantes del Tecnólogo Veterinario y el Técnico en Salud Animal que labora en todos estos centros y clínicas.

Las principales instituciones de educación universitaria de nuestro país han confiado en la preparación académica del Tecnólogo Veterinario y del Técnico en Salud Animal como parte de su equipo de trabajo en el campo de la investigación científica. Entre los centros que han confiado su labor en estos trabajadores podemos señalar; el Centro de Investigaciones en Primates del Caribe, el Centro de Recursos Animales del Recinto de Ciencias Médicas, el Laboratorio de Cirugía Experimental de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, la Casa de Animales de la Universidad Central del Caribe, la Escuela de Medicina de Ponce y el Instituto de Neurobiología del Caribe. El rol del Tecnólogo Veterinario en estas facilidades incluye desde asistir al investigador en estudios hasta supervisar y coordinar los distintos procedimientos investigativos con el personal científico y técnico.

Varias agencias gubernamentales han reconocido la aportación que esta clase trabajadora puede brindar. Algunas de las agencias donde estos se destacan incluyen; la Junta de Calidad Ambiental, el Departamento de Agricultura Estatal, el Departamento de Recursos Naturales, los Centros de Control y Adopción de Animales, Aduana Federal y el "Animal Plant and Health Inspection Services".

La labor del tecnológo y el técnico se ha extendido también a algunas empresas privadas que han requerido de la prestación de los servicios de estos; tales como, plantas procesadoras de leche y sus derivados, clínicas y hospitales veterinarios, "pet shops"y farmacéuticas que llevan a cabo investigación con animales vivos.

En Puerto Rico existe la necesidad de personal que este capacitado para llevar a cabo tareas específicas para el mantenimiento de la salud de nuestros animales, asegurar la calidad de los animales que consumimos fiscalizando donde estos son producidos y procesados, supervisar que los animales, que se utilizan con propósitos investigativos, se mantengan en condiciones óptimas que aseguren la confiabilidad de los hallazgos y velar por un trato humanitario hacia los animales.

El programa del Colegio Universitario de Arecibo de la Universidad de Puerto Rico ofrece el curso de Técnico en Salud Animal a nivel de grado asociado. El programa de Tecnología y ofrece a estudiantes Veterinaria del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico prepara el grado de bachillerato desde 1979. Al presente es el único en Puerto Rico acreditado por la "American Veterinary Medical Association". Actúalmente contamos en Puerto Rico con aproximadamente 185 Tecnólogos Veterinarios.

Es importante señalar que, aunque en Puerto Rico se están preparando estos Técnicos y Tenólogos para llevar a cabo tareas tan esenciales, no existe un mecanismo adecuado mediante el cual se les cualifique y se les exija un mínimo de capacitación que garantice la calidad de servicio a la hora de la prestar los mismos, como en otras ramas de la salud.

Algunos de estos trabajadores se han visto en la necesidad de emigrar a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de empleo que allá persisten, al ser ambos reconocidos y reglamentados

desde hace muchos años. En Puerto Rico no han podido encontrar condiciones de trabajo favorables y algunos practican bajo otros títulos que no corresponden a su grado.

El Gobierno de Puerto Rico tiene el deber y la responsabilidad de velar por que los servicios en pro de la salud de los animales sea de la más alta calidad, ya que esto significa una mejor salud para nuestro pueblo. Debe además, extender una protección justa a aquellos que practican dentro de los diferentes campos que componen la Tecnología Veterinaria y el Técnico en Salud Animal en Puerto Rico.

Si consideramos que la salud de nuestros animales es sinónimo de la salud para nuestro pueblo, debemos crear mecanismos que reglamenten la formación, educación y certificación del Tecnólogo Veterinario y el Técnico en Salud Animal, trabajadores que complementan el equipo del cuidado médico veterinario en Puerto Rico.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.- Título

Esta ley se conocerá como "Ley para reglamentar la Práctica de la Tecnología Veterinaria en Puerto Rico".

Artículo 2.- Definiciones

Para fines de esta ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa.

a. **Análisis clínico veterinario** – significará el uso de técnicas de laboratorio específicas y especializadas de muestras de origen animal con el propósito de obtener información que pueda ser utilizada para ayudar al médico veterinario licenciado y al agrónomo en la determinación de diagnóstico, control, tratamiento o prevención de las enfermedades en los animales.

b. **Animal** – significa todo miembro del reino animal, excepto el hombre, tanto doméstico como salvaje, vivo o muerto.

c. **Asistente Veterinario** – significará la persona que ha recibido un adiestramiento menor de dos (2) años a través de educación formal o de experiencia durante el trabajo. Sus funciones básicas incluirán: el manejo, cuidado, alimentación, ejercicio, restricción, transporte y saneamiento del animal. Otras tareas que podrá llevar a cabo incluirán: limpieza de facilidades y tareas clericales básicas. Dichas funciones serán en el ámbito de la salud animal. Se desempeñará bajo la supervisión del Médico Veterinario Licenciado, Tecnólogo Veterinario Licenciado o Técnico en Salud Animal Licenciado según sea el caso. Sus funciones no incluirán; diagnóstico, pronóstico, prescripciones, cirugía, ni procedimientos de análisis clínico veterinario.

d. **Departamento** – significa el Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

e. **Examen de Reválida** – significa la prueba calificadora que mide el nivel de conocimientos, aptitudes y destrezas mínimas necesarias para ejercer bajo los diferentes niveles de la tecnología veterinaria en Puerto Rico.

f. **Junta** – significa la Junta Examinadora de Tecnólogos Veterinarios y Técnicos en Salud Animal.

g. **Laboratorio Clínico Veterinario** – significa cualquier institución en que se practiquen exámenes bacteriológicos, microbiológicos, microscópicos, hematológicos, bioquímicos, serológicos o histo-patológicos en animales.

h. **Licencia** – significa el documento expedido por la Junta que autoriza al poseedor de la misma a ejercer la práctica de tecnólogo veterinario en Puerto Rico o de técnico en salud animal, según sea el caso.

i. **Persona** – significa toda persona natural, jurídica o cualquier grupo, asociación u organización de ellas que actúe en común acuerdo, ya fuera como principal, agente, funcionario, sucesor, cesionario, o en cualquier otra capacidad legal.

j. **Secretario** – significa el Secretario de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

k. **Técnico en Salud Animal** – significa la persona que ha obtenido un grado asociado o su equivalente como Técnico en Salud Animal de un programa de dos o tres años de una Universidad o Centro de Estudios acreditado por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico. Está capacitado para hacer aportaciones en las áreas de la tecnología veterinaria. Se desempeñara bajo la supervisión de un Médico Veterinario Licenciado o Tecnólogo Veterinario Licenciado. Sus funciones no incluirán diagnóstico, pronóstico, prescripción de medicamentos, cirugía, ni procedimientos de análisis clínico veterinario según se define en esta Ley en el Artículo (2).

l. **Técnico en Salud Animal Licenciado** – significa la persona debidamente autorizada por la Junta para ejercer la práctica de Técnico en Salud Animal según se define en esta Ley.

m. **Tecnólogo Veterinario** – significa la persona que ha obtenido un grado de Bachillerato en Ciencias en Tecnología Veterinaria o Tecnología en Salud Animal, de un programa de cuatro (4) años de una Universidad, Colegio o Centro de Estudios acreditado por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico. Sus funciones incluirán la aplicación práctica de todas las técnicas y conocimientos especializados en la tecnología veterinaria, así como se definen en el Inciso (2) del Artículo (2) de esta Ley.

n. **Tecnólogo Veterinario Licenciado** – significa la persona debidamente autorizada por la Junta para ejercer la práctica de Tecnólogo Veterinario según se define en esta ley.

o. **Tecnología Veterinaria** – Es una de las prácticas aliadas a la salud que aplica conocimientos científicos con técnicas especializadas en pro del mejoramiento de la salud de los animales. Es el arte de proveer apoyo a los veterinarios, biólogos, zoólogos, agrónomos e investigadores científico en la práctica de su profesión. Esta ciencia prepara trabajadores en el cuido y manejo de animales, en los principios básicos de los procesos biológicos normales y anormales, en la aplicación práctica de las siguientes funciones bajo la supervisión y orden del médico veterinario licenciado; radiología, enfermería, farmacología, apoyo quirúrgico, anestesiología, profilaxis dental y procedimientos rutinarios de laboratorio y del cuido de la salud animal. Su función no incluye diagnóstico, pronóstico, prescripción de medicamentos ni cirugía. Los procedimientos rutinarios de laboratorio incluyen las-siguientes pruebas sin excluir otras: hematología, micología, urinálisis, parasitología, serología, bacteriología y citología; necesarias para obtener información que pueda ser utilizada por el médico veterinario en la determinación del diagnóstico, tratamiento, pronóstico y control de enfermedades de los animales. Incluye, además, la promoción y el mantenimiento de la salud animal, el cuido de animales enfermos o heridos y el control de enfermedades transmisibles de animales a humanos

p. **Veterinario Licenciado** – significa la persona natural que posee una licencia vigente para el ejercicio profesional de la medicina veterinaria en Puerto Rico expedida por la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, según lo estipula la Ley Núm. 194 de 4 de agosto de 1979.

Artículo 3. – Junta Examinadora de Tecnólogos Veterinarios y Técnicos en Salud Animal de Puerto Rico; Creación y Composición

Se crea la Junta Examinadora de Tecnólogos Veterinarios y Técnico en Salud Animal de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Salud, la cual tendrá a su cargo todo lo relacionado con la concesión, denegación, suspensión, recertificación y revocación de licencias para ejercer las funciones de Tecnólogo Veterinario y Técnico en Salud Animal en Puerto Rico, según se dispone en esta Ley.

La Junta estará compuesta por 5 miembros uno de los cuales será el Secretario de Salud o su representante autorizado. Los restantes 4 miembros serán nombrados por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento de ambos cuerpos legislativos Cámara y Senado. Además, de estos se le

otorgará una licencia de Tecnólogo Veterinario o Técnico en Salud Animal, según fuera el caso, emitida por el Departamento de Salud. No obstante, los sucesores de la Junta inicial deberán proveer la licencia que en virtud de esta Ley expida la Junta.

Será requisito ser mayor de edad, de buena reputación, residente de Puerto Rico y proveer cinco (5) años de experiencia en el campo.

Dos (2) miembros deberán ser Tecnólogos Veterinarios ejerciendo activamente su trabajo y con no menos de tres (3) años de experiencia al momento de su designación. Deberán presentar evidencia de haber aprobado el grado académico correspondiente.

Un (1) miembro deberán ser Técnico en Salud Animal, ejerciendo activamente su práctica al momento de su nombramiento, con no menos de tres (3) años de experiencia y deberán presentar evidencia de haber aprobado el grado académico correspondiente. El quinto miembro de la Junta deberá ser Médico Veterinario licenciado, según se define en esta Ley y deberá haber ejercido su profesión por un término no menor de tres (3) años y deberá haber demostrado interés en el campo de la tecnología veterinaria y las técnicas en salud animal. Ningún miembro de la Junta podrá pertenecer a la Junta de Síndicos o de Directores de una Universidad, Colegio o Escuela de Tecnología Veterinaria o Tecnología en Salud Animal.

La Junta elegirá un Presidente y un Presidente Alterno de entre los miembros que integren la misma. El Presidente Alterno de la junta ejercerá las funciones del Presidente en todo caso de ausencia temporal de éste. Las organizaciones y asociaciones de Tecnólogos Veterinarios y Técnicos en Salud Animal podrán someter al Gobernador recomendaciones sobre los candidatos para integrar la junta. Los nombramientos de los integrantes de la Junta los hará el Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico. Los nombramientos iniciales se harán por los términos siguientes: Un (1) Tecnólogo Veterinario, un (1) Técnico en Salud Animal, un (1) Veterinario por dos (2) años; y un (1) Tecnólogo Veterinario por cuatro (4) años. Los nombramientos subsiguientes se harán por un término de cuatro (4) años. Cualquier vacante que surja antes de cumplido el término de un miembro, se cubrirá por el tiempo no vencido. Ninguna persona podrá ser nombrada por más de dos términos consecutivos. Los miembros de la Junta ocuparán sus puestos hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de sus cargos. Los miembros de la Junta servirán "Ad Honorem", pero tendrán derecho a una dieta de cicuenta (50) dólares o fracción de día que dedique a sus gestiones oficiales como miembro de la Junta. El Gobernador podrá destituir a cualquier miembro de la Junta mediante formulación de cargos, notificación y vista por conducta inmoral, violaciones a esta ley, violaciones a los cánones de ética de esta profesión, ineficiencia o negligencia en el desempeño de sus deberes. También podrá destituir a cualquier miembro de la Junta por convicción de delito grave o de delito menos grave que implique depravación moral o por que se le haya denegado, suspendido revocado o cancelado la licencia para ejercer la profesión de Tecnólogo Veterinario, Técnico en Salud Animal o Médico Veterinario en Puerto Rico y/o Estados Unidos , o por cualquier otra causa justificada.

El quórum estará constituido por cinco (5) miembros de la Junta y la vacante o ausencia de dos (2) de sus miembros no afectará la facultad de los cinco (5) miembros restantes para ejercer todos los poderes y funciones delegadas a la Junta. Todos los acuerdos de la junta se tomarán por el voto de una mayoría de los miembros de la misma.

Artículo 4.- Deberes y Facultades de la Junta

En adición a cualesquiera otros dispuestos por esta Ley, la Junta tendrá las siguientes facultades y deberes:

1. La Junta será el único cuerpo autorizado para expedir, suspender, revocar o denegar las licencias para el ejercicio de la función de Tecnólogo Veterinario y Técnico en Salud Animal en Puerto Rico y para recertificar a los mismos mediante educación continuada. Se hace excepción del proceso de expedición de licencia a los miembros iniciales nombrados a la Junta, según lo dispuesto en esta Ley.

2. Tendrá la facultad para aprobar reglas y reglamentos conforme a las disposiciones de Ley y el Capítulo II de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1998, según enmendada conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme para el Estado Libre Asociado" y conforme a la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada conocida como "Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico". Establecerá, mediante reglamentación, el procedimiento para investigar y resolver querellas, actuaciones o conducta contraria a la ética de su profesión conforme a los criterios adoptados en esta Ley y al Capítulo III de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. Como parte de dicho procedimiento, así como petición de toda persona a quien se le deniegue, revoque o suspenda una licencia, la Junta celebrará previa citación al efecto, celebrará una vista pública, donde la persona perjudicada tendrá la oportunidad de ser oída y si así lo desea, estar asistida de representación legal, ofrecer pruebas a su favor, examinar la prueba presentada en su contra y contrainterrogar testigos. Si una citación, debidamente expedida por la Junta para comparecencia de cualquier persona o testigo a una vista, no fuese cumplida según sus términos, la Junta podrá comparecer ante cualquier sala del Tribunal Superior de Puerto Rico y pedir que el Tribunal ordene el cumplimiento de la citación bajo pena de desacato. Dentro del término de treinta (30) días, desde que se emita la decisión de la Junta sobre los procedimientos objeto de la vista pública, la persona perjudicada podrá recurrir en revisión judicial ante la sala del Tribunal Superior de Puerto Rico.

3. La Junta ofrecerá exámenes de reválida a los aspirantes a obtener la licencia de Tecnólogo Veterinario o Técnico en Salud Animal que hayan cumplido con todos los requisitos establecidos en esta Ley. Dichos exámenes serán ofrecidos en español o en inglés a la elección del aspirante, por los menos, dos (2) veces al año.

4. La Junta mantendrá un expediente permanente de todas las reuniones que haya celebrado.

5. Registrará, además, todos los datos de los solicitantes de licencia indicando, entre otros, el nombre completo, dirección y los datos básicos de su educación. También, mantendrá un registro de todos los que tomen exámenes de reválida y de las calificaciones obtenidas. Manendrá un registro de nombres, direcciones y de edades de todos los Tecnólogos Veterinarios y Técnicos en Salud Animal que posean licencia en Puerto Rico. También, llevará una relación de todas las solicitudes de licencia que se someten a la Junta y de las que esta deniegue.

6. Establecerá un reglamento de requisitos y procedimientos para la recertificación de Tecnólogos Veterinarios y Técnicos en Salud Animal cada tres (3) años a base de la educación continua según requerido y conforme a los términos y condiciones establecidos en la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada.

7. Evaluará y aprobará los cursos de educación continua para los Tecnólogos Veterinarios y Técnicos en Salud Animal.

8. Evaluará la prueba acreditativa de educación continua que someten los Tecnólogos Veterinarios y Técnicos en Salud Animal para su recertificación como tales.

9. Establecerá por reglamento la forma de ofrecer la orientación sobre los exámenes de reválida, de modo que, los solicitantes se familiaricen con el procedimiento de reválida, las normas de administración del examen, el tipo o clase de examen, el método de evaluación del mismo y la reglamentación de la Junta.

10. La Junta desarrollará un formulario oficial para todos los solicitantes de examen de reválida y además diseñará otro formulario para la recertificación de tecnólogos veterinarios y técnicos en salud animal. Cada formulario será diseñado tomando en consideración el grado, la preparación de cada aspirante y las funciones de cada área de trabajo.

11. Adoptará un sello oficial el cual hará estampar en todas las licencias y demás documentos oficiales expedidos por la Junta. Presentará al Gobernador de Puerto Rico por conducto del Secretario de Salud un informe annual de sus trabajos.

12. La Junta podrá, además, demandar y ser demandada y llevar a cabo toda transacción que sea necesaria para los propósitos por los cuales es creada.

13. Solicitará al Secretario de Justicia que promueva aquellos procedimientos civiles y criminales que fueren necesarios para hacer cumplir las disposiciones de esta Ley.

14. La Junta adoptará un reglamento para su funcionamiento interno y se reunirá en sesión ordinaria por los menos una (1) vez al mes para atender todos sus asuntos oficiales. Podrá celebrar reuniones extraordinarias; previa convocatoria cursada a todos sus miembros con no menos de cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la reunión.

15. Otorgará acuerdos o convenios con Juntas Examinadoras o entidades similares de otras jurisdicciones para el intercambio de información sobre las licencias de tecnólogos veterinarios y técnicos en salud animal denegadas, suspendidas o revocadas.

16. Entrará en convenios de reciprocidad con organismos o entidades competentes y oficiales de Estados Unidos u otros países para que permitan el ejercicio de la práctica de Tecnólogos Veterinarios y Técnicos en Salud Animal en el Estado o País del que se trate, a las personas debidamente autorizadas para ejercer como tales en Puerto Rico.

17. Podrá tomar juramentos, oír testimonios y recibir pruebas en relación con los asuntos de su competencia, así como imponer sanciones administrativas por las violaciones a las disposiciones de esta Ley y de sus reglamentos. Podrá además, expedir citaciones requiriendo la comparecencia de testigos y la presentación de datos, documentos e informes que la Junta estime necesario.

Artículo 5.- Requisitos para Obtener la Licencia de Tecnólogo Veterinario o Técnico en Salud Animal

a.- Todo aspirante a obtener la licencia de Técnologo Veterinario o Técnico en Salud Animal deberá radicar su solicitud ante la Junta, en el formulario oficial preparado por ésta para cada una de estas profesiones y acompañar dicha solicitud con un giro postal o bancario a nombre del Secretario de Hacienda por la cantidad de cincuenta (50.00) dólares y el pago correspondiente por derechos que mediante reglamento impugna la Junta. Además, acompañará su solicitud con aquellos documentos que se requieran en el formulario provisto por la Junta. El solicitante deberá someter evidencia oficial escrita de haber obtenido el grado de Bachillerato en Ciencias en Tecnología Veterinaria de una escuela acreditada o reconocida por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, o de haber obtenido el Grado Asociado como Técnico en Salud Animal de una Universidad o Centro de Estudios acreditado o reconocido por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico. El Solicitante deberá ser una persona de reconocida solvencia moral, mayor de edad y con residencia en Puerto Rico a la fecha de la solicitud. La licencia se otorgará luego de haber aprobado el examen con un promedio de setenta (70) por ciento o más en cada una de sus partes.

b. La Junta podrá otorgar licencia sin examen para ejercer en Puerto Rico como Tecnólogo Veterinario a aquellas personas que hayan obtenido el grado de Tecnólogo Veterinario según se define en el Artículo 2, Inciso 5, de esta Ley, al momento de la vigencia de esta Ley y que hubiesen estado ejerciendo la práctica de Tecnólogo Veterinario por un (1) año consecutivo, siempre que someta evidencia de que ha trabajado como Tecnólogo Veterinario. En el caso de los Técnicos en Salud Animal se le expedirá licencia sin examen siempre que sometan evidencia de haber obtenido el grado asociado de Técnico en Salud Animal al momento de la vigencia de esta Ley o haber estado ejerciendo las funciones de Técnico en Salud Animal por un mínimo de dos (2) años consecutivos, previos a la vigencia de esta Ley. Esta cláusula protectiva tendrá una vigencia límite de seis (6) meses a partir de la fecha de vigencia de esta Ley. Cualquier persona que posea licencia de Tecnólogo Veterinario o Técnico en Salud Animal de algún estado de los Estados Unidos cuyos organismos examinadores exijan el grado de educación profesional igual o superior al de Puerto Rico que pague los derechos correspondientes, muestre evidencia oficial de su licencia y cumpla con los demás requisitos establecidos por la Junta de Puerto Rico se le concederá una

licencia provisional. La licencia provisional quedará sin efecto luego de transcurrir seis (6) meses de ser expedida, pero podrá renovarse una (1) vez como máximo. Para obtener la licencia permanente deberá cumplir con los requisitos establecidos previamente y tomar el examen administrado por la Junta.

Artículo 6.-Registro y Recertificación

Toda persona que posea una licencia de Tecnólogo Veterinario o Técnico en Salud Animal en Puerto Rico deberá cumplir con los requisitos de la Ley Núm. 11 del 23 de junio de 1976, conocida como "Ley de Servicios Integral de Salud de Puerto Rico".

Artículo 7.- Duplicados de Licencia

En aquellos casos donde sea necesario la duplicación de la licencia, el tenedor deberá presentar una declaración jurada haciendo constar las circunstancias que motivan la solicitud de duplicación y la acompañará con un giro postal, bancario o cheque certificado a nombre del Secretario de Hacienda por la cantidad establecida por la Junta.

Artículo 8.- Denegación, Revocación o Suspensión de Licencia

La Junta podrá conforme a las disposiciones de esta Ley y al Capítulo III de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, denegar, revocar o suspender temporal o permanentemente una licencia expedida previa notificación y vista, a toda persona que:

a. Haya sido convicta de delito grave o menos grave que implique depravación moral y se demuestre que el delito por el cual fue convicto esta sustancialmente relacionado con las cualificaciones, funciones y deberes de la profesión de Tecnólogo Veterinario o Técnico en Salud Animal;

b. Haya obtenido o tratado de obtener una licencia mediante fraude o engaño;

c. Haya sido declarada mentalmente incapacitada por un tribunal competente; o se estableciere dicha incapacidad ante la Junta mediante peritaje médico. En estos casos, la licencia podrá otorgarse por la Junta tan pronto la persona sea declarada nuevamente capacitada, si reune los demás requisitos establecidos en esta Ley;

d. Incurra en negligencia crasa en el desempeño de sus deberes en prejuicio de tercero;

e. Sea convicto por un cargo de crueldad hacia los animales;

f. Viole lo establecido por esta Ley y sus reglamentos;

g. No reuna los requisitos para obtener la licencia establecidos por esta Ley;

h. Haya ejercido ilegalmente la práctica de Tecnólogo Veterinario o Técnico en Salud Animal en Puerto Rico;

i. Haya sido declarada adicta al uso de sustancias controladas o alcohólicas por un tribunal competente. En estos casos la licencia podrá otorgarse tan pronto esta persona pruebe estar capacitada, mediante peritaje médico, si reune los demás requisitos establecidos en esta Ley;

j. No cumpla con el procedimiento de recertificación y registro, según lo dispuesto en el Artículo 6 de esta Ley.

Artículo 9.- Procedimiento

Cuando la Junta mediante resolución al efecto, deniegue la expedición o suspenda o revoque temporal o permanentemente la licencia de Tecnólogo Veterinario o Técnico en Salud Animal, o deniegue su recertificación habiendo o no celebrado una vista administrativa, lo notificará por escrito, por correo certificado con acuse de recibo a la persona afectada. En dicha notificación le informará sobre las razones y las disposiciones legales para dicha determinación y los derechos que tiene para oponerse a la decisión de la Junta.

Si la persona afectada por la determinación emitida no estuviere conforme con dicha determinación podría dentro del término de veinte (20) días siguientes al recibo de la determinación, solicitar por escrito la celebración de una vista administrativa.

Habiéndose solicitado en tiempo la vista administrativa, la Junta vendrá obligada a notificar a todas las partes interesadas la fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista con no menos de quince (15) días

de anticipación a la celebración de la misma. Además, la apercibirá de las medidas que la Junta podrá tomar si la parte interesada no comparece a la misma.

La parte promovente tendrá derecho a ser oída en persona o a través de su abogado y podrá presentar la prueba testifical o documental a su favor que estime pertinente, además de ejercer cualquier otro derecho que le reconozca la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Uniforme de Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuyas disposiciones son de aplicación al procedimiento establecido por este Artículo.

Terminada la vista, la Junta tomará su decisión en un término que no podrá exceder de veinte (20) días desde la fecha de la terminación de dicha vista. La decisión de la Junta se notificará a la parte promovente, por correo certificado con acuse de recibo, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que esta se emita. La decisión de la Junta deberá contener en forma clara y precisa los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la misma.

Si la parte promonente no estuviese de acuerdo con la decisión de la Junta, podrá dentro del término de treinta (30) días desde la fecha de archivos en autos de la notificación de la determinación de la Junta, presentar una moción de reconsideración de la misma por escrito a través del correo certificado con acuse de recibo. La Junta deberá resolver y notificar su determinación a la parte interesada, por correo certificado con acuse de recibo, dentro de los treinta (30) días de haber recibido la moción de reconsideración.

Si la moción de reconsideración fuere denegada o si, habiéndose concedido, todavía fuere adversa la decisión de la Junta, la parte interesada podrá solicitar su revisión ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan. La moción de reconsideración será jurisdiccional para poder solicitar la revisión judicial. La parte adversamente afectada y que haya agotado los remedios administrativos provistos por esta Ley, podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal Superior dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de archivo en autos de la copia de la notificación de la determinación final de la Junta. La parte que recurra al Tribunal Superior deberá enviar a la Junta copia de su recurso de revisión. La Junta vendrá obligada a elevar al Tribunal, en el plazo que este fije, el expediente de procedimiento administrativo, incluyendo la transcripción del récord taquigráfico de la vista.

Artículo 10.-Examen

La Junta celebrará sesiones para exámenes de reválida por lo menos dos (2) veces al año, sin perjuicio de celebrar aquellas otras sesiones adicionales que para tal fin la Junta determine conveniente mediante reglamento. Los exámenes se ofrecerán en inglés o español a opción del aspirante previamente expresado en la solicitud de examen de reválida. Se anunciarán dichos exámenes por medio de edictos en dos (2) de los periódicos de mayor circulación general, dos (2) veces con por los menos seis (6) semanas de antelación a la fecha de celebración de tales exámenes. Este examen deberá ofrecer una parte teórica y una parte práctica de las disciplinas y las ciencias básicas de la tecnología veterinaria o de la técnica en salud animal, según sea el caso, que determine la Junta que sean necesarias para comprobar la capacidad mínima del aspirante. La Junta establecerá por reglamento los requisitos para solicitar el examen de reválida que comprenda las ciencias básicas. El candidato deberá acompañar una transcipción de créditos que acredite que dicho candidato aprobó una educación que lo capacita para desempeñarse como Tecnólogo Veterinario o Técnico en Salud Animal, según sea el caso, según lo establezca la Junta y con un índice académico mínimo de dos (2.00) puntos o su equivalente.

La Junta notificará a cada aspirante el resultado de sus exámenes dentro de los sesenta (60) días siguientes a la terminación de una sesión de exámenes de reválida y expedirá licencias a cada aspirante aprobado. Todo aspirante que haya reprobado el examen de reválida tendrá derecho a solicitar revisión del mismo. Todo aspirante que no apruebe el examen de reválida en la primera ocasión tendrá tres (3) oportunidades adicionales para comparecer a dicho examen, previo el pago de los derechos correspondientes y no podrá someterse a un nuevo examen hasta tanto presente a la Junta prueba fehaciente

de que ha tomado y aprobado el o los cursos que sean pertinentes, luego de haber sido evaluada su situación particular por la Junta en cuyo caso tendrá dos (2) oportunidades adicionales para tomar el examen.

Artículo 11.-Derechos

Los derechos que la Junta cobrará por examen de reválida, licencia, recertificación del profesional, licencia provisional, duplicado de cualquier licencia serán establecidos por el reglamento que la Junta promulgue a estos efectos. Estos derechos deberán ser pagados mediante giro postal, bancario o cheque certificado a nombre del Secretario de Hacienda. Estos derechos no serán devueltos bajo ningún concepto. La Junta necesario. Por otra parte los fondos que se generen por conceptos de pago mediante giro postal o bancario de cincuenta (50.00) dólares que deberían acompañar toda solicitud, ingresarán al fondo de Salud y serán para el uso exclusivo de la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud del Departamento de Salud.

Artículo 12.-Penalidades

Toda persona que viole las disposiciones de esta Ley, que practique la Tecnología Veterinaria o la Técnica en Salud Animal en Puerto Rico sin una licencia debidamente expedida, que cobre o no por ello, que se anuncie o se haga pasar como Tecnólogo Veterinario o Técnico en Salud Animal, que emplee a otra persona que no posea licencia de Tecnólogo Veterinario o de Técnico en Salud Animal para ejercer como Tecnólogo Veterinario o Técnico en Salud Animal y que presente ante la Junta documentos falsos o fraudulentos con la intención de obtener una licencia, incurrirá en delito menos grave. De resultar convicta será castigada con una multa no menor de mil (1,000) dólares o término de cárcel no menor de seis (6) meses ni mayor de un (1) año o ambas penas a discreción del Tribunal; disponiéndose que acto de práctica ilegal de Tecnólogo Veterinario o Técnico en Salud Animal constituirá un delito por separado.

Artículo 13.-Excepciones

Esta Ley no se interpretará en el sentido de prohibir o limitar:

a. El que aquellas personas que han estado ejerciendo funciones de Tecnólogo Veterinario o Técnico en Salud Animal sin poseer la preparación académica para ello al momento de la aprobación de esta Ley, puedan continuar ejerciendo sus funciones siempre y cuando sometan a la Junta Examinadora de Tecnólogos Veterinarios y Técnicos en Salud Animal la evidencia que esta Junta establezca por reglamento.

b. El lícito ejercicio de la práctica de la medicina veterinaria en Puerto Rico por el médico veterinario licenciado según se establece en la Ley 194 de agosto de 1979.

c. El que el médico veterinario licenciado pueda continuar utilizando bajo su supervisión, órdenes y responsabilidad directa, los servicios de Asistentes Veterinarios según se define en esta Ley.

d. El que los Tecnólogos Médicos puedan continuar ejerciendo su profesión en el campo del análisis clínico de muestras de origen humano, según se establece en la Ley 167 de noviembre de 1988, según enmendada.

e. El que personas que estén cursando estudios en el área de la salud animal, puedan ejercer funciones de Tecnólogos Veterinarios o Técnicos en Salud Animal, según sea el caso siempre y cuando dichas funciones sean con propósitos educativos a tiempo parcial y las mismas sean supervisadas por un médico Veterinario Licenciado o Tecnólogo Veterinario Licenciado según sea el caso.

Entendiéndose que a ninguna de las excepciones antes mencionadas se les otorgará licencia alguna de Tecnólogo Veterinario o Técnico en Salud Animal

Artículo 14.-Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, sólo a los fines de nombrar los miembros de la Junta y aprobar el Reglamento, las restantes disposiciones entrarán en vigor doce (12) meses después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3064, el cual ha sido descargado de las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; de Vivienda; y de Hacienda.

**"LEY**

Para enmendar los Artículos 1 y 2; añadir un nuevo Artículo 4, se reenumera los Artículos 4 y 5 como Artículos 5 y 6; se añade un nuevo Artículo 7 y se reenumeran los Artículo 6, 7 y 8 como los Artículos 8, 9, 10 de la Ley Núm. 173 de 31 de agosto de 1996, y se enmienda el párrafo tercero del Artículo 14 de la Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, según enmendada, mejor conocida como "Ley para Autorizar el Sistema de Lotería Adicional; a los fines de cambiar el título de la Ley; establecer un pareo de fondos estatales de arrendamiento a todo aquel veterano que cualifique para la Casa Estatal de Veterano, y proveerle anualmente los fondos al referido programa y para otros fines.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

El Gobierno de Puerto Rico se dio a la tarea, en colaboración con el Departamento de Asuntos de Veteranos Federal, de construir la Casa Estatal de Veterano en Juana Díaz al amparo de la Ley Pública Núm. 88-450 de 19 de agosto de 1964, según enmendada. Este proyecto va dirigido a atender las necesidades de aquellos veteranos y veteranas que están solos o con sus cónyuges y que aunque con alguna incapacidad, todavía pueden atenderse a sí mismos, o la de aquellos veteranos que tienen una condición crónica que no requieren de una atención médica especializada. Los veteranos y veteranas que allí residen reciben cuidados y servicios de calidad. La Casa Estatal de Veterano en Juana Díaz cuenta con ciento ochenta (180) camas para servicio domiciliario y sesenta (60) camas para servicio de "nursing home" intermedio. Actualmente el costo por el servicio domiciliario es de mil ciento noventa (1,190.00) dólares mensuales y el servicio de "nursing" tiene un costo de dos mil cuatrociento (2,400.00) dólares al mes. Estos costos cubren cuarto, todas las comidas y dietas especiales, recreación, cuidado médico, enfermeras, costos operacionales y mantenimiento.

Para poder subvencionar estos costos, el Departamento de Asuntos del Veterano Federal aporta aproximadamente un cuarentinueve porciento (49%) del costo total por el cuidado de los veteranos en la Casa Estatal de Veterano en Juana Díaz. El veterano o veterana que necesite residir en la Casa Estatal de Veterano en Juana Díaz aportará el cincuentiun por ciento (51%) del costo por los servicios que allí recibe. En otras palabras, todo veterano que cualifique para el servicio domiciliario aporta seiscientos cincuenta (650.00) dólares y el gobierno federal le aporta quinientos cuarenta (540.00) dólares; en caso de los "nursing home" pagará mil doscientos (1,200.00) dólares y el gobierno federal aporta mil doscientos (1,200.00) dólares. Sabemos que no todos los veteranos y veteranas tienen los recursos económicos para absorber ese gasto. No es justo que los veteranos y veteranas indigentes, que tienen necesidad de una vivienda o que viven solos no puedan disfrutar de los servicios que ofrece la Casa Estatal de Veterano en Juana Díaz, por no tener los recursos económicos suficientes.

Actualmente el Gobierno de Puerto Rico através de la Ley Núm. 173 de 31 de agosto de 1996, aprueba el "Programa de Subsidio de Arrendamiento y Mejoras de Vivienda para Personas de Mayor Edad con Bajos Ingresos", la cual le concedió un subsidio a todos los ancianos de sesenticinco (65) años en adelante que cualifiquen, por tal razón han concedido veinte (20) vales de los cuales diecisiete (17) se han otorgado y se están evaluando catorce (14) expedientes para otorgar los otros tres (3) vales. La demanda por la Casa Estatal de Veteranos cada día aumenta más por lo cual este subsidio esta siendo muy limitado;

creando que la Casa Estatal de Veteranos no pueda ser utilizada a su máxima capacidad. En la actualidad mensualmente se rechazan entre diez (10) y doce (12) veteranos por no contar con los recursos suficientes.

De acuerdo a un estudio realizado por el Departamento de Vivienda, para poder conceder un subsidio a un mayor número de veteranos se necesitarán un millon seiscientos millones (1,600,000.00) de dólares, los cuales serán designado únicamente para este propósito.

La Asamblea Legislativa siempre ha reconocido, aquéllas personas que sirvieron y sirven en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y que se sacrificaron por defender y mantener la democracia. Por tal razón, se reconoce como interés apremiante y de política pública del Gobierno de Puerto Rico el promover el desarrollo de facilidades domiciliarias y de cuidado médico dirigidas a atender a los veteranos de edad avanzada, con impedimentos y que viven solos.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 173 de 31 de agosto de 1996, para que lea como sigue:

Artículo 1.-Título.-

Esta Ley se conocerá como "Programa de Pareo Estatal de Arrendamiento para Viviendas de Veteranos y Subsidio de Arrendamiento y Mejoras de Vivienda para Personas de Mayor Edad con Bajos Ingresos".

Sección 2.-Se añaden los incisos (d), (e), el Artículo 2 de la Ley Núm. 173 de 31 de agosto de 1996, para que lea como sigue

Artículo 2.-Definiciones.-

A los fines de esta Ley, los siguientes términos y frases tendrán el significado que a continuación se expresa:

(a) ...

(b) ...

(c) . . .

(d) "Sistema domiciliario" – significará el área de servicio que provee albergue, alimentación y cuidado médico ambulatorio.

(e) "Sistema de cuidado de enfermería" – significará el área de servicio que provee albergue a veteranos convalescientes los cuales no tienen una enfermedad aguda y no necesitan cuidado hospitalario pero requieren cuidado de enfermería intermedios y de otros cuidados médicos relacionados.

(f) "Vivienda existente"-es toda aquella vivienda individual o colectiva que esté construida con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Ley, que el Departamento de la Vivienda considere aceptable bajo el programa creado por esta Ley.

(g) "Veterano"- significará toda persona residente bona fide de Puerto Rico que tenga la condición de veterano de las Fuerzas de los Estados Unidos de América de acuerdo con las leyes federales vigentes.

(h) "Casa estatal para veteranos" – es toda aquella vivienda colectiva que esté construida bajo la Ley Pública Núm. 88-450 de 19 de agosto de 1964, según enmendada, mejor conocido como "Nursing Home Care".

Sección 2.-Se renumera el Artículo 3 como Artículo 4 de la Ley Núm. 173 de 31 de agosto de 1996.

Sección 3.-Se añade un nuevo Artículo 4 de la Ley Núm. 4 de la Ley Núm. 173 de 31 de agosto de 1996.

Artículo 4.-Programa de Pareo de fondo para el Arrendamiento de Vivienda para Veteranos

(a) Se autoriza al Secretario de la Vivienda a crear un programa para subsidiar el pago mensual del arrendamiento de la vivienda establecida al amparo de la Ley Pública Núm. 88-450 de 19 de agosto de 1964, según enmendada, mejor conocido como "Nursing Home Care" a todo veterano y su cónyuge o cónyuge supérstite de un veterano.

(b) El subsidio consistirá en reducir el pago mensual del arrendamiento de la vivienda colectiva otorgado a todo veterano o su cónyuge o cónyuge superstite de un veterano. Se autoriza al Secretario de la Vivienda a adoptar la reglamentación necesaria que determinará el subsidio que recibirá el beneficiario dependiendo del ingreso mensual del veterano.

(c) El subsidio máximo a otorgarse en el caso de los veteranos acogidos al sistema domiciliario no excederá la suma de cuatrocientos (400.00) dólares mensuales. Se faculta al Secretario de la Vivienda a adoptar la reglamentación necesaria para disponer los subsidios a otorgarse y la duración de los mismos.

(d) El subsidio máximo a otorgarse en el caso de los veteranos acogidos al sistema de cuidado de enfermería no excederá la suma de seiscientos (600.00) dólares mensuales. Se faculta al Secretario de la Vivienda a adoptar la reglamentación necesaria para disponer los subsidios a otorgarse y la duración de los mismos.

(e) Una vez otorgado el subsidio de arrendamiento, el mismo podrá ser variado anualmente de cambiar los ingresos del veterano o su cónyuge o cónyuge supérstite de un veterano.

(f) El Secretario de la Vivienda podrá solicitar y obtener evidencia del ingreso del veterano o su cónyuge o cónyuge supérstite de un veterano con el propósito de determinar el subsidio a otorgarse.

(g) El Secretario de la Vivienda deberá, a todo veterano que le haya otorgado un subsidio al amparo de esta Ley, reevaluar los casos y transferirlos al nuevo Programa de pareo establecido en estos incisos.

(h) El beneficiario del subsidio deberá mantener al día los pagos mensuales que le corresponda para continuar beneficiándose del subsidio otorgado bajo esta Ley. Si el beneficiario del subsidio está moroso en el pago del arrendamiento, el subsidio por meses atrasados sólo será honrado si el pago se pone al día y lo acepta el arrendamiento.

Sección 4.-Se renumeran los Artículo 4 y 5 como el Artículo 5 y 6 de la Ley Núm. 173 de 31 de agosto de 1996.

Sección 5.-Se añade un nuevo Artículo 7 a la Ley Núm. 173 de 31 de agosto de 1996, para que lea como sigue:

"Artículo 7.-Condiciones Restrictivas para el pareo de fondo de arrendamiento para veteranos

En el pareo de fondos de arrendamiento, se consignará en el contrato de arrendamiento las siguientes condiciones restrictivas:

(a) El arrendatario no podrá subarrendar la propiedad ni destinarla a otro uso que no sea el de su residencia habitual y permanente.

(b) En el caso de fallecimiento del beneficiario, el subsidio de arrendamiento quedará suspendido a menos que el cónyuge supérstite cualifique para continuar recibiendo el mismo.

(c) En caso de divorcio, el subsidio de arrendamiento se le continuará ofreciendo al veterano.

(d) Cualquier otra condición que establezca el Secretario de la Vivienda mediante

reglamentación al efecto.

El incumplimiento de las condiciones restrictivas consignadas en este inciso conllevará la suspensión del subsidio.

Sección 6.-Se reenumera y se enmienda el Artículo 6 como Artículo 8 de la Ley Núm. 173 de 31 de agosto de 1996, para que lea como sigue:

Artículo 8.-Fondo

Se crea un fondo especial que se conocerá como "Fondo de Pareo Estatal de Arrendamiento para Viviendas de Veteranos y de Subsidio de Arrendamiento y Mejoras de Vivienda para Personas de Mayor Edad con Bajos Ingresos". Este Fondo será administrado de acuerdo con las normas y reglamentos que el Departamento de la Vivienda adopte, en armonía con las disposiciones vigentes para la administración de fondos similares. El Fondo será utilizado por el Secretario del Departamento de la Vivienda para otorgar los subsidios provistos en esta Ley. El Fondo se nutrirá de los ingresos dispuestos en el Artículo 14 de la Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, según enmendada.

Además, se autoriza al Fondo a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de quince millones (15,000,000.00) de dólares para cumplir con las disposiciones de esta Ley. Los recursos que utilice el Fondo con cargo a esta autorización serán consignados anualmente en el Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico.

Sección 7.-Se enmienda el párrafo tercero del Artículo 14 de la Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, según enmendada, para que lea como sigue:

"Se crea un Fondo de Contingencia con año económico ilimitado al cual el Secretario de Hacienda transferirá anualmente una cantidad igual al cinco (5) por ciento de los ingresos netos derivados de la operación adicional. El Secretario invertirá las cantidades que ingresen a dicho fondo conforme a la política pública sobre inversiones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Fondo de Contigencias se utilizará para los propósitos establecidos en el Artículo 4 de esta Ley. A partir del 1 de julio de 1996, el referido cinco (5) por ciento de los ingresos netos derivados de la operación de la lotería adicional ingresarán en el fondo especial establecido en el Artículo 8 de la ley que crea el "Programa de Pareo Estatal de Arrendamiento para Viviendas de Veteranos y Subsidio de Arrendamiento y Mejoras de Vivienda para Personas de Mayor Edad con Bajos Ingresos".

Sección 8.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 3074, la cual ha sido descargada de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para autorizar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (Autoridad de Carreteras) a que segregue y venda por el valor de treinta y un mil (31,000) dólares, siguiendo las leyes y normas establecidas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (Autoridad de Carreteras) a la organización "Comité de Vecinos Unidos en Pro-Macún, Inc." el solar ubicado en el Barrio Macún del Municipio de Toa Baja, con una cabida aproximadamente 1558.230 metros cuadrados; el cual colinda por el Norte con la carretera P.R. 22, por el Sur con la calle Flamboyan, por el Este con la calle Principal "La Victoria" y por el Oeste con terrenos del ELA, bajo los términos y condiciones de esta Resolución Conjunta.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

En el Barrio Macún del Municipio de Toa Baja, Puerto Rico, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (Autoridad de Carreteras) posee un solar con una cabida de aproximadamente de 1558.230 metros cuadrados a un costo de treinta y un mil (31,000) dólares; el cual colinda por el Norte con la carretera P.R. 22, por el Sur con la calle Flamboyan, por el Este con la calle Principal "La Victoria" y por el Oeste con terrenos del ELA, el cual es un remanente del Departamento de Transportación y Obras Públicas (Autoridad de Carreteras).

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (Autoridad de Carreteras) no necesita esa propiedad y la organización "Comité de Vecinos Unidos en Pro-Macún, Inc." tiene ubicado en este solar una estructura en madera y zinc, que lo utilizan como Centro Comunal Recreativo provisional.

La comunidad del Barrio Macún está localizada al Sur del Municipio de Toa Baja, cerca de la carretera P.R. 2, área donde actualmente se está desarrollando la expansión territorial. Además es una comunidad con desventajas económicas y de privación cultural que necesita de actividades sociales y culturales edificadoras.

El propósito fundamental de esta organización es desarrollar al máximo los recursos sociales, económicos y gubernamentales disponibles en la busqueda de alternativa a las necesidades básicas y de progresos para los residentes.

Nuestra sociedad puertorriqueña necesita de seres humanos comprometidos y de voluntarios que estén prestos a la búsqueda de soluciones a los problemas de nuestra sociedad. Esta es una organización sin fines de lucro que ofrece servicio de hermandad en pro-del bienestar de los ciudadanos.

A los fines de facilitar un lugar seguro para establecer el Centro comunal Recreativo y la utilización al máximo del espacio disponible para esta comunidad; se recomienda la compraventa del referido solar bajo los términos y condiciones esta Resolución Conjunta.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se autoriza al Departamento de Transportación y Obras Públicas (Autoridad de Carreteras), a que segregue y venda a la organización "Comité Vecinos Unidos en Pro-Macún, Inc." el solar ubicado en el Barrio Macún del Municipio de Toa Baja, con una cabida aproximadamente 1558.230 metros cuadrados; el cual colinda por el Norte con la carretera P.R. 22, por el Sur con la calle Flamboyan, por el Este con la calle Principal "La Victoria" y por el Oeste con terrenos del ELA, bajo los términos y condiciones de esta Resolución Conjunta.

Sección 2.-El terreno a que se hace referencia en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, una vez sea vendido a la organización "Comité Vecinos Unidos en Pro-Macún, Inc.," será utilizado únicamente para establecer permanentemente el Centro Comunal Recreativo y Deportivos, con el propósito de llevar a cabo actividades dirigidas a desarrollar el aspecto físico, mental y emocional de los residentes y vecinos de la comunidad. Su uso no podrá ser variado sin el consentimiento previo del Departamento de Transportación y Obras Públicas (Autoridad de Carreteras).

Sección 3.-La organización "Comité Vecinos Unidos en Pro Macún, Inc." podrá ejercer la compraventa del solar objeto de esta Resolución Conjunta, dentro del término de tres (3) años a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta.

Sección 4.-El terreno será vendido de acuerdo al valor estipulado de treinta y un mil (31,000) dólares por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (Autoridad de Carreteras).

Sección 5.-Los gastos de la escritura serán sufragados por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (Autoridad de Carreteras).

Sección 6.-Los términos y condiciones de esta Resolución Conjunta se recojerán y formarán parte de la escritura de compraventa que en su momento se otorgue.

Sección 7.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1969, el cual ha sido descargado de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales.

**"LEY**

Para denominar el tramo de la carretera 362 entre las intersecciones con las carreteras 360 y la Avenida Castro Pérez (carretera 122) como Avenida Salvador Tió.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

Salvador Tió escritor y académico, nació en Mayagüez en el año 1911, apredió a ver el mundo desde el campanario de su Iglesia en su amado pueblo de San Germán donde creció y formo, falleció en San Juan el 16 de septiembre de 1989. Estudió Derecho en la Universidad de Columbia, Nueva York, estudios que continuó en Madrid, España, pero los abandonó debido al estallido de la Guerra Civil española. Regresó a Puerto Rico para atender las empresas agrícolas y comerciales familiares y prestó servicios en la Compañía de Fomento Industrial, y más tarde, en la Editorial Universitaria, que dirigió a partir de 1973. Fue colaborador de las siguientes publicaciones periódicas: Bohemia Puertorriqueña, El Diario de Puerto Rico, El Universal, El Imparcial, El Mundo, Puerto Rico Ilustrado, El Nuevo Día y fundó la Revista Isla. En dos ocasiones obtuvo el premio de periodismo del Instituto de Literatura Puertorriqueña y también fue merecedor de dos premios del mismo Instituto por sus obras ***A fuego lento. Cien columnas de humor y una cornisa***, en el 1954 y su ***Fracatán de tirabuzones***, en 1975, una variedad de las (greguerías) que inventara Ramón Gómez de la Serna. En 1991 la Academía Puertorriqueña de la Lengua publicó ***Homenaje a Don Salvador Tió y Montes de Oca, humorista y patriota.*** Póstumamente se ha editado tres de sus obras: ***Lengua mayor*** (1992), ***Desde el Tuétano*** (1993), resumen de columnas publicadas en El Nuevo Día y un cuaderno de versos, décimas titulado ***Soy boricua porque soy***, precedido de una introducción escrita por Luis de Arrigoitia y un ensayo del propio autor titulado ***Poetas y trovadores*** (1995).

Salvador Tió fue Presidente Interino del Ateneo Puertorriqueño, Director de la Editorial Puertorriqueña y Director de la Academía Puertorriqueña de la Lengua Española. Debido a su preocupación por el destino de la lengua y los estragos de un bilingüismo mal interpretado, inventó con intención educativa dos vocablos que se han popularizado universalmente: el "espanglish" en 1948 y el "inglañol" algunos años después; el "esplanglish", para designar la hispanización del inglés y el "inglañol", la anglificación del español. Dos palabras que según él, sólo podrían haberse inventado en una frontera cultural y política como es Puerto Rico donde el choque de dos cultura puede ser enriquecedor o destructor, según el criterio que determine la política.

Por toda esta valiosa aportación cultural, es menester que inmortalicemos el nombre de Salvador Tió, designando el tramo denominar el tramo de la carretera 362 entre las intersecciones con las carreteras 360 y la Avenida Castro Pérez (carretera 122) como Avenida Salvador Tió.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.- Para designando el tramo denominar el tramo de la carretera 362 entre las intersecciones con las carreteras 360 y la Avenida Castro Pérez (carretera 122) como Avenida Salvador Tió.

Artículo 2.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2636, el cual ha sido descargado de la Comisión de Asuntos Municipales; y de Hacienda.

**"LEY**

Para enmendar la Ley Número 163. De 11 de agosto de 1995 con el propósito de asiginarle fondos al Departamento de Hacienda para permitirle repagar el balance pendiente de pago del préstamo que recibió del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

El artículo 23 de la Ley Número 80 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como la "Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales", ordernó al Secretario de Hacienda a hacer una revisión de los registros de la contribución sobre la propiedad del Departamento de Hacienda. Esta revisión tená el propósito de determinar la deuda del Deparamento de Hacienda con los municipios de Puerto Rico por concepto de la contribución sobre la propiedad que el Departamento cobrada y luego remesaba a los gobiernos muinicipales.

Una vez completa la revisión de los registros del Departamento de Hacienda para cada municipio, se hizo necesario establecer un método para financiar el saldo de la referida deuda. Con este propósito la Legislatura de Puerto Rico aprobó la Ley Número 103 de 26 de agosto de 1994 en la cual autorizó al Departamento de Hacienda a obtener un financiamiento del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico o de otras instituciones financieras por una cantidad no mayor de $284,350,287. Bajo dicha Ley, la Oficina de Gerencia y Presupuesto fijaría ciertas asignaciones presupuestarías al Departamento por una cantidad equivalente al principal y los intereses de dicho financiamiento para así permitir al Departamento liquidar el mismo. Conforme a dicha Ley, el Banco aprobó un financiamiento al Departamento de Hacienda por la cantidad de $284,350,287. Como parte de dicho financiamiento, el Banco hizo cuatro desembolsos al Departamento de Hacienda que ascendía a $191,865,820.

La Ley Número 103 fue posteriormente derogada por la Ley Número 163 de 11 de agosto de 1995, la cual autorizó al Departamento a obtener del Banco o de otras instituciones financieras un financiamiento por una cantidad no mayor de $215,000,000. Según ls designaciones de la Ley Número 163, dicha deuda sería saldada por medio de asignaciones legislativas. El 23 de abril de 1996el Banco le vendió a la Corporación para el Financiamiento Público una porción de la deuda del Departamento de Hacienda, dicha porción siendo por la cantidad de $177,410,086. La porción de la deuda adquirida por la Corporación para el Financiamiento Público está siendo saldada por medio de asignaciones legislativas bajo a la Ley Número 163. La adquisición de dicha porción de la deuda fue hecha con fondos generados por una emisión de bonos de dicha Corporación.

A la fecha del traspaso de dicha porción de la deuda a la Corporación para el Financiamiento Público, el balance total de la deuda del Departamento correspondiente al Financiamiento hecho por el Banco bajo la Ley Número 103 y la Ley Número 163 ascendía a $188,581,547. Luego de finalizarse los estudios que se utilizaron para determinar el monto real de la deuda del Departamento a los municipios de Puerto Rico por concepto de contribuciones sobre la propiedad, se determinó dque los desembolsos que había hecho el Banco al Departamento excedían por $8,782,623 la suma finalmente determinada por esos estudios como la deuda real del Departamento a los municipios. Como resultado de esto, el Banco ha mantenido en sus libros esta porción de la deuda del Departamento de Hacienda.

Posterior a la fecha del traspaso, el Banco le adelantó $12,633,298 adicionales al Secretario de Hacienda para permitirle repagar una deuda que tenía el Departamento de Hacienda con el Municipio de San Juan por concepto de contribuciones sobre la propiedad. Al 12 de mayo el total de la dueda que tiene el Departamento de Hacienda con el Banco (incluyendo intereses acumulados) es de $27,640,984. Esta deuda acumula intereses a razón de 8% annual.

En vista de lo anterior, es necesario enmendar la Ley Número 163 para autorizar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a incluir en el presupuesto del Gobierno de Puerto Rico una asignación adicional para repagar el principal más intereses adeudado por el Departamento de Hacienda al Banco.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Número 163 e 11 de agosto de 1995 para que se lea como sigue:

"Artículo 2- La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá incluir en el Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico, en cada uno de los presupuestos del Gobierno de Puerto Rico de los próximos veinte (20) años fiscales, comenzando con el año fiscal 1995-96, una cantidad equivalente al principio e intereses que el Gobierno deberá pagar para ir cubriendo el pago de principal e intereses del financiamiento obtenido para el pago del la referida obligación. Además, la Oficina de Gerencia y Presupuestos del Gobierno de Puerto Rico en cada uno de los próximos tres años fiscales, comenzando con el año fiscal 2001-02, la cantidad adicional de $11,675,381 para saldar el principal de la deuda que tiene el Departamento de Hacienda con el Banco Gubenarmental de Fomento para Puerto Rico a la fecha de vigencia de esta ley, máslos intereses acumuladados al 8% hasta el pago final de dicha deuda."

Sección 2- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2535, la cual ha sido descargada de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportación del Departamento de Transportación y Obras Públicas a ceder en usufructo al Municipio de Bayamón diez y seis (16) predios de terreno vacantes y remanentes en varias localidades del Municipio que se describen a continuación: remanente carretera #2 frente hospital Ruiz Soler; remanente Ave. Circunbalación Norte, Int. carretera #2, cerca Club de Leones; remanente Ave. Circunbalación Norte, Int. carretera #174 al lado de River Side Park; remanente carretera #2 frente a Funeraria Porta Coeli, Hato Tejas; remanente carretera #2 cerca de la casa del camionero, entrada Sierra Bayamón; remanente carretera #2 Int. carretera #29, entrada al Volcán en Hato Tejas;

remanente frente al Supermercado Grande y colindando con Losada Auto en Hato Tejas; remanente Ave. Comerío frente a Urb. Frontera; remanente Ave. Comerío Int. Expreso de Diego cerca del puente; remanente carretera #29 frente a la Cambija; remanente carretera #174, Int. carretera Teniente Nelson Martínez; remanente carretera #167 frente a Farmacia Walgreens y Pep Boys en Villa Contesa y Extensión Forest Hills; remanente carretera #167 cerca Gallera Castrodad; remanente carretera #167 frente a Urb. Bella Vista; remanente carretera #174 frente Urb. Versalles, colindando con el Colegio Regional de Bayamón y remanente carretera #177 cerca del Puente Rio Bayamón; los cuales deberán ser identificados por la Autoridad de Carreteras y Transportación con sus respectivas colindancias y cabida al ser completado el correspondiente proceso de traspaso.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

El Municipio de Bayamón se propone implantar medidas para la conservación del ambiente y los recursos naturales de manera que se garantice su disfrute por parte de la generación presente así como las generaciones futuras. Es el propósito del Municipio adquirir en usufructo terrenos en distintas áreas de la ciudad para convertirlos en pequeños pulmones urbanos que provean belleza natural y propicien el mejoramiento del ambiente urbano y paisajista para el embellecimiento y ornato de toda la ciudad. A tales fines el Municipio interesa adquirir en usufructo aquellos remanentes de terreno vacantes propiedad de la Autoridad de Carreteras y Transportación con el propósito de desarrollar el ornato y forestación de dichas áreas. De esta manera se crearán micro pulmones ecológicos urbanos, pequeñas áreas de descanso o la ubicación de pizarras de orientación al público según corresponda a su mejor uso y manejo. A la vez, se proveerá un ambiente urbano adecuado conforme la aspiración del Municipio de mejorar el aspecto físico de la ciudad. Estas medidas de mejoramiento del ambiente urbano también permitirán la revitalización de areas que en la actualidad están en deterioro y representan un problema de contaminación visual.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se ordena a la Autoridad de Carreteras del Departamento de Transportación y Obras Públicas a ceder en usufructo al Municipio de Bayamón los siguientes remanentes de terreno vacantes: remanente carretera #2 frente hospital Ruiz Soler; remanente Ave. Circunbalación Norte, Int. carretera #2, cerca Club de Leones; remanente Ave. Circunbalación Norte, Int. carretera #174 al lado de River Side Park; remanente carretera #2 frente a Funeraria Porta Coeli, Hato Tejas; remanente carretera #2 cerca de la casa del camionero, entrada Sierra Bayamón; remanente carretera #2 Int. carretera #29, entrada al Volcán en Hato Tejas; remanente frente al Supermercado Grande y colindando con Losada Auto en Hato Tejas; remanente Ave. Comerío frente a Urb. Frontera; remanente Ave. Comerío Int. Expreso de Diego cerca del puente; remanente carretera #29 frente a la Cambija; remanente carretera #174, Int. carretera Teniente Nelson Martínez; remanente carretera #167 frente a Farmacia Walgreens y Pep Boys en Villa Contesa y Extensión Forest Hills; remanente carretera #167 cerca Gallera Castrodad; remanente carretera #167 frente a Urb. Bella Vista; remanente carretera #174 frente Urb. Versalles, colindando con el Colegio Regional de Bayamón y remanente carretera #177 cerca del Puente Rio Bayamón; los cuales deberán ser identificados por la Autoridad de Carreteras y Transportación con sus respectivas colindancias y cabida al ser completado el correspondiente proceso de traspaso.

Sección 2.-El otorgamiento del instrumento público para la cesión en usufructo de los remanentes de terreno vacantes antes descritos, a tenor con lo dispuesto en esta Resolución Conjunta, no conllevará la cancelación de derechos notariales y su inscripción en el Registro de Propiedad se hará sin el pago de derechos de clase alguna.

Sección 3.-Se exime al Municipio de Bayamón de la obligación de prestar fianza.

Sección 4.-El usufructo que aquí se ordena concluirá a los quince (15) años después de su otorgación, sujeto a renovación por un periodo de quince (15) años adicionales o cuando el Municipio de Bayamón y el Departamento de Transportación y Obras Públicas así lo acuerden.

Sección 5.-Una vez el Municipio de Bayamón asuma posesión de los predios aquí descritos, será responsable del mantenimiento y mejoras ordinarias y extraordinarias que estime necesarias realizar para los propósitos descritos en la Exposición de Motivos.

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3363, el cual ha sido descargado de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía.

**"LEY**

Para adicionar un inciso (f) al Artículo 7 de la Ley Número 111 de 12 de julio de 1985, según enmendada, conocida como "Ley para la Protección y Conservación de Cuevas, Cavernas o Sumideros de Puerto Rico", a fin de facultar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para realizar labores de limpieza en las cuevas, cavernas, sumideros cuando dicho recurso natural así lo necesite, a pesar de que el dueño del predio o finca que ubica el acceso a utilizar para entrar no lo permite.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

El Artículo 7 de la Ley Número 111 de 12 de julio de 1985, dispone las actividades permitidas a realizarse en las cuevas, cavernas o sumideros de nuestra hermosa isla de Puerto Rico. Para efectuar dicha actividad se requiere el consentimiento escrito del Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y del dueño del predio o finca en donde ubica el acceso o accesos necesarios a utilizarse para su entrada.

En el cumplimiento del deber ministerial, este legislador ha obtenido información y además le consta de propio y personal conocimiento, sobre situaciones contrarias a la politica pública dispuesta en dicha Ley. Esto ocurre cuando los dueños de los referidos predios o fincas, nieguen la entrada al personal competente del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a efectuar labores de limpieza en las cuevas, cavernas o sumideros.

Como es de conocimiento general y previamente así demostrado, estos recursos naturales son únicos y ofrecen una belleza artística producto de la naturaleza y del medio ambiente. Razón por la cual, es indispensable el no solo establecer la política pública de su valor natural, si no además proveer los mecanismos en ley necesarios para su más eficaz conservación.

Ante lo cual, es menester se le autorice al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales realizar labores de limpieza en las cuevas, cavernas y sumideros, cuando así lo necesiten, no obstante el dueño del predio o finca que ubica el acceso a utlizarse para entrar no lo permita.

Los sumideros son los drenajes naturales de las aguas de escorrentías y viabilizan las reservas subterráneas de aguas. El libre paso de las aguas por los sumidores es parte del sistema del sumidero y de las aguas subterráneas, por ello es menester mantenerlos limpios.

De ser necesario el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales recurrirá al Tribunal con competencia en la materia para obtener una orden y permitir la ejecución de limpieza en vía de conservar adecuadamente tan importante recurso natural.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.-Se adiciona un inciso (f) al Artículo 7 de la Ley Número 111 del 12 de julio de 1985, para que se lea como sigue:

"(f) Realizar labor para conservar adecuadamente este recurso natural. En caso de que el dueño del predio o finca de acceso o accesos de entrada a dichos recursos naturales se oponga a estas labores, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales acudirá al Tribunal competente en la materia, para obtener una orden que permita las gestiones encaminadas a la referida limpieza".

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 97, la cual ha sido descargada de la Comisión de Vivienda.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para autorizar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas a segregar y transferir, libre de costo, diez (10) cuerdas de terreno al municipio de Río Grande, de la finca principal localizada en el barrio Zarzal, para la construcción de parque de pelota, cancha de baloncesto, centro comunal y áreas de recreación pasiva, entre otras, para el uso y disfrute de la comunidad Villa Realidad.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

El rápido crecimiento poblacional ocurrido en el municipio de Río Grande y la escasez de terrenos disponibles para la construcción de canchas y otras facilidades recreativas hacen necesario que identifiquemos aquellas tierras en desuso para darles el máximo y más productivo aprovechamiento.

Los residentes de la comunidad Villa Realidad necesitan de áreas comunales de recreación variada que les proporcionen entretenimiento, socialización y solaz.

Sabemos que los parques para la práctica de deportes y demás lugares recreativos son elementos necesarios para el cabal desarrollo físico, mental y social de nuestros jóvenes. Son, además, medios de probada eficacia para combatir el ocio que puede conducir la desviación moral, delincuencia y hasta la eventual criminalidad. Es así, ya que contribuyen a canalizar energías y dirigirlas hacia el ejercicio de actividades de saludable competencia deportiva y sano entretenimiento.

La Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas es dueña de los terrenos donde se encuentra establecida la comunidad Villa Realidad, en la municipalidad de Río Grande, cuya finca tiene una cabida 93.8613 cuerdas, de las cuales identificar diez cuerdas para los propósitos anteriormente señalados.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se autoriza a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas a segregar y transferir, libre de costo, diez (10) cuerdas de terreno al municipio de Río Grande, de la finca principal cuya extensión es 93.8613 cuerdas, situadas en el barrio Zarzal, para la construcción de parque de pelota, cancha de baloncesto, centro comunal y áreas de recreación pasiva, entre otras, para el uso y disfrute de la comunidad Villa Realidad.

Sección 2.-El traspaso de estos terrenos está condicionado a que el municipio de Río Grande utilice los mismos para propósitos indicados en el Artículo 1 de esta Resolución Conjunta.

Sección 3.-El municipio de Río Grande no podrá disponer de la propiedad si en el futuro descontinúa el uso para cuya finalidad se autoriza este traspaso, sino que por el contrario, revertirá la misma a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas.

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 3427, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para asignar al Contralor de Puerto Rico la cantidad de tres millones (3,000,000) de dólares para gastos de funcionamiento en el año fiscal de 2000-2001.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

El Contralor de Puerto Rico es, por mandato constitucional, el principal guardian de la integridad del gasto público. Desde la creación del cargo, que en su época fue idea ejemplar para otras jurisdicciones y hasta el día de hoy, la Oficina del Contralor ha sabido ganarse con su fiscalización y orientación la confianza del pueblo.

El Contralor de Puerto Rico nos ha informado de la necesidad de fondos adicionales para adelantar su agenda de trabajo para el año fiscal 2000-2001. Esta necesidad se hace aún más apremiante a la luz de que en los últimos años han recaido sobre el Contralor la responsabilidad adicional de auditar las finanzas municipales cada dos (2) años, auditar cada cuenta que se genera por razón de programas privatizadores, auditar el funcionamiento de las escuelas de la comunidad y, a raíz del embate de desastres naturales, el estrutinio de cientos de millones de dólares en fondos públicos distribuidos para compensar daños.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes tiene la documentación relativo a la disponibilidad para el año fiscal 2000 - 2001 de recursos presupuestarios del Fondo de Contingencia de la Loteria para sufragar esta asignación especial y por ende se puedan hacer disponibles para ser asignados a los fines y propósitos contemplados en esta Resolución
Conjunta de vital importancia para Puerto Rico.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.- Se asigna al Contralor de Puerto Rico, la cantidad de tres millones (3,000,000) de dólares, para gastos de funcionamiento en el año fiscal 2000-2001.

Sección 2.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones privadas o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos de América.

Sección 3.- Consta en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes la documentación relativo a la disponibilidad de fondos adicionales para el año fiscal 2000 - 2001 indicando la disponibilidad de recursos presupuestarios del Fondo de Contingencia de la Loteria para sufragar esta asignación especial.

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor el 1 ro. de julio de 2000."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 3539, la cual ha sido descargada de la Comisión de Asuntos Internos.

**"RESOLUCION**

Para felicitar y reconocer a Pedro Santos, Payaso Pirulí, y a los payasos de Puerto Rico, con motivo de la celebración de la **"Semana del Payaso"**, del 1 al 7 de agosto de 2000.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La Ley Pública 91-443 del 8 de octubre de 1970, firmada por el Presidente de Estados Unidos, Hon. Richard Nixon, proclama la primera semana del mes de agosto de cada año como "Semana del Payaso". Esta semana comenzó a celebrarse en los Estados Unidos y Puerto Rico desde el año 1960 por la Organización de "Clowns of America International".

Walt Savage del Treton Clown Club de New Jersey, fue quien concibió la idea de la **"Semana Nacional del Payaso"**, escogiendo la semana del 1 al 7 de agosto, en honor a sus dos hijas que celebran sus cumpleaños en dicha semana. Fueron muchas las gestiones realizadas para hacer realidad esta semana.

Cabe señalar que es difícil pensar que detrás del maquillaje exagerado del payaso, que asemeja una boca sonriente y unos ojos chispeantes, se esconde el rostro de un ser humano extraordinario que muchas veces ríe a carcajadas para hacer feliz al público, aún cuando las adversidades de su situación personal lo invitan a llorar por dentro.

Pedro Santos, mejor conocido por su personaje del Payaso Pirulí, conoce la realidad, pues en 50 años en la profesión de payaso, tiene acumuladas vivencias como para escribir varios libros. Este singular personaje nació el 23 de febrero de 1932 en Santurce, día en que su mamá estaba muy atenta al desfile de un circo de payasos que pasaba por la Avenida Ponce de León, parada 22 de Santurce.

Eran tiempos difíciles, pero Pedro atajaba las dificultades de una niñez de privaciones con una sonrisa que parecía esculpida en su rostro. Inicia su vida de payaso en las actividades de la escuela elemental Pedro Gerónimo Goyco. Sin lugar a dudas, este interés por ese mundo fantástico del circo y del difícil arte de hacer reír, lo llevó muy lejos. A los 17 años, el payaso Corino, Aurelio Sepúlveda, del Circo Hermanos Marco, en Santurce, lo presentó a éstos y les explicó del interés de Pedro por las "payasadas" y le dieron una oportunidad, recorriendo así el área metropolitana y los pueblo cercanos. De día iba a la escuela y de noche al circo.

Pero el Payaso Pirulí se preocupó por ser un ciudadano útil a su pueblo y a la nación americana. Pedro sirvió al Ejército de los Estados Unidos, siendo enviado en el grupo de tropas de ocupación. A su regreso en 1955, se integra a la vida civil y continúa las presentaciones artísticas como Payaso Pirulí,

siendo el primero en animar una fiesta de cumpleaños en la Isla, cosa que ahora es una de las principales fuentes de ingreso de los payasos en Puerto Rico.

Además, también fue el primero en realizar promociones comerciales en Puerto Rico, cuando en 1957 lo hacía con la compañía de refrescos Coca Cola. Asimismo, es el primer payaso puertorriqueño en llevar su arte a la televisión local en el programa de televisión "Lagrimita y sus amigos", en el canal 2.

Con frecuencia viajó a la ciudad de New York, donde presentó su espectáculo en el Teatro Puerto Rico. En 1971, ingresó en la organización "Clowns of America International", siendo su Vice-Presidente Regional, durante 13 años, lo que lo motiva a fundar en la Isla una Asociación de Payasos.

Este hombre sencillo, pero trabajador, representó a Puerto Rico en la gran Convención de la Organización Internacional "Clowns of America", celebrada en la ciudad de Bornos Regis, Inglaterra, en 1991. Allí fue escogido para hacer un "show" para los dignatarios internacionales, junto a payasos de fama mundial de Alemania, Hungría, Bélgica y Australia.

El Senado de Puerto Rico se enorgullece de la labor realizada por Pedro Santos, Payaso Pirulí, y le exhorta a continuar haciendo reír a niños, jóvenes y adultos.

**RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:**

Sección 1.- Felicitar y reconocer a Pedro Santos, Payaso Pirulí, y a los payasos de Puerto Rico, con motivo de la celebración de la **"Semana del Payaso"**, del 1 al 7 de agosto de 2000.

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a Perdo Santos, Payaso Pirulí, en la **"Semana del Payaso"**.

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para un receso de un (1) minuto en Sala.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

**RECESO**

- - - -

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Luz A. Arce Ferrer, Vicepresidenta.

- - - -

SRA. VICEPRESIDENTA: Se reanuda la Sesión. Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar se llame el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

## CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Sustitutivo al Proyecto del Senado 2570, titulado :

"Para adicionar el Artículo 7-A a la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, conocida como "Ley del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)", a fin de crear el cargo de Procurador Auxiliar Especializado en Educación en la Oficina del Procurador del Ciudadano."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación del Sustitutivo al Proyecto del Senado 2570.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

SRA. OTERO DE RAMOS: Señora Presidenta. De vez en cuando mire hacía acá, porque yo estaba de pie y ya se aprobó. No tengo ninguna objeción en esperar, pero para los próximos turnos.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 3163, titulada :

"Para designar la Cancha de la Urbanización Los Dominicos, del Municipio de Toa Alta, como "Cancha José "Cheo" Medina Rivera"."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe.

SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción?

SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se aprueban.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna objeción?

SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.

SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se aprueba.

Nos alegra hoy tener a la compañera Mercedes Otero de Portavoz de la Minoría.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Ya esta mañana, antes de que Su Señoría llegara la habíamos felicitado porque en un (1) sólo día ha sido portavoz y también fue Presidenta en Funciones temprano en la mañana.

SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante, compañero.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.

SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.

SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 3162, titulada :

"Para designar el Parque Recreativo de la Urbanización Los Dominicos, del Municipio de Toa Alta, como "Parque Recreativo Florentino "Pirata" Rivera"."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para, que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción?

SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.

SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se aprueban.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna objeción?

SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.

SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción?

SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.

SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2189, titulado :

"Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales" a fin de establecer el proceso de elección de alcalde a la Junta de Gobierno del Centro, cuando ocurra una vacante."

SR. DAVILA LOPEZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Dávila López.

SR. DAVILA LOPEZ: Para, que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción?

SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.

SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se aprueban.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna objeción?

SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.

SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2613, titulado :

"Para enmendar la Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, en su Artículo 24 inciso C (1), a los fines de que los menores cuyas medidas dispositivas impuestas sean menor de seis (6) meses puedan estar bajo la custodia de la Administración de Instituciones Juveniles."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para, que esta medida se deje para un turno posterior.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud para que se deje para un turno posterior ¿hay alguna objeción?

SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.

SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2535, titulado :

"Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 170 del 23 de julio de 1974, conocida como Ley Orgánica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, a fin de establecer una aportación para proyectos de remedio o limpieza ambiental de 25% del cargo establecido por cada unidad a ser conectada al sistema de alcantarillados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico; para enmendar el Artículo 1 de la Ley 170, con el propósito de enmendar la definición de unidad aclarando que para los proyectos de remedio o limpieza ambiental, una unidad equivale a 400 galones de agua de descarga al día en lo que respecta el sistema de alcantarillado; y para enmendar el Artículo 1 de la Ley 170 para definir el concepto de proyecto de remedio o limpieza ambiental."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para, que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción?

SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.

SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se aprueban.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.

SRA. OTERO DE RAMOS: Para una pregunta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con la pregunta.

SRA. OTERO DE RAMOS: Hace mucho tiempo que nosotros hemos venido evaluando la Agencia de Acueductos y Alcantarillados, ahora las Aguas de Puerto Rico, primero que fue la interpelación en dos (2) ocasiones, luego nuestro Presidente hizo una Comisión que le dio mucha investigación a esta Agencia, y entonces ahora vamos a legislar para hacer un nuevo mecanismo para evaluar. Me pregunto, cuál ha sido la necesidad de crear, si es que lo anterior, la Comisión anterior no funcionó, si fue que terminó su objetivo o, por qué estamos legislando, si ya me consta de propio y personal conocimiento que el señor Presidente de este Senado ha venido dándole seguimiento a la Autoridad de las Aguas y ha habido informes parciales que nos han satisfecho grandemente y entonces ahora estamos haciendo un nuevo comité por ley. Si es que vamos a tener otro objetivo o si es que las funciones que teníamos no eran las adecuadas. Yo quiero que se me explique.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, no es que no funcionó la Comisión Especial, al revés, es que funcionó. Lo que queremos es que continúe funcionando, eso es todo.

SRA. OTERO DE RAMOS: Pero, para continuar funcionando primero nosotros no legislamos, ¿por qué estamos legislando ahora? O sea, ¿qué es especial que tengamos que legislar ahora?

SR. MELENDEZ ORTIZ: Lo que sucede es que la Comisión Especial que se hizo fue aquí en el Senado, lo que queremos ahora es que se enmiende la Ley Núm. 170, como la Ley de Acueductos y Alcantarillados, para que se establezca una aportación - para proyectos de remedio - para poder continuar la función que hasta ahora se había estado llevando a cabo, que no se estaba llevando a cabo, mejor dicho. Y ésta es una de las medidas que surgen a raíz de todo el trabajo que realizó la Comisión Especial, de aquí del Senado, para evaluar y de todas estas cosas relacionadas con la Autoridad de Acueductos.

SRA. OTERO DE RAMOS: Señora Presidenta, si puedo entender que el cambio de una administración gubernamental y el cambio de una administración legislativa, es necesario el seguimiento para que no se agote los estudios y las interpretaciones que se han venido haciendo para garantizarlo, yo entiendo la legislación. Pero, realmente lo que no entiendo ni entiendo la justificación que se me da es en término de que el Comité no siga trabajando como había estado trabajando, que lo ha hecho muy bien, yo no tengo problema con eso. Lo que si es que no veo una razón que no sea ésa, de darle garantía de que en el futuro si cambia la Presidencia, si cambia la Comisión, si cambia un gobernador, si cambia algunas personas que han estado colaborando en la Autoridad de las Aguas, se puedan mantener, pues, entonces yo sí entiendo la legislación. Y le pregunto al señor Portavoz si es ésa la preocupación.

O sea, queremos garantizar con el cambio administrativo, que puede darse de cualquier manera, porque va a cambiar la legislatura, va a cambiar el gobierno, para garantizar que se le siga dando el seguimiento que la Asamblea Legislativa le ha venido dando a los problemas de la Autoridad de las Aguas, de manera que con la legislación se garantiza que no importa quien venga le va a seguir dando ese seguimiento. Si eso es yo no tengo ningún problema.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Eso es uno. Pero, además de eso esta medida persigue facultar a la Autoridad de Acueductos a estimular proyectos que tengan la finalidad de proteger el ambiente. Esto a raíz de los asuntos que se han discutido en la palestra pública, del daño que se le ha hecho al ambiente por muchos años y de la poca o ninguna acción que se ha tomado para remediarlo. Esta medida establece eso mismo, remedios., que se van a sufragar mediante una reducción a la aportación de conexión que cobra la Autoridad a los proyectos privados. Y entonces, se le exige al que haga el proyecto de que haga proyectos remediativos para proteger siempre el ambiente. Las aguas subterráneas, el río, quebrada y etcétera, etcétera, etcétera.

SRA. OTERO DE RAMOS: Yo no tengo ninguna otra objeción, señora Presidenta.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidente.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2471, titulado :

"Para enmendar el último párrafo del Artículo 17 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos" a fin de que se establezca un proceso único de obtención y renovación de permisos en los casos de construcción de vivienda de bajo costo, cuando ésta sea realizada por una persona de escasos recursos con ayuda de familiares o amigos y sea levantada por etapas."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? Senadora Otero de Ramos.

SRA. OTERO DE RAMOS: Este Proyecto, es un proyecto que yo creo que tiene una finalidad loable, pero yo tengo la preocupación y por eso quiero hacer la pregunta, del trato desigual ante la ley donde personas por el mero hecho de estar en la pobreza no tienen que rendir planos, ni otros mecanismos que tiene el gobierno para hacer la ley. Me preocupa porque, señora Presidenta, las invasiones de terreno, que precisamente se dan porque no tienen regulación, ni planificación, ni forma de que el gobierno controle esa construcción de vivienda, pudiera darse aquí.

Yo le pregunto si es que va haber un mecanismo, como en el caso de la gente pobre que no tiene como defenderse en un Tribunal y que se le da un abogado de Asistencia Legal, si en ése o si en este caso el gobierno puede preparar unos ingenieros o unas personas que realmente puedan hacer planos o puedan ayudar en la orientación de esos pobres que están haciendo esa vivienda, de manera que no se viole la construcción en la forma y manera que puedan tener una casa decente en términos de su construcción, de manera de que un huracán no pudiera afectarla, meramente, porque son pobres. Y entonces por avanzar a hacer por fases lo que ellos entendían que era lo fácil para tener la vivienda salgan más perjudicados.

SR. MELENDEZ ORTIZ: A la distinguida compañera tengo que decirle lo siguiente. Número uno, las invasiones son cosas del pasado y de ocurrir en la actualidad, pues, el Código, Artículo 288 del Código Penal, establece el procedimiento y no, a la verdad que en estos momentos cuando ocurre un problema el Departamento de la Familia y Vivienda en común acuerdo con Fiscalía y la Policía resuelven el problema y no trasciende.

Número dos, históricamente, en Puerto Rico ha existido lo que se llama los "planos modelos". Por instrucciones de don Luis Muñoz Marín, se crearon a través de la Junta de Planos unos planos que en los años '60 se le daba de donativo a toda familia cuya construcción de su vivienda no pasara de cuatro mil (4,000) dólares y ese plano, esa construcción de la vivienda de ese "plano modelo" costaba cuatro mil (4,000). Posteriormente, se enmendó la ley para subir el costo de esa construcción a ocho mil (8,000) dólares. Y en el cuatrienio pasado se aprobó un proyecto de Báez Galib, que trabajó este Senador en la Comisión de Vivienda, aumentando el costo de ese "plano modelo" a veinte mil (20,000) dólares para

familias de escasos recursos económicos en Puerto Rico. Eso planos se consiguen a través de ARPE, Junta de Planos y el Departamento de la Vivienda. Dicho sea de paso, el Proyecto de Ley de Báez Galib ordenaba a Vivienda a través de la Administración de Desarrollo y Mejoras a la Vivienda dar ese plano a las familias humildes en Puerto Rico.

Este lo que busca, más bien, es la permisología. Porque a veces la familia consigue el "plano modelo" y consigue el sitio y consigue la mano de obra pero se le hace difícil por costo la permisología, por la distancia o por lo que sea. Este Proyecto va dirigido a eso. Ordenar a ARPE que sin costos adicionales, utilizando sus propios recursos de ingenieros, técnicos y personal designen a unas personas en cada oficina regional que atiendan estos casos como lo que son. Casos insolventes que necesitan la ayuda, la mano amiga del gobierno para que puedan construir su hogar.

SRA. OTERO DE RAMOS: Señora Presidenta, en base a la aclaración que me hace el compañero, quisiera entonces hacer una enmienda para que en la página 2, en la línea 7, se escriba, "Bastando sólo con la presentación de un plano modelo, croquis o gráfica ilustrada de la obra.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para una enmienda en Sala. ¿Perdón? Bueno, Mercedes que la termine.

SRA. OTERO DE RAMOS: Es que yo sugerí una enmienda, el compañero va a enmendar mi enmienda y yo estoy de acuerdo con la enmienda que va a hacer, así que de una vez la diga completa.

SRA. VICEPRESIDENTA: Pues, adelante el compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Okey. Línea 7, de la página 2, tachar "croquis o gráfica ilustrativa de la obra" y sustituir por "de un plano modelo aprobado por ARPE". Corregimos la enmienda, señora Presidenta. Compañera Mercedes Otero, la enmienda sería la siguiente: Página 2, línea 6, eliminar "No se requerirá la presentación de planos" y en la línea 7, tachar "croquis o gráfica ilustrativa de la obra" y sustituir por "plano modelo aprobado por ARPE".

Esa es la enmienda.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la enmienda, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 2531, titulada :

"Para declarar el mes de mayo de cada año en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico "Mes de la Conservación y Cuidado de la Audición y del Audiólogo", disponer lo concerniente a la proclama del Gobernador de Puerto Rico al efecto de su celebración."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción?

SRA. OTERO DE RAMOS: Hay una pregunta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.

SRA. OTERO DE RAMOS: En la Sección 3, en la línea 7 de esta Resolución Conjunta, dice: "El Departamento de la Familia someterá un informe a la Comisión de Hacienda del Senado sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta". Pregunto yo, ¿no somos nosotros los que establecemos los propósitos? Porque es el legislador el que está aportando al Departamento de la Familia y no es que la Comisión, que aquí no explica cuáles son los propósitos establecidos. Si es que la Comisión los tiene y nos los explica, pues, nada más yo los quiero saber. Pero si el proceso está de acuerdo que eso se va hacer, el Departamento de la Familia entonces le va a decir a la Comisión de Hacienda del Senado en qué consiste, pues, como que no tengo base.

SR. MELENDEZ ORTIZ: No, no es eso. Aquí dice bien claro que estos cinco mil (5,000) dólares es para ayuda a personas de escasos recursos económicos en del Distrito Senatorial de San Juan; y para autorizar el pareo. El Departamento de la Familia le va a decir a la Comisión de Hacienda del Senado, mire, estos cinco mil (5,000) dólares de la Resolución Conjunta número tal, fueron gastados de esta manera y va a enviar la lista de personas beneficiadas y qué ayuda fue la que se le dio. Eso viene en ese informe. Ahora, cuáles y quiénes, pues, tiene que ser personas que cualifiquen de acuerdo a los criterios de los programas del Departamento de la Familia.

SRA. OTERO DE RAMOS: Eso es lo que faltaba. Pero esta bien que lo haya dicho para la intención legislativa, no tengo objeción.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 2532, titulada :

"Para reasignar al Departamento de Educación la cantidad de veinte mil (20,000.00) dólares de los fondos consignados en la Sustitutiva a la R.C. del S. 2241 a ser transferidos a la Escuela Esperanza (Antigua Palés Matos), para mejoras permanentes en la planta física; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contendidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 3155, titulada :

"Para reasignar al Municipio de Vega Baja, la cantidad de cuarenta y un mil (41,000) dólares procedentes de las Resoluciones Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, 346 de 8 de agosto de 1998 y 556 de 21 de agosto de 1999, para transferir a la Ferretería Jaime del señor Jaime Cortez ubicada en el Centro Comercial Cortez en materiales para reparación de viviendas según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos asignados."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala.

SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Página 1, línea 3 y 4, tachar "Para transferir a la Ferretería Jaime del señor Jaime Cortéz ubicada en el Centro Comercial Cortéz" eliminar eso y en la línea 4, tachar "en" y sustituir por "para".

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿hay alguna objeción?

SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción, pero quisiera clarificar si es que se va a tachar después de la "," todo lo que concierne, "Para transferir", etcétera, hasta "desglosa". Si fuera así no tengo ninguna objeción.

Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Perdone, compañera.

SRA. OTERO DE RAMOS: Es que si dejamos la enmienda según usted ha dicho no siento que hay garantía ...

SR. MELENDEZ ORTIZ: Entiendo que va a leer ...

SRA. OTERO DE RAMOS: ... que hay garantía de cumplir con el Reglamento y que ...

SR. MELENDEZ ORTIZ: Bueno, lo que sucede es que es el Municipio de Vega Baja el responsable de administrar los fondos conforme a los dictámenes de la ley y reglamentos.

SRA. OTERO DE RAMOS: Por eso. Que le añadiría yo entonces que, donde usted dejo "en materiales para preparación de viviendas según se desglosa conforme a los reglamentos establecidos por la Ley de Municipios Autónomos".

SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay objeción. La enmienda de la compañera sería en la línea 5, eliminar los ":" sustituir por ", conforme a los reglamentos establecidos por la Ley de Municipios Autónomos". No hay objeción.

SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se aprueba la enmienda.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 3389, titulada :

"Para reasignar al Departamento de la Vivienda, División de Vivienda Rural, Región de Aguadilla, la cantidad de veintiocho mil (28,000) dólares provenientes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 920 de 29 de diciembre de 1999 y 346 de 8 de agosto de 1998, para la realización de obras de construcción, reparación de viviendas, compra de materiales, obras de asfalto, construcción de cunetones, construcción de muros de contención y otras obras permanentes y para autorizar el pareo de los fondos reasignados."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para enmiendas en Sala.

SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Página 1, línea 1, tachar "Departamento de la Vivienda, División de Vivienda Rural" y sustituir por "Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda".

Esa es la enmienda.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la enmienda en Sala, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas al titulo.

SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.

SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, línea 1 del título, tachar "al Departamento de la Vivienda, División de Vivienda Rural" y sustituir por "a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda".

SRA. VICEPRESIDENTA: A la enmienda al título, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 3404, titulada :

"Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de dos mil ciento setenta y tres dólares con quince centavos (2,173.15), provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 22 de agosto de 1999, para la compra de equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 24 de Ponce y para autorizar el pareo de fondos."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 3405, titulada :

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de nueve mil setecientos cincuenta (9,750) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para compra de equipo, materiales, medicina, accesorios de oficina, escolares, deportivos, reparación de viviendas a personas de escasos recursos, donativos a estudiantes y personas necesitadas, aportaciones a instituciones cívicas, culturales y deportivas que operen sin fines de lucro, y para otras obras y actividades de interés social."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción?
SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.
SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 3407, titulada :

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, previamente asignados a través de la Resolución Conjunta Núm. 892 de 28 de diciembre de 1999, para ser transferidos a la Asociación de Residentes de Venus Gardens Sur, para la reparación del Centro Comunal."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según informada.
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según informada, ¿hay alguna objeción?
SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.
SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción?
SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.
SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 3419, titulada :

"Para reasignar al Municipio de Quebradillas veinticinco mil (25,000) dólares asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 556 del 21 de agosto de 1999, para techar la cancha en las parcelas del Bo. Terranova, para autorizar la transferencia, contratación de las obras y el pareo de los fondos."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna objeción?
SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.
SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 3420, titulada :

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de ocho mil (8,000) dólares a los fines de transferir a las instituciones desglosadas en la Sección 1, para sufragar los gastos en que incurran por concepto de adquisición de materiales y equipos necesarios y la celebración de actividades afines a sus disciplinas y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 3429, titulada :

"Para asignar a la Junta de Libertad Bajo Palabra de Puerto Rico la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, para gastos de funcionamiento en el año fiscal de 2000 - 2001; y para autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción?

SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.

SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se aprueban.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna objeción?

SRA. OTERO DE RAMOS: Sí, señora Presidenta, hay objeción. Si me permite hacer unos comentarios.

SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.

SRA. OTERO DE RAMOS: Este Proyecto es uno que ya nosotros le habíamos votado en contra, porque entendíamos que era innecesario. Ahora mismo este Proyecto le va a dar unos dineros a la Junta de Libertad Bajo Palabra cuando realmente lo que se debió era darle dinero al Programa de Comunidad para que ampliara todos sus programas y le diera más dinero a los sociopenales, que son de todas maneras, los que se han quedado para hacer el trabajo ahora con un nuevo jefe, la Junta de Libertad Bajo Palabra. El hábito no hace el monje. Entonces, se le esta dando dinero a la Junta para hacer un trabajo que lo venía haciendo el Programa de Comunidad y que se hace innecesario ofrecer estos dinero, pero, como ya la Mayoría pasó este Proyecto, solamente nosotros vamos a continuar objetando al mismo porque lo creemos innecesario.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿¿Hay objeción? Con la objeción de la compañera Mercedes Otero. Aquellos que estén a favor, favor de decir sí en estos momentos. Aquellos que estén en contra decir no en estos momentos.

Aprobada la medida.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para una enmienda en Sala al título.

Página 1, línea 1, después de "Rico" insertar una ",".

SRA. VICEPRESIDENTA: A la enmienda al título, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 3434, titulada :

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de treinta y cinco mil (35,000) dólares, a los fines de ser transferidos al Mesón de los Redimidos, Inc. ubicado en el Municipio de Bayamón, para la compra de un vehículo de motor y una planta eléctrica; y para autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 3435, titulada :

"Para asignar a la Compañía de Fomento Recreativo la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares, a fin de ser transferidos a la Asociación Recreativa de Vecinos Unidos de Villa Borinquen, Inc., para la realización de mejoras a las facilidades deportivas y recreativas de la Urb. Villa Borinquen de Puerto Nuevo en el Municipio de San Juan; y para autorizar la contratación de las obras y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción?

SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.

SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 3437, titulada :

"Para reasignar al Municipio de San Germán, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 403 de 10 de agosto de 1998, para la construcción y reconstrucción de la cancha ubicada en la Urb. Reparto Universitario de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción?
SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.
SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 3367, titulado :

"Para reglamentar la práctica de Tecnología Veterinaria; crear la Junta Examinadora de Tecnólogos Veterinarios y Técnicos en Salud Animal de Puerto Rico; establecer sus funciones, poderes, deberes, facultades y fijar penalidades."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción?
SR. NAVAS DE LEON: Señora Presidenta.
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Navas De León.
SR. NAVAS DE LEON: Señora Presidenta, este es un Proyecto que podría resultar muy bueno y podría ser que este Senador, teniendo los elementos de juicio necesario, le podría votar a favor. Pero siendo un Proyecto de la importancia que el mismo reviste, como se ha desarrollado la práctica de la medicina veterinaria en Puerto Rico, como va a afectar esto todo el engranaje, yo, responsablemente no le puedo votar a favor, porque a esto no se le hizo vistas públicas en la Cámara, ni se han hecho vistas públicas en el Senado, no se le ha dado oportunidad al Colegio de Veterinarios de Puerto Rico a expresarse; no se le ha dado oportunidad a la Junta Examinadora de Veterinarios de expresarse y yo, responsablemente, le tengo que votar en contra.
SRA. OTERO DE RAMOS: Señora Presidenta.
SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora Otero de Ramos.
SRA. OTERO DE RAMOS: Señora Presidenta, me gustaría preguntarle a la Presidenta de la Comisión de Salud en el Senado si se solicitaron algunos informes o si hubo alguna reunión ejecutiva donde se recibiera algún informe, sea de los veterinarios, de los tecnólogos o de las personas que están interesadas en este Proyecto.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Compañera Mercedes Otero, está medida fue a la Comisión Permanente ...
SRA. OTERO DE RAMOS: ¿De la Cámara?

SR. MELENDEZ ORTIZ: De Informes Gubernamentales que preside el compañero Orlando Parga y fue descargada en la mañana de hoy.

SRA. OTERO DE RAMOS: Pues la pregunta entonces es para el señor Parga.

O sea que no hubo ...

SRA. CARRANZA DE LEON: Señora Presidenta, con todo el respeto ...

SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora Carranza.

SRA. CARRANZA DE LEON: ... que le tenemos, yo acabo de entrar aquí. Esta medida ha sido descargada, yo no he tenido la oportunidad de discutirla con el asesor ... ¿No pasó a la Comisión de Salud?

SR. MELENDEZ ORTIZ: Eso no es de la Comisión de Salud. Es de la Comisión que preside el compañero Orlando Parga.

SRA. CARRANZA DE LEON: ¡Ah!, bueno.

SRA. OTERO DE RAMOS: Señora Presidenta, pues que se devuelva a la comisión de la Cámara.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se deje para un turno posterior en lo que nos reunimos con los compañeros.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz para dejarlo para un turno posterior, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 3064, titulada :

"Para enmendar los Artículos 1 y 2; añadir un nuevo Artículo 4, se reenumera los Artículos 4 y 5 como Artículos 5 y 6; se añade un nuevo Artículo 7 y se reenumeran los Artículo 6, 7 y 8 como los Artículos 8, 9, 10 de la Ley Núm. 173 de 31 de agosto de 1996, y se enmienda el párrafo tercero del Artículo 14 de la Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, según enmendada, mejor conocida como "Ley para Autorizar el Sistema de Lotería Adicional; a los fines de cambiar el título de la Ley; establecer un pareo de fondos estatales de arrendamiento a todo aquel veterano que cualifique para la Casa Estatal de Veterano, y proveerle anualmente los fondos al referido programa y para otros fines."

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora Lebrón viuda de Rivera.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Para unas enmiendas en Sala, señora Presidenta.

A la página 4, de la línea 9 a la 13, eliminar todo su contenido. En la página 6, de la línea 18 a la 23, eliminar todo su contenido y en la página 7, de la línea 1 a la línea 22, eliminar todo su contenido.

Esas son las enmiendas en Sala, señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida tal y como enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación ..., senador Rodríguez Orellana.

SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Señora Presidenta, ésta es la medida del Proyecto de la Cámara 3064, ¿correcto?

SRA. VICEPRESIDENTA: Eso es correcto.

SR. RODRIGUEZ ORELLANA: ¿Y esto es para asignarle fondos a la Casa Estatal del Veterano en Juana Díaz?

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Correcto, señora Presidenta. En esos términos era la medida.

SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Para darle una ayuda a los veteranos y sus esposas envejecientes, ¿es correcto?

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Es procedimiento mediante el cual se pueden adquirir los fondos para ayudar a los veteranos que cualifiquen para la Casa Estatal del Veterano. Lo que ocurres es, señor Senador, que estamos enmendando porque hay un proyecto que hubo aquí en el Senado en esos mismos términos y vamos a tratar de integrar en una sola pieza las partes buenas de ambos proyectos. Incluyendo el asunto económico sobre el origen de los recursos que van a ser utilizados para el subsidio.

SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Agradezco la amabilidad de la distinguida Senadora. Es que me sorprende, me llama mucho la atención, como después que se llevan a los nuestros a las guerras y vienen de veteranos, después los dejan desamparados y no les dan por lo menos ...

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: No, no, esa ...

SR. MELENDEZ ORTIZ: No, es al revés, distinguido compañero. Es al revés totalmente.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Queremos, precisamente, señora Presidenta, armonizar porque hay un proyecto, del señor Presidente del Senado que va en esta misma dirección con unas disposiciones muy particulares sobre el asunto económico. La idea del compañero Jiménez Cruz, de la Cámara, recoge básicamente lo del señor Presidente y queremos armonizar ambas. Y en conversación con ambos autores de ambas medidas, acordamos enmendarla de manera que en una conferencia podamos armonizar todas las partes y aprobar un solo producto final. Pero no estamos dejando desamparados a los veteranos.

SR. RODRIGUEZ ORELLANA: No, no, señora Presidenta. Yo estoy a favor de ayudar a todos los puertorriqueños que haya que ayudar y que el Gobierno Federal no esté ayudando como debía de ayudarle después del servicio que rindieron.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida tal y como enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 3074, titulada :

"Para autorizar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (Autoridad de Carreteras) a que segregue y venda por el valor de treinta y un mil (31,000) dólares, siguiendo las leyes y normas establecidas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (Autoridad de Carreteras) a la organización "Comité de Vecinos Unidos en Pro-Macún, Inc." el solar ubicado en el Barrio Macún del Municipio de Toa Baja, con una cabida aproximadamente 1558.230 metros cuadrados; el cual colinda por el Norte con la carretera P.R. 22, por el Sur con la calle Flamboyan, por el Este con la calle Principal "La Victoria" y por el Oeste con terrenos del ELA, bajo los términos y condiciones de esta Resolución Conjunta."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1969, titulado :

"Para denominar el tramo de la carretera 362 entre las intersecciones con las carreteras 360 y la Avenida Castro Pérez (carretera 122) como Avenida Salvador Tió."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba el Proyecto de la Cámara 1969.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2281, titulado :

"Para denominar el tramo de la carr. 362 entre la carretera 122 hasta la carretera #2 como Avenida Aurelio Tió."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2636, titulado :

"Para enmendar la Ley Número 163. De 11 de agosto de 1995 con el propósito de asiginarle fondos al Departamento de Hacienda para permitirle repagar el balance pendiente de pago del préstamo que recibió del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico."

***Enmiendas Circuladas En Sala:**
**En el Texto:**

| | |
|---|---|
| Página 3, línea 1: | sustituir "Número" por "Núm."; sustituir "e" por "de"; después de "1995" insertar "," |
| Página 3, línea 3: | después de "Presupuesto" insertar "(OGP)" |
| Página 3, línea 4: | eliminar desde "en" hasta "Rico" |
| Página 3, línea 6: | sustituir "principio" por "principal" |
| Página 3, línea 8: | sustituir desde "la" hasta "Rico" por "OGP" |

| | |
|---|---|
| Página 3, línea 9: | después de "tres" insertar "(3)" |
| Página 3, línea 11: | sustituir "ley" por "Ley" |
| Página 3, línea 12: | sustituir "máslos" por "más los"; sustituir "acumuladados" por "acumulados"; "8%" por "ocho (8) por ciento" |

**En la Exposición de Motivos:**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 1: | sustituir "artículo" por "Artículo" y "Número" por "Núm." |
| Págian 1, línea 2: | sustituir "ordernó" por "ordenó"; después de "Secretario" insertar "del Departamento" |
| Página 1, línea 4: | sustituir "tená" por "tendrá" |
| Página 1, línea 5: | sustituir "Deparamento" por "Departamento" y "municipios" por "Municipios" |
| Página 1, línea 6: | sustituir "cobrada" por "cobraba" y "gobiernos municipales" por "Gobiernos Municipales" |
| Página 1, línea 7: | sustituir "completa" por "completada" |
| Página 1, línea 8: | sustituir "municipio" por "Municipio" |
| Página 1, línea 9: | sustituir "Número" por "Núm." |
| Página 1, línea 11: | después de "Rico" insertar ", en adelante el Banco," |
| Página 1, línea 12: | después de "Presupuesto" insertar ", en adelante OGP" |
| Página 1, línea 13: | sustituir "presupuestarías" por "presupuestarias" |
| Página 2, línea 2: | después de "cuatro" insertar "(4)" |
| Página 2, línea 3: | sustituir "Número" por "Núm."; después de "103" insertar ", antes mencionada,"; después de "Ley" sustituir "Número" por "Núm." |
| Página 2, línea 5: | sustituir "ls" por "las" |
| Página 2, línea 6: | sustituir "Número" por "Núm."; después de "163," insertar "antes mencionada," |
| Página 2, línea 7: | sustituir "1996el" por "1996 el"; después de "Público" insertar ", en adelante la Corporación," |
| Página 2, línea 8: | eliminar "dicha porción"; después de "siendo" insertar "ésta" |
| Página 2, línea 9: | eliminar desde "para" hasta "Público" |
| Página 2, línea 10: | sustituir "Número" por "Núm."; después de "163," insertar "antes mencionada," |
| Página 2, línea 13: | eliminar desde "para" hasta "Financiamiento" |
| Página 2, línea 14: | eliminar "Público"; sustituir "Financiamiento" por "financiamiento" |
| Página 2, línea 15: | sustituir "Número" por "Núm."; después de "163" insertar ", antes mencionadas," |
| Página 2, línea 17: | sustituir "municipios" por "Municipios" |
| Página 2, línea 18: | sustituir "dque" por "que" |
| Página 2, línea 20: | sustituir "municipios" por "Municipios"; "esto" por "ésto" |
| Página 2, línea 22: | después de "Secretario" insertar "del Departamento" |
| Página 2, línea 24: | después de "Juan" insertar ","; después de "mayo" insertar "de 1996" |
| Página 2, línea 25: | sustituir "dueda" por "deuda" |

Página 2, línea 26: sustituir "8%" por "ocho (8) por ciento"; "annual" por "anual"

Página 2, línea 27: sustituir "Número" por "Núm."; después de "163" insertar ", antes mencionada,"; eliminar "Oficina"

Página 2, línea 28: sustituir desde "de" hasta "Presupuesto" y sustituir por "OGP"

**En el Título:**

Página 1, línea 1: sustituir desde "Número" hasta "De" y sustituir por "Núm. 163 de"

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala.

SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas en Sala según circuladas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala según circuladas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título debidamente circuladas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título debidamente circuladas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 2535, titulada :

"Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportación del Departamento de Transportación y Obras Públicas a ceder en usufructo al Municipio de Bayamón diez y seis (16) predios de terreno vacantes y remanentes en varias localidades del Municipio que se describen a continuación: remanente carretera #2 frente hospital Ruiz Soler; remanente Ave. Circunbalación Norte, Int. carretera #2, cerca Club de Leones; remanente Ave. Circunbalación Norte, Int. carretera #174 al lado de River Side Park; remanente carretera #2 frente a Funeraria Porta Coeli, Hato Tejas; remanente carretera #2 cerca de la casa del camionero, entrada Sierra Bayamón; remanente carretera #2 Int. carretera #29, entrada al Volcán en Hato Tejas; remanente frente al Supermercado Grande y colindando con Losada Auto en Hato Tejas; remanente Ave. Comerío frente a Urb. Frontera; remanente Ave. Comerío Int. Expreso de Diego cerca del puente; remanente carretera #29 frente a la Cambija; remanente carretera #174, Int. carretera Teniente Nelson Martínez; remanente carretera #167 frente a Farmacia Walgreens y Pep Boys en Villa Contesa y Extensión Forest Hills; remanente carretera #167 cerca Gallera Castrodad; remanente carretera #167 frente a Urb. Bella Vista; remanente carretera #174 frente Urb. Versalles, colindando con el Colegio Regional de Bayamón y remanente carretera #177 cerca del Puente Rio Bayamón; los cuales deberán ser identificados por la Autoridad de Carreteras y Transportación con sus respectivas colindancias y cabida al ser completado el correspondiente proceso de traspaso. "

***Enmiendas Circuladas En Sala:**

**En el Texto:**

| | |
|---|---|
| Página 2, línea 2: | después de "ceder" eliminar "en usufructo" y sustituir por "y traspasar libre de costo" |
| Página 3, línea 3: | después de "cesión" eliminar "en usufructo" y sustituir por "y traspaso" |
| Página 3, líneas 8 a la 11: | eliminar todo su contenido |
| Página 3, líneas 12 a la 15: | renumerar "Sección 5" por "Sección 4"; "Sección 6" por "Sección 5" |

**En la Exposición de Motivos:**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 6: | eliminar al final de la línea "en" |
| Página 2, línea 1: | eliminar "usufructo" |

**En el Título:**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 2: | después de "ceder" eliminar "en usufructo" y sustituir por "y traspasar libre de costo" |

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas previamente circuladas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas previamente circuladas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título previamente circuladas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título previamente circuladas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 3363, titulado :

"Para adicionar un inciso (f) al Artículo 7 de la Ley Número 111 de 12 de julio de 1985, según enmendada, conocida como "Ley para la Protección y Conservación de Cuevas, Cavernas o Sumideros de Puerto Rico", a fin de facultar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para realizar labores de limpieza en las cuevas, cavernas, sumideros cuando dicho recurso natural así lo necesite, a pesar de que el dueño del predio o finca que ubica el acceso a utilizar para entrar no lo permite."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 97, titulada :

"Para autorizar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas a segregar y transferir, libre de costo, diez (10) cuerdas de terreno al municipio de Río Grande, de la finca principal localizada en el barrio Zarzal, para la construcción de parque de pelota, cancha de baloncesto, centro comunal y áreas de recreación pasiva, entre otras, para el uso y disfrute de la comunidad Villa Realidad."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 3427, titulada :

"Para asignar al Contralor de Puerto Rico la cantidad de tres millones (3,000,000) de dólares para gastos de funcionamiento en el año fiscal de 2000-2001."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Cumpliendo el compromiso contraído con el Honorable Contralor de Puerto Rico, solicitamos la aprobación de la asignación de tres millones (3,000,000) de dólares para la Oficina del Contralor. Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Siguiendo los compromisos y esperando que siga la máxima de hacer más con menos.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del Senado 3539, titulada :

"Para felicitar y reconocer a Pedro Santos, Payaso Pirulí, y a los payasos de Puerto Rico, con motivo de la celebración de la **"Semana del Payaso"**, del 1 al 7 de agosto de 2000."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se considere el segundo Orden de los Asuntos del día de hoy.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

## SEGUNDO ORDEN DE LOS ASUNTOS

## INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes de Comisiones Permanentes:

De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 2532, con enmiendas.

De la Comisión de Hacienda, cinco informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 2409; del P. de la C. 3515 y de las R. C. de la C. 3350; 3405 y 3420, sin enmiendas.

De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la no aprobación del P. de la C. 3256.

De las Comisiones de lo Jurídico; y de Salud y Bienestar Social, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 2613, con enmiendas.

De las Comisiones de lo Jurídico; y de Educación y Cultura, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 2610, con enmiendas.

De las Comisiones de lo Jurídico; y de Hacienda, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1560, con enmiendas.

De la Comisión de lo Jurídico, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2378, con enmiendas.

De la Comisión de lo Jurídico, un informe, proponiendo la no aprobación del P. del S. 1745.

De la Comisión de Asuntos Municipales, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 2189, con enmiendas.

De la Comisión de Salud y Bienestar Social, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2792, con enmiendas.

De las Comisiones de Salud y Bienestar Social; y de Educación y Cultura, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2582, sin enmiendas.

De las Comisiones de Salud y Bienestar Social; y de Hacienda, un informe conjunto, proponiendo la no aprobación del P. del S. 2308.

De la Comisión de Salud y Bienstar Social, un informe, proponiendo la no aprobación del P. del S. 1754.

De la Comisión de Asuntos Internos, un informe, proponiendo la aprobación de la R. del S. 3511, con enmiendas.

De la Comisión de Asuntos Internos, un informe, proponiendo la no aprobación de la R. del S. 2991.

De la Comisión Especial para el Estudio, Evaluación y Seguimiento Continuo y Permanente al Funcionamiento Administrativo, Operacional y Fiscal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 2535, con enmiendas.

De la Comisión Especial para el Estudio, Evaluación y Seguimiento Continuo y Permanente al Funcionamiento Administrativo, Operacional y Fiscal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, dos informes, proponiendo la no aprobación del P. del S. 1174 y 1195.

## RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones Conjuntas y Resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, de la lectura se prescinde a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz.

## PROYECTOS DE LA CAMARA

P. de la C. 2429
Por la señora Martínez Irizarry:

"Para disponer que el tramo de la Carretera Estatal Número 874, del municipio de Carolina, sea designada con el nombre de Julia de Burgos."
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA)

P. de la C. 3220
Por los señores Misla Aldarondo, Mundo Ríos, Cintrón García, señora Ruiz Class, señores Acevedo Méndez, Aponte Hernández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, Chico Vega, Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García de Jesús, Jiménez Cruz, Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Santos, Maldonado Rodríguez, Marrero Hueca, Manuel; señora Martínez Irizarry, señores Nieves Román, Núñez González, Pérez Ortiz, Quiles Rodríguez, Ramos Meléndez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero Donnelly, señores Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez, Vázquez Rosado y Vega Borges:

"Para enmendar el Artículo 516 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico", a fin de que los jueces tengan discreción para relevar de la prohibición contenida en dicho artículo a los participantes de cualquier programa de rehabilitación para usuarios de sustancias controladas, siempre que éstos justifiquen la concesión de tal privilegio."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 3312 (Por Petición)
Por el señor Silva Delgado:

"Para prohibir a negocios que operan en áreas residenciales mantener en su propiedad o en los alrededores de la misma basura, cajas, madera, mercancía u otros materiales en forma descuidada y a la vista pública e imponer penalidades por violación a la ley."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 3305
Por el señor Silva Delgado:

"Para enmendar los incisos (a) y (q) y añadir un inciso (t) al Artículo 4 y los incisos (a) y (b) del Artículo 5 y un inciso (j) al Artículo 8 y el inciso (d) acápite del Artículo 19 un subinciso (v) al inciso (e) del Artículo 22, enmendar el inciso (i) del Artículo 25, enmendar los Artículos 26 y 33 de la Ley Número 355 de 22 de diciembre de 1999, conocida como la "Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico", a los fines de aclarar varias de las definiciones y disposiciones de la ley y en particular lo concerniente a los tableros de anuncios ("Billboards") reconocer la ingerencia municipal en ciertas circunstancias."
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES)

P. de la C. 3367
Por el señor Aramburu Díaz:

"Para reglamentar la práctica de Tecnología Veterinaria; crear la Junta Examinadora de Tecnólogos Veterinarios y Técnicos en Salud Animal de Puerto Rico; establecer sus funciones, poderes, deberes, facultades y fijar penalidades."
(COMISION PERMANENTE SOBRE INFORMES GUBERNAMENTALES Y PROFESIONES REGLAMENTADAS)

P. de la C. 3405
Por la señora Martínez Irizarry:

"Para enmendar el primer párrafo del Artículo 2.23 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, conocido como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico" a fin de extender a cinco (5) años el término de expedición y renovación de los permisos de estacionamientos a las personas con impedimentos."
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA)

P. de la C. 3410
Por el señor García San Inocencio:

"Para enmendar el Artículo 7.07 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", para añadir un nuevo inciso (d), creando un programa de rehabilitación mandatorio con cargo al Plan Médico de la persona convicta o a la Reforma de Salud o a la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles, según sea el caso; y reorganizar los acápites subsiguientes."
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA)

P. de la C. 3464
Por las señoras Martínez Irizarry y Ramos Rivera:

"Para enmendar la Sección 5 del Artículo IV de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico", a los fines de establecer que entre los miembros de la Junta de Directores de la Administración habrá un proveedor participante competente y para otros fines."
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL)

P. de la C. 3536
Por los señores Silva Delgado, Marrero Hueca, Pérez Ortiz y Ramos Meléndez:

"Para enmendar el Artículo 22 de la Ley Núm. 190 de 5 de septiembre de 1996, según enmendada, sobre Privatización de Instalaciones de Salud, a los fines de garantizar la permanencia de todos aquellos empleados de carrera del Hospital Regional de Bayamón, entidad hospitalaria a ser adquirida por la Escuela de Medicina de la Univesidad del Caribe de Bayamón, ya sea en carácter de titular o como Administrador de dicha entidad hospitalaria."
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS)

## RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA

R. C. de la C. 3124
Por el señor Acevedo Méndez:

"Para reasignar al Municipio de Hatillo, la cantidad de trescientos (300) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 170 de 19 de julio de 1997, para transferir al Consejo Escolar de la Escuela Autónoma de la Comunidad José Gautier Benítez, para gastos de funcionamiento y para autorizar el pareo de los fondos asignados."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 3432
Por los señores Bonilla Feliciano y Quiles Rodríguez:

"Para enmendar el Título y la Sección 1ra. de la Resolución Conjunta Núm. 136 de 8 de junio de 1995, a los efectos de sustituir las Universidades de Toronto en Canadá o Iberoamericana en México por la Universidad de Barcelona en España."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 3445
Por el señor Figueroa Figueroa:

"Para reasignar al Municipio de Canóvanas, la cantidad de tres mil trescientos (3,300) dólares, provenientes de los incisos (I), (m) de la Resolución Conjunta Núm. 505 del 27 de agosto de 1998; como aportación para la compra de equipos, materiales y sufragar viajes escolares, deportivos y otros; compra de medicinas y/o equipos para personas; donativos a estudiantes o veteranos, aportaciones a instituciones cívicas, culturales, educativas o deportivas que realizan actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y a mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 38 y para autorizar el pareo de los fondos asignados."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 3446
Por el señor Figueroa Figueroa:

"Para reasignar al Municipio de Canóvanas, la cantidad de mil (1,000) dólares, provenientes del inciso (b) de la Resolución Conjunta Núm. 289 del 10 de agosto de 1997; para adquirir materiales de construcción para mejorar o reparar viviendas, adquirir tubos para canalizar aguas, adquirir focos y/o postes de alumbrado y para otros fines para residentes del Distrito Representativo Núm. 38 y para autorizar el pareo de los fondos asignados."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 3447
Por el señor Mundo Ríos:

"Para al Departamento de Educación, la cantidad de dos mil seiscientos (2,600) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, como aportación al joven Boy Scout Rafael Hernández Nieves, para la compra de equipo contra incencios y para autorizar el pareo de los fondos asignados."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 3452
Por el señor Mundo Ríos:

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para finalizar la construcción del parque e instalación de gradas, verja y luces en la Escuela Albert Einsten en el Distrito Representativo Núm. 2 de San Juan, y para autorizar el pareo de los fondos asignados."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 3453
Por el señor Mundo Ríos:

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de dieciseis mil (16,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para pavimentación de un área que se inunda en la Escuela Santiago Iglesias Pantín."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 3454
Por el señor Mundo Ríos:

"Para asignar a través del Departamento de Educación, la cantidad de ochocientos (800) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, como aportación al joven Wilfredo Cuevas Mercado, Seguro Social #598-16-6310, para la compra de un saxofón, y para autorizar el pareo de los fondos asignados."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 3455
Por el señor Mundo Ríos:

"Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de dos mil novecientos (2,900) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para que los mismos sean distribuidos de conformidad a lo dispuesto en esta Resolución Conjunta, y para autorizar el pareo de los fondos asignados."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 3456
Por el señor Mundo Ríos:

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de dos mil setecientos cuarenta y ocho (2,748) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para que los mismos sean distribuidos de conformidad a lo dispuesto en esta Resolución Conjunta, y para autorizar el pareo de los fondos asignados."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 3458
Por el señor Mundo Ríos:

"Se asigna al Departamento de Recursos Naturales y al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, para llevar a cabo las obras que se detallan en la Sección de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos asignados." (HACIENDA)

## MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones de Trámite Legislativo:

De la licenciada Mildred Pabón Charneco, Asesora del Gobernador, Oficina de Asuntos Legislativos, una comunicación, devolviendo la R. C. del S. 2188, con el fin de reconsiderarla.

Del Secretario de la Cámara de Representantes, quince comunicaciones, informando que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, los P. del S. 1050; 1265; 1915; 2434; 2542; 2593 y las R. C. del S. 1849; 2434; 2435; 2439; 2451; 2453; 2459; 2482 y 2512.

Del Secretario de la Cámara de Representantes, treintisiete comunicaciones, informando que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 404; 2411; 2429; 2646; 2711; 2828; 2860; 3060; 3079; 3215; 3295; 3312; 3323; 3367; 3371; 3401; 3402; 3405; 3407; 3410; 3418; 3419; 3464; 3542 y las R. C. de la C. 3124; 3340; 3391; 3432; 3445; 3446; 3447; 3452; 3453; 3454; 3455; 3456 y 3458 y solicita igual resolución por parte del Senado.

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo Legislativo acordó dar el consentimiento solicitado por el Senado para reconsiderar el P. del S. 1968.

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo Legislativo acordó desistir de la Conferencia sobre el P. de la C. 2500, que ha resuelto disolver la Comisión de Conferencia de la Cámara y que acepta las enmiendas introducidas por el Senado a la referida medida.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso (a) de este turno se da cuenta de una comunicación de la licenciada Pabón Charneco, Asesora del Gobernador, devolviendo la Resolución Conjunta del Senado 2188 con el fin de reconsiderarla. Solicitamos se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso (d) se da cuenta de una comunicación de la Cámara, informando que acordó dar el consentimiento al Senado, según solicitado, para reconsiderar el Proyecto del Senado 1968, solicitamos se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Este Senado había solicitado la devolución de la Cámara, del Proyecto del Senado 2567, ya la medida llegó al Senado, vamos a solicitar que se devuelva a la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso (e) se da cuenta de una comunicación de la Cámara, informando que dicho Cuerpo acordó desistir de la conferencia sobre el Proyecto de la Cámara 2500, por tal motivo solicitamos que se deje sin efecto el Comité de Conferencia de parte del Senado en torno a esta medida.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

## MOCIONES

La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas:

La senadora Carmen L. Berríos Rivera, ha radicado la siguiente moción por escrito:

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo retire el Proyecto del Senado 2567, de mi autoría."

El senador José E. Meléndez Ortiz, ha radicado la siguiente moción por escrito:

"El Senador que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo se le extienda a la Comisión de Vivienda una prórroga, hasta el final de la Décimatercera Asamblea Legislativa para rendir los informes de las medidas pendientes en la Comisión."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: La compañera Berríos Rivera radicó una moción por escrito solicitando el retiro del Proyecto del Senado 2567, solicitamos se actúe conforme al Reglamento.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También hay una moción por escrito, de este Senador, solicitamos se apruebe.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos se llamen las medidas incluidas en el Calendario.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

## CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración de la Resolución Conjunta del Senado 2188, titulada :

"Para autorizar y ordenar al Secretario del Departamento Sombrilla de Recursos Naturales y Ambientales y al Director Ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) a comenzar un proceso de enmienda al Plan Regional de Infraestructura para el Reciclaje y Disposición de los Desperdicios Sólidos de PR de 1995 a los efectos de sustituir la Planta de Recuperación de Energía especificada para la Región 1 de Guaynabo bajo el Plan por la Facilidad propuesta por el Municipio de Caguas mediante solicitud formal a la Autoridad de Desperdicios Sólidos el pasado mes de noviembre de 1999. La localización de la Facilidad en el Municipio de Caguas requeriría una enmienda a los efectos de incluir a los Municipios de Caguas y Cidra en la Región 1 del Plan."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala.

SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.

SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 3, línea 1, tachar "y ordenar". Página 3, línea 9, tachar "ordenado" y sustituir por "autorizado".

Estas son las enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas al título. En la página 1, línea 1, tachar "y ordenar". Página 2, párrafo 3, línea 7, tachar "ordenarle" y sustituir por "autorizarle".

Esas son las enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del Proyecto del Senado 1968, titulada :

"Para añadir un apartado (31) a la Sección 9 de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de Patentes Municipales", a fin de consignar expresamente que toda persona que en su carácter de porteador público fuere dueña de, controlare, explotare o administrare cualquier vehículo de motor que se utilice para transportar pasajeros y equipaje en modo incidental al transporte, mediante paga, al público en general o a una parte del mismo, independientemente de su cabida y de que tal transporte se efectúe o no entre terminales fijos o irregulares, estará exenta del pago de patentes municipales; y para disponer la condonación de deudas por dicho concepto."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para enmiendas en Sala.

SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.

SR. MELENDEZ ORTIZ: En la Exposición de Motivos, página 3, primer párrafo, línea 8, después de "Puerto Rico" añadir "se excluye de la aplicación de esta ley toda empresa o persona que opere, administre o se dedique a prestar servicios de transportación de taxis".

En el texto, página 3, entre las líneas 10 y 11 insertar el siguiente texto, "Artículo 2. - Se excluye de la aplicación de esta toda empresa o persona que administre o se dedique a prestar servicios de transportación de taxis". Página 3, línea 11, después de "Artículo" tachar "2" y sustituir por "3". Página 3, línea 14, después de "Artículo" tachar "3" y sustituir por "4".

Estas son las enmiendas, señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿hay alguna objeción?. No habiendo objeción, se aprueban.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para regresar al turno de Relación de Proyectos radicados en Secretaría.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

## RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

La Secretaría da cuenta de la cuarta Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones Conjuntas y Resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, de la lectura se prescinde a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz.

## PROYECTOS DE LA CAMARA

P. de la C. 404
Por el señor Figueroa Costa:

"Para enmendar el inciso (d) del Artículo 5 del Plan de Reorganización Núm. 3, aprobado el 3 de diciembre de 1993, que crea el Departamento de Corrección y Rehabilitación como un organismo de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a los fines de autorizar y obligar a dicho Departamento y a los organismos que constituyen el mismo, a negociar y contratar con empresas privadas la implantación de talleres de trabajo en las facilidades correccionales, proveyendo a dichas empresas espacio para llevar a cabo operaciones industriales y permitiéndoles la contratación de transgresores y convictos en carácter de obreras y obreros." (GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES)

P. de la C. 2411
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y la señora Ruíz Class:

"Para añadir un inciso (f) al Artículo 105 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a fin de tipificar como delito el que una persona, sin tener lazos de sangre o adoptivos, que haya asumido un papel de pariente, encargado o protector, desarrollando un grado de confianza y familiaridad con relación a otra persona dentro de su núcleo familiar, sin intentar consumar acceso carnal, cometiere cualquier acto lascivo o impúdico contra dicha persona." (DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2646
Por el señor Báez González:

"Para solicitar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, la venta de las 22.63 cuerdas ubicadas en la Carretera 973, Km. 2.8 del Barrio Mariana en Naguabo, a favor del Sr. José R. Carrasquillo, con el propósito de desarrollar un proyecto de crianza de caballos de paso fino y para otros fines."
(AGRICULTURA; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES)

P. de la C. 2711
Por la señora Juarbe Beníquez:

"Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendado, de la Ley conocida como "Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo", a los fines de atemperarla al Plan de Reorganización Núm. 1, según enmendado, conocida como la Ley de la Judicatura de 1994." (TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS; Y DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2860
Por el señor Vega Borges:

"Para conferir autoridad al Juez Presidente del Tribunal Supremo o al Director Administrativo de los Tribunales por delegación de éste para adquirir, bienes muebles e inmuebles, mediante compra, arrendamiento con opción a compra, manda, legado, donación; así como poseer, conservar, usar o en cualquier valor, derecho o interés en los mismos, a los fines de lograr una mejor administración de la justicia." (GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2828
Por el señor Aramburu Díaz:

"Para enmendar el Artículo 122 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, mejor conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de aumentar la pena en el delito de incesto y extender la aplicación del mismo a los ascendientes y descendientes por afinidad."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 3060
Por el señor Cintrón García:

"Para añadir los apartados (1) y (2) al inciso (b) de la Sección 3 y enmendar la Sección 22 de la Ley Núm. 52 del 11 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como "Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional", a los fines de facultar al Comisionado de Instituciones Financieras para requerir a las entidades bancarias el cumplimiento con los estándares establecidos en el Acuerdo de Basilea y aclarar que las entidades bancarias internacionales organizadas como unidades o subsidiarias de bancos comerciales están sujetas a ciertas disposiciones de la Ley Número 55 del 12 de mayo de 1933, según enmendada, conocida como "Ley de Bancos"." (GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICAS)

P. de la C. 3079
Por el señor Vega Borges:

"Para ordenar a las agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como sus municipios y a entidades privadas que reciban fondos públicos, la cesión de turnos de prioridad a personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, cuando los visiten por sí mismas o en compañía de familiares o tutores o personas que hagan gestiones a nombre o en representación de éstos, para llevar a cabo diligencias y gestiones administrativas."
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES)

P. de la C. 3215
Por el señor Vega Borges:

"Para adicionar un inciso(10) al Artículo 26 de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada, conocida como "Ley del Registro Demográfico", a fin de incluir en la licencia de matrimonio, la declaración jurada y el certificado de matrimonio, la información relativa a todos los hijos que haya procreado el o la contrayente antes del matrimonio a celebrarse."(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES)

P. de la C. 3295
Por la señora Ruíz Class; los señores Mundo Ríos y Aramburu Díaz:

"Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 150 de 19 de agosto de 1996, según enmendada, conocida como "Ley del Derecho a la Salud en Puerto Rico" y renumerar los actuales incisos (b), (c), (d), (e) y (f) como incisos (c), (d), (e), (f) y (g) a los fines de incluir como pacientes elegibles a los beneficios del Fondo para Servicios Contra Enfermedades Catastróficas Remediables, a aquellos pacientes medico-indigentes que

necesitan transplante de órganos y en su consecuencia sufragar los gastos necesarios de medicamentos inmunosupresores posterior al transplante."(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL)

P. de la C. 3323
Por los señores Chico Vega y Mundo Ríos:

"Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 185 de 26 de diciembre de 1997, conocida como "Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico", para incluir a un (1) Ingeniero de Computadoras en la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico adscrita al Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el fin de darle representación en dicha junta a estos profesionales de la ingeniería; y para adicionar un Artículo 5-A a la Ley Núm. 185 de 26 de diciembre de 1997, conocida como "Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico" con el fin de crear un Comité Evaluador de Reválidas Profesionales, para la redacción y administración de una reválida profesional para los Ingenieros de Computadoras." (COMISION PERMANENTE SOBRE INFORMES GUBERNAMENTALES Y PROFESIONES REGLAMENTADAS)

P. de la C. 3371
Por los señores Aramburu Díaz y Sánchez Fuentes:

"Para añadir un inciso (q) a la Regla 171 de las Reglas de Procedimiento Criminal, según enmendadas, a fin de establecer como agravante en casos de delitos sexuales el que el agresor, con relación a la víctima, sea una persona que sin tener lazos de sangre, asume un rol de pariente, encargado o protector, desarrollando un grado de confianza y familiaridad con relación a la víctima, dedicándose a actuar con autoridad, o a actuar como custodio de su seguridad y bienestar, o como sustituto de una figura parental."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 3401
Por los señores Figueroa Figueroa, Vega Borges y Sánchez Fuentes:

"Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 108 de 21 de junio de 1968, según enmendada, a los fines de disponer la eliminación de las convicciones por delitos menos grave del expediente de antecedentes penales luego de transcurridos tres (3) años desde la extinción de la pena por la última convicción y diez años desde la extinción de la pena por la última convicción en el caso de los delitos graves que no fuere asesinato, homicidio, robo, robo de vehículo de motor, incesto, extorsión, violación, sodomía, actos lascivos o impúdicos, secuestro, secuestro agravado, robo de menores, escalamiento agravado, incendio agravado, venta o distribución de sustancias controladas, sabotaje de servicios públicos esenciales, la posesión, uso o venta de armas automáticas, cualquier violación a los Artículos 1 y siguientes de la Ley Núm. 134 de 28 de junio de 1969, según enmendada, que constituya delito grave y cualquier delito grave que surja como consecuencia de la posesión o uso ilegal de explosivos o detonadores, artefactos o mecanismos prohibidos por dichos artículos, para los cuales se podrá solicitar la eliminación de la convicción del récord de antecedentes penales luego de transcurridos veinte (20) años desde la extinción de la pena por la última convicción." (DE LO JURIDICO)

P. de la C. 3402
Por el señor Acevedo Méndez:

"Para enmendar los incisos (b) (1), (c), (q) y (cc) del Artículo 2, incisos (h),(k) y (t) del Artículo 6; inciso (a) del Artículo 11; inciso (d) (2) del Artículo 16 y los incisos (a) y (b) del Artículo 22 de la Ley Núm. 241 del 15 de agosto de 1999, conocida como "Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico a los fines de aclarar las definiciones de caminos públicos y modificar la definición de habitat natural crítico y como se puede portar arma; establecer límite máximo de armas de caza; aclarar cuando los menores pueden tener licencia; establecer penalidades por incumplimiento por los cazadores de sus obligaciones y aclara que el que cada ejemplar cazado en exceso de lo establecido es una penalidad."
(RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES Y ENERGIA)

P. de la C. 3407
Por los señores Aramburu Díaz y Sánchez Fuentes:

"Para enmendar el inciso (a) del Artículo 236 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", a fin de establecer que la pena del delito de encubrimiento sea igual a la mitad de la pena del delito encubierto, cuando éste sea grave y para otros fines." (DE LO JURIDICO)

P. de la C. 3418
Por los señores Cintrón García y Acevedo Méndez:

"Para enmendar los Artículos 2, 3, 5, 6, 8 y 10 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada, a los fines de aclarar el procedimiento de otorgación y renovación de permisos de extracción, excavación y dragado de componentes de la corteza terrestre en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales." (RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES Y ENERGIA)

P. de la C. 3419
Por los señores Jiménez Cruz y Cintrón García:

"Para enmendar el subinciso Segundo (c)(2) del inciso (E) del Artículo 4 de la Ley Núm. 13 de 2 de octubre de 1980, según enmendada, conocida como "Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño", a los fines de establecer que en casos en que el grado de incapacidad del veterano haya sido establecido como permanente, el veterano no vendrá obligado a presentar anualmente un solicitud de exención contributiva y para otros fines." (TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS)

P. de la C. 3542
Por el señor Cintrón García:

"Para enmendar el inciso (y) del Artículo 2; el inciso (b) del Artículo 5; y adicionar un nuevo inciso (m) al Artículo 14 de la Ley Núm. 46 de 28 de enero de 2000, conocida como "Ley de Fondos de Capital de Inversión de Puerto Rico de 1999", a los fines de aclarar que los fondos de pensión de empleados públicos y ciertos otros inversionistas institucionales exentos de tributación, tendrán derecho a invertir en los fondos de capital de inversión en igualdad de condiciones junto con entidades sujetas a tributación y a recibir y vender los créditos contributivos que concede dicha ley; y realizar otras enmiendas técnicas."
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE HACIENDA)

## RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA

R. C. de la C. 3340
Por la señora Juarbe Beníquez:

"Para ordenar a la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico, proceder con la liberación de la Claúsula de Lotificación, incluidas en la Certificación de Título Enmendada, suscrita mediante la Affidavit nueve mil quinientos cuatro (9,504) el día trece (13) de enero de 1983, otorgada ante la notario Sandra Saa Hernández, de la Finca número mil doscientos ochenta cuatro (1284), inscrita al Folio setentiocho (78) del Tomo treinta y tres (33) de Las Marías, localizada en el Barrio Río Cañas del término municipal de Las Marías, Puerto Rico, propiedad del señor Jorge William Medina Serrano y de la señora Inés Ramos Rivera." (AGRICULTURA)

R. C. de la C. 3391
Por la señora Juarbe Beníquez:

"Para ordenar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, proceder con la liberación de la Cláusula de Lotificación, incluídas en la Certificación de Título del 2 de febrero de 1982, del predio de terreno marcado con el número diez y nueve (19), de la Finca número mil doscientos ochenta y cuatro (1284). Dicha finca consta inscrita al Folio setenta y ocho (78) del Tomo treinta y tres (33), cuarta inscripción, localizada en el Barrio Río Cañas del término municipal de Las Marías, Puerto Rico, propiedad del señor Felipe Marrero Cruz y la señora Sara Rosario Concepción." (AGRICULTURA)

## RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

La Secretaría da cuenta de la quinta relación de resoluciones conjuntas del Senado radicadas y referidas a comisiones por el señor Presidente, de la lectura se prescinde, a moción del senador Meléndez Ortiz:

## RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO

R. C. del S. 2557
Por el señor González Rodríguez:

"Para reasignar al Departamento de la Familia, Oficina Región San Juan, la cantidad de diez mil (10,000) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 402 del 4 de agosto de 1999, para la compra de artículos de primera necesidad y materiales de construcción; y para que se autoricen el pareo de los fondos." (HACIENDA)

R. C. del S. 2558
Por el señor González Rodríguez:

"Para reasignar al Municipio de San Juan la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, del fondo 4026-93-27010000-2414, a ser transferidos a la Asociación de Residentes de San Francisco, Santa María y, San Ignacio, Inc., (UNDARE, INC.), de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 338 del 19 de agosto de 1992, para mejoras permanentes a las mencionadas urbanizaciones: y para que se autoricen el pareo de los fondos." (HACIENDA)

R. C. del S. 2559
Por el señor González Rodríguez:

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes a ser transferidos a la Liga de Natación Master de Puerto Rico, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares bajo la cuenta 1999-141-0870000-0001-142 de los fondos consignados en la R.C. Núm 508 del 28 de agosto del 1998, para cubrir los gastos a ser utilizados en las competencias de natación de la liga; y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados."
(HACIENDA)

R. C. del S. 2560
Por el señor González Rodríguez:

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de la cuenta 397-0310000-242-1998, para ser utilizados en la compra de materiales para la reconstrucción de viviendas, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 786 del 25 de diciembre de 1998; y para que se autoricen el pareo de los fondos."
(HACIENDA)

R. C. del S. 2561
Por el señor Rivera Cruz:

"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cinco mil doscientos cincuenta y tres dólares con setenta y ocho centavos ($5,253.78) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997; nueve mil seiscientos cuarenta y ocho dólares con veinticinco centavos ($9,648.25) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998 y la cantidad de siete mil novecientos diecisiete dolares con cincuenta y tres centavos ($7,917.53) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para la celebración de actividades sociales, culturales, eductivas, recreativas, deportivas y para la compra de equipo y materiales."
(HACIENDA)

R. C. del S. 2562
Por el señor Iglesias Suárez:

"Para reasignar a entidades sin fines de lucro, bajo la supervisión de agencias del gobierno, que se especifican en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta, la cantidad setecientos veintitrés mil sesenta (723,060) dólares, de los fondos consignados en las Resoluciones Conjuntas Núm. 287 y 358 del 10 de agosto de 1997 y 9 de agosto de 1998 respectivamente; que realizan actividades o prestan servicios de bienestar social, de la salud, educación, cultura y recreación que ayudan a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños."(HACIENDA)

R. C. del S. 2563
Por el señor Iglesias Suárez:

"Para asignar a la Compañía de Turismo, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, del Fondo General, para gastos de publicidad, promoción y relacionados del "Congreso Mundial de Salsa", a celebrarse en los días del 27 al 29 de julio de 2000, en la Ciudad de San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." (HACIENDA)

R. C. del S. 2564
Por el señor Rodríguez Orellana:

"Para ordenar al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico expropiar los terrenos que comprenden el sector Gandul dentro del municipio de San Juan; rehabilitar la comunidad y conceder títulos de propiedad a los actuales inquilinos de las viviendas que enclavan sobre los terrenos."
(VIVIENDA)

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: El Proyecto del Senado 1920 se encuentra en turno posterior, solicitamos se llame en este momento.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

## CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1920, titulado :

"Para crear el Centro Municipal de Resolución de Conflictos, que tendrá por objeto prestar servicios de mediación, arbitraje y amigables componedores para la resolución de conflictos, controversias y pleitos, ya iniciados o potenciales; para proveer el método de compensación; para disponer los procedimientos a seguirse y para establecer la revisión judicial."

***Enmiendas Circuladas En Sala:**

**En el Texto:**

| | |
|---|---|
| Página 2, línea 5: | después de "personas" insertar ", que no sean abogados," |
| Página 2, línea 13: | después de "personas" insertar "certificadas como mediadores," |
| Página 3, entre líneas 4 y 5: | insertar "Artículo 4.-Jurisdicción y competencia.<br>Los amigables componedores, árbitros y mediadores intervendrán en aquellas controversias, de naturaleza civil, que sean de la competencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, y que le sean referidas por:<br>a) El Tribunal de Primera Instancia<br>b) Que el Código Civil o una ley especial refiera necesariamente a un amigable componedor o árbitro.<br>c) La partes voluntariamente le sometan a su consideración, en materias civiles y/o mercantiles, sobre contratos, cuasicontratos, derechos reales sobre bienes muebles e inmuebles, y daños y perjuicios, exceptuados los casos de impericia médica." |
| Página 3, línea 5: | tachar "4" y sustituir por "5" |
| Página 3, entre líneas 11 y 12: | insertar "El costo de los peritos privados será sufragado por las respectivas partes, el costo de los peritos que sean |

empleados municipales será sufragado por las partes, según la tarifa que establezca la Asamblea Municipal.
La Asamblea Municipal podrá eximir del pago de tarifas por los servicios de árbitros, amigables componedores, mediadores y peritos, a personas que cualifiquen, según los criterios de ingresos que adopte."

Página 3, línea 12: tachar "5" y sustituir por "6"

Página 3, línea 16: tachar "6" y sustituir por "7"

Página 3, línea 17: tachar "y árbitros" y después de "revisables" tachar "por'

Página 3, línea 18: tachar todo su contenido y sustituir por "ante el Tribunal de Primera Instancia y gozarán de presunción de corrección y la parte que la impugne tendrá el peso de la prueba en el procedimiento judicial. El procedimiento de impugnación será de naturaleza sumaria, con una primera comparecencia para la presentación de las pruebas y contenciones de las partes, y una segunda comparecencia para el juicio en su fondo, pudiendo el juez ordenar la consolidación de ambas comparecencias."

Página 3, líneas 19 y 20: tachar todo su contenido y sustituir por "Las decisiones de los árbitros serán revisables por el Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante recurso de certiorari expedido a su discreción."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para que se apruebe las enmiendas previamente circuladas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas previamente circuladas hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para una enmienda adicional.

SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.

SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página ...

SRA. OTERO DE RAMOS: Para una enmienda adicional. Página 2, línea 13, después de "personas" insertar "certificadas como mediadores".

SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay objeción, señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

SR. DAVILA LOPEZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. DAVILA LOPEZ: Para regresar al turno de Mociones.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

## MOCIONES

SR. DAVILA LOPEZ: Señora Presidenta, para solicitar que se llame otra vez la Resolución Conjunta del Senado 2188, que fue reconsiderada, para unas enmiendas en Sala.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

## CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración de la Resolución Conjunta del Senado 2188, titulada :

"Para autorizar y ordenar al Secretario del Departamento Sombrilla de Recursos Naturales y Ambientales y al Director Ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) a comenzar un proceso de enmienda al Plan Regional de Infraestructura para el Reciclaje y Disposición de los Desperdicios Sólidos de PR de 1995 a los efectos de sustituir la Planta de Recuperación de Energía especificada para la Región 1 de Guaynabo bajo el Plan por la Facilidad propuesta por el Municipio de Caguas mediante solicitud formal a la Autoridad de Desperdicios Sólidos el pasado mes de noviembre de 1999. La localización de la Facilidad en el Municipio de Caguas requeriría una enmienda a los efectos de incluir a los Municipios de Caguas y Cidra en la Región 1 del Plan."

SR. DAVILA LOPEZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. DAVILA LOPEZ: A las enmiendas que se habían ya presentado anteriormente, hay otras enmiendas en Sala.

SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.

SR. DAVILA LOPEZ: En la página 3, línea 4, después de "1995" añadir "según los procedimientos establecidos". En la página 3, línea 5, después "plan" tachar la palabra "por" y añadir "a fin de considerar". En la página 3, línea 11, tachar "ordenada" y sustituir por "autorizada".

Esas son las enmiendas, señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Senador McClintock Hernández.

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí, para solicitar que se llame el Proyecto del Senado 2613.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del Senador, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, llámese la medida.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2613, titulado :

"Para enmendar la Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, en su Artículo 24 inciso C (1), a los fines de que los menores cuyas medidas dispositivas impuestas sean menor de seis (6) meses puedan estar bajo la custodia de la Administración de Instituciones Juveniles."

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Senador McClintock Hernández.

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, tenemos unas enmiendas en Sala.

SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas en Sala.

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: En la página 2, línea 9, tachar la primera palabra "la" y sustituir por "En casos de reincidencia, la".

Esa sería la única enmienda en Sala, señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la enmienda en Sala, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Perdóneme, señora Presidenta, perdóneme. La palabra que estamos tachando es "el" no "la" y la enmienda leería, "En casos de reincidencia, el".

SRA. VICEPRESIDENTA: A la enmienda corregida, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, tenemos unas enmiendas de informe al título, solicitamos su aprobación en este momento.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Tenemos una enmienda en Sala al título, señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: En la ... Estoy leyendo de la enmienda que aparece en la página 3 del informe al título, en la penúltima línea, después de "dispositiva," insertar "en casos de reincidencia," y luego continuaría "al Administrador de Instituciones Juveniles".

SRA. VICEPRESIDENTA: A la enmienda en Sala al título de la medida, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se forme un primer Calendario de Votación Final que incluya las siguientes medidas: Proyecto del Senado 2456, Proyecto del Senado 2624, Proyecto de la Cámara 3325, Proyecto de la Cámara 2888, Proyecto de la Cámara 2969, Resolución Conjunta de la Cámara 2927, Resolución Conjunta de la Cámara 3173, Resolución Conjunta de la Cámara

3308, Resolución Conjunta de la Cámara 3421, Resolución Conjunta de la Cámara 3398, Resolución Conjunta de la Cámara 3410, Resolución Conjunta de la Cámara 3417, Resolución Conjunta de la Cámara 3411, Resolución Conjunta de la Cámara 3406, Resolución Conjunta de la Cámara 3408, Proyecto del Senado 1920, Proyecto del Senado 2303, Proyecto del Senado 2491, Resolución Conjunta del Senado 2396, Proyecto de la Cámara 3197, Resolución Conjunta de la Cámara 2645, Resolución Concurrente del Senado 70, Resolución Conjunta de la Cámara 3325 en reconsideración, Sustitutivo al Proyecto del Senado 2570, Resolución Conjunta de la Cámara 3163, Resolución Conjunta de la Cámara 3162, Proyecto del Senado 2189, Proyecto del Senado 2613, Proyecto del Senado 2535, Proyecto del Senado 2471, Resolución Conjunta del Senado 2531, Resolución Conjunta del Senado 2532, Resolución Conjunta de la Cámara 3155, Resolución Conjunta de la Cámara 3389, Resolución Conjunta de la Cámara 3404, Resolución Conjunta de la Cámara 3405, Resolución Conjunta de la Cámara 3407, Resolución Conjunta de la Cámara 3419, Resolución Conjunta de la Cámara 3420, Resolución Conjunta de la Cámara 3429, Resolución Conjunta de la Cámara 3434, Resolución Conjunta de la Cámara 3435, Resolución Conjunta de la Cámara 3437, Proyecto de la Cámara 3064, Resolución Conjunta de la Cámara 3074, Proyecto del Senado 1969, Proyecto del Senado 2281, Proyecto del Senado 2636, Resolución Conjunta del Senado 2535, Proyecto de la Cámara 3363, Resolución Conjunta de la Cámara 97, Resolución Conjunta de la Cámara 3427, Resolución del Senado 3539, Resolución Conjunta del Senado 2188 en reconsideración, Proyecto del Senado 1968 en reconsideración.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz para el primer Calendario de Votación Final, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

## CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas:

P. del S. 1920

"Para crear el Centro Municipal de Resolución de Conflictos, que tendrá por objeto prestar servicios de mediación, arbitraje y amigables componedores para la resolución de conflictos, controversias y pleitos, ya iniciados o potenciales; para proveer el método de compensación; para disponer los procedimientos a seguirse y para establecer la revisión judicial."

P. del S. 1968 (en reconsideración)

"Para añadir un apartado (31) a la Sección 9 de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de Patentes Municipales", a fin de consignar expresamente que toda persona que en su carácter de porteador público fuere dueña de, controlare, explotare o administrare cualquier vehículo de motor que se utilice para transportar pasajeros y equipaje en modo incidental al transporte, mediante paga, al público en general o a una parte del mismo, independientemente de su cabida y de que tal transporte se efectúe o no entre terminales fijos o irregulares, estará exenta del pago de patentes municipales; y para disponer la condonación de deudas por dicho concepto."

P. del S. 1969

"Para denominar el tramo de la carretera 362 entre las intersecciones con las carreteras 360 y la Avenida Castro Pérez (carretera 122) como Avenida Salvador Tió."

P. del S. 2189

"Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales" a fin de establecer el proceso de elección de alcalde a la Junta de Gobierno del Centro, cuando ocurra una vacante."

P. del S. 2281

"Para denominar el tramo de la Carr. 362 entre la carretera 122 hasta la carretera #2 como Avenida Aurelio Tió."

P. del S. 2303

"Para enmendar el Artículo 13.012 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos" a los fines de permitir que dentro de los poderes otorgados a los municipios esté la facultad de conceder variaciones de uso y variaciones de intensidad en construcción o uso para aquellos proyectos dentro de sus límites territoriales."

P. del S. 2456

"Para adicionar un nuevo inciso (i) al Artículo 3.2 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada conocida como "Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" a fin de proteger a todo ciudadano privado o cualquier funcionario o empleado público de actuaciones adversas en su contra por parte de su patrono por haber denunciado actos ilegales en el servicio público."

P. del S. 2471

"Para enmendar el último párrafo del Artículo 17 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos" a fin de que se establezca un proceso único de obtención y renovación de permisos en los casos de construcción de vivienda de bajo costo, cuando ésta sea realizada por una persona de escasos recursos con ayuda de familiares o amigos y sea levantada por etapas."

P. del S. 2491

"Para autorizar a los municipios de Puerto Rico a disponer mediante venta de los solares municipales en usufructo a los ocupantes de los mismos por el valor nominal de $ 1.00, reconociéndose el usufructo hasta los ocupantes de tercera generación de los usufractuarios originales, facultar a la Oficina de Asuntos Municipales a promulgar la reglamentación al efecto y para otros fines."

P. del S. 2535

"Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 170 del 23 de julio de 1974, conocida como "Ley Orgánica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico", a fin de establecer una aportación para proyectos de remedio o limpieza ambiental de 25% del cargo establecido por cada unidad a ser conectada al sistema de alcantarillados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico;

para enmendar el Artículo 1 de la Ley 170, con el propósito de enmendar la definición de unidad aclarando que para los proyectos de remedio o limpieza ambiental, una unidad equivale a 400 galones de agua de descarga al día en lo que respecta el sistema de alcantarillado; y para enmendar el Artículo 1 de la Ley 170 para definir el concepto de proyecto de remedio o limpieza ambiental."

Sustitutivo al P. del S. 2570

"Para adicionar el Artículo 7-A a la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, conocida como "Ley del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)", a fin de crear el cargo de Procurador Auxiliar Especializado en Educación en la Oficina del Procurador del Ciudadano."

P. del S. 2613

"Para enmendar el inciso ( c ) (1) del Artículo 24 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico", a fin de eliminar el requisito de seis (6) meses, y sean reincidentes para otorgarle la custodia, como medida dispositiva, al Administrador de Instituciones Juveniles."

P. del S. 2624

"Para enmendar los sub-incisos (ii), (iii) y (iv), del inciso (g) del Artículo 22 de la Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999, conocida como "Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico", a los fines de reglamentar distintas modalidades de anuncios, aceras y otras propiedades públicas."

P. del S. 2636

"Para enmendar la Ley Núm. 163 de 11 de agosto de 1995, con el propósito de asiginarle fondos al Departamento de Hacienda para permitirle repagar el balance pendiente de pago del préstamo que recibió del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico."

R.C. del S. 2188 (reconsideración)

"Para autorizar al Secretario del Departamento Sombrilla de Recursos Naturales y Ambientales y al Director Ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) a comenzar un proceso de enmienda al Plan Regional de Infraestructura para el Reciclaje y Disposición de los Desperdicios Sólidos de PR de 1995 a los efectos de sustituir la Planta de Recuperación de Energía especificada para la Región 1 de Guaynabo bajo el Plan por la Facilidad propuesta por el Municipio de Caguas mediante solicitud formal a la Autoridad de Desperdicios Sólidos el pasado mes de noviembre de 1999. La localización de la Facilidad en el Municipio de Caguas requeriría una enmienda a los efectos de incluir a los Municipios de Caguas y Cidra en la Región 1 del Plan."

R.C. del S. 2396

"Para asignar a la Administración de Corrección la cantidad de doscientos mil dólares ($200,000.00), de fondos no comprometidos del Presupuesto General, para sufragar los costos de la Primera Cumbre Correccional de las Américas."

R.C. del S. 2531

"Para reasignar al Departamento de la Familia, la cantidad de cinco mil (5,000.00) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para ayuda a personas de escasos recursos económicos en el Distrito Senatorial de San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados."

R.C. del S. 2532

"Para reasignar al Departamento de Educación, la cantidad de veinte mil (20,000.00) dólares, de los fondos consignados en la Sustitutiva a la R.C. del S. 2241 de 21 de marzo de 2000, a ser transferidos a la Escuela Esperanza (Antigua Palés Matos), para mejoras permanentes en la planta física; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados."

R.C. del S. 2535

"Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportación del Departamento de Transportación y Obras Públicas a ceder y traspasar libre de costo al Municipio de Bayamón dieciséis (16) predios de terreno vacantes y remanentes en varias localidades del Municipio que se describen a continuación: remanente carretera #2 frente hospital Ruiz Soler; remanente Ave. Circunbalación Norte, Int. carretera #2, cerca Club de Leones; remanente Ave. Circunbalación Norte, Int. carretera #174 al lado de River Side Park; remanente carretera #2 frente a Funeraria Porta Coeli, Hato Tejas; remanente carretera #2 cerca de la casa del camionero, entrada Sierra Bayamón; remanente carretera #2 Int. carretera #29, entrada al Volcán en Hato Tejas; remanente frente al Supermercado Grande y colindando con Losada Auto en Hato Tejas; remanente Ave. Comerío frente a Urb. Frontera; remanente Ave. Comerío Int. Expreso de Diego cerca del puente; remanente carretera #29 frente a la Cambija; remanente carretera #174, Int. carretera Teniente Nelson Martínez; remanente carretera #167 frente a Farmacia Walgreens y Pep Boys en Villa Contesa y Extensión Forest Hills; remanente carretera #167 cerca Gallera Castrodad; remanente carretera #167 frente a Urb. Bella Vista; remanente carretera #174 frente Urb. Versalles, colindando con el Colegio Regional de Bayamón y remanente carretera #177 cerca del Puente Río Bayamón; los cuales deberán ser identificados por la Autoridad de Carreteras y Transportación con sus respectivas colindancias y cabida al ser completado el correspondiente proceso de traspaso."

R. Conc. del S. 70

"Para derogar el inciso (k), enmendar los incisos (b), (d), (e), (g), (i), (j), (l), (m), (s) y (x), y renumerar los incisos (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x) e (y), como (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w) y (x) de la Sección 2; enmendar la Sección 3; enmendar los incisos (c), (j) y (m), y añadir un nuevo inciso (n) de la Sección 5; enmendar la Sección 11, de la Resolución Concurrente del Senado Núm. 11, y para otros fines."

R. del S. 3539

"Para felicitar y reconocer a Pedro Santos, Payaso Pirulí, y a los payasos de Puerto Rico, con motivo de la celebración de la **"Semana del Payaso"**, del 1 al 7 de agosto de 2000."

P. de la C. 2888

"Para enmendar el inciso (3) y adicionar un nuevo inciso (16) al Artículo 11 y enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 214 de 14 de octubre de 1995, según enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar el Negocio de Intermediación Financiera" a los fines de incluir las manifestaciones falsas y la competencia desleal o ilegal entre las prácticas prohibidas, incluir a directores, oficiales y empleados como personas a las cuales se les prohibe incurrir en ciertas prácticas, señalar como infractores a cualquier persona que tome parte, instigue o coopere en la comisión de las prácticas prohibidas, tipificar como delito grave algunas de estas prácticas e imponer la pena de restitución y para otros fines."

P. de la C. 2969

"Para establecer el Programa para el Sustento de Personas de Edad Avanzada, adscrito a la Administración para el Sustento de Menores; establecer mecanismos administrativos y judiciales para que personas de edad avanzada con necesidad de alimentos de sus descendientes puedan utilizar dichos mecanismos para facilitar la localización de alimentantes, el establecer el monto de pensiones alimentarias para personas de edad avanzada; el cobro y distribución de las mismas y procedimientos y remedios especiales con el fin de llevar a cabo los propósitos de esta Ley; para establecer metodología de utilización de recursos ya existentes dentro del Gobierno de Puerto Rico y proveer fondos para estos propósitos."

P. de la C. 3064

"Para enmendar los Artículos 1 y 2; añadir un nuevo Artículo 4, se reenumera los Artículos 4 y 5 como Artículos 5 y 6; se añade un nuevo Artículo 7 y se reenumeran los Artículo 6, 7 y 8 como los Artículos 8, 9, 10 de la Ley Núm. 173 de 31 de agosto de 1996, y se enmienda el párrafo tercero del Artículo 14 de la Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, según enmendada, mejor conocida como "Ley para Autorizar el Sistema de Lotería Adicional; a los fines de cambiar el título de la Ley; establecer un pareo de fondos estatales de arrendamiento a todo aquel veterano que cualifique para la Casa Estatal de Veterano, y proveerle anualmente los fondos al referido programa y para otros fines."

P. de la C. 3197

"Para establecer la política pública sobre veredas de viandantes, ciclistas de montaña, veredas acuáticas y ecuestres en Puerto Rico, crear el Registro de Veredas Naturales, la Junta Asesora y el Comité Técnico para implantar la política pública de esta Ley."

P. de la C. 3325

"Para enmendar el inciso (r) del Artículo 2.04 de la Ley Núm. 149 de 5 de julio de 1999, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico", a fin de disponer que las escuelas podrán organizar programas con la cooperación de instituciones y entidades de la comunidad."

P. de la C. 3363

"Para adicionar un inciso (f) al Artículo 7 de la Ley Número 111 de 12 de julio de 1985, según enmendada, conocida como "Ley para la Protección y Conservación de Cuevas, Cavernas o Sumideros de

Puerto Rico", a fin de facultar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para realizar labores de limpieza en las cuevas, cavernas, sumideros cuando dicho recurso natural así lo necesite, a pesar de que el dueño del predio o finca que ubica el acceso a utilizar para entrar no lo permite."

R.C. de la C. 97

"Para autorizar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas a segregar y transferir, libre de costo, diez (10) cuerdas de terreno al municipio de Río Grande, de la finca principal localizada en el barrio Zarzal, para la construcción de parque de pelota, cancha de baloncesto, centro comunal y áreas de recreación pasiva, entre otras, para el uso y disfrute de la comunidad Villa Realidad."

R.C. del S. 2188 (en reconsideración)

" Para reasignar al Municipio de Orocovis, la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares, previamente asignados a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, para la reparación y repavimentación del camino Botijas I, Sector Las Marías del Municipio de Orocovis, en la Resolución Conjunta Núm. 720 de 8 de diciembre de 1995, para que sean utilizados en obras y mejoras permanentes para beneficio del Municipio de Orocovis; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados."

R.C. de la C. 97

"Para autorizar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas a segregar y transferir, libre de costo, diez (10) cuerdas de terreno al municipio de Río Grande, de la finca principal localizada en el barrio Zarzal, para la construcción de parque de pelota, cancha de baloncesto, centro comunal y áreas de recreación pasiva, entre otras, para el uso y disfrute de la comunidad Villa Realidad."

R.C. de la C. 2645

"Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas ceder en usufructo al Municipio de Isabela, el solar y las edificaciones que formaban parte de la Escuela Ulises Pellot del barrio Galateo Bajo de dicha municipalidad, a los fines de habilitar un centro de vida independiente y rehabilitación para personas con limitaciones visuales y auditivas."

R.C. de la C. 2927

"Para ordenar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, luego de la celebración de la vista pública provista por la Ley Núm. 133 del 1 de julio de 1975, conocida como "Ley de Bosques de Puerto Rico" a proclamar los manglares en la Playa de la Sardinera, en el Municipio de Hatillo como Bosque Estatal. "

R.C. de la C. 3074

"Para autorizar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (Autoridad de Carreteras) a que segregue y venda por el valor de treinta y un mil (31,000) dólares, siguiendo las leyes y normas

establecidas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (Autoridad de Carreteras) a la organización "Comité de Vecinos Unidos en Pro-Macún, Inc." el solar ubicado en el Barrio Macún del Municipio de Toa Baja, con una cabida aproximadamente 1558.230 metros cuadrados; el cual colinda por el Norte con la carretera P.R. 22, por el Sur con la calle Flamboyan, por el Este con la calle Principal "La Victoria" y por el Oeste con terrenos del ELA, bajo los términos y condiciones de esta Resolución Conjunta."

R.C. de la C. 3155

"Para reasignar al Municipio de Vega Baja, la cantidad de cuarenta y un mil (41,000) dólares procedentes de las Resoluciones Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, 346 de 8 de agosto de 1998 y 556 de 21 de agosto de 1999, para transferir a la Ferretería Jaime del señor Jaime Cortéz ubicada en el Centro Comercial Cortez en materiales para reparación de viviendas según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos asignados."

R.C. de la C. 3162

"Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que denomine al Parque Recreativo de la Urbanización Los Dominicos, del Municipio de Toa Alta, con el nombre de "Parque Recreativo Florentino "Pirata Rivera", y para que el Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico tome las medidas necesarias para la celebración de un acto apropiado."

R.C. de la C. 3163

"Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que denomine a la Cancha de la Urbanización Los Dominicos, del Municipio de Toa Alta, con el nombre de "Cancha José "Cheo" Medina Rivera", y para que el Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico tome las medidas necesarias para la celebración de un acto apropiado."

R.C. de la C. 3173

"Para designar las runias de la Ermita de Nuestra Señora del Rosario de Barinas en el Municipio de Yauco como lugar de valor histórico de Puerto Rico."

R.C. de la C. 3308

"Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que denomine la Escuela Elemental del Barrio Florida del Municipio de Naguabo, con el nombre de "Escuela de la Comunidad Elemental Lutgarda Rivera Reyes" y para que el Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tome las medidas necesarias para la celebración de un acto apropiado."

R.C. de la C. 3325 (en reconsideración)

"Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas la cantidad de trescientos cincuenta mil (350,000) dólares, de Fondos no Comprometidos, para llevar a cabo estudio y mensura de

los terrenos de la Sucesión Rullán, donde ubican alrededor de 50 familias en el Sector Acueductos del municipio de Adjuntas, para la adquisición de los mismos y mejoras a la infraestructura y para autorizar el pareo de los fondos asignados."

R.C. de la C. 3389

"Para reasignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, Región de Aguadilla, la cantidad de veintiocho mil (28,000) dólares provenientes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 920 de 29 de diciembre de 1999 y 346 de 8 de agosto de 1998, para la realización de obras de construcción, reparación de viviendas, compra de materiales, obras de asfalto, construcción de cunetones, construcción de muros de contención y otras obras permanentes y para autorizar el pareo de los fondos reasignados."

R.C. de la C. 3398

"Para asignar a varios Municipios y al Departamento de Recreación y Deportes –Región Carolina, la cantidad de trescientos mil ($300,000) dólares para realizar obras y mejoras permanentes, que propendan al bienestar y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36, según se detalla en la Sección 1 y para autorizar el pareo de los fondos asignados."

R.C. de la C. 3404

"Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de dos mil ciento setenta y tres dólares con quince centavos (2,173.15), provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 22 de agosto de 1999, para la compra de equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 24 de Ponce y para autorizar el pareo de fondos."

R.C. de la C. 3405

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de nueve mil setecientos cincuenta (9,750) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para compra de equipo, materiales, medicina, accesorios de oficina, escolares, deportivos, reparación de viviendas a personas de escasos recursos, donativos a estudiantes y personas necesitadas, aportaciones a instituciones cívicas, culturales y deportivas que operen sin fines de lucro, y para otras obras y actividades de interés social."

R.C. de la C. 3406

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de mil setecientos cuatro (1,704) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para compra de equipo, materiales, medicina, accesorios de oficina, escolares, deportivos, reparación de viviendas a personas de escasos recursos, donativos a estudiantes y personas necesitadas, aportaciones a instituciones cívicas, culturales y deportivas que operen sin fines de lucro, y para otras obras y actividades de interés social."

R.C. de la C. 3407

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, previamente asignados a través de la Resolución Conjunta Núm. 892 de 28 de diciembre de 1999, para ser transferidos a la Asociación de Residentes de Venus Gardens Sur, para la reparación del Centro Comunal; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados."

R.C. de la C. 3408

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de tres mil quinientos (3,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 506 de 21 de agosto de 1999, para ser transferidos a Senescencia Community Action, Inc., para realizar mejoras permanentes en dicho centro."

R.C. de la C. 3410

"Para asignar al Municipio de Arecibo, Distrito Representativo Núm. 14, la cantidad de treinta y siete mil seiscientos (37,600) dólares, para la realización de obras y mejoras permanentes, para autorizar la transferencia, contratación de las obras y el pareo de los fondos asignados."

R.C. de la C. 3411

"Para enmendar el inciso (a) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 411 de 28 de julio de 1994, a fin de modificar el destino de los fondos."

R.C. de la C. 3417

"Para asignar a la Universidad de Puerto Rico, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, la cantidad de once millones (11,000,000) de dólares para el pago de internos y residentes del Recinto de Ciencias Médicas y para autorizar el pareo de los fondos asignados."

R.C. de la C. 3419

"Para reasignar al Municipio de Quebradillas veinticinco mil (25,000) dólares asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 556 del 21 de agosto de 1999, para techar la cancha en las parcelas del Bo. Terranova, para autorizar la transferencia, contratación de las obras y el pareo de los fondos."

R.C. de la C. 3420

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de ocho mil (8,000) dólares a los fines de transferir a las instituciones desglosadas en la Sección 1, para sufragar los gastos en que incurran por concepto de adquisición de materiales y equipos necesarios y la celebración de actividades afines a sus disciplinas y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados."

R.C. de la C. 3421

"Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de veinticinco mil quinientos (25,500) dólares, para la realización de actividades dirigidas a mejorar la salud y calidad de vida, así como el bienestar

social, deportivo y cultural de esa municipalidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados, la transferencia de los mismos e indicar su procedencia."

R.C. de la C. 3427

"Para asignar al Contralor de Puerto Rico la cantidad de tres millones (3,000,000) de dólares para gastos de funcionamiento en el año fiscal de 2000-2001."

R.C. de la C. 3429

"Para asignar a la Junta de Libertad Bajo Palabra de Puerto Rico, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, para gastos de funcionamiento en el año fiscal de 2000 - 2001; y para autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia."

R.C. de la C. 3434

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de treinta y cinco mil (35,000) dólares, a los fines de ser transferidos al Mesón de los Redimidos, Inc. ubicado en el Municipio de Bayamón, para la compra de un vehículo de motor y una planta eléctrica; y para autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia."

R.C. de la C. 3435

"Para asignar a la Compañía de Fomento Recreativo la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares, a fin de ser transferidos a la Asociación Recreativa de Vecinos Unidos de Villa Borinquen, Inc., para la realización de mejoras a las facilidades deportivas y recreativas de la Urb. Villa Borinquen de Puerto Nuevo en el Municipio de San Juan; y para autorizar la contratación de las obras y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia."

R.C. de la C. 3437

"Para reasignar al Municipio de San Germán, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 403 de 10 de agosto de 1998, para la construcción y reconstrucción de la cancha ubicada en la Urb. Reparto Universitario de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados."

R. Conc. del S. 70

"Para derogar el inciso (k), enmendar los incisos (b), (d), (e), (g), (i), (j), (l), (m), (s) y (x), y renumerar los incisos (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x) e (y), como (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w) y (x) de la Sección 2; enmendar la Sección 3; enmendar los incisos (c), (j) y (m), y añadir un nuevo inciso (n) de la Sección 5; enmendar la Sección 11, de la Resolución Concurrente del Senado Núm. 11, y para otros fines."

**VOTACION**

(Votación Núm. 1)

Los P. del S. 2456; 2491; 2570(Sust.); las R. C. del S. 2532; 2535; la R. del S. 3539; los P. de la C. 2888; 2969; 3197; 3325; 3363 y las R. C. de la C. 97; 2645; 2927; 3173; 3405; 3406; 3417, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Bruno A. Ramos Olivera, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Manuel Rodríguez Orellana y Luz Z. Arce Ferrer, Presidenta Accidental.

TOTAL ..... 17

VOTOS NEGATIVOS

TOTAL ..... 0

VOTOS ABSTENIDOS

TOTAL ..... 0

Los P. del S. 1968(rec.); 1969; 2189; 2281; 2471; 2613; 2624; 2636; la R. C. del S. 2531; el P. de la C. 3064 y las R. C. de la C. 3074; 3162; 3163; 3308; 3325(rec.); 3389; 3398; 3404; 3407; 3408; 3410; 3411; 3419; 3420; 3421; 3434; 3435 y 3437, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Bruno A. Ramos Olivera, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón y Luz Z. Arce Ferrer.

TOTAL ..... 16

VOTOS NEGATIVOS

TOTAL ..... 0

VOTOS ABSTENIDOS

Senador:

Manuel Rodríguez Orellana

TOTAL ..... 1

La R. C. de la C. 3427, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Bruno A. Ramos Olivera, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Manuel Rodríguez Orellana y Luz Z. Arce Ferrer.

TOTAL ..... 16

VOTOS NEGATIVOS

TOTAL ..... 0

VOTOS ABSTENIDOS

Senador:

Kenneth McClintock Hernández.

TOTAL ..... 1

El P. del S. 2303; la R. C. del S. 2188(rec.) y la R. C. de la C. 3155, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Bruno A. Ramos Olivera, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón y Luz Z. Arce Ferrer.

TOTAL ..... 16

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:

Manuel Rodríguez Orellana

TOTAL ..... 1

VOTOS ABSTENIDOS

TOTAL ..... 0

El P. del S. 1920, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón y Manuel Rodríguez Orellana.

TOTAL ..... 14

VOTOS NEGATIVOS

Senadora:

Luz Z. Arce Ferrer.

TOTAL ..... 1

VOTOS ABSTENIDOS

Senadores:

Mercedes Otero de Ramos y Bruno A. Ramos Olivera.

TOTAL ..... 2

El P. del S. 2535, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón.

TOTAL ..... 13

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:

Manuel Rodríguez Orellana y Luz Z. Arce Ferrer.

TOTAL ..... 2

VOTOS ABSTENIDOS

Senadores:

Mercedes Otero de Ramos y Bruno A. Ramos Olivera

TOTAL ..... 2

La R. C. del S. 2396, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón.

TOTAL ..... 13

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:

Mercedes Otero de Ramos, Bruno A. Ramos Olivera, Manuel Rodríguez Orellana y Luz Z. Arce Ferrer.

TOTAL ..... 4

VOTOS ABSTENIDOS

TOTAL ..... 0

La R. Conc. del S. 70, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón.

TOTAL ..... 13

VOTOS NEGATIVOS

Senadora:

Luz Z. Arce Ferrer.

TOTAL ..... 1

VOTOS ABSTENIDOS

Senadores:

Mercedes Otero de Ramos, Bruno A. Ramos Olivera y Manuel Rodríguez Orellana.

TOTAL ..... 3

La R. C. de la C. 3429, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón.

TOTAL ..... 13

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:

Mercedes Otero de Ramos, Bruno A. Ramos Olivera y Luz Z. Arce Ferrer.

TOTAL ..... 3

VOTOS ABSTENIDOS

Senador:

Manuel Rodríguez Orellana.

TOTAL ..... 1

SRA. VICEPRESIDENTA: Aprobadas todas las medidas, con la excepción del Proyecto del Senado 1920, la Resolución Conjunta del Senado 2396, Resolución Conjunta del Senado Número 70, Proyecto del Senado 2535, Resolución Conjunta de la Cámara 3429.

- - - -

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Carlos Dávila López, Presidente Accidental.

- - - -

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señora Lucy Arce.

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para solicitar la reconsideración de las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1920, Resolución Conjunta del Senado 2396, Resolución Conjunta del Senado 70, Proyecto del Senado 2535 y Resolución Conjunta de la Cámara 3429

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SRA. ARCE FERRER: Corrigiendo, señor Presidente, la Resolución Concurrente de la Cámara ... Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañera Lucy Arce.

SRA. ARCE FERRER: Estamos solicitando, para clarificar el récord, la reconsideración de las siguientes medidas. Proyecto del Senado 1920, Resolución Conjunta del Senado 2396, Resolución Concurrente del Senado 70, Proyecto del Senado 2535 y Resolución Conjunta de la Cámara 3429.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

**MOCIONES**

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un tercer Calendario de Ordenes Especiales del Día que incluyan las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1560, Proyecto del Senado 2409, Proyecto del Senado 2610, Proyecto de la Cámara 3297, Proyecto de la Cámara 833,

Proyecto de la Cámara 2785, Proyecto de la Cámara 3007, Proyecto de la Cámara 3232, Proyecto de la Cámara 2684, Proyecto de la Cámara 2582, Proyecto de la Cámara 2792, Proyecto de la Cámara 2378, Proyecto de la Cámara 2705, Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 400, Proyecto de la Cámara 3119, Proyecto de la Cámara 1729, Resolución Conjunta de la Cámara 2926.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión Especial del Sistema de Retiro de tener que informar el Proyecto de la Cámara 3501, y que el mismo se incluya en el Calendario.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, también vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Recursos Naturales; Hacienda; y de Gobierno de tener que informar el Proyecto del Senado 2521, y que el mismo se incluya en el Calendario.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Educación y Cultura de tener que informar la Resolución Conjunta del Senado 2438, y que la misma se incluya en el Calendario.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de lo Jurídico de tener que informar el Proyecto de la Cámara 3160, y que el mismo se incluya en el Calendario.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Agricultura de tener que informar la Resolución Conjunta de la cámara 2109, y que se incluya en el Calendario.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También solicitamos que se releve a la Comisión de Jurídico; y de Hacienda de tener que informar el Proyecto de la Cámara 2205, y que el mismo se incluya en el Calendario.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos Urbanos de tener que informar el Proyecto de la Cámara 3008, y que el mismo se incluya en el Calendario.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de lo Jurídico de tener que informar los Proyectos de la Cámara 544, 2729, 2737, 3020, 3067, 3476, 2528 y 2958, todos de la Cámara, y que los mismos se incluyan en el Calendario.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones de tener que informar el Proyecto del Senado 2283.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Hacienda, y se incluya en el Calendario según informado por la Comisión de Agricultura, el Proyecto del Senado 2299.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Hacienda de tener que informar los Proyectos del Senado 2577, 2578, y que los mismos se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Hacienda de tener que informar las Resoluciones Conjuntas del Senado 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562 y 2563, y que las mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Okey, señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Lectura de las medidas incluidas en el Calendario.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a corregir la moción de Lectura; vamos a solicitar que se deje sin efecto la moción de Lectura.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos se considere el tercer Orden de los Asuntos.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

## INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes de Comisiones Permanentes:

De la Comisión de Hacienda, cuatro informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 2038; 2505; 2510 y la R. C. de la C. 3433, con enmiendas.

De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 2883, sin enmiendas.

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Salud y Bienestar Social, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1416, con enmiendas.

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2998, con enmiendas.

De la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, un informe, proponiendo la aprobación del Proyecto Sustitutivo a los P. del S. 2347; 2348; 2349; 2350; 2351; 2352; 2353; 2360; 2361; 2362; 2363 y 2364.

De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, dos informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 2254 y de la R. C. del S. 2196, con enmiendas.

## MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones de Trámite Legislativo:

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cinco comunicaciones, informando que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado el P. de la C. 1038 y las R. C. de la C. 3041; 3448; 3449 y 3451 y solicita igual resolución por parte del Senado.

Del Secretario de la Cámara de Representantes, seis comunicaciones, informando que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 1136; 1402; 1540; 1570; 2451 y 2469.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso (b) de este turno se da cuenta de seis (6) comunicaciones informando que dicho Cuerpo aprobó, con enmiendas, igual número de medidas. En cuanto al Proyecto del Senado 1136, solicitamos la concurrencia de las enmiendas introducidas por la Cámara.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: En torno a los Proyectos del Senado 1402, 1540, 1570 y el 2451, solicitamos la concurrencia de las enmiendas introducidas por la Cámara a cada una de esas medidas.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: En cuanto al Proyecto del Senado 2469, solicitamos conferencia de la Cámara.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, sugerimos a la Presidencia designe al compañero Pagán González para que presida este comité, junto a los compañeros Dávila López, Carranza De León, Agosto Alicea y Rodríguez Orellana.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Aceptamos la recomendación del señor Portavoz, nómbrese a los compañeros en el Comité de Conferencia.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se forme un Calendario de Lectura de las medidas incluidas en el Calendario.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba..

## CALENDARIO DE LECTURA

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1560, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de lo Jurídico; y de Hacienda, con enmiendas.

## "LEY

Para adicionar un apartado (o) a la Sección 5002 del Subtítulo E de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de cambiar el peso de la prueba a favor del contribuyente que ha actuado de buena fe.

## EXPOSICION DE MOTIVOS

Con la aprobación de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", nuestro Gobierno ha podido incrementar la eficiencia en el recaudo y la administración de los impuestos. Se reformó el sistema contributivo de Puerto Rico con los propósitos primarios de reducir las tasas contributivas, establecer un sistema impositivo más justo y promover un crecimiento económico más dinámico y balanceado.

La meta para la reforma contributiva es aliviar la situación para los contribuyentes y proveer incentivos al trabajo y la inversión con el fin de estimular el esfuerzo productivo y el crecimiento económico de la Isla.

Las condiciones económicas son cambiantes y un sistema contributivo adecuado debe ser revisado periódicamente cuando se presentan nuevas situaciones. Los derechos del contribuyente al éste tratar asuntos tributarios son la razón de ser de la carta de Derechos del Contribuyente. Conscientes de esa dinámica, y atendiendo la idea de buscar que nuestro Gobierno responda eficazmente a las necesidades de los ciudadanos, esta Asamblea Legislativa entiende necesaria la aprobación de esta ley.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.- Adicionar un apartado (o) a la Sección 5002 del Subcapítulo E de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que lea como sigue:

**"SUBTÍTULO E**
**CARTA DE DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE**

. . .

Artículo 5002.- Derechos del Contribuyente

Todo contribuyente tendrá derecho en las entrevistas, investigaciones, reclamaciones de reintegro y crédito, y otras gestiones que se realicen en el Departamento de Hacienda en adelante "el Departamento", a:

(a) .....

(o) Peso de la prueba

(1) Si en un proceso judicial, un contribuyente demuestra, mediante evidencia fehaciente que ha actuado de buena fe, el Secretario tendrá el peso de la prueba con respecto al asunto en controversia.

(2) Lo anterior aplicará cuando:

(A) el contribuyente ha cumplido con las disposiciones contenidas en esta Ley, con respecto a las partidas justificadas y comprobadas;

(B) el contribuyente ha mantenido y conservado sus records, documentos y evidencia requeridos por Ley, y ha cooperado con los requerimientos del Secretario con relación a testigos, información, documentos, reuniones, o entrevistas.

(3) Uso de estadísticas

El Secretario tendrá el peso de la prueba en cualquier proceso judicial, con respecto a cualquier partida de ingresos reconstruida por el Secretario solamente mediante el uso de información de estadísticas.

(4) El Secretario tendrá el peso de demostrar en cualquier proceso judicial, la deuda del contribuyente con respecto a cualquier penalidad, contribución adicional u otras sumas impuestas con arreglo de las disposiciones contenidas en esta Ley."

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME CONJUNTO**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestras Comisiones de lo Jurídico; y de Hacienda, previo estudio y análisis del P. del S. 1560, tienen el honor de recomendar su aprobación, con las enmiendas contenidas en el informe.

**En el Texto:**

Página 2, líneas 12 y 13 Tachar ", mediante evidencia fehaciente que"

## ALCANCE DE LA MEDIDA

La presente medida tiene objeto como adicionar un nuevo apartado "(o)" a la Secció 5002 del Subtítulo E de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Interna de Puerto Rico".

Esta medida pretende revertir a su estado normal el peso de la prueba, en los casos contributivos, que establece la Regla 10(A) de Evidencia. En todo caso al promovente, a la parte actora incumbe el peso de la prueba, sin embargo, en los casos contributivos el peso de la prueba se le ha impuesto al contribuyente.

Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, la corriente moderna es la de dar al pueblo más poder sobre sus asuntos frente al estado. En particular, en el área del derecho contributivo, se observa la tendencia a proteger al contribuyente, en el aspecto procesal, frente a posibles acciones del estado ante las cuales pueda verse en situación de indefensión.

La presente medida representa un balance justiciero entre las necesidades del estado de cobrar las contribuciones y la posibilidad del ciudadano de defenderse de las alegaciones de los representantes del estado.

La única enmienda que se realiza en el presente informe va dirigida a completar el marco de referencia e intención legislativa de reconocer al ciudadano unos derechos procesales adecuados para defenderse. La enmienda consiste en eliminar la necesidad del ciudadano-contribuyente de probar "mediante prueba fehaciente" que ha actuado de buena fe. La buena fe se presume siempre en nuestro sistema de derecho, y no debe establecerse una vara diferente para los casos en que el ciudadano se enfrenta al estado en un caso contributivo. Pero, aún presumiendo la buena fe, el ciudadano continúa con la obligaci[on de mantener y conservar los récords, documentos y evidencia que requiere la Ley y ha cooperado con el Departamento de Hacienda en la tramitación de su caso.

La Comisión ha contado con las ponencias recibidas de la Oficina de Servicios Legislativos, del Colegio de Contadores Públicos Autorizados y del Departamento de Asuntos del Consumidor. Al Departamento de Hacienda se le solicitó una ponencia, pero, a la fecha de aprobación de este informe no se había recibido. Ninguna de las ponencias recibidas presenta objeción a medida y tienden a concurrir con la apreciación de la Comisión de que la medida meramente remite a los casos contributivos a la regulación general de peso de la prueba, que establece la Regla 10(A) de Evidencia.

El Colegio de Contadores Públicos, en su ponencia, nos llama a la atención el apartado (b) de la Sección 3505 del Código de Rentas Internas, que establece una presunción de corrección a las determinaciones administrativas del Secretario. La medida ante nuestra consideración no está en conflicto con la disposición de la Sección 3505, *supra,* la norma general de derecho administrativo es que las determinaciones de las agencias gozan de la presunción de corrección, no obstante, en la medida ante nuestra consideración el Secretario vendrá obligado a probar afirmativamente su caso en las circunstancias que contempla la Sección 5002, por la preponderancia de la prueba, como cualquier otra parte promovente, y a la parte promovida: el ciudadano, le asiste también la presunción de que ha actuado de buena fe.

Por todo lo antes expuesto, vuestras Comisiones de lo Jurídico; y de Hacienda, recomiendan la aprobación del P. del S. 1560, con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Jorge Andrés Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico

Roger Iglesias
Presidente
Comisión de Hacienda "

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2409, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas.

"LEY

Para adicionar el apartado (d) a la Sección 4110 del Capítulo 5, del Subtítulo D de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de autorizar licencias de traficantes al detalle a favor de restaurantes, paradores u hoteles que operan a menos de cien (100) metros de una escuela, centros religiosos o instituciones públicas o privadas de rehabilitación.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

En 31 de octubre de 1994, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley Núm. 120, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994" para lograr los más altos niveles de crecimiento económico en la Isla. Con la aprobación de esta medida se puso en efecto el modelo de desarrollo económico que sirvió de guía para utilizar al mercado como instrumento principal de movilización y asignación de recursos y el logro de mayores niveles de capacidad competitiva.

De igual manera, esta legislación logró integrar en subcapítulos en un sólo documento toda la legislación contributiva que simplifica y facilita el manejo de las leyes y unificó todas aquellas áreas relacionadas con el Departamento de Hacienda. Uno de estos subcapítulos, adicionado en septiembre de 1998, que componen el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, es aquel relativo a las licencias que se les requiere para operar a toda corporación o sociedad que se dedique al negocio.

En la Sección 4110 de esta Ley se prohibió la otorgación de licencias a todo negocio que venda bebidas alcohólicas a una distancia menor de cien metros de una escuela, iglesia, centros religiosos e instalación pública o privada de rehabilitación de adictos a sustancias controladas o alcohol. Esta enmienda adicionada en 1998, fue realizada con el propósito de cumplir con la política pública hasta ahora establecida, eficazmente, por nuestra Administración, de lograr que nuestros niños, adolescentes y adultos estén protegidos de actos y actividades que puedan influenciarlos negativamente en su comportamiento y desarrollo físico y mental.

No obstante, la misma resulta altamente onerosa al desarrollo de comercios y del turismo que promueven el crecimiento económico de Puerto Rico. Hay un sinnúmero de restaurantes, paradores y hoteles que se dedican a la venta de alcohol al detal de forma incidental que se afectan por las disposiciones de esta Ley. El volumen de venta de alcohol en estos negocios es mínimo y no tiene efectos sustanciales en la política previamente desglozada.

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende necesario enmendar esta Sección 4110 para excluir de las disposiciones de ésta a los restaurantes, hoteles y paradores. De esta manera, se logra cumplir con los propósitos establecidos que dieron origen a la Reforma Contributiva sin crear un efecto sustancial en la política pública de nuestro Gobierno.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.- Se adiciona el apartado (d) a la Sección 4110 del Capítulo 5 del Subtítulo D de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue:

**"SUBTITULO D- IMPUESTO SOBRE BEBIDAS ALCOHOLICAS**

. . .

**CAPITULO 5- LICENCIAS**

. . .

Sección 4110.- Licencias de Traficantes al Detalle a Menos de Cien (100) Metros de Escuelas o Iglesias, *centros religiosos, o instalación pública o privada de rehabilitación de adictos a sustancias controladas o alcohol.*

(a) . . .

*(d) Las disposiciones de esta Sección no aplicarán a restaurantes, paradores u hoteles."*

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO:**

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del **P. del S. 2409**, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

El **P. del S. 2409**, propone adicionar el apartado (d) a la Sección 4110 del Capítulo 5, del Subtítulo D de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de autorizar licencias de traficantes al detalle a favor de restaurantes, paradores u hoteles que operan a menos de cien (100) metros de una escuela, centros religiosos o instituciones públicas o privadas de rehabilitación.

El 31 de octubre de 1994, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aprobó la Ley Núm. 120, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994" para lograr los más altos niveles de crecimiento económico en la Isla. Con la aprobación de esta medida se puso en efecto el modelo de desarrollo económico que sirvió de guía para utilizar al mercado como instrumento principal de movilización y asignación de recursos y el logro de mayores niveles de capacidad competitiva.

De igual manera, esta legislación logró integrar en subcapítulos en un sólo documento toda la legislación contributiva que simplifica y facilita el manejo de las leyes y unificó todas aquellas áreas relacionadas con el Departamento de Hacienda. Uno de estos subcapítulos, adicionado en septiembre de 1998, que componen el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, es aquel relativo a las licencias que se les requiere para operar a toda corporación o sociedad que se dedique al negocio.

En la Sección 4110 de esta Ley se prohibió la otorgación de licencias a todo negocio que venda bebidas alcohólicas a una distancia menor de cien metros de una escuela, iglesia, centros religiosos e instalación pública o privada de rehabilitación de adictos a sustancias controladas o alcohol. Esta enmienda adicionada en 1998, fue realizada con el propósito de cumplir con la política pública hasta ahora establecida, eficazmente, por nuestra Administración, de lograr que nuestros niños, adolescentes y adultos

estén protegidos de actos y actividades que puedan influenciarlos negativamente en su comportamiento y desarrollo físico y mental.

No obstante, la misma resulta altamente onerosa al desarrollo de comercios y del turismo que promueven el crecimiento económico de Puerto Rico. Hay un sinnúmero de restaurantes, paradores y hoteles que se dedican a la venta de alcohol al detal de forma incidental que se afectan por las disposiciones de esta Ley. El volumen de venta de alcohol en estos negocios es mínimo y no tiene efectos sustanciales en la política previamente desglozada.

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende necesario enmendar esta Sección 4110 para excluir de las disposiciones de ésta a los restaurantes, hoteles y paradores. De esta manera, se logra cumplir con los propósitos establecidos que dieron origen a la Reforma Contributiva sin crear un efecto sustancial en la política pública de nuestro Gobierno.

La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del **P. del S. 2409** sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2610, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de lo Jurídico; y de Educación y Cultura, con enmiendas.

**"LEY**

Para enmendar la Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, a los fines de adicionar un inciso D al Artículo 4 que disponga que toda querella Clase I contra un menor que se origine en un plantel escolar deberá agotar el remedio administrativo antes de radicar la querella en el Tribunal de Menores.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

Es por todos conocido que existe congestión de calendarios en los Tribunales del país por la gran cantidad de casos que a diario se presentan. Existen muchas querellas que se presentan directamente en el Tribunal contra menores por hechos ocurridos dentro de planteles escolares. Esta práctica tiene el efecto de sobre cargar los calendarios judiciales y duplicar esfuerzos que en nada abundan a los mejores intereses del menor.

El Departamento de Educación cuenta con reglamentos disciplinarios que gobierna lo relativo a los sucesos que ocurren dentro del plantel escolar. Es el interés de la Asamblea Legislativa que se siga el principio medular del Derecho Administrativo y se agote dicho trámite antes de que se presenten querellas ante el Tribunal de Menores.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, para añadir un inciso D que se lea como sigue:

"Artículo 4.- Jurisdicción del Tribunal.

(D) ...

(E) ...

(F) ...

(G) Toda querella Clase I cuyos hechos se originen en un plantel escolar del Departamento de Educación contra un menor en que no se haya agotado el remedio administrativo.

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME CONJUNTO**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de lo Jurídico; y de Educación y Cultura recomiendan la aprobación del P. del S. 2610, con las enmiendas contenida en este informe:

**En el Texto:**

Página 1, Líneas 1 y 2: Tachar todo su contenido y sustituir por:
"Artículo 1.- Se adiciona un inciso (d) al segundo párrafo del Artículo 4 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, para que se lea como sigue:"

Página 2, Líneas 1 a la 6: Tachar todo su contenido y sustituir por:
"El Tribunal no tendrá autoridad para conocer de:

(a) ...

(d) Toda querella que conlleve una falta Clase I, cuyos hechos se originen en un plantel escolar del Departamento de Educación contra un menor en que no se haya agotado el remedio administrativo."

**En la Exposicion de Motivos:**

Página 1, Párrafo 1, Línea 1: Tachar todo su contenido y sustituir por:
"Es de conocimiento general que los calendarios en los tribunales de Puerto Rico están congestionados por"

Página 1, Párrafo 1, Línea 4: Tachar "sobre cargar" y sustituir por "sobrecargar"; después de "duplicar" insertar "los"

Página 1, Párrafo 1, Línea 5: Tachar "abundan" y sustituir por "ayudan"

Página 1, Párrafo 2, Línea 1: Tachar "gobierna" y sustituir por "gobiernan"

Página 1, Párrafo 2, Linea 2: Después de "escolar." insertar "El Reglamento General de Estudiantes de 1996 establece los derechos y obligaciones de los estudiantes, las medidas disciplinarias y la radicación de querellas."

Página 1, Párrafo 2, Línea 3: Tachar "agote dicho trámite" y sustituir por "agoten dichos trámites"

**En el Titulo:**

Página 1, Línea 1 a la 4: Tachar todo su contenido y sustituir por:

"Para adicionar un inciso (d) al segundo párrafo del Artículo 4 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico", a fin de disponer que toda querella que conlleve una falta Clase I contra un menor, que se origine en un plantel escolar, deberá agotar el remedio administrativo antes de radicar la querella en el Tribunal de Menores."

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

El P. del S. 2610 tiene como propósito adicionar un inciso (d) al segundo párrafo del Artículo 4 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico", a fin de disponer que toda querella que conlleve una falta Clase I contra un menor, que se origine en un plantel escolar, deberá agotar el remedio administrativo antes de radicar la querella en el Tribunal de Menores.

La Exposición de Motivos expresa que es de conocimiento general que los calendarios en los Tribunales de Puerto Rico están congestionados por la gran cantidad de casos que se presentan a diario. Existen muchas querellas contra menores por hechos ocurridos dentro de los planteles escolares que se presentan directamente en el Tribunal de Menores. Esta práctica tiene el efecto de sobrecargar los calendarios judiciales y duplicar los esfuerzos que en nada ayudan a los mejores intereses del menor.

El Departamento de Educación cuenta con reglamentos disciplinarios que gobiernan lo relativo a los sucesos que ocurren dentro del plantel. El Reglamento Núm. 5364 titulado "Reglamento General de Estudiantes de 1996" establece los derechos y obligaciones de los estudiantes, las medidas disciplinarias a imponerse y el procedimiento para la radicación de querellas cuando son faltas Clase I. Es el interés de la Asamblea Legislativa que se siga el principio medular del Derecho Administrativo y se agoten trámites antes de que se presenten querellas ante el Tribunal de Menores.

El proceso educativo debe realizarse en un ambiente de tranquilidad y seguridad, de respeto mutuo entre los estudiantes y sus maestros y superiores y que exista un orden donde se obedezcan las normas y reglamentos establecidos por el Departamento de Educación. Cualquier controversia o diferencia que surja se acudirá inmediatamente a los procedimientos administrativos establecidos para dirimir estas situaciones. Según el Reglamento Núm. 5364, antes mencionado, el proceso disciplinario debe ser gradual, preventivo, rehabilitativo o reeducativo y siembre justo y razonable. La Sección 8.8 del Reglamento dispone que se debe designar un Comité Coordinador de Procesos Disciplinarios, cuya misión será prevenir y anticipar problemas y tratar de buscar soluciones y ayuda. También se establecerá un Comité de Disciplina que ayudurá al Director de la escuela a imponer, redactar y actualizar el Reglamento Escolar.

El Director de la escuela tiene la facultad para imponer medidas correctivas o disciplinarias, tales como: amonestaciones verbales o escritas, sujeción a estado probatorio sin suspensión, suspensión por tiempo indefinido o imponer todas aquellas medidas razonables y necesarias para mantener el buen orden y disciplina en el plantel escolar. Las medidas disciplinarias serán proporcionales a la gravedad de la falta cometida y se debe tomar acción inmediata, luego de ocurrido el acto o daño.

El Artículo 10 del Reglamento Núm. 5364 establece las normas y procedimientos para la radicación de querellas y la imposición de medidas correctivas o disciplinarias. Las quejas se dividen en formales e informales. Las quejas informales se determinarán dependiendo de la gravedad de la falta y que éstas no conlleven más de cinco días de suspensión o expulsión. El estudiante tiene derecho a que se le informe y notifique previamente por escrito de la querella y la vista informal la celebrará el Director de la escuela o su representante autorizado.

Las quejas formales se radicarán, según lo disponga el "Reglamento de Procedimientos Adjudicativos Formales del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" de 5 de diciembre de 1997. Dicho Reglamento aplicará a todos los procedimientos adjudicativos formales que se ventilen en el Departamento de Educación, incluyendo las faltas Clase II y Clase III. La falta Clase II es conducta, que incurrida por un adulto, constituiría delito grave, excepto las incluidas en falta Clase III. Las faltas Clase III es conducta, que incurrida por un adulto, constituiría delito grave, específicamente cualquiera de las siguientes: asesinato en la modalidad que está bajo la autoridad del Tribunal, homicidio, agresión agravada en su modalidad grave, violación, robo, distribución de sustancias controladas, incendio agravado, restricción a la libertad agravada, secuestro, mutilación, incesto, sodomía, robo de menores, estragos, escalamiento y apropiación ilegal en la modalidad de hurto de vehículos.

Las medidas disciplinarias escolares son de carácter administrativo y la norma de su determinación será la preponderancia de prueba. No se utilizarán las normas de evidencia ni procesales judiciales, pero se aplicarán sus conceptos en forma general, justa y razonable con el fin de hacer justicia a todas las partes. La Sección 11.3 del Artículo 11 del Reglamento Núm. 5364 establece una lista de acciones disciplinarias que el Director Escolar o su representante autorizado puede tomar al determinar qué tipo de medida correctiva aplicar. El Director toma en cuenta el tipo de falta cometida, la infracción y si hay agravantes o atenuantes. En el caso de que sea una falta Clase I se tomarán las medidas disciplinarias necesarias sin tener que radicar una querella en el Tribunal de Menores. En el caso de las faltas Clase II y III, el procedimiento a seguir es una vista formal, según lo establece el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos Formales de 5 de diciembre de 1997. En ambos casos hay que agotar los remedios administrativos provistos antes de acudir a los tribunales.

A tenor con lo anterior, aunque el Reglamento dispone que hay que agotar los remedios administrativos en el caso de faltas Clase I, II y III, la Ley de Menores de Puerto Rico nada dispone al respecto. La Comisión considera que el fin perseguido por la presente medida es uno loable que cumple con el propósito de consignar expresamente en la Ley de Menores que, a los fines de proteger los mejores intereses del menor, se agoten los remedios administrativos provistos por los reglamentos establecidos por el Departamento de Educación antes de llegar a los tribunales.

Para la evaluación de esta medida contamos con las ponencias de la Oficina de Servicios Legislativos y el Colegio de Abogados.

La Oficina de Servicios Legislativo endosan la medida, sugiriendo varias enmiendas las cuales se incorporaron en el informe. El Colegio de Abogados avala su aprobación.

Por los fundamentos antes expuestos, vuestras Comisiones de lo Jurídico; y de Educación y Cultura recomiendan la aprobación del P. del S. 2610, con las enmiendas contenidas en este informe.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Jorge Andrés Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico

(Fdo.)
Carmen L. Berríos Rivera
Presidenta
Comisión de Educación y Cultura"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3297, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar el párrafo (3) y añadir un párrafo (4) al apartado (a), enmendar el párrafo (4) del apartado (b), el párrafo (1) y el inciso (C) y añadir un inciso (D) al párrafo (2) del apartado (c), y añadir un apartado (d) a la Sección 1011; enmendar el inciso (A) del párrafo (31) del apartado (b) de la Sección 1022; enmendar los incisos (A) y (D) y derogar el párrafo final del párrafo (1), enmendar la cláusula (i) del inciso (A), derogar la cláusula (iv) del inciso (B), derogar el segundo párrafo del inciso (E ), enmendar la cláusula (i) de los incisos (F), (G), y (H) y la cláusula (ii) del inciso (J) y añadir un párrafo final al párrafo (2) del apartado (aa), enmendar el inciso (B) del párrafo (3) y el segundo párrafo del párrafo (5), y enmendar el título y añadir un inciso (C) al párrafo (6) del apartado (bb) de la Sección 1023; enmendar los apartados (a) y (c) de la Sección 1025; enmendar el párrafo (1) y derogar el párrafo (4) del apartado (b) de la Sección 1051; y enmendar el apartado (c) de la Sección 1059 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de eliminar del mismo la llamada "penalidad por estar casado" y de reducir las tasas contributivas de los individuos a partir de los años contributivos que comiencen después del 31 de diciembre de 2001.

## EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994 conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994" tuvo el propósito de reducir la carga contributiva para los individuos y para las corporaciones, ampliando a la vez la base contributiva para lograr una mayor equidad, simplificar la estructura contributiva, fomentar un clima de confianza en el sistema impositivo, introducir medidas que alienten el desarrollo de capital local y desalentar las actividades ilegales y la evasión contributiva, mediante mejor fiscalización y la adopción de medidas específicas, para hacer que se respeten las leyes contributivas. El Código también integra en un solo documento toda la legislación contributiva con el propósito de simplificar y facilitar el manejo de leyes, y de uniformar la disposiciones administrativas.

El objetivo y espíritu de este Código es fundamentalmente el de devolver al contribuyente el poder sobre sus recursos, para usarlos de la manera más productiva posible. Esto no sólo resulta en mayor actividad económica sino además en una mejor disposición del contribuyente para cumplir con su obligación. Las enmiendas hechas al Código desde su aprobación, así como las contenidas en esta Ley, han sido fieles a este espíritu.

Esta medida tiene el propósito de eliminar la injusticia creada por la llamada "penalidad por estar casado" que resulta debido a que la contribución de una pareja casada cuando ambos reciben ingresos es mucho mayor que la suma de la contribución que cada cónyuge vendría obligado a pagar si hubiera rendido individualmente. En la mayoría de los casos, se incurre en una penalidad adicional cuando el matrimonio decide rendir planillas separadas ya que tiene que utilizar una tabla contributiva distinta a la que aplica a los demás contribuyentes.

Para lograr este propósito se establece un cómputo alterno de la contribución que beneficiará a aquellos matrimonios que ambos trabajan mediante el cual, a su opción, pueden determinar la contribución en forma separada. Al escoger esta opción la contribución no debe ser mayor que aquella que resultaría de haber determinado la misma en forma conjunta. Este cómputo se hará en un anejo a la planilla conjunta que diseñará el Secretario para dicho propósito. También se elimina la opción de rendir planillas separadas ya que éste será básicamente el efecto que tendrá el determinar la contribución por separado en el anejo con la ventaja de que se utilizará la misma tabla que aplica a todos los contribuyentes sean solteros, casados o jefes de familia.

Además, consistente con la política fiscal ya establecida y para continuar con el compromiso programático de esta Administración de seguir reduciendo la carga contributiva a la clase trabajadora para incrementar los recursos económicos de nuestras familias, se aprobó la Ley Núm. 168 de 28 de julio de 1999. La Ley Núm. 168, antes citada, reduce en dos fases las tasas contributivas a los individuos. La primera fase de la reducción es efectiva para los años contributivos comenzados a partir del 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre de 2000, y la segunda fase estará vigente para los años contributivos comenzados a partir del 1ro. de enero de 2001.

Con la aprobación de esta medida se pretende continuar con el compromiso programático de nuestro gobierno de conceder rebajas contributivas a los individuos para seguir beneficiando a la clase trabajadora. Por tal motivo, se reducen las tasas contributivas en las primeras 4 escalas de ingreso neto sujeto a contribución para los años contributivos comenzados después del 31 de diciembre de 2001. Esta reducción en las tasas contributivas representará alrededor de 146 millones en beneficios contributivos para los individuos.

Mediante esta medida, todos los contribuyentes recibirán beneficios de los cuales la mayoría recaerá sobre la clase media trabajadora. Entendemos que esta legislación hace justicia a este sector, que es vital para seguir impulsando el desarrollo económico y social de Puerto Rico.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.-Se enmienda el párrafo (3) y se añade un párrafo (4) al apartado (a), se enmienda el párrafo (4) del apartado (b), el párrafo (1) y el inciso (C) y se añade un inciso (D) al párrafo (2) del apartado (c), y se añade un apartado (d) a la Sección 1011 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Sección 1011.-Contribución a Individuos

Se impondrá, cobrará y pagará sobre el ingreso neto de todo individuo en exceso de las exenciones provistas en la sección 1025 y sobre el ingreso neto de una sucesión o de un fideicomiso en exceso del crédito provisto en la sección 1163, una contribución determinada de acuerdo con las siguientes tablas:

(a) Contribución Regular

(1) ...

(3) Contribución para los años contributivos que comiencen después del 31 de diciembre del 2000 y antes del 1ro. de enero de 2002:

Persona casada que viva con su cónyuge y persona casada que no viva con su cónyuge, persona soltera, jefe de familia, sucesión o fideicomiso:

...

(4) Contribución para los años contributivos que comiencen después del 31 de diciembre de 2001:

Persona casada que viva con su cónyuge, persona casada que no viva con su cónyuge, persona soltera, jefe de familia, sucesión o fideicomiso:

| Si el ingreso neto sujeto a Contribución fuere: | La contribución será: |
|---|---|
| No mayor de $2,000 | 6 por ciento |
| En exceso de $2,000 pero no en exceso de $17,000 | $120 más el 9 por ciento del excedente sobre $2,000 |
| En exceso de $17,000 pero no en exceso de $30,000 | $1,470 más el 14 por ciento del excedente sobre $17,000 |
| En exceso de $30,000 pero no | $3,290 más el 27 por ciento del |

| | |
|---|---|
| en exceso de $50,000 | excedente sobre $30,000 |
| En exceso de $5,000 | $8,690 más el 33 por ciento del excedente sobre $50,000 |

(b) Contribución Básica Alterna a Individuos.-

(1) ...

(4) En el caso de una persona casada que viva con su cónyuge y se acoja a la opción de determinar la contribución según se dispone en el apartado (d), los niveles de ingreso bruto ajustado dispuestos en el párrafo (1) para fines de la contribución básica alterna se reducirán al cincuenta (50) por ciento.

(c) Ajuste gradual de los tipos contributivos menores de la tasa de treinta y tres (33) por ciento y de la exención personal y exención por dependientes.

(1) En general.- La contribución impuesta por los párrafos (1), (2), (3) y (4) del apartado (a) (determinada sin considerar este apartado) será aumentada por cinco (5) por ciento del exceso del ingreso neto sujeto a contribución sobre setenta y cinco mil (75,000) dólares, excepto que, en el caso de una persona casada que viva con su cónyuge y se acoja a la opción de determinar la contribución según se dispone en el apartado (d), la contribución será aumentada por cinco (5) por ciento del ingreso neto sujeto a contribución sobre treinta y siete mil quinientos (37,500) dólares.

(2) Limitación.- El aumento determinado bajo el párrafo (1) de este apartado con respecto a cualquier contribuyente:

(A) ...

(C) para los años contributivos especificados en el párrafo (3) del apartado (a), no excederá de siete mil trescientos diez (7,310) dólares, más el treinta y tres (33) por ciento de la exención personal y de la exención por dependientes admisibles al contribuyente bajo la sección 1025. En el caso de una persona casada que viva con su cónyuge y se acoja a la opción de determinar la contribución según se dispone en el apartado (d), el límite especificado en este párrafo será de tres mil seiscientos cincuenta y cinco (3,655) dólares, más el treinta y tres (33) por ciento del monto de la exención personal y de la exención por dependientes admisibles al contribuyente bajo la sección 1025.

(D) para los años contributivos especificados en el párrafo (4) del apartado (a), no excederá de siete mil ochocientos diez (7,810) dólares, más el treinta y tres (33) por ciento de la exención personal y de la exención por dependientes admisibles al contribuyente bajo la Sección 1025. En el caso de una persona casada que viva con su cónyuge y se acoja a la opción de determinar la contribución según se dispone en el apartado (d), el límite especificado en este párrafo será de tres mil novecientos cinco (3,905) dólares, más el treinta y tres (33) por ciento del monto de la exención personal y de la exención por dependientes admisibles al contribuyente bajo la sección 1025.

(d) Cómputo Opcional de la Contribución en el Caso de Personas Casadas que Viven Juntas,y que Ambos Trabajen.- En el caso de cónyuges que vivan juntos y que ambos trabajen, la contribución bajo los apartados (a), (b) y (c) de esta Sección será, a opción de éstos, la suma de las contribuciones determinadas individualmente, en el formulario que para estos propósitos disponga el Secretario, de la siguiente forma:

(1) la exención personal será la dispuesta en el apartado (a) de la sección 1025;

(2) cada cónyuge tendrá derecho a reclamar el cincuenta (50) por ciento del monto total de la exención por dependientes que concede la sección 1025;

(3) el ingreso bruto de cada cónyuge se determinará como sigue:

(A) el ingreso por concepto de servicios prestados será aquél generado por cada cónyuge en su carácter individual. Para fines de este párrafo se considerará como ingreso por servicios prestados los sueldos, jornales, salarios, honorarios profesionales, comisiones, el ingreso de anualidades y pensiones, la

ganancia atribuible a industria o negocio y la participación distribuible en el ingreso de las sociedades especiales y de las corporaciones de individuos, entre otros; y

(B) el ingreso no cubierto por el inciso (A) se atribuirá a cada cónyuge a base de un cincuenta (50) por ciento del total;

(4) la deducción fija será la dispuesta en el inciso (D) del párrafo (1) del apartado (aa) de la sección 1023;

(5) las deducciones detalladas que concede el párrafo (2) del apartado (aa) de la sección 1023 se atribuirán a cada cónyuge a base de un cincuenta (50) por ciento del total; y

(6) las deducciones adicionales se concederán al cónyuge a quien correspondan individualmente, hasta los límites y sujeto a lo dispuesto en el apartado (bb) de la sección 1023."

Artículo 2.-Se enmienda el inciso (A) del párrafo (31) del apartado (b) de la Sección 1022 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Sección 1022.-Ingreso Bruto

(a) ...

(b) Exclusiones del Ingreso Bruto.-Las siguientes partidas no estarán incluidas en el ingreso bruto y estarán exentas de tributación bajo este Subtítulo:

(1) ...

(31) Ganancia en la venta o permuta de residencia principal por ciertos individuos.-

(A) Regla general.-En el caso de un individuo, la ganancia realizada en la venta o permuta de su residencia principal, hasta la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares por contribuyente, si:

(i) ...

(B) ...

(32) ..."

Artículo 3.-Se enmiendan los incisos (A) y (D) y se deroga el párrafo final del párrafo (1), se enmienda la cláusula (i) del inciso (A), se deroga la cláusula (iv) del inciso (B) y el segundo párrafo del inciso (E), se enmienda la cláusula (i) de los incisos (F), (G), y (H) y la cláusula (ii) del inciso (J) y se añade un párrafo final al párrafo (2) del apartado (aa), se enmienda el inciso (B) del párrafo (3), se enmienda el segundo párrafo del párrafo (5), y se enmienda el título y se añade un inciso (C) al párrafo (6) del apartado (bb) de la Sección 1023 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Sección 1023.-Deducciones al Ingreso Bruto

Al computarse el ingreso neto se admitirán como deducciones:

(a) ...

(aa) Opción de Deducción Fija o Deducciones Detalladas.-

(1) En general.-En el caso de un individuo se admitirá como una deducción, en adición a cualesquiera otras deducciones provistas por este Subtítulo, el monto de las deducciones detalladas en el párrafo (2), o una deducción fija opcional, lo que sea mayor. El monto de la deducción fija opcional será determinado como sigue:

(A) Tres mil (3,000) dólares en el caso de una persona casada que viva con su cónyuge, excepto en el caso dispuesto en el inciso (D); o

(B) ...

(D) Mil quinientos (1,500) dólares en el caso de un individuo casado que viva con su cónyuge *y* que se acoja a la opción dispuesta en el apartado (d) de la sección 1011 para determinar la contribución.

(2) Deducciones detalladas.-Para fines de este apartado, el contribuyente podrá reclamar como deducciones detalladas, en lugar de la deducción fija opcional, las siguientes partidas:

(A) Deducción por gastos incurridos en el cuido de hijos.- ...

(i) Límite máximo deducible.-Esta deducción no excederá de ochocientos (800) dólares por un (1) dependiente y de mil seiscientos (1,600) dólares por dos (2) ó más dependientes.

(ii) ...

(B) ...

Deducción por intereses pagados o acumulados sobre propiedad residencial

(i) ...

(C) . . .

(E) Pérdida de residencia por fuego, huracán y otras causas fortuitas.-

(F) Deducción por alquiler sobre la propiedad arrendada.-

(i) Concesión.-En el caso de un individuo que resida en una propiedad arrendada, se admitirá como deducción una cantidad equivalente al diez (10) por ciento del monto del alquiler pagado durante el año contributivo sobre la propiedad que constituya su residencia; excepto que la deducción por este concepto no excederá de quinientos (500) dólares anuales.

(ii) ...

(G) **PÉRDIDAS DE BIENES MUEBLES POR CIERTAS CAUSAS FORTUITAS.-**

(i) Concesión.-En el caso de un individuo, se admitirá como una deducción las pérdidas, con respecto a automóviles, mobiliario, enseres y otros bienes muebles del hogar sin incluir el valor de las prendas o dinero en efectivo, no compensadas por seguro o en otra forma, sufridas durante el año contributivo por terremotos, huracanes, tormentas, depresiones tropicales y las inundaciones ocasionales por tales causas fortuitas que ocurran en un área designada subsiguientemente por el Gobernador el Estado Libre Asociado de Puerto Rico como áreas cuyos residentes sean elegibles para recibir ayuda bajo los programas de asistencia en casos de desastre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esta deducción estará limitada a cinco mil (5,000) dólares. El monto de dicha pérdida no utilizada en el año en que se sufre la misma será una pérdida por causas fortuitas a arrastrarse a cualesquiera de los dos (2) años contributivos siguientes, sujeto a los límites anuales aquí provistos.

(ii) ...

**(H) Deducción por gastos incurridos en la compra e instalación de equipo solar para usarse en los hogares.**

(i) Concesión.-En el caso de un individuo, se admitirá como deducción el treinta (30) por ciento de los gastos incurridos durante cualquier año contributivo en la adquisición, fabricación e instalación en la propiedad que constituya la residencia principal del contribuyente, sea propia o arrendada, de cualquier equipo, solar, hasta el límite de quinientos (500) dólares. Cuando haya sido el arrendatario el que instale el equipo solar, el dueño del inmueble no tendrá

derecho a deducción alguna por el mismo equipo solar, aun cuando éste quede a beneficio del dueño al terminar el arrendamiento.

(ii) ...

(I) ...

(J) Deducción por gastos incurridos en la compra de cualquier equipo ortopédico para uso de impedidos.-

(i) ...

(ii) Concesión.-En caso de un padre, tutor o encargado de un impedido o éste por derecho propio, se admitirá como deducción hasta un máximo de mil (1,000) dólares por los gastos incurridos y no compensados para la adquisición de cualquier equipo ortopédico para uso del impedido.

(iii) ...

(K) ...

(R) ...

En el caso de cónyuges que se acojan a la opción de determinar la contribución según se dispone en el apartado (d) de la Sección 1011 la cantidad admisible como deducción a cada uno bajo este párrafo será del cincuenta (50) por ciento del monto de las deducciones detalladas.

(bb) Deducciones Adicionales.- ...

(1) ...

(3) Gastos ordinarios y necesarios relacionados con el ejercicio de una profesión u oficio como empleado.

(A) ...

(B) La deducción admisible permitida por este párrafo estará limitada a mil quinientos (1,500) dólares, o el tres (3) por ciento del ingreso bruto ajustado por concepto de salarios, lo que sea menor.

(4) ...

(5) Deducción por gastos de intereses en préstamos de automóviles para transportación.- ...

En el caso de una persona casada que viva con su cónyuge al finalizar el año contributivo y que se acoja a la opción de determinar la contribución según se establece en el apartado (d) de la sección 1011, el monto de la deducción bajo este párrafo no excederá de seiscientos (600) dólares.

(6) Deducción especial en el caso de cónyuges cuando ambos reciban ingresos ganados.

(A) ...

(C) La deducción dispuesta en este párrafo no será admisible en el caso de que los cónyuges se acojan a la opción de determinar la contribución según se establece en el apartado (d) de la sección 1011.

(7) ..."

Artículo 4.-Se enmiendan los apartados (a) y (c) de la Sección 1025 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Sección 1025.-Concesión de Deducciones por Exenciones Personales y por Dependientes

En el caso de un individuo, para fines de determinar el ingreso neto se admitirán como deducciones las exenciones concedidas por esta sección.

(a) Exención Personal.-En el caso de una persona soltera, o una persona casada que no viva con su esposo o esposa, una exención personal de mil trescientos (1,300) dólares; o en el caso de un jefe de familia; o una persona casada que viva con su esposo o esposa, una exención personal de tres mil (3,000)

dólares. Un esposo y esposa que vivan juntos recibirán una sola exención personal de tres mil (3,000) dólares, excepto si se acogen a la opción de determinar la contribución según se establece en el apartado (d) de la sección 1011, en cuyo caso cada cónyuge tendrá una exención personal de mil quinientos (1,500) dólares.

(b) ...

(c) Determinación del Estado Personal.- Para los fines de esta sección-

(1) ...

(2) Un individuo separado de su cónyuge no será considerado como casado. Se considerará que un individuo está separado de su cónyuge si a la fecha del cierre del año contributivo estaba separado de su cónyuge, y durante un período ininterrumpido de doce (12) meses que incluya la fecha del cierre del año contributivo, no vivió bajo el mismo techo que su cónyuge por un período ininterrumpido de ciento ochenta y tres (183) días.

(d) ..."

Artículo *5*.- Se enmienda el párrafo (1) y se deroga el párrafo (4) del apartado (b) de la Sección 1051 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Sección 1051.-Planillas de Individuos

(a) ...

(b) Esposo y Esposa.-

(1) Si esposo y esposa viven juntos y para el año contributivo tienen un ingreso bruto agregado de más de seis mil (6,000) dólares en el caso dispuesto en el párrafo (2) del apartado (a), o de más tres mil (3,000) dólares en el caso dispuesto en el párrafo (4) de dicho apartado, el ingreso total de ambos será incluido en una planilla conjunta y la contribución impuesta por la sección 1011 será computada sobre el ingreso agregado. El ingreso bruto recibido por cualquiera de los cónyuges no será dividido entre ellos. No obstante, en el caso de esposo y esposa que vivan juntos y ambos trabajen que se acojan a la opción de determinar la contribución bajo las disposiciones del apartado (d) de la Sección 1011, el ingreso bruto se dividirá entre ambos cónyuges según se dispone en el párrafo (3) del apartado (d) de dicha sección.

(2) ...

(4)...

(c) ..."

Artículo 6.-Se enmienda el apartado (c) de la Sección 1059 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Sección 1059.-Declaración de Contribución Estimada por Individuos

(a) ...

(c) Esposo y Esposa.-En el caso de esposo y esposa que vivan juntos éstos deberán rendir una declaración conjunta y la contribucion estimada será determinada sobre el ingreso agregado.

(d) ..."

Artículo *7*.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación pero sus disposiciones aplicarán a los años contributivos comenzados después del 31 de diciembre de 2000, excepto las del párrafo (4) del apartado (a) y las del inciso (D) del apartado (c) de la Sección 1011 que aplicarán a los años contributivos comenzados después del 31 de diciembre de 2001."

"INFORME

**AL SENADO DE PUERTO RICO:**

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del **P. de la C. 3297**, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas:

**En la Exposición de Motivos:**

| | |
|---|---|
| Página 2, cuarto párrafo | Tachar todo su contenido y sustituir por:<br>"Para lograr este propósito se establece un cómputo alterno de la contribución que beneficiará a aquellos matrimonios que ambos trabajan mediante el cual, a su opción, pueden determinar la contribución en forma separada. Al escoger esta opción la contribución no debe ser mayor que aquella que resultaría de haber determinado la misma en forma conjunta. Este cómputo se hará en un anejo a la planilla conjunta que diseñará el Secretario para dicho propósito. También se elimina la opción de rendir planillas separadas ya que éste será básicamente el efecto que tendrá el determinar la contribución por separado en el anejo con la ventaja de que se utilizará la misma tabla que aplica a todos los contribuyentes sean solteros, casados o jefes de familia." |

**En el Texto:**

| | |
|---|---|
| Página 3, línea 3 | Después de "al" tachar "del" |
| Página 4, línea 1 | Tachar "(A)" y en la misma línea, tachar "y rinda planilla" |
| Página 3, línea 2 | Tachar "conjunta" |
| Página 4, línea 7 | Tachar "(A)" y en la misma línea, tachar "cónyunge" y sustituir por "cónyuge" |
| Página 4, línea 13 | Después de "ciento" insertar "del" |
| Página 5, líneas 2 y 3 | Tachar "radique planilla separada o que" |
| Página 5, línea 10 | Después de "apartado" insertar ")" |
| Página 5, línea 13 | Tachar "rinda planilla separada o que" |
| Página 6, línea 3 | Tachar "rinde planilla separada o que" |
| Página 6, línea 15 | Tachar "rinde planilla separada o que" |
| Página 7, línea 2 | Tachar ", Rindan Planilla Conjunta y Ambos Trabajan" y sustituir por "y que Ambos Trabajen" |
| Página 7, línea 3 | Tachar "y que rindan planilla conjunta," |
| Página 8, entre las líneas 6 y 7 | Insertar:<br>"Artículo 2.- Se enmienda el inciso (A) del párrafo (31) del apartado (b) de la Sección 1022 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue:<br>"Sección 1022.- Ingreso Bruto<br>(a) ... |

(b) Exclusiones del Ingreso Bruto.- Las siguientes partidas no estarán incluidas en el ingreso bruto y estarán exentas de tributación bajo este Subtítulo:

(1) ...

(31) Ganancia en la venta o permuta de residencia principal por ciertos individuos.-

(A) Regla general.- En el caso de un individuo, la ganancia realizada en la venta o permuta de su residencia principal, hasta la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares por contribuyente, **[excepto en el caso de un individuo casado que viva con su cónyuge y que opte por radicar planilla separada en cuyo caso la exclusión no excederá de veinticinco mil (25,000) dólares]** si:

(i) ...

(B) ...

(32) ..."

Página 8, línea 7 Tachar "2" y sustituir por "3"

Página 8, línea 8 Después de "(A)," insertar "se deroga la cláusula (iv) del inciso (B) y el segundo párrafo del inciso (E), se enmienda la cláusula (i) de los incisos (F), (G) y (H) y la cláusula (ii) del inciso (J)"

Página 8, línea 9 Después de "(3)" tachar "y" y sustituir por "se enmienda"

Página 9, línea 2 Tachar "y rindan una planilla conjunta"

Página 9, línea 6 Tachar "rindan planilla separada o" y sustituir por "y"

Página 9, líneas 8 a la 11 Tachar todo su contenido

Página 9, líneas 18 a la 22 Tachar desde "En el caso" hasta "más."

Página 10, líneas 1 a la 5 Tachar desde "dependientes" hasta "dependientes"

Página 10, línea 7 Tachar ". . ." y sustituir por:

"Deducción por intereses pagados o acumulados sobre propiedad residencial.

(i) ...

**[(iv) Individuos casados que radiquen planillas separadas.- En el caso de cónyuges que vivan juntos al finalizar su año contributivo y que radiquen planilla separada para el año contributivo-**

**(I) Dichos cónyuges se tratarán como un contribuyente para fines de la cláusula (iii); y**

**(II) Cada individuo tendrá derecho a tomar en consideración una sola residencia, a no ser que ambos consientan por escrito a que uno de ellos tome en consideración la residencia principal y la otra residencia.]**

(C) ...

(E) Pérdida de residencia por fuego, huracán y otras causas fortuitas.-..

**[En el caso de cónyuges que vivan juntos al finalizar su año contributivo y que radiquen planilla separada, cada uno tendrá el derecho a reclamar solamente el cincuenta (50) por ciento de esta deducción.]**

(F) Deducción por alquiler sobre la propiedad arrendada.-

(i) Concesión.- En el caso de un individuo que resida en una propiedad arrendada, se admitirá como deducción una cantidad equivalente al diez (10) por ciento del monto del alquiler pagado durante el año contributivo sobre la propiedad que constituya su residencia; excepto que la deducción por este concepto no excederá de quinientos (500) dólares anuales. **[En el caso de una persona casada que venga obligada a radicar una planilla conjunta con su cónyuge y que opte por radicar una planilla separada, el monto de la deducción por este concepto no excederá de doscientos cincuenta (250) dólares.]**

(ii) ...

(G) Pérdidas de bienes muebles por ciertas causas fortuitas.-

(i) Concesión.- En el caso de un individuo, se admitirá como una deducción las pérdidas, con respecto a automóviles, mobiliario, enseres y otros bienes muebles del hogar, sin incluir el valor de las prendas o dinero en efectivo, no compensadas por seguro o en otra forma, sufridas durante el año contributivo por terremotos, huracanes, tormentas, depresiones tropicales y las inundaciones ocasionadas por tales causas fortuitas que ocurran en un área designada subsiguientemente por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como áreas cuyos residentes sean elegibles para recibir ayuda bajo los programas de asistencia en casos de desastre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esta deducción estará limitada a cinco mil (5,000) dólares **[; excepto que en el caso de un individuo casado que viva con su cónyuge al finalizar su año contributivo y que opte por radicar planilla separada, la deducción no excederá de dos mil quinientos (2,500) dólares].** El monto de dicha pérdida no utilizada en el año en que se sufre la misma será una pérdida por causas fortuitas a arrastrarse a cualesquiera de los dos (2) años contributivos siguientes, sujeto a los límites anuales aquí provistos.

(ii) ...

(H) Deducción por gastos incurridos en la compra e instalación de equipo solar para usarse en los hogares.

(i) Concesión.- En el caso de un individuo, se admitirá como deducción el treinta (30) por ciento de los gastos

incurridos durante cualquier año contributivo en la adquisición, fabricación e instalación en la propiedad que constituya la residencia principal del contribuyente, sea propia o arrendada, de cualquier equipo solar, hasta el límite de quinientos (500) dólares **[, excepto que en el caso de un individuo casado que viva con su cónyuge al finalizar su año contributivo y que opte por radicar planilla separada, el monto de la deducción no excederá de doscientos cincuenta (250) dólares]**. Cuando haya sido el arrendatario el que instale el equipo solar, el dueño del inmueble no tendrá derecho a deducción alguna por el mismo equipo solar, aun cuando éste quede a beneficio del dueño al terminar el arrendamiento.

(ii) ...

(I) ...

(J) Deducción por gastos incurridos en la compra de cualquier equipo ortopédico para uso de impedidos.-

(i) ...

(ii) Concesión.- En caso de un padre, tutor o encargado de un impedido o éste por derecho propio, se admitirá como deducción hasta un máximo de mil (1,000) dólares por los gastos incurridos y no compensados para la adquisición de cualquier equipo ortopédico para uso del impedido. **[En el caso de un individuo casado que viva con su cónyuge al finalizar su año contributivo y que opte por radicar planilla separada, el monto de la deducción no excederá de quinientos (500) dólares.]**

(iii) ...

(K) ..."

Página 10, línea 19 — Tachar "**(i)**"

Página 10, línea 20 — Tachar ";" y sustituir por "."

Página 11, línea 4 — Tachar "radique planilla separada, o"

Página 11, líneas 6 y 7 — Tachar ", a menos que ambos consientan a que uno de ellos tome en su totalidad esta deducción"

Página 11, línea 15 — Tachar "3" y sustituir por "4"

Página 12, línea 3 — Tachar "radican planillas separadas o"

Página 12, línea 17 — Tachar "4" y sustituir por "5" y en la misma línea, tachar "el inciso (B) del" y sustituir por "se deroga el"

Página 13, línea 12 — Tachar "..." y sustituir por:

**["Planillas separadas de cónyuge.- No obstante lo dispuesto en el apartado (a) y en el párrafo (1) de este apartado, los cónyuges que vivan juntos al cierre del año contributivo pueden optar por radicar planillas separadas para tal año contributivo sujeto a las siguientes condiciones:**

**(A) Deberá rendirse la declaración que se requiere bajo el apartado (a) cuando el ingreso bruto del cónyuge sea de mil quinientos (1,500) dólares o más**
**(B) El ingreso bruto de cada cónyuge se determinará de conformidad con el párrafo (3) como si los cónyuges vinieran obligados a radicar planillas separadas, pero la contribución sobre dicho ingreso será computada a base de las tablas para personas casadas que vivan con su cónyuge y que radiquen planillas separadas.**
**(C) La deducción fija dispuesta en la sección 1023(aa)(1) será de mil quinientos (1,500) dólares y se concederá solamente si el otro cónyuge no detalla deducciones.]**
(c) ..."
Artículo 6.- Se enmienda el apartado (c) de la Sección 1059 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue:
"Sección 1059.- Declaración de Contribución Estimada por Individuos
(a) ...
(c) Esposo y Esposa.- En el caso de esposo y esposa que vivan juntos éstos **[podrán]** deberán rendir una declaración conjunta **[, o podrán optar por rendir una declaración individual. En caso de que se rinda una declaración conjunta,]** y la contribución estimada será determinada sobre el ingreso agregado. **[Si se rinde una declaración conjunta y luego no se radica una planilla conjunta para el año contributivo, la contribución estimada para dicho año podrá ser tratada como la contribución estimada de cualquiera de los cónyuges, o podrá ser dividida entre ellos.]**
(d) ...""

Página 13, líneas 14 a la 18 — Tachar todo su contenido

Página 13, línea 19 — Tachar "5" y sustituir por "7"
Página 13, línea 21 — Tachar "los" y sustituir por "las"

**En el Título:**
Página 1, línea 3 — Después de "1011;" insertar "enmendar el inciso (A) del párrafo (31) del apartado (b) de la Sección 1022;"
Página 1, línea 4 — Después de "(A)," insertar "derogar la cláusula (iv) del inciso (B), derogar el segundo párrafo del inciso (E), enmendar la clásula (i) de los incisos (F), (G) y (H) y la cláusula (ii) del inciso (J)"
Página 1, líneas 8 y 9 — Tachar "el inciso (B) del párrafo (4) del apartado (b) de la Sección 1051" y sustituir por "derogar el párrafo (4) del

apartado (b) de la Sección 1051; y enmendar el apartado (c) de la Sección 1059"

## ALCANCE DE LA MEDIDA

El **P. de la C. 3297**, propone enmendar el párrafo (3) y añadir un párrafo (4) al apartado (a), enmendar el párrafo (4) del apartado (b), el párrafo (1) y el inciso (C) y añadir un inciso (D) al párrafo (2) del apartado (c), y añadir un apartado (d) a la Sección 1011; enmendar el inciso (A) del párrafo (31) del apartado (b) de la Sección 1022; enmendar los incisos (A) y (D) y derogar el párrafo final del párrafo (1), enmendar la cláusula (i) del inciso (A), derogar la cláusula (iv) del inciso (B), derogar el segundo párrafo del inciso (E), enmendar la clásula (i) de los incisos (F), (G) y (H) y la cláusula (ii) del inciso (J) y añadir un párrafo final al párrafo (2) del apartado (aa), enmendar el inciso (B) del párrafo (3) *y* el segundo párrafo del párrafo (5), y enmendar el título y añadir un inciso (C) al párrafo (6) del apartado (bb) de la Sección 1023; enmendar los apartados (a) y (c) de la Sección 1025; enmendar el párrafo (1) y derogar el párrafo (4) del apartado (b) de la Sección 1051; y enmendar el apartado (c) de la Sección 1059 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de eliminar del mismo la llamada "penalidad por estar casado" y de reducir las tasas contributivas de los individuos a partir de los años contributivos que comiencen después del 31 de diciembre de 2001.

Esta medida elimina la "penalidad por estar casado" o "marriage penalty". Esta ocurre en un matrimonio en el cual ambos cónyuges trabajan y unen sus ingresos para determinar su contribución, la que resulta ser mayor que si tributaran sus respectivos ingresos para determinar su contribución, rindiendo por separado como solteros. Esto es así, ya que al sumar los ingresos de la pareja y computar el ingreso neto sujeto a contribución, éste tributa a base de unas escalas y tasas contributivas más altas que los del ingreso neto de cada uno de los cóyuges. Aquí es que surge la penalidad ya que la responsabilidad contributiva es mayor.

Para que se tenga una idea clara de los matrimonios bajo esta situación, la Comisión de Hacienda desea señalar, a tenor con información solicitada al Departamento de Hacienda, que en el año contributivo de 1997, hubo 93,431 planillas radicadas en que ambos cóyuges trabajaban, es decir, 186,862 contribuyentes, equivalente a un once (11%) por ciento de las planillas radicadas. Sin embargo, en términos de ingresos, estos matrimonios informaron alrededor de veintiún (21%) por ciento del ingreso bruto ajustado, mientras que aportaron aproximadamente el veintiséis (26%) por ciento de la contribución total determinada.

La medida que nos ocupa, corrige lo antes dicho y elimina totalmente la "penalidad por estar casado" cuando ambos trabajan, ya que permite un cómputo alterno para la contribución de forma separada para cada cónyuge.

Para lograr este propósito se le aplica la misma tabla contributiva que aplica a los demás contribuyentes y se establece un cómputo alterno de la contribución que beneficiará a aquellos matrimonios que rinden planilla juntos y ambos trabajan mediante el cual, a su opción, pueden determinar la contribución en forma separada. Al escoger esta opción, la contribución no debe ser mayor que aquella que resultaría de haber determinado la misma en forma conjunta. Este cómputo se hará en un anejo a la planilla conjunta que diseñará el Secretario para dicho propósito.

A tenor con lo que se dispone por esta medida, el cómputo de la contribución se hará mediante anejo a la planilla conjunta, en el que se separa el ingreso según fue ganado por cada cónyuge. En aquellos casos en que la fuente de ingreso corresponda al matromonio como unidad, se distribuye en puntos iguales para cada uno de los cónyuges. En cuanto a las deducciones, en el caso de las que son detalladas, cada cónyuge reclamará el cincuenta (50%) por ciento del total de éstas, mientras que en las deducciones

adicionales, la distribución es según corresponda individualmente a cada cónyuge. También, se concede por esta medida, hasta un máximo de $1,500 a cada cónyuge como deducción adicional por gastos ordinarios y necesarios para generar ingresos.

Por otra parte, en cuanto a la exención personal y la deducción fija, éstas serán de $1,500 cada una por cónyuge, lo que equivale a $6,000 tal y como es actualmente. Una vez se determine el total, cada cóyuge reclamará el (50%) por ciento de la exención por dependientes. Estas son las principales enmiendas que se proponen por esta ley que dispone la manera en que se eliminará la penalidad contributiva de casados cuando ambos trabajan.

Deseamos mencionar que más de 100,000 matrimonios recibirán un alivio contributivo anual de $80.0 millones de dólares. Dicho beneficio se va a reflejar en las planillas del año contributivo 2001, para el cual se rinde la planilla en abril de 2002. Otro dato es que esta medida elimina el estado de casado que rinden por separado, ya que no es necesario una vez se convierta en ley.

Un ejemplo de los antes citado es lo siguiente:

a) Un matrimonio en el cual uno de los cóyuges tiene un ingreso bruto ajustado anual de $16,000 y el otro de $23,935, obtiene un beneficio de once (11%) por ciento que equivale a una reducción en la contribución vigente, o sea que de $3,488 que le corresponde pagar tal y como está en la Ley, sólo pagaría $3,108 con la aprobación de esta Ley que nos ocupa: y

b) Otro ejemplo lo es el de una pareja con un ingreso bruto ajustado de $67,932 ($37,848 y $30,084 cada uno). Bajo el esquema actual pagaría $8,258 y bajo la Ley objeto de este informe sería de $5,325, que representa un ahorro de $2,934 o un treinta y seis (36%) por ciento.

Estos ejemplos son casos reales analizados por la Comisión de Hacienda, según la información suministrada por el Departamento de Hacienda.

Como ya hemos mencionado, las enmiendas a esta Ley disponen que las tasas contributivas para los individuos contribuyentes se reduzcan en un punto porcentual, excepto en el nivel más alto. Las tasas contributivas marginales por escala de ingreso neto se reducen de la siguiente manera:

- ✓ de 0 a $2,000; de 7% a 6%
- ✓ de $2,001 a $17,000; de 10% a 9%
- ✓ de $17,001 a $30,000; de 15% a 14%
- ✓ de $30,001 a $50,000; de 28% a 27%
- ✓ en exceso de $50,000; se mantiene la tasa de 33%

Esta reducción en las tasas contempla unos beneficios adicionales de alrededor de $146,000,000 de los cuales $73,000,000 serán para el año fiscal 2001 y $73,000,000 para el año fiscal 2002. Esto significa que el alivio contributivo será de 5.8% para las personas. Por lo tanto, el impacto económico total de la penalidad por matrimonio y las nuevas tasas alcanza la cifra de $226.0 millones de dólares.

Es bueno que los mayores beneficios los recibirán los contribuyentes con ingresos de hasta $30,000. Ejemplo de esto es, que los contribuyentes con un ingreso neto tributable de hasta $17,000 recibirán un beneficio promedio de 10.4%. Los ingresos netos entre $17,000 a $30,000 tendrán un ahorro de 8.5 por ciento.

Se entiende que con la aprobación de esta medida, que elimina la penalidad del matrimonio y la reducción de las contributivas, se continúa haciendo justicia a los contribuyentes estableciendo una mayor equidad en el sistema contributivo del país.

Vuestra Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del **P. de la C. 3297** con las enmiendas sugeridas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 833, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Asuntos de la Mujer, con enmiendas.

"LEY

Para prohibir el discrimen por razón de sexo por parte de patronos que se dediquen al negocio de los noticieros televisivos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El campo de las comunicaciones resulta ser uno muy competitivo para aquellos quienes interesan incursionar en él. Consecuencia directa de esta competitividad resulta ser el trato desigual a base de elementos que en ocasiones resultan injustificados.

En los noticieros televisivos hemos visto discrimen por razón de sexo en contra de la mujer. La experiencia ha mostrado que existe trato desigual entre hombres y mujeres con iguales responsabilidades y deberes. La diferencia se ha podido palpar en elementos laborales, tales como: exposición, tenencia, remuneración y categoría, entre otros. Particularmente en los departamentos de noticias de los diferentes canales de televisión local hemos visto como, a través de los años, la gerencia ha sustituido a las llamadas mujeres ancla mientras conservan inmóviles a los hombres ancla.

En noticiaros televisivos existe un chocante e impropio concepto de que la mujer, ante las cámaras, va perdiendo, a través de los años, la lozanía que atrae al público. Más allá parecen entender que existe una relación indirecta entre la edad y la credibilidad. Es decir, que a mayor edad de la mujer-ancla su credibilidad ante el público disminuye. Caso contrario, hemos visto al hombre envejecer ante las cámaras de televisión, necesitar espejuelos o aumentar y bajar de peso sin perder su prestigiosa y competitiva posición de hombre ancla.

Envejecer es parte del proceso natural de la vida misma. Envejecemos momento a momento, mas no por ello nuestras capacidades se consumen. Otras situaciones preocupantes resultan ser reporteras embarazadas, con sobrepeso, con variaciones en su apariencia física y otros aspectos que no guardan relación alguna con los deberes que como periodista deben cumplir.

Cuando en ocasiones esporádicas se ha denunciado el discrimen, la gerencia ha utilizado todo argumento posible para salir airosa de una situación verdaderamente deshonrosa. La realidad resulta ser que a pesar de sus esfuerzos, los canales de televisión no pueden pretender engañar al pueblo puertorriqueño cuando claramente se puede palpar el discrimen, ya sea por edad o por sexo.

Al intentar encontrar algún fundamento para tales injusticias no podemos sino confirmar lo que resulta inaceptable. En lo noticiarios televisivos de canales norteamericanos y extranjeros los reporteros envejecen ante su público sin perder su credibilidad. Parece ser que a través de los años van ganando la confianza de ese público, quienes le reconocen madurez y experiencia.

Luego de esta comparación el discrimen resulta aún más inadmisible. La situación descrita es una que, a pesar de ser extraña a nuestro ordenamiento, subsiste y permanece como una realidad inaceptable. Nuestra ley fundamental, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la Sección 1 de su Artículo II prohíbe el discrimen por razón de sexo. Cumpliendo con su deber ministerial de enunciar las leyes que rigen nuestra vida de pueblo, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 69 de 6 de junio de 1985, la cual específicamente instrumenta dicho mandato constitucional al prohibir el discrimen en el empleo por razón de sexo, la cual incluye el discrimen por razón de categoría.

Aún habiéndose prohibido esta práctica por mandato constitucional, y más allá habiéndose legislado al efecto específicamente de prohibir dicha práctica en los centros de trabajo públicos y privados, las incidencias de prácticas discriminatorias en Puerto Rico no ha mermado. Habiendo tomado conocimiento particular de las situaciones descritas en el campo de los noticiarios televisivo, esta Asamblea Legislativa actúa afirmativamente a fin de detener en definitiva las prácticas discriminatorias en el campo de los noticiarios de nuestro país.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.-Declaración de Principios.-

Se declara que la igualdad entre las personas, enunciada en la Constitución del Estado Libre Asociado y en las leyes anti-discrimen, es un valor fundamental de la sociedad puertorriqueña. Consecuentemente, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en su deber ministerial de velar por el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y de instrumentar las medidas necesarias para garantizar el bienestar general del buen pueblo puertorriqueño, reconoció la prominencia de la mujer en la fuerza trabajadora en la Ley Núm. 69 de 6 de junio de 1985. No obstante, y a pesar de las normas citadas la práctica laboral actual, en algunas áreas de trabajo, aún contiene métodos discriminatorios.

A fin de erradicar de manera final y firme las prácticas discriminatorias en el campo de noticiarios televisivos en Puerto Rico, esta Asamblea Legislativa dicta normas específicas.

Artículo 2.-Definiciones.-

Esta Ley se conocerá como; "Ley para prohibir el discrimen por razón de sexo por parte de patronos que se dediquen al negocio de los noticiarios televisivos.

Los siguientes términos tendrán, a los efectos de esta Ley, la definición que se especifica:

a) 'ancla' – significa el (la) reportero(a) seleccionado para trabajar como presentador(a) del noticiario televisivo;

b) 'beneficios marginales' – significa el seguro médico – hospitalario, de accidentes, de vida, beneficios de retiro, plantes de participación en las utilidades y de bonos, licencias y cualesquiera otros términos, condiciones y privilegios de empleo;

c) 'discrimen por razón de sexo' – incluye, sin que se entienda como una limitación, el discrimen debido a, o a base de embarazo, parto, adopción o condiciones relacionadas; por condición de sobrepeso, por variaciones en apariencia física, tales como: envejecimiento, variaciones en peso y utilizar lentes o espejuelos. Disponiéndose, que las afectadas por las condiciones antes mencionadas, o por condiciones análogas o relacionadas, recibirán igual trato para todo propósito relacionado con su empleo, incluyendo beneficios marginales, como otros empleados en condiciones similares y con habilidades o inhabilidades para trabajar que sean similares;

d) 'empleado' – significa cualquier empleado por un patrono que se dedique a los noticiarios televisivos, y no se limita a empleados de un patrono particular, a menos que se exprese explícita y textualmente lo contrario, e incluirá a cualquier individuo cuyo trabajo haya cesado y que sus posibilidades para trabajar sean similares; como, consecuencia de, o debido a cualquier práctica de discrimen según se define en esta Ley;

e) 'noticiario televisivo' – significa los espacios informativos regulares dentro de la programación televisiva cuya finalidad es dar a conocer los hechos noticiosos más sobresalientes ocurridos en el término de tiempo que transcurre entre dos espacios en que dicho servicio se ofrece;

f) 'persona' – significa las personas naturales y jurídicas, individuos o grupos, sociedades, asociaciones, corporaciones, representantes legales, agencias gubernamentales, uniones obreras y organizaciones no incorporadas;

g) 'requisito ocupacional bona fide' – significa el o los requisitos relacionados al empleo que se utilicen para determinar la capacidad de la persona para realizar el trabajo".

Artículo 3.-Práctica ilegal del trabajo.-

(a) Será ilegal el que un patrono, por razón de sexo:

(1) suspenda, despida o rehúse emplear a una persona, o discrimine de cualquier forma y manera contra una persona en cuanto a su compensación, términos o condiciones de empleo;

(2) divida, clasifique o limite a sus empleados o a las personas que soliciten para un empleo de forma que limite, afecte o entorpezca las posibilidades de esas personas a obtener un empleo o en las oportunidades que un empleado pueda tener para mejorar sus condiciones de empleo o de beneficiarse de los beneficios marginales disponibles;

(3) controle programas de aprendizaje, adiestramiento o readiestramiento de forma discriminatoria, impidiendo que todo empleado tenga iguales oportunidades de beneficiarse de los mismos;

(4) modificar los deberes y funciones de un empleado sin fundamento válido que directamente se relacione con la incapacidad del empleado a realizar las funciones que se pretendan modificar.

(b) Disponiéndose, que las prácticas antes descritas no se considerarán discriminatorias en aquellas circunstancias en que:

(1) el sexo de la persona sea un requisito bona fide razonablemente necesario para la operación normal de dicha empresa o negocio en particular;

(2) la diferencia en los tipos de compensación, términos, condiciones o privilegios en el empleo sean resultado de un sistema que mida las ganancias o de un sistema de antigüedad ("seniority") o de méritos, siempre que los parámetros no se desarrollen con la intención de discriminar por sexo;

(3) el patrono actúe a base de los resultados de un examen de habilidad profesional, disponiéndose que el examen no se haya diseñado o utilizado para discriminar por razón de sexo.

Artículo 4.-Cualquier regla o reglamento que establezca un patrono que se dedique a los noticiarios televisivos que en su efecto prohíba o limite el empleo a personas o que muestre su preferencia por empleados de determinado sexo es un discrimen y se prohíbe por esta Ley.

Artículo 5.-Penalidades por violaciones.-

(a) Toda persona o patrono que incurra en cualquiera de las prohibiciones dispuestas en esta Ley incurrirá en delito grave y, convicta que fuere será castigado con multa no menor de cinco mil (5,000) dólares no mayor de diez mil (10,000) dólares por cada acto discriminatorio o ambas penas a discreción del tribunal. Disponiéndose, que la persona o patrono tendrá responsabilidad civil por daños y perjuicios, según determine el tribunal; disponiéndose, además que en la sentencia que dicte se podrá ordenar al patrono que reponga en su empleo al empleado y que cese y desista de las prácticas ilegales que fundamentaron la acción legal en su contra.

Artículo 6.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestras comisiones de Trabajo Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Asuntos de la Mujer, previo estudio y consideración del ***Proyecto de la Cámara 833*** tienen el honor de recomendar a esteAlto Cuerpo la aprobación de la medida con enmiendas.

**En el Texto Decretativo:**

| | |
|---|---|
| Página 4, línea 1, | después de "afectadas" añadir "y afectados". |
| Página 6, entre las líneas 7 y 8 | añadir "Artículo 5.-Aplicación<br>Esta Ley aplicará a toda persona, empleado, patrono, director o encargado de cualquier negocio, corporación pública o privada, agencia, departamento o instrumentalidad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y noticieros televisivos, sean públicos o privados. |
| Página 6, línea 8, | después de "Artículo" eliminar "5" y sustituir por "6". |
| Página 6, línea 18, | después de "Artículo" eliminar "6" y sustituir por "7". |

**En el Titulo**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 1, | después de "sexo" añadir "o apariencia física" |
| Página 1, líneas 1 y 2, | después de "patronos" eliminar todo su contenido y sustituir por "(,) negocio, agencia, corporación pública o privada, departamento o instrumentalidad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y noticieros televisivos, sean públicos o privados." |

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 833 tiene el propósito de prohibir el discrimen por razón de sexo por parte de patronos que se dediquen al negocio de los noticieros televisivos.

Para el estudio y análisis de dicho proyecto se le solicitaron memoriales a: Lcda. Enid M. Gavilán, Directora Ejecutiva de la Comisión de Asuntos de la Mujer; Sr. Mario Roche Velázquez, Cabildero Laboral del Comité de Organizaciones Laborales-C.O.S.; Sr Cesar Juan Almodóvar Marchany, Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; Sr Jesús Allende Fuentes, Director Ejecutivo de la Oficina de Asuntos Laborales; Sr Jorge M. Inserni, Presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública; y Sr. Martín Sustache, Presidente de la Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas.

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce dos principales legislaciones sobre el discrimen, estas son: la Ley Núm. 69 del 6 de julio de 1985, según enmendada, conocida como la ***"Ley en Contra del Discrimen por Sexo"*** y la Ley Núm. 100 del 30 de junio de 1959, según enmendada, conocida como la ***"Ley Contra el Discrimen por razón de sexo, edad, ideas políticas y origen nacional".***

La Ley Núm. 69 fue creada bajo el principio de igualdad y libertad. Principios que permean en nuestra Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y constituyen la piedra angular en nuestra sociedad puertorriqueña. En su Artículo 3 expresa que se considera práctica ilegal de trabajo el que un patrono, organización obrera o comité conjunto obrero-patronal que controle programas de aprendizaje, de adiestramiento o readiestramiento, incluyendo programas de adiestramiento en el trabajo discrimine contra cualquier persona por razón de sexo. Dicha Ley otorga los remedios de "injuction" (interdicto) o "cese y desista" al empleado perjudicado por una causa de acción discriminatoria, además de daños y reposición de la persona en el empleo.

La Ley Núm. 100 dispone que: *"todo patrono que despida, suspenda o discrimine contra un empleado suyo en relación a su sueldo, salario, jornal o compensación, términos, categorías, condiciones o privilegios de su trabajo, o que deje de emplear o rehuse emplear o reemplear a una persona, el límite o clasifique a sus empleados en cualquier forma que tienda a privar a una persona de oportunidades de empleo o que afecte su status como empleado por razón de raza, edad, color, sexo, orígen nacional, o condición social e ideas políticas o religiosas del empleado".*

Existen otras leyes y reglamentos relativos al discrimen, tanto en la esfera estatal como en la esfera federal. Entre estos se encuenran la Ley Núm. 3 de 1942, según enmendada, conocida como ***Ley de Madres Obreras; Ley de Derechos Civiles*** de 1964; ***Pregnacy Discrimination Act*** de 1978; y el ***Family Leave Act*** de 1993. En el foro internacional se encuentra la Declaración Universal de los Derechos humanos de las Naciones Unidas, proclamada en 1948. Esta última establece: *"Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, sexo, idioma, religión, opinión pública o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición".*

Aunque existen varias leyes y reglamentos de índole estatal, federal e internacional; el discrimen por razón de sexo, en sus diversas modalidades, va en aumento. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en su memorial explicativo nos expresa: *"La radicación de querellas de discrimen reflejan anualmente aumentos graduales por lo que se hace imperante incrementar los esfuerzos educativos y la creación de medidas que tiendan a desalentar el discrimen en el empleo".* De ordinario, la mayoría de los reglamentos, leyes y estatutos que combaten el discrimen por razón de sexo no reconocen la apariencia o características físicas como causal de discrimen. La definición del término "por razón de sexo" que establece el ***Proyecto de la Cámara 833*** proveería una protección más amplia en circunstancias donde el trato desigual por género esté estrechamente vinculado a la apariencia física de los empleados o aspirantes a empleo perjudicados. El referido proyecto define "discrimen por razón de sexo" en su Artículo 2, inciso (c): *"incluye, sin que se entienda como una limitación, el discrimen debido a, o a base de embarazo, parto, adopción o condiciones relacionadas; por condición de sobrepeso, por variaciones en aparienca física, tales como: envejecimiento, variaciones en peso y utilizar lentes o espejuelos. Disponiéndose, que las afectadas por las condiciones antes mencionadas, o por condiciones análogas o relacionadas, recibirán igual trato para todo propósito relacionado con su empleo, incluyendo beneficios marginales, como otros empleados en condiciones similares y con habilidades o inhabilidaes para trabajar que sean similares".*

Nuestro Tribunal Supremo se expresó en el caso de ***Ibañez v. Molinos de Puerto Rico, 114 DPR 42,*** que los criterios de apariencia física no son considerados elementos discriminatorios bajo la Ley 100. En otro caso normativo nuestro Tribunal Supremo dictaminó: *"que al amparo de la Ley Núm. 100 son compensables los daños que se causen al empleado que sufre un despido discriminatorio"* (***García Pagán vs. Shiley Caribbean, 88 JTS 101***). Entre estos daños estan incluidos los físicos y morales. Es decir, que los remedios provistos bajo el Proyecto de la Cámara 833 estan en armonía con las interpretaciones de nuestro tribunal de más alta jerarquía. El referido proyecto incluye dentro de sus penalidades que: *"la*

*persona o patrono tendrá responsabilidad civil por daños y perjuicios, según determine el tribunal"* ***(Artículo 5, inciso (a), Proyecto de la Cámara 833).***

Estudios de diferentes países demuestran la gran necesidad de legislar en torno al discrimen por sexo, en específico por la apariencia física de la mujer, en los medios televisivos. En Puerto Rico la situación puede ser evidenciada con tan solo observar los diferentes medios televisivos de noticieros. La Comisión de asuntos de la mujer nos expresó en su memorial explicativo que: "*la televisión segrega a la mujer tanto por acción como por omisión, por un lado se le concede a ella menos tiempo que al hombre en programas informativos, y por otro lado, se le da acceso a la pantalla como objeto decorativo*".

Esto nos evidencia la gran necesidad del referido proyecto de la cámara. Consideramos que el espíritu del proyecto es uno legítimo y por tal razón debe ser aprobado. La mujer puertorriqueña ha logrado ganar mucha distancia pero todavía el camino es muy largo. Tenemos que seguir propiciando y reconociendo su participación en todos los campos de actividad laboral.

Aunque coincidimos con la exposición de motivos del referido proyecto, en el sentido de que en los noticieros televisivos hemos visto discrimen por razón de sexo en contra de la mujer, entendemos que no se debe abarcar exclusivamente a la mujer. Este hecho podría ser interpretado como discriminatorio para el hombre y no se ajusta a la intención del proyecto.

Con respecto a su aplicación, ésta debe ser enmendada. Esta es muy específica, ya que se está legislando para un sector únicamente (negocio de las telecomunicaciones). Dicha legislación debe abarcar a todos los patronos, negocios o empresas que le apliquen las normas y leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas nos expresaron en su memorial explicativo que: "De aprobarse el P. de la C. 833, por ser uno específico, según la regla de hermenéutica de interpretación de estatutos, primaría sobre cualquier otra ley de la misma materia. Quiere esto decir que a las empresas en el "campo de las comunicaciones", no le aplicaría las disposiciones de la Ley Número 100, 29 LPRA Sec. 146 et. seq. En aquellas disposiciones del P. de la C. 833, que son iguales a las de la Ley 100, no habría conflicto, pero al, por ejemplo, no mencionarse por lo menos los mismos remedios que los que contiene la Ley 100, la interpretación va a ser, que específicamente esta legislatura ya legisló para ésta industria y los eliminó". Por lo tanto la aplicación del proyecto debe ser una general y no específica al campo de las telecomunicaciones y los remedios deben ser adicional a los ya concedidos en la Ley Núm. 100.

Las comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Asuntos de la Mujer realizaron reunión ejecutiva en torno al Proyecto de la Cámara 833. En dicha reunión se realizó un estudio y análisis de la información disponible.

Por las razonas antes expuestas, vuestras comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Asuntos de la Mujer recomiendan a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Luisa Lebron Vda. De Rivera
Presidenta
Comisión De Trabajo, Asuntos Del Veterano
Y Recursos Humanos"

Luz Arce Ferrer
Presidenta
Comisión De Asuntos De La Mujer

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2785, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, sin enmiendas.

"LEY

Para enmendar el inciso (k) del Artículo 5.04 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, a fin de disponer que un Asambleísta Municipal pueda pertenecer a una Junta de Directores o Comités de una Cooperativa de Ahorro y Crédito, mientras se desempeña en la Cooperativa.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

Mediante la Ley Núm. 302 de 23 de diciembre de 1998, se enmendó la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada. Dicha enmienda tenía como finalidad incluir dentro de los requisitos para pertenecer a la Junta de Directores o a Comités, de un cooperativa, el que la persona no ocupe cargo electivo alguno en el Gobierno de Puerto Rico, mientras se desempeña en la cooperativa.

La referida Ley Núm. 302 de 23 diciembre de 1998, tuvo su origen en el P. del S. 852., el cual fue considerado en vistas públicas por la Comisión de Cooperativismo e Instituciones Afines de la Cámara de Representantes. Al momento de la consideración del referido proyecto de ley se contó con la participación de la Federación de Alcaldes y la Asociación de Alcaldes, así como otras entidades que agrupan a los asambleístas municipales.

En las vistas públicas celebradas y en la discusión del referido proyecto se argumentó en todo momento que no era la intención legislativa el que la prohibición contenida en dicho proyecto se aplicara a los asambleístas municipales. Al aprobarse el P. del S. 852 se le hicieron unas enmiendas cuyo propósito era excluir a los asambleístas municiapales de la aplicación de la prohibición aprobada. A pesar de las enmiendas que se le hicieron al proyecto, el texto final aprobado no es claro en cuanto a la intención legislativa. Esto ha traído como consecuencia que se interprete que los asambleístas municipales no pueden pertenecer a la Junta de Directores o Comités de una Cooperativa de Ahorro y Crédito, mientras se desempeña en la cooperativa.

Mediante este proyecto de ley se subsanan las dudas creadas con la aprobación del P. del S. 852 y se reafirma la intención legislativa en cuanto a que la prohibición contenida en la Ley Núm. 302 de 23 de diciembre de 1998, no es de aplicación a los asambleístas municipales.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (k) del Artículo 5.04 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 5.04-Requisitos de los Miembros de la Junta y de los Comités de Supervisión, Crédito y Educación.

Solamente podrán ser miembros de la Junta y de los Comités de Supervisión, de Crédito y de Educación de una cooperativa los socios que:

a. . . .

. . .

j. Tomen y aprueben un curso de capacitación avalado por el Comisionado y PROSADCOOP durante el primer año de su nombramiento.

k. No podrán ser miembros de la Junta de Directores ni de los Comités, aquellas personas que ocupen un puesto electivo en el gobierno de Puerto Rico, excepto los Asambleístas Municipales."

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, luego del estudio y evaluación del P. de la C. 2785 recomendamos su aprobación sin enmiendas.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

Esta medida tiene como finalidad enmendar el Artículo 5.04 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, conocida como "Ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Puerto Rico" , a los fines de aclarar que la prohibición a ciertos funcionarios de las cooperativas a pertenecer a una Junta de Directores o a Comités de una cooperativa de ahorro y crédito no es de aplicación a los asambleístas municipales.

Mediante la Ley Núm. 302 de 23 de diciembre de 1998 se enmendó el Artículo 5.04 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, conocida como "Ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Puerto Rico" , y se dispuso que ninguna persona que ocupara un puesto electivo en el gobierno de Puerto Rico podía pertenecer a una Junta de Directores ni de Comités de una cooperativa. Al aprobarse dicha enmienda, se expresó que la intención era evitar o desalentar la participación de ciertos servidores públicos en determinadas actividades relacionadas con las cooperativas.

En el informe de comisión recomendando la aprobación de la medida se incluyeron unas enmiendas al proyecto original que había sido presentado. Estas enmiendas tenían como finalidad excluir a los asambleístas municipales de la aplicación de la prohibición contemplada en la ley. A pesar de las enmiendas que se le hicieron al proyecto de ley al momento de su aprobación, del texto finalmente aprobado no se desprende claramente la intención legislativa en cuanto a la exclusión de los asambleístas municipales de la aplicación de la referida ley.

Esta comisión analizó el P. del S. 852, el cual dio base a la enmienda que se le hizo al referido Artículo 5.04 que disponía lo siguiente:

Requisitos de los Miembros de la Junta y de los Comités de Supervisión, Crédito y Educación.

Solamente podrán ser miembros de la Junta y de los Comités de Supervisión, de Crédito, y de Educación de una cooperativa los socios de ésta que:

a. ...

...

j. Tomen y aprueben un curso de capacitación por el Comisionado y PROSAD-COOP durante el primer año de su nombramiento.

k. No podrán ser miembros de la Junta de Directores ni de los Comités, aquellas personas que ocupen un puesto electivo en el gobierno de Puerto Rico, excepto los asambleístas municipales.

En el informe de comisión se enmendó la referida disposición para eliminar la referencia a los asambleístas municipales. Al hacerse esa enmienda se expresó que no era la intención de que la prohibición aprobada no le aplicará a los asambleístas municipales. Así se desprende de la discusión de la referida medida y de las ponencias recibidas en esta Comisión. La redacción finalmente aprobada no es clara en cuanto a la intención legislativa de que no le aplicará a los asambleístas municipales.

Esta situación ha traído como consecuencia la exclusión de los asambleístas municipales de las Juntas de Directores y Comités de las cooperativas de ahorro y crédito, ya que se ha interpretado que esa era la intención al aprobarse la enmienda al Artículo 5.04 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada.

Por lo antes expuesto, recomendamos la aprobación de esta medida sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Enrique Rodriguez Negron
Presidente
Comisión de Turismo, Comercio,
Fomento Industrial y Cooperativismo"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3007, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, con enmiendas.

**"LEY**

Para establecer la Ley de Cetrería con el propósito de regular la práctica de la Cetrería como arte de caza en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, definir facultades, poderes y deberes del Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, otorgar, renovar y revocar Licencias de Cetrería, fijar penalidades por la violación de esta Ley y de los reglamentos promulgados en virtud de la misma.

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La Cetrería es un arte de caza legítimo que estimula y requiere gran conocimiento y compenetración de los que la practican, en el medio natural y la vida silvestre. Por lo tanto, es una actividad que incentiva la preocupación por el medio natural y promueve su conservación a través de su uso sostenible.

El medio natural de Puerto Rico y la vida silvestre que lo habita, posibilitan la práctica del arte de Cetrería sin que esta vaya en detrimento de la naturaleza. Puede considerarse esta modalidad de caza como una de bajo impacto debido a que se desarrolla de manera casi natural La cantidad usual de presas capturadas es usualmente una por salida en gran parte de la temporada y su fin último no es el número de presas capturadas sino la perfección del adiestramiento del ave rapaz.

La participación de los cetreros en la conservación de la naturaleza es extensa y su intervención ha sido determinante en reducir y eliminar la amenaza de la extinción de muchas especies de aves rapaces.

La enorme cantidad de experiencia acumulada durante más de tres mil años de práctica de la Cetrería ha permitido que se haya generado un volumen considerable de materiales escritos que documentan el arte y facilitan el aprendizaje del mismo.

La Cetrería es un arte de caza legal en todos los estados de los Estados Unidos de América donde existe gran cantidad de organizaciones y cetreros que posibilitan el intercambio de experiencias e información para lograr el máximo nivel de perfección en su práctica en Puerto Rico.

**DECRETESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1. – Título

Esta Ley se conocerá como "Ley de Cetrería del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" y la misma será interpretada de manera que sea consistente con las disposiciones de la reglamentación del Servcio de Pesca y Vida Silvestre del Departamento de lo Interior de Estados Unidos (50 CFR 21), en especial en cuanto a lo relacionado a "Falconry Permits" (sección 21.28) y "Federal Falcony Standars" (sección 21.29)

Artículo 2. – Definiciones

Para los efectos de esta Ley los siguientes términos significarán:

1. **Aprendiz**: Persona autorizada a ingresar en el proceso de aprendizaje bajo la dirección de un tutor para convertirse en Cetrero General.
2. **Área de descanso:** Área abierta al sol, al viento y a la lluvia pero protegida de depredadores humanos y animales donde se coloque al ave rapaz cuando las condiciones climáticas no hagan peligrar su salud y supervivencia.
3. **Aspirante**: Persona que inicia los procedimientos para comenzar el período de aprendiz.
4. **Ave de Reemplazo**: ave rapaz cuya captura autoriza el Secretario para reponer otra autorizada anteriormente en caso de pérdida o muerte.
5. **Ave rapaz**: Individuo o parte de cualquier especie de ave perteneciente a los órdenes Falconiformes o Strigiformes exceptuando el Aguila Pescadora Norteamericana (*Haliaetus leucocephalus*) y el Aguila Real (*Aquila chrysaetus*).
6. **Balanza**: Dispositivo de pesaje para registrar el peso de las aves rapaces y su alimento con una precisión no menor de media (1/2) onza o quince (15) gramos.
7. **Cetrería:** Deporte de perseguir y capturar presas utilizando un ave rapaz adiestrada.
8. **Cetrero**: Persona autorizada a poseer, adiestrar y cazar con aves rapaces
9. **Coto de Caza**: Según está definido en la Ley Núm. 241 del 15 de agosto de 1999, conocida como "Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico".
10. **Departamento**: Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
11. **Especie protegida**: Especie de la vida silvestre cuyo nombre aparezca en los listados estatales o federales de Especies en Peligro de Extinción o Especies Amenazadas.
12. **Especie Exótica**: Especie introducida y que de acuerdo con el Secretario no es parte de la Vida Silvestre de Puerto Rico.
13. **Examen de Cetrero**: Examen que deberá pasar el aspirante a Aprendiz de Cetrero como requerimiento indispensable para iniciar su período de aprendizaje.
14. **Fauna Silvestre**: Cualquier especie animal que se encuentre en estado silvestre y cuya supervivencia y propagación no dependa del cuidado del hombre.
15. **Hábitat Natural**: Según está definido en la Ley Núm. 241 del 15 de agosto de 1999 conocida como "Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico".
16. **Halconera**: Facilidades bajo techo donde se coloca el ave rapaz adiestrada a resguardo de los elementos naturales.
17. **Junta Asesora:** Grupo de profesionales cuya función será asesorar al Secretario en todo lo referente a la implantación y administración de esta Ley.

18. **Ley de Vida Silvestre**: Ley Núm. 241 de 15 de agosto de 1999, conocida como "Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico".
19. **Licencia de Cetrería**: Documento otorgado por el Secretario y que especifica qué actividades de las descritas en esta ley están siendo autorizadas al beneficiario y bajo que términos.
20. **Límite de Morral**: Número máximo de ejemplares de cada especies de caza que será permitido capturar a través de la caza de Cetrería para cada día de la temporada de caza de cetrería.
21. **Lonja**: Correa de cuero o material sintético del largo y resistencia apropiados según la especie de ave rapaz, que se ata el tornillo quita vueltas y se usa para sujetar al ave al posadero o al guante.
22. **Persona**: Toda persona natural residente permanente en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
23. **Pihuela**: Correa de cuero que se ata a los tarsos del ave rapaz para sujetarla al guante o el posadero.
24. **Posadero**: Estructura utilizada por el ave rapaz para posarse.
25. **Presa de Escape:** Animal (ave o mamífero) que se usa durante las últimas etapas del adiestramiento del ave rapaz para estimular sus instintos de caza.
26. **Reserva de Vida Silvestre**: Según está definido en la Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico.
27. **Temporada de Caza**: Según está definido en la Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico.
28. **Tornillo Quita Vueltas**: Elemento giratorio que evita que las pihuelas se tuerzan sobre los tarsos del ave rapaz y conecta a estas con la lonja.
29. **Refugio**: Según está definido en la Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico.
30. **Secretario**: Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Artículo 3. - Licencia de Cetrería

a) Ninguna persona podrá poseer un ave rapaz con propósitos de Cetrería sin una licencia aprobada por el Secretario
b) No se emitirán Licencias de Cetrería a ninguna persona que no pueda aprobar en las condiciones que más adelante se especifican, el examen escrito de suficiencia en Cetrería.
c) No se emitirán Licencias de Cetrería a ninguna persona que no obtenga resultados satisfactorios en la inspección de las instalaciones y equipamiento efectuada según las condiciones más adelante especificadas.
d) No se emitirán Licencias de Cetrería a ninguna persona menor de 14 años de edad.

Artículo 4. - Procedimientos de Obtención de Licencias de Cetrería

a) Una persona que desee practicar la Cetrería y no posea una Licencia de Cetrería vigente debe presentar una solicitud por escrito al Departamento.
b) La solicitud estará acompañada por un expediente negativo de Antecedentes Penales de la Policía de Puerto Rico emitida en una fecha no mayor de treinta (30) días anteriores a la fecha de radicación,
c) El pago de derechos a cobrar por el Secretario será de diez (10) dólares.
d) Dos cartas de recomendación de cetreros generales o maestros con Licencia de Cetrería, vigente.

Artículo 5. – Actos prohibidos

Los siguientes actos serán considerados ilegales y sujetos a ser penalizados de la manera que más adelante se dispone en esta Ley:

a) Efectuar caza de Cetrería sin la correspondiente Licencia de Cetrería o sello oficial de temporada o especie de caza, cuando aplique.
b) Efectuar caza de Cetrería sobre cualquier especie de la vida silvestre que no haya sido designada por el Secretario como especie de caza o haya sido identificada y designada como exótica o dañina y que pueda ser cazadas durante todo el año.
c) Importar, capturar, adiestrar o mantener aves rapaces en cautiverio con propósitos de Cetrería sin la correspondiente Licencia de Cetrería y permiso de importación de fauna silvestre según aplique.
d) Intercambiar aves rapaces o partes de ellas o pollos o huevos con fines de Cetrería sin poseer la correspondiente Licencia de Cetrería y notificarlo al Departamento según dispone esta Ley.
e) Efectuar caza de Cetrería fuera de las temporadas de caza establecidas por el Secretario para la caza de Cetrería.
f) Efectuar la caza de Cetrería en terrenos de dominio público administrados por el Departamento en los cuales el Secretario determine que la caza de Cetrería es incompatible con el uso definido para el mismo.
g) Efectuar caza de Cetrería en Cotos de Caza sin poseer la correspondiente licencia de Cetrería.
h) Efectuar caza de Ccetrería en terrenos privados sin haber obtenido previamente autorización del dueño o su representante autorizado.
i) Importar, comprar o mantener en cautiverio con propósitos de Cetrería ejemplares de Aguila Real (*Aquila chrysaetus*) o Aguila Calva Nortemericana (*Haliaetus leucocephalus*) sin haber obtenido autorización por escrito bajo el acápite 50 CFR 22.24.
j) Transferir o alterar de alguna forma la Licencia de Cetrería.

La persona que cometa cualquiera de los actos prohibidos aquí indicados estará sujeto a la revocación de la licencia correspondiente de Cetrería y al pago de una multa no mayor de cinco mil dólares la cual se emitirá mediante un boleto administrativo preparado por el Departamento, en el cual hará constar el nombre y dirección del infractor, breve descripción de la infracción, disposición del reglamento por la que se impute la infracción y la penalidad propuesta."

Artículo 6. - Examen de Cetrería

a) El examen de Cetrería será requisito solamente para los aspirantes a aprendiz de cetrero.
b) Los aspirantes deberán alcanzar una puntuación general no menor del ochenta (80) por ciento y una puntuación por dominio no menor del setenta (70) por ciento en dicho examen. De no alcanzar la puntuación general el aspirante tendrá que repetir el examen en su totalidad. De obtener la puntuación general pero no alcanzar la puntuación en alguno de los dominios el aspirante se examinará en los dominios, en los que no haya obtenido la puntuación requerida.
c) El examen tendrá un total de cien (100) preguntas repartidas en los siguientes dominios:
    1. - Biología de las Aves Rapaces.
    2. - Identificación y Sistemática de las Aves Rapaces.
    3. - Aves de Caza en Puerto Rico.
    4. - Equipamiento de Cetrería.
    5. - Adiestramiento Básico de Cetrería.
    6. – Legislación Estatal (Puerto Rico) y Federal (Estados Unidos de América) sobre Cetrería.
c) El examen será administrado por un oficial del Departamento.
d) Las fechas y lugares de los exámenes se establecerán cada año por el Secretario y serán notificadas a los aspirantes con no menos de treinta (30) días de anticipación.
e) El examen podrá ser tomado dos (2) veces, cómo máximo, sin tener que radicar nuevamente una solicitud.

f) Aprobar el cuarso ofrecido por el Programa de Educación a Cazadores establecido en el Artículo 13(a) de la Ley Núm. 241 del 15 de agosto de 1999, conocida como "Nueva Ley de Vida Silvestre".

g) Aprobar el curso ofrecido por el Programa de Educación a Cazadores establecido en el Artículo 13 (a) de la Ley Núm. 241 del 15 de agosto de 1999, conocida como "Nueva Ley de Vida Silvestre".

Artículo 7. - De las Categorías de Licencias de Cetreros

a) **Aprendiz**:

1. –Persona no menor de 14 años

2.- El aprendiz deberá ser supervisado durante los dos (2) primeros años por un poseedor de permiso de Cetrería de categoría General o Maestro. Un tutor no podrá atender a más de tres aprendices simultáneamente

2. - El aprendiz solamente podrá poseer un (1) ave rapaz y no podrá obtener más de un (1) ave rapaz para reemplazo, en cualquier plazo de doce (12) meses.

3. - El aprendiz solamente podrá poseer las siguientes especies: Buteo de Cola Roja o Guaraguao ( *Buteo jamaicensis*) y Falconcito o Cernícalo (*Falco sparverius*).

b) **Cetrero General:**

1. - Para someter una solicitud de Licencia de Cetrería para cetrero general la persona deberá tener una experiencia en la práctica de la Cetrería de, al menos, dos (2) años como aprendiz bajo la dirección de un. Deberá acompañar su solicitud con una carta de recomendación de su cetrero Tutor.

2. - El podrá poseer hasta un máximo de dos (2) aves rapaces y no podrá obtener más de dos (2) aves rapaces para reemplazo en cualquier plazo de doce (12) meses. No podrá poseer ejemplares del Aguila Pescadora Norteamericana (*Haliaetus leucocephalus*) o el Aguila Real (Aquila chrysaetus) ni de cualquier otra especie listada como amenazada o en peligro a nivel estatal o federal.

**c) Cetrero Maestro:**

1.- Para presentar una solicitud de Licencia de Cetrería para Cetrero Maestro la persona deberá tener una experiencia en la práctica de la Cetrería de, al menos, cinco (5) años como Cetrero General.

2.- El Cetrero Maestro podrá poseer hasta un máximo de tres (3) aves rapaces y no podrá obtener más de dos(2) aves rapaces para reemplazo en cualquier plazo de doce (12) meses. No podrá poseer ejemplares del Aguila Pescadora Norteamericana (*Haliaetus leucocephalus*) o el Aguila Real (Aquila chrysaetus) ni de cualquier otra especie listada como amenazada o en peligro de extinción a nivel estatal o federal a menos que obtenga autorización por escrito del Secretario del Departamento y el Director del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre. En caso de obtener dicha autorización, el número de estas aves no excederá de uno (1) como parte del límite de tres (3) que fija su categoría.

Artículo 8. - Instalaciones y equipamiento

a) Antes de que un permiso de Cetrería sea emitido deben ser inspeccionadas y certificadas las instalaciones y el equipamiento de Cetrería del aspirante como que cumplen con las normas siguientes:

1. -Debe requerirse la construcción y existencia en el momento de la inspección, de un área de descanso o instalaciones exteriores para proveer a las aves rapaces de sol y aire. Estas instalaciones deberán estar protegidas con cerca de malla en su perímetro y cubierta con malla o algún tipo de techo que provea a las aves refugio y protección del sol, viento y lluvia. Deben estar provistas de posaderos adecuados según la especie de ave, y su tamaño debe ser tal que el

ave no golpee las paredes cuando vuela hacia el posadero. Debe proveerse protección contra robo y agresión por otros animales o personas.

b) Instalaciones interiores o halconeras: Deben ser de tamaño adecuado para permitir al cetrero fácil acceso para atender el ave. Si se pretende mantener más de un ave en una misma instalación, las aves deben mantenerse atadas y con espacio suficiente para que cada una pueda extender totalmente sus alas. Este tipo de instalación debe estar provisto con, al menos, una ventana protegida con barrotes cilíndricos verticales cuyos espacios sean lo suficientemente estrechos como para impedir el paso del ave. El piso de las halconeras debe permitir su fácil limpieza y poseer buen drenaje.

c) El aspirante y el cetrero de cualquier categoría deberán poseer el siguiente equipamiento:

1. - Pihuelas: Un par de pihuelas modelo Aylmeri o similar construidas de un material flexible como piel o cuero de primera calidad u otro material sintético similar.
2. - Lonjas y tornillos quita vueltas: Una lonja construida de un material flexible y resistente al agua y al sol y un tornillo quita vueltas fuerte y de un diseño aceptable según el tamaño y peso del ave. Tornillos de pecheras de perros no deben ser aceptados como adecuados.
3. - Un contenedor adecuado, con un rango de profundidad de dos (2) a seis (6) pulgadas y más ancho que el largo del ave, dispuesto para proveer a las aves con agua para beber y bañarse.
4. - Posaderos exteriores: Deberán poseerse posaderos exteriores, al menos uno para cada ave, localizados en lugares adecuados y del tipo adecuado para el ave.
5. - Equipo de pesaje: Una balanza graduada, con incrementos no mayor de media (1/2) onza o quince (15) gramos.

Artículo 9. - De las Inspecciones

a) Personal del Departamento efectuará inspecciones en las siguientes situaciones:
   1. - Para cumplimentar requisitos de la solicitud de Aprendiz de Cetrero.
   2. - Para comprobar información contenida en los informes anuales.

b) Las inspecciones deberán ser notificadas con no menos de quince (15) días de anticipación.

c) El resultado de la inspección se notificará por escrito en un período no mayor de diez (10) días.

d) Pueden realizarse inspecciones periódicas según el entendimiento del Departamento.

e) En caso de que una inspección revele irregularidades en lo especificado en el Artículo 8 de esta Ley, y el poseedor de Permiso de Cetrería o aspirante no corrije las mismas dentro de un plazo de treinta (30) días a partir de su notificación, el permiso podrá ser revocado o denegado y las aves confiscadas.

Artículo 10. - De las Instalaciones temporales para mantener las aves

a) Un ave rapaz podrá ser transportada o mantenida en instalaciones temporales por un período no mayor de treinta (30) días. Tales instalaciones deberán poseer posaderos adecuados y deberán proteger al ave de las temperaturas exteriores y la perturbación excesiva.

Artículo 11. - Marcaje de las aves rapaces

a) Ninguna ave rapaz podrá ser capturada sin que la persona que la esté capturando haya recibido un marcador numerado y de un sólo uso, de parte del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre y lo coloque en el ave inmediatamente después de la captura.

b) Se prohíbe la alteración, modificación o rotura del marcador.

Artículo 12. - Captura de aves rapaces

a) Será requisito imprescindible, antes de iniciar ningún procedimiento para la captura de un ave rapaz, poseer la debida autorización del Departamento.

b) Aves pasajeras (menor de un año de edad) podrán ser capturadas en el período de agosto a diciembre por Cetreros Aprendices, Generales o Maestros.

c) Aves que aún no han abandonado el nido (niegos) pueden ser capturados solamente por cetreros generales o maestros en el período de Marzo-Junio.

d) Cernícalos o Falconcitos (*Falco sparverius*) y Guaraguaos o Buteo de Cola Roja (*Buteo jamaicensis*) mayores de un año Podrán ser capturadas solamente por cetreros generales o maestros en el período de septiembre-noviembre.

e) La solicitud de captura de Aves Rapaces en el territorio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por poseedores de Licencias de Cetrería de otros estados de los Estados Unidos de América deberá ser autorizada por el Departamento siendo previamente evaluada por la Junta Asesora.

f) Un ave rapaz marcada por propósitos de Cetrería puede ser vuelta a capturar por su poseedor en cualquier momento.

g) Los medios de captura deben ser adecuados a la especie a capturar, no deben representar riesgos para la integridad física del ave y estén avalados por la literatura sobre el tema.

h) No se permite el uso de trampas que no requieran ser supervisadas en todo momento por la persona autorizada.

i) La captura de un ave rapaz deberá ser notificada al Departamento, conjuntamente con el número del anillo de identificación, en un plazo no mayor de cinco (5) días laborables a partir del momento de la captura.

Artículo 13. - Importación de Aves Rapaces

a) Se permitirá la importación de aves rapaces con fines de su utilización como ave de Cetrería previa autorización por el Secretario según se establece en la Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico en lo referente a la importación de especimenes de la vida silvestre.

b) Si la importación proviene de fuera del territorio de los Estados Unidos de América se deberá cumplir con todas las leyes nacionales e internacionales aplicables, incluyendo la Convención Internacional para el Comercio con Especies en Peligro bajo el Tratado Internacional (CITES siglas en inglés).

Artículo 14. - De las Condiciones de la Licencia de Cetrería

a) Las Licencias de Cetrería vencerán el 30 de junio más próximo a la fecha de emisión de la licencia.

b) El poseedor de una Licencia de Cetrería podrá transferir o intercambiar sus aves con otro poseedor de permiso una vez notificado y autorizado por el Departamento, y no medie en la transacción dinero u otras consideraciones que no sean aquellas relacionadas estrictamente con el arte de Cetrería.

c) Antes del 30 de junio de cada año, el poseedor de una Licencia de Cetrería deberá presentar un informe al Departamento conteniendo la siguiente información:

1. - Un listado de todas las aves rapaces en su posesión en el momento de redactar el informe, indicando especie, edad, sexo, número de marcador y la fecha, fuente y lugar de adquisición.

2. - Un listado de todas las aves rapaces que estaban en su posesión en el momento de redactar el informe anterior y que ya no lo están, indicando especie, edad, sexo, número de marcador, la fecha, fuente y lugar de adquisición, el destino y sus causas.

c) Una Licencia de Cetrería es válida desde el momento de su emisión hasta el 30 de junio del segundo año calendario después de su emisión a menos que otra cosa se especifique en el mismo e independiente de la fecha de emisión.

d) El poseedor de una Licencia de Cetrería puede poseer plumas recolectadas durante el período de muda de las aves que pueden ser conservadas o intercambiadas entre los poseedores de Licencias de Cetrería solamente con propósito de usarlas para reparar plumaje dañado de las aves.

e) Poseedores de Licencias de Cetrería emitidos en otros estados de los Estados Unidos de Norteamérica u otros países deberán obtener notificación por escrito del Departamento que lo autoricen a realizar actividades relacionadas con su licencia en el territorio de Puerto Rico.

Artículo 15. - Renovaciones de las Licencias de Cetrería

La solicitud de renovación de las Licencias de Cetrería deberá radicarse en el Departamento no menos de treinta (30) días laborales de anticipación al 30 de junio más próximo a la fecha de emisión de la licencia.

b) Se acompañará la radicación con la prueba de entrega del informe intermedio y el informe del año que concluye.

c) Los derechos por concepto de radicación serán de diez (10) dólares.

d) La renovación tardía pero anterior a la fecha de vencimiento, conllevará un cargo de veinte dólares.

e) La renovación tardía más allá de la fecha de vencimiento pero no mayor de seis (6) meses de ésta, deberá ser acompañada del cargo especificado en el inciso (d) y de una carta explicando los motivos de la tardanza. Quedará a la consideración del Secretario la autorización de la prórroga.

f) La renovación tardía más allá de los seis (6) meses de la fecha de vencimiento conllevará la cancelación de la Licencia, incautación de las Aves Rapaces en poder del tenedor de la Licencia y la radicación de todo lo necesario para dar inicio a los procedimientos y requisitos especificados en esta Ley para los Aprendices.

Artículo 16. - De la Junta Asesora

a) Se crea una Junta para asesorar al Secretario en lo referente a la implantación de esta Ley, la redacción, aplicación y revisión de los exámenes para aspirantes a Aprendiz de Cetrero, la formación de personal del Departamento en lo relacionado a las inspecciones y a la redacción de reglamentos.

b) La Junta estará integrada por un (1) Biólogo representante de una organización de conservación de aves en Puerto Rico, dos (2) Cetreros Maestros, un (1) Biólogo de Vida Silvestre del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, un (1) Biólogo de Vida Silvestre nombrado por el Secretario.

c) El Departamento aprobará un reglamento interno para el funcionamiento de esta Junta.

Artículo 17. - Áreas y Temporadas de Caza de Cetrería

a) Toda actividad de caza de Cetrería se desarrollará en las temporadas especificadas por el Secretario en, al menos, dos (2) periódicos de mayor circulación en Puerto Rico, sesenta (60) días antes de comenzar la temporada de caza de Cetrería.

b) Se autoriza la práctica de la Cetrería en áreas privadas previa autorización del dueño o su representante autorizado.

c) En las áreas establecidas por el Secretario mediante reglamento.

d) En Cotos de Caza debidamente autorizados por el Secretario y bajo las condiciones que la administración del coto establezca.

e) Las actividades de adiestramiento de aves rapaces para Cetrería se podrán llevar a cabo en cualquier época del año.

Artículo 18. - De las especies de caza

a) Se permite la caza de aquellas especies designadas por el Secretario mediante reglamento para tales propósitos.

b) Se permite la caza, previamente autorizada por el Secretario, de determinadas especies exóticas o de alguna manera identificadas como dañinas al medio natural de Puerto Rico.

c) Se permite el uso de especies domésticas como presas de escape durante el adiestramiento de las aves rapaces, siempre y cuando esta fase del adiestramiento no ocurra en área de concentración pública ni constituya un espectáculo.

Artículo 19. - Facultades conferidas

a) El Secretario podrá delegar cualesquiera de las funciones conferidas por esta Ley excepto la de aprobar, enmendar y derogar reglamentos para llevar a cabo los propósitos de esta Ley de conformidad a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme o la Ley Núm. 170 del 12 de Agosto del 1988, según enmendada, los cuales luego de promulgados tendrán fuerza de ley.

b) El Departamento podrá aprobar reglamentación con disposiciones iguales o más escritas a las establecidas por el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos de América o por esta Ley.

Artículo 20. – Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, luego del estudio y análisis del P. de la C. 3007, tiene el honor de recomendar la aprobación con las siguientes enmiendas.

**En el Texto:**

| | |
|---|---|
| Página 4, línea 8, | tachar "especies" y sustituir por "especie" |
| Página 7, línea 1, | tachar "Cctrería" y ssutituir por "Cetrería" |
| Página 7, línea 10, | después "cinco mil" insertar "(5,000)" |
| Página 8, línea 13, | tachar "cuarso" y sustituir por "curso" |
| Página 9, línea 1, | tachar "De las" |
| Página 9, línea 3, | insertar "." al final de la oración |
| Página 9, línea 6, | insertar "." al final de la oración |
| Página 9, línea 16, | después de "un" insertar "cetrero general o maestro cetrero" |
| Página 9, línea 18, | después de "El" insertar "cetrero general" |
| Página 10, línea 20, | después de "rapaces" insertar "protección" |
| Página 12, línea 6, | tachar "De las" |
| Página 12, línea 20, | tachar "De las" |
| Página 13, línea 17, | tachar "Podrán" y sustituir por "pueden" |
| Página 14, línea 4, | tachar "estén" y sustituir por "deben estar" |
| Página 14, línea 20, | tachar "De las" |
| Página 15, línea 14, | tachar "c)" y sustituir por "d)" |
| Página 15, línea 17, | tachar "d)" y sustituir por "e)" |
| Página 15, línea 21, | tachar "e)" y sustituir por "f)" |
| Página 16, línea 2, | insertar al principio de la línea |
| Página 17, línea 1, | tachar "De las" |
| Página 17, línea 14, | después de "Secretario" insertar "y se publicará" |
| Página 18, línea 1, | tachar "De las especies" y sustituir por "Especies" |
| Página 18, línea 12, | tachar "funciones" y sustituir por "facultades" |

Página 18, línea 15, tachar "o la" y sustituir por "mejor conocida como"
Página 18, línea 18, tachar "escritas" y sustituir por "estrictas"

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

El P. de la C. 3007 tiene como finalidad establecer la Ley de Cetrerías con el propósito de regular la práctica de la cetrería como arte de caza en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para definir facultades, poderes y deberes del Secretario del Reglamento de Recursos Naturales y Ambientales, para otorgar, renovar y revocar licencias de cetrería, para fijar penalidades por la violación de ésta ley y de los reglamentos promulgados en virtud de la misma.

Como bien expresa la Exposición de Motivos de la presente pieza legislativa , la cetrería en un arte de caza legítimo que estimula y requiere gran conocimiento y concentración de quienes la practican, con el medio natural y la vida silvestre. Puede considerarse como una modalidad de caza de bajo impacto debido a que de desarrolla de manera casi natural. La cantidad usual de presas capturadas es usualmente una por salida en gran parte de la temporada y su fin último no es el número de presas capturadas sino la perfección del adiestramiento del rapaz.

Esta práctica es una que data de miles de años. Es un arte de caza legal en todos los estados de la unión Americana donde existe una gran cantidad de organizaciones y cetrerías que posibilitan el intercambio de experiencia con Puerto Rico.

La Cámara de Representantes realizó una vista pública entorno a la presente medida el pasado 11 de abril del año en curso. A la misma comparecieron el Departamento de Agricultura, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientes y "Halcón Sur"- Raptor Rehabilitation Project.

Es interesante señalar que esta forma de caza es muy antigua. Su origen es incierto debido a la ausencia de evidencia pero sus primeros reportes gráficos datan allá para el año 406 A.C. en forma de bajorrelieves en Korsubub, Mesopotamia (Persia) (Rodríguez de la Fuente, 1965).

**LAS AVES DE PRESA EN PUERTO RICO**

En la avifauna de Puerto Rico se pueden encontrar, especies de rapaces duirnas (orden Falconiformes) y especies de rapaces nocturnas (orden strigiformes).

A continuación el listado de las especies de rapaces clasificadas en su respectivos Orden, la letra r significa especies residente en Puerto Rico y la m especies migratoria.

**ORDEN FALCONIFORMES**

Familia Cathartidae

1. Cathartes aura (Aura Tiñosa) r

Familia Accipitridae

2. Accipittier striatus (Falcón de Sierra) r
3. Buteo jamaicensis (guaragao) r
4. Buteo Platypterus (Guaragao de sierra) r
5. Circus cyaneus hudsonius (Guaragao de Sabana, Aguilucho Pálido) m

Familia Pandionnidae

6. Pandion haliatus (Aguila Pescadora) m

Familia Falconidae

7. Falco peregrinus (Halco Peregino) m
8. Falco columbaruis (Esmejon) m
9. Falco sparveruis (Falconcito) m

**ORDEN STRIGIFORMES**

Familia Strigidae

10. Otus nupides (múcaro) r
11. Asio flameus (Múcaro Real) r

De las once (11) especies de aves de presa reportadas en Puerto Rico. Al menos siete de ellas son de interes para la cetreria. Dos de ellas, las especies numeradas en el listado como 3 y 9, son comunes en el medio natural y otras dos, 7 y 8,son relativamente abundantes.

Las especies como el Falcón de Sierra y el Guaragao de Bosques son muchos más ligadas a un tipo de hábitat específico. Requieren de más estudios y el diseño de planes concretos para su recuperación y deben ser protegidas.

De todas estas especies el Falconcito y el Guaragao son aves comunes, generalistas, que actúan sobre una amplia gama de presas y ya utilizan infinidad de recursos de ambiente en muchos tipos de hábitat. Coincidentemente son las rapaces las más utilizadas por cetreros desde la etapa de aprendiz.

**CETRERÍA: LA CAZA CON AVES DE RAPACES**

La caza de cetreria es una actividad que requiere de una inversión considerable de tiempo, recursos materiales, constancia, disciplina y perseverancia por parte del que pretende prácticar, por ello es una actividad auto controlada.

Las aves de presa se clasifican según su uso en cetreria en aves de alto vuelo de las alas largas y puntiagudas (Halcones:Familia Falconidae) y aves de bajo vuelo de largas colas y alas redondeadas (Otras Falconiformes: Guaragaos, Azores, Gavilanes, Guaragao de Harris, Aguilas, etc.) y algunas Strigiformes (Buho Real).

Esta separación se basa especialmente, en el tipo de caza que se desarrolla con cada grupo de aves y la anatomía de las mismas. Los magníficos vuelos de altanería, donde los halcones (género Falco) se remontan a alturas considerables antes de abrirse sobre las presas y las persecusiones de presas de gran tamaño o alto poder de vuelo, caracteriza a estos rapaces como de alto vuelo. Persecusiones no menos emocionantes pero, por lo general, de más cortas duración y distancia, identifican la caza de bajo vuelo con rapaces de los géneros Accipiter, Buteo, Parabuteo, Aquila, ect.

En la medida analizada se establece la Ley de Cetrería en la que se regula es la práctica, como arte de caza en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para definir facultades, poderes y deberes del Secretario de DRNA, para otorgar, renovar licencias de cetreria, para fijar penalidades por la violación de esta Ley y de los reglamentos promulgados en virtud de la misma.

La Ley de Cetrería debe ser equivalente y consistente con la legislación federal vigente al respecto, para poder emitir Permisos Conjuntos de Cetrería (Falconry Joint Permits) entre las agencias federales como el Servicio Federal de Pesca y Vida Slivestre, y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

El método de control individual de la cetrería se basa en la asignación de la responsabilidad de la rapaces a cada individuo que participa de la actividad, lo cual permite un mejor control de la misma.

La presente medida establece los requisitos mínimos para obtener las licencias de cetrerías, los procedimientos para su obtención, entre otros. Tambien, la medida fue enmendada por el Cuerpo Hermano a los efectos de atemperarla a los cambios y requisitos establecidos por la "Nueva Ley de Vida Silvestre".

Esta medida propicia que los cetreros se conviertan en una herramienta útil para el manejo de técnicas de rehabilitación de conservación y como educadores. Además, la cetrería es un papel complementario en el control de algunas especies introducidas en el medio natural y/o recuperación de especies rapaces en peligro de extinción.

En relación a las fuentes consultadas, el Departamento de Agricultura señaló la necesidad de abordar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales al respecto.

Por su parte el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales reconoció que conforme la reglamentación federal, es necesaria para la práctica de la cetrería en P.R., presentar al director del Servicios de Pesca y Vida Silvestre del Departamento de Interior del Gobierno de los Estados Unidos de América, una copia de las leyes y reglamentos que rigen la práctica de este deporte en la Isla para su aprobación.

Los comentarios propuestos por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales fueron incorporadas por el Cuerpo Hermano.

Por otra parte, el señor Laredo González en representación del Halcón Sur Raptor Rehabilitation Project. nos suministro valiosa información y sugerencias sobre este deporte y que se incluyen en el presente informe.

Por los fundamentos antes expuestos, vuestra Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del P. del a C. 3007 con las enmiendas sugeridas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carlos Pagán González
Presidente
Comisión de Recursos Naturales,
Asuntos Ambientales y Energía"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3232, y se da cuenta de un informe de la Comisión de lo Jurídico, sin enmiendas.

**"LEY**

Para enmendar el Artículo 631 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, según enmendado, a fin de establecer que el monto de la fianza en apelación en casos de desahucio será fijado por el Tribunal de Primera Instancia.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La Ley Núm. 291 de 4 de diciembre de 1998 enmendó las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, referentes a la apelación de sentencias de desahucio. En el caso de la apelación de una sentencia de desahucio, se legisló para que la fianza requerida como requisito jurisdiccional sea fijada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Ello, sin embargo, no es cónsono con la naturaleza de ese foro colegiado como tribunal de récord, que no recibe evidencia. Como se sabe, la fijación de una fianza requiere la presentación de prueba para que el tribunal pueda evaluar el posible daño que la fianza busca cubrir.

Lo anterior aconseja que sea el Tribunal de Primera Instancia el foro que fije la fianza, como paso previo y jurisdiccional a la radicación del recurso de apelación. Ese tribunal puede hacerlo con facilidad al emitir sentencia o dentro del término para apelar, a base de la prueba presentada durante la vista en su fondo o en una vista de fijación de fianza.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 631 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, según enmendado, para que sea lea como sigue:

"No se admitirá al demandado el recurso de apelación si no otorga fianza, por el monto que sea fijado por el Tribunal de Primera Instancia para responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar al demandante y de las costas de apelación; pudiendo el demandado, cuando el desahucio se funde en falta de pago de las cantidades convenidas, a su elección, otorgar dicha fianza o consignar en secretaría el importe del precio de la deuda hasta la fecha de la sentencia."

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, y será aplicable a toda sentencia de desahucio emitida a partir de entonces."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado, luego del estudio y análisis del P. de la C. 3232 tiene el honor de recomendar su aprobación sin enmiendas.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

El P. de la C. 3232 tiene como propósito enmendar el Artículo 631 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, según enmendado, a fin de establecer que el monto de la fianza en apelación en casos de desahucio será fijado por el Tribunal de Primera Instancia.

Como bien expresa la Exposición de Motivos de la presente pieza legislativa la Ley 291 de 4 de diciembre de 1998 enmendó las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil , en cuanto a las sentencias de desahucio, para que fuera el Tribunal de Circuito de Apelaciones quien fije la fianza requerida como requisito jurisdiccional en las apelaciones de casos de desahucio. Esta Asamblea Legislativa entiende que la fianza en apelación en casos de desahucio deber ser fijada por el Tribunal de Primera Instancia, dado que la fijación de una fianza requiere la presentación de prueba para que el tribunal puede evaluar el posible daño que la fianza busca cubrir; y el Tribunal de Circuito de Apelaciones, por ser un tribunal de récord, no tiene la oportunidad de apreciar la prueba de la misma en que lo puede hacer el Tribunal de Instancia.

Esta pieza legislativa propone enmendar el Artículo $631^2$ del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933 para establecer que será el Tribunal de Primera Instancia, y no el Tribunal de Circuito de Apelaciones, quien fijará el monto de la fianza en apelación en los casos de desahucio.

Para el análisis de la presente pieza legislativa, contamos con los comentarios del Departamento de Justicia quienes señalaron no tener objeción legal a su aprobación. Veamos.

> "La facultad de la Asamblea Legislativa para hacer, derogar y enmendar las leyes ha sido ampliamente reconocida. Inherente a la misma, es el poder para atemperar la legislación a los cambios y necesidades que se presenten de tiempo en tiempo. Las leyes son un mecanismo dinámico, con el fin de disponer los parámetros de conducta más apropiados para el buen

funcionamiento de las diveras estructuras de la sociedad.

El Tribunal de Primera Instancia fue creado por la Ley de la Judicatura de 1994[1], como un "tribunal de jurisdicción original general, con autoridad para actuar en todo procedimiento civil o criminal según se disponga por ley. El Tribunal de Primera Instancia es un tribunal de récord.[2]

Por otra parte, el Tribunal de Circuito de Apelaciones fue establecido como tribunal intermedio entre el Tribunal Supremo y el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Circuito de Apelaciones también es un tribunal de récord.[3]

El Código de Enjuiciamiento Civil de 1933,[4] según enmendado, regula, entre otros asuntos, el procedimiento de desahucio. En particular, el antes citado Artículo 631 regula la fianza o consignación por parte del demandante cuando el procedimiento de desahucio se encuentra en etapa de apelación."

Por los fundamentos antes expuestos, vuestra Comisión de lo Jurídico, recomienda la aprobación del P. de la C. 3232, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Jorge Andrés Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2684, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Educación y Cultura; y de Hacienda, con enmiendas.

"LEY

Para crear un Distrito Teatral, cuyo parámetro cubrirá desde la Calle Bolívar hasta la Calle Ernesto Cerra en Santurce, como parte del Desarrollo y Rehabilitación de Santurce, con el propósito de establecer un centro de actividades culturales en la zona de Santurce, conceder incentivos especiales para estimular la rehabilitación del área y participación ciudadana; crear un comité de trabajo especial por el Presidente de la Junta de Planificación; y para asignar fondos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 148 de 4 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley Especial para la Rehabilitación de Santurce", tiene como propósito primordial la rehabilitación y mejoramiento del área comprendida en el Barrio de Santurce del municipio de San Juan.

---

[1] Plan de Reorganización Núm. 1ª de 28 de julio de 1994, 4 L.P.R.A. 165 22, et seq.

[2] Artículo 5.001 Ley de la Judicactura de 1994, 4 L.P.R.A. 22m.

[3] Artículo 4.001 Ley de la Judicatura de 1994, 4 L.P.R.A. 22j.

[4] 32 L.P.R.A. 2821, *et seq.*

Según reza en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 148, supra, Santurce nunca contó con un plano rector para su desarrollo. Los esfuerzos aislados para estimular el desarrollo de Santurce se han visto obstaculizados y diluidos al enfrentarse a una falta de infraestructura y servicios básicos necesarios, tales como transportación colectiva eficiente, estacionamientos adecuados, accesos suficientes y un patrón de calles que promueva un eficaz flujo de tránsito; a la presencia de estructuras en estado avanzado de deterioro y a un conjunto de grandes predios de terrenos sin uso o en usos de baja densidad que interrumpen el patrón de calles y crean bolsillos abandonados de población durante las horas nocturnas; y a una creciente opinión pública que visualiza al sector como peligroso.

Durante las últimas décadas, el sector ha sido objeto de cambios y procesos que han alterado su base económica y social, deteriorándose su vitalidad económica, su infraestructura urbana y reduciéndose su población.

En la Ley Núm. 48, supra, se establecen las directrices para lograr la rehabilitación y el desarrollo de Santurce. Entre otras, se encuentra aumentar y fortalecer la actividad económica en Santurce, consolidando y fortaleciendo la actividad económica existente y fomentando nuevas actividades en los renglones de servicios, comercios especializados y negocios relacionados con recreación y cultura.

En el sector de Santurce, el área comprendida entre la Calle Bolívar y Ernesto Cerra, se distinguió en el pasado por la profusión de salas de teatro y salas de cine, a las cuales acudía gran cantidad de público a disfrutar de representaciones artísticas de todo género y estrenos de la cinematografía. En la zona se establecieron negocios complementarios que propiciaban las reuniones y las más amenas tertulias. El deterioro de la zona ocasionado por los factores antes mencionados hizo desaparecer, también, la intensa actividad artística y cultural que existió en el lugar.

El cierre de estas salas de teatro y de cine, así como de los lugares de actividades complementarias, privó a la clase artística y al público en general de lugares apropiados para presentar estas producciones.

Existe un reclamo para que se haga realidad la rehabilitación de aquellas estructuras que en muchos casos son de un gran valor arquitectónico, para que se dediquen primordialmente como centros de actividades culturales. Esta aspiración debe hacerse realidad puesto que en el lugar operan con gran éxito la Escuela de Bellas Artes en la antigua Escuela Superior Central y el Centro de Bellas Artes.

A tenor con la política pública del Gobierno de lograr la rehabilitación y desarrollo integral de Santurce, es necesario crear un Distrito Teatral, cuyo parámetro cubrirá desde la Calle Bolívar hasta la Calle Cerra en Santurce que sirva de complemento al propósito del desarrollo integral de Santurce. La rehabilitación y apertura de diversas salas de teatro y cine propiciarán el interés de los puertorriqueños por el teatro, la música, la poesía y el cine, así como otras actividades culturales.

La Asamblea Legislativa considera de vital importancia la creación de un Distrito Teatral como parte esencial de la rehabilitación y desarrollo de Santurce. Esta ley servirá de complemento a la Ley creada para el Desarrollo y Rehabilitación de Santurce.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.- Título de la Ley.-

Esta ley se conocerá como "Ley Especial para la Creación del Distrito Teatral de Santurce".

Artículo 2.- Definiciones

Para los fines de esta Ley, los siguientes vocablos y frases tendrán el significado y alcance que a continuación se expresa:

(a) Inversionista Teatral - El término inversionista teatral significa toda persona natural o jurídica que durante al año contributivo para el cual reclama deducciones, exenciones o beneficios provistos por esta Ley tenga una certificación vigente expedida por el Presidente de la Junta de Planificación en previa consulta con el Secretario de Hacienda, la cual certifique que durante

dicho año se dedicó a la explotación de una actividad que cualifica como un negocio teatral, según dicho término se define en el inciso (b), y que derive el cincuenta (50) por ciento o más de su ingreso bruto de un negocio teatral como operador, dueño o arrendatario, según conste en su planilla de contribución sobre ingresos.

(b) Negocio teatral - El término negocio teatral significa la operación o explotación de uno o más de los siguientes negocios:

(i) Nuevas construcciones de edificios o salas que habrán de destinarse obras teatrales, que ubiquen dentro de la zona geográfica expuesta por esta ley.

(ii) Rehabilitación de edificios o salas dedicados históricamente a la presentación de obras teatrales, que ubiquen dentro de la zona geográfica expuesta por ley.

(iii) Edificaciones dedicadas al presente a la presentación de obras teatrales, que ubiquen dentro de la zona geográfica expuesta por esta ley.

(iv) Edificaciones dedicadas al presente a la presentación de cintas cinematográficas, que ubiquen dentro de la zona geográfica expuesta por esta ley.

(v) Edificaciones a dedicarse a actividades complementarias a la gestión teatral, tales como galerías de arte, cafés galerias, cafés teatros y cualquier otro tipo de negocios o salas para conciertos, óperas, comedias y negocios de vestuario, mobiliario y escenografía.

(c) Distrito Teatral - significa la zona geográfica que se extenderá a lo largo de la Avenida Ponce de León, desde la Calle Bolivar hasta la Calle Ernesto Cerra.

(d) Contribuciones sobre la propiedad - contribuciones impuestas por la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991", sobre el valor de toda propiedad mueble e inmueble que utiliza el inversionista teatral en la operación de su negocio teatral.

(e) Bienes muebles e inmuebles - significa la definición establecida en el Artículo 3.11 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de la Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991", que sean utilizados para el desarrollo de las actividades teatrales.

(f) Contribución sobre ingresos - contribución impuesta por la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", sobre el ingreso neto de la producción anual del negocio teatral, y sobre el ingreso neto por concepto de intereses, rentas y dividendos, y cualesquiera ingresos derivados del mismo.

Para fines de esta ley el ingreso neto se determinará de conformidad con lo dispuesto en las Secciones 1021, 1022 y 1023 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada conocida como "Código Rentas Internas de 1994".

(g) Patente - impuesto municipal sobre las ventas generados de la actividad teatral, establecido en la del 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de Patentes Municipales de 1974".

(h) Fondos de Valores o Fondos - significará cualquier fondo, corporación o sociedad, incluyendo una sociedad que haya efectuado una elección bajo la Ley Núm. 91 de 4 de junio de 1954, según enmendada, conocida como Ley de Contribución Sobre Ingresos de 1954, o la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994" que como una entidad inversionista opere según los propósitos que en cumplimiento con los requisitos que se establecen en la Ley Núm. 3 de 6 de octubre según enmendada, conocida como "Fondo de Capital de Inversión", o en cualquier otra ley de naturaleza similar que la sustituya o la complemente y los reglamentos vigentes o que se promulguen bajo las mismas.

(i) Inversionista - significa cualquier persona que haga elegible una inversión. Cuando la persona que haga la inversión elegible sea un Fondo, los participantes del Fondo serán considerados los inversionistas y no el Fondo.

(j) Participante - significa la persona que haga una inversión en valores de un fondo en la emisión primaria.

(k) Inversión elegible significa:

(1) La cantidad de efectivo que haya sido aportada para ser utilizada en un negocio teatral a cambio de: (i) acciones en la corporación, si el negocio teatral es una corporación: (ii) la participación o el aumento en la participación en una sociedad o empresa en común o negocio individual.

(2) El valor de los terrenos aportados para ser utilizados en un negocio teatral a cambio de; (i) acciones en la corporación, si el negocio teatral es una corporación; o (ii) a participación o el aumento en la participación, en una sociedad o empresa común o negocio individual. El valor del terreno aportado o será el justo valor en el mercado, reducido por el balance cuantía de las hipotecas que graven el terreno al momento de la aportación. El justo valor en el mercado se determinará basado en una tasación de dicho terreno realizada por uno o más tasadores profesionales debidamente licenciados en Puerto Rico. El Presidente de la Junta de Trabajo Especial deberá aprobar el valor del terreno según determinado por el tasador antes de que el mismo sea aportado al negocio teatral.

(3) Aportaciones en efectivo hechas por un fondo a una corporación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o cualquiera de sus subsidiarias, a cambio de: (i) las acciones o participaciones en un negocio teatral que posean dichas corporaciones o subsidiarias o; (ii) la deuda subordinada que tenga el negocio teatral con dichas corporaciones o subsidiarias.

(4) Constituirá una inversión elegible el efectivo o el valor de los terrenos aportados en la emisión primaria de acciones o participaciones en un negocio teatral que lleve a cabo dichas operaciones durante por lo menos un período de diez (10) años consecutivos, siempre y cuando los fondos obtenidos en dicha emisión sean utilizados en su totalidad única y exclusivamente para:

A. Establecer y operar negocios teatrales nuevos. - El término "negocio teatral nuevo" significa cualquier negocio teatral, según definido en esta Ley, que se inicie o comience en o después de la capitalización inicial del negocio. No cualificarán como inversión elegible los fondos utilizados para la adquisición de un negocio teatral existente. No obstante, se considerará como una inversión elegible el momento del precio de compra de un negocio teatral existente cuando como parte de dicha adquisición el adquirente aporta capital adicional al negocio teatral por una suma no menor del doscientos (200) por ciento del precio de adquisición. Las disposiciones anteriores no aplican a la compra o adquisición por personas relacionadas de un negocio teatral existente. El término "persona relacionada" se determinará conforme a los criterios establecidos en las Secciones 1024(b) y 1028 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994".

El término "inversión elegible" no incluirá una inversión efectuada con el efectivo proveniente de un préstamo que esté garantizado por el propio negocio teatral o por sus activos.

B. La renovación o expansión sustancial de negocios teatrales existentes. - Los fondos aportados para la renovación o expansión sustancial cualificarán como una inversión elegible, únicamente si dicha renovación o expansión equivale a por lo menos veinticinco (25) por ciento de: (i) el valor del terreno utilizado en el negocio teatral existente; o (ii) el valor en los libros de los bienes inmuebles utilizados en el negocio teatral existente, sin considerar los

terrenos. El término "inversión elegible" no incluirá una inversión efectuada con el efectivo proveniente de un préstamo que esté garantizado por el propio negocio teatral o por sus activos.

C. La adquisición de maquinaria, equipo o capital de trabajo a ser utilizados en operaciones corrientes. - Los fondos aportados para la adquisición de maquinaria, equipo o capital de trabajo cualificarán como inversión elegible siempre y cuando la maquinaria, equipo o capital de trabajo sean utilizados exclusivamente en el negocio teatral. Para estos fines, no se considerará como un uso elegible de fondos la adquisición de la maquinaria o equipo previamente utilizado en un negocio teatral en Puerto Rico. Además, el término capital de trabajo no incluye fondos utilizados para el establecimiento de reservas.

En el caso de que se efectúe una de las aportaciones descritas en los párrafos (1) o (2) de este inciso, dicha aportación se considerará como inversión elegible sólo si dicha inversión se hace en la emisión primaria de las acciones o participaciones.

Artículo 3. -Creación del Distrito Teatral de Santurce.-

Se crea un Distrito Teatral dentro del área del Barrio Santurce en el Municipio de San Juan que será rehabilitado y desarrollado según las disposiciones de esta Ley y, en forma complementaria, a tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 148 de 4 de agosto de 1988, según enmendada.

Artículo 4. -Propósito y guías para la creación de la Zona Especial del Distrito Teatral de Santurce.-

El propósito de esta Ley es establecer un centro de actividades culturales en el Barrio Santurce, que contribuirá a la restauración y remodelación de estructuras con elementos distintivos que indiquen que se está dentro de una zona de actividad teatral. Se pretende, con ello, mantener y promover el desarrollo cultural de nuestro pueblo y para ello es necesario, además, mantener la producción artística en forma continuada para que el pueblo la internalice como parte esencial de su vida espiritual. El teatro, la música y la poesía, entre otras actividades culturales, han contribuido en gran medida al desarrollo espiritual e intelectual de los pueblos.

Artículo 5. -Establecimiento de esta Zona Especial y los límites geográficos que constituirá el Distrito Teatral de Santurce.

Este Distrito Teatral de Santurce se extenderá a lo largo de la Avenida Ponce de León, desde la Calle Bolivar hasta la Calle Ernesto Cerra donde ubican las siguientes facilidades de teatro o cine, algunas en uso, conocidas como: Metropolitan, Matienzo, Music Hall, Radio City, el Josco, el Centro de Bellas Artes, Escuela Superior Central, Georgetti, Salvador Brau, Paramount, Ambassador, Nuestro Teatro y el Teatro Metro. También incluiría los Teatros Cinerama y Rex Cinema de la Avenida Fernández Juncos y el Teatro del Museo de Arte de Puerto Rico a construirse en la Calle De Diego y el Teatro Riviera ubicado en la Calle Loíza.

Artículo 6.-Designación de la Zona Especial para el Distrito Teatral de Santurce.-

La Junta de Planificación designará la Zona Especial creada mediante esta Ley, de conformidad con el Plan de Desarrollo Integrado que establezca en coordinación con la Junta Especial de Trabajo, que más adelante se crea. La designación hará posible la concesión de los incentivos y beneficios consignados en la Ley Núm. 148 de 4 de agosto de 1988 y en esta Ley.

El Plan de Desarrollo incluirá, además, elementos distintivos que identifiquen, sin lugar a dudas, el área del Distrito Teatral, tales como: rótulos apropiados con la iluminación adecuada y el desarrollo de actividades y servicios afines.

Artículo 7.- Creación Junta Especial de Trabajo para el Desarrollo del Distrito Teatral de Santurce.-

Se crea una Junta de Trabajo Especial para el Desarrollo del Distrito Teatral de Santurce, de duración indefinida, la cual presidirá el Presidente de la Junta de Planificación y estará compuesta, además, por el Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Administrador de la Administración de Reglamentos y Permisos, el Director del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, el Presidente de la Corporación de las Artes Musicales, el Director de la Corporación para el Desarrollo del Cine en Puerto Rico,

el Alcalde del Municipio de San Juan, el Presidente del Colegio de Actores de Teatro de Puerto Rico y cualquier otra persona que el Presidente de la Junta de Planificación considere necesaria.

La Junta aquí constituida trabajará en estrecha coordinación con el Grupo de Trabajo Interagencial Especial para Santurce creado en el Artículo 12 de la Ley Núm. 148 de 4 de agosto de 1988, según enmendada y habrán de reunirse no menos de una vez cada dos meses en la jurisdicción del Municipio de San Juan.

La Junta Especial de Trabajo presentará un Informe no más tarde del 28 de febrero de cada año a la Presidencia de ambas Cámaras Legislativas sobre sus acciones y logros. En el informe incluirá detalles sobre los problemas y situaciones del Distrito Teatral con los que han tenido que ver, estrategias adoptadas, soluciones obtenidas, prioridades, planes de trabajo, problemas, soluciones, logros y sugerencias de reforma legislativa o administrativa.

Artículo 8.- Aplicación de Incentivos.-

Los incentivos dispuestos en los Artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Núm. 148 de 4 de agosto de 1988, según enmendada, serán de aplicación en el Distrito Teatral de Santurce a propiedades, negocios e industrias que cumplan con las especificaciones de la Zona del Distrito Teatral de Santurce:

a) Exención Contributiva a Propiedad Elegible Rehabilitada Sustancialmente o de Nueva Construcción.

b) Condonación de Intereses, Recargos y Penalidades por Contribuciones a la Propiedad inmueble adeudados por propiedad elegible, según se define en el Artículo 15 de la Ley Núm. 148 de 4 de agosto de 1988, según enmendada, a la fecha de otorgación de la exención, según provista en la ley.

c) Incentivos Especiales a Propiedad Elegible bajo la Ley de Alquileres Razonables.

d) Garantía del Banco de Desarrollo a los proyectos viables de rehabilitación sustancial, mejoras o nueva construcción de propiedad elegible a ser desarrollados en el Distrito Teatral de Santurce a concederse durante un período de diez (10) años, a partir de la vigencia de esta Ley. El Banco de Desarrollo podrá asegurar las garantías que otorgue por medio de un seguro. Los fondos para engrosar el seguro podrán provenir del cobro de un cinco (5) por ciento del valor de los préstamos hipotecarios otorgados en Santurce, garantizados por el Banco de Desarrollo.

El Banco de Desarrollo someterá un informe especial a la Asamblea Legislativa con una evaluación de su participación en la otorgación de las garantías autorizadas por esta Ley, incluyendo una relación de las solicitudes recibidas, así como sus determinaciones en cuanto a las mismas.

e) Incentivos para Creación de Empleos en Negocio e Industrias.

f) Otros Incentivos para Negocios e Industrias, consistentes en la exención del pago de contribuciones sobre ingreso a la mitad del ingreso neto obtenido por la venta de boletos de entrada para espectáculos artísticos y culturales que se realicen en el Distrito Teatral de Santurce en establecimientos ubicados en estructuras de nueva construcción, rehabilitadas sustancialmente, o que sean objeto de mejoras por un período de cinco (5) años a partir de la fecha en que se complete la construcción, rehabilitación sustancial o mejora. Para acogerse a estos beneficios dicha construcción, rehabilitación o mejora deberá realizarse dentro de un plazo de cinco (5) años a partir de la designación de la zona en que se ubique el establecimiento. El Departamento de Hacienda establecerá por reglamento el procedimiento para acogerse a esta exención.

La Junta de Trabajo Especial, a través de sus componentes, podrá establecer otros incentivos adicionales relacionados con espectáculos culturales que sirvan para promover la participación del pueblo.

Artículo 9.-Requerimientos a los que se acojan a los Beneficios de esta Ley.-

Para acogerse a los beneficios contributivos que establece esta Ley y mientras disfrute de los mismos, se requiere a toda persona natural o jurídica estar al día en todas su responsabilidades con el Estado Libre

Asociado de Puerto Rico y todas sus dependencias, agencias, instrumentalidades y con el municipio de San Juan.

Disponiéndose, además, que para acogerse a dichos beneficios contributivos y poder disfrutar de ellos durante los períodos dispuestos por esta Ley, las propiedades y negocios beneficiados deberán cumplir con todos los reglamentos de planificación aplicables al sector y que se hayan promulgado para guiar el desarrollo de esta Zona Teatral.

Artículo 10.- Otras disposiciones.-

El Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Departamento de Hacienda, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, el Banco de Desarrollo, la Junta de Planificación y cualquier otra agencia que el Presidente de la Junta de Planificación entienda que debe autorizarse a esos efectos, quedan por la presente autorizados a aprobar reglas y reglamentos para cumplir con las disposiciones de esta Ley.

Artículo 11. -Crédito contributivo por inversión en negocios teatrales

(a) Sujeto a las disposiciones del inciso (c) de esta sección, toda inversionista, incluyendo un participante en un fondo, tendrá derecho a un crédito por inversión en negocios teatrales hasta un límite de cinco (5) millones de dólares ($5,000,000) por año fiscal, y de dos (2) millones de dólares ($2,000,000) por año fiscal en rehabilitaciones de estructuras existentes de su inversión elegible o su inversión en valores de un Fondo de Valores, o Fondos a ser reclamado en dos (2) plazos: hasta la mitad de dicho crédito en el año en que el negocio teatral obtuvo el financiamiento necesario para su operación, de requerir financiamiento, y el balance de dicho crédito, en los próximos dos (2) años siguientes. Si se estableciese una cuenta en plica y la misma fuese disuelta por no haberse obtenido el financiamiento necesario para la operación del negocio teatral, los participantes no tendrán derecho al crédito. Toda inversión elegible hecha en o antes de la fecha límite para la radicación de la planilla de contribuciones sobre ingresos según dispuesto por la Ley Núm. 91 de 29 de junio de 1954, según enmendada, conocida como "Ley de Contribuciones Sobre Ingresos de 1954, o por la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", cualificará para el crédito contributivo de esta sección en el año contributivo para el cual se está radicando la planilla antes mencionada, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de esta sección. Dicho crédito por inversión podrá aplicarse contra cualquier contribución determinada por el inversionista o el participante bajo la Ley Núm. 91 de 29 de junio de 1954, según enmendada, conocida como la "Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954", o bajo el Subtítulo A de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", incluyendo la contribución alternativa mínina aplicable a corporaciones y sociedades y la contribución básica alterna aplicable a individuos.

Este crédito no podrá ser utilizado para satisfacer las contribuciones impuestas por cualquier otro Subtítulo de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994" o por cualquier otra ley, incluyendo pero sin limitarse a, la Ley Núm. 8 de 24 de enero de 1987, según enmendada, conocida como "Ley de Incentivos Contributivos de 1987", o cualquier otra ley de naturaleza similar que la sustituya o complemente.

El crédito por inversión en negocios teatrales permitido por esta sección no será aplicable, ni estará disponible en el caso de que el participante adquiera valores de un Fondo de Valores, o Fondos, en emisión primaria, para sustituir otros valores de un Fondo que fueron vendidos, permutados o transferidos de cualquier forma por dicho participante y respecto a los cuales el participante no reconocerá, en todo o en parte, la ganancia derivada de dicha venta, permuta o transferencia.

El inversionista o participante deberá solicitar una determinación administrativa del Secretario de Hacienda antes de reclamar el crédito por inversión en el negocio teatral, a fin de que éste determine si la inversión realizada o que se propone realizar el negocio teatral cualifica para el crédito contributivo por inversión.

En el caso de un negocio teatral existente y en operaciones a la fecha de aprobación de esta ley, la primera mitad del crédito podrá reclamarse en el año en que se realice la inversión elegible.

En el caso en que se adquiera un negocio teatral existente aportando capital adicional de por lo menos doscientos (200) por ciento del costo de dicho negocio, el inversionista tendrá derecho al crédito que se concede en este inciso siempre y cuando dicha aportación adicional se lleve a cabo dentro de un período no mayor de tres (3) años a partir de la fecha de la adquisición del nuevo negocio. Para estos fines, el inversionista o participante deberá efectuar no menos del veinticinco (25) por ciento de la inversión elegible durante el primer año de este período; no menos del treinta y cinco (35) por ciento en el segundo año y el remanente, si alguno, en el tercer año.

(b) *Arrastre de crédito* - Todo crédito por inversión en negocios teatrales no utilizado en un año contributivo podrá ser arrastrado a años contributivos subsiguientes hasta tanto sea utilizado en su totalidad.

(c) *Cantidad máxima de crédito* - La cantidad máxima de crédito por inversión en negocios teatrales por cada negocio que estará disponible a los inversionistas y a los participantes será hasta el límite de cinco (5) millones de dólares ($5,000,000) por año fiscal, en caso de ser una nueva construcción, y de dos (2) millones de dólares ($2,000,000) por año fiscal, en casos de rehabilitación de estructuras existentes, a través del Fondo, a los negocios teatrales a cambio de acciones o participantes en dichos negocios teatrales. La cantidad máxima del crédito disponible se distribuirá entre los inversionistas y los participantes en las proporciones determinadas por ellos. El negocio teatral notificará la distribución del crédito a la Junta de Trabajo Especial y a sus accionistas en o antes de la fecha provista por la Ley Núm. 91 de 29 de junio de 1954, según enmendada, conocida como "Ley de Contribuciones Sobre Ingresos de 1954" o por la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", según sea el caso, para radicar la planilla de contribuciones sobre ingresos para su primer año de operaciones, incluyendo cualquier prórroga otorgada por el Secretario de Hacienda para la radicación de la misma. La distribución elegible será irrevocable y obligatoria para el negocio teatral, los inversionistas y participantes.

En ningún caso el monto del crédito por inversión en negocios teatrales excederá de cinco (5) millones de dólares por año contributivo por cada negocio teatral.

El Secretario de Hacienda autorizará los créditos por inversión reclamados por los inversionistas o por los participantes, según sea el caso, hasta el límite de quince (15) millones de dólares por año fiscal. No obstante, en aquellos casos en que el Presidente de la Junta de Planificación, el Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña y el Secretario de Hacienda evalúen las actividades que se propone realizar un negocio teatral, y consideren que el mismo contribuirá sustancialmente al desarrollo de este sector económico, el Secretario de Hacienda podrá autorizar los créditos por inversión en dicho negocio aun cuando para el año fiscal particular ya se hayan concedido créditos hasta el límite de quince (15) millones de dólares que autoriza este apartado. Para estos fines, de la cantidad de quince (15) millones de dólares se reservarán durante los primeros seis (6) meses del año fiscal, créditos por inversión de cinco (5) millones de dólares para los inversionistas o participantes, cuyas inversiones no

excedan un (1) millón de dólares. De no haberse utilizado dicha cantidad reservada en su totalidad durante el período antes mencionado, la misma estará disponible para cualquier inversionista o participante, independientemente del monto de su inversión.

(d) *Ajuste de Base y Recobro del Crédito.-*

(1) La base de toda inversión elegible se reducirá por la cantidad reclamada como crédito por inversión en negocios teatrales, pero nunca podrá reducirse a menos de cero.

(2) Transcurrido el término de tres (3) años desde la fecha de la notificación descrita en el inciso (c) de esta sección, la Junta de Trabajo Especial determinará la inversión total hecha por el negocio teatral. En el caso de inversiones hechas a partir del 18 de noviembre de 1997, el inversionista o participante deberá efectuar no menos del veinticinco (25) por ciento de la inversión elegible durante el primer año de este período; no menos de treinta y cinco (35) por ciento en el segundo año y el remanente, si alguno, en el tercer año. En el caso de que el crédito por inversión en el negocio teatral reclamado por los inversionistas exceda el crédito computado por la Junta de Trabajo Especial, basado en la inversión total hecha por el negocio teatral en la actividad, dicho exceso se considerará como contribución sobre ingresos adeudada a ser pagada por los inversionistas en dos (2) plazos, el primero de los cuales vencerá en el primer año contributivo siguiente a la fecha de expiración del período de tres (3) años antes mencionado y el segundo, en el año contributivo siguiente.

(3) Si cualquier negocio teatral cesa de llevar a cabo operaciones como tal antes de la expiración del período de diez (10) años dispuesto en el Artículo 3(k) (4) de esta Ley, el inversionista o participante adeudará como contribuciones sobre ingresos una cantidad igual al crédito por inversión en el negocio teatral reclamado por dicho inversionista o participante, multiplicado por una fracción cuyo denominador será diez (10) y cuyo numerador será el balance del período de diez (10) años que requiere esta Ley. La cantidad adeudada por concepto de contribución sobre ingresos será pagada en dos (2) plazos comenzando con el primer año contributivo siguiente a la fecha del cese de la actividad teatral.

(e) *Crédito por pérdida.* - Toda pérdida sufrida en la venta, permuta u otra disposición de una inversión elegible o valor de un fondo por un inversionista o participante se considerará como una pérdida de capital, pero dicho inversionista o participante, a su elección podrá reclamar dicha pérdida como un crédito contra la contribución determinada en el año contributivo de dicha pérdida y en los cuatro (4) años contributivos siguientes. La cantidad de la pérdida que podrá reclamar como crédito en cada uno de los años antes indicados no podrá exceder de una tercera (1/3) parte de la pérdida. Cualquier pérdida que se reclame como un crédito contra la contribución sobre ingresos reducirá la base de la inversión elegible o del valor de un fondo en la misma cantidad del crédito reclamado, pero dicha base nunca se reducirá a menos de cero. No se permitirá la opción de reclamar la pérdida como crédito contra la contribución sobre ingresos si la base de la inversión elegible o del valor de un fondo es igual a cero. Para propósitos de determinar la cantidad del crédito por pérdida, la base de la participación en una sociedad especial no será ajustada para reflejar los aumentos a dicha base calculados según la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994". Por otro lado, cualquier disminución en la base determinada, según dichas secciones, será reconocida para propósitos del cómputo del crédito por pérdida, pero sólo hasta el monto del beneficio contributivo derivado por el inversionista o participante de la transacción o evento que da lugar a la disminución en la base bajo dichas secciones.

En el caso de pérdidas por inversión sufridas con relación a inversiones efectuadas antes del 18 de noviembre de 1997, la cantidad total del crédito por pérdida no podrá exceder del cincuenta (50) por ciento de la inversión en el negocio teatral. En el caso de pérdidas por inversión atribuibles a inversiones efectuadas a partir del 18 de noviembre de 1997, la cantidad del crédito por pérdida no podrá exceder del diez (10) por ciento del costo total del negocio teatral. Los inversionistas y participantes que reclamaron, o de cualquier otro

modo transfirieron créditos por inversión en un negocio teatral como resultado de su inversión elegible o su inversión en valores de un Fondo, se distribuirán el derecho de beneficiarse del crédito utilizando el mecanismo dispuesto en el inciso (c) de esta sección. Una vez se haya efectuado dicha distribución, no serán de aplicación las disposiciones referentes a la transferencia o cesión de crédito del inciso (f) de esta sección.

Cualquier exceso del crédito así concedido sobre la contribución determinada en los referidos cinco (5) años contributivos no podrá reclamarse como una deducción o un crédito, ni retrotraerse o arrastrarse a otro año contributivo.

(f) Cesión del crédito. -

(1) Después de la fecha de notificación de la distribución del crédito por inversión en negocios teatrales que dispone este Artículo en su inciso (c), el crédito provisto por esta sección podrá ser cedido, vendido o de cualquier modo traspasado, en su totalidad o parcialmente, por un inversionista o participante, a cualquier otra persona.

(2) La base de la inversión elegible se reducirá por el valor del crédito por inversión en negocios teatrales cedido.

(3) El inversionista o participante que haya cedido todo o parte de su crédito por inversión en negocios teatrales, así como el adquiriente de dicho crédito notificará al Secretario de Hacienda de la cesión mediante declaración a tales efectos que será incluida con su planilla de contribución sobre ingresos para el año en que se efectúe la cesión del crédito por inversión en negocios teatrales. La declaración contendrá aquella información que el Secretario de Hacienda estime pertinente requerir mediante Reglamento promulgado a tales efectos.

(4) El dinero o valor de la propiedad recibida a cambio del crédito por inversión en negocios teatrales estará exento de tributación bajo la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994" y bajo cualquier ley sucesora , hasta una cantidad que sea igual al monto del crédito cedido.

(5) El crédito contributivo por inversión concedido por esta Ley podrá ser transferido o vendido una sola vez. Dicha transferencia, venta o permuta, será la efectuada por el inversionista o participante a cualquier otra persona. Una transferencia, permuta o venta a una persona relacionada constituye una transferencia para propósitos de dicha limitación. El término "persona relacionada" se determinará conforme a los criterios establecidos en las Secciones 1024 (b) y 1028 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994".

(6) Cuando el crédito contributivo por inversión concedido por la ley sea transferido, permutado o vendido, la diferencia entre el monto del crédito y la cantidad pagada por dicho crédito, no se considerará ingreso para el comprador del crédito.

Una persona que adquiera, de un inversionista o participante, un crédito contributivo por inversión en una de las actividades descritas en esta ley, no estará sujeto a las disposiciones de recobro del inciso (d) (3) de este Artículo.

(7) Una inversión en un negocio teatral, que de por sí no constituya una inversión elegible, no confiere al inversionista o participante el derecho a reclamar, transferir, vender o permutar, el crédito contributivo por inversión descrito en el inciso (a) de este Artículo. Si un contribuyente reclama contra su responsabilidad contributiva un crédito por inversión en un negocio teatral y posteriormente se determina que el mismo no era válido porque de por sí, basado en la naturaleza de la inversión, no se pudo haber generado dicho crédito, la insuficiencia en el pago de la contribución se regirá por las disposiciones del Subtítulo F de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994" y no por las disposiciones de recobro del crédito contributivo que dispone el inciso (d) (3) de este Artículo.

(g) *Tributación de ganancias en caso de venta* - Cualquier ganancia en caso de una venta, permuta u otra disposición de una inversión elegible o valor de un Fondo de Valores o Fondos, se considerará una ganancia de capital y el exceso de las ganancias netas de capital a largo plazo sobre la [s] pérdidas netas de capital a corto plazo estarán sujetas a tributación, según proveen la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994".

(h) Reglas especiales para inversiones efectuadas por Fondos de Capital de Inversión creados bajo la Ley Núm. 3 de 6 de octubre de 1987, según enmendada, conocida como "Ley de Fondos de Capital de Inversión de Puerto Rico de 1996", o bajo cualquier otra ley de naturaleza similar que la sustituya o complemente:

(1) Todo fondo de capital de inversión creado bajo la Ley Núm. 3 de 6 de octubre de 1987, según enmendada, conocida como "Ley de Fondo de Capital de Inversión de Puerto Rico de 1996", o bajo cualquier otra ley de naturaleza similar que la sustituya o complemente, que sea un inversionista o participante en proyectos de negocios teatrales estará sujeto a todas las disposiciones de este Artículo, excepto que:

(i) Para inversiones efectuadas antes del 18 de noviembre de 1997 tendrá derecho a un crédito por inversión en negocios teatrales equivalente a sólo el veinticinco (25) por ciento de su inversión elegible o su inversión en valores del fondo, en vez del cincuenta (50) por ciento al que se hace referencia en el inciso (a) de este Artículo. La totalidad del crédito del veinticinco (25) por ciento de su inversión podrá ser reclamada en el año en que el negocio obtuvo el capital necesario para desarrollar la actividad teatral; disponiéndose, que para inversiones efectuadas a partir del 18 de noviembre de 1997 el crédito será equivalente al diez (10) por ciento del costo total del negocio teatral, en vez del cincuenta (50) por ciento que concede el inciso (a) de este Artículo.

(ii) Para propósitos de la limitación impuesta por el inciso (c) de esta sección los efectos de que el total del crédito por inversión en negocios teatrales no podrá exceder del cincuenta (50) por ciento del efectivo aportado por los inversionistas y los participantes, o del cincuenta (50) por ciento del efectivo aportado hasta dos (2) millones de dólares más el exceso sobre dos (2) millones de dólares del efectivo aportado hasta el límite de diez (10) por ciento del costo total del negocio teatral, o según sea el caso, el cómputo se hará como si los fondos de capital de inversión creados bajo la Ley Núm. 3 de 6 de octubre de 1987, conocida como "Ley de Fondos de Capital de Inversión de Puerto Rico de 1996", o bajo cualquier otra ley de naturaleza similar que la sustituya o complemente, hubiesen reclamado el cincuenta (50) por ciento de su inversión elegible.

(iii) Los Fondos de Capital de Inversión creados bajo la Ley Núm. 3 de 6 de octubre de 1987, según enmendada, conocida como "Ley de Fondos de Capital de Inversión de Puerto Rico de 1996", o bajo cualquier otra ley de naturaleza similar que la sustituya o complemente, no tendrán derecho al crédito por pérdida dispuesto en el inciso (e) de esta sección.

(2) *Informe, obligación de someterlo.* - Todo Fondo radicará los informes que le requiera el Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico y éste será responsable de reglamentar el contenido de dichos informes y la fecha en que éstos deberán radicarse. El Comisionado remitirá copia fiel y exacta de dichos informes a la Junta Especial de Trabajo dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su radicación. -

Artículo 12.-Certificación

El presidente de la Junta de Planificación, en consulta con el Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, y el Secretario de Hacienda, expedirá una certificación indicando que el inversionista teatral se dedica a la explotación de un negocio teatral. El Secretario de Hacienda

determinará si éste al rendir su planilla de contribución sobre ingresos cumple con el requisito del cincuenta (50) por ciento de ingreso de negocio teatral para ser considerado como contratista teatral.

Artículo 13.-Evaluación

La Junta Especial de Trabajo, según constituida en el Artículo 7 de esta Ley rendirá un informe a la Asamblea Legislativa a los tres (3) años de estar en vigor las exenciones contributivas, créditos contributivos y otros beneficios dispuestos en esta Ley.

Dicho informe deberá contener un análisis detallado de los efectos que ha tenido la designación del Distrito Teatral y los incentivos contributivos y otros beneficios dispuestos por esta Ley para el desarrollo de la zona comprendida en el Distrito Teatral de Santurce, incluyendo una exención de las unidades rehabilitadas, teatros, cines, edificios, viviendas y cualesquiera otra estructura, así como otra información relevante para que la Asamblea Legislativa pueda evaluar la efectividad de los incentivos ofrecidos en esta Ley.

Artículo 14. -Asignación de Fondos. -

Se asigna a la Junta de Planificación, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares para que sean utilizados exclusivamente para el funcionamiento y la consecución de los fines para los cuales fue creada la Junta de Trabajo Especial para el Desarrollo del Distrito Teatral de Santurce.

Artículo 15. -Vigencia. -

Esta Ley comenzará inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME CONJUNTO**

**AL SENADO DE PUERTO RICO:**

Vuestras Comisiones de Educación y Cultura; y de Hacienda, previo análisis y estudio del P. de la C. 2684, recomiendan a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida, con las siguientes enmiendas.

**En el Título:**

| | |
|---|---|
| Página 1, Línea 6, | después de "Planificación" eliminar todo su contenido e insertar "." |

**En el Decretase:**

| | |
|---|---|
| Página 26, líneas 4 a la 8 | eliminar todo su contenido. |

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

El propósito del P. de la C. 2684 es con el propósito de crear un Distrito Teatral, cuyo parámetro cubrirá desde la Calle Bolívar hasta la Calle Ernesto Cerra en Santurce, como parte del Desarrollo y Rehabilitación de Santurce, con el propósito de establecer un centro de actividades culturales en la zona de Santurce, conceder incentivos especiales para estimular la rehabilitación del área y participación ciudadana; crear un comité de trabajo especial por el Presidente de la Junta de Planificación y para asignar fondos.

Esta medida originada en la Cámara con el P. de la C. 2684, pretende la renovación del barrio de Santurce en lo que a la vida cultural y ambiente artístico, creando un distrito teatral comprendido entre la Calle Bolívar hasta la Calle Ernesto Cerra, rehabilitando todas las salas de cine que existieron y cuyos inmuebles están todavía en la zona. Pretende además crear en tal Distrito, facilidades atractivas para los inversionistas privados.

En esta empresa presentada por el P. de la C. 2684, se integran el Municipio de San Juan, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Colegio de Actores, la Junta de Planificación y otras agencias afines.

En las proyecciones de este Distrito Teatral, se contempla, la creación de una diversidad de empleos que facilitarán el desarrollo económico de Santurce y áreas cercanas. La industria teatral esta visualizada como un taller de trabajo que aporta al desarrollo socioeconómico de Santurce y la isla, integrando lo artístico cultural con la visión de una industria diversificada por la variada necesidad y exigencias que presenta el Teatro en todas sus facetas.

Este proyecto ayudará a reducir el deterioro urbano de Santurce, al restaurar, construir nuevas facilidades y reconstruir las existentes. La presencia de miles de personas afluyendo al distrito teatral, crea otras necesidades que para ser atendidas requiere inversión de capital, al preparar restaurantes, hospedajes, vivienda, transportación apropiada para satisfacer la demanda por los servicios.

A los inversionistas se les reconocen créditos contributivos y otros beneficios que han de garantizar la inversión y el desarrollo del área de Santurce, especialmente el Distrito Teatral.

Las Comisiones consideran que el P. de la C. 2684, tiene méritos suficientes por su gran propósito. Por las razones antes expuestas, vuestras Comisiones de Educación y Cultura; y de Hacienda, recomiendan a este Alto Cuerpo la aprobación del P. de la C. 2684, con las enmiendas contenidas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)

Hon. Carmen L.Berríos Rivera
Presidenta
Comisión de Educación y Cultura

(Fdo.)

Hon. Roger Iglesias
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2582, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Salud y Bienestar Social; y de Educación y Cultura, sin enmiendas.

**"LEY**

Para adicionar un último párrafo a la Sección 2 de la Ley Núm. 3 de 15 de febrero de 1955, según enmendada, a fin de disponer como requisito adicional para expedir una licencia a los establecimientos y centros para el cuido de niños, el desarrollo e implantación de un currículo para el desarrollo integral de los infantes y trotones (0-3 años) y preescolares (3-4 años), previamente aprobado por el Departamento de Educación.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

Hoy día, en Puerto Rico proliferan los centros de cuidado diurno operados por el sector privado y en menor proporción los operados por el Gobierno. La multiplicidad de centros de cuido obedece primordialmente a la gran cantidad de familias donde ambos cónyuges trabajan fuera del hogar o donde el jefe de familia es uno sólo y trabaja fuera del hogar.

Uno de los problemas que experimentan los centros de cuido es la falta de una filosofía educativa clara. Tampoco cuentan con un currículo formal a un personal adecuado y adiestrado. Muchos de los centros operan mediante la improvisación de actividades sin atender el desarrollo de las múltiples destrezas necesarias para infantes y trotones o preescolares.

Conforme con la política pública del Gobierno de Puerto Rico de garantizar que todos los niños tengan la oportunidad de lograr un óptimo desarrollo físico, mental, social y moral en un ambiente positivo y facilitador, es necesario que todo centro de cuido desarrolle e implante un currículo para infantes y trotones y preescolares, articulado coherentemente con actividades educativas dirigidas al desarrollo integral del niño.

El currículo preescolar debe convertirse en el programa educativo básico de los centros privados que solicitan licencias al Departamento de la Familia. En el diseño del currículo se atenderán todas las necesidades básicas necesarias para el desarrollo integral de un niño.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.-Adicionar un último párrafo a la Sección 2 de la Ley Núm. 3 de 15 de febrero de 1955, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Sección 2.-

. . .

Toda entidad que se establezca para el cuido de niños que solicite la licencia que expide el Departamento de la Familia para operar ese tipo de establecimientos, deberá implantar un currículo formal para el desarrollo integral de infantes y trotones (0-3 años) y niños de edad preescolar(3-4 años), el cual deberá ser aprobado por el Departamento de Educación. A fin de obtener la licencia,se presentará el currículo aprobado por el Departamento de Educación a la Oficina de Licenciamiento del Departamento de la Familia."

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir seis (6) meses después de su aprobación."

**"INFORME CONJUNTO**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Las Comisiones de Salud y Bienestar Social y de Educación y Cultura, previo estudio y consideración del P.de la C. 2582 tienen a bien recomendar la aprobación de la medida sin enmiendas.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

El P. de la C. 2582 tiene el propósito de adicionar un último párrafo a la Sección 2 de la Ley Núm. 3 de 15 de febrero de 1955, según enmendada, a fin de disponer como requisito adicional para expedir una licencia a los establecimientos y centros para el cuido de niños, el desarrollo e implantación de un currículo para el desarrollo integral de los infantes y trotones (0-3 años) y preescolares (3-4 años), previamente aprobado por el Departamento de Educación..

Según la Exposición de Motivos de la medida, hoy en día, en Puerto Rico proliferan los centros de cuidado diurno operados por el sector privado y en menor proporción los operados por el Gobierno. La multiplicidad de centros de cuido obedece primordialmente a la gran cantidad de familias donde ambos cónyuges trabajan fuera del hogar o donde el jefe de familia es uno sólo y trabaja fuera del hogar.

Añade que uno de los problemas que experimentan los centros de cuido es la falta de una filosofía educativa clara. Tampoco cuentan con un currículo formal a un personal adecuado y adiestrado. Muchos de

los centros operan mediante la improvisación de actividades sin atender el desarrollo de las múltiples destrezas necesarias para infantes y trotones o preescolares.

Para la evaluación de esta medida se contaron con las opiniones del Departamento de la Familia y del Departamento de Educación.

## POSICION DE LAS AGENCIAS Y ENTIDADES CONCERNIDAS EN EL TEMA

Tanto el Departamento de Educación como el Departamento de la Familia coincidieron en que el currículo propuesto debe ser uno autónomo y flexible a las necesidades de cada caso en particular.
No obstante, el Departamento de la Familia entiende que el mismo debe estar basado en las prácticas apropiadas que establece la "National Association for the Education of Young Children" (NAEYC). Esto implica en esencia que se debe estimular cada niño individualmente de acuerdo a su edad y nivel de desarrollo. No es apropiado intervenir con todos los niños por igual. Las prácticas de la NAEYC establecen que un currículo apropiado para la niñez temprana debe:

- Estar fundamentado en bases teóricas.
- Diseñarse tomando en cuenta el desarrollo del niño.
- Dirigirse a desarrollar el conocimiento y el entendimiento mediante un proceso de destrezas constructivistas.
- Responder a las necesidades e intereses de cada uno de los niños dentro del salón.
- Tener un contenido relevante y significativo en la vida del niño y debe estar ajustado a su cultura. Entienden que es esencial que el currículo preescolar destaque un enfoque integral u holístico donde se estimulen simultáneamente todas las áreas de desarrollo del niño. El niño preescolar necesita pasar por experiencias multisensoriales, motrices, lingüísticas y cognocitivas.

## CONCLUSION

Hoy en día es común que los cónyuges, que junto a los hijos componen una familia, trabajen fuera del hogar. Muchas de estas familias tienen sus hijos pequeños los cuales aún no tienen la edad para ingresar a una escuela ya sea pública o privada, y se ven en la necesidad de buscar alternativas para que cuiden sus hijos mientras ellos trabajan. Esto ha traído como consecuencia un aumento de centros de cuido de niños. Sin embargo, no todos estos centros están orientados hacia una filosofía educativa y mucho menos tienen el personal adiestrado para esos fines.

La intención del P. de la C. 2582 es que se establezcan unos currículos en estos centros de cuido de niños para así ir proveyendo a los niños de aquellas herramientas que le ayuden en su mejor desarrollo físico y mental.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones de salud y Bienestar Social y de Educación y Cultura recomiendan la aprobación del P. de la C. 2582 sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)

Norma Carranza De León, M.D.
Presidenta
Comisión de Salud y Bienestar Social

(Fdo.)

Carmen L. Berríos
Presidenta
Comisión de Educación y Cultura"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2792, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Salud y Bienestar Social, con enmiendas.

"LEY

Para adicionar un nuevo inciso (m) y redesignar los incisos (m) al (v) respectivamente, como (n) al (w) del Artículo 3 de la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico", a fin de incluir el significado de lo que es un medicamento genérico.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La Legislatura de Puerto Rico el 23 de junio de 1976, aprobó la Ley Núm. 11, conocida como "Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico". La aprobación de esta ley tuvo como propósito prestar y ofrecer a los habitantes de esta Isla los servicios de más alta calidad y sin barreras de clase alguna que impidan asequibilidad a los mismos para así garantizarle a todos la libre selección de servicios médicos, dentales y de facilidades hospitalarias.

Para lograr cumplir con tal objetivo, se crearon y reestructuraron los organismos y se reformaron los mecanismos de prestación de servicios de salud en el sector público y se establecieron mecanismos de reglamentación apropiados y factibles para el sector público y el privado.

Posteriormente, dado el desarrollo tan acelerado de la industria farmacéutica, se creó la Junta de Bioequivalencia de Medicamentos que autorizó a los farmacéuticos a sustituir drogas y medicamentos por sus bioequivalentes, además de facultar al Secretario de Salud a promulgar un reglamento al efecto. Desde entonces, la Junta ha estado trabajando incansablemente en la ejecución de sus funciones.

No obstante, la realidad puertorriqueña y la cantidad de recursos disponibles que requiere establecer el sistema de medicamentos bioequivalentes, junto con el desarrollo de nueva tecnología, hacen necesario que, nuevamente, se atempere la Ley Núm. 11, antes citada, en esta ocasión, a fin de fortalecer, ampliar y aclarar la legislación vigente, se desea definir y diferenciar un medicamento genérico de un bioequivalente.

Aún cuando la ley de forma implícita establece la diferencia indicando que un medicamento genérico es aquel que no tiene nombre de fábrica o comercial, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende necesario hacer la diferencia de manera expresa. De otra manera, se evitan confusiones que puedan dar lugar a errores no deseados que vayan contrario a los objetivos descritos en esta Ley.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se adiciona un nuevo inciso (m) y se redesignan los incisos (m) al (v) como (n) al (w) respectivamente, del Artículo 3 de la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 3.-

Los siguientes términos y frases tendrán los significados que se indican a continuación, cuando sean usados o se haga referencia a los mismos en esta Ley, a no ser que el contexto claramente indique otra cosa:

(a) ...

(m) 'Medicamentos Genéricos' – son aquellos medicamentos que no tienen nombre comercial o de fábrica."

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

**AL SENADO DE PUERTO RICO:**

La Comisión de Salud y Bienestar Social, previo estudio y consideración del P. de la C. 2792 recomienda la aprobación de la medida con la siguientes enmienda.

**En el Texto:**

Página 2, líneas 9 y 10; eliminar todo su contenido y sustituir por "(m) "Medicamentos Genéricos" – son aquellos medicamentos que son mercadeados bajo su nombre común o químico oficial, según designado por el "Unites States Adopted Names Council" y publicado en el "United States Pharmacopeia Dictionary of Drug Names". Los medicamentos genéricos pueden o no ser bioequivalentes al medicamento de marca original identificado por el "Food and Drug Administration" (FDA) como medicamento de referencia en su categoría."

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

El P. de la C. 2792 tiene el propósito adicionar un nuevo inciso (m) y redesignar los incisos (m) al (v) respectivamente, como (n) al (w) del Artículo 3 de la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico", a fin de incluir el significado de lo que es un medicamento genérico.

La Exposición de Motivos de la medida señala que la Legislatura de Puerto Rico el 23 de junio de 1976, aprobó la Ley Núm. 11, conocida como "Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico". La aprobación de esta ley tuvo como propósito prestar y ofrecer a los habitantes de esta Isla los servicios de más alta calidad y sin barreras de clase alguna que impidan asequibilidad a los mismos para así garantizarle a todos la libre selección de servicios médicos, dentales y de facilidades hospitalarias.

Para cumplir con tal objetivo, se crearon y reestructuraron los organismos y se reformaron los mecanismos de prestación de servicios de salud en el sector público y se establecieron mecanismos de reglamentación apropiados y factibles para el sector público y privado.

Añade la Exposición de Motivos que posteriormente, dado el desarrollo tan acelarado de la industria farmacúutica, se creó la Junta de Bioequivalencia de Medicamentos que autorizó a los farmacéuticos a sustituir drogas y medicamentos por sus bioequivalentes, además de facultar al Secretario de Salud a promulgar un reglamente al efecto. Desde entonces la Junta ha estado trabajando incansablemente en la ejecusión de sus funciones.

Finaliza la Exposición señalando que no obstante, la realidad puertorriqueña y la cantidad de recursos disponibles que requiere establecer el sistema de medicamentos bioequivalentes, junto con el desarrollo de nueva tecnología, hacen necesario que, nuevamente, se atempere la Ley Núm. 11, antes citada, en esta ocasión, a fin de fortalecer, ampliar y aclarar la legislación vigente, se desea definir y diferenciar un medicamento genérico de un bioequivalente.

La Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada, define el "Medicamento Bioequivalente" como aquellos medicamentos que contienen los mismos ingredientes activos y son idénticos en sus potencias, forma de dosificación, vías de administración, biodisponibilidad y se consideran terapéuticamente equivalentes.

El Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico añade que esto significa que para que un medicamento sea considerado bioequivalente al medicamento original de referencia, que es el medicamento original de marca con el que se compara, ese medicamento debe:

1. contener el mismi ingrediente activo, o sea, el mismo ingrediente principal responsible de la actividad terapéutica del producto (Ej. Acetaminofén);
2. contener la misma potencia o concentración de dicho ingrediente activo (Ej. 500 mg);
3. presentar la misma forma de dosificación (Ej. Cápsulas);
4. presentar biodisponibilidad comparable, o sea, que la velocidad y extensión de absorción del medicamento en el cuerpo humano está dentro de los estándares de -20%/+25% establecidos por la Administración de Alimentos y Drogas federal (FDA);
5. ser considerado terapéuticamente equivalente, o sea, que no presenta diferencias clínicamente significativas en términos de efectividad terapéutica o potencial de toxicidad.

El Recinto de Ciencias Médicas menciona que los "Medicamentos Genéricos" son aquellos que son mercadeados con el nombre químico o nombre común del principal ingrediente activo, y no con un nombre comercial o de marca. Por ejemplo, hay fabricantes del analgésico acetaminofén que deciden mercadear su producto bajo ese nombre genérico, mientras que otros fabricantes del mismo analgésico deciden mercadearlo bajo un nombre comercial como Tylenol, Panadol o Tempra. El fabricante puede vender los productos que mercadea bajo nombre genérico a precios más bajos ya que no tiene que invertir en dar a conocer su nombre de marca. Los medicamentos génericos pueden ser o no ser bioequivalentes al medicamento original.

Por su parte, el Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico respalda el que se incorpore a la ley una definición de "medicamentos bioequivalentes", con los cuales son confundidos con frecuencia. Sin embargo, recomiendan que la definición que se incluya sea una que esté basada en la que aparece en la definición de "nombre genérico" que aparece en el Reglamento para el Intercambio de Medicamentos del Departamento de Salud, según enmendado y es más completa que la propone el P. de la C. 2792:

## CONCLUSION

Existe confusión entre el público consumidor sobre lo que son medicamentos bioequivalentes y medicamentos genéricos. La falta de una definición en la Ley abona a dicha confusión. Es por ello que se reconoce la necesidad de aclarar esta situación para el beneficio tanto de consumidores como profesionales de la salud.

Ese beneficio se traduce en costos menores en medicamentos efectivos y seguros para el consumidor.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Salud y Bienestar Social recomienda la aprobación del P. de la C. 2792 con la enmienda sugeridas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Norma Carranza De León MD
Presidenta
Comisión de Salud y Bienestar Social"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2378, y se da cuenta de un informe de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas.

**"LEY**

Para adicionar añadir un nuevo inciso (g), al Artículo 37 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico", a fin de fomentar la participación activa de los padres de menores en todas las etapas de los procedimientos judiciales, tratamientos, servicios comunitarios; e imponer penalidades.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

Reiteradamente, hemos señalado que la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico", tiene dos propósitos: exigir al menor un "quantum", de responsabilidad para dirigir sus actos y responder por éstos, brindarle una oportunidad rehabilitativa y proteger la sociedad puertorriqueña. El cumplimiento de las medidas dispositivas tienen que ser efectivas para que el menor incurso, en la comisión de una falta, responda por ese "quantum", de responsabilidad.

No obstante, la Asamblea Legislativa entiende que dicha Ley de Menores, debe cumplir con otro propósito de gran importancia para la rehabilitación del menor y el cumplimiento de éste con su responsabilidad, ello es, la participación activa de los padres de dicho menor en todos los procedimientos judiciales, los tratamientos relacionados con el mismo y las actividades de servicios a la comunidad u otros remedios. La responsabilidad de los padres debe quedar plasmada en todas las etapas de crecimiento de sus hijos y constituye su obligación principal apoyar, ayudar y velar porque sus hijos se conduzcan responsablemente como buenos ciudadanos y personas de utilidad. De nada vale procrear un hijo, si no está dispuesto a enseñarle valores y respeto por las demás personas y cosas. El compromiso de ser padre requiere, en ocasiones, el sacrificio de guiarles por el camino recto de la ley y el orden y cuando el menor, por la razón que fuere, se aparta de dicho camino, debe contar con el apoyo de sus padres en primera instancia, para retornar la ruta correcta. Esta Ley no pretende penalizar a los padres por los errores de sus hijos, sino fomentar la participación activa de sus padres en el proceso de corrección de tal error, a fin de que el mismo quede enmendado para beneficio del menor propiamente y por supuesto, de la familia y la sociedad en general.

Por consiguiente, esta Ley exige que los padres del menor, su tutor o encargado se involucren y participen activamente en los procedimientos judiciales ventilados bajo la Ley de Menores, en el tratamiento que pueda recibir el menor, la asistencia y participación en los programas de desvíos y de servicios a la comunidad a los que el menor se dirija.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículos 1.-Se añade un inciso (g), al Artículo 37 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 37.-Disposiciones generales

(a) . . .

(b) . . .

(c) . . .

(d) . . .

(e) . . .

(f) . . .

(g) Notificación y participación de los padres.-En todo procedimiento al amparo de esta Ley el menor deberá comparecer acompañado de sus padres, tutor, encargado o en su defecto, del defensor judicial. Se notificará de toda citación, resolución u orden a los padres, tutor o encargado o en su defecto, del defensor judicial del menor. El Tribunal podrá encontrar en desacato e imponer la sanción que se establezca por ley, a los padres, tutor o encargado del menor, que sin justa causa falte a los procedimientos previamente citados. Se exceptúa de esta norma, los casos en que el Estado o cualquiera de sus instrumentalidades es el custodio legal de dicho menor.

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir a los noventa (90) días después de su aprobación. "

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado, luego del estudio y análisis del P. de la C. 2378, tiene el honor de recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas.

**Al Texto:**

| | |
|---|---|
| Página 2, línea 1: | Tachar "Artículos" y sustitur por "Artículo" |
| Página 2, línea 10: | Después de "padres" añadir ", tutores o encargados" |

**A La Exposición De Motivos:**

| | |
|---|---|
| Página 1, Párrafo 1, línea 3: | Tachar la "," después de "quantum"; tachar la "," después de "éstos" y sustituir por ";" |
| Página 1, Párrafo 1, línea 5: | Tachar "tienen" y sustituir por "tiene"; tachar "efectivas" y sustituir por "efectivo"; tachar la "," después de "incurso" |
| Página 1, Párrafo 1, línea 6: | Tachar la "," después de "quantum" |
| Página 1, Párrafo 2, línea 12: | Añadir "a" después de "retornar" |
| Página 2, línea 1: | Tachar "sus padres" y sustituir por "éstos" |

**Al Titulo:**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 1: | Tachar "añadir" |
| Página 1, línea 3: | Después de "padres" añadir ", tutores o encargados" |

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

El P. de la C. 2378 tiene como propósito adicionar un nuevo inciso al Artículo 37 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico", a fin de fomentar la participación activa de los padres, tutores o encargados de tales menores en todas las etapas de los procedimientos judiciales, los tratamiento, servicios comunitarios; e imponer penalidades.

Como bien expresa la Exposición de Motivos de la presente pieza legislativa, reiteradamente, hemos señalado que la Ley Núm. 88 de 9 julio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico", tiene dos propósitos: exigir al menor un "quantum" de responsabilidad para dirigir sus actos y responder por éstos, brindarle una oportunidad rehabilitativa y proteger la sociedad puertorriqueña. El cumplimiento de las medidas dispositivas tienen que ser efectivas para que el menor incurso en la comisión de una falta, responda por ese "quantum" de responsabilidad.

No obstante, la Asamblea Legislativa entiende que dicha Ley de Menores, debe cumplir con otro propósito de gran importancia para la rehabilitación del menor y el cumplimiento de éste con su responsabilidad, ello es, la participación activa de los padres de dicho menor en todos los procedimientos judiciales, los tratamientos relacionados con el misno y las actividades de servicios a la comunidad u otros remedios. La responsabilidad de los padres debe quedar plasmada en todas las etapas de crecimiento de sus hijos y constituye su obligación principal apoyar, ayudar y velar porque sus hijos se conduzcan responsablemente como buenos ciudadanos y personas de utilidad. De nada vale procrear un hijo, si no está dispuesto a enseñarle valores y respeto por las demás personas y cosas. El compromiso de ser padre requiere, en ocasiones, el sacrificio de guiarles por el cambio recto de la ley y el orden y cuando el menor, por la razón que fuere, se aparta de dicho camino debe contar con el apoyo de los padres en primera instancia, para retornar a la ruta correcta. Esta Ley no pretende penalizar a los padres por los errores de sus hijos, sino fomentar la participación activa de éstos durante los procesos.

Actualmente la Ley Núm. 22, supra, requiere la presencia de los padres o tutores legales del menor en diferentes etapas del proceso. Entre estas disposiciones podemos señalar la establecida en el Artículo 11, el cual dispone que la renuncia de cualquier derecho constitucional del menor no se admitirá a menos que estén presentes sus padres o encargados y abogado. El Artículo 21 dispone que cuando el menor cualifique para el desvío del procedimiento judicial, el Procurador podrá solicitarlo al Tribunal al suscribir el acuerdo con el menor, sus padres o encargados y la agencia a la cual se referirá el menor.

Aunque la Ley Núm. 88, supra, en varias disposiciones requiere la presencia de los padres o tutores legales del menor en diferentes etapas del proceso, la Asamblea Legislativa entiende que es necesario que la misma sea requerida de una manera expresa y punible por ley. En esta etapa en donde el menor se encuentra tan vulnerable es importante que los padres, tutores o encargados se envuelvan en todos los procedimientos, ya que es necesario responsabilizar a los padres por sus hijos.

Para el análisis del P. de la C. 2378 recibimos el insumo y estudio del Departamento de la Familia quienes señalan endosar el mismo.

El Departamento de Justicia, luego de analizar la medida señaló compartir la opinión sobre la responsabilidad del padre, tutor o encargado de menor en cuanto a participar, cooperar o asistirle en todo tratamiento establecido u ordenado al menor. Entienden además, que la participación o cooperación activa en los programas de servicio comunitario les será beneficiosa a las partes. Todo ésto, es consistente con nuestro ordenamiento legal en materia de Derecho de Familia. Además debe recordarse que nuestro Código Civil, en su Artículo 152, 31 L.P.R.A. sec. 591, establece que el derecho a la patria potestad concedida a los padres es naturalmente inherente a éstos y un derecho fundamental de ambos. Como tal, le impone a los padres el deber de regir los bienes del menor; representarlos legalmente; educarlos; alimentarlos; corregirlos y castigarlos moderadamente; vigilar y protegerlos de peligros físicos y morales; consentir a la adopción de sus hijos; conceder a la emancipación; nombrarles tutor; aceptar las donaciones que se les haga; reservar a los hijos del primer matrimonio la propiedad de todos los bienes que hayan adquirido de su difunto consorte por testamento, por sucesión intestada, donación o cualquier otro título lucrativo, pedir nombramiento de defensor judicial cuando exista oposición entre sus intereses y los del hijo adoptado, etc.

La Administración Para el Sustento de Menores favorece la medida presentada y entiende que la misma integra a la persona que tiene la custodia legal del menor que cometió la falta, como eje imprescindible en la rehabilitación de éste.

Esta Comisión entiende que el P. de la C. 2378 aporta de manera positiva a las relaciones familiares, además de que responsabiliza e involucra de manera obligatoria a los padres en todo procedimiento relacionado con sus hijos.

Por los fundamentos antes expuestos, vuestra Comisión de lo Jurídico, recomienda la aprobación del P. del C. 2378 con las enmiendas contenidas en este informe.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Jorge Andrés Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2705, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos de la Mujer, sin enmiendas.

"LEY

Para enmendar el inciso (a) de la Sección 4 de la Ley Núm. 57 de 30 de mayo de 1973, según enmendada, a fin de disponer que la Comisión para los Asuntos de la Mujer deberá establecer y mantener una página en la red de Internet en la que se incluirá todo tipo de asunto concerniente a los derechos de la mujer.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

El Gobierno de Puerto Rico está comprometido a eliminar las condiciones que obstaculizan el progreso y la igualdad plena en todas las esferas de la vida de la mujer puertorriqueña. A este fin, se creó la Comisión para los Asuntos de la Mujer mediante la Ley Núm. 57 de 30 de mayo de 1973, según enmendada, adscrita a la Oficina del Gobernador, cuya responsabilidad principal es eliminar el discrimen en contra de la mujer y promover todas aquellas actividades que propendan a colocarla en un plano de igualdad en todas las esferas del orden social. La Comisión ha logrado identificar las áreas fundamentales que presentan la necesidad de ser atendidas y ha propiciado, coordinado y fiscalizado la implantación de planes de acción afirmativa para lograr a los derechos de la mujer.

La educación, capacitación y desarrollo son conceptos que inspiran la faena diaria de la Comisión. En el área de la educación a la comunidad se ofrecen charlas, talleres educativos y se mantiene un servicio de distribución de material educativo en los que se divulgan los problemas, alternativas y derechos de la mujer en áreas tales como violencia doméstica, equidad educativa, hostigamiento sexual, violación y la salud. En los últimos años se ha producido un caudal de escritos e investigaciones que han modificado las experiencias importantes de las mujeres, creando una nueva visión de valores, actitudes y reconocimiento a la mujer como recurso humano fundamental.

El objetivo de esta medida es reunir y poner a la disposición de todas las agencias públicas, entidades privadas y público en general, material que sea importante para la lucha reivindicativa de los derechos de la mujer. Mediante el establecimiento de una página en la red de Internet, la Comisión para los Asuntos de la Mujer, cumplirá con la necesidad de acceso a información que tiene este importante sector de la comunidad.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (a) de la Sección 4 de la Ley Núm. 57 de 30 de mayo de 1973, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Sección 4.-

(a) Encauzar y participar en investigaciones y en la preparación de estudios en torno a los factores que afectan los derechos de la mujer en el ámbito de la familia y en los campos de la educación, salud, empleo, derechos civiles y políticos, legislación laboral, contribuciones, seguro social, procesos electorales, actividades comunales y asuntos relacionados. Disponiéndose que, la Comisión deberá establecer y mantener una página en la red de Internet en la que se incluirá todo tipo de asunto concerniente a los derechos de la mujer. Esta página en la red de Internet, deberá mantenerse en servicio durante todo el año y funcionará las veinticuatro horas del día."

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

La Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico, previo análisis y consideración del presente proyecto, tienen a bien someter su informe en relación al P. del la C. 2705, recomendado su aprobación.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

Esta medida lleva como propósito enmendar el inciso (a) de la Sección 4 de la Ley Núm. 57 de 30 de mayo de 1973, según enmendada, a fin de disponer que la Comisión para los Asuntos de la Mujer deberá establecer y mantener una página en la red de Internet en la que incluirá todo tipo de ausunto concerniente a los derechos de la mujer.

Ciertamente, es loable la intención de establecer y mantener una página en la red de internet a fin de incluir información relacionada a los derechos de la mujer. Los beneficios que dicha medida genera es que se tendría al alcance información, no sólo útil para la mujer, sino que para los cientos de estudiantes y profesores que continuamente hacen uso de esta información de forma suplementaria a los cursos académicos.

La Comisión de Asuntos de la Mujer, Oficina del Gobernador, entre otras divisiones, cuenta con la División de Educación a la Comunidad, la cual tiene como misión diseminar información destinda a orientar a la comunidad sobre los derechos de la mujer. Además orienta sobre los recursos disponibles, bien sea en agencias de gobierno u organismos no gubernamentales de apoyo. También desarrolla material educativo sobre diversos temas, como lo es el hostigamiento sexual en el trabajo, violencia doméstica, órdenes de protección, igualdad de oportunidades en el empleo, equidad en el pago, equidad por género en la educación , y el proyecto para el desarrollo de comportamiento no violento entre jóvenes, entre otros.

La Comisión para los Asuntos de la Mujer, Oficina del Gobernador, también tiene al servicio de la cuidadanía, la Bibilioteca Julia de Burgos, la cual posee una recopilación de estudios, documentos, libros y boletines relacionados a la mujer en áreas tan diversas como es el derecho de familia, derecho laboral, salud, educación, derechos civiles, historia, arte, literatura, entre muchos otros.

Por último, dicha Comisión señaló que proximamente estará disponible al público su página en la Internet. En la misma se incluyen todos los servicios que brinda la Comisión, además de materiales

educativos, previamente mencionados, que estarán a la disposición del público a través de internet. Como medida adicional, la Comisión está conectada al sistema computadorizado del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, conocida como"Interempleo". A traves de éste se tiene acceso a los datos estadísticos relacionados con la mujer y el trabajo.

Es necesario que el establecimiento y operación de dicho sistema y servicio se realice mediante legislación, para así garantizar su disponibilidad y acceso en todo momento.

**RECOMENDACION**

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisión de Asuntos de la Mujer, recomienda la aprobación de la presente medida.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer
Presidenta
Comisión de Asuntos de la Mujer"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 400, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de lo Jurídico; y de Hacienda, con enmiendas.

**"LEY**

Para enmendar los Artículos 19 y 20 de la Ley Núm. 258 de 29 de diciembre de 1995, según enmendada, conocida como "Ley de Donativos Legislativos", a fin de tipificar como delito grave el no depositar los fondos de un donativo legislativo en una cuenta bancaria especial separada y remitir a la agencia designada copia del comprobante de depósito; e incluir la pena de restitución y prestación de servicios en la comunidad en dichos Artículos.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La mala utilización de los recursos económicos públicos por parte de entidades privadas sin fines de lucro debe reducirse a su mínima expresión. La aprobación por la Asamblea Legislativa de la Ley Núm. 250 de 29 de diciembre de 1995, según enmendada, conocida como "Ley de Donativos Legislativos", ha sido un paso en la dirección correcta. Mediante la misma se estableció un orden de prioridades para el otorgamiento de donativos a dichas entidades y un procedimiento uniforme para la evaluación, otorgamiento y fiscalización de los mismos. Corresponde ahora enmendar dicha Ley para atemperarla a los cambios sociales y fortalecerla como instrumento de fiscalización de los fondos públicos.

Para ello se hace necesario que en dicha Ley se tipifique como delito grave dejar de depositar fondos de un donativo legislativo en una cuenta separada. Es necesario, además incluir la pena de restitución en los Artículos 19 y 20 de la Ley Núm. 250, *supra*, así como la pena de prestación de servicios en la comunidad al Artículo que tipifica delitos menos grave.

La Asamblea Legislativa consciente de la labor pública que realizan estas entidades en beneficio del Pueblo y de la necesidad de velar por que los fondos públicos destinados a estas entidades se utilicen de acuerdo a los propósitos y objetivos para los que fueron destinados, aprueba las enmiendas indicadas.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 19 de la Ley Núm. 258 de 29 de diciembre de 1995, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 19.-Delitos Menos Grave.-

Incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa no mayor de quinientos (500) dólares y pena de restitución, toda persona que:

(a) . . .

(b) . . .

(c) . . .

El Tribunal, a su discreción, podrá imponer la pena de prestación de servicios en la comunidad en lugar de la pena de multa establecida."

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 20 de la Ley Núm. 258, aprobada el 29 de diciembre de 1995, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 20.-Delitos Graves.-

Incurrirá en delito grave y convicta que fuere será castigada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, toda persona que:

(a) . . .

(b) . . .

(c) Deje de depositar los fondos de un donativo legislativo en una cuenta bancaria especial separada de cualquier otra y remitir a la agencia designada copia del comprobante de depósito dentro de los términos dispuestos en el artículo 14 (h) de esta Ley, siempre que la resolución que otorgue dicho donativo así lo disponga.

(d) . . .

(e) . . .

(f) . . .

(g) . . .

De mediar circunstancias agravantes la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años y de mediar circunstancias atenuantes podrá reducirse hasta un máximo de un (1) año. El tribunal, a su discreción, podrá imponer la pena de restitución en adición a las penas establecidas en este Artículo."

Sección 3.-Esta Ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME CONJUNTO**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestras Comisiones de lo Jurídico; y de Hacienda, previo estudio y análisis del Sustitutivo al P. de la C. 400, tiene el honor de recomendar la aprobación del mismo, con las siguientes enmiendas.

**En el Texto:**

| | |
|---|---|
| Página 2, Línea 11: | Tachar "en lugar de" y sustituir por "en adición a" |
| Página 2, Línea 19 y 20: | Tachar todo su contenido y sustituir por "..." |

| | |
|---|---|
| Página 3, Línea 1 a la 3: | Tachar todo su contenido |
| Página 3, Línea 7: | Tachar "..." e insertar "Deje de depositar los fondos de un donativo legislativo en una cuenta bancaria especial separada de cualquier otra y remitir a la agencia designada el comprobante de depósito dentro de los términos dispuestos en el Artículo 14 (h) de esta Ley." |
| Página 3, Línea 10: | Tachar "máximo de un (1) año." y sustituir por "mínimo de dos (2) años." |

## ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 400 tiene como propósito enmendar los Artículos 19 y 20 de la Ley Núm. 258 de 29 de diciembre de 1995, según enmendada, conocida como "Ley de Donativos Legislativos", a fin de tipificar como delito grave el no depositar los fondos de un donativo legislativo en una cuenta bancaria especial separada y remitir a la agencia designada copia del comprobante de depósito; e incluir la pena de restitución y prestación de servicios en la comunidad en dichos Artículos.

Expresa la Exposición de Motivos que la mala utilización de recursos económicos públicos por parte de entidades privadas sin fines de lucro debe reducirse a su mínima expresión. Indica además que la aprobación de la Ley Núm. 258 de 29 de diciembre de 1995, según enmendada, conocida como "Ley de Donativos Legislativos" fué un paso en la dirección correcta. Señala que dicha Ley estableció un orden de prioridades para el otorgamiento y fiscalización de dichos donativos legislativos, pero hay que fortalecerla. El Legislador proponente pretende fortalecer la Ley tipificando como delito grave el dejar de depósitar fondos de un donativo legislativo en una cuenta separada así como incluir la pena de restitución y la pena de prestación de servicios en la comunidad.

El propósito de la presente medida es noble y justo. Esta Asamblea Legislativa tiene el derecho y el deber de saber donde están sus donativos y que uso se le dió. Además tiene el deber de asegurarse de que el no uso de acuerdo a los parámetros de la Ley sea castigado.

La Comisión realizó unas enmiendas al presente proyecto para atemperarla a la filosofía nuestra y a la corrección en ley. La primera enmienda que realizamos fue la pena de prestación de servicios en la comunidad fuere "en adición a" la pena de multa establecida y no "en lugar de" como exponía el proyecto. La segunda enmienda realizada fue el crear un nuevo inciso (g) al Artículo 20 ya que si la enmienda propuesta se realizaba en el inciso (c), como lo proponía el proyecto, se iba a derogar el presente inciso (a).

Para la evaluación de esta medida la Comisión contó con las ponencias del Departamento de Hacienda, la Oficina del Contralor de Puerto Rico y con la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales.

El Departamento de Hacienda en su ponencia escrita expresó que no tiene objeción al presente proyecto.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico en su ponencia escrita indicó lo siguiente: "Nos parece que el convertir en delito grave el dejar de depositar fondos producto de un donativo legislativo en una cuenta bancaria especial separada y remitir a la agencia el comprobante del depósito representa un control efectivo adicional para evitar la mala utilización de fondos públicos."

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales en su ponencia escrita dijo que el sustitutivo al P. de la C. 400 es un proyecto de vanguardia que refleja la preocupación de la ciudadanía en general por el manejo de fondos públicos a entidades no gubernamentales sin fines de lucro garantizando así la sana administración de los mismos.

Las Comisiones celebraron reunión ejecutiva y en las misma se hizo un análisis de la información disponible.

Por las consideraciones anteriores, vuestras Comisiones de lo Jurídico; y de Hacienda recomiendan la aprobación del Sustitutivo al P. de la C. 400, con las enmiendas contenidas en este informe.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Jorge Andrés Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico

(Fdo.)
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3119, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas.

**"LEY**

Para declarar el mes de febrero de cada año, como el "***Mes de la Prevención y Manejo de Síntomas del Corazón y de los Adiestramientos de Resucitación Cardiopulmonar***"; y para exhortar anualmente a las entidades educativas y profesionales relacionadas a llevar a cabo actividades dirigidas a la educación, prevención y orientación de condiciones y anomalías cardíacas.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

Existen varias organizaciones voluntarias de servicios de salud cuya misión es la lucha contra las enfermedades y la promoción de corazones saludables. Dichas organizaciones auspician un sinnúmero de actividades dentro del año natural. Los mismos están encaminados a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños con el propósito de culminar los esfuerzos educativos dirigido al prevenir, desalentar y eliminar ciertos hábitos negativos y nocivos de entre nuestra sociedad que promueven las anomalías cardíacas.

Las enfermedades del corazón afectan aproximadamente a más de 480,000 adultos americanos. Según estadísticas la mitad de estas personas mueren de un paro cardíaco súbito y el promedio de supervivencia es de un cinco (5%) por ciento. Dichos padecimientos coronarios representan pérdidas individuales y colectivas, además de poner en riesgo la salud y la vida de los pacientes que la sufren. Las recomendaciones y nuevas terapias disponibles para el manejo de los males arrítmicos están en la prevención, las mismas requieren la educación de los pacientes y personas allegados con el propósito de que conozcan su condición y el manejo de la misma así logrando mejorar su calidad de vida, y del paciente.

En torno a esta condición, se promueven programas educativos y de rehabilitación para los niños y sus familiares. Estos están encaminados a ayudar a los niños, a los adolescentes y a sus padres a comprender, controlar y en cierta forma a prevenir a través de actividades recreativas, deportivas y de la sana nutrición encaminadas a lograr la rehabilitación y reeducación de la ciudadanía en general.

Parte de estos adiestramientos, lo es el desarrollo de talleres de Resucitación Cardiopulmonar (RCP), ofrecidos por la Asociación Puertorriqueña y la Cruz Roja de Puerto Rico, entre otras organizaciones. Dichos talleres van encaminados en orientar a sus participantes de lo significativo y crucial

que representa en activar y comenzar las reacciones en cadena para incrementar las posibilidades de supervivencia de una persona que haya sufrido un paro cardíaco.

Sencillamente el eslabón donde una persona comience la reacción de activar el Sistema de Emergencia Médica (9 - 1 - 1) y comenzar las técnicas de (RCP), esta acción puede hacer la diferencia. Si más personas conocieran como aplicar dicha técnica, más víctimas de paro cardíaco podrían ser la diferencia en las tasas de estadísticas mortuorias. Estos adiestramientos son una forma de preparar a más miembros de nuestra comunidad para ayudar en casos de emergencias cardíacas.

Durante el mes de febrero de cada año, se han estado efectuando conferencias a los profesionales de la salud, charlas a los padres y materiales educativos y clínicas dirigidas a la prevención, así como orientación a través de los medios de comunicación con el fin de orientar a los pacientes y familiares que sufren de esta condición. Por su parte el Departamento de Estado, en virtud de la autoridad que le confiere su Ley Orgánica, proclamó el mes de febrero, como el "Mes del Corazón". Donde se exhortó a la ciudadanía general a participar de las actividades que se llevarán a cabo entorno a esta condición, de manera que al orientarse adecuadamente puedan mejorar la calidad de vida a corto y a largo plazo.

La Cámara de Representantes de Puerto Rico, promueve esté tipo de programa preventivo, educacional y de orientación dirigida a los pacientes y población en general sobre las condiciones de salud relacionadas al corazón y otras condiciones cardíacas, y entiende necesario esta pieza legislativa, la cual pretende exaltar el "Mes del Corazón" celebrado el mes de febrero y declararlo como el "Mes de la Prevención y Manejo de Síntomas del Corazón y de los Adiestramientos de Resucitación Cardiopulmonar."

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.-Se declara el mes de febrero de cada año como el "Mes de la Prevención y Manejo de Síntomas del Corazón y de los Adiestramientos de Resucitación Cardiopulmonar."

Artículo 2.-El Gobernador de Puerto Rico mediante proclama al efecto, exhortará anualmente a las entidades educativas y profesionales relacionadas a llevar a cabo actividades dirigidas a la educación, prevención y orientación de esta condición.

Artículo 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 3119, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmienda.

**En el Texto Decretativo:**

Página 2, línea 1 eliminar "noviembre" y sustituir por "febrero"

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

El propósito de la P. de la C. 3119, es para declarar el mes de febrero de cada año, como el "Mes de la Prevención y Manejo de Síntomas del Corazón y de los Adiestramientos de Resucitación Cardiopulmonar"; y para exhortar anualmente a las entidades educativas y profesionales relacionadas a llevar a cabo actividades dirigidas a la educación, prevención y orientación de condiciones y anomalías cardíacas.

Más de 480,000 adultos americanos han sido afectados por la enfermedad del corazón. Según estadísticas la mitad de estas personas mueren de un paro cardíaco súbito y el promedio de supervivencia es de un cinco (5%) por ciento. Dichos padecimientos coronarios representan perdidas individuales y colectivas, además de poner en riesgo la salud y la vida de los pacientes que la sufren. De acuerdo con esto se han creado nuevos servicios tal como terapias y organizaciones voluntarias disponibles para el manejo de los males arítmicos cuyo están en prevención. Al mismo tiempo estos requieren la educación de los pacientes y personas allegados con el propósito de que adquieran conocimiento de su condición y el manejo de la misma asi logrando mejorar su calidad de vida.

Varias organizaciones voluntarias de servicios de salud luchan contra las enfermedades del corazón, auspiciando un sinnúmero de actividades al año. El propósito de estó es culminar los esfuerzos educativos dirigido al prevenir, desalentar y eliminar ciertos hábitos negativos y nocivos de entre nuestra sociedad que causan las anomalías cadíacas.

EL Departamento de Estado, en virtud de la autoridad que le confiere su Ley Orgánica, proclamó el mes de febrero, como el "Mes del Corazón". Durante el mes de febrero de cada año, se han estado efectuando conferencias a los profesionales de la salud, charlas a los padres y materiales educativos y clínicas dirigidas a la prevención, así como orientación a través de los medios de comunicación con el fin de orientar a los pacientes y familiares que sufren e esta condición. Esto exhortá a la ciudadanía general hacer parte de las actividades que se llevaran a cabo en torno a esta condición, de manera que al orientarse puedan mejorar su calidad de vida.

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, promueve esté tipo de programa preventivo, educacional y de orientación dirigida a los pacientes y población en general sobre las condiciones de salud relacionadas al corazón y otras condiciones cardíacas, y entiende necesario esta pieza legislativa, la cual pretende exaltar el "Mes del Corazón" celebrado el mes de febrero y declararlo como el "Mes de la Prevención y Manejo de Síntomas del Corazón y de los Adiestramientos de Resucitación Cardiopulmonar."

En reunión ejecutiva celebrada luego de análisis de la medida y de la información disponible, los miembros de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, recomiendan la aprobación del P. de la C. 3119 con enmienda.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1729, y se da cuenta de un segundo informe conjunto de las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; de Asuntos Urbanos y de Infraestructura; y de Asuntos Municipales, con enmiendas.

**"LEY**

Para disponer que en toda obra que se comience o efectúe a partir del primero (1ro) de julio de 2001, se utilicen marcadores de kilómetros fabricados con plástico reciclado de y manufacturados en Puerto Rico, de estar disponible, y que el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad

de Carreteras, los municipios y las entidades privadas que sean contratadas adopten con las providencias reglamentarias correspondientes para el cumplimiento con esta Ley.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es salvaguardar y proteger el ambiente. El reciclaje es una de las estrategias de mayor potencial para enfrentar el creciente problema de disposición de desperdicios sólidos. Ese potencial, sin embargo, nunca ha podido maximizarse pues ningún país ha logrado cerrar el ciclo de recolección, separación, reelaboración y reuso. La experiencia ha sido que una gran cantidad de la mínima proporción de los desechos reciclables que se separan luego no pueden pasar por el proceso de reelaboración y reuso por falta de mercados.

El propósito de esta medida, junto a otras, es crear un mercado adicional para el plástico reciclado.

La medida propuesta pretende requerir que las agencias y corporaciones públicas del Gobierno, tales como el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y los contratistas privados que sean contratados por éstas para la realización de una obra en un proyecto en el que se requieran marcadores de kilómetros, utilicen marcadores fabricados con plástico reciclado de y manufacturado en Puerto Rico. De este modo, se estimula el uso de materiales reciclados y se contribuye a la conservación del ambiente.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.-Disponer que en toda obra que se comience o efectúe a partir del primero (1ro) de enero de 2001, se utilicen marcadores de kilómetros fabricados con materiales hechos de plástico reciclado de y manufacturados en Puerto Rico, de estar disponible, y que el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras, los municipios y las entidades privadas que sean contratadas por cualesquiera de los anteriores, adopten con las providencias reglamentarias correspondientes para el cumplimiento con esta Ley. Disponiéndose, que todo marcador de kilómetro existente deberá eventualmente ser sustituido por marcadores fabricados y manufacturados con plástico reciclado de Puerto Rico.

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME CONJUNTO**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; y Asuntos Urbanos e Infraestructura y Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tienen el honor de rendir su informe sobre el P. de la C. 1729 con las siguientes enmiendas.

**En el Titulo:**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 1, | eliminar "primero (1ro)" y sustituir por "1" |
| Página 1, línea 2, | después de "reciclado" eliminar "de" |
| Página 1, línea 3, | eliminar "manufacturados" y sustituir por "manufacturado"; después de "estar" eliminar "disponible" |

| | |
|---|---|
| | y sustituir por "los productos disponibles en el mercado y a un precio competitivo" |
| Página 1, línea 5, | después de "adopten" eliminar "con" |
| Página 1, línea 6, | después de "cumplimiento" eliminar "con" y sustituir por "de" |
| **En la Exposicion:** | |
| Página 2, párrafo1, línea 5, | después de "reciclado" eliminar "de" |
| **En el Texto:** | |
| Página 2, línea 1, | eliminar "primero (1ro)" y sustituir por "1" |
| Página 2, línea 3, | después de "reciclado" eliminar "de y manufacturados" y sustituir por "y manufacturado"; después de "estar," eliminar "disponible" y sustituir por "los productos disponibles en el mercado y a un precio competitivo" |
| Página 2, línea 5, | después de "adopten" eliminar "con" |
| Página 2, línea 6, | después de "cumplimiento "eliminar "con" y sustituir por "de" |

## ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 1729 dispone que en toda obra que comience o efectúe a partir del 1 de julio de 2001, se utilicen marcadores de kilómetros fabricados con plástico reciclado y manufacturado en Puerto Rico, de estar disponible, y que el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras, los Municipios y las entidades privadas que sean contratadas, adopten las providencias reglamentarias correspondientes para el cumplimiento con esta Ley.

La medida tiene como objetivo crear un mercado adicional para productos manufacturados de plástico reciclado, específicamente los marcadores de kilómetros que se utilizan en las carreteras. Establece, además, que las agencias antes mencionadas, los municipios y las empresas privadas contratadas por éstas, adopten la reglamentación necesaria para cumplir con las disposiciones de esta Ley.

## ANALISIS

La Ley Núm. 70 de 18 de septiembre de 1992, según enmendada, conocida como "Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico" establece que el plástico es un material reciclaje. Considerando que el plástico no biodegradable, es decir resistente a la descomposición natural, constituye entonces el reciclaje una alternativa para su disposición final. Este proceso reduce el uso de los vertederos y permite recuperar material reciclaje para la elaboración de productos similares u otros productos. El proveer un mercado para el reciclado de productos de plástico cumple con la política pública del Gobierno de Puerto Rico de promover el desarrollo e implantación de estrategias económicamente viables y ambientalmente seguras que resulten en la disminución del volumen de desperdicios sólidos que requiera disposición final.

La enmienda propuesta contribuye a resolver el problema de disposición de desperdicios sólidos en nuestro limitado suelo. El crecimiento poblacional y sus consecuencias nos reta a buscar alternativas viables que no tengan efectos nocivos sobre el ambiente, que beneficien a la población, que rindan beneficios a las industrias que elaboran productos plásticos y que contribuyan al desarrollo económico del país.

Para viabilizar el propósito del P. de la C. 1729, mediante la Ley Núm. 70 de 18 de septiembre de 1992, según enmendada, autoriza la concesión de préstamos por parte del Banco de Desarrollo Económico y por recomendación de la Autoridad de Desperdicios Sólidos para proveer asistencia económica a entidades privadas de la industria del reciclaje para ser utilizado en el recogido, almacenaje, procesamiento o transportación de material reciclaje para la construcción de instalaciones para el reciclaje.

Crear las condiciones para el mercado de productos que se pueda manufacturar con plástico reciclado de Puerto Rico y la concesión de préstamos para este propósito facilitará a los municipios, empresas comunitarias y otras entidades privadas la operación de empresas con un alto potencial de éxito en ese tipo de negocio. Estas empresas podrán satisfacer tanto el mercado local coo el exterior mediante la exportación del material recuperado y de productos terminados.

De otra parte, la Comisión de Recursos Naturales y Calidad Ambiental y de Desarrollo Socioeconómico y Planificación de la Cámara de Representantes acogió las enmiendas sugeridas al proyecto presentado por la Ing. Roxanna Longoria, Directora Ejecutiva de la Autoridad de Desperdicios Sólidos, quien además, endosó la aprobación de este proyecto. La Oficina de Servicios Legislativos representada por su Subdirector, el Lcdo. José M. Guerrero Preston presentó ante la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía del Senado un Memorial Explicativo en el cual recomendó la aprobación del proyecto con algunas enmiendas de estilo. La medida ante nuestra consideración ofrece una alternativa para lidiar con la disposición de desperdicios sólidos, extiende la vida de los vertederos al crear un mercadoadicional para el plástico reciclado.

El P. de la C. 1729 aprobado por la Cámara de Representantes el 9 de marzo de 2000 ofrece la alternativa de crear un mercado adicional para el plástico reciclado, mediante la fabricación de marcadores de kilómetros con plástico reciclado y manufacturado en Puerto Rico, el cual se utilizará de estar disponible y a un precio competitivo, en las carreteras que se construyan a partir del 1 de julio de 2001, así como para sustituir lo ya existente en las carreteras anteriormente construidas.

Por todas las razones vertidas anteriormente, éstas Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; Asuntos Urbanos e Infraestructura y Asuntos Municipales tiene a bien recomendar la aprobación del P. de la C. 1729 con las enmiendas sugeridas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)

Carlos Pagán González
Presidente
Comsión de Recursos Naturales,
Asuntos Ambientales y Energía

(Fdo.)

Ramón L. Rivera
Presidente
Comisión de Asuntos Urbanos
e Infraestructura

(Fdo.)
Carlos Dávila
Presidente
Comisión de Asuntos Municipales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2926, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, con enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para ordenar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, luego de la celebración de la vista pública provista por la Ley Núm. 133 del 1 de julio de 1975, conocida como "Ley de Bosques de Puerto Rico" a proclamar los manglares frente a la Playa del Peñón Brusi en el municipio de Camuy como Bosque Estatal.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

Los manglares de Puerto Rico son parte del Area de Planificación Especial del mismo nombre, la cual fue designada por virtud de la aprobación del Programa de Zona Costanera de Puerto Rico. Esto implica el reconocimiento de la protección de este recurso natural, para lo que el estado debe dedicar esfuerzos concretos y efectivos de protección.

La Resolución de la Cámara 1846 aprobada el 14 de septiembre de 1998 ordena a la Comisión de Recursos Naturales y Calidad Ambiental de la Cámara de Representantes realizar una investigación sobre las circunstancias que están afectando el desarrollo y la conservación de los manglares de Camuy.

La Resolución de la Cámara 1846 obedeció a que varios ciudadanos han reclamado nuestra atención para que realicemos una investigación sobre las circunstancias que están afectando el desarrollo y la conservación del mangle de Camuy, frente a la Playa del Peñon Brusi en el pueblo de Camuy. Es de honda preocupación que la eliminación total de este mangle creará, entre otras cosas, áreas estériles y desérticas a toda vida silvestre en dicho sector y la erosión de terrenos aledaños, en detrimento de los beneficios del manglar al ambiente, la estética y la vida general.

La Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, según enmendada y conocida como "Ley de Bosques de Puerto Rico" establece la política pública de proteger, expandir y conservar los bosques para lograr su pleno apriovechamiento y disfrute, incluyendo la utilización de los productos forestales. Esta Asamblea Legislativa recomienda los manglares de Camuy como Bosque Estatal.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se ordena al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, luego de la celebración de la vista pública provista por la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975,conocida como "Ley de Bosques de Puerto Rico a proclamar los manglares en la Playa del Peñon Brusi en el municipio de Camuy como Bosque Estatal.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales establecerá acuerdo de comanejo con el Municipio de Camuy, entidades gubernamentales y con organizaciones privadas sin fines de lucro para la preparación del Plan de Manejo.

Sección 2.-Se ordena a la Junta de Planificación a zonificar estos terrenos bajo el Distrito B-2 o bosque de mangle.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Vuestra Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, luego del estudio y análisis de la RC de la C 2926, tiene el honor de recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas.

**En el Texto:**

| | |
|---|---|
| Página 2, línea 3, | insertar " " " después de "Puerto Rico" |
| Página 2, línea 6, | tachar "comanejo" y sustituir por "co-manejo" |

**En la Exposicion:**

| | |
|---|---|
| Página 2, párrafo 1, línea 3, | tachar "apriovechamiento" y sustituir por "aprovechamiento" |
| Página 2, párrafo 1, linea 4, | insertar "proclamar" después de "recomienda" |

## ALCANCE DE LA MEDIDA

La RC. de la C. 2926 tiene como propósito ordenar al Secretario de Recursos Naturales y Ambientales, luego de la celebración de la vista pública provista por la Ley Núm. 133 del 1 de julio de 1975, conocida como "Ley de Bosques de Puerto Rico"a proclamar los manglares frente a la Playa del Peñón Brusi en el municipio de Camuy como Bosque Estatal.

Como bien expresa la Exposición de motivos de la presente pieza legislativa, los manglares de Puerto Rico son parte del Area de Planificación Especial del mismo nombre, la cual fue designada por virtud de la aprobación del Programa de Zona Costera de Puerto Rico. Esto implica el reconocimiento de la protección de este recurso natural, para lo que el Estado debe dedicar esfuerzos concretos y efectivos de protección.

La Resolución de la Cámara 1846 aprobada el 14 de septiembre de 1998 ordena a la Comisión de Recursos Naturales y Calidad Ambiental de la Cámara de Representantes realizar una investigación sobre las circustancias que están afectando el desarrollo y la conservación de los manglares de Camuy.

La Resolución de la Cámara 1846 obedeció a que varios ciudadanos han reclamado nuestra atención para que realicemos una investigación sobre las circustancias que están afectando el desarrollo y la conservación del mangle de Camuy, frente a la Playa del Peñón Brusi en el pueblo de Camuy. Es de honda preocupación que la eliminación total de este mangle creará, entre otras cosas, áreas estériles y desérticas a toda vida silvestre en dicho sector y la erosión de terrenos aledaños, en detrimento de los beneficios del manglar al ambiente, la estética y la vida general.

Con la presente medida, se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a proclamar los mangles en la Playa del Peñón Brusi del Municipio de Camuy, como Bosque Estatal.

El DRNA esblecerá un acuerdo de co-manejo con el Municipio de Camuy entidades gubernamentales y con organizaciones privadas sin fines de lucro para la preparación del plan de manejo. Por otro lado, la Junta de Planificación zonificará estos terrenos.

La Comisión de Recursos Naturales y Calidad Ambiental de la Cámara de Representantes desarrolló un plan de trabajo para atender la presente Resolución Conjunta. Veamos que análisis somenten los ponentes requeridos.

**Junta de Planificación**

La Junta de Planificación (JP) en su reunión del 25 de septiembre de 1996, adoptó mediante Resolución 96-008-JP-ZIT, la zona de Interés Turístico de Camuy, Hatillo y Quebradillas. Este estudio aprovecha la coyuntura para proteger terrenos agrícolas de alto potencial y recursos naturales de importancia en la zona. Ejemplo de ello son todas las 'reas costeras que fueron calificadas con los siguientes distritos: conservación de recursos-uno (CR-1), preservación de recursos (PR) y bosques de mangle (B-2). Las áreas a las que se hace referencia han sido calificadas con éstos distritos de protección.

Los manglares de la Playa de Peñón Brusi de Camuy fueron calificados B-2, los terrenos alrededor de éstos que sirven de amortiguamiento CR-1, un área de costa al noroeste del manglar PR y en el extremo noroeste del manglar la playa está boyada fue calificada playa pública.

La JP no tiene objeción para esta designación de Bosques Estatales, siempre y cuando el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales determine la viabilidad de los mismos mediante los estudios pertinentes.

**Gobierno Municipal De Camuy**

El Gobierno Municipal de Camuy endosa totalmente la misma, por entender que esta ayuda a preservar una de nuestras joyas más preciadas: el manglar del Peñón Brusi.

A esta fecha la zona norte de Camuy ha sido impactada por la extracción de arena, eliminación de dunas, eliminación de palmas, erosión del área marítimo terrestre, entre otras cosas. Si no se protege el área del manglar de la Playa Peñón de Brusi; dentro de algunos años esta zona también será afectada adversamente.

Les parece que es de vital importancia que el DRNA proclame este manglar como Bosque Estatal. De esta manera, se protegería el mangle, las especies que allí habitan y anidan, los diferentes ojos de agua que allí nacen, etc.

Ante la situación planteada, endosan el proyecto, sin reservas alguna.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en la ponencia enviada a la Comisión endosa esta medida.

La Comisión recomienda la aprobación de la R.C. de la C. 2926 debido a que contribuye a la conservación y preservación de un área que ha sufrido grandes presiones de desarrollo. El beneficio que se deriva de áreas de manglar redunda en ésta y futuras generaciones.

La proclama como Bosque Estatal de los manglares de Camuy, Hatillo e Isabela conformarán el Bosque Costero del Noroeste. Los terrenos que forman este Bosque contribuirá a la integración de este ecosistema en el área que comprende estos municipios.

Por los fundamentos antes expresados, vuestra Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación de la RC. de la C. 2926 con las enmiendas sugeridas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carlos Pagán González
Presidente
Comisión de Recursos Naturales,
Asuntos Ambientales y Energía"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de le la Cámara 3501, el cual ha sido descargado de la Comisión de Especial del Sistema de Retiro.

"LEY

Para enmendar el Artículo 25 de la Ley Núm. 447 del 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y sus Instrumentalidades", a los fines de disponer que los patronos en el sector público vendrán obligados a someter a la Administración de los Sistemas de Retiro toda la documentación requerida dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de solicitud de los beneficios del retiro o de liquidación de fondos; disponer que el Sistema de Retiro tramitará en un plazo no mayor de treinta (30) dias dicha solicitud; y para establecer penalidades.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

El tiempos recientes se ha levantado una gran preocupación en torno a lo lento que es el trámite para el recibo de la pensión a que tienen derecho los servidores públicos acogidos al Sistema de Retiro de los Empleados de Gobierno y sus instrumentalidades.

Un editorial reciente en uno de nuestros periódicos principales se refiere a situaciones de "desmedro económico brutal, de barreras burocráticas y de ineficiencia funcionaria que hacen que el proceso del retiro sea lento, penoso, injusto y atentatorio contra el orgullo de quien llega a una edad avanzada luego de haber entregado sus mejores energías y talento al servicio de la comunidad.

En dicho editorial se pregunta: "¿Cómo es posible que el sistema no esté organizado de manera tal que, por ejemplo, el retirado no deba hacer trámites interminables al cabo de los cuales, por si fuera poco debe esperar en ocasiones durante varios meses para recibir el cheque que le permite su subsistencia, el cumplimiento de compromisos ineludibles, como pueden ser el pago de la luz, de la hipoteca, del agua, para no hablar de la alimentación?"

El Sistema de Retiro le ha admitido a la Asamblea Legislativa que el procesamiento de las solicitudes de beneficios tardan en promedio unos tres (3) meses en esa agencia. Que anualmente se retiran unos tres mil quinientos (3,500) participantes del sistema y que las solicitudes se concentran durante los meses de marzo y diciembre.

El Sistema de Retiro recomienda que las solicitudes de pensión sean radicadas, por lo menos con un mes de anticipación a la fecha de efectividad de la separación del servicio y que el término que se establezca en la medida comience, no al momento de la separación del servicio del participante, sino, en la fecha en que se radica la solicitud con la documentación según requerida por el Sistema de Retiro.

Entre los señalamientos que hace el Administrador de Retiro para explicar la dilación en el procesamiento de las solicitudes de pensión se encuentra el que dicho trámite no depende exclusivamente de esa agencia, sino que, también depende de la Agencia para la cual trabajaba el participante al separarse del servicio y del propio participante. La agencia tiene que remitir una serie de documentos tales como: carta de renuncia, hoja de servicios, documento, de cambios, información sobre salario devengado, etc.

Según el Sistema de Retiro muchas veces es la agencia para la cual trabajaba el participante quien al no remitir los documentos a tiempo provoca la dilación en el trámite de los beneficios. Esto no debe ocurrir por lo que se debe requerir a las agencias que cumplan con la entrega de estos documentos, dentro

del término que establezca la Asamblea Legislativa y que de no cumplir se le impongan una penalidades o sanciones.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 25 de la Ley Núm. 447 del 15 de mayo de 1951, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 25.-Pagos Mensuales: Anualidades Vitalicias

Toda anualidad por retiro por incapacidad, o cualquier otra anualidad que disponga esta Ley, tendrá caracter vitalicio y será pagadera por plazos mensuales, y la misma no podrá aumentarse, disminuirse, revocarse o derogarse, salvo cuando hubiere sido concedida por error, o cuando en forma explicita se dispone de otro modo. El costo de proveer beneficios por defunción concedidos a la muerte de un participante que estuviere recibiendo una anualidad por retiro, no se cargará a la anualidad vitalicia pagadera al participante.

El primer pago de una anualidad se hará por la fracción de mes que transcurra hasta la terminación del primer mes; y el último pago se hará hasta el final del mes en que sobreviniere la muerte del participante.

Los patronos vendrán obligados a someter a la Administración toda la documentación requerida dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de solicitud de los beneficios de retiro o solicitud de fondos. La Administración tramitará la solicitud de los beneficios o la liquidación de fondos dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de la solicitud con la documentación según requerida por el Sistema de Retiro.

Si un patrono incumple la obligación establecida en este Artículo advendría responsable del pago al participante de una cantidad equivalente a un mes del sueldo que recibía éste a la fecha de la solicitud de los beneficios de la pensión o de la liquidación de los fondos."

Sección 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2521, el cual ha sido descargado de las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y de Energía; de Hacienda; y de Gobierno y Asuntos Federales.

**"LEY**

Para crear el Programa para el Control y la Prevención de la Contaminación Lumínica; establecer sus propósitos; disponer las normas básicas para la regulación de la contaminación lumínica; crear la clasificación de áreas especiales de protección; autorizar la aprobación de reglamentos; y asignar fondos.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

Desde principios del pasado siglo, la iluminación ha estado perjudicando nuestros cielos. El resplandor de la luz artificial, ocasionado por el uso inadecuado de lámparas o luminarias, envía luz de forma directa e indirecta hacia el cielo, lo que se conoce como contaminación lumínica. Esta

contaminación sucede cuando se ve un resplandor de luz en el cielo producido por el reflejo de la luz artificial en los gases y las partículas muy livianas que quedan suspendidas en el aire. Ese mismo resplandor hace menos obscura la noche y entonces "desaparece" progresivamente la luz de las estrellas en nuestro firmamento. Decimos que "desaparecen" porque no podemos percibir las estrellas con luz más débil.

Advenimos al conocimiento de esta nueva forma de contaminación ambiental, debido a la lucha constante de la ciencia de la astronomía por poder detectar y observar estrellas y galaxias que se ven tenues por su gran distancia de nuestro planeta. Los astrónomos no sólo necesitan grandes y costosos telescopios para adelantar su ciencia, sino que necesitan minimizar la contaminación lumínica para poder estudiar las galaxias y las estrellas muy lejanas, a fin de determinar el origen, la estructura y el futuro de nuestro universo, de nuestra galaxia y de nuestro sistema.

Estudios sobre las causas de esta nueva forma de contaminación revelan que el crecimiento de núcleos habitados, de los asentamientos urbanos y el progreso tecnológico son las constantes en el crecimiento de luz emitida sin control, directa o indirectamente, hacia el cielo nocturno. La causa principal identificada para la contaminación lumínica es el uso de lámparas o luminarias que no tienen pantallas o cuyas pantallas no están correctamente diseñadas para dirigir la luz hacia abajo. Este problema se ve principalmente en la red de iluminación pública, pero también puede apreciarse un desconocimiento o desinterés total en los diseños de iluminación y en los tipos de lámparas o luminarias que se utilizan usualmente.

El uso indiscriminado de lámparas tipo globo y la falta de control en cuanto a la iluminación "decorativa" y sobre el tipo de iluminación utilizada en anuncios o publicidad son causas comunes de iluminación indiscriminada en asentamientos urbanos. Los efectos de la contaminación lumínica son diversos: incrementos en las cuentas de consumo eléctrico, aumento en la demanda energética, residuos tóxicos de las lámparas, inseguridad debido a mala iluminación, animales silvestres que huyen de las áreas pobladas y pérdida de conocimientos científicos por la ausencia de visión adecuada del firmamento.

Experiencias en otras jurisdicciones, donde se llevaron a cabo programas de corrección de las lámparas o luminarias, han resultado en ahorros significativos de energía eléctrica y en una disminución sustancial de la contaminación lumínica. Los programas han incluido aspectos tales como: iluminación más eficiente a un menor costo, iluminación pareja, disminución en la "invasión de luz" provocada por sistemas de iluminación mal diseñados y colocados, uso de lámparas fluorescentes compactas, uso de fuentes alternas de energía, reducción en el alumbrado de monumentos durante períodos nocturnos, eliminación de obstáculos como ramas o follaje, sustitución de pantallas o refractores inadecuados, reglamentación de aspectos de iluminación por autoridades gubernamentales, y campañas de educación para sectores profesionales relacionados y para el público en general. La importancia de esta nueva contaminación ambiental ha llevado a organismos como la Organización de las Naciones Unidas a pronunciarse y comprometerse junto a la comunidad internacional para la solución de este problema.

Los estudiosos de este fenómeno han llegado a un consenso sobre los niveles máximos que deben permitirse de acuerdo con las circunstancias y situaciones que se repiten en prácticamente todos los rincones de nuestro planeta. Esos conocimientos se atemperan a nuestra situación particular y aquellos que resultan adecuados se incorporan a esta medida en beneficio del pueblo puertorriqueño. Igualmente, la experiencia en países de Europa y América del Sur, así como en algunas jurisdicciones de los Estados Unidos, nos sirven de ejemplo para iniciar una labor comprometida para proteger el derecho de generaciones futuras a disfrutar, no sólo de la belleza de una noche estrellada, sino de los beneficios que la ciencia astronómica puede aportar al bienestar general mediante los conocimientos que pueden lograrse al controlar la contaminación lumínica.

La evidencia nos demuestra que Puerto Rico es uno de los puntos más contaminados en la región caribeña. Inclusive, la contaminación lumínica tiene efectos adversos en la Bahía Bioluminiscente

Mosquito en Vieques y en la Bahía Bioluminiscente de la Parguera, provocando que se haya ido perdiendo la belleza de su efecto lumínico, por lo que generaciones presentes y futuras no pueden ni podrán disfrutarlo como en el pasado. Ante esta alarmante realidad, el Gobierno de Puerto Rico debe actuar afirmativamente, tomando las medidas necesarias y adecuadas que no sólo vayan dirigidas a una reducción actual, sino que aseguren la eliminación total de este tipo de contaminación. De ese modo, mejoraremos la calidad de vida de nuestro pueblo y le garantizaremos a nuestros niños su derecho de disfrutar de un cielo estrellado muchos años por venir.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.- Base Legal.-

Esta Ley se adopta al amparo de las disposiciones del Artículo 11 de la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como la "Ley sobre Política Pública Ambiental".

Artículo 2.- Título Corto.-

Esta Ley se conocerá como "Ley del Programa para el Control y la Prevención de la Contaminación Lumínica".

Artículo 3.- Definiciones.-

A los fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica:

(a) "Administración" o "ARPE" – significa la Administración de Reglamentos y Permisos, creada en virtud de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos".

(b) "Calidad astronómica de los cielos" – significa el conjunto de condiciones ambientales del cielo que determinan la posibilidad para su conservación.

(c) "Cielos nocturnos" – significa aquellos cielos que apreciamos por un término de tiempo que comprende después de la puesta del sol hasta el amanecer del próximo día.

(d) "Coeficiente de uso" – significa la cantidad de lumens de una luminaria que se recibe en el lugar donde la luz se necesita en comparación con la cantidad de lumens emitida por la luminaria.

(e) "Contaminación lumínica" – significa el efecto adverso de luz artificial que provoca reflejos en los cielos nocturnos.

(f) "Departamento" – significa el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, creado en virtud del Plan de Reorganización Núm. 3 de 9 de diciembre de 1993, según enmendado.

(g) "Director" – significa el Director del Programa de Control y Prevención de Contaminación Lumínica.

(h) "Eficacia" – significa la habilidad de un sistema lumínico de producir el efecto de luz ambiental deseado.

(i) "Eficiencia" – significa medida de la efectividad o utilidad de un sistema lumínico al comparar su propósito con su eficacia.

(j) "Emisión lumínica"- significa la emisión de flujo luminoso de una lámpara o luminaria.

(k) "Emisión hemisférica superior" – significa la emisión lumínica emitida sobre el plano horizontal de una lámpara o luminaria.

(l) "Expansión del haz de luz" – significa el ángulo total entre dos direcciones en que la intensidad de la emisión lumínica es constante.

(m) "Fuente emisora" – significa una lámpara o luminaria instalada que tiene emisión hemisférica superior.
(n) "Fuente existente" – significa una fuente emisora instalada antes de que entre en vigor esta Ley.
(o) "Fuente nueva" – significa una fuente emisora instalada con posterioridad a la vigencia de esta Ley.
(p) "Incapacidad visual por reflejo" – significa la reducción de la visibilidad provocada por el efecto de un reflejo de luz.
(q) "Invasión de luz" – significa la luz que llega a lugares no deseados o donde no se necesita.
(r) "Junta" – significa la Junta de Calidad Ambiental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, creada por la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental".
(s) "Junta de Planificación" – significa la Junta de Planificación, creada en virtud de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico".
(t) "Lámpara" – significa un aparato que emite luz, usualmente el término se utiliza para denominar la bombilla y su instalación.
(u) "Lámpara de realce" – significa una luz utilizada con el fin de enfatizar o llamar la atención a un determinado objeto o edificio.
(v) "Luz ambiental" – significa el nivel general de iluminación en un área.
(w) "Luminaria" – significa un aparato que sirve para repartir, filtrar o transformar la luz, incluyendo la bombilla y todas las piezas requeridas para su instalación, protección, conección y funcionamiento adecuado.
(x) "Lumen" – significa la unidad que es utilizada internacionalmente para medir el flujo luminoso difundido por una fuente emisora.
(y) "Luz dispersa" – significa la luz emitida por una fuente emisora que llega fuera del área donde se requiere o destina.
(z) "Pantalla" – significa un elemento utilizado para resguardar de la visión directa o para dirigir la emisión lumínica de una fuente emisora.
(aa) "Persona" – significa toda persona privada, natural o jurídica, dentro de la jurisdicción de Puerto Rico.
(bb) "Programa" – significa el Programa para el Control y Prevención de la Contaminación Lumínica, que se crea en el Artículo 5 de esta Ley.
(cc) "Proyector" – significa una lámpara o luminaria diseñada para iluminar con intensidad determinada área.
(dd) "Reflector" – significa una lámpara o luminaria que controla la emisión lumínica utilizando reflección de espejos.
(ee) "Refractor" – significa una lámpara o luminaria que controla la emisión lumínica utilizando la refracción mediante lentes.
(ff) "Reflejo" – significa la luz indirecta e intensa que provoca ceguera.

Artículo 4.- Creación del Programa.-

Se crea el Programa de Control y Prevención de Contaminación Lumínica, adscrito a la Junta de Calidad Ambiental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuyo propósito es prevenir y controlar la contaminación lumínica de los cielos nocturnos para el disfrute de todos nuestros habitantes, el beneficio de la investigación científica de la astronomía y alentar la conservación de energía mediante el establecimiento

de normas en cuanto al tipo, clase, construcción, instalación y el uso y manejo de dispositivos eléctricos adecuados para la iluminación exterior y de sistemas para conservar energía que aseguren la calidad astronómica de nuestro cielo.

Artículo 5.- Dirección del Programa.-

El Presidente de la Junta de Calidad Ambiental nombrará un Director, quien será el funcionario, a nivel central, a cargo del desarrollo e implementación del Programa con el asesoramiento del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, de la Junta de Planificación y de otras agencias, según se requiera, en virtud de las disposiciones del Artículo 11 de la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada.

Artículo 6.- Disposiciones Generales.-

Se establecen las siguientes normas, medidas y métodos permitidos de emisión lumínica hacia los cielos nocturnos, como la base para el desarrollo del Programa.

(a) Las fuentes emisoras de exterior, independientemente de que hayan sido instaladas con anterioridad a la vigencia de esta Ley, localizadas en propiedades privadas de uso comercial, industrial o familiar, deberán cumplir con las siguientes disposiciones:

(1) cuando se utilicen luminarias con color para propósitos comerciales o industriales, las lámparas o luminarias de exterior deberán contar con pantallas, aparatos de operación automática para encendido y apagado, y utilizar el mínimo de luz necesario;

(2) cuando el propósito del sistema de iluminación sea de seguridad o para iluminar aceras, carreteras, áreas de almacenaje de equipo y estacionamientos, sólo podrán utilizarse fuentes emisoras de sodio de baja presión; y

(3) cuando el propósito sea para letreros o efectos decorativos en áreas recreativas, edificios, jardines y estructuras o áreas análogas, el sistema lumínico exterior deberá contar con aparatos de operación automática para encendido y apagado y, cuando sea viable, deberá contar con pantallas que minimicen la emisión hemisférica superior y la invasión de luz.

(b) A tales efectos, las fuentes emisoras de exterior, independientemente de que hayan sido instaladas con anterioridad o posterioridad a la vigencia de esta Ley, en propiedades privadas de uso comercial, industrial o familiar, deberán apagarse entre las once de la noche (11:00 p.m.) y el amanecer del próximo día, excepto:

(1) aquellas destinadas a uso comercial e industrial, en lugares donde se presten servicios hasta pasadas las once de la noche (11:00 p.m.), pero sólo hasta la hora en que se continúe prestando servicios;

(2) aquellas destinadas a seguridad de áreas de aceras, carreteras, áreas de almacenaje de equipo y estacionamiento; y

(3) aquellas destinadas a áreas recreacionales que se estén utilizando hasta pasadas las once de la noche (11:00 p.m.), pero sólo hasta la hora en que termine la actividad recreativa.

(c) Todo sistema lumínico destinado a anuncios y publicidad que esté ubicado dentro de las facilidades de un establecimiento comercial será apagado entre las once de la noche (11:00 p.m.) y el amanecer del próximo día, excepto cuando dicho establecimiento esté abierto al público. Disponiéndose, que todo sistema lumínico destinado a anuncios y publicidad que esté ubicado fuera de las facilidades deberá apagarse entre las doce de la noche (12:00 p.m.) y el amanecer del próximo día. Toda fuente emisora de exterior deberá cumplir con las disposiciones de esta Ley, así como con las demás disposiciones estatutarias, administrativas y municipales aplicables.

(d) Todo sistema lumínico que se utilice para anuncios publicitarios al aire libre deberá cumplir

con las siguientes disposiciones:

1. El sistema deberá estar instalado en el tope o lado superior de la estructura del anuncio, y cumplir con las disposiciones sobre control a fin de evitar la emisión hemisférica superior y la luz dispersa, así como deberá cumplir con las disposiciones de este Artículo sobre control de horarios.
(2) Los sistemas lumínicos de anuncios existentes deberán modificarse para cumplir con las disposiciones aplicables dentro de un término de cuatro (4) años a partir de la fecha de vigencia de esta Ley.
(3) Se prohíbe el uso de reflectores o proyectores de luz en sistemas lumínicos para anuncios o publicidad.

Artículo 7.- Planes y Evidencia de Cumplimiento.-

(a) Se prohíbe el uso de cualquier tipo de diseño, material o método de instalación del sistema lumínico que no haya sido evaluado y aprobado por la Junta o ARPE. A tales efectos, se prohíbe en áreas exteriores:

(1) el uso de fuentes emisoras a base de vapor de mercurio;
(2) el uso de fuentes emisoras a base de sodio, fluorescentes, de haluro de metal, de cuarzo o incandescentes; y
(3) el uso de fuentes emisoras que funcionen con tecnología a base de rayo láser, excepto durante períodos de no más de treinta (30) horas durante cualquier período de treinta días y sólo durante la realización de una actividad comercial o recreacional específica.
(b) Toda persona que someta documentación ante la Junta de Planificación y ante ARPE, a fin de obtener las autorizaciones y permisos requeridos para una obra propuesta que envuelva sistemas lumínicos exteriores deberá incluir, como parte de dicha documentación, evidencia de que la obra propuesta tiene la aprobación de la Junta, en virtud de las disposiciones de los incisos (20), (27)(A) y (B), y (28) del Artículo 11 de la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada.

La documentación incluirá, sin que se interprete como una lista exhaustiva, la siguiente información:

(1) Los planos indicando la localización y el tipo de toda lámpara o luminaria, instalación, proyector, reflector y refractor relacionado al sistema lumínico;
(2) La descripción de los aparatos de iluminación, incluirá, sin que se interprete como una limitación: dibujos, descripciones comerciales u otra descripción que sea adecuada para esta finalidad;
(3) La información más detallada disponible sobre la eficacia, la eficiencia, la emisión hemisférica superior, la posible invasión de luz del sistema lumínico propuesto, la posibilidad de incapacidad visual por reflejo, así como de los métodos o artefactos para concentrar o corregir la expansión del haz de luz de las lámparas o luminarias propuestas; y
(4) Si durante el desarrollo de la nueva obra se considera alguna variación en el sistema lumínico propuesto y aprobado, dicha variación deberá someterse previamente a la atención de la Junta para su aprobación y eventual aprobación de la Junta de Planificación y de ARPE, según corresponda.

(c) ARPE y la Junta de Planificación deberán requerir evidencia de la aprobación preliminar por parte del Programa, del sistema lumínico propuesto, como requisito para su eventual evaluación de una nueva obra.

Artículo 8.- Clasificación de Areas Exteriores y Especiales.-

(a) Se establecen las siguientes clases de áreas exteriores y especiales, de acuerdo con sus características de iluminación:
   1. Clase 1 – terrenos obscuros – Areas dedicadas a parques, áreas de conservación y áreas rurales, sub-urbanas o urbanas con poca o ninguna iluminación exterior;
(2) Clase 2 – áreas con un bajo nivel de luz ambiental, tales como residenciales sub-urbanas y rurales;
(3) Clase 3 – áreas con mediano nivel de luz ambiental, tales como áreas urbanas dedicadas a zonas residenciales;
(4) Clase 4 – áreas con alto nivel de luz ambiental, tales como áreas urbanas dedicadas a zonas resìdencial o comercial con actividad nocturna.
(5) Clase especial para la zona de Vieques – toda el área territorial de la isla municipio de Vieques, a fin de proteger la Bahía Bioluminiscente Mosquito;
(6) Clase especial para la zona de La Parguera – una zona especial que comprende un área de cinco (5) millas alrededor de la Bahía Bioluminiscente de La Parguera, para su protección.

Artículo 9.- Disposiciones Administrativas.-

El Presidente de la Junta adoptará la reglamentación necesaria para implementar las disposiciones de esta Ley. Dichas normas deberán asegurar la implementación de medidas correctivas, aplicables a toda área u obra existente al momento de aprobarse esta Ley, las cuales deberán incluir planes de corrección con términos máximos de tres (3) años.

El Departamento y la Junta de Planificación brindarán a la Junta todo servicio de consulta, asistencia y apoyo que pueda ser necesario para garantizar la implementación eficiente y adecuada de esta Ley, en cuanto a estudios, desarrollo e implementación.

Artículo 10.- Cláusula de Salvedad.-

Si algún artículo, parte, párrafo, apartado o inciso de esta Ley es declarada inconstitucional por autoridad competente, esa determinación no afectará la vigencia de ningún otro artículo, parte, párrafo, apartado o inciso, quedando los demás en pleno vigor.

Artículo 11.- Asignación de Fondos.-

Se asigna la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro de Puerto Rico, para el establecimiento y desarrollo de este Programa; los cuales ingresarán en la Cuenta Especial de la Junta de Calidad Ambiental en el Departamento de Hacienda. Estos fondos podrán ser pareados con otros fondos federales, estatales o municipales, públicos o privados.

Artículo 12.- Vigencia.-

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación a los únicos fines de que la Junta de Calidad Ambiental establezca el Programa para el Control y Prevención de la Contaminación Lumínica y se adopte la reglamentación necesaria para la implementación de las disposiciones de esta Ley. Sus restantes disposiciones entrarán en vigor el 1 de julio de 2001."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2438, la cual ha sido descargada de la Comisión de Educación y Cultura.

"LEY

Para enmendar el apartado (3) del inciso (a) del Artículo 3.8 y el apartado (3) del inciso (a) del Artículo 4.11; y adicionar un cuarto párrafo al Artículo 5.1A de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como "Ley de Etica Gubernamental", a fin de disponer que el período prescriptivo establecido para los delitos que constituyen violaciones a dicha Ley será de diez (10) años.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

El Estado tiene el deber ineludible de garantizar el respeto al derecho y la obediencia a la ley, especialmente en lo referente a la conducta de quienes lo representan ante el pueblo. La Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como "Ley de Etica Gubernamental", fue aprobada para promover y preservar la integridad de los servidores públicos y de las instituciones del Gobierno.

Entre las medidas que la ley anteriormente mencionada adoptó para lograr dicho objetivo, se halla el establecimiento de un Código de Etica para los funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva; la creación de la Oficina de Etica Gubernamental; y la incorporación de sanciones para prevenir y penalizar el comportamiento delictivo que vulnere los principios básicos de una ética de excelencia.

Cabe indicar que actualmente se dispone de un término prescriptivo de cinco años para los delitos que consituyen violaciones a los Capítulos III y IV de dicha Ley. Esta Asamblea Legislativa considera que se deben aumentar los términos prescriptivos de los delitos establecidos en dicha ley, a los fines de lograr que se encausen de manera más efectiva a quienes quebrantan las disposiciones de la Ley de Etica. Por ello, resulta indispensable la aprobación de esta medida, que enmienda la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, a los efectos de disponer que dicho término sea de diez años.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.- Se enmienda el apartado (3) del inciso (a) del Artículo 3.8 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 3.8- Sanciones y Remedios

(a) Acciones de Naturaleza Penal

(1) ...

(3) Los delitos establecidos en este capítulo prescribirán a los **[cinco (5)]** *diez (10)* años."

Artículo 2.- Se enmienda el apartado (3) del inciso (a) del Artículo 4.11 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 4.11.- Incumplimiento o Falsificación

(a) Acción de naturaleza penal

(1) ...

(3) Los delitos establecidos en este capítulo prescribirán a los **[cinco (5)]** *diez (10)* años."

Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3160, el cual ha sido descargado de la Comisión de lo Jurídico.

**"LEY**

Para enmendar los incisos (a) y (b) del Artículo 3, enmendar el inciso (a) del Artículo 4, añadir un inciso (d) al Artículo 8 y enmendar el Artículo 16 de la Ley Núm. 284 del 21 de agosto de 1999, conocida como la "Ley Contra el Acecho en Puerto Rico", a fin de corregir el alcance de la definición de lo que constituye acecho para efectos de dicha Ley, ampliar el alcance de las disposiciones sobre las órdenes de protección, y enmendar los formularios que forman parte de la legislación.

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La Ley Contra el Acecho en Puerto Rico, Ley Núm. 284 del 21 de agosto de 1999, tipifica el acecho como un patrón de conducta mediante el cual se mantiene constante o repetidamente una vigilancia o proximidad física o visual sobre determinada persona; se envían repetidamente comunicaciones verbales o escritas no deseadas a una determinada persona, se envían repetidamente amenazas escritas, verbales o implícitas a determinada persona, se efectúan repetidamente actos de vandalismo dirigidos a determinada persona, se hostiga repetidamente mediante palabras, gestos o acciones dirigidas a molestar, perseguir o perturbar a la víctima o a miembros de su familia. Además, se requiere que el patrón de conducta constante deber ser en forma ininterrumpida durante un periodo de tiempo que no sea menor de quince minutos.

En cuanto a este último punto, cabe señalar que el elemento tiempo no necesariamente forma parte de la conducta que debe ser tipificada como acecho. Por lo tanto es importante aclarar el significado de patrón de conducta constante o repetido y para eliminar el periodo de tiempo de los actos que componen dicho patrón de conducta.

Por otra parte, la Ley Núm. 284, *supra*, debe ser atemperada a las disposiciones del estatuto federal conocida como *Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994,* que en su Título IV, sec. 40131 - 40611 (42 U.S.C. § 13931 -14040, Vilolence Against Women Act*)* establece mecanismos para enfrentar los numerosos crímenes de violencia doméstica, sexuales, de acecho, hostigamiento y persecución que afectan a mujeres de todo tipo de raza, condición social, étnica y económica en los Estados Unidos. Por lo tanto, es necesario enmendar la Ley contra el Acecho para que el contenido de los formularios de las órdenes de protección contengan la información necesaria para poner en vigor las cláusulas de entera fe y crédito de la legislación federal.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.–Se enmiendan los incisos (a) y (b) del Artículo 3 de la Ley Núm. 284 del 21 de agosto de 1999, para que lea como sigue:

"Artículo 3.–Definiciones

. . . . . .

(a) "Acecho" significa una conducta mediante la cual se ejerce una vigilancia o proximidad física sobre determinada persona; se envían comunicaciones verbales o escritas no deseadas a una determinada persona, se realizan amenazas escritas, verbales o implícitas a determinada persona, se

efectúan actos de vandalismo dirigidos a determinada persona, se hostiga repetidamente mediante palabras, gestos o acciones dirigidas a intimidar, amenazar o perseguir a la víctima o a miembros de su familia.

(b) "Patrón de conducta persistente" significa realizar en dos (2) o más ocasiones actos que evidencian el propósito intencional de intimidar a determinada persona o a miembros de su familia.

. . . . . ."

Sección 2.-Se enmienda el inciso (a) del Artículo 4 de la Ley Núm. 284 del 21 de agosto de 1999, para que lea como sigue:

"Artículo 4.-Conducta Delictiva; Penalidades

(a) Toda persona que intencionalmente manifieste un patrón de conducta persistente de acecho dirigido a intimidar a una determinada persona a los efectos de que ella, o cualquier miembro de su familia podría sufrir daños, en su persona o en sus bienes; o que mantenga dicho patrón de conducta a sabiendas de que determinada persona razonablemente podría sentirse intimidada, incurrirá en delito menos grave y será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de doce (12) meses. De mediar circunstancias atenuantes, la pena se podrá reducir a un término no menor de nueve (9) meses, y de mediar circunstancias agravantes, la pena podrá aumentarse hasta dieciocho (18) meses.

. . . . . ."

Sección 3.- Se añade un inciso (d) al Artículo 8 de la Ley Núm. 284 del 21 de agosto de 1999, para que lea como sigue:

"Artículo 8. - Contenido de las órdenes de protección

. . . . . .

(d) Toda orden de protección deberá satisfacer las disposiciones establecidas por las secciones 2261, 2261A, 2262 y 2265 del Violence Against Women Act (V.A.W.A.), Title IV, P.L. 103-322 del Violent Crime Control and Law Enforcement Act, incluyendo los requisitos sobre el debido proceso de ley para la parte peticionada. Toda orden de protección deberá establecer que tendrá vigor en cualquier jurisdicción de los Estados Unidos; que una violación a la misma puede resultar en un arresto en cualquier jurisdicción de los Estados Unidos y que será incluida en el Registro de Ordenes de Protección."

Sección 4.- Se enmienda el Artículo 16 de la Ley Núm. 284 del 21 de agosto de 1999, para que lea como sigue:

"Artículo 16. - Formularios

Los formularios que proveerán las secretarías de los tribunales de justicia a las personas que soliciten una orden de protección deberán diseñarse en forma tal que pueda consignarse o declararse la información, circunstancias y datos que contienen los modelos aquí incluidos. Dichos formularios deberán estar disponibles en español e inglés para cumplir con las disposiciones establecidas por las secciones 2261, 2261A, 2262 y 2265 del Violence Against Women Act (V.A.W.A.), Title IV, P.L. 103-322 del Violent Crime Control and Law Enforcement Act. No obstante, la Oficina de la Administración de los Tribunales podrá modificar dichos formularios cuando lo entienda conveniente para lograr los propósitos de esta Ley.

. . . . . ."

Sección 5.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 3109, la cual ha sido descargada de la Comisión de Agricultura.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar a la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico, proceder con la liberación de la Cláusula de Lotificación, incluída en la Escritura de Compraventa número ciento noventa y cinco de 4 de octubre de 1972, otorgada ante la notario América Cano de Rivera, de la Finca número 4,766, inscripción octava, inscrita al Folio 54 del Tomo 275 de Arecibo, localizada en el Barrio Miraflores del término municipal de Arecibo, P.R., propiedad de la Sucesión Molina Faría.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974 que rige las disposiciones del Título VI, dispone que las fincas vendidas bajo tal Ley no pueden ser lotificadas, aunque el uso de la finca continúe siendo agrícola. Para poder liberar las condiciones restrictivas de dicha Ley hay que utilizar el mecanismo legislativo según dispone la propia Ley, para cada caso individual.

Por medio de esta Resolución Conjunta se solicita la liberación de las condiciones y restricciones de la Finca número 4,766 vendida bajo el Título IV. Esta solicitud está basada en el hecho de que no se pretende lotificar la misma con proyecciones especulativas o lucrativas, sino para dividir la misma entre los herederos de la Sucesión Molina Faría, quienes son los legítimos dueños de la referida propiedad.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se ordena a la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico, proceder con la liberación de la Cláusula de Lotificación, incluída en la Escritura de Compraventa número ciento noventa y cinco de 4 de octubre de 1972, otorgada ante la notario América Cano de Rivera, de la Finca número 4,766, inscripción octava, inscrita al Folio 54 del Tomo 275 de Arecibo, localizada en el Barrio Miraflores del término municipal de Arecibo, P.R., propiedad de la Sucesión Molina Faría.

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2205, el cual ha sido descargado de las Comisiones de lo Jurídico; y de Hacienda.

"LEY

Para disponer la adhesión y cancelación de un sello especial denominado Sello para Compañías de Fianzas en Puerto Rico a favor de la Sociedad para Asistencia Legal, en toda transacción, gestión o garantía de fianza que se presten en casos criminales.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Tanto la Enmienda Sexta (VI) de la Constitución de los Estados Unidos como la Sección II de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico consagran como inalienable el derecho del acusado a estar asistido de abogado en un proceso de naturaleza criminal.

Se trata de un derecho centenario en los Estados Unidos que llega a Puerto Rico por vía de la Ley Jones de 1917.

Sin embargo, el problema de la representación legal en las causas criminales no era uno que quedara subsanado meramente por la consagración de los derechos del acusado en las leyes fundamentales, porque su

dimensión se extendía al acceso real del acusado a la corte, o sea, de una buena y adecuada representación en el proceso donde se debatía la pérdida de su libertad ciudadana.

Ese tipo de incertidumbre al que estaba expuesto el derecho penal y su administración, y el rango constitucional que vestía el derecho a asistencia legal en una causa criminal motivaron que para el año 1955, nueve (9) ciudadanos, entre ellos prestigiosos juristas puertorriqueños, crearan una organización sin fines de lucro, la Sociedad para Asistencia Legal, y de esta manera, se proveyera la avenida para que el ciudadano indigente que no podía obtener los servicios de un abogado tuviera acceso real a la justicia criminal.

Aún con el éxito alcanzado por la Sociedad-reflejado no solamente en el número de casos graves atendidos en el Tribunal de Primera Instancia, el cual constituye aproximadamente el 60% de los casos atendidos por el Tribunal, sino también por su labor apelativa que ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones y el Tribunal Supremo ha sentado abundante y nueva jurisprudencia que fortalecen los derechos del acusado y los valores de nuestra vida democrática de pueblo - su misión permanece trunca el carecer de los recursos económicos necesarios para que el acceso a la corte del ciudadano indigente sea uno de verdadera y sostenida igualdad.

Cuarenta y cuatro (44) años más tarde, la Sociedad para Asistencia Legal sigue dependiendo sustancialmente de los recursos que el Estado le asigna a través del Departamento de Justicia, la institución gubernamental que a través de su fiscalía tiene la función ministerial de acusar y procesar al ciudadano en los tribunales del país.

Esta medida legislativa y los medios que aquí se disponen, más otros proyectos coetáneos, constituyen una reforma que tiene el loable y necesario propósito de proveer a la Sociedad para Asistencia Legal de los recursos económicos y de la libertad fiscal necesaria para que brinde al ciudadano indigente una representación legal a la altura que reclama nuestro sistema democrático de vida y los principios constitucionales que lo sostienen.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.-En todo contrato de fianza que sea prestado en casos criminales, hecho por una Compañía de Fianzas dedicada y autorizada a hacer negocios en Puerto Rico, a favor de cualquier persona, presentado en un Tribunal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se tendrá que adherir y cancelar un sello especial para Compañías de Fianzas en Puerto Rico como se dispone más adelante en esta ley.

Artículo 2.-Las Compañías de Fianzas tendrán de forma exclusiva la obligación dispuesta en el artículo anterior; disponiéndose que las Compañías de Fianzas no podrán traspasar el costo de dicho sello a sus clientes. La Secretaría del Tribunal verificará que el Sello se haya adherido en el documento o contrato de fianza prestado y se encargará de su cancelación.

Artículo 3.-No vendrán obligados a cancelar o adherir el sello, la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio o cualquier otra institución sin fines de lucro con funciones similares.

Artículo 4.-Los derechos a ser pagados serán de cinco (5) dólares por cada fianza otorgada en casos criminales realizada por una Compañía de Fianzas.

Artículo 5.-El Secretario del Departamento de Hacienda preparará, reproducirá, distribuirá y venderá en todas las Colecturías de Rentas Internas establecidas en Puerto Rico el sello especial aquí dispuesto.

Artículo 6.-Esta Ley entrará en vigor treinta (30) días después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 544, el cual ha sido descargado de la Comisión de lo Jurídico.

"LEY

Para enmendar los Artículos 95 y 141 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de que el delito de agresión agravada sea de naturaleza grave cuando se cometa contra la persona de un oficial del orden público, así como la que se cometa por un funcionario público so color de autoridad y sin causa legítima; enmendar las penas; para eliminar el inciso (a) del Artículo 141, y para otros fines.

## EXPOSICION DE MOTIVOS

Las agresiones contra los miembros de la Policía de Puerto Rico han ido en aumento. Los agentes del orden público son víctimas de amenazas y agresiones constantes de parte de personas que no tienen respeto por la ley. Lamentablemente, en ocasiones esa falta de respeto hacia los agentes del orden público se debe a los abusos de poder de algunos agentes, so color de autoridad y sin legítima causa.

Ambos tipos de agresiones van en menoscabo de la autoridad legítima que representan estos miembros de la Policía de Puerto Rico, y de nuestro sistema de justicia en general.

En momentos en que la incidencia criminal ha alcanzado un alarmante aumento, es imprescindible proveer un disuasivo más efectivo para desalentar éstas acciones delictivas, y castigar a los autores de las mismas con mano firme.

El Artículo 95 del Código Penal de 1974 provee para que el delito de agresión agravada sea considerado grave cuando la persona entre en la morada de otra y cometa allí la agresión, cuando se infiere grave daño corporal a la persona agredida, cuando se cometiere con armas mortíferas en circunstancias que no revistiesen la intención de matar o mutilar, cuando se cometa contra personas con impedimentos y cuando se cometiere contra una persona de sesenta años o más.

Igualmente, el equivalmente a este tipo de conducta, que tiene como sujeto activo de la agresión a un funcionario público, tipificada como delito dentro de los incisos de los Artículos 95 y 141 del Código Penal, sería la que realiza so color de autoidad y sin causa legítima. Este es el caso del policía uniformado que, invocando la autoridad que le da su cargo y sin causa legítima, agrede a un ciudadano; *Pueblo v. Malavé D.P.R. 659 (1945).*

Mediante esta Ley, se considerará como delito grave la agresión cometida contra la persona de un oficial del orden público, así como la que se cometa por un funcionario público so color de autoridad y sin causa legítima.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 95 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 95.-Agresión agravada

La agresión se considerará agravada aparejando pena de reclusión por un término que no excederá de seis (6) meses o multa máxima de quinientos (500) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal, si se cometiere con la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias:

(a) Cuando se cometa en la persona de un funcionario público en el cumplimiento de sus deberes, o como consecuencia de éstos, en caso de saberse por o haberse hecho saber a la persona que cometiese el hecho, que la persona agredida era un funcionario público o en su presencia.

(b) Cuando se cometiere en un tribunal de justicia o en cualquier otro sitio dedicado al culto o a las prácticas religiosas o en algún lugar donde se hallaren reunidas varias personas con fines lícitos.

(c) Cuando se cometiere por un varón adulto en la persona de una mujer o niño, o por una mujer adulta en la de un niño menor de 16 años de edad.

(d) Cuando se cometiere con la intención de infligir grave daño corporal.

(e) Cuando se cometiere por una o más personas haciendo uso de ventaja indebida.

(f) Cuando se cometiere contra un arbitro, jurado, oficial o cualquier otra persona que realiza una función oficial en cualquier actividad deportiva, mientras éste en el cumplimiento de sus deberes.

En cualquiera de las modalidades anteriores, el tribunal, a su discresión, podrá imponer la pena de prestación de servicios en la comunidad, en lugar de la pena de reclusión.

Se considerará la agresión agravada como delito grave aparejando pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, multa no menor de mil (1,000) dólares ni mayor de cinco mil (5,000) dólares, o ambas penas a discresión del tribunal:

(a) Cuando la persona entre en la morada de una persona y cometiere allí la agresión.

(b) Cuando se infligiere grave daño corporal a la persona agredida.

(c) Cuando se cometiere con armas mortíferas en circunstancias que no revistiesen la intención de matar o mutilir.

(d) Cuando se cometiere contra una persona de sesenta (60) años o más.

(e) Cuando se cometiere en la persona con impedimento físico o mental cuya condición es manifiesta, o en caso que no sea visible, que la condición física o mental sea conocida por el agresor.

(f) Cuando se cometiere en la persona de una mujer embarazada, cuya condición fuere aparente.

(g) Cuando se cometiere en la persona de un oficial del orden público en el cumplimiento de su deber, a sabienda de que ocupa dicho cargo, y con la intención de infligirle grave daño corporal.

(h) Cuando se cometiere por un funcionario público so color de autoridad y sin causa legítima.

De mediar circunstancias agravantes la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años.

El tribunal podrá imponer la pena de restitución en adición a la pena de reclusición establecida o ambas penas."

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 141 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 141.- Recopilación ilegal de información personal

Todo empleado o funcionario público que levante, mantenga o preserve expedientes, carpetas, manuales, listas, ficheros o compile información y documentos que contengan nombres y datos de personas, agrupaciones y organizaciones única y exclusivamente por motivo de creencias ideológicas, religiosas, sindicales o por motivo de raza, color, sexo, condición de salud, física o mental sin estar dichas personas, agrupaciones o entidades vinculadas con la comisión o intento de cometer un delito o con el propósito de discriminar en la obtención o permanencia de un empleo, serán sancionado con pena de reclusión por término fijo de seis (6) años; de mediar circunstancias atenuantes la pena aquí impuesta podrá ser reducida hasta cuatro (4) años y de haber circunstancias agravantes podrá ser aumentada hasta ocho (8) años."

Sección 3.-Esta Ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación. "

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3008, el cual ha sido descargado de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura.

**"LEY**

Para denominar con el nombre "Museo Tecnológico Dr. Modesto Iriarte", a la antigua Central Bonus de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, localizada en el Municipio de Rincón.

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, es una corporación pública creada en virtud de la Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941, según enmendada, con el fin de impulsar el bienestar general y aumentar la prosperidad mediante el desarrollo de las fuentes fluviales y de energía de Puerto Rico. Desde su creación, en el 1941, esta empresa de servicio público ha sido pilar del desarrollo económico y social del país, gracias al liderazgo visionario de los servidores públicos que han laborado y laboran en ella.

Como parte del Plan Estratégico Corporativo de la Autoridad de Energía Eléctrica, se establece como meta sobresaliente "colaborar con todo esfuerzo por mejorar la calidad de vida de la sociedad puertorriqueña". En armonía con este propósito, la Autoridad determinó convertir la estructura de la antigua Planta Nuclear Bonus ("Boiler Nuclear Superheater") en un museo con valor educativo, ciéntifico y recreativo para la comunidad.

Entre los funcionarios de la Autoridad que más se han destacado en el campo científico se encuentra el Dr. Modesto Iriarte, miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Este brillante y distinguido profesional posee los grados académicos de Bachiller en Ingeniería Eléctrica de Texas A & M y Doctorado en Ingeniería Nuclear de la Universidad de Michigan. Adémas, cursó estudios graduados en ciencia nuclear en la Universidad de Chicago y en gerencia en la Universidad de California en Los Angeles.

El doctor Iriarte fue Catedrático Auxiliar de Ingeniería Eléctrica en el Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, del 1945 al 1951. También, fue Profesor Honorífico de dicho Recinto del 1962 al 1965.

A partir del 1951, inició su notable carrera profesional en la Autoridad, donde comenzó como Ingeniero de Diseño y alcanzó los puestos de Superintendente del Despacho de Carga; Ingeniero Eléctrico y Nuclear, Principal; Director de Planificación; Subdirector Ejecutivo y Director Ejecutivo Interino. Presidió la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica desde el 1985 hasta el 1993 y desde el 1999, continúa como miembro de la misma.

Otros cargos y posiciones de liderazgo que ha ocupado en instituciones técnicas, educativas y culturales revelan la diversidad de talentos de este puertorriqueño ejemplar y reputable, reconocido por múltiples entidades y grupos, tanto a nivel local como a nivel internacional. Fue profesor del curso de Administración para el grado de Maestría de la Universidad Politécnica de Puerto Rico en el 1994. También, fue consultor en el Centro de Energía y Desarrollo Ambiental de la Universidad de Puerto Rico, del 1976 al 1991. El Secretario de lo Interior de los Estados Unidos lo designó representante para el intercambio de información técnica entre los Estados Unidos y la República Federal Alemana, en el 1970. Ese mismo año ocupó el cargo de Director Asociado de Energía de Potencia por la Administración de Defensa Federal de Energía. En el 1997, se le nombró miembro de la Junta de Directores de la Universidad Politécnica.

Sus conocimientos y talentos trascienden a otros campos de la cultura. Entre otros desempeños de este excepcional funcionario, presidió el Instituto del Cuatro Puertorriqueño y fue designado representante de Puerto Rico para la Junta de Directores de la organización conocida como "International Order of Self Realization Fellowship", con sede en Los Angeles, California.

El doctor Iriarte ha recibido numerosos y merecidísimos honores, entre otros, el haber sido escogido el Ingeniero Electricista Distinguido en el 1982. Además, en 1998, el Instituto de Ingenieros Electricistas le dedicó su asamblea anual.

Este ilustre servidor público ha publicado más de treinta artículos en revistas profesionales. Entre sus escritos se distinguen el texto de Ciencias de Computadoras Digitales Modernas en el 1984. También, fue uno de los autores de un libro sobre el tema de los avances en las ciencias nucleares, publicado por la "Academic Press" en el 1962.

Es miembro prestigioso del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, y es socio vitalicio del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE); es miembro de la Sociedad Científica Sigma XI, de la Sociedad Nuclear Americana y de la Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico.

La obra fructífera y abundante del doctor Iriarte en el campo de la ingeniería, en el servicio público y en las artes y las ciencias merecen el reconomiento de toda la comunidad puertorriqueña. Su labor sirve de ejemplo para las nuevas generaciones de técnicos y científicos que deben continuar con la obra del doctor Iriarte y guiar a nuestro pueblo para colocarlo a la vanguardia del desarrollo tecnológico. Sus aportaciones a la Autoridad y a la ingeniería, a nivel internacional, deben dársele a conocer a los que han seguido y siguen sus pasos en labores relacionadas con el servicio de energía eléctrica y a la comunidad.

En justicia, corresponde que nuestro pueblo le brinde un reconocimiento que trascienda el tiempo y la distancia, un reconocimiento que inmortalice su obra en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Corresponde singularizar a este insigne ingeniero puertorriqueño al denominar el edificio que alberga el Museo Tecnológico con su nombre.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO**

Artículo 1.-Denominar con el nombre "Museo Tecnológico Dr. Modesto Iriarte," a la antigua Central Bonus de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, localizada en el Municipio de Rincón.

Artículo 2.-La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley sin sujeción a lo dispuesto en la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, según enmendada.

Artículo 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2729, el cual ha sido descargado de la Comisión de lo Jurídico.

**"LEY**

Para enmendar el Artículo 299 del Código Penal de 1937, según enmendado, a los fines de atemperarlo al Plan de Reorganización Núm. 1, según enmendado, conocido como "Ley de la Judicatura de 1994".

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El Artículo 299 del Código Penal de 1937, según enmendado, dispone que un juez de paz, de Distrito o Superior podrá dictar una orden de allanamiento si ante él se ha prestado juramento y se han presentado prueba satisfactoria al efecto de que cree que se está utilizando una casa u edificio o local para casa de juego pública con el fin de jugar dinero u otra clase de bienes.

Nuestras leyes en relación a la judicatura han sido modificadas y al presente ya no existe la figura de Juez de Paz. Por su parte, la del Juez de Distrito se extinguirá aproximadamente para el año 2002. La Ley de la Judicatura de 1994 establece que el Tribunal de Primera Instancia será uno de jurisdicción original general y estará compuesto por Jueces Municipales y Jueces Superiores.

En nuestro deber legislativo atemperar y actualizar las leyes de manera que podamos evitar confusiones procesales y judiciales que puedan obstruir, atrasar y en caso extremo, frustrar el desarrollo de los procesos judiciales de Puerto Rico.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 299 del Código Penal de 1937, según enmendado, para que se lea como sigue:

"Artículo 299.-Juegos de azar prohibidos; órdenes de allanamiento; confiscación de bienes.

...

Si una persona presta juramento ante un Juez del Tribunal de Primera Instancia al efecto de que cree, o tiene motivo probable para creer de que ilegalmente se está usando de una casa u otro edificio, habitación o local para casa de juego pública, con el fin de jugar dinero u otra clase de bienes, o de que se ocupa, utiliza, o se tiene para la explotación de una lotería, o para la explotación del juego conocido como "lotería de policy", o "policy", y que concurren allí personas con tal objeto dicho juez, en caso de que le fueran presentadas pruebas satisfactorias, dictará una orden de allanamiento ordenando a cualquier alguacil u oficial de policía que entre en dicha casa, edificio, habitación o local, y arreste a los que la tuvieren, a toda persona que en forma alguna ayudare a la explotación de la misma, bien como conserje, portero, vigilante o de otro modo, a todos los que allí se encontraren participando del juego en alguna forma, y a todos los que estuvieren presentes, participaren o no en el dicho juego, se encontraren en dicho local cualesquiera billetes de lotería u otros implementos, aparatos o materiales de cualquiera forma de jugar, y que tome bajo su custodia todos los implementos, aparatos y materiales de jugar según queda expresado, y que guarde dichas personas, implementos, aparatos o materiales, de manera de poderlas presentar ante alguna corte o juzgado para su disposición de acuerdo con la ley.

..."

Artículo 2.-Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2737, el cual ha sido descargado de la Comisión de lo Jurídico.

**"LEY**

Para enmendar la Sección 9 de la Ley Núm. 79 de 24 de junio de 1965, según enmendada, a los fines de atemperarla al Plan de Reorganización Núm. 1, según enmendado, conocido como la Ley de la Judicatura de 1994.

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Sección 9 de la Ley Núm. 79 de 24 de junio de 1965, según enmendada, dispone que el personal del Departamento de Salud y del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos debidamente autorizado, para entrar en cualquier lugar para examinar las condiciones de radiación ionizante en el mismo. Si el inquilino rehusare dar su permiso para dicha inspección, cualquier Juez de Distrito o Juez de Paz podrá, al recibir una declaración jurada de que existe una causa probable para ello, expedir una orden autorizando a dicho funcionario para entrar en la referida vivienda particular o habitación con el objeto de practicar la investigación o inspección.

Nuestras leyes en relación a la judicatura han cambiado y al presente ya no existe la figura de Juez de Paz y la del Juez de Distrito se extinguirá en un período de ocho años desde que entró en vigor la Ley de la Judicatura de 1994. Dicha Ley establece que el Tribunal de Primera Instancia será uno de jurisdicción original general y estará compuesto por Jueces Municipales y Jueces Superiores.

En nuestro deber Legislativo atemperar y actualizar las leyes de manera que podamos evitar confusiones procesales y judiciales que puedan obstruir, atrasar y en caso extremo frustrar el desarrollo de los procesos judiciales de Puerto Rico.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 9 de la Ley Núm. 79 de 24 de junio de 1965, según enmendada, a los fines de atemperarla a la Ley de la Judicatura de 1994, para que lea como sigue:

"Sección 9.-Inspección de locales; personal autorizado

El personal del Departamento de Salud y del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos debidamente autorizado, queda facultado por la presente para entrar en cualquier edificio, casa, tienda o lugar a cualquier hora del día, para examinar las condiciones del mismo, e informar sobre ellas, o para hacer remover o corregir con urgencia cualquier condición de radiación ionizante en la forma y modo prescritos en los reglamentos. No obstante la autorización anterior, las investigaciones o inspecciones de vivienda o habitaciones particulares no se practicarán sin previo permiso del inquilino de la vivienda o habitación que va a ser objeto de inspección. Si el inquilino rehusare dar su permiso para dicha inspección, cualquier Juez del Tribunal de Primera Instancia podrá, al recibir una declaración jurada de que existe una causa probable para ello, expedir una orden autorizando a dicho funcionario para entrar en la referida vivienda particular o habitación con el objeto de practicar la investigación o inspección.

... "

Artículo 2.-Vigencia

Esta Ley comenzará a regir treinta (30) días después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3020, el cual ha sido descargado de la Comisión de lo Jurídico.

## "LEY

Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 1999, conocida como "Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario", a los fines de aclarar que la referencia a incapacitados son aquellos declarados así judicialmente.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

Mediante la aprobación de la Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 1999, se establece la Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario. La misma autoriza la competencia notarial en los procedimientos de jurisdicción voluntaria hasta ahora atendidos por los tribunales. De esta manera, se contribuye al alivio de los tribunales en su carga de trabajo y el consecuente uso más eficiente de los recursos de la Rama Judicial.

El Artículo 8 de la Ley Núm. 282, antes citada, dispone que en aquellos asuntos en que entre los interesados se encuentren menores o incapacitados, o en los que se solicite cambio de nombre o apellido, o los asuntos *ad perpetuam rei memoriam*, o declaración de ausencia simple, el notario notificará del trámite al Ministerio Público.

La presente medida pretende aclarar que lo dispuesto en el Artículo 8 se refiere a incapacitados judicialmente y no a cualquier incapacitado. Por lo antes expresado, esta Asamblea Legislativa entiende necesaria la aprobación de esta Ley a fin de aclarar y evitar confusiones en la interpretación de la Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1. – Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 1999, para que se lea como sigue:

"Artículo 8. – Asuntos que requieren la intervención del Ministerio Público.

En aquellos asuntos en que entre los interesados se encuentren menores o incapacitados judicialmente, o en los que se solicite el cambio de nombre o apellido, o los asuntos *ad perpetuam rei memoriam,* o declaración de ausencia simple, el notario notificará del trámite al Ministerio Público por correo certificado o por mensajero con acuse de recibo. Transcurridos treinta (30) días de la notificación al Ministerio Público sin que éste haya hecho constar su oposición por escrito, el notario continuará con su intervención en el asunto, haciéndolo constar en el acta notarial, e incluyendo evidencia fehaciente de su notificación. El notario podrá optar por comparecer a las oficinas del Ministerio Público y requerir personalmente su parecer sobre el asunto bajo su consideración, en cuyo caso así lo hará constar en el acta notarial con la respuesta del representante del Ministerio Público.

. . ."

Sección 2.– Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3067, el cual ha sido descargado de la Comisión de lo Jurídico.

**"LEY**

Para enmendar los incisos (1) y (6) del Artículo 5 y el primer párrafo del Artículo 6 de la Ley Núm.282 de 21 de agosto de 1999, conocida como "Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario", a los fines de corregir que la referencia a setenta y dos (72) horas no son horas laborables sino que son setenta y dos (72) horas contadas a partir del otorgamiento para que el notario haga la notificación correspondiente.

## EXPOSICION DE MOTIVOS

Mediante la aprobación de la Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 1999, se establece la Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario. La misma autoriza la competencia notarial en los procedimientos de jurisdicción voluntaria hasta ahora atendidos por los tribunales. De esta manera, se contribuye al alivio de los tribunales en su carga de trabajo y el consecuente uso más eficiente de los recursos de la Rama Judicial.

El inciso (1) del Artículo 5 de la Ley Núm. 282, antes citada, dispone que el notario deberá notificar al Registro General de Competencias Notariales el inicio de su intervención dentro del término de setenta y dos (72) horas laborables de haber firmado el contrato de servicios profesionales notariales para tramitar el procedimiento de que se trate. Dicho término será de estricto cumplimiento y las normas sobre la presentación de la notificación serán dispuestas por el Tribunal Supremo mediante reglamento.

Asimismo, el inciso (6) del Artículo 5 de la Ley Núm. 282, antes citada, dispone que el notario deberá remitir una notificación de su determinación del procedimiento, al Registro General de Competencias Notariales dentro del término de setenta y dos (72) horas laborables.

Por otro lado, al Artículo 6 de la Ley 282, antes citada, dispone que si el notario concluye que no procede hacer la declaración de hechos y de derecho solicitada por el requiriente, deberá, entre otras cosas, notificar al Registro General de Competencias Notariales dentro del término de setenta y dos (72) horas laborables.

La presente medida pretende aclarar que las setenta y dos (72) horas que se disponen en los Artículos 5 y 6 se refieren al término homogéneo que permea toda la Ley Notarial con relación a que las setenta y dos (72) horas siempre son contadas a partir del otorgamiento del documento y nunca han sido contempladas como que las mismas sean setenta y dos (72) laborables. Así se mantiene la uniformidad de los procesos en cuanto a los deberes que tiene el notario ante el Tribunal Supremo en la Oficina de la Directora de Inspección de Notaría. Las setenta y dos (72) horas no pueden ser computadas como horas laborables, pues ello implicaría que a razón de ocho (8) horas laborables el término para notificar equivaldría a nueve días. Esta interpretación sobre las setenta y dos (72) horas laborables no fue la intención del legislador al aprobar la Ley sobre Asuntos No Contenciosos Ante Notario.

Por lo antes expresado, esta Asamblea Legislativa entiende necesaria la aprobación de esta Ley a fin de aclarar y evitar confusiones en la interpretación de la Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se enmiendan los incisos (1) y (6) del Artículo 5 de la Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 1999, para que se lea como sigue:

"Artículo 5.-Procedimiento en general.

El trámite ante sede notarial se iniciará mediante requerimiento por quien esté legitimado para ello. El notario deberá:

"1.-Notificar al Registro General de Competencias Notariales el inicio de su intervención dentro del término de setenta y dos (72) horas de haber firmado el contrato de servicios profesionales notariales para tramitar el procedimiento de que se trate. El término será de estricto cumplimiento. Las normas sobre la presentación de la notificación, que podrá ser por vía electrónica, así como su contenido, serán dispuestas por el Tribunal Supremo mediante reglamento.

2- . . .

6.-Remitir una notificación de su determinación del procedimiento, al Registro General de Competencias Notariales dentro del término de setenta y dos (72) horas.

. . ."

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 1999, para que se lea como sigue:

"Artículo 6. – Cese del Trámite.

"Si luego de recibidos y calificados todos los documentos, el notario concluye que no procede hacer la declaración de hechos y de derecho solicitada por el requiriente, le devolverá todos los documentos que obran en el expediente preparado según dispone la Ley. Además, le informará que con la entrega de los documentos cesa su intervención, le explicará el motivo y notificará al Registro General de Competencias Notariales dentro del término de setenta y dos (72) horas .

. . ."

Sección 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3476, el cual ha sido descargado de la Comisión de lo Jurídico.

**"LEY**

Para añadir un inciso (b) (8) al Artículo 5.004 del Plan de Reorganización de la Rama Judicial, Ley Núm. 1a. de 28 de julio de 1994, conocida como "Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994", según enmendada, a los efectos de otorgar facultad a los Jueces Municipales para considerar, atender y resolver toda demanda sobre desahucio, cuando el canon de los arrendamientos o el precio o cantidad que por virtud de cualquier contrato deba pagarse cumputado por una anualidad, no exceda de cien mil (100,000) dólares.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

El criterio rector en el proceso judicial en los Tribunales de Puerto Rico es la solución justa, rápida y económica de las controversias. Sin embargo, hay reclamaciones que ameritan mayor atención y más pronta solución por los derechos que afectan a las partes envueltas. Este es el caso de las acciones civiles de desahucio.

El desahucio es el procedimiento legal especial mediante el cual un arrendador (dueño) despide a su arrendatario (inquilino) por haberse cumplido el término del arrendamiento o por este último haber incumplido los acuerdos objetos del contrato. El fin de esta acción es recuperar la posesión material de una propiedad, sea ésta residencial o comercial.

En la actualidad, los Tribunales de Distrito, concurrentemente con los Tribunales Superiores, son los que conocen de las demandas sobre desahucio. Sin embargo, son los Tribunales Municipales los que están más accesibles a los ciudadanos por éstos encontrarse demográficamente mejor localizados, uno (1) en cada municipio. De la misma forma, los Jueces Municipales están capacitados para considerar, atender y resolver estos casos siempre que no presenten circunstancias extraordinarias.

Por lo expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario otorgar facultad a los Jueces Municipales para considerar, atender y resolver toda demanda de desahucio cuando el canon de arrendamientos o el precio o cantidad que por virtud de cualquier contrato deba pagarse computado por una anualidad, no exceda de cien mil (100,000) dólares.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.-Se añade un inciso (b) (8) al Artículo 5.004 de la Ley Núm. 1a de 28 de julio de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Facultades del Juez Municipal

I. En lo civil:

(a) Los Jueces Municipales tendrán facultad para atender, considerar y/o resolver, dentro de la competencia del Tribunal de Primera Instancia, los siguientes asuntos interlocutorios:

(1) ...

(2) ...

(3) ...

(b) El Juez Municipal tendrá facultad para considerar, atender y resolver los siguientes asuntos:

(1) ...

(2) ...

(3) ...

(8) En toda demanda sobre desahucio, cuando el canon de los arrendamientos o el precio o cantidad que por virtud de cualquier contrato deba pagarse computado por una anualidad, no exceda de cien mil (100,000) dólares.

II. En lo criminal:

(a) ..."

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3528, el cual ha sido descargado de la Comisión de lo Jurídico.

**"LEY**

Para enmendar el inciso (c) de la Regla 22 de las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963, según enmendadas, con el propósito de que una persona imputada de delito grave y que no tenga representación legal, sea citada por el Tribunal para una conferencia con antelación a la vista preliminar con el propósito de gestionarle representación legal.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

Los padres de la Constitución de Puerto Rico enmarcaron dentro del Artículo II, Sección 11, el derecho a recibir asistencia legal como parte del debido procedimiento de ley a que toda persona tiene derecho. Todo abogado que practica la profesión jurídica tiene la encomienda ética de proveer servicios legales gratuitos a indigentes cuando sea necesario.

En el presente, todos reconocemos que existe un problema de sobrecarga de casos criminales en los Tribunales de Justicia de Puerto Rico. Este aumento en la radicación de casos criminales en los tribunales ha logrado proporcionalmente que aumente el trabajo tanto de los jueces como de los abogados en la tramitación de éstos.

Debido a la cantidad inmensa de casos, muchas veces los jueces suspenden o posponen por distintas razones vistas en los casos de naturaleza criminal. Una de las razones más importantes es que los imputados de delito comparecen a las vistas sin representación legal, lo que provoca disgusto y desalienta a

muchos ciudadanos a comparecer a los tribunales. Esto lesiona el fin último del proceso judicial, ventilar los casos en su fondo. Además, se lesiona el derecho de todo ciudadano a un juicio justo, rápido y económico, ya que muchas veces los calendarios de los jueces están sumamente cargados.

Por otro lado, es conocido que en la mayoría de las ocasiones cuando se le asigna a un abogado un caso criminal, no se le da suficiente tiempo para prepararse adecuadamente para la representación del caso asignado, como ocurre por ejemplo, cuando se le asigna un caso criminal a un abogado de la Sociedad para la Asistencia Legal en el momento de celebrarse la vista preliminar.

Con tal propósito, entendemos que es necesario enmendar el inciso (c) de la Regla 22 de Procedimiento Criminal para establecer que se realice una conferencia con antelación a la vista preliminar. Esta conferencia deberá realizarse dentro de las dos semanas de efectuado el arresto a los fines de gestionarle representación legal, en el caso de que el imputado no haya renunciado a su derecho de representación de abogado. Esto evitará que personas imputadas de delitos se presenten a la vista preliminar sin asistencia legal, economizará a la Rama Judicial los gastos en que se ve obligada a incurrir por las suspensiones de vistas, además de que se le brinda la oportunidad al abogado de estudiar e investigar su caso para así proveer una efectiva y adecuada representación legal a los indigentes en nuestro país en todas las etapas del proceso criminal.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se enmienda el inciso (c) de la Regla 22 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Regla 22.-Procedimiento ante el Magistrado.

(a) . . .

(b) . . .

(c) Constancias en la orden de arresto o citación; remisión. En la orden de arresto o citación el magistrado hará constar la comparecencia de la persona y las advertencias que se le hicieron, y en los casos de delito grave *(felony)*, de ser ello así, la circunstancia de que dicha persona no puede obtener los servicios de un abogado para asistirle en el juicio o en la vista preliminar.

En tal caso, será deber del magistrado que determine causa para arresto por un delito grave, citar al imputado de delito que no tenga representación legal a una conferencia con antelación a la vista preliminar, dentro de las dos semanas de efectuado el arresto. A dicha conferencia, si el imputado está confinado, éste deberá ser transportado al Tribunal por la Administración de Corrección a los fines de gestionarle representación legal. La Administración de Tribunales proveerá facilidades para que funcionarios de programas de asistencia legal lo entrevisten y certifiquen su indigencia antes de asumir su defensa. Si no puede ser representado por uno de estos programas y el Tribunal acredita que dicho confinado no tiene los recursos para contratar abogado, procederá a designarle uno de oficio.

El magistrado remitirá la denuncia, el acta en aquellos casos en que se hubiere levantado la misma y la orden de arresto o citación a la sección y sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia para que se dé cumplimiento a los trámites posteriores que ordenan estas reglas."

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir treinta (30) días después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2958, el cual ha sido descargado de la Comisión de lo Jurídico.

"LEY

Para enmendar los Artículos 38 y 95 de la Ley Hipotecaria de 1979, a fin de atemperarlos con lo dispuesto en la Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 1999, conocida como "Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario".

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

Mediante la aprobación de la Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 1999, se establece la Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario. La misma aurtoriza la competencia notarial en los procedimientos de jurisdicción voluntaria hasta ahora atendidos por los tribunales. De esta manera, se contribuye al alivio de los tribunales en su carga de trabajo y el consecuente uso más eficiente de los recursos de la Rama Judicial.

La Ley Hipotecaria de 1979, en su Artículo 38, establece lo relacionado a los títulos, actos y contratos que se incribirán en el Registro de la Propiedad. Entre ellos, las resoluciones judiciales firmes en que se declaren la incapacidad legal para administrar, la ausencia, el fallecimiento y cualesquiera otras por las que se modifique la capacidad civil de las personas en cuanto a la libre disposición de sus bienes. Sin embargo, para que este Artículo 38 armonice con la nueva Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario, es necesario enmendarlo para añadir lo referente a actas notariales que la Ley Núm. 282, antes citada, dispone que podrán realizar los notarios.

De esta manera el notario podrá constar en un acta notarial lo pertinente para estos procedimientos, una vez haya calificado los documentos y concluya que procede realizar la declaración solicitada, según establece la Ley Núm. 282, antes citada.

Por otro lado, el Artículo 95 de la Ley Hipotecaria, establece los derechos hereditarios y los documentos de la sucesión que se podrán incribir. En particular dispone que el documento de la sucesión hereditaria, a los efectos del Registo, es aquel que contiene el testamento o la declaración judicial de herederos abintestatos.

Sin embargo, es necesario eliminar lo referente a la declaración judicial a fin de que el notario pueda realizar los procedimientos que la Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario le autoriza.

Esta Asamblea Legislativa entiende necesaria la aprobación de esta Ley a fin de aclarar y evitar confusiones en la interpretación de la Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se enmienda el inciso 7mo. del Artículo 38 de la Ley Hipotecaria de 1979, para que sea lea como sigue:

"7mo. Resoluciones judiciales firmes, en que se declaren la incapacidad legal para administrar, la ausencia, el fallecimiento y cualesquiera otras por las que se modifique la capacidad civil de las personas en cuanto a la libre disposición de sus bienes.

8vo. Actas notariales para tramitar los asuntos y procedimientos dispuestos en la Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 1999, conocida como Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario."

Sección 2.-Se enmienda el primer párrafo del Artículo 95 de la Ley Hipotecaria de 1979, para que se lea como sigue:

"El documento de la sucesión hereditaria, a los efectos del Registro, es aquel que contiene el testamento o la declaración de herederos abintestados, ya sea judicial o de conformidad con la Ley Núm. 282 del 21 de agosto de 1999, conocida como Ley de Asuntos No contenciosos Ante Notario."

Sección 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente despúes de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2299, y se da cuenta de un informe de la Comisión Agricultura; y ha sido relevada de la Comisión de Hacienda.

**"LEY**

Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 225 de 1 de diciembre de 1995, según enmendada, conocida como "Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico", a fin de establecer en cuatro año el período de vigencia de los certificados de agricultor bona fide e implementar la política pública de la Ley.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico establece que todo negocio agrícola tiene la más alta prioridad en toda gestión del gobierno de Puerto Rico y mandan la eliminación en Puerto Rico de todas las cargas, restricciones, contribuciones, costos o imposiciones sobre los agricultores bona fide y los negocios de agricultores bona fide. No obstante, los agricultores se confrontan con problemas y demoras en el reconocimiento de sus derechos, exenciones y otros beneficios de dicho estatuto. En ocasiones se les pide por bancos y otras instituciones financieras u otras personas que estén anualmente renovando los certificados de agricultor bona fide, lo cual es contrario a la política pública y causa inconveniencias, pérdida de tiempo y de recursos a los agricultores. Estos requerimientos han sumido a agricultores bona fide en procesos burocráticos lentos, engorrosos, repetitivos e innecesarios. Por tales razones, la Asamble Legislativa considera necesario establecer en la Ley un tiempo uniforme de cuatro años para la vigencia de los certificados de agricultor bona fide para el conocimiento de todos los concernidos y para agilizar el reconocimiento del mismo.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 225 de 1 de diciembre de 1995, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 5.- Certificación

El Secretario de Agricultura de Puerto Rico expedirá una certificación indicando que el agricultor 'bona fide' se dedica a la explotación u operación de una actividad que cualifica como un negocio agrícola. El Secretario de Hacienda determinará si el agricultor al rendir su planilla de contribución sobre ingresos cumple con el requisito del cincuenta (50) por ciento de ingreso de negocio agrícola para considerarle agricultor bona fide. La certificación expedida por el Secretario de Agricultura de Puerto Rico constituirá evidencia suficiente y fehaciente ante toda persona privada o pública, incluyendo ante el Gobierno de Puerto Rico, sus ramas de Gobierno, las agencias e instrumentalidades públicas, los municipios y las corporaciones públicas, de que la persona a favor de la cual está expedida esa certificación es un agricultor bona fide, con derecho a las exenciones, deducciones, créditos y otros beneficios o derechos de la Ley de Incetivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico. Cada certificación expedida por el Secretario de Agricultura tendrá vigencia y completa fuerza y efecto para el año en cual se expide, en y desde el primero de enero de ese año, y para los tres (3) años inmediatamente siguientes, sin necesidad alguna de renovación o de algún otro procedimiento."

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO:**

Vuestra Comisión de Agricultura, luego del estudio y análisis del P.del S. 2299, el cual propone enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 225 de 1 de diciembre de 1995, según enmendada, conocida como "Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico", a fin de establecer cuatro años para el período de vigencia de los certificados de agricultor bona-fide e implementar la política pública de la Ley, tiene el honor de recomendar la aprobación de dicha medida con enmiendas.

**En el Texto**

| | |
|---|---|
| Página 2, línea 14 | tachar "la Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico" y sustituir por "esta Ley" |
| Página 2, después de la línea 18 | insertar "Disponiéndose, que si para el año en que se expide la certificación o para cualquiera de los próximos tres (3) años, la persona a la cual se le expide el certificado incumple con el requisito de que por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de su ingreso se derive de un negocio agrícola, cesa de operar como agricultor bona fide, incumple con las leyes fiscales de Puerto Rico o de los Estados Unidos o es convicto por un delito relacionado con la operación del negocio agrícola, entonces, el certificado quedará sin efecto y la persona no podrá disfrutar de los beneficios que concede la ley hasta tanto obtenga un nuevo certificado de agricultor bona fide." |

**En la Exposición de Motivos**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 3 | tachar "mandan" y sustituir por "demanda" |
| Página 1, línea 7 | después de "bancos" tachar "y" y sustituir por "," |
| Página 1, línea 11 | tachar "Asamble" y sustituir por "Asamblea" |

**En el Título**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 3 | después de "establecer", eliminar "en" |
| Página 1, línea 3 | tachar "año" y sustituir por "años" |
| Página 1, línea 3 | después de "años" insertar "para" |

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

El P. del S. 2299 propone enmendar el Artículo 5 de la Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico con el fin de establecer cuatro (4) años para el período de vigencia de los certificados de agricultor bona fide. Lo propuesto en este proyecto ayuda grandemente a los agricultores bona fide, ya que les ahorraría mucho tiempo y eliminaría las inconveniencias que le surgen al agricultor cuando le toca a éste solicitar año tras año su certificación de agricultor bona- fide.

Por otra parte, este proyecto agrilizaría los trámites para la obtención del certificado de agricultor bona-fide porque elimina los procesos burocráticos, lentos, engorrosos, repetitivos e innecesarios a los que se someten nuestros agricultores a la hora de solicitar su certificado de agricultor bona-fide. Cabe señalar, que estos procesos a los cuales se somete al agricultor puertorriqueño les causa problemas a la hora de que le reconozcan los beneficios que brinda esta Ley.

Por último, con la aprobación de este proyecto, le estaremos brindando al agricultor bona-fide un modesto descanso, ya que al éste haber cumplido con el largo y tedioso proceso para obtener su certificado de agricultor bona-fide, podrá descansar por cuatro (4) años antes de tener que volver a pasar por el existente proceso.

Por las razones antes expuestas, Vuestra Comisión de Agricultura recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación del P. del S. 2299 con las enmiendas contenidas en el informe.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carmen L. Berríos Rivera
Presidenta en funciones
Comisión de Agricultura"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2283, el cual ha sido descargado de la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas.

**"LEY**

Para crear "Ley Prohibiendo Anotar o Imprimir el Número de una Tarjeta de Crédito o Débito en un Cheque"; establecer su aplicación, términos y limitaciones en el curso ordinario de negocios.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La libertad del comercio y la libertad de opción del consumidor son derechos que están íntimamente ligados y deben ser preservados a todo costo. Hoy día el consumidor tiene varias opciones para efectuar sus pagos. El cheque, la tarjeta de débito o crédito y el pago en metálico son los instrumentos que utiliza el consumidor diariamente para adquirir bienes o servicios. El uso de cheques para adquirir bienes o servicios es uno de los más aceptados en los establecimientos comerciales alrededor de la Isla. Al consumidor hacer una transacción comercial y pagar con cheque, es parte del curso ordinario de hacer negocios pedirle algún tipo de identificación a la persona que efectúa la compra.

Muchos negocios para evitar recibir cheques sin fondo, además de pedir identificación con foto anotan, como forma de asegurar el pago de la mercancía, el número de tarjeta de crédito o débito en los cheques. Esta práctica ha acentuado la necesidad de proteger a los consumidores de prácticas fraudulentas y de salvaguardar el crédito de los consumidores contra la apropiación ilegal de bienes.

Por todo lo cual, esta Asamblea Legislativa entiende necesario la aprobación de esta ley por el bienestar y protección de la sociedad en general, para evitar que se usurpe la privacidad del consumidor y le dañen la línea de crédito al apropiarse ilegalmente de bienes utilizando el número de tarjeta de crédito o débito.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1. – Título de la Ley.-

Esta Ley se conocerá como "Ley Prohibiendo Anotar o Imprimir el Número de una Tarjeta de Crédito o Débito en un Cheque".

Artículo 2. – Definiciones.-

Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa:

(a) "Cheque" significa un "giro", siempre que no sea un giro documentario, pagadero a la presentación y librado contra un banco, que tiene impreso el nombre y número de cuenta del consumidor y el nombre y localización de la institución financiera .

(b) "Consumidor" o "tenedor" significa persona natural o jurídica responsable de la cuenta bancaria o tarjeta de débito o crédito a cuyo nombre se emitió la tarjeta o la persona autorizada por ésta y a quien la institución financiera le ha expedido una tarjeta suplementaria.

(c) "Emisor" significa institución financiera que emite tarjetas de crédito o débito a favor de un tenedor de tarjeta que la haya solicitado.

(d) "Institución bancaria" significa todo banco doméstico o extranjero que haga negocios en Puerto Rico, conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 55 de 12 de mayo de 1933, según enmendada, mejor conocida como "Ley de Bancos".

(e) "Persona" significa persona natural o jurídica.

(f) "Tarjeta de crédito o débito" significa cualquier instrumento u objeto, conocido como tarjeta de crédito o débito, placa, libro de cupones o por cualquier otro nombre, expedido con o sin el pago de un cargo por quien la recibe, para el uso del tenedor en la obtención o adquisición de dinero, bienes, servicios o cualquier otra cosa de valor en el establecimiento del emisor de la tarjeta de crédito o débito en cualquier otro establecimiento.

(g) "Transacción comercial" significa la obtención o adquisición de bienes, servicios o cualquier otra cosa de valor en cualquier establecimiento comercial hecha por un consumidor.

Artículo 3. –

Ninguna persona que reciba un cheque como pago de una obligación que resulta de una transacción comercial o para cambiar un cheque por dinero en efectivo puede, como condición para efectuar dicha transacción, requerir del consumidor el número de tarjeta de crédito o débito para anotarla en el cheque.

Artículo 4. – Condiciones para aceptar un cheque.-

Como condición para aceptar un cheque en una transacción comercial o para cambiarlo por dinero en efectivo se puede, pero sin limitarse, a lo siguiente:

(a) Pedirle al consumidor la tarjeta de crédito o débito como forma de identificación o como un indicador de responsabilidad financiera.

(b) Anotar en el cheque el tipo de tarjeta de crédito o débito y la fecha de expiración de la misma.

Artículo 5. –

Nada de lo antes dispuesto debe considerarse como una limitación para:

(a) Cualquier persona de aceptar un cheque como pago en una transacción comercial o cambiar el cheque por dinero en efectivo, indiferentemente de si le enseña la tarjeta de crédito o débito.

(b) Prohibir a una persona anotar el número de tarjeta de crédito o débito y la fecha de expiración de la misma en el cheque como condición para aceptarlo como pago o de cambiarlo por dinero en efectivo, cuando el comerciante ha llegado a un acuerdo con el

emisor de la tarjeta de crédito o débito de permitir cambiar o aceptar el cheque del tarjetahabiente cuando el emisor garantiza los cheques del mismo.

Artículo 6.- Esta Ley comenzará a regir noventa (90) días después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2577, el cual ha sido descargado de la Comisión de Hacienda.

**"LEY**

Para autorizar al Secretario de Hacienda a participar en conversaciones multiestatales a fin de no menoscabar su facultad de recaudar arbitrios o cualquier otra contribución sobre productos adquiridos a través de la Internet.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

El Congreso de los Estados Unidos está considerando legislación que prohibiría la imposición de contribuciones sobre cualquier producto adquirido a través de la red de Internet. A principios de 1999, el comité ejecutivo del "National Conference of State Legislatures (NCSL)", creó un comité especial para estudiar e investigar la implantación de nuevos y modernos mecanismos de recaudación de contribuciones sobre las telecomunicaciones y el comercio electrónico para asitir a los estados a desarollar y coordinar la política estatal para tomar en consideración la modernización del sistema de recaudación de contribuciones sobre productos adquiridos a través del comercio electrónico. El 20 de enero de 2000, el Comité Ejecutivo del "National Conference of State Legislatures (NCSL)" endosó unánimemente un proyecto de legislación modelo para autorizar a los departamentos de hacienda de los diversos estados a participar en conversaciones multiestatales sobre la creación de un nuevo sistema de avanzada para la recolección de contribuciones o arbitrios sobre la compraventa y el uso de bienes adquiridos por la internet.

El próposito de dichas conversaciones multiestatales es desarrollar un sistema innovador de recaudación de contribuciones que sea simple, uniforme y justo y que remueve la obligación impuesta a los comerciantes detallistas, preserve la soberanía de los estados e intensifique la habilidad de las firmas estadounidenses a competir en la economía global.

La intención de esta Asamblea Legislativa es autorizar al Secretario de Hacienda a participar en las conversaciones multiestatales aludidas con el propósito de no menoscabar la facultad del Secretario de Hacienda en el recaudo de arbitrios o cualesquiera otra contribución sobre productos adquiridos a través de la red de Internet.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.- Autorización.-

Se autoriza al Secretario de Hacienda a participar en las conversaciones con sus contrapartes en los diversos estados de la nación sobre la de recolección de contribuciones o arbitrios sobre transacciones económicas electrónicas, con el propósito de no menoscabar la facultad conferida a aquél de recaudar impuestos sobre la compraventa o entrada a Puerto Rico de productos adquiridos a través de la red de Internet.

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2578, el cual ha sido descargado de la Comisión de Hacienda.

**"LEY**

Para enmendar el apartado (aa) del inciso (M) de la Sección 1023 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de 1994", a los fines de eliminar el segundo párrafo del inciso (iii) erróneamente incluído al aprobarse la Ley Núm. 75 de 2000 y aclarar la intención legislativa.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La Ley Núm. 75 de 2000 autoriza a que individuos puedan optar por deducir el equivalente a un treinta y tres (33) por ciento de las aportaciones hechas a entidades sin fines de lucro durante el año contributivo. Con la aprobación de la Ley 75, se añadió un párrafo introductor y dos últimos párrafos al inciso (M) de la Sección 1023 de dicha Ley. Uno de estos párrafos fue incluído inadvertidamente en el inciso (iii) por lo que debe ser eliminado a los fines de brindarle mayor claridad al estatuto.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.- Se elimina el segundo párrafo del apartado (aa) del inciso (M) de la Sección 1023 de la Ley 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Sección 1023.- Deducciones del Ingreso Bruto

Al computarse el ingreso neto se admitirán como deducciones:

(a) ...

(aa) Opción de Deducción Fija o Deducciones Detalladas.-

(1)...

(2) Deducciones detalladas.- Para fines de este apartado, el contribuyente podrá reclamar como deducciones detalladas, en lugar de la deducción fija opcional, las siguientes partidas:

(A)...

(M) Donativos para fines caritativos y otras aportaciones.- En el caso de un individuo, el monto de las aportaciones o donativos pagados durante el año contributivo a, o para uso de las organizaciones enumeradas a continuación que exceda de tres (3) por ciento del ingreso bruto ajustado o el treinta y tres (33) por ciento del monto de las aportaciones o donativos pagados durante el año contributivo a, o para uso de las organizaciones enumeradas a continuación, lo que sea mayor:

(i) Los Estados Unidos, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cualquier estado, territorio, o cualquier subdivisión política de los mismos, o el Distrito de Columbia, o cualquier posesión de los Estados Unidos, cuando las aportaciones o donativos sean usados para fines exclusivamente públicos.

(ii) Una corporación, fideicomiso, o fondo comunal, fondo, o fundación, creado u organizado en Puerto Rico, o en los Estados Unidos o en cualesquiera de sus posesiones, o bajo las

leyes de Puerto Rico o de los Estados Unidos o de cualquier estado o territorio, o de cualquier posesión de los Estados Unidos, organizado y operado exclusivamente para fines religiosos, caritativos, científicos, literarios, o educativos o para la prevención de la crueldad con los niños o con los animales, siempre que ninguna parte de sus utilidades netas redunde en beneficio de algún accionista o individuo particular. Para la no admisibilidad de ciertas deducciones por aportaciones caritativas u otras aportaciones, de otro modo admisibles bajo este párrafo, véanse las secciones 1162(f)(2) y 1409;

"(iii) El fondo especial para rehabilitación vocacional autorizado por la Ley de Rehabilitación Vocacional.

**[La deducción admitida bajo este inciso no excederá del quince (15) por ciento del ingreso bruto ajustado del contribuyente, excepto que se admitirá una deducción adicional, hasta el quince (15) por ciento del ingreso bruto ajustado del contribuyente, por donativos pagados a instituciones educativas acreditadas de nivel universitario establecidas en Puerto Rico o a la Fundación José Jaime Pierluisi o al Fondo Nacional para el Financiamiento del Quehacer Cultural. El monto de las aportaciones para fines caritativos en exceso del límite permitido por este inciso podrá ser arrastrado, y de acuerdo con reglamentos promulgados por el Secretario, a los cinco (5) años contributivos siguientes, sujeto a los límites aquí provistos. La deducción ilimitada por aportaciones o donativos que excedan del noventa (90) por ciento del ingreso neto se regirá por el apartado (aa)(2)(N).]**

(iv)...

(v)...

...

...'

(N)...

(R)..."

Artículo 2.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2557, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para reasignar al Departamento de la Familia, Oficina Región San Juan, la cantidad de diez mil (10,000) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 402 del 4 de agosto de 1999, para la compra de artículos de primera necesidad y materiales de construcción; y para que se autoricen el pareo de los fondos.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.- Se reasigna al Departamento de la Familia, Oficina Región San Juan, la cantidad de diez mil (10,000) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 402 del 4 de agosto de 1999, para la compra de artículos de primera necesidad y materiales de construcción.

Sección 2.- El Departamento de la Familia, Oficina Región San Juan, someterá a la Comisión de Hacienda un informe final sobre el cumplimiento de los propósitos en esta Resolución Conjunta.

Sección 3.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos.

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobacíón."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2558, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para reasignar al Municipio de San Juan la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, del fondo 4026-93-27010000-2414, a ser transferidos a la Asociación de Residentes de San Francisco, Santa María y, San Ignacio, Inc., (UNDARE, INC.), de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 338 del 19 de agosto de 1992, para mejoras permanentes a las mencionadas urbanizaciones: y para que se autoricen el pareo de los fondos.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.- Se reasinga al Municipio de San Juan la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, del fondo 4026-93-2701000-2414, a ser transferidos a la Asociación de Residentes de San Francisco, Santa María y, San Ignacio, Inc., (UNDARE, INC.), de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 338 del 19 de agosto de 1992, para mejoras permanentes.

Seccion 2.- El Municipio de San Juan someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe final sobre el cumplimiento de los propósitos en esta Resolución Conjunta.

Sección 3.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal, o del Gobierno de los Estados Unidos.

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2559, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes a ser transferidos a la Liga de Natación Master de Puerto Rico, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares bajo la cuenta 1999-141-0870000-0001-142 de los fondos consignados en la R.C. Núm 508 del 28 de agosto del 1998, para cubrir los gastos a ser utilizados en las competencias de natación de la liga; y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.- Se reasigna al Departamento de Recreación y Deportes a ser transferidos a la Liga de Natación Master de Puerto Rico, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares bajo la cuenta 1999-141-0000-0001-142 de los fondos consignados en la R. C. Núm. 508 del 28 de agosto de 1998, para cubrir los gastos a ser utilizados en las competencias de natación de la liga.

Seccion 2.-El Departamento de Recreación y Deportes someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un informe final sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta.

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos.

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2560, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

**"RESOLUCIÓN CONJUNTA**

Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de la cuenta 397-0310000-242-1998, para ser utilizados en la compra de materiales para la reconstrucción de viviendas, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 786 del 25 de diciembre de 1998; y para que se autoricen el pareo de los fondos.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se reasigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de la cuenta 397-0310000-242-1998, para ser utilizados en la compra de materiales para la reconstrucción de viviendas, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 786 del 25 de diciembre de 1998.

Sección 2.-La Administración de Servicios Generales someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un informe final sobre el cumplimiento de los propósitos en esta Resolución Conjunta.

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal Municipal, o del Gobierno de los Estados Unidos.

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2561, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cinco mil doscientos cincuenta y tres dólares con setenta y ocho centavos ($5,253.78) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997; nueve mil seiscientos cuarenta y ocho dólares con veinticinco centavos ($9,648.25) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998 y la cantidad de siete mil novecientos diecisiete dolares con cincuenta y tres centavos ($7,917.53) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para la celebración de actividades sociales, culturales, eductivas, recreativas, deportivas y para la compra de equipo y materiales.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Bayamón la cantidad de cinco mil doscientos cincuenta y tres dólares con setenta y ocho centavos ($5,253.78) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997; nueve mil seiscientos cuarenta y ocho dólares con veinticinco centavos ($9,648.25) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998 y la cantidad de siete mil novecientos diecisiete dolares con cincuenta y tres centavos ($7,917.53) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para la celebracion de actividades sociales, culturales, eductivas, recreativas, deportivas y para la compra de equipo y materiales.

Sección 2.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas, estatales, municipales o federales.

Sección 3.- El Municipio de Bayamón, someterá a al Comisión de Hacienda del Senado un informe final sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta.

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2562, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para reasignar a entidades sin fines de lucro, bajo la supervisión de agencias del gobierno, que se especifican en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta, la cantidad setecientos veintitrés mil sesenta (723,060) dólares, de los fondos consignados en las Resoluciones Conjuntas Núm. 287 y 358 del 10 de agosto de 1997 y 9 de agosto de 1998 respectivamente; que realizan actividades o prestan servicios de bienestar social, de la salud, educación, cultura y recreación que ayudan a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.- Se reasigna a las entidades sin fines de lucro, bajo la supervisión de las agencias del gobierno, la cantidad de setecientos veintitrés mil sesenta (723,060) dólares, de los fondos consignados en las Resoluciones Conjuntas Núm. 287 y 358 del 10 de agosto de 1997 y 9 de agosto de 1998

respectivamente, que realizan actividades o prestan servicio de bienestar social, según se detalla a continuación:

| | |
|---|---|
| **ADMINISTRACION DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCION** | |
| Centro de Amor El Elión – San Juan | 10,000.00 |
| Fundación UPPENS, Inc. – Vega Baja | 10,000.00 |
| Hogares CREA, Inc. - San Juan | 69,060.00 |
| Logros de Puerto Rico, Inc. - Ponce | 10,000.00 |
| Teen Challenge de P.R. Inc. – Bayamón | 75,000.00 |
| **Sub – Total** | **$174,060.00** |
| **DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA** | |
| Desarrollo Agrícola de San Germán Inc. | 15,000.00 |
| Instituto Investigación y Desarrollo Apícola de P.R. Inc. Arecibo | 10,000.00 |
| **Sub – Total** | **$25,000.00** |
| **DEPARTAMENTO DE EDUCACION** | |
| Asoc. Caribeña Programas Trío de P.R. e Islas Vírgenes -Carolina | 10,000.00 |
| Atenas College – Manatí | 5,000.00 |
| Corp. para el Desarrollo Integral del Niño (CODINNE) – San Juan | 5,000.00 |
| Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada, Inc. – San Juan | 50,000.00 |
| Monteclaro, Inc. - Río Grande | 5,000.00 |
| Sociedad Pro Niños Sordos Inc.-Ponce | 10,000.00 |
| **Sub – Total** | **$85,000.00** |
| **DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES** | |
| Asoc. Atletismo Juvenil e Infantil de P.R. Inc. Aguas Buenas | 5,000.00 |
| Asociación Recreativa de Caballo de Paso Fino- Caguas | 10,000.00 |
| Corporación Deportiva de Caguana – Utuado | 5,000.00 |
| Federación de Atletismo Juvenil de Puerto Rico | 10,000.00 |
| **Sub – Total** | **$30,000.00** |
| **DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES** | |
| Corporación Piñones Se Integra - Loíza | 20,000.00 |
| Dads for Boys de P.R. Inc. - Loíza | 20,000.00 |
| **Sub – Total** | **$40,000.00** |
| **DEPARTAMENTO DE SALUD** | |
| Asociación Transplante y Vida, Inc. Arecibo | 5,000.00 |
| Centro Desarrollo y Servicios Especializados (ESPIBI)–Mayagüez | 10,000.00 |
| Fundación Acción Social El Shaddai, Inc. – Carolina | 5,000.00 |
| Fundación Lucha Contra El SIDA, Inc. | 20,000.00 |
| Lares Amateur Radio Emergency Services – Lares | 5,000.00 |
| P.R. Tissue Reserve, Inc. - Bayamón | 20,000.00 |
| Proyecto Sin Paredes – San Juan | 5,000.00 |
| Soc. Médicos Graduados, Escuela de Medicina UPR Río Piedras | **25,000.00** |
| **Sub – Total** | **$95,000.00** |
| **DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA** | |
| Asociación Pro Bienestar Comunidad Callejones de Lares | 4,000.00 |
| Casa Betsan – Utuado | 10,000.00 |
| Centro de Desarrollo Familiar Cristo Reina, Inc. – Guaynabo | 10,000.00 |
| Centro de Envejecientes Acción Social Inc. - Ponce | 10,000.00 |

| | |
|---|---|
| Equipo de Retiros Génesis, Inc. – Utuado | 5,000.00 |
| Fundación Angel Guardián Inc. - Carolina | 25,000.00 |
| Hogar de Envejecientes "Irma Fe Pol", Inc – Lares | 10,000.00 |
| Hogar del Niño Inc. - Cupey | 15,000.00 |
| **Sub – Total** | **$89,000.00** |
| **DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS** | |
| Asoc. Pensionados de las Empresas Privadas de P.R. Inc., San Juan | 6,000.00 |
| Centro Adiestramiento y Trabajo personas con Impedimentos Patillas | 5,000.00 |
| Cap. #9 Disabled American Veterans Depto. de P.R, Guayama | 2,500.00 |
| Depto de P.R. de la Legión Americana Inc.,San Juan | 7,500.00 |
| Legión Americana Marcelo Gotay Puesto #10 Inc., Fajardo | 5,000.00 |
| Legión Americana de Juana Díaz,Inc. | 7,000.00 |
| Legión Americana Pedro J. Rodríguez Puesto #129, Inc., Carolina | 5,000.00 |
| Puesto Nieves Carrillo #113-Legión Americana Inc., San Juan | 3,000.00 |
| **Sub – Total** | **$41,000.00** |
| **INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA** | |
| Areyto Ballet Folklórico – San Juan | 20,000.00 |
| Albacana- Caguas | 10,000.00 |
| Alfonsina- San Juan | 7,000.00 |
| Andanza-Río Piedras | 10,000.00 |
| Festival Bomba y Plena Corp. – Río Piedras | 10,000.00 |
| Folklore Nacional de P.R. – Caguas | 30,000.00 |
| Compañía de Teatro El Cemí - Santurce | 15,000.00 |
| Compañía Folklórica Gíbaro de P.R.- San Juan | 5,000.00 |
| Compañía Teatral Ponceña – San Juan | 6,000.00 |
| Vea Borinquen, Inc. – Río Piedras | 31,000.00 |
| **Sub – Total** | **$144,000.00** |
| **GRAN TOTAL** | **$723,060.00** |

Sección 2. – Todo donativo que se otorgue por la Asamblea Legislativa deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Núm. 258 de 29 de diciembre de 1995, según enmendada, conocida como "Ley de Donativos Legislativos".

Sección 3. – Los fondos aquí consignados tendrán vigencia hasta el 30 de junio de 2001. Luego de esta fecha la Asamblea Legislativa reprogramará los donativos no reclamados por las entidades.

Sección 4. – Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2563, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para asignar a la Compañía de Turismo, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, del Fondo General, para gastos de publicidad, promoción y relacionados del "Congreso Mundial de Salsa", a celebrarse en los días del 27 al 29 de julio de 2000, en la Ciudad de San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1. – Se asigna a la Compañía de Turismo, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, del Fondo General, para gastos de publicidad, promoción y relacionados del "Congreso Mundial de Salsa", a celebrarse en los días del 27 al 29 de julio de 2000, en la Ciudad de San Juan.

Sección 2. - Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones privadas, municipales, estatales y federales.

Sección 3. – La Compañía de Turismo, deberá someter a la Comisión de Hacienda del Senado, un informe final sobre los propósitos que se especifican en esta Resolución Conjunta.

Sección 4. – Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después su aprobación."

- - - -

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que se inicien los trabajos con el tercer Calendario de Ordenes Especiales del Día.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. RODRIGUEZ COLON: Adelante, que se llame la medida.

**CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA**

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1560, titulado :

"Para adicionar un apartado (o) a la Sección 5002 del Subtítulo E de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de cambiar el peso de la prueba a favor del contribuyente que ha actuado de buena fe."

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Adelante, señor Portavoz.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, quisiéramos solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2409, titulado :

"Para adicionar el apartado (d) a la Sección 4110 del Capítulo 5, del Subtítulo D de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de autorizar licencias de traficantes al detalle a favor de restaurantes, paradores u hoteles que operan a menos de cien (100) metros de una escuela, centros religiosos o instituciones públicas o privadas de rehabilitación."

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2610, titulado :

"Para enmendar la Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, a los fines de adicionar un inciso D al Artículo 4 que disponga que toda querella Clase I contra un menor que se origine en un plantel escolar deberá agotar el remedio administrativo antes de radicar la querella en el Tribunal de Menores."

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título contenidas en el informe.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañera Mercedes Otero.

SRA. OTERO DE RAMOS: Me gustaría saber en cuál proyecto estamos porque yo tenía unas objeciones, me levante pero no ... Para poder ...

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Estamos atendiendo el tercer Calendario de Ordenes Especiales del Día y en estos momentos acabamos de aprobar el Proyecto del Senado 2610. Si no me equivoco, fue el último proyecto que aprobamos del tercer Calendario de Ordenes Especiales del Día.

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, para pedir al Cuerpo que me de la oportunidad de hacer una enmienda. De regresar otra vez al Proyecto para hacer una enmienda.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que esta medida se deje para un turno posterior.

Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Hay que reconsiderar.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la reconsideración de la medida.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del Proyecto del Senado 2610, titulado :

"Para enmendar la Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, a los fines de adicionar un inciso D al Artículo 4 que disponga que toda querella Clase I contra un menor que se origine en un plantel escolar deberá agotar el remedio administrativo antes de radicar la querella en el Tribunal de Menores."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que esta medida se deje para un turno posterior.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 3297, titulado :

"Para enmendar el párrafo (3) y añadir un párrafo (4) al apartado (a), enmendar el párrafo (4) del apartado (b), el párrafo (1) y el inciso (C) y añadir un inciso (D) al párrafo (2) del apartado (c), y añadir un apartado (d) a la Sección 1011; enmendar el inciso (A) del párrafo (31) del apartado (b) de la Sección 1022; enmendar los incisos (A) y (D) y derogar el párrafo final del párrafo (1), enmendar la cláusula (i) del inciso (A), derogar la cláusula (iv) del inciso (B), derogar el segundo párrafo del inciso (E ), enmendar la cláusula (i) de los incisos (F), (G), y (H) y la cláusula (ii) del inciso (J) y añadir un párrafo final al párrafo (2) del apartado (aa), enmendar el inciso (B) del párrafo (3) y el segundo párrafo del párrafo (5), y enmendar el título y añadir un inciso (C) al párrafo (6) del apartado (bb) de la Sección 1023; enmendar los apartados (a) y (c) de la Sección 1025; enmendar el párrafo (1) y derogar el párrafo (4) del apartado (b) de la Sección 1051; y enmendar el apartado (c) de la Sección 1059 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de eliminar del mismo la llamada "penalidad por estar casado" y de reducir las tasas contributivas de los individuos a partir de los años contributivos que comiencen después del 31 de diciembre de 2001."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 833, titulado :

"Para prohibir el discrimen por razón de sexo por parte de patronos que se dediquen al negocio de los noticieros televisivos."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañera Mercedes Otero.
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, para hacer unos comentarios.
Este Proyecto, no podemos utilizar las prohibiciones penales para censurar prácticas económicas ya constituidas y reconocidas en acción de daños y perjuicios por violación discriminadas. Por lo tanto, nosotros tendríamos que votarle que no a la medida.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.
SRA. OTERO DE RAMOS: Sí, hay objeción.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Okey. Aquellos que estén a favor de la medida, favor de decir que sí en estos momentos. Aquellos que estén en contra, favor de indicarlo en este momento con no.
Aprobada la medida.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2785, titulado :

"Para enmendar el inciso (k) del Artículo 5.04 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, a fin de disponer que un Asambleísta Municipal pueda pertenecer a una Junta de Directores o Comités de una Cooperativa de Ahorro y Crédito, mientras se desempeña en la Cooperativa."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, para que cuente nuestra abstención en este Proyecto.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Hacemos constar la abstención de la compañera Mercedes Otero. Por los demás, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 3007, titulado :

"Para establecer la Ley de Cetrería con el propósito de regular la práctica de la Cetrería como arte de caza en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, definir facultades, poderes y deberes del Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, otorgar, renovar y revocar Licencias de Cetrería, fijar penalidades por la violación de esta Ley y de los reglamentos promulgados en virtud de la misma."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay enmiendas al título.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 3232, titulado :

"Para enmendar el Artículo 631 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, según enmendado, a fin de establecer que el monto de la fianza en apelación en casos de desahucio será fijado por el Tribunal de Primera Instancia."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañera Mercedes Otero.
SRA. OTERO DE RAMOS: Hay una objeción.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Yo no tengo problema, pero ...
SRA. OTERO DE RAMOS: Le voy a pedir al Cuerpo ...
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Quiero resaltar que estamos mirando en todo momento hacía allá cada vez que se va a aprobar una medida y alguna enmienda.
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, quiero pedir indulgencia porque sabe que tengo una fractura en la rodilla. Se me hace difícil pararme a veces, y cuando me vengo a parar pues ya usted paso el "ruling" y no puedo hacer otra cosa. Por favor, considere.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Adelante, adelante.
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente ...
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Quisiera, compañera, antes de darle la autorización, me gustaría que cuando, yo entiendo la condición suya, pues que levante la mano para asegurarnos de que entonces no sigamos con el proceso.
SRA. OTERO DE RAMOS: Muchas gracias. No, no es enmienda, es para dejar en récord un comentario que me parece que es muy oportuno para que los compañeros los consideren al momento de votar. Y es que este Proyecto menoscaba la competencia del Circuito de Apelaciones y es contrario al sistema de jurisdicción unificada que existe en nuestro sistema judicial.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2684, titulado :

"Para crear un Distrito Teatral, cuyo parámetro cubrirá desde la Calle Bolívar hasta la Calle Ernesto Cerra en Santurce, como parte del Desarrollo y Rehabilitación de Santurce, con el propósito de establecer un centro de actividades culturales en la zona de Santurce, conceder incentivos especiales para estimular la rehabilitación del área y participación ciudadana; crear un comité de trabajo especial por el Presidente de la Junta de Planificación; y para asignar fondos."

SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañera Carmín Berríos.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se aprueben las enmiendas al título.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2582, titulado :

"Para adicionar un último párrafo a la Sección 2 de la Ley Núm. 3 de 15 de febrero de 1955, según enmendada, a fin de disponer como requisito adicional para expedir una licencia a los establecimientos y centros para el cuido de niños, el desarrollo e implantación de un currículo para el desarrollo integral de los infantes y trotones (0-3 años) y preescolares (3-4 años), previamente aprobado por el Departamento de Educación."

SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañera Carmín Berríos.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2792, titulado :

"Para adicionar un nuevo inciso (m) y redesignar los incisos (m) al (v) respectivamente, como (n) al (w) del Artículo 3 de la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico", a fin de incluir el significado de lo que es un medicamento genérico."

SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañera Carranza.

SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en el informe.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente, para que se apruebe la medida como enmendada.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2378, titulado :

"Para adicionar añadir un nuevo inciso (g), al Artículo 37 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico", a fin de fomentar la participación activa de los padres de menores en todas las etapas de los procedimientos judiciales, tratamientos, servicios comunitarios; e imponer penalidades."

SR. SANTINI PADILLA: Señora Presidenta; Señor Presidente, perdón, su indulgencia.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): No, no pido vuelta.

SR. SANTINI PADILLA: Perdone, perdone.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañero Santini, adelante.

SR. SANTINI PADILLA: Para dejar clarificado el récord. Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Muy bien. Señor Santini, adelante.

SR. SANTINI PADILLA: Lo que pasa es que como he estado acostumbrado a tener a la distinguida compañera que me traiga a la atención estos proyectos, Lucy Arce, presidiendo desde el estrado, pues, me lleve en la mente que sus instrucciones de que trabajara con este Proyecto eran las mismas que da desde ese estrado. Así que me perdona el distinguidísimo compañero.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Adelante, señor Santini.

SR. SANTINI PADILLA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, ...

SRA. OTERO DE RAMOS: Hay objeción, señor Presidente.

Quisiera hacer una pregunta al compañero ...

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañera, ¿a las enmiendas?

SRA. OTERO DE RAMOS: No, no, al Proyecto.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas contenidas en el informe.

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañera Mercedes Otero.

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, quisiera preguntarle al compañero si se ha examinado bien este Proyecto de ley donde se quiere enmendar la Ley de Menores, a fin de fomentar la participación activa de los padres de menores en todas las etapas de los procedimientos judiciales, cuando todo nosotros sabemos que eso existe por la patria potestad dentro del sistema judicial.

Y por otro lado, yo he traído aquí proyectos de ley para nombrar intercesores y no me han querido poner el proyecto de ley para darle luz a los intercesores porque son los padres los que tienen la patria potestad y los que pueden intervenir en el Tribunal. Y entonces ahora este Proyecto elimina, hace una enmienda para fomentar la participación activa de los padres, cuando eso ya está legislado y no solamente legislado, que los tribunales de menores no permiten actuaciones dentro del sistema hasta que no llegue uno de los padres, mínimo.

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente, en torno a los planteamientos de la compañera. Primero, aunque la ley dispone en algunos de sus artículos la intervención de los padres en parte del proceso, no dispone claramente, ni con la energía que debe disponerlo el estatuto que en las etapas de tratamiento y de proceso rehabilitativo de los jóvenes que se puedan disponer con respecto a ellos, no dispone la participación de los padres. Y el mismo Departamento de Justicia nos informó que era medular que en procedimientos de este tipo se envuelva en la mayor medida posible, con la mayor fuerza de ley posible a los padres, porque es clave y medular en este proceso de rehabilitación y para que este culmine o se logre de una manera adecuada la participación y el envolvimiento total de los mismos.

Además, me parece que basta con echar un vistazo a la sociedad de hoy, a las comunidades de hoy, para que nos demos cuenta que si algo hay que hacer con las leyes existentes es hacerlas más firme, más fuertes y con garras mayores para que los padres asuman, totalmente, la responsabilidad que tienen que asumir con respecto a sus hijos de una manera activa, de una proactiva y de una manera completa y no busquen o esperen que instituciones, programas, personas o profesionales carguen con el proceso de rehabilitación y otros procesos importantísimos en torno a sus hijos y a la conducta que estos hayan observado.

En torno al planteamiento de la distinguida compañera de algunos proyectos o iniciativas que ella ha presentado tocante a los intercesores o programas o a personas que puedan actuar como intercesores, yo no tengo conocimiento de ese particular o no he trabajado con ese asunto. Demás esta decir que la compañera sabe que en la medida que a nosotros nos ha sido posible hemos trabajado, no solamente de ella sino de otros compañeros de la Minoría, proyectos que tienen que ver con diversos temas. O sea, que el hecho que yo este trabajando con este Proyecto, por si acaso, a mi me causó la duda y quisiera que en el récord no exista, el hecho que yo este trabajando este Proyecto que nos llegó ante la atención de la consideración de lo Jurídico del Senado responde a que nos llegó a la consideración de la Comisión y no a ningún otro asunto que haya podido tratar cualquier otro legislador que no ha estado, a tenor que mi mejor recuerdo, en manos de la Comisión o ante la Comisión para su consideración, y por tanto, en ese sentido, señor Presidente, es que estamos solicitando la aprobación de esta medida.

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, para aclarar el récord. Yo no estoy indicando ni echándole responsabilidades al compañero sobre su gestión en la Comisión de lo Jurídico. Este es un Proyecto presentado por el señor Misla Aldarondo, de la Cámara, y reconozco su labor en dicha Comisión.

Lo único que no me satisface la contestación que me da con relación a la responsabilidad que en las leyes se le da a los padres y si no se está haciendo eso no es porque falla la ley o porque no hay ley, sino porque lo jueces no ejecutan adecuadamente la responsabilidad que tienen en la patria potestad de exigirle a los padres sobre el tratamiento, sobre los procedimientos judiciales, sobre los servicios comunitarios e imponer las penalidades que sean. Yo creo que esto podría ser un buen recordatorio a los jueces, pero no encuentro que esto sea una legislación que haya que volver hacer otra legislación sobre la que existe para decirle a un juez que hay una responsabilidad ya en la patria potestad a todos los menores de este país y que ellos la pueden ejecutar sin hacer una nueva legislación al efecto. Por tanto, votaremos que no.

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción?

SRA. OTERO DE RAMOS: Hay objeción.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Aquellos que estén a favor de la medida favor de indicar sí en estos momentos. Aquellos que estén en contra favor indicar no en estos momentos.

Aprobada la medida.

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Santini.

SR. SANTINI PADILLA: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2705, titulado :

"Para enmendar el inciso (a) de la Sección 4 de la Ley Núm. 57 de 30 de mayo de 1973, según enmendada, a fin de disponer que la Comisión para los Asuntos de la Mujer deberá establecer y mantener una página en la red de Internet en la que se incluirá todo tipo de asunto concerniente a los derechos de la mujer."

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señora Lucy Arce.

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de la medida sin enmiendas.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 400, titulado :

"Para enmendar los Artículos 19 y 20 de la Ley Núm. 258 de 29 de diciembre de 1995, según enmendada, conocida como "Ley de Donativos Legislativos", a fin de tipificar como delito grave el no depositar los fondos de un donativo legislativo en una cuenta bancaria especial separada y remitir a la agencia designada copia del comprobante de depósito; e incluir la pena de restitución y prestación de servicios en la comunidad en dichos Artículos."

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Santini.

SR. SANTINI PADILLA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción?

SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): No habiendo objeción, se aprueban.

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción?

SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 3119, titulado :

"Para declarar el mes de febrero de cada año, como el "***Mes de la Prevención y Manejo de Síntomas del Corazón y de los Adiestramientos de Resucitación Cardiopulmonar***"; y para exhortar anualmente a las entidades educativas y profesionales relacionadas a llevar a cabo actividades dirigidas a la educación, prevención y orientación de condiciones y anomalías cardíacas."

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañero Kenneth McClintock.
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 1729, titulado :

"Para disponer que en toda obra que se comience o efectúe a partir del primero (1ro) de julio de 2001, se utilicen marcadores de kilómetros fabricados con plástico reciclado de y manufacturados en Puerto Rico, de estar disponible, y que el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras, los municipios y las entidades privadas que sean contratadas adopten con las providencias reglamentarias correspondientes para el cumplimiento con esta Ley."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción?
SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): No habiendo objeción, se aprueban.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2926, titulada :

"Para ordenar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, luego de la celebración de la vista pública provista por la Ley Núm. 133 del 1 de julio de 1975, conocida como "Ley de Bosques de Puerto Rico" a proclamar los manglares frente a la Playa del Peñón Brusi en el municipio de Camuy como Bosque Estatal."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 3501, titulado :

"Para enmendar el Artículo 25 de la Ley Núm. 447 del 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y sus Instrumentalidades", a los fines de disponer que los patronos en el sector público vendrán obligados a someter a la Administración de los Sistemas de Retiro toda la documentación requerida dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de solicitud de los beneficios del retiro o de liquidación de fondos; disponer que el Sistema de Retiro tramitará en un plazo no mayor de treinta (30) dias dicha solicitud; y para establecer penalidades."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Adelante.
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 3, línea 7, tachar "treinta (30)" y sustituir por "sesenta (60)". En la línea 10, tachar "treinta (30)" y sustituir por "sesenta (60)".
Esa es la enmienda, señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción?
SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): No habiendo objeción, se aprueban.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala al título. En la página 1, línea 5, tachar "treinta (30)" y sustituir por "sesenta (60)". Y en la última línea del título tachar "treinta (30)" y sustituir por "sesenta (60)".
Esa es la enmienda.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2521, titulado :

"Para crear el Programa para el Control y la Prevención de la Contaminación Lumínica; establecer sus propósitos; disponer las normas básicas para la regulación de la contaminación lumínica; crear la clasificación de áreas especiales de protección; autorizar la aprobación de reglamentos; y asignar fondos."

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañero Kenneth McClintock.
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Para que se apruebe la medida.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 2438, titulado :

"Para ordenar al Instituto de Cultura Puertorriqueña a realizar una investigación para el hallazgo de la calzada original del Puente Martín Peña, localizado en la parada 27 de la Avenida Ponce de León del Municipio de San Juan."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 3160, titulado :

"Para enmendar los incisos (a) y (b) del Artículo 3, enmendar el inciso (a) del Artículo 4, añadir un inciso (d) al Artículo 8 y enmendar el Artículo 16 de la Ley Núm. 284 del 21 de agosto de 1999, conocida como la "Ley Contra el Acecho en Puerto Rico", a fin de corregir el alcance de la definición de lo que constituye acecho para efectos de dicha Ley, ampliar el alcance de las disposiciones sobre las órdenes de protección, y enmendar los formularios que forman parte de la legislación."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Adelante.
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 2, párrafo 1, línea 4, tachar "viololence" y sustituir por "violence", eso es en ingles.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 3109, titulada :

"Para ordenar a la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico, proceder con la liberación de la Cláusula de Lotificación, incluída en la Escritura de Compraventa número ciento noventa y cinco de 4 de octubre de 1972, otorgada ante la notario América Cano de Rivera, de la Finca número 4,766,

inscripción octava, inscrita al Folio 54 del Tomo 275 de Arecibo, localizada en el Barrio Miraflores del término municipal de Arecibo, P.R., propiedad de la Sucesión Molina Faría."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? Compañera Mercedes Otero.

SRA. OTERO DE RAMOS: ¿Este es el P. de la C. 3160? Es que estoy aquí de pie para hacer una enmienda y no se ve ...

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Y yo le estoy preguntando ...

SRA. OTERO DE RAMOS: Es que se paran al frente y entonces usted no me ve a mi ni yo a usted.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Solicite la reconsideración del 3160. ¿Hay alguna objeción a la Resolución Conjunta de la Cámara 3109, ¿hay alguna objeción?

SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Se aprueba.

- - - -

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañera Mercedes Otero.

SRA. OTERO DE RAMOS: Para solicitar una reconsideración del Proyecto de la Cámara 3160.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Pregunta primero. ¿La Resolución Conjunta de la Cámara 3109, ¿se aprobó?

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Sí, señor.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): No hay objeción a la moción de la compañera. Adelante, con la reconsideración.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del Proyecto de la Cámara 3160, titulado :

"Para enmendar los incisos (a) y (b) del Artículo 3, enmendar el inciso (a) del Artículo 4, añadir un inciso (d) al Artículo 8 y enmendar el Artículo 16 de la Ley Núm. 284 del 21 de agosto de 1999, conocida como la "Ley Contra el Acecho en Puerto Rico", a fin de corregir el alcance de la definición de lo que constituye acecho para efectos de dicha Ley, ampliar el alcance de las disposiciones sobre las órdenes de protección, y enmendar los formularios que forman parte de la legislación."

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, es para hacer una enmienda. En la página 2, línea 6, eliminar "o proximidad física". Esa es la enmienda.

Y entonces en la Exposición de Motivos, en la línea 3 de la Exposición de Motivos, en la primera página, también eliminar "o proximidad física o".

SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay objeción.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): No hay objeción, se aprueban las enmiendas.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Entonces a la enmienda en Sala, página 2, párrafo 1, línea 4, tachar "violonce" y sustituir por "violence".

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2205, titulado :

"Para disponer la adhesión y cancelación de un sello especial denominado Sello para Compañías de Fianzas en Puerto Rico a favor de la Sociedad para Asistencia Legal, en toda transacción, gestión o garantía de fianza que presten en casos criminales."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Adelante.

SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 3, línea 5, después de "dispuesto" insertar "el Secretario de Hacienda podrá autorizar el pago de los derechos dispuestos por esta Ley a través de cualesquiera de los métodos que le autoriza la ley, incluyendo el pago por la vía electrónica".

Esa es la enmienda.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción?

SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): No habiendo objeción, se aprueban.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 544, titulado :

"Para enmendar los Artículos 95 y 141 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de que el delito de agresión agravada sea de naturaleza grave cuando se cometa contra la persona de un oficial del orden público, así como la que se cometa por un funcionario público so color de autoridad y sin causa legítima; enmendar las penas; para eliminar el inciso (a) del Artículo 141, y para otros fines."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Adelante.

SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 4, línea 1, tachar "sabienda" y sustituir por "sabiendas".

Esa es la enmienda.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 3008, titulado :

"Para denominar con el nombre "Museo Tecnológico Dr. Modesto Iriarte", a la antigua Central Bonus de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, localizada en el Municipio de Rincón."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2729, titulado :

"Para enmendar el Artículo 299 del Código Penal de 1937, según enmendado, a los fines de atemperarlo al Plan de Reorganización Núm. 1, según enmendado, conocido como "Ley de la Judicatura de 1994"."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción?
SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2737, titulado :

"Para enmendar la Sección 9 de la Ley Núm. 79 de 24 de junio de 1965, según enmendada, a los fines de atemperarla al Plan de Reorganización Núm. 1, según enmendado, conocido como la Ley de la Judicatura de 1994."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 3020, titulado :

"Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 1999, conocida como "Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario", a los fines de aclarar que la referencia a incapacitados son aquellos declarados así judicialmente."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 3067, titulado :

"Para enmendar los incisos (1) y (6) del Artículo 5 y el primer párrafo del Artículo 6 de la Ley Núm.282 de 21 de agosto de 1999, conocida como "Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario", a los fines de corregir que la referencia a setenta y dos (72) horas no son horas laborables sino que son setenta y dos (72) horas contadas a partir del otorgamiento para que el notario haga la notificación correspondiente."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Adelante.
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 2, línea 7, tachar "setenta y dos (72) horas" y sustituir por "tres (3) días laborables". Página 3, línea 12, tachar "setenta y dos (72) horas" y sustituir por "tres (3) días laborables".
Esa es la enmienda.
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

- - - -

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Luz Z. Arce Ferrer, Vicepresidenta.

- - - -

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas al título. En la primera página, tercera línea del título, tachar "setenta y dos (72) horas" y sustituir por "tres (3) días laborables". Y en la línea cuarta, también, tachar "setenta y dos (72) horas" y sustituir por "tres (3) días laborables".
Esas son las enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas, ¿¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 3476, titulado :

"Para añadir un inciso (b) (8) al Artículo 5.004 del Plan de Reorganización de la Rama Judicial, Ley Núm. 1a. de 28 de julio de 1994, conocida como "Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994", según enmendada, a los efectos de otorgar facultad a los Jueces Municipales para considerar, atender y resolver toda demanda sobre desahucio, cuando el canon de los arrendamientos o el precio o cantidad que por virtud de cualquier contrato deba pagarse cumputado por una anualidad, no exceda de cien mil (100,000) dólares."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 3528, titulado :

"Para enmendar el inciso (c) de la Regla 22 de las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963, según enmendadas, con el propósito de que una persona imputada de delito grave y que no tenga representación legal, sea citada por el Tribunal para una conferencia con antelación a la vista preliminar con el propósito de gestionarle representación legal."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2958, titulado :

"Para enmendar los Artículos 38 y 95 de la Ley Hipotecaria de 1979, a fin de atemperarlos con lo dispuesto en la Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 1999, conocida como "Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario"."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción?

SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.

SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llame el Proyecto del Senado 2610.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz para que se llame el Proyecto del Senado 2610, ¿hay alguna objeción?

SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.

SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se aprueba.

SRA. OTERO DE RAMOS: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora Otero de Ramos.

SRA. OTERO DE RAMOS: No hay una objeción, pero hay una enmienda.

SRA. VICEPRESIDENTA: Procede que cuando se llame la medida, pues entonces, vamos con las enmiendas.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2610, titulado :

"Para enmendar la Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, a los fines de adicionar un inciso D al Artículo 4 que disponga que toda querella Clase I contra un menor que se origine en un plantel escolar deberá agotar el remedio administrativo antes de radicar la querella en el Tribunal de Menores."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

SRA. OTERO DE RAMOS: Para una enmienda adicional.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Al texto enmendado sería.

SRA. VICEPRESIDENTA: Enmiendas al texto enmendado.

SRA. OTERO DE RAMOS: Para que se elimine el "Artículo D" y se sustituya por "Toda querella que conlleve una falta Clase I, cuyos actos constitutivos se lleven a cabo dentro de la jurisdicción del plantel escolar del Departamento de Educación contra un menor que no se haya agotado el remedio administrativo.".

SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, se acepta, no hay objeción.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas no habiendo objeción se aprueban las mismas.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2299, titulado :

"Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 225 de 1 de diciembre de 1995, según enmendada, conocida como "Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico", a fin de establecer en cuatro año el período de vigencia de los certificados de agricultor bona fide e implementar la política pública de la Ley."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción?

SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.

SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se aprueban.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna objeción?

SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.

SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción ni a la medida ni al título, se aprueban las mismas.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2283, titulado :

"Para crear "Ley Prohibiendo Anotar o Imprimir el Número de una Tarjeta de Crédito o Débito en un Cheque"; establecer su aplicación, términos y limitaciones en el curso ordinario de negocios."

***Enmiendas Circuladas En Sala:**

**En la Exposición de Motivos:**

| | |
|---|---|
| Página 1, párrafo 1, línea 2: | eliminar "todo costo" y sustituir por "toda costa" |
| Página 1, párrafo 1, línea 6: | eliminar "Al consumidor hacer" y sustituir por "Cuando el consumidor hace" |
| Página 1, párrafo 1, línea 7: | eliminar "pagar" y sustituir por "paga" |
| Página 1, párrafo 1, línea 8: | eliminar "a la persona que efectúa la compra" |
| Página 1, párrafo 2, línea 1: | eliminar "Muchos negocios para" y sustituir por "Para" |
| Página 2, líneas 3 a la 6: | eliminar todo su contenido y sustituir por "La Asamblea Legislativa considera necesaria la |

aprobación de esta Ley por el bienestar y protección de la sociedad en general y para evitar que se usurpe la intimidad del consumidor y pueda afectarse la línea de crédito, al apropiarse ilegalmente de bienes utilizando su número de tarjeta de crédito o débito."

**En el Texto:**

Página 2, línea 2: después de "Ley" eliminar "Prohibiendo" y sustituir por "para prohibir"

Página 3, líneas 16 a la 23: después de "efectivo" eliminar todo su contenido y sustituir por "anotará el número de tarjeta de crédito o débito de un consumidor, a menos que éste consienta a ello. No obstante, podrá pedirle la tarjeta de crédito o débito como forma de identificación o como un indicador de responsabilidad financiera y antora el tipo de tarjeta de crédito o débito y la fecha de expiración de la misma."

Página 4, líneas 1 a la 2: eliminar todo su contenido

Página 4, línea 3: sustituir "5" por "4"

Página 4, línea 4: eliminar ":"

Página 4, líneas 5 a la 7: eliminar todo su contenido

Página 4, línea 8: eliminar la identificación del inciso "(b)" y sustituir "Prohibir" por "prohibir"

Página 4, entre líneas 13 y 14: insertar un nuevo "Artículo 5" que leerá como sigue "Artículo 5. Penalidades

Toda persona que viole las disposiciones de esta Ley será sancionada con pena de reclusión por un término máximo de seis (6) meses o multa máxima de quinientos (500) dólares o ambas penas a discreción del Tribunal."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas previamente circuladas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas previamente circuladas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título previamente circuladas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título previamente circuladas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2577, titulado :

"Para autorizar al Secretario de Hacienda a participar en conversaciones multiestatales a fin de no menoscabar su facultad de recaudar arbitrios o cualquier otra contribución sobre productos adquiridos a través de la Internet."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2578, titulado :

"Para enmendar el apartado (aa) del inciso (M) de la Sección 1023 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de 1994", a los fines de eliminar el segundo párrafo del inciso (iii) erróneamente incluído al aprobarse la Ley Núm. 75 de 2000 y aclarar la intención legislativa."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 2557, titulada :

"Para reasignar al Departamento de la Familia, Oficina Región San Juan, la cantidad de diez mil (10,000) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 402 del 4 de agosto de 1999, para la compra de artículos de primera necesidad y materiales de construcción; y para que se autoricen el pareo de los fondos."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 2558, titulada :

"Para reasignar al Municipio de San Juan la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, del fondo 4026-93-27010000-2414, a ser transferidos a la Asociación de Residentes de San Francisco, Santa María y, San Ignacio, Inc., (UNDARE, INC.), de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 338 del 19 de agosto de 1992, para mejoras permanentes a las mencionadas urbanizaciones: y para que se autoricen el pareo de los fondos."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 2559, titulada :

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes a ser transferidos a la Liga de Natación Master de Puerto Rico, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares bajo la cuenta 1999-141-0870000-0001-142 de los fondos consignados en la R.C. Núm 508 del 28 de agosto del 1998, para cubrir los gastos a ser utilizados en las competencias de natación de la liga; y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 2560, titulada :

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes a ser transferidos a la Liga de Natación Master de Puerto Rico, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares bajo la cuenta 1999-141-0870000-0001-142 de los fondos consignados en la R.C. Núm 508 del 28 de agosto del 1998, para cubrir los gastos a ser utilizados en las competencias de natación de la liga; y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 2561, titulada :

"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cinco mil doscientos cincuenta y tres dólares con setenta y ocho centavos ($5,253.78) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997; nueve mil seiscientos cuarenta y ocho dólares con veinticinco centavos ($9,648.25) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998 y la cantidad de siete mil novecientos diecisiete dolares con cincuenta y tres centavos ($7,917.53) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para la celebración de actividades sociales, culturales, eductivas, recreativas, deportivas y para la compra de equipo y materiales."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 2562, titulada :

"Para reasignar a entidades sin fines de lucro, bajo la supervisión de agencias del gobierno, que se especifican en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta, la cantidad setecientos veintitrés mil sesenta (723,060) dólares, de los fondos consignados en las Resoluciones Conjuntas Núm. 287 y 358 del 10 de agosto de 1997 y 9 de agosto de 1998 respectivamente; que realizan actividades o prestan servicios de bienestar social, de la salud, educación, cultura y recreación que ayudan a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 2563, titulada :

"Para asignar a la Compañía de Turismo, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, del Fondo General, para gastos de publicidad, promoción y relacionados del "Congreso Mundial de Salsa", a celebrarse en los días del 27 al 29 de julio de 2000, en la Ciudad de San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos asignados."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se llame el Proyecto del Senado 2489, que estaba en turno posterior.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz para llamar el Proyecto del Senado 2489, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2489, titulado :

"Para enmendar el Artículo 117-A de la Ley Núm. 115 de 24 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de tipificar como delito transmitir anuncios obscenos a través de la televisión."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Relación de Proyectos Radicados en Secretaría.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

## RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

La Secretaría da cuenta de la siguiente sexta relación e informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones conjuntas, de la lectura se prescinde, a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz.

### PROYECTO DEL SENADO

Sustitutivo a los P. del S. 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2360, 2361, 2362, 2363 y 2364
Por la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía:

"Para disponer que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales declarará reserva natural las áreas de cubierta forestal boscosa de los municipios de Jayuya, Adjuntas, Lajas, Guánica, Lares, Guayanilla, Maricao, Peñuelas, Ponce, Utuado, Yauco y Sabana Grande que no figuren en los inventarios de terrenos agrícolas o desarrollo socio-industrial, a fin de proteger y conservar la cubierta vegetativa en las cuencas hidrográficas de esas regiones."
(REGLAS Y CALENDARIO)

## RESOLUCION CONJUNTA DEL SENADO

R. C. del S. 2565
Por el señor Iglesias Suárez:

"Para asignar al Departamento de la Familia, Región de Carolina, la cantidad de seis mil ochocientos (6,800) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a Ceiba Housing, para la construcción de cunetones en las Parcelas Aguas Claras y Sector Silen de Ceiba; y obras relacionadas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados."
(HACIENDA)

## PROYECTOS DE LA CAMARA

P. de la C. 1038
Por la señora Martínez Irizarry:

"Para enmendar el Artículo 99 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", a fin de eliminar del delito de violación el término legal "no fuere la propia" y sustituirlo por "no sea su cónyuge"."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 3447
Por el señor Sánchez Fuentes:

"Para crear la "Ley de Armas de Puerto Rico" y derogar las Leyes Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, y la Núm. 75 de 13 de junio de 1953, según enmendada; a fin de unificar los requisitos para la concesión de las licencias de tener, poseer y portar armas, y las de tiro al blanco y de caza; establecer las sanciones y multas a imponerse; disponer que las sentencias que se impongan por incurrir en violaciones a esta Ley se cumplirán de manera consecutiva; establecer un registro de la venta de municiones; establecer un límite máximo a la cantidad de municiones que podrá obtener un tenedor de armas que no posea un permiso de tiro al blanco o de caza; limitar la cantidad de armas que podrán ser autorizadas a una persona que tenga licencia de armas; crear el Sistema de Registro Electrónico en la Policía de Puerto Rico; y para otros fines."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 3497
Por los señores Díaz Urbina, Vega Borges y Aponte Hernández:

"Para crear la Corporación Pública del Registro de la Propiedad de Puerto Rico; dotarla de poderes y facultades para llevar a cabo sus funciones y propósitos; derogar los Artículos 2, 3, 5, 6 y para enmendar

los Artículos 8, 11, 11A, 12, 14, 16 y 17 y 18 de la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según enmendada, conocida como "Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad", que asignan ciertas funciones del Registro de la Propiedad al Departamento de Justicia a los fines de transferir dichas facultades a la Corporación; y para otros fines; para enmendar los Artículos 1 de la Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 1970, según enmendada, conocida como Ley de Aranceles y para autorizar el retiro temprano de los empleados del Registro de la Propiedad." (GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES)

## RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA

R. C. de la C. 3041
Por los señores Misla Aldarondo, Mundo Ríos, Cintrón García, señora Ruiz Class, señores Acevedo Méndez, Aponte Hernández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, Chico Vega, Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García de Jesús, Jiménez Cruz, Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Santos, Maldonado Rodríguez, Marrero Hueca, Manuel; señora Martínez Irizarry, señores Nieves Román, Núñez González, Pérez Ortiz, Quiles Rodríguez, Ramos Meléndez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero Donnelly, señores Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez, Vázquez Rosado y Vega Borges:

"Para asignar al Programa de Contratación y Negociación de Seguros de Salud de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, la cantidad de novecientos cincuenta y siete millones quinientos mil (957,500,000) dólares a fin de cubrir el costo de las primas del Plan de Seguro de Salud que sirve a la clientela médico indigente y empleados públicos del Gobierno Central, el cual integra los recursos privados y públicos en un solo sistema de salud basado en la libre selección de centro de salud y médico primario en las Regiones de Salud cubiertas por este seguro; y autorizar el pareo de los fondos asignados."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 3448
Por el señor Mundo Ríos:

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de seiscientos (600.00) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para cubrir gastos de viaje del joven Basilio Bonafort Ríos, con motivo de un intercambio deportivo en el estado de Pennsylvania." (HACIENDA)

R. C. de la C. 3449
Por el señor Mundo Ríos:

"Para asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de cuatro mil novecientos (4,900) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para Hogares Rafaela Ybarra, Inc,. para cubrir gastos de funcionamiento y equipo para la institución." (HACIENDA)

R. C. de la C. 3451
Por el señor Mundo Ríos:

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para la instalación de un generador de electricidad en el Oratorio San Juan Bosco." (HACIENDA)

SR. MELENDEZ ORTIZ: Ha circulado la sexta Relación de Proyectos y Resoluciones radicados en Secretaría. Tenemos una enmienda en la página 3, Proyecto de la Cámara 3447, ha sido referido a la Comisión de lo Jurídico, solicitamos que sea referido únicamente a la Comisión de Seguridad Pública.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que está sexta Relación de Proyectos y Resoluciones se dé por leída y aprobada, según ha sido enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz para llamar las medidas que van a ser reconsideradas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

## CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del Proyecto del Senado 1920, titulado :

"Para crear el Centro Municipal de Resolución de Conflictos, que tendrá por objeto prestar servicios de mediación, arbitraje y amigables componedores para la resolución de conflictos, controversias y pleitos, ya iniciados o potenciales; para proveer el método de compensación; para disponer los procedimientos a seguirse y para establecer la revisión judicial."

***Enmiendas Circuladas En Sala:**

**En el Texto:**

Página 2, línea 5: después de "personas" insertar ", que no sean abogados,"

Página 2, línea 13: espués de "personas" insertar "certificadas como mediadores,"

Página 3, entre líneas 4 y 5: insertar "Artículo 4.-Jurisdicción y competencia.
Los amigables componedores, árbitros y mediadores intervendrán en aquellas controversias, de naturaleza civil, que sean de la competencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, y que le sean referidas por:
a) El Tribunal de Primera Instancia
b) Que el Código Civil o una ley especial refiera necesariamente a un amigable componedor o árbitro.
c) La partes voluntariamente le sometan a su consideración, en materias civiles y/o mercantiles, sobre contratos, cuasicontratos, derechos reales sobre bienes muebles e inmuebles, y daños y perjuicios, exceptuados los casos de impericia médica."

Página 3, línea 5: tachar "4" y sustituir por "5"

Página 3, entre líneas 11 y 12: insertar "El costo de los peritos privados será sufragado por las respectivas partes, el costo de los

peritos que sean empleados municipales será sufragado por las partes, según la tarifa que establezca la Asamblea Municipal.
La Asamblea Municipal podrá eximir del pago de tarifas por los servicios de árbitros, amigables componedores, mediadores y peritos, a personas que cualifiquen, según los criterios de ingresos que adopte."

Página 3, línea 12: tachar "5" y sustituir por "6"
Página 3, línea 16: tachar "6" y sustituir por "7"
Página 3, línea 17: tachar "y árbitros" y después de "revisables" tachar "por'
Página 3, línea 18: tachar todo su contenido y sustituir por "ante el Tribunal de Primera Instancia y gozarán de presunción de corrección y la parte que la impugne tendrá el peso de la prueba en el procedimiento judicial. El procedimiento de impugnación será de naturaleza sumaria, con una primera comparecencia para la presentación de las pruebas y contenciones de las partes, y una segunda comparecencia para el juicio en su fondo, pudiendo el juez ordenar la consolidación de ambas comparecencias."
Página 3, líneas 19 y 20: tachar todo su contenido y sustituir por "Las decisiones de los árbitros serán revisables por el Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante recurso de certiorari expedido a su discreción."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas previamente circuladas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas previamente circuladas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para una enmienda en Sala.

SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.

SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 2, línea 13, después de "personas" insertar "certificadas como mediadores".

Esa es la enmienda.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la enmienda en Sala, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna objeción?

SR. FAS ALZAMORA: No hay objeción.

SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración de la Resolución Conjunta del Senado 2396, titulada :

"Para asignar a la Administración de Corrección la cantidad de doscientos mil dólares ($200,000.00) de fondos no comprometidos del Presupuesto General para sufragar los costos de la Primera Cumbre Correccional de las Américas."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración de la Resolución Concurrente del Senado 70, titulada:

"Para derogar el inciso (k), enmendar los incisos (b), (d), (e), (g), (i), (j), (l), (m), (s) y (x), y renumerar los incisos (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x) e (y), como (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w) y (x) de la Sección 2; enmendar la Sección 3; enmendar los incisos (c), (j) y (m), y añadir un nuevo inciso (n) de la Sección 5; enmendar la Sección 11, de la Resolución Concurrente del Senado Núm. 11, y para otros fines."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del Proyecto del Senado 2535, titulado :

"Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 170 del 23 de julio de 1974, conocida como Ley Orgánica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, a fin de establecer una aportación para proyectos de remedio o limpieza ambiental de 25% del cargo establecido por cada unidad a ser conectada al sistema de alcantarillados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico; para enmendar el Artículo 1 de la Ley 170, con el propósito de enmendar la definición de unidad aclarando que para los proyectos de remedio o limpieza ambiental, una unidad equivale a 400 galones de agua de descarga al día en lo que respecta el sistema de alcantarillado; y para enmendar el Artículo 1 de la Ley 170 para definir el concepto de proyecto de remedio o limpieza ambiental."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración de la Resolución Conjunta de la Cámara 3429, titulada :

"Para asignar a la Junta de Libertad Bajo Palabra de Puerto Rico la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, para gastos de funcionamiento en el año fiscal de 2000 - 2001; y para autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para retornar al turno de Mociones.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: En la Resolución Conjunta de la Cámara 3429, tiene una enmienda al título. En la primera línea de la página 1 del título, después de "Rico" insertar ",".

Esa es la enmienda.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la enmienda en Sala, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para retornar al turno de Mociones.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz para regresar al turno de Mociones, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

## MOCIONES

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que el Proyecto de la Cámara 2995 se devuelva a la Comisión de Hacienda.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se forme un cuarto Calendario de Ordenes Especiales del Día que incluya las siguientes medidas: Proyecto del Senado 2207, Proyecto de la Cámara 2443, Proyecto de la Cámara 2998, Resolución Conjunta del Senado 2196, Resolución Conjunta del Senado 2038, Resolución Conjunta del Senado 2505, Resolución Conjunta del Senado 2510, Resolución Conjunta de la Cámara 2883, Resolución Conjunta de la Cámara 3422, Resolución Conjunta de la Cámara 3433.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

PRES. ACC. (SR. MELENDEZ ORTIZ): Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

- - - -

Ocupa la Presidencia el señor Charlie Rodríguez Colón, Presidente.

- - - -

SR. PRESIDENTE: Compañeros Senadores y Senadoras, voy a suplicar que estén atentos a lo que voy a indicarles ahora.

El señor Portavoz va a estar presentando un nuevo Calendario que se va a considerar, vamos a hacer un receso, la Mayoría Parlamentaria tendrá un caucus, y luego regresaremos a la Votación Final, final, final, una vez consideremos ese Calendario. Por lo cual, compañeros, suplico su cooperación, particularmente los compañeros de Mayoría, que permanezcan en el Hemiciclo.

Vamos a ver un cuarto Calendario ahora y luego hay el receso y luego viene otro Calendario y luego viene la Votación Final, final, final.

Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame la reconsideración del Proyecto del Senado 2170.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

Señores compañeros Senadores y Senadoras, vamos a aclarar. Vamos a leer este cuarto Calendario. Finalizado este cuarto Calendario, hacemos una Votación Final de las medidas que ya han sido atendidas en primera votación. Se hace receso, se regresa para el último Calendario y entonces la última Votación Final, final.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del Proyecto del Senado 2170, titulado :

"Para enmendar la Sección 2.9 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico", a fin de establecer en el Departamento de Estado un Registro de Reglamentos en el Internet."

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente, para enmiendas en Sala.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

SR. DAVILA LOPEZ: En la Exposición de Motivos, página 1, línea 16, insertar el siguiente texto: "A pesar de que esta legislación no tiene efectos presupuestarios en el primer año de vigencia el Departamento del Estado deberá solicitar los fondos para poder implementar la misma y para poder cumplir con los términos que le imponen sus disposiciones.".

En el texto, en la página 2, línea 17, eliminar "noventa (90)" e insertar "ciento ochenta (180)". En la página 2, línea 33, eliminar "seis (6) e insertar "dieciocho (18)". Después de "Fiscal" insertar "que comience;" eliminar "aprobación" e insertar "fecha de vigencia". En la página 2, línea 35, eliminar "tres (3)" e insertar "seis (6)". En la página 3, línea 3, eliminar "enero" e insertar "octubre". En la página 3, línea 6, después del "Artículo" insertar lo siguiente: "Los reglamentos del Departamento de Hacienda vigentes no quedarán derogados por falta de traducción hasta cuarenta y ocho (48) meses después de la fecha de aprobación de esta Ley". Y en la página 3, línea 7, eliminar "inmediatamente" e insertar "sesenta (60) días".

Esas son las enmiendas, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se forme un Calendario de Lectura del cuarto Calendario de Ordenes Especiales de hoy.

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

## CALENDARIO DE LECTURA

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2207, y se da cuenta de un informe de la Comisión Especial para el Estudio del Sistema de Retiro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con enmiendas.

## "LEY

Para establecer un aumento de doscientos ($200.00) dólares o la diferencia entre lo que reciben actualmente de pensión y mil ($1000.00) dólares, lo que sea menor, en las pensiones de los miembros de la Policía de Puerto Rico que estén recibiendo o tengan derecho a recibir pensiones menores de mil ($1000.00) dólares mensuales y autorizar al Administrador del Sistema de Retiro a implementar esta ley.

## EXPOSICION DE MOTIVOS

Los miembros de la Policía de Puerto Rico ocupan un puesto de prestigio y confiabilidad en nuestra sociedad por su labor en pro de la seguridad de la ciudadanía. Su labor diaria es una llena de retos y circunstancias en las cuales ponen en riesgo sus vidas y su integridad fisica. Son funcionarios que gozan y dsifrutan al dedicar sus horas de rendimiento laboral en bienestar del prójimo mediante el servicio actuando en protección de la propiedad y de la seguridad física de los puertorriqueños.

Como todo funcionario de gobierno, según la Ley Núm. 447 del 14 de mayo de 1951, según enmendada, todo miembro retirado de la Policía de Puerto Rico tiene derecho a recibir una mensualidad de acuerdo a su aportación y años de servicio como funcionario de gobierno. Mediante la Ley Núm. 134 del 13 de agosto de 1996 se hizo extensivo a los miembros de la Policía de Puerto Rico los beneficios de la Ley Núm. 10 del 21 de mayo de 1992, según enmendada, la cual dispone que efectue un ajuste trienal de un tres (3%) por ciento en las pensiones concedidas o a concederse por el Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno de Puerto Rico.

En la actualidad, no empece al aumento trienal, estos servidores públicos se encuentran muy limitados económicamente, ya que el costo de la vida se ha duplicado y se ha reducido el poder adquisitivo de tales pensionados. En reconocimiento a los años de servicio dedicados por estos miembros de los cuerpos de seguridad estatal, se justifica se ponga en vigor el referido aumento en las pensiones de los miembros retirados de la Policía de Puerto Rico.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

"Artículo 1.-

Todo miembro retirado de la Policía de Puerto Rico o con derecho a retirarse bajo los términos de la Ley Núm. 447 del 15 de mayo de 1951, según enmendada, que esté recibiendo o tenga derecho a recibir al momento de retirarse una pensión o renta anual vitalicia menor de mil ($1,000.00) dólares mensuales, tendrá derecho a recibir doscientos ($200.00) dólares adicionales o la diferencia entre lo que recibe como miembro retirado de la Policía y mil ($1000.00) dólares, lo que sea menor, desde la fecha de aprobación de esta ley. El aumento en dicha pensión, se hará utilizando la siguiente fórmula:

La diferencia entre la pensión que recibe el miembro de la policía retirado y los mil ($1,000.00) dólares o los doscientos ($200.00) dólares, lo que sea menor, se dividirá en dos (2) porciones iguales a ser aplicadas anualmente para que el aumento se complete en un periodo de dos años."

Artículo 2.- El Administrador del Sistema de Retiro tomará las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta ley.

Artículo 3.- El costo del aumento de la primera porción que establece esta ley se sufragará del fondo no comprometido del tesoro Estatal, pero las cantidades necesarias para años subsiguientes serán incluidas en el Presupuesto General de Gastos del Gobierno del Estado Libre Asociado de PuertoRico.

Artículo 4.- Esta ley comenzará a regir inmediatamente despues de su aprobación."

## "INFORME

**AL SENADO DE PUERTO RICO:**

Vuestra Comisión Especial para el Estudio de los Sistemas de Retiro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tiene el honor de rendir ante este alto Cuerpo el Informe sobre el Proyecto del Senado 2207, previo estudio y consideración, recomendamos su aprobación con las siguientes enmiendas:

**En El Decretase:**

| | |
|---|---|
| En la página 3 después de la línea 4 | añadir "Articulo 4.-La Administración de los Sistemas de Retiro del Gobierno recibiran los fondos para cubrir el pago de este beneficio antes del día 15 de julio de cada año." |
| En la página 3 línea 5 | después de la palabra "Artículo" Tachar "4" y sustituir por "5" |

## ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 2207 tiene la finalidad de establecer un aumento de doscientos ($200.00) dólares o la diferencia entre lo que reciben actualmente de pensión y mil ($1000.00) dólares, lo que sea menor, en las pensiones de los miembros de la Policía de Puerto Rico que estén recibiendo o tengan derecho a recibir pensiones menores de mil ($1000.00) dólares mensuales y autorizar al Administrador del Sistema de Retiro a implementar esta ley.

La Administración de los Sistemas de Retiro del Gobierno y la Judicatura nos informó su endoso a la aprobación de la medida ya que la misma cumple con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley Núm. 447 del 15 de mayo de 1951, según enmendada ya que provee para su financiamiento.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Vuestra Comisión sobre los Sistemas de Retiro, previo estudio y consideración sobre el Proyecto del Senado 2207, recomienda su aprobación con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Luis Felipe Navas De León
Presidente
Comisión Especial de la Asamblea
Legislativa para el Estudio de los
Sistemas de Retiro del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2443, y se da cuenta de un informe de la Comisión Conjunta para el Estudio del Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor, sin enmiendas.

## "LEY

Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 253 de 27 de diciembre de 1995, según enmendada, conocida como "Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor", a los fines de que el asegurador realizará siempre el pago correspondiente a favor del vehículo afectado exclusivamente; define quién será el dueño del vehículo y para otros fines.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

El seguro de responsabilidad obligatorio respondió a una necesidad apremiante en la Isla, pretendiendo proteger el interés de los ciudadanos sobre sus vehículos de motor. En gran medida, resolvió el problema de miles de dueños de vehículos de motor afectados, y a los cuales terceras personas insolventes ocasionan daños.

No obstante, en la práctica se está dando una situación que a nuestro entender desvirtua el propósito de la ley. Luego de la determinación del monto de los daños a la hora de realizarse el correspondiente pago por reclamaciones, los cheques se expiden a nombre del dueño del vehículo así como también a nombre de la compañía financiadora. Esto presenta un inconveniente para el dueño del vehículo que tiene que agenciar la firma y endoso de la compañía que financió su vehículo previo o simultáneo a la reparación.

Reconocemos el interés de la compañía financiadora sobre los vehículos que financea, pero no debemos olvidar el hecho de que dicho interés está asegurado mediante el seguro "single interest" que por obligación paga el dueño del vehículo al momento de comprar el mismo.

Esta Asamblea Legislativa entiende que el cheque por concepto de pago de la reclamación debe ser expedido unicamente a nombre del dueño del vehículo que aparece como titular en el Departamento de Transportación y Obras Públicas al momento de la ocurrencia del accidente, o el arrendatario en un contrato de arrendamiento suscrito bajo las disposiciones de la Ley para Reglamentar los Contratos de Arrendamiento de Bienes Muebles, de forma tal que se agilize el proceso de reparación del automovil afectado. De esta forma, el dueño o el arrendatario, según sea el caso, puede proceder de inmediato a la reparación de su auto sin mediar gestión ni molestia adicional alguna.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 253 de 27 de diciembre de 1995, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 9.-

Una vez se determine la responsabilidad y cuantía de los daños ocurridos en un accidente de vehículos de motor a través del sistema de determinación inicial de responsabilidad o por los tribunales, el pago de la reclamación se efectuará en un término que no excederá de cinco (5) días naturales a partir de tal determinación. De realizarse el pago luego de dicho término, el asegurador estará sujeto a un cargo adicional computado a base del interés legal prevaleciente para beneficio del reclamante. Además, en estos casos el Comisionado impondrá cualesquiera multas administrativas provistas en el Código. El asegurador realizará siempre el pago correspondiente a favor del vehículo afectado exclusivamente. Para estos fines de este Artículo, el dueño del vehículo es aquél que aparece como titular en el Departamento de Transportación y Obras Públicas al momento de la ocurrencia del accidente, o el arrendatario en un contrato de arrendamiento suscrito bajo las disposiciones de la Ley para Reglamentar los Contratos de Arrendamiento de Bienes Muebles, Ley Núm. 76 de 13 de agosto de 1994, según enmendada."

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO:**

Vuestra Comisión Conjunta para el Estudio del Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 2443, recomienda a este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobación de la medida, sin enmiendas.

## ALCANCE DE LA MEDIDA

La medida ante nos propone enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 253 de 27 de diciembre de 1995, según enmendada, conocida como "Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor", a los fines de que el asegurador realizará siempre el pago correspondiente a favor del vehículo afectado exclusivamente; define quién será el dueño del vehículo y para otros fines.

La Comisión celebró una vista pública en la que participaron: los señores Austin Kolthoff, y Angelo Fernández, representantes de los Técnicos en la Industria de Colisión Automotriz de Puerto Rico; el señor Rafael de León, Presidente del Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico. Envió memorial explicativo la Oficina del Comisionado de Seguros.

Este Gobierno respondiendo a la necesidad apremiante de proteger el interés de los ciudadanos sobre sus vehículos de motor aprobó la Ley Núm. 253 de 27 de diciembre de 1995, según enmendada. En la mayoría de los casos, la parte perjudicada en un accidente de tránsito no encontraba en la parte causante del accidente un fuente de recobro que le reparar los daños sufridos.

El propósito legislativo de dicho Proyecto simplificará el trámite que genere la expedición de los cheques por concepto del pago del seguro de responsabilidad obligatorio a nombre del dueño del vehículo y de la compañía financiadora cuando el vehículo perjudicado está financiado. Reconocemos que emitir el pago de la indemnización a nombre del dueño del vehículo únicamente o al arrendatario, le facilita a la persona afectada el tener disponible más rápidamente los medios necesarios para reparar los daños que le fueron causados por el accidente, y a las compañías financiadoras les evita el tener que endosar un número voluminoso de cheques que en última instancia no será retenidos para ellas.

La enmienda propuesta propone que sea de aplicación sólo para aquellos casos que posea un tope de pago de hasta mil dólares. De acuerdo con las enmiendas sometidas se propone eliminar el tope de pago, que se hagan bajo el seguro de responsabilidad obligatorio. Las razones por la cual se realizará dicha enmienda es debido a que:

* El asegurador realizará siempre el pago correspondiente a favor del vehículo afectado exclusivamente. Para fines de este Artículo, el dueño del vehículo es aquél que aparace como titular en el Departamento de Transportación y Obras Públicas al momento de la ocurrencia del accidente, o el arrendatario en un contrato de arrendamiento suscrito bajo las disposiciones de la Ley para Reglamentar los Contratos de Arrendamiento de Bienes Muebles.
* En los casos de vehículos financiados, existe un seguro de cuenta, pagado por el comprador condicional o dueño condicional o dueño del vehículo, para proteger el interés de la compañía financiadora. Por lo cual, siempre esta compañía quedará protegida.
* El seguro de responsabilidad obligatorio no es un seguro de cuenta, sino uno diseñado para beneficiar a la víctima o perjudicado inocente en un accidente de tránsito.
* La práctica actual de los aseguradores de emitir los cheques por concepto del pago de reclamaciones provenientes del seguro de responsabilidad pública, a nombre del dueño del vehículo afectado y la compañía financiadora, es realmente una práctica fundamentada en la conveniencia y no en la existencia de una ley que así lo requiera.
* En el caso infrecuente de existir una diferencia entre el balance que se le adueda a la compañía financiadora y la cantidad pagada por el asegurador de la cuenta, la compañía tiene el mecanismo de reclamar directamente contra el patrimonio personal del deudor para recobrar dicha diferencia.
* La presente enmienda elimina el enriquecimiento injusto por parte de dicho asegurador en menoscabo del derecho que tiene el perjudicado a ser resarcido en sus daños.

**CONCLUSION**

Por todo lo antes expuesto, vuestra Comisión Conjunta para el Estudio del Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 2443, recomienda a este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobación de la medida, sin enmiendas, para así evitar la discriminación hacia aquellas personas cuyos vehículos sufren daños valorados en más de mil dólares.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Hon. Kenneth McClintock Hernandez
Vicepresidente
Comisión Conjunta para el Estudio del
Seguro de Responsabilidad Obligatorio
para Vehículos de Motor"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2998, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos, con enmiendas.

**"LEY**

Para conceder una licencia con paga, por un período de seis (6) horas al año para acudir a donar sangre, a todo empleado probatorio, regular, de confianza, transitorio o funcionario del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o de sus instrumentalidades y corporaciones públicas o municipalidades que así lo solicite.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

El Gobierno de Puerto Rico tiene la obligación de buscar alternativas e incentivos para conseguir que un mayor número de personas donen sangre. Lamentablemente, un amplio sector de nuestra sociedad no esta consciente de la necesidad de donar sangre para mantener nuestros abastos con una cantidad adecuada.

Algunos bancos de sangre han iniciado programas privados para atraer donantes. A modo de ejemplo, un banco de sangre en Iowa ofrece espectáculos artísticos y demostraciones científicas a estudiantes para exhortarlos a donar sangre tan pronto cumplan 17 años. A pesar de esos encomiables esfuerzos, los bancos de sangre operan dentro de un margen muy estrecho de seguridad para el suministro de sangre. Las estadísticas de los Estados Unidos reflejan que las donaciones de sangre disminuyen un 1% anualmente y la demanda de sangre aumenta un 1% anualmente.

Ante ese cuadro, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico considera necesario establecer una licencia con paga a todo empleado público que acuda a donar sangre. De este modo, reforzamos los esfuerzos que realizan las entidades públicas y privadas para mantener los abastos de sangre con cantidad suficiente para salvar vidas en momentos de emergencia.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.-Se concede una licencia con paga, por un período de seis (6) horas al año para acudir a donar sangre, a todo empleado probatorio, regular, de confianza, transitorio o funcionario del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o de sus instrumentalidades y corporaciones públicas o municipalidades que así lo solicite.

Artículo 2.-La autoridad nominadora podrá corroborar por cualesquiera medios que la licencia concedida se haya utilizado para los propósitos establecidos en esta Ley. El uso indebido de esta licencia podrá conllevar sanciones disciplinarias, de conformidad con la reglamentación de personal de la autoridad nominadora.

Artículo 3.-El empleado presentará a la autoridad nominadora la evidencia acreditativa de que utilizó el tiempo concedido para los propósitos establecidos en esta Ley.

Artículo 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME CONJUNTO**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos, previo estudio y consideración del P. de la C. 2998, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas.

**En el Decretase**
Página 2, línea 1 eliminar "seis (6)" y sustituir por "cuatro (4)"

**En el Título**
Página 1, línea 1 eliminar "seis (6)" y sustituir por "cuatro (4)"

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

El propósito del P. de la C. 2998 es conceder una licencia con paga, por un período de seis (6) horas al año para acudir a donar sangre, a todo empleado probatorio, regular, de confianza, transitorio o funcionario del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o de sus instrumentalidades y corporaciones públicas o municipalidades que así lo solicite.

En la exposición de motivos nos dice que el Gobierno de Puerto Rico tiene la obligación de buscar alternativas e incentivos para conseguir que un mayor número de personas donen sangre. Lamentablemente, un amplio sector de nuestra sociedad no esta consciente de la necesidad de donar sangre para mantener nuestros abastos con una cantidad adecuada.

Algunos bancos de sangre han iniciado programas privados para atraer donantes. A modo de ejemplo, un banco de sangre en Iowa ofrece espectáculos artísticos y demostraciones científicas a estudiantes para exhortarlos a donar sangre tan pronto cumplan 17 años. A pesar de esos encomiables esfuerzos, los bancos de sangre operan dentro de un margen muy estrecho de seguridad para el suministro de sangre. Las estadísticas de los Estados Unidos reflejan que las donaciones de sangre disminuyen un 1% anualmente y la demanda de sangre aumenta un 1% anualmente.

Ante ese cuadro, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico considera necesario establecer una licencia con paga a todo empleado público que acuda a donar sangre. De este modo, reforzamos los

esfuerzos que realizan las entidades públicas y privadas para mantener los abastos de sangre con cantidad suficiente para salvar vidas en momentos de emergencia.

Se análizo la información y el informe sometidó por la Cámara de Representantes el pasado 17 de mayo de 2000.

En reunión ejecutiva celebrada y por las razones previamente expuestas las comisiones que suscriben, luego de análisis de la medida y de la información disponible, recomiendan la aprobación del P. de la C. 2998 con enmiendas.

Respetuosamente Sometido,

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales

(Fdo.)
Luisa Lebrón Vda. de Rivera
Presidenta
Comisión de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2196, y se da cuenta de un informe de la Comisión Juventud, Recreación y Deportes, con enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para ordenar al Departamento de Recreación y Deportes transferir dos solares a los propietarios colindantes al parque ubicado en la Urbanización Milaville de Río Piedras, Municipio de San Juan, por su valor en el mercado, según tasación realizada el 11 de febrero de 1999.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La Asociación de Vecinos Milaville-García ha venido realizando gestiones con el Departamento de Recreación y Deportes, desde el 1993, para lograr que unos predios de terrenos permanentes, aledaños al parque ubicado en la Urbanización Milaville, sean vendidos a los propietarios colindantes.

En todo este tiempo se realizaron dos tasaciones, una en marzo de 1993 y otra el 11 de febrero de 1999. No obstante, a pesar de las múltiples gestiones realizadas, la transferencia del título de dichos solares no se ha realizado y es de utilidad y beneficio para los propietarios colindantes y para el resto de la urbanización Milaville, que se concluyan los trámites y gestiones indicados en 1993.

Para darle certeza a la transacción, se dispone que el precio en el mercado será determinado por el Informe de Valoración fechado 11 de febrero de 1999.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.- Se ordena al Departamento de Recreación y Deportes transferir dos solares a los propietarios colindantes al parque en la Urbanización Milaville de Río Piedras, Municipio de San Juan, por su valor en el mercado, según tasación realizada el 11 de febrero de 1999.

Sección 2.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor el mismo día de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de Juventud Recreación y Deportes del Senado tiene el honor de rendir su informe sobre la R. C. del S. 2196 recomendando la aprobación del mismo con las siguientes enmiendas.

**En el Texto**

Página 2, Línea 3 después de "realizada" eliminar "el 11 de febrero de 1999" y sustituir por " en 1993".

**En la Exposicion De Motivos**

Página 1, Línea 11 después de "Valoración" elimionar el resto de la oración y sustituir por "de marzo de 1993".

**En el Titulo**

Página 1, Línea 3 eliminar "el 11 de febrero de 1999" y sustituir por " en marzo de 1993".

## ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del S. 2196 tiene el propósito de ordenar al Departamento de Recreación y Deportes a transferir por compraventa dos solares de este a los vecinos colindantes, en la urbanización Milaville de Río Piedras, por su justo valor de mercado.

## ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisión solicitó al Municipio de San Juan, al Departamento de Recreación y Deportes, y al Departamento de Hacienda su opinión sobre el alcance y contenido de la Medida.

El Departamento de Recreación y Deportes no tiene oposición a la aprobación de la misma siempre y cuando la transacción de compraventa se realice según tazación en el mercado, esta condición obedece, al mandato de la Ley Organica del Departamento que ordena que cualquier propiedad de la agencia que se valla a vender se haga según su valor en el mercado. In embargo debido a las negociaciones realizadas con la comunidad el departamento esta deacuerdo en honrar el precio conbenido en el informe de valoración de marzo de 1993.

El Municipio de San Juan no se opone a la venta ya que los terrenos no pertenecen al mismo y no tienen ninguna utilidad o uso por lo tanto no tiene inconveniente en que se realice el traspaso.

El Departamento de Hacienda no tiene objeción con la aprobación de la Medida siempre y cuando el Departamento de Recreación y Deportes no tenga uso para el terreno y se venda por su justo valor de mercado.

Por todo lo antes expuesto la Comisión de Juventud Recreación y Deportes, concluye que no habiendo uso para los terrenos motivo de la medida de epígrafe por el Departamento de Recreación y Deportes además, al no existir conflicto entre las agencias por precio de venta convenido en la Resolución Recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación del mismo sin enmiendas.

Respetuosamente sometido;

(Fdo.)
Ramón L. Rivera, Hijo
Presidente
Comisión Juventud
Recreación y Deportes"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2038, y se da cuenta de un informe de la Comisión Hacienda, con enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para reasignar al Municipio de Mayagüez, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares para mejoras a la Casa Club de la Asociación de Pescadores Nuestra Sra. del Carmen; originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 del 8 de agosto de 1997.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1 - Reasignar al Municipio de Mayagüez, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares para mejoras a la Casa Club de la Asociación de Pescadores Nuestra Sra. del Carmen; originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 del 8 de agosto de 1997.

Sección 2 - Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas, estatales, municipales o federales.

Sección 3 - Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación,"

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la **R. C. del S. 2038,** tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas:

**En el Texto:**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 1 | Tachar "Reasignar" y sustituir por "Se reasigna" |
| Página 1, línea 2 | Después de "dólares" insertar ", de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997," y en la misma línea, tachar ";" |
| Página 1, línea 3 | Tachar todo su contenido y sustituir por "." |

**En el Título:**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 1 | Después de "dólares" insertar ", de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997," |
| Página 1, línea 2 | Tachar "originalmente" |

Página 1, línea 3 Tachar todo su contenido y sustituir por "y para autorizar el pareo de los fondos reasignados."

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

La **R. C. del S. 2038,** propone reasignar al Municipio de Mayagüez, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para mejoras a la Casa Club de la Asociación de Pescadores Nuestra Sra. del Carmen; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la **R. C. del S. 2038** con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2505, y se da cuenta de un informe de la Comisión Hacienda, con enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para reasignar al Municipio de San Germán, la cantidad de tres mil (3,000) dólares para mejoras al sistema de comunicaciones de los Patrulleros REACT Team, Inc. de San Germán; originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 672 del 8 de diciembre de 1999.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1 – Reasignar al Municipio de San Germán, la cantidad de tres mil (3,000) dólares para mejoras al sistema de comunicaciónes de los Patrulleros REACT Team, Inc. de San Germán; originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 672 del 8 de diciembre de 1999.

Sección 2 – Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas, estatales, municipales o federales.

Sección 3 – Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la **R. C. del S. 2505,** tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas:

**En el Texto:**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 1 | Tachar "Reasigna" y sustituir por "Se reasigna" |
| Página 1, línea 2 | Después de "dólares" insertar ", de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 672 de 8 de diciembre de 1999," y en la misma línea, tachar "comunicaciónes" y sustituir por "comunicaciones" |
| Página 1, líneas 3 y 4 | Tachar "; originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 672 del 8 de diciembre de 1999." y sustituir por "." |

**En el Título:**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 1 | Después de "dólares" insertar ", de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 672 de 8 de diciembre de 1999," |
| Página 1, línea 3 | Tachar todo su contenido y sustituir por "y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." |

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

La **R. C. del S. 2505,** propone reasignar al Municipio de San Germán, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 672 de 8 de diciembre de 1999, para mejoras al sistema de comunicaciones de los Patrulleros REACT Team, Inc. de San Germán; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en la Resolución Conjunta Núm. 672 de 8 de diciembre de 1999. La Comisión de acienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la **R. C. del S. 2505** con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2510, y se da cuenta de un informe de la Comisión Hacienda, con enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para reasignar al Municipio de Cabo Rojo, la cantidad de doscientos dos dólares con cuarenta y cinco centavos (202.45) para la adquisición de una impresora en la Escuela Carlota Matienzo de Cabo Rojo; de un sobrante originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 465 del 20 de agosto de 1996.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1 - Reasignar al Municipio de Cabo Rojo, la cantidad de doscientos dos dólares con cuarenta y cinco centavos (202.45) para la adquisición de una impresora para la Escuela Carlota Matienzo de Cabo Rojo; de un sobrante originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 465 del 20 de agosto de 1996.

Sección 2 - Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas, estatales, municipales o federales.

Sección 3 - Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la **R. C. del S. 2510,** tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas:

**En el Texto:**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 1 | Tachar "Reasigna" y sustituir por "Se reasigna" |
| Página 1, línea 2 | Después de "(202.45)" insertar ", de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 465 de 20 de agosto de 1996," |
| Página 1, líneas 3 y 4 | Tachar ";de un sobrante originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 465 del 20 de agosto de 1996." y sustituir por "." |

**En el Título:**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 2 | Después de "(202.45)" insertar ", de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 465 de 20 de agosto de 1996," |
| Página 1, líneas 3 y 4 | Tachar "de un sobrante originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 465 del 20 de agosto de 1996." y sustituir por "y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." |

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

La **R. C. del S. 2510,** propone reasignar al Municipio de Cabo Rojo, la cantidad de doscientos dos dólares con cuarenta y cinco centavos (202.45), de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 465 de 20 de agosto de 1996, para la adquisición de una impresora en la Escuela Carlota Matienzo de Cabo Rojo; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en la Resolución Conjunta Núm. 465 de 20 de agosto de 1996. La Comisión de acienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la **R. C. del S. 2510** con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2883, y se da cuenta de un informe de la Comisión Hacienda, sin enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para reasignar al Municipio de Vieques la cantidad de diez mil setecientos sesenta y cuatro ($10,764) dólares de los fondos consignados en la aportación mediante Ley #175 del 1996 a fin de transferirlos al Programa de Administración del Trabajo (A.D.T.) para pago de deuda contraída con jóvenes que trabajaron por error un mes adicional fuera de la propuesta y para mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Vieques la cantidad de diez mil setecientos sesenta y cuatro ($10,764) dólares de los fondos consignados en la aportación mediante Ley #175 del 1996 a fin de transferirlos al Programa de Administración del Trabajo (A.D.T.) para pago de deuda contraída con jóvenes que trabajaron por error un mes adicional fuera de la propuesta y para mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36.

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, provendrán de la asignación hecha al Municipio de Vieques mediante Ley 175 del 1996, en la cual dicho municipio recibió una asignación de cien mil ($100,000) dólares para adquisición de terrenos y repavimentación.

Sección 3.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta, podrán ser pareados con fondos federales, estatales o municipales.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO:**

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la **R. C. de la C. 2883,** tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

La **R. C. de la C. 2883,** propone reasignar al Municipio de Vieques la cantidad de diez mil setecientos setenta y cuatro ($10,764) dólares de los fondos consignados en la aportación mediante Ley #175 del 1996 a fin de transferirlos al Programa de Administración del Trabajo (A.D.T.) para pago de deuda contraída con jóvenes que trabajaron por error un mes adicional fuera de la propuesta y para mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36.

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en la Ley Núm.175 del 1996. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la **R. C. de la C. 2883** sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 3422, y se da cuenta de un informe de la Comisión Hacienda, sin enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para asignar al Departamento de la Familia la cantidad de siete mil (7,000) dólares, con el fin de que se transfiera la totalidad de esta cantidad a la Oficina Regional de Bayamón de ese Departamento, para brindar ayuda a personas de escasos recursos económicos y realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo y cultural de la comunidad; autorizar el pareo de los fondos asignados, la transferencia de los mismos e indicar su procedencia.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se asigna al Departamento de la Familia la cantidad de siete mil (7,000) dólares, con el fin de que se transfiera la totalidad de esta cantidad a la Oficina Regional de Bayamón de ese Departamento, para brindar ayuda a personas de escasos recursos económicos y realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo y cultural de la comunidad.

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas, estatales, municipales y del Gobierno de Estados Unidos.

Sección 3.-Se autoriza al Departamento de la Familia a transferir a su Oficina Regional de Bayamón la totalidad de los fondos aquí asignados, para cumplir con los propósitos consignados en el Artículo 1 de esta Resolución Conjunta.

Sección 4.-Los fondos aquí asignados provendrán de la partida de cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil (5,555,000) dólares, a ser distribuidos mediante legislación.

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al 1ro. de julio de 2000."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la **R. C. de la C. 3422,** tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La **R. C. de la C. 3422,** propone asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de siete mil (7,000) dólares, con el fin de que se transfiera la totalidad de esta cantidad a la Oficina Regional de Bayamón de ese Departamento, para brindar ayuda a personas de escasos recursos económicos y realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo y cultural de la comunidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados, la transferencia de los mismos e indicar su procedencia.

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en la Sustitutiva a la Resolución Conjunta Núm. 3043 de 5 de mayo de 2000. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la **R. C. de la C. 3422** sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 3433, y se da cuenta de un informe de la Comisión Hacienda, con enmiendas.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para reasignar y ser transferidos a la Escuela de la Comunidad Martín García Giusti, del Barrio Pájaros de Toa Baja, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta de la Cámara 1873 de 23 de diciembre de 1998 y originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 467 de 20 de agosto de 1996, para compra de aires acondicionados más cualquier otra mejora para la Escuela de la Comunidad Martín García Giusti, del Barrio Pájaros de Toa Baja.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Mediante la Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes Núm. 3624, con Núm. 467 de 20 de agosto de 1996, se asignó la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, para obras y mejoras permanentes en el Municipio de Toa Baja. Dicha Resolución Conjunta, en su inciso 1k, referente al Distrito Representativo Núm. 10, distribuyó fondos de la siguiente manera:

**MUNICIPIO DE TOA BAJA**

Aportación para mejoras al antiguo camino
Ernesto Juan Fonfrías adyacente a la
Urb. Las Colinas, Toa Baja $20,000

Esos fondos nunca se utilizaron y se reasignaron mediante la Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes 1873, aprobada en 23 de diciembre de 1998, para que leyera así:

1. **MUNICIPIO DE TOA BAJA**

k) Aportación para mejoras y obras en la Escuela de la Comunidad Martín García Giusti, del Barrio Pájaros de Toa Baja, con su número de cuenta 0101447709 $20,000

El objetivo de la presente Resolución Conjunta es reasignar y transferir esos fondos de la siguiente manera:

Reasignación y aportación para ser transferida a la
Escuela de la Comunidad Martín García Giusti,
del Barrio Pájaros de Toa Baja, con su número de
cuenta 0101447709, para compra de aires acondicionados
más cualquier otra mejora $20,000

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se reasignan y transfieren a la Escuela de la Comunidad Martín García Giusti, del Barrio Pájaros de Toa Baja, con su número de cuenta 0101447709, para compra de aires acondicionados más cualquier otra mejora, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta de la Cámara 1873 de 23 de diciembre de 1998, la cual leía de la siguiente manera:

1. Municipio de Toa Baja

k) Aportación para mejoras y obras en la Escuela de la Comunidad Martín García Giusti, del Barrio Pájaros de Toa Baja, con su número de cuenta 0101447709 $20,000

Esos fondos fueron originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 467 de 20 de agosto de 1996, que en su inciso 1k leía de la siguiente manera:

1. Municipio de Toa Baja

k) Aportación para mejoras al antiguo camino
Ernesto Juan Fonfrías adyacente a la Urb. Las Colinas,
Toa Baja $20,000

Sección 2.-Los fondos de esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos municipales, estatales, federales y cualesquiera otros fondos.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO:**

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la **R. C. de la C. 3433,** tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas:

**En el Título:**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 2 | Tachar "viente" y sustituir por "veinte" |
| Página 1, línea 4 | Después de "Conjunta " añadir "Núm." |

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

La **R. C. de la C. 3433,** propone reasignar y ser trasferidos a la Escuela de la Comunidad Martín García, del Barrio Pájaros de Toa Baja, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta de la Cámara 1873 de 23 de diciembre de 1998 y originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 467 de 20 de agosto de 1996, para compra de aires acondicionados más cualquier otra mejora para la Escuela de la Comunidad Martín García Giusti, del Barrio Pájaros de Toa Baja

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en esta Resolución Conjunta Núm. 467 de 20 de agosto de 1996. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la **R. C. de la C. 3433** con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

SR. PRESIDENTE: Ha concluido el Calendario, el cuarto Calendario de Ordenes Especiales del Día, procédase a llamar las medidas.

**CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA**

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2207, titulado :

"Para establecer un aumento de doscientos ($200.00) dólares o la diferencia entre lo que reciben actualmente de pensión y mil ($1000.00) dólares, lo que sea menor, en las pensiones de los miembros de la Policía de Puerto Rico que estén recibiendo o tengan derecho a recibir pensiones menores de mil ($1000.00) dólares mensuales y autorizar al Administrador del Sistema de Retiro a implementar esta ley."

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente.
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.
SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?
SR. DAVILA LOPEZ: Perdón.
SR. PRESIDENTE: El Proyecto creo que tiene un informe que recomienda unas enmiendas.
SR. DAVILA LOPEZ: Unas enmiendas contenida en el informe.

SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción se aprueban.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a la aprobación de la medida? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2443, titulado :

"Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 253 de 27 de diciembre de 1995, según enmendada, conocida como "Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor", a los fines de que el asegurador realizará siempre el pago correspondiente a favor del vehículo afectado exclusivamente; define quién será el dueño del vehículo y para otros fines."

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2998, titulado :

"Para conceder una licencia con paga, por un período de seis (6) horas al año para acudir a donar sangre, a todo empleado probatorio, regular, de confianza, transitorio o funcionario del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o de sus instrumentalidades y corporaciones públicas o municipalidades que así lo solicite."

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a la aprobación de la medida?

SR. RAMOS COMAS: Hay objeción.

SR. PRESIDENTE: ¿Va a consumir un turno?

SR. RAMOS COMAS: No, no voy a consumir un turno, pero que se sepa que nos oponemos.

SR. PRESIDENTE: Debido a que hay objeción vamos a solicitar que aquellos que estén a favor, se servirán a decir que sí. Aquellos que están en contra, se servirán a decir que no. Aprobada la medida.

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 2196, titulada :

"Para ordenar al Departamento de Recreación y Deportes transferir dos solares a los propietarios colindantes al parque ubicado en la Urbanización Milaville de Río Piedras, Municipio de San Juan, por su valor en el mercado, según tasación realizada el 11 de febrero de 1999."

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SR. RAMOS COMAS: Hay objeción.

SR. PRESIDENTE: Senador Ramos Comas.

SR. RAMOS COMAS: Que conste en la Delegación del Partido Popular la abstención de esta medida.

SR. PRESIDENTE: Muy bien, anótese la abstención de los Senadores Populares que se encuentran en Sala.

No habiendo objeción, se aprueba la medida.

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

- - - -

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Luz Z. Arce Ferrer, Vicepresidenta.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 2038, titulada :

"Para reasignar al Municipio de Mayagüez, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares para mejoras a la Casa Club de la Asociación de Pescadores Nuestra Sra. del Carmen; originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 del 8 de agosto de 1997."

SR. DAVILA LOPEZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 2505, titulada :

"Para reasignar al Municipio de San Germán, la cantidad de tres mil (3,000) dólares para mejoras al sistema de comunicaciones de los Patrulleros REACT Team, Inc. de San Germán; originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 672 del 8 de diciembre de 1999."

SR. DAVILA LOPEZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 2510, titulada :

"Para reasignar al Municipio de Cabo Rojo, la cantidad de doscientos dos dólares con cuarenta y cinco centavos (202.45) para la adquisición de una impresora en la Escuela Carlota Matienzo de Cabo Rojo; de un sobrante originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 465 del 20 de agosto de 1996."

SR. DAVILA LOPEZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2883, titulada :

"Para reasignar al Municipio de Vieques la cantidad de diez mil setecientos sesenta y cuatro ($10,764) dólares de los fondos consignados en la aportación mediante Ley #175 del 1996 a fin de transferirlos al Programa de Administración del Trabajo (A.D.T.) para pago de deuda contraída con jóvenes que trabajaron por error un mes adicional fuera de la propuesta y para mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36."

SR. DAVILA LOPEZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 3422, titulada :

"Para asignar al Departamento de la Familia la cantidad de siete mil (7,000) dólares, con el fin de que se transfiera la totalidad de esta cantidad a la Oficina Regional de Bayamón de ese Departamento, para brindar ayuda a personas de escasos recursos económicos y realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo y cultural de la comunidad; autorizar el pareo de los fondos asignados, la transferencia de los mismos e indicar su procedencia."

SR. DAVILA LOPEZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 3433, titulada :

"Para reasignar y ser transferidos a la Escuela de la Comunidad Martín García Giusti, del Barrio Pájaros de Toa Baja, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta de la Cámara 1873 de 23 de diciembre de 1998 y originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 467 de 20 de agosto de 1996, para compra de aires acondicionados más cualquier otra mejora para la Escuela de la Comunidad Martín García Giusti, del Barrio Pájaros de Toa Baja."

SR. DAVILA LOPEZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida según ha sido informada.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. DAVILA LOPEZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

- - - -

SR. DAVILA LOPEZ: Señora Presidenta.

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.

SR. DAVILA LOPEZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar un Calendario de Votación, segundo Calendario de Votación Final de las siguientes medidas: Proyecto del Senado 2489, Proyecto del Senado 1920 en reconsideración, Resolución Conjunta del Senado 2396 en reconsideración, Resolución Concurrente del Senado 70 en reconsideración, Proyecto del Senado 2535 en reconsideración, Resolución Conjunta de la Cámara 3429 en reconsideración, Proyecto del Senado 1560, Proyecto del Senado 2409, Proyecto del Senado 2610, Proyecto de la Cámara 3297, Proyecto de la Cámara 833, Proyecto de la Cámara 2785, Proyecto de la Cámara 3007, Proyecto de la Cámara 3232, Proyecto de la Cámara 2684, Proyecto de la Cámara 2582, Proyecto de la Cámara 2792, Proyecto de la Cámara 2378, Proyecto de la Cámara 2705, Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 400, Proyecto de la Cámara 3119, Proyecto de la Cámara 1729, Resolución Conjunta de la Cámara 2926, Proyecto de la Cámara 3501, Proyecto del Senado 2521, Resolución Conjunta del Senado 2438, Proyecto de la Cámara 3160, Resolución Conjunta de la Cámara 3109, Proyecto de la Cámara 2205, Proyecto de la Cámara 544, Proyecto de la Cámara 3008, Proyecto de la Cámara 2729, Proyecto de la Cámara 2737, Proyecto de la Cámara 3020, Proyecto de la Cámara 3067, Proyecto de la Cámara 3476, Proyecto de la Cámara 3528, Proyecto de la Cámara 2958, Proyecto del Senado 2299, Proyecto del Senado 2283, Proyecto del Senado 2577, Proyecto del Senado 2578, Resolución Conjunta del Senado 2557, Resolución Conjunta del Senado 2558, Resolución Conjunta del Senado 2559, Resolución Conjunta del Senado 2560, Resolución Conjunta del Senado 2561, Resolución Conjunta del Senado 2562, Resolución Conjunta del Senado 2563, Concurrencia con el Proyecto del Senado 1136, Concurrencia con el Proyecto del Senado 1402, Concurrencia con el Proyecto del Senado 1540, Concurrencia con el Proyecto del Senado 1570, Concurrencia con el Proyecto del Senado 2451, Proyecto del Senado 2170 en reconsideración, Proyecto del Senado 2207, Proyecto de la Cámara 2443, Proyecto de la Cámara 2998, Resolución Conjunta del Senado 2196, Resolución Conjunta del Senado 2038, Resolución Conjunta del Senado 2505, Resolución Conjunta del Senado 2510, Resolución Conjunta de la Cámara 2883, Resolución Conjunta de la Cámara 3422, Resolución Conjunta de la Cámara 3433. Y ésta no es la Votación Final. Vamos a votar en ésta y luego se va a continuar con otro Calendario y vamos a tener caucus. Le vamos a solicitar a la distinguida Presidenta que se le permita votar en primer lugar a la compañera Luisa Lebrón.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

## CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas:

P. del S. 1560

"Para adicionar un apartado (o) a la Sección 5002 del Subtítulo E de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de cambiar el peso de la prueba a favor del contribuyente que ha actuado de buena fe."

P. del S. 1920 (rec.)

"Para crear el Centro Municipal de Resolución de Conflictos, que tendrá por objeto prestar servicios de mediación, arbitraje y amigables componedores para la resolución de conflictos, controversias y pleitos, ya iniciados o potenciales; para proveer el método de compensación; para disponer los procedimientos a seguirse y para establecer la revisión judicial."

P. del S. 2170 (rec.)

"Para enmendar la Sección 2.9 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico", a fin de establecer en el Departamento de Estado un Registro de Reglamentos en el Internet."

P. del S. 2207

"Para establecer un aumento de doscientos ($200.00) dólares o la diferencia entre lo que reciben actualmente de pensión y mil ($1000.00) dólares, lo que sea menor, en las pensiones de los miembros de la Policía de Puerto Rico que estén recibiendo o tengan derecho a recibir pensiones menores de mil ($1000.00) dólares mensuales y autorizar al Administrador del Sistema de Retiro a implementar esta Ley."

P. del S. 2283

"Para establecer la "Ley para Prohibir Anotar o Imprimir el Número de una Tarjeta de Crédito o Débito en un Cheque"; establecer su aplicación, términos y limitaciones en el curso ordinario de negocios; y fijar penalidades."

P. del S. 2299

"Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 225 de 1 de diciembre de 1995, según enmendada, conocida como "Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico", a fin de establecer cuatro años para el período de vigencia de los certificados de agricultor bona fide e implementar la política pública de la Ley."

P. del S. 2409

"Para adicionar el apartado (d) a la Sección 4110 del Capítulo 5, del Subtítulo D de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de autorizar licencias de traficantes al detalle a favor de restaurantes, paradores u hoteles que operan a menos de cien (100) metros de una escuela, centros religiosos o instituciones públicas o privadas de rehabilitación."

P. del S. 2489

"Para enmendar el Artículo 117-A de la Ley Núm. 115 de 24 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de tipificar como delito transmitir o anunciarse utilizando material obsceno a través de la televisión, radio o cualesquiera medios electrónicos u otro medio de comunicación."

P. del S. 2521

"Para crear el Programa para el Control y la Prevención de la Contaminación Lumínica; establecer sus propósitos; disponer las normas básicas para la regulación de la contaminación lumínica; crear la clasificación de áreas especiales de protección; autorizar la aprobación de reglamentos; y asignar fondos."

P. del S. 2535 (rec.)

"Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 170 del 23 de julio de 1974, conocida como "Ley Orgánica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico", a fin de establecer una aportación para proyectos de remedio o limpieza ambiental de 25% del cargo establecido por cada unidad a ser conectada al sistema de alcantarillados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico; para enmendar el Artículo 1 de la Ley 170, con el propósito de enmendar la definición de unidad aclarando que para los proyectos de remedio o limpieza ambiental, una unidad equivale a 400 galones de agua de descarga al día en lo que respecta el sistema de alcantarillado; y para enmendar el Artículo 1 de la Ley 170 para definir el concepto de proyecto de remedio o limpieza ambiental."

P. del S. 2577

"Para autorizar al Secretario de Hacienda a participar en conversaciones multiestatales a fin de no menoscabar su facultad de recaudar arbitrios o cualquier otra contribución sobre productos adquiridos a través de la Internet."

P. del S. 2578

"Para enmendar el apartado (aa) del inciso (M) de la Sección 1023 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de 1994", a los fines de eliminar el segundo párrafo del inciso (iii) erróneamente incluido al aprobarse la Ley Núm. 75 de 2000 y aclarar la intención legislativa."

P. del S. 2610

"Para adicionar un inciso (d) al segundo párrafo del Artículo 4 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico", a fin de disponer que toda querella que conlleve una falta Clase 1 contra un menor, que se origine en un plantel escolar, deberá agotar el remedio administrativo antes de radicar la querella en el Tribunal Menores."

R. C. del S. 2038

"Para reasignar al Municipio de Mayagüez, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para mejoras a la Casa Club de la Asociación de Pescadores Nuestra Sra. del Carmen; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados."

R. C. del S. 2196

"Para ordenar al Departamento de Recreación y Deportes transferir dos solares a los propietarios colindantes al parque ubicado en la Urbanización Milaville de Río Piedras, Municipio de San Juan, por su valor en el mercado, según tasación realizada en marzo de 1993."

R. C. del S. 2396(rec.)

"Para asignar a la Administración de Corrección la cantidad de doscientos mil dólares ($200,000.00), de fondos no comprometidos del Presupuesto General, para sufragar los costos de la Primera Cumbre Correccional de las Américas."

R. C. del S. 2438

"Para ordenar al Instituto de Cultura Puertorriqueña a realizar una investigación para el hallazgo de la calzada original del Puente Martín Peña, localizado en la Parada 27 de la Avenida Ponce de León del Municipio de San Juan."

R. C. del S. 2505

"Para reasignar al Municipio de San Germán, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 672 de 8 de diciembre de 1999, para mejoras al sistema de comunicaciones de los Patrulleros REACT Team, Inc. de San Germán; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados."

R. C. del S. 2510

"Para reasignar al Municipio de Cabo Rojo, la cantidad de doscientos dos dólares con cuarenta y cinco centavos (202.45), de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 465 de 20 de agosto de 1996, para la adquisición de una impresora en la Escuela Carlota Matienzo de Cabo Rojo; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados."

R. C. del S. 2557

"Para reasignar al Departamento de la Familia, Oficina Región San Juan, la cantidad de diez mil (10,000) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 402 del 4 de agosto de 1999, para la compra de artículos de primera necesidad y materiales de construcción; y para que se autoricen el pareo de los fondos."

R. C. del S. 2558

"Para reasignar al Municipio de San Juan la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, del fondo 4026-93-27010000-2414, a ser transferidos a la Asociación de Residentes de San Francisco, Santa María y San Ignacio, Inc. (UNDARE, INC.), de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 338 del 19 de agosto de 1992, para mejoras permanentes a las mencionadas urbanizaciones: y para que se autoricen el pareo de los fondos."

R. C. del S. 2559

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes a ser transferidos a la Liga de Natación Master de Puerto Rico, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares bajo la cuenta 1999-141-0870000-0001-142 de los fondos consignados en la R.C. Núm 508 del 28 de agosto del 1998, para cubrir los gastos a ser utilizados en las competencias de natación de la liga; y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados."

R. C. del S. 2560

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de la cuenta 397-0310000-242-1998, para ser utilizados en la compra de materiales para la reconstrucción de viviendas, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 786 de 25 de diciembre de 1998; y para que se autoricen el pareo de los fondos."

R. C. del S. 2561

"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cinco mil doscientos cincuenta y tres dólares con setenta y ocho centavos ($5,253.78) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997; nueve mil seiscientos cuarenta y ocho dólares con veinticinco centavos ($9,648.25) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998 y la cantidad de siete mil novecientos diecisiete dólares con cincuenta y tres centavos ($7,917.53) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para la celebración de actividades sociales, culturales, educativas, recreativas, deportivas y para la compra de equipo y materiales."

R. C. del S. 2562

"Para reasignar a entidades sin fines de lucro, bajo la supervisión de agencias del gobierno, que se especifican en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta, la cantidad setecientos veintitrés mil sesenta (723,060) dólares, de los fondos consignados en las Resoluciones Conjuntas Núm. 287 y 358 del 10 de agosto de 1997 y 9 de agosto de 1998 respectivamente; que realizan actividades o prestan servicios de bienestar social, de la salud, educación, cultura y recreación que ayudan a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños."

R. C. del S. 2563

"Para asignar a la Compañía de Turismo, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, del Fondo General, para gastos de publicidad, promoción y relacionados del "Congreso Mundial de Salsa", a celebrarse en los días del 27 al 29 de julio de 2000, en la Ciudad de San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos asignados."

R. Conc. del S. 70

"Para derogar el inciso (k), enmendar los incisos (b), (d), (e), (g), (i), (j), (l), (m), (s) y (x), y renumerar los incisos (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x) e (y), como (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w) y (x) de la Sección 2; enmendar la Sección 3; enmendar los incisos (c), (j) y (m), y añadir un nuevo inciso (n) de la Sección 5; enmendar la Sección 11, de la Resolución Concurrente del Senado Núm. 11, y para otros fines."

P. de la C. 400(Sust.)

"Para enmendar los Artículos 19 y 20 de la Ley Núm. 258 de 29 de diciembre de 1995, según enmendada, conocida como "Ley de Donativos Legislativos", a fin de tipificar como delito grave el no depositar los fondos de un donativo legislativo en una cuenta bancaria especial separada y remitir a la agencia designada copia del comprobante de depósito; e incluir la pena de restitución y prestación de servicios en la comunidad en dichos Artículos."

P. de la C. 544

"Para enmendar los Artículos 95 y 141 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de que el delito de agresión agravada sea de naturaleza grave cuando se cometa contra la persona de un oficial del orden público, así como la que se cometa por un funcionario público so color de autoridad y sin causa legítima; enmendar las penas; para eliminar el inciso (a) del Artículo 141, y para otros fines."

P. de la C. 833

"Para prohibir el discrimen por razón de sexo o apariencia física por parte de patronos, negocio, agencia, corporación pública o privada, departamento o instrumentalidad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y noticieros televisivos sean públicos o privados."

P. de la C. 1729

"Para disponer que en toda obra que se comience o efectúe a partir del 1 de julio de 2001, se utilicen marcadores de kilómetros fabricados con plástico reciclado y manufacturado en Puerto Rico, de estar los productos disponibles en el mercado y a un precio competitivo, y que el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras, los municipios y las entidades privadas que sean contratadas adopten las providencias reglamentarias correspondientes para el cumplimiento de esta Ley."

P. de la C. 2205

"Para disponer la adhesión y cancelación de un sello especial denominado Sello para Compañías de Fianzas en Puerto Rico a favor de la Sociedad para Asistencia Legal, en toda transacción, gestión o garantía de fianza que presten en casos criminales."

P. de la C. 2378

"Para adicionar un nuevo inciso (g), al Artículo 37 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico", a fin de fomentar la participación activa de los padres, tutores o encargados de menores en todas las etapas de los procedimientos judiciales, tratamientos, servicios comunitarios; e imponer penalidades."

P. de la C. 2443

"Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 253 de 27 de diciembre de 1995, según enmendada, conocida como "Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor", a los fines de que el asegurador realizará siempre el pago correspondiente a favor del vehículo afectado exclusivamente; define quién será el dueño del vehículo y para otros fines."

P. de la C. 2582

"Para adicionar un último párrafo a la Sección 2 de la Ley Núm. 3 de 15 de febrero de 1955, según enmendada, a fin de disponer como requisito adicional para expedir una licencia a los establecimientos y centros para el cuido de niños, el desarrollo e implantación de un currículo para el desarrollo integral de los infantes y trotones (0-3 años) y preescolares (3-4 años), previamente aprobado por el Departamento de Educación."

P. de la C. 2684

"Para crear un Distrito Teatral, cuyo parámetro cubrirá desde la Calle Bolívar hasta la Calle Ernesto Cerra en Santurce, como parte del Desarrollo y Rehabilitación de Santurce, con el propósito de establecer un centro de actividades culturales en la zona de Santurce, conceder incentivos especiales para estimular la rehabilitación del área y participación ciudadana; crear un comité de trabajo especial por el Presidente de la Junta de Planificación."

P. de la C. 2705

"Para enmendar el inciso (a) de la Sección 4 de la Ley Núm. 57 de 30 de mayo de 1973, según enmendada, a fin de disponer que la Comisión para los Asuntos de la Mujer deberá establecer y mantener una página en la red de Internet en la que se incluirá todo tipo de asunto concerniente a los derechos de la mujer."

P. de la C. 2729

"Para enmendar el Artículo 299 del Código Penal de 1937, según enmendado, a los fines de atemperarlo al Plan de Reorganización Núm. 1, según enmendado, conocido como "Ley de la Judicatura de 1994"."

P. de la C. 2737

"Para enmendar la Sección 9 de la Ley Núm. 79 de 24 de junio de 1965, según enmendada, a los fines de atemperarla al Plan de Reorganización Núm. 1, según enmendado, conocido como la Ley de la Judicatura de 1994."

P. de la C. 2785

"Para enmendar el inciso (k) del Artículo 5.04 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, a fin de disponer que un Asambleísta Municipal pueda pertenecer a una Junta de Directores o Comités de una Cooperativa de Ahorro y Crédito, mientras se desempeña en la Cooperativa."

P. de la C. 2792

"Para adicionar un nuevo inciso (m) y redesignar los incisos (m) al (v) respectivamente, como (n) al (w) del Artículo 3 de la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico", a fin de incluir el significado de lo que es un medicamento genérico."

P. de la C. 2958

"Para enmendar los Artículos 38 y 95 de la Ley Hipotecaria de 1979, a fin de atemperarlos con lo dispuesto en la Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 1999, conocida como "Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario"."

P. de la C. 2998

"Para conceder una licencia con paga, por un período de cuatro (4) horas al año para acudir a donar sangre, a todo empleado probatorio, regular, de confianza, transitorio o funcionario del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o de sus instrumentalidades y corporaciones públicas o municipalidades que así lo solicite."

P. de la C. 3007

"Para establecer la Ley de Cetrería con el propósito de regular la práctica de la Cetrería como arte de caza en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, definir facultades, poderes y deberes del Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, otorgar, renovar y revocar Licencias de Cetrería, fijar penalidades por la violación de esta Ley y de los reglamentos promulgados en virtud de la misma."

P. de la C. 3008

"Para denominar con el nombre "Museo Tecnológico Dr. Modesto Iriarte", a la antigua Central Bonus de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, localizada en el Municipio de Rincón."

P. de la C. 3020

"Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 1999, conocida como "Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario", a los fines de aclarar que la referencia a incapacitados son aquellos declarados así judicialmente."

P. de la C. 3067

"Para enmendar los incisos (1) y (6) del Artículo 5 y el primer párrafo del Artículo 6 de la Ley Núm.282 de 21 de agosto de 1999, conocida como "Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario", a los fines de corregir que la referencia a 3 días laborables no son horas laborables sino que son 3 días laborables contadas a partir del otorgamiento para que el notario haga la notificación correspondiente."

P. de la C. 3119

"Para declarar el mes de febrero de cada año, como el "***Mes de la Prevención y Manejo de Síntomas del Corazón y de los Adiestramientos de Resucitación Cardiopulmonar***"; y para exhortar anualmente a las entidades educativas y profesionales relacionadas a llevar a cabo actividades dirigidas a la educación, prevención y orientación de condiciones y anomalías cardíacas."

P. de la C. 3160

"Para enmendar los incisos (a) y (b) del Artículo 3, enmendar el inciso (a) del Artículo 4, añadir un inciso (d) al Artículo 8 y enmendar el Artículo 16 de la Ley Núm. 284 del 21 de agosto de 1999, conocida como la "Ley Contra el Acecho en Puerto Rico", a fin de corregir el alcance de la definición de lo que constituye acecho para efectos de dicha Ley, ampliar el alcance de las disposiciones sobre las órdenes de protección, y enmendar los formularios que forman parte de la legislación."

P. de la C. 3232

"Para enmendar el Artículo 631 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, según enmendado, a fin de establecer que el monto de la fianza en apelación en casos de desahucio será fijado por el Tribunal de Primera Instancia."

P. de la C. 3297

"Para enmendar el párrafo (3) y añadir un párrafo (4) al apartado (a), enmendar el párrafo (4) del apartado (b), el párrafo (1) y el inciso (C) y añadir un inciso (D) al párrafo (2) del apartado (c), y añadir un apartado (d) a la Sección 1011; enmendar el inciso (A) del párrafo (31) del apartado (b) de la Sección 1022; enmendar los incisos (A) y (D) y derogar el párrafo final del párrafo (1), enmendar la cláusula (i) del inciso (A), derogar la cláusula (iv) del inciso (B), derogar el segundo párrafo del inciso (E ), enmendar la cláusula (i) de los incisos (F), (G), y (H) y la cláusula (ii) del inciso (J) y añadir un párrafo final al párrafo (2) del apartado (aa), enmendar el inciso (B) del párrafo (3) y el segundo párrafo del párrafo (5), y enmendar el título y añadir un inciso (C) al párrafo (6) del apartado (bb) de la Sección 1023; enmendar los apartados (a) y (c) de la Sección 1025; enmendar el párrafo (1) y derogar el párrafo (4) del apartado (b) de la Sección 1051; y enmendar el apartado (c) de la Sección 1059 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de eliminar del mismo la llamada "penalidad por estar casado" y de reducir las tasas contributivas de los individuos a partir de los años contributivos que comiencen después del 31 de diciembre de 2001."

P. de la C. 3476

"Para añadir un inciso (b) (8) al Artículo 5.004 del Plan de Reorganización de la Rama Judicial, Ley Núm. 1a. de 28 de julio de 1994, conocida como "Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994", según enmendada, a los efectos de otorgar facultad a los Jueces Municipales para considerar, atender y resolver toda demanda sobre desahucio, cuando el canon de los arrendamientos o el precio o cantidad que por virtud de cualquier contrato deba pagarse cumputado por una anualidad, no exceda de cien mil (100,000) dólares."

P. de la C. 3501

"Para enmendar el Artículo 25 de la Ley Núm. 447 del 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y sus Instrumentalidades", a los fines de disponer que los patronos en el sector público vendrán obligados a someter a la Administración de los Sistemas de Retiro toda la documentación requerida dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la fecha de solicitud de los beneficios del retiro o de liquidación de fondos; disponer que el Sistema de Retiro tramitará en un plazo no mayor de sesenta (60) dias dicha solicitud; y para establecer penalidades."

P. de la C. 3528

"Para enmendar el inciso (c) de la Regla 22 de las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963, según enmendadas, con el propósito de que una persona imputada de delito grave y que no tenga representación legal, sea citada por el Tribunal para una conferencia con antelación a la vista preliminar con el propósito de gestionarle representación legal."

R. C. de la C. 2883

"Para reasignar al Municipio de Vieques la cantidad de diez mil setecientos sesenta y cuatro ($10,764) dólares de los fondos consignados en la aportación mediante Ley #175 del 1996 a fin de transferirlos al Programa de Administración del Trabajo (A.D.T.) para pago de deuda contraída con jóvenes que trabajaron por error un mes adicional fuera de la propuesta y para mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36."

R. C. de la C. 2926

"Para ordenar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, luego de la celebración de la vista pública provista por la Ley Núm. 133 del 1 de julio de 1975, conocida como "Ley de Bosques de Puerto Rico" a proclamar los manglares frente a la Playa del Peñón Brusi en el municipio de Camuy como Bosque Estatal."

R. C. de la C. 3109

"Para ordenar a la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico, proceder con la liberación de la Cláusula de Lotificación, incluída en la Escritura de Compraventa número ciento noventa y cinco de 4 de octubre de 1972, otorgada ante la notario América Cano de Rivera, de la Finca número 4,766, inscripción octava, inscrita al Folio 54 del Tomo 275 de Arecibo, localizada en el Barrio Miraflores del término municipal de Arecibo, P.R., propiedad de la Sucesión Molina Faría."

R. C. de la C. 3422

"Para asignar al Departamento de la Familia la cantidad de siete mil (7,000) dólares, con el fin de que se transfiera la totalidad de esta cantidad a la Oficina Regional de Bayamón de ese Departamento, para brindar ayuda a personas de escasos recursos económicos y realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo y cultural de la comunidad; autorizar el pareo de los fondos asignados, la transferencia de los mismos e indicar su procedencia."

R. C. de la C. 3429(rec.)

"Para asignar a la Junta de Libertad Bajo Palabra de Puerto Rico, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, para gastos de funcionamiento en el año fiscal de 2000 - 2001; y para autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia."

R. C. de la C. 3433

"Para reasignar y ser transferidos a la Escuela de la Comunidad Martín García Giusti, del Barrio Pájaros de Toa Baja, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta de la Cámara 1873 de 23 de diciembre de 1998 y originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 467 de 20 de agosto de 1996, para compra de aires acondicionados más cualquier otra mejora para la Escuela de la Comunidad Martín García Giusti, del Barrio Pájaros de Toa Baja."

Concurrencias con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1136

Concurrencias con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1402

Concurrencias con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1540

Concurrencias con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1570

Concurrencias con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 2451

**VOTACION**

(Votación Núm. 2)

Los P. del S. 1560; 2170(rec.); 2207; 2283; 2299; 2489; 2521; 2578; 2610; las R. C. del S. 2038; 2438; 2505; 2510; 2557; 2558; 2559; 2560; 2561; 2562; 2563; los P. de la C. 400(Sust.); 544; 1729; 2205; 2443; 2582; 2684; 2705; 2729; 2737; 2785; 2792; 2958; 3007; 3008; 3020; 3067; 3119; 3160; 3232; 3297; 3476; 3501; 3528; las R. C. de la C. 2883; 2926; 3109; 3422 y 3433, son considerados en Votación Final, las que tienen efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Modesto Agosto Alicea, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Luz Z. Arce Ferrer, Presidenta Accidental.

TOTAL ..... 23

VOTOS NEGATIVOS

TOTAL ..... 0

VOTOS ABSTENIDOS

TOTAL ..... 0

El P. del S. 2577 y las concurrencias con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los P. del S. 1136; 1402; 1540 y 1570, son considerados en Votación Final, las que tienen efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Modesto Agosto Alicea, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Luz Z. Arce Ferrer, Presidenta Accidental.

TOTAL ..... 22

VOTOS NEGATIVOS

TOTAL ..... 0

VOTOS ABSTENIDOS

Senador:

Ramón Luis Rivera Cruz.

TOTAL ..... 1

Los P. del S. 1920(rec.); 2409; 2535(rec.); la R. C. del S. 2196 y la R. Conc. del S. 70, son considerados en Votación Final, las que tienen efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Luz Z. Arce Ferrer, Presidenta Accidental.

TOTAL ..... 17

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:

TOTAL ..... 0

VOTOS ABSTENIDOS

Senadores:

Modesto Agosto Alicea, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos Olivera

TOTAL ..... 6

La R. C. del S. 2396(rec.); los P. de la C. 833; 2378; 2998; la R. C. de la C. 3429(rec.), son considerados en Votación Final, las que tienen efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Luz Z. Arce Ferrer, Presidenta Accidental.

TOTAL ..... 17

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:

Modesto Agosto Alicea, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos Olivera

TOTAL ..... 6

VOTOS ABSTENIDOS

TOTAL ..... 0

La concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 2451, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Luz Z. Arce Ferrer, Presidenta Accidental.

TOTAL ..... 16

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:

Modesto Agosto Alicea, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos Olivera

TOTAL ..... 6

VOTOS ABSTENIDOS

Senadores:

Ramón Luis Rivera Cruz.

TOTAL ..... 1

SRA. VICEPRESIDENTA: Aprobadas todas las medidas.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Presidenta, para retornar al turno de Mociones.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud de la señora Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

## MOCIONES

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se forme un quinto Calendario de Ordenes Especiales del Día que incluya las siguientes medidas: Proyecto de la Cámara 1697, Proyecto del Senado 2367, Proyecto del Senado 1898, Resolución Conjunta del Senado 2187, Proyecto de la Cámara 1323, Resolución Conjunta del Senado 2441, Proyecto del Senado 2077.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud de la señora Portavoz para el quinto Calendario de Ordenes Especiales del Día, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Presidenta, una moción adicional a los efectos de formar un sexto Calendario de Ordenes Especiales del Día que contenga los siguientes proyectos: Proyecto del Senado 2592, Proyecto del Senado 2210 y Proyecto del Senado 2254, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Educación y a la de lo Jurídico de tener que informar esta medida. La Comisión de Educación y Cultura; y de lo Jurídico, ambas comisiones, y que se incluyan en este sexto Calendario de Ordenes Especiales del Día con el informe presentado por la Comisión de Banca.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud de la señora Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Presidenta, también para este sexto Calendario, vamos a solicitar que se releven a las comisiones correspondientes a las que fueron referidas de tener que informar el Proyecto de la Cámara 3447, la Resolución Concurrente del Senado 58 y el Proyecto del Senado 1634 que sean relevadas las comisiones de informar, una vez relevadas las comisiones que estas medidas se incluyan en el sexto Calendario de Ordenes Especiales del Día.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud de la señora Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Presidenta, quisiéramos solicitar que se releve a la Comisión de lo Jurídico de tener que informar el Proyecto de la Cámara 3275.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud de la señora Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitaríamos, señora Presidenta, que el Proyecto de la Cámara 3275, con el informe presentado por la Comisión de Salud y Bienestar Social, sea incluido en este sexto Calendario de Ordenes Especiales del Día.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud de la señora Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señora Presidenta, que se releve a la comisiones correspondientes a las que se refirió para informe el Proyecto de la Cámara 3009, Proyecto de la Cámara 3419, que se releve de la Comisión del Trabajo y del Asunto del Veterano. La Resolución Conjunta de la Cámara 2521, que se releve de la Comisión de Asuntos Urbanos; y el Proyecto de la Cámara 3013, que se releve a la Comisión de lo Jurídico de tener que informar estas medidas.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud de la señora Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitaríamos, señora Presidenta, que las medidas antes referidas sean incluidas en el sexto Calendario de Ordenes Especiales del Día.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud de la señora Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señora Presidenta, que se forme un Calendario de Lectura de todas las medidas que han sido incluidas en el quinto y sexto Calendario de Ordenes Especiales del Día.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud de la señora Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señora Presidenta, que una vez finalizado el Calendario de Lectura, el Senado recese por quince (15) minutos.

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud de la señora Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

## CALENDARIO DE LECTURA

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1697, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, con enmiendas; y un informe de las Comisiones de lo Jurídico; y de Seguridad Pública, suscribiéndose al mismo.

## "LEY

Para enmendar el Artículo 7-03 del Capítulo VII de la Ley Núm. 54 de 30 de mayo de 1973, según enmendada, conocida como "Ley de Administración, Conservación y Policía de las Carreteras Estatales de Puerto Rico", a fin de requerir a todo jinete que transite por las carreteras que lleve en su vestimenta o en la indumentaria, montura del caballo, un elemento distintivo de seguridad para brindar protección a éste, al jinete, a su ejemplar y a los conductores; y para imponer penalidades.

## EXPOSICION DE MOTIVOS

En nuestro ordenamiento legal, existen dos leyes relacionadas a la monta de caballos en las carreteras y autopistas: la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y la Ley Núm. 54 de 30 de mayo de 1973, según enmendada, conocida como "Ley de Administración, Conservación y Policía de las Carreteras Estatales de Puerto Rico".

La Sección 14-106 de la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según enmendada, establece limitaciones al uso de las autopistas. Específicamente, el inciso (5) de dicha Sección, dispone que jinetes montando a caballos y/o bestias no podrán transitar por las autopistas de peaje.

Por otro lado, el Artículo 7-03 de la Ley Núm. 54 de 30 de mayo de 1973, según enmendada, expresa que en las carreteras que se permite el uso de vehículos movidos por fuerza animal, éstos no podrán transitar al galope ni apareados con otros vehículos similares o con personas a pié.

Esta Ley, a pesar de prohibir el galope de los caballos en las carreteras, no impide que éstos se utilicen para transportarse por las mismas. En muchas ocasiones, jinetes que transitan por las vías públicas no cuentan con distintivos de seguridad para protegerse a sí mismos y a sus animales ni para alertar a los conductores que se acercan.

Esta medida establece un mecanismo de protección, consistente en un distintivo de seguridad a ser llevado por los jinetes en su vestimenta o en la indumentaria montura de sus ejemplares caballos, para la mayor protección de éstos y sus caballos, así como para los conductores que puedan verse afectados al toparse con ellos en las vías públicas de nuestro país.

## DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 7-03 del Capítulo VII de la Ley Núm. 54 de 30 de mayo de 1973, según enmendada, para que se lea como sigue:

"CAPITULO VII

**Animales en las Carreteras**

Artículo 7-01.- . . .

Artículo 7-03.-

En las carreteras en las que se permite el uso de vehículos movidos por fuerza animal, éstos no podrán transitar al galope ni apareados con otros vehículos similares o con personas a pié.

Todo jinete que transite por las carreteras deberá llevar, en su vestimenta o en la indumentaria montura del caballo, algún elemento distintivo de seguridad, que dispondrá el Secretario mediante reglamento, que sirva de protección tanto al jinete como al ejemplar, así como a los conductores.

No se podrá llevar por la carretera más de tres (3) reses o caballos de frente y ninguna persona podrá llevar más de nueve (9) animales a su cuidado.

Al cruzar la carretera para conducir ganado o animales de una finca a otra, deberá darse aviso al tránsito con una bandera roja antes de pasar los animales y mantener vigilancia en ambos lados hasta que hayan cruzado todos los animales.

Si la cantidad de animales a cruzar es mucha, deberá interrumpirse el cruce cada cinco (5) minutos para dar paso a los vehículos, debiéndose hacer todas las señales necesarias para informar a los conductores sobre el particular. El paso a lo largo de la carretera no será de más de cien (100) metros y el dueño de los animales será responsable de los daños que puedan causarse a los paseos y cunetas.

Las personas que trasladen animales por la carretera y los dueños que a sabiendas lo permitan en contravención a lo dispuesto en este artículo, o los jinetes que no utilicen en su vestimenta o en la indumentaria montura del caballo algún elemento distintivo de seguridad según dispuesto por el Secretario mediante reglamentación a tal efecto, incurrirán en delito menos grave y convictos que fueren serán castigados con multa no menor diez (10) cincuenta (50) dólares ni mayor de cien (100) dólares."

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir a partir de los treinta (30) noventa (90) días luego de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura tiene a bien rendir su informe sobre el P. de la C. 1697, recomendando su aprobación con las siguientes enmiendas:

**En el Texto Decretativo:**

Pagina 3, Sección 1, línea 16, Eliminar "diez (10)" y sustituirlo por "de"

**ANALISIS DE LA MEDIDA**

El P. de la C. 1697 tiene el propósito de enmendar el Artículo 7-03 del Capitulo VII de la Ley Núm. 54 de 30 de mayo de 1973, según enmendada, conocida como "Ley de Administración, Conservación y Policía de las Carreteras Estatales de Puerto Rico", a fin de requerir a todo jinete que transite por las carreteras que lleve en su vestimenta o en la indumentaria o montura del caballo, un elemento distintivo de seguridad, para brindar protección a este, al jinete y a los conductores e imponer penalidades.

La Comisión contó con los comentarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas y de la Policía de Puerto Rico. Ambas agencias recomiendan favorablemente la aprobación de la medida ya que contribuye a la seguridad en las carreteras y cubre un área que hasta el presente no se había considerado.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura recomienda la aprobación del P. de la C. 1697 con la enmienda antes mencionada.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Ramón L. Rivera, Hijo
Presidente
Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2367, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Informes Gubernamentales y Profesiones Reglamentadas, con enmiendas.

**"LEY**

Para adicionar un Artículo 13-A a la Ley Núm. 52 de 23 de febrero de 2000, a fin de reconocer expresamente la continuidad en el ejercicio de la Técnica de Emergencia Médica en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a toda persona autorizada bajo la Ley Núm. 46 de 30 de mayo de 1972 y facultar, al Secretario de Salud o su representante autorizado, a la expedición de las licencias correspondientes.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

Mediante la Ley Núm. 52 aprobada el 23 de febrero de 2000, con vigencia inmediata, se reglamenta el ejercicio de la Técnica de Emergencia Médica en Puerto Rico. Además se disponen las facultades del Secretario de Salud respecto al asunto. También se fijan los requisitos para los aspirantes a licencia de Técnico de Emergencias Médicas Básico (T.E.M.-B) y de Técnico de Emergencias Médicas Paramédico (T.E.M.-P). Asimismo, se establecen delitos y penalidades por la práctica de la Técnica de Emergencia Médica-Paramédico o Básico, sin poseer la licencia correspondiente.

Expresamente, en el Artículo 16 de la citada Ley Núm. 52 de 2000 fue derogada la Ley Núm. 46 de 30 de mayo de 1972. Esta reglamentaba el ejercicio de la Técnica de Emergencia Médica en Puerto Rico.

Se observa que la citada Ley Núm. 52, con vigencia desde el 23 de febrero de 2000, de forma expresa no dispone lo referente a la continuación del ejercicio de la Técnica de Emergencia Médica, por personas previamente autorizadas a tal fin en virtud de la Ley Núm. 46 de 30 de mayo de 1972 derogada.

La Asamblea Legislativa entiende y así surge de la interpretación integral de la citada Ley Núm. 52 de 2000 que su intención es proveer para el ofrecimiento y la continuidad de los servicios de técnicos de emergencias médicas, sin provocar crisis ni exclusión de personas preparadas y con experiencia que brindaron tales servicios con eficiencia bajo la autorización correspondiente, en virtud de la derogada Ley Núm. 46 de 1972, citada.

Con el propósito de disipar las reservas e incertidumbre, así como efectos económicos adversos que ha generado la aprobación de la Ley Núm. 52 de 2000 entre Técnicos de Emergencias Médicas de experiencia, autorizados bajo la Ley Núm. 46 de 30 de mayo de 1972, se aprueba la presente Ley. Esta enmienda la Ley Núm. 52 de referencia, para expresamente reconocer que las personas autorizadas a tenor con la Ley Núm. 46 de 30 de mayo de 1972, a ejercer la Técnica de Emergencia Médica, continuarán en su práctica mediante licencia conferida por el Secretario de Salud o su representante autorizado, sin necesidad de examen.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.- Se adiciona un Artículo 13-A a la Ley Núm. 52 de 23 de febrero de 2000, para que se lea como sigue:

"Artículo 13-A.-

(A) Toda persona que, a la fecha de vigencia de la Ley Núm. 52 de 23 de febrero de 2000, poseía una licencia para ejercer como Técnico de Emergencia Médica en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en virtud de la Ley Núm. 46 de 30 de mayo de 1972, será reconocida como persona autorizada legalmente para ejercer como Técnico de Emergencias Médicas-Paramédico o Técnico de Emergencias Médicas-Básico.

(B) El Secretario de Salud o su representante autorizado expedirá, sin necesidad de examen, licencia para ejercer como Técnico de Emergencias Médicas-Paramédico o Técnico de Emergencias Médicas-Básico a toda persona que al 23 de febrero de 2000 poseía un certificado, diploma o licencia que le acreditaba como Técnico de Emergencia Médica bajo la Ley Núm. 46 de 30 de mayo de 1972. La persona deberá presentar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la aprobación de la presente Ley enmendadora, evidencia de haber aprobado y terminado estudios en una institución educativa acreditada en su momento para ofrecer los cursos correspondientes, así como documentación que acredite su práctica y experiencia en la Técnica de Emergencia Médica".

Sección 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión Sobre Informes Gubernamentales y Profesiones Reglamentadas, previo estudio y consideración del P. del S. 2367, tiene a bien recomendar a este honorable cuerpo legislativo, su aprobación con las siguientes enmiendas:

**En El Texto Decretativo:**

Luego de "un" eliminar "Artículo 13-A a", e insertar "Artículo 8-A al Artículo A."

Pag. 2, línea 3 a línea 9: Eliminar el siguiente texto:
"Artículo 13-A. -
(A) Toda persona que, a la fecha de vigencia de la Ley Núm. 52 de 23 de febrero de 2000, poseía una licencia para ejercer como Técnico de Emergencia Médica en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en virtud de la Ley

Núm. 46 de 30 de mayo de 1972, será reconocida como persona autorizada legalmente para ejercer como Técnico de Emergencias Médicas-Paramédicos o Técnico de Emergencias Médicas-Básico."

Y sustituir por el siguiente texto:

"Sección 1.- Se adiciona un Artículo 8-A al Artículo A de la ley Núm. 52 de 23 de febrero de 2000, para que sea como sigue:

"Artículo 8-A Derechos adquiridos en virtud de la ley Núm. 46 de 30 de mayo de 1972.

1- Los Técnicos de Emergencias Médicas Básico (TEM-B) o de similar naturaleza y complejidad que a la fecha de vigencia de la ley Núm. 52 de 23 de febrero de 2000, poseían licencia en virtud de la ley Núm. 46 de 30 mayo de 1972, deberán cumplir con los requisitos 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del Artículo 8 de esta ley para obtener la licencia correspondiente.

2- Se le concede el periodo de un (1) año a partir de la fecha de vigencia de la ley núm. 52 de 23 de febrero de 2000, para cumplir con los requisitos que se mencionan en el inciso 1 de este Artículo.

3- Si los cursos pertinentes no pudiesen ser programados para que culminen durante el transcurso del año de gracia o si existiesen razones de enfermedad o de tal naturaleza que impidan que el peticionario cumpla con el periodo de tiempo aquí prescrito, el Secretario de Salud o su representante autorizado, mediante petición escrita, podrá conceder extensiones razonables."

Pag. 3, línea 1 a línea 10:

Eliminar el siguiente texto:

"(B) El Secretario de Salud o su representante autorizado expedirá, sin necesidad de examen, licencia para ejercer como Técnico de Emergencias Médicas-Paramédico o Técnico de Emergencias Médicas-Básico a toda persona que al 23 de febrero de 2000 poseía un certificado, diploma o licencia que le acreditaba como Técnico de Emergencia Médica bajo la Ley Núm. 46 de 30 de mayo de 1972. La persona deberá presentar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la aprobación de la presente Ley enmendadora, evidencia de haber aprobado y terminado estudios en una isntitución educativa acreditada en su momento para ofrecer los cursos correspondientes, así como documentación que acredite su práctica y experiencia en la Técnica de Emergencia Médica."

Y sustituir por el siguiente texto:

"Sección 2.- Se adiciona un Artículo 9-A al Artículo 9 de la Ley Núm 52 de 23 de febrero de 2000, para que se lea como sigue:

Artículo 9-A Derechos adquiridos en virtud de la Ley Núm. 46 de 30 de mayo de 1972.

1- Los Técnicos de Emergencias Médicas- Paramédico (TEM-P) o de similar naturaleza y complejidad que a la fecha de vigencia de la ley Núm. 52 de 23 de febrero de 2000, poseían licencia en virtud de la ley Núm. 46 de 30 de mayo de 1972, deberán cumplir con los requisitos 1, 2, 3, 4, 6, y 7 del Artículo 9 de esta ley para obtener la licencia correspondiente.

Se aplicarán , además, los incisos 2 y 3 del Artículo 8-A de esta Ley."

Pag. 3, línea 11: Después de "Sección", se elimina "2.-", y se sustituye por "3-."

**En el Titulo:**

Pág. 1, línea 1: Después de "un", eliminar "Artículo 13-A a" y sustituir por "Artículo 8-A al Artículo A y un Artículo 9-A al Artículo 9 de".

Pag. 1, línea 4: Después de "1972", eliminar "y facultar, al Secretario de Salud o su representante autorizado, a la expedición de las licencias correspondientes" y adicionar un punto (.).

El propósito del P. del S. 2367 es reconocerle y garantizarle el derecho a continuar ejerciendo como Técnicos de Emergencias Médicas, a aquellas personas que ostentaban licencias para ejercer como tales, en virtud de la ley Núm. 46 de 30 de mayo de 1972, la cual luego fue derogada por la ley núm. 52 de 23 de febrero de 2000. No obstante, esta última legislación no dispuso para la continuidad en la profesión de aquellos Técnicos de Emergencias Médicas que ya habían sido licenciados mediante la legislación anterior, sin habérseles requerido la aprobación de exámenes.

El P. del S. 2367, propende corregir esa deficiencia eximiendo de exámenes al grupo de Técnicos directamente afectados, aunque no los exime de los estudios necesarios para mantenerse debidamente adiestrados en las técnicas esenciales de su profesión.

## GESTIONES INVESTIGATIVAS REALIZADAS

A fin de cumplir cabalmente con nuestra responsabilidad investigativa, vuestra Comisión ha tenido a bien realizar las siguientes gestiones:

## VISTA PUBLICA

Fecha: 12 de mayo de 2000

**DEPONENTES:**

1- Hon. Carmen Feliciano de Melecio
Secretaria - Departamento de Salud
Representada por:
Sr. Benjamín Rodríguez
Director Servicios Médicos
Centro Médico de Puerto Rico

2- Sr. Heriberto Saurí
Director Ejecutivo, Cuerpo de Emergencias Médicas
(No asistió, no envio representación, ni memorial explicativo)

3- Sr. José M. Rodríguez Báez
Presidente
Unión Nacional de Trabajadores de la Salud
(Asistió conjuntamente con otros miembros del grupo afectado)

4- Sr. Pablo Martínez
Portavoz, Técnicos de Emergencias Médicas

5- Col. José Rosa Carrasquillo, Jefe
Cuerpo de Bomberos
(compareció por escrito)

6- Lcdo. Angel Rotger Sabat
Secretario, Departamento de Justicia
Representado por: Lcda. Joselyn Ramírez
En adición, se investigó y analizó la legislación aplicable.

## DATOS LEGALES PERTINENTES

El Artículo 4 de la ley Núm. 46 de 30 de mayo de 1972, establecía los requisitos necesarios que debía cumplir toda persona que deseara obtener una licencia para dedicarse a la práctica de Técnico de Emergencia Médica.

Estos requisitos eran los siguientes.

"(a) Que es mayor de 18 años de edad.

(b) Que goza de buena reputación moral.

(c) Que ha aprobado un curso de técnico de emergencia [médica] preparado por el Departamento de Salud y/o el Departamento de Instrucción Pública.

(d) Que ha aprobado el examen sobre las materias relacionadas con dicha técnica que el Secretario determine por reglamento.

(e) Que posee un diploma acreditativo de haber aprobado el cuarto año de escuela superior o su equivalente.

(f) Que posee una licencia para conducir vehículos de motor."

En adición, el Artículo 3 de la mencionada ley señalaba que:

" Se autoriza al Secretario de Salud a expedir licencia sin examen de técnico de emergencia [médica], a toda persona que radique una solicitud de licencia dentro de los primeros seis (6) meses a partir

de la fecha en que entre en vigor esta ley y que evidencien que reúnen todos los demás requisitos establecidos en este Capítulo."

Es decir que ya la ley 46, supra, proveía para que los Técnicos que ejercián como tales previo a la aprobación de la mencionada ley tuviesen el beneficio de esta cláusula de antiguedad eximiéndolos de examen.

Luego de la fecha de vigencia de la Ley 46, supra, ya se hacía necesario que los nuevos aspirantes se acogiéran a lo dispuesto en el Artículo 4, que ya hemos citado.

Al aprobarse la ley Núm. 52 de 23 de febrero de 2000 que se cita como "Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Técnica de Emergencias Médicas en Puerto Rico." se establece claramente la distinción entre Técnico de Emergencias Médicas - Paramédico (T.E.M.-P) y Técnico de Emergencias Médicas - Básico, (T.E.M.-B) que no estaban definidos en la ley Núm. 46 de 30 de mayo de 1972.

La ley Núm. 52, supra, incorpora además, ciertos criterios contenidos en el Reglamento Núm. 5422 de 6 de mayo de 1996, conocido como "Reglamento para el ejercicio de la Técnica de Emergencias Médicas." Este Reglamento contiene disposiciones más claras sobre asuntos contenidos en la Ley 46, supra, respecto a exámenes de reválida, requisitos educativos y de otra naturaleza conducentes a la otorgación de la licencia.

Los Técnicos de Emergencias Médicas que ejercían como tales previo a la aprovación de la ley Núm. 52, supra, ya poseían una licencia bajo los criterios establecidos en la ley Núm. 46, supra, y los declarados en el mencionado Reglamento Núm. 5422. Es decir que, ya los técnicos tenían unos derecho protegidos bajo el antiguo estado de derecho que los amparaba.

Cabe señalar que el Black's Law Dictionary Deluxe, Edición Séptima de 1999, define lo que es "Grandfather Clause" o cláusula de antiguedad como la cláusula estatutaria o reglamentaria que exime a una clase de personas o transacciones debido a circunstacias existentes previo a la efectividad o urgencia del nuevo estatuto o reglamentación (traducción nuestra).

En nuestro ordenamiento jurídico y en ánimo de proteger a aquellas personas que tenían ciertos derechos adquiridos y que mediante una nueva disposición estatutaria o reglamentaria se ven adversamente afectados, siempre se incluye una disposición protectora para subsanar el posible menoscabo de los mencionados derechos.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En conclusión todos los deponentes estuvieron de acuerdo con el principio de eximir a los Técnicos de Emergencias Médicas Básico (T.E.M.-B) y Técnicos de Emergencias Médicas Paramédico (T.E.M.-P) de examen de reválida, siempre y cuando ya hubiesen obtenido su licencia mediante la ley Núm. 46 de 30 de mayo de 1972. Esto, debido a que existen muchos profesionales ya licenciados en estas materias que son excelentes en el desempeño de sus funciones, por estar debidamente adiestrados y que en la actualidad no puede prescindirse de sus servicios durante el periodo preparatorio para reválidar a fin de que puedan continuar ejerciendo como Técnicos de Emergencias.

La pieza legislativa viene a corregir una deficiencia que no fue subsanada en la ley Núm. 52 de 23 de febrero de 2000, y que entendemos hace justicia al grupo de profesionales que de momento quedaron desprovistos de derechos que ya le habían sido concedidos mediante la ley Núm. 46, supra. No obstante, entendemos que por la naturaleza tan delicada de la profesión de Técnico de Emergencias Médicas, mediante la cual se esta en continuo contacto con personas en estado de salud crítico, cuya atención urgente amerita el desempeño de conocimientos y destrezas avanzadas en primeros auxilios, hemos creído indispensable que los técnicos cumplan con todos los demás requisitos de educación y renovación de licencias dispuestos en la ley Núm. 52 de 23 de febrero de 2000.

Por todo cuanto antecede, vuestra Comisión Sobre Informes Gubernamentales y Profesiones Reglamentadas recomienda la aprobación del P. del s. 2367 con las enmiendas que hemos tenido a bien detallar.

Respetuosamente Sometido,

(Fdo.)
Orlando Parga Figueroa
Presidente
Comisión sobre Informes Gubernamentales
y Profesiones Reglamentadas"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1898, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Salud y Bienestar Social; y de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas.

**"LEY**

Para crear la "Ley para regular los turnos de trabajo de los médicos internos y residentes en las instituciones hospitalarias de Puerto Rico"; establecer sus propósitos y funcionamiento.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La práctica de la profesión médica en Puerto Rico siempre se ha caracterizado por una de altura, entrega, sacrificio y verdadero interés por los pacientes y sus familiares. Desde muy temprano los jóvenes estudiantes de medicina aprenden estos importantes valores. Ninguna carrera es fácil de por sí, pero la profesión médica requiere que los estudiantes que se encuentran en programas de internado o residencia dediquen gran parte de su vida, por el conocimiento y el deber delegado, aún a costa de sus propias familias y sus vidas privadas. Actualmente, los programas diseñados para los internos y residentes pasan por alto que el cansancio, la fatiga y el poco tiempo libre pueden socavar las capacidades de los médicos en entrenamiento o residencia, cuando se les exponen a programas de trabajo agotadores y de muchas horas continuas de labor.

Esta Ley pretende ofrecer un balance que facilite a las instituciones hospitalarias poder contar con los servicios de tales internos y residentes, sin que la calidad de los servicios que reciben los pacientes se afecten por la extenuada tarea asignada. Al establecer un máximo de horas continuas de trabajo se intenta que el descanso bien ganado, permita a los internos y residentes completar exitosamente todas y cada una de las etapas que el programa requiere, y a su vez, mantener la dignidad de sus propias vidas en el disfrute de su tiempo libre conforme mejor lo entienda.

**RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:**

Artículo 1. - Esta Ley se conocerá como "Ley para regular los turnos de trabajo de los médicos internos y residentes en las instituciones hospitalarias de Puerto Rico".-

Artículo 2.- Definiciones.-

Los siguientes términos y frases, según se usen en esta Ley, tendrán el significado que a continuación se expresa, salvo cuando el contexto indique claramente otro significado.

(a) "Departamento", significa el Departamento de Salud.

(b) "Interno", significa una persona que obtenga una licencia provisional del Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico en virtud de lo dispuesto en la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931, según enmendada, y la reglamentación adoptada en virtud de la misma y que se desempeñe en un Programa de Internado en alguna institución hospitalaria de Puerto Rico.

(c) "Institución Hospitalaria", significa cualquier facilidad de salud, según definida por la Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según enmendada, que cuente con un programa de internado o residencia debidamente acreditado y aprobado.

(d) "Residente", significa una persona que obtenga una licencia provisional del Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico en virtud de lo dispuesto en la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931, según enmendada, y la reglamentación adoptada en virtud de la misma y que se desempeñe en un programa de residencia en alguna institución hospitalaria de Puerto Rico.

(e) "Secretario", significa el Secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico.

Artículo 2- Prohibición.-

Se prohíbe que en cualquier institución hospitalaria, pública o privada en Puerto Rico, se establezcan programas de internado o residencia donde se requieran turnos de trabajo a los médicos internos o residentes, que excedan las veinticuatro (24) horas de trabajo continuo e ininterrumpido.

Artículo 3.-Requisitos.-

A fin de que las condiciones y horario de trabajo de los médicos internos y residentes promuevan la calidad de los servicios médicos, toda institución hospitalaria deberá establecer los siguientes límites en el horario de trabajo de tales médicos:

(a) En instituciones hospitalarias con más de quince (15) mil visitas no programadas a la sala de emergencia por año, la asignación de un médico interno o residente se limitará a no más de doce (12) horas activas en servicios de sala de emergencia. El Secretario podrá aprobar planes de trabajo alternos limitados a quince (15) horas para residentes en servicios de sala de emergencia, siempre que:

(1) el plan de trabajo alterno contribuya a que la institución hospitalaria satisfaga las necesidades de la comunidad para tales servicios de emergencia,

(2) el volumen de pacientes examinados y tratados durante el período extendido es sustancialmente menor que en otro horario del día; y

(3) se provea tiempo adecuado de descanso entre el período asignado y durante cada semana para prevenir la fatiga del médico.

(b) Los programas de entrenamiento con responsabilidad de cuidado de paciente deberán cumplir con los siguientes criterios:

(1) el programa de trabajo semanal no excederá un promedio de ochenta (80) horas a la semana para un período de cuatro (4) semanas;

(2) el médico interno o residente no trabajará por más de veinticuatro (24) horas consecutivas en cualquier programa;

(3) en aquellos departamentos, excepto los departamentos de anestesiología, medicina de familia, cirugía, obstetricia, pediatría u otros servicios, que no cuentan con un gran volumen de pacientes agudamente enfermos y que las llamadas nocturnas son poco frecuentes y el período de descanso del médico interno o residente es adecuado, el Director del programa podrá desarrollar un programa de trabajo, distinto al establecido en el inciso (b) (1) de este Artículo; y

(4) las responsabilidades de guardia en una institución hospitalaria durante el período nocturno de cambio de dicha guardia para un residente en cirugía no se entenderán

se incluyen en los límites de horas establecidos en los incisos (b) (1) y (b) (2) de este Artículo, si:

(i) la institución hospitalaria puede documentar que durante el período nocturno de cambio de guardia, el médico residente se encuentra generalmente descansado y que las interrupciones para el cuidado de pacientes son infrecuentes y limitada solamente a los pacientes bajo el cuidado del residente;

(ii) tales responsabilidades están programadas para cada residente por no más de cada tres (3) noches;

(iii) la designación continua que incluya continuar la guardia durante el cambio nocturno, deberá seguirse de un período de no trabajo no menor de dieciséis (16) horas; y

(iv) procedimientos y reglamentación son establecidos e implementados para relevar inmediatamente a un residente o interno de un programa continuo, cuando se observe una fatiga debido a un período de guardia activa inusual.

(c) El Director del programa de internado o residencia de una institución hospitalaria deberá desarrollar e implementar políticas relacionadas a los médicos internos o residentes, que establezcan límites a la responsabilidad asignada a tales médicos, incluyendo, pero sin limitarse a: la asignación de nuevos pacientes y la duración de su guardia diaria.

(d) Al determinar el límite de horas a trabajar para un médico interno o residente, según se establecen en los incisos (a) y (b) de este Artículo, el Director del programa deberá requerir que el programa de guardias esté separado por no menos de ocho (8) horas sin trabajo. Se establecerá por lo menos un período sin trabajo de veinticuatro (24) horas por semana.

(e) Toda institución hospitalaria que emplee un interno o residente deberá adoptar e implementar políticas específicas que regulen el empleo dual de los mismos. Tales reglas deberán requerir como mínimo, que cada interno o residente notifique a la institución hospitalaria de cualquier empleo distinto al que desempeña en el hospital y el horario dedicado a dicho trabajo. Todo interno o residente que hubiere trabajado el máximo de horas establecidas en esta Ley, le estará prohibido trabajar horas adicionales y de proveer servicios de cuidado de salud a los pacientes.

Artículo 4.- Reglamento.-

El Secretario promulgará y adoptará los reglamentos que sean necesarios y convenientes para cumplir con los propósitos de esta Ley.

Artículo 5.- Cláusula de Separabilidad.-

Si cualquier sección o parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional por un Tribunal competente, la misma no invalidará todas las demás cláusulas y disposiciones de esta Ley, la cual conservará todo su vigor.

Artículo 6.- Vigencia.-

Esta Ley comenzará a regir el 1 de julio del 2000."

**"INFORME CONJUNTO**

**AL SENADO DE PUERTO RICO:**

Las Comisiones de Salud y Bienestar Social y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 1898 recomienda la aprobación de la medida con las siguientes enmiendas:

**En el Decretase:**

| | |
|---|---|
| Página 2, línea 15; | eliminar "provisional". |
| Página 2, línea 5; | luego de "pacientes" añadir "excepto en situaciones de emergencia, según dispone el Departamento de Salud mediante reglamentación". |
| Página 4, línea 8; | luego de "Ley" añadir "y para establecer los procedimientos de revisión de cualquiera determinación, de acuerdo a la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". |
| Página 4, línea 14; | eliminar "2000" y sustituir por "2001". |

## ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 1898 tiene el propósito de crear la "Ley para regular los turnos de trabajo de los médicos internos y residentes en las instituciones hospitalarias de Puerto Rico"; establecer sus propósitos y funcionamiento.

La Exposición de Motivos de esta medida expone que la práctica de la profesión médica se ha caracterizado por una altura, entrega, sacrificio y verdadero interés por los pacientes y sus familiares. Actualmente, los programas diseñados para los internos y residentes pasan por alto que el cansancio, la fatiga y el poco tiempo libre pueden socavar las capacidades de los médicos en entrenamiento y residencia, cuando se les exponen a programas de trabajo agotadores y de muchas horas continuas de labor.

Prosigue la Exposición de Motivos señalando que el P. del S. 1898 ofrece un balance para facilitar a las instituciones hospitalarias el poder contar con los servicios de internos y residentes, sin que la calidad de los servicios que reciben los pacientes se afecten por la extenuante tarea asignada. El establecimiento de un máximo de horas continuas de trabajo intenta que el descanso bien ganado, permita a los internos y residentes completar exitosamente todas y cada una de las etapas que el programa requiere y mantener la dignidad de sus propias vidas en el disfrute de su tiempo libre conforme mejor lo entienda.

Las Comisiones procedieron a solicitar memoriales explicativos a: Departamento de Salud, Departamento de Justicia, Colegio de Médicos Cirujanos, Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Asociación Médica de Puerto Rico, Tribunal Examinador de Médicos, Asociación de Hospitales, Escuela de Medicina de Ponce y la Escuela de Medicina San Juan Bautista, entre otras.

Para la evaluación de la medida recibimos las ponencias del Departamento de Justicia, Escuela de Medicina San Juan Bautista, Departamento de Salud y el Recinto de Ciencias Médicas, entre otras.

## OPINION DE LAS AGENCIAS E INSTITUCIONES

El Departamento de Justicia no encuentra objeción legal ni constitucional al P. del S. 1898. Sin embargo, recomendó se añadiera una claúsula estableciendo que cualquier determinación será revisable de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. 2101, y se consulte al Departamento de Salud, las facultades de las escuelas de medicina de Puerto Rico, así como a las distintas agrupaciones de médicos de Puerto Rico.

La Escuela de Medicina San Juan Bautista endosó la medida. No obstante, llamaron la atención sobre situaciones en que el residente pudiera, por excepción, exceder las 24 horas de trabajo continuo e ininterrumpido. Como ejemplo señalaron las ocasiones en que la guardia de un domingo comenzando a las 8:00 de la mañana se une al horario regular de trabajo del lunes hasta las 5:00 de la tarde. Además,

indicaron que existen circunstancias en que, por la necesidad de atención al paciente en la continuidad de su cuidado, pudiera extenderse a la guardia un número mayor de horas.

Por su parte, el Departamento de Salud indicó que en Puerto Rico todos los Programas de Internados y Residencias para poder ser acreditados, tienen que cumplir con la reglamentación de ACGME ("American Council for Medical Graduate Education"), la cual regula el horario de trabajo de los residentes. Dicha reglamentación establece que los residentes no deben tener guardias más frecuentes que cada tres noches y que disfruten de un período de por lo menos 24 horas consecutivas sin trabajo por semana. El Departamento entiende que por estar ya regulados por ACGME, no es necesaria la reglamentación estatal.

Sin embargo, les preocupa la implementación de la norma que establece que el residente no trabajará por más de 24 horas consecutivas en cualquier programa. Cuando los programas de residencia son pequeños (de 4 a 6 residentes por nivel de entrenamiento) y preparar estos programas de trabajo para que los mismos cumplan con este requisito impide o dificulta grandemente que se pueda cumplir con todos los requisitos educativos que establece la ACGME. Entienden que se dificultará además:

- Garantizar la continuidad en el cuidado de pacientes. La experiencia que se le debe asegurar a cada cliente.
- Preparar un programa didáctico en el que puedan participar todos los residentes.
- Organizar y mantener clínicas de continuidad para los residentes.
- Garantizar unos Bloques de Especialidad para los residentes.
- Garantizar supervisión adecuada por facultad.

El Departamento de Salud entiende además, que sería necesario para la implantación de la medida cambiar la definición de "Residente" para que diga "licencia" y no "licencia provisional" ya que un residente puede tener licencia permanente para poder ejercer.

También recomiendan que la medida debe incluir una claúsula en donde se establezca que la ley no aplicará en caso de emergencia local o nacional (como ejemplo: terremotos, huracanes, guerra, desastres naturales, etc.).

El Consejo de Internos y Residentes siempre ha apoyado la creación de una ley que asegure el descanso apropiado y adecuado de los internos y residentes. Entienden que con esta Ley se mantiene la dignidad laboral de los médicos internos y residentes y se asegura que el servicio que se brinda a nuestro pueblo de Puerto Rico no se afecte por la fatiga física y mental.

Señala el Consejo que a pesar de que elACGME es el organismo regulador y acreditador de de las residencias a nivel de Puerto Rico y Estados Unidos de América; y dispone sobre el horario de jornada laboral y guardia; en varias ocasiones los programas de residencia han hecho lo contrario. Esta Ley ayudaría a evitar esta situación y daría más peso a la disposición del ACGME.

El Rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, nos refirió su ponencia con los siguientes señalamientos de importancia para esta Comisión:

1. No están de acuerdo con que los programas de entrenamiento no atienden el factor fatiga, cansancio y horario de trabajo. Cada organismo que regula las diferentes residencias define cual debe ser el ambiente de trabajo. Regulan la frecuencia de las guardias "in house" (físicamente presente en el hospital) permitida.

   Sobre el particular añaden que las normas prevalecientes exigen un día de cada siete, libre de toda responsabilidad. Definen la situación de horas trabajadas vs. el manejo del paciente. De este modo se asegura la continuidad en el mejor tratamiento al paciente frente a su derecho a recibir tratamiento por un médico capacitado y alerta.
2. La política que regula la acreditación de especialidades para residentes e internos se establece por las Juntas Acreditadoras correspondientes. Por tal motivo, cualquier cambio que se realice en horas de entrenamiento, turnos y rotaciones por diferentes programas de educación clínica y

servicio, conferencias, experiencias de laboratorio y procesos de acreditación, podría poner a los programas en riesgo de perder sus acreditaciones a nivel nacional y por ende afectar la eligibilidad de tomar los "Boards" de las especialidades.

Señalan que en Alemania se ha limitado las horas de trabajo de los residentes. A consecuencia de esto el entrenamiento se ha alargado a siete o más años para los programas de entrenamiento de cirugía (actualmente el entrenamiento es de 5 años). De igual forma sucede en obstetricia y ginecología entre otras especialidades.

3. Se debe reconocer que los internos y residentes no son empleados, sino estudiantes graduados que reciben estipendios. Por tal motivo, las leyes laborales no pueden gobernar sus actividades de entrenamiento en procesos educativos y en sus requisitos de formación profesional.

Destaca la ponencia del Recinto de Ciencias Médicas que un estudio de la Sociedad de Directores de Programas de Cirugía, concluyó que disminuye el estrés a los residentes proveerles la infraestructura del personal necesario (enfermeras, secretarias, "wards", escoltas, etc.) las 24 horas, los 7 días de la semana. Por falta de este personal los residentes tienen que llevar a cabo estas funciones, las cuales no son inherentes a su proceso de formación educativa.

**CONCLUSION**

Según se desprende del análisis de la información presentada los Programas de Internados y Residentes tienen que cumplir con la reglamentación de la "American Council for medical Graduate Education" (ACGME), la cual regula el horario de trabajo de los residentes, para poder ser acreditados. El aprobar esta regulación requiere que esté de acuerdo con los requerimientos de la ACGME para que no se dificulte la acreditación de los Programas por este organismo a nivel nacional y por ende afectar la eligibilidad de tomar los "Boards" de las especialidades.

La ACGME regula el horario de trabajo de los residentes. Dicha reglamentación establece que los residentes no deben tener guardias más frecuentes que cada tres noches, y que disfruten de un período de por lo menos 24 horas consecutivas sin trabajo por semana.

Por todo lo antes expuesto sobre el P. del S. 1898, las Comisiones de Salud y Bienestar Social y de Gobierno y Asuntos Federales recomienda la aprobación de la medida con las enmiendas requeridas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Norma Carranza De León, M.D.
Presidenta
Comisión de Salud y Bienestar Social

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2187, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Salud y Bienestar Social; de Educación y Cultura; y de lo Jurídico, con enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para ordenar a la Administración de Rehabilitación Vocacional a mantener abiertas y operacionales las oficinas de servicios a estudiantes en los recintos universitarios, públicos y privados y para ordenar

al Secretario de Justicia a no conceder a ningún funcionario o empleado de la Administración de Rehabilitación Vocacional representación legal y otros beneficios de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La Administración de Rehabilitación Vocacional tiene oficina de servicios localizadas en diversos recintos universitarios de Puerto Rico, tanto en instituciones públicas como privadas. Dichas oficinas prestan un valioso servicio a estudiantes con una variada gama de condiciones e impedimentos.

La Administración de Rehabilitación Vocacional ha anunciado el cierre de algunas de estas oficinas, como la del Recinto Universitario de Río Piedras, y la del Recinto Universitario de Mayagüez. Ya la Administración de Rehabilitación Vocacional comunicó oficialmente su decisión de no cerrar la oficina del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, sin embargo resulta necesario prevenir que las oficinas localizadas en otros recintos sean cerradas.

La política pública del Gobierno de Puerto Rico, y del Gobierno Federal, es la de brindar las mayores facilidades posibles a nuestros ciudadanos que tienen condiciones limitantes, para que puedan efectivamente sobreponerse a esos límites y alcanzar todas sus metas.

Con el objeto de desalentar a cualquier funcionario o empleado de la Administración de Rehabilitación Vocacional a tomar acción sobre la operación de las oficinas ubicadas en los diferentes recintos universitarios, tanto públicos como privados, durante el curso del trámite legislativo, se dispone que el Secretario de Justicia no concederá a ningún funcionario o empleado de dicha administración el beneficio de defensa legal y otros beneficios de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, en particular por las Leyes Números 12 de 21 de julio de 1977 y 9 de 26 de noviembre de 1977, en cualquier acción judicial que se pudiera originar al amparo de cualquier ley federal o estatal, relacionada con el cierre de las oficinas de servicios a estudiantes en los recintos universitarios públicos y privados.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.- Se ordena a la Administración de Rehabilitación Vocacional a mantener abiertas y operacionales las oficinas de servicios a estudiantes en los recintos universitarios públicos y privados.

Sección 2.- El Secretario de Justicia no concederá los beneficios de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, a ningún funcionario o empleado de la Administración de Rehabilitación Vocacional con relación a ninguna acción judicial relacionada con el cierre de la oficina de servicios de la Administración de Rehabilitación Vocacional ubicadas en los recintos universitarios, públicos y privados.

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor el mismo día de su aprobación, pero sus efectos se retrotraerán al día antes en que se haya notificado a algún recinto universitario, público o privado, el cierre de alguna oficina de servicios a impedidos de la Administración de Rehabilitación Vocacional ubicada en el recinto concernido."

**"INFORME CONJUNTO**

**AL SENADO DE PUERTO RICO:**

Las Comisiones de Salud y Bienestar Social, de Educación y Cultura y de lo Jurídico, previo análisis de la R.C. del S. 2187 recomiendan su aprobación con las siguientes enmiendas:

**En el Titulo:**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 1; | luego de "Vocacional a" ecribir "restituir,". |
| Página 1, línea 2; | luego de "estudiantes" añadir "con impedimentos". |
| Página 1, líneas 3 a la 5; | luego de "privados" añadir "." y eliminar el resto del contenido. |

**En la Exposicion de Motivos:**

| | |
|---|---|
| Página 2, líneas 1 a la 9; | eliminar todo su contenido y sustituir por:<br>"Para lograr este compromiso es importante que los estudiantes cuenten con los servicios de apoyo necesarios que le permitan desarrollarse efectivamente.<br>Las oficinas de Rehabilitación Vocacional, constituyen el medio que tiene como misión facilitar el acceso de estos servicios a las personas con impedimentos. Por tal razón, la facilidad de acceso a estas oficinas es de vital importancia para esta población.<br>Por estos motivos, la presente medida ordena la restitución, retención de establecimiento de las oficinas de Rehabilitación Vocacional dentro de los recintos universitarios públicos y privados. |

**En el Resuelvase:**

| | |
|---|---|
| Página 2, líneas 4 a la 8; | eliminar todo su contenido. |
| Página 2, línea 9; | eliminar "3" y sustituir por "2". |

## ALCANCE DE LA MEDIDA

La R.C. del S. 2187 tiene el propósito de ordenar a la Administración de Rehabilitación Vocacional a mantener abiertas y operacionales las oficinas de servicios a estudiantes con impedimentos en los recintos universitarios, públicos y privados.

Añade la Exposición de Motivos que la política pública del Gobierno de Puerto Rico, y del Gobierno Federal, es la de brindar las mayores facilidades posibles a nuestros ciudadanos que tienen condiciones limitantes, para que puedan efectivamente sobreponerse a esos límites y alcanzar todas sus metas.

Según se establece en la Exposición de Motivos la Administración de Rehabilitación Vocacional tiene oficina de servicios localizadas en diversos recintos universitarios de Puerto Rico, tanto en instituciones públicas como privadas. Dichas oficinas prestan un valioso servicio a estudiantes con una variada gama de condiciones e impedimentos.

La Administración de Rehabilitación Vocacional ha anunciado el cierre de algunas de estas oficinas, como la del Recinto Universitario de Río Piedras, y la del Recinto Universitario de Mayagüez. Ya la Administración de Rehabilitación Vocacional comunicó oficialmente su decisión de no cerrar la oficina del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, sin embargo resulta necesario prevenir que las oficinas localizadas en otros recintos sean cerradas.

Se recibió también una ponencia de la Pontificia Universidad Católica de Ponce.

## POSICION DE LAS AGENCIAS

Por su parte, el señor Hernán Vazqueztell, Director de la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la UPR, manifestó que en reunión con la Secretaria del Departamento de la Familia, el Administrador de la ARV, los rectores de los Recintos de Río Piedras y Mayagüez y el Presidente de la Universidad de Puerto Rico llegaron a unos acuerdos para la permanencia en los recintos de Río Piedras y Mayagüez de las oficinas del Programa de Rehabilitación Vocacional. No obstante, consignan los problemas que confrontarían los estudiantes con necesidades especiales de trasladarse fuera de los predios del Recinto de Río Piedras y de Mayagüez los Programas de Rehabilitación Vocacional.

El Programa de Rehabilitación Vocacional de los Recintos de Río Piedras y de Mayagüez ofrecen servicios a estudiantes con necesidades especiales, sea físico, emocional o mental que esté afectando su rendimiento académico y su diario vivir. En el Recinto de Río Piedras unos 5,188 estudiantes cualifican como personas con algún impedimento al amparo de la ley federal ADA. De éstos 600 o más participan de los servicios que ofrece el Programa de Rehabilitación Vocacional y alrededor de 330 confrontan problemas de movilidad.

En el Recinto Universitario de Mayagüez hay una población de 475 con necesidades especiales, de los cuales 401 son atendidos en la Oficina de Rehabilitación Vocacional. Los restantes 74 estudiantes son atendidos en la Oficina del Centro Médico de Mayagüez o en las oficinas locales de la agencia gubernamental.

De trasladarse las facilidades existentes fuera de los Recintos se verían afectados los estudiantes participantes, al tomarle más tiempo la obtención de servicios por encontrarse con escollos significativos de acceso (barreras arquitectónicas), perderán clases y los períodos de estudios disminuirían. Las personas que no poseen vehículos de transportación para llegar hasta las oficinas fuera de los Recintos tendrían que utilizar otros medios para llegar y los que poseen vehículos confrontarían problemas de estacionamiento, entre otros.

El servicio brindado hasta ahora a los estudiantes con necesidades especiales se vería afectado por el traslado de la oficina fuera de los Recintos por las siguientes razones:

1. Se afectará la calidad de vida de los estudiantes al no tener acceso razonable a los servicios de rehabilitación.
2. El proceso de integración a la comunidad no se logrará al ritmo deseado o esperado por el estudiante. Su autoestima se verá afectada y por consiguiente su desempeño académico puede verse afectado adversamente.
3. Habrá menos estudiantes voluntarios que presten servicios a estudiantes con necesidades especiales.
4. La cantidad de estudiantes que recibe o pudiera recibir los servicios mermará drásticamente.

   El traslado de la oficina tampoco puede estar basado en el principio de que la rehabilitación de un universitario es llevar a éste a una independencia en su movilidad y desplazamiento dentro de la comunidad, con el propósito de que esta independencia sea una fortaleza al solicitar empleo. Esta fortaleza no puede lograrse si como parte de este proceso se pueden ver afectados los estudios de un gran grupo de estudiantes. Estas dificultades pueden representar no obtener un título académico, o por lo menos, la inversión de más tiempo para conseguir el mismo. La UPR es de la opinión que la obtención de los servicios es parte del proceso de rehabilitación al cual tienen derecho.

La UPR reitera su compromiso de acelerar y mejorar los espacios que actualmente ocupan las oficinas del Programa de Rehabilitación Vocacional para que se continúen ofreciendo los servicios a sus estudiantes en los recintos.

Por su parte y en representación de las universidades privadas, la Universidad Interamericana informó que en su Recinto Metropolitano, se mantuvo por espacio de 8 años abierta y operacional una oficina de servicios de Rehabilitación Vocacional a su población estudiantil, que consta de 10,000 estudiantes de los cuales 700 son estudiantes con limitaciones y 200 eran atendidos por este programa. Los estudiantes con limitaciones se sentían complacidos con este servicio, ya que les facilitaba la movilidad y les evitaba tener que ir a sus respectivos pueblos para solicitar los servicios de Rehabilitación.

Sostienen que el Recinto cumple con todas las especificaciones establecidas por las leyes que regulan la planta física y los servicios y ofrecimientos académicos para los estudiantes con limitaciones.

Desde el mes de noviembre de 1999 la ARV notificó que el Programa de Rehabilitación se mudaría del Recinto Metropolitano, esto por órdenes del Administrador de Rehabilitación. El viernes 3 de marzo del año en curso la señora Aurelia Lozada, Consejera en Rehabilitación Vocacional notificó a la señora Beatrice Rivera, Directora del Programa de Orientación, verbalmente que a partir de esa fecha los servicios de Rehabilitación Vocacional serían reubicados fuera del Recinto, esto sin aviso a los estudiantes que participaban de dicho programa.

El lunes 6 de marzo habían recogido y partieron ese día. Tomó por sorpresa a los estudiantes la notificación encontrada en la puerta indicando el traslado, esto sin una dirección completa ni teléfono para llamar. Al presente no han recibido ningún tipo de comunicación de la ARV con relación a este movimiento.

La Universidad Interamericana presento el siguiente planteamiento producto de la posición de los estudiantes en cuanto a estos cambios:

Es importante se tome en consideración la necesidad que tienen estos estudiantes de unos servicios accesibles en su área de estudios y que no sean limitantes para que no afecten su aprovechamiento académico. La Universidad Interamericana se reitera en su posición de mantener la calidad de servicios que siempre ofrece a sus estudiantes y solicita respetuosamente se reconsidere restablecer estos servicios en el Recinto Metropolitano en pro y beneficio de los estudiantes con limitaciones.

La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico expresó que comparte la preocupación de esta Honorable Asamblea Legislativa sobre la decisión de retirar los servicios de Rehabilitación Vocacional de las universidades públicas y privadas. La Institución ya se ha visto afectada por esta decisión al mudar dichas facilidades en enero de 2000 luego de 30 años de servicio a sus estudiantes.

Reconocen la labor y el servicio que la ARV ofreció a los estudiantes con limitaciones físicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y que se han visto seriamente afectados por la decisión de cerrar la oficina que les prestaba servicio en ese campus.

Actualmente 342 estudiantes con limitaciones físicas se benefician del Programa de Rehabilitación Vocacional.

La oficina que ubica en dicho recinto le prestaba valiosos servicios tales como:

1. Facilitar la accesibilidad de los servicios evitando problemas de transportación y movilidad para buscar dichos servicios.
2. Facilitar el intercambio de información entre el personal de Rehabilitación y los funcionarios universitarios, agilizando procesos académicos y financieros como matrícula, pago de libros, entre otros.
3. Facilitar la relación de profesores y la comunidad universitaria, Programa y estudiante para el logro de un mejor entendimiento y accesibilidad a los acomodos razonables.
4. Resulta menos oneroso para los estudiantes y el Programa en términos de costos de transportación.
5. Facilitar la toma de decisiones en beneficio del estudiante que necesita servicios especiales para el logro de sus metas académicas y personales.
6. Dispone de recursos para adiestramiento a facultad y personal administrativo.

Los estudiantes se opusieron tenazmente a que estas oficinas se trasladaran de la Institución porque entienden que de ningún modo ha sido beneficioso para ellos.

Destacan que el estudiantado constituye la base, el fundamento, la razón de ser y la vida misma de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, por tal razón endosan la R.C. del S. 2187 que facilita las gestiones de los estudiantes con limitaciones físicas y clientes de Rehabilitación Vocacional en el logro de sus metas.

La Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) expresó que desde hace aproximadamente 30 años tiene una oficina de servicios en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Esta oficina ha sido objeto de críticas y quejas por parte de los estudiantes consumidores de la ARV, así como de los consejeros. Para el año 1996 la ARV recibió la visita de un grupo de estudiantes reiterando las quejas respecto a la oficina de la ARV. Básicamente se quejaban de problemas de accesibilidad y pésimas condiciones en que se encontraba la oficina. Inmediatamente se hicieron gestiones con personal de la UPR, las cuales no dieron resultados positivos. Cabe señalar que de la propia Resolución surge que cerca de 3,000 estudiantes cualifican como personas con impedimentos al amparo de la ley federal "Americans with Disabilities Act" (ADA), por lo que la UPR tiene obligación legal de cumplir con dicha ley. Este problema de falta de accesibilidad, así como de deterioro de las facilidades físicas se agrava para el año 1997 cuando la ARV aprueba su Plan de Mecanización y en enero de 1998 se comienza con la implantación del sistema "Client Rehabilitation Information System" (CRIS). El Plan de Mecanización conllevó, de igual forma, un Plan de Relocalización de Oficinas.

Dentro de dicho plan se consideró mantener la Oficina de la UPR. El 17 de marzo de 1999 la subadministradora de la ARV visitó a la señora. Sara Irizarry, Decana de Estudiantes, para dialogar sobre el hecho de que la infraestructura de la oficina no era adecuada para la mecanización, ya que la oficina no tenía seguridad de acceso a los equipos; no tenía línea de teléfono directos; ni tenía cuarto con acondicionador de aire 24 horas para el equipo de comunicaciones, necesario para la aplicación de CRIS; no tenía facilidades físicas ni espacio para la ubicación del equipo necesario; no tenía cableado para computadoras. Todas las gestiones con la UPR resultaron negativas y la decisión administrativa fue la de continuar con el Plan de Mecanización, el Plan de Relocalización de Oficinas e incluir la UPR como oficina a ser reubicada. Para esto se consiguió oficina en la Avenida Barbosa, a pocos minutos de la UPR.

La Administración de Rehabilitación Vocacional entiende que esta breve descripción de varios años de labor, esfuerzo y planificación no puede resumirse en una "filosofía educativa" de que a más trabajo y obstáculos más independiente será la persona con impedimento. Aunque la decisión tomada fue parte de una planificación programática y de servicios, no es menos cierto que las actitudes paternalistas y de "ay bendito" tampoco logran la independencia y el desarrollo del ser humano, menos aún de la persona con impedimentos.

Sin embargo, menciona la ARV que se reunieron el 10 de febrero de 2000 con el doctor George Hillyer, Rector del Recinto de Río Piedras de la UPR y con la Secretaria del Departamento de la Familia, doctora Angie Varela, para considerar la decisión de mudar la oficina de la UPR, en beneficio de los estudiantes consumidores de la UPR. En esta reunión la UPR se comprometió a tomar medidas para solucionar los problemas de infraestructura y espacio de la oficina de servicios de la ARV en el recinto de Río Piedras.

Posteriormente, personal de la ARV visitó las facilidades del Recinto de río Piedras para evaluar las facilidades físicas disponibles y recomendar lo necesario y así habilitar estas oficinas. Estas necesidades fueron sometidas al rector con copia al doctor Norman Maldonado, Presidente de la UPR.

El 1 de marzo de 2000, se acordó mantener la oficina de la ARV en Río Piedras al aprobarse todos los requisitos de infraestructura para la mecanización. Este día se acordó con la ingeniera Zulma Toro Ramos, Rectora del Recinto de Mayagüez de la UPR, llevar a cabo el mismo procedimiento recomendado

para habilitar las facilidades de la ARV ubicadas en el Recinto de Mayagüez. De cumplir con los acuerdos tomados, las oficinas se mantendrán prestando servicios tanto en los recintos de Río Piedras y Mayagüez.

**CONCLUSION**

Según se desprende de la información vertida por la ARV ya existe un acuerdo para mantener las oficinas del Programa de Rehabilitación Vocacional en aquellos recintos de la Universidad de Puerto Rico donde funcionaban.

Por otro lado, aunque la posición de reabrir las oficinas y ofrecer los servicios de rehabilitación vocacional ha sido acogida por las instituciones privadas, al momento de rendir este informe, la Comisión, luego de verificar con la Universidad Interamenricana y la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico fue informada de que dichos servicios no han sido restituidos.

Es por esto que las Comisiones de Salud y Bienestar Social, de Educación y Cultura y de y de lo Jurídico recomiendan la aprobación de la R.C. del S. 2187 con las enmiendas sugeridas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Norma Carranza De León, M.D.
Presidenta
Comisión de Salud y Bienestar Social

(Fdo.)
Carmen L. Berríos
Presidenta
Comisión de Educación y Cultura

(Fdo.)
Jorge Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1323, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Asuntos de la Mujer; y de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas.

**"LEY**

Para establecer el Comité Interagencial para el Estudio de la Violencia Doméstica en Puerto Rico.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La educación y la prevención son las armas más fuertes que poseemos para combatir un problema social. La violencia doméstica es uno de los problemas que más agobia a nuestra sociedad. Si bien es cierto que no existe una fórmula que pueda resolver esa crisis global, tenemos a nuestro alcance estrategias que pueden atenuarla e inclusive erradicarla.

El Gobierno de Puerto Rico debe atacar el problema de la violencia doméstica desde varios flancos. Por un lado, debemos continuar aplicando y afinando las disposiciones legales contenidas en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como *Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica de Puerto Rico*. De otra parte, debemos adoptar mecanismos innovadores que permitan

la difusión y protección de los derechos contenidos en dicha legislación. Además, debemos concientizar a nuestra niñez, mediante la educación, sobre la importancia de salvaguardar la integridad física y moral de la familia. Es por eso que esta Asamblea Legislativa establece el Comité Interagencial para el Estudio de la Violencia Doméstica en Puerto Rico, el cual realizará aportaciones intelectuales para contribuir a la efectividad del mensaje de no más violencia doméstica.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.-Se establece el Comité Interagencial para el Estudio de la Violencia Doméstica en Puerto Rico, compuesto por trece (13) personas. Dicho comité estará integrado por: la Directora Ejecutiva de la Comisión para Asuntos de la Mujer, Secretario del Departamento de Justicia, Superintendente de la Policía, Secretario del Departamento de Salud, Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Secretario del Departamento de Recreación y Deportes, Secretario del Departamento de la Familia, Asesor del Gobernador en el Area de Educación y Calidad de Vida, Asesor del Gobernador en el Area de Salud y Bienestar Social, Un (a) Educador (a) con interés en la problemática de la violencia doméstica (será seleccionado (a) por la Comisión para los Asuntos de la Mujer, Oficina del Gobernador), una víctima de violencia doméstica (será seleccionada por la Comisión para Asuntos de la Mujer, Oficina del Gobernador) y los presidentes de las Comisiones Asuntos de la Mujer de la Cámara y el Senado.

Artículo 2.-Se confiere a la Directora Ejecutiva de la Comisión para los Asuntos de la Mujer, Oficina del Gobernador, aquellas facultades, derechos y poderes adicionales que fueren necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta Ley, incluyendo, sin que esto en forma alguna se entienda como una limitación, lo siguiente:

(a) Recibir a título de donación de cualquier persona natural o jurídica o de cualquier institución privada o pública, dinero, equipo, materiales y servicios para ser usados o invertidos de acuerdo con los propósitos de esta Ley.

(b) Formalizar, con cualquier persona natural o jurídica o cualquier institución privada o pública, aquellos contratos, convenios y acuerdos que la Comisión para los Asuntos de la Mujer, Oficina del Gobernador, crea necesarios y convenientes para llevar a cabo los propósitos de esta Ley.

(c) Promulgar la reglamentación correspondiente para cumplir con las encomiendas dispuestas en esta Ley.

Artículo 3.-Toda agencia administrativa, subdivisión política y corporación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cooperará y con la Junta Consultiva sobre la Prevención de la Violencia Doméstica y participará activamente en las campañas educativas que dicha junta realice.

Artículo 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME CONJUNTO**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestras Comisiones de Asuntos de la Mujer; Gobierno y Asuntos Federales previo estudio y consideración del P. de la C. 1323, tiene el honor de recomendar la aprobación del Proyecto de la Cámara 1323, sin enmiendas.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

El P. de la C. 1323 tiene como propósito, establecer el Comité Intergencial para el estudio de la violencia doméstica en Puerto Rico.

Dicho Comité Interagencial, está operando actualmente y fue creado por virtud e la Orden Ejecutiva Número 16 del 24 de marzo de 1994, firmada por el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Rosselló.

Dicha Orden Ejecutiva lleva como propósito crear un comité compuesto por la Directora Ejecutiva de la Comisión para los Asuntos de la Mujer, el Secretario del Departamento de Justicia, el Superintendente de la Policía, la Secretaria de Salud, la Secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, la Secretaria del Departamento de la Familia, la Asesora del Gobernador en el area de educación y Calidad de Vida y la Asesora del Gobernador en el area de Salud y Bienestar Social.

Este Comité tendría la misión de desarrollar de forma coordinada e integrada un plan de trabajo encaminado a estudiar el problema de la violencia doméstica en Puerto Rico, luego de aprobación de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, conocida como "Ley para Prevención e Intervención con la violencia doméstica", identificar las dificultades de las agencias gubernamentales concernidas en la implantanción de dicha ley y coordinar los trabajos interagenciales relacionados con el mayor de casos de violencia doméstica, de manera que los mismos fluyan uniformemente, entre otros.

Sin embargo debido a que dicho comité fué creado por virtud de una Orden Ejecutiva el mismo podría ser derrogado de igual manera al no tener fuerza de ley.

Conforme a lo antes expuesto la presente medida establecerá mediante ley el Comité Interagencial sobre la Prevención de la Violencia Doméstica en Puerto Rico, la cual no podría ser derogada a salvo por la aprobación de otra ley a tales efectos.

Por todo lo antes, expuesto vuestra Comisión de Asuntos de la Mujer; Gobierno y Asuntos Federales, previo estudiio y consideración tiene el honor de recomendar la aprobación de la presente medida.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer
Presidenta
Comisión de Asuntos de la Mujer

(Fdo.)
Kenneth McClintock
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2441, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para asignar a la Universidad de Puerto Rico la cantidad de doce millones quinientos mil (12,500,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas para la restauración del inmueble que comprende el Complejo de Medicina Tropical que se encuentra bajo la titularidad de dicha institución universitaria, localizado en el sector de Puerta de Tierra de San Juan; disponer que la asignación de los fondos será desembolsada en tres (3) partidas anuales recurrentes comenzando con una asignación de cuatro millones

quinientos mil (4,500,000) dólares para el año fiscal 2000-2001 y las dos partidas restantes por la cantidad de cuatro millones (4,000,000) dólares cada una para los años fiscales subsiguientes 2001-2002 y 2002-2003; establecer que la Universidad de Puerto Rico cederá en usufructo, para el uso y disfrute por la Asamblea Legislativa un sesenta porciento (60%) del espacio disponible por un término inicial de treinta (30) años y disponer que al concluir el usufructo, se otorgará un contrato de arrendamiento por el valor nominal de un (1) dólar por un término adicional de setenta (70) años; y para autorizar el pareo de los fondos consignados.

## EXPOSICION DE MOTIVOS

El Complejo de Medicina Tropical de la Universidad de Puerto Rico localizado en el sector de Puerta de Tierra en la ciudad de San Juan está integrado por varias estructuras, entre las que figuran el antiguo Hospital, la Escuela de Medicina, el Laboratorio, la Biblioteca y otras estructuras que fueron desarrolladas posteriormente. En 1924, fue finalizada la construcción de uno de los edificios más importantes del complejo, la Escuela de medicina Tropical, con la ayuda y auspicio de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Colombia en Nueva York. En el 1937 se culminaron los esfuerzos de expansión del complejo, al finalizar la construcción del área, que para ese entonces, albergó el Hospital.

Es evidente, que el Complejo de Medicina Tropical, es uno de los edificios arquitectónicos de mayor relevancia en la ciudad de San Juan. Por otro lado, esta estructura histórica, fue sede de importantes acontecimientos y trascendentales descubrimientos en el ámbito de la medicina. Además, sirvió de escenario en numerosos intercambios científico-culturales que aportaron de forma significativa al desarrollo científico a nivel mundial.

La Antigua Escuela de Medicina Tropical, al igual que nuesto Capitolio, fue diseñado por el reconocido arquitecto Rafael Carmoaga Morales, siguiendo el estilo neoclásico del Renacimiento Español, conocido internacionalmente como el "Spanish Rvival". Esta magnífica estructura ha sido catalogada en Puerto Rico como monumento histórico y se encuentra en la lista del Registro Nacional de Lugares Históricos del Departamento del Interior de los Estados Unidos de América.

La falta de recursos fiscales para un programa de mantenimiento continuo y adecuado, unido al desarrollo de nuevas áreas para oficinas y otras operaciones han causado el deterioro sustancial de este inmueble. La Asamblea Legislativa y la Universdidad de Puerto Rico, reconocen la importancia histórica de esta edificación y la necesidad de mantener la misma en óptimas condiciones. Por consiguiete, es necesaria la inmediata intervención para atender la estabilización de la condición física de dicho edificio, así como detener el avance del deterioro que está experimentando.

La edificación cuenta con aproximadamente un área bruta de doscientos mil (200,000) pies cuadrados de superficies horizontales y cien mil (100,000) pies cuadrados de superficie de sitio. De acuerdo a la información suminstrada por la Universidad de Puerto Rico, del estudio de título de este inmueble se desprende que el mismo es parte del inventario de edificios cuya titularidad posee la universidad.

El Plan Mestro de Desarrollo para este proyecto contempla la reubicación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a una nueva sede, la relocalización del Instituto Neurológico de la Universidad de Puerto Rico a estas instalaciones y la creación de un Museo de Medicina Tropical como ancla histórica en el desarrollo médico. Además, el plan contempla el desarrollo de salas de usos múltiples, así como la restauración de los espacios de oficina para se distribuidos entre la Superintendencia del Capitolio Estatal y la Universidad de Puerto Rico.

La Asamblea Legislativa reconociendo la importancia de este legado arquitectónico y su gran aportación como sede de eventos que contribuyeron al desarrollo científico y cultural, asigna mediante esta

Resolución Conjunta la cantidad de doce millones quinientos mil (12,500,000) dólares como aportación para la restauración del Complejo de Medicina Tropical.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.- Se asigna a la Universidad de Puerto Rico la cantidad de doce millones quinientos mil (12,500,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas para la restauración del inmueble que comprende el Complejo de Medicina Tropical bajo la titularidad de dicha institución universitaria y que está localizado en el sector de Puerta de Tierra en la ciudad de San Juan.

Sección 2.- La asignación de fondos será desembosada en tres (3) partidas anuales recurrentes comenzando con una asignación de cuatro millones quinientos mil (4,500,000) dólares para el año fiscal 2000-2001 y las dos partidas restantes por la cantidad de cuatro millones (4,000,000) dólares cada uno para los años fiscales subsiguientes 2001-2002, 2002-2003.

Sección 3.- La Universidad de Puerto Rico cederá en usufructo para el uso y disfrute de la Asamblea Legislativa aproximadamente un sesenta porciento (60%) del espacio disponible luego de la restauración del inmueble, por un término inicial de treinta (30) años. Al concluir dicho término adicional de setenta (70) años. La Universidad de Puerto Rico reservará para su uso un treinta porciento (30%) del espacio y el diez porciento (10%) restante será destinado para uso común.

Sección 4.- El mantenimiento y utilidades del espacio a ocuparse por la Asamblea Legislativa así como el área de uso común será responsabilidad de la Legislatura.

Sección 5.- La restauración del inmueble se efectuará mediante un Plan Maestro de Desarrollo para ser alcanzado en fases las cuales sean integradas y que haga viable la rápida culminación de este proyecto, cumpliendo con las rigurosas normas de restauración y preservación establecidas en nuestro ordenamiento.

Sección 7.- La Universidad de Puerto Rico deberá rendir un informe a la Asamblea Legislativa al finalizar cada año fiscal, sobre las gestiones realizadas en torno a la planificación y restauración del inmueble. Asimismo, a la terminación de la obra, someterán un informe final detallado sobre los propósitos de esta Resolución Conjunta.

Sección 8.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 2441, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas.

**En La Exposición De Motivos:**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 5 | tachar "medicina" y sustituir por "Medicina" |
| Página. 2 2do párrafo, línea 3 | tachar "Rvival" y sustituir por "Revival" |
| 3er párrafo, línea 3 | tachar "Universdidad" y sustituir por "Universidad" |
| 5to párrafo, línea 1 | tachar "Mestro" y sustituir por "Maestro" |

**En El Texto Decretativo:**

| | |
|---|---|
| Página 3, línea 6 | Tachar "desembosada" y sustituir por "desembolsada" |
| Página 3, línea 8 | tachar "2000-2001" y sustituir por "2001-2002" |

| | |
|---|---|
| Página 3, línea 9 | después de "(4,000,000)" insertar "de" ; después de "cada" tachar "uno" y sustituir por "una" |
| Página 3, línea 10 | tachar "2001-2002" y sustituir por "2002-2003" y tachar "2002-2003" y sustituir por "2003-2004" |
| Página 3, línea 14 | después de "término" insertar ", se otorgará un contrato de arrendamiento por el valor nominal de un (1) dólar anual por un término" |
| Página 4, entre línea 6 y 7 | añadir:"Sección 6.- Se autoriza a la Universidad de Puerto Rico a gestionar y recibir donativos particulares y parear los fondos aquí asignados con aportaciones federales y estatales, los cuales se utilizarán exclusivamente para los propósitos consignados en esta Resolución Conjunta." |

**En El Titulo:**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 7 | tachar "2000-2001" y sustituir por "2001-2002" |
| Página 1, líneas 8 y 9 | tachar "2001-2002" y sustituir por "2002-2003" |
| Página 1, línea 9 | tachar "2002-2003" y sustituir por "2003-2004" |
| Página 1, línea 14 | tachar "consignados" y sustituir por "asignados" |

## ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del S. 2441 propone asignar a la Universidad de Puerto Rico la cantidad de doce millones quinientos mil (12,500,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas para la restauración del inmueble que comprende el Complejo de Medicina Tropical que se encuentra bajo la titularidad de dicha institución universitaria, localizado en el sector de Puerta de Tierra de San Juan; disponer que la asignación de los fondos será desembolsada en tres (3) partidas anuales recurrentes comenzando con una asignación de cuatro millones quinientos mil (4,500,000) dólares para el año fiscal 2001-2002 y las dos partidas restantes por la cantidad de cuatro millones (4,000,000) dólares cada una para los años fiscales subsiguientes 2002-2003 y 2003-2004; establecer que la Universidad de Puerto Rico cederá en usufructo, para el uso y disfrute por la Asamblea Legislativa un sesenta porciento (60%) del espacio disponible por un término inicial de treinta (30) años y disponer que al concluir el usufructo, se otorgará un contrato de arrendamiento por el valor nominal de un (1) dólar por un término adicional de setenta (70) años; y para autorizar el pareo de los fondos consignados.

Los fondos para los propósitos que se detallan en esta medida están contenidos dentro del marco presupuestario, por lo que la Comisión de Hacienda no tiene objeción a la aprobación de esta Resolución Conjunta.

Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Roger Iglesias Suarez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2077, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, sin enmiendas.

"LEY

Para enmendar el artículo 6 de la Ley Núm. 8 del 10 de octubre de 1987, para disponer que cualquier parte afectada por una determinación de la Junta de Planificación o la Administración de Reglamentos y Permisos podrá recurrir mediante el recurso administrativo de apelación a la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones; enmendar el artículo 13.016 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico" para disponer que en relación a los términos, trámites y condiciones en cuanto a solicitudes de apelación en los casos específicos provenientes de decisiones de la Administración de Reglamentos y Permisos donde las competencias fueron transferidas de dicha agencia central al municipio, el foro apelativo lo será la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, en los casos de jurisdicción específica delegada, según lo establece el artículo 31(a) de la Ley Núm. 76 del 24 de junio de 1975, según enmendada.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El esquema de planificación de Puerto Rico es uno integral y amerita una revisión constante de la dinámica de sus componentes. Debe aspirar a que, de manera efectiva, los ciudadanos formen parte del mismo, facilitando al máximo su participación. Los cambios, nuevas construcciones, alteraciones, ampliaciones, remodelaciones y usos dentro de los límites de las zonas designadas como históricas y de interés turístico va en aumento. Existe un genuino interés en remozar ciertas áreas, cuyo desarrollo como centros históricos o turísticos han sido descuidados en el pasado.

Bajo las nuevas designaciones de zonas históricas y de interés turístico realizadas por la Junta de Planificación, han aumentado las áreas a lo largo y ancho de Puerto Rico. Los sectores turísticos e históricos tradicionales claman por una mayor participación en la toma de decisiones. La jurisdicción en el campo de permisología recae en la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE).

Sin embargo, el esquema actual no fomenta la plena participación ciudadana al no celebrar vistas en todos los casos. Por esa razón, las garantías del debido proceso de ley plasmadas en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme encuentra una limitación en el desarrollo del expediente del caso. La función revisora de las determinaciones tomadas por las entidades de origen, sea ARPE o las oficinas de permisos de los Municipios Autónomos, corresponde al Tribunal de Circuito de Apelaciones, tribunal de derecho. Este encuentra un expediente administrativo limitado, con un análisis técnico parcial, donde en su gran mayoría, la participación en el proceso de vistas es inexistente.

Con el propósito de subsanar la práctica indeseable, dentro de un esquema que pretende tomar decisiones informadas, se aprueba esta Ley, para que sirva de pilar para el desarrollo y protección de las zonas históricas y turísticas la participación de sus componentes. A esos fines, es imperativo que un foro administrativo intermedio ofrezca las garantías que, por razones reglamentarias o presupuestarias, no se ofrecen. Desarrollar un expediente más completo garantiza una decisión informada y, por ende, se pone en mejor condición al foro judicial revisor.

No debe perderse de perspectiva, que el derecho administrativo se sostiene bajo un marco de participación amplio, justo y económico. Actualmente, acudir directamente en revisión administrativa ante

el Tribunal de Circuito de Apelaciones sin la previa celebración de vista y sin un expediente completo, no fomenta la participación, sino resulta, muchas veces, disuasivo, por su complejidad y costos.

La Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones es un foro de naturaleza cuasi judicial, con una jurisdicción específica que puede subsanar errores de procedimiento y ofrecer las garantías necesarias en los casos de zonas históricas y de interés turístico. Es una herramienta que puede colaborar en la formulación de decisiones adjudicativas informadas, ya que celebra vistas, por mandato de ley, en todos los casos.

Actualmente, las denominadas zonas históricas y de interés turístico trascienden las tradicionales localidades capitalinas. Son todas, en conjunto, de gran importancia para nuestra vida social y económica. Nuestro sistema democrático fomenta la participación de los ciudadanos en los asuntos que les atañen. Es la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones la agencia con el conocimiento y experiencia necesaria para salvaguardar una participación efectiva en l;a toma de decisiones, en los casos concernientes a zonas históricas y turísticas.

Por otro lado, la transferencia de poderes y competencias que el sistema de delegación estableció como política pública al amparo de la mencionada "Ley de Municipios Autónomos, parte de la premisa general de descentralización. La madurez de los sistemas de gobierno municipal dictaron el cambio en el ordenamiento legal. No obstante, se reconoce que las competencias delegadas por virtud de convenio mantienen los términos, trámites y condiciones aplicables, según los estatutos habilitadores de las agencias centrales.

La Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos contempla la revisión, vía apelación, dentro del trámite administrativo de ciertos casos, como se ha dicho, en un marco de jurisdicción específica y limitada, conforme al artículo 31(a) de la Ley Núm. 76, antes mencionada, a la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones.

La Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico no tuvo el propósito de obviar o alterar la jurisdicción de dicha agencia. Por el contrario, mantuvo su existencia dentro del nuevo sistema de competencias del recurso apelativo, como garantía a las partes afectadas por decisiones tomadas bajo el rigor de las delegaciones del convenio.

No estando expresamente nombrada la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones dentro del marco de la Ley de Municipios Autónomos, aunque sí el recurso de apelación, es necesario aclarar la facultad de dicho foro. Es importante que las partes afectadas claramente conozcan la disponibilidad del recurso apelativo y el foro correspondiente para que puedan ejercer válidamente los derechos que le asisten.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.- Se enmienda el artículo 6 de la Ley Núm. 374 del 14 de mayo de 1949, según enmendada, para que lea de la siguiente forma:

"Artículo 6.- Requisitos previos

en armonía con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de esta Ley, no podrá implantarse sin la previa aprobación de la Junta de Planificación o de la Administración de Reglamentos y Permisos, según corresponda, acción alguna en una zona antigua o histórica o en una zona de interés turístico que modifique el tránsito o altere los edificios, estructuras, pertenencias, lugares, plazas, parques o áreas de la zona por parte de personas particulares o agencias gubernamentales, incluyendo los municipios. La agencia pertinente no podrá aprobar ninguna de las acciones señaladas sin contar con el previo endoso favorable por escrito del Instituto de Cultura Puertorriqueña, en el caso de una zona antigua o histórica y de la Compañía de Turismo, en el caso de una zona de interés turístico.

Para aquellas acciones de la naturaleza señalada en el párrafo anterior que hayan sido implantadas previo a la aprobación de esta ley o se implanten en el futuro, la Junta de Planificación, motu proprio, con el asesoramiento del Instituto de Cultura Puertorriqueña en el caso de zonas antiguas o históricas y de la Compañía de Turismo en el caso de zonas de interés turístico, o a petición de cualquiera de dichas agencias o de cualquier funcionario, organismo o persona interesada, podrá iniciar la investigación correspondiente para determinar si la acción de que se trata está conforme a los propósitos y fines de los artículos 1 y 2 de esta ley. La Junta de Planificación podrá requerir la información necesaria de todas las fuentes que estime pertinente, ofrecerá un término razonable a las partes para expresarse sobre la información recibida o generada y podrá celebrar vista administrativa o audiencia pública en los casos que estime necesario. Luego de evaluada la información y evidencia obtenida, la Junta de Planificación podrá ordenar, entre otras cosas, la paralización de la implantación de la acción de que se trate y la restitución de la zona a su estado original, requerir la modificación de la acción implantada o implantándose, o condicionar la continuación de la implantación de la acción al cumplimiento de los requisitos pertinentes para garantizar los propósitos y fines de las secciones 1 y 2 de esta ley.

Cualquier parte afectada por la determinación de la Junta de Planificación o de la Administración de Reglamentos y Permisos *podrá recurrir en apelación a la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones dentro del término de treinta (30) días, a partir del archivo en autos de la determinación tomada* **[podrá recurrir en revisión al Tribunal Superior, a tenor con lo dispuesto en el artículo 5 de esta ley.]**. *En caso de que una parte afectada por una determinación de la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones podrá recurrir en revisión al Tribunal de Circuito de Apelaciones, dentro del término de quince días del archivo en autos de la determinación tomada."*

Sección 2.- Se enmienda el artículo 13.016 de la Ley Núm. 81 del 31 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, para que lea como sigue:

"Artículo 13.016.- Decisiones del municipio- Anulaciones, reconsideraciones, apelaciones y revisiones

La Junta de Planificación en aquellos proyectos que mediante convenio se haya transferido a un municipio al recibir copia de un expediente sobre un Proyecto de Urbanización o de un proyecto que no sea de urbanización del cual haya solicitado copia del expediente debido a su posible impacto regional, podrá, durante el transcurso de la evaluación del proyecto por el municipio y previo a una decisión sobre el mismo, determinar que el proyecto tiene un impacto regional no contemplado en el Plan y podrá requerir que se eleve el expediente para la consideración por la Junta de Planificación en pleno. Dicho requerimiento será mediante resolución en la que la Junta exprese los fundamentos que justifican su determinación. Una vez tomada una decisión por el municipio sobre cualquier autorización o permiso cuya consideración se haya transferido al municipio, la Junta de Planificación podrá recurrir a los foros judiciales o administrativos pertinentes para solicitar cualquier remedio en derecho que sea necesario para el fiel cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.

Los términos, trámites y condiciones para las solicitudes de reconsideración, de apelación o de revisión judicial de las decisiones del municipio, serán:

(a) Los aplicables a decisiones de la Administración de Reglamentos y Permisos si la competencia de que se trate le fue transferida de dicha agencia al municipio.

*(1) En los casos de jurisdicción específica contemplada bajo el artículo 31(a) de la Ley Núm. 76 del 24 de junio de 1975, el foro donde las partes afectadas radicarán el recurso de apelación es la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, dentro del término de treinta (30) días del archivo en autos de la decisión tomada.*

(b) Los aplicables a decisiones ..."

Sección 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura tiene el honor de rendir su informe en relación al P. del S. 2077 recomendando su aprobación sin enmiendas.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El P. del S. 2077 tiene el propósito de enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 8 de 10 de octubre de 1987, para disponer que cualquier parte afectada por una determinación de la Junta de Planificación o de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) podrá recurrir mediante el recurso administrativo de apelación a la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones (JACL); así como enmendar la Ley de Municipios Autónomos para disponer en relación a los trámites y condiciones en cuanto a solicitudes de apelación en los casos específicos provenientes de decisiones de ARPE en el que las competencias fueran transferidas de dicha agencia al municipio, el foro apelativo lo será la JACL.

En el descargue de sus funciones la Comisión contó con los comentarios de la Junta de Planificación, la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones y la Federación de Alcaldes. Se le solicitaron comentarios a la Asociación de Alcaldes pero no fueron sometidos.

La Federación de Alcaldes y la JACL endosan la medida ya que esta fomenta la integración del flujo de información para lograr un esquema de permisología integrado. Esto se logra al ser la JACL el organismo que analice la revisión, permitiendo obtener así un expediente completo, que incluya partes que anteriormente no fueron citadas o no se tomaron en consideración. Este nuevo expediente será el que utilice el Tribunal Apelativo en caso que alguna parte no este de acuerdo con la decisión de la JACL.

Por su parte, la JACL entiende que las enmiendas presentadas en el P. del S. 2077 son razonables y atinadas, proveyendo para que un foro administrativo intermedio revise las determinaciones de la Junta de Planificación, ARPE y de los Municipios. Esto brinda un foro accesible, que ofrece las garantías mínimas del debido proceso de ley, sin el alto costo que representa la litigación en los tribunales.

En relación al las Zonas Históricas y Zonas de Interés Turístico nos mencionan que actualmente el único mecanismo de revisión es una apelación al Tribunal Apelativo y con esta enmienda se brinda un procedimiento de doble control, para el análisis realizado en las agencias, permitiendo que cualquier omisión en un área específica pueda ser analizada. Este foro revisor pasara juicio sobre todo el expediente que sostiene la determinación administrativa y puede canalizar dentro del mismo proceso sus deficiencias. De esta manera, se libera a las agencias y las partes afectadas de la pesada carga económica y de tiempo que conllevan los procesos judiciales.

Por su parte, la Junta de Planificación no endosa la medida y menciona en sus comentarios que las determinaciones en los casos de Zonas de Interés Turístico y en las Zonas Históricas obedecen a una política publica establecida por el Gobierno Central para fortalecer el crecimiento socio-económico del país. En las Zonas Históricas y Zonas de Interés Turístico se lleva a cabo un análisis arquitectónico, turístico-cultural, arqueológico y de otras disciplinas. A estos fines, un equipo de profesionales con un enfoque interdisciplinario pasa juicio sobre la elegibilidad a base de unos criterios de evaluación establecidos. También se requiere el endoso del Instituto de Cultura Puertorriqueña y se incorporan recomendaciones de otras entidades como la Oficina Estatal de Preservación Histórica.

En ambos casos, se elaboran y se toman las decisiones basadas en las disposiciones del artículo 27 de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como Ley Orgánica de la Junta de

Planificación, la Ley Núm. 374 de 14 de mayo de 1949, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada y la reglamentación vigente.

Aunque en la facultad legal y reglamentaria antes señalada se requieren vistas públicas y se requiere la participación ciudadana, en muchas ocasiones no se toman en consideración los planteamientos de estos, por lo que resulta juicioso brindarles una oportunidad intermedia administrativa que reconsidere las decisiones administrativas. Por otro lado, la JACL posee los recursos adiminstrativos, profesionales y técnicos necesarios para realizar este trabajo de una manera eficiente y que a su vez provea de un ahorro económico y procesal significativo para todas las partes.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura recomienda la aprobación del P. del S. 2077 sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Ramón L. Rivera, Hijo
Presidente
Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2592, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Pública; y de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar el Capítulo 34 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como "Código de Seguros de Puerto Rico", con el propósito de disponer sobre los fines y propósitos del asegurador cooperativo, establecer unas definiciones generales referente al contenido de dicho Capítulo y enmendar sus disposiciones a fin de armonizarlas con la realidad actual del asegurador cooperativo y promover su desarrollo.

## EXPOSICION DE MOTIVOS

Las cooperativas de seguros constituyen un sector vigoroso que ofrece al pueblo servicios de suma importancia en el orden social y económico. De ahí la posición de vanguardia y liderato que ocupan en la industria de Seguros de Puerto Rico.

La misión de las cooperativas de seguros es servir como un importante centro de seguros en Puerto Rico desde el cual pueda ejercer su función principal de promover y desarrollar productos y servicios que satisfagan las necesidades de seguros de los socios, patrocinadores y tenedores de póliza y de educar y divulgar sobre la necesidad del seguro; en compatibilidad y armonía con la filosofía cooperativista.

Como ente cooperativo, el estado le garantiza a las cooperativas de seguros el libre desenvolvimiento y autonomía necesaria así como su colaboración y apoyo para el logro de esta misión. Es además política pública del estado que las cooperativas de seguros gozarán de todas las facultades y prerrogativas que la ley le concede a otras personas jurídicas y que no se establecerán restricciones que sean discriminatorias o exigencias adicionales.

En consideración a lo antes expuesto resulta necesario atemperar la ley que regula las aseguradoras cooperativas a las exigencias que le impone el cumplimiento de su misión.

Esta legislación cumple también el propósito de actualizar las disposiciones de ley existentes a fin de asegurar el funcionamiento adecuado y eficiente de las aseguradoras cooperativas del país.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 34.010 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.010.-Alcance, Fines y Propósitos

Este Capítulo se aplica únicamente a **[cooperativas de seguros]** aseguradores cooperativos del país.

El propósito del asegurador cooperativo es promover el bienestar general de la comunidad mediante el desarrollo de contratos de seguros que satisfagan las necesidades de protección contra riesgos de sus socias, patrocinadores, y público en general; en armonía con la filosofía cooperativista.

Con este fin, educará y divulgará sobre la necesidad y beneficio del seguro y destinará fondos para fines de la educación cooperativa. "

Sección 2.-Se añade un Artículo 34.011 a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.011.- Definiciones Generales

A los fines de este capítulo, a menos que se disponga expresamente de otro modo, o que se desprenda claramente otra intención, o el contexto requiera un significado distinto, prevalecerán las siguientes definiciones:

(1) Cooperativa Afiliada – Se refiere a aquella cooperativa que ha sido admitida como socia por la junta de directores del asegurador cooperativo.

(2) Certificado de Aportación de Fondos o Acciones – Se refiere al documento que acredita la aportación de una socia al excedente del asegurador cooperativo.

(3) Delegado – Se refiere a la persona natural designada por una socia para representarla en las asambleas que celebre el asegurador cooperativo, siempre que dicha socia haya cumplido con los requisitos pertinentes establecidos en el reglamento de éste para tal designación.

(4) Entidad – Se refiere a cualquier persona jurídica no organizada como una cooperativa pero afín con la filosofía cooperativista, esto es, una sociedad o asociación organizada con fines no pecuniarios o una corporación cuyas actividades sean para fines benéficos o se basen en principios cooperativos que hayan sido admitidas como socias por la junta de directores del asegurador cooperativo a base de los criterios establecidos en el reglamento de éste.

(5) Funcionario – Se refiere a las personas que ocupen cargos tales como presidente, vicepresidentes, secretario y tesorero, que de día a día administran al asegurador cooperativo y cualquier otro que sea necesario para ese fin y para los cuales se provea en el reglamento del asegurador cooperativo. (Cosvi consultó y planteó la alternativa que se dejara el cargo de secretario, en forma opcional; Múltiples interesa que vicepresidente se ponga en plural, tanto para los funcionarios de la gerencia como los de la junta. (Ver artículo 34.130 en la página 34 de este borrador)

(6) Funcionarios de la Junta – Se refiere a los directores que ocupen cargos tales como presidente, vicepresidentes, secretario y tesorero de la junta de directores del asegurador cooperativo y aquellos otros funcionarios para los cuales se provea en el reglamento del asegurador cooperativo.

(7) Junta – Se refiere a la junta de directores del asegurador cooperativo.

(8) Socia – Se refiere a aquellas cooperativas afiliadas y entidades que han sido admitidas como socias por la junta de directores del asegurador cooperativo.

(9) Término – Se refiere al período de tiempo durante el cual se desempeñará como director del asegurador cooperativo la persona electa como tal por la asamblea de socias o designada como tal por la junta de directores del asegurador cooperativo, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 34.120.

(10) Duración del término – La duración del término será de tres años, excepto en aquellos casos cuando: (1) el director sea designado por la junta de directores del asegurador cooperativo en cuyo caso la duración del término no podrá exceder de un (1) año; (2) o en los escalonamientos iniciales estipulados en el reglamento; (3) o en los casos en que la asamblea de socias elige por uno o dos años a una persona para completar el término de un director que ha cesado en su posición."

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 34.020 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.020.- Requisitos Generales del asegurador cooperativo:

**[Cooperativa de seguros, requisitos generales:]**

Los requisitos generales con los que deberá cumplir el asegurador cooperativo son los siguientes:

(1) Operar en interés de los **[socios y]** tenedores de póliza y las socias.

(2) de derechos y obligaciones en cuanto a **[sus socios]** socias respecta.

(3) Disponer al momento de organizarse de un fondo excedente mínimo acumulado mediante aportaciones de socios. Dichos socios recibirán como evidencia de su aportación un certificado de aportación de fondos.

(4) Conceder a cada **[socio]** socia un solo voto **[solamente]** que deberá **[ejercitarse]** ejercer **[personalmente y no por apoderado]** a través de su delegado en la asamblea general de socias del asegurador cooperativo.

(5) **[No negar admisión]** Admitir como **[socio]** socia **[a ninguna persona por consideración de raza, color, jerarquía social, religiosa o afiliación política; esto es, admitir a todo el]** aquella cooperativa o entidad que siendo elegible **[de acuerdo con la naturaleza y alcance de las operaciones y actividades del asegurador cooperativo, solicitase]** solicite admisión a la misma, conforme a lo dispuesto en el Artículo 34.070, apartado (1)(i) y el reglamento del asegurador cooperativo. **[Disponiéndose,]** Sin embargo lo aquí dispuesto **[que esta garantía]** no se interpretará como una renuncia del derecho que tiene la junta de directores a negar la admisión de cualquier cooperativa o entidad que a su juicio pueda perjudicar los intereses u obstaculizar o en cualquier otra forma impedir la consecución de los fines y propósitos **[de la sociedad]** del asegurador cooperativo.

(6) Pagar, o acreditar, **[anualmente]** interés sobre certificados de aportación de fondos emitidos y no redimidos, conforme a lo dispuesto en el reglamento **[de acuerdo con los sobrantes de la Cooperativa]** del asegurador cooperativo y al apartado siete (7) de este artículo. El máximo de interés a pagar se determinará de tiempo en tiempo por el Comisionado de Seguros mediante reglamentación al efecto, de acuerdo con el tipo prevaleciente en la banca comercial privada. Para hacer tal determinación el Comisionado podrá solicitar el asesoramiento del Secretario de Hacienda.

(7) No tener fines lucrativos ya que sus rendimientos y economías se distribuirán a base de patrocinio entre los tenedores de pólizas después de establecerse aquellas reservas voluntarias que se consideren necesarias para el buen funcionamiento de la organización. Entendiéndose por distribución a base de patrocinio lo que resulte aplicando una fórmula actuarial de distribución de excedentes. Disponiéndose, que los directores de un asegurador cooperativo podrán de tiempo en tiempo pagar o acreditar a los tenedores de pólizas con derecho a ello, el patrocinio a que tienen derecho después de haber acreditado a

los socios el interés correspondiente. Se dispone, además, que estos pagos se harán de aquella parte de los fondos excedentes que representen economías netas efectuadas y ganancias netas realizadas de sus negocios, siempre que los mismos no reduzcan el excedente del asegurador cooperativo por debajo de una suma igual al cinco por ciento de todas sus obligaciones."

Sección 4.-Se enmienda el Artículo 34.030 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.030.-Poderes de las cooperativas de seguros

(1) **[La Cooperativa de Seguros]** El asegurador cooperativo tendrá los mismos poderes generales que se consignan en el Artículo 29.050 de este Código.

(2) Podrán organizarse bajo este Capítulo **[Cooperativas de Seguros]** aseguradores cooperativos para contratar seguros con sus **[socios]** socias y otros patrocinadores.

(3) **[Las Cooperativas de Seguros]** Los aseguradores cooperativos no estarán sujetos a las disposiciones de la Ley General de Corporaciones."

Sección 5.-Se enmienda el Artículo 34.040 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.040.-Incorporación de un asegurador cooperativo

(1) Once o más personas mayores de edad, residentes en Puerto Rico y que se unan en su carácter de consumidores podrán incorporar **[una cooperativa de seguros]** un asegurador cooperativo. Entendiéndose por consumidores aquellas personas que van a adquirir los servicios de seguros que ésta preste.

(2) Los incorporadores deberán suscribir y certificar por triplicado, ante notario, los artículos de incorporación.

(3) Si los artículos de incorporación cumplen con la Ley, el Comisionado los endosará con su aprobación a ese efecto, y una copia se archivará en la Secretaría de Estado, otra en la Oficina del Comisionado y la tercera copia se devolverá al asegurador cooperativo. Una vez presentadas estas copias se dará por efectuada la incorporación.

(4) Los derechos de dichas presentaciones serán los que se prescriben en el Artículo 7.010, y no se cobrará ningún derecho adicional por el Secretario de Estado."

Sección 6.-Se enmienda el Artículo 34.050 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.050.-Artículos de incorporación, contenido

Los artículos de incorporación de **[una Cooperativa de Seguros]** un asegurador cooperativo deberán expresar:

(1) El nombre **[de la cooperativa de seguros]** del asegurador cooperativo el cual contendrá como parte distintiva del mismo la palabra "cooperativa", cooperación, cooperadores o palabra de similar significación de forma tal que responda al sentido en que una sociedad cooperativa se establece bajo las disposiciones aplicables de la Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico. Disponiéndose que **[ninguna cooperativa de seguros]** ningún asegurador cooperativo podrá elegir un nombre que esté ya adoptado por **[otra cooperativa de seguros]** otro asegurador cooperativo o que sea tan semejante a él que pueda crear confusión.

(2) El nombre de la ciudad o pueblo donde radicará el sitio principal de negocios **[de la cooperativa de seguros]** del asegurador cooperativo, el cual deberá ser en Puerto Rico.

(3) El término de su duración, que puede ser perpetuo.

(4) Las clases de seguros para los cuales se organiza **[la cooperativa]** el asegurador cooperativo, de acuerdo con las definiciones de las mismas dadas en este Código, sin tener en cuenta que **[la cooperativa]** el asegurador cooperativo podrá ser inicialmente **[autorizada a hacer una sola de dichas]** autorizado a realizar una o varias clases de seguros.

(5) Se indicará el número total autorizado de certificados de aportación de fondos y el importe de la aportación representada por cada certificado. Si es autorizada más de una clase de certificados de aportación, se indicará la descripción de cada clase; el número de certificados que la componen, y los derechos, preferencias y restricciones concedidas o impuestas sobre cada clase.

(6) El nombre y dirección postal de los incorporadores y el número de certificados de aportación de fondos suscritos por cada incorporador.

(7) El nombre y dirección postal de los directores provisionales que no serán menos de cinco.

(8) Otras disposiciones no incompatibles con la Ley."

Sección 7.-Se enmienda el Artículo 34.060 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.060.-Enmienda de los Artículos de Incorporación:

(1) Podrán hacerse enmiendas a los artículos de incorporación de **[una cooperativa de seguros]** un asegurador cooperativo mediante resolución aprobada por 2/3 partes de los socios presentes en votación llevada a cabo en una asamblea ordinaria o extraordinaria convocada al efecto.

(2) Si la enmienda es para cambiar el nombre de la cooperativa después de haberse dedicado al negocio de seguros en Puerto Rico con el mismo, la propuesta enmienda no se someterá a **[los socios]** las socias hasta después que la Junta haya solicitado y recibido el consentimiento del Comisionado para el propuesto cambio. El Comisionado dará prontamente tal consentimiento, a menos que el propuesto nombre sea en violación del Artículo 3.250 (nombre que no fuere similar al de otro asegurador autorizado, o engañoso en cuanto al tipo de la organización).

(3) Aprobada la enmienda por **[los socios]** las socias **[de la cooperativa]** del asegurador cooperativo, el presidente y el secretario **de la cooperativa de seguros]** del asegurador cooperativo certificarán la enmienda por triplicado con el sello de la cooperativa, y presentarán una copia al Comisionado, otra al Secretario de Estado, y retendrán la última en los archivos **[de la cooperativa]** del asegurador cooperativo. Al completarse dichas notificaciones, se considerará efectuada la enmienda."

Sección 8.-Se enmienda el Artículo 34.070 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, se añade un nuevo apartado, y se renumera el actual apartado h, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.070.-Reglamento, contenido

(1) **[Los socios]** Las socias tendrán facultad por mayoría de votos, en una asamblea legalmente constituida con ese propósito, para aprobar y enmendar los reglamentos que regulen los

procedimientos **[la cooperativa de seguros]** del asegurador cooperativo y rijan la administración de sus negocios. Dichos estatutos, si fueren compatibles con la ley y los artículos de incorporación, regirán:

(a) El número, los requisitos, facultades y duración del cargo de los directores y el modo de elegirlos

(b) **[Fecha,]** Aviso, quórum y celebración de asambleas, ordinarias y extraordinarias de socios y votación en las mismas. Disponiéndose que ninguna asamblea estará legalmente constituida a menos que esté presente por lo menos el 20% del número total de **[socios de la cooperativa]** socias del asegurador cooperativo. Disponiéndose, además, que entre una asamblea y la subsiguiente no podrá transcurrir un período de tiempo de más de trece (13) meses.

(c) **[Fecha,]** Aviso, quórum y celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias de las juntas de directores.

(d) La forma de votar y las condiciones bajo las cuales **[los socios]** las socias podrán votar en asambleas ordinarias y extraordinarias **[de la cooperativa]** del asegurador cooperativo.

(e) Emisión y traspaso de los certificados de aportación **[de la cooperativa]** del asegurador cooperativo.

(f) La celebración de contratos y de los derechos e intereses de **[sus socios]** las socias.

**(g) [La destitución, renuncia o sustitución de directores, funcionarios, socios, así como la forma de determinar el valor del interés de un socio y su pago por la cooperativa al ocurrir su muerte o retiro, al ser expulsado, o al perder su condición de socio. Disponiéndose, en cuanto a estos últimos casos, que la Junta pagará dentro de un año después del retiro, expulsión o cese del socio a éste o a sus representantes autorizados o a sus herederos la cantidad de dinero indicada en los documentos que acreditan la participación del socio en los bienes de la cooperativa. Disponiéndose, además que cuando el pago de dicho interés en la forma antes indicada resulte, a juicio de la Junta, perjudicial al desenvolvimiento económico de la cooperativa, dicho pago podrá hacerse en la forma siguiente:]**

**[Dentro de un año después del retiro, expulsión, cese o muerte del socio le sería pagado a éste o a sus representantes autorizados o a sus herederos, una suma equivalente a la cantidad total inicialmente aportada por él y representada por Certificados de Aportación de Fondos. El resto del interés del socio en la cooperativa le será pagado anualmente en forma rotativa y por orden de fecha en que acumuló dichos haberes por años. Estos haberes así acumulados se empezarán a pagar a partir no más tarde de un año del retiro, expulsión o cese del socio y los mismos deberán pagarse dentro de un período no mayor de cinco años. Sin embargo, si estos pagos afectaren la condición económica de la cooperativa, los mismos podrán continuar haciéndose efectivos en la forma antes indicada dentro de un período adicional de no más de cinco años, siempre y cuando la cooperativa obtenga la aprobación previa del Comisionado. En cualquier fecha de los períodos antes indicados, la Junta podrá ordenar el pago del balance adeudado a esa fecha.]**

**[Si en forma rotativa no pudiesen liquidarse los haberes totales del socio dentro del período considerado precedentemente, la Junta vendrá**

**obligada a liquidar el exceso de dicha acumulación en forma prorrateada o en una suma global en cualquier fecha dentro del período indicado.**

**No obstante lo anterior, si a tenor con lo dispuesto, cualquier cooperativa emite certificados con fecha de redención que acreditan la participación del socio en la misma, ésta no vendrá obligada a liquidar los haberes del socio retirado en la forma dispuesta anteriormente, ya que la liquidación de dichos certificados se hará en o antes de la fecha de su redención. Disponiéndose, que en casos de muerte, la cooperativa vendrá obligada a pagar los haberes del socio o a sus herederos o a sus representantes autorizados, según se estipula en el inciso (1)(g) de este artículo.]**

(h) Todo lo relacionado con la destitución, renuncia o sustitución de directores, o funcionarios de la Junta. **[y los socios Este dispondrá, además, los derechos que correspondan a los socios al ocurrir su renuncia, expulsión o al perder su condición de socio.]**

(i) Todo lo relacionado con la admisión, denegación de solicitudes de socias, y separación, mediante un procedimiento justo, equitativo y libre de discrimen, consistente con este Código.

(j) Los demás asuntos usuales, necesarios y convenientes para sus transacciones cooperativas.

(2) **[La cooperativa de seguros]** El asegurador cooperativo presentará prontamente al Comisionado una copia del Reglamento, certificada por el secretario **[de la cooperativa]** del asegurador cooperativo, así como de cada modificación o adición a su reglamento. El Comisionado desaprobará cualquier cláusula del reglamento que considere ilegal, injusta o lesiva a los intereses legítimos y a la debida protección de **[los socios]** las socias o tenedores de pólizas **[de la cooperativa]** del asegurador cooperativo, o a cualquier clase de los mismos. Después de recibir aviso de tal desaprobación y durante la existencia de la misma, **[la cooperativa]** el asegurador cooperativo no pondrá en vigor ninguna cláusula del reglamento que hubiere sido desaprobada."

Sección 9.-Se enmienda el Artículo 34.080 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de1957, según enmendada, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.080.-Socias, admisión, renuncia y separación involuntaria, certificado de aportaciones, responsabilidad, derecho de votación, deberes y obligaciones, y liquidaciones de obligaciones

(1) Admisión:

(a) La Junta de **[una cooperativa de seguros]** un asegurador cooperativo tendrá la facultad de admitir **[socios]** socias de acuerdo con las reglas de admisión establecidas por los artículos de incorporación, el reglamento, o resolución de la junta, debiendo estar dichas reglas en armonía con los fines y propósitos **[de la cooperativa]** del asegurador cooperativo, sus facultades y las disposiciones de este Código. Disponiéndose, que si una solicitud de admisión fuese rechazada por la junta, **[el aspirante]** la solicitante tendrá derecho a **[apelar de dicha decisión]** pedir reconsideración a la junta dentro de **[diez (10)]** quince (15) días laborables **[de ser notificado por escrito de la resolución correspondiente, ante la próxima asamblea que se celebre]** contados a partir de la notificación de la decisión de la junta. La solicitante tendrá derecho a apelar de la decisión en reconsideración ante la próxima asamblea ordinaria de socias siempre y cuando le notifique a la junta su decisión de apelar, debidamente fundamentada, dentro de los quince

(15) días laborables contados a partir de la notificación de la misma **[desde que fuese notificada por escrito de la resolución correspondiente, ante la próxima asamblea que se celebre.]** En caso de que por mayoría de votos dicha asamblea, previa la correspondiente audiencia, revoque la decisión de la junta, y siempre y cuando que dicha actuación **[no esté en pugna]** sea consistente con el Código de Seguros, los artículos de incorporación o reglamentos del asegurador cooperativo, **[ni]** con las reglas sobre elegibilidad de **[socio]** socia establecidas por **[la Junta]** el reglamento, la solicitante será considerada como socia de la cooperativa desde la fecha **[del acuerdo revocatorio,]** de dicha revocación.

**[(b) Las cooperativas, sociedades o asociaciones organizadas con fines no pecuniarios y las corporaciones cuyas actividades sean para fines benéficos y/o se basen en los principios cooperativos, podrán ser admitidas como socias por la Junta de Directores de la Cooperativa de Seguros, y tendrán los mismos derechos y obligaciones que esta ley concede e impone a las personas naturales que sean socias de una cooperativa de esta clase.]**

**[(c) Toda cooperativa, sociedad, asociación o corporación socia tendrá, en su junta de accionistas o de directores, la facultad de ejercer por delegación en una cooperativa de seguros todos los derechos que la ley concede a las personas naturales y todas las relaciones oficiales de la cooperativa de seguros con dichas entidades se mantendrán con las juntas de directores de éstas y como se provea en el reglamento de la cooperativa de seguros.]**

(b) Podrán ser socias del asegurador cooperativo las cooperativas y entidades, según definidas en este Capítulo.

(2) Renuncia y Separación **[Involuntaria]**

(a) Renuncia – Cuando **[un socio]** una socia desee terminar su relación con **[una cooperativa de seguros]** un asegurador cooperativo presentará su renuncia por escrito a la junta, la cual procederá de acuerdo con las disposiciones de este Código, los artículos de incorporación y el reglamento, o reglas aplicables al caso.

(b) Causas para la separación de la Socia

La junta de directores del asegurador cooperativo podrá separar o expulsar a una socia cuando considere que ésta:

(1) No cumple con sus deberes y obligaciones como socia, según establecidos en este Código o cualquier otro dispuesto por reglamento.

(2) Ha actuado en contra de los intereses o de los fines y propósitos del asegurador cooperativo.

(3) Ha violado las disposiciones de este Capítulo aplicables a las socias o incurrido en alguna de las violaciones consideradas por el Reglamento como causa de separación.

(b) Procedimiento para la Separación involuntaria

Cuando la Junta considere que un socio una socia está actuando en contra del interés **[de la** cooperativa**]** del asegurador cooperativo o de sus obligaciones contraídas con **[la misma]** éste, podrá separar **[el socio]** a la socia y **[privarlo]** privarla de sus derechos y beneficios en **[la cooperativa,]** el asegurador cooperativo, a partir de la fecha de la remoción, previa notificación escrita de los cargos dirigidos **[al socio afectado]** a la socia afectada a quien se le concederá una oportunidad razonable de defenderse, mediante audiencia ante la junta.

**[El socio así separado]** La socia separada tendrá derecho a solicitar reconsideración **[podrá apelar]** de la decisión de la Junta dentro de los **[diez (10)]** quince (15) días laborables siguientes a la fecha en que se le notifique su separación **[ante la próxima asamblea de socias que se celebre con posterioridad al acuerdo de la junta.]** La socia tendrá derecho a apelar de la decisión en reconsideración ante la próxima asamblea ordinaria de socias siempre y cuando le notifique a la junta su decisión de apelar, debidamente fundamentada, dentro de los quince (15) días laborables contados a partir de la notificación de la decisión en reconsideración.

La asamblea, por mayoría de los presentes, previa la correspondiente audiencia, siempre y cuando actúe conforme con el Código de Seguros, los artículos de incorporación o reglamento del asegurador cooperativo podrá ratificar la decisión de la Junta u ordenar la reinstalación de la socia, inclusive la restitución de sus derechos y privilegios.

**[A la muerte de un socio, sus herederos o causahabientes escogerán la persona que tendrá derecho a formar parte de la cooperativa de seguros si satisface los requisitos que para admisión de nuevos socios haya establecido la cooperativa, inscribiéndose a su nombre los certificados de aportación de fondos y otros haberes que tuviera el fenecido en la cooperativa. En caso de muerte del socio, el interés de éste en los bienes de la cooperativa le será entregado a la persona o personas que hubiere nombrado por orden escrita debidamente reconocida y radicada en la Secretaría de la Cooperativa.]**

(3) Certificado de aportación de fondos

(a) **[Todo socio]** Toda socia vendrá **[obligado]** obligada a pagar la cuota de entrada que dispondrá el reglamento de la cooperativa **[y suscribirá y pagará por lo menos]** que nunca será menor de un certificado de aportación de fondos.

(b) No se podrán transferir los certificados de aportación de fondos **[de una cooperativa]** del asegurador cooperativo sin el consentimiento de la Junta y sólo a **[personas]** cooperativas y entidades elegibles como **[socios]** socias de acuerdo con los artículos de incorporación. Esta restricción será impresa en todo certificado de aportación de fondos."

**[(4) Responsabilidad - El socio de una cooperativa de seguros será responsable por las deudas y obligaciones de la cooperativa únicamente hasta la suma, si la hubiere, que pueda quedar insoluta sobre los certificados de aportación de fondos suscritos.]**

**[(e) Derechos de votación; socio]**

(4) Derecho de Votación

**[Todo socio]** Toda socia tendrá derecho a **[emitir]** un solo voto en las asambleas ordinarias y extraordinarias del asegurador cooperativo, **[irrespectivamente de su interés o participación en o a]** independientemente de los certificados de aportación de fondos que posea **[de la cooperativa]** en éste. Disponiéndose que este derecho es **[personal]** e intransferible y solamente podrá ejercerse por el delegado de la socia en las asambleas **[de la cooperativa]** del asegurador cooperativo.

(5) Deberes y obligaciones de la socia

Toda socia deberá cumplir con las obligaciones que le impone este Capítulo, con las cláusulas de incorporación, con el reglamento y con:

(a) Cualquier obligación social o pecuniaria con el asegurador cooperativo.

(b) Los acuerdos de la asamblea y de la junta de directores.

(c) Será responsable por las deudas y obligaciones del asegurador cooperativo únicamente hasta la suma, si la hubiere, que pueda quedar insoluta sobre los certificados de aportación de fondos suscritos.

(d) Deberá patrocinar y velar por los intereses del asegurador cooperativo, lo que incluye además, entre otras cosas; aportar a su capital social para contribuir a su fortalecimiento y solidez.

(6) Liquidación de Obligaciones:

Cuando una socia deje de serlo, la junta pagará a la socia o a sus representantes autorizados, dentro de un año a partir de la fecha de la renuncia, expulsión o liquidación de la socia, la cantidad de dinero indicada en los documentos que acrediten su participación en los bienes del asegurador cooperativo. Cuando el pago total de dicha participación resulte, a juicio de la junta, perjudicial para el asegurador cooperativo en el desempeño operacional o en su estabilidad financiera y siempre que la decisión de la junta esté basada en criterios objetivos podrá pagar la participación de la siguiente forma:

(a) Dentro de un año después de la renuncia, expulsión o liquidación de la socia, le será pagado a ésta o a sus representantes legales, todo el interés inicialmente contribuido directamente por la socia en forma de capital.

(b) El resto del interés de la socia le será pagado anualmente en forma proporcional y por orden de fecha en que acumuló dichos haberes por años. Los haberes así acumulados se empezarán a pagar a partir no más tarde de un año de la renuncia, expulsión o liquidación de la socia y los mismos deberán pagarse dentro de un período no mayor de cinco (5) años. Los mismos continuarán pagándose en la forma antes indicada durante un período adicional al antes expresado, previa aprobación del Comisionado de Seguros de Puerto Rico. En cualquier fecha de los períodos antes indicados, la junta podrá ordenar el pago del balance adeudado a esa fecha. Si en forma rotativa no pudiese liquidarse los haberes totales de la socia dentro del período considerado anteriormente, la junta vendrá obligada a liquidar el exceso de dicha acumulación en forma prorrateada o en una suma global en cualquier fecha dentro del período indicado. Los certificados con fecha de redención en poder de las socias que se retiran, se liquidarán en o antes de dicha fecha.

Sección 10.-Se enmienda el Artículo 34.090 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.090.-Primera Asamblea de Socios

(1) Tan pronto se hayan pagado certificados de aportación por tres cuartas partes del importe de los fondos excedentes mínimos requeridos y una vez se hayan aceptado tres cuartas partes del número total de solicitudes de **[socios]** socias requeridas como condición para el certificado original de autoridad, los directores de un asegurador cooperativo en proceso de formación convocarán a la primera asamblea de **[socios]** socias. La asamblea se celebrará en cualquier pueblo o ciudad de Puerto Rico como se exprese en sus artículos de incorporación **[y aviso de la fecha, hora, sitio, y fines de la Asamblea se enviará por escrito por correo certificado a cada uno de dichos socios, dirigido al socio a su última dirección registrada en la Cooperativa, o le será entregada personalmente, con no menos de treinta (30) días de anterioridad a la fecha de la asamblea]** y se enviará con no menos de treinta (30) días de anterioridad a la asamblea un aviso escrito a la última dirección de la socia, indicando la fecha, hora, sitio y fines de la asamblea.

(2) La asamblea considerará y aprobará los estatutos **[de la cooperativa]** del asegurador cooperativo, elegirá los directores, con términos diferentes, de uno, de dos o de tres años, según los escalonamientos iniciales estipulados en el Reglamento, y resolverá los demás asuntos que propiamente se sometan a su consideración. "

Sección 11.-Se enmienda el Artículo 34.100 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.100.-Asambleas ordinarias y extraordinarias de socias

La asamblea general de **[socios de las cooperativas de seguros]** socias del asegurador cooperativo se celebrará en cualquier ciudad o pueblo de la Isla de Puerto Rico donde haya **[socios afiliados, en la fecha y hora que dispongan sus reglamentos]** socias.

Se dará aviso de dicha asamblea con no menos de veinte (20) días de anticipación **[en la forma que dispongan los estatutos]**.

La asamblea anual ordinaria cubrirá las vacantes que existan o que **[ocurran]** hayan ocurrido en la junta de directores, recibirá o considerará los informes de los funcionarios **[de la cooperativa]** y funcionarios de la junta del asegurador cooperativo en cuanto a sus negocios y resolverá los demás asuntos que propiamente **[se]** sometan **[a su consideración]** las socias a través de sus delegados. Disponiéndose que entre una (1) asamblea ordinaria de socias y la subsiguiente no podrá transcurrir un período de tiempo de más de trece (13) meses.

Disponiéndose, además, que el contenido de las mociones y resoluciones que se presenten en las asambleas deberán estar en armonía con los fines y propósitos del asegurador cooperativo. Se dispone, además, en lo referente a las resoluciones, que éstas deberán someterse debidamente aprobadas por la junta de directores de las socias a la junta del asegurador cooperativo dentro del período de tiempo que disponga el reglamento, y en ausencia de reglamentación, según lo disponga la junta, para su evaluación y recomendación a la asamblea.

Será obligación de la junta de directores convocar a reunión extraordinaria general de socios cuando el 10% de los socios radique por escrito con el Secretario una petición solicitando la celebración de tal asamblea y especificando los asuntos a tratarse en la misma."

Sección 12.-Se enmienda el Artículo 34.110 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.110.-Requisitos e Impedimentos para ser Director

(1) Todo **[Cada]** director o candidato a director de **[una cooperativa]** un asegurador cooperativo deberá **[reunir]** cumplir, desde su nominación y durante toda su incumbencia, con los siguientes requisitos:

(a) Debe ser socio de la cooperativa afiliada o miembro de entidad socia que lo nomina.

**[(b) No debe haberse declarado nunca en quiebra fraudulenta voluntaria o involuntaria ni otorgado fraudulentamente una cesión general a beneficio de acreedores.]**

**[(c.) No debe haber sido convicto nunca de un delito que envuelva depravación moral.]**

[(d) **No ser director ni funcionario de cualquiera de las instituciones que se describen en los Artículos 3.040(7) y 3.200(3) de este código. No obstante esta prohibición no impedirá que un director de una cooperativa de crédito sea también director de una cooperativa de seguros.]**

(b) **[(e)]** Haber tomado seminarios en cooperativismo. **[y tomar un seminario de seguros en su primer año como director]** En el caso del candidato que aspira por primera vez a director del asegurador cooperativo y que no tiene experiencia ni preparación en el campo de los seguros, también deberá aprobar un curso de seguros previo a su elección. No obstante, el candidato, mediante un compromiso escrito con el asegurador cooperativo, podrá tomar y aprobar dicho curso durante el primer año de su incumbencia. De escoger esta opción, y no aprobar el curso, su cargo cesará al momento de recibir la notificación de desaprobación y la vacante que se produzca podrá ser cubierta por la junta de directores, para lo cual seguirá el procedimiento establecido en el Artículo 34.120 (6). El curso de seguros será coordinado, en ambas instancias, por el asegurador

cooperativo, y presentado ante la consideración del Comisionado de Seguros. El curso deberá incluir, al menos, principios generales del seguro, tipos de seguro que mercadea el asegurador cooperativo, y lo referente a las operaciones del asegurador cooperativo. Además, todo director deberá participar en el programa de educación continuada que implementará el asegurador cooperativo para asegurar su capacitación permanente.

(c) **[(f)]** Cumplir con todos los requisitos establecidos en el reglamento del asegurador cooperativo.

(d) **[(e)]** Ser elegible para estar cubierto por una fianza de fidelidad.

(2). **[Todos los directores deberán]** Ser residente **[s]** de Puerto Rico y residir de hecho en Puerto Rico.

(3). Por lo menos tres cuartas (¾) partes deberán ser ciudadanos americanos.

(4) Serán impedimentos para ser director de un asegurador cooperativo los siguientes:

(a) Incumplir con alguno de los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo.

(b) Haberse declarado alguna vez en quiebra, ya sea voluntaria, involuntaria o fraudulenta, o haber otorgado fraudulentamente una cesión general a beneficio de acreedores.

(c) Haber sido convicto por delito grave o menos grave o encontrado responsable en una acción civil, en ambos casos a nivel estatal, federal, en el extranjero o en su país de origen, por hechos que impliquen apropiación ilegal, fraude, abuso de confianza, depravación moral o cualesquiera otra conducta criminal de tipo grave.

(d) Ser director, o funcionario de cualquiera de las instituciones que se describen en la sección 304-1(4) de este Código. Disponiéndose que para efectos de esta disposición es funcionario toda persona que en virtud de cualquier nombramiento o contrato y mediante el pago de un salario, compensación o remuneración, ocupe un cargo que conlleve su participación en la toma de decisiones y/o en el diseño e implementación de las políticas de las instituciones financieras señaladas en el Artículo 304-1(4) de este Código. No obstante, esta prohibición no impedirá que un director de una cooperativa de ahorro y crédito, sea también director de un asegurador cooperativo.

(e) Poseer interés económico, directo o indirecto en cualquier empresa cuyos negocios estén en competencia con los del asegurador cooperativo.

(f) Incumplir con los reglamentos que adopte el asegurador cooperativo y su junta de directores para preservar la integridad y evitar conflictos de interés en el desempeño de sus responsabilidades como director del asegurador cooperativo.

(g) Haber sido separado como miembro de junta o comité, o como funcionario de la gerencia de una cooperativa o cualquier otra corporación, asociación o entidad, por las causas establecidas en las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o en las leyes de los Estados Unidos, en cualquier otra jurisdicción internacional o en su país de origen. Disponiéndose que la destitución en bloque debido a sindicatura contemplada por ley, no se considerará impedimento en cuanto al director involucrado, si éste presentare prueba fehaciente de haber sido desagraviado o liberado de responsabilidad en cuanto a las razones que la motivaron, por la autoridad competente que ejecutó dicha destitución en bloque.

(h) Toda persona que sea miembro de la junta de directores de dos (2) o más organismos centrales del Movimiento Cooperativo de Puerto Rico, según definidos en el reglamento del asegurador cooperativo, estará impedida de ser al mismo tiempo miembro de la junta de directores del asegurador cooperativo.

(i) Tener litigios o representar legalmente, en cualquier foro, a la parte promovente de un litigio en contra del asegurador cooperativo.

De surgir cualquiera de los impedimentos antes señalados mientras el director desempeña su función lo descualificaría para continuar siendo director, en cuyo caso la junta de directores seguirá el procedimiento establecido para la separación involuntaria de socias."

Sección 13.-Se enmienda el Artículo 34.120 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.120.- Elección de directores

(1) Los asuntos de **[una cooperativa]** un asegurador cooperativo serán dirigidos por una junta de no menos de cinco (5) ni más de trece (13) directores elegidos por **[los socios]** las socias de entre **[ellos mismos]** ellas mismas.

(2) Cada director será electo **[por un término mínimo de un (1) año y máximo de cuatro (4) años y hasta que su sucesor haya sido electo y tome posesión, según lo establezca el reglamento interno; Disponiéndose, que ninguna persona podrá ser electa por más de dos (2) términos consecutivos]** en la asamblea anual de socias por un término, y hasta que su sucesor haya sido electo y tome posesión en la próxima asamblea general ordinaria o extraordinaria. Disponiéndose, que ninguna persona podrá ser electa por más de tres (3) términos consecutivos. Deberá transcurrir un período de tiempo de veinticuatro (24) meses, para que una persona que haya sido electa por tres términos en forma consecutiva pueda aspirar nuevamente a ser director del asegurador cooperativo.

(3) Los nombres de los primeros directores provisionales **[serán relacionados]** se harán constar en los artículos de incorporación. Sus sucesores serán electos por **[los socios]** las socias en la primera asamblea general.

(4) El número, calificaciones, término y los poderes y facultades de los directores serán los que prescriban los artículos de incorporación y el reglamento de la cooperativa del asegurador cooperativo con sujeción a las disposiciones de este código.

(5) La elección se llevará a cabo por **[papeleta secreta]** voto secreto excepto cuando haya un solo candidato nominado.

(6) Las vacantes que ocurran en la junta de directores que no sean por **[la expiración]** el vencimiento del término serán cubiertas por **[designación de]** los directores miembros restantes de la junta. La persona así electa, para cubrir una vacante en la junta desempeñará su cargo hasta que su sucesor haya sido electo por **[los socios]** las socias en la próxima asamblea general ordinaria o extraordinaria. Disponiéndose que el tiempo de incumbencia del director seleccionado por la junta para cubrir la vacante se considerará como un término según se define en este capítulo.

(7) Durante **[el término]** el desempeño de su cargo, ningún director será parte en un contrato lucrativo con **[la sociedad]** el asegurador cooperativo que de modo alguno difiera de **[la]** su relación de asegurado.

(8) Cualquier **[socio]** socia podrá solicitar la destitución de un director mediante formulación de cargos que deberán ser radicados por escrito ante el secretario o el presidente **[de la cooperativa]**, de la junta del asegurador cooperativo acompañado **[s]** de una solicitud suscrita por el cinco (5) por ciento de **[todos los socios]** todas las socias solicitando la destitución del director en cuestión. Tal solicitud será sometida a la consideración de la siguiente asamblea de **[socios]** socias que podrá ser extraordinaria y convocada para tal efecto, la cual podrá destituir al director por mayoría de **[los socios]** las socias presentes. Disponiéndose, que tal asamblea se celebrará dentro de un término de treinta (30) días a partir de la radicación de la solicitud. El director al cual se le formulen cargos será notificado de los mismos por escrito con no menos de **[(10)]** quince (15) días con

anterioridad a la asamblea y tendrá una oportunidad en la asamblea de ser oído en persona o por medio de abogado y de ofrecer evidencia; y la persona o personas que hubieren formulado los cargos contra él gozarán de igual derecho."

En caso que el reglamento disponga la elección de directores por distritos, la solicitud de destitución de un director podrá ser suscrita por cinco (5) por ciento de los socios residentes en el distrito que lo eligió. La junta deberá entonces convocar a una asamblea extraordinaria de los socios residentes en el distrito con el propósito de considerar la destitución del director. Por acuerdo de la mayoría de los socios presentes en dicha asamblea, dicho director tendrá la oportunidad de defenderse en esta asamblea, y los socios que hayan solicitado la destitución tendrán igual oportunidad en cuanto a sostener los cargos.

Sección 14.-Se añade el Artículo 34.121 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.121.-Obligación de directores en el desempeño de sus funciones.

Los directores del asegurador cooperativo descargarán sus deberes con el grado de cuidado que es propio de la relación de fiducia que tienen con el asegurador.

Ningún director o funcionario de un asegurador aceptará, excepto para el asegurador, ni será el beneficiario de ningún honorario, corretaje, donación u otro emolumento por razón de alguna inversión, préstamo, depósito, compra, venta, permuta, reaseguro u otra transacción similar hecha por el asegurador, o para el mismo, ni estará pecuniariamente interesado en dichas transacciones en ninguna capacidad, excepto en representación del asegurador.

Este artículo no prohíbe a tal director o funcionario convertirse en tenedor de una póliza del asegurador y disfrutar con arreglo a la póliza de todos los derechos y privilegios común y ordinariamente provistos en la misma para los tenedores de tales pólizas en general.

Cuando los directores y funcionarios de la junta tengan intereses personales, o representativos, en asuntos que afecten de alguna manera al asegurador cooperativo, estarán sujetos al deber de lealtad que les obliga a actuar de forma justa y en armonía con los estatutos y normas internas del asegurador cooperativo, en relación con los asuntos de ésta."

Sección 15.-Se enmienda el Artículo 34.130 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.130.-Funcionarios

[(1)] Los funcionarios de la junta serán elegidos por la junta de directores del asegurador cooperativo. **[La junta deberá elegir un presidente, un secretario y un tesorero y podrá elegir uno o más vicepresidentes y aquellos otros oficiales de Junta que sean autorizados por el reglamento.]** Disponiéndose que no podrá ser funcionario de la junta aquel director electo por primera vez y que no tenga experiencia ni preparación en el campo de los seguros. **[De ser designado y nombrado un administrador para la cooperativa, éste no tiene que ser socio de la cooperativa, pero si lo fuera, no podrá ser director al mismo tiempo.]**

(2) El principal funcionario ejecutivo de la gerencia del asegurador cooperativo no tiene que ser socio o miembro de una cooperativa o entidad socia, pero si lo fuera no podrá ser, a la vez, delegado de ésta. Disponiéndose que dicha persona no podrá ser al mismo tiempo director de la junta de directores del asegurador cooperativo.

(3) Ningún director podrá percibir compensación o bonificación alguna como tal director, más allá de la asignación de gastos de viajes y dietas durante los días en que asista a reuniones de la junta o que dedique a actividades relacionadas con **[la cooperativa]** el asegurador cooperativo por encargo de la propia junta ya sea en el área de seguros o por su naturaleza cooperativa. Los directores tendrán derecho a que se les rembolsen los gastos necesarios en que incurran en el desempeño de sus deberes oficiales. También, recibirán una dieta por cada reunión a que asistan o por cada día en que realicen gestiones. Las dietas que recibirán los directores serán

establecidas en el reglamento que para esos efectos promulgue la junta. Se podrá conceder a los directores aquellos seguros de vida y otros seguros que puedan proteger, tanto a **[la cooperativa como al funcionario]** éstos en sus funciones, como al asegurador cooperativo; sin que esto se entienda como compensación o bonificación.

(4) Ninguna persona podrá actuar como director, funcionario de la gerencia o empleado **[de la cooperativa]** del asegurador cooperativo al mismo tiempo.

(5) Todo funcionario de la gerencia o empleado que en sus labores intervenga o manipule dinero en efectivo deberá prestar fianza. El monto de la fianza será determinado por la junta de directores. La prima o costo de la fianza será sufragada por el asegurador cooperativo.

(6) Los funcionarios **[de una cooperativa de seguros]** de la gerencia del asegurador cooperativo no podrán ser a su vez funcionarios de la junta, ni directores de cualquiera de las instituciones que se describen en el inciso cuatro (4) de la Sección 304-1 de este Código."

Sección 16.-Se enmienda el Artículo 34.140 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.140.-Educación

**[Todas las cooperativas de seguros]** Todo asegurador cooperativo que se organice bajo este Código, estará obligado a separar anualmente no menos de un décimo (1/10) del uno por ciento (1%) del volumen total de primas pagadas para fines de educación cooperativa. Disponiéndose, que **[las cooperativas]** los aseguradores cooperativos podrán aportar voluntariamente parte de todos sus fondos para fines educativos a la Liga de Cooperativas de Puerto Rico para que ésta intensifique el trabajo de educación cooperativa."

Sección 17.-Se enmienda el Artículo 34.150 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.150.-Reserva Social

**[Las cooperativas de seguros]** El asegurador cooperativo destinará parte de sus sobrantes netos disponibles para, **[programas sociales tales como hospitales, sanatorios para ancianos, orfelinatos, parques, escuelas, casa cunas, ateneos, y centros de cultura]** de forma equitativa, aportar a programas sociales tales como hospitales, albergues o programas de ayuda para niños y mujeres maltratadas, enfermos terminales, hogar o centro de ancianos, escuelas y programas de desarrollo cooperativo que estén dirigidos a fomentar el desenvolvimiento de las comunidades y grupos marginados.

La utilización y administración de la reserva social será reglamentada por la junta de directores del asegurador cooperativo."

Sección 18.-Se enmienda el Artículo 34.160 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.160.-Derecho al uso del término "cooperativa"

**[Las cooperativas de seguros]** Los aseguradores cooperativos que se organicen de acuerdo con este Capítulo vendrán obligados a usar como parte de su nombre el término "cooperativa", "cooperación", "cooperadores" o palabras de similar significación; **[y dicho término será de naturaleza tal]** y de forma tal que responda al sentido en que una sociedad cooperativa se establece bajo las disposiciones de la Ley Núm. 50, aprobada el 4 de agosto de 1994, **[Ley 291, aprobada el 9 de abril de 1946]**, según ha sido subsiguientemente enmendada, conocida como Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico. Ninguna persona, firma, corporación, o asociación, en Puerto Rico que no sea una sociedad cooperativa organizada bajo las leyes vigentes, tendrá derecho a usar tales términos como parte de su nombre."

Sección 19.-Se enmienda el Artículo 34.170 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.170.-Aseguradores cooperativos no son para restringir los negocios

**[Ninguna cooperativa de seguros]** Ningún asegurador cooperativo organizado bajo este Código será considerado como una conspiración o combinación para restringir los negocios ni como monopolio ilegal, ni se considerará que ha sido organizado con el propósito de disminuir la competencia o de fijar primas arbitrariamente, ni se interpretarán los contratos celebrados entre ellos y sus socios socias y tenedores de pólizas ni los demás contratos autorizados o que se celebren en virtud de las disposiciones de este Código, como una restricción ilegal de los negocios y como parte de una conspiración o combinación para realizar un propósito y acto impropio o ilegal."

Sección 20.-Se enmienda el Artículo 34.180 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.180.-Exención de Contribuciones

(1) Se ordena al Secretario de Hacienda de Puerto Rico que exima a **[toda cooperativa de seguros]** todo asegurador cooperativo debidamente **[organizada]** organizado de acuerdo con este Código de toda contribución sobre la propiedad mueble o inmueble perteneciente a dichas cooperativas; disponiéndose, que dicha exención no excederá en ningún caso de un valor de tasación de cien mil ($100,000) dólares.

(2) La exención de contribución que por la presente se autoriza, incluirá también las acciones emitidas por dichas cooperativas dentro de los poderes y atribuciones que este Código le concede.

(3) **[Las sociedades cooperativas]** Los aseguradores cooperativos que deseen acogerse a la exención contributiva podrán solicitar del Secretario de Hacienda de Puerto Rico la exención del pago de contribuciones, acompañando a la solicitud una relación de sus bienes y acciones y la valoración de los mismos, artículos de incorporación y los demás datos que el Secretario de Hacienda requiera de la Cooperativa para dictar su resolución de exención. Dicha resolución se publicará para general conocimiento en la prensa periódica del país y a costa de la cooperativa eximida de contribución.

(4) **[Las Cooperativas de Seguros]** Los aseguradores cooperativos **[organizadas]** organizados bajo este Código, por ser asociaciones sin fines de lucro, no estarán **[sujetas]** sujetos al pago de contribuciones sobre ingresos."

Sección 21.-Se enmienda el Artículo 34.191 a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.191.-Adquisición de Acciones de otros aseguradores de tipo cooperativo

Un asegurador cooperativo podrá adquirir acciones de otros aseguradores de tipo cooperativo organizados o a organizarse de acuerdo con lo dispuesto por este Código. Las cantidades dedicadas a tal fin no deberán exceder del 50 porciento de la parte de su excedente en exceso del capital pagado requerido de un asegurador por acciones del país que hiciere las mismas clases de seguros.

Los aseguradores cooperativos también podrán organizar y adquirir otros aseguradores y cualquier otro tipo de empresa; según lo provee el capítulo seis (6) o cualquier otra disposición de este Código, por sí solos, o en consorcio con otras instituciones."

Sección 22.-Se enmienda el Artículo 34.192 a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.192.-Menoscabo de activo

(1) Si el activo de un asegurador cooperativo sufriere menoscabo, el Comisionado determinará inmediatamente el monto de la deficiencia y lo notificará **[a la cooperativa]** al asegurador cooperativo para que éste la cubra, bien requiriendo a sus **[socios]** socias que hagan la aportación adicional o bien en otra forma, dentro de noventa 90 días después de la notificación.

(2) La deficiencia deberá cubrirse en efectivo o en activo elegible de acuerdo con este código para la inversión de los fondos **[de la cooperativa]** del asegurador cooperativo.

(3) Para los fines de esta sección, se considerará que un asegurador cooperativo tiene en menoscabo en activo en la medida que su pasivo exceda de su activo, ambos determinados como se dispone en los Artículos 5.010 a 5.150 de este Código, pero incluyendo como pasivo cualquier fondo excedente mínimo que se requiere mantener como autorización para concertar las clases de seguros que se llevan a cabo.

(4) Si la deficiencia no se cubre, presentándose prueba de ello al Comisionado, dentro de dicho término de noventa (90) días, el asegurador cooperativo será considerado insolvente y se procederá contra él de acuerdo con lo dispuesto en este Código.

(5) Si la deficiencia no se cubre, el asegurador cooperativo no podrá emitir o entregar ninguna póliza después de expirado dicho término de noventa (90) días. Cualquier funcionario **[o director]** de la junta o funcionario que viole o que a sabiendas permita que se viole esta disposición, incurrirá en una multa no mayor de mil (1,000) dólares por cada violación."

Sección 23.-Se enmienda el Artículo 34.193 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.193.-Imposición de Cuotas a Socios para Cubrir Menoscabo de Activo.

(1) Si se autoriza por el voto de no menos de las dos terceras (2/3) partes de **[los socios]** las socias de un asegurador cooperativo presentes en asamblea extraordinaria convocada al efecto, la junta de directores podrá imponer una derrama especial a prorrateo sobre todos los certificados de aportación emitidos por el asegurador cooperativo, para garantizar total o parcialmente los fondos necesarios para cubrir el menoscabo de activo, de acuerdo con la notificación y requerimiento del Comisionado, según se dispone en el Artículo 34.192 de este Código.

(2) Aviso escrito de tal derrama impuesta se transmitirá por correo certificado a cada una de **[dichos socios]** dichas socias a la última dirección registrada en **[la cooperativa]**, el asegurador cooperativo, requiriendo el pago de dicha derrama antes de la expiración del término de ochenta y cinco (85) días.

Previo acuerdo de la junta de directores y con el consentimiento del Comisionado, dicho aviso podrá disponer que si **[el socio]** la socia deja de pagar la derrama a su vencimiento, sus certificados de aportación de fondos, o la parte de ellos que fuere necesario al efecto, pasarán a ser propiedad **[de la cooperativa]** del asegurador cooperativo, para una fecha, dentro del período de cinco (5) días después de expirar el término especificado en el párrafo anterior. En ningún caso el asegurador cooperativo podrá apropiarse certificados de aportación de **[los socios]** las socias cuyo importe exceda de la derrama correspondiente a **[dicho socio]** dicha socia. La apropiación de certificados de aportaciones de fondos por el asegurador cooperativo en la forma prescrita se registrará en los libros **[de la cooperativa]** del asegurador cooperativo y será plenamente obligatoria y efectiva para todas las partes. Disponiéndose, que tan pronto las condiciones financieras del asegurador cooperativo lo permita, la junta de directores podrá proceder a acreditar a **[los socios]** las socias certificados de aportación de fondos, cuyo importe no excederá en ningún caso de las sumas apropiadas en la forma antes descrita. El asegurador cooperativo o sus acreedores no tendrán remedio adicional contra **[el socio]** la socia que deje de pagar una derrama así impuesta."

Sección 24.-Se enmienda el Artículo 34.200 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.200.-Personas relacionadas con otros aseguradores

Ningún agente, solicitador, corredor, ajustador, consultor o asegurador relacionado con aseguradores no organizados bajo las disposiciones de este Código podrá pertenecer como socio ni adquirir

certificados de aportación de fondos ni organizar **[una cooperativa de seguros]** un asegurador cooperativo según se define en este Capítulo."

Sección 25.-Se enmienda el Artículo 34.210 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.210.-Quienes no podrán ser socios

Ninguna persona natural [o jurídica] podrá ser [socios] socia de un [una cooperativa de seguros] asegurador cooperativo. Tampoco podrá una persona natural o jurídica organizar ni ser socio de un asegurador cooperativo con arreglo a este Capítulo, si a dicha persona se le ha cancelado su licencia de acuerdo con el Artículo 9.460 de este Código, **[o la Ley de Seguros de 1921,]** o está bajo investigación, encaminada a este fin, por el Comisionado de Seguros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. **[antes Superintendente de Seguros."]**

Sección 26.-Se enmienda el Artículo 34.220 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.220.-Aplicabilidad de otras disposiciones

No aplicarán los Artículos 28.010 a 28.200 de este Código, excepto **[los Artículos]** el Artículo 28.030. No aplicarán los Artículos 29.010 a 29.540 de este Código, excepto los Artículos 29.050, 29.140, 29.240, 29.260, 29.300, 29.310, 29.320, 29.360, 29.460 a 29.530, inclusive."

Sección 27.-Se enmienda el Artículo 34.230 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.230.-Aplicabilidad de disposiciones no exceptuadas

Todas las disposiciones de este Código que no hayan sido expresamente exceptuadas regirán hasta donde sean aplicables a **[las cooperativas de seguros]** los aseguradores cooperativos. En aspectos de naturaleza cooperativa no cubiertas por este Capítulo se recurrirá en primer lugar a la Ley General de Sociedades Cooperativas, Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito y por último, al Código Civil de Puerto Rico."

Sección 28.-Se añade el Artículo 34.240 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que disponga como sigue:

"Artículo 34.240.-Vigencia

Esta Ley entrará en vigor dentro de los noventa (90) días después de su aprobación."

**"INFORME CONJUNTO**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestras Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas; y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 2592, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas.

**En el Texto:**

| | |
|---|---|
| Página 2, Línea 4 | Después de "únicamente a" eliminar **"[cooperativas de seguros]"** |
| Página 3, Línea 22 | Después de "asegurador cooperativo" eliminar todo el contenidoa la 23 y Página 4, del inciso 5 Línea 1 a la 3 |
| Página 5, Línea 1 | Eliminar **"[Cooperativa de seguros, requisitos generales:]"** |
| Página 5, Línea 4 | Después de "los" eliminar **"[socios y:]"** |

| | |
|---|---|
| Página 5, Línea 5 | Después de "operar" eliminar **"[a base de control de los socios y funcionar ]"** |
| Página 5, Línea 6 | Después de "cuanto a", añadir **"sus"** y eliminar **"[sus socios]"** |
| Página 5, Línea 8 | Eliminar "socios. Dichos socios"y sustituir por "socias. Estas" |
| Página 5, Línea 10 | Después de "cada" eliminar **"[socio]"** y sustituir por "socia", luego de "voto" eliminar **"[solamente]"** y luego de "que deberá"eliminar **"[ejercitarse]"** |
| Página 5, Línea 11 | Después de "ejercer" eliminar "**[personalmente y no por apoderado]**" |
| Página 5, Línea 13 | Después de "(5)" eliminar "**[No negar admisión]**", después de |
| Página 5, línea 5 | "como" eliminar "**[socio]**", después de "socia" eliminar **"[a ninguna persona por consideración de raza, color, jerarquía social, religiosa o afiliación política; esto es, admitir a todo el]"** y Después de **"a todo el"** insertar **"a toda"** |
| Página 5, Línea 15 | Después de "elegible" eliminar "**[de acuerdo con la naturaleza** |
| Página 5 línea 17 | **y alcance de las operaciones y actividades del asegurador cooperativo, solicitase]"** |
| Página 5, Línea 18 | Después de "(1) (i)" insertar "de este capítulo" |
| Página 5, Línea 19 | Eliminar "**[Disponiéndose]**" |
| Página 5, Línea 19 | Después de "sin embargo" añadir una "coma (,)" y después de |
| Página 5 línea 20 | "dispuesto" eliminar "**[que esta garantía]**" |
| Página 6, Línea 1 | Después de "propósitos" eliminar "**[de la sociedad]**" |
| Página 6, Línea 3 | Después de "pagar" eliminar "(,)"; después de "acreditar" eliminar "," y **"[anualmente]"** |
| Página 6, Línea 4 | Eliminar **"[de acuerdo con los sobrantes de la Cooperativa]"** |
| Página 7, Línea 4 | Después de "(1)" eliminar "**[La Cooperativa de Seguros]**" |
| Página 7, Línea 6 | Después de "Capítulo" eliminar "**[Cooperativa de Seguros]**" |
| Página 7, Línea 7 | Después de "sus" eliminar "**[socios]**" |
| Página 7, Línea 9 | Después de "(3)" eliminar "**[Las Cooperativas de Seguros]**" |
| Página 7, Línea 13 | Eliminar negrillas y el indentado de "Artículo 34.040.- Incorporación de un asegurador cooperativo |
| Página 7, Línea 15 | Después de "incorporar" eliminar "**[una cooperativa de seguros]**" |
| Página 8, Línea 8 | Después de "incorporación de" eliminar "**[una Cooperativa de Seguros]**" |
| Página 8, Línea 10 | Después de "nombre" eliminar "**[de la cooperativa de seguros]**" |

| | |
|---|---|
| Página 8, Línea 15 | Después de "disponiéndose que" eliminar "**[ninguna cooperativa de seguros]**" |
| Página 8, Línea 16 a la 17 | Eliminar "**[otra cooperativa de seguros]**" |
| Página 8, Línea 20 | Eliminar "**[de la cooperativa de seguros]**" |
| Página 9, Línea 1 | Eliminar "**[ la cooperativa]**" |
| Página 9, Línea 3 | Eliminar "**[ la cooperativa]**" |
| Página 9, Línea 4 | Eliminar "**[autorizada a hacer una sola de dichas]**" |
| Página 9, Línea 4 | Eliminar "**[autorizada a hacer una sola de dichas]**" |
| Página 9, Línea 19 a la 20 | Eliminar "**[una cooperativa de seguros]**" |
| Página 10, Línea 3 | Eliminar "**[los socios]**" |
| Página 10, Línea 9 | Después de "por" eliminar "**[los socios]**"; después de"socias" eliminar "**[de la cooperativa]**" |
| Página 10, Línea 10 y 11 | Eliminar "**de la cooperativa de seguros]**" |
| Página 10, Línea 13 | Eliminar "**[de la cooperativa]**" |
| Página 10, Línea 20 a la 22 | Eliminar todo su contenido y sustituir por el siguiente texto: |
| Página 11, Línea 1 y 2, | **" (1) Las socias reunidas en una asamblea legalmente constituida con ese propósito, tendrán facultad para aprobar por mayoría de votos o enmendar con el voto de 2/3 partes los reglamentos que regulen los procedimientos del asegurador cooperativo y rijan la administración de sus negocios. Dichos estatutos, si fueren compatibles con la ley y los artículos de incorporación, regirán:"** |
| Página 11, Línea 5 | Después de "(b)" eliminar "**[Fecha]**" |
| Página 11, Línea 8 | Después de "total de" eliminar "**[socios de la cooperativa]**" |
| Página 11, Línea 12 | Después de "(c)" eliminar "**[Fecha]**" |
| Página 11, Línea 14 | Después de "cuales" eliminar "**[los socios]**" |
| Página 11, Línea 15 | Después de "extraordinarias" eliminar "**[de la cooperativa]**" |
| Página 11, Línea 17 | Después de "aportación" eliminar "**[de la cooperativa]**" |
| Página 11, Línea 19 | Después de "intereses de" eliminar "**[sus socios]**" |
| Página 11, Línea 21 a la 23, a las páginas 12, línea 1-23 y página 14, línea 1-12 | Eliminar todo el contenido del inciso **"(g)"** |
| Página 13, Línea 13 | Eliminar "(h)" y sustituir por "(g)" |
| Página 13, Línea 14 | Después de "Junta." eliminar "**[y los socios Este dispondrá, además, los derechos que correspondan a los socios al ocurrir su renuncia, expulsión o al perder su condición de socio.]**'' |
| Página 13, Línea 17 | Eliminar "(i)" y sustituir por "(h)" |
| Página 13, Línea 20 | Eliminar "(j)" y sustituir por "(i)" |
| Página 13, Línea 22 | Después de "(2)" eliminar "**[La cooperativa de seguros]**" |
| Página 13, Línea 23 | Después de "secretario" " eliminar "**[de la cooperativa]**" |

a la Página 14, Línea 1

| | |
|---|---|
| Página 14, Línea 4 | Eliminar **"[los socios]"** y después de "pólizas" eliminar **"[de la cooperativa]"** |
| Página 14, Línea 6 | Eliminar **"[la cooperativa]"** |
| Página 14, Línea 12 | Eliminar "liquidaciones" y sustituir por "liquidación" |
| Página 14, Línea 15 | Eliminar **"[una cooperativa de seguros]"** |
| Página 14, Línea 16 | Eliminar **"[socios]"** |
| Página 14, Línea 19 | Eliminar **"[de la cooperativa]"** |
| Página 14, Línea 22 | Eliminar **"[el aspirante]"** |
| Página 14, Línea 22 y 23 | Eliminar **"[apelar de dicha decisión]"** y después de "dentro de" eliminar **"[diez (10)]"** |
| Página 15, Línea 1 y 2 | Eliminar **"[de ser notificado por escrito de la resolución correspondiente, ante la próxima asamblea que se celebre]"** |
| Página 15, Línea 8 a la 10 | Después de "misma" eliminar **"desde que fuese notificada por escrito de la resolución correspondiente, ante la próxima asamblea que se celebre.]"** |
| Página 15, Línea 12 | Eliminar **"[no esté en pugna]"** |
| Página 15, Línea 14 | Eliminar **"[ni]"** |
| Página 15, Línea 15 | Eliminar **"[socio]"** y **"[la Junta]"** |
| Página 15, Línea 16 | Después de "socia" eliminar **"[de la cooperativa]"** y sustituir por "del asegurador cooperativo" |
| Página 15,Líneas 16 y 17 | Después de "fecha'' eliminar **"[del acuerdo revocatorio]''** |
| Página 15, líneas 16 y 17 | Eliminar **"[del acuerdo revocatorio]"** |
| Página 15, Línea 18 a | Eliminar todo su contenido |
| Página 16, Línea 9 | |
| Página 16, Línea 12 | Eliminar **"[Involuntaria]"** |
| Página 16, Línea 13 | Eliminar **"[un socio]"** |
| Página 16, Línea 14 | Eliminar **"[una cooperativa de seguros]"** |
| Página 17, línea 8 | Eliminar **"[de la cooperativa]"** |
| Página 17, Línea 8 y 9 | Después de "con" eliminar **"[la misma]"** |
| Página 17, Línea 9 | Eliminar **"[el socio]"** y **"[y privarlo]"** |
| Página 17, Línea 10 | Eliminar **"[la cooperativa]"** |
| Página 17, Línea 11 | Eliminar **"[al socio afectado]"** |
| Página 17, Línea 14 | Eliminar **"[el socio así separado]"** |
| Página 17, Línea 15 | Eliminar **"[podrá apelar]"** y después de "los" eliminar **"[diez (10)]"** |
| Página 17, Línea 16 y 17 | Después de "separación" eliminar **"[ante la próxima asamblea de socias que se celebre con posterioridad al acuerdo de la junta.]"** |
| Página 18, Línea 3 a la 10 | Eliminar todo el contenido |
| Página 17, Línea 12 | Después de "(a)" eliminar **"[Todo socio]"** y después de "vendrá" eliminar **"[obligado]"** |

| | |
|---|---|
| Página 18, Línea 13 a la 14 | Eliminar **"[y suscribirá y pagará por lo menos]"** |
| Página 18, Línea 16 y 17 | Eliminar **"[de una cooperativa]"** |
| Página 18, Línea 18 | Eliminar **"[personas]"** |
| Página 18, Línea 19 | Eliminar **"[socios]"** |
| Página 18, Línea 21 a la 23 | Eliminar todo el contenido de estas líneas |
| Página 19, Línea 1 | Eliminar **"[(e) Derechos de votación; socio]"** |
| Página 19, Línea 3 | Eliminar **"[todo socio]"** y después de "derecho a" eliminar **"[emitir]"** |
| Página 19, Línea 4 a la 5 | Eliminar **"[irrespectivamente de su interés o participación en o a]"** |
| Página 19, Línea 6 | Eliminar **"[de la cooperativa]"** . |
| Página 19, Línea 6 | Después de "en" eliminar **"éste"** y sustituir por "el asegurador cooperativo"; eliminar **"[personal]"** y **"e"** |
| Página 19, Línea 7 a la 8 | Eliminar **"[de la cooperativa]"** |
| Página 21, Línea 3 | Eliminar "socios" y sustituir por "socias" |
| Página 21, Línea 6 | Eliminar **"[socios]"** |
| Página 21, Línea 9 | Eliminar **"[socios]"** |
| Página 21, Línea 10 a la 14 | Después de "incorporación" eliminar **"[y aviso de la fecha, hora, sitio, y fines de la Asamblea se enviará por escrito por correo certificado a cada uno de dichos socios, dirigido al socio a su última dirección registrada en la Cooperativa, o le será entregada personalmente, con no menos de treinta (30) días de anterioridad a la fecha de la asamblea]"** |
| Página 21, Línea 18 | Eliminar **"[de la cooperativa]"** |
| Página 22, Línea 4 | Eliminar **"[socios de las cooperativas de seguros]"** |
| Página 22, Línea 6 | Eliminar **"[socios afiliados, en la fecha y hora que dispongan sus reglamentos]"** |
| Página 22, Línea 7 a la 8 | Eliminar **"[en la forma que dispongan los estatutos]"** |
| Página 22, Línea 9 | Eliminar **"[ocurran]"** |
| Página 22, Línea 10 a la 11 | Eliminar **"[de la cooperativa]"** |
| Página 22, Línea 12 | Eliminar **"[se]"** y **"[a su consideración]"** |
| Página 23, Línea 7 | Después de "Todo" eliminar **"[Cada]"** y después de "director de" eliminar **"[una cooperativa]"**. |
| Página 23, Línea 8 | Eliminar **"[reunir]"** |
| Página 23, Línea 12 a la 21 | Eliminar todo el contenido de estas líneas |
| Página 23, Línea 22 a la Línea 23 | Después de "(b)" eliminar **"[(e)]"** y después de "cooperativismo." eliminar **"[y tomar un seminario de seguros en su primer año como director]"** |
| Página 24, Línea 16 | Después de "( c )" eliminar **"[(f)]"** |
| Página 24, Línea 18 | Después de "(d)" eliminar **"[(e)]"** |
| Página 24, Línea 19 | Indentar la oración; eliminar "(2)" y sustituir por "(e)", eliminar **"[Todos los directores deberán]" y "[s]"** |
| Página 24, Línea 21 | Eliminar "(3)" y sustituir por "(2)" |
| Página 24, Línea 22 | Eliminar "(4)" y sustituir por "(3)" y eliminar el identado |

| | |
|---|---|
| Página 27, Línea 4 | Eliminar **"[una cooperativa]"** |
| Página 27, Línea 6 | Eliminar **"[los socios]"** y eliminar **"[ellos mismos]"** |
| Página 27, Línea 7 a la Línea 10 | Eliminar **"[por un término mínimo de un (1) año y máximo de cuatro (4) años y hasta que su sucesor haya sido electo y tome posesión, según lo establezca el reglamento interno; Disponiéndose, que ninguna persona podrá ser electa por más de dos (2) términos consecutivos]"** |
| Página 27, Línea 18 | Eliminar **"[serán relacionados]"** |
| Página 27, Línea 20 | Eliminar **"[los socios]"** |
| Página 27, Línea 23 a página 28, Línea 1 | Eliminar **"[de la cooperativa]"** |
| Pagina 28, Línea 3 | Después de "a cabo por" eliminar **"[papeleta secreta]"** |
| Página 28, Línea 5 | Después de " sean por" eliminar **"[la expiración]"** |
| Página 28, Línea 6 | Eliminar **"[designación de]"** |
| Página 28, Línea 7 | Eliminar "electa" y sustituir por "nombrada" |
| Página 28, Línea 9 | Eliminar **"[lo socios]"** |
| Página 28, Línea 13 | Eliminar **"[el término]"** |
| Página 28, Línea 14 | Eliminar **"[la sociedad]"** |
| Página 28, Línea 15 | Eliminar **"[la]"** |
| Página 28, Línea 16 | Eliminar **"[socio]"** |
| Página 28, Línea 18 | Eliminar **"[de la cooperativa]"** |
| Página 28, Líneas 19 a 20 | Después de "acompañado" eliminar **"[s]"**; después de "por ciento de" eliminar **"[todos los socios]"** |
| Página 28, Línea 22 | Eliminar **"[socios]"** |
| Página 28, Línea 23 | Eliminar **"[los socios]"** |
| Página 29, Línea 3 | Eliminar **"[(10)]"** |
| Página 29, Línea 19 | Después de "asegurador'' eliminar "." y añadir ''cooperativo'' |
| Página 29, Línea 20 | Después de "un asegurador'' insertar "'cooperativo'' y después de ''para el asegurador'' eliminar "." y añadir "cooperativo'' |
| Página 29, Línea 22 | Después de "asegurador" insertar "cooperativo" |
| Página 29, Línea 23 | Después de "asegurador" insertar "cooperativo" |
| Página 30, Línea 2 | Después de "asegurador" añadir "cooperativo" |
| Página 30, Línea 4 | Después de "asegurador" insertar "cooperativo" |
| Página 30, Línea 13 a la 16 | Eliminar **"[(1)]"** y sustituir por "(1)". y eliminar **"[La junta deberá elegir un presidente, un secretario y un tesorero y podrá elegir uno o más vicepresidentes y aquellos otros oficiales de Junta que sean autorizados por el reglamento.]"** |
| Página 30, Línea 19 a la 21 | Después de "seguros" eliminar la oración: **"[De ser designado y nombrado un administrador para la cooperativa, éste no tiene que ser socio de la cooperativa, pero si lo fuera, no podrá ser director al mismo tiempo.]"** |

| | |
|---|---|
| Página 31, Línea 7 | Eliminar "[la cooperativa]" |
| Página 31, Línea 14 a la Línea 15 | Eliminar "[la cooperativa como al funcionario]" |
| Página 31, Línea 18 | Eeliminar "[de la cooperativa]" |
| Página 32, Línea 1 | Eliminar "[de una cooperativa de seguros]" |
| Página 32, Línea 8 | Eliminar "[Todas las cooperativas de seguros]" |
| Página 32, Línea 11 | Eliminar "[las cooperativas]" |
| Página 32, Línea 17 | Eliminar "[Las cooperativas de seguros]" |
| Página 32, Línea 18 a la Línea 19 | Después de "disponibles para," eliminar "[programas sociales tales como hospitales, sanatorios para ancianos, orfelinatos, parques, escuelas, casa cunas, ateneos y centros de cultura]" |
| Página 33, Línea 6 | Eliminar "[Las cooperativas de seguros]" |
| Página 33, Línea 8 a la Línea 9 | Eliminar "[y dicho término será de naturaleza tal]" |
| Página 33, Línea 11 | Eliminar "[Ley 291, aprobada 9 de abril de 1946]" |
| Página 33, Línea 19 | Eliminar "[Ninguna cooperativa de seguros]" |
| Página 33, Línea 23 | Después de "y sus" eliminar "socios" |
| Página 34, Línea 7 a la Línea 8 | Después de "exima a" eliminar "[toda cooperativa de seguros]" |
| Página 34, Línea 8 | Después de "debidamente" eliminar "[organizada]" |
| Página 34, Línea 10 | Eliminar "dichas cooperativas" y sustituir por "dicho asegurador cooperativo" |
| Página 34, Línea 14 | Después de "emitidas por" eliminar "dichas cooperativas" y sustituir por "dichos aseguradores cooperativos" |
| Página 34, Línea 16 | Eliminar "[Las sociedades cooperativas]" |
| Página 34, Línea 20 a la 21 | Después de "requiera" eliminar "de la Cooperativa" y sustituir por "del asegurador cooperativo" |
| Página 34, Línea 22 a la 23 | Después de "y a costa" eliminar "de la cooperativa eximida" y sustituir por "del asegurador cooperativo eximido" |
| Página 35, Línea 1 | Eliminar "[Las Cooperativas de Seguros]" y "[organizadas]" |
| Página 35, Línea 3 | Eliminar "[sujetas]" |
| Página 35, Línea 12 | Al principio de la oración eliminar "Los" y añadir: "Siempre que no se afecten los principios o la estructura jurídica cooperativa, los". |
| Página 35, Línea 20 a la Línea 21 | Después de "lo notificará" eliminar "[a la |
| Página 35, Línea 22 | Eliminar "[socios]" |
| Página 35, Línea 23 | Después de "noventa" eliminar "90" y sustituir por "(90)" |
| Página 36, Línea 2 | Después de "los fondos" eliminar "[de la cooperativa]" |
| Página 36, Línea 16 | Después de "Cualquier funcionario" eliminar "[o director]" |
| Página 37, Línea 3 a la Línea 4 | Después de "partes de" eliminar "[los socios]" |
| Página 37, Línea 12 | Eliminar "[dichos socios]" |
| Página 37, Línea 12 y 13 | Después de "registrada en'' eliminar "[la cooperativa]" |
| Página 37, Línea 16 | Despúes de "disponer que si" eliminar "[el socio]" |
| Página 37, Línea 18 | Después de "ser propiedad" eliminar "[de la cooperativa]" |
| Página 37, Línea 21 | Después de "aportación de" eliminar "[los socios]" |

| | |
|---|---|
| Página 37, Línea 22 | Después de "correspondiente a" eliminar "[dicho socio]" |
| Página 38, Línea 1 a la 2 | Después de "en los libros" eliminar "[de la cooperativa]" |
| Página 38, Línea 5 | Después de "acreditar a" eliminar "[los socios]" |
| Página 38, Línea 8 | Después de "contra" eliminar "[el socio]" |
| Página 38, Línea 14 a la Línea 15 | Después de "organizar" eliminar "[una cooperativa de seguros]" |
| Página 38, Línea 19 | Eliminar "[o jurídica]", y "[socios]" |
| Página 38, Línea 19 y 20 | Después de "socia de un"eliminar "[una cooperativa de seguros]" |
| Página 38, Línea 22 | Después de "Código," eliminar "[o la Ley de Seguros de 1921]" |
| a la página 39, línea 1 | |
| Página 39, Línea 2 | Eliminar "[antes Superintendente de Seguros.]" |
| Página 39, Línea 6 | Después de "excepto" eliminar "[los Artículos]" |
| Página 39, Línea 14 | Después de "aplicables a" eliminar "[las cooperativas de seguros]" |
| Página 39, Línea 18 | Añadir una nueva Sección 28 que lea: "Artículo 34.240.-Disposiciones transitorias En el caso de los directores en funciones al momento de la aprobación de esta Ley, la suma de los años consecutivos en sus cargos no podrá exceder del máximo de años dispuestos en esta Ley, esto es, nueve (9) años.". |
| Página 39, Línea 18 | Redesignar la "Sección 28" como "Sección 29". |
| Página 39, Líneas 18 y 20 | Eliminar "34.240" en ambas oraciones y sustituir por "34.250". |

## ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito del Proyecto del Senado 2592, es enmendar el Capítulo 34 de la Ley Núm 77 del 19 de junio de 1957, conocida como ''Código de Seguros'' a fin de disponer sobre los fines y propósitos de las cooperativas de seguros, establecer unas definiciones generales referente al contenido de dicho Capítulo y enmendar sus disposiciones, a fin armonizarlas con la realidad actual y promover su desarrollo.

Según dicta en su Exposición de Motivos la misión de las cooperativas de seguros es servir como un importante centro de seguros en Puerto Rico desde el cual pueda ejercer su función principal de promover y desarrollar productos y servicios que satisfagan las necesidades de seguros de los socios, patrocinadores y tenedores de pólizas, y educar y divulgar sobre la necesidad del seguro, en armonía con la filosofía cooperativista. Con el pasar del tiempo y los cambios habidos en el mundo de los seguros, las cooperativas de seguros se han visto en la necesidad de atemperar la ley que las regula a las exigencias que le impone el cumplimiento de su misión.

## INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS:

En reunión ejecutiva celebrada el 23 de junio de 2000 vuestras Comisiones se beneficiaron de los comentarios del Comisionado de Seguros, la Liga de Cooperativas, la Cooperativa de Seguros Múltiples y la Cooperativa de Seguros de Vida.

En el memorial enviado por la Liga de Cooperativas de Puerto Rico se señala lo siguiente: ''Estamos convencidos que la aprobación de este proyecto fortalecerá el ya excelente desempeño del sector

de seguros de nuestro Movimiento, representado por la Cooperativa de Seguros Múltiples y la Cooperativa de Seguros de Vida Cosvi''. Añade además, que ''las enmiendas propuestas en el Proyecto del Senado 2592 al Capítulo 34 del Código de Seguros de Puerto Rico armonizan su contenido a la realidad actual de las Cooperativas de Seguros''.

La Liga de Cooperativas indica que el proyecto debe enmendarse en su Artículo 34.070, Inciso (1) para establecer en 2/3 la proporción de votos requerida para enmendar los reglamentos de las cooperativas de seguros. Señala que esta enmienda sería cónsona con los requisitos ya establecidos en los reglamentos de las cooperativas de seguros.

En el memorial enviado por la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico señalan y citamos: ''Estamos seguros que de aprobarse esta medida propenderá al bienestar y desarrollo de las cooperativas de seguros y por ende, en beneficio del pueblo puertorriqueño''

La Cooperativa de Seguros Múltiples propone una serie de enmiendas al proyecto. Estas enmiendas propuestas son de redacción y no de contenido propiamente, a excepción de la enmienda recomendada al Artículo 34.070 Inciso 1, la cual es consistente con la única recomendación de enmienda que nos sometió la Liga de Cooperativas de Puerto Rico antes discutida. Así las cosas, las comisiones que suscriben aceptan las recomendaciones hechas por la Cooperativa de Seguros Múltiples y la Liga de Cooperativas y la hacen formar parte de las enmiendas al Capítulo 34.

La Cooperativa de Seguros de Vida en su memorial de apoyo a este proyecto también recomienda enmiendas que se incluyeron.

La Cooperativa de Seguros de Vida además, hace unas recomendaciones de enmiendas a los efectos de que se incluyan las secciones 27 a la 29 con sus respectivas disposiciones en el proyecto. Estas disposiciones ya están incluidas en el proyecto y por error involuntario no se les enviaron a la Cooperativa de Seguros de Vida.

El Comisionado de Seguros está de acuerdo con el P. del S. 2592 y recomienda unas enmiendas. Estas fueron acogidas favorablemente por estas Comisiones.

**CONCLUSION:**

Por las razones antes expresadas, las comisiones que suscriben recomiendan la aprobación del P del S 2592, con las enmiendas sugeridas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Migdalia Padilla Alvelo
Presidenta
Comisión de Banca, Asuntos
del Consumidor y Corporaciones
Públicas"

Kenneth McClintock
Presidente
Comisión de Gobierno
Y Asuntos Federales

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2210, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar el Artículo 11.02 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", a fin de disponer unas normas adicionales relativas al uso de bicicletas.

## EXPOSICION DE MOTIVOS

Las lesiones no intencionales son la causa principal de muerte e incapacidad en niños y adultos jóvenes entre el primer año de vida y los 35 años. Puerto Rico no cuenta con un registro de datos de lesiones o traumas sufridos por ciclistas, por lo que no hay estadísticas en esta área.

Según estadísticas de la Administración para la Seguridad en el Tráfico y las Carreteras de Estados Unidos, 830 ciclistas murieron y aproximadamente 61,000 fueron lesionados por choques con vehículos de motor en 1995. Esto representa un 2% de las fatalidades relacionadas al tráfico en un año. La edad promedio de los ciclistas que murieron era 29.5 años. La mayoría de éstos eran varones (85%). Treinta y tres por ciento de los ciclistas muertos estaban entre los 5 y 15 años de edad. Según el "Child and Adolescent Emergency Department Visit Databook 1992-94" las lesiones por bicicletas resultaron en 442,000 visitas por pacientes menores de 21 años a sala de emergencia en un año. Se estima que se pagaron 133,000 millones de dólares por servicios a niños lesionados en bicicletas.

La nueva Ley de Vehículos de Tránsito de Puerto Rico establece que las disposiciones relativas al tránsito de vehículos de motor y a los conductores de los mismos cubren y son aplicables a las bicicletas y sus conductores, excepto aquellas disposiciones que por su propia naturaleza no les sean aplicables. La norma básica es que los conductores de bicicletas tienen la obligación de conducir con el debido cuidado y precaución por las vías públicas. La referida Ley establece otras normas particulares en cuanto al uso de bicicletas en las vías públicas.

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico considera necesario ampliar estas normas estableciendo nuevos criterios para el uso de las bicicletas en las vías públicas y centros recreativos dirigidas a la prevención de lesiones en el uso de las mismas.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 11.02 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, para que se lea como sigue:

"Artículo 11.02- Uso de bicicletas en las vías públicas o centros recreativos

Con relación al uso y manejo de bicicletas en las vías públicas o centros recreativos, serán ilegales los siguientes actos:

(a) . . .

(k) conducir una bicicleta por vías públicas *o centros recreativos* **[de alta densidad vehicular]** sin estar provisto de un casco protector que cumpla con los requisitos establecidos mediante reglamento por el Seceretario, a tono con las normas de la American Standards Association para cascos protectores, publicados el 1 de agosto de 1966, según éstos sean actualizados, enmendados o sustituidos.

*Se dispone, además, que:*

*(1) Todo ciclista que lleve como pasajero un niño menor de cuatro (4) años o que pese menos de cuarenta (40) libras deberá cargarlo en un asiento diseñado especialmente para ello que lo proteja de las partes en movimiento de la bicicleta;*

*(2) Ningún niño permanecerá en el asiento especial de la bicicleta, a menos que el ciclista esté en control inmediato de la misma;*

*(3) Todo ciclista mantendrá por lo menos una mano en el manubrio cuando esté corriendo bicicleta;*

*(4) El dueño de un negocio de venta de bicicletas no podrá vender ninguna bicicleta que no tenga un número de identificación permanente adherido o grabado en su estructura, ni podrá alquilar una bicicleta a un menor de dieciséis (16) años si éste no tiene un casco protector o le provee uno al momento de alquilar la bicicleta. Además, proveerá información escrita en cuanto a las normas sobre uso de bicicletas establecidas en esta Ley, y mantendrá un registro donde conste el recibo de dicha información.*

*Todo persona que infrinja las disposiciones de este Artículo incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa no mayor de cincuenta (50) dólares. El Tribunal, a su discreción, podrá imponer, además, la pena de prestación de servicios a la comunidad."*

Artículo 2.- Esta Ley entrará en vigor el 7 de enero de 2001."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, tiene a bien rendir su informe sobre el P. del S. 2210, recomendando positivamente la aprobación de la medida con las siguientes enmiendas:

**En el Texto:**

| | |
|---|---|
| Página 3, línea 5 a la 6 | eliminar en su totalidad. |
| Página 3, línea 15 | eliminar "incurrirá"luego de "artículo"y sustituir por "cometerá". |
| Página 3, línea 16 | eliminar en su totalidad y sustituir por "una falta administrativa y será sancionado con". |
| Página 3, línea 17 | eliminar "de"antes de multa y sustituir por "una", eliminar "El Tribunal, a su". |
| Página 3, línea 18 y 19 | eliminar en su totalidad. |

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

La Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura realizó el estudio correspondiente del P. del S. 2210.

Como parte de la evaluación realizada el Departamento de Transportación y Obras Públicas, presentó sus comentarios en torno al Proyecto, recomendando la aprobación del mismo.

Esta legislación obedece a que la utilización de las bicicletas como medio de recreación y deporte ha tomado auge en los últimos años. A diario nos topamos con ciclistas en las vías públicas y en ocaciones menores de edad; por lo que es necesario proteger la vida de éstos reforzando las disposiciones en la ley relacionadas con esta práctica.

Esta medida va dirigida a crear conciencia en las personas que transporten a menores en bicicletas y a los que mercadean las mismas ya que les impone ciertos requisitos de seguridad. De esta forma se contribuye a preservar la vida de los que gustan de este deporte; por lo que endosamos este proyecto de ley.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Ramón L. Rivera, hijo
Presidente
Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2254, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, con enmiendas.

**"LEY**

Para establecer la ley que crea el Programa Interagencial de Educación y para la Seguridad Pública adscrita al Departamento de Educación para primeros ofensores y en alto riesgo de convertirse en delincuentes habituales.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

Estudios recientes han demostrado que la alta incidencia en la delincuencia juvenil está fuertemente relacionada con la falta de educación y supervisión de jóvenes en alto riesgo de convertirse en delincuentes habituales. Un estudio realizado por el Departamento de Corrección del Condado de Orange en California demostró que la mayoría de los delincuentes crónicos juveniles tienen un pobre historial educativo, que incluye desde suspensiones escolares por mal comportamiento, pobre desarrollo académico, con más de una materia reprobada, y falta de programas comunitarios coordinados con el Departamento de Educación que ayuden a estos jóvenes a no delinquir. Además, se determinó que la falta de programas educativos apropiados que los motive, los lleva a convertirse primero, en desertores escolares y luego en delincuentes.

Para estos jóvenes, la falta de coordinación entre las agencias educativas y programas comunitarios, resulta en el desinterés y falta de motivación para que permanezcan en la escuela y alejarse de la delincuencia. Es necesario, para atender esta problemática, establecer un Programa Multidisciplinario e Interagencial que combine la disciplina, educación y el trabajo comunitario para que éstos puedan, de manera apropiada, readaptarse a la vida comunitaria y reintegrarse a la sociedad de forma productiva.

En Puerto Rico, el problema de la deserción y delincuencia juvenil es endémico, haciendo imperioso que trabajemos unidos y de forma agresiva para rescatar a nuestra juventud de la delincuencia. El Departamento de Educación, en coordinación con el Departamento de la Familia, Departamento de Corrección y Departamento de Salud son algunas de las agencias con las herramientas necesarias para establecer este Programa Multidisciplinario, el cual les brinde a estos jóvenes la oportunidad de formar parte de la sociedad de forma productiva.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.- Título

Esta Ley se conocerá como el Programa Interagencial de Educación y para la Seguridad Pública para jóvenes primeros ofensores en alto riesgo de convertirse en delincuentes habituales.

Artículo 2.- Definiciones

(a) Adulto- Persona que ha cumplido dieciocho (18) años de edad.

(b) Causa Probable - Determinación hecha por un magistrado investigador sobre la ocurrencia de una violación a una ley u ordenanza municipal, en cuya comisión es vinculado como autor o coautor un menor.

(c) Centro de Tratamiento - Institución residencial que brinda al menor servicios de protección, evaluación y diagnóstico, más tratamiento rehabilitador, luego de la disposición del caso.

(d) Centro de Detención - Institución donde será recluido el menor, pendiente de la adjudicación o disposición del caso o de cualquier otro procedimiento ante el Tribunal.

(e) Custodia - El acto de poner a un menor bajo la custodia y la responsabilidad del Secretario de la Familia o de un organismo o institución pública o privada mediante orden del Tribunal y sujeto a la jurisdicción de éste, quien le conservará durante el período en que se le brinden los servicios de protección, evaluación, diagnóstico y el tratamiento rehabilitador.

(f) Desvío - Resolución del Tribunal suspendiendo el procedimiento judicial, para beneficio del menor, y refiriéndose a una agencia, institución u organismo público o privado para que éste reciba los servicios.

(g) Departamento de Educación - Será el Departamento de Educación y Secretarías Auxiliares.

(h) Corrección - Será el Departamento de Corrección.

(i) Departamento de la Familia - Será el Departamento de la Familia.

(j) Departamento de Salud- Será el Departamento de Salud y todas sus dependencias que tengan por función la rehabilitación física y emocional del menor.

(k) Detención - Cuidado provisional del menor en una institución o centro provisto para tales fines, pendiente de la determinación del Tribunal sobre los hechos imputados que lo colocan bajo la autoridad de éste, luego de la determinación de causa probable o por razón de procedimientos post adjudicativos pendientes.

(l) Especialista en Relaciones de Familia - Trabajador Social así clasificado en el Sistema de Administración de Personal de la Rama Judicial.

(m) Falta - Infracción o tentativa de infracción por un menor de las leyes penales, especiales u ordenanzas municipales de Puerto Rico, excepto las infracciones o tentativas que, por disposición expresa de este Capítulo, estén excluidas.

(n) Faltas Clases I II III - Se definen según la ley Ley Núm. 88 de 9 de Julio de 1988, según enmendada.

(o) Juez- Es aquel designado para entender en los asuntos objetos de la Ley Núm. 88 de 9 de Julio de 1988, según enmendada.

(p) Menor- Persona que no ha cumplido la edad de dieciocho (18) años.

(q) Primer Ofensor - Joven encontrado culpable de cualquier falta tipo I y II por primera vez y que reúna los requisitos del Departamento para participar en el Programa.

(r) Procurador para Asuntos de Menores - Fiscal Auxiliar del Tribunal designado para ejercer sus funciones en los asuntos de menores.

(s) Querella - Escrito que someta el Tribunal describiendo la falta imputada al menor.

(t) Rehabilitación - Proceso mediante el cual se pretende reintegrar adecuadamente al menor a la sociedad.

(u) Tribunal - Sala del Tribunal con jurisdicción sobre asuntos de menores.

Artículo 3.- Deberes del Secretario

Este Programa se establece para ofrecer al menor, quien se encuentra en alto riesgo de convertirse en un delincuente habitual, corregirlo y reintegrarlo a la sociedad. El mismo deberá proveer a éste

alternativas reales para su rehabilitación dentro de la comunidad y no en un Centro Correccional. Por lo tanto, el menor deberá estar bajo la custodia de sus padres o encargados durante un período del día y bajo la supervisión de los que manejan el Programa, durante el otro período. El Secretario de Educación deberá establecer un Programa Multidisciplinario e Interagencial para desarrollar e implantar el Programa y deberá tomar como guías los siguientes parámetros:

(a) Establecer Centros Educativos en donde a los jóvenes, referidos por el Departamento de la Familia, se les proveerá no menos de cuatro (4 ) horas académicas de educación curricular diaria.

(b) Contar con un técnico o trabajador social encargado de monitorear el progreso académico, sicológico y de readaptación del menor.

(c) Establecer un enlace con la comunidad, agencias gubernamentales y entidades privadas, donde los jóvenes realicen trabajos comunitarios con las recomendaciones del Departamento del Trabajo y el Departamento de Corrección.

(d) Proveer al menor y a su familia ayuda sicológica para su readaptación social, en conjunto con el Departamento de Salud.

(e) Establecer el Reglamento para la implantación del Programa.

Artículo 4- Eligibilidad para el Programa

Los jóvenes que cualifiquen para el Programa deberán cumplir con unos requisitos establecidos por el Departamento de Educación, en colaboración con el Departamento de Corrección y el Departamento de la Familia, tomando como base los siguientes criterios mínimos:

(a) Los menores deben ser encontrados incursos en faltas Tipo I y II, según se define en la Ley de Menores, Ley Núm. 88 de 9 de Julio de 1988, según enmendada por primera vez.

(b) El padre, encargado o custodio del menor deberá autorizar al Departamento para que el joven se someta, voluntariamente, a exámenes físicos y sicológicos periódicos para determinar el progreso en el proceso de adaptación.

(c) Deberá tomarse en consideración el ambiente donde reside el menor.

Artículo 5.- Programas especiales que deben ser instituidos para el mejor provecho del menor en el proceso de rehabilitación

El Secretario, en conjunto con las Agencias gubernamentales pertinentes, deberá establecer programas recreativos, educativos, y de trabajo que ayuden al joven a readaptarse adecuadamente a la sociedad.

Debe incluir, pero sin limitarse a:

(a) Programas Deportivos que consuman no menos de cuatro (4) horas semanales.

(b) Programas Recreativos donde participen los menores con sus padres o encargados.

(c) Programas de Orientación para el menor y su familia.

(d) Programa de Colocación de Empleo para el menor, siempre y cuando, cumpla con los requisitos que establezca el Tribunal y el Programa.

Artículo 6.- Deberes del menor

El menor incluido en el Programa deberá cumplir con todos los requisitos que le imponga el Tribunal para cumplir la medida correctiva dentro del mismo, entre los que debe incluirse, pero sin limitarse:

(a) Progreso académico.

(b) Demostrar la capacidad de responsabilidad en las labores comunitarias asignadas.

(c) Deberá mantenerse libre de drogas o alcohol.

De no cumplir con los requisitos establecidos por las agencias, el joven deberá cumplir con las medidas que el Tribunal con Jurisdicción establezca para terminar su Programa de Rehabilitación.

Artículo 7. Coordinación Interagencial

El Departamento deberá integrar a las agencias pertinentes, para que de manera coordinada, se pueda monitorear al menor durante todo el tiempo que permanezca en el Programa. Además, deberá coordinar con las demás Agencias para brindar transportación, servicios de salud física, sicológica, consejería y apoyo al menor y a sus familiares.

Artículo 8. Programa Especial, en conjunto con la Guardia Nacional de Puerto Rico

El Secretario, en conjunto con el Comandante de la Guardia Nacional de Puerto Rico, llevará a cabo un campamento mensual para los jóvenes participantes del Programa, donde se les enseñará destrezas de disciplina, higiene, responsabilidad y de aptitud física.

Los jóvenes deberán participar no menos de una vez al mes de este campamento.

Articulo 9

Esta Ley comenzará a regir un año después de su aprobación para que se pueda establecer el Reglamento y la coordinación interagencial."

**"INFORME**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestra Comisión de Juventud, Recreación y Deportes tiene a bien rendir s informe sobre el P. del S. 2254, recomendando positivamente la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas.

**En el Texto:**

| | |
|---|---|
| Página 3, inciso (e), línea 2 | sustituir "Secretario de la Familia" por "Departamento de la Familia" |
| Página 3, inciso (g), línea 9 | eliminar "de Educación" luego de "Departamento" |
| Página 4, inciso (n), línea 1 | eliminar la palabra "ley"; añadir luego de la palabra "según" la frase "los incisos (j), (k) y (l) de"; y sustituir "1988" por "1986" |
| Página 4, Artículo 3, línea 14 | añadir luego de "Secretario" "de Educación" |
| Página 4, Artículo 3, línea 15 | eliminar todo lo que resta de esta oración luego de "establece" y sustituirlo por: "con el propósito de corregir e integrar a la sociedad a aquellos menores en alto riesgo de convertirse en delincuentes habituales." |
| Página 5, Artículo 3, línea 8 | eliminar la "y" luego de "trabajo" y sustituirla por "," ; y añadir entre "Corrección" y ".", ", y/o la Administración de Instituciones Juveniles" |
| Página 5, Artículo 4, línea 15 | sustituir "y" por ","; y añadir luego de "Corrección," "y/o la Administración de Instituciones Juveniles," |
| Página 5, Artículo 4, línea 18 y 19 | eliminar luego de "según enmendada", "por primera vez" |
| Página 5, Artículo 4, línea 20 | luego de "Departamento" añadir la palabra "de Educación |
| Página 7, Artículo 7, línea 2 | luego de "Departamento" añadir la palabra "de Educación" |
| Página 7, Artículo 8, línea 8 | sustituir "Comandante"por "Ayudante General" |

**En el Título:**

| | |
|---|---|
| Página 1 | sustituir el título por el siguiente: "Para establecer la ley que crea un Programa Interagencial de Educación y para la Seguridad Pública adscrito al Departamento de Educación |

para menores primeros ofensores de ley que se encuentran por lo tanto en alto riesgo de convertirse en delicuentes habituales."

**ANALISIS DE LA MEDIDA**

El P. del S. 2245 tiene como objetivo establecer una ley para crear el Programa Interagencial de Educación y de Seguridad Pública adscrita al Departamento de Educación para así poder motivar a los estudiantes de pobre historial educativo. Esto a través de programas comunitarios y programas educativos apropiados coordinados con el Departamento de Educación. Evitando de esta forma que estos jovenes se conviertan en desertores escolares y luego delicuetes habituales.

Para tomar la decisión que a continuación expresamos se tomaron en consideración los comentarios que nos hicieran: el Departamento de la Familia, el Departamento de Correción y Rehabilitación, la Guardia Nacional de Puerto Rico, el Departamento de Educación, el Departamento de Recración y Deportes y el Departamento de Salud.

Esta Comisión siempre se ha preocupado por el bienestar y porvenir de nuestra juventud y por lo tanto el de nuestra sociedad puertorriqueña. Consideramos que con la aprobación de esta medida se proveerán alternativas reales para la rehabilitación dentro de la comunidad (y no en un Centro Correccional), lo que a su vez ampliaría las oportunidades de mejoramiento personal de los menores que han incurrido en alguna falta.

Como bien expusiera el Departamento de Educación en su ponencia, "esta ley destaca en su política pública el principio educativo que consagra nuestra Constitución de que toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos, las libertades fundamentales del hombre. Por ello las escuelas deben colaborar en el análisis y ofrecer alternativas que puedan utilizarse en la solución de los problemas de la comunidad escolar. Así como promover actividades que enriquezcan las vida la comunidad; ayudar a entender sus problemas y ofrecer soluciones a los mismos." Más aún, es "pertinente señalar que se han establecido unos vínculos entre la criminalidad y la dependencia de las drogas, con una relación entre la deserción escolar y estadísticas de muertes ente los jóvenes. Por tal razón, es necesario comprometer a estas agencias a atender estos jóvenes identificados en sus raíces primarias."

Por último, esta media integra áreas de suma relevancia como lo son: la disciplina y la educación del menor, el aspecto sicológico de éste y su familia; y el proceso de readaptción e integración a la comunidad visualizando el que pueda ubicarse en un empleo posteriormente . De todo lo cual puede deducirse que el programa propuesto será una alternativa más por el juez al momento de imponer la medida dispositiva correspondiente.

Por todo lo anteriormente expuesto recomendamos favorablemente esta medida.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Ramón L. Rivera, hijo
Presidente
Comisión de Juventud, Recreación y Deporte"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3447, el cual ha sido descargado de la Comisión de Seguridad Pública.

"LEY

Para crear la "Ley de Armas de Puerto Rico" y derogar las Leyes Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, y la Núm. 75 de 13 de junio de 1953, según enmendada; a fin de unificar los requisitos para la concesión de las licencias de tener, poseer y portar armas, y las de tiro al blanco y de caza; establecer las sanciones y multas a imponerse; disponer que las sentencias que se impongan por incurrir en violaciones a esta Ley se cumplirán de manera consecutiva; establecer un registro de la venta de municiones; establecer un límite máximo a la cantidad de municiones que podrá obtener un tenedor de armas que no posea un permiso de tiro al blanco o de caza; limitar la cantidad de armas que podrán ser autorizadas a una persona que tenga licencia de armas; crear el Sistema de Registro Electrónico en la Policía de Puerto Rico; y para otros fines.

## EXPOSICION DE MOTIVOS

Durante los pasados seis años, nuestro Gobierno se ha dedicado a establecer una política pública de cero tolerancia contra el crimen, mediante la cual los agentes del orden público velan por el cumplimiento estricto de las leyes que rigen la Isla. Previo al comienzo de nuestra gestión pública, todos los índices de criminalidad estaban en una espiral ascendente sin precedente. Se tomaron las medidas correctivas, lo que tuvo como resultado, por ejemplo, que para el 1998, ocurriera una reducción del 32.5% en los delitos Tipo I y una reducción del 8.3% en todos los delitos, en relación con el año anterior; estadísticas que se mantienen en descenso durante este año. Estos números reafirman el compromiso de nuestra administración de lograr un ambiente de paz, tranquilidad y mayor seguridad pública para nuestros ciudadanos. Sin embargo, estamos conscientes que debemos realizar esfuerzos específicos, dentro del marco conceptual de las leyes federales sobre esta materia y en particular las dispocisiones de ésta en el "Firearms Owners Protection Act of 1986", para lograr una solución efectiva al problema del control de armas de fuego en manos de delincuentes en Puerto Rico, el cual es una vertiente directa de la actividad criminal.

La Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico", fue aprobada a raíz de un acontecimiento histórico. El Gobierno de la Isla entendió prudente crear una legislación como medida de control de armas para evitar que este tipo de acción resurgiera dentro de un pueblo que hasta ese suceso mantuvo una tradición pacífica. Con el transcurrir de los años, la Ley Núm. 17, antes citada, ha sido enmendada con la intención de atemperar la misma a la realidad social de Puerto Rico, y utilizar la medida como una herramienta para controlar el crimen. Hoy, transcurridas cuatro décadas desde su aprobación y a pesar de haber sido extensamente enmendada, resulta evidente que la Ley de Armas de Puerto Rico no es el instrumento jurídico más eficaz para atender las distintas situaciones relacionadas con el manejo de armas en la Isla.

La actividad criminal de las últimas dos décadas ha sido mayormente producto del aumento en el tráfico ilegal de sustancias controladas, que a su vez, ha causado un aumento vertiginoso en el uso de las armas de fuego ilegales. Datos estadísticos recopilados por la Policía durante este período evidencian la seriedad del problema. Las armas de fuego cuya tenencia es ilegal han sido traídas de forma clandestina desde otras jurisdicciones, y algunas han sido adquiridas durante escalamientos o robos al Gobierno y a los hogares o negocios de dueños debidamente autorizados para la tenencia de las mismas en Puerto Rico. Estas armas son utilizadas durante la comisión de todo tipo de actos criminales, situación que hace necesario adoptar medidas legislativas cuya naturaleza sancionadora constituya un eficaz disuasivo al delincuente.

Esta medida presenta disposiciones innovadoras que responden al interés apremiante del Gobierno de Puerto Rico en lograr una ley cuya implantación permita a las agencias del orden público ser más efectivas en la lucha contra el crimen. A tales efectos, la Ley orienta a las personas autorizadas en Puerto Rico a manejar armas de fuego para que lo hagan responsablemente, y a su vez, apercibe al delincuente de las serias consecuencias de incurrir en actos criminales utilizando armas de fuego.

Por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico se regula lo relacionado a la tenencia y uso de municiones para armas de fuego. La Ley limita la venta de municiones al tipo de munición utilizada por las armas que el comprador tenga inscritas a su nombre.

Consistente con la política pública de Nuestros Niños Primero, esta Ley tipifica como delito menos grave el que una persona deje al alcance de un menor un arma, en aquellos casos en lo cuales el menor se apodere de la misma, causándose daño a sí mismo o a otra persona.

Además, con el fin de erradicar el uso ilegal de armas con inmenso potencial de destrucción, esta Ley regula en forma particular, igual que la Ley Federal de Armas, la posesión o uso de cualquier arma de asalto semiautomática, sus copias o duplicados, en cualquier calibre.

Por último, se crea en la Policía de Puerto Rico un Registro Electrónico, el cual mediante el uso de una tarjeta electrónica, centralizará en dicha agencia todas las transacciones de armas y municiones que se realizan entre armeros autorizados de armas y personas con licencia en Puerto Rico.

Mediante la aprobación de esta Ley, el Estado ejercita su poder inherente de reglamentación, con el fin de promover una mayor seguridad y bienestar público para el Pueblo de Puerto Rico.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

## CAPITULO I
## DISPOSICIONES PRELIMINARES

**Artículo 1.01.-Título de la Ley**

Esta Ley se conocerá como la "Ley de Armas de Puerto Rico".

**Artículo 1.02.-Definiciones**

Para efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa:

(a) "Agente del orden público" significa cualquier miembro u oficial del Gobierno de Puerto Rico o de los Estados Unidos de America, así como cualquier subdivisión política de Puerto Rico o de Estados Unidos, autorizados en Ley para efectuar arrestos, incluyendo pero sin limitarse a los miembros del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Policía de Puerto Rico, Policías Auxiliares, Policía Municipal, los Agentes Investigadores del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia, los Oficiales de Custodia de la Administración de Corrección, Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, Guardia Nacional, Administración de Instituciones Juveniles, el cuerpo de seguridad interna de la Autoridad de los Puertos, y los Inspectores de la Comisión de Servicio Público, así como los alguaciles del Tribunal General de Justicia de Puerto Rico y de los Tribunales Federales con jurisdicción en todo Puerto Rico, y los inspectores de rentas internas del Departemento de Hacienda.

(b) "Ametralladora" o "Arma Automática" significa un arma, de cualquier descripción, independientemente de su tamaño y sin importar por qué nombre se le designe o conozca, cargada o descargada, que pueda disparar repetida o automáticamente un número de balas contenidas en un abastecedor, cinta u otro receptáculo, mediante una sola presión del gatillo. El término ametralladora incluye también una subametralladora, así como cualquier otra arma de fuego provista de un dispositivo para disparar automáticamente la totalidad o parte de las balas o

municiones contenidas en el abastecedor, o cualquier combinación de las partes de un arma de fuego destinada y con la intención de convertir, modificar o alterar dicha arma en una ametralladora.

(c) "Arma" se entenderá como toda arma de fuego, arma blanca o cualquier otro tipo de arma, independientemente de su denominación.

(d) "Arma blanca" significa un objeto punzante, cortante o contundente que pueda ser utilizado como un instrumento de agresión, capaz de inferir grave daño corporal.

(e) "Arma de fuego" significa cualquier arma, sin importar el nombre por el cual se conozca, capaz de lanzar una munición o municiones por la acción de una explosión. Esta definición no incluye aquellos artefactos de trabajo tales como, pero sin limitarse a, las pistolas de clavos utilizadas en la construcción, mientras se utilicen con fines de trabajo, arte u oficio.

(f) "Arma larga" significa cualquier escopeta, rifle o arma de fuego diseñada para ser disparada desde el hombro.

(g) "Arma neumática" significa cualquier arma, sin importar el nombre por el cual se conozca, que mediante la liberación de gas o mezcla de gases comprimidos es capaz de impulsar uno (1) o más proyectiles.

(h) "Armero"significa cualquier persona natural o jurídica que, por sí o por medio de sus agentes o empleados, compre o introduzca para la venta, cambie, permute, ofrezca en venta o exponga a la venta, o tenga a la venta en su establecimiento comercial cualquier arma de fuego o municiones, o que realice cualquier trabajo mecánico o cosmético para un tercero en cualquier arma de fuego o municiones.

(i) "Armor Piercing" significa un proyectil que pueda ser usado en arma corta y que esté construído enteramente (excluyendo la presencia o trazas de otras sustancias) o una combinación de aleación de tunsteno, acero, hierro, latón, bronce, berilio cúprico o uranio degradado; o un proyectil de cubierta completa mayor de calibre veintidós (22), diseñado e intencionado para usarse en arma corta y cuya cubierta tenga un peso de más de veinticinco (25) por ciento de su peso total. Excluye la munición de escopeta requerida por ley federal o estatal ambiental o reglamentación de caza para esos propósitos, un proyectil desintegrable diseñado para tiro al blanco, un proyectil en que se determine por el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos que su uso primario es para propósito deportivo, o cualquier otro proyectil o núcleo del proyectil en cual dicho Secretario encuentre que su uso primordial es para fines industriales, incluyendo una carga usada en equipos de perforación de pozos de petróleo o de gas.

(j) "Casa" significa la parte de una edificación que es utilizada u ocupada por una sola persona o una sola familia.

(k) "Comité" significa el Comité Interagencial para Combatir el Tráfico Ilegal de Armas, establecido en esta Ley.

(l) "Escopeta" significa un arma de fuego de cañón largo con uno (1) o más cañones con interiores lisos diseñada para ser disparada desde el hombro, la cual puede disparar cartuchos de uno (1) o más proyectiles. Puede ser alimentada manualmente o por abastecedor o receptáculo y se puede disparar de manera manual, automática o semiautomática. Esta definición incluirá las escopetas con el cañón cortado a menos de dieciocho (18) pulgadas.

(m) "Federación de Tiro" significa cualquier federación que represente el deporte olímpico de tiro al blanco.

(n) "Licencia de Armas" significa aquella licencia concedida por el Superintendente, que autorice al concesionario para tener, poseer y transportar armas y sus municiones, y dependiendo de su categoría, portar armas de fuego, tirar al blanco o cazar.

(o) "Municiones" significa cualquier bala, cartucho, proyectil, perdigón o cualquier carga que se ponga o pueda ponerse en un arma de fuego para ser disparada.

(p) "Pistola" significa cualquier arma de fuego que no tenga cilindro, la cual se carga manualmente o por un abastecedor, no diseñado para ser disparado del hombro, capaz de ser disparada en forma semiautomática o un disparo a la vez, dependiendo de su clase.

(q) "Policía" significa la Policía de Puerto Rico.

(r) "Revólver" significa cualquier arma de fuego que contenga un cilindro giratorio con varias cámaras que, con la acción de apretar el gatillo o montar el martillo del arma, se alinea con el cañón, poniendo la bala en posición de ser disparada.

(s) "Rifle" significa cualquier arma de fuego diseñada para ser disparada desde el hombro, que dispara uno o más proyectiles. Puede ser alimentada manual o automáticamente por un abastecedor o receptáculo y se puede disparar de manera manual o semiautomática. El término rifle incluye el término carabina.

(t) "Secretario" significa el Secretario del Departamento de Recreación y Deportes.

(u) "Superintendente"significa el Superintendente de la Policía de Puerto Rico.

(v) "Vehículo" significa cualquier medio que sirva para transportar personas o cosas por tierra, mar o aire.

## CAPITULO II
## LICENCIA Y REGLAMENTACIÓN

**Artículo 2.01.-Registro Electrónico**

Las licencias que expida el Superintendente estarán diseñadas para registrar electrónicamente todas las transacciones de armas de fuego y municiones por parte de la persona tenedora de una licencia de armas y/o de armero. Corresponderá al Superintendente disponer, mediante reglamentación, la forma en que funcionará el sistema de registro electrónico, y se asegurará que el sistema que se diseñe haga llegar directamente a la Policía toda transacción que efectúe un tenedor de licencia. Se le concede a la Policía de Puerto Rico el término de un (1) año contado a partir de la vigencia de esta Ley para instalar este Registro.

La licencia de armas será representada por un carné lo suficientemente pequeño como para ser portado en billeteras de uso ordinario, y que contendrá al menos una fotografía del peticionario, el nombre completo de éste, su fecha de nacimiento, sus señas personales y su número de la licencia de armas. Además contendrá los mecanismos para lograr acceso al sistema de Registro Electrónico de la Policía para constatar su veracidad y otras datos pertinentes, tales como identificar el alcance del mismo mediante las categorías de, portación, tiro, caza o todas las categorías. El carné no contendrá la dirección del peticionario ni mención de sus armas, pero el registro electrónico de la Policía contendrá y suministrará a sus usuarios tal información.

Disponiéndose que, mientras la Policía implementa y hace disponible a los armeros el sistema de Registro Electrónico, el Superintendente expedirá a cada concecionario de licencias de armas un carné provisional que al menos contenga una fotografía del concesionario y exprese su nombre completo, su fecha de nacimiento, sus señas personales, el número de licencia, y los tipos de armas que posee y municiones que está autorizado a comprar. Una vez esté debidamente implementado el sistema de Registro Electrónico, el Superintendente únicamente podrá expedir el carné electrónico. De no estar disponible dicho sistema al momento de realizar alguna transacción, la misma se realizará según el procedimiento que el Superintendente disponga mediante reglamento.

**Artículo 2.02.-Licencia de Armas**

(A) El Superintendente expedirá una licencia de armas a cualquier peticionario que cumpla con los siguientes requisitos:

(1) Haber cumplido veintiún (21) años de edad;

(2) Tener un certificado negativo de antecedentes penales, y no encontrarse acusado y pendiente o en proceso de juicio por algunos de los delitos enumerados en el Artículo 2.03 de esta Ley;

(3) No ser ebrio habitual o adicto a sustancias controladas;

(4) No estar declarado incapaz mental por un Tribunal;

(5) No incurrir ni pertenecer a organizaciones que incurran en actos de violencia, o dirigidos al derrocamiento del Gobierno constituido;

(6) No haber sido separado de las Fuerzas Armadas bajo condiciones deshonrosas, o destituido de la Policía de Puerto Rico;

(7) No estar bajo una orden del tribunal que le prohiba acosar, espiar, amenazar o acercarse a un compañero íntimo, alguno de los niños de ese compañero o a persona alguna, y no tener un historial de violencia;

(8) Ser ciudadano de los Estados Unidos de América o residente legal de Puerto Rico;

(9) No ser persona que, habiendo sido ciudadano de los Estados Unidos alguna vez, renunció a esa ciudadanía;

(10) Someter una declaración jurada atestiguando el cumplimiento con las leyes fiscales; estableciéndose que será razón para denegar la expedición de la licencia solicitada o para revocar ésta el que el peticionario haya incumplido las leyes fiscales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico;

(11) Cancelar un sello de rentas internas de setenta y cinco (75) dólares a favor de la Policía de Puerto Rico; disponiéndose que en los casos en que se deniegue la licencia, la cantidad pagada en sellos no será reembolsable;

(12) Someter junto a su solicitud, tres (3) declaraciones juradas de tres (3) personas que, so pena de perjurio, atestigüen que el peticionario goza de buena reputación en su comunidad, por lo que no existe objeción a que tenga armas de fuego; y

(13) Someter su solicitud cumplimentada bajo juramento ante notario, acompañada de una muestra de sus huellas digitales, tomada por un técnico de la Policía de Puerto Rico o agencia gubernamental estatal o federal competente, y acompañada de dos (2) fotografías de dos (2) pulgadas por dos (2) pulgadas de tamaño, a colores, suficientemente reciente como para mostrar al peticionario en su apariencia real al momento de la solicitud.

(14) Someter un documento, en formulario que prescriba el Superintendente, en el cual el peticionario consienta, de ser así requerido, a suministrar a la Policía de Puerto Rico, muestras de su Acido Deoxiribonucléico (AND) para propósitos de identificación.

(B)Toda solicitud, en duplicado y debidamente cumplimentada, junto a los documentos y el comprobante arriba indicados, se radicarán en el Cuartel de la Policía de distrito donde resida el peticionario, reteniendo éste la copia sellada como su constancia. Dentro de un término de cinco (5) días laborables, el Superintendente expedirá una certificación de que la solicitud y todos los documentos requeridos han sido entregados, o requerirá de la cumplimentación de los requisitos de la solicitud para poder emitir la certificación. A partir de que se expida la mencionada certificación, el Superintendente, dentro de un término que no excederá de sesenta (60) días naturales, determinará y certificará por escrito si el peticionario cumple con los requisitos establecidos en esta Ley para la concesión de la licencia de armas. Esto podrá lograrse mediante una investigación en los archivos de cualquier agencia gubernamental de Puerto Rico, Estados Unidos o el exterior a la que pueda tener acceso (incluyendo los archivos del National Crime Information Center y del National Instant Criminal Background Check System), entre otros. De resultar la investigación del Superintendente en una determinación de que la persona no cumple con todos

los requisitos establecidos en esta Ley, no le será concedida la licencia de armas, pero sin menoscabo a que el peticionario pueda solicitarla nuevamente en un futuro. Si el Superintendente no emite una determinación dentro del plazo antes mencionado de sesenta (60) días, éste tendrá la obligación de expedir un permiso especial con carácter provisional a favor del peticionario, en un término diez (10) días naturales. Dicho permiso especial con carácter provisional concederá todos los derechos, privilegios y prerrogativas de una licencia de armas ordinaria, durante una vigencia de ciento veinte (120) días naturales, período dentro del cual el Superintendente deberá alcanzar una determinación. Si al concluir la vigencia de dicho permiso con carácter provisional el Superintendente aún no hubiere alcanzado una determinación sobre la idoneidad del peticionario, dicho permiso con carácter provisional advendrá automáticamente a ser una licencia de armas ordinaria.

(C) El Superintendente podrá, discrecionalmente y de forma pasiva, sin perturbar la paz y tranquilidad del investigado o interrumpir la privacidad del hogar, realizar cuantas investigaciones estime pertinentes después de remitirse la licencia al peticionario; disponiéndose que el hecho de que se estén haciendo o no se hayan hecho las investigaciones no podrá ser impedimento para que se remita la licencia dentro de los términos antes indicados. Si después de realizada la investigación pertinente por el Superintendente, resultare que el peticionario ha dado información falsa a sabiendas en su solicitud o no cumple con los requisitos establecidos en esta Ley, se procederá de inmediato a la revocación e incautación de la licencia y a la incautación de todas las armas de fuego y municiones que tuviere el peticionario, quedando éste sujeto a ser procesado por el delito de perjurio y por las correspondientes violaciones a esta Ley.

(D) La licencia de armas que en este Artículo se establece faculta al concesionario a ser propietario de un máximo de seis (6) armas de fuego, salvo que éste posea un permiso de tiro al blanco o de caza, en cuyo caso no habrá límite establecido. Además, faculta al concesionario a adquirir, comprar, vender, donar, traspasar, prestar, ceder, tener, poseer, custodiar, transportar, portar y conducir armas de fuego, municiones y cualquier accesorio pertinente, en todo lugar sujeto a la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; disponiéndose:

(1) que las armas de fuego se podrán portar, conducir y transportar de forma oculta o no ostenciosa;
(2) que, salvo que se posea además un permiso de portación, el arma no se podrá portar en la persona del concesionario;
(3) que las armas de fuego sólo se podrán prestar, donar, vender, traspasar, ceder, o dejar bajo la custodia de personas que posean licencia de arma o de armero, o una de las personas o cualquier otra forma de traspaso de control o de dominio mencionadas en el Artículo 2.04 de esta Ley;
(4) que el concesionario sólo podrá transportar un (1) arma de fuego a la vez, salvo los concesionarios que posean a su vez permisos de tiro al blanco y de caza, quienes no tendrán limitación de cantidad para portar armas de fuego en su persona mientras se encuentren en los predios de un club de tiro autorizado o en aquellos lugares donde se practique el deporte de caza, en conformidad a las leyes aplicables;
(5) que el concesionario sólo podrá comprar municiones de los calibres que puedan ser utilizados por las armas que posee inscritas a su nombre;
(6) que esta licencia de armas no autoriza al concesionario a dedicarse al negocio de compra y venta de armas de fuego, limitándose la compra y venta de éstas a sus armas personales; y
(7) que previo permiso obtenido del Superintendente, una vez al año el concesionario tendrá que acudir a un club de tiro autorizado, pagando la cuota que allí se le requiera, para entrenarse en el uso y manejo de sus armas; disponiéndose que para este propósito el Superintendente autorizará la compra de cincuenta (50) municiones adicionales a las permitidas por esta Ley, las cuales tendrán que ser consumidas en su totalidad en el club de tiro al que el concesionario haya asistido.

(E) Dentro del término de noventa (90) días de recibir su Licencia de Armas, prorrogable por noventa (90) días más si así se solicita dentro del término original, todo concesionario deberá radicar, de no haberla radicado antes, en el Cuartel General de la Policía de Puerto Rico personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, una certificación expedida por un oficial autorizado de un club de tiro autorizado en Puerto Rico al efecto de que el peticionario ha aprobado un curso en el uso y manejo correcto y seguro de armas de fuego conforme a esta Ley. De no hacerlo, incurrirá en una falta administrativa de cien (100) dólares por cada mes de atraso, hasta un máximo de seis (6) meses, al cabo de los cuales se revocará su licencia y se incautará la misma y toda arma y municiones que el peticionario haya adquirido. El Superintendente, para estos propósitos autorizará la compra de hasta un máximo de quinientas (500) municiones adicionales a las permitidas por esta Ley, salvo que se requieran más para certificarse mediante declaración jurada so pena de perjurio por parte del concesionario. Dichas municiones tendrán que ser consumidas en su totalidad por el concesionario durante el entrenamiento para la certificación. Lo dispuesto en este inciso no menoscabará lo dispuesto en el acápite (8) del inciso anterior.

(F) La Policía de Puerto Rico expedirá los duplicados de carnés de licencia de armas que interese un peticionario dentro del término de diez (10) días naturales de serle solicitado con el pago de veinticinco (25) dólares en un comprobante de rentas internas por cada duplicado. En el caso de cambio de categoría de la licencia, el costo para el cambio de categoría será de diez (10) dólares.

Todo carné de la licencia de armas tendrá la fecha en la cual deberá ser actualizado, que será cinco (5) años de expedido, y ninguna persona podrá hacer transacciones de armas de fuego o municiones, ni tirar en un club de tiro, ni cazar, ni portar, conducir o transportar armas, si no hubiese solicitado su actualización como se indica en este artículo, so pena de que se revoque la Licencia de Armas y se imponga multa administrativa de quinientos (500) dólares por tirar en un club de tiro, cazar, portar, conducir o transportar armas. Transcurridos seis (6) meses de su fecha vencimiento, sólo podrá vender sus armas de fuego a una persona con licencia de armero.

Cada cinco (5) años, en el quinto aniversario de la fecha de expedición de la Licencia de Armas, el peticionario vendrá obligado a actualizar su carné cumplimentando una declaración jurada dirigida al Superintendente de la Policía, previo el pago de los sellos de rentas internas dispuestos en el Artículo 2.02 de esta Ley, haciendo constar que las circunstancias que dieron base a la otorgación original se mantienen de igual forma o indicando de qué forma han cambiado. Dicha actualización se podrá realizar dentro de seis (6) meses antes o treinta (30) días después de la fecha aniversario de cinco (5) años de expedido el carné original o actualización, según sea el caso. La no actualización del carné transcurridos los treinta (30) días antes mencionados conllevará una multa administrativa de cincuenta (50) dólares por mes hasta un máximo de seis (6) meses, cantidad que deberá ser satisfecha como requisito a la actualización. Si pasados seis (6) meses no se actualiza el carné, el Superintendente revocará la licencia de armas e incautará las armas y municiones, disponiéndose que el concesionario podrá actualizar su carné y reinstalar su licencia hasta seis (6) meses más después de la revocación o la incautación, lo que fuese posterior, mediante el pago del doble de la multa acumulada. Nada de lo anterior impide que una persona a quien se le ha revocado su licencia de armas por su inacción, solicite de novo otra licencia y se le conceda, siempre que hubiese pagado cualquier multa pendiente, en cuyo caso podrá recobrar las armas incautadas, si el Superintendente no hubiese dispuesto de ellas.

El Superintendente notificará a todo concesionario por correo dirigido a su dirección, seis meses (6) antes del vencimiento del carné, la fecha en que éste deberá ser actualizado. El Superintendente hará disponibles a través de los cuarteles de la Policía de áreas, de los armeros y del internet todos los formularios necesarios para realizar la actualización. Actualizado el carné, el Superintendente emitirá, previo satisfacción de derechos de renovación, el nuevo carne dentro de los próximos diez (10) días naturales, excepto causa justificada para demorarlo.

Todo concesionario deberá informar al Superintendente su cambio de dirección residencial y postal dentro de treinta (30) días de realizarse el cambio, so pena de multa administrativa de doscientos (200) dólares, que deberá pagarse como requisito a la actualización del carné.

(G) En cualquier momento, una persona podrá entregar su licencia de armas a la Policía para su cancelación, y conjuntamente entregará sus armas a la Policía o las traspasará a otra persona con licencia de armas o de armero.

**Artículo 2.03.-Transferencia de Fondos**

Se ordena al Departamento de Hacienda transferir al Superintendente las sumas que se recauden por concepto de los comprobantes de rentas internas que se acompañan en la solicitud que se requiere en el Artículo 2.02 de esta Ley. Estos fondos podrán ser utilizados para la adquisición de equipo y materiales que permitan la operación continua e ininterrumpida del registro electrónico, para sufragar el costo de cualquier campaña que se entienda necesaria llevar a cabo con el propósito de orientar al público sobre el uso y manejo de armas y de la legislación pertinente a esta materia.

**Artículo 2.04.-Procedimiento de Expedición de Licencia de Armas a Ciertos Funcionarios del Gobierno de Puerto Rico**

El Gobernador, los legisladores, los alcaldes, los secretarios, directores y jefes de agencias del Gobierno de Puerto Rico, los jueces estatales y federales, los fiscales estatales y federales y los procuradores de menores, el Superintendente, los miembros de la Policía, y todo agente del orden público, podrán portar armas de fuego con licencia provista mediante procedimiento expedito aprobado mediante Reglamentación del Superintendente a estos efectos. Además, los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de la Guardia Nacional de Puerto Rico podrán portar armas sin licencia mientras se encuentren en funciones oficiales de su cargo.

**Artículo 2.05.-Permisos de Portación de armas expedido por el Tribunal**

(A) La Sala Municipal con competencia del Tribunal de Primera Instancia concederá, de no existir causa justificable para denegarlo, un permiso para portar, transportar y conducir cualquier pistola o revólver legalmente poseído, previa audiencia con el Ministerio Público, a toda persona poseedora de una licencia de armas que demostrare temer por su seguridad y/o la de sus seres queridos debido a su empleo, estilo de vida o condición social. El peticionario deberá radicar junto a su solicitud de portación, un sello de doscientos cincuenta (250) dólares a favor del Tribunal, y una certificación expedida por un oficial autorizado de un club de tiro autorizado en Puerto Rico al efecto de que el peticionario ha aprobado un curso en el uso y manejo correcto y seguro de armas de fuego conforme a esta Ley.

Los requisitos exigidos para la expedición de una licencia de armas dispuestos en el Artículo 2.02 de esta Ley serán considerados por el tribunal al momento de evaluar la concesión del permiso de portación.

El permiso para portar armas podrá renovarse mediante la presentación al tribunal de un sello de cien (100) dólares a favor del Tribunal, y una declaración jurada en la que se haga constar que las circunstancias que dieron lugar a la concesión original de la licencia aún prevalecen al momento de presentarse la solicitud. En el caso de existir algún cambio, el mismo deberá ser justificado previo a la concesión de la renovación. Además, deberá mostrar evidencia de poseer una licencia de armas vigente.

Deberá acompañarse una declaración jurada a los efectos que cumple con todos los requisitos establecidos en el Artículo 2.02 de esta Ley y que todo el contenido de la solicitud es correcto y cierto. El tribunal, *motu propio* o a solicitud del Ministerio Público, podrá celebrar una vista si lo estimare necesario, para determinar si las condiciones que dieron lugar a la concesión de la licencia aún prevalecen.

(B) El permiso de portación aquí otorgado tendrá una duración de cinco años y estará sujeto a la vigencia de la licencia de armas. En los casos en que se deniegue el permiso, las cantidades pagadas mediante sellos no serán rembolsables.

(C) Anualmente, a partir de la concesión del permiso de portar, la persona deberá someter al Superintendente una nueva certificación en el uso, manejo y medidas de seguridad de armas de fuego, certificada por un club de tiro. Será deber del consecionario de la categoría de portación, proveer dicha certificación al Superintendente cada año. El Superintendente, para estos propósitos, autorizará la compra de hasta un máximo de doscientas cincuenta (250) municiones adicionales a las permitidas en esta Ley, salvo que se requieran más para certificarse; las cuales tendrán que ser consumidas en su totalidad en el club de tiro al que el concesionario haya asistido durante el entrenamiento de certificación.

Los concesionarios que no cumplan con el requisito de la certificación anual no podrán portar un arma hasta tanto sean certificados, so pena de multa administrativa de quinientos (500) dólares; en casos de una segunda infracción a lo dispuesto en este párrafo, el Superintendente además revocará el permiso de portación.

(D) El permiso de portación será incorporado por el Superintendente a la licencia de armas del concesionario, haciendo constar la categoría de portar, según lo establecido en el Artículo 2.02(F), dentro de los diez (10) días naturales siguientes de haber entregado el concesionario la autorización del Tribunal.

**Artículo 2.06.-Licencia de Armas, Permisos de Portación; Personas exentas del pago del Comprobante**

Las siguientes personas estarán exentas del pago de los comprobantes de Renta Internas a que se refiere el Artículo 2.02 de esta Ley:

(1) Las personas con impedimento físico que se dediquen al deporte de tiro al blanco, según sea certificado por el Comité Olímpico;

(2) El gobernador, los legisladores, los jueces estatales y federales, los alcaldes, y los secretarios, directores y jefes de agencias del Gobierno de Puerto Rico;

(3) Los Agentes del Orden Público y Agentes de Rentas Internas;

(4) Los funcionarios, agentes y empleados del gobierno de Puerto Rico, que, por razón del cargo y las funciones que desempeñan, vienen requeridos a portar armas;

(5) Los ex-gobernadores, ex-legisladores, ex-superintendentes, ex-jueces estatales y federales, y ex-alcaldes de Puerto Rico; y

(6) Los ex-agentes de orden público, siempre que el retiro haya sido honrable y que hayan servido más de diez (10) años.

**Artículo 2.07.-Acusación por delito grave; ocupación de armas**

Luego de una determinación de causa probable para el arresto de cualquier persona a la cual se le haya otorgado una licencia de armas, por la comisión de cualquiera de los delitos especificados en el Artículo 2.12 o de violaciones a las disposiciones de esta Ley, el tribunal suspenderá provisionalmente la licencia hasta la determinación final del procedimiento criminal, en cuyo caso será reinstalada si no recayere una convicción final. Disponiéndose además que el tribunal ordenará la ocupación inmediata de la totalidad de las armas y municiones del concesionario para su custodia en el Depósito de Armas y Municiones de la Policía. De resultar el acusado con una determinación de no culpabilidad, final y firme, el juez ordenará la inmediata devolución de su licencia de armas y de las armas y municiones. Toda arma y municiones así devueltas deberán entregarse en las mismas condiciones en que se ocuparon. Cuando la custodia haya recaído en la Policía, el concesionario estará exento del pago por depósito. De resultar la acción judicial en una de culpabilidad, final y firme, el Superintendente revocará la licencia permanentemente y se incautará finalmente de todas sus armas y municiones.

**Artículo 2.08.-Licencia de Armero; Informe de Transacciones**

(A) Ninguna persona podrá dedicarse al negocio de armero o comerciante en armas de fuego y municiones, sin poseer una licencia expedida por el Secretario de Hacienda. Dichas licencias vencerán a partir de un (1) año desde la fecha de su expedición y estarán nuevamente sujetas a las formalidades y requisitos de solicitud de esta Ley. Las licencias de armeros estarán sujetas a la aprobación y certificación

de la Policía, previa inspección, sobre las medidas de seguridad exigidas en la edificación donde esté ubicado el establecimiento. La solicitud para renovación de una licencia deberá radicarse con treinta (30) días de antelación a la fecha de su vencimiento.

(B) Cada transacción referente a la introducción de armas a Puerto Rico por armeros o a la venta de armas y municiones entre armeros deberá ser informada mediante el sistema electrónico establecido por esta Ley. De no estar disponible dicho sistema al momento de la transacción, será informada al Superintendente en formulario que proveerá éste, debiendo expresar en el mismo el nombre, domicilio, sitio del negocio y particulares de la licencia, tanto del vendedor como del comprador, así como la cantidad y descripción, incluyendo el número de serie de las armas o municiones objeto de cada transacción, según lo requiera el Superintendente.

(C) Un armero que posea una licencia expedida de acuerdo con esta Ley, podrá adquirir un arma que esté inscrita en el registro de armas bajo las disposiciones de esta Ley, por compra de la persona que la haya inscrito a su nombre siempre que tal persona tenga una licencia de armas expedida de acuerdo con esta Ley. Al efectuarse cualquier venta de armas de fuego o municiones, la transacción deberá ser informada mediante el sistema electrónico establecido por esta Ley. De no estar disponible dicho sistema al momento de la transacción, el vendedor y comprador deberán notificarlo por escrito y con acuse de recibo al Superintendente, mediante el formulario que proveerá éste a esos fines.

**Artículo 2.09.-Requisitos de un Peticionario para Licencia de Armero**

(A) Toda persona que desee obtener o trasladar de local una licencia de armero radicará ante el Secretario del Departamento de Hacienda una solicitud jurada acompañada de un comprobante de rentas internas de quinientos (500) dólares, en el formulario que proveerá el Secretario de Hacienda para éstos propósitos. Luego de la aprobación de la solicitud por el Secretario de Hacienda, la misma será remitida al Superintendente de la Policía de Puerto Rico, y ninguna licencia será expedida de conformidad con este Artículo si se demostrare que el peticionario no cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 2.02(A), excepto que tendrá que ser ciudadano de los Estados Unidos.

(B) Ninguna licencia de armero será expedida de conformidad con este Artículo, sin que previamente se haya practicado por la Policía una investigación de todas las declaraciones contenidas en la solicitud y sin que los archivos de la Policía y los demás archivos accesibles, (incluyendo los archivos del *National Crime Information Center* y del *National Instant Criminal Background Check System*), y hayan sido examinados a los fines de determinar cualquier convicción anterior del peticionario. No se expedirá licencia alguna si no se cumplieran con todas las disposiciones de este Artículo, o si las declaraciones contenidas en la solicitud no resultaren ciertas.

(C) Si el peticionario es una corporación o una sociedad, la solicitud deberá estar firmada y jurada por el presidente, el secretario y el tesorero de la corporación, o por todos los socios directores de la sociedad; deberá indicar el nombre de la corporación o de la sociedad, sitio y fecha de su incorporación o constitución, sitio de su oficina principal o domicilio, nombre de la ciudad o pueblo, calle y número donde será establecido el negocio, agencia, sub agencia, oficina o sucursal para la cual se interese la licencia. Una licencia expedida bajo las disposiciones de este Artículo será válida solamente para los negocios mencionados y descritos en la licencia. Dicha licencia no podrá traspasarse a ningún otro negocio ni a ninguna otra persona, y quedará automáticamente cancelada al disolverse la corporación o sociedad o sustituirse cualquiera de los oficiales de la corporación que suscribieron la solicitud, o al ingresar algún nuevo socio director en el caso de una sociedad, aunque dicha licencia podrá ser renovada tan pronto se cumpla con lo dispuesto en este Artículo en relación con el nuevo oficial o el nuevo socio. En estos casos, el Secretario de Hacienda expedirá una licencia provisional mientras se efectúa el trámite de renovación.

(D) Cuando el peticionario es una corporación o sociedad, no se expedirá licencia alguna si cualquier oficial de la corporación o socio director de la sociedad no cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 2.02(A), excepto que tendrá que ser ciudadano de los Estados Unidos.

(E) En todo caso, la licencia de armero deberá ser expedida dentro de noventa (90) días de radicada la solicitud personalmente o por correo certificado al Secretario del Departamento de Hacienda, sin perjuicio de que el Superintendente pueda continuar su investigación posteriormente y revocar la licencia si hubiera causa legal para ello.

Artículo 2.10.-Condiciones para Operaciones de Armeros; Constancias de Transacciones

Una persona, sociedad o corporación a la cual se le hubiera expedido una licencia de armero podrá dedicarse a la venta de armas y municiones, o al negocio de armero bajo las siguientes condiciones:

(a) El negocio se explotará solamente en el local designado en la licencia. Los armeros a quienes la Policía no les hubiese certificado que han cumplido con las medidas de seguridad de acuerdo con esta Ley, no podrán iniciar operaciones hasta cumplir con las mismas, ni podrán mantener en tal local armas o municiones que no sean aquellas que se esté autorizado a poseer y portar por el armero de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. La infracción de este inciso por el armero o aspirante a armero constituirá falta administrativa que será sancioanda con multa no menor de cinco mil (5,000) dólares ni mayor de cincuenta mil (50,000) dólares, a discreción del Superintendente. Además, conllevará que el Superintendente revoque la licencia.

(b) Ningún armero recibirá arma alguna para su reparación, modificación, limpieza, grabación, pulimento, o para efectuar cualquier otro trabajo mecánico, sin que se le muestre previamente la licencia de armas, ni aceptará bajo las condiciones arriba descritas ningún arma de fuego que tenga su número de serie mutilado. La infracción de este inciso por parte del armero constituirá falta administrativa, y será sancionada con multa de diez mil (10,000) dólares. No cumplir con este requisito conllevará la revocación de la licencia por el Superintendente.

(c) La licencia de armero o copia certificada de la misma deberá colocarse en el establecimiento, de modo que pueda leerse con facilidad. No cumplir con este requisito podrá conllevar imposición de multa administrativa de cinco mil (5,000) dólares.

(d) Todo armero deberá tener en algún lugar visible al comprador o cliente la siguiente advertencia:

**"El uso de un dispositivo de seguridad (*locking device* o *safety lock*) es recomendable para un arma de fuego. Toda arma cargada, así como sus municiones deberán mantenerse fuera del alcance de menores o personas no autorizadas a utilizarlas. Es aconsejable guardar sus armas separadas de las municiones."**

No cumplir con este requisito conllevará la imposición de una multa administrativa de cinco mil (5,000) dólares.

(e) Se llevará constancia de cada arma vendida y de cada venta de municiones, en libros destinados a este fin que serán impresos en la forma que prescriba el Superintendente, quien suministrará estos libros a los armeros, previo el pago por éstos de los costos correspondientes, según se disponga mediante reglamento. La constancia de cada venta será firmada personalmente por el comprador y por la persona que efectúe la venta, haciéndolo cada uno en presencia del otro; y dicha constancia expresará la fecha, día y hora de la venta, calibre, fabricación, modelo y número de fábrica del arma, calibre, marca y cantidad de municiones, y el nombre y número de licencia de armas. El vendedor anotará la descripción de las municiones, la cantidad que vende y la fecha, día y hora de la venta en el formulario que le proveerá el Superintendente. El Superintendente tendrá la obligación de mantener el registro organizado de forma que facilite comprobar en cualquier momento la cantidad de municiones que adquiere cada tenedor de licencia.

(f) Cuando las municiones vendidas sean de las descritas en el segundo párrafo del Artículo 4.01(A) de esta Ley, el vendedor llevará un registro especial en libros y formularios destinados a este fin que serán impresos en la forma que prescriba el Superintendente, también suministrado en conformidad al

inciso anterior, en el que aparecerá el nombre del comprador, la descripción de las municiones y la fecha, día y hora de la venta. Además, dicho registro contendrá lo siguiente:

(1) Una descripción completa de cada arma, incluyendo: (i) el fabricante de la misma; (ii) el número de serie que aparezca grabado en la misma; (iii) el calibre del arma; y (iv) el modelo y tipo del arma. En el caso de ventas al por mayor de armas del mismo calibre, modelo y tipo, el armero puede acumular dichas ventas en sus récords, siempre y cuando las mismas sean hechas en una misma fecha y a un solo comprador.

(2) El nombre y dirección de cada persona de la cual se recibió el arma para la venta en la armería, conjuntamente con la fecha de adquisición.

(3) El nombre, número de licencia y dirección de la persona, natural o jurídica, a quien se vendió y la fecha de la entrega.

La utilización del sistema de registro electrónico no eximirá del cumplimiento de las disposiciones de este Artículo.

(g) Los documentos y libros deberán mantenerse en el negocio indicado y descrito en la licencia, y deberán estar disponibles durante horas laborables para su inspección por cualquier funcionario del Ministerio Público o agente del orden público. En los casos de revocación de la licencia según se prescribe en este Artículo o del cese de operaciones del negocio, dichos libros y constancias deberán ser entregados inmediatamente al Superintendente.

(h) No se exhibirán armas, municiones o imitaciones de los mismos en ningún lugar de un establecimiento comercial dedicado a la venta de armas, donde puedan ser vistas desde el exterior del negocio. No cumplir con este requisito podrá conllevar la imposición de una multa administrativa de cinco mil (5,000) dólares. Disponiéndose, que en casos de inobservancia de las medidas de seguridad o de las medidas dispuestas en este Artículo en dos (2) o más ocasiones, por parte de los armeros, el Superintendente, previa notificación escrita, podrá revocar la licencia. De la persona no estar de acuerdo, podrá llevar una acción de revisión, en conformidad a la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada.

(i) Todo armero a quien se le haya expedido una licencia bajo las disposiciones de este Artículo, que deje de llevar las constancias y libros que aquí se exigen, incurrirá en delito grave y convicto que fuere, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de doce (12) años y pena de multa que no excederá de treinta mil (30,000) dólares. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de veinticuatro (24) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) años. Además, el Superintendente revocará cualquier licencia de armas o de armero que esta persona posea.

**Artículo 2.11.-Fundamentos para Rehusar Expedir Licencia**

El Superintendente no expedirá licencia de armas ni el Secretario de Hacienda expedirá licencia de armero, o de haberse expedido se revocarán y el Superintendente se incautará de la licencia y de las armas y municiones de cualquier persona que haya sido convicta, en o fuera de Puerto Rico, de cualquier delito grave o su tentativa, por conducta constitutiva de violencia doméstica según tipificada en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, por conducta constitutiva de acecho según tipificada en la Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, según enmendada, ni por conducta constitutiva de maltrato de menores según tipificada en la Ley Núm. 75 de 28 de mayo de 1980, según enmendada. Disponiéndose, además, que tampoco se expedirá licencia alguna a una persona con un padecimiento mental que lo incapacite para poseer un arma, un ebrio habitual o adicto al uso de narcóticos o drogas, ni a persona alguna que haya renunciado a la ciudadanía americana o que haya sido separado bajo condiciones deshonrosas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o destituido de la Policía de Puerto Rico, ni a ninguna persona que haya sido convicta por alguna violación a las disposiciones de esta Ley o de la anterior Ley de Armas.

Artículo 2.12.-Registro de Armas; Pérdida y Entrega de Arma de Fuego; Muerte del Poseedor de

Licencia

(A) El Registro de Armas creado en el Cuartel General de la Policía, se ajustará en su organización y funcionamiento a las disposiciones de esta Ley y será llevado en forma computadorizada, sistemática y ordenada de manera que se facilite la búsqueda de información. Este Registro deberá estar debidamente custodiado.

(B) Toda arma de fuego legalmente poseída después de entrar en vigor esta Ley, deberá ser inscrita en el Registro de Armas; en caso de que no estuviere previamente inscrita. El Superintendente entregará al declarante una constancia de dicha inscripción.

(C) Toda persona que posea o tenga bajo su dominio un arma debidamente autorizada por Ley y la pierda o se le desaparezca, lo notificará, mediante la presentación de una querella al distrito o precinto policíaco donde éste resida o en el cuartel de la Policía más cercano, inmediatamente advenga conocimiento de su pérdida o desaparición. Si no cumple tal obligación, será culpable de delito menos grave y convicta que fuere, será sancionada con pena de multa hasta un máximo de cinco mil (5,000) dólares.

(D) Cuando falleciere una persona debidamente autorizada para la tenencia de armas, será deber de todo administrador, albacea o fideicomisario, o de cualquiera de ellos que actúe en Puerto Rico, y de cualquier subadministrador, agente o persona autorizada legalmente para administrar los bienes, notificar su fallecimiento al Superintendente dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del fallecimiento. La notificación expresará el nombre, residencia y circunstancias personales del fallecido. No notificar este hecho constituirá delito menos grave que será sancionado con pena de multa no mayor de quinientos (500) dólares. El Superintendente dispondrá lo necesario para el recibo, almacenamiento, custodia y/o disposición de dichas armas, mientras se distribuye la herencia. Si las armas fueren adjudicadas a un heredero que sea elegible para obtener una licencia de armas, y se le expidiere tal licencia, dicha arma o armas le será entregada. De serle denegada tal licencia, o de disponerse la venta de dicha arma en pública subasta, la misma podrá ser adquirida únicamente por una persona con licencia de armas vigente, mediante subasta o según lo dispuesto en el Artículo 4.16"; por un armero debidamente autorizado por esta Ley y, de no ser así adquirida, dicha arma será entregada para su decomiso al Superintendente, tal como se dispone en esta Ley.

Artículo 2.13.-Motivos Fundados para Facultar a los Agentes del Orden Público a Ocupar Armas

Cualquier Policía Estatal o Municipal podrá solicitar del Tribunal de Primera Instancia la ocupación de un arma cuando tuviese motivos fundados para entender que el tenedor de la licencia hará uso ilegal de dicha arma, para causar daño a sus familiares o vecinos; por haber proferido amenazas de cometer un delito; por haber expresado su intención de suicidarse; cuando haya demostrado reiteradamente negligencia o descuido en el manejo del arma; cuando se estime que el tenedor padece de una condición mental, se le considere ebrio habitual o es adicto a sustancias controladas; o en cualquier otra situación de grave riesgo o peligro que justifique esta medida de emergencia. Un agente del orden público podrá también ocupar un arma autorizada cuando se arreste al tenedor de la misma por la comisión de un delito grave o delito menos grave que implique violencia. A solicitud de parte afectada, el Superintendente celebrará una vista administrativa en un término no mayor de treinta (30) días para sostener, revisar o modificar la ocupación del agente del orden público. El Superintendente deberá emitir su decisión en un plazo no mayor de cinco (5) días a partir de la celebración de dicha vista administrativa formal y de resultar favorable a la parte afectada la determinación de Superintendente este ordenará la devolución inmediata del arma o armas ocupadas.

**Artículo 2.14.-Armas de Asalto Semiautomáticas; Fabricación, importación, distribución, posesión y transferencia**

(A) No se podrá fabricar o hacer fabricar, ofrecer, vender, alquilar, prestar, poseer, usar, traspasar o importar desde fuera del territorio de los Estados Unidos, un Arma de Asalto Semiautomática. No obstante, esta prohibición no será de aplicación a:

(1) la posesión, uso, transferencia, en Puerto Rico, o importación desde el territorio de los Estados Unidos, por personas cuya licencia contenga la categoría de tiro al blanco, de caza o posea licencia de armero, de aquellas armas de asalto legalmente existentes en la Nación de los Estados Unidos de Norte América, a la fecha de entrar en vigor esta Ley; o

(2) la fabricación, importación, venta o entrega, por personas con licencia de armero, para uso de estas armas en el cumplimiento del deber por los Agente del Orden Público, del Gobierno de Puerto Rico o de los Estados Unidos, o para el uso de las fuerzas armadas del Gobierno de los Estados Unidos o de Puerto Rico.

(B) Las Armas de Asalto Semiautomáticas a que se refiere este Artículo son las siguientes:

(1) Norinco, Mitchell, y Poly Technologies Avtomat Kalashnikovs (todos los modelos de AK);

(2) Action Arms Israeli Military Industries UZI y Galil;

(3) Beretta Ar70 (SC-70);

(4) Colt AR-15;

(5) Fabrique National FN/FAL, FN/LAR, y FNC;

(6) SWD M-10, M-11, M-11/9, y M-12;

(7) Steyr AUG;

(8) INTRATEC TEC-9, TEC-DC9 y TEC-22; y

(9) Escopetas *revolving cylinder*, tales como (o similares a) la *Street Sweeper* y el *Striker 12*.

Además, será considerada como un arma de asalto semiautomática:

(1) Un rifle semiautomático que pueda ser alimentado mediante retroalimentación por un abastecedor o receptáculo removible y que contenga más de dos (2) de las siguientes características:

(a) culata plegadiza o telescópica;

(b) empuñadura de pistola (*pistol grip*) que sobresale manifiestamente por debajo de la acción del arma;

(c) montura para bayoneta;

(d) supresor de fuego o rosca para acomodar un supresor de fuego (*flash suppressor*); o

(e) lanzador de granadas, excluyendo los lanzadores de bengalas.

(2) Una pistola semiautomática que pueda ser alimentada mediante retroalimentación por un abastecedor o receptáculo removible y que contenga más de dos (2) de las siguientes características:

(a) un abastecedor o receptáculo de municiones que se fija a la pistola por fuera de la empuñadura de la pistola (*pistol grip*);

(b) un cañon con rosca en su punta delantera capas de aceptar una extensión al cañon, supresor de fuego (*flash suppressor*), agarre para la mano al frente del arma o un silenciador;

(c) una cubierta que se puede fijar cubriendo parcial o total el cañon permitiendo a quien dispara el arma, sujetarla con la mano que no esta oprimiendo el gatillo y no quemarse;

(d) un peso de manufactura en exceso a cincuenta (50) onzas descargada; o

(e) una versión semiautomática de un arma automática.

(3) Una escopeta semiautomática que contenga dos (2) o más de las siguientes características:

(a) culata plegadiza o telescópica;

(b) empuñadura de pistola (pistol grip) que sobresale manifiestamente por debajo de la acción del arma;

(c) abastecedor o receptáculo de municiones fijo con capacidad para más de cinco (5) cartuchos; o

(d) capaz de recibir un abastecedor o receptáculo de municiones removible.

(F) Toda persona que viole las disposiciones de este artículo, incurrirá en delito grave, y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de veinticuatro (24) años, sin derecho a sentencia suspendida, a salir en libertad bajo palabra, o a disfrutar de los beneficios de algún programa de desvío o alternativa a la reclusión reconocida en esta jurisdicción. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de treinta y seis (36) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dieciocho (18) años.

No constituirá delito la posesión o uso de estas armas en el cumplimiento del deber por los miembros de la Policía, y aquellos otros agentes del orden público debidamente autorizados a portar armas de fuego conforme se establece en esta Ley.

Las disposiciones de este Artículo serán prospectivas a partir de la aprobación de esta Ley.

**Artículo 2.15.-Comité Interagencial para Combatir Tráfico Ilegal de Armas**

Se establece el Comité Interagencial para Combatir el Tráfico Ilegal de Armas de Fuego, sin perjuicio ni menoscabo de las obligaciones y facultades que recaen en el Superintendente. Este Comité estará integrado por el Secretario de Justicia, quien lo presidirá; el Superintendente de la Policía; el Secretario del Departamento de Hacienda; el Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos; un representante del deporte del tiro al blanco certificado por las Federaciones de Tiro de Puerto Rico y nombrado por el Secretario del Departamento de Recreación y Deportes; y un ciudadano que representará el interes público, quien será seleccionado y nombrado por consenso entre los funcionarios que integren el Comité.

El Comité tendrá a su cargo principalmente la evaluación del problema de importación, tráfico y uso ilegal de armas y municiones en Puerto Rico, con miras a detectar y desarticular los puntos, lugares o circunstancias que propicien la introducción y tráfico ilegal de estas armas y municiones.

Será responsabilidad del Comité, además, diseñar los planes de acción coordinados que sean efectivos para lograr los propósitos antes enunciados y para mejorar los sistemas de registro y control de armas y municiones en Puerto Rico.

El Comité examinará, revisará y hará las recomendaciones pertinentes al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa sobre las medidas legislativas, disposiciones o normas que deberán ser objeto de revisión, derogación o adaptación, a fin de combatir la importación y tráfico ilegal de armas y municiones.

El Comité adoptará un reglamento para su funcionamiento interno y sus decisiones serán adoptadas por mayoría.

El Comité atenderá con prioridad y establecerá los mecanismos viables y adecuados para identificar el modo y frecuencia con que se importan armas y municiones a Puerto Rico y su procedencia. El Comité deberá, además, tomar medidas o formular recomendaciones para que las compañías de transportación marítima y las compañías de mudanza recopilen y pongan a disposición del Comité información confiable sobre el tráfico, importación y exportación de armas y municiones que facilite la consecución de los objetivos de esta Ley.

Será obligación del Secretario de Justicia, en su capacidad de Presidente y a nombre del Comité, rendir un informe anual a la Asamblea Legislativa con recomendaciones sobre la implantación de dicho reglamento en o antes del treinta (30) de enero de cada año.

**Artículo 2.16.-Centro de Rastreo y Análisis**

El Superintendente, mediante reglamento, establecerá en el Cuartel General de la Policía un Centro de Rastreo y Análisis para investigar el origen de toda arma recuperada o que se encuentre en posesión ilegal de una persona.

## CAPITULO III
## PERMISOS DE TIRO AL BLANCO

**Artículo 3.01.-Facultades y Deberes del Secretario de Recreación y Deportes**

El Secretario tendrá los siguientes deberes, poderes, funciones y obligaciones con respecto al deporte del tiro al blanco en Puerto Rico:

(a) Fomentar el desarrollo del deporte del tiro al blanco en Puerto Rico, cooperando para este fin con los clubes, las federaciones de tiro y organizaciones de tiro existentes o que puedan organizarse en el futuro, por todos los medios disponibles a su alcance.

(b) Expedir licencias a los clubes de tiro al blanco que las soliciten, previa recomendación favorable del Superintendente.

(c) Cancelar licencias expedidas a los clubes de tiro al blanco según se dispone en esta Ley, notificando a los interesados y al Superintendente.

(d) Llevar un registro del nombre, dirección y demás circunstancias de los clubes de tiro al blanco que hayan obtenido las licencias correspondientes bajo las disposiciones de esta Ley.

(e) Informar al Superintendente el nombre, dirección y número de la licencia expedida a cada club de tiro al blanco.

(f) Organizar y celebrar anualmente campeonatos de tiro con las armas permitidas por Ley.

(g) Nombrar los jueces, anotadores y oficiales de campo que actuarán en los mismos; y seleccionar y proveer los trofeos, medallas, o diplomas que se otorguen como premio a los vencedores.

(h) Declarar anualmente un "Campeón Nacional" en cada categoría a base de la puntuación en cada campeonato, y publicar una nota de la puntuación obtenida por los primeros seis (6) concursantes en cada categoría. El título de campeón lo ostentará el ganador en cada categoría durante el período que termina con la celebración del próximo campeonato. No será necesario igualar o sobrepasar el récord anterior para ser declarado campeón, sino que bastará con establecer la puntuación más alta entre los participantes.

(i) Asistir o delegar en una persona de su selección, a todos los concursos o torneos de tiro al blanco que se celebran en Puerto Rico bajo los auspicios de cualquier club u organización de tiro, cuando así lo estime conveniente o le sea solicitado por el club auspiciador.

(j) Dada la naturaleza turística de Puerto Rico, cooperar con los clubes y organizaciones de tiro en la celebración de torneos o campeonatos internacionales; disponiéndose que en estos casos, el Secretario, a requerimiento del club patrocinador donde se celebrará el torneo, expedirá permisos provisionales de tiro, en forma expedita, a los participantes de otras jurisdicciones, sin otros requisitos que los contemplados en esta Ley.

(k) Expedir permisos de tiro al blanco a todas aquellas personas con licencia de armas que lo soliciten, y que cumplan y reúnan los requisitos exigidos por las disposiciones de esta Ley; disponiéndose que a los Policías Estatales, Municipales, y las personas con impedimento físico se les eximirá del pago de los derechos de rentas internas que requiere la ley, notificando de ello al Superintendente de manera tal que se haga la anotación correspondiente en el carné del concesionario y el registro central de la Policía contra la licencia de armas de la persona en cuestión.

(l) Cancelar los permisos de tiro al blanco según se dispone en esta Ley, notificando a los interesados, y al Superintendente la cancelación de el Permiso de Tiro.

(m) Llevar un registro en el cual conste el nombre, edad, dirección de toda persona a quien se le haya expedido un permiso de tiro al blanco, así como su número de licencia de armas y

el número del sello federativo de la federación a la cual pertenece; además, informar al Superintendente las cancelaciones de permisos vigentes de tiro por no renovar el sello federativo como aquí se dispone.

**Artículo 3.02.-Licencias para Clubes de Tiro; Reglamentación**

(A) Se concederán licencias para clubes de tiro sólo a aquellos clubes dedicados al deporte del tiro al blanco que estén constituidos conforme a lo dispuesto en esta Ley. La solicitud de licencia deberá hacerse por el dueño o presidente y secretario del club u organización dedicada al deporte de tiro al blanco, y la licencia que se expida al efecto permitirá la práctica del deporte por dos (2) años, solamente en el sitio o sitios destinados para ello por el Secretario. Todo club u organización que se dedique o quiera dedicarse al deporte de tiro al blanco suministrará en su solicitud de licencia los datos que a continuación se expresan:

(1) Nombre del club u organización;

(2) Localización del polígono;

(3) Descripción de las facilidades con que cuenta al momento de la solicitud para la práctica del deporte;

(4) Una lista, por duplicado, de los nombres del dueño del club o todos los directores y oficiales, incluyendo de cada cual su dirección postal y residencial, edad y ocupación, así como una certificación jurada de que el club cuenta con más de diez (10) socios;

(5) Cuando se trate de una corporación o una sociedad, una certificación de que ha sido debidamente constituida bajo las leyes de Puerto Rico;

(6) Un giro o cheque por valor de cien (100) dólares, como pago por la cuota a pagarse por un año o fracción de año económico;

(7) Una certificación de afiliación a una Federación de Tiro; y

(8) Un certificado de seguro, que mantendrá vigente, de "todo riesgo", de responsabilidad pública (cubierta amplia) por una cuantía no menor de trescientos mil (300,000) dólares por daños o lesiones corporales (incluso muerte) y daños a la propiedad ajena o de terceras personas. Dicho certificado de seguro deberá ser emitido por una compañía debidamente reconocida para hacer negocios en Puerto Rico por el Comisionado de Seguros de Puerto Rico.

(B) En los casos de la solicitud para la renovación de la licencia para un club de tiro, el club deberá cumplir con todos los requisitos dispuestos en el inciso anterior, salvo que el costo de la cuota de renovación será de cincuenta (50) dólares. La licencia así renovada tendrá también una vigencia de un (1) año.

(C) El Secretario podrá denegar la licencia original o la renovación solicitada a cualquier club u organización, si la solicitud no cumpliere con todos los requisitos del inciso (A) de este Artículo.

**Artículo 3.03.-Licencias para Clubes de Tiro; Revocación**

No podrá funcionar en Puerto Rico club alguno que se dedique al deporte del tiro al blanco sin la correspondiente licencia expedida por el Secretario, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Artículo 3.02 de esta Ley. Disponiéndose que las licencias de esos clubes estarán sujetas a revocación por el hecho de permitir tirar con armas de fuego a personas que no tengan los permisos contemplados en esta Ley, todo ello sin menoscabo a las demás causas de revocación de licencias que se establecen en esta Ley. Las personas que única y exclusivamente se dedican a la práctica o competencia del tiro al blanco con armas neumáticas en clubes de tiro, no estarán requeridas de licencia o permiso alguno. Para este caso si estarán requeridas de ser miembros o socios de algún club de tiro y una Federación de Tiro u Organización de Tiro.

**Artículo 3.04.-Permisos de Tiro al Blanco**

(A) Toda persona que tenga una licencia de armas expedida en conformidad a esta Ley, podrá solicitar al Secretario un permiso de tiro al blanco. Proveerá bajo juramento ante notario toda la información requerida en los formularios de solicitud preparados a esos efectos por el Secretario, los cuales requerirán al menos un sello de rentas internas de veinticinco (25) dólares, un retrato dos (2) pulgadas por dos (2) pulgadas, y un sello de una federación de tiro. El Secretario, dentro del término de diez (10) días laborables de recibida la solicitud, expedirá la el permiso solicitado, salvo que exista causa justificable para la denegación.

(B) No se expedirá permiso de tirador a persona alguna que no sea miembro de un club u organización de tiro al blanco y una federación de tiro, debidamente reconocidos por el Secretario.

(C) Los permisos de tiro al blanco vencerán junto a la licencia de armas del concesionario, y podrán ser renovados de igual forma al procedimiento establecido en los incisos anteriores. No obstante, el costo de renovación será de diez (10) dólares en sellos de rentas internas. La solicitud de renovación se hará mediante declaración jurada. Pasados los seis (6) meses luego del vencimiento de su licencia de armas, el peticionario vendrá obligado a iniciar el proceso señalado en el inciso (A) de este Artículo.

(D) El poseedor de un permiso de tiro al blanco deberá mantener en vigor su afiliación a un club de tiro y a una federación de tiro debidamente reconocidos por el Secretario, durante el término de vigencia de dicho permiso. De no cumplirse con este requisito, el permiso de tiro quedará automáticamente revocado. Esta revocación en particular no conlleva un cancelación de su correspondiente licencia de armas y no impedirá que el interesado solicite *de novo* un permiso de tiro al blanco en fecha subsiguiente.

(E) El permiso de tiro al blanco será incorporado por el Superintendente a la licencia de armas del concesionario, haciendo constar la categoría de tiro al blanco según lo establecido en el Artículo 2.02(F), dentro de los diez (10) días naturales de haber entregado el concesionario la autorización del Secretario.

(F) El permiso de tirador facultará al poseedor transportar armas de fuego y municiones, sin límite de número, y a disparar armas en las facilidades o lugares de tiro y participar en cualquier campeonato, concurso o torneo de tiro auspiciado por cualquier club u organización de tiro, siempre que satisfaga el derecho de participación exigido por la institución organizadora; disponiéndose que el oficial del club encargado de las inscripciones negará el uso de las facilidades a cualquier persona que no presente su licencia de armas con categoría de tiro al blanco y evidencia de membresía activa de un club de tiro o los permisos contemplados en esta Ley.

(G) Previa certificación de una de las federaciones de tiro reconocida por el Departamento de Recreación y Deportes, el Secretario podrá expedir un permiso de tiro al blanco, por el término de vigencia de la licencia de armas del padre, madre, tutor o encargado, a aquellos menores de edad que practiquen el deporte de tiro con armas de fuego, siempre que tengan siete (7) años cumplidos y medie la autorización del padre, madre, tutor o el custodio, siempre que éste posea a su vez un permiso de tiro al blanco. El padre, madre, tutor o encargado del menor someterá junto con la solicitud de tiro al blanco una declaración jurada en la que se haga responsable de todos los daños que pueda causar el menor mientras éste utiliza las armas de tiro al blanco. El padre, madre, tutor o encargado del menor que suscriba la declaración jurada debe tener permiso vigente de tiro al blanco. El menor sólo podrá usar y manejar armas de tiro al blanco en un club de tiro al blanco, siempre que esté acompañado y bajo la supervisión directa del padre, madre, tutor o encargado.

La solicitud de permiso para menores debrá acompañarse, además, con un sello de rentas internas de diez (10) dólares y dos (2) retratos de dos (2) pulgadas por dos (2) pulgadas, uno de los cuales deberá adherirse a una licencia especial de tiro al blanco, cuyo carné será impreso sobre un fondo azul y lo suficientemente pequeño como para ser portado en billeteras de uso ordinario, será laminado y contendrá, además de la fotografía del menor, su nombre completo, su fecha de nacimiento, el número del permiso y

un sello federativo. No contendrá la dirección del peticionario ni descripción ni mención de armas. Contendrá también la fecha de expedición de la licencia y la fecha en que deberá actualizarse el carné. Esta licencia especial de tiro al blanco podrá ser renovada por períodos adicionales de cinco (5) años, previo los requisitos establecidos en el párrafo anterior y el pago de un derecho de diez (10) dólares en sellos de rentas internas. La solicitud de renovación se hará utilizando el formulario que para estos fines proveerá el Secretario. El Secretario, dentro del término de diez (10) días de recibida la solicitud, expedirá la el permiso solicitado, salvo que exista causa justificable para la denegación.

El menor siempre deberá utilizar el arma de fuego en presencia y bajo la supervisión de su padre, madre, tutor, encargado o custodio certificado por cualquiera de las Federaciones de Tiro al Blanco de Puerto Rico. Ningún menor podrá practicar el deporte de tiro al blanco con armas de fuego si no posee el permiso dispuesto en esta Ley.

**Artículo 3.05.-Permisos de Tiro al Blanco Provisionales**

(A) Los permisos de tiro al blanco provisionales habrán de solicitarse antes que las armas y municiones entren a la jurisdicción de Puerto Rico, mediante un formulario a tales efectos, el cual deberá contener una foto reciente de cada tirador, sus datos esenciales, número de pasaporte si posee uno, número de armas que trae, su tipo, calibre, marca y número de serie si lo tuviesen. Copia de los formularios debidamente cumplimentados se le harán llegar al Secretario y al Superintendente mediante el mecanismo más expedito posible, quienes podrán en cualquier momento objetar la participación de cualquier tirador en forma fundamentada, luego de realizar las investigaciones que estimen necesarias a través de todos lo medios a su disposición. Del Superintendente entender que tiene información suficiente para determinar que el tirador en cuestión tiene récord delictivo, que luego de examinado en comparación con nuestras leyes tanto estatales como federales le haría entender razonablemente que estaría impedido en nuestra jurisdicción de tener, poseer o portar armas de fuego o municiones, incautará las armas y municiones del tirador, en forma preventiva, y tomará la acción que sea pertinente para devolver al tirador sus armas y municiones a su lugar de origen en cooperación directa con los funcionarios de orden público de dicho lugar de origen.

(B) En los casos que traten de un solo tirador invitado, el procedimiento será igual al anterior. En todos los casos será necesario que quede asentado dentro de la documentación provista el día de llegada a la isla, el lugar de alojamiento y el día de partida.

(C) Como excepción a la ley de armas en cualquiera de los anteriores casos en que la persona llegue a Puerto Rico sin municiones, podrá comprar aquellas que le sean necesarias de acuerdo a los calibres que haya reseñado en su solicitud de permiso, dejando constancia del número de permiso provisional que le concediere el Secretario. La armería procederá a la venta, dejando constancia de ello y notificará a la Policía de Puerto Rico de igual manera y por los mismos medios que a esos propósitos han sido establecidos por esta Ley.

**Artículo 3.06.-Cancelación de Permisos de Tiro**

El Secretario cancelará el permiso de tirador a cualquier persona a quien el Superintendente le revoque su licencia de armas. Siempre que el Superintendente revoque o cancele una licencia de armas con permiso de tiro al blanco, deberá informar al Secretario dentro de los siguientes cinco (5) días naturales para la correspondiente cancelación de dicho permiso. El Secretario también cancelará el permiso a todo tirador que observase conducta desordenada o negligente en cualquier concurso, torneo o campeonato de tiro, o que tratase de participar en ellos en estado de embriaguez, o que advenga incapacitado mental, o que tomase parte o estuviere implicado en cualquier movimiento para derrocar por la fuerza, la violencia o cualquier medio ilegal al Gobierno de Estados Unidos o de Puerto Rico o cualquier subdivisión política de dichos Gobiernos o que dejase de pagar el sello federativo. Siempre que el Secretario revoque o cancele un permiso de tiro al blanco, deberá informar al Superintendente dentro de los siguientes cinco (5) días

naturales para la correspondiente cancelación de la categoría de tiro en la licencia de armas del concesionario.

## CAPITULO IV
## ARMAS

**Artículo 4.01.-Fabricación, Venta y Distribución de Armas**

Se necesitará una licencia expedida conforme a los requisitos exigidos por esta Ley para fabricar, importar, ofrecer, vender o tener para la venta, alquilar o traspasar cualquier arma de fuego. Toda infracción a este artículo en cuanto a las armas de fuego constituirá delito grave y será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de veinticinco (25) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de diez (10) años.

Artículo 4.02.-Prohibición a la Venta de Armas a Personas sin Licencia

Ningún armero entregará un arma de fuego a un comprador sin que éste le muestre una licencia de arma vigente. Cuando el comprador del arma sea un cazador o tirador autorizado a poseer armas de fuego, la venta y entrega del arma se efectuará de la misma manera que se señala en esta Ley.

El armero que a sabiendas venda armas de fuego a una persona sin licencia, incurrirá en delito grave y convicto que fuere, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de veinticinco (25) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de diez (10) años.

Una convicción bajo este artículo conllevará la cancelación automática de la licencia del armero.

**Artículo 4.03.-Comercio de Armas de Fuego Automáticas**

Toda persona que venda o tenga para la venta, ofrezca, entregue, alquile, preste o en cualquier otra forma disponga de cualquier arma de fuego que pueda ser disparada automáticamente, independientemente de que dicha arma se denomine ametralladora o de otra manera, incurrirá en delito grave, y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de veinticuatro (24) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de treinta y seis (36) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dieciocho (18) años.

Este delito no aplicará a la venta o entrega de una ametralladora o cualquier otra arma de fuego que pueda ser disparada automáticamente para uso de la Policía y otros agentes del orden público, para el uso de funcionarios o empleados del Gobierno de Puerto Rico o de los Estados Unidos en las instituciones correccionales, o para el uso de las fuerzas armadas del Gobierno de Puerto Rico o de los Estados Unidos.

**Artículo 4.04.-Portación y Uso de Armas de Fuego sin licencia**

Toda persona que porte, conduzca o transporte cualquier arma de fuego o parte de ésta, sin tener una licencia de armas con su correspondiente permiso para portar armas expedida según más adelante se dispone, incurrirá en delito grave y convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de diez (10) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de veinte (20) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de cinco (5) años.

Cuando el arma sea una neumática, y ésta se portare, conduciere o transportare con la intención de cometer delito o se usare para cometer delito, la pena será de reclusión por un término fijo de cinco (5) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de diez (10) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año.

Se considerará como atenuante cuando el arma esté descargada y la persona no tenga municiones a su alcance; como agravante, cuando sea un arma automática, un arma larga o una escopeta con el cañon cortado.

Cuando el arma ilegal se utilice en la comisión de cualquiera de los siguientes delitos o su tentativa: asesinato en cualquier grado, secuestro agravado, violación, sodomía, mutilación, robo de vehículo de motor (*carjacking*), conducta constitutiva de violencia doméstica según tipificada en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conducta constitutiva de acecho según tipificada en la Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, según enmendada, o conducta constitutiva de maltrato a menores según tipificada por la Ley Núm. 75 de 28 de mayo de 1980, según enmendada; la persona no tendrá derecho a sentencia suspendida ni a salir en libertad bajo palabra. Tampoco podrá disfrutar de los beneficios de cualquier otro programa de desvío o alternativa a la reclusión reconocida en esta jurisdicción.

No obstante con todo lo anterior, cuando una persona incurra en las conductas prohibidas por este Artículo sin la intención de cometer un delito con el arma de fuego portada sin licencia, incurrirá en delito menos grave, y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión por un término no mayor de seis (6) meses, pena de multa que no excederá de cinco mil (5,000) dólares, o ambas penas a discresión del tribunal. El tribunal, a su discresión, podrá imponer la pena de prestación de servicios en la comunidad en lugar de la pena de reclusión establecida.

**Artículo 4.05.-Portación y Uso de Armas Blancas**

Toda persona que sin motivo justificado usare contra otra persona, o la sacare, mostrare o usare en la comisión de un delito o su tentativa, manoplas, *blackjacks*, cachiporras, estrellas de ninja, cuchillo, puñal, daga, espada, honda, bastón de estoque, arpón, faca, estilete, punzón, o cualquier instrumento similar que se considere como un arma blanca, incluyendo las hojas de navajas de afeitar de seguridad, garrotes y agujas hipodérmicas, o jeringuillas con agujas o instrumentos similares, incurrirá en delito grave y convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de seis (6) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) meses y un (1) día.

Queda excluida de la aplicación de este Artículo, toda persona que posea, porte o conduzca cualquiera de las armas aquí dispuestas en ocasión de su uso como instrumentos propios de un arte, deporte, profesión, ocupación, oficio o por condición de salud, incapacidad o indefensión.

**Artículo 4.06.-Posesión de Armas sin Licencia**

Toda persona que tenga o posea, pero que no esté portando, un arma de fuego sin tener licencia para ello, incurrirá en delito grave, y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de cinco (5) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de diez (10) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año.

No obstante con todo lo anterior, cuando una persona incurra en las conductas prohibidas por este Artículo sin la intención de cometer un delito con el arma de fuego poseída sin licencia, incurrirá en delito menos grave, y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión por un término no mayor de seis (6) meses, pena de multa que no excederá de cinco mil (5,000) dólares, o ambas penas a discresión del tribunal. El tribunal, a su discresión, podrá imponer la pena de prestación de servicios en la comunidad en lugar de la pena de reclusión establecida.

En caso de que el poseedor del arma demuestre con prueba fehaciente que posee una licencia de armas, aunque vencida, y que solicitó su renovación dentro del término provisto por esta Ley, no será culpable de delito alguno. Si no ha solicitado su renovación dentro del término provisto incurrirá en falta administrativa y tendrá que pagar el triple de los costos acumulados de los derechos de renovación.

Artículo 4.07.-Posesión o Uso Ilegal de Armas Automáticas o Escopeta de Cañon Cortado

Toda persona que posea o use sin autorización de esta Ley una ametralladora, carabina, rifle, así como cualquier modificación de éstas o cualquiera otra arma que pueda ser disparada automáticamente o escopeta de cañón cortado a menos de dieciocho (18) pulgadas, y que pueda causar grave daño corporal, incurrirá en delito grave, y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de veinticuatro (24) años, sin derecho a sentencia suspendida, a salir en libertad bajo palabra, o a disfrutar de los beneficios de algún programa de desvío o alternativa a la reclusión reconocida en esta jurisdicción. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de treinta y seis (36) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dieciocho (18) años.

No constituirá delito la posesión o uso de estas armas en el cumplimiento del deber por los miembros de la Policía, y aquellos otros agentes del orden público debidamente autorizados.

**Artículo 4.08.-Posesión o Venta de Accesorios para Silenciar**

Toda persona que tenga en su posesión, venda, tenga para la venta, preste, ofrezca, entregue o disponga de cualquier instrumento, dispositivo, artefacto o accesorio que silencie o reduzca el ruido del disparo de cualquier arma de fuego, incurrirá en delito grave, y convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de doce (12) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de veinticuatro (24) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) años.

Las disposiciones de este artículo no serán aplicables a los agentes del orden público debidamente autorizados y en cumplimiento de sus funciones oficiales.

**Artículo 4.09.-Facilitación de Armas a Terceros**

Toda persona que con intención criminal facilite o ponga a la disposición de otra persona cualquier arma de fuego que haya estado bajo su custodia o control, sea o no propietaria de la misma, incurrirá en delito grave y, convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de doce (12) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de veinticuatro (24) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) años.

**Artículo 4.10.-Número de Serie o Nombre de Dueño en Arma de Fuego; Remoción o Mutilación**

Toda arma deberá llevar, en forma tal que no pueda ser fácilmente alterado o borrado, el nombre del armero o marca de fábrica bajo la cual se venderá el arma o el nombre del importador y, además, un número de serie o el nombre completo de su poseedor grabado en la misma.

Incurrirá en delito grave y sancionada con pena de reclusión por un término fijo de doce (12) años, toda persona que:

(a) voluntariamente remueva, mutile, cubra permanentemente, altere o borre el número de serie o el nombre de su poseedor en cualquier arma;

(b) a sabiendas compre, venda, reciba, enajene, traspase, porte o tenga en su posesión, cualquier arma a la cual se le haya removido, mutilado, cubierto permanentemente, alterado o borrado el número de serie o el nombre de su poseedor; o

(c) siendo un armero o un agente o representante de dicho armero, a sabiendas compre, venda, reciba, entregue, enajene, traspase, porte o tenga en su posesión, cualquier arma a la cual se le haya removido, mutilado, cubierto permanentemente, alterado o borrado su número de serie o el nombre de su poseedor.

De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de veinticuatro (24) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) años.

**Artículo 4.11.-Presunciones**

La portación de un arma de fuego por una persona que no posea una licencia de armas con permiso para portar, se considerará evidencia *prima facie* de que dicha persona portaba el arma con la intención de cometer delito.

La posesión por cualquier persona de un arma a la cual se le haya removido, mutilado, cubierto permanentemente, alterado o borrado su número de serie o el nombre de su poseedor, se considerará evidencia *prima facie* de que dicha persona removió, mutiló, cubrió, alteró o borró dicho número de serie o el nombre de su poseedor.

La posesión por cualquier persona de un arma al momento de cometer o intentar cometer un delito, se considerará evidencia *prima facie* de que dicha arma estaba cargada al momento de cometer o intentar cometer el delito.

La presencia de una ametralladora o cualquier otra arma de funcionamiento automático o de las municiones *armor piercing* en cualquier habitación, casa, residencia, establecimiento, oficina, estructura o vehículo, constituirá evidencia *prima facie* de su posesión ilegal por el dueño o poseedor de dicho vehículo, y por aquellas personas que ocupen la habitación, casa, edificio o estructura donde se encontrare tal ametralladora, arma de funcionamiento automático o escopeta de cañon cortado, y que tengan la posesión mediata o inmediata de la misma. Esta presunción no será de aplicación en los casos que se trate de un vehículo de servicio público que en ese momento estuviere transportando pasajeros mediante paga, o que se demuestre que se trata de una transportación incidental o de emergencia. Además, cuando una de las personas que se encuentre en una habitación, casa, residencia, establecimiento, oficina, estructura o vehículo sea la que porte en su persona dicha arma de fuego, accesorio de ésta o municiones y tenga una una licencia válida para dicha portación, la presunción tampoco aplicará.

La presencia de un arma de fuego o de municiones en cualquier vehículo robado o hurtado, constituirá evidencia *prima facie* de su posesión ilegal por todas las personas que viajaren en tal vehículo al momento que dicha arma o municiones sean encontradas.

Las disposiciones de este Artículo no aplicarán a los agentes del orden público en el cumplimiento de sus funciones oficiales.

**Artículo 4.12.-Notificación por Porteador, Almacenista o Depositario de Recibo de Armas; Penalidades**

Todo porteador marítimo, aéreo o terrestre, y todo almacenista o depositario que a sabiendas reciba armas de fuego, accesorios o partes de éstas o municiones para entrega en Puerto Rico, no entregará dicha mercancía al consignatario hasta que éste le muestre su licencia de armas o de armero. Dentro de cinco (5) días laborables de la entrega, el porteador, almacenista o depositario notificará al Superintendente, dirigiendo la notificación personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, el nombre, dirección y número de licencia del consignatario y el número de armas de fuego o municiones, incluyendo el calibre, entregadas, así como cualquier otra información que requiera el Superintendente mediante reglamento.

Cuando el consignatario no tuviere licencia de armas o de armero, el porteador, almacenista o depositario notificará al Superintendente inmediatamente de tal hecho, el nombre y dirección del consignatario, y el número de armas de fuego o municiones para entrega. Además, no entregará dicha mercancía a tal consignatario hasta tener autorización al efecto, expedida por el Superintendente.

La violación de cualquier obligación aquí establecida constituirá un delito grave que será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de doce (12) años y pena de multa no menor de dos mil (2,000) dólares ni mayor de diez mil (10,000) dólares. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de veinticuatro (24) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) años.

Artículo 4.13.-Almacenamiento y Custodia de Armas en Depósitos de Armas y Municiones

Todo armero vendrá obligado a implantar las medidas de seguridad exigidas por la Policía mediante reglamento para el almacenamiento o custodia de las armas y municiones. La Policía examinará

cada tres (3) meses los locales de los armeros, los cuales de no cumplir con las medidas de seguridad exigidas, tendrán treinta (30) días para cumplir con las mismas o de lo contrario, deberán depositar las armas y municiones que posean para la venta, para su almacenamiento y custodia en la bóveda de otro armero o en el Depósito de Armas y Municiones de la Policía de Puerto Rico, dentro del término que determine el Superintendente, en lo que corrigen la deficiencia.

Los armeros que, para corregir deficiencias, utilicen el Depósito de Armas y Municiones, pagarán por el almacenamiento y custodia de sus armas y municiones una mensualidad que se determinará mediante reglamento. Al establecer el costo de almacenamiento y custodia, se tomarán en consideración los costos de operación del Depósito de Armas y Municiones y el manejo de las armas y municiones para efectos de recibo, clasificación, custodia y entrega de las mismas. Los costos a cargarse a los usuarios del Depósito de Armas y Municiones bajo ningún concepto excederán los costos reales y razonables por concepto del servicio prestado.

El Superintendente o el encargado del Depósito de Armas y Municiones enviará periódicamente a los armeros, según se disponga por reglamento, una factura en la que se indicará el costo del almacenamiento y custodia de sus armas, de acuerdo a la utilización del Depósito de Armas y Municiones que durante dicho mes haya hecho el armero. La falta de pago por un armero será motivo suficiente para que el Superintendente, previa la celebración de una vista formal, pueda revocarle la licencia que hubiere expedido.

En el Depósito de Armas y Municiones se almacenarán igualmente, mediante paga, las armas de aquellos ciudadanos con licencia de armas que interesen, como medida de seguridad, que sus armas sean guardadas temporeramente, sin menoscabo de que dichos ciudadanos puedan optar por guardar sus armas en negocios privados de armeros.

**Artículo 4.14.-Informes de Asistencia Médica a Personas Heridas**

Cualquier persona, incluyendo profesionales de la salud, que practique una curación de una herida de bala o quemadura producida por pólvora, así como cualquier otra herida resultante del disparo de cualquier arma de fuego, ya sea en o fuera de un hospital, clínica, sanatorio u otra institución similar, deberá notificar tal caso inmediatamente al aistrito o precinto policíaco en cuya jurisdicción se haya provisto tal servicio. En el caso de que sea en un hospital o institución similar, la persona notificará al administrador o persona a cargo de la institución, para que éste notifique a las autoridades. La falta de notificación de la prestación de este servicio constituirá delito menos grave, y convicta que fuere la persona, será sancionada con pena de multa de hasta cinco mil (5,000) dólares.

El Superintendente investigará todo informe de curaciones, procediendo con cargos criminales de justificarse y llevará un registro detallado del resultado de éstos a los fines levantar estadísticas sobre informes de curaciones.

**Artículo 4.15.-Disparar o Apuntar Armas**

(A) Incurrirá en delito grave con pena de reclusión por un término fijo de cinco (5) años, toda persona que, salvo en casos de defensa propia o de terceros, o de actuaciones en el desempeño de funciones oficiales o actividades legítimas de deportes:

(1) voluntariamente dispare cualquier arma en un sitio público o en cualquier otro sitio donde haya alguna persona que pueda sufrir daño, aunque no le cause daño a persona alguna; o

(2) intencionalmente, aunque sin malicia, apunte hacia alguna persona con un arma, aunque no le cause daño a persona alguna.

De mediar circunstancias agravantes, la pena establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de diez (10) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año.

(B) Será culpable de delito grave con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, toda

persona que, salvo en casos de defensa propia o de terceros o de actuaciones en el desempeño de funciones oficiales o actividades legítimas de deportes, incurra en cualquiera de los actos descritos anteriormente utilizando un arma neumática. De mediar circunstancias agravantes, la pena establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de seis (6) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) meses y un (1) día.

Artículo 4.16.-Recibo, Custodia y disposición de armas depositadas voluntariamente u ocupadas por la Policía; Destrucción de las armas consideradas estorbo público

El Superintendente establecerá mediante reglamentación lo relacionado al recibo, custodia y disposición de aquellas armas que sean ocupadas o depositadas voluntariamente en la Policía por personas que tengan licencias; o fueren entregadas a la muerte del poseedor de una licencia; o por habérsele cancelado la licencia al concesionario.

Se autoriza al Superintendente a vender, permutar, donar o ceder las armas a agencias del orden público federales, estatales o municipales u otras jurisdicciones. Además, podrá vender las armas o a una persona con licencia de Armas expedida a tenor con lo dispuesto a esta Ley, según disponga mediante reglamento.

Las armas o instrumentos ocupados de acuerdo con este artículo serán almacenadas por el Superintendente en el Depósito de Armas y Municiones de la Policía.

No obstante, toda ametralladora, escopeta de cañón cortado o cualquier otra arma o instrumento especificado en el Artículo 4.05 de esta Ley, que se porte, posea, transporte o conduzca ilegalmente, se considerará como un estorbo público. Cuando alguna de dichas armas o instrumentos sea ocupada la misma será entregada al Superintendente para que éste se encargue de su disposición y destrucción, mediante la reglamentación promulgada al efecto.

**Artículo 4.17.-Colecciones de Armas**

Se considerará coleccionista toda persona que posea un número mayor de las armas permitidas en esta Ley. Nada de lo dispuesto en esta Ley impedirá que se conserven y mantengan colecciones privadas de armas y sus dueños las posean como adorno o materia de curiosidad, ni que se mantengan colecciones de armas como reliquias. Para la conservación de toda arma de las incluidas en este artículo, será necesario que el coleccionista primero obtenga un permiso de tiro al blanco o de caza, bajo las disposiciones de esta Ley.

**Artículo 4.18.-Transportación de Armas Prohibidas; Confiscación**

El Secretario de Justicia confiscará cualquier propiedad, según este término es definido en la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988", en que se almacene, cargue, descargue, transporte, lleve o traslade o en el que se sorprenda almacenando, cargando, descargando, transportando, llevando o trasladando cualquier arma en violación de esta Ley.

Para la confiscación y disposición se seguirá el procedimiento establecido por la Ley Núm. 93, *supra*.

**Artículo 4.19.-Armas al Alcance de Menores**

Toda persona que negligentemente dejare un arma de fuego o arma neumática al alcance de una persona menor de dieciocho (18) años que no tuviere un permiso para tiro al blanco o caza, y éste se apodere del arma y causare daño a otra persona o a sí mismo, cometerá delito menos grave y convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión por un término que no excederá de seis (6) meses, pena de multa no mayor de cinco mil (5,000) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal. El tribunal, a su discresión, podrá imponer la pena de prestación de servicios en la comunidad en lugar de la pena de reclusión establecida.

## CAPITULO V
## MUNICIONES

**Artículo 5.01.-Fabricación, Distribución, Posesión y Uso de Municiones**

(A) Se necesitará una licencia de armas, de tiro al blanco, de caza o de armero, según sea el caso, para fabricar, solicitar que se fabrique, importar, ofrecer, comprar, vender o tener para la venta, guardar, almacenar, entregar, prestar, traspasar o en cualquier otra forma disponer de, poseer, usar o transportar municiones, conforme a los requisitos exigidos por esta Ley. Asimismo, se necesitará un permiso expedido por la Policía para comprar pólvora. Toda infracción a este artículo constituirá delito grave, y será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de seis (6) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de doce (12) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años.

Será considerado como circunstancia agravante al momento de fijarse la sentencia, incurrir en cualquiera de las conductas descritas en este artículo sin la licencia o el permiso correspondiente para comprar pólvora, cuando las municiones sean de las comúnmente conocidas como *armor piercing*. No constituirá delito la fabricación, venta o entrega de las municiones antes descritas para uso de la Policía y otros agentes del orden público del Gobierno de Puerto Rico o de los Estados Unidos o para el uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

(B) Incurrirá en delito menos grave, con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses, pena de multa que no excederá de cinco mil (5,000) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal, toda persona que solamente porte una cantidad pequeña de municiones. El tribunal, a su discreción, podrá imponer la pena de prestación de servicios en la comunidad en lugar de la pena de reclusión establecida.

Artículo 5.02.-Venta de Municiones por Armero a Personas sin Licencia; Límite en el Número de Municiones

Un armero no podrá vender municiones a personas que no presenten una licencia de armas o los permisos contemplados en esta Ley. La venta de municiones se limitará exclusivamente al tipo de munición utilizada por el arma o las armas que el comprador tenga inscritas a su nombre.

Una persona con licencia de armas, salvo las categorías de tiro al blanco o de caza, sólo podrá poseer como máximo cincuenta (50) balas por año natural por arma que posea. Si dicha persona deseare sustituir las municiones, ya sea mediante reemplazo o adquisición de nuevas municiones por haber utilizado o perdido alguna de las mismas, deberá acudir al distrito o precinto policíaco donde reside. La Policía le concederá una autorización para reemplazar las municiones manteniendo la cantidad establecida en este párrafo. En los casos donde la persona desee adquirir nuevas municiones por haber utilizado o perdido alguna de éstas, deberá informar las circunstancias en que utilizó o perdió las mismas. Para que se conceda el reemplazo de las municiones, las circunstancias en que se utilicen deberán ser actividades permitidas y legítimas al amparo de nuestro ordenamiento jurídico y lo dispuesto en esta Ley. Las municiones entregadas deberán ser decomisadas por la Policía.

Toda infracción a este artículo constituirá delito grave y será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de seis (6) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de doce (12) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años.

Se considerará como circunstancia agravante al momento de fijarse la sentencia, incurrir en la venta de municiones aquí prohibidas cuando éstas sean de las comúnmente conocidas como *armor piercing*, aunque sean designadas o mercadeadas con cualquier otro nombre, así como la venta de municiones diferentes al tipo de armas que el comprador tenga inscritas a su nombre. Una convicción bajo este artículo conllevará además la cancelación automática de la licencia del armero y/o del poseedor de la licencia de arma o permiso de tiro al blanco o caza.

**Artículo 5.03.-Compra de Municiones de Calibre Distinto**

Toda persona que, teniendo una licencia de armas válida, compre municiones de un calibre distinto a los que pueden ser utilizados en las armas de fuego inscritas a su nombre, incurrirá en delito grave y, convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de seis (6) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de doce (12) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años.

## CAPITULO VI
## DISPOSICIONES FINALES

**Artículo 6.01.-Licencias de Caza**

Todo lo referente al licenciamiento, reglamentación y control del deporte de caza se regirá por lo dispuesto en la Ley Núm. 241 del 15 de agosto de 1999, conocida como la Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico.

**Artículo 6.02.-Armas Neumáticas**

Por disposición del Congreso de los Estados Unidos, *15 U.S.C.A.* §*5001*, el campo para legislar sobre las armas neumáticas en Puerto Rico queda ocupado, por lo que no se podrá prohibir su venta o uso, salvo la venta menores de dieciocho (18) años de edad.

**Artículo 6.03.- Penas Consecutivas**

Cuando una persona fuere convicta en virtud de esta Ley, el tribunal en su sentencia deberá determinar que el término de reclusión habrá de cumplirse de forma consecutiva con cualquier o cualesquiera otros términos de reclusión.

Toda persona que resulte convicta de alguna de las disposiciones de esta Ley, y que dicha convicción esté asociada y sea coetánea a otra convicción de cualquiera de las disposiciones de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como la "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico", con excepción del Artículo 404 de la misma, o de la Ley Núm. 33 de 13 de julio de 1978, según enmendada, conocida como la "Ley contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", será sancionada con el doble de la pena provista en esta Ley.

**Artículo 6.04**.-Conversión de licencias; término; Derechos; Licencias en Proceso de Trámite

(A) Toda licencia para tener y poseer un arma de fuego, licencia de tiro al blanco, licencia de caza y licencia de portación deberá ser convertida en una licencia de armas con su correspondiente categoría, si alguna, en confirmidad a las disposiciones de esta Ley, en o antes de concluido un plazo de tres (3) años a partir de la fecha en que comience a regir esta Ley. Disponiéndose que hasta tanto sean convertidas, éstas se regirán bajo las disposiciones de las leyes bajo las cuales fueron emitidas.

Se dispone que una vez que se solicite la conversión de otra licencia a licencia de armas, la licencia original no vencerá hasta que se conceda la licencia de armas o se cancele por no cualificar, en armonía con esta Ley, el concesionario que solicita la conversión.

Se dispone también que toda arma previamente inscrita bajo cualquier otra licencia, al convertirse la licencia previa en una licencia de armas, advendrán automáticamente a quedar inscritas bajo la licencia de armas.

(B) Toda solicitud de conversión de licencia ante el Superintendente, según establecido en esta Ley, deberá se acompañada de un comprobante de Rentas Internas por la cantidad de cincuenta (50) dólares, más un (1) dólar por cada arma que el peticionario tenga inscrita legamente.

(C) En el caso de las licencias pendientes de investigación por personas que habían solicitado:

(1) Licencia de Tener y Poseer: El Superintendente le entregará los documentos de la solicitud para que el peticionario someta su solicitud conforme a las disposiciones de esta Ley.

Disponiéndose que el Peticionario no tendrá que pagar los derechos establecidos en esta Ley.

(2) Licencia de Tiro al Blanco: El Superintendente le entregará los documentos de la solicitud para que el peticionario someta su solicitud conforme a las disposiciones de esta Ley. Disponiéndose que el Peticionario someterá un comprobante por la cantidad de quince dólares ($15.00) y el Superintendente someterá evidencia de lo pagado por el peticionario, que fue la cantidad de diez (10) dólares, evidencia que el peticionario habrá de someterse al Secretario del Departamento de Recreación y Deportes junto con el nuevo comprobante de quince dólarers antes indicado.

(3) Licencia de Cacería: Se regirá por las disposiciones de la Ley Núm. 241 del 15 de agosto de 1999, conocida como la Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico.

**Artículo 6.05.-Avisos en puertos y aeropuertos**

El Director de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico colocará en todos los puertos y aeropuertos de entrada a Puerto Rico, en los lugares por donde tengan que pasar los viajeros que llegan, rótulos visibles en español e inglés que digan lo siguiente:

**"ADVERTENCIA SOBRE ARMAS DE FUEGO**

**Toda persona que traiga consigo o en su equipaje un arma de fuego, tendrá que notificarlo a la policía de Puerto Rico a su llegada. El no cumplir con esta notificación conlleva pena de reclusión. La Policía le orientará sobre cómo proceder con su arma."**

**"FIREARMS' WARNING**

**Every person bringing a firearm with him or in his luggage, must give notice to the Puerto Rico Police upon arrival. Noncompliance with giving this notice carries prison penalties. The Police will inform you on how to proceed with your weapon."**

**Artículo 6.06.-Campaña Publicitaria Educativa**

Del día 1ro de noviembre hasta el 31 de diciembre de todos los años, el Superintendente llevará a cabo una campaña publicitaria educativa, apercibiendo al público sobre el peligro que constituye hacer disparos al aire, el delito que se comete y la pena que conlleva. Para crear conciencia, dará información sobre los daños, muertes y heridos ocasionados en años anteriores por estos disparos.

**Artículo 6.07.-Determinaciones Administrativas; Adjudicación; Reconsideración**

Salvo que otra cosa se disponga expresamente en esta Ley, todas las determinaciones que tengan que realizar el Superintendente y el Secretario se regirán por las disposiciones de vistas informales, adjudicaciones y reconsideraciones establecidos en la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

**Artículo 6.08.-Revisión**

Una parte adversamente afectada por una orden o resolución final del Superintendente o del Secretario, que haya agotado todos los remedios administrativos, podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones de conformidad con la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

**Artículo 6.09.-Reglamentación**

Tanto el Superintendente como el Secretario, al igual que el Secretario de Hacienda, establecerán todos aquellos reglamentos que esta Ley ordene para la implantación de las disposiciones de esta Ley, dentro de los seis (6) meses siguientes a la aprobación de la misma, y en conformidad a la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

**Artículo 6.10.-Formularios**

Tanto el Superintendente como el Secretario, al igual que el Secretario de Hacienda, crearán todos aquellos formularios que esta Ley requiera para su implantación, dentro de los seis (6) meses siguientes a la aprobación de la misma.

**Artículo 6.11-Moratoria y Amnistía**

(A) Se establece un periodo de moratoria de ciento ochenta (180) días, contados a partir de que comience la vigencia de esta Ley, para que toda persona que haya advenido a la posesión de un arma de fuego o municiones mediante herencia, o que habiendo poseído legalmente un arma de fuego o municiones haya dejado vencer la autorización a dicha posesión, podrá solicitar una licencia de armas en virtud de esta Ley y la inscripción de dicha arma de fuego o municiones, sin que se inicie procedimiento penal alguno por la mencionada posesión ilegal.

(B) Se declara una amnistía general de noventa (90) días, contados a partir de que comience la vigencia de esta Ley, para que toda persona que tenga o posea un arma de fuego o municiones ilegalmente pueda deshacerse legalmente de las mismas, entregándolas a la Policía, sin que se inicie contra dicha persona procedimiento penal alguno. Toda persona que entregue voluntariamente a la Policía un arma de fuego ilegalmente adquirida, encontrada, comprada, regalada, prestada o alquilada; o que de cualquier otro medio llegue a su poder y que constituya posesión o tenencia ilegal, no será acusado ni procesado por infringir ningún estatuto o ley que penalice dicha posesión o tenencia ilegal.

El Gobierno de Puerto Rico no podrá abrir ningún tipo de investigación ni expediente, ni podrá radicar cargos criminales por la posesión o tenencia ilegal de un arma de fuego entregada a la Policía por las personas que se acojan a esta amnistía y voluntariamente entreguen un arma de fuego de conformidad con esta Ley. Disponiéndose, que para poder acogerse a los beneficios de la amnistía decretada en virtud de la presente Ley, será necesario que la parte interesada invoque la presente Ley o que dicha parte realice actos afirmativos que indiquen claramente que el presunto beneficiario de esta amnistía tenía la intención manifiesta y el deseo de entregar voluntariamente el arma o armas de fuego o municiones pertinentes.

**Artículo 6.12.-Claúsula de Separabilidad**

Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de la misma. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de la misma que así hubiere sido declarada inconstitucional.

**Artículo 6.13.-Derogación de Leyes**

Salvo por lo dispuesto en el Artículo 6.003 de esta Ley, se derogan la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, y la Ley Núm. 75 de 13 de junio de 1953, según enmendada.

**Artículo 6.14.-Vigencia**

Esta Ley comenzará a regir a los ciento ochenta (180) días después de su aprobación; excepto los Artículos 6.09 y 6.10 de esta Ley, los cuales comenzarán a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Concurrente del Senado 58, la cual ha sido descargada de la Comisión Reglas y Calendario.

"RESOLUCION CONCURRENTE

Para otorgar la Orden Puertorriqueña de Excelencia Deportiva por sus hazañas atléticas, y declarar al licenciado Gilberto González Juliá como "Atleta del Siglo de Pista y Campo de Puerto Rico".

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nos encontramos de cara a un nuevo milenio, por lo que tenemos la obligación cívica y moral de reconocer la trayectoria de aquellos ciudadanos que durante este siglo han representado dignamente a Puerto Rico a través de sus ejecutorias.

Uno de esos ciudadanos es el licenciado Gilberto González Juliá, quien nació en Naguabo el 18 de junio de 1913. Don Gilberto cursó sus estudios primarios en Ceiba, Luquillo y Vega Alta, donde su padre, Arístides González, fue jefe de campo de la Central Carmen, lugar donde comienza su entrenamiento e interés por el atletismo. Se graduó en la Escuela Superior (Central High School) de Santurce en el año 1931 y cursó estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico, graduándose de abogado en el año 1937.

El 15 de octubre de 1940 entra al servicio militar, y después de 21 años de una honorable carrera militar, se retira con el grado de Comandante del Ejército de los Estados Unidos el 30 de junio de 1961, tras haber participado en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea. En esta última, como Capitán de Infantería, fue condecorado con la Estrella de Bronce por su valentía en acción y con el Corazón Púrpura por heridas en combate.

Este gran atleta fue miembro de los equipos olímpicos de Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en San Salvador en el año 1935, en Panamá en el año 1938, y en Barranquilla, Colombia, en el año 1946. Se destacó consistentemente como máximo medallista y anotador de puntos en pista y campo durante los 6 años que representó a la Universidad de Puerto Rico en San Salvador. En 1935 fue seleccionado por los cronistas deportivos como el mejor atleta de pista y campo de Puerto Rico.

En el año 1979 se inició en la Asociación de los Masters en Puerto Rico, agrupación de aquellas personas, tanto mujeres como hombres, que se dedican a la práctica del atletismo desde la edad de los 30 años en adelante, compitiendo por categorías de edad que fluctúan en ciclos de cinco años. En los veinte años que lleva compitiendo a nivel nacional e internacional ha ganado un total de 1,221 medallas de las cuales 1,044 son de oro, 140 de plata, 37 de bronce, además de 35 trofeos y 32 placas.

El licenciado González Juliá, quien a la edad de 86 años, conserva la agilidad física y mental de su juventud, época en que se destacó por sus hazañas atléticas en diferentes partes del mundo para gloria de Puerto Rico, es un gran ejemplo para las generaciones venideras. Su devoción y amor al atletismo hacen que sea merecedor de la Orden Puertorriqueña de Excelencia Deportiva.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA:**

Sección 1.- Otorgar la Orden Puertorriqueña de Excelencia Deportiva por sus hazañas atléticas, y declarar al licenciado Gilberto González Juliá como "Atleta del Siglo de Pista y Campo de Puerto Rico".

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada al licenciado Gilberto González Juliá, junto a la Medalla en ceremonia oficial.

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1634, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; de lo Jurídico; y de Salud y Bienestar Social, con enmiendas.

**"LEY**

Para establecer la Declaración de los Derechos y Obligaciones de la Persona Menor de Edad; adoptar la política pública del Gobierno de Puerto Rico para garantizar los derechos reconocidos a las personas menores de edad y disponer la responsabilidades del estado; redefinir el concepto de la "persona menor de edad" y el alcance del mismo en el ordenamiento jurídico civil vigente; disponer sobre la protección integral de los derechos y el reconocimiento expreso de la autoridad paterna y materna; prohibir expresamente el discrimen en las personas menores de edad; instituir como fuente de derechos ejercitables en armonía con la legislación vigente la asistencia del estado, la seguridad social, las medidas contra el abuso, la violencia física y el maltrato contra menores; reconocimiento de las libertades básicas del menor de edad y el derecho a la privacidad dentro del marco de la autoridad y supervición de los padres; y disponer los principios sobre la prestación de servicios de salud, las oportunidades para menores de edad con impedimentos físicos o mentales, el derecho a la educación, las oportunidades para el desarrollo deportivo y recreativo; reconocer la rehabilitación como principio fundamental en el sistema de justicia juvenil; y para otros fines relacionados.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La *Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico* consagra los derechos fundamentales que deben garantizarse a todo ser humano en una sociedad que se rige por los más altos principios democráticos. Este documento, por su preeminencia jurídica en nuestro contrato social, configura y establece expresamente la aplicación y garantía de estos derechos a todas las personas, independientemente de su edad o de su género.

No obstante, existen categorías de personas que como resultado de los procesos socio-culturales o del propio desarrollo biológico del ser humano, se encuentran en situaciones especiales que exigen una atención particular, como lo son las mujeres, las personas de edad avanzada, los minusválidos y los menores de edad. Estas razones han motivado la acción de las legislaturas de distintos países del mundo a realizar expresiones particulares respecto a los derechos de esos grupos y a la forma de garantizarlos. Por otro lado, la *Organización de las Naciones Unidas,* conocida por sus siglas ONU, adoptó en 1989 la *Convención de los Derechos del Niño*, de la cual son signatarios una gran cantidad de las naciones miembros, con el propósito de hacer una expresión de reconocimiento internacional de los derechos de los niños.

De otra parte, en nuestra jurisdicción, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley Núm. 338 de 31 de diciembre de 1998, con el fin de adoptar la *Carta de Derechos del Niño.* Esta Ley es una compilación general -no exhaustiva- de los derechos que le son reconocidos a los niños y niñas en Puerto Rico. A pesar de la importancia de esta iniciativa, es imperativo dotar de eficacia y viabilizar la implantación de esta legislación de carácter declarativo. De este modo, podemos instrumentar estos esfuerzos, darle contenido a estos principios generales reconocidos por ley, y así consignar expresamente los derechos y obligaciones de las personas menor de edad.

En septiembre de 1997, el Presidente del Senado designó una comisión *ad hoc* conocida como l*a Comisión Asesora para el Estudio de Legislación sobre Asuntos de Menores,* constituida por un grupo interdisciplinario de profesionales del sector público y privado con la encomienda de realizar un riguroso estudio de las áreas que inciden sobre los menores. A este grupo de trabajo, también se le delegó la responsabilidad de diseñar y formular posibles medidas legislativas dirigidas a actualizar el ordenamiento

jurídico para enfrentar los retos del nuevo milenio. Durante el proceso de análisis y evaluación, la Comisión Asesora constituída por pediatras, especialistas de la conducta humana, jueces y ex-jueces, abogados, procuradores de menores y miembros de la comunidad, identificó los principios determinantes en el inicio de la reforma jurídica relacionada con las personas menores de edad, y muy particularmente el concepto de la minoridad.

El Estado reconoce el grado variable de la condición física e intelectual y la falta de capacidad jurídica que tienen las personas menores de edad. El Código Civil de Puerto Rico establece en el Artículo 247 que la mayoría de edad es a los veintiún (21) años, sin embargo, existen una serie de actos de vital trascendencia en los cuales se trata como adultos a personas mayores de dieciocho (18) años pero que aún no han alcanzado la mayoría de edad establecida por ley. La posibilidad de participar en conflictos bélicos, el procesamiento como adultos en el ámbito penal y el derecho a emitir su voto en los procesos electorales, son algunos ejemplos de la capacidad jurídica que se les reconoce a pesar de su minoridad. Esto trae como consecuencia un estado de dependencia durante el período de tiempo que transcurre hasta alcanzar la mayoría de edad. Esta dependencia puede colocar a los niños y niñas en una situación de vulnerabilidad, e incluso de indefensión, que exige acciones afirmativas del Estado o de quien ejerza la patria potestad a los fines de proteger su bienestar y de vindicar sus derechos constitucionales. Esto adquiere singular importancia en la medida en que puedan entrar en conflicto los derechos de las personas menores de edad y aquellos derechos reconocidos por ley a estos últimos.

La tendencia en el mundo contemporáneo es a reconocer que el proceso de maduración de los menores se ha acelerado y por consiguiente, estos advienen a la adultez a una edad más temprana, asumiendo la responsabilidades y obligaciones que dicha condición les confiere. Por estas consideraciones, la Comisión Asesora recomienda que es conveniente y necesario establecer una edad fija para redefinir el concepto de *persona menor de edad*, y a tales fines se adopta mediante esta legislación que la mayoría de edad comenzará a los dieciocho (18) años.

En los informes preparados por varios comités de trabajo que forman parte de la Comisión Asesora, entre los que figuran el Comité para la Protección de la Salud Integral, el Comité sobre Marco Conceptual de Política Pública y el Colegio de Abogados de Puerto Rico han expresado que la incapacidad jurídica de la persona menor de edad limitan su ejercicio pleno ampliándose paulatinamente a medida que éstas van creciendo física e intelectualmente durante las diversas etapas de socialización. Durante este proceso las funciones de orientación, supervisión y disciplina por parte de los progenitores o de las personas a cuyo cargo se encuentran nuestros niños y niñas son de vital importancia y deben salvaguardarse, excepto en aquellas situaciones en que se ejerza indebidamente en perjuicio de los mejores intereses del menor.

Es evidente que los derechos tienen como contrapartida el cumplimiento de obligaciones jurídicas y sociales por parte de la ciudadanía. Por ello, es importante que la persona menor de edad tiene que cumplir a cabalidad con las normas y estatutos que conforman nuestro ordenamiento jurídico y por consiguiente, debe evitar actuaciones contrarias a la moral y el orden público. Es deseable y así lo requiere nuestra sociedad, que la conducta de la persona menor de edad esté enmarcada en los principios y valores de respeto a las normas de sana convivencia de la comunidad, escuela y de su núcleo familiar. La responsabilidad de cada menor ante las obligaciones descritas debe, además, estar equiparada a su capacidad mental, desarrollo físico y edad cronológica, de forma tal, que sea cónsona con lo requerido a éste.

Como parte de los esfuerzos realizados por la Comisión Asesora, se ha reconocido que en Puerto Rico la normativa y legislación que incide sobre los menores de edad es extremadamente amplia y compleja. Es notable que en ocasiones, las leyes vigentes carecen de criterios integradores y de un modo u otro se afecta la naturaleza armónica que debe existir en un cuerpo jurídico al momento de aplicarlo e interpretarlo. Por ello, esta legislación persigue, entre otros propósitos, establecer los parámetros racionales que deben ser considerados en la eventual preparación de un Código de la Persona Menor de Edad. Un proyecto de esta naturaleza no puede ser abordado con esquemas tradicionales. La codificación que pretendemos desarrollar no

puede ser una mera compilación de leyes y estatutos recogidos en un documento. El proceso de análisis y revisión de toda la legislación sobre los menores debe ser conceptualizado con criterios orientadores que sirvan de guías o directrices para así lograr un cuerpo de leyes integrado y coherente.

Dentro de este contexto, esta legislación servirá de preámbulo para conducir una reforma amplia, profunda y estructurada del Código de la Persona Menor de Edad en Puerto Rico y permitirá atemperar el ordenamiento pertinente a la realidad social y económica que vivimos y al futuro inmediato y a largo plazo. Asimismo, la Declaración será el punto de partida de toda la política pública que sea formulada e implantada mediante acción legislativa y reglamentación administrativa dirigida a atender los asuntos relacionados a las personas menores de edad.

Con el propósito de reafirmar una vez más la política pública de nuestro gobierno de proteger a las personas menores de edad y de velar por que se respete su dignidad, se adopta mediante esta Ley la *Declaración de Derechos y Obligaciones de la Persona Menor de Edad.* Al así hacerlo se reconoce la necesidad de adoptar medidas que viabilicen un cuerpo integrado de normas que regirá los fundamentos del derecho de un menor desde el inicio de la personalidad, la capacidad jurídica, las relaciones con las instituciones de la sociedad y la familia y las obligaciones que de ellas se deriven.

Nuestro pueblo cada día demuestra mayor interés y preocupación por los problemas y necesidades de nuestras personas menores de edad, por lo que se han aprobado numerosas piezas legislativas para promover el bienestar de este sector de nuestra población. En esta etapa del devenir histórico de la humanidad, y de Puerto Rico en particular, es hora de concertar mediante legislación los principios, que en forma integrada, cobijan la totalidad de las necesidades físicas emocionales y espirituales de los menores de edad a fin de lograr un desarrollo integral, equilibrado y completo en todos sus aspectos.

A la luz de estas consideraciones, la Asamblea Legislativa considera que es imperativo adoptar la *Declaración de los Derechos y Obligaciones de la Persona Menor de Edad* en la cual se define el término "persona menor de edad" y se declara la política pública relativa a sus derechos. Esta legislación establece las garantías mínimas que servirán de base para el diseño, formulación e implantación de la reforma civil, penal y administrativa de nuestro ordenamiento en relación a los niños y niñas de Puerto Rico, en conjunto con los principios establecidos en cualquier otra legislación.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.- **Título de la Ley**

Esta Ley se conocerá como la "Declaración de Derechos y Obligaciones de la Persona Menor de Edad" y constituirá el marco jurídico mínimo para la protección integral de la persona menor de edad en Puerto Rico.

Artículo 2.- **Declaración de Política Pública**

Constituye política pública del Gobierno de Puerto Rico la defensa y garantía de los derechos de las personas menores de edad y el respeto a su dignidad. Al así disponerlo, se toma en consideración el grado de vulnerabilidad variable a que se ven sometidas las personas menores de edad durante su proceso de desarrollo y socialización hasta alcanzar la plena capacidad jurídica, y la responsabilidad del Estado de proveer los medios y recursos necesarios para salvaguardar sus intereses y adelantar su bienestar.

Todas las medidas concernientes a las personas menores de edad, así como toda intervención del Estado con los poderes y facultades de la patria potestad o de la tutela, tendrán como principio rector los mejores intereses y el bienestar del menor, tomando en consideración el grado de desarrollo de sus capacidades y sin que medie discriminación motivada por origen, raza, religión, sexo, condición socio-económica y cultural de las personas menores de edad o por cualquier otra condición personal.

Artículo 3.- **Definición de persona menor de edad**

Se entiende por persona menor de edad todo ser humano desde su nacimiento hasta los dieciocho (18) años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad por los medios y las causas que establece la ley. El alcance de esta definición de persona menor de edad se hace extensivo a toda norma, reglamentación o legislación vigente en nuestro ordenamiento civil y administrativo.

Artículo 4.- **Protección integral de derechos**

El Estado realizará todos los esfuerzos necesarios para lograr el sano desarrollo de las personas menores de edad, así como la protección integral de sus derechos en el diseño y formulación de las políticas públicas y en la ejecución de los programas destinados a su atención y defensa.

Artículo 5.- **Reconocimiento de autoridad paterna y materna**

Se reconoce que desde su nacimiento las personas menores de edad están sujetas a dependencia y sometidas a un proceso de desarrollo de sus potencialidades y de maduración que requiere un grado variable de control, supervisión y orientación de parte de sus padres, madres o personas encargadas. El Estado respetará las responsabilidades y los derechos de los padres, las madres o las personas encargadas siempre que se ejerzan dentro de los márgenes que establece la ley; y les brindará la ayuda necesaria para el mejor desempeño de sus funciones.

Artículo 6.- **Derecho a un nombre y a relaciones paterno-materno filiales**

Toda persona menor de edad tiene derecho a un nombre desde su nacimiento y a conocer a su padre y a su madre, así como a recibir las atenciones y adecuado cuidado por estos. Tiene igualmente derecho a vivir con sus progenitores o a relacionarse con ellos aun cuando alguno o ambos no convivan con la persona menor de edad, siempre que ello no sea contrario a los mejores intereses y al bienestar de menor.

El Estado tomará medidas para potenciar dichos derechos, incluyendo la protección contra el traslado a otras jurisdicciones sin el consentimiento de la persona con la custodia y la retención ilegal de la persona menor de edad por su padre o madre, o por la persona encargada o la privación ilegal de la custodia legítima.

Artículo 7.- **No discriminación**

Ninguna persona menor de edad será objeto de discriminación o de castigo a causa de cualquier condición que caracterice o afecte a su padre, a su madre, a sus familiares o a la persona a cuyo cargo se encuentre. En el caso de personas menores de edad de origen extranjero el Estado hará lo posible para ofrecerles la protección y asistencia adecuadas para el disfrute de los derechos y garantía reconocidas por esta Ley.

Artículo 8.- **Asistencia del Estado**

El Estado proveerá a la persona menor de edad protección y asistencia especial cuando carezca de alguien que se ocupe de su cuidado, o cuando la custodia por parte de su padre, madre o persona encargada no responda a los mejores intereses y al bienestar de aquélla. Dicha asistencia puede incluir su ubicación en una institución de protección de menores o con una familia que le brinde protección y la adopción. En uno u otro caso el Estado deberá asegurarse de que se cumplan todas las salvaguardas legales y de otra naturaleza que garanticen el mejor bienestar de la persona menor de edad.

Artículo 9.- **Nivel de vida**

Se reconoce el derecho de la persona menor de edad a beneficiarse de un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico y mental; y es responsabilidad de los padres, las madres o las personas encargadas proporcionárselo, atendiendo debidamente la prioridad de dicho derecho, de acuerdo con sus posibilidades económicas. El Estado tomará, con la debida diligencia, las medidas necesarias para que dicha responsabilidad sea asumida sin dilación injustificada.

Artículo 10.- **Seguridad social**

Toda persona menor de edad tiene derecho a beneficiarse de los programas de seguridad social en la medida de sus necesidades, y tomando en consideración los recursos de que disponga y los de quienes sean responsables de su manutención.

Artículo 11.- **Protección contra el abuso o maltrato de menores**

La persona menor de edad tiene derecho a ser protegida por el Estado contra toda forma de abuso, maltrato o violencia física, sexual o emocional de parte de su padre, de su madre, de la persona a cuyo cargo se encuentre o de cualquier otra persona. Dicha protección implica el desarrollo e implantación de programas efectivos para la prevención y de programas sociales que brinden atención especial a este problema.

Artículo 12.- **Derecho de Libertad**

Toda persona menor de edad tiene derecho a las libertades básicas consagradas por la Constitución a todos los ciudadanos, aunque condicionadas por los derechos y responsabilidades reconocidas por ley que implica el sano ejercicio de la patria potestad y de la tutela, tomando en cuenta la edad y el grado de desarrollo y madurez física, psicológica e intelectual de la persona menor de edad. Ello comprende, pero no se limita a las siguientes libertades:

1) Libertad de pensamiento: es decir la formación de criterio propio en asuntos de conciencia, bajo la sana dirección y orientación del padre, de la madre o de la persona encargada.
2) Libertad de expresión: la posibilidad de expresar su opinión sobre cualquier asunto que pueda afectarle, tomando en cuenta su edad y madurez. El Estado le garantizará la oportunidad de ser escuchado, personalmente o por mediación de su representante, en todo procedimiento judicial o administrativo en que sea parte o que pueda afectar sus derechos e intereses.
3) Libertad de acceso a información: el derecho a buscar y a recibir información, tomando en cuenta su edad y madurez y los criterios educativos generalmente aceptados en previsión de un desarrollo psicológico e intelectual sano y adecuado. Es obligación del Estado proteger a la persona menor de edad respecto a cualquier información o material que pueda ser perjudicial para su bienestar.
4) Libertad de culto: el derecho a profesar la religión de su preferencia, aunque sujeto al sano ejercicio de la autoridad del padre o de la madre, o de la persona encargada.
5) Libertad de asociación: el derecho a relacionarse y asociarse con otras personas, mediando el consentimiento del padre o de la madre, o de la persona encargada, y siempre que no medie motivo o circunstancia contraria a la ley, al orden social, la moral y a las buenas costumbres.

Por lo que respecta a su intervención en la potenciación de estas libertades, el padre, la madre o la persona encargada deben ejercer su autoridad y sus facultades de dirección, supervisión y orientación de la persona menor de edad con conciencia de que la imposición de criterios e ideas contraria a la ley, a la moral y al orden público son contrarias al sano desarrollo de la personalidad y del intelecto de la persona menor de edad y puede llevar a la intervención del Estado en cuanto sea contraria a los mejores intereses y al bienestar de ésta.

Artículo 13.- **Vida privada y familiar**

La persona menor de edad tiene derecho a que se le proteja contra cualquier interferencia irrazonable respecto a su vida privada y familiar y contra cualquier ataque a su honor y a su dignidad. El Estado tomará medidas adecuadas para ello, particularmente en lo que se refiere a la intervención del sistema de justicia con las personas menores de edad.

Artículo 14.- **Salud y servicios médicos**

La salud física y mental es fundamental para el desarrollo óptimo de la persona menor de edad. El Estado le proveerá servicios especiales de salud y adoptará las medidas necesarias para prevenir y combatir enfermedades, rehabilitar, evitar la malnutrición, reducir la mortalidad infantil y asegurar una adecuada educación sobre la salud dirigida a las personas menores de edad, así como a sus padres, madres o personas encargadas.

La persona menor de edad que sea intervenida por el Estado a los fines de brindarle asistencia o tratamiento de salud, tiene el derecho a que se evalúe periódicamente su condición y a que se le informe de ello a quien la represente.

Artículo 15.- **Personas con impedimentos**

Las personas menores de edad con impedimentos físicos o mentales tienen el derecho a una vida digna y plena en la medida de sus potencialidades, con oportunidades suficientes para superarse y para participar en la vida comunitaria. El Estado les proporcionará asistencia especial y tomará las providencias necesarias para facilitarles el ejercicio más pleno de sus derechos.

Artículo 16.- **Educación**

La educación de la persona menor de edad se reconoce como fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de su personalidad; para el desarrollo de destrezas y capacidades que preparen para la vida adulta e independiente; para el ejercicio pleno de los derechos y las libertades, así como para el respeto a los derechos y libertades de los demás; y para el desarrollo de las virtudes cívicas y de una conciencia libre y democrática. Es obligación del Estado ofrecer a la persona menor de edad la oportunidad de recibir educación primaria gratuita que cumpla con dichos objetivos y asegurarse de que efectivamente la reciba, tomando las medidas adecuadas para orientar sobre la necesidad de ésta y evitar la deserción escolar. La educación superior deberá hacerse accesible a todos. La aplicación de la disciplina escolar debe respetar la dignidad de la persona y regirse por criterios de razonabilidad y prudencia.

Artículo 17.- **Esparcimiento y actividades edificantes**

El Estado proporcionará a las personas menores de edad oportunidades adecuadas para su esparcimiento y recreo, así como para el desarrollo de un cuerpo y una mente sana mediante el deporte, el ejercicio de las artes y la posibilidad de participar en actos y eventos culturales y artísticos que atiendan las necesidades y particularidades de dicha población.

Artículo 18.- **Restricciones de empleo**

Es obligación del Estado prohibir o restringir el empleo de personas menores de edad, fuera de los límites establecidos por ley, para desempeñar labores y ocupaciones que puedan ser perjudiciales a su salud y a su desarrollo ético-moral, o que puedan poner en peligro su integridad física. El Estado se asegurará siempre de que toda disposición que posibilite el empleo de personas menores de edad establezca requerimientos adecuados en cuanto a condiciones idóneas de trabajo.

Artículo 19.- **Explotación de menores**

La persona menor de edad será protegida contra toda forma de explotación, lo que incluye pero no se limita a:

1) Explotación y abuso sexual, incluyendo la prostitución de la persona menor de edad y su utilización en prácticas pornográficas.
2) La utilización de las personas menores de edad para ejercer la mendicidad pública.
3) La venta, tráfico y trato de personas menores de edad para cualquier fin.

Artículo 20.- **Uso y tráfico de sustancias controladas**

El Estado tomará providencias adecuadas para proteger a las personas menores de edad de influencias que puedan inducirlas al uso de sustancias controladas o que puedan utilizarlas para la producción o distribución de éstas, así como para impedir el uso de dichas sustancias por las personas menores de edad y para ofrecerles servicios de atención y rehabilitación a quienes las hayan utilizado.

Artículo 21.- **Sistema de justicia juvenil**

El Estado reconoce a toda persona menor de edad a quien se le impute la comisión de alguna acción contraria a la ley y al orden público el derecho a que se considere su condición de minoridad, con las excepciones que se establezcan por ley, en un sistema especializado de justicia juvenil fundado en el principio de la confidencialidad del proceso y en el objetivo primordial de la rehabilitación, provisto de instalaciones y programas especiales separados de los programas de adultos.

La persona menor de edad tiene derecho a beneficiarse de todas las garantías de un proceso justo y equitativo; a tener contacto con sus familiares en todo momento; a obtener asistencia jurídica en la

presentación de la defensa; y, de ser declarada incursa en falta, a ser tratada con la consideración y la adecuada atención que su minoridad impone.

Artículo 22.- **Obligaciones de la persona menor de edad**

Los derechos reconocidos en esta Ley a la persona menor de edad no se interpretarán en forma alguna para eximir a la misma del cumplimiento de la legislación o reglamentación vigente en Puerto Rico o para fomentar actos o conducta que contravengan la moral, el orden público y las normas de convivencia de la comunidad, escuela, institución educativa o comunitaria, así como las de su núcleo familiar.

La responsabilidad de cada persona menor de edad ante lo establecido, debe estar equiparada a su capacidad mental, desarrollo físico y edad cronológica, de forma tal que sea cónsona con lo requerido a ésta y con su capacidad para cumplirla dentro de un marco social equilibrado.

Artículo 23.- **Vigencia**

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

**"INFORME CONJUNTO**

**AL SENADO DE PUERTO RICO**

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; de lo Jurídico; y de Salud y Bienestar Social, previo estudio y consideración del P. del S. 1634, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguientes enmiendas;

**En El Texto:**

| | |
|---|---|
| Página 5, Artículo 1, línea 2 | Después de "y" tachar "Obligaciones" y sustituir por "Deberes" |
| Página 5, Artículo 1, línea 3 | Después de "Edad," insertar "su Padre, Madre o Tutor y del Estado" |
| Página 6, Artículo 2, línea 5 | Después de "rector" insertar "la protección de la institución de la familia y" después de "bienestar" tachar "del menor," y sustituir por "de la persona menor de edad," |
| Página 6, Artículo 2, línea 7 | Después de "raza," tachar "religión," e insertar "color, nacimiento, ni ideas políticas o religiosas, impedimentos," |
| Página 6, Artículo 2, línea 8 | Después de "personal." insertar "El Estado reconoce que son el padre, madre o tutor, los responsables primarios del control, supervisión y orientación de la persona menor de edad." |
| Página 6, Artículo 3, línea 11 | Después de "la" tachar "mayoría de edad" y sustituir por "emancipación" |
| Página 6, Artículo 4, línea 17 | Después de "derechos" tachar "en el" y sustituir por "a través del" |
| Página 6, Artículo 5, línea 21 | Después de "nacimiento" tachar "las personas menores" y sustituir por "la persona menor" después de "edad" tachar "están sujetas" y sustituir por "está sujeta" |
| Página 6, Artículo 5, línea 22 | Después de "y" tachar "sometidas" y sustituir por "sometida" |

| | |
|---|---|
| Página 7, Artículo 5, línea 1 | Después de "parte de" tachar "sus padres, madres o personas encargadas" y sustituir por "su padre, madre o tutor" |
| Página 7, Artículo 5, línea 3 | Después de "o" tachar "las personas encargadas" y sustituir por "tutores en la crianza y educación de la persona menor de edad," |
| Página 7, Artículo 5, línea 4 | Después de "ley;" tachar "; y les brindará la ayuda necesaria para el mejor desempeño de sus funciones." insertar "Esta Ley no transfiere al Estado los derechos y deberes del padre, madre o tutor en lo referente a la crianza, control, supervisión y orientación de la persona menor de edad." |
| Página 7, Artículo 6, línea 6 | Después de "nombre" insertar "y dos apellidos" |
| Página 7, Artículo 6, línea 9 | Tachar "ambos no" y sustituir por "ninguno de ellos" |
| Página 7, Artículo 6, línea 10 | Después de "de" tachar "menor" y sustittuir por "de la persona menor de edad" |
| Página 7, Artículo 6, línea 12 | Después de "traslado" insertar "de la persona menor de edad" después de "custodia" tachar "y" y sustituir por ";" |
| Página 7, Artículo 6, línea 13 | Después de " padre" tachar " o madre, o por la persona encargada," y sustituir por ", madre o tutor;" |
| Página 7, Artículo 7, línea 17 | Después de "madre," tachar "a sus familiares o a la persona a cuyo cargo se encuentre" y sustituir por " o tutor" |
| Página 7, Artículo 7, línea 20 | Después de "y" tachar "garantía" y sustituir por "garantías" |
| Página 8, Artículo 8, línea 1 | Después de "cuando" tachar "la custodia por parte de su padre, madre o persona encargada no responda a los mejores intereses y al bienestar de aquélla." y sustituir por "se determine, dentro del proceso legal correspondiente, que la persona menor de edad ha sufrido o existe un serio riesgo de que sufrirá un grave daño físico, sexual o sicológico." |
| Página 8, Artículo 8, línea 3 | Después de "ubicación" insertar "temporera" |
| Página 8, Artículo 8, línea 4 | Después de "protección" tachar "y" y sustituir por "o" |
| Página 8, Artículo 9, línea 9 | Después de "de" tachar "los padres, las madres, o las personas encargadas" y sustituir por "el padre, madre o tutor" |
| Página 8, Artículo 10, línea 15 | Después de "recursos" tachar "de que disponga" y sustituir por "disponibles" |
| Página 8, Artículo11 línea 19 | Después de "maltrato" tachar "o" y añadir "," |
| Página 8, Artículo 11, líneas 19 y 20 | Después de "padre," tachar "de su" después de "madre," tachar "de la persona ha cuyo cargo se encuentre" y sustituir por "tutor" |
| Página 8, Artículo11, línea 20 | Después de "o" tachar "de" |

| | |
|---|---|
| Página 8, Artículo 11, línea 20 | Después de "otra persona." insertar "a cuyo cargo se encuentre, según establecido en la legislación vigente" |
| Página 8, Artículo 11, línea 21 | Después de "para" tachar "la" y sustituir por "su" después de "y" insertar "tratamiento" |
| Página 9, Artículo 12, línea 3 | Después de "Constitución" insertar "de Puerto Rico" después de "aunque" tachar "condicionadas" y sustituir por "condicionada a su capacidad de obrar" |
| Página 9, Artículo 12, línea 4 | Después de "ley" tachar "que implica el" y sustituir por "al" |
| Página 9, Artículo 12, inciso 1, línea 8 | Después de "padre," tachar "de la" después de "o" tachar "de la persona encargada" y sustituir por "tutor" |
| Página 9, Artículo 12, inciso 3, línea 16 | Después de "adecuado." tachar "Es obligación del Estado proteger a la persona menor de edad respecto a cualquier información o material que pueda ser perjudicial para su bienestar." |
| Página 9, Artículo 12, inciso 4, línea 20 | Después de "padre" tachar "o de la" e insertar "," después de "madre," tachar "," después de "o" tachar "de la persona encargada" y sustituir por "tutor" |
| Página 9, Artículo 12, inciso 5, línea 22 | Después de "padre" tachar "o de la" sustituir por "," después de "madre" tachar "," después de "o" tachar "de la persona encargada" y sustituir por "tutor," |
| Página 10, Artículo 12, inciso 5, línea 1 | Después de "orden" tachar "social" y sustituir por "público" |
| Página 10, Artículo 12, inciso 5, línea 1 | Después de "y" tachar "a" |
| Página 10, Artículo 12, línea 2 | Después de "padre," tachar "la" |
| Página 10, Artículo 12, línea 3 | Después de "o" tachar "la persona encargada" y sustituir por "tutor" después de "encargada" tachar "deben" y sustituir por "debe" |
| Página 10, Artículo 12, línea 5 | Después de " ideas" tachar "contraria" y sustituir por "contrarias" |
| Página 10, Artículo 12, línea 5 | Después de "son" tachar "contrarias" y sustituir por "perjudiciales" |
| Página 10, Artículo 12, línea 6 | Después de "y" tachar "del" y sustituir por "el" |
| Página 10, Artículo 12, línea 7 | Después de "Estado" tachar "en cuanto sea contraria a los mejores intereses y al bienestar de ésta" y añadir "." |
| Página 10, Artículo 13, línea 12 | Después de "con" tachar "las personas menores" y sustituir por "la persona menor" |
| Página 10, Artículo 14, línea 18 | Después de "o" tachar "personas encargadas" y sustituir por "tutores" |
| Página 11, Artículo 15, línea 1 | Tachar "Las personas menores" y sustituir por "La persona menor" después de "mentales" tachar "tienen" y sustituir por "tiene" |
| Página 11, Artículo 15, línea 3 | Después de "Estado" tachar "les" y sustituir por "le" |
| Página 11, Artículo 15, línea 4 | Después de "para" tachar "facilitarles" y sustituir por "facilitarle" |
| Página 11, Artículo 16, línea 8 | Después de "que" insertar "le" |
| Página 11, Artículo 16, línea 10 | Después de "capacidades" insertar "le" |

| | |
|---|---|
| Página 11, Artículo 16, línea 9 | Después de "de" tachar "los" y sustituir por "sus" después de "y" tachar "las" |
| Página 11, Artículo 16, línea 10 | Después de "para" insertar "incurcarle" |
| Página 11, Artículo 16, línea 16 | Después de "por" insertar "los" después de "prudencia" insertar "y satisfacer los requisitos del debido proceso de ley" |
| Página 12, Artículo 19, línea 8 | Tachar "La" y sustituir por "Es obligación del Estado proteger a la" después de "edad" tachar "será protegida" |
| Página 12, Artículo 19, inciso 2, línea 12 | Después de "de" tachar "las personas menores" y sustituir por "la persona menor" |
| Página 12, Artículo 19, inciso 3, línea 13 | Después de "de" tachar "personas menores" y sustituir por "la persona menor" |
| Página 12, Artículo 19, entre las líneas 13 y 14 | Insertar un inciso "4) La utilización de la persona menor de edad para actividades delictivas." |
| Página 12, Artículo 20, línea 15 | Eliminar el contenido del Artículo 20 y sustituir por:<br>"El Estado tomará las providencias adecuadas para:<br>1) Proteger a la persona menor de edad de influencias que puedan inducirla al uso de sustancias controladas.<br>2) Evitar que se pueda utilizar a la persona menor de edad para la producción o distribución de sustancias controladas.<br>3) Impedir y evitar el uso de dichas sustancias controladas por la persona menor de edad.<br>4) Ofrecerle a la persona menor de edad los servicios de atención y rehabilitación requeridos por razón de que hayan utilizado sustancias controladas." |
| Página 12, Artículo 21, línea 22 | Después de "público" insertar "," |
| Página 13, Artículo 21, línea 2 | Después de "proceso" tachar "y en" y sustituir por "con" |
| Página 13, Artículo 21, línea 3 | Después de "rehabilitación" tachar "," y sustituir por "y" |
| Página 13, Artículo 21, línea 6 | Después de "equitativo" tachar ";" e insertar ", de acuerdo con las garantías de un debido proceso de ley;" |
| Página 13, Artículo 21, línea 7 | Después de "de" tachar "la" y sustituir por "su" |
| Página 13, Artículo 22, línea 9 | Después de "Artículo 22.-" tachar "**Obligaciones**" y sustituir por "**Deberes**" |
| Página 13, Artículo 22, línea 11 | Después de "a" tachar "la misma" y sustituir por "ésta" después de "cumplimiento" tachar "de" y sustituir por "con" |
| Página 13, Artículo 22, entre la línea 17 y 18 | Añadir un nuevo Artículo 23.-<br>"Artículo 23.- **Claúsula de Separabilidad**<br>Si alguna disposición de esta Ley fuera declarada nula o inconstitucional por un tribunal con competencia, la sentencia a tal efecto no afectará ni invalidará el resto de ésta. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la disposición que así hubiere sido declarada inconstitucional." |
| Página 13, Artículo 23, línea 18 | Después de "Artículo " tachar "23"y sustituir por "24" |

**En El Titulo:**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 1 | Despúes de "y" tachar "Obligaciones" y sustituir por ""Deberes" |
| Página 1, línea 1 | Después de "Edad;" insertar ",su Padre, Madre o Tutor, y del Estado" |
| Página 1, línea 3 | Después de "disponer" tachar "la" y sustituir por "las" |
| Página 1, línea 6 | Después de "paterna" tachar "y" y sustituir por "," después de "materna" insertar "o del tutor" |
| Página 1, línea 7 | Después de "discrimen" tachar "en" y sustituir por "contra" |
| Página 1, línea 7 | Después de "derechos" tachar "ejercitables" y sustituir por "que puedan ejercerse," después de "vigente" insertar "," |
| Página 1, línea 9 | Después de "menores;" tachar "reconocimiento de" y sustituir por "reconocer" |
| Página 1, línea 11 | Después de "y" tachar "supervicsión de los padres;" y sustituir por "supervisión del padre, madre o tutor;" |

**Exposicion De Motivos:**

| | |
|---|---|
| Página 2, párrafo 1 línea 4 | Después de "avanzada," tachar "los minusvalidos" y sustituir por "personas con impedimentos" |
| Página 2, párrafo 1 línea 7 | Despues de " siglas" insertar "como" |
| Página 2, párrafo 3, línea 16 | Después de "y" tachar "obligaciones" y sustituir por "deberes" después de "de" insertar "y para con" |
| Página 2, párrafo 4, línea 29 | Después de "y la" tachar "falta de" y sustituir por "limitación a la" |
| Página 2, párrafo 4, línea 30 | Después de "jurídica" insertar "de obrar" |
| Página 2, párrafo 4, línea 30 | Después de "edad." tachar "El Código Civil de Puerto Rico establece en el Artículo 247 que la mayoría de edad es a los veintiún (21) años, sin embargo, existen una serie de actos de vital trascendencia en los cuales se trata como adultos a personas mayores de dieciocho (18) años pero que aún no han alcanzado la mayoría de edad establecida por ley. La posibilidad de participar en conflictos bélicos, el procesamiento como adultos en el ámbito penal y el derecho a emitir su voto en los procesos electorales, son algunos ejemplos de la capacidad jurídica que se les reconoce a pesar de su minoridad." |
| Página 3, párrafo 2, línea 13 | Eliminar "La tendencia en el mundo contemporáneo es a reconocer que el proceso de maduración de los menores se ha acelerado y por consiguiente, estos advienen a la adultez a una edad más temprana, asumiendo la responsabilidades y obligaciones que dicha condición les confiere." |
| Página 3, párrafo 2 línea 13 | Insertar el siguiente texto:<br>"La etapa de la adolescencia es un intérvalo vital entre la niñez y la edad adulta. Esta etapa provee el espacio para la transición hacia la adultez, la cual se define por el logro de la capacidad plena, la independencia y la estabilidad, entre otros |

aspectos. Las variaciones en el proceso de maduración de la identidad están asociadas al género, la raza y el nivel socio económico. *Fisher B. Celia & Lerner, Richard M. Applied Development Psycology*. Los niños y jóvenes estre 10 y 19 años constituyen la sexta parte de la población mundial, y son por consiguiente, una fuerza en favor de cambios profundos. El desarrollo pleno de su potencial y la seguridad física y emocional deben ser el producto del apoyo de sus padres, familias y la sociedad. El Código Civil de Puerto Rico establece en el Artículo 247 que la mayoría de edad es a los veintiún (21) años, sin embargo, existen una serie de actos de vital trascendencia en los cuales se trata como adultos a personas mayores de dieciocho (18) años pero que aún no han alcanzado la mayoría de edad establecida por ley. La posibilidad de participar en conflictos bélicos, el procesamiento como adultos en el ámbito penal y el derecho a emitir su voto en los procesos electorales, son algunos ejemplos de la capacidad jurídica que se les reconoce a pesar de su minoridad."

Página 3, párrafo 3, línea 19

Eliminar contenido de los párrafos 3 y subsiguientes y sustituir por:

"En los informes preparados por varios comités de trabajo que forman parte de la Comisión Asesora, entre los que figuran el Comité para la Protección de la Salud Integral, el Comité sobre Marco Conceptual de Política Pública, y el Colegio de Abogados de Puerto Rico han expresado que el ejercico pleno de la capacidad jurídica de la persona menor de edad está limitada el ejercicio pleno ampliándose paulatinamente a medida que ésta va creciendo física e intelectualmente durante las diversas etapas de socialización. Durante este proceso las funciones de orientación, supervisión y disciplina por parte de los progenitores, tutores o de las personas a cuyo cargo se encuentran nuestros niños y niñas son de vital importancia y deben salvaguardarse, excepto en aquellas situaciones en que se ejerzan indebidamente en perjuicio de los mejores intereses de la persona menor de edad.

Es evidente que los derechos tienen como contrapartida el cumplimiento de deberes jurídicos y sociales por parte de la ciudadanía. Por ello, es importante que la persona menor de edad cumpla a cabalidad con las normas y estatutos que conforman nuestro ordenamiento jurídico y, por consiguiente, debe evitar actuaciones contrarias a la moral y el orden público. Es deseable, y así lo requiere nuestra sociedad, que la conducta de la persona menor de edad esté enmarcada en los principios y valores de respeto a las normas de sana convivencia de la comunidad, de la escuela y de su

núcleo familiar. La responsabilidad de cada persona menor de edad ante los deberes descritos debe, además, estar equiparada a su capacidad mental, desarrollo físico y edad cronológica, de forma tal que sea cónsona con lo requerido a ésta.

Nuestro pueblo cada día demuestra mayor interés y preocupación por los problemas y necesidades de nuestras personas menores de edad, por lo que se han aprobado numerosas piezas legislativas para promover el bienestar de este sector de nuestra población. En esta etapa del devenir histórico de la humanidad, y de Puerto Rico en particular, es hora de concertar mediante legislación los principios que, en forma integrada, cobijan la totalidad de las necesidades físicas, emocionales, espirituales e intelectuales de los menores de edad a fin de lograr un desarrollo integral, equilibrado y completo en todos sus aspectos.

Como parte de los esfuerzos realizados por la Comisión Asesora, se ha reconocido que, en Puerto Rico, la normativa y legislación que incide sobre los menores de edad es extremadamente amplia y compleja. Es notable que, en ocasiones, las leyes vigentes carecen de criterios integradores y, de un modo u otro, se afecta la naturaleza armónica que debe existir en un cuerpo jurídico al momento de aplicarlo e interpretarlo. Por ello, esta legislación persigue, entre otros propósitos, establecer los parámetros racionales que deben ser considerados como básicos en la eventual preparación de un Código de la Persona Menor de Edad. Un proyecto de esta naturaleza debe ser abordado dentro de los esquemas de la institución familiar, particularmente según lo conceptualiza nuestro Código Civil y el derecho constitucional. La codificación que pretendemos desarrollar no puede ser una mera compilación de leyes y estatutos recogidos en un documento. El proceso de análisis y revisión de toda la legislación sobre la persona menor de edad debe ser conceptualizado con criterios orientadores que sirvan de guías o directrices para así lograr un cuerpo de leyes integrado y coherente, a favor de la persona menor de edad y de la familia.

Dentro de este contexto, esta legislación servirá de preámbulo para conducir a la redacción estructurada del Código de la Persona Menor de Edad en Puerto Rico y, a la vez, permitirá atemperar el ordenamiento pertinente a la realidad social y económica que vivimos y al futuro inmediato y a largo plazo. Asimismo, la Declaración será el punto de partida de toda la política pública que sea formulada e implantada mediante acción legislativa y reglamentación

administrativa dirigida a atender los asuntos relacionados con las personas menores de edad.

A la luz de estas consideraciones, la Asamblea Legislativa considera que es imperativo adoptar la *Declaración de los Derechos y Deberes de la Persona Menor de Edad,* Padre, Madre o Tutor y del Estado en la cual se define el término "persona menor de edad" y se declara la política pública relativa a sus derechos. Esta legislación establece las garantías mínimas que servirán de base para el diseño, formulación e implantación de la reforma civil, penal y administrativa de nuestro ordenamiento en relación a los niños y niñas de Puerto Rico, en conjunto con los principios establecidos en cualquier otra legislación.

Con el propósito de reafirmar una vez más la política pública de nuestro gobierno de proteger a las personas menores de edad y de velar por que se respete su dignidad, se adopta mediante esta Ley, la *Declaración de Derechos y Deberes de la Persona Menor de Edad, Padre, Madre o Tutor y del Estado.* Al así hacerlo se reconoce la necesidad de adoptar medidas que viabilicen un cuerpo integrado de normas que regirá los fundamentos del derecho de la persona menor de edad desde el inicio de la personalidad, su integridad familiar la capacidad jurídica, sus relaciones con las instituciones de la sociedad y las obligaciones que de éstas se deriven."

## ALCANCE DE LA MEDIDA

### I.- Introducción

Dentro del esquema de la protección integral del menor existen unas consideraciones que, aunque parecen estar altamente discutidas, son aspectos que están en conflicto continuamente. El Gobierno de Puerto Rico reconoce que, aunque en su mayoría los niños son amparados y cuidados por sus padres y madres de forma constante y efectiva, hay otros niños que son abusados y maltratados por quienes tienen el primer deber de cuidarlos, es decir el padre y la madre o uno de estos. En esta última situación, se hace necesaria la protección de estos menores, por lo cual es indispensable que la comunidad y cada uno de sus componentes asuman un compromiso nacional e individual para con la defensa y protección de los derechos humanos de los niños.

Por tal razón, la Asamblea Legislativa dirige sus esfuerzos a fortalecer la institución familiar para un desarrollo normal y efectivo en el proceso de crianza y desarrollo de los niños. El Estado, por lo tanto, evita entrar en todo aquello que naturalmente, es función propia de los padres, quienes sin lugar a dudas deben cumplir mejor con su función que el Estado, limitando su injerencia a las situaciones que por su naturaleza son inevitables. Bajo este concepto de reconocimiento jurídico y moral son los padres quienes deciden la educación y formación de sus hijos, y los que tienen el deber de orientar sobre los valores morales, políticos, religiosos y de cualquier otra naturaleza. De esta manera la intervención del Estado se justifica en ocasiones cuando hay un conflicto entre ambos progenitores o cuando el menor se encuentra en grave peligro de sufrir daño por la razón que fuere.

Los derechos de los niños han sido objeto de discusión a través de muchos años de historia. Desde un principio se reconoció que el camino hacia el respeto absoluto de los derechos humanos de los niños sería largo y no exento de obstáculos. Previo a la década de los veinte del siglo pasado, el tema de los niños y niñas nunca había sido considerado de importancia en materia de discusión internacional.[1] Un gran

---

[1] En términos jurisprudenciales, se evidencia una evolución lenta en cuanto a la conceptualización de los derechos de los niños como seres individuales. Veamos ejemplos de esta trayectoria del desarrollo jurisprudencial del concepto "persona" en los niños.

En Meyer v. State of Nebraska, 262 U. S. 390 (1923), se impugnó la validez de una ley del Estado de Nebraska que prohibía la enseñanza en las escuelas de cualquier materia en otro lenguaje que no fuera el inglés, así como la enseñanza de cualquier otro idioma hasta que los estudiantes hubieren alcanzado y aprobado el octavo grado. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos decretó su inconstitucionalidad basándose en que esta ley infringía arbitraria e irrazonablemente las garantías de libertad, de los maestros y padres de los estudiantes, contenidas en la Décimocuarta Enmienda a la Constitución Federal. A los primeros, les coartaba el derecho a desempeñar su ocupación, mientras que a los últimos, les quebrantaba el derecho de criar a sus hijos y controlar su educación. El Tribunal efectuó el análisis tomando en cuenta los intereses de los maestros y padres de los estudiantes y no desde una perspectiva fundamentada en los derechos de los niños. Tampoco se consideraron los deseos e intereses de estos en una educación. De forma muy somera, y en sólo una ocasión, es que la Corte se refiere a los derechos de los niños, al expresar que, evidentemente, la Legislatura del Estado de Nebraska ha tratado de interferir sustancialmente con el llamado de los maestros de los idiomas modernos, con las oportunidades de los estudiantes para adquirir conocimiento y con el poder de los padres para controlar la educación de los hijos. Por lo cual, este caso puede interpretarse al efecto de reafirmar la visión del niño como propiedad, debido a que examina la controversia presentada únicamente como existente entre el Estado y los padres de los estudiantes, excluyendo la consideración de los derechos independientes de los niños, a que ni siquiera se consideran como parte de una relación triangular habida entre los padres, los niños y el Estado.

En Pierce v. Society of the Sisters of the Holly Names, etc.,268 U. S. 510 (1925), es un caso ilustrativo del concepto prevaleciente en torno a los niños para el comienzo de la década de los veinte (1920's). En su análisis, no se consideraron los intereses individuales de los niños. En este caso se obligaba a los niños "normales" que estaban entidad cumplan a su vez con sus respectivos deberes. Finalmente, la Corte acogió el siguiente estándar de revisión: los estudiantes ostentan el derecho a la libre expresión, a menos que fundamentos constitucionalmente válidos sean presentados para regular la expresión.

paso hacia esa dirección fue tomado en 1920, cuando activistas ingleses a favor de los derechos de los niños fundaron la organización "Save the Children" con el propósito de ayudar a los niños afectados por la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, en 1924, la "Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños" fue motivo de una larga polémica; y con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea de las Naciones Unidas proclamó la "Declaración de los Derechos de los Niños", que estableció unas guías para la acción pública y privada a favor de los intereses de estos.

Ciertamente, la última década del siglo XX se inició con un movimiento revolucionario de nuevos retos. En 1989 la Organización de las Naciones Unidas adoptó el tratado titulado: Convención sobre los Derechos del Niño. Este documento es la culminación de diez años de consultas y negociaciones entre los representantes de gobierno, abogados, profesionales de la salud, trabajadores sociales, educadores, asociaciones a favor de la infancia, asociaciones privadas y grupos religiosos alrededor del mundo. Esta Convención ha sido firmada pero no ratificada por los Estados Unidos de América. Sin embargo, como Estados Unidos es un país federado, ha dejado los asuntos relacionados a la familia en manso de los estados individualmente. Por lo tanto le compete a cada jurisdicción adoptar los principios contenidos en la Convención.

Tomando estos esfuerzos internacionales como modelo, se creó en el Senado de Puerto Rico en septiembre de 1997, la Comisión Asesora para el Estudio de Legislación sobre Asuntos de Menores, adscrita a la Oficina del Presidente. Esta Comisión tuvo la encomienda de estudiar la legislación vigente relativa a menores con el objetivo de atemperarla a la realidad social contemporánea, evitando las incongruencias y uniformando, dentro de lo posible, la normativa sobre la capacidad para obrar y disponer de bienes y compromisos. Esta Comisión estuvo compuesta por seis comités que estudiaron, además de los aspectos jurídicos, aquellos aspectos filosóficos conceptuales de salud integral, sociales y de naturaleza administrativa en la aplicación del derecho de menores. Entre sus miembros se destacan pediatras especialistas de la conducta humana, jueces, ex-jueces, académicos, abogados y funcionarios del sector público y privado. La Comisión también estuvo a cargo de elaborar una declaración de las garantías

---

Notamos que, previamente, el Tribunal había dispuesto que cuando no hubiese una determinación que demostrara que la participación en la conducta prohibida fuese a interferir sustancialmente con los requisitos para una disciplina apropiada en la operación de las escuelas, la prohibición de una opinión particular no podía ser sostenida. En este caso los estudiantes efectuaron una expresión silenciosa y pacífica de su opinión, sin que ésta fuese acompañada con algún desorden o disturbio. Por lo cual, esta actividad no podía prohibirse por las autoridades escolares.

De otra parte, en Puerto Rico el concepto de "persona" lo define el Art. 24 del Codigo Civil de 1930, disponiendo en lo pertinente:

"El nacimiento determina la personalidad y la capacidad jurídica. Es nacido el ser humano que viva completamente desprendido del seno materno".

Asimismo el Art. 25 del Código Civil establece que la minoridad es sólo una restricción para la capacidad de obrar, que deberá hacerse a través de los padres y madres con patria potestad. Sin embargo, por encima de este estatuto está nuestra Constitución, que aunque debe ser interpretada en armonía con la Constitución Federal, puede otorgar y de hecho otorga, derechos más amplios a las personas.

mínimas que han de sustentar la legislación sustantiva y procesal que le dará contenido a los derechos que garantiza.

En cumplimiento de la encomienda, el 30 de marzo de 1999 se radicó el P. del S. 1634 con el propósito de adoptar la política pública del Gobierno de Puerto Rico relativa a la población menor de edad. A esos fines, luego de una evaluación en el marco biosicosocial del individuo, se recomendó redefinir los límites para la capacidad de obrar en materia de madurez legal. Esta medida plasma con especificidad aquellos derechos inherentes a la condición de minoridad definiendo su alcance y disponiendo la responsabilidad de quien ejerce la patria potestad y la del Estado sobre su reglamentación y apropiación. El proyecto de ley también impone los parámetros de garantía en la aplicación de dichos derechos en todo procedimiento de naturaleza judicial o administrativa en el que puedan estos ser cuestionados o vulnerados.

Esta Declaración también persigue prohibir expresamente el discrimen hacia las personas menores de edad e instituye como fuente de derechos ejercitables y en armonía con la legislación vigente, la asistencia del estado, la seguridad social, las medidas contra el abuso y la violencia física y el maltrato contra menores. Asimismo, provee el reconocimiento de las libertades básicas de la persona menor de edad y el derecho a la privacidad dentro del marco de la autoridad y supervisión de los padres y los principios que la rigen.

De otra parte, el P. del S. 1634 establece los principios sobre la prestación de servicios de salud, las oportunidades para menores de edad con impedimentos físicos o mentales, destaca el derecho a la educación, las oportunidades para el desarrollo deportivo y recreativo y reconoce la rehabilitación como principio fundamental en el sistema de justicia juvenil dentro de un marco de disciplina.

Esta medida fue referida a las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; de lo Jurídico; y de Salud y Bienestar Social. Para el análisis y consideración de la medida, la Comisión de Gobierno celebró audiencia pública el 19 de mayo de 1999. A la misma, comparecieron los siguientes deponentes para expresar su opinión en torno al Proyecto:

Colegio de Abogados, representado por la Lcda. María S. González Rodríguez

Colegio de Trabajadores Sociales, representado por la Sra. Sonia Otero Rivera

Departamento de la Familia, representado por el Sr. Andrés Díaz y la Lcda. María Rivera

Comisión de Derechos Civiles, representada por la Directora Interina Lcda. Migdalia Adrover y la Sra. Enid González

Dra. Brenda Mirabal, Directora del Centro Biosicosocial del Departamento de Pediatría del Hospital Pediátrico

Amnistía Internacional, Sección de Puerto Rico (comparecieron por escrito)

Sra. Jeanette Inserni Jacobs

Ing. José M. Curet

Padre Welch, Presidente de Human Life International

La Comisión de Gobierno estudió y examinó con detenimiento toda la información ante su consideración, incluyendo la recibida mediante las innumerables llamadas telefónicas realizadas para manifestar opiniones y comentarios sobre la medida. En lo que respecta a las llamadas antes mencionadas, la Oficina para la Redacción del Código de la Persona Menor de Edad remitió copias del P. del S. 1634 por correo para que las personas interesadas tuvieran el beneficio de leer y considerarlo, a fin de opinar sobre el mismo de forma responsable e informada.

## II.- Sobre las Vistas Públicas P. del S. 1634

En la ponencia presentada por el Colegio de Abogados se expresa que mediante la propuesta para redefinir el concepto de persona menor de edad, preceptos del Código Civil de Puerto Rico pudiesen ser

afectados, por lo que procede delimitar el alcance de acuerdo a las necesidades de los menores de edad, según la edad cronológica. La Oficina ha considerado esta recomendación, y ha establecido una comunicación continua con la Oficina para la Revisión del Código Civil para establecer el alcance del trabajo y diseñar alternativas cónsonos con los propósitos de ambos proyectos, que permitan la integración legislativa de los trabajos de ambas oficinas.

El Colegio de Abogados también entiende que la definición de persona menor de edad es muy abarcadora, ya que no debe ofrecerse el mismo tratamiento a un niño o niña de dos (2) años que a un joven de diecisiete (17) años. La Declaración de Política Pública del Proyecto de Ley, establece que se ha de considerar el grado de vulnerabilidad variable a que se ven sometidas las personas menores de edad durante su proceso de desarrollo y socialización hasta alcanzar su capacidad jurídica plena. Es preciso señalar que los tribunales al pasar escrutinio judicial tienen que interpretar la pieza en su totalidad. De manera reiterada el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que las leyes no deben interprestarse tomando alguna frase aislada, sin tomar en consideración el texto de la ley en su totalidad, "íntegralmente", "[l]a ley debe interpretarse en su totalidad, no fraccionadamente, para encontrar su significado. El Tribunal tiene que tener en cuenta cuál es su propósito." Municipio de SanJuan vs. Banco de desarrollo Gubernamental de Fomento, 96 JTS 73; Veáse además Sucesión Alvarez Crespo vs. Hon. Pedro Pierluissi, Secretario de Justicia del ELA, 2000 JTS 40; Franco Dominicci vs. Departamento de Educación, 99 JTS 108.

La Dra. Brenda Mirabal, Directora del Centro Biosicosocial, especialista en niños, apoyó la medida, manifestando que el Proyecto es el producto de un nutrido grupo de profesionales que aspiran a una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos, particularmente las personas menores de edad. De otra parte explicó que existe una responsabilidad en torno a la niñez, que consiste en reconocer y respetar su derecho a una vida digna y plena para que pueda desarrollarse al máximo de su potencial en un mundo libre de violencia y en el cual puedan expresar sus sentimientos.

La Dra. Mirabal, como pediatra, resaltó la importancia del derecho de todo menor a recibir servicios integrados de salud y educación para su desarrollo físico y emocional. Como Catedrática del Recinto de Ciencias Médicas y Directora del Centro, ha sido testigo de que en los procedimeintos legales en los cuales los menores están involucrados como víctimas de maltrato, también son víctimas de un sistema que, en muchas ocasiones, viola su derecho a la dignidad y libre expresión.

La Comisión de Derechos Civiles, como organismo gubernamental dedicado a educar al pueblo sobre el significado de los derechos fundamentales del ser humano, expresó que la protección de los derechos civiles del ciudadano constituye el camino hacia la justicia y la deseada calidad de vida. Sus representantes señalaron que el crecimiento tecnológico y las tendencias hacia una economía global no alcanzarán niveles de progreso real, a menos que estos derechos civiles vayan avanzando a un ritmo mayor que la misma economía.

La Constitución de Puerto Rico reconoce al menor de edad, como persona, todos los derechos al individuo incluyendo,el derecho a la intimidad y a la libertad, entiéndase dentro de los parámetros de una orientación, disciplina y supervisión sana de sus padres, madres o tutores. También tienen derecho a la protección contra registros irrazonables a sus personas o pertenencias, tomando en consideración las circunstancias convergentes en el escenario particular que se presente. Tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico como la del Tribunal Supremo Federal ha reconocido que los menores de edad están cobijados por unos derechos constitucionales en el ámbito penal como en los procesos administrativos.[2]

---

2 New Jersey v. T.L.O., 469 U.S. 325 (1985); Vernonia School District 47J v. Acton, 515 U.S. 646 (1995)

Según la Comisión de Derechos Civiles, la medida propuesta constituye una pieza que articula derechos y obligaciones de nuestros menores de edad que ya están consignados en la Constitución de Puerto Rico y en otras leyes, entre las cuales podemos señalar la anterior Ley de Menores. La recolección de estos derechos dispersos en una sola pieza legal es una manera eficaz de proteger los derechos de los niños y niñas de Puerto Rico, y así evitar la discriminación contra estos. Es un reconocimiento manifiesto para procurarles en nuestra sociedad un espacio de respeto, dignidad, tolerancia, libertad e igualdad, en armonía con la autoridad del padre, madre o encargado, y para concienciarlos de la responsabilidad correspondiente que tienen como miembros de la sociedad, de acuerdo a su capacidad mental, desarrollo físico y edad cronológica.

Sin embargo, la Comisión expuso su preocupación con relación a que los derechos que amparan a los menores de edad entre las edades de dieciocho (18) a veintiún (21) años podrían afectarse con la aprobación de la medida. Considerando el planteamiento expuesto, el Presidente en funciones de la Comisión de Gobierno y Presidente del Senado, Hon. Charlie Rodríguez Colón, solicitó a la Comisión de Derechos Civiles la presentación, por escrito, de recomendaciones al respecto.

Oportunamente la Comisión presentó sus recomendaciones el 11 de junio de 1999, con relación a los posibles derechos que se podrían estar afectando a menores entre dieciocho (18) a veintiuno (21) años, las cuales fueron aclaradas y aceptadas.

El Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico endosó la medida por estar acorde con los postulados de la profesión del trabajador social y a lo que se aspira para con los niños y niñas de nuestro país. Sin embargo, en su ponencia expresó reservas con la disposición de la redefinición de menor de edad en los siguientes aspectos: consecuencias en el costo de los planes médicos, consecuencias contributivas, pensiones alimentarias de hijos que estudian, leyes que prohiben el consumo de bebidas alcohólicas a menores de veintiún (21) años y privaría a menores con impedimentos físicos y mentales de los servicios que el Estado ofrece.

Los planteamientos del Colegio de Trabajadores Sociales no es cónsono con nuestro estado de derecho, ya que en la actualidad las consideraciones para cada caso son particulares. En primer lugar los planes médicos establecen las edades para ser beneficiario del plan de salud basándose en criterios de dependencia económica con relación a sus padres, y de acuerdo al grupo beneficiario, según lo dispone el Código de Seguros. De otra parte, con relación a las consecuencias tributarias, el Código de Rentas Internas de Puerto Rico establece que se pueden hacer deducciones de los hijos cuando estos son dependientes hasta cumplidos los veinte (20) años de edad y hasta los veinticinco (25) años si están estudiando. Estos beneficios no se otorgan por consideraciones de minoridad, sino de la política que establezcan otras legislaciones.

En cuanto a las pensiones alimentarias el estado de derecho vigente en Puerto Rico establece que los padres están obligados a proveerle alimentos a sus hijos hasta que estos alcancen la mayoría de edad, sin embargo, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto en Guadalupe Viera vs. Morell, 115 DPR 4 (1983) y Key Nieves vs. Oyola Nieves, 116 DPR 261 (1985), que la obligación de proveerle alimentos a los hijos continuará aún después de que los hijos lleguen a la mayoría de edad, si estos son estudiantes regulares y evidencian un progreso académico, considerando los criterios de capacidad del alimentante y necesidad del alimentista, según lo establece el ordenamiento jurídico con relación a alimentos.

Por último, los señamientos con relación las leyes sobre personas con impedimentos, la "American with Disabilities Act of 1990", PL 101-336, le confiere derechos a todas las personas que padezcan de algún tipo de impedimento físico o mental, prohibiendo el discrimen contra las personas con impedimentos, provee sobre equipo de asistencia tecnológica, acomodo razonable en el empleo, áreas de estacionamiento reservadas, entre otras.

El Departamento de la Familia también estuvo presente en la vista pública y apoya el proyecto explicando que acopia en una sola pieza todos los derechos que competen a los menores, de forma que

sirvan como base para la legislación prospectiva de menores. El Departamento sugirió unas enmiendas que fueron consideradas por la Comisión. Se planteó la preocupación respecto al Artículo 12 del proyecto, que esboza las libertades básicas, las cuales a su vez, están condicionadas por los derechos y obligaciones reconocidos por ley que implican el sano ejercicio de la patria potestad y la tutela. No obstante, manifestaron su anuencia cuando lo leyeron en conjunto con los Artículos 2 y 5 del proyecto que establecen la Declaración de Política Pública y el reconocimiento de la autoridad paterna y materna respectivamente, que este reconocimiento está sujeto a la consideración de la edad y el grado de desarrollo y madurez física, sicológica e intelectual de los niños y niñas de Puerto Rico.

En reunión ejecutiva celebrada luego de análisis de la medida y de la información disponible, los miembros de las comisiones que suscriben recomiendan la aprobación del P. del S. 1634 con las enmiendas propuestas.

Respetuosamente Sometido,

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales

(Fdo.)
Jorge Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico

(Fdo.)
Norma Carranza de León
Presidenta
Comisión de Salud y Bienestar Social"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3275 y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Salud y Bienestar Social; de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas; y relevado de la Comisión de lo Jurídico.

**"LEY**

Para establecer las necesidades de tratamiento, recuperación y rehabilitación en salud mental; crear las "Cartas de Derecho" para adultos y menores que reciben servicios de salud mental; uniformar lo relativo a los procedimientos relacionados con estos derechos; establecer los principios básicos de los niveles de cuidado en el ofrecimiento de servicios de salud mental; derogar la Ley Núm. 116 de 12 de junio de 1980, conocida como "Código de Salud Mental de Puerto Rico" y establecer penalidades.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La salud mental es el estado de bienestar resultante de la interacción funcional entre la persona y su ambiente, y la integración armoniosa en su ser de un sinnúmero de factores, entre los que se encuentran; su percepción de la realidad y su interpretación de la misma; sus necesidades biológicas primarias y la forma de satisfacerlas; su potenciales psíquicos, mentales y espirituales y el modo de elevarlos a su máximo nivel; su sentido del humor y su capacidad para disfrutar de los placeres genuinos que la vida nos ofrece; su

confianza en sí mismo y el reconocimiento de sus limitaciones; su satisfacción ante sus logros y su entereza ante sus fracasos; su reconocimiento de sus derechos y obligaciones sociales como necesidades básicas para la convivencia sana y pacífica; su solidaridad con los valores en que cree y su respeto y tolerancia con los que discrepa; su capacidad para crecer y madurar a la luz de las experiencias de su propia vida y la de otros; su resonancia afectiva ante los sucesos alegres y tristes; y finalmente, su capacidad para dar y recibir amor generosamente.

Ratificamos que velar por la salud mental de nuestro Pueblo, es y debe ser un asunto de entero interés para el Gobierno de Puerto Rico. La salud mental es elemento matriz de la sana convivencia y de una buena calidad de vida.

El Código de Salud Mental de Puerto Rico fue creado en virtud de la Ley Núm. 116 de 12 de junio de 1980, según enmendada. Desde entonces, los cambios en la vida del ciudadano puertorriqueño durante las últimas décadas han sido significativos. Estos cambios se han caracterizado por un aumento significativo en la incidencia de trastornos mentales en adultos y menores. Para enfrentarse a las exigencias del aumento de esos trastornos y a la necesidad de proveer servicios de salud mental adecuados a las personas que necesiten de éstos, han surgido una serie de reformas, incluyendo la Reforma de Salud en Puerto Rico, con la incorporación del cuidado coordinado (managed care), y de seguros y cubiertas de salud mental para toda la población médico indigente, lo que ha tenido un efecto trascendental en los servicios de salud mental que se ofrecen en Puerto Rico, dando paso así a nuevas opciones de tratamiento, recuperación y rehabilitación en el campo de la salud mental.

Para garantizar que estos servicios se ofrezcan dentro de los criterios de calidad que se establecen en esta Ley, es importante que el estado intervenga en la implantación de los procesos de asistencia técnica, facilitación, monitoria durante el proceso, evaluación, licenciamiento de todas las instituciones proveedoras de servicios de salud mental.

A tenor con los señalados cambios que hemos experimentado en los últimos años y siguiendo el compromiso de nuestro Gobierno de proveer mayor acceso a servicios de salud de calidad, tomando como base la necesidad imperiosa que tiene nuestra sociedad de mejorar la salud mental de sus ciudadanos en los albores de un nuevo milenio, y con el fin último de lograr que vivamos en sana convivencia y armonía, esta Ley persigue el firme propósito de consignar la incorporación progresiva del avance tecnológico en el campo de la salud mental y reformar sus servicios de manera tal, que se transformen en unos comprensivos y continuados, de enfoque familiar y comunitario, en atención al entorno cultural y social, que garanticen a los ciudadanos que los reciben, los derechos consagrados en nuestro andamiaje constitucional, así como la ética y la sensibilidad ante la problemática humana.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

## CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES.-

Artículo 1.01.- Título de la Ley.-

Esta Ley se conocerá como "Ley de Salud Mental de Puerto Rico".

Artículo 1.02.- Indice.-

## CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES.-

Artículo 1.01.-Título de la Ley.-
Artículo 1.02.- Indice.-
Artículo 1.03.- Declaración de Propósitos.-
Artículo1.04.- Principios que Regirán El Sistema de Cuidado de SaludMental.-
Artículo 1.05.-Aplicabilidad de la Ley.-
Artículo 1.06.-Definiciones.-

**CAPITULO II- RESPONSABILIDADES GENERALES DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y DISPOSICIONES GENERALES PARA ADULTOS Y MENORES.-**

Artículo 2.01.-Consideraciones Especiales para las Personas con Trastornos Mentales Severos, con o sin Abuso de Sustancias.

Artículo 2.02.-Criterios para Trastornos Emocionales Severos en Niños y Adolescentes.-

Artículo 2.03.-Tratamiento de los Pacientes con Trastornos de Abuso y Dependencia a Sustancias

Artículo 2.04.-Prohibición de Hospitalización sin Criterios Clínicos.-

Artículo 2.05.-Certificado de Adiestramiento Especializado en Aislamiento, Restricción y Terapia Electroconvulsiva.-

Artículo 2.06.-Requisito de Protocolo para el Empleo de Aislamiento, Restricción y Terapia Electroconvulsiva.-

Artículo 2.07.-Manual de Servicios.-

Artículo 2.08.-Notificación sobre Derecho de Confidencialidad.-

Artículo 2.09.-Inspección del Expediente Clínico.-

Artículo 2.10.-Informes.-

Artículo 2.11.-Autorización Expresa; Requisitos.-

Artículo 2.12.-Sistema de Control de Calidad (Quality Assurance System).-

Artículo 2.13.-Oficinas de Orientaciones al Consumidor y Manejo de Querellas.-

Artículo 2.14.-Expediente Clínico.-

Artículo 2.15.-Deber de Guardar la Confidencialidad.-

Artículo 2.16.-Prohibición al que Recibe Información Confidencial de Divulgarla a Terceros.-

Artículo 2.17.-Divulgación al Personal Autorizado del Sistema de Justicia Criminal Juvenil.-

Artículo 2.18.-Prohibición en Cuanto al uso de Tarjetas de Identificación.-

Artículo 2.19.-Deber de Advertir a Terceras Personas en Riesgo o Amenaza de Daño.-

Artículo 2.20.-Deber de Advertir Riesgo Suicida.-

Artículo 2.21.-Portación de Armas Dentro de la Institución.-

Artículo 2.22.-Adopción de Normas y Procedimientos.-

Artículo 2.23.-Reconsideración sobre Determinación de Ingreso, Traslado, Alta o Cambio de Estado.-

Artículo 2.24.-Comité de Revisión.-

Artículo 2.25.- Responsabilidad para con la Familia.-

Artículo 2.26.- Presencia de un Familiar.-

Artículo 2.27.- Deber de Publicar.-

**CAPITULO III - CARTA DE DERECHOS DE ADULTOS QUE RECIBEN SERVICIOS DE SALUD MENTAL.-**

Artículo 3.01.-Declaración de Derechos.-

Artículo 3.02.-Conservación de Derechos Constitucionales.-

Articulo 3.03.-Presunción de Competencia Mental.-

Artículo 3.04.-Limitación de Derechos.-

Artículo 3.05.-Derechos de Carácter General.-

Artículo 3.06.-Derechos Específicos.-

a) Acceso a Servicios.
b) Derecho a no ser Identificado como Paciente de Salud Mental.
c) Notificación de Derechos; Limitaciones.
d) Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación.
e) Consentimiento Informado.
f) Negativa a Recibir Tratamiento.

g) Libertad de Comunicación.
h) Correspondencia.
i) Teléfono.
j) Visitas.
k) Efectos Personales.
l) Dinero y Depósitos.
m) Labor o Trabajo.
n) Quejas y Querellas.
1) Procedimientos Experimentales o Exploratorios.
o) Investigaciones Científicas.
p) Lenguaje.
ñ) Derecho al Apoyo de su Padre, Madre, Tutor y Agencias de Protección o Asistencia a la Persona al Momento de Darle de Alta.
q) Transportación.
p) Derecho al Apoyo Cuando Existe una Responsabilidad Moral.
q) Representación Legal en Ingreso Involuntario.
r) Nivel de Cuidado de Menor Intensidad y Mayor Autonomía.
s) Responsabilidad de las Personas que Reciben Servicios de Salud Mental en Puerto Rico.

**CAPITULO IV – SISTEMA DE CUIDADO DE SALUD MENTAL PARA ADULTOS.-**

Artículo 4.01.-Niveles de Cuidado.-
Artículo 4.02.-Adultos que Requieren Servicios Hospitalarios de Salud Mental.-
Artículo 4.03.-Evaluación Inicial; Adultos Ingresados a Instituciones Proveedoras de Servicios en Salud Mental.-
Artículo 4.04.-Restricción Terapéutica.-
Artículo 4.05.-Aislamiento Terapéutico.-
Artículo 4.06.-Terapia Electroconvulsiva.-
Artículo 4.07.-Ingreso Voluntario.-
Artículo 4.08-Petición De Alta; Cambio De Estado; Vista.-
Artículo 4.09-Renovación De Consentimiento; Revisión de Expedientes.-
Artículo 4.10-Otros Niveles de Cuidado.-
Artículo 4.11.-Tratamiento Compulsorio.-
Artículo 4.12.-Ingreso Involuntario; Hospitalización.-
Artículo 4.13.-Detención Temporera de Veinticuatro (24) Horas.-
Artículo 4.14.-Petición de Ingreso Involuntario por Quince (15) Días.-
Artículo 4.15.-Petición para Orden de Extensión de Ingreso Involuntario.-
Artículo 4.16.-Petición de Alta de Ingreso Involuntario.-
Artículo 4.17.-Cambio de Status.-
Artículo 4.18.-Celebración de Vistas.-
Artículo 4.19.-Derecho a Representación Legal.-
Artículo 4.20.-Traslado.-
Artículo 4.21.-Pases.-
Artículo 4.22.-Altas.-
Artículo 4.23.-Abandono de la Institución sin Autorización; Notificaciones.-

**CAPITULO V- SERVICIOS TRANSICIONALES PARA ADULTOS.-**

Artículo 5.01.-Propósitos de Servicios Transicionales.-

Artículo 5.02.-Servicios Transicionales.-

Artículo 5.03.- Manuales de Servicios.-

Artículo 5.04.-Niveles, Etapas o Servicios.-

Artículo 5.05.-Ingreso Involuntario; Tratamiento Compulsorio.-

**CAPITULO VI – SERVICIOS AMBULATORIOS DE SALUD MENTAL PARA ADULTOS**

Artículo 6.01.-Servicios Ambulatorios de Salud Mental para Adultos.-

Artículo 6.02.-Evaluación inicial Plan de Tratamiento y Recuperación en otro Nivel de Cuidado.-

Artículo 6.03.-Manuales de Servicios.-

**CAPITULO VII- CARTA DE DERECHOS DE LOS MENORES QUE RECIBEN SERVICIOS DE SALUD MENTAL.-**

Artículo 7.01.-Declaración de Derechos.-

Artículo 7.02.-Conservación de los Derechos Constitucionales.-

Artículo 7.03.-Presunción de Competencia.-

Artículo 7.04.-Limitación de Derechos.-

Artículo 7.05.-Derechos de Carácter General.-

Artículo 7.06.-Derechos Específicos.-

a) Acceso a los Servicios.

b) Notificación de Derechos; Limitaciones.

c) Negativa para recibir tratamiento.

d) Plan individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación.

e) Consideraciones Especiales; Menores.

f) Nivel de Cuidado de Menor Intensidad y Mayor Autonomía.

g) Servicios de Hospitalización y Segregación de Cuidado para Niños, y Adolescentes.

h) Consentimiento Informado del Menor o del Padre, Madre con Patria Potestad o Custodia, del Tutor Legal o de la Persona que tenga la Custodia Provisional.

i) Autonomía Condicionada para Aceptar el Tratamiento.

j) Libertad de Comunicación.

(1) Correspondencia.

(2) Teléfono.

(3) Visitas.

k) Efectos Personales.

l) Dinero y Depósitos.

m) Labor o Trabajo.

n) Quejas y Querellas.

ñ) Procedimientos Experimentales o Exploratorios.

o) Investigaciones Científicas.

p) Lenguaje.

q) Derecho al Apoyo de su Padre o Madre, Tutor y Agencias de Protección o Asistencia a la Persona al Momento de Darle de Alta.

r) Transportación.

s) Responsabilidades del Padre o Madre con Patria Potestad, Tutor Legal o Tutor Provisional de un Menor que reciba Servicios de Salud Mental.

t) Derecho a Apoyo cuando Existe una Responsabilidad Moral.

u) Representación Legal en Ingreso Involuntario.

v) Nivel de Cuidado de Menor Intensidad y Mayor Autonomía.
CAPITULO VIII – SISTEMA DE CUIDADO DE SALUD MENTAL PARA MENORES.-
Artículo 8.01.-Niveles de Cuidado.-
Artículo 8.02.-Menores que Requieren Servicios Hospitalarios de SaludMental.-
Artículo 8.03.-Propósitos de Solicitud de Servicios de Salud Mental a Menores.-
Artículo 8.04.-Solicitud de Servicios de Salud Mental para Menores.-
Artículo 8.05.-Cernimiento, Evaluación Comprensiva y Tratamiento.-
Artículo 8.06.-Evaluación Inicial a Menores Ingresados en Instituciones Proveedoras de Servicios de Salud Mental.-
Artículo 8.07.-Certificación de Aceptación de Custodia.-
Artículo 8.08.-Restricción Terapéutica en Menores.-
Artículo 8.09.-Aislamiento Terapéutico.-
Artículo 8.10.-Terapia Electroconvulsiva.-
Artículo 8.11.-Solicitud de Ingreso.-
Artículo 8.12.-Revisión del Estado Clínico.-
Artículo 8.13.-Ingreso en Caso de Emergencia.-
Artículo 8.14.-Solicitud de Ingreso por Agencias Públicas o Privadas.-
Artículo 8.15.-Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación en Otro Nivel de Cuidado.-
Artículo 8.16.-Ingreso Involuntario.-
Artículo 8.17.-Petición de Ingreso por Quince (15) Días.-
Artículo 8.18.-Petición de Extensión de Orden de Ingreso Involuntario.-
Artículo 8.19.-Petición de Alta por Padre, Madre con Patria Potestad o Tutor Legal.-
Artículo 8.20.-Petición de Alta; Cambio de Estado; Vista.-
Artículo 8.21.-Celebración de Vistas.-
Artículo 8.22.-Derecho a Representación Legal.-
Artículo 8.23.-Traslado del Menor.-
Artículo 8.24.-Pases.-
Artículo 8.25.- Altas.-
Artículo 8.26.-Abandono de la Institución; Notificación.-

**CAPITULO IX - SERVICIOS TRANSICIONALES PARA MENORES.-**
Artículo 9.01.-Propósitos de los Servicios Transicionales.-
Artículo 9.02.-Servicios Transicionales.-
Artículo 9.03.-Manuales de Servicios.-
Artículo 9.04.-Niveles, Etapas o Servicios.-
Artículo 9.05.-Ingreso Involuntario; Tratamiento Compulsorio.-

**CAPITULO X – SERVICIO DE SALUD MENTAL DE MAYOR AUTONOMIA PARA MENORES.-**
Artículo 10.01.-Derecho Condicionado para Solicitud de Consejería.-
Artículo 10.02.-Servicios de Mayor Autonomía para Menores.-
Artículo 10.03.-Evaluación Inicial; Plan de Tratamiento y Recuperación en Otro Nivel de Mayor Autonomía.-
Artículo 10.04.- Manuales de Servicios.-

**CAPITULO XI – EVALUACION DE MENORES BAJO LA JURISDICCION DEL TRIBUNAL EN INSTITUCIONES PROVEEDORAS DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL.-**
Artículo 11.01.-Orden de Evaluación a Menores Bajo la Jurisdicción del Tribunal.-

Artículo 11.02.- Ingreso a Institución para Niños o Adolescentes.-
Artículo 11.03.- Petición de Ingreso de Menores Declarados Procesables con Trastorno Emocional.-
Artículo 11.04.- Menor Exonerado de Falta; Orden de Referido a Servicio de Salud Mental.-
Artículo 11.05.-Informes Antes de la Disposición del Caso.-
Artículo 11.06.-Ordenes Finales, Copia al Menor; Revisión.-

**CAPITULO XII – SISTEMA COLABORATIVO.-**

Artículo 12.01.-Manifestaciones del Problema de la Salud Mental.-
Artículo 12.02.-Agencias Responsables del Sistema Colaborativo.-
Artículo 12.03.-Principios del Sistema Colaborativo.-
Artículo 12.04.-Dirección de este Sistema.-
Artículo 12.05.-Plan de Trabajo.-
Artículo 12.06.-Tipos de Colaboraciones.-
Artículo 12.07.-Presentación de Informes.-
Artículo 12.08.-Vigencia.-

**CAPITULO XIII – RESPONSABILIDADES GENERALES DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCION.-**

Artículo 13.01.-Licenciamiento.-
Artículo 13.02.-Reglamentos.-
Artículo 13.03.-Formularios y Querellas.-
Artículo 13.04.-Sistema de Revisión y Asistencia Técnica Anual.-
Artículo 13.05 – Asignación de Fondos

**CAPITULO XIV- DISPOSICIONES ADICIONALES.-**

Artículo 14.01.-Reclamación de Abuso.-
Artículo 14.02.-Abuso; Notificación a Junta Examinadora o Agencias Reguladora.-
Artículo 14.03.-Prohibición de Institucionalización.-
Artículo 14.04.-Hábeas Corpus.-
Artículo 14.05.-Petición al Tribunal.-
Artículo 14.06.-Modificación de Incompetencia.-
Artículo 14.07.-Notificación de Muerte de Personas Dentro de la Institución.-
Artículo 14.08.-Penalidades.-
Artículo 14.09.-Derogación.-
Artículo 14.10.-Separabilidad.-
Artículo 14.11.-Vigencia.-

Artículo 1.03.- Declaración de Propósitos.-

La "Ley de Salud Mental de Puerto Rico" tiene como fines y propósitos fundamentales; actualizar las necesidades de tratamiento, recuperación y rehabilitación; proteger a las poblaciones afectadas por trastornos mentales con unos servicios adecuados a la persona; consignar de manera inequívoca sus derechos a recibir los servicios de salud mental, incluyendo los de los menores de edad; promover la erradicación de los prejuicios y estigmas contra la persona que padece de trastornos mentales; proveer unas guías precisas a los profesionales de la salud mental sobre los derechos de las personas que reciben servicios de salud mental; determinar los procesos necesarios para salvaguardar los derechos que mediante esta Ley se establecen, armonizando con los cambios que han experimentado las instituciones que proveen servicios con el establecimiento de la Reforma de Salud; resaltar y establecer los principios básicos y los niveles de cuidado en los servicios prestados.

Artículo 1.04.- Principios que Regirán el Sistema de Cuidado de Salud Mental.-
Los principios que rigen la interpretación de esta Ley son los siguientes:

(a) El acceso a los servicios; el cual incluye los siguientes componentes:

1) La disponibilidad de los servicios a ofrecerse, los cuales deben ser afines con las necesidades y características de la población a servir, con su edad y etapa de desarrollo, el género, contexto sociocultural, diagnóstico, severidad de los síntomas y signos, el nivel de cuidado que se necesita y la capacidad de funcionamiento actual y prospectiva. La perspectiva del desarrollo integral de las personas, será parte de la disposición de los servicios a ofrecerse.

2) La proporción y localización adecuada de los servicios de salud mental debe ser una de acceso a las comunidades de alta incidencia de trastornos mentales y de salud mental.

3) Los servicios de emergencias y hospitalización los cuales son ofrecidos todos los días, las veinticuatro (24) horas al día. Los demás niveles de cuidado deben ofrecerse dentro de un horario ajustado a las necesidades de la población que atienden.

4) Un sistema de referidos o colaborativo, que permita la participación de las personas con trastornos emocionales y mentales, en el momento correspondiente, a otros servicios gubernamentales y comunitarios, que necesiten para completar su proceso de recuperación.

(b) Sistema de Cuidado Continuado:

El sistema de tratamiento para las personas con trastornos mentales debe ser uno de continuo cuidado, a base de los niveles de intensidad en la atención, supervisión y administración del mismo, y el cual debe corresponder al nivel de severidad de los síntomas, signos y el diagnóstico. Según la persona se vaya recuperando, ésta irá evolucionando por cada nivel de cuidado de mayor autonomía. La persona deberá continuar así en el próximo servicio que corresponda con el proceso de recuperación y evolución de su trastorno. El cuidado continuado contendrá los servicios, desde los niveles de mayor intensidad, los cuales irán ascendiendo en el nivel de autonomía, según concuerde con su diagnóstico, severidad de los síntomas y signos, y el nivel de funcionamiento general que presente y vaya adquiriendo, los cuales estarán representados por los diversos servicios de emergencia, hospitalización, ambulatorio intensivo, ambulatorio de mantenimiento con medicamentos y servicios transicionales. Estos últimos incluirán, los programas residenciales por trastornos, género, edad y etapa de vida, servicios de apresto pre-vocacionales u ocupacionales, hogares intermedios, casas de recuperación y hogares intermedios, entre otros.

(c) Sistema de Cuidado Comprensivo:

El cuidado a brindarse debe ser desarrollado como un sistema, donde se planifique todo el cuidado que necesita la población con trastornos mentales, o en riesgo de tenerlos, incluyendo los servicios que se van a proveer como necesarios en la comunidad y en otras agencias para la persona y su familia. Algunos de los elementos necesarios para el desarrollo de un sistema comprensivo son los siguientes:

1) Identificación e Intervención Temprana: se fundamenta en resolver más efectiva, económica y humanamente el trastorno emocional o mental, cuando está en sus inicios y hay menos deterioro (en los niveles leves o moderados), lo que representa que intervención deberá ocurrir lo más temprano posible en el desarrollo de la enfermedad o el problema.

2) Evaluación: este procedimiento establece una metodología para la determinación clínica y profesional de la naturaleza del problema, el diagnóstico, la severidad de los síntomas y signos, los factores que contribuyen el desarrollo de éste, y la identificación de los recursos personales y familiares que pueden ayudar en la recuperación. Todo lo anterior señalado es importante para desarrollar el plan de tratamiento individualizado.

3) Tratamiento Ambulatorio: es el nivel de cuidado de menor intensidad y de mayor autonomía. Consiste de visitas regulares de la persona y su familia a la facilidad de salud mental, para recibir psicoterapia individual, grupal, familiar o de pareja y farmacoterapia, de estar indicada.

4) Ambulatorios de Mantenimiento con Medicamentos: este servicio ofrecerá evaluación y re-evaluación de una condición o trastorno diagnosticado como crónico, proveyendo farmacoterapia con períodos específicos para la revisión clínica, de acuerdo a los estándares de cuidado que rigen la buena práctica profesional y de la prescripción de medicamentos.

5) Servicios Ambulatorios Intensivos: este nivel de cuidado es uno de menor intensidad, comparado con la hospitalización y hospitalización parcial. En éste, la persona va a tratamiento por lo menos tres (3) días a la semana o doce (12) horas, semanales, poniéndose en práctica el plan individualizado por un equipo inter o multidisciplinario.

6) Hospitalización Parcial: es un programa de tratamiento ambulatorio, estructurado e intensivo, en el cual las personas asisten de cuatro (4) a cinco (5) días a la semana, con aproximadamente quince (15) a dieciocho (18) horas de intervención por un equipo inter o multidisciplinario, quienes pondrán en práctica el plan individualizado de tratamiento.

7) Emergencias: este servicio debe estar accesible fuera de horas laborables, los siete (7) días a la semana. En él se provee evaluación, estabilización de síntomas y signos, hospitalización y si es necesario, el referimiento al tratamiento correspondiente a otro nivel de cuidado.

8) Hospitalización: se refiere a la alternativa de servicio más restrictiva en la que se ofrece tratamiento y rehabilitación mediante el ingreso de la persona a un hospital

9) Servicios Transicionales: éstos son servicios intermedios entre un servicio de mayor intensidad a uno de supervisión y estructura, para preparar a la persona a desenvolverse en su medio ambiente, de acuerdo a su diagnóstico y a la severidad de los síntomas y signos en el momento. Su meta es la recuperación de la persona, para que logre funcionar adecuadamente en la comunidad, por medio de las destrezas que le ayuden a lograr su autonomía. Estos servicios se caracterizan por tener diferentes niveles de supervisión, para que la persona pueda evolucionar según su recuperación. Este sistema debe permitir referir al nivel de cuidado que corresponda a su condición, sin tener que pasar por todos los niveles.

(d) Autonomía de la Persona:

La autonomía de la persona se refiere a la capacidad de decidir por si mismo de acuerdo a su condición, para escoger entre diferentes opciones que le sean planteadas para efectos de los servicios de tratamiento y recuperación a ser ofrecidos. El trato y cuidado debe estar basado en promover las mejores prácticas de autodeterminación y responsabilidad personal, consistente con sus propias necesidades y deseos. Se debe preservar la autonomía hasta donde sea posible y cuando no sea posible, debido a su condición, protegerlo al máximo. Se deben seguir los siguientes principios y guías:

1) Participación: los participantes en el sistema de cuidado se deben involucrar en todo los aspectos de la planificación de su cuidado, tratamiento y apoyo, de acuerdo a su capacidad individual.

2) Consentimiento para Cuidado: los programas de cuidado, tratamiento y apoyo, deben considerar lo que sea más se aproxime a la preferencia de la persona, siempre que sea adecuado a su capacidad y condición.

3) La Alternativa Menos Restrictiva: se le proveerá a los participantes de servicios, el

tratamiento, cuidado y apoyo, de la manera menos invasiva y restrictiva posible, dentro de un ambiente que le ofrezca seguridad y un cuidado efectivo.

4) Respeto por la Diversidad: los usuarios de los servicios, deben recibir el tratamiento y apoyo de una manera en que se respeten sus cualidades, habilidades y su idiosincrasia, tomando en consideración su genero, edad, orientación sexual, grupo étnico, social y trasfondo cultural y religioso.

(e) En el Mejor Interés de la Persona:

El criterio para la imposición de órdenes, ya sea para la evaluación o tratamiento, se basará en el mejor interés de la persona, concepto que variará dependiendo del contexto en el cual se utilice. Para propósitos de esta Ley, se tomará en consideración lo siguiente:

El mejor interés de la persona estará basado en la opinión clínica y en las recomendaciones del grupo de profesionales, ínter o multidisciplinario. Se tomará en consideración la determinación de deseos pasados y presentes de la persona, si la misma está capacitada para ello y promoverá en la persona su participación, en la medida de sus posibilidades o de su capacidad, además de la participación de otras personas, familiares u otras personas significativas, para aclarar el mejor interés de la persona.

(f) Representación y Derecho de Expresión de los Participantes de los Servicios de Salud Mental:

Toda persona acreedora de servicios de salud mental, los padres o el tutor legal, de una persona que recibe servicios de salud mental, tienen el derecho a expresar sus necesidades, satisfacción y recomendaciones sobre los servicios que recibe o se le ofrecen. Tienen el derecho a aportar, recomendar y ser partícipe por sí mismos o mediante representación, en el desarrollo y planificación de las estrategias y servicios que necesita.

(g) Evaluación Compulsoria:

Este principio establece que mediante orden del tribunal, se ordene a la persona con conducta indicativa de trastorno mental, o en riesgo de hacerse daño a sí mismo, a otros o a la propiedad, a someterse a una evaluación comprensiva para determinar su necesidad de tratamiento, ya sea mediante hospitalización involuntaria, o visita compulsoria.

(h) Ingreso Involuntario al Nivel de Cuidado Determinado Según la Necesidad Identificada en la Evaluación:

El ingreso involuntario a un nivel de cuidado de mayor intensidad se utilizará cuando la persona presenta una conducta que esté relacionada a un trastorno mental, o que pueda causarse daño físico a sí, a otros o la propiedad, cuando la severidad de los síntomas y signos así lo indiquen, según las mejores prácticas de la psicología, la psiquiatría y medicina moderna, o haya manifestado amenazas significativas que puedan tener el mismo resultado, luego de la evaluación inmediata y de la evaluación comprensiva, este ingreso involuntario se podrá extender a otro nivel de cuidado de menor intensidad. De no existir voluntad o consentimiento de la persona, padres, tutores legales, para participar en el tratamiento, el tribunal podrá ordenar el tratamiento involuntario, aunque sea en niveles de menor intensidad y mayor autonomía, según sea recomendado por el equipo inter o multidisciplinario.

(i) Principios para la Intervención Temprana de los Trastornos Relacionados al Abuso de Alcohol y Drogas, y de Conducta Antisocial en Menores:

Con el objetivo de evitar que los problemas del uso y abuso de alcohol y drogas, y los problemas relacionados a la conducta antisocial en los jóvenes, se conviertan en problemáticas de mayores proporciones, se deben establecer estrategias de captación ("outreach") para este sector poblacional, cuando el nivel de severidad del problema sea uno de leve a moderado, para iniciar el tratamiento antes de que el curso del desarrollo de la enfermedad tenga un alcance de un nivel de severidad mayor, de modo que permita la intervención temprana antes de que evolucionen a la dependencia a sustancias, violencia, actividad delictiva y conducta antisocial.

(j) Provisiones Para Adultos con Trastornos Mentales Severos:

A los adultos que padezcan de trastornos mentales severos se les proveerá de servicios continuados, congruentes y comprensivos de acuerdo al trastorno, el nivel de severidad y de cuidado por categorías, por medio de colaboraciones entre el sector público y privado, para así desarrollar las siguientes iniciativas entre los proveedores de servicios de salud mental;

1) Fomentar y promover los servicios con enfoque familiar, comunitario y de manejo de casos ("case management");
2) Fomentar y promover el desarrollo de grupos de apoyo para las personas con trastornos mentales, emocionales y sus familias;
3) Promover la participación en la planificación de los servicios de salud mental a los consumidores, sus familiares o representantes;
4) Establecer programas de mantenimiento con medicamentos cuando aplique a su diagnóstico y trastorno de acuerdo a las regulaciones establecidas por los organismos federales y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción;
5) Desarrollar servicios o estrategias colaborativas para participar en actividades de captación ("outreach"), y/o proveer servicios a aquellas personas identificadas con necesidad de tratamiento bajo estas estrategias;
6) Establecer prioridad en el tratamiento para las personas con trastornos con abuso/dependencia a sustancias y con especial atención, a las personas con dependencia a sustancias inyectables (endovenosas);
7) Ofrecer estrategias de intervención de "prevención de recaídas" para los trastornos de abuso y dependencia a sustancias, así como de manejo eficiente de los síntomas y signos, y circunstancias precipitantes de otros trastornos mentales;

(k) Intervenciones Colaborativas Multiestratégicas en Comunidades Vulnerables y de Alta Incidencia:

Las comunidades que experimentan el impacto de la violencia, en forma sostenida y consistente, requieren también de intervenciones terapéuticas sostenidas y de las agencias de gobierno correspondientes, para trabajar con las diversas manifestaciones de la violencia y los factores precipitantes de los trastornos mentales y emocionales. También se requiere de las aseguradoras y proveedores para colaborar en las intervenciones comunitarias con los servicios necesarios, con el objetivo de atender a las personas en dichas comunidades con trastornos emocionales y mentales, ya sea en la intervención temprana o en todo nivel de severidad.

Artículo 1.05. – Aplicabilidad de la Ley.-

Esta Ley será de aplicación a toda persona que necesite, solicite, reciba o haya recibido servicios de salud mental; a toda institución pública o privada que planifique, administre, coordine dichos servicios; y a la red de proveedores directos o indirectos de servicios de salud mental, incluyendo, pero sin que se entienda como una limitación a:

(a) Hospitales psiquiátricos, unidades psiquiátricas, unidades de medicina de conducta y de

desintoxicación a sustancias, hospitales generales;

(b) Servicios transicionales y residenciales, urgencias, parciales o diurnos, ambulatorios intensivos, y ambulatorios con mantenimiento de medicamentos, ambulatorios;

(c) Servicios rehabilitativos;

(d) Servicios de acercamiento comunitario ("outreach") ;

(e) Servicios en diversos ambientes;

(f) Servicios de administración y coordinación de salud mental.

Artículo 1.06. – Definiciones.-

Salvo se disponga lo contrario en esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa:

(a) "Abuso"- significa la acción u omisión del profesional de salud mental, institución pública o privada, o de cualquier otra persona hacia el adulto o menor que recibe servicios de salud mental, durante su proceso de tratamiento, recuperación y rehabilitación. El abuso se puede manifestar como:

(1) Abuso Físico - cualquier acto u omisión que resultare en el daño corporal de la persona, u otras formas de daño como el abuso sexual, inclusive aquellas formas que puedan causar la muerte.

(2) Abuso Emocional - cualquier omisión de acto necesario, exceso de acción, o que sea injusto o indebido, en el cual el adulto o menor, entre otras cosas, sea humillado, insultado, intimidado, amenazado, perseguido o se le haya ignorado su autonomía para recibir o mientras recibe los servicios clínicos.

(b) "Administración"- significa la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción.

(c) "Administrador"- significa el Administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción.

(d) "Adulto"- significa toda persona de dieciocho (18) años de edad o más. Para efectos de esta Ley, los menores que legalmente han sido emancipados se les brindarán los servicios para menores.

(e) "Agente de Seguridad"- significa cualquier policía estatal, municipal u oficial de custodia debidamente identificado.

(f) "Aislamiento"- significa la medida terapéutica constituida por el encierro involuntario de un adulto o menor con trastornos de salud mental, en una habitación, aislado de otros, de la cual está físicamente impedido de salir por un período de tiempo y que requiere de procedimientos y cuidados específicos.

(g) "Alta"- significa la orden de suspensión final o temporera de los servicios ofrecidos por una institución proveedora a cualquier persona, ya sea por razón de Ingreso Voluntario o involuntario.

(h) "Autorización Expresa"- significa el proceso en el cual una persona de forma libre, sin amenaza, intimidación o coacción, autoriza a terceros a recibir u obtener información confidencial de su persona por escrito de acuerdo con el procedimiento establecido en esta Ley.

(i) "Capacidad para Consentir"- significa el estado físico y mental que permite a la persona la toma de decisiones en un momento dado.

(j) "Certificado"- significa el documento expedido por un psiquiatra, médico clínico, psicólogo clínico o personas autorizadas, en el que se describen aspectos del tratamiento de salud mental de la persona sujeta a tratamiento con un propósito específico, tal como una orden del tribunal, una petición

de un abogado o una solicitud de alguna compañía aseguradora.

"Certificación para Ingreso Involuntario o Tratamiento Compulsorio"- significa el documento expedido por el psiquiatra y el equipo terapéutico al tribunal, cuando se solicita el ingreso involuntario de una persona a un servicio de salud mental, ya sea hospitalización u otro nivel de cuidado de mayor autonomía, el cual contendrá la recomendación basada en la necesidad clínica justificada, que por la severidad de los síntomas y signos necesita estos servicios.

(l) "Condición aguda"- significa el cuadro clínico caracterizado por ser uno de rápido inicio y de intensa actividad biológica, psicológica, social y de conducta, que hace necesario que la persona reciba servicios de tratamiento, recuperación y rehabilitación en salud mental. Puede o no tener factores desencadenantes manifiestos o conocidos, los cuales frecuentemente, dan lugar a que una persona se coloque en riesgo de daño, lesión o muerte para ella, para otra persona y la propiedad.

(m) "Confidencialidad"- significa el derecho de una persona que recibe servicios en salud mental, a sostener comunicación oral o escrita sin que la misma sea divulgada a terceros cuando no media su autorización expresa, excepto cuando se disponga lo contrario en esta Ley.

(n) "Consentimiento Informado"- significa la determinación por parte del adulto o su tutor, o el padre, madre o tutor legal del menor, de recibir o rechazar un servicio en salud mental u otro procedimiento, como resultado de un diálogo, en el cual el proveedor de servicios de salud mental informa a la persona sujeta a recibir servicios, el padre o madre con patria potestad, o tutor legal, la naturaleza, necesidad y alcance de éstos en el cuidado de la salud mental.

(ñ) "Custodia"- significa el cuidado y vigilancia sobre una persona. Se establecen los siguientes tipos de custodia:

(1) Custodia Legal- es aquella otorgada por un tribunal, además de la que tienen los padres sobre la persona del menor.

(2) Custodia Provisional – es la otorgada a una persona temporeramente, por una agencia del estado con facultad para ello.

(3) Custodia de Emergencia- es aquella que se ejerce en casos en que una persona represente un riesgo para su seguridad y bienestar, la de otras personas y la propiedad, de no tomarse acción inmediata.

(4) Custodia de Hecho- es la custodia delegada por la persona con patria potestad o tutor legal del menor durante su ausencia, a una persona mayor de veintiún (21) años.

(o) "Director Clínico"- significa el profesional de la salud mental responsable de implantar las mejores prácticas para el tratamiento de la salud mental en los servicios que dirige en una institución proveedora.

(p) "Emergencia Médica"- significa el comienzo súbito o inesperado de una condición de salud física o mental, que requiere atención médica inmediata y que de no proveerse, resultaría en lesión de un órgano, de una parte del cuerpo o que pondría en riesgo de daño o muerte a la persona, a otros o a la propiedad.

(r) "Emergencia Psiquiátrica"- significa el cuadro clínico caracterizado por

una alteración en el pensamiento, en la percepción de la realidad, en los afectos o sentimientos, o en sus acciones o conducta que necesita una intervención terapéutica inmediata, o de urgencia ante la intensidad de los síntomas y signos, y por presentar riesgo de daño a sí mismo, o a la propiedad.

(s) "Enfermedad Mental Severa"– significa los trastornos mentales severos en adultos, según especificado en la Ley Pública 102-321, según enmendada, conocida como "Substance Abuse and Mental Health Services Administration Reorganization Act".

(t) "Enfermedad de Trastorno Mental"- significa la alteración del funcionamiento personal de origen químico, físico, biológico o psico-biosocial, de manifestación aguda o de curso crónico, en que se afectan de un modo significativo la percepción sensorial, el talento o estado fundamental del ánimo, el juicio o capacidad para interpretar objetivamente la realidad, así como la habilidad para enfrentarse satisfactoriamente y con un mínimo de estrés, a las exigencias de la vida cotidiana, tales como la convivencia familiar, el comportamiento social y el trabajo. Los trastornos relacionados al abuso de sustancias controladas o alcohol, por considerarse trastornos mentales, están incluidos en esta definición, según dispuesto en el Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades Vigente en su cuarta y subsiguientes revisiones, por sus siglas en inglés (DSM IV).

(u) "Enfermero(a)"- significa la persona autorizada por la Junta Examinadora de Enfermeras y Enfermeros, para ejercer la profesión de enfermería según dispuesto por la Ley Núm. 9 de 11 de octubre de 1987, según enmendada conocida como "Ley para Reglamentar la Práctica de Enfermería en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

(v) "Equipo Interdisciplinario"- significa el equipo compuesto por tres (3) o más profesionales de la salud mental de diferentes disciplinas, los cuales proveen servicios de salud mental con capacidad, facultad profesional y legal para diagnosticar y prescribir tratamiento en las diferentes áreas del funcionamiento y las capacidades del ser humano, trabajando todos en un mismo escenario. El equipo interdisciplinario se distingue por un trabajo en equipo y en consenso, el cual se caracteriza por una interacción de todos los profesionales con el paciente en tratamiento, una discusión de casos, de conocimiento pleno de las contribuciones de cada profesión o disciplina, y de las mejores prácticas en el campo, para la recuperación de la persona. La composición del equipo y el liderazgo del mismo, variará de acuerdo al escenario o servicio a ser prestado y a las necesidades clínicas de la persona.

(w) "Equipo Multidisciplinario"– significa el grupo de trabajo compuesto por tres (3) o más profesionales de diferentes disciplinas, relacionados en un mismo escenario, los cuales atienden a una misma población, dentro de una misma categoría para el desarrollo del tratamiento, recuperación y rehabilitación, para el mejor funcionamiento de la persona, de acuerdo a su situación y diagnóstico. Este equipo trabaja en consulta, y se puede comunicar por medio del expediente clínico y discusión de casos. Una institución proveedora podrá hacer uso de este equipo, cuando por alguna

razón no pueda desarrollar un equipo interdisciplinario para diagnosticar y prescribir el tratamiento correspondiente.

(x) "Equipo Terapéutico"- significa el conjunto de profesionales de la salud, que incluye especialistas de distintas áreas de la conducta, que se integran en una labor clínica para implantar el plan de tratamiento, recuperación y rehabilitación desarrollado por el equipo de profesionales ínter o multidisciplinario.

(y) "Evaluación" – significa el procedimiento efectuado por un psiquiatra, psicólogo clínico, u otro profesional dentro de las profesiones relacionadas a la salud mental, con facultad para diagnosticar y prescribir tratamiento dentro de su profesión o especialidad, certificado con licencia para ejercer su profesión en Puerto Rico. Dicha evaluación será el producto de un examen clínico directo con instrumentos, de acuerdo al nivel de cuidado y al ambiente correspondiente, al momento de efectuar la misma, el cual contendrá hallazgos del historial, el estado emocional, mental y físico al momento de llevarse a cabo, con impresiones diagnósticas, según aplique a la situación en particular y con recomendaciones específicas sobre el manejo inmediato y pronóstico del paciente.

(z) "Expediente Clínico"- significa la recopilación organizada y detallada de datos e información relacionada al tratamiento médico y de cuidado de salud, que la persona recibe de un profesional o proveedor de servicios de salud.

(aa) "Familiar"- significa el cónyuge o los parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, de una persona que recibe servicios de salud mental, como lo son padres, hijos, abuelos, hermanos,. tíos, nietos y sobrinos.

(bb) "Facultad de Salud Mental"– significa el conjunto de profesionales de salud mental del más alto nivel de cada una de sus especialidades, debidamente certificados por sus respectivas juntas examinadoras y con licencia para ejercer en la jurisdicción de Puerto Rico, quienes ocupan la más alta jerarquía en las instituciones proveedoras de salud mental y supervisan, dan apoyo a otros profesionales que legalmente están autorizados para ejercer sus profesiones.

(cc) "Hospitalización"- significa el nivel de cuidado psiquiátrico de mayor intensidad, caracterizado por una intervención continua y frecuente, con recursos profesionales y tecnológicos las 24 horas, con el objetivo de lograr la pronta estabilización de los síntomas y signos, que por su severidad hace necesaria la misma, para que la persona pueda continuar su recuperación y tratamiento en otro nivel de cuidado de menor intensidad y mayor autonomía, dentro del sistema de cuidado de salud mental.

(dd) "Ingreso Involuntario"- significa el ingreso a un servicio de salud mental, ordenado por el tribunal, luego de la evaluación de un equipo inter o multidisciplinario que certifique la necesidad de este servicio, cuando no medie el consentimiento para ello.

(ee) "Ingreso Voluntario"- significa la determinación hecha por un adulto con capacidad para consentir, para ingresar o ser admitido a una institución proveedora, y recibir un servicio de salud mental, luego de que el proceso

evaluativo así lo determine, o la determinación hecha por el padre o madre con patria potestad, o el tutor legal de un menor para ingresar en una Institución proveedora, siempre que el diagnóstico así lo justifique. En ambos casos esta determinación deberá hacerse luego de haber sido debidamente informado sobre las condiciones, derechos y obligaciones de su decisión.

(ff) "Institucionalización"– significa el estado a que llega un paciente por el uso excesivo e indebido de la hospitalización psiquiátrica, como única opción de tratamiento. Esto conlleva un deterioro mental y hábitos de variable intensidad por desuso, dependencia, y por impedir que la persona adquiera autonomía necesaria para desenvolverse fuera del ambiente restrictivo del hospital. La institucionalización suele darse en los hospitales psiquiátricos, pero puede darse también en cualquier ambiente o nivel de cuidado terapéutico que propicie y fomente la dependencia, y que no estimule la autonomía del paciente.

(gg) "Institución proveedora"- significa cualquier persona jurídica, pública o privada, que se dedique en todo o en parte, a planificar, administrar y proveer servicios de tratamiento, recuperación y rehabilitación de salud mental, y que opere con profesionales autorizados a ejercer como tales, a tenor con las Leyes de Puerto Rico.

(hh) "Manejador de Casos"- significa el profesional de salud mental o ciencias de la conducta con maestría quien estará familiarizado con los síntomas, signos y diagnósticos de los trastornos mentales, con el funcionamiento de un equipo terapéutico ínter o multidisciplinario, y quien conocerá los recursos del sistema para accesar a los servicios comprensivos necesarios para la recuperación y rehabilitación del paciente.

(ii) "Menor de Edad"- significa toda persona menor de dieciocho (18) años. El menor emancipado estará facultado para la toma de decisiones, siempre que esté capacitado para consentir. Para efectos de esta Ley, a un menor emancipado, se le considerará como adolescente, en lo que respecta a los servicios de tratamiento a brindársele.

(jj) "Necesidad Clínica Justificada de Tratamiento" – determinación clínica que surge de la evaluación del paciente según los estándares aceptados por las distintas disciplinas de salud mental como opción clínica de tratamiento por la severidad de los síntomas y signos, para detener el progreso de la enfermedad, mejorar la condición del paciente y mantenerlo a un nivel de funcionamiento socialmente aceptable, según su diagnóstico.

(kk) "Niveles de Cuidado"– significa las diferentes gradaciones de intensidad y frecuencia en el tratamiento médico, psiquiátrico, psicológico, social y rehabilitativo, que lleva a la persona a un nivel de funcionamiento, lo más independiente posible.

(ll) "Oficinas de Orientación y Coordinación de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (OOCA)" – significa el mecanismo de enlace entre los consumidores de los servicios de salud mental, la red de proveedores del sector privado y las entidades gubernamentales, municipales y comunitarias de servicios de cada región de salud y reforma, para lograr el acceso a los servicios comprensivos que requiere la persona

con trastornos emocionales y mentales severos.

(mm) "Oficina de Orientación a Consumidores y Manejo de Querellas"– significa el organismo profesional y educativo que tendrá la responsabilidad legal de proveer y orientar a los consumidores de salud mental, sobre los servicios que ofrecen. De igual forma atenderán y resolverán las quejas y querellas de los consumidores en cuanto al servicio recibido o dejado de recibir.

(nn) "Pases"- significa el permiso por un período de tiempo determinado y fundamentado en razones clínicas, en el cual una persona que recibe servicios de salud mental, queda autorizada a ausentarse de una institución proveedora.

(ñn) "Plan de Egreso" – significa el documento producido por el equipo terapéutico, en el que se resume y se consigna por escrito el cuadro clínico, el resultado del tratamiento, el nivel de recuperación alcanzado por el paciente, y las recomendaciones y arreglos al momento de cambiar de un nivel de cuidado a otro, según sus necesidades. El plan de egreso estará disponible para su uso inmediato, no menos de 24 horas antes de trasladar o dar alta al paciente al nivel de cuidado que corresponda.

(oo) "Peligrosidad"- significa el estado que se determina por la existencia de un riesgo inminente de causar daño, por razón de trastorno mental. A los fines de este inciso, se considerará peligrosidad lo siguiente:

(1) Cuando exista una alta probabilidad de causar daño, agravios físicos o psicológicos a otra persona, según revelan sus actos, intentos o amenazas, conforme a la opinión de un psiquiatra, de un psicólogo con experiencia clínica o de un trabajador social;

(2) Cuando dentro de las veinticuatro (24) horas previas a la evaluación, la persona ha amenazado, intentado suicidarse o ejecutado daños severos a su cuerpo; o ha llevado a cabo actos que ponen en peligro su vida; o ha ejecutado actos que indican que no puede manejar su vida cotidiana sin la supervisión o ayuda de otras personas por no poder alimentarse, protegerse o cuidarse, aumentando así la probabilidad de muerte, daño corporal sustancial, o debilitamiento físico tal, que pondría en peligro su vida;

(3) Cuando la persona lleva a cabo, intenta o amenaza, causar daño o destruir su propiedad o la de otro, por razón de un trastorno mental.

(pp) "Persona que Recibe Servicios de Salud Mental"- significa todo adulto o menor que recibe servicios de salud mental.

(qq) "Personal de Apoyo en Salud Mental"- significa los profesionales de diversas disciplinas y niveles de preparación académica, que están adiestrados para asistir a los profesionales con la capacidad legal para diagnosticar y prescribir tratamiento, los cuales facilitan el funcionamiento y las operaciones necesarias para el sistema de servicios en salud mental. Incluye también a cualquier otro profesional cuya participación resulte necesaria y pertinente para el tratamiento y manejo de la condición de la persona que recibe servicios de salud mental. Todo personal de apoyo debe cumplir con los requisitos de Ley para ejercer su profesión en Puerto Rico.

(rr) "Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación"- significa el diseño e implantación de una serie de estrategias clínicas, dirigidas a sostener fortalezas, y a detener, contrarrestar, limitar o eliminar problemas y dificultades identificadas por los profesionales de salud mental en la persona evaluada, en el momento y nivel de cuidado en que esté.

(ss) "Profesional de Salud Mental"- significa los profesionales de diversas disciplinas y niveles de preparación académica, relacionados a la salud mental, que proveen servicios y que

cumplen con las Leyes de Puerto Rico para ejercer su profesión.

(tt) "Proveedor Indirecto de Servicios de Salud"- significa todo asegurador u organización de servicios de salud pública o privada, debidamente autorizada en Puerto Rico a ofrecer, o que se obligue proveer servicios de salud según dispuesto en la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como Código de Seguros de Puerto Rico, así como planes organizados y autorizados por alguna ley especial.

(uu) "Psicólogo"- significa el profesional licenciado por la Junta Examinadora de Psicólogos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según definido en la Ley Núm. 96 de 4 de junio de 1983, según enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Profesión de la Psicología en Puerto Rico".

(vv) "Psiquiatra"- significa el doctor en medicina especializado en psiquiatría general, de niños o adolescentes, o en otras especialidades reconocidas y debidamente certificadas, que estará autorizado a ejercer como médico en Puerto Rico y con autoridad para practicar la especialidad o sub-especialidad, según haya sido certificado por el Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico.

(ww) "Queja"- significa la manifestación verbal, de conducta u otro medio de expresión, en la cual una persona indica su descontento o disgusto por el trato o servicio recibido o dejado de recibir por la persona en su interrelación con una institución proveedora de servicios directos o indirectos, dedicada al cuidado de la salud mental.

(xx) "Querella"- significa la manifestación en forma escrita, en la cual se expresa el descontento con el trato o servicio recibido o dejado de recibir por la persona en su interrelación con una institución proveedora de servicios directos e indirectos, dedicada al cuidado de la salud mental.

(yy) "Referido"- significa el documento expedido por cualquier profesional de salud autorizado para ejercer su profesión, según las Leyes del Gobierno de Puerto Rico, en el cual se hace constar la necesidad de que una persona sea evaluada con el propósito de determinar si necesita o no recibir servicios de salud mental.

(zz) "Rehabilitación"- significa la restauración o compensación de destrezas o capacidades a un nivel de funcionamiento satisfactorio, de acuerdo a su condición, diagnóstico y pronóstico en las destrezas esenciales para la vida autónoma y satisfacción afectiva, intelectual, laboral o académica que le permiten funcionar en todos los ámbitos antes mencionados.

(aaa) "Recuperación"- significa la remisión de síntomas, signos y resolución de situaciones para cada nivel de cuidado correspondiente a su severidad y nivel de funcionamiento que va adquiriendo el paciente, según va mejorando su estado y va adquiriendo conocimientos y autonomía con relación al manejo de su condición, a la prevención de recaídas y al manejo efectivo de las mismas. Entre la resolución de situaciones más inminente, se encuentra la aceptación de la condición y su tratamiento, al igual que límites, alternativas, factores precipitantes y factores de resistencia, entre otros.

(bbb) "Restricción"- significa la medida terapéutica que hace uso de medios físicos o mecánicos, para limitar involuntariamente el movimiento de todo o parte del cuerpo, con el fin de controlar la actividad física y proteger a la persona sujeta a la restricción, evitando que se cause daño a sí mismo, a otros o a la propiedad. El uso de medios para proteger a la persona, tales como barandas, cascos y/o mecanismos, tales como el equipo ortopédico, abrazaderas, sillas de ruedas y otros equipos o artefactos para dar soporte a la postura de la persona, o asistirlo en obtener y mantener el funcionamiento de su cuerpo, no serán considerados como una restricción.

(ccc) "Trabajador Social"- significa el profesional con grado de maestría en trabajo social de una institución acreditada y evidencia de colegiación, con licencia expedida por la Junta

Examinadora de Trabajadores Sociales, según definido en la Ley Núm. 171 de 11 de mayo de 1940, según enmendada.

(ddd) "Severidad" - significa la intensidad de los síntomas y signos que resultan en un marcado impedimento en el funcionamiento social, laboral y ocupacional, en el momento que se diagnostica.

(eee) "Servicios con Bases Comunitarias"- significa aquellos servicios de tratamiento que se prestan a la persona dentro de su misma comunidad, con el propósito de que se mantenga integrado a ésta y pueda mantener un funcionamiento con el apoyo de su grupo comunitario.

(fff) "Sistema Colaborativo"– significa el sistema interagencial y comunitario de colaboración y de trabajo conjunto. Dicho sistema se caracteriza por la identificación de un problema común, a una población común, que por medio de una planificación de servicios integrada, se le provee servicios comprensivos, lo que conlleva una designación de recursos económicos, profesionales y tecnológicos que respondan a las necesidades de esa población. Estas agencias tienen la responsabilidad legal de atender diferentes manifestaciones del problema y los factores precipitantes al mismo.

(ggg) "Sistema de Control de Calidad (Quality Assurance)"- significa la recopilación sistemática de datos e indicadores de eficiencia de la ejecución e implantación de servicios y procedimientos de tratamiento de salud mental en cada nivel de cuidado, según los protocolos por trastorno, edad, género y severidad. Este sistema forma parte de las normas y procedimientos habituales de la institución proveedora de servicios de salud mental, como un mecanismo que permite a la facultad asegurar la calidad de los mismos.

(hhh) "Solicitud de Servicios de Salud Mental"- significa la acción para solicitar servicios de salud mental, que conlleven tratamiento, recuperación y rehabilitación en una institución proveedora.

(iii) "Trastorno o Disturbio Emocional"- significa el diagnóstico de algún trastorno mental del Manual Estadístico de Trastornos Mentales, por sus siglas en inglés (DSM IV), incluyendo la etiología biológica, a excepción de los Códigos V. Todos estos desórdenes tienen rasgos episódicos, recurrentes o persistentes, sin embargo varían en términos de severidad y nivel de incapacidad y deben estar presentes en el momento o durante el último año. Se le aplica a los niños de entre las edades de cero a diecisiete (0-17), en donde la niñez se demarca, de cero a doce (0- 12) años y la adolescencia desde los trece (13) a los dieciocho (18) años.

(jjj) "Transportación"- significa la acción de trasladar de un lugar a otro a una persona, en un vehículo adecuado a su condición y que en esos casos de emergencias psiquiátricas, incluirá una ambulancia que deberá estar certificada por la Comisión de Servicio Público y el Departamento de Salud.

(kkk) "Traslado"- significa la acción mediante la cual una institución efectúa un cambio en la responsabilidad del cuidado de la persona dentro de la misma institución, de una unidad a otra, de un servicio a otro, o de un terapeuta a otro. También se considera traslado el cambio en la responsabilidad del cuidado cuando el traslado se hace de una institución de salud a otra institución. El traslado debe efectuarse de forma coordinada afín de continuar el cuidado y tratamiento, de acuerdo al nivel que requiere la condición de la persona.

(lll) "Tratamiento Agudo"- significa la pronta e intensa intervención por los profesionales de la salud mental para atender a la persona con condición clínica aguda, afín de evitar, detener o aminorar los síntomas y signos de la condición o sus consecuencias. Entre otros, incluye la intervención en crisis, el uso de psicofármacos, la hospitalización, la restricción y el aislamiento.

(mmm) "Tratamiento Compulsorio"– significa el tratamiento ordenado por el tribunal, so pena de desacato, por recomendación del equipo terapéutico ínter o multidisciplinario, para

aquellas personas con trastornos mentales que aunque no llenan los requisitos de severidad para hospitalización, representan un peligro para sí mismo para otros o la propiedad y llenan los requisitos para otro nivel de cuidado, tal como el tratamiento ambulatorio, hospitalización parcial o mantenimiento con medicamento.

(nnn) "Tratamiento Complementario" – significa los servicios terapéuticos, no incluidos en los servicios básicos del sistema de cuidado de servicios de salud mental, y que puedan ayudar en el proceso de recuperación de una persona con trastorno mental, según recomendados por profesionales de la salud mental, tales como arte, deportes y otros.

(ñññ) "Tutor legal"– significa la persona nombrada por el tribunal para hacerse cargo del cuidado y custodia de una persona y sus bienes, luego de la correspondiente declaración de incapacidad emitida por el tribunal.

## CAPITULO II.- RESPONSABILIDADES GENERALES DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y DISPOSICIONES GENERALES PARA ADULTOS Y MENORES.-

Artículo 2.01.- Consideraciones Especiales para las Personas con Trastornos Mentales Severos, con o sin Abuso de Sustancias.-

Las poblaciones con trastornos mentales severos, por el nivel de intensidad y las múltiples necesidades de su condición, requieren de una atención particular y especial en cuanto a los sistemas de cuidado de salud mental, para que puedan tomar la decisión de participar y mantenerse en tratamiento, al igual que para lograr y conservar la estabilización de síntomas y signos.

Las consideraciones para las personas con trastornos mentales severos, con o sin abuso a sustancias; adultos, adolescentes, niños, por genero, según las definiciones establecidas en los manuales de las clasificaciones de enfermedades mentales vigentes, y las regulaciones y criterios estructurales federales para los servicios a estas poblaciones, se consignan en este capítulo, a tenor con las disposiciones de la Ley Pública Núm. 102-321 del 10 de julio de 1992, según enmendada, conocida como "Drug Abuse and Mental Health Services Administration Re-Organization Act".

Artículo 2.02.- Criterios para Trastornos Emocionales Severos en Niños y Adolescentes.-

Los criterios que se considerarán para trastornos emocionales severos en niños y adolescentes serán los siguientes:

(a) Que sea menor de 18 años de edad;

(b) Que al momento presente o durante el pasado año, se le haya diagnosticado un trastorno mental, emocional o conductual;

(c) Que cumpla con los criterios especificados para un diagnóstico, a tenor con el Manual Estadístico de Trastornos Mentales (DSM IV), el ICD-10 o los manuales vigentes al momento;

(d) Que dicho trastorno haya resultado en un impedimento funcional que interfiera o limite el funcionamiento del niño o menor en la familia, escuela o la comunidad;

Artículo 2.03.-Tratamientos de los Pacientes con Trastornos de Abuso y Dependencias a Sustancias.

El tratamiento de los Trastornos Relacionados a las Sustancias requiere su psiquiatra de adicción en consulta con un equipo interdisciplinario con credenciales en el campo de las adicciones. En los casos que no hay disponible un psiquiatra de adicción se llevara el tratamiento por un psiquiatra con experiencia en el tratamiento de las adicciones, en consulta con un psiquiatra de adicciones y un equipo interdisciplinario con credenciales en las adicciones.

Dicho tratamiento puede incluir, sin limitarse a lo siguiente:

1. Pareo adecuado entre el nivel de tratamiento y las necesidades individuales del paciente.

2. Debe estar accesible de forma inmediata, con integración y continuidad entre los distintos niveles de tratamiento.
3. Debe atender las múltiples necesidades del paciente y no solo su uso de drogas.
4. Debe ser flexible, basado en evaluaciones continuas de las necesidades del paciente que pueden cambiar durante el curso del tratamiento.
5. El tratamiento integrado en uno o más niveles. Debe tener una duración no menor a 6 meses de tratamiento, luego un seguimiento y finalmente un mantenimiento indefinido. Se debe evitar el abandono prematuro del tratamiento.(Un de tres meses muy pocas veces es efectivo a largo plazo).
6. Se deben combinar múltiples tipos de terapia, como cognitiva, conductista y prevencion de recaídas, farmacoterapia, etc. en la mayoría de los pacientes.
7. El tratamiento debe tener fundamentos científicos y evaluar periódicamente la efectividad del mismo. No debe limitarse el uso adecuado de medicamentos que sean recetados por el psiquiatra.
8. En los casos de dos o más diagnósticos psiquiátricos deben tratarse todas las condiciones concurrentemente.
9. La desintoxicación es solo la primera etapa en el tratamiento de la enfermedad y debe ser seguida por un tratamiento intensivo que evite la recaídas.
10. Las salas de Tribunales especializadas en atender pacientes con problemas legales asociados a trastornos de Abuso y Dependencia a Sustancias, ayudarán a que el paciente cumpla con su tratamiento por el tiempo clínicamente necesaria para su rehabilitación.
11. Debe monitorearse el use de drogas continuamente y en forma periódica, incluyendo el alcohol y otras sustancias, de acuerdo al historial clínico del paciente.
12. Debe evaluarse y tratarse enfermedades asociadas como VIH, hepatitis, tuberculosis y otras. Debe orientarse a los pacientes para prevenir el contagio o deterioro de las mismas.
13. Debe separarse los grupos de pacientes con trastornos relacionados a sustancias de otros pacientes que solo tienen otros trastornos psiquiátricos. También debe separarse los grupos por edades, unos para adultos y otros para adolescentes.
14. Debe haber disponible en un pueblo cerca del paciente el tratamiento de desintoxicación y de mantenimiento con agonistas de opiáceos para los pacientes que así lo requieran de acuerdo al mejor criterio clínico del psiquiatra de adicción.
15. En casos de niños y adolescentes con trastornos relacionados a las sustancias serán evaluados y tratados por un psiquiatra de niños en consulta con un psiquiatra de adicción y un equipo interdisciplinario.

Artículo 2.04.-Prohibición de Hospitalización sin Criterios Clínicos.-

La falta de interés o incapacidad del padre o madre con patria potestad o custodia, del tutor legal o de la persona que tenga la custodia o el deber de proveerle cuido y albergue a una persona, no será base para ingresarle en una institución hospitalaria de salud mental sin reunir los criterios de hospitalización. De ser éste el caso, el director de la institución, hará una petición al tribunal para asegurar el albergue y cuidado correspondiente. La práctica de hospitalizar a una persona sin reunir los criterios clínicos adecuados será penalizada, según se consiga en esta Ley.

Artículo 2.05.- Certificado de Adiestramiento Especializado en Aislamiento, Restricción y Terapia Electroconvulsiva .-

Todo profesional de la salud mental facultado para ordenar una restricción, aislamiento o terapia electroconvulsiva, deberá completar un adiestramiento sobre el uso y aplicación de esta modalidad

terapéutica, acreditado por el certificado correspondiente. Lo dispuesto en este artículo estará sujeto al reglamento que para estos efectos promulgue la Administración.

Artículo 2.06.- Requisito de Protocolo para el Empleo de Aislamiento, Restricción y Terapia Electroconvulsiva.-

Toda entidad proveedora de servicios de salud mental que emplee como procedimientos terapéuticos la restricción, el aislamiento o la terapia electroconvulsiva, tendrá un protocolo en el que incorporará las mejores prácticas y estándares en el tratamiento, para personas con trastornos mentales o emocionales, según los parámetros establecidos por los organismos reguladores de estos procedimientos terapéuticos, a tenor con lo que determine la Administración.

Artículo 2.07- Manual de Servicios.-

Toda institución proveedora de servicios de salud ambulatorio, contará con un manual descriptivo de servicios, en el cual se consignará como mínimo, lo siguiente:

(a) Los criterios de admisión que deben reunir los menores que soliciten los servicios;

(b) La edad y el nivel de cuidado de los solicitantes;

(c) El modelo del plan individualizado de tratamiento;

(d) El modelo de personal que tendrá la institución, así como las cualificaciones del mismo, disponiéndose que este artículo no será de aplicación en el caso de oficinas de profesionales de salud mental en la práctica privada.

Artículo 2.08.- Notificación Sobre Derecho de Confidencialidad.-

Siempre que la persona que reciba servicios de salud mental pueda comunicarse racionalmente, el proveedor de servicios de salud mental le notificará por escrito y verbalmente, al momento de la evaluación inicial o lo antes posible luego de la misma, sobre el derecho que posee de confidencialidad. Se le informará además, que cualquier violación a las disposiciones que protegen la confidencialidad es un delito, a tenor con las disposiciones del inciso (b) del _Artículo 14.08 de esta Ley, y se le proveerá por escrito el procedimiento a seguir para informar en caso de cualquier violación. La notificación requerida en este Artículo será hecha al padre o madre con patria potestad o custodia o a su tutor legal, en todos los casos en que los servicios de salud mental sean provistos a un menor o incapacitado.

El profesional en salud mental designado por reglamento institucional para llevar a cabo la notificación dispuesta en este artículo, consignará en el expediente clínico el contenido de dicha notificación, así como la fecha y hora en la cual se proveyó la misma, en un formulario provisto por la Administración, el cual deberá ser firmado por la persona recipiente de dicha notificación, con el fin de que ésta se entienda completada.

Artículo 2.09.- Inspección del Expediente Clínico.-

Las personas que reciban servicios de salud mental, podrán inspeccionar sus expedientes clínicos, siempre que el equipo inter o mutidisciplinario dentro de la institución, determine que la persona que los recibe se encuentra mentalmente capacitada para interpretar razonablemente la información, disponiéndose que no se proveerá aquella información que constituya riesgo para terceros. Podrá tener además, copia de la totalidad de su expediente, mediante petición escrita para ello y el pago de los derechos correspondientes. La institución proveedora asignará un profesional de salud mental para explicar cualquier asunto relacionado con la información contenida en el expediente clínico.

Cualquier otra persona expresamente autorizada por la persona que recibe servicios de salud mental, por el tribunal, o por el tutor legal de la misma, podrá inspeccionar el expediente clínico dentro de la institución, obtener un resumen del expediente y copia de aquel documento expresamente autorizado a ello, mediando el pago de los derechos correspondientes, siempre que la reproducción de documentos no constituya la totalidad del expediente.

El menor entre las edades de catorce (14) a diecisiete (17) años podrá, por sí y en consulta con el profesional de salud mental, autorizar a su padre, madre o tutor legal a la inspección de su expediente

clínico, con relación al diagnóstico, severidad, pronóstico y plan de tratamiento, así como recomendaciones para el menor y la familia. En el caso de que el menor no autorice dicha inspección, se requerirá una orden del tribunal autorizando la inspección. Si el menor tiene menos de catorce (14) años, se requerirá una orden del tribunal autorizando la inspección del expediente clínico, aplicando lo anterior. No obstante, el padre o madre con patria potestad o custodia, o el tutor legal del menor que recibe servicios de salud mental, tendrá derecho a examinar, dentro de la institución, el expediente de dicho menor exclusivamente en lo relacionado al diagnóstico, severidad, pronóstico, plan de tratamiento, medicamentos, recomendaciones a la familia y, la cantidad y tipos de terapias ofrecidas. Así también podrá obtener copia o un resumen de ello, mediando una solicitud escrita a tales efectos y el pago correspondiente de derechos.

Cuando la persona que recibió servicios de salud mental haya fallecido, cualquier petición presentada por un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad para inspeccionar u obtener copia de parte o de la totalidad del expediente requerirá una orden del tribunal.

En todos los casos y previo a toda inspección o copia del expediente, la Institución proveedora ofrecerá una orientación sobre las consecuencias posibles de la divulgación de la información contenida en el expediente.

El pago correspondiente por concepto de copias de parte o totalidad del expediente, no excederá del cien por ciento (100%) del costo real del original. Para aquellos casos en los cuales la persona no tenga los medios económicos para sufragar el costo de las copias, el procedimiento a seguir se establecerá mediante reglamento.

Artículo 2.10.- Informes.-

Todo informe que no constituya un expediente clínico y que contenga información directa o indirecta sobre una persona que recibe o haya recibido servicios de salud mental, utilizará codificaciones para referirse a la persona y no incluirá, ni en todo ni en parte, nombre o apodo alguno. Este artículo no impide la divulgación de la información en los casos que apliquen Leyes federales y estatales que provean protección a las personas que reciben servicios de salud mental.

Artículo 2.11.- Autorización Expresa; Requisitos.-

La autorización expresa requerida para efectos de esta Ley, deberá reunir los siguientes requisitos:

(a) el nombre específico de la institución proveedora autorizada para divulgar la información;
(b) el nombre de la persona natural o jurídica autorizada para recibir la información;
(c) el nombre de la persona que consciente a la divulgación. Cuando no sea la persona que recibe servicios de salud mental, deberá acompañarle una declaración en la que se establezca de donde emana la facultad de consentir;
(d) la información específica a divulgarse;
(e) el propósito para el cual se va a utilizar la información solicitada; y
(f) la firma y fecha en la cual se presta el consentimiento.
(g) no se incluirán datos psicosociales, familiares o contenido específico del diálogo de las sesiones.

La autorización expresa deberá constar en un documento escrito, el cual caducará seis (6) meses después de la firma y fecha en la cual se prestó, sin menoscabo al derecho del autorizante a revocarla en cualquier momento.

Artículo 2.12.- Sistema de Control de Calidad (Quality Assurance System).-

Toda institución proveedora de servicios del sistema de cuidado de salud mental, tendrá un sistema de control de calidad de los servicios prestados, el cual recogerá y vigilará por mantener la calidad de los mismos y el uso adecuado de los procedimientos administrados a los pacientes, según las mejores prácticas en el campo de la salud mental. Este sistema vigilará, estudiará y mantendrá informado al Director Clínico de las instituciones, sobre todo en lo relacionado al servicio y las prácticas que se implantan en el mismo.

La Administración especificará mediante reglamento el alcance de estos sistemas de calidad, compatibles con las regulaciones federales para estas poblaciones.

Será responsabilidad de los proveedores de servicios de salud mental mantener un acopio de datos estadísticos básicos que provea indicadores de la incidencia de trastornos mentales y de abuso de sustancias, según las características de la población. Dichos datos estadísticos serán informados a la Administración.

Artículo 2.13.- Oficinas de Orientaciones al Consumidor y Manejo de Querellas.-

Todos los proveedores de servicios de salud mental, mantendrán oficinas de orientación a los consumidores de sus servicios. Las mismas estarán ubicadas en lugares céntricos en el área de mayor concurrencia de la región de reforma de salud. Estas oficinas atenderán querellas de los consumidores sobre los servicios que reciben. El manejo de querellas se hará hasta lograr satisfacer la necesidad de servicio del consumidor.

Artículo 2.14.- Expediente Clínico.-

Toda institución proveedora mantendrá y conservará un expediente preciso, claro y legible de cada persona que reciba servicios de salud mental. Este expediente contendrá los requisitos establecidos por las Leyes y reglamentos aprobados por el Secretario de Salud, además de la siguiente información:

(a) Las circunstancias bajo las cuales la persona fue evaluada o ingresada, según el caso:
(b) La documentación para su ingreso,
(c) Los hallazgos clínicos de un profesional calificado que provea servicios de salud mental,
(d) El diagnóstico o impresión diagnóstica.
(e) El Plan Individualizado de Tratamiento.
(f) Pronóstico.
(g) Cualquier cambio que surja en su estado.

El expediente clínico será propiedad de la institución proveedora y no será removido de la misma salvo por orden del tribunal. El Director de la institución velará por la confidencialidad del mismo. A tales efectos, la institución proveerá los recursos necesarios para establecer los mecanismos que protejan la confidencialidad, divulgación y la información clínica contenida en el expediente contra uso indebido, acceso no autorizado y alteración del mismo.

En el caso de que el paciente necesite su expediente por razones de mudanza a otro lugar del mundo, o decida cambiar otro servicio de prestación de salud. La institución deberá facilitar al nuevo servidor de servicios, dichos expedientes, una vez el paciente lo haya autorizado por escrito.

Artículo 2.15.- Deber de Guardar la Confidencialidad.-

Se prohibe la divulgación no autorizada de información relacionada a una persona que recibe servicios de salud mental, incluyendo a terceros que hayan recibido esta información, sea verbal o escrita, mediando autorización expresa, conste o no dicha información en el expediente.

Se prohibe también el envío de cualquier parte del expediente clínico o información de la persona en tratamiento, por medio del facsímil, por que este medio no garantiza la confidencialidad. Se prohibe además que se divulgue información sobre la persona con trastorno mental que haya sido informada por un tercero y ponga en riesgo de vida de alguien o pueda causar daño corporal a terceros.

El deber de guardar la confidencialidad de la información relacionada a una persona que reciba servicios de salud mental en cualquier institución proveedora, será de aplicación a todos los profesionales que provean dichos servicios y al personal de apoyo. Este deber se extenderá a toda persona que esté o haya recibido servicios de salud mental, aún después de su muerte.

Toda la información confidencial divulgada bajo los términos de esta Ley, estará acompañada por una aseveración que indique que la información divulgada está protegida por las disposiciones y reglamentos de confidencialidad aplicables, y que la misma prohibe que el que recibe la información la divulgue a terceros.

Artículo 2.16.- Prohibición al que Recibe Información Confidencial de Divulgarla a Terceros.-

Toda información confidencial divulgada bajo los términos de esta Ley, estará acompañada por una aseveración que indique que la información divulgada está protegida por las disposiciones y por los reglamentos de confidencialidad aplicables, y que las mismas prohiben que la persona que recibe la información lo divulgue a terceros.

Artículo 2.17.- Divulgación a Personal Autorizado del Sistema de Justicia Criminal y Juvenil.-

Cuando la persona reciba servicios de tratamiento de salud mental como condición establecida por el Tribunal para su probatoria, libertad condicional, u otros, la institución proveedora podrá divulgar al personal autorizado del Sistema de Justicia Criminal o Juvenil, según sea el caso, únicamente aquella información necesaria para efectuar la supervisión requerida para el cumplimiento de la condición pautada por el Tribunal. La persona que recibe la información sólo podrá divulgar la misma para cumplir con sus derechos oficiales con relación a la condición impuesta por el Tribunal.

Artículo 2.18.- Prohibición en Cuanto al Uso de Tarjetas de Identificación.-

Ningún proveedor de servicios de salud mental podrá requerir a quien reciba servicios dichos servicios, que lleve una tarjeta de identificación o cualquier otro objeto sobre su persona que lo identifique como persona que recibe servicios de salud mental, mientras esté fuera de la Institución proveedora de dichos servicios. Esta prohibición no tendrá efecto mientras la persona se encuentre en los predios de la institución proveedora.

Artículo 2.19.- Deber de Advertir a Terceras Personas en Riesgo o Amenaza de Daño.-

Cuando una persona le comunique a un psiquiatra, psicólogo o trabajador social, una amenaza de violencia física contra tercero, el psiquiatra, psicólogo o trabajador social tendrá el deber de advertir a ese tercero sobre la posibilidad de amenaza, cuando éste pueda ser razonablemente identificado, y luego de cumplir con lo dispuesto en este artículo.

En caso de que la amenaza de daño a tercero sea comunicada a otro profesional de salud mental, éste lo comunicará de inmediato al psiquiatra, psicólogo o trabajador social a cargo de prestar los servicios de salud mental a la persona y así lo hará constar de manera detallada en el expediente clínico.

Para que surja el deber de advertir, tanto el psiquiatra, el psicólogo o el trabajador social, deberá:

a) Haber identificado, evaluado y corroborado la existencia de una amenaza de daño a una tercera persona en particular, y
b) Establecer que al tomar en consideración los factores de riesgos asociados a la violencia, con gran probabilidad esa amenaza podría llevarse a cabo.

Una vez comunicada la amenaza, el psiquiatra, psicólogo o trabajador social deberá advertir a la persona amenazada, y deberá realizar los siguientes actos:

a) Siempre que sea indicado terapéuticamente, informará a la persona que profiere la amenaza el deber de advertir que le impone esta Ley;
b) Comunicará la amenaza de daño al cuartel de la policía más cercano a la residencia de la tercera persona sujeta a la amenaza;
c) Notificará la amenaza de daño a tercero, manejando con tacto y cautelosamente esta situación; o
d) Si tiene base razonable para creer que la tercera persona carece de la capacidad para entender o es menor de edad, comunicará sobre la existencia de la amenaza a un familiar de ésta.

En aquellas situaciones en las que el profesional entienda que la persona que profiere la amenaza reúne los criterios para ser hospitalizado, iniciará los procedimientos para su hospitalización voluntaria o involuntaria.

En caso de que la amenaza sea comunicada mientras la persona se encuentre hospitalizada, el psiquiatra, psicólogo o trabajador social informará al Director Clínico y así lo hará constar de manera detallada en el expediente clínico.

Cuando un psiquiatra, psicólogo o trabajador social determine que una situación en particular requiere que se ejerza el deber de advertir, quedará exento de responsabilidad civil siempre que no exista negligencia crasa en el cumplimiento de su deber. De igual manera, estos profesionales de salud mental que de buena fe ejerzan su deber de advertir, no incurrirán en violación del privilegio médico-paciente, según establece la Regla 26 de las Reglas de Evidencia de 1979, según enmendadas.

Artículo 2.20.- Deber de Advertir Riesgo Suicida.-

Cuando una persona le comunique a un psiquiatra, psicólogo o trabajador social sobre su intención de cometer suicidio, el psiquiatra, psicólogo o trabajador social, tendrá el deber de advertir a un familiar sobre la posibilidad de que se intente la ejecución del acto suicida.

En caso de que la intención de cometer suicidio sea comunicada a otro profesional de salud mental, éste lo comunicará de inmediato al psiquiatra, psicólogo o trabajador social a cargo de prestar los servicios de salud mental a la persona, y así lo hará constar de manera detallada en el expediente clínico.

Para que surja el deber de advertir, el psiquiatra, psicólogo o trabajador social, deberá:

a) Haber identificado y evaluado la existencia de la intención de cometer suicidio, y
b) Señalar que al tomar en consideración los factores de riesgo asociados al suicidio, existe gran probabilidad de que el intento podría llevarse a cabo.

Una vez comunicada la intención de cometer suicidio, el psiquiatra, psicólogo o trabajador social, tendrá el deber de advertir y éste ejecutará los siguientes actos:

a) Siempre que sea indicado terapéuticamente, le informará a la persona que profiere la intención de cometer suicidio, el deber de advertir que impone esta Ley; y
b) Le notificará la amenaza a un familiar, manejando con tacto y cautelosamente esta situación.

En aquellas situaciones en las que el profesional entienda que la persona que profiere la intención de cometer suicidio reúne los criterios para ser hospitalizado, iniciará los procedimientos para su hospitalización voluntaria o involuntaria.

En caso de que la intención de cometer suicidio sea comunicada mientras la persona se encuentre hospitalizada, el psiquiatra, psicólogo o trabajador social informará al Director Clínico y así lo hará constar, de manera detallada, en el expediente clínico.

Cuando un psiquiatra, psicólogo o trabajador social determine que una situación en particular requiere que se ejerza el deber de advertir, quedará exento de responsabilidad civil siempre que no exista negligencia crasa en el cumplimiento de su deber. De igual forma, estos profesionales de salud mental que de buena fe ejerzan su deber de advertir, no incurrirán en violación del privilegio médico-paciente, según establece la Regla 26 de las Reglas de Evidencia de 1979, según enmendadas.

Artículo 2.21. – Portación de Armas Dentro de la Institución.-

Se prohibe la portación de armas dentro de cualquier institución de salud mental. Esta prohibición excluye a los agentes de la policía estatal y agentes de seguridad armados en condiciones extraordinarias de seguridad pública.

Artículo 2.22. – Adopción de Normas y Procedimientos.-

El director de cada institución proveedora adoptará aquellas normas, reglamentos y procedimientos que sean necesarios dentro de su institución, para garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones de esta Ley y las cuales podrán ampliar o expandir pero no restringir o limitar los derechos garantizados a la persona que recibe servicios de salud mental.

Todas las normas y procedimientos relacionadas con la implantación de esta Ley deberán ser revisadas anualmente. Dicho proceso será documentado y formará parte de los requisitos de licenciamiento de toda Institución proveedora.

Artículo 2.23.- Reconsideración sobre Determinación de Ingreso, Traslado, Alta o Cambio de Estado.-

Toda institución proveedora desarrollará e implantará un procedimiento para la reconsideración y revisión de todas las decisiones clínicas.

Cuando a una persona se le deniegue el ingreso, admisión, o sea notificado de que va a ser trasladada, dada de alta, o que su estado habrá de cambiar y se oponga a ello, el director de la institución le indicará el procedimiento a seguir. Este procedimiento será el siguiente:

(a) Una vez notificada la persona o en el caso de un menor, su padre, madre con patria potestad o custodia o el tutor legal, de la determinación, ésta tendrá derecho
a solicitar al Director o su representante, dentro de las veinticuatro (24) horas subsiguientes, una reconsideración por escrito de la misma.

(b) El Director o su representante evaluará y tomará una determinación dentro de doce (12) horas siguientes recibidas a la petición escrita y comunicará su decisión al peticionario.

(c) Si la persona no esta satisfecha con la determinación tomada por el Director o su representante, podrá presentar una solicitud de revisión ante el comité de revisión de la institución que ofrece servicios de salud mental.

En caso de un proveedor indirecto de servicios de salud mental, aplicarán los procedimientos establecidos para dichas entidades.

Artículo 2.24.- Comité de Revisión.-

El Comité de Revisión estará compuesto por un psiquiatra y equipo inter o multidisciplinario, según se define en esta Ley, el cual será nombrado por el Director de la institución. Como parte de ese Comité se deberá nombrar un representante de una organización de base comunitaria. Dicho Comité tendrá la facultad de revisar las determinaciones hechas por el Director Clínico o su representante, cuando se halla seguido el procedimiento de reconsideración, según establecido en el artículo anterior. Una vez recibida la solicitud de revisión, el Comité abrirá un expediente de los procedimientos y el mismo permanecerá como parte del expediente clínico de la persona. El Comité tendrá dos (2) días laborables para llevar a cabo una vista de revisión. La parte peticionaria o su representante tendrá derecho a ser oída y a presentar prueba en dicha vista. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la vista, el Comité someterá sus determinaciones de hecho y conclusiones por escrito al peticionario o su representante y al director de la institución. Cuando el peticionario no esté conforme, podrá presentar un recurso de interdicto en el Tribunal de Primera Instancia.

Cuando cualquiera de los miembros del Comité de Revisión esté relacionado con la situación a considerarse, deberá inhibirse de participar en la revisión del caso.

El Comité deberá conducir sus procedimientos de manera que garantice una vista imparcial y un debido proceso de ley.

Artículo 2.25. – Responsabilidad para con la Familia.-

Los miembros de la familia del adulto que recibe servicios de salud mental, serán tratados con respeto y dignidad. Los familiares tendrán la oportunidad de proveer información a los profesionales a cargo del tratamiento. Recibirán además, información educativa acerca de la naturaleza de los trastornos, medicamentos y sus efectos secundarios, servicios de sostén disponibles y grupos de apoyo, así como asistencia en estrategias para el manejo de crisis. Esta información será suministrada por toda Institución proveedora.

Artículo 2.26. – Presencia de un Familiar.-

Cuando un profesional de salud mental requiera la presencia del tutor legal de un adulto, o del padre o madre con custodia o patria potestad o del tutor legal de un menor que recibe servicios de salud mental, el familiar responderá inmediatamente. Cuando el familiar, o tutor legal, se niegue a responder luego de haber sido debidamente citado en dos (2) ocasiones consecutivas y así conste en el expediente

clínico de la persona que recibe servicios de salud mental, el director de la institución proveedora, a petición del profesional de salud mental, podrá recurrir al Tribunal de Primera Instancia para solicitar que se expida una orden de comparecencia so pena de desacato. Dicha orden será diligenciada por un alguacil del tribunal no más tarde de los veinticuatro (24) horas siguientes a la fecha de su expedición. La Institución proveedora notificará al tribunal de la comparecencia o la no comparecencia de la persona ordenada.

Artículo 2.27.– Deber de Publicar.-

Los derechos señalados en esta Ley deberán constar en un lugar visible en todas las instituciones que provean servicios en salud mental y se entregará copia de estos derechos a las personas que reciban servicios en virtud de la misma. Asimismo, se pondrán en un lugar visible las responsabilidades de las personas que reciben los servicios de salud mental.

## CAPITULO III.- CARTA DE DERECHOS DE ADULTOS QUE RECIBEN SERVICIOS DE SALUD MENTAL.-

Artículo 3.01. – Declaración de Derechos.-

Las disposiciones de este Capítulo deben ser interpretadas de manera tal que se proteja y promueva la dignidad del ser humano mediante el reconocimiento de los derechos esenciales para su tratamiento y rehabilitación.

Artículo 3.02. – Conservación de Derechos Constitucionales.-

Todo adulto que recibe servicios de salud mental continuará disfrutando de sus derechos, beneficios y de los privilegios garantizados por la Constitución de los Estados Unidos de América y la Constitución de Puerto Rico y las Leyes estatales y federales, mientras esté recibiendo servicios de evaluación o tratamiento y rehabilitación, así como durante el proceso de ingreso, traslado o alta en cualquier institución proveedora.

Artículo 3.03.- Presunción de Competencia Mental.-

Se presume que toda persona es competente mentalmente, salvo que medie una determinación del tribunal disponiendo lo contrario. La determinación judicial de incapacidad bajo el Artículo 703 del Código Civil de Puerto Rico, según enmendado, será distinta y separada del procedimiento judicial para determinar si el adulto debe ser sujeto a un ingreso involuntario.

Se presumirá que toda persona con trastornos mentales o emocionales tiene el potencial de recuperación o rehabilitación al recibir los servicios adecuados a su diagnóstico y severidad de los síntomas y signos.

Artículo 3.04. - Limitación de Derechos.-

Los derechos establecidos por esta Ley para los adultos que reciban servicios de salud mental le son aplicables a aquellos adultos cumpliendo sentencia o recluidos en instituciones.

Artículo 3.05. - Derechos de Carácter General.-

El adulto que necesita, requiere y/o recibe servicios de salud mental tendrá derecho a:

(a) recibir atención médica, psiquiátrica y psicológica en su fase preventiva, clínica, recuperación y de rehabilitación para la protección de su salud y su bienestar general;

(b) desempeñar una profesión, ocupación u oficio, conforme a sus conocimientos y capacidad, considerando su trastorno mental y nivel de funcionamiento;

(c) dentro de la disponibilidad de empleos existentes, poder solicitar y obtener empleo, libre de discrimen por razón de trastorno mental, participar en talleres y recibir la orientación y la ayuda técnica o profesional que le permita desarrollar su potencial;

(d) tener acceso a los beneficios y servicios públicos en las áreas de vivienda, bienestar social, salud, alimentación, transportación, educación y empleo;

(e) actuar de manera individual o colectiva en la búsqueda de soluciones a sus agravios y problemas;

(f) ser escuchado, atendido y consultado en todos los asuntos que afecten su condición y progreso;

(g) recibir servicios ambulatorios médico-hospitalarios, sin sufrir discrimen por razón de su condición mental.

Artículo 3.06. - Derechos Específicos.-

El adulto que necesita, requiere o recibe servicios de salud mental será acreedor de los siguientes derechos específicos:

(a) Acceso a Servicios:

Todo adulto tendrá acceso a los servicios de salud mental, a tono con las sub-especializaciones por etapa de vida, género, trastorno, edad y nivel de cuidado, a tenor con su diagnóstico y severidad de los síntomas y signos en el momento. Los servicios de tratamiento deben proveerse en un orden continuado según la severidad de los síntomas y signos, para lograr la recuperación en un nivel de funcionamiento razonable. A tales efectos, los adultos que reciben servicios de salud mental no serán objeto de discrimen ni prejuicio y tendrán acceso a dichos servicios, según su diagnóstico, y la severidad de sus síntomas y signos. Este derecho no podrá ser limitado por la existencia de alguna condición o impedimento físico.

La utilización de los servicios de salud la determinará el equipo terapéutico inter o multidisciplinario, a base de la necesidad clínica justificada, la cual se fundamentará a su vez en el diagnóstico y en la severidad de los síntomas y signos del trastorno mental, según se define en el manual de clasificación de trastornos que esté vigente al momento.

También tendrá derecho a recibir los servicios terapéuticos de fármacoterapia, psicoterapia, servicios de apoyo y otros congruentes con su diagnóstico y la severidad de los síntomas y signos.

Todo proveedor indirecto de servicios de salud mental tendrá la obligación de brindar los servicios dentro de los primeros cinco (5) días naturales de la petición, siempre que el mismo no responda a una emergencia psiquiátrica. Se prohibe que los proveedores de salud mental indirecto tengan listas de espera para ofrecer los servicios a los solicitantes que excedan el límite de los cinco (5) días establecidos en este artículo.

(b) Derecho a no ser Identificado como Paciente de Salud Mental:

Todo adulto que recibe los servicios de salud mental tiene derecho a no ser identificado como paciente, ni como ex-paciente, excepto cuando la persona así lo solicite bajo el procedimiento establecido para ello en esta Ley.

(c) Notificación de Derechos; Limitaciones:

Todo adulto que solicite servicios de salud mental, tiene derecho a recibir notificación al momento de la admisión o ingreso a una institución proveedora, o lo antes posible luego del mismo, sobre los derechos garantizados por esta Ley.

A esos fines y en conformidad con el Artículo 2.07 de esta Ley, el director de la institución o su representante orientará al adulto que reciba servicios de salud mental, a la persona designada por éste o a su tutor legal, en el caso de aquellos declarados mentalmente incompetentes por el tribunal. En los casos de adultos que soliciten servicios voluntariamente, el director de la institución o su representante, deberá expresamente informarle de su derecho a ser dado de alta de la institución, dentro del término más corto posible. Si el adulto ha sido ingresado de forma voluntaria, se le entregará a éste, a su tutor legal, familiar o cualquier otra persona designada por el adulto que recibe servicios en salud mental, un formulario de petición de alta.

Además, se le entregará por escrito las normas de funcionamiento institucional, entre las cuales se incluirán los procedimientos para tomar la decisión de ubicación, la revisión de dicha ubicación y el procedimiento de quejas y querellas. Además, durante el proceso de ingreso o admisión, se le presentará una explicación detallada de cualesquiera limitaciones que pudiera sufrir durante el período de su

hospitalización y de la obligación de que las mismas sean el resultado de una determinación médica justificada, considerada por el Equipo Interdisciplinario y consignada en el expediente clínico. También se notificará sobre las limitaciones admisibles al familiar más cercano, al tutor legal o a su abogado si lo tuviese.

No aplicará limitación alguna entre un adulto, su representante, tutor legal, su abogado o el tribunal, o entre el adulto y otro individuo, cuando la comunicación trate sobre asuntos relacionados a procedimientos administrativos o judiciales.

(d) Plan Individualizado de Tratamiento Recuperación y Rehabilitación:

Todo adulto tendrá derecho a que se le diseñe un Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación, Inter o multidisciplinario seguro y humano, dentro de un ambiente que sea lo menos restrictivo posible, de acuerdo a su condición.

El Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación, Inter o multidisciplinario será formulado por escrito, dentro de las primeras setenta y dos (72) horas siguientes al comienzo de la prestación de servicios del adulto y revisado dentro de los primeros diez (10) días como máximo, como resultado del trabajo del equipo terapéutico encargado. El adulto que reciba los servicios, participará en la formulación y revisión del plan hasta el grado en que sea posible dicha participación. Además, se requerirá la participación del familiar más cercano. El manejador de casos será responsable de dar seguimiento a la implantación del Plan Individualizado de Tratamiento Recuperación y Rehabilitación, Inter o multidisciplinario. El expediente clínico deberá contener la firma de todos los profesionales que participen en la elaboración del plan y del adulto o del familiar que le representen en la confección del mismo.

(e) Consentimiento Informado:

Todo adulto tendrá derecho a conocer todo lo relativo a los servicios o tratamientos propuestos en su Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación Interdisciplinario de salud mental antes de consentir al mismo. Siempre que un adulto reciba servicios de salud mental, indistintamente del nivel de cuidado, deberá obtenerse el consentimiento informado de éste, o de su tutor legal en el caso de un adulto que haya sido

declarado incapacitado judicialmente. La información y orientación deberá ser ofrecida por el psiquiatra en un lenguaje y tono que la persona pueda entender.

El mínimo de información requerida que debe recibir el adulto para que su consentimiento se considere informado será el siguiente:

(1) el diagnóstico y la descripción clínica de su condición de salud;

(2) el tratamiento recomendado;

(3) los riesgos y consecuencias de aceptar o rechazar el tratamiento;

(4) otras alternativas de tratamiento, que aunque sean menos indicadas, estén disponibles;

(5) beneficios, riesgos y consecuencias de las alternativas de tratamiento;

(6) el pronóstico correspondiente;

(7) la posibilidad de efectos secundarios y daños irreversibles, como resultado de tratamientos o uso de medicamentos particulares recomendados;

A manera de excepción, en caso de una emergencia médica, ~~o~~ psiquiátrica, o dental los servicios necesarios para estabilizar la situación de emergencia, podrán ser ofrecidos sin que medie el consentimiento informado del adulto. La razón y determinación de emergencia será consignada en el expediente clínico del adulto y será notificada a la mayor brevedad al familiar más cercano o a su tutor legal, según sea el caso.

(f) Negativa a Recibir Tratamiento:

Cualquier adulto que reciba servicios en una institución proveedora podrá, por sí o por su tutor legal, ejercer el derecho de negarse a recibir cualquier tipo de servicios, dentro de su Plan de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación. Esta negativa se extiende a medicamentos y a cualquier otro tipo de

servicios, dentro de su Plan de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación. Si el adulto se rehusa a recibir tales servicios, los mismos no le serán suministrados, no obstante, ello será consignado en el expediente clínico.

El Director o su representante le informará al adulto o tutor legal sobre los servicios y tratamientos alternos disponibles, los riesgos y consecuencias que puede sufrir dicho adulto al rehusar recibir tales servicios y el pronóstico de recibir o negarse a recibir los mismos. No obstante, en caso de que los servicios o tratamientos requeridos por el Plan de Tratamiento y Rehabilitación del adulto sean necesarios para manejar una situación de emergencia psiquiátrica, estos le serán administrados. El psiquiatra consignará en el expediente clínico las circunstancias de emergencia en las cuales fue necesario ordenar dicho servicio o tratamiento. Se le notificará al adulto sobre tal decisión, tan pronto como éste pueda comprender la información o a su tutor legal. Esta notificación será consignada en el expediente clínico.

Bajo ninguna circunstancia, se emitirá una orden para recibir o negar un servicio o para administrar medicamentos, como medida de castigo o como condición para que el adulto sea dado de alta.

(g) Libertad de Comunicación:

Todo adulto que reciba servicios en una institución proveedora, tendrá derecho a comunicarse en privado, sin censura y sin impedimento, con las personas de su selección. Esta comunicación podrá llevarse a cabo por vía telefónica, por correo o mediante visitas, según se describen a continuación:

(1) Correspondencia.- El Director de la Institución proveedora se asegurará que la correspondencia sea recibida y depositada en el correo. Proveerá además material para escribir y estampillas de correo, cuando los adultos que reciben servicios de salud mental no tengan los medios para procurárselos por sí. Todas las cartas, indistintamente de a quién vayan dirigidas, serán enviadas a su destinatario, sin que éstas sean examinadas por las autoridades de la Institución proveedora de servicios en salud mental. Se entregarán las contestaciones a dichas cartas al adulto, indistintamente de su remitente y sin examen previo de las autoridades de la institución en salud mental. En el caso de que el adulto no sepa leer o escribir y a petición de éste, se le asistirá cuando desee ejercer su derecho a comunicarse por escrito.

(2) Teléfono- El Director de la Institución proveedora de servicios en salud mental se asegurará que los teléfonos estén asequibles y establecerá por escrito los lugares y horas para el uso razonable de los mismos. Se le proveerá fondos para el uso razonable del teléfono, ya sea para llamadas locales o de larga distancia, al adulto que no tenga medios de procurárselo por sí.

(3) Visitas - El Director de la institución proveedora, será responsable de garantizar la existencia de un lugar adecuado para que los adultos sujetos a hospitalización puedan recibir visitas. A esos fines hará público el horario y lugar para las mismas.

La institución poveedora establecerá las normas para la comunicación a través de otros medios tales como facsímil, correo electrónico o mensajería.

No obstante lo anterior, la comunicación escrita, el uso del teléfono y las visitas a los adultos podrán ser razonablemente limitadas por el director de la institución proveedora o su representante, cuando medie una determinación clínica que le justifique, siempre que tenga tal limitación el propósito de proteger al adulto o a terceros de recibir daño, persecución, hostigamiento o intimidación. La decisión de limitar este derecho será considerada por el equipo inter o multidisciplinario y consignada en el expediente clínico, debidamente justificada y notificada al adulto. También se notificará sobre la misma al familiar o al tutor legal o abogado si lo tuviese.

No aplicará limitación alguna entre un adulto, su representante, tutor legal, su abogado o el tribunal, o entre el adulto y otro individuo, cuando la comunicación trate sobre asuntos relacionados a procedimientos administrativos o judiciales.

(h) Efectos personales:

Todo adulto que reciba servicios de salud mental en una institución proveedora, podrá poseer, usar y mantener en un lugar asignado y seguro provisto para ello, sus efectos personales. La posesión y uso de cierta clase de propiedad personal podrá ser limitada por el director de la institución proveedora o su representante cuando sea necesario para proteger al adulto y a otros de daños físicos. Cuando el adulto sea dado de alta, toda su propiedad personal le será devuelta.

(i) Dinero y Depósitos:

Todo adulto tendrá derecho a manejar sus bienes, incluyendo sus pertenencias de valor mientras reciba servicios en una institución de salud mental. La institución hospitalaria o residencial proveedora de servicios establecerá aquellas normas y procedimientos necesarios, de acuerdo con el reglamento que para tales efectos promulgue la Administración, para asegurar que el dinero de los adultos que reciben servicios en la misma estén protegidos contra hurto, pérdida o apropiación ilegal. A esos efectos, las normas y procedimientos deberán incluir lo siguiente:

(1) cualquier persona que reciba servicios en estas instituciones podrá usar su dinero según tenga a bien disponer. No obstante, no podrá disponer de su dinero un adulto a quien por orden del tribunal se le haya prohibido;

(2) no se designará al personal del hospital o institución residencial para recibir dinero por concepto de seguro social, pensiones, anualidad, fideicomisos o cualquier forma directa de pago o asistencia de los adultos ingresados en instituciones proveedoras de servicios de salud mental, salvo en aquellos casos en que mediante orden del tribunal se designe al personal como custodio de dicho dinero, además, podrá ocurrir una designación en virtud de una Ley o reglamento relativa a la disposición de derechos por seguro social, pensión o cualquier otro beneficio; y

(3) cualquier adulto en una institución hospitalaria o residencial proveedora de servicios de salud mental podrá solicitar el depósito de cualesquiera fondos pertenecientes a ésta en cualquier institución financiera de Puerto Rico.

(j) Labor o Trabajo:

Ningún adulto podrá ser obligado a llevar a cabo labor o trabajo alguno en beneficio de la institución proveedora. No obstante, el adulto podrá voluntariamente consentir a prestar labor o trabajo, siempre y cuando el profesional de salud mental responsable por la implantación del Plan de Tratamiento y Rehabilitación determine que el trabajo es consistente con su Plan Individualizado de Tratamiento y Rehabilitación interdisciplinario y ello sea en beneficio del adulto, disponiéndose que cuando el trabajo o labor en la institución conlleve beneficios económicos, recibirá salarios y beneficios en proporción con el trabajo llevado a cabo, conforme a las Leyes federales o estatales aplicables.

Se dispone a manera de excepción, que se podrá requerir del adulto llevar a cabo labores o tareas de mantenimiento de su habitación y cualquier otra que sean parte de su Plan de Tratamiento y Rehabilitación sin que medie compensación alguna. La asignación de estas tareas o labores serán consignadas en el expediente clínico como parte del Plan de Tratamiento y Rehabilitación.

No obstante lo antes expuesto bajo ninguna circunstancia podrá requerirse de un adulto llevar a cabo labores o tareas de tipo alguno como medida de represalia o castigo.

(k) Quejas y Querellas:

Todo adulto podrá, por sí o por su tutor legal, ejercer su derecho a presentar quejas o querellas con relación a la violación de los derechos descritos en esta Ley. La institución proveedora tendrá el deber de advertir al adulto que recibe servicios de salud mental y a su tutor legal el derecho que posee de que su queja o querella sea dilucidada en un procedimiento imparcial y de manera justa y expedita. Cuando el peticionario no esté conforme con la determinación, podrá acudir ante el Tribunal de Primera Instancia.

Toda institución proveedora establecerá un sistema de manejo de quejas y querellas relativas al

trato y servicio que ofrece a tenor con esta Ley. El procedimiento establecido para presentar quejas y querellas será informado al adulto que recibe servicios de salud mental, a su tutor legal, a sus familiares, a los visitantes de la institución y al personal que labora en la institución.

Toda querella será atendida y dilucidada dentro del término de treinta (30) días a partir de su debida presentación. Se notificará por escrito sobre la determinación final de la querella al adulto o a su tutor legal, aún cuando éste haya sido dado de alta.

En los Manuales de Servicios que se estipulan en los artículos 6.03 y 10.04, respectivamente, deberá incluirse una sección titulada Procedimientos para Radicación y Solución de Quejas y Querellas, en la cual se describa en lenguaje sencillo los pasos a seguir por los adultos, los menores, y sus familias, que necesiten utilizar estos mecanismos.

(l) Procedimientos Experimentales o Exploratorios:

Ningún adulto será sometido a procedimientos experimentales o exploratorios que no estén aprobados por los organismos federales y estatales pertinentes. Para participar en los mismos, deberá obtenerse de su parte o del tutor legal de éste, según fuera el caso, un consentimiento informado escrito y legalmente efectivo.

El mínimo de información que deberá ser brindada a un participante en estos procedimientos será en un lenguaje comprensible y que no resulte coercitivo, y comprenderá:

(1) una declaración de que el procedimiento constituye un experimento o investigación científica; los propósitos del mismo; el tiempo de duración de la participación del paciente en el procedimiento; una descripción de los procedimientos que serán utilizados y qué parte de estos son experimentales;

(2) los riesgos y molestias que puedan ser razonablemente previsibles;

(3) una descripción sobre los beneficios razonablemente esperados para el participante u para otros;

(4) la divulgación de procedimientos o tratamientos alternos que podrían beneficiar o resultar más ventajosos al participante que el procedimiento experimental o exploratorio;

(5) una declaración describiendo el alcance y grado de confidencialidad en que se mantendrá la identidad del participante;

(6) en investigaciones que conlleven riesgos, se informará si se ofrecerá compensación o tratamiento médico por daños resultantes del procedimiento y en qué consistirán los tratamientos, además del lugar dónde obtener información adicional sobre ellos;

(7) una explicación respecto a las personas a notificar, de tener preguntas el participante o sospechas de daños relacionados con el procedimiento;

(8) una declaración de que la participación en el procedimiento es voluntaria y que la negativa a participar o a descontinuar en cualquier momento el mismo no conllevará penalidad o pérdida de beneficio alguno a que tenga derecho el participante. El adulto sujeto a cualquier procedimiento experimental o exploratorio será notificado por escrito, por lo menos setenta y dos (72) horas antes de dar comienzo al procedimiento, excluyendo de este término los sábados, domingos y días feriados; y

(9) cualquier otro criterio establecido mediante reglamento por el Administrador.

El adulto tiene derecho a dar por terminada su participación en el procedimiento experimental, antes o durante el procedimiento.

(m) Investigaciones Científicas:

Cualquier petición para llevar a cabo una investigación científica, relacionada con el adulto que recibe servicios de salud mental en instituciones públicas o privadas, será dirigida al Administrador y al director de la institución proveedora de estos servicios respectivamente, quienes solicitarán la aprobación del Comité Evaluador de Propuestas de Investigación de la institución que solicite, para luego evaluar las

propuestas sometidas para investigación, de acuerdo a su recomendación. Lo anterior se hará a tenor con los estándares establecidos por el Gobierno Federal y Estatal, para los procesos de investigación científica. El comité emitirá su recomendación dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la misma. Posteriormente, el Administrador o el director de la institución proveedora notificará a la parte interesada su determinación sobre la investigación.

Ningún adulto será sometido a investigaciones científicas sin antes haberse obtenido su autorización o la de su tutor legal, según fuera el caso, con un consentimiento informado escrito y legalmente efectivo.

La información básica deberá ser brindada a la persona o tutor legal en un lenguaje comprensible, que no resulte coercitivo y consistirá en:

(1) una declaración de que el procedimiento constituye una investigación científica; los propósitos del mismo; el tiempo de duración de la participación del adulto en el procedimiento; una descripción de los procedimientos que serán utilizados y qué parte de éstos serán experimentales;

(2) los riesgos y molestias que puedan ser razonablemente previsibles;

(3) una descripción sobre los beneficios razonablemente esperados para el participante o para otros;

(4) la divulgación de procedimientos o tratamientos alternos que podrían beneficiar o resultar más ventajosos al adulto que el procedimiento sujeto de investigación científica;

(5) una declaración de que la identidad del adulto se mantendrá bajo total confidencialidad;

(6) en investigaciones que conlleven riesgos, se informará si se ofrecerá compensación o tratamiento médico por daños resultantes del procedimiento y en qué consistirán los tratamientos así como el lugar dónde obtener información adicional sobre ellos;

(7) una explicación respecto a las personas a notificar, de tener preguntas el adulto o su tutor legal, en cuanto a sospechas de daños relacionados con el procedimiento; y

(8) una declaración de que la participación en el procedimiento es voluntaria y que la negativa a participar o a descontinuar en cualquier momento el mismo no conllevará penalidad o pérdida de beneficio alguno a que tenga derecho el participante; y

(9) cualquier otro criterio establecido mediante el reglamento por el Administrador.

Las personas a cargo de conducir la investigación deberán observar las normas de confidencialidad establecidas en esta Ley. El Director de la institución velará por la confidencialidad de la información del adulto que recibe servicios de salud mental relacionada con cualquier tipo de investigaciones científicas o exploratorias.

(n) Lenguaje:

Todo adulto que recibe servicios de salud mental, tiene derecho de conocer y de ser informado de todo lo relacionado a su evaluación, tratamiento, recuperación y rehabilitación, por lo cual, cuando se requiera dar una explicación al adulto que recibe servicios de salud mental y éste no conozca ni entienda el lenguaje en el cual se le ofrece, la institución proveedora tendrá la obligación de proveerle al adulto, o a su tutor legal, el traductor o intérprete necesario para lograr una comunicación efectiva. Esta disposición incluye los casos en que la limitación sea de carácter auditivo o de habla. Para fines de esta disposición, no están prohibidos de servir como intérpretes los familiares de la persona a recibir servicios de salud mental, siempre y cuando el adulto así lo determine.

Toda documentación escrita que sea suministrada al adulto, deberá estar expresada en inglés o español y de ser otro lenguaje el entendido por éste, se hará lo posible para que haya una comunicación efectiva. En los casos en que el adulto tenga limitaciones de tipo visual, la institución tendrá la obligación de advertirle de su derecho a que los documentos le sean leídos en voz alta por una persona de su elección, quien además firmará todos y cada uno de los documentos que a ruego del adulto haya leído y que así sea determinado por el adulto. Todo lo dispuesto en este artículo deberá ser consignado en el expediente clínico

del adulto que recibe servicios de salud mental.

(ñ) Derecho al apoyo de su padre, madre, tutor y agencias de protección o asistencia a la persona al momento de darle de alta:

Toda persona recluida en una instalación, tendrá el derecho de recibir el apoyo de sus padres, familiares, personas significativas y las agencias con funciones de protección y la obligación de proveer el albergue y cuidado al nivel adecuado, deberán proveer el mismo, al igual que el personal adiestrado para atender adecuadamente a las personas con trastornos mentales en un ambiente menos restrictivo y de mayor autonomía.

(o) Transportación:

Toda persona tendrá derecho a transportación en un vehículo adecuado, incluyendo ambulancias que estén certificadas por la Comisión de Servicio Público y el Departamento de Salud, cuando la severidad de los síntomas y signos así lo requiera, para ser trasladado a la instalación donde recibirá tratamiento.

(p) Derecho al Apoyo Cuando Existe una Responsabilidad Moral:

Toda persona adulta que, por razón de consanguinidad o por obligación moral, ya sea porque se haya beneficiado económicamente, obtuvo beneficio de cualquier tipo de la persona que padece de trastornos mentales, o que necesita o recibe servicios de salud mental, estará obligado a proveer el apoyo necesario y procurará que la persona con trastorno mental pueda participar en los servicios que propenda a su recuperación, de acuerdo a su nivel de capacidad.

(q) Representación Legal en Ingreso Involuntario:

odo adulto ingresado de forma involuntaria tendrá derecho a estar representado por un abogado. Si la persona es indigente y no ha podido contratar un abogado, el tribunal le designará uno para que le represente en la vista.

(r) Nivel de Cuidado de Menor Intensidad y Mayor Autonomía:

oda persona tiene derecho a recibir el tratamiento adecuado, de acuerdo a su diagnóstico y nivel de cuidado, por lo que su hospitalización debe ser por el menor tiempo posible, hasta que esté en condiciones de trasladarse a un nivel de cuidado de menor intensidad.

(s) Responsabilidad de las Personas que Reciben Servicios de Salud Mental en Puerto Rico:

Se establece que las personas que reciben servicios de salud mental deben cumplir con las siguientes responsabilidades:

1) Asumir responsabilidad sobre su recuperación en la medida de sus capacidades.
2) Participar en las actividades y programas de autosuficiencia de apoyo en la comunidad.
3) Los tutores o encargados de la persona que recibe servicios de salud mental, tienen la responsabilidad de llevar a la persona a sus tratamientos, participar en aquellas actividades, consejería y terapias familiares que le recomienden para el progreso de la persona con trastornos emocionales.

## CAPITULO IV.- SISTEMA DE CUIDADO DE SALUD MENTAL PARA ADULTOS.-

Artículo 4.01. Niveles de Cuidado.-

Los servicios de salud mental serán provistos en el nivel de cuidado de mayor autonomía y terapéuticamente adecuado dentro del concepto del sistema de cuidado de salud mental, de acuerdo al diagnóstico y a la severidad de los síntomas y signos de la persona al momento de ser evaluado. En cualquier nivel de tratamiento se puede requerir el uso de medicamentos, de acuerdo al diagnóstico y la severidad de los síntomas y signos de la persona al momento de ser evaluado.

Los niveles de cuidado en orden de mayor restricción o mayor autonomía, son:

(4) Hospitales psiquiátricos

(5) Unidades psiquiátricas
(6) Hospitales generales
(7) Servicios transicionales y residenciales
(8) Urgencias
(9) Parciales
(10) Diurnos
(11) Ambulatorios intensivos
(12) Ambulatorios
(10) Tratamiento con mantenimiento

Artículo 4.02. Adultos que Requieren Servicios Hospitalarios de Salud Mental.-

Requerirán servicios de salud mental a nivel hospitalario, aquellos adultos con trastorno mental o cuya severidad de síntomas y signos al momento de ser evaluado sean indicadores de que puedan causarse daño físico a sí, a otros o a la propiedad, o cuando hayan manifestado amenazas significativas que fundamenten tener el mismo resultado, o cuando la condición del adulto podría deteriorarse sustancialmente si no se le ofrece a tiempo el tratamiento adecuado.

Los trastornos relacionados a sustancias, por considerarse trastornos mentales según definidos en esta Ley, están incluidos en esta disposición siempre y cuando se den las condiciones dispuestas en este artículo.

Artículo 4.03.- Evaluación Inicial; Adultos Ingresados a Instituciones Proveedoras de Servicios en Salud Mental.-

Todo adulto que empiece a recibir voluntaria o involuntariamente, servicios de salud mental en una Institución Proveedora, entiéndase salas de urgencias, emergencias y hospitalización, recibirá dentro de las veinticuatro (24) horas, los siguientes servicios de cernimiento y evaluación:

(a) historial social y médico
(b) un examen físico;
(c) análisis de laboratorios;
(d) una evaluación psiquiátrica;
(e) una evaluación psicológica;
(f) una evaluación social;
(g) una Evaluación Global de Funcionamiento o según el manual clínico vigente (GAF-Eje V, DSM - IV)

El resultado del cernimiento determinará el curso a seguir. De no llenarse los requisitos, se referirá a las agencias o servicio de salud correspondientes. Si llenase tales requisitos, se procederá con la evaluación. El resultado de la evaluación, análisis y examen, se utilizará para determinar el nivel de cuidado correspondiente a la severidad de los síntomas y signos en el momento, y el Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación. Este Plan será formulado por escrito, dentro de las primeras setenta y dos (72) horas, al comienzo de la prestación de los servicios al menor y revisado por lo menos dentro de los primeros diez (10) días, como resultado de los trabajos inter o multidisciplinarios de los profesionales encargados.

Artículo 4.04. Restricción Terapéutica.-

La restricción será empleada únicamente en instituciones hospitalarias y centros que tengan unidades de cuidado agudo o de emergencias, siendo empleada ésta, según lo establecido en los protocolos de los estándares de la buena práctica de la salud mental, salvo disposición en contrario de esta Ley. La restricción será empleada en forma terapéutica, sin violentar la dignidad humana. Su aplicación se reservará como recurso extremo, a ser utilizado cuando exista un peligro inmediato de que el adulto vaya a causarse daño a sí mismo, a otros o a la propiedad. Previo a la restricción de cualquier adulto, se tomará en consideración su condición física, disponiéndose, que en ningún momento se utilizará la restricción

como castigo, medida disciplinaria o para conveniencia del personal de la institución.

Todo profesional de salud mental facultado para ordenar, administrar u observar la restricción, deberá completar un adiestramiento sobre el uso y aplicación de este procedimiento terapéutico para adultos. Lo dispuesto en este artículo estará sujeto al reglamento que para estos efectos promulgue la Administración. La restricción se llevará a cabo cuando medie una orden escrita de un psiquiatra a estos efectos, quien luego de haber observado personalmente al adulto, determine que el uso de la restricción es necesaria. El examen incluirá una evaluación de la condición física y el estado mental del adulto. Será obligatorio consignar la orden de restricción en el expediente clínico y en ella se especificarán los datos, observaciones, propósito para su uso, tiempo y cualquier otra evidencia pertinente que fundamente su uso.

Se notificará a la mayor brevedad posible al familiar más cercano o su tutor legal, según sea el caso, sobre la medida de restricción utilizada. Será mandatorio realizar a la mayor brevedad posible una discusión del uso de la medida de restricción, registrada en minutas, sobre las razones que fundamentaron el uso de esta medida, con el propósito de establecer la auditabilidad profesional de los miembros del equipo.

Ninguna orden de restricción será válida por más de doce (12) horas, después de su emisión. La restricción que en virtud de dicha orden se aplique, no se extenderá por más de cuatro (4) horas, al cabo de las cuales el psiquiatra llevará a cabo una nueva evaluación. Si como resultado de la evaluación se requiere continuar con la restricción, el psiquiatra expedirá una nueva orden, que será consignada en el expediente clínico.

En caso de emergencia que requiera el uso inmediato de esta medida y el psiquiatra no esté disponible, ésta podrá ser temporeramente iniciada por un médico o enfermero (a) graduado (a) o un miembro del equipo interdisciplinario adiestrado y certificado en esta modalidad, luego de consultar por vía telefónica a un psiquiatra. En tal situación, una vez el psiquiatra esté disponible, efectuará la evaluación para consignar la orden por escrito en el expediente, lo más pronto posible, pero en ningún caso más tarde de las cuatro (4) horas siguientes al empleo inicial de la restricción de emergencia. Se consignará en el expediente clínico, la necesidad de la orden de restricción. Si luego de localizar al psiquiatra, éste no autoriza continuar con la restricción, la misma finalizará de inmediato. El psiquiatra que ordena una restricción deberá informar al Director Clínico y al equipo inter o multidisciplinario por escrito sobre el uso de la misma inmediatamente. Se asignará un enfermero graduado, adiestrado y certificado en esta modalidad para que observe al adulto, por los menos cada quince (15) minutos, sin menoscabar su derecho a la intimidad, y consigne sus observaciones en el expediente clínico de manera legible, detallada, clara y precisa.

La orden de restricción podrá ser empleada durante todo o parte de un período de doce (12) horas. Tal período empezará a contar desde el momento en que se emitió la orden de restricción. Una vez empleada esta modalidad, ésta será removida tan pronto como la misma resulte clínicamente innecesaria. En aquellos casos en que se justifique un período de extensión, la restricción será removida cada dos (2) horas, por no menos de quince (15) minutos, a menos que tal remoción sea clínicamente contraindicada.

Una vez empleada la restricción dentro de un período de doce (12) horas, ésta no será utilizada nuevamente en el mismo adulto durante los próximos dos (2) días calendarios, salvo que medie una orden justificada por una re-evaluación del psiquiatra y con la autorización previa del Director Clínico de la institución hospitalaria.

El director de la institución hospitalaria revisará todas las órdenes de restricción diariamente e investigará las razones consignadas para las mismas. Además, mantendrá un registro de las restricciones utilizadas y rendirá un informe anual a la Administración, dentro de los primeros treinta (30) del año subsiguiente.

La institución establecerá por escrito un protocolo para la restricción terapéutica, de acuerdo con las disposiciones contenidas en este artículo. Se incluirá en éste, información sobre los profesionales de

salud mental facultados para iniciar la restricción en caso de emergencia, a tenor con lo dispuesto en esta Ley. Todo profesional de salud mental facultado para iniciar u ordenar la restricción, deberá haber completado un adiestramiento y estar certificado sobre el uso y aplicación de esta medida terapéutica. Lo dispuesto en este Artículo estará sujeto al reglamento, y a los requisitos para el licenciamiento de las instituciones proveedoras de servicios de salud mental, que para estos efectos promulgue la Administración.

Artículo 4.05. Aislamiento Terapéutico.-

El aislamiento será empleado únicamente como medida terapéutica, para evitar que el adulto se cause daño a sí mismo, a otros o a la propiedad. Su uso se limitará a las instituciones hospitalarias y a los centros de salud mental que tengan unidades de cuidado agudo. En ningún momento el aislamiento será utilizado como castigo, medida disciplinaria o para conveniencia del personal de la institución.

El aislamiento será empleado únicamente por orden escrita de un psiquiatra, quien luego de examinar personalmente al adulto, quede clínicamente convencido de que la aplicación del aislamiento es la alternativa indicada. El examen incluirá una evaluación del estado mental y la condición física del adulto.

La orden de aislamiento será consignada en el expediente y en ella se indicarán las razones por las cuales la misma ha sido emitida, y se notificará a la mayor brevedad posible al familiar más cercano o tutor del adulto sobre la medida de aislamiento utilizada. La orden indicará además, el término de duración del aislamiento y los aspectos a observar. Una orden de aislamiento será válida por el término de doce (12) horas. Cada período de aislamiento requerirá la emisión de una nueva orden del psiquiatra, luego de evaluar directamente a la persona. El psiquiatra que ordene el aislamiento notificará inmediatamente y por escrito al director de la institución y al equipo inter o multidisciplinario sobre la aplicación del mismo.

El aislamiento será empleado durante un periodo no mayor de ocho (8) horas, contadas a partir del comienzo del mismo. Una vez se haya empleado el aislamiento por dicho periodo, no se utilizará nuevamente en el mismo adulto, durante los próximos dos (2) días calendarios. Lo dispuesto en este artículo estará sujeto al reglamento y a los requisitos de licenciamiento de instituciones proveedoras de salud mental que para tales efectos promulgue la Administración.

El psiquiatra que ordene el aislamiento, asignará un enfermero adiestrado y certificado en esta modalidad para que observe al adulto por los menos cada quince (15) minutos, sin menoscabar su derecho a la intimidad y consignará sus observaciones en el expediente clínico de manera legible, detallada, clara y precisa.

Los cuartos de aislamiento deberán estar debidamente preparados de acuerdo a los protocolos federales y estatales vigentes a fin de evitar daños al adulto.

El director de la institución hospitalaria deberá notificar o revisar todas las órdenes de aislamiento diariamente y presentará un informe anual a la Administración, dentro de los (30) treinta días del año subsiguiente.

La institución establecerá por escrito un protocolo para el uso del aislamiento terapéutico de acuerdo con las disposiciones contenidas en este artículo.

Artículo 4.06. Terapia Electroconvulsiva.-

Ningún adulto recibirá tratamiento de terapia electroconvulsiva, sin que medie su consentimiento y autorización previa por escrito.

En el caso de que este tratamiento sea indicado para el adulto, pero que por su condición no pueda consentir, y no tenga tutor asignado legalmente, será necesario celebrar una vista para que el tribunal determine si procede o no el tratamiento y emita una orden a dichos efectos. Dicha vista será celebrada sumariamente en el tribunal más cercano a la institución, la cual será celebrada dentro de las (8) ocho horas siguientes a la petición, cuando se establezca bajo juramento que el no ofrecer esta modalidad de tratamiento podrá resultar en daño inminente a la persona que recibe servicios de salud mental.

En el caso de emergencias psiquiátricas, donde se depende del uso de esta modalidad terapéutica para salvar la vida del paciente, la determinación para brindar ésta se hará por el psiquiatra, en consenso con el equipo terapéutico, inter o multidisciplinario. El Director de la institución hospitalaria deberá revisar todas las órdenes de terapia electroconvulsiva bajo los criterios de emergencia y presentará un informe anual a la Administración, dentro de los treinta (30) días del año subsiguiente.

El adulto a quien se le considere someter al tratamiento de terapia electroconvulsiva y a su tutor, si lo hubiere, será notificado por lo menos cuarenta y ocho (48) horas anteriores al tratamiento. En caso de emergencias, se procederá con el tratamiento al cabo de las cuarenta y ocho (48) horas o antes. El equipo terapéutico inter o multidisciplinario que diseñe el caso, lo discutirá y notificará sus recomendaciones al Director Clínico sobre el mismo. Todo adulto tendrá el derecho a rehusar este tratamiento en cualquier momento después de haber aceptado el mismo.

Toda entidad proveedora de servicios en salud mental que ofrezca la modalidad de terapia electroconvulsiva, tendrá un protocolo que incorpore los estándares aceptados por la "American Psychiatric Association" (APA) y las entidades que regulan la administración de dicha terapia, además del reglamento que para estos efectos promulgue la Administración. Dicho protocolo será revisado anualmente. Será responsabilidad de la entidad proveedora de servicios de salud mental mantenerse actualizada sobre los adelantos científicos que puedan alterar los procedimientos o administración de esta modalidad de tratamiento.

Artículo 4.07. Ingreso Voluntario.-

Toda persona de dieciocho (18) años o mayor, podrá solicitar su Ingreso Voluntario a un servicio de salud mental, cuando a tales efectos firme una petición y el psiquiatra, previa evaluación y discusión del caso con el equipo inter o multidisciplinario determine que tal adulto debe ser ingresado.

La petición escrita de admisión deberá contener además, una declaración simple y sin tecnicismos, que indique que el adulto entiende que tiene derecho a ser dado de alta dentro del término más corto posible, excepto en aquellos casos en que durante dicho término se presente en el tribunal una petición acompañada por un certificado que establezca que el adulto debe ser sujeto a un ingreso involuntario.

Artículo 4.08. Petición de Alta; Cambio de Status; Vista.-

Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la petición de alta, el adulto será evaluado por un psiquiatra y el equipo inter o multidisciplinario, quienes determinarán si el adulto constituye peligro para sí, para otros o para propiedad alguna, como indicador de trastorno mental. De no ocurrir dicha evaluación, el adulto será dado de alta de inmediato. Si como resultado de la petición de alta, y luego de la evaluación, el psiquiatra en consulta con el equipo inter o multidisciplinario, determina que el adulto constituye peligro, se procederá a solicitar una Orden de Ingreso Involuntario, que no excederá el término de quince (15) días y el cambio de status de ingreso voluntario a involuntario, dentro de las próximas veinticuatro (24) horas. Mientras ocurra este proceso, el adulto continuará hospitalizado. Se continuará con los procedimientos de ingreso involuntario dispuestos en esta Ley.

Artículo 4.09. Renovación de Consentimiento; Revisión de Expedientes.-

El psiquiatra y el equipo inter o multidisciplinario responsable del cuidado y tratamiento del adulto, tendrá hasta diez (10) días a partir del ingreso voluntario, para re- evaluarlo, con el propósito de determinar la necesidad de continuar con los servicios de tratamiento, recuperación y rehabilitación hospitalario o en otro nivel de cuidado. El resultado de tal evaluación será notificada al adulto y consignada en el expediente clínico. Este proceso continuará cada (10) diez días a partir de la primera revisión mientras dure su hospitalización.

En los casos en que según el mejor juicio del psiquiatra y en consulta con el equipo inter o multidisciplinario, determinen que el adulto representa un riesgo inmediato de peligrosidad y este no dé su consentimiento para continuar recibiendo servicios de tratamiento, se le solicitará al tribunal una Petición de Orden de Ingreso Involuntario, que no excederá el término de quince (15) días y el cambio de status del

adulto de voluntario a involuntario.

Artículo 4.10. Otros Niveles de Cuidado.-

El tribunal, antes de determinar si el adulto debe ser ingresado de forma involuntaria, deberá considerar otros niveles de cuidado indicados, según el diagnóstico y la severidad de los síntomas y signos en el momento. Podrá ordenar que el adulto se someta a tratamiento en cualquier otro nivel de cuidado de los servicios básicos y complementarios de tratamiento, recuperación y rehabilitación, en una institución proveedora de servicios en salud mental. Además, deberá considerar las recomendaciones que el psiquiatra y el equipo terapéutico, inter o multidisciplinario, responsable de la evaluación inicial del adulto presenten. Dichas recomendaciones deberán estar detalladamente contenidas en un informe, que a su vez deberá incluir una evaluación comprensiva, con un Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación preliminar, que aplique según el nivel de cuidado recomendado, y cualquier otra información que el tribunal estime necesaria. El reglamento que establezca la Administración contendrá las especificaciones sobre el contenido y forma del Plan de Tratamiento Individualizado, por nivel de cuidado.

No obstante, el tribunal tendrá autoridad para modificar una orden de tratamiento en otro nivel de cuidado, si el adulto sujeto a la orden, no cumple con la misma o si los profesionales de salud mental determinan que la respuesta al tratamiento no es la adecuada, según la condición. Previo a la modificación de la orden, el tribunal recibirá un informe del director del servicio o nivel de cuidado, especificando las razones por las cuales la orden debe ser modificada. El tribunal ordenará la celebración de una vista, para la cual el adulto será notificado y tendrá la oportunidad de expresarse cuando se esté reconsiderando la orden de tratamiento compulsorio. El adulto deberá estar acompañado de un representante legal para la celebración de la vista.

Si el tribunal revoca la orden de tratamiento compulsorio u ordena que el adulto sea hospitalizado, un alguacil llevará a cabo las gestiones necesarias para coordinar la transportación del adulto.

Artículo 4.11.- Tratamiento Compulsorio.-

Aquellas personas que como resultado de la evaluación inicial, no requieran el nivel de cuidado de la intensidad de hospitalización, pero si representa riesgo para sí, otros o la propiedad y requiera de un nivel de cuidado de mayor autonomía, el psiquiatra y el equipo de profesionales inter o multidisciplinario, recomendará al tribunal que ordene su participación compulsoria en el nivel de tratamiento menos restrictivo y de mayor autonomía, so pena de incurrir en un desacato al tribunal, de no asistir al mismo. La institución que tenga a cargo la administración del tratamiento compulsorio, vendrá obligada a informar al tribunal sobre la comparecencia y el progreso del tratamiento o evolución de la condición clínica. Los informes serán sometidos al tribunal trimestralmente, hasta que la situación de la persona por sus síntomas y signos lo justifiquen, y este informe pueda mover al tribunal a tomar una determinación de que la persona no representa un riesgo para sí, para otros y la propiedad.

Artículo 4.12.- Ingreso Involuntario a Hospitalización.-

Todo adulto que reúna los criterios necesarios para recibir servicios de salud mental, pero que no consienta o no esté capacitado para consentir a tales servicios, será evaluado para que se determine su ingreso de forma involuntaria a una institución proveedora. Dicha evaluación requerirá la intervención del tribunal. El tribunal ordenará una evaluación directa por un psiquiatra y en consulta con el equipo inter o multidisciplinario, que determinará si el adulto debe recibir tratamiento, recuperación y rehabilitación para su trastorno mental.

Ninguna persona será ingresada de forma involuntaria, a menos que mediante prueba clara y convincente, que a satisfacción del tribunal evidencie la necesidad de tal ingreso.

Artículo 4.13.- Detención Temporera de Veinticuatro (24) Horas.-

Si como resultado de una observación personal, un agente de seguridad o cualquier otro ciudadano, mayor de dieciseis (16) años edad, tiene base razonable para creer que una persona de dieciocho (18) años o más, requiere de tratamiento inmediato para protegerlo de daño físico a sí, a otros o a la propiedad,

podrá presentar ante el Tribunal de Primera Instancia con competencia, una petición juramentada de detención temporera por hasta veinticuatro (24) horas para la evaluación del adulto por un Equipo Interdisciplinario. Tal petición podrá presentarse en el tribunal más cercano a la residencia de la persona que se entiende necesita servicios de salud mental o en el tribunal cercano al lugar donde se encuentre dicha persona.

El tribunal podrá conceder tal petición, siempre que la petición juramentada contenga y fundamente lo siguiente:

(a) las razones detalladas que den base para aseverar que el adulto debe ser ingresado de forma involuntaria, incluyendo una descripción de los actos o peligros significativos que sustenten dicha aseveración, así como el lugar y fecha en que los actos ocurrieron, con los nombres, dirección exacta, número de teléfono y datos personales de los testigos de los hechos, si algunos;

(b) el nombre y dirección del cónyuge, el tutor legal o el familiar más cercano; y si no hubiere ninguno de éstos, el nombre o la dirección de cualquier otra persona, entidad o institución interesada en el adulto sujeto a evaluación para ingreso involuntario. Si el peticionario no pudiese suplir los nombres y las direcciones correspondientes, deberá indicar las gestiones que fueron hechas para obtener esta información y los pasos específicos que se siguieron aún cuando hubieren sido infructuosos; y

(c) la relación entre el peticionario y el adulto sujeto a ingreso involuntario, así como una declaración del peticionario, sobre si tiene o no algún tipo de interés con dicho adulto, tal como sería el caso, pero no limitado a, algún interés económico o litigioso, ya sea de naturaleza civil o criminal.

Una vez presentados los requisitos antes mencionados y evaluados los méritos de la petición, el tribunal podrá expedir una Orden de Detención Temporera, por un término no mayor de veinticuatro (24) horas.

Una vez el adulto llegue a la institución proveedora, podrá ser mantenido bajo observación. Se le evaluará y se le dará el tratamiento indicado, según la severidad de los síntomas y signos en el momento por un período que no excederá las veinticuatro (24) horas. Esta Orden quedará sin efecto dentro de los tres (3) días naturales a partir de su expedición.

Si a base del resultado de la evaluación, observación, el psiquiatra, en consulta con el equipo inter o multidisciplinario, determina que el adulto no reúne los criterios de hospitalización, se le dará de alta inmediatamente y se le referirá a otro nivel de cuidado, si fuese necesario y se notificará al tribunal sobre tal determinación y las recomendaciones pertinentes, dentro de un término no mayor de setenta y dos (72) horas.

Si por el contrario, el psiquiatra, en consulta con el equipo inter o multidisciplinario, determina que la hospitalización es el nivel de cuidado indicado, deberá expedir una certificación de tal determinación para que el familiar más cercano, su tutor legal o el representante de la institución, según aplique, gestionen la solicitud de ingreso involuntario.

Artículo 4.14.- Petición de Ingreso Involuntario por un Máximo de Quince (15) Días.-

Toda Petición de Ingreso Involuntario por un máximo de quince (15) días, deberá ser radicada en el tribunal, dentro de las veinticuatro (24) horas dispuestas en la Orden de Detención Temporera, previamente emitida por el tribunal. La misma deberá ir acompañada por un Certificado del psiquiatra, que se conocerá como la Primera Certificación y la cual establecerá que el adulto reúne los criterios para ingreso involuntario y hospitalización de inmediato en una institución hospitalaria o a cualquier otra institución proveedora, para recibir tratamiento. Dicha Primera Certificación establecerá:

(a) que el psiquiatra, en consulta con el equipo inter o multidisciplinario evaluaron al adulto dentro de las veinticuatro (24) horas previas a la presentación de la Petición de Ingreso;

(b) las observaciones y la determinación del psiquiatra y el equipo inter o multidisciplinario, a los efectos de que el adulto reúne los criterios de ingreso, según establecidos en esta Ley;
(c) evidencia de que se le ha entregado copia al adulto de los derechos establecidos en esta Ley; y
(d) los nombres y datos profesionales de los integrantes del equipo inter o multidisciplinario interventor.

Una vez recibida la Primera Certificación, el tribunal expedirá una Orden de Ingreso Involuntario que no excederá el término de quince (15) días y sujeto a lo que se dispone más adelante, la cual se conocerá como Orden de Ingreso Involuntario por quince(15) días. Al expedir la orden, el tribunal señalará una vista de seguimiento dentro de los próximos cinco (5) días laborables, con el propósito de evaluar la continuación o cese del Ingreso Involuntario. El tribunal deberá informar la fecha, hora y lugar de la vista al adulto, a su familiar más cercano o a su tutor legal, si lo tuviere.

Si en la vista el tribunal determina que el adulto debe continuar recibiendo servicios de tratamiento de forma involuntaria, la primera Orden de Ingreso continuará en efecto hasta cumplirse el término inicialmente establecido de los quince (15) días. Cuando el tribunal, a base de las recomendaciones del equipo terapéutico y la evidencia presentada, determine que no debe continuar el ingreso involuntario, ordenará el alta inmediata del adulto. No obstante, podrá ordenar la participación de la persona en otro nivel de cuidado menos restrictivo y de mayor autonomía, de ser recomendado para así evitar que el adulto se cause daño a sí mismo, a otro y a la propiedad.

Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la expedición de la Primera Orden de Ingreso Involuntario, se le dará copia de la Primera Certificación y de la orden emitida por el tribunal al adulto, al familiar encargado, al tutor legal, o al abogado o representante de éste, según sea el caso.

Artículo 4.15.- Petición para Orden de Extensión de Ingreso Involuntario.-

Cuando sea necesario, el tribunal podrá ordenar una extensión de la hospitalización, que no excederá el término de quince (15) días adicionales. A tales efectos, el Director de la institución de salud mental o su representante, a instancia propia o a petición de un familiar o tutor legal de la persona, presentará en el tribunal una Petición de Orden de Extensión de Ingreso Involuntario. Dicha petición estará acompañada por una Segunda Certificación, emitida por un psiquiatra, en conjunto con el equipo inter o multidisciplinario. En aquellos casos en que el adulto esté recibiendo servicios de desintoxicación, esta Segunda Certificación podrá ser emitida por un médico, en conjunto con un equipo inter o multdisciplinario. La petición deberá ser presentada al tribunal hasta tres (3) días antes de finalizar el período inicial de quince (15) días. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la presentación de la Petición de Orden de Extensión Ingreso Involuntario, el tribunal, previa celebración de vistas, determinará si procede el segundo período de hospitalización así solicitado. Mientras ocurre este proceso, el adulto se mantendrá hospitalizado.

Esta Certificación deberá contener lo siguiente:

(a) evidencia del diseño e implantación del Plan Individualizado de Tratamiento del equipo inter o multidisciplinario;
(b) una declaración de que el psiquiatra, en conjunto con el equipo inter o multidisciplinario, reevaluó al adulto, a tenor con el plan y se determinó la necesidad de que el adulto continué recibiendo servicios de forma involuntaria;
(c) una elaboración detallada del Plan Individualizado de Tratamiento revisado, que incluya un pronóstico razonable de los beneficios que se espera que el adulto reciba durante la continuación del ingreso involuntario.
(d) una identificación y tramitación por parte del manejador de casos, de los recursos para ubicar al paciente en el nivel de cuidado necesario y conveniente para su condición, una vez que se haya cumplido con los propósitos del tratamiento.
(e) un Plan de Egreso trabajado por el manejador de casos y el equipo terapéutico, copia del cual

se le entregará al paciente o al tutor legal, si lo tuviere.

De haber transcurrido el término inicial de quince (15) días sin que se haya presentado en tiempo ante el tribunal la petición de Extensión de la Orden de Ingreso Involuntario con la certificación correspondiente, la institución procederá a otorgar el alta inmediata del adulto y así lo notificará al tribunal.

Si en la vista el tribunal determina que el adulto debe continuar recibiendo servicios de tratamiento de forma involuntaria, podrá ordenar una extensión de la hospitalización involuntaria por término no mayor de quince (15) días.

Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la expedición de la Orden de Extensión de Ingreso Involuntario, se le dará copia de la Segunda Certificación y de la orden emitida por el tribunal, al adulto, al familiar encargado, al tutor legal, o al abogado o representante de éste, según sea el caso.

Artículo 4.16. – Petición de Alta de Ingreso Involuntario.-

Cualquier adulto que haya sido ingresado de manera involuntaria en una institución proveedora mediante orden del tribunal, podrá radicar una petición al tribunal para que sea dado de alta. La petición de alta podrá ser presentada por el adulto sujeto a ingreso involuntario, o por un familiar, tutor legal o representante de éste. La petición incluirá:

(a) nombre de la persona;

(b) copia de la orden u órdenes de Ingreso Involuntario emitidas por el tribunal;

(c) exposición o justificación para la petición de alta.

Cuando se radique una Petición de Alta, el tribunal deberá señalar una vista dentro de los próximos cinco (5) días siguientes a la radicación. El tribunal indicará la fecha, hora y lugar en donde se habrá de celebrar la vista, enviando copia al adulto peticionario, a su abogado, a su tutor y al Director de la institución proveedora.

Si el tribunal determina que el adulto no debe continuar ingresado de forma involuntaria, será dado de alta y tal determinación será notificada al adulto, a su abogado, a su tutor y al Director de la institución.

Si el tribunal determina que el adulto debe continuar ingresado de forma involuntaria, se podrá continuar con la orden original conforme a las disposiciones de esta Ley.

En los casos en que el tribunal estime necesario, podrá ordenar la transportación del adulto a la institución hospitalaria en un vehículo adecuado a la condición de la persona, dependiendo de la severidad de los síntomas y signos en el momento, a una ambulancia estatal, municipal o privada. El proveedor indirecto de salud mental asumirá el costo de dichos servicios en el caso de aquellas personas que reciban servicios de salud mental bajo la Reforma de Salud.

Artículo 4.17. – Cambio de Status.-

Antes de la adjudicación del caso en que se está ventilando el Ingreso Involuntario, el adulto que recibe servicios en salud mental que haya sido objeto de este ingreso podrá requerir un cambio de status a ingreso voluntario. Dicha petición se acompañará con una certificación del psiquiatra o médico, según aplique, a los efectos de que el adulto que recibe los servicios de salud mental y quien solicita el cambio, está capacitado para consentir y ha emitido su consentimiento de manera informada, según se requiere en esta Ley. Del tribunal aceptar este cambio de status, el equipo terapéutico someterá informes trimestrales sobre el progreso o evolución del trastorno.

Artículo 4.18. – Celebración de Vistas.-

(a) Las vistas se llevarán a cabo ante el tribunal con competencia, a tenor con lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil vigentes.

(b) El adulto deberá estar presente en la vista, excepto cuando renuncie a ello de manera expresa, o cuando mediando su consentimiento y por voz de su abogado renuncie a este derecho.

(c) Si el tribunal motu propio o a petición de una de las partes, cuando medie justa causa mayor, pospone la vista del caso, el adulto continuará recluido pendiente de una orden subsiguiente del

tribunal. La posposición de la vista no se extenderá por más de cinco (5) días naturales.

(d) El adulto tendrá derecho a presentar toda la prueba que estime pertinente para rebatir la continuación de su ingreso de forma involuntaria. Tal prueba podrá consistir en evidencia testifical o documental. A tales fines, el adulto tendrá derecho a someterse a un examen independiente por el profesional de la salud mental de su elección o por uno designado por el tribunal, quien hará una evaluación y emitirá sus recomendaciones al tribunal. Los servicios de dicho profesional serán costeados por el adulto objeto de la petición de ingreso involuntario o cambio de status, por un pariente cercano si lo tuviere, o por el estado, en caso de que el adulto sea indigente.

Artículo 4.19. – Derecho a Representación Legal.-

Todo adulto que sea objeto de una petición de orden de ingreso involuntario, tendrá derecho a estar representado por un abogado o procurador de familia, según su disponibilidad. Si el adulto es indigente y no ha podido contratar un abogado, el tribunal le designará uno de oficio. El abogado designado por el tribunal y su representado deberán contar con tiempo razonable para prepararse para la vista.

Artículo 4.20. – Traslado.-

Cualquier adulto que reciba servicios de salud mental y se encuentre en una institución proveedora, podrá ser trasladado a otra, siempre que dicho traslado fuese necesario y no resulte en detrimento del adulto, siempre y cuando éste y la institución que lo recibirá acepten el traslado. El adulto, el familiar más cercano o su tutor será notificado del traslado, por lo menos tres días anteriores al mismo. Si la vida del adulto está en peligro inminente, el traslado tendrá lugar, y se notificará al familiar más cercano o al tutor, no más tarde de las veinticuatro (24) horas posteriores al mismo. Si el adulto, su tutor o su familiar más cercano tuviese objeciones al mismo, la institución le dará la oportunidad de reconsideración del traslado, de conformidad con el Artículo 2.22 de esta Ley. Durante el proceso de reconsideración del traslado, el adulto permanecerá en la institución proveedora de servicios de salud mental original.

Artículo 4.21. – Pases.-

En aquellos casos en que sea clínicamente necesario o beneficioso el psiquiatra podrá, en conjunto con el equipo inter o multidisciplinario, concederle un pase al adulto ingresado de forma voluntaria o involuntaria, aún cuando no esté en condiciones para ser dado de alta. No será necesario notificar al tribunal en estos casos, pero sí será requerido notificar a la mayor brevedad posible al familiar más cercano o tutor del adulto sobre el pase concedido.

Artículo 4.22.-Altas.-

El psiquiatra a cargo del tratamiento, recuperación y rehabilitación podrá en cualquier momento, dar de alta a cualquier adulto ingresado de forma voluntaria o involuntaria previa notificación al equipo inter o multidisciplinario.

El psiquiatra y el equipo terapéutico, inter o multidisciplinario del adulto a ser dado de alta, le explicarán a él, su familia o tutor, su plan de egreso y las opciones de recuperación, informando al tribunal sobre las determinaciones en los casos en que el tribunal ordenase el ingreso involuntario.

Artículo 4.23.– Abandono de la Institución; Notificaciones.-

Cuando un adulto sujeto a ingreso involuntario abandone la institución sin haber sido dado de alta, el director notificará de inmediato a un agente del orden público, para que proceda a su aprehensión y sea regresado a la institución, además notificará a la familia, al tutor y a la persona que solicitó su ingreso.

Cuando un adulto sujeto a ingreso voluntario abandone la institución sin haber sido dado de alta, el Director notificará de inmediato al familiar o al tutor legal del adulto.

## CAPITULO V.- SERVICIOS TRANSICIONALES PARA ADULTOS.-

Artículo 5.01. – Propósitos de los Servicios Transicionales.-

Los servicios transicionales serán diseñados para proveer experiencias estructuradas, consistentes y especializadas en diferentes niveles de supervisión, que correspondan a la severidad de los síntomas y signos del trastorno que aplique, por edad y género y para lograr que el adulto se adapte a su medio ambiente y pueda participar en otro nivel de cuidado de mayor autonomía, hasta lograr su eventual independencia en la comunidad. Su función principal será proveer servicios de recuperación y rehabilitación, haciendo énfasis en el desarrollo adecuado del manejo de la vida diaria de la persona, además de ofrecer cuidado y custodia de una forma segura y humana.

Artículo 5.02. Servicios Transicionales.-

Las instituciones proveedoras de servicios transicionales, deberán proveer como mínimo lo siguiente:

(a) un cuido y custodia seguros y humanos dentro del ambiente de mayor autonomía posible, de acuerdo a las necesidades de recuperación y rehabilitación del adulto;

(b) el tratamiento, recuperación y rehabilitación individualizado correspondiente, haciendo énfasis en las destrezas necesarias para su condición, la severidad de los síntomas y signos, la etapa de la vida en que se encuentre la persona y su potencial de recuperación y rehabilitación para propiciar una mayor autonomía en su medio ambiente;

(c) una coordinación adecuada con agencias gubernamentales y privadas, para lograr servicios comprensivos para la persona y su familia, conducentes al logro de una mayor autosuficiencia;

(d) atención a la condición de la salud física y mental de los adultos admitidos, al igual que la de su familia;

(e) la promoción de la participación de la familia en el Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación del adulto, al igual que la orientación sobre dicho particular;

(f) una dieta balanceada, de acuerdo a las necesidades especiales de los adultos participantes en los programas; y

(g) un plan de rehabilitación, recreativo, vocacional, ocupacional, según aplique, a ser implantado en el programa o servicio a cargo de personal especializado.

Artículo 5.03. – Manuales de Servicios.-

Toda institución proveedora de servicios transicionales, contará con un manual de servicios, en el cual se consignará, como mínimo, lo siguiente:

(a) los criterios de admisión que deben reunir los adultos que soliciten los servicios;

(b) la edad, sexo, trastorno, diagnóstico y nivel de funcionamiento;

(c) un Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación, elaborado por un equipo inter o multidisciplinario;

(d) el patrón de personal ("staffing pattern") que tendrá la institución, así como las cualificaciones del mismo;

(e) la filosofía del programa y descripción del ambiente;

(f) la modalidad terapéutica o programa de actividades que corresponda;

Artículo 5.04. Niveles, Etapas o Servicios en los que se Desarrollarán los Servicios.-

Los servicios transicionales podrán desarrollarse por niveles, etapas o servicios, de acuerdo a sus necesidades, en el ambiente de mayor autonomía posible, según se haya indicado terapéuticamente.

Los niveles, etapas o servicios que adopte la institución que ofrece servicios transicionales deberán diseñarse de acuerdo con la condición, el diagnóstico y el grado de supervisión requerida por el adulto entendiéndose como tales los servicios de mayor supervisión, los servicios de supervisión moderada, los servicios de supervisión mínima y los servicios en hogares propios o independientes.

Se deberá permitir que los adultos sean referidos directamente al nivel más apropiado a su condición, sin tener que pasar por todos los niveles o etapas.

Artículo 5.05. – Ingreso Involuntario; Tratamiento Compulsorio.-

Todo adulto que reúna los criterios necesarios para recibir servicios transicionales, de acuerdo a las evaluaciones y recomendaciones del psiquiatra y del equipo terapéutico inter o multidisciplinario, pero que no consienta o no esté capacitado para consentir a tales servicios, será objeto de una petición de tratamiento compulsorio, o ingreso involuntario ante el tribunal, de conformidad a los procedimientos dispuestos en esta Ley para esos fines.

## CAPITULO VI.- SERVICIOS AMBULATORIO DE SALUD MENTAL PARA ADULTOS.-

Artículo 6.01. – Servicios Ambulatorio de Salud Mental para Adultos.-

Todo adulto, que solicita a un proveedor indirecto para comenzar a recibir un servicio de mayor autonomía de salud mental, ya sea con o sin su consentimiento, en los diferentes niveles de cuidado, recibirá durante las primeras setenta y dos (72) horas los siguientes servicios entre otros:

(a) un examen físico completo;

(b) un análisis de laboratorios;

(c) una evaluación psiquiátrica;

(d) una evaluación psicológica ;

(e) una evaluación social; y

(f) una Evaluación Global de Funcionamiento (GAF- EJE V del DSM IV, el ICD-10 o el vigente al momento)

Los resultados de estas pruebas, análisis y evaluaciones, formarán parte del expediente clínico del adulto. Dichos resultados se utilizarán para establecer el plan individualizado de tratamiento en el nivel de cuidado de mayor autonomía que corresponda. Los procedimientos serán consignados en el reglamento que para estos fines se promulgará.

Las disposiciones de este artículo no serán de aplicación en el caso de oficinas privadas de profesionales de salud mental. Dichos profesionales se asegurarán en este caso, de cumplir con los estándares aplicables a sus respectivas profesiones, tomando como base las siguientes guías:

(a) Psiquiatra - será responsable de una evaluación psiquiátrica que determinara la disposición inmediata del caso (continuar con el tratamiento ambulatorio o referirle a otro nivel de cuidado según lo requieran sus síntomas y signos). Sus notas clínicas reflejaran los síntomas y signos, el diagnostico, el curso clínico y la disposición final del caso, entre otros.

(b) Médico Generalista o Especialista - si el paciente presentase síntomas y signos mentales, que no fuesen de su incumbencia profesional primaria, será su responsabilidad referirlo a un profesional de la conducta, de acuerdo a la naturaleza y severidad de los síntomas y signos. Sus notas clínicas reflejaran los síntomas y signos, el diagnóstico o impresión diagnóstica, el curso clínico y disposición final, entre otros.

(c) Psicólogo - será responsable de una evaluación psicológica completa, la cual determinará la disposición final (mantenerlo en ambulatorio o referirlo a otro nivel de cuidado). Si durante la evaluación o tratamiento del paciente, surgiesen síntomas y signos que no fuesen de su incumbencia primaria, se referirá al paciente al nivel de cuidado que corresponda. Sus notas clínicas reflejarán los síntomas, signos, diagnóstico, curso clínico y disposición final del caso, entre otros.

(d) Trabajador Social Clínico- será responsable de una evaluación social en la cual se identifique información relevante a los factores y recursos que afecten la condición del adulto, incluyendo su desarrollo escolar, ocupacional, y ajuste social; historial medico familiar que incluya además, la presencia a ausencia de trastornos mentales, entre los que están comprendidos las

relacionados a sustancias; y el perfil familiar y los recursos físicos y económicos con los que se cuenta.

Artículo 6. 02.- Evaluación Inicial; Plan de Tratamiento y Recuperación en Otro Nivel de Cuidado.-

Todo adulto evaluado o que haya sido hospitalizado y que por las recomendaciones del psiquiatra y el equipo terapéutico, Inter o multidisciplinario, se determine que necesita de tratamiento, dentro de otro nivel de cuidado de mayor autonomía, se le revisará el plan de egreso o las recomendaciones de la evaluación y se pondrá en práctica el mismo dentro de las veinticuatro (24) horas posteriores a la admisión.

La evaluación y sus recomendaciones o el plan de egreso formarán parte del expediente clínico del adulto en el nivel de cuidado que aplique. Dichos resultados se utilizarán para establecer el Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación, el cual se revisará de acuerdo al diagnóstico, según la severidad de los síntomas y signos para cada nivel de cuidado, según las mejores las prácticas en el campo de la salud mental. Este plan será formulado por un equipo inter o multidisciplinario, no más tarde de los quince (15) días siguientes a su ingreso y se revisará cada quince (15) días, según los estándares para cada nivel de cuidado o cuando ocurra un cambio sustancial. Una vez haya alcanzado los objetivos de su Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación, continuará en otro nivel de cuidado de mayor autonomia, según se lo permita su condición.

Artículo 6.03. - Manuales de Servicios.-

Toda Institución proveedora de servicios de mayor autonomía, contará con un manual de servicios, en el cual se consignará como mínimo, lo siguiente:

(a) los criterios de admisión que deben reunir los adultos que soliciten los servicios;
(b) la edad, sexo, trastorno, diagnóstico y nivel de funcionamiento;
(c) un Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación, elaborado por un equipo inter o multidisciplinario;
(d) el patrón de personal ("Staffing pattern") que tendrá, la institución, así como las cualificaciones del mismo;
(e) la filosofía del programa y descripción del ambiente de la institución;
(f) la modalidad terapéutica o programa de actividades que corresponda;
(g) protocolo para evaluar riesgo de suicidio, con sus debidas disposiciones de contingencia;
(h) Procedimientos para Radicación y Solución de Quejas y Querellas, en la cual se describa en lenguaje sencillo los pasos a seguir por los adultos, los menores, y sus familias, que necesiten utilizar estos mecanismos.

Las disposiciones de este artículo tampoco serán de aplicación a las oficinas de profesionales de salud mental en la práctica privada, sin embargo, éstos deberán orientar al paciente sobre las opciones de tratamiento para su condición, sobre las que ellos recomiendan y sobre cuales de éstas podrían proveerle, a base de los síntomas y signos, e impresión diagnóstica al momento de la evaluación inicial

## CAPITULO VII.- CARTA DE DERECHOS DE LOS MENORES QUE RECIBEN SERVICIOS DE SALUD MENTAL.-

Artículo 7.01. – Declaración de Derechos.-

Las disposiciones de este Capítulo deben ser interpretadas de manera tal que se proteja y promueva la dignidad del ser humano mediante el reconocimiento de los derechos esenciales para su tratamiento, recuperación y rehabilitación.

Artículo 7.02. – Conservación de los Derechos Constitucionales.-

Todo menor continuará disfrutando de todos los derechos, beneficios y privilegios garantizados por

la Constitución de los Estados Unidos de América, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las Leyes federales y estatales, mientras esté recibiendo tratamiento, recuperación y rehabilitación, así como durante el proceso de ingreso, traslado y alta de una institución proveedora.

Artículo 7.03. – Presunción de Competencia.-

Se presume que todo menor es competente mentalmente, salvo que medie una determinación del tribunal disponiendo lo contrario. La determinación judicial de incapacidad bajo el Artículo 703 del Código Civil de Puerto Rico, según enmendado, será distinta y separada del procedimiento judicial para determinar si el menor debe ser sujeto a un ingreso involuntario. Se presumirá que todo menor con trastornos mentales o emocionales tiene el potencial de recuperación y rehabilitación al recibir los servicios adecuados a su diagnóstico y severidad de los síntomas y signos.

Artículo 7.04. - Limitación de Derechos.-

Los derechos establecidos en esta Ley para los menores que reciben servicios de salud mental le son aplicables a los menores incursos en faltas, recluidos en instituciones juveniles y a los menores ofensores en estado de detención, cuando éstos no conflijan con las medidas de seguridad impuestas por el tribunal.

Artículo 7.05. – Derechos de Carácter General.-

El menor que recibe servicios de salud mental tendrá derecho a:

(a) Recibir atención médica, psiquiátrica y psicológica, en su fase preventiva, de tratamiento, recuperación y rehabilitación, para la protección de su salud y su bienestar general;

(b) Recibir una educación y adiestramiento, cuando su condición se lo permita, que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y que se le reconozca y respete sus derechos humanos. Esto se hará en colaboración con las agencias gubernamentales que tengan responsabilidad.

(c) Preparar (apresto pre-vocacional) o adiestrar para obtener educación vocacional, ocupacional o empleo, de acuerdo a su capacidad de funcionamiento general, que le permita desarrollar su potencial, según aplique, libre de discrimen por razón de trastorno mental;

(d) Actuar de manera individual o colectiva en la búsqueda de soluciones a sus agravios y problemas; y

(e) Respetar su autonomía en todo lo relacionado a los asuntos que afecten su vida, progreso, tratamiento, recuperación y rehabilitación, de acuerdo a su grado de funcionamiento general.

Artículo 7.06. – Derechos Específicos.-

El menor que recibe servicios de salud mental será acreedor de los siguientes derechos específicos:

(a) Acceso a los Servicios:

Todo menor tendrá acceso a los servicios de salud mental, a tono con las sub-especializaciones por etapa de vida, género, edad y el nivel de cuidado, a tenor con su diagnóstico, y la severidad de los síntomas y signos en el momento. Los servicios deben proveerse en un orden continuado, para lograr la recuperación en un nivel de funcionamiento razonable.

La utilización de los servicios de salud mental, se determinará a base de la necesidad clínica justificada, la cual se fundamentará a su vez en el diagnóstico y severidad de los síntomas y signos del trastorno emocional, según se defina en el manual de clasificaciones vigente.

También tendrá derecho a recibir los servicios terapéuticos de farmacoterapia, psicoterapia, servicios de apoyo y otros consistentes con su diagnóstico y la severidad de los síntomas y signos.

A estos efectos, los menores que reciben servicios de salud mental no serán objeto de discrimen o prejuicio de índole racial, social, religiosa, y de diagnostico, y tendrán acceso a los servicios que fuese necesarios de acuerdo con sus síntomas y signos. Este derecho no podrá ser limitado por la existencia de alguna condición o impedimento físico. No existirá distinción entre una condición mental y una condición física en términos de acceso a los servicios necesarios.

(b) Notificación de Derechos; Limitaciones:

Toda persona de doce años o más, que se identifique que necesita servicios de salud mental, así como los que soliciten y reciban servicios de salud mental, deben ser orientados sobre los derechos aquí consignados durante la evaluación o en el momento de la intervención en que estuviese mentalmente capacitado. Se orientará a los padres o al tutor, y al menor cuando la capacidad mental de éste lo permita y se entregará una copia de los mismos.

No aplicará limitación alguna entre un menor, su abogado o el tribunal, o entre aquél y otro individuo, cuando la comunicación trate sobre asuntos relacionados a procedimientos administrativos o judiciales.

(c) Negativa para recibir tratamiento:

Toda persona de catorce (14) años de edad o más, tiene derecho a solicitar tratamiento, hasta un máximo de seis (6) sesiones, sin el consentimiento de sus padres. Este derecho aplicará a menores entre las edades de doce (12) a trece (13) años de edad, si el equipo terapéutico determina que tiene la capacidad para tomar la decisión. En el caso de discrepancia entre los padres o tutores y el menor de edad, se resolverá a favor de lo mas razonable para su bienestar, a tenor con las recomendaciones del equipo terapéutico. Este derecho estará limitado cuando se desprenda de la evaluación o la intervención del profesional que por la severidad de sus síntomas y signos, se determine que pueda causarse daño a sí misma, a otros o a la propiedad, a informar a sus padres o al tutor legal.

El profesional de salud mental será asignado para aquellos servicios contratados en la póliza de la persona que los recibe según la severidad de los síntomas y signos, y el diagnóstico.

A su vez, toda solicitud de servicios que no responda a una emergencia, deberá ser atendida dentro de los próximos cinco (5) días laborables de efectuada la petición por todos los proveedores de servicios de salud mental.

(d) Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación:

Todo menor tendrá derecho a que se le diseñe un Plan Individualizado de Tratamiento que contemple el nivel de cuidado de menor intensidad, según la severidad de su condición.

El plan estará basado en una evaluación clínica de las fortalezas y necesidades del menor y su familia. Además, el plan deberá ser extendido al contexto del hogar, la escuela y la comunidad.

El Plan Individualizado de Tratamiento será formulado por escrito, dentro de las primeras setenta y dos (72) horas siguientes a la admisión o ingreso del menor y revisado cuando ocurra un cambio sustancial en la condición del menor, y al menos dentro de los primeros diez (10) días, como resultado del trabajo Inter o multidisciplinario de los profesionales encargados. El menor que recibe los servicios participará en la formulación y revisión del plan, en el grado en que sea posible dicha participación. Siempre se requerirá la participación del familiar más cercano, ya sea el padre o madre con patria potestad o custodia, su tutor legal o la persona que tenga la custodia provisional, en la formulación y revisión del Plan Individualizado.

Un profesional en salud mental, con funciones de manejador de casos será responsable de dar seguimiento a la implantación del Plan Individualizado de Tratamiento y de accesar todos los servicios necesarios para su recuperación. Se consignará el nombre de dicho profesional en el plan, el cual formará parte del expediente clínico del menor. El expediente clínico deberá contener la firma de todos los profesionales que participen en la elaboración del plan y del menor o los miembros de su familia que le representen en la confección del mismo.

(e) Consideraciones Especiales; Menores:

Todo proveedor de servicios de salud mental, deberá atender las necesidades especiales para los niños desde su nacimiento a los trece (13) años, y a los adolescentes de catorce (14) a dieciocho (18) años de edad y la interrelación de los signos y síntomas con el proceso normal de crecimiento y desarrollo con sus trastornos emocionales.

(f) Nivel de Cuidado de Menor Intensidad y Mayor Autonomía:

Los proveedores de servicios de salud mental deberán considerar como de mayor beneficio el mantener a los niños y adolescentes con trastornos emocionales de severos que puedan permanecer con las familias; o en ambientes parecidos o en la comunidad antes de considerar las hospitalizaciones, que conllevan la separación del núcleo familiar.

(g) Servicios de hospitalización y segregación de cuidado para niños y adolescentes:

A los niños de 0 a 12 años de edad deben proveérsele los servicios a tenor con su edad y sexo en clínicas separadas y los servicios hospitalarios deben estar en unidades o instalaciones separadas de los adolescentes y adultos.

A los adolescentes de 13 a 18 años de edad, deben proveérsele los servicios a tenor con su edad y sexo, en clínicas separadas, y los servicios hospitalarios deben estar en unidades o instalaciones separadas de los niños y adultos. Se prohibe en todo momento, que se mezclen estas poblaciones, según lo anteriormente consignado.

(h) Consentimiento Informado del Menor y del Padre o Madre con Patria Potestad o Custodia, del Tutor Legal o de la Persona que tenga la Custodia Provisional:

Todo menor ingresado, su padre o madre con patria potestad o custodia, el tutor legal o la persona que tenga la custodia provisional, tendrá derecho a conocer todo lo relativo a los servicios o tratamientos propuestos en el Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación, Inter o multidisciplinario, diseñado por una Institución proveedora de Servicios en Salud Mental, antes de consentir al mismo.

Todo servicio ofrecido al menor, será explicado por el psiquiatra de niños y adolescentes de forma tal, que pueda comprender la información relacionada al mismo. Se consignará en su expediente clínico, un resumen de tal explicación y que a juicio del profesional a cargo, comprendió la explicación suministrada.

Siempre que un menor reciba servicios de salud mental, indistintamente de la etapa del proceso terapéutico, se requerirá que el padre o madre con patria potestad o custodia, el tutor legal o la persona que tenga la custodia provisional ofrezca el consentimiento informado por escrito para que el menor pueda recibir dicho servicio.

El mínimo de información requerida para que el consentimiento se considere informado será el siguiente:

(1) el diagnóstico y descripción clínica de la condición de salud;

(2) el tratamiento recomendado;

(3) los riesgos y consecuencias de aceptar o rechazar el tratamiento;

(4) otras alternativas de tratamiento que, aunque menos indicadas, estén disponibles;

(5) beneficios, riesgos y consecuencias de las alternativas de tratamiento;

(6) el pronóstico correspondiente; y

(7) la posibilidad de efectos secundarios y daños irreversibles, como resultado de tratamientos o uso de medicamentos recomendados.

A manera de excepción, en el caso de una Emergencia Médica, psiquiátrica o dental, los servicios necesarios para estabilizar la situación de emergencia podrán ser ofrecidos sin que medie el consentimiento informado del menor o de su padre o madre con patria potestad o custodia, el tutor legal o la persona que tenga la custodia provisional. La razón y determinación de emergencia será consignada en el expediente clínico del menor. Disponiéndose, que será necesario obtener el consentimiento del padre o madre con patria potestad o custodia, el tutor legal o la persona que tenga la custodia provisional a la mayor brevedad.

(i) Autonomía Condicionada para Aceptar el Tratamiento:

Todo menor de 14 años de edad o más tiene derecho a aceptar tratamiento, excepto cuando se desprenda de la evaluación o de la intervención que con ella se tenga y que por la severidad de sus síntomas y signos, se determine que presenta riesgos contra sí misma, contra otros y la propiedad. Este

derecho aplicará a menores entre las edades de doce (12) a trece (13) años de edad, si el equipo determina que tiene la madurez para tomar la decisión. En caso de discrepancia entre los padres o tutores y el menor de edad, o de discrepancia entre el adulto y su tutor, se resolverá a favor de lo más razonable para su bienestar, de acuerdo a las recomendaciones de los profesionales.

El Director o su representante le informará al padre o madre con patria potestad o custodia, el tutor legal o la persona que tenga la custodia provisional, sobre los servicios y tratamientos alternos disponibles, los riesgos y consecuencias que puede sufrir dicho menor al rehusar recibir tales servicios y el pronóstico de recibir o negarse a recibir los mismos. No obstante, en caso de que los servicios requeridos por el Plan de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación, Inter o multidisciplinario del menor sean necesarios para prevenir una situación de Emergencia Psiquiátrica o Médica en la cual dicho menor pueda causarse daño a sí mismo, a otros, o a la propiedad, o cuando dicho servicio haya sido ordenado por el tribunal, éstos le serán administrados. El psiquiatra consignará en el expediente clínico las circunstancias de emergencia en las cuales fue necesario ordenar dicho servicio o tratamiento. Se le notificará al menor sobre esta decisión tan pronto como éste pueda comprender la información, así como al padre o madre con patria potestad o custodia o al tutor legal. Esta notificación será consignada en el expediente clínico.

Bajo ninguna circunstancia se emitirá una orden para dar o negar un servicio, o para administrar medicamentos, como medida de castigo o como condición para que el menor sea dado de alta.

(k) Libertad de Comunicación:

Todo menor que reciba servicios de salud mental en una Institución Proveedora, tendrá derecho a comunicarse en privado, sin censura y sin impedimentos, con las personas de su selección, salvo con aquellas personas que resultan ser victimarios de abuso físico, psicólogos o sexual con relación al menor y cuando a determinación del equipo terapeútico interventor dicha comunicación resultaría en deterioro de la condición del menor.

(1) Correspondencia.- El Director de la Institución proveedora se asegurará que la correspondencia sea recibida y depositada en el correo. Se le proveerá a los menores ingresados en estas instituciones material para escribir y estampillas de correo, cuando no tengan medios para procurárselos por sí. Todas las cartas, indistintamente de a quién vayan dirigidas, serán enviadas a su destinatario, sin ser examinadas por las autoridades de la Institución proveedora de servicios en salud mental. Se entregarán las contestaciones a dichas cartas al menor, indistintamente de su remitente y sin examen por las autoridades de la institución en salud mental. En el caso de que el menor no sepa leer o escribir, y a petición de éste, se le asistirá cuando desee ejercer su derecho a comunicarse por escrito.

(2) Teléfono- El Director de la Institución proveedora se asegurará que los teléfonos estén accesibles y establecerá por escrito los lugares y horas para el uso razonable de los mismos. Se le proveerá fondos para el uso razonable del teléfono, ya sea para llamadas locales o de larga distancia al menor que no tenga medios de procurárselos por sí.

(3) Visitas- El Director de la Institución proveedora será responsable de garantizar la existencia de un lugar adecuado para que los menores sujetos a hospitalización puedan recibir visitas. A esos fines hará público el horario y lugar para las mismas.

La institución establecerá las normas para la comunicación, a través de otros medios tales como facsímil, correo electrónico o mensajería.

No obstante lo anterior, la comunicación escrita, el uso del teléfono, y las visitas a los menores, podrán ser razonablemente limitadas por el director de la institución o su representante cuando medie una determinación clínica que le justifique, siempre que tenga tal limitación, el propósito de proteger al menor o a terceros de recibir daño, persecución, hostigamiento o intimidación. La decisión de limitar este derecho será considerada por el equipo Inter o multidisciplinario y consignada en el expediente clínico, debidamente justificada y notificada al menor.

No aplicará limitación alguna entre el menor, su padre o madre, su representante, tutor legal, su abogado o el tribunal o entre el menor y otro individuo cuando la comunicación trate sobre asuntos relacionados a procedimientos administrativos o judiciales.

(l) Efectos Personales:

Todo menor que reciba servicios de salud mental en una Institución proveedora, podrá poseer, usar y mantener en un lugar asignado y seguro provisto para ello, sus efectos personales. La posesión y uso de cierta clase de propiedad personal podrá ser limitada por el director de la Institución proveedora o su representante cuando sea necesario para proteger al menor y a otros de daño físico. Cuando el menor sea dado de alta, toda su propiedad personal le será devuelta.

(m) Dinero y Depósitos:

Todo menor, su padre o madre, representante o tutor legal tendrá derecho a manejar sus bienes incluyendo sus pertenencias de valor, mientras reciba servicios en una institución de salud mental. La institución hospitalaria o residencial proveedora de servicios establecerá aquellas normas y procedimientos necesarios, de acuerdo con el reglamento que para estos efectos promulgue la Administración, para asegurar que el dinero de los menores que reciben servicios en la misma estén protegidos contra hurto, perdida o apropiación ilegal. A esos efectos las normas y procedimientos deberán incluir lo siguiente:

1) cualquier menor que reciba servicios en estas instituciones podrá usar su dinero, según tenga a bien disponer su padre o madre con patria potestad su tutor legal o representante autorizado.
2) no se designará al personal del hospital o institución residencial, para recibir dinero por concepto de seguro social, pensiones, anualidad, fideicomisos o cualquier forma directa de pago o asistencia del menor ingresado en una Institución proveedora de Servicios de Salud mental, salvo en aquellos casos en que mediante orden del tribunal se designe al personal como custodio de dicho dinero, además podrá ocurrir una designación en virtud de una Ley o reglamento, relativa a la disposición de derechos por Seguro Social, pensión o cualquier otro beneficio; y
3) cualquier padre o madre, tutor legal o representante de un menor en una institución hospitalaria o residencial proveedora de servicios de salud mental, podrá solicitar el depósito de cualesquiera fondos pertenecientes a ésta en cualquier institución financiera de Puerto Rico.

(n) Labor o Trabajo:

Ningún menor podrá ser obligado a llevar a cabo labor o trabajo alguno en beneficio de la Institución proveedora. No obstante, el menor podrá voluntariamente consentir a prestar labor o trabajo, siempre y cuando el profesional de salud mental responsable por la implantación del plan de Tratamiento Recuperación y Rehabilitación, determine que el trabajo es consistente con su Plan Individualizado de Tratamiento y Rehabilitación Interdisciplinario y ello sea en beneficio del menor. Con el propósito de proteger el derecho a la privacidad, ningún paciente será identificado públicamente por su condición mental.

Se dará cumplimiento estricto a la Ley Núm. 230 de 12 de mayo de 1942, según enmendada, conocida como "Ley que Reglamenta el Empleo de Menores", en el caso de los menores que lleven a cabo cualquier trabajo o labor en la institución, que pueda conllevar beneficios económicos, así como cualquier otra Ley federal o estatal aplicable.

Se podrá requerir a cualquier menor llevar a cabo labores o tareas de mantenimiento de su habitación o cualquier otra que sea parte de su Plan de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación Inter o multidisciplinario, siempre y cuando ello sea para beneficio del menor. La asignación de estas tareas o labores serán consignadas en el expediente clínico como parte del Plan de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación y las mismas serán discutidas con dicho menor. Bajo ninguna circunstancia se utilizará la existencia de enfermedad cobinjado con esta Ley o el plan de tratamiento como justificación para recaudar fondos para la institución.

No obstante lo antes expuesto, bajo ninguna circunstancia podrá requerirse de un menor llevar a cabo labores o tareas de tipo alguno como medida de represalia o castigo o para beneficio exclusivo de la institución.

(ñ) Quejas y Querellas:

Todo menor podrá, por sí mismo o mediante su padre o madre con patria potestad o custodia del menor, su tutor legal, o la persona que tenga la custodia provisional, ejercer su derecho a notificar quejas o querellas en relación a la violación de los derechos descritos en esta Ley. Además, se advertirá el derecho a un procedimiento imparcial en el cual dichas quejas o querellas serán consideradas y dilucidadas de manera justa y expedita. Cuando el peticionario no esté conforme con la determinación podrá acudir al tribunal de primera instancia.

Toda Institución proveedora establecerá un sistema de manejo de querellas relativas al trato y servicios recibidos que ofrece a tenor con esta Ley. El procedimiento establecido para presentar quejas y querellas será informado al menor que recibe servicios de salud mental, a su padre o madre a su tutor a sus familiares a los visitantes y al personal que labora en la institución.

Toda querella será atendida y dilucidada en un término no mayor de treinta (30) días. Se notificará por escrito sobre la determinación final de la querella al padre o madre con patria potestad o custodia, al o tutor legal, así como al propio menor, aún en los casos en éste haya sido dado de alta.

(o) Procedimientos Experimentales o Exploratorios:

Ningún menor será sometido a procedimientos experimentales o exploratorios que no estén aprobados por los organismos federales y estatales pertinentes. Para participar en los mismos deberá obtenerse de su padre o madre con patria potestad o del tutor legal de éste, según fuera el caso, su consentimiento informado escrito y legalmente efectivo.

El mínimo de información que deberá ser brindada al padre o madre con patria potestad o custodia o al tutor legal será en un lenguaje comprensible y que no resulte coercitivo y consistirá en:

(1) una declaración de que el procedimiento constituye un experimento o investigación científica; los propósitos del mismo; el tiempo de duración de la participación del menor en el procedimiento; una descripción de los procedimientos que serán utilizados y qué parte de éstos son experimentales;

(2) los riesgos y molestias que puedan ser razonablemente previsibles;

(3) una descripción sobre los beneficios razonablemente esperados para el participante o para otros;

(4) la divulgación de procedimientos o tratamientos alternos que podrían beneficiar o resultar más ventajosos al participante que el procedimiento experimental o exploratorio;

(5) una declaración de que la identidad del menor se mantendrá bajo total confidencialidad;

(6) en investigaciones que conlleven riesgos, se informará si se ofrecerá compensación o tratamiento médico por daños resultantes del procedimiento y en qué consistirán los tratamientos y el lugar dónde obtener información adicional sobre ellos;

(7) una explicación respecto a las personas a notificar, de tener preguntas el menor o su padre o madre con patria potestad o custodia o su tutor legal, en cuanto a sospechas de daños relacionados con el procedimiento;

(8) una declaración de que la participación en el procedimiento es voluntaria y que la negativa a participar o a descontinuar en cualquier momento el mismo no conllevará penalidad o pérdida de beneficio alguno a que tenga derecho el participante. El menor sujeto a cualquier procedimiento experimental o exploratorio deberá ser notificado a través de su padre o madre con patria potestad, su tutor legal o la persona con la custodia provisional deberá ser notificado por escrito, por lo menos setenta y dos (72) horas antes de dar comienzo al procedimiento, excluyendo de este término los sábados, domingos y días feriados; y

(9) cualquier otro criterio establecido mediante reglamento por el Administrador.

El menor, así como su padre o madre con patria potestad o custodia, su tutor legal o la persona que tenga la custodia provisional, tiene derecho a dar por terminada su participación en el procedimiento experimental antes o durante el procedimiento.

(p) Investigaciones Científicas:

Cualquier petición para llevar a cabo una investigación científica relacionada con el adulto que reciben servicios de salud mental en instituciones públicas o privadas, será dirigida al Administrador y al Director de la Institución proveedora de estos servicios, respectivamente, quienes solicitará la aprobación del Comité Evaluador de Propuestas de Investigación de la institución que solicita. Para luego evaluar las propuestas sometidas para investigación de acuerdo a su recomendación. Esto según los estándares establecidos por el Gobierno Federal y estatal para los procesos de investigación científica. El comité emitirá su recomendación dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la misma. Posteriormente, el Administrador o el Director notificará a la parte interesada su determinación sobre la investigación.

Ningún menor será sometido a investigaciones científicas sin antes haberse obtenido de su padre o madre con patria potestad o custodia o de su tutor legal, según fuera el caso, un consentimiento informado escrito y legalmente efectivo.

El mínimo de información que deberá ser brindada al padre o madre con patria potestad o custodia o al tutor legal en estos procedimientos, será en un lenguaje comprensible y que no resulte coercitivo y consistirá en:

(1) una declaración de que el procedimiento constituye una investigación científica; los propósitos del mismo; el tiempo de duración de la participación del menor en el procedimiento; una descripción de los procedimientos que serán utilizados y qué parte de éstos son experimentales;

(2) los riesgos y molestias que puedan ser razonablemente previsibles;

(3) una descripción sobre los beneficios razonablemente esperados para el participante o para otros;

(4) la divulgación de procedimientos o tratamientos alternos que podrían beneficiar o resultar más ventajosos al menor que el procedimiento sujeto de investigación científica;

(5) una declaración de que la identidad del menor se mantendrá bajo total confidencialidad;

(6) en investigaciones que conlleven riesgos, se informará si se ofrecerá compensación o tratamiento médico por daños resultantes del procedimiento y en qué consistirán los tratamientos así como el lugar dónde obtener información adicional sobre ellos;

(7) una explicación respecto a las personas a notificar, de tener preguntas el menor o su padre o madre con patria potestad o custodia o su tutor legal, en cuanto a sospechas de daños relacionados con el procedimiento; y

(8) una declaración de que la participación en el procedimiento es voluntaria y que la negativa a participar o a descontinuar en cualquier momento el mismo no conllevará penalidad o pérdida de beneficio alguno a que tenga derecho el participante ; y

(9) cualquier otro criterio establecido mediante el reglamento por el Administrador.

Las personas a cargo de conducir la investigación deberán observar las normas de confidencialidad establecidas en esta Ley. El director de la institución velará por la confidencialidad de la información de los menores que reciben servicios de salud mental relacionada con cualquier tipo de investigaciones científicas o exploratorias.

(q) Lenguaje:

Todo menor que recibe servicios de salud mental tiene derecho de conocer y de ser informado de todo lo relacionado a su Evaluación, Tratamiento Recuperación y Rehabilitación. Por lo cual, cuando se requiera dar una explicación al menor, al padre o madre con patria potestad o custodia del menor, al tutor legal o a la persona que tenga la custodia provisional y alguno de éstos no conozca o entienda el lenguaje

en el cual se le ofrece, la Institución proveedora tendrá la obligación de proveerle el traductor o intérprete necesario para lograr una comunicación efectiva. Esta disposición incluye los casos en que la limitación sea de carácter auditivo o de habla. Para fines de esta disposición, no están prohibidos de servir como intérpretes los familiares de la persona a recibir servicios de salud mental siempre y cuando el menor así lo determine.

Toda documentación escrita que sea suministrada al menor, al padre o madre con patria potestad o custodia del menor, al tutor legal o a la persona que tenga la custodia provisional, deberá estar expresa en el idioma o lenguaje entendido por éste. En los casos en que uno de éstos tenga limitaciones de tipo visual, la institución tendrá la obligación de advertirle de su derecho a que los documentos le sean leídos en voz alta por una persona de su elección, quien además firmará todos y cada uno de los documentos que a ruego haya leído. Todo lo dispuesto en este Artículo deberá ser consignado en el expediente clínico del menor.

Cuando este fuere el caso, el hecho que provoca el informe o anotación y el nombre de la persona de quien proviene deberá ser consignado con claridad en el expediente.

(r) Derecho al apoyo de su padre, madre, tutor y agencias de protección o asistencia a la persona al momento de darle de alta:

Toda persona recluida en una instalación, tiene el derecho de recibir el apoyo de sus padres, familiares, personas significativas y las agencias con funciones de protección y la obligación de proveer el albergue y cuidado al nivel adecuado, deberán proveer el mismo y el personal adiestrado para atender adecuadamente a las personas con trastornos mentales en un ambiente menos restrictivo y de mayor autonomía.

(s) Transportación:

Todo menor tendrá derecho a transportación en un vehículo adecuado, incluyendo la ambulancia que esté certificada por la Comisión de Servicio Público y el Departamento de Salud, cuando la severidad de los síntomas y signos así lo requiera, para ser trasladado a la instalación donde recibirá tratamiento.

(t) Responsabilidades del Padre o Madre con Patria Potestad, Tutor Legal o Tutor Provisional de un Menor que Recibe Servicios de Salud Mental en Puerto Rico:

Se establece que las personas antes señaladas, que tengan un menor recibiendo servicios de salud mental, deben cumplir con las siguientes responsabilidades:

(1) Asumir responsabilidad sobre su recuperación y fomentar que el menor asuma esta responsabilidad, en la medida de sus capacidades;

(2) Participar en las actividades y programas de autosuficiencia y apoyo en la comunidad;

(3) Responsabilizarse de llevar al menor a sus tratamientos, participar en aquellas actividades, consejerías y terapias familiares que le recomienden para el progreso de su trastorno emocional;

(4) Contribuir según sus ingresos lo permitan y cuando fuese posible, con el pago de los servicios, según los criterios establecidos por "Medicaid" o los deducibles establecidos por los planes médicos.

(u) Derecho al Apoyo Cuando Existe una Responsabilidad Moral:

Toda persona adulta que, por razón de consanguinidad o por obligación moral, ya sea porque se benefició económicamente, obtuvo beneficio de cualquier tipo de la persona que padece de trastornos mentales, o que necesita o recibe servicios de salud mental, estará obligado a proveer el apoyo necesario y procurará que la persona con trastorno mental pueda participar en los servicios que propendan a su recuperación, de acuerdo a su nivel de capacidad.

(v) Representación Legal en Ingreso Involuntario:

Todo menor ingresado de forma involuntaria, tendrá derecho a estar representado por un abogado. Si el menor es indigente y su padre o madre con patria potestad, tutor legal o tutor provisional no ha podido contratar un abogado, el tribunal le designará un procurador de menores para que le represente en la vista.

(w) Nivel de Cuidado de Menor Intensidad y Mayor Autonomía:

Todo menor tiene derecho a recibir el tratamiento adecuado, de acuerdo a su diagnóstico y nivel de cuidado, por lo que su hospitalización debe ser por el menor tiempo posible, hasta que esté en condiciones de trasladarse a un nivel de cuidado de menor intensidad. Además, tiene derecho a ser dado de alta a otro nivel de cuidado de menor intensidad, de acuerdo a la evolución de la severidad de sus síntomas y signos.

En el caso de que el menor, el padre o madre con patria potestad o custodia del menor, el tutor legal o la persona que tenga la custodia provisional, no disponga de recursos económicos ni otros medios, tales como una cubierta de salud para sufragar los gastos de transportación, éstos deberán ser costeados por el Estado. En el caso de aquellas personas que reciban servicios o intervenciones de salud mental bajo la Reforma de Salud, la entidad contratada para manejar y coordinar los servicios de salud será responsable de cubrir los gastos de transportación.

## CAPITULO VIII.- SISTEMA DE CUIDADO DE SALUD MENTAL PARA MENORES.-

Artículo 8.01. Niveles de Cuidado.-

Los servicios de salud mental a menores serán provistos dentro de un ambiente terapéuticamente adecuado y de mayor autonomía, a tenor con el concepto del sistema de cuidado de salud mental, de acuerdo al diagnóstico y severidad de los síntomas y signos del menor al momento de ser evaluado.

Toda Institución proveedora establecerá los mecanismos, las normas y procedimientos para dar acceso a servicios comprensivos, mediante alianzas colaborativas entre las diferentes agencias y proveedores de servicios de salud mental, lo que facilitará el curso del menor a través del sistema de cuidado de salud mental, según cambien sus necesidades y sea clínicamente indicado su traslado a alternativas de mayor autonomía; o en su defecto, a aquellas que aunque sean de mayor intensidad sean clínicamente necesarias.

En aquellas circunstancias en las cuales se requiera el traslado del menor a otro nivel de mayor intensidad, será obligatorio la revisión del Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación Interdisciplinario, a los efectos de determinar las modificaciones al mismo, si algunas, con el fin de mantener el desarrollo de la recuperación. La determinación de ubicación del menor en el nivel de cuidado de mayor autonomía estará fundamentada en la recomendación del psiquiatra de niños y adolescentes, o un psiquiatra en general en consulta con un psiquiatra de niños y adolescentes, y del equipo terapéutico Inter o multidisciplinario.

Esta disposición aplicará tanto en los casos en que el padre o madre con patria potestad o custodia, el tutor legal, o la persona que tenga la custodia provisional consientan al tratamiento, como en el caso de que un tribunal ordene su ingreso a una Institución proveedora.

La falta de interés o la incapacidad del padre o madre con patria potestad, o custodia, del tutor legal o de la persona que tenga la custodia o el deber de proveerle cuido o albergue, no será base para ingresar al menor en una institución hospitalaria de salud mental. De ser éste el caso, el director de la institución hará una petición al tribunal para asegurarle albergue y cuidado a dicho menor. El tribunal podrá ordenar al Departamento de la Familia que ubique al menor, según corresponda.

Artículo 8.02 – Menores que Requieren Servicios Hospitalarios de Salud Mental.-

Requerirán servicios de salud mental a nivel hospitalario, aquellos menores con trastorno mental o cuya severidad de síntomas y signos al momento de ser evaluado sean indicadores de que puedan causarse daño físico a sí, a otros o a la propiedad, o cuando hayan manifestado amenazas significativas que fundamenten tener el mismo resultado, o cuando la condición del menor podría deteriorarse sustancialmente si no se le ofrece a tiempo el tratamiento adecuado.

Los trastornos relacionados a sustancias, por considerarse trastornos mentales, según definidos en esta Ley, están incluidos en esta disposición, siempre y cuando se den las condiciones dispuestas en este a Artículo.

Un menor podrá ser ingresado a una Institución proveedora de Servicios de Salud mental,

hospitalarios, para evaluación, tratamiento, recuperación y rehabilitación de un trastorno mental, según provisto en esta Ley y recibirá servicios especializados en una unidad para niños y adolescentes, los cuales estarán segregados por edad, etapa de vida y género.

Artículo 8.03. – Propósito de Solicitud de Servicios de Salud Mental a Menores.-

Los servicios de salud mental a menores se solicitarán con uno o más de los siguientes propósitos:

(a) La realización de un proceso de cernimiento, evaluación y disposición;

(b) Un proceso de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación y una Evaluación Global de Funcionamiento (GAF-Eje V, DSM IV, ICD-10 o los manuales vigentes);

(c) La orientación, educación y la ubicación en servicios de apoyo o transicionales.

Artículo 8.04. – Solicitud de Servicios de Salud Mental para Menores .-

La Solicitud de Servicio a una Institución proveedora o a un proveedor indirecto de servicios de salud mental de un menor, podrá ser sometida por:

(a) el propio menor, si tiene catorce (14) años o más, si solicita servicios ambulatorios y si a juicio del profesional de salud mental tiene la capacidad para entender el efecto de su solicitud.

(b) el padre o madre con patria potestad o custodia, el tutor legal o la persona que tenga la custodia provisional;

(c) las personas que han estado relacionadas profesionalmente con el menor y que, como resultado de esta relación, tienen base razonable para creer que el menor necesita recibir servicios de salud mental;

(d) las agencias públicas o privadas con custodia sobre el menor, o el tribunal.

La solicitud será por escrito y deberá obtener una declaración clara y simple, sin tecnicismos, de las razones para solicitar los servicios.

Artículo 8.05 Cernimiento, Evaluación Comprensiva y Tratamiento.-

Toda petición o solicitud de servicios a un nivel de cuidado en salud mental de mayor autonomía será atendida inicialmente en un proceso de cernimiento, mediante el cual se determinará la naturaleza del problema del menor y la necesidad de servicios de salud mental. En el proceso de cernimiento se procederá entre otros a;

(a) orientar al menor, al padre o madre con patria potestad o custodia o al tutor legal, o a la persona que tenga la custodia provisional sobre el proceso que se llevará a cabo.

(b) la determinación por el psiquiatra o por un miembro del equipo interdisciplinario, en torno a si el menor está lucido y en contacto con la realidad.

(c) llevar a cabo una evaluación inicial de trabajo social, en la cual se identifique información relevante a los factores y recursos que afecten en la condición del menor; y

Si mediante el cernimiento se determina que la naturaleza del problema requiere de una atención que no corresponde a los servicios de salud mental, se procederá a: referir la situación a la agencia correspondiente, si fuera necesario; y orientar a los padres o representantes legales sobre otros servicios. Se documentará toda esta información y se consignará en el expediente clínico. El cernimiento será realizado por un profesional de salud mental. Si mediante el cernimiento se determina que el menor cumple con los criterios para recibir servicios de salud mental, se requerirá al profesional de salud mental pertinente de acuerdo a la necesidad identificada, iniciar el proceso de evaluación comprensiva. En la evaluación comprensiva se determinara el diagnóstico y el nivel de cuidado que necesita el menor para recibir tratamiento. Aquí el profesional determinará la naturaleza individual y familiar del(os) problema(s) exitente(s), los factores que han contribuído al mismo, y la evaluación de los recursos del menor y su familia para atender el (los) problema(as). La evaluación comprensiva incluirá, entre otros:

(1) información sustancial en cuanto a, o en relación a, los servicios que hayan sido ofrecidos al menor por otras agencias, con el consentimiento de su familia;

(2) evaluación del menor en las siguientes áreas de funcionamiento, entre las que se encuentran;

A) la identificación del menor;
B) el historial del desarrollo del menor, incluyendo su desarrollo escolar, ocupacional y el ajuste social;
C) el historial médico familiar que incluya además, la presencia o ausencia de los trastornos mentales, entre los que están comprendidos los relacionados a sustancias;
D) el perfil familiar y los recursos físicos y económicos con los que cuentan;
E) la presencia o ausencia de situaciones especiales, tales como abuso, maltrato o problemas de aprendizaje;
F) el uso y abuso sustancias o dependencia;
G) las pruebas de laboratorio y toxicología, que asistan en el diagnóstico de un trastorno mental u otras condiciones médicas;
H) el estado mental, afectivoy físico, y el comportamiento del menor al momento de recibir el servicio;
I) cualquier otra información que sea necesaria obtener de otras fuentes, tales como otros profesionales, análisis de documentos o expedientes clínicos previos;
J) conclusiones y recomendaciones del equipo terapéutico inter o multidisciplinario, el diagnóstico y el plan de tratamiento individualizado;

La información antes descrita será consignada en el expediente clínico del menor. En el proceso de evaluación comprensiva, será esencial la participación de la familia, el custodio o el representante legal. Se utlizarán todas aquellas medidas o instrumentos evaluativos que se consideren apropiados. Los mismos deberán ser válidos, confiables, clínicamente útiles y culturalmente competentes para la población servida, ya que los mismos serán de utilidad para la programación de los servicios a ofrecerse.

Artículo 8.06. – Evaluación Inicial a Menores Ingresados en Instituciones Proveedoras de Servicios en Salud Mental.-

Todo menor ingresado de forma voluntaria o involuntariamente a una Institución Proveedora (significando salas de urgencia, evaluación y estabilización psiquiatrica de veintitrés horas, y hospitalización), recibirá como parte de los servicios, y en el período comprendido dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al momento de su ingreso lo siguiente:

(a) un examen físico;
(b) análisis de laboratorios;
(c) una evaluación realizada por un psiquiatra de niños y adolescentes;
(d) una evaluación psicológica;
(e) una evaluación social;
(f) una Evaluación Global de Funcionamiento (GAF-Eje V, DSM - IV)

Los resultados de evaluaciones, análisis y exámenes se utilizarán para determinar el nivel de cuidado correspondiente a la severidad de los síntomas y signos, y al plan de tratamiento individualizado. Este Plan será formulado por escrito dentro de las primeras setenta y dos (72) horas siguientes al comienzo de la prestación de servicios al menor y revisados dentro de los primeros diez (10) días, como resultado del trabajo Inter o multidisciplinario de los profesionales encargados.

Artículo 8.07. – Certificación de Aceptación de Custodia.-

Cuando un menor sea admitido o ingresado a una Institución proveedora, el director o el representante de ésta firmará una certificación aceptando la custodia del menor y garantizando que el menor estará sujeto a un trato humanitario, responsable y adecuado, de acuerdo a sus necesidades. Dicha certificación le será entregada al padre o madre con patria potestad o custodia, al tutor legal o a la persona que tenga la custodia provisional. Copia de ésta será incluida en el expediente clínico.

Artículo 8.08. – Restricción Terapéutica en Menores.-

La restricción será empleada únicamente en instituciones hospitalarias y centros que tengan

unidades de cuidado agudo o de emergencias, siendo empleada según lo establecido en los protocolos de los estándares de la buena práctica de la salud mental, salvo disposición en contrario de esta Ley. La restricción será empleada en forma terapéutica sin violentar la dignidad humana. Su aplicación se reservará como recurso extremo, a ser utilizado cuando exista un peligro inmediato de que el menor vaya a causarse daño a sí mismo, a otros o a la propiedad. Previo a la restricción de cualquier menor, se tomará en consideración su condición física, disponiéndose, que en ningún momento se utilizará la restricción como castigo, medida disciplinaria o para conveniencia del personal de la institución.

Todo profesional de la salud mental, facultado para ordenar, administrar u observar la restricción, deberá completar un adiestramiento sobre el uso y aplicación de este procedimiento terapéutico para menores, niños y adolescentes. Lo dispuesto en este artículo estará sujeto al reglamento que para estos efectos promulgue la Administración. La restricción se llevará a cabo cuando medie una orden escrita de un psiquiatra de niños y adolescentes, o en su lugar un psiquiatra general, quien lo hará previa consulta con éste, quien luego de haber observado personalmente al menor, determine que el uso de la restricción es necesaria. El examen incluirá una evaluación de la condición física y el estado mental del menor. Se notificará a la mayor brevedad posible al familiar más cercano o tutor del menor. Será obligatorio consignar la orden de restricción en el expediente clínico y en ella se especificarán los datos, observaciones, propósito, tiempo de duración y cualquier otra evidencia pertinente que fundamente su uso.

Ninguna orden de restricción será válida por más de ocho (8) horas, después de su emisión. La restricción que en virtud de dicha orden se aplique, no se extenderá por más de cuatro (4) horas, al cabo de las cuales el psiquiatra de niños y adolescentes, o en su ausencia un psiquiatra general, previa consulta con éste, llevará a cabo una nueva evaluación, luego de haber observado personalmente al menor. Si como resultado de la evaluación se requiere continuar con la restricción, el psiquiatra de niños y adolescentes, o en su lugar un psiquiatra general, previa consulta con este, expedirá una nueva orden que será consignada en el expediente clínico.

En la eventualidad que una emergencia requiera el uso inmediato de esta medida, la restricción podrá ser temporeramente iniciada por un profesional de la salud mental, un miembro del equipo inter o multi disciplinario debidamente adiestrado y certificado en esta modalidad, luego de consultar con un psiquiatra de niños y adolescentes. Esta restricción procederá después de que el profesional de enfermería haya observado personalmente al menor y quede clínicamente convencido de que el uso de la restricción está indicado para prevenir que el menor se cause daño físico a sí mismo, a otros o a la propiedad. La orden de restricción será consignada en el expediente clínico del menor. La restricción iniciada por el profesional adiestrado o por un miembro del equipo inter o multi disciplinario y certificado en esta modalidad será ratificada por escrito, por un psiquiatra de niños y adolescentes, dentro de las dos (2) horas siguientes al comienzo de la misma, en el caso de los menores de diez (10) años o más; y dentro de la primera (1) hora, en el caso de menores entre siete (7) y nueve (9) años de edad. Si luego de localizar al psiquiatra de niños y adolescentes, éste no autoriza continuar la restricción, la misma finalizará de inmediato, disponiéndose que la restricción como medida terapéutica a menores de siete (7) años, nunca podrá ser aplicada.

En ningún caso, el período inicial excederá de cuatro (4) horas, en casos de los menores de diez (10) años o más, o de dos (2) horas, en casos de los menores entre siete (7) y nueve (9) años. En caso que la condición clínica que dio lugar a la restricción continúe, transcurrido el término inicial establecido, el equipo Inter o multidisciplinario evaluará al menor y podrá disponer el uso de otras modalidades terapéuticas. La restricción será removida cada hora, por no menos de quince (15) minutos, a menos que tal remoción sea clínicamente contraindicada, o en su totalidad cuando ya no sea necesaria para lograr los objetivos que promovieron esta medida terapéutica. Si luego de localizar al psiquiatra de niños y adolescentes, éste no autoriza continuar la restricción, la misma finalizará de inmediato.

El profesional en salud mental, según autorizado en este artículo, que inicie una restricción, deberá requerir la asignación de un enfermero adiestrado y certificado en esta modalidad para que observe al menor por lo menos cada quince (15) minutos, sin menoscabar su derecho a la intimidad, y consignar sus observaciones en el expediente clínico de manera legible, detallada, clara y precisa.

El director de la institución revisará todas las órdenes de restricción diariamente e investigará las razones consignadas para las mismas. Además mantendrá un registro de las restricciones utilizadas y rendirá un informe anual dentro de los treinta (30) días del año subsiguiente a la Administración. Toda orden de restricción será notificada a la mayor brevedad posible al familiar más cercano o tutor del menor.

La institución establecerá por escrito un protocolo para la restricción terapéutica, de acuerdo con las disposiciones establecidas en este Artículo. Se incluirá información sobre los profesionales en salud mental facultados para iniciar la restricción en caso de emergencia, a tenor con lo dispuesto en esta Ley. Todo profesional de salud mental facultado para iniciar u ordenar la restricción, deberá completar un adiestramiento sobre el uso y aplicación de esta medida terapéutica. Lo dispuesto en este Artículo estará sujeto al reglamento y a los requisitos de licenciamiento de instituciones proveedoras de salud mental, que para estos efectos promulgue la Administración.

Artículo 8.09. – Aislamiento Terapéutico.-

El aislamiento será empleado únicamente como una medida terapéutica, para evitar que el menor se cause daño a sí mismo, a otros o a la propiedad. Su uso se limitará a las instituciones hospitalarias y unidades que tengan centros de cuidado agudo de emergencia. Previo al aislamiento de un menor, se tomará en consideración su condición física. En ningún momento se utilizará el aislamiento como castigo, medida disciplinaria a un menor o para conveniencia del personal de la institución hospitalaria proveedora de servicios de salud mental.

El aislamiento será empleado únicamente mediante orden escrita del psiquiatra de niños y adolescentes, o en su ausencia, de un psiquiatra general, quien lo hará previa consulta con éste, y quien luego de haber examinado personalmente al menor, quede clínicamente convencido de que el uso del aislamiento es la alternativa indicada. El examen incluirá una evaluación del estado mental y condición física del menor.

La orden de aislamiento será consignada en el expediente y en ella se indicarán las razones por las cuales la misma ha sido emitida, y se notificará a la mayor brevedad posible al familiar más cercano o tutor del menor sobre la medida de aislamiento utilizada. Una orden de aislamiento será válida por ocho (8) horas a partir de su emisión. Cada orden de aislamiento requerirá la emisión de una nueva orden del psiquiatra de niños y adolescentes, o en su ausencia la de un psiquiatra general, quien lo hará previa consulta con este, luego de evaluar directamente al menor.

Se dispone además, que el período inicial de aislamiento será de una (1) hora en los menores entre diez (10) años o más. No se emitirá una orden de aislamiento a menores de diez (10) años. De ser necesarios períodos de aislamiento adicionales, el psiquiatra de niños y adolescentes, emitirá una nueva orden. Luego de transcurrido este período, el menor será reevaluado por el psiquiatra de niños y adolescentes, y si estima que el menor representa peligro para sí mismo, otros o la propiedad, podrá iniciar un segundo período de aislamiento de no más de una (1) hora.

Una vez se haya empleado el aislamiento por el período total de (2) horas, el mismo no será usado nuevamente en el menor durante los próximos dos (2) días naturales, sin el consentimiento previo del psiquiatra de niños y adolescentes.

El psiquiatra de niños y adolescentes, o en su ausencia el psiquiatra general, previa consulta con el psiquiatra de niños y adolescentes, que ordene el aislamiento, requerirá de inmediato la asignación de un profesional de salud mental, adiestrado y certificado en esta modalidad, para que observe personal y continuamente al menor, quién consignará cada quince (15) minutos por escrito en el expediente clínico sus observaciones. La persona asignada deberá mantener comunicación y contacto visual directo con el menor

sujeto al aislamiento, sin menoscabar su derecho a la intimidad. Dichas observaciones deberán ser legibles, detalladas, claras y precisas, y redactadas de forma tal que describa el comportamiento del menor.

Los cuartos de aislamiento deberán estar debidamente preparados de acuerdo a los protocolos federales, con el objetivo de evitar daños al menor.

El Director deberá revisar todas las órdenes de aislamiento diariamente y deberá indagar en cuanto a las razones que tuvo el psiquiatra para ordenar los mismos. Con el propósito de asegurar auditabilidad interprofesional y salvaguardar los derechos civiles de los pacientes, los casos de aislamiento deberán ser formalmente discutidos por el equipo interdisciplinario para evaluar su justificación y sus resultados.

La institución establecerá por escrito un protocolo para el uso del aislamiento, a tenor con las disposiciones contenidas en este Artículo. Todo profesional de salud mental facultado para ordenar u observar a un menor en aislamiento, deberá completar un adiestramiento sobre el uso y aplicación de esta modalidad terapéutica. Lo dispuesto en este Artículo estará sujeto al reglamento y los requisitos de licenciamiento de las instituciones proveedoras de salud mental que para estos efectos promulgue la Administración.

Artículo 8.10. – Terapia Electroconvulsiva.-

Ningún menor recibirá tratamiento de terapia electroconvulsiva sin que medie el consentimiento informado y la autorización expresa previa, de uno de los siguientes:

(a) el padre o madre con patria potestad, el tutor legal del menor cuando éste sea menor de dieciocho (18) años, previa opinión de un (1) psiquiatra de niños y adolescentes, en consenso con el equipo terapéutico Inter o multidisciplinario, que evalué y recomiende la indicación del tratamiento y así lo consigne en el expediente clínico del menor.

(b) En el caso de que este tratamiento sea favorable para el menor y después de llevar a cabo un esfuerzo razonable, si las personas autorizadas a consentir no pueden ser localizadas, se hará una petición al tribunal. En este caso, habrá que presentar prueba de la necesidad de tratamiento, así como de los esfuerzos infructuosos realizados, para localizar a las personas autorizadas por Ley a consentir, de forma tal que el tribunal quede convencido y ordene la aplicación del tratamiento.

En el caso de la Emergencia Psiquiátrica, donde se depende el uso de esta modalidad terapéutica como medida indispensable para salvar la vida del paciente, la determinación para brindar ésta, se hará por el psiquiatra y en consenso con el equipo terapéutico Inter o multidisciplinario. El director de la institución hospitalaria deberá revisar todas las órdenes de terapia electroconvulsiva, bajo los criterios de emergencia y presentará un informe anual a la Administración, dentro de los treinta (30) días del año subsiguiente.

El menor y el padre o madre con patria potestad, a quien se considerará someter al tratamiento de terapia electroconvulsiva, y a su tutor si lo hubiere, será notificado dentro de un período no mayor de cuarenta y ocho (48) horas anteriores al tratamiento. En caso de emergencias, se procederá con el tratamiento al cabo de las cuarenta y ocho (48) horas o antes. El equipo terapéutico Inter o multidisciplinario que haya diseñado el plan de tratamiento, discutirá el caso y notificará sus recomendaciones al Director Clínico sobre el mismo. El padre o madre con patria potestad o el tutor legal, tendrá derecho a rehusar de este tratamiento en cualquier momento después de haber aceptado el mismo, no obstante, en caso de que exista discrepancia entre el menor, los padres con patria potestad o su tutor, en cuanto a la aceptación o rechazo del tratamiento, será necesario celebrar una vista para que el tribunal determine si procede o no el tratamiento y emita una orden a dichos efectos.

Toda entidad proveedora de servicios en salud mental que ofrezca la modalidad de terapia electroconvulsiva, tendrá un protocolo que incorpore los estándares aceptados por la Asociación Americana de Psiquiatría o "American Psychiatric Association (APA)" y las entidades que regulan la administración de dicha terapia, además del reglamento que para estos efectos promulgue la Administración. Dicho

protocolo será revisado anualmente. Será responsabilidad de la entidad proveedora de servicios de salud mental mantenerse actualizada sobre los adelantos científicos que puedan alterar los procedimientos o administración de esta modalidad de tratamiento.

Artículo 8.11. – Solicitud de Ingreso.-

Todo menor, mediante su padre o madre con patria potestad o custodia, su tutor legal o la persona que tenga su custodia provisional, podrá solicitar su ingreso a una Institución proveedora para Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación de un trastorno mental. La solicitud deberá ser por escrito y estará acompañada por un referido de un psiquiatra de niños y adolescentes, o un psicólogo clínico, o en su ausencia por un psiquiatra general, previa consulta con un psiquiatra de niños y adolescentes.

Este referido deberá emitirse, siempre que medie una evaluación preliminar por un profesional de salud mental. En caso que los servicios solicitados sean para desintoxicación, la evaluación preliminar y el referido deberán ser efectuados por un médico general y un psiquiatra de niños y adoloscentes , o por un médico general y un psicólogo clínico. Los profesionales responsables de este referido determinarán por escrito si el menor cumple con los criterios de ingreso a esta modalidad de servicio según establecido en esta Ley. Dentro de las veinticuatro (24) horas a partir de la petición de servicios hospitalarios, se le asignará al menor un equipo terapéutico Inter o multidisciplinario, incluyendo al psiquiatra de niños y adolescentes, o un psiquiatra general en consulta con un psiquiatra de niños y adolescentes para que le evalúe, a fin de determinar si procede o no su ingreso.

De confirmarse la necesidad de hospitalización, el equipo terapéutico inter o multidisciplinario será responsable de redactar un plan de tratamiento para el menor. Dicho plan establecerá las estrategias a seguir, para atender la causa inmediata que provocó la hospitalización. Si se determina que el menor reúne los criterios para recibir servicios en un nivel de cuidado de mayor autonomía que la de la hospitalización, será referido al nivel de cuidado de salud mental que mejor corresponda a sus necesidades particulares.

Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al ingreso de un menor en Institución proveedora Hospitalaria, el Director o su representante, dará copia de la petición de servicios y hará un informe claro y conciso donde se explique el estado del menor, a su padre o madre con patria potestad o custodia, al tutor legal o a la persona que tenga la custodia provisional del menor y le informará además:

(a) el diagnóstico preliminar establecido por el equipo terapéutico Inter o multidisciplinario;

(b) el derecho que tienen a solicitar que el menor sea dado de alta, dentro del término más corto posible, excepto en aquellos casos en que durante dicho término se presente en el tribunal una petición acompañada por una certificación que establezca que debe ser sujeto a un Ingreso Involuntario; y

(c) el Plan de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación a seguir y sobre el derecho a asesoramiento y vista en el tribunal.

Después del ingreso, cualquier cambio en el estado será explicado detalladamente al menor, a su padre o madre con patria potestad o custodia, o al tutor legal.

Artículo 8.12 – Revisión del Estado Clínico.-

A partir de las setenta y dos (72) horas desde la admisión del menor, el equipo Inter o multidisciplinario revisará el estado clínico del menor y su expediente clínico, con el propósito de determinar la necesidad de continuar el tratamiento en el nivel donde se encuentre. De ser necesaria la continuación de la hospitalización, se le notificará a la persona o entidad que consintió al ingreso, para que consienta a la continuación del mismo. La autorización para la continuación del ingreso deberá ser incluida en el expediente clínico del menor.

Siempre que ocurra un cambio sustancial y como máximo, cada diez (10) días, se llevará a cabo una evaluación del estado clínico del menor por el equipo terapéutico Inter o multidisciplinario y se renovará la autorización para la continuación de la hospitalización, mientras dure la misma. De no autorizarse la continuación del tratamiento, recuperación y rehabilitación, ello se entenderá como una

petición para que el menor sea dado de alta.

En caso de que el menor no haya logrado estabilizar la severidad de los síntomas y signos, o aún pueda estar en peligro de causarse daño a sí mismo, a otros o a la propiedad, se gestionará una petición al tribunal para que ordene la continuación del ingreso en la institución hospitalaria o en el nivel de cuidado que recomiende el psiquiatra de niños y adolescentes y el equipo terapéutico, cuando no medie la autorización del padre, madre con patria potestad, o entidad que consintió al ingreso del menor.

Ningún menor será ingresado en servicios hospitalarios, a menos que reúna los criterios clínicos para la hospitalización y medie prueba clara y convincente que a satisfacción de la persona autorizada a consentir se evidencie la necesidad de tal ingreso.

Artículo 8.13. – Ingreso en Caso de Emergencia.-

En caso de emergencia, cualquier persona mayor de dieciocho (18) años podrá gestionar la petición de ingreso del menor, luego de llevar a cabo las diligencias necesarias para localizar al padre o madre con patria potestad o custodia o el tutor legal. El menor será evaluado de inmediato por el psiquiatra de niños y adolescentes o en su ausencia, por el psiquiatra general, previo consulta con el psiquiatra de niños y adolescentes y con el equipo Inter o multidisciplinario de la Institución proveedora, para establecer el diagnóstico y determinar el nivel de cuidado que corresponda a la severidad de los síntomas y signos en el momento.

El director de la Institución proveedora deberá continuar los esfuerzos para localizar al padre o madre con patria potestad o al tutor legal. Si la persona es localizada y consiente por escrito a la admisión, el menor podrá continuar en el nivel de cuidado indicado y recomendado.

Si el padre o madre con patria potestad o custodia, o el tutor legal no puede ser localizado dentro las próximas veinticuatro (24) horas o si luego de ser localizado rechaza dar el consentimiento para el ingreso del menor en uno de los niveles de cuidado, o solicita que éste sea dado de alta, se radicará una petición y un informe al tribunal sobre la condición del menor que contendrá las recomendaciones del psiquiatra de niños y adolescentes, en consulta con el equipo Inter o multidisciplinario. El tribunal determinará si procede la continuidad del cuidado o el alta del menor, para lo cual señalará una vista para llevarse a cabo dentro del término de siete (7) días naturales. El tribunal notificará al menor, a su abogado o la persona que lo represente y al director de la institución o su representante, e indicará el lugar, fecha y hora de la vista. El cuidado del menor continuará hasta que el tribunal disponga lo contrario.

El tribunal podrá ordenar que el menor sea dado de alta, si surge de los informes evaluativos que éste puede beneficiarse de los servicios de salud mental en un nivel de cuidado de mayor autonomía y terapéuticamente indicado.

De ser necesario el tribunal ordenará al Departamento de la Familia que ubique al menor según corresponda.

En caso en que el tribunal haya autorizado la continuación de la hospitalización, se continuarán los procedimientos de Ingreso Involuntario, según se dispone en esta Ley.

Artículo 8.14. – Solicitud de Ingreso por Agencias Públicas o Privadas.-

El representante autorizado de una agencia gubernamental o una de entidad privada, podrá gestionar una solicitud de evaluación para ingreso a una institución hospitalaria proveedora de servicios de salud mental a favor de un menor que esté bajo su custodia, siempre y cuando el menor reúna los criterios de ingreso de la institución y cumpla con los requisitos establecidos en esta Ley.

El psiquiatra de niños y adolescentes o un miembro del equipo interdisciplinario de la Institución proveedora informará por escrito a la entidad que refirió al menor, los resultados de la evaluación practicada y el nivel de cuidado mayor autonomía y terapéuticamente indicado, que según su mejor juicio profesional responde a las necesidades del menor.

El informe deberá contener recomendaciones específicas del manejo de la condición de salud mental, dentro del escenario institucional que ostente la custodia del menor.

Una vez el menor haya sido clínicamente estabilizado y dado de alta, la agencia peticionaria del ingreso será responsable de recibir al menor de inmediato.

Artículo 8.15. – Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación en Otro Nivel de Cuidado.-

El tribunal podrá considerar otros niveles de cuidado de mayor autonomía, si el equipo Inter o multidisciplinario así lo recomienda, de acuerdo al diagnóstico y severidad de los síntomas y signos en el momento, según sean terapéuticamente indicados, antes de determinar si el menor debe ser ingresado de forma involuntaria.

El tribunal podrá ordenar que el menor se someta a tratamiento, recuperación y rehabilitación en otro nivel de cuidado de mayor autonomía en una Institución proveedora de servicios en salud mental. El tribunal deberá considerar las recomendaciones que el psiquiatra o el médico, y el equipo terapéutico Inter o multidisciplinario responsable de la evaluación inicial del menor, presenten como apropiadas. Dichas recomendaciones deberán estar claramente conceptualizadas y especificadas en un informe sobre la evaluación comprensiva efectuada, incluyendo el plan individualizado de tratamiento, recuperación y rehabilitación recomendado, así como cualquier otra información que el tribunal estime conveniente. El Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación deberá ser congruente con los problemas y necesidades del menor, y deberá contener un itinerario para su desarrollo. El tribunal ordenará el nivel de cuidado que a base de las recomendaciones estime el más adecuado para el menor.

No obstante, el tribunal tendrá autoridad para modificar una orden de tratamiento en un nivel de cuidado de mayor autonomía, si el menor sujeto a la orden no cumple con la misma o si los profesionales de salud mental determinan que el tratamiento no es el adecuado según la condición. Previo a la modificación de la orden, el tribunal recibirá un informe del director del programa del nivel de cuidado en que esté, especificando las razones por las cuales la orden debe ser modificada. El tribunal ordenará la celebración de una vista para la cual el padre o madre con patria potestad o custodia o el tutor legal del menor será notificado y tendrá la oportunidad de expresarse cuando se esté reconsiderando la orden de tratamiento alterno. El menor deberá estar presente en la vista y su padre o madre con patria potestad o custodia, o el tutor legal podrá estar acompañado de un representante legal para la celebración de la vista.

Si el tribunal revoca la orden de tratamiento a un nivel de cuidado de mayor autonomía y ordena que el menor sea hospitalizado, un alguacil o personal de apoyo de servicios de salud mental, llevará a cabo las gestiones necesarias para coordinar la transportación del menor.

Artículo 8.16. – Ingreso Involuntario.-

Todo menor que reúna criterios clínicos que indiquen la necesidad de recibir servicios de salud mental, pero que su padre o madre con patria potestad o custodia, o el tutor legal no consienta o no esté capacitado para consentir a tales servicios, será evaluado de forma comprensiva para que se determine si cualifica para el ingreso de forma involuntaria o para un tratamiento compulsorio a una Institución proveedora. Dicha evaluación requerirá la intervención del tribunal. El tribunal ordenará una evaluación de un Equipo Interdisciplinario, a fin de determinar si el menor debe recibir tratamiento y rehabilitación de carácter hospitalario para su trastorno mental.

Ningún menor será ingresado de forma involuntaria, a menos que mediante prueba clara y convincente, y a satisfacción del tribunal, se evidencie la necesidad de tal ingreso.

Artículo 8.17. – Petición de Ingreso Involuntario por Quince (15) Días.-

(a) Toda Petición de Ingreso Involuntario por un máximo quince (15) días, deberá ir acompañada por una certificación de un psiquiatra de niños y adolescentes, o en su ausencia psiquiatra general, previa consulta con éste, que se conocerá como la Primera Certificación, la cual establecerá que el menor reúne los criterios para Ingreso Involuntario de inmediato en una institución hospitalaria o a cualquier otra Institución proveedora para recibir tratamiento, recuperación y rehabilitación.

Dicha Primera Certificación establecerá:

(1) que el psiquiatra de niños y adolescentes, o en su ausencia un psiquiatra general, previo

consulta con este, y el equipo terapéutico Inter o multidisciplinario evaluó al menor dentro de un período no mayor de dos (2) días, previo a la presentación de la solicitud de Ingreso Involuntario;

(2) las observaciones y criterios que fundamentan las recomendaciones y determinación, a los efectos de que el menor reúne los criterios de ingreso según establecidos en esta Ley; y(3) la evidencia de que se le ha entregado copia al menor de los derechos establecidos en esta Ley.

(b) Una vez recibida la Primera Certificación, el tribunal expedirá una orden de Ingreso Involuntario que no excederá el término de quince (15) días, la cual se conocerá como Orden de Ingreso Involuntario por quince (15) días. Al expedir la orden, el tribunal señalará una vista de seguimiento dentro de los próximos siete (7) días laborables con el propósito de evaluar la continuación o cese del Ingreso Involuntario. El tribunal deberá informar la fecha, hora y lugar de la vista al menor, al padre o madre con patria potestad o custodia, tutor legal, o a la persona que tenga la custodia provisional.

Si en la vista el tribunal determina que el menor debe continuar recibiendo servicios de tratamiento de forma involuntaria, la Primera Orden de Ingreso continuará en efecto hasta cumplirse el término inicialmente establecido de hasta quince (15) días. Cuando el equipo terapéutico recomiende el alta el tribunal, de acoger la recomendación, ordenará el alta inmediata del menor en ese nivel de cuidado. Podrá ordenar además, tratamiento compulsorio en otro nivel de cuidado de mayor autonomía, de que el equipo terapéutico así recomendarlo por representar riesgo para sí, otros o la propiedad.

Dentro de un término no mayor de veinticuatro (24) horas siguientes a la expedición de la Primera Orden de Ingreso Involuntario, se le dará copia de la certificación y de la orden emitida por el tribunal al menor, a su padre o madre con patria potestad o custodia, al tutor legal o la persona que tenga la custodia provisional y a su abogado, según sea el caso.

Artículo 8.18. – Petición para Extensión de Orden de Ingreso Involuntario.-

Cuando sea necesario, el tribunal podrá ordenar una extensión de hospitalización que no excederá el término de quince (15) días adicionales. A tales efectos, el director de la institución de salud mental o su representante a instancia propia o a petición del padre, madre con patria potestad, o su tutor legal, presentará en el tribunal una Petición de Orden de Extensión de Ingreso Involuntario. Dicha petición estará acompañada por una Segunda Certificación emitida por el psiquiatra de niños y adolescentes y el equipo terapéutico, Inter o multidisciplinario a cargo del tratamiento del menor, disponiéndose que en aquellos casos en que el menor esté recibiendo servicios de tratamiento, recuperación y rehabilitación en un centro de desintoxicación, esta Segunda Certificación podrá ser emitida por un médico y el equipo terapéutico Inter o multidisciplinario. La petición deberá ser presentada al tribunal hasta tres (3) días antes de finalizar el período inicial de quince (15) días. Dentro de las veinticuatro (24) horas seguidas a la presentación de la petición de Extensión Orden de Ingreso Involuntario, el tribunal determinará si procede la extensión del período de hospitalización así solicitado. Mientras ocurre este proceso el menor se mantendrá hospitalizado.

Esta Certificación deberá contener lo siguiente:

(a) evidencia del diseño e implantación del plan individualizado de tratamiento del equipo Inter o multidisciplinario;

(b) declaración de que el psiquiatra de niños y adolescentes o el médico del centro de desintoxicación, el que aplique, en conjunto con el equipo Inter o multidisciplinario, de que reevaluó al menor a tenor con el plan y se determinó la necesidad de que el menor continué recibiendo servicios de forma involuntaria;

(c) elaboración detallada del plan individualizado de tratamiento revisado, que incluya un pronóstico razonable de los beneficios que se espera que el menor reciba durante la continuación de su Ingreso Involuntario;

(d) el manejador de casos identificará y tramitará recursos para ubicar al menor en el nivel de cuidado necesario y conveniente para su condición, una vez que se haya cumplido con los

propósitos del tratamiento;

(e) un plan de egreso trabajado por el manejador de casos y el equipo terapéutico, copia del cual se le entregará al paciente o tutor legal si lo tuviere.

De haber transcurrido el término inicial de quince (15) días sin que se haya presentado en tiempo ante el tribunal la Petición de Orden de Extensión de Ingreso Involuntario con la certificación correspondiente, la institución procederá a otorgar el alta inmediata del menor y así lo notificará al tribunal.

Si en la vista el tribunal determina que el menor debe continuar recibiendo servicios de tratamiento de forma involuntaria, podrá ordenar una extensión de hospitalización involuntaria por un término no mayor de quince (15) días.

Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la expedición de la Orden de Extensión de Ingreso Involuntario, se le dará copia de la certificación y de la orden emitida por el tribunal, al padre, madre con patria potestad o su tutor legal, abogado o representante de éste, según sea el caso, la cual contendrá lo siguiente:

1) evidencia del diseño e implantación del Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación Inter o multidisciplinario;
2) una declaración de que el psiquiatra de niños y adolescentes en conjunto con el equipo Inter o multidisciplinario, reevaluó al menor a tenor con el Plan, que se revisó el expediente clínico y que a tenor con dicha reevaluación, que incluirá una evaluación minuciosa de la adaptación y el progreso del menor, se determinó la necesidad de que el menor continúe recibiendo servicios de forma involuntaria;
3) una elaboración detallada de un nuevo Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación Interdisciplinario que incluya una descripción sustentando los beneficios que recibirá el menor durante el segundo período de Ingreso Involuntario; y
4) el nombre y circunstancias profesionales del Equipo Interdisciplinario que interviene en la segunda certificación.

De haber transcurrido el término inicial de quince (15) días sin que se haya presentado en tiempo ante el tribunal la petición de extensión orden de Ingreso Involuntario y demás documentos, según requeridos en este Artículo, la Institución procederá a otorgar el alta inmediata del menor y así lo notificará al tribunal.

Si en la vista el tribunal determina que el menor debe continuar recibiendo servicios de tratamiento de forma involuntaria podrá ordenar un segundo período de hospitalización por hasta quince (15) días.

Dentro de un término no mayor de veinticuatro (24) horas siguientes a la expedición de la Segunda Orden de Ingreso Involuntario, excluyendo sábado, domingo y días feriados, se le dará copia de la certificación y de la orden emitida por el tribunal al padre o madre con patria potestad o custodia, el tutor legal, a la persona que tenga la custodia provisional y a su abogado, según sea el caso.

Artículo 8.19. – Petición de Alta por Padre, Madre con Patria Potestad o Tutor Legal.-

Cuando el padre o madre con patria potestad o custodia, el tutor legal o la persona que tenga la custodia provisional solicitare que el menor sea dado de alta, la misma se efectuará no más tarde de las veinticuatro (24) horas siguientes a la petición.

Si el director de la institución tiene motivos fundados para objetar la petición de alta del menor, radicará una petición en el tribunal indicando la necesidad de los servicios.

La falta de interés o incapacidad de proveer cuido o albergue del padre o madre con patria potestad o custodia, del tutor legal o de la persona que tenga la custodia provisional, no darán base para que el tribunal se niegue a emitir una orden para que el menor sea dado de alta. En tal caso el tribunal ordenará la intervención del Departamento de la Familia, a los fines de asegurar que el albergue y cuido necesario para el menor le sean provistos, en cuyo caso el Departamento de la Familia asumirá la custodia del

menor.

Artículo 8.20.– Petición de Alta; Cambio de Estado; Vista.-

Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la petición de alta, el menor será evaluado por el equipo Inter o multidisciplinario y se determinará si constituye peligro para sí mismo, para otros o propiedad alguna, mediante actos violentos o consistentes que denoten un trastorno mental. De no ocurrir dicha evaluación, el menor será dado de alta de inmediato. Si como resultado de la petición de alta y luego de la evaluación que en este Artículo se expresa, se determina que el menor constituye peligro, se procederá a solicitar una Orden de Ingreso que no excederá el término de quince (15) días y el cambio de estado de Ingreso Voluntario a involuntario donde el tribunal señalará una vista dentro de las próximas veinticuatro (24) horas. Mientras ocurra este proceso, el menor continuará hospitalizado. Se continuará con los procedimientos de Ingreso Voluntario a Petición de Ingreso Involuntario, donde el tribunal señalará una vista, conforme a las disposiciones establecidas en esta Ley.

Artículo 8.21. – Celebración de Vistas.-

(a) Las vistas se llevarán a cabo ante el tribunal con competencia. A tenor con lo dispuesto en las Reglas de Procedimento Civil vigentes.

(b) El menor estará presente junto a su padre, madre con patria potestad o tutor legal, en la vista y por representación de su abogado.

(c) Si el tribunal motu propio o a petición de una de las partes, cuando medie justa causa mayor, pospone la vista del caso, el menor continuará recluido pendiente de una orden subsiguiente del tribunal. La posposición de la vista no se extenderá por más de cinco (5) días naturales .

(d) El menor, padre, madre con patria potestad o tutor legal, tendrán derecho a presentar toda la prueba que estime pertinente para rebatir la continuación de su ingreso de forma involuntaria. Tal prueba podrá consistir en evidencia testifical o documental. A estos fines, el adulto tendrá derecho a someterse a un examen independiente por el profesional de la salud mental de su elección o por uno designado por el tribunal, quien hará una evaluación y emitirá sus recomendaciones al tribunal. Los servicios de dicho profesional serán costeados por el padre, madre con patria potestad o tutor legal, objeto de la petición de Ingreso Involuntario o cambio de status, por un pariente cercano si lo tuviere, o por el estado en caso de que el menor sea indigente.

Cuando lo estime necesario, el tribunal podrá solicitar la intervención del Departamento de la Familia en aras de proteger los intereses del menor.

Artículo 8.22. - Derecho a Representación Legal.-

Todo menor que sea objeto de una petición de orden de Ingreso Involuntario, tendrá derecho a estar representado por un abogado o procurador de familia, según su disponibilidad. Si el menor es indigente y no ha podido contratar un abogado, el tribunal le designará uno de oficio. El abogado designado por el tribunal y su representado deberán contar con tiempo razonable para prepararse para la vista.

Artículo 8.23 – Traslado del Menor.-

Cualquier menor que reciba servicios de salud mental y se encuentre en una Institución proveedora, podrá ser trasladado a otra, siempre que dicho traslado fuese necesario y no resulte en detrimento del menor, siempre y cuando éste y la institución que lo recibirá acepten el traslado. El menor, el familiar más cercano o su tutor será notificado del traslado, por lo menos tres días previo al mismo. Si la vida del menor está en peligro inminente, el traslado tendrá lugar, y se notificará al padre, madre con patria potestad o su tutor legal, no más tarde de las veinticuatro (24) horas posteriores al mismo.

Si el menor, padre, madre con patria potestad o su tutor legal tuviese objeciones al mismo, la institución le dará la oportunidad de reconsiderar del traslado de conformidad con el Artículo 2.22. Durante el proceso de reconsideración del traslado, el menor permanecerá en la Institución proveedora de

Servicios de Salud Mental original.

Artículo 8.24 – Pases.-

En aquellos casos en que sea clínicamente necesario o beneficioso y en conjunto con el equipo Inter o multidisciplinario, el psiquiatra de niños y adolescentes, podrá concederle un pase al menor ingresado de forma voluntaria o involuntaria aún cuando no esté en condiciones para ser dado de alta. No será necesario notificar al tribunal en estos casos.

Artículo 8.25. – Altas.-

El psiquiatra a cargo del tratamiento, recuperación y rehabilitación podrá, en cualquier momento, dar de alta a cualquier menor ingresado de forma voluntaria o involuntaria previa notificación al equipo interdisciplinario y al familiar más cercano o tutor del menor a ser dado de alta.

El psiquiatra y el equipo terapéutico, Inter o multidisciplinario del menor a ser dado de alta le explicarán a él, su familia o tutor, su plan de egreso y las opciones de recuperación, informando al tribunal sobre las determinaciones en los casos en que el tribunal ordenó el Ingreso Involuntario.

Artículo 8.26. – Abandono de la Institución: Notificaciones.-

Cuando el menor sujeto a Ingreso Involuntario abandone la institución sin haber sido dado de alta, el director notificará de inmediato a un agente del orden público, para que proceda a su aprehensión y sea regresado a la institución. Notificará además al padre, madre con patria potestad, o el tutor legal y a la persona que solicitó su ingreso.

Cuando un menor sujeto a Ingreso Voluntario abandone la institución sin haber sido dado de alta el director notificará de inmediato al padre, madre con patria potestad o al tutor legal del menor.

## CAPITULO IX.- SERVICIOS TRANSICIONALES PARA MENORES .-

Artículo 9.01. – Propósitos de los Servicios Transicionales.-

Los servicios transicionales serán diseñados para proveer experiencias estructuradas, consistentes y especializadas en diferentes niveles de supervisión que correspondan a la severidad de los síntomas y signos del trastorno que aplique por edad y género, y para lograr a su vez, que el menor se adapte a su medio ambiente, de acuerdo a la severidad de su trastorno y pueda participar en otro nivel de cuidado de mayor autonomía hasta lograr su eventual independencia en la comunidad. Su función principal será proveer servicios de recuperación y rehabilitación, haciendo énfasis en el desarrollo adecuado del manejo de la vida diaria del menor, además de ofrecer cuidado y custodia de una forma segura y humana.

Artículo 9.02. Servicios Transicionales.-

Las instituciones proveedoras de servicios transicionales deberán proveer como mínimo lo siguiente:

(a) el cuido y custodia seguros y humanos dentro del ambiente de mayor autonomía posible, de acuerdo a las necesidades de recuperación y rehabilitación del menor;

(b) el tratamiento, recuperación y rehabilitación individualizado, haciendo énfasis en las destrezas necesarias para su condición, la severidad de los síntomas y signos, la etapa de su vida y su potencial de recuperación y rehabilitación para propiciar una mayor autonomía en su medio ambiente;

(c) la coordinación adecuada con agencias gubernamentales y privadas, para lograr servicios comprensivos para el menor y su familia conducentes al logro de una mayor autosuficiencia;

(d) atención a la condición de salud física, mental del menor admitido y su familia;

(e) promoción de la participación de la familia sobre el Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación del menor y orientación sobre el particular;

(f) una dieta balanceada, de acuerdo a las necesidades especiales del menor participante en los programas; y

(g) un plan de rehabilitación, recreativo, vocacional u ocupacional, el que aplique, a ser

implantado en el programa o servicio a cargo de personal especializado

Artículo 9.03. – Manuales de Servicios.-

Toda Institución proveedora de Servicios de Transicionales contará con un manual de servicios, en el cual se consignará, como mínimo, lo siguiente:

(a) los criterios de admisión que deben reunir el menor que solicite los servicios;
(b) la edad, sexo, trastorno, diagnóstico y nivel de funcionamiento;
(c) un Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación, elaborado por un equipo inter o multidisciplinario;
(d) la composición del personal que tendrá la institución, así como las cualificaciones del mismo;
(e) la filosofía del programa y la descripción del ambiente; y
(f) la modalidad terapéutica o programa de actividades que corresponda.

Artículo 9.04. Niveles, Etapas o Servicios.-

Los Servicios Transicionales pueden desarrollarse por niveles, etapas o servicios, de acuerdo a sus necesidades, en el ambiente de mayor autonomía posible, así como terapéuticamente indicado.

Los niveles, etapas o servicios que adopte la institución que ofrece servicios transcisionales, deberán diseñarse de acuerdo con la condicion, el diagnóstico y el grado de supervisión requerida por el menor, entendiéndose como tal el servicio de mayor supervision, el servicio de supervisión moderada, el servicio de supervisión mínima y el servicio en hogar propio o independiente.

Se debe permitir que el menor sea referido directamente al nivel más apropiado a su condición, sin tener que pasar por todos los niveles o etapas.

Artículo 9.05. – Ingreso Involuntario, Tratamiento Compulsorio.-

Todo menor que reúna los criterios necesarios para recibir servicios transicionales, de acuerdo a las evaluaciones y recomendaciones del psiquiatra de niños y adolescentes, y del equipo terapéutico Inter o multidisciplinario, pero que su padre o madre con patria potestad, su tutor legal o la persona que tenga la custodia provisional no consienta a tales servicios, será objeto de una petición de tratamiento compulsorio, o Ingreso Involuntario ante el tribunal, de conformidad a los procedimientos dispuestos en esta Ley para esos fines.

## CAPITULO X.- SERVICIOS DE SALUD MENTAL DE MAYOR AUTONOMIA PARA MENORES.-

Artículo 10.01. – Derecho Condicionado para Solicitud de Consejería .-

Cualquier menor entre los catorce (14) y dieciocho (18) años de edad podrá solicitar y recibir tratamiento de manera ambulatoria por un período máximo de siete (7) sesiones. No se negarán los servicios al menor por falta de recursos económicos. El profesional de salud mental trabajará con el menor para que acepte participar en tratamiento familiar y eventualmente invite a su padre, madre con patria potestad o tutor legal o familiar significativo a participar en la misma.

El consentimiento de su padre o madre con patria potestad o custodia, de su tutor legal o de la persona que tenga la custodia provisional del menor, no será necesario para autorizar el tratamiento a dicho menor y éstos no serán informados de tal tratamiento sin el consentimiento del menor, excepto en los casos en que el psiquiatra de niños y adolescentes, psiquiatra, psicólogo o trabajador social identifique que el menor pueda causarse daño a sí mismo, a otros, o a la propiedad. En los casos en que la notificación al padre o madre con patria potestad o custodia, al tutor legal o a la persona que tenga la custodia provisional sea necesaria, el menor será informado de tal notificación. Una vez notificado el padre, o madre, o tutor legal o persona que tenga la custodia provisional del menor, el profesional de salud mental deberá obtener el consentimiento para llevar a cabo la intervención que aplique.

En los casos de tratamiento en trastornos relacionados a sustancias, el término inicial no se

excederá de siete (7) sesiones. Disponiéndose, que en la situación de menores que requieran servicios de desintoxicación a sustancias, se le podrán ofrecer todos los servicios o tratamientos, incluyendo los de laboratorio.

Se mantendrá la confidencialidad del tratamiento y no cursará documento alguno entre el proveedor de servicios de salud mental y el padre, madre o tutor legal del menor hasta tanto transcurran los términos de sesiones, según establecidos en este Artículo.

Los costos correspondientes a los servicios de tratamiento ambulatorio a menores se podrán facturar con cargo al seguro de salud del menor, en el caso de que ello aplique. El servicio también puede darse por terminado sí el menor deja de asistir o se concluye el servicio por acuerdo mutuo.

Artículo 10.02. – Servicios de Mayor Autonomía para Menores.-

Todo menor que por sí o por su padre, madre con patria potestad o tutor legal, solicita a un proveedor indirecto para comenzar a recibir un servicio de mayor autonomía de salud mental, con o sin su consentimiento, en los diferentes niveles de cuidado, recibirá durante las primeras 72 horas, los siguientes servicios, entre otros:

(a) un examen físico completo;
(b) análisis de laboratorios;
(c) una evaluación psiquiátrica realizada por un psiquiatra de niños y adolescentes;
(d) una evaluación psicológica ;
(e) una evaluación social; y
(f) un cernimiento de funcionamiento global (GAF- EJE V del DSM IV o el vigente al momento)

Los resultados de estas pruebas, análisis y evaluaciones formarán parte del expediente clínico del menor. Dichos resultados se utilizarán para establecer el Plan Individualizado de Tratamiento en el nivel de cuidado de mayor autonomía que corresponda. Los procedimientos serán consignados en el reglamento que para tales fines se promulgue.

Las disposiciones de este Artículo no serán de aplicación en el caso de oficinas privadas de profesionales de salud mental. En tal caso, estos profesionales se asegurarán de cumplir con los estándares aplicables a sus respectivas profesiones, tomando como base las siguientes guías;

A) Psiquiatra de Niños y Adolescentes- será responsable de una evaluación psiquiátrica que determinará la disposición inmediata del caso (continuar con el tratamiento de mayor autonomía o referirle a otro nivel de cuidado, según lo requieran sus síntomas y signos). Sus notas clínicas reflejarán los síntomas y signos, el diagnóstico, el curso clínico y la disposición final del caso entre otros.

B) Médico Generalista o Especialista- si el paciente presentase síntomas y signos mentales, que no fuesen de su incumbencia profesional primaria, será su responsabilidad referirlo a un profesional de la conducta, a tenor con la naturaleza y severidad de los síntomas y signos. Sus notas clínicas reflejarán los síntomas y signos, el diagnóstico o impresión diagnostica, el curso clínico y la disposición final, entre otros.

C) Psicólogos- será responsable de una evaluación psicológica completa, que determinará la disposición final (mantenerlo en ambulatorio o referirlo a otro nivel de cuidado). Si durante la evaluación o el tratamiento del menor, surgiesen síntomas y signos que no fuesen de su incumbencia primaria, se referirá al menor al nivel de cuidado que corresponda. Sus notas clínicas reflejarán los síntomas, y signos, el diagnóstico, el curso clínico y disposición final del caso, entre otros.

D) Trabajador Social Clínico – será responsable de una evaluación social en la cual se identifique información relevante a los factores y recursos que afecten la condición del adulto, cuya evaluación incluirá, entre otros: servicios que hayan sido ofrecidos por otras agencias; historial del adulto, incluyendo su desarrollo escolar, ocupacional y ajuste social; historial

médico familiar que incluya además, la presencia o ausencia de trastornos mentales, entre los que están comprendidos los relacionados a sustancias; y el perfil familiar y los recursos físicos y económicos con los que se cuenta.

Artículo 10.03. – Evaluación Inicial; Plan de Tratamiento y Recuperación en Otro Nivel de Mayor Autonomía.-

Todo menor evaluado, que haya sido hospitalizado, y que por las recomendaciones del psiquiatra de niños y adolescentes, y el Equipo Terapeútico, Inter o multidisciplinario, se determine que necesita de tratamiento dentro de otro nivel de cuidado de mayor autonomía, se le revisará el plan de egreso o las recomendaciones de la evaluación, y se pondrá en práctica el mismo dentro de las veinticuatro (24) horas posteriores a la admisión.

La evaluación y sus recomendaciones o el plan de egreso, formarán parte del expediente clínico del menor o en el nivel de cuidado que aplique. Dichos resultados se utilizarán para establecer el Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación, el cual se revisará de acuerdo al diagnóstico; según la severidad de los síntomas y signos para cada nivel de cuidado, según las mejores prácticas en el campo de la salud mental. Este plan será formulado por un equipo Inter o multidisciplinario, no más tarde de los quince (15) días siguientes a su ingreso. Se revisará cada quince (15) días, según los estándares para cada nivel de cuidado o cuando ocurra un cambio sustancial. Una vez haya alcanzado los objetivos de su Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación, continuará en otro nivel de cuidado de mayor autonomía, según su condición se lo permita.

Artículo 10. 04.- Manuales de Servicios .-

Toda Institución proveedora de servicios de mayor autonomía contará con un Manual de Servicios, en el cual se consignará, como mínimo, lo siguiente:

(a) los criterios de admisión que deben reunir los menores que soliciten los servicios;
(b) la edad, sexo, trastorno, diagnóstico y nivel de funcionamiento;
(c) un Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación, elaborado por un equipo inter o multidisciplinario;
(d) una composición del personal que tendrá, la institución, así como las cualificaciones del mismo;
(e) la filosofía del programa y descripción del ambiente de la institución;
(f) la modalidad terapéutica o programa de actividades que corresponda;

Las disposiciones de este artículo, no serán de aplicación a las oficinas de profesionales de salud mental en la práctica privada, sin embargo, éstos deberán orientar al menor, a su padre, madre con patria potestad, su tutor legal o la persona que tenga su custodia provisional, sobre las opciones de tratamiento para su condición, las que ellos recomiendan y las que pueden proveer, a base de los síntomas, signos e impresión diagnóstica en el momento de la evaluación inicial.

## CAPITULO XI.- EVALUACION DE MENORES BAJO LA JURISDICCION DEL TRIBUNAL; EN INSTITUCIONES PROVEEDORAS DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL.-

Artículo 11.01.– Orden de Evaluación a Menores Bajo la Jurisdicción del Tribunal.-

El tribunal ordenará la evaluación de aquellos menores a quienes se les imputa faltas o que hayan sido declarados incursos en faltas, en una institución proveedora de salud mental para menores, siempre que se necesite confirmar o descartar la presencia de un trastorno emocional, motu propio o a petición de parte.

El psiquiatra de niños y adolescentes, en conjunto con el equipo inter o multidisciplinario de la institución proveedora a menores, informará por escrito al tribunal los resultados de dicha evaluación. Estos resultados incluirán las recomendaciones específicas sobre el manejo del menor y orientaciones a su

familia, así como la ubicación en el nivel de cuidado correspondiente.

Artículo 11.02. – Ingreso a Institución para Niños o Adolescentes.-

Si luego de la evaluación se determina que el menor bajo la jurisdicción del tribunal padece de trastorno mental, el tribunal ordenará que se elabore e implante un Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación inter o multidisciplinario, que incluirá la provisión de los servicios especializados necesarios según establecidos en esta Ley. Dichos servicios deberán ser provistos en una institución para niños o adolescentes.

El menor deberá reunir los criterios de ingreso a la mencionada institución y una vez ingresado en la misma, será evaluado, conforme a lo dispuesto en esta Ley y se informará al tribunal cada tres (3) meses o antes de haber cambio significativo en su condición, para propósitos de determinar el progreso en su tratamiento, recuperación y rehabilitación, así como las recomendaciones correspondientes. Copia de la evaluación será enviada al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Asuntos de Menores, al Procurador de Menores y a las partes según indique el tribunal.

Artículo 11.03. – Petición de Ingreso de Menores Declarados Procesables e Imputables con Trastorno Emocional.-

Si como resultado de la evaluación ordenada por el tribunal, el psiquiatra de niños y adolescentes, en consulta con el equipo inter o multidisciplinario, determina que el menor es imputable o procesable y que tiene trastorno emocional, del tribunal, de hallar incurso en falta al menor y de disponer su ingreso, ordenará el mismo a una unidad especializada en la Administración de Instituciones Juveniles para tratamiento de salud mental para niños o adolescentes. Mientras el menor permanezca bajo la custodia de la Administración de Instituciones Juveniles, ésta será responsable de que el menor reciba los servicios de tratamiento, recuperación y rehabilitación de salud mental requeridos.

En el caso de que el tribunal le conceda los beneficios de la probatoria, mantendrá la jurisdicción sobre el mismo y exigirá, como condición entre otras, que el menor reciba servicios de salud mental.

El Director de la unidad especializada deberá notificar al tribunal tan pronto el menor sea dado de alta de la unidad, y enviará copia de dicha notificación junto con el plan de egreso a la Administración de Instituciones Juveniles. Posterior a la misma, el tribunal ordenará lo que proceda y enviará copia de la orden a esos efectos a la Administración de Instituciones Juveniles.

Una vez el tribunal determine que procede el alta, el menor deberá ser dado de alta inmediatamente.

Artículo 11.04. – Menor Exonerado de Falta; Orden de Referido a Servicio de Salud Mental.-

Cuando el tribunal haya exonerado al menor de cometer una falta, pero la evaluación refleja la existencia de un trastorno emocional, el menor será referido al servicio de salud mental recomendado en dicha evaluación. El tribunal expedirá una Orden de Ingreso Involuntario de quince (15) días. Si se determinara que el término de quince (15) días es insuficiente, se procederá con el cumplimiento del procedimiento establecido en esta Ley.

Artículo 11.05. – Informe Antes de la Disposición del Caso.-

Antes de la disposición del caso por el tribunal, el equipo terapéutico Inter o multidisciplinario responsable del tratamiento, recuperación y rehabilitación del menor, preparará un informe que incluya el nivel de cuidado, tomando en cuenta que éste sea el terapéuticamente indicado y de mayor autonomía, incluyendo la coordinación interagencial, una evaluación social, un plan de tratamiento, recuperación y rehabilitación preliminar y cualquier otra información que el tribunal estime conveniente antes de la disposición del caso. El Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación inter o multidisciplinario será desarrollado conforme a los requerimientos de esta Ley. Si el menor es ingresado, el tribunal considerará el informe al determinar la disposición del caso.

Artículo 11.06. – Ordenes Finales, Copia al Menor; Revisión.-

Cualquier orden del tribunal deberá será por escrito, debidamente sellada y firmada y estará acompañada de una determinación clara y precisa del tribunal en lo relativo a la situación del menor.

Se le entregará una copia de la orden al padre o madre con patria potestad o al tutor legal o la persona que tenga la custodia provisional que recibe servicios de salud mental, o a su abogado y al director de la institución de salud mental o al Director del servicio del nivel de cuidado que corresponda al cual fue ingresado el menor. El tribunal notificará a cualquiera de los anteriores sobre su derecho a solicitar reconsideración y en caso de ser indigente, de su derecho a una transcripción gratuita del expediente legal y a asistencia de abogado. Si el padre o madre con patria potestad o el tutor legal desea una revisión y no tiene medios económicos para ello, el tribunal le asignará un abogado.

## CAPITULO XII.- SISTEMA COLABORATIVO.-

Artículo 12. 01.- Manifestaciones del Problema de la Salud Mental.-

Se reconoce que las diversas manifestaciones de problemas y trastornos mentales, tales como la violencia domestica, la criminalidad, la delincuencia, el maltrato de menores, la deserción escolar y la población de deambulantes, caen bajo la responsabilidad de diferentes agencias de servicios de gobierno, lo que trae una atención fragmentada del problema. Partiendo de esta premisa, se establece la importancia y urgencia de desarrollar sistemas colaborativos interagenciales, para atender en forma integrada y comprensiva las poblaciones con trastornos mentales que de una u otra forma también son servidas o tienen derecho a recibir servicios por las otras agencias. Podrán colaborar en este esfuerzo entidades y empresas privadas con o sin fines de lucro.

Artículo 12.02- Principios del Sistema Colaborativo.-

Los principios que rigen este sistema son:

(a) Evitar la duplicidad de esfuerzos de servicios;

(b) Proveer servicios costo efectivo a largo plazo;

(c) Mantener un sistema de mejoramiento de calidad de servicios; y

(d) Proveer servicios lo más comprensivos posible a las poblaciones que lo necesiten cercanos a sus comunidades.

Artículo 12.03.- Plan de Trabajo.-

Este sistema desarrollará un plan maestro de trabajo en el cual indicará las fases, metas, objetivos, actividades, indicadores de logros, de ejecución y de resultados para el mismo, al igual que las fechas de implantación por agencias y poblaciones a servir (niños, adolescentes mujeres, madres, deambulantes y otros), y las agencias y servicios que correspondan para cada una. Incluirá además, las aportaciones de cada agencia, en proporción a las necesidades identificadas para cada población y cada proyecto colaborativo, la implantación de una evaluación formativa y sumativa de este sistema y el presupuesto integrado para todo el sistema colaborativo y sus proyectos. Se hace la distinción que la colaboración es trabajo en conjunto. Se establece que este sistema puede utilizar diversos tipos y modelos colaborativos entre ellos:

(a) Integración de Recursos;

(b) Presupuesto Colaborativo;

(c) Planificación Colaborativa,

(d) Planificación Complementaria;

Artículo 12.04.- Tipos de Colaboraciones.-

Se establece que este sistema puede utilizar diversos tipos y modelos de colaboraciones interagenciales, entre las que se encuentran la integración de recursos físicos y profesionales, el presupuesto colaborativo "Blended Budget" para un proyecto o creación y acceso a un servicio, la planificación colaborativa, y la planificación complementaria.

Se hace la distinción de que la colaboración es un trabajo en conjunto, para una planificación e implantación conjunto.

Artículo 12.05.- Presentación de Informes.-

Este sistema presentará informes semestrales y anuales, con las evaluaciones que de acuerdo al campo se denominan como formativas y sumativas, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la Asamblea Legislativa., de acuerdo a este artículo.

Artículo 12.06.- Vigencia.-

La vigencia para la implantación de este sistema se iniciará a los noventa (90) días de aprobarse esta Ley, iniciándose los trabajos colaborativos interagenciales.

## CAPITULO XIII- RESPONSABILIDADES GENERALES DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCION.-

Artículo 13.01 – Licenciamiento.-

El Administrador, según autorizado por la Ley Núm. 67 de 7 de agosto de 1993, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA)", establecerá la reglamentación necesaria a los fines de licenciar, supervisar y mantener un registro público de todas las instituciones y facilidades, ya sean públicas o privadas, que se dediquen a proveer servicios para la prevención o el tratamiento de desórdenes mentales, y de adicción a drogas y alcoholismo; a formular e implantar los programas de prevención y tratamiento, y establecer los controles de calidad de los mismos, con el objetivo de cumplir con los propósitos de esta Ley.

La autoridad para conceder licencias que establece este artículo será de la entera competencia de la Administración, licencia que se expedirá a través de su División de Licenciamiento, para efectos de los servicios y facilidades de salud mental exclusivamente. Dicha licencia se conocerá como "Licencia de Servicios de Salud Mental". El Administrador establecerá mediante reglamento los costos que tendrá que pagar la institución que solicita o renueva la licencia, estableciéndose categorías entre las instituciones con y sin fines de lucro. La reglamentación que adopte a tales efectos, se establecerá entre otros requisitos, para la concesión y renovación de la licencia que el solicitante describa los mecanismos para la implantación y cumplimiento de esta Ley, así como los indicadores que utilizará para asegurarse de que dicha implantación sea efectiva y continua.

Artículo 13.02. – Reglamentos.-

Se faculta al Administrador a preparar todos aquellos reglamentos que sean necesarios, a los fines de facilitar la implantación de esta Ley, dentro de un término de seis (6) meses después de la aprobación de esta Ley y en conformidad a la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

Artículo 13.03. – Formularios y Querellas.-

La Administración preparará todos los formularios que sean necesarios para cumplir a cabalidad sus obligaciones y responsabilidades. Mantendrá vigilancia sobre la implantación de estas disposiciones con los usuarios, instituciones públicas y privadas que ofrezcan servicios. Investigará y establecerá los procedimientos para las querellas que le sean formuladas por las personas que reciban servicios de salud mental, sus tutores o representantes legales.

La Administración mantendrá a través de sus Oficinas de Orientación y Coordinación de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (OOCA), un enlace entre los consumidores de los servicios de salud mental y las instituciones públicas y privadas, para:

(a) asegurar que los consumidores reciban los servicios a que tienen derecho;

(b) efectuar intercesión en caso que no haya acceso a los servicios adecuados de acuerdo al trastorno y severidad de los síntomas y signos, la edad y las características de la persona;

(c) proveer manejo de caso y acceso a las personas con trastornos emocionales o mentales severos a servicios comprensivos, de acuerdo a sus necesidades;

(d) accesar a las poblaciones crónicas y recurrentes a la red de proveedores para que participen y reciban el tratamiento que su condición necesita ("outreach").

(e) asistir en el proceso de transición de la Reforma de Salud, hasta que se complete la misma.

Artículo 13.04. – Sistema de Revisión y Asistencia Técnica Anual.-

El Administrador establecerá e implantará un Sistema de Revisión y Asistencia Técnica de las instituciones proveedoras para asegurar la calidad y efectividad de los servicios prestados y proteger los mejores intereses de las personas que reciben servicios de salud mental. Diseñará e implantará un plan de revisión, asistencia técnica y evaluación anual. Los resultados de las revisiones técnicas serán analizados por la Administración para identificar las necesidades, con relación al cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley. Los mismos serán utilizados para someter al Administrador las recomendaciones que procedan, en cuanto a adiestramientos así como a las enmiendas a ésta y otras Leyes vigentes relacionadas con los servicios de salud mental.

Para asegurar la calidad y efectividad de los servicios prestados y proteger los mejores intereses de las personas que reciben los servicios, el Administrador podrá, previa vista al efecto, multar, denegar, suspender o revocar en cualquier momento tales licencias, cuando determine que una institución no cumple con los requisitos establecidos en esta Ley. En el caso de las instituciones que proveen servicios de tratamiento, recuperación, rehabilitación y servicios transicionales, la licencia que en virtud de esta Ley le sea otorgada tendrá una vigencia por un periodo de dos (2) años. La solicitud de renovación se hará en conformidad a las reglas y reglamentos que a tales fines establezca la Administración.

Artículo 13.05- Asignación de Fondos -

El Administrador, según autorizado por la Ley Núm. 67 de 7 de agosto de 1993, según enmendada, conocida, como "Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción", será responsable procurar y asegurar las asignaciones de fondos presupuestarios necesarios para facilitar la implantación y cumplimiento de esta Ley. Será la responsabilidad de la Asamblea Legislativa y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto asignar fondos para implantar esta Ley.

## CAPITULO XIV .- DISPOSICIONES ADICIONALES.-

Artículo 14.01. – Reclamación de Abuso.-

Cualquier persona que reciba servicios de salud mental y que por sí, por su tutor legal o por medio de cualquier otra persona, tenga motivos fundados para creer que se ha incurrido en abuso, podrá acudir al Tribunal de Primera Instancia, para solicitar el cese y desista de toda actuación que contravenga las disposiciones de ésta Ley.

Artículo 14.02. – Abuso; Notificación a Junta Examinadora o Agencia Reguladora.-

De determinarse que un profesional de salud mental ha incurrido en abuso o negligencia, dicha determinación será notificada por el tribunal a la Junta Examinadora o Tribunal Examinador correspondiente.

La presentación de una acción al amparo de este artículo, es independiente de cualquiera otra acción civil, criminal o administrativa que disponga la legislación vigente, y no impedirá el ejercicio de tales acciones, derechos o remedios.

Artículo 14.03. – Prohibición de Institucionalización.-

Toda instalación o facilidad de salud mental que se determine ha incurrido en la institucionalización de una persona, adulto o menor, el cual no reúne los criterios clínicos ni severidad para estar recluido en el nivel de cuidado donde se ha mantenido luego de la estabilización de los síntomas y signos para el nivel de cuidado donde permaneció y privándosele de un nivel de cuidado de mayor autonomía y menor intensidad

o restricción, incurrirá en el delito menos grave y será sancionado con una multa no mayor de cinco mil (5,000) dólares o pena de cárcel por un período no mayor de seis (6) meses, o ambas penas a discreción del tribunal, más el pago del costo diario de la institución donde se encuentre la persona recluida, hasta un máximo de treinta (30) días.

Artículo 14.04.- Hábeas Corpus.-

Nada en esta Ley impedirá a cualquier persona radicar un recurso de Hábeas Corpus. El tribunal que conceda dicho recurso, deberá enviar copia del mismo al tribunal que ordenó el ingreso. El Secretario del tribunal deberá incluir la misma en el expediente del caso.

Artículo 14.05. – Petición al Tribunal.-

Toda petición presentada al tribunal, amparándose en las disposiciones de esta Ley, será suscrita bajo juramento, so pena de perjurio. De existir motivos fundados para creer que el peticionario ha ofrecido información falsa con el propósito de que una persona sea ingresada a una Institución proveedora, se notificará de inmediato al fiscal, quien procederá a investigar los hechos para establecer si hay causa para proceder contra el peticionario.

Artículo 14.06. – Modificación de Incompetencia.-

Cualquier persona que haya sido declarada incompetente por cualquier tribunal podrá solicitar en cualquier momento, una petición para la modificación de la tutoría o para que se le restituya su competencia legal. La petición podrá ser radicada en el tribunal que determinó que la persona era incompetente o en el tribunal donde resida la misma. La petición deberá estar acompañada por una certificación del psiquiatra y por la notificación de alta de la institución. La certificación del psiquiatra deberá incluir el alcance de la capacidad de la persona de manejar su persona y sus bienes. Si no se acompaña la certificación, el tribunal podrá nombrar un psiquiatra para que examine a la persona y radique la certificación sobre su competencia.

Artículo 14.07. – Notificación de Muerte de Personas Dentro de la Institución.-

Cuando una persona que fuere ingresada a una institución, fallezca dentro de la misma, será obligación del director de ésta notificar la defunción a la fiscalía correspondiente, para que se ordene llevar a cabo una autopsia. Los procedimientos se llevarán a cabo, conforme a la Ley Núm. 13 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como "Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico". En los casos en que la persona fuere ingresada por orden judicial, será obligación del Director de la institución, notificar la defunción al tribunal que dio la orden de ingreso.

Artículo 14.08. – Penalidades.-

(a) Toda persona que viole cualquiera de las disposiciones de esta Ley, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere, será sancionada con pena de una multa no mayor de cinco mil (5,000) dólares.

(b) Toda persona natural o jurídica que discrimine en torno a cualquier aspecto relacionado con el acceso a los servicios necesarios para la persona que requiera de servicios de salud mental, que cometa abuso o viole el deber de guardar la confidencialidad de la información, o efectúe el aislamiento, restricción o terapia electroconvulsiva de forma contraria a lo dispuesto en esta Ley, incurrirá en delito grave y será sancionada con una multa no menor de cinco mil (5,000) dólares ni mayor de quince mil (15,000) dólares o pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, o ambas penas a discreción del tribunal.

(c) El iniciar una acción bajo lo dispuesto en los incisos (a) y (b) de este artículo, no impedirá la radicación de cualquier tipo de acción administrativa o civil.

Artículo 14.09. – Derogación.-

Se deroga la Ley Num. 116 de 12 de junio de 1980, conocida como "Código de Salud Mental de Puerto Rico".

Artículo 14.10. – Separabilidad.-

Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, inciso, capítulo o parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional por un tribunal con competencia, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, inciso, capítulo o parte que así hubiere sido declarada inconstitucional.

Artículo 14.11. – Vigencia

Esta Ley comenzará a regir a los noventa (90) días siguientes a su aprobación, salvo el Capítulo XIII, de Responsabilidades de la Administración, el cual comenzará a regir a los sesenta (60) días siguientes a su aprobación.

**"INFORME CONJUNTO**

**AL SENADO DE PUERTO RICO:**

Vuestras Comisiones de Salud y Bienestar Social, de Gobierno y Asuntos Federales previo estudio y consideración del P. de la C. 3275 recomiendan la aprobación de la medida con las siguientes enmiendas:

**En El Titulo:**

| | |
|---|---|
| Página 1, línea 1; | luego de "de" insertar "prevención,". |

**En El Decretase:**

| | |
|---|---|
| Página 3, línea 19; | luego de "Hospitalización" añadir "o Tratamiento". |
| Página 4, línea 13; | luego de "Criminal" añadir "y". |
| Página 4, línea 17; | luego de "Suicida" añadir "o Automutilación". |
| Página 6, entre líneas 2 y 3; | insertar el siguiente texto: |
| "ñ) | Derecho a Solicitar Participación de Grupos o Personas de Apoyo.". |
| Página 6, línea 3; | eliminar "ñ)" y sustituir por "o)". |
| Página 6, línea 5; | eliminar "o)" y sustituir por "p)". |
| Página 6, línea 6; | eliminar "p)" y sustituir por "q)". |
| Página 6, línea 7; | eliminar "q)" y sustituir por "r)". |
| Página 6, línea 8; | eliminar "r)" y sustituir por "s)". |
| Página 6, línea 9; | eliminar "s)" y sustituir por"t)". |
| Página 8, línea 14; | eliminar "Negativa para recibir tratamiento." y sustituir por "Autonomía Condicionada para Solicitar Consejería y Tratamiento.". |
| Página 8, línea 23; | eliminar "Autonomía Condicionada para Aceptar el" y sustituir por "Negativa para Recibir". |
| Página 9, entre líneas 10 y 11; | añadir "q) Derecho a Solicitar Participación de Grupos o Personas de Apoyo.". |
| Página 9, línea 11; | eliminar "q)" y sustituir por "r)". |
| Página 11, línea 13; | eliminar "r)" y sustituir por "s)". |
| Página 9, línea 14; | eliminar "s)" y sustituir por "t)" y luego de "Potestad" añadir "o Custodia". |
| Página 9, línea 16; | eliminar *t)" y sustituir por"u)". |
| Página 9, línea 17; | eliminar "u)" y sustituir por "v)". |
| Página 9, línea 18; | eliminar "v)" y sustituir por "w)". |

| | |
|---|---|
| Página 11, línea 20; | luego de "MENTAL" añadir "PARA MENORES". |
| Página 12, línea 9; | eliminar todo su contenido. |
| Página 12, línea 10; | eliminar "12.03" y sustituir por "12.02". |
| Página 12, línea 11; | eliminar todo su contenido. |
| Página 12, línea 12; | eliminar "12.05" y sustituir por "12.03". |
| Página 12, línea 13; | eliminar "12.06" y sustituir por "12.04". |
| Página 12, línea 14; | eliminar "12.07" y sustituir por "12.05". |
| Página 12, línea 15; | eliminar "12.08" y sustituir pior "12.06". |
| Página 13, línea 16; | luego de "fundamentales" eliminar ";" y sustituir por ":". |
| Página 13, línea 24; | luego de "establecen" eliminar ", armonizando con" y sustituir por "; armonizar". |
| Página 14, línea 2; | luego de "prestados" añadir "; y destacar los aspectos de recuperación y rehabilitación como parte integrante del tratamiento así como la prevención". |
| Página 14, líneas 13 y 14; | luego de "acceso" añadir ", en especial" y eliminar "y de salud mental". |
| Página 15, línea 1; | antes de "tratamiento" insertar "servicios de", luego de "tratamiento" añadir ", recuperación y rehabilitación" y después de "mentales" añadir ",". |
| Página 15, línea 10; | luego de "servicios" añadir "de cuidado coordinado. Este se organiza en niveles de mayor intensidad y mayor autonomía. El fin es propiciar que la persona se mueva de un nivel de mayor intensidad a uno de mayor autonomía. Los niveles se perciben en concordancia con la severidad de los síntomas y signos y el comportamiento de la persona. Dentro de este concepto de servicios están, entre otros, los" y después de "intensivo," añadir "hospitalización parcial,". |
| Página 15, línea 11; | luego de "mantenimiento" añadir "," , luego de "con" añadir "o sin" y después de "y" añadir "los". |
| Página 15, línea 12; | eliminar "incluirán, los" y sustituir por "incluyen" y eliminar "por trastornos" y sustituir por "organizados por". |
| Página 15, línea 13; | eliminar "intermedios" y sustituir por "de estadía prolongada". |
| Página 16, línea 3; | eliminar "de la enfermedad o el problema" y sustituir por "del trastorno mental o emocional". |
| Página 16, línea 9; | luego de "tratamiento" añadir ", recuperación y rehabilitación". |
| Página 16, línea 12; | luego de "recibir" añadir "de ser necesario los siguientes servicios, entre otros;". |
| Página 16, línea 13; | luego de "farmacoterapia" eliminar "," y sustituir por "." y eliminar el resto de la línea. |
| Página 16, línea 15; | eliminar "una condición o trastorno" y sustituir por "un trastorno mental". |
| Página 17, línea 13; | luego de "de" añadir "menor". |
| Página 17, línea 23; | luego de "condición" añadir "clínica". |
| Página 17, línea 24; | luego de "tratamiento" añadir "," y eliminar "y" y después de "recuperación" añadir "y rehabilitación". |

Página 18, línea 5; eliminar "los participantes" y sustituir por "las personas que reciben los servicios".

Página 18, línea 9; luego de "persona" añadir "que recibe los servicios".

Página 18, línea 11; eliminar "los participantes de" y sustituir por "las personas que reciben los".

Página 18, línea 14; eliminar "los usuarios de" y sustituir por "las personas que reciben".

Página 18, línea 22; eliminar "en las".

Página 18; líneas 23 y 24; luego de "multidisciplinario" eliminar ". Se tomará en consideración la determinación de" y sustituir por "y en los".

Página 19, línea 1; luego de "ello" añadir "." y eliminar "y" y sustituir por "Se".

Página 19, línea 13; luego de "mental," eliminar "o" y sustituir por "y" y luego de "riesgo" añadir "inmediato".

Página 19, línea 15; luego de "tratamiento" eliminar el resto de la línea y sustituir por "en cualquiera de los servicios de salud mental.".

Página 19, línea 16; eliminar "al" y sustituir por "a un".

Página 19, línea 19; eliminar "o" y sustituir por "y".

Página 19, línea 20; luego de "físico" añadir "inmediato".

P<gina 20, línea 3; luego de "multidisciplinario" añadir "y de acuerdo a los procedimientos establecidos en esta Ley".

Página 20, línea 7; eliminar "problemática" y sustituir por "problemas".

Página 20, línea 17; luego de "mental" eliminar ";" y sustituir por ":".

Página 21, línea 4; luego de "Adicción" eliminar ";" y sustituir por ".".

Página 21, línea 7; luego de "estrategias" eliminar ";" y sustituir por ".".

Página 21, líneas 8 y 9; eliminar "trastornos con abuso/dependencia" y sustituir por "dependencia o abuso".

Página 21, línea 10; luego de "inyectables" eliminar "(endovenosas);" y sustituir por "o endovenosas.".

Página 21, línea 13; luego de "mentales" eliminar ";" y sustituir por ".".

Página 21, línea 15; luego de "Incidencia" eliminar ":" y sustituir por ".".

Página 22, línea 7; luego de "generales" añadir "que provean estos servicios".

Página 24, línea 11; luego de "psiquiatra" eliminar "y" y sustituir por "en consulta con" y eliminar "terapéutico" y sustituir por "inter o multidisciplinario".

Página 25, línea 9; luego de "persona" eliminar ". Se establecen" y sustituir por "e incluye".

Página 25, línea 21; al final de la línea añadir "dirigir, coordinar e".

Página 25, línea 23; eliminar "dirige en una" y sustituir por "ofrece la".

Página 26, línea 8; luego de "riesgo" añadir "inmediato" y luego de "mismo," añadir "a otros".

Página 26, línea 13; eliminar "Enfermedad de".

Página 27, línea 9; luego de "humano," añadir "y por aquellos otros profesionales pertinentes a la condición de la persona,".

Página 27, línea 18; luego de "profesionales" añadir "de la salud mental", después de "disciplinas," añadir "las cuales proveen servicios de salud mental con capacidad, facultad

profesional y legal para diagnosticar y prescribir tratamiento en las diferentes áreas del funcionamiento y las capacidades del ser humano, y por aquellos otros profesionales pertinente a la condición de la persona,".

Página 27, línea 19; luego de "escenario" eliminar "," y añadir "." y eliminar "los cuales atienden" y sustituir por "Atienden".

Página 27, línea 21; eliminar "situación y diagnóstico" y sustituir por "cuadro clínico".

Página 28, línea 5; eliminar "ínter" y sustituir por "inter".

Página 29, línea 2; luego de "supervisan," añadir "y".

Página 29, línea 12; luego de "un" añadir "psiquiatra en consulta con el".

Página 29, línea 14; luego de "ello" añadir "por parte del adulto o del padre o madre con patria potestad o custodia del menor o tutor legal de la persona".

Página 29, línea 20; eliminar "el diagnóstico" y sustituir por "la severidad de síntomas y signos".

Página 29, línea 24; luego de "psiquiatra" eliminar ",".

Página 30, línea 1; luego de "tratamiento" añadir "o deficiencia del plan de egreso con ausencia de seguimiento adecuado. También puede darse por ausencia de servicios que son cruciales para la recuperación de la persona".

Página 30, líneas 13 a la 15; eliminar desde "quien estará" hasta "multidisciplinario y".

Página 30, línea 17; eliminar "del paciente" y sustituir por "de la persona con trastorno mental, además de dar seguimiento a la implantación del plan individual de tratamiento, recuperación y rehabilitación".

Página 30, línea 24; eliminar "del paciente" y sustituir por "de la persona".

Página 31, línea 1; luego de "tratamiento" añadir ", recuperación y rehabilitación".

Página 31, línea 3; eliminar "del paciente" y sustituir por "de la persona".

Página 31, línea 4; eliminar "su diagnóstico" y sustituir por "la severidad de síntomas y signos. Esta determinación, consignada en el expediente clínico de la persona, va dirigida a informar y fundamentar la necesidad de iniciar o continuar con los servicios de salud mental".

Página 31, línea 11; luego de "proveedores" añadir "directos o indirectos".

Página 32, línea 3; eliminar "el paciente" y sustituir por "la persona".

Página 32, línea 6; eliminar "al paciente" y sustituir por "a la persona".

Página 32, líneas 13 y 14; eliminar "con experiencia clínica" y sustituir por "clínico" y luego de "social" añadir "con experiencia clínica".

Página 33, línea 4; eliminar "que están".

Página 33, líneas 5 y 6; eliminar desde "a los profesionales" hasta "los cuales facilitan" y sustituir por "en".

Página 33, líneas 7 y 8; eliminar "otro profesional" y sustituir pr "otra persona o grupo".

Página 33, línea 13; eliminar "clínicas".

Página 33, línea 19; eliminar "Leyes" y sustituir por "leyes".

| | |
|---|---|
| Página 34, línea 2; | antes de "Código" añadir "" y luego de "Rico" añadir "". |
| Página 34, línea 4; | luego de "Psicólogo" añadir "Clínico". |
| Página 34, línea 9; | eliminar "especialidades" y sustituir por "subespecialidades". |
| Página 35, línea 2; | luego de "la" insertar "adquisición,". |
| Página 37, línea 4; | eliminar "que conlleven" y sustituir por "para". |
| Página 37, línea 6; | eliminar "o Disturbio". |
| Página 37, línea 7; | luego de "Mentales" añadir "en su cuarta y subsiguientes revisiones". |
| Página 37, línea 8; | eliminar ", a excepción de los Códigos V". |
| Página 38, línea 4; | eliminar "incluye" y sustituir por "puede incluir". |
| Página 38, línea 7; | eliminar "terapéutico ínter" y sustituir por "inter". |
| Página 38, línea 10; | luego de "mismo" añadir ",". |
| Página 39, líneas 1 y 2; | eliminar "Trastornos Mentales Severos" y sustituir por "Enfermedad Mental Severa". |
| Página 39, línea 3; | eliminar "trastornos mentales severos" y sustituir por "enfermedades mentales severas". |
| Página 39, línea 8; | eliminar "trastornos mentales severos" y sustituir por "enfermedades mentales severas". |
| Página 39, línea 12; | eliminar "capítulo" y sustituir por "Capítulo". |
| Página 40, línea 5; | eliminar "su" y sustituir por "un". |
| Página 40, línea 6; | eliminar "interdisciplinario" y sustituir por "inter o multidisciplinario". |
| Página 40, líneas 8 y 9; | luego de "psiquiatra" añadir "o un médico" y eliminar "en consulta con un psiquiatra de adicciones" y eliminar "interdisciplinario" y sustituir por "inter o multidisciplinario". |
| Página 40, línea 11; | eliminar "puede" y sustituir por "podrá". |
| Página 40, línea 19; | eliminar "Debe" y sustituir por "Podrá". |
| Página 40, línea 23; | eliminar "deben" y sustituir por "podrá". |
| Página 40, línea 24; | eliminar "en la mayoría de los pacientes.". |
| Página 41, línea 6; | eliminar "es solo" y sustituir por "debe ser vista como". |
| Página 41, líneas 8 a la 11; | eliminar todo su contenido. |
| Página 41, línea 12; | eliminar "11. Debe" y sustituir por "10. Podrá". |
| Página 41, línea 15; | eliminar "12. Debe" y sustituir por "11. Será recomendable". |
| Página 41, línea 16; | luego de "otras" eliminar ". Debe" y sustituir por "y". |
| Página 41, línea 18; | eliminar "13. Debe" y sustituir por "12. Deberá". |
| Página 41, línea 20; | eliminar "edades, unos para adultos y otros para adolescentes" y sustituir por "razón de edad y género". |
| Página 41, líneas 21 a la 24; | eliminar todo su contenido |
| Página 42, líneas 1 a la 3; | eliminar todo su contenido. |
| Página 42, línea 4; | luego de "Hospitalización" añadir "o Tratamiento". |
| Página 42, entre líneas 11 y 12; | insertar el siguiente texto: "Los criterios que tiene que reunir toda persona para que pueda dar lugar a que se ordene por un tribunal tratamiento |

psiquiátrico compulsorio, sea en forma ambulatoria, o mediante hospitalización son:

a) situaciones de inminente peligro donde la persona pueda hacerse daño a sí mismo, a otros o a la propiedad;

b) que la persona demuestre incapcidad para tomar decisiones o para controlar su conducta;

c) se requiere prueba de conducta específica en un período de tiempo inmediatamente precedente a la prestación de la petición;

d) se requiere evidencia de ausencia de alternativas menos intensivas con iguales oportunidades de corregir o mejorar los síntomas y signos de la persona; y

e) se demuestre que el tratamiento o medida que se solicita resultara clínicamente beneficiosa.

Ninguna persona será ingresada de forma involuntaria o recibirá tratamiento compulsorio a menos que mediante prueba clara y convincente, a satisfacción del tribunal, evidencie la necesidad de tal ingreso o tratamiento, según los criterios establecidos en este Artículo.".

Página 42, línea 14; luego de "facultado" insertar "en esta Ley".

Página 42, línea 17; eliminar "artículo" y sustituir por "Artículo".

Página 42, línea 20; luego de "servicios" añadir "hospitalarios".

Página 42, línea 23; luego de "organismos" añadir "médicos".

Página 42, línea 24; luego de "terapéutico," añadir "y" y eliminar "que determine" y sustituir por "requerido por".

Página 43, línea 5; eliminar "los menores" y sustituir por "las personas".

Página 43, línea 7; luego de "tratamiento" añadir ", recuperación y rehabilitación".

Página 43, línea 8; eliminar "El modelo" y sustituir por "La composición".

Página 43, línea 9; eliminar "artículo" y sustituir por "Artículo".

Página 43, línea 22; eliminar "artículo" y sustituir por "Artículo".

Página 44, línea 12; luego de "autorizada" añadir ", según se dispone en esta Ley,".

Página 44, líneas 17 a la 23; eliminar desde "El menor" hasta "No obstante, el" y sustituir por "El".

Página 45, línea 4; luego de "." añadir "Cualquier otra información solicitada por estas personas deberá tener la autorización expresa del menor si éste tiene catorce (14) años o más, o del Tribunal cuando el menor no autoriza la inspección de la información solicitada o si el menor tiene trece (13) años o menos.".

Página 45, línea 17; luego de "reglamento" añadir "por la Administración".

Página 45, línea 22; eliminar "artículo" y sustituir por "Artículo".

Página 45, línea 23; eliminar "Leyes" y sustituir por "leyes".

Página 46, línea 11; luego de "divulgarse" añadir "la cual no incluirá datos psicológicos y sociales, familiares, o contenido específico del diálogo de las sesiones".

Página 46, líneas 14 y 15; eliminar todo su contenido.
Página 47, línea 1; luego de "Clínico" añadir "y a la Facultad de Salud Mental".
Página 47, línea 11; eliminar "Las" y sustituir por "En el caso de la reforma de salud las".
Página 47, línea 12; eliminar "de reforma de salud".
Página 47, línea 21; luego de "caso" eliminar ":" y sustituir por ".".
Página 47, línea 22; luego de "ingreso" eliminar"," y sustituir por ".".
Página 48, línea 1; luego de "mental" eliminar "," y sustituir por ".".
Página 48, línea 3; luego de "Tratamiento" añadir ",Recuperación y Rehabilitación".
Página 48, línea 4; luego de "Pronóstico" añadir "y fecha estimada de alta".
Página 48, línea 6; luego de "la" añadir "persona que recibe servicios de salud mental y estará bajo la custodia de la".
Página 48, líneas 19 a la 21; eliminar desde "Se prohibe" hasta "confidencialidad." Y sustituir por "La persona que recibe servicios de salud mental deberá ofrecer su autorización expresa para el envío de información mediante el uso del faxsimil. Si la accesibilidad de la información es mediante sistemas de computadora o electrónico, éste estará protegido por códigos de seguridad o por cualquier otro sistema de seguridad aceptable. El Administrador adoptará un reglamento para esos fines. Tanto el remitente como el recipiente de la información cumplirá con el reglamento.".
Página 48, líneas 22 y 23; eliminar desde "ponga" hasta "." y sustituir por "que pueda causar daño corporal o ponga en riesgo a ésta u otra persona.".
Página 49, línea 2; luego de "apoyo" añadir ", incluyendo a los proveedores indirectos de servicios de salud".
Página 49, líneas 4 a la 7; eliminar todo su contenido.
Página 49, entre líneas 9 y 10; insertar el siguiente texto:
"La persona que recibe información confidencial queda mediante esta Ley prohibida de divulgar la misma a terceros.".
Página 49, línea 12; eliminar "por los".
Página 49, línea 13; eliminar primer "que" y sustituir por "a" y eliminar "lo" y sustituir por "la".
Página 49, línea 17; eliminar "Tribunal" y sustituir por "tribunal".
Página 49, línea 20; eliminar "Tribunal" y sustituir por "tribunal".
Página 49, línea 22; eliminar "Tribunal" y sustituir por "tribunal".
Página 49, línea 24; eliminar "servicios".
Página 50, línea 7; luego de "psicólogo" añadir "clínico".
Página 50, línea 10; eliminar "artículo" y sustituir por "Artículo".
Página 50, línea 12; luego de "psicólogo" añadir "clínico".
Página 50, línea 15; luego de "psicólogo" añadir "clínico".
Página 50, línea 21; luego de "psicólogo" añadir "clínico".
Página 51, línea 4; eliminar "o" y sustituir por "y".

| | |
|---|---|
| Página 51, línea 12; | luego de "psicólogo" añadir "clínico". |
| Página 51, línea 14; | luego de "psicólogo" añadir "clínico". |
| Página 51, línea 20; | luego de "Suicida" añadir "o Automutilación" |
| Página 51, línea 21; | luego de "psicólogo" añadir "clínico". |
| Página 51, línea 22; | luego de "suicidio" añadir "o automutilación" y después de "psicólogo" añadir "clínico". |
| Página 51, línea 23; | eliminar "suicida". |
| Página 51, línea 24; | luego de "suicidio" añadir "o automutilación". |
| Página 52, línea 1; | luego de "psicólogo" añadir "clínico". |
| Página 52, línea 4; | luego de "psicólogo" añadir "clínico". |
| Página 52, línea 5; | luego de "suicidio" añadir "o automutilación". |
| Página 52, línea 6; | luego de "suicidio" añadir "o automutilación". |
| Página 52, línea 8; | luego de "suicidio" añadir "automutilación" y después de "psicólogo" añadir "clínico". |
| Página 52, línea 11; | luego de "suicidio" añadir "o automutilación". |
| Página 52, línea 15; | luego de "suicidio" añadir "o automutilación". |
| Página 52, línea 17; | luego de "suicidio" añadir "o automutilación". |
| Página 52, línea 18; | luego de "psicólogo" añadir "clínico". |
| Página 52, línea 20; | luego de "psicólogo" añadir "clínico". |
| Página 53, línea 20; | eliminar "será el" y sustituir por "incluirá lo". |
| Página 54, línea 5; | eliminar "comité de revisión" y sustituir por "Comité de Revisión". |
| Página 54, línea 10; | luego de "psiquiatra y" añadir "un". |
| Página 54, línea 11; | luego de "multidisciplinario" añadir "distinto al que atiende a la persona". |
| Página 54, línea 13; | luego de "comunitaria" añadir "independiente que represente el interés público". |
| Página 54, línea 14; | eliminar "halla" y sustituir por "haya". |
| Página 54, línea 15; | eliminar "artículo" y sustituir por "Artículo". |
| Página 55, línea 14; | luego de "responder" añadir "sin razón justificada,". |
| Página 56, línea 24; | luego de "instituciones" añadir "penales o de psiquiatría forense cuando los mismos no conflijan con las medidas de seguridad propios de la institución". |
| Página 58, línea 4; | eliminar "según su diagnóstico, y la severidad de sus síntomas y signos" y sustituir por "sin distinción del diagnóstico y severidad de su trastorno mental". |
| Página 58, línea 5; | luego de "." añadir "No existirá distinción entre un trastorno mental y cualquier otra condición médica en términos de acceso de la persona a los servicios que necesite.". |
| Página 58, línea 6; | luego de "salud" añadir "mental" y eliminar "terapéutico. |
| Página 58, línea 12; | luego de "signos" añadir "a tenor con los parámetros clínicos óptimos". |
| Página 58, línea 13; | luego de "proveedor" añadir "directo o". |
| Página 58, línea 15; | luego de "mental" añadir "directo o". |
| Página 58, línea 17; | eliminar "artículo" y sustituir por "Artículo". |
| Página 59, línea 23; | eliminar "Inter" y sustituir por "inter". |
| Página 60, líneas 1 a la 4; | eliminar desde "El Plan Individualizado" hasta "encargado.". |

Página 60, línea 8; eliminar "Inter" y sustituir por "inter".
Página 60, línea 14; eliminar "Interdisciplinario" y sustituir por "inter o multidisciplinario".
Página 60, líneas 17 y 18; eliminar "por el psiquiatra".
Página 61, línea 5; luego de "recomendados" eliminar ";" y sustituir por ".".
Página 61, línea 6; eliminar "médica, o" y sustituir por "médica o".
Página 64, línea 17; eliminar "Ley" y sustituir por "ley".
Página 64, línea 24; eliminar todo su contenido.
Página 65, líneas 1 a la 5; eliminar desde "institución proveedora" hasta "adulto, disponiéndose" y sustituir por "El adulto bajo tratamiento en una Institución Proveedora podrá voluntariamente consentir a prestar labor o trabajo para la Institución. No obstante, el adulto no podrá ser obligado a realizar tales labores o trabajo. Disponiéndose".
Página 65, línea 7; eliminar "Leyes" y sustituir por "leyes".
Página 65, línea 10; luego de "Tratamiento" añadir ", Recuperación".
Página 65, línea 11; luego de "Tratamiento" añadir ", Recuperación".
Página 70, línea 2; eliminar "inglés o español y de ser otro" y sustituir por "el" y luego de "lenguaje" eliminar "el".
Página 70, entre líneas 8 y 9; insertar el siguiente inciso:
"(ñ) Derecho a solicitar participación de grupos o personas de apoyo:
Al designarse el equipo inter o multidisciplinario el paciente tendrá derecho a solicitar la participación de cualquier grupo o persona de apoyo bien sea religioso o relacionado a la condición diagnosticada.".
Página 70, línea 9; eliminar "(ñ)" y sustituir por "(o)".
Página 70, línea 16; eliminar "(o)" y sustituir por "(p)".
Página 70, entre líneas 20 y 21; insertar el siguiente párrafo:
"En el caso que la persona disponga de recursos económicos, tales como una cubierta de salud para sufragar los gastos de transportación, éstos deberán ser costeados por su cubierta. En el caso de que aquellas personas que reciban servicios o intervenciones de salud mental bajo la Reforma de Salud, la entidad contratada para manejar y coordinar los servicios de salud será responsible de cubrir los gastos de transportación.".
Página 70, línea 21; eliminar "(p)" y sustituir por "(q)".
Página 71, línea 3; eliminar "(q)" y sustituir por "(r)".
Página 71, línea 7; eliminar "(r)" y sustituir por "(s)".
Página 71, línea 11; eliminar "(s)" y sustituir por "(t)".
Página 72, línea 1; eliminar "adecuado" y sustituir por "más efectivo".
Página 72, entre líneas 5 y 6; insertar el siguiente párrafo:
"Los niveles de cuidado de salud mental incluyen servicios que van desde los más intensivos como el Hospital Psiquiátrico hasta los de mayor autonomía como los servicios ambulatorios.".

Página 72, línea 6; eliminar "restricción" y sustituir por "intensidad".
Página 72, línea 16; eliminar "con" y sustituir por "de" y luego de "mantenimiento" añadir "con o sin medicamentos".
Página 72, línea 18; luego de "hospitalario" añadir "y siguiendo los procedimientos establecidos en esta Ley".
Página 72, línea 19; luego de "mental" eliminar "o".
Página 72, línea 20; luego de "físico" añadir "inmediato" y después de "propiedad" eliminar "," y sustituir por ";".
Página 72, línea22; luego de "adulto" añadir ", que solicita los servicios".
Página 73, línea 1; eliminar "artículo" y sustituir por "Artículo".
Página 73, líneas 6 y 7; luego de "hospitalización" añadir "total o parcial" y eliminar "de cernimiento y evaluación" y sistutuir por "entre otros".
Página 73, línea 8; eliminar "social y" y luego de "médico" añadir ";".
Página 73, líneas 15; luego de " (GAF-Eje V, DSM - IV)" añadir ".".
Página 73, líneas 16 a la 18; eliminar desde "El resultado" hasta ".".
Página 74, líneas 3 y 4; eliminar "salvo disposición en contrario de" y sustituir por "y de acuerdo a lo dispuesto en".
Página 74, línea 12; eliminar "artículo" y sustituir por "Artículo".
Página 74, línea 15; eliminar "determine" y sustituir por "quede clínicamente convencido".
Página 74, línea 21; eliminar "discusión" y sustituir por "revisión" y luego de "minutas," añadir "por la Facultad de Salud Mental y el Director Clínico".
Página 75, línea 7; eliminar "interdisciplinario" y sustituir por "inter o multidisciplinario debidamente".
Página 75, línea 8; luego de "psiquiatra" eliminar ". En tal situación, una" y sustituir por "y habiendo observado personalmente a la persona quede clínicamente convencido de que el uso de la restricción está indicado para prevenir que el adulto se cause daño físico a sí mismo, a otros o a la propiedad. Una".
Página 75, línea 19; luego de "restricción" añadir "de hasta cuatro (4) horas".
Página 75, línea 22; eliminar "En aquellos casos en que se justifique un período de extensión,".
Página 75, línea 23; eliminar "la" y sustituir por "La".
Página 76, línea 5; eliminar "de la institución hospitalaria" y sustituir por "clínico".
Página 76, líneas 7 y 8; luego de "Administración" eliminar ", dentro de los primeros treinta (30) del año subsiguiente".
Página 76, línea 10; eliminar "artículo" y sustituir por "Artículo".
Página 76, línea 12; luego de "iniciar" eliminar "u" y sustituir por ",".
Página 76, línea 13; luego de "ordenar" añadir "u observar".
Página 77, línea 7; luego de "aislamiento" añadir "de hasta ocho (8) horas".
Página 77, línea 10; luego de "mismo" añadir "para discutir sus justificaciones y sus resultados".
Página 77, línea 14; eliminar "artículo" y sustituir por "Artículo".
Página 77, entre líneas 21 y 22; insertar el siguiente párrafo:

| | |
|---|---|
| | "Será mandatorio realizar a la mayor brevedad posible una revisión del uso del aislamiento terapéutico registrado en minutas por la Facultad de Salud Mental y el Director Clínico, sobre las razones que fundamentaron el uso de esta medida, con el propósito de establecer la auditabilidad profesional de los miembros del equipo.". |
| Página 77, líneas 23 y 24; | luego de "Administración" eliminar ", dentro de los (30) treinta días del año subsiguiente". |
| Página 78, línea 2; | eliminar "artículo" y sustituir por "Artículo". |
| Página 78, línea 15; | eliminar"terapéutico". |
| Página 78, líneas 17 y 18; | eliminar ", dentro de los treinta (30) días del año subsiguiente" y luego de"." añadir "El Director Clínico y la Facultad de Salud Mental deberá revisar las órdenes de terapia electroconvulsiva bajo los criterios establecidos y sobre las razones que fundamentaron el uso de esta medida, con el propósito de establecer la auditabilidad profesional de los miembros del equipo.". |
| Página 78, líneas 21 a la 23; | eliminar desde "En caso de emergencias" hasta ".". |
| Página 79, línea 21; | luego de "psiquiatra" eliminar "y" y sustituir por "en consulta con". |
| Página 80, línea 7; | luego de "psiquiatra" eliminar "y" y sustituir por "conjunto con". |
| Página 80, línea 11; | luego de "." añadir "Se solicitará una confirmación por escrito del adulto para continuar el servicio hospitalario.". |
| Página 80, línea 14; | eliminar "peligrosidad" y sustituir por "peligro para sí, para otros y para la propiedad". |
| Página 80, línea 15; | eliminar "este" y sustituir por "éste". |
| Página 80, línea 24; | eliminar "terapéutico,". |
| Página 81, línea 6; | luego de "Tratamiento" añadir ", Recuperación y Rehabilitación". |
| Página 81, línea 22; | luego de "psiquiatra" eliminar "y" y sustituir por "en conjunto con". |
| Página 81, línea 24; | eliminar "menos restrictivo" y sustituir por "de menor intensidad". |
| Página 82, línea 15; | luego de "evidencie" añadir "que representa un riesgo inmediato para sí, para otros o la propiedad y". |
| Página 82, línea 18; | eliminar "mayor de dieciseis (16) años edad,". |
| Página 82, línea 22; | eliminar "Equipo Interdisciplinario" y sustituir por "equipo inter o multidisciplinario". |
| Página 84, línea 2; | luego de "evaluación" eliminar "," y añadir "y". |
| Página 84, línea 22; | luego de "psiquiatra" eliminar "y" y sustituir por "en consulta con". |
| Página 85, línea 14; | luego de "días" añadir "o hasta que la persona esté en condiciones de continuar en el proceso de recuperación y rehabilitación a nivel ambulatorio, lo primero que ocurra". |
| Página 85, línea 15; | eliminar "equipo terapéutico" y sustituir por "psiquiatra en consulta con el equipo inter o multidisciplinario". |

Página 85, línea 18; luego de "dañ" añadir "inmediato" y eliminar "y" y sustituir por "o".

Página 86, línea 15; luego de "Tratamiento" añadir ", Recuperación y Rehabilitación".

Página 86, línea 17; luego de "psiquiatra" añadir "o el médico, según aplique".

Página 86, línea 20; luego de "Tratamiento" añadir ", Recuperación y Rehabilitación".

Página 87, línea 1; luego de "propósitos" añadir "en el hospital".

Página 87, línea 2; eliminar "manejador de casos y" y sustituir por "psiquiatra en consulta con" y luego de "terapéutico" añadir "para que el manejador de casos le dé seguimiento".

Página 87, línea 3; luego de "tuviere" eliminar "." y sustituir por ";".

Página 87, entre líneas 3 y 4; insertar el siguiente inciso:
"(f) el nombre y circunstancias profesionales del equipo inter o multidisciplinario que interviene en la certificación.".

Página 88, línea 10; luego de "momento," eliminar "a" y sustituir por "en".

Página 88, línea 11; eliminar "proveedor indirecto" y sustituir por "seguro" y eliminar "mental".

Página 88, líneas 20 y 21; eliminar "el equipo terapéutico someterá informes trimestrales sobre el progreso o evolución del trastorno" y sustituir por "procederá a archivar los procedimientos. La institución proveedora de salud mental, a su vez, procederá según el Artículo 4.09 de esta Ley".

Página 90, línea 8; eliminar "2.22" y sustituir por "2.23".

Página 91, línea 11; eliminar "género" y sustituir por "género".

Página 91, línea 14; luego de "de" añadir "tratamiento,".

Página 90, línea 20; eliminar "terapéutico,".

Página 91, línea 21; luego de "necesidades de" añadir "tratamiento,".

Página 91, líneas 23 y 24; eliminar "para" y sustituir por "del diario vivir dada" y luego de "condición" añadir "clínica".

Página 93, entre líneas 1 y 2; insertar los siguientes incisos:
"(g) protocolo para evaluar riesgo de suicidio con sus debidas disposiciones de contingencia;
h) procedimiento para radicación y solución de quejas y de querellas en el cual se describa en lenguaje sencillo los pasos a seguir por los adultos y sus familiares que necesiten utilizar esos mecanismos.".

Página 93, línea 3; eliminar "podrán" y sustituir por "deberán", luego de "niveles" eliminar "," y añadir "o" y luego de "etapas" eliminar "o" y sustituir por "de".

Página 93, línea 6; luego de "niveles" eliminar "," y añadir "o" y luego de "etapas" eliminar "o" y sustituir por "de".

Página 93, línea 7; eliminar "condición" y sustituir por "severidad de los síntomas y signos".

Página 93, línea 14; luego de "transicionales" añadir "y represente un riesgo inmediato para sí, para otros o la propiedad".

Página 93, línea 15; eliminar "terapéutico".

| | |
|---|---|
| Página 94, línea 8; | luego de "momento)" añadir ".". |
| Página 94, línea 11; | luego de "tratamiento" añadir ", recuperación y rehabilitación". |
| Página 94, línea 13; | eliminar "artículo" y sustituir por "Artículo". |
| Página 94, línea 16; | luego de "guías" añadir ", entre otras". |
| Página 95, línea 14; | eliminar "a" y sustituir por "o". |
| Página 95, línea 18; | luego de "Tratamiento" añadir "," y eliminar "y" y después de "Recuperación" añadir "y Rehabilitación". |
| Página 95, línea 21; | eliminar "terapéutico, Inter" y sustituir por "inter". |
| Página 95, línea 23; | eliminar "o las recomendaciones de la evaluación". |
| Página 95, línea 24; | eliminar "admisión" y sustituir por "recomendación". |
| Página 96, línea 1; | luego de "evaluación" añadir "," y eliminar "y sus" y después de "recomendaciones" eliminar "o" y sustituir por "y". |
| Página 96, línea 4; | eliminar "según" y sustituir por "y". |
| Página 96, línea 5; | luego de "mejores" eliminar "las". |
| Página 97, línea 1; | eliminar "los menores,". |
| Página 97, línea 2; | eliminar "familias" y sustituir por "familiares". |
| Página 97, línea 3; | eliminar "artículo" y sustituir por "Artículo". |
| Página 97, línea 17; | eliminar "Leyes" y sustituir por "leyes". |
| Página 98, línea 7; | eliminar "ofensores" y sustituir por "transgresores". |
| Página 99, línea 16; | eliminar "consistentes" y sustituir por "consecuentes". |
| Página 99, línea 17; | luego de "signos" añadir "a tenor con los parámetros clínicos óptimos". |
| Página 99, línea 19; | eliminar "de índole racial, social, y de diagnóstico," y eliminar "los" y sustituir por "dichos". |
| Página 99, línea 20; | luego de "servicios" eliminar "que fuese necesarios de acuerdo con sus síntomas y signos" y sustituir por ", sin distinción del diagnóstico y severidad de su trastorno emocional". |
| Página 99, entre líneas 22 y 23; | insertar el siguiente párrafo: "A su vez, toda solicitud de servicios que no responda a una emergencia, deberá ser atendida dentro de los próximos cinco (5) días laborables de efectuada la petición por todos los proveedores de servicios de salud mental.". |
| Página 99, línea 24; | eliminar "Toda persona de doce años o más" y sustituir por "Todo menor". |
| Página 100, línea 2; | eliminar "en que" y sustituir por "cuando". |
| Página 100, línea 3; | luego de "capacitado" añadir "para comprender la información", eliminar "a los padres o al tutor, y al" y sustituir por "al padre o madre con patria potestad o custodia o al tutor legal, además del" y luego de "menor" añadir ",". |
| Página 100, línea 4; | eliminar "los mismos" y sustituir por "sus derechos". |
| Página 100, línea 8; | eliminar "Negativa para recibir tratamiento:" y sustituir por "Autonomía Condicionada para Solicitar Consejería y Tratamiento:". |

| | |
|---|---|
| Página 100, línea 9; | eliminar "Toda persona" y sustituir por "Todo menor" y eliminar "tratamiento" y sustituir por "consejería y a recibir tratamiento en salud mental". |
| Página 100, líneas 10 a la 22; | luego de "padres" añadir ", conforme a lo establecido en el Artículo 10.01 de esta Ley. En los casos de consejería y tratamiento en trastornos relacionados a sustancias el término inicial no excederá de siete (7) sesiones" y eliminar desde "Este derecho" hasta "salud mental.". |
| Página 100, línea 24; | luego de "Tratamiento" añadir ", Recuperación y Rehabilitación seguro y humano". |
| Página 101, línea 3; | eliminar "ser" y sustituir por "considerar y de ser necesario" |
| Página 101, líneas 5 a la 8; | eliminar desde "El Plan" hasta "encargados.". |
| Página 101, línea 12; | luego de "Individualizado" añadir "de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación". |
| Página 101, línea 14; | luego de Tratamiento" añadir ", Recuperación y Rehabilitación". |
| Página 101, línea 21; | eliminar "a los trece (13)" y sustituir por "hasta los doce (12)" y eliminar "catorce (14)" y sustituir por "trece (13)". |
| Página 102, línea 2; | eliminar "de". |
| Página 102, línea 20; | eliminar "por el psiquiatra de niños y adolescentes". |
| Página 102, línea 24; | eliminar "Siempre que" y sustituir por "Cuando" y eliminar ", indistintamente de la etapa del". |
| Página 103, línea 1; | eliminar "proceso terapéutico,". |
| Página 103, línea 3; | luego de "servicio" añadir "con las exepciones establecidas en esta Ley". |
| Página 103, línea 22; | eliminar "Autonomía Condicionada para Aceptar el" y sustituir por "Negativa para Recibir". |
| Página 103, entre líneas 22 y 23; | insertar el siguiente texto: "El padre o madre con patria potestad o custodia, el tutor legal o la persona que tenga la custodia provisional del menor, podrá rehusar que dicho menor reciba servicios en una Institución Proveedora. Esta negativa se extiende a medicamentos y a cualquier otro tipo de servicios o modalidad terapéutica. La misma debe ser expresada y así se hará constar en el expediente clínico. No obstante, el profesional de la salud podrá utilizar los procedimientos establecidos en esta Ley para proveerle tratamiento al menor de entender que el mismo resulta clínicamente indispensable.". |
| Página 103, líneas 23 y24; | eliminar todo su contenido. |
| Página 104, líneas 1 a la 6; | eliminar todo su contenido. |
| Página 104, línea 12; | eliminar "Inter" y sustituir por "inter". |
| Página 104, línea 13; | luego de "daño" añadir "inmediato". |
| Página 104, línea 23; | eliminar "(k)" y sustituir por "(j)". |
| Página 106, línea 6; | eliminar "Inter" y sustituir por "inter". |
| Página 106, línea 8; | luego de "menor" añadir "al padre o madre con patria potestad o custodia o tutor legal y su abogado, si lo tuviere". |

Página 106, línea 12; eliminar "(l)" y sustituir por "(k)".
Página 106, línea 18; eliminar "(m)" y sustituir por "(l)".
Página 107, línea 4; luego de "autorizado" eliminar "." y sustituir por ";".
Página 107, línea 10; eliminar "Ley" y sustituir por "ley".
Página 107, línea 17; eliminar "(n)" y sustituir por "(m)".
Página 107, líneas 18 a la 24; eliminar todo su contenido y sustituir por "El menor bajo tratamiento en una Institución Proveedora podrá voluntariamente consentir a prestar labor o trabajo para la Institución. No obstante, el menor no podrá ser obligado a realizar tales labores o trabajo.".
Página 108, línea 4; eliminar "Ley" y sustituir por "ley".
Página 108, línea 7; eliminar "Inter" y sustituir por "inter".
Página108, línea 15; eliminar "(ñ)" y sustituir por "(n)".
Página 109, línea 6; eliminar "(o)" y sustituir por "(ñ)".
Página 110, línea 22; eliminar "(p)" y sustituir por "(o)".
Página 110, línea 24; eliminar "adulto" y sustituir por "menor".
Página 112, línea 18; eliminar "(q)" y sustituir por "(p)".
Página 113, entre líneas 13 y 14; insertar el siguiente inciso:
"(q) Derecho a Solicitar Participación de Grupos o Personas de Apoyo:
Al designarse el equipo inter o multidisciplinario el paciente tendrá derecho a solicitar la participación de cualquier grupo o persona de apoyo bien sea religioso o relacionado a la condición diagnosticada.".
Página 113, línea 14 y 15; eliminar "a la persona" y sustituir por "del menor".
Página 113, línea 16; eliminar "Toda persona recluida" y sustituir por "Todo menor recluido".
Página 113, línea 17; luego de "familiares" eliminar "," y añadir "y" y luego de "significativas" añadir "." y eliminar "y las" y sustituir por "Las".
Página 113, línea 19; eliminar "las personas" y sustituir por "los menores", eliminar "mentales" y sustituir por "emocionales" y eliminar "un" y sustituir por "el".
Página 113, línea 20; eliminar "menos restrictivo" y sustituir por "de menor intensidad".
Página 114, entre líneas 1 y 2; insertar el siguiente párrafo:
En el caso de que el menor, el padre o madre con patria potestad o custodia del menor, el tutor legal o la persona que tenga la custodia provisional disponga de recursos económicos, tales como una cubierta de salud para sufragar los gastos de transportación, éstos deberán ser costeados por la cubierta. En el caso de aquellas personas que reciban servicios o intervenciones de salud mental bajo la Reforma de Salud, la entidad contratada para manejar y coordinar los servicios de salud será responsable de cubrir los gastos de transportación.".
Página 114, línea 2; luego de "Potestad" añadir "o Custodia".

Página 114, línea 12; eliminar "para el progreso de su trastorno emocional".
Página 114, línea 18; eliminar "de la persona" y sustituir por "del menor".
Página 114, línea 20; eliminar "la persona" y sustituir por "el menor".
Página 114, línea 24; luego de "potestad" añadir "o custodia".
Página 115, línea 1; luego de "designará" añadir "uno o".
Página 115, líneas 6 a la 14; eliminar desde "Además, tiene" hasta "gastos de transportación.".
Página 115, línea 21; luego de "." añadir "Los servicios de salud mental estarán organizados en diferentes niveles de intensidad, integrados y articulados de manera que aseguren la continuidad en el tratamiento. Los niveles de cuidado de salud mental incluyen servicios que van desde de los más intensivos como el Hospital Psiquiátrico hasta los de mayor autonomía como los servicios ambulatorios. En cualquier nivel de tratamiento se puede requerir el uso de medicamentos, de acuerdo al diagnóstico y la severidad de los síntomas y signos del menor al momento de ser evaluado.".
Página 116, línea 6; eliminar "Interdisciplinario" y sustituir por "inter o multidisciplinario".
Página 116, línea 9; eliminar "o un psiquiatra en general".
Página 116, línea 10; eliminar "un psiquiatra de niños y adolescentes, y del" y sustituir por "el" y eliminar "terapéutico Inter" y sustituir por "inter".
Página 116, línea 21; luego de "hospitalario" añadir "y siguiendo los procedimientos establecidos en esta Ley".
Página 116, línea 22; luego de "mental" eliminar "o".
Página 116, línea 23; luego de "físico" añadir "inmediato".
Página 117, línea 1; luego de "menor" añadir ", del cual se solicitan los servicios por parte del padre o madre con patria potestad o custodia o tutor legal,".
Página 117, línea 5; eliminar "a".
Página 117, línea 8; luego de "unidad" añadir "especializada".
Página 117, línea 13; eliminar "La realización" y sustituir por "para realizar" y luego de "evaluación" añadir "comprensiva".
Página 117, líneas 14 a la 16; eliminar "Un proceso de" y sustituir por "para recibir modalidades" y luego de "Rehabilitación" eliminar hasta "vigentes)".
Página 117, línea 17; eliminar "La" y sustituir por "para".
Página 117, línea 19; luego de "proveedor" añadir "directo o".
Página 117, línea 22; luego de "ambulatorios" añadir "según se dispone en el Artículo 10.01 de esta Ley".
Página 118, línea 12; luego de "procederá" añadir "," y luego de "otros" añadir ",".
Página 118, línea 13; luego de "menor," añadir "y".
Página 118, línea 15; luego de "cabo" eliminar "." y sustituir por "los hallazgos y las recomendaciones;".

Página 118, línea 16; eliminar "por el psiquiatra o por un miembro del equipo interdisciplinario,".

Página 118, línea 17; eliminar "si el" y sustituir por "la capacidad que refleja el" y eliminar "está lucido y en contacto con la realidad." y sustituir por "como trasmisor y receptor de información;".

Página 118, línea 18; eliminar "de trabajo social" y sustituir por "de carácter social" y luego de "identifique" añadir "áreas de conflicto e".

Página 118, línea 19; eliminar "en".

Página 118, línea 20; luego de "menor" eliminar "; y" y sustituir por ".".

Página 118, línea 23; luego de "padres" añadir ", tutor legal".

Página 119, línea 1; luego de "mental" añadir "autorizado en ley para realizar el mismo".

Página 119, líneas 3 y 4; eliminar "pertinente de acuerdo a la necesidad identificada," y luego de "comprensiva" añadir "o referir el menor a otro tipo de servicios de salud mental según los síntomas y signos del menor lo requiera".

Página 119, línea 6 y 7; eliminar "del(os) problema(s) existente(s)" y sustituir por "de problemas recurrentes o existentes", luego de "que" añadir "contribuyen o", luego de "la" añadir "identificación y" y después de "menor" añadir ",".

Página 119, línea 8; eliminar "y" y luego de "familia" añadir "y la comunidad".

Página 119, líneas 10 y 11; eliminar "con" y sustituir por "para esto se obtendrá", eliminar "de su familia" y sustituir por "del padre o madre con patria potestad o custodia o su tutor legal".

Página 120, línea 2; eliminar "afectivoy" y sustituir por "afectivo y".

Página 120, línea 7; luego de "del" añadir "profesional de salud mental o el" y eliminar "terapéutico".

Página 120, línea 8; luego de "plan" añadir "preliminar", después de "tratamiento" añadir ", recuperación y rehabilitación" y luego de "individualizado" eliminar ";" y sustituir por ".".

Página 120, línea 11; eliminar "utlizarán" y sustituir por "utilizarán".

Página 120, línea 17; eliminar "ingresado de forma" y sustituir por "que empiece a recibir" y luego de "involuntariamente" añadir ", servicios de salud mental en" y eliminar "a".

Página 120, líneas 18 y 19; eliminar "(significando" y sustituir por "entiéndase", luego de "urgencia," eliminar "evaluación y estabilización psiquiatrica de veintitrés horas," y sustituir por "emergencia", después de "hospitalización" eliminar ")" y sustituir por "total o parcial" y eliminar "como parte de los servicios, y en el período comprendido".

Página 120, línea 20; luego de "horas" añadir "los" y eliminar "al momento de su ingreso lo siguiente" y sustituir por "servicios, entre otros".

Página 120, entre líneas 20 y 21; insertar el siguiente texto:
"(a) historial médico;".

Página 120, línea 21; eliminar "(a)" y sustituir por "(b)".

Página 120, línea 22; eliminar "(b)" y sustituir por "(c)".

| | |
|---|---|
| Página 120, línea 23; | eliminar "(c)" y sustituir por "(d)". |
| Página 120, línea 24; | eliminar "(d)" y sustituir por "(e)". |
| Página 121, línea 1; | eliminar "(e)" y sustituir por "(f)". |
| Página 121, línea 2; | eliminar "(f)" y sustituir por "(g)", luego de "(GAF Eje V, DSM – IV)" añadir "o según el manual vigente.". |
| Página 121, línea 6; | luego de "revisados" añadir "por lo menos". |
| Página 121, líneas 19 y 20; | eliminar "salvo disposición en contrario de" y sustituir por "y de acuerdo a lo dispuesto en". |
| Página 122, línea 4; | eliminar "artículo" y sustituir por "Artículo". |
| Página 122, línea 8; | eliminar "determine" y sustituir por "quede clínicamente convencido". |
| Página 122, línea 10; | luego de "obligatorio" añadir "realizar a la mayor brevedad posible una discusión del uso de la medida y". |
| Página 122, líneas 15 y 16; | eliminar "cuatro (4) y sustituir por dos (2)" y luego de "horas," añadir "en caso de los menores de diez (10) años o más, o de dos (2) horas, en casos de los menores entre siete (7) y nueve (9) años". |
| Página 122 línea 21; | eliminar "profesional de la salud mental," y sustituir por "médico o enfermero(a) graduado(a) o". |
| Página 122, línea 24; | eliminar "el profesional de enfermería" y sustituir por "se" y después de "menor y" añadir "se". |
| Página 123, línea 2; | luego de "La" añadir "necesidad de la". |
| Página 123, líneas 3 a la 5; | luego de "menor" añadir "y notificada a la mayor brevedad posible al familiar más cercano o tutor legal del menor", eliminar desde "La restricción" hasta "escrito, por un" y sustituir por "Una vez el", luego de "adolescentes" añadir "consultado esté disponible, efectuará la evaluación para consignar la orden por, escrito en el expediente, lo más pronto posible" y eliminar "las dos (2) horas siguientes" y sustituir por "la hora siguiente". |
| Página 123, línea 6; | eliminar "primera" y sustituir por "media. |
| Página 123, línea 7; | eliminar "(1)". |
| Página 123, línea 11; | eliminar "cuatro (4)" y sustituir por "dos (2)". |
| Página 123, línea 12; | eliminar "dos (2) horas" y sustituir por "una (1) hora". |
| Página 123, líneas 13 y 14; | eliminar "transcurrido el término inicial establecido", luego de "el" añadir "psiquiatra de niños y adolescentes en conjunto con el" y eliminar "Inter" y sustituir por "inter". |
| Página 123, línea 15; | luego de "cada" añadir "media". |
| Página 123, líneas 18 y 19; | eliminar desde "Si luego" hasta ".". |
| Página 123, línea 20; | eliminar "artículo" y sustituir por "Artículo". |
| Página 123, después de la línea 24; | insertar el siguiente párrafo: "Una vez empleada la restricción dentro de un período de ocho (8) horas, ésta no será utilizada nuevamente en el mismo menor durante los próximos dos (2) días calendarios, salvo que medie una orden justificada por una re-evaluación del psiquiatra de niños y adolescentes y con la autorización previa del Director Clínico de la institución hospitalaria.". |

| | |
|---|---|
| Página 124, antes de línea 1; | insertar "El psiquiatra que ordena una restricción deberá informar al Director Clínico y al equipo inter o multidisciplinario por escrito sobre el uso de la misma inmediatamente.". |
| Página 124, línea 1; | eliminar "de la institución" y sustituir por "clínico y la Facultad de Salud Mental" y eliminar "diariamente". |
| Página 124, línea 2; | luego de "mismas" añadir "con el propósito de establecer la auditabilidad profesional de los miembros del equipo" y eliminar "Además" y sustituir por "El director de la institución". |
| Página124, líneas 3 y 4; | eliminar "dentro de los treinta (30) días del año subsiguiente". |
| Página 124, línea 9; | luego de "iniciar" añadir "," y eliminar "u" y después de "ordenar" añadir "u observar". |
| Página 124, línea 10; | luego de "adiestramiento" añadir "y estar certificado". |
| Página 126, líneas 19 y 20; | luego de "potestad" añadir "o custodia", luego de "," añadir "o" y eliminar "cuando éste sea menor de dieciocho (18) años". |
| Página 126, línea 21; | eliminar "terapéutico Inter" y sustituir por "inter". |
| Página 125, línea 8; | luego de "." añadir "El psiquiatra que ordena el aislamiento notificará inmediatamente y por escrito al director clínico y al equipo inter o multidisciplinario sobre la explicación del mismo para evaluar su justificación y sus resultados.". |
| Página 125, línea 21; | eliminar "profesional de salud mental" y sustituir por "enfermero(a) graduado(a)". |
| Página 126, línea 5; | luego de "Director" añadir "Clínico". |
| Página 126, línea 7; | eliminar "interprofesional" y sustituir por "profesional de los miembros del equipo" y eliminar "pacientes y sustituir por "menores". |
| Página 126, línea 8; | eliminar "discutidos" y sustituir por "revisados a la mayor brevedad posible" y eliminar "equipo interdisciplinario" y sustituir por "Director Clínico y la Facultad de Salud Mental". |
| Página 126, líneas 19 y 20; | luego de "potestad" añadir "o custodia", luego de "," añadir "o" y eliminar "cuando éste sea menor de dieciocho (18) años". |
| Página 126, línea 21; | eliminar "Inter" y sustituir por "inter". |
| Página 127, línea 2; | luego de "localizadas," añadir "o se niegan a dar su consentimiento". |
| Página 127, línea 8; | eliminar "terapéutico Inter" y sustituir por "inter". |
| Página 127, línea 11; | eliminar ", dentro de los treinta (30) días del año subsiguiente". |
| Página 127, entre líneas 11 y 12; | añadir el siguiente párrafo: "El Director Clínico y la Facultad de Salud Mental deberá revisar todas las órdenes de terapia electroconvulsiva, bajo los criterios establecidos y sobre las razones que |

fundamentaron el uso de esta medida, con el propósito de establecer la auditabilidad profesional de los miembros del equipo, y presentará un informe anual a la Administración.".

Página 127, línea 12; eliminar "menor y el" y luego de "potestad" añadir "o custodia del menor".

Página 127, líneas 14 y 17; eliminar desde "En caso de emergencias" hasta "sobre el mismo.".

Página 127, línea 18; luego de "potestad" añadir "o custodia".

Página 127, líneas 20; eliminar "entre el menor, los padres con patria potestad o custodia o su tutor,".

Página 128, línea 11 a la 13; eliminar "estará y sustituir por "podrá estar" y eliminar desde "o un psicólogo clínico," hasta "de niños y adolescentes" y sustituir por "psiquiatra, médico, psicólogo clínico o trabajador social con experiencia en salud mental".

Página 128, línea 16; eliminar "general y un" y sustituir por "o".

Página 128, línea 17; eliminar "de niños y adolescentes, o por un médico general y un psicólogo clínico".

Página 128, líneas 21 y 22; eliminar "terapéutico Inter" y sustituir por "inter" y luego de "adolescentes" eliminar desde ", o un" hasta "y adolescentes".

Página 128, línea 24; eliminar "terapéutico".

Página 129, entre líneas 5 y 6; insertar el siguiente párrafo:

"La falta de interés o la incapacidad del padre o madre con patria potestad o custodia, del tutor legal o de la persona que tenga la custodia o el deber de proveerle cuido o albergue, no será base para ingresar al menor en una institución hospitalaria de salud mental. De ser este el caso, el Director de la institución hará una petición al tribunal para asegurar el albergue y cuidado en otras instituciones públicas o privadas, según sea el caso.".

Página 129, línea 11; eliminar "terapéutico Inter" y sustituir por "inter".

Página 129, línea 22; luego de "el" añadir "psiquiatra de niños y adolescentes en conjunto con" y eliminar "Inter" y sustituir por "inter".

Página 130, línea 5; luego de "el" añadir "psiquiatra de niños y adolescentes y el" y eliminar "terapéutico Inter" y sustituir por "inter".

Página 130, línea 9; eliminar "el menor" y luego de "no" añadir "se".

Página 130, línea 10; luego de "signos," eliminar "o" y sustituir por "y".

Página 130, línea 13; eliminar "terapéutico" y sustituir por "inter o multidisciplinario" y luego de "potestad" añadir " o custodia o tutor legal".

Página 130, línea 14; luego de "menor" añadir ", cambiando el estatus de voluntario a involuntario".

Página 131, línea 7; eliminar "en uno de los niveles de cuidado".

Página 131, línea 10; eliminar "Inter" y sustituir por "inter".

Página 131, líneas 13 y 14; eliminar "El cuidado" y sustituir por "La hospitalización".

| | |
|---|---|
| Página 132, línea 4; | eliminar "Interdisciplinario" y sustituir por "inter o multidisciplinario". |
| Página 132, línea 7; | eliminar "su" y sustituir por "el". |
| Página 132, línea 13; | luego de "si" añadir "el psiquiatra de niños y adolescentes en conjunto con". |
| Página 132, línea 14; | eliminar "Inter" y sustituir por "inter". |
| Página 132, línea 20; | luego de "médico" añadir ", según aplique" y eliminar "terapéutico Inter" y sustituir por "inter". |
| Página 133, línea 3; | luego de "cuidado" añadir "de mayor autonomía" y después de "estime" añadir "sea". |
| Página 133, línea 22; | eliminar "a" y sustituir por "en". |
| Página 133, línea 23; | luego de "de" añadir "un psiquiatra de niños y adolescentes en conjunto con" y eliminar "Equipo Interdisciplinario" y sustituir por "equipo inter o multidisciplinario". |
| Página 134, línea 2; | luego de "involuntaria" añadir "o recibirá tratamiento compulsorio". |
| Página 134, línea 3; | luego de "evidencie" añadir "que representa un riesgo inmediato para sí, para otros o la propiedad y" y luego de "ingreso" añadir "o tratamiento compulsorio". |
| Página 134, líneas 12 y 13; | eliminar "terapéutico Inter" y sustituir por "inter". |
| Página 134, línea 18; | eliminar "y(3)" y sustituir por "y (3)". |
| Página 134, línea 19; | luego de "menor" añadir "y a su padre o madre con patria potestad o custodia o tutor legal". |
| Página 135, línea 6; | luego de "Cuando el" añadir "psiquiatra de niños y adolecentes en consulta con el". |
| Página 135, línea 7; | eliminar "terapéutico" y sustituir por "inter o multidisciplinario", luego de "alta" añadir "," y después de "tribunal" eliminar ",". |
| Página 135, línea 9; | eliminar "que" y sustituir por "el psiquiatra de niños y adolescentes" y eliminar "terapéutico" y sustituir por "inter o multidisciplinario". |
| Página 135, línea 10; | luego de "riesgo" añadir "inmediato". |
| Página 135, línea 21; | luego de "adolescentes" eliminar "y" y sustituir por "en conjunto con" y eliminar "terapéutico, Inter" y sustituir por "inter". |
| Página 136, línea 1; | eliminar "terapéutico Inter" y sustituir por "inter". |
| Página 136, línea 2; | eliminar "veinticuatro (24)" y sustituir por "cuarenta y ocho (48)". |
| Página 136, línea 7; | eliminar "diseño" y sustituir por "plan y luego de "tratamiento" añadir ", recuperación y rehabilitación". |
| Página 136, línea 8; | elimnar "Inter" y sustituir por"inter". |
| Página 136, línea 10; | eliminar "Inter" y sustituir por"inter". |
| Página 136, línea 11; | eliminar "de que" y luego de "plan" añadir ", revisó el expediente clínico, evaluó su progreso". |
| Página 136, línea 13; | luego de "tratamiento" añadir ", recuperación y rehabilitación". |

Página 136, línea 16; eliminar "el manejador de casos identificará y tramitará" y sustituir por "la identificación por parte del manejador de casos de los".

Página 136, línea 18; eliminar "del" y sustituir por "en el hospital del plan de" y luego de "tratamiento" añadir ", recuperación y rehabilitación".

Página 136, línea 19; eliminar "manejador de casos y" y sustituir por "psiquiatra de niños y adolescentes en consulta con" y luego de "terapéutico" añadir "para que el manejador de casos le dé seguimiento".

Página 136, línea 20; eliminar "paciente" y sustituir por "padre o madre con patria potestad o custodia," y luego de "tuviere" eliminar "." y sustituir por ";".

Página 136, entre líneas 20 y 21; insertar el siguiente inciso:
"(f) el nombre y circunstancias profesionales del equipo inter o multidisciplinario que interviene en la certificación.".

Página 137, línea 6; luego de "potestad" añadir "o custodia".

Página 137, línea 7; luego de "caso" añadir "." y eliminar el resto de la línea.

Página 137, líneas 8 a la 24; eliminar todo su contenido.

Página 138, líneas 1 a la 9; eliminar todo su contenido.

Página 138, línea 12; luego de "menor" añadir "con ingreso voluntario".

Página 138, línea 24; luego de "el" añadir "el psiquiatra de niños y adolescentes en conjunto con el", eliminar "Inter" y sustituir por "inter" y luego de "peligro" añadir "inmediato".

Página 139, línea 2; eliminar "mental" y sustituir por "emocional".

Página 139, línea 4; luego de " peligro" añadir "inmediato" y después de "solicitar" añadir "al tribunal".

Página 140, línea 23; eliminar "2.22" y sustituir por "2.23".

Página 141, línea 5; luego de "casos" añadir "pero sí el padre o madre con patria potestad o custodia o tutor legal del menor".

Página 141, línea 7; luego de "psiquiatra" añadir "de niños y adolescentes".

Página 141, línea 9; eliminar "notificación" y sustituir por "consulta", eliminar "al familiar más cercano" y sustituir por "notificará al padre o madre con patria potestad o custodia" y luego de "menor" añadir "legal".

Página 141, línea 10; luego de "alta" añadir "pero sí al padre o madre con patria potestad o custodia o tutor legal del menor".

Página 141, línea 11; luego de "psiquiatra" añadir "de niños y adolescentes" y eliminar "terapéutico, Inter" y sustituir por "inter".

Página 141, línea 12; luego de "tutor" añadir "legal".

Página 142, línea 4; luego de "trastorno" añadir "emocional".

Página 142, línea 13; luego de "necesidades de" añadir "tratamiento,".

Página 142, línea 15; luego de "destrezas" añadir "del diario vivir", eliminar "para" y sustituir por "dada" y luego de "condición" añadir "clínica".

Página 143, línea 17; eliminar "pueden" y sustituir por "deben" y luego de

| | |
|---|---|
| | "servicios," añadir "de forma que el menor sujeto al mismo pueda ser evaluado y clasificado". |
| Página 143, línea 18; | luego de "necesidades" añadir "y ubicado". |
| Página 143, línea 21; | eliminar "condición" y sustituir por "la severidad de los síntomas y signos". |
| Página 144, línea 1; | eliminar "Se" y sustituir por "El sistema". |
| Página 144, línea 6; | eliminar "terapéutico Inter" y sustituir por "inter" y luego de "potestad" añadir "o custodia". |
| Página 144, línea 12; | luego de "Consejería" añadir "y Tratamiento". |
| Página 144, líneas 14 a la 18; | eliminar todo su contenido y sustituir por "recibir consejería y de ser necesario recibir tratamiento de salud mental de manera ambulatoria por un período máximo de seis (6) sesiones si el psiquiatra de niños y adolescentes, psiquiatra, psicólogo clínico o trabajador social determina que tiene la capacidad para tomar la desición. No se negarán los servicios al menor por falta de recursos económicos. Durante el proceso, el psiquiatra de niños y adolescentes, psiquiatra, psicólogo clínico o trabajador social determinará qué tipo de servicios de salud mental, si alguno, necesita el menor y le indicará sus recomendaciones. Del menor necesitar servicios de tratamiento en salud mental, el profesional lo orientará y ayudará a reconocer la conveniencia de obtener la autorización del padre o madre con patria potestad o custodia o tutor legal.". |
| Página 144, línea 19; | "El" y sustituir por "No obstante, el". |
| Página 144, líneas 20 y 21; | luego de"autorizar" y añadir "la consejería y" y luego de "tal" eliminar "tratamiento" y sustituir por "intervención". |
| Página 144, línea 23; | luego de "psicólogo" añadir "clínico". |
| Página 145, línea 5; | luego de "de" añadir "consejería o". |
| Página 145, línea 9; | luego de "confidencialidad" añadir de la consejería o". |
| Página 145, línea 10; | luego de "madre" añadir "con patria potestad o custodia". |
| Página 145, línea 12; | luego de "de" añadir "consejería o". |
| Página 145, líneas 17 y 18; | eliminar desde "que por sí o por" hasta "para comenzar" y sustituir por "para el cual se solicita o comienza". |
| Página 145, línea 19; | eliminar ", con o sin su consentimiento,". |
| Página 145, línea 20; | eliminar "72" y sustituir por "setenta y dos (72)". |
| Página 146, línea 3; | luego de "momento)" añadir ".". |
| Página 146, línea 6; | luego de "Tratamiento" añadir ", Recuperación y Rehabilitación". |
| Página 146, línea 10; | luego de "guías" añadir ", entre otras". |
| Página 147, línea 12; | luego de "Tratamiento" añadir "," y eliminar "y" y luego de "Recuperación" añadir "y Rehabilitación". |
| Página 147, línea 15; | eliminar "Equipo Terapéutico, Inter" y sustituir por "equipo inter". |
| Página 147, línea 16; | eliminar "de tratamiento dentro de" y sustituir por "servivios en". |

| | |
|---|---|
| Página 147, línea 20; | luego de "menor" eliminar "o". |
| Página 147, línea 24; | eliminar "Inter" y sustituir por "inter". |
| Página 148, línea 1; | luego de "para" eliminar "cada" y sustituir por "el" y luego de "cuidado" añadir "que corresponda". |
| Página 148, línea 4; | eliminar "su condición se lo permita" y sustituir por "sus necesidades.". |
| Página 148, línea 12; | eliminar "una" y sustituir por "la". |
| Página 148, línea 23; | luego de "MENTAL" añadir "PARA MENORES". |
| Página 149, líneas 14 y 15; | luego de "necesarios" añadir "." y eliminar el resto del contenido y sustituir por "Todos y cada uno de los programas de servicios deberán ser provistos en instituciones especializadas para menores según su edad, género y necesidades clínicas.". |
| Página 149, línea 16; | luego de "institución" añadir "." y eliminar "y una" y sustituir por "Una". |
| Página 149, línea 18; | luego de "antes" añadir "," y luego de "de" añadir "así requerido el tribunal o de". |
| Página 151, línea 2; | eliminar "terapéutico Inter" y sustituir por "inter". |
| Página 153, líneas 1 a la 6; | eliminar desde "Se establece" hasta "Complementaria;". |
| Página 156, línea 22; | luego de "servicios" añadir "directos o indirectos". |
| Página 157, línea 6; | eliminar "artículo" y sustituir por "Artículo". |
| Página 159, línea 24; | luego de "aprobación" añadir ", y en cuanto a planes de salud o renovación de éstos que será de aplicación a aquellos que cobren vigencia a partir de dicha aprobación". |

## ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 3275 tiene el propósito de establecer las necesidades de prevención, tratamiento, recuperación y rehabilitación en salud mental; crear las "Cartas de Derecho" para adultos y menores que reciben servicios de salud mental; uniformar lo relativo a los procedimientos relacionados con estos derechos; establecer los principios básicos de los niveles de cuidado en el ofrecimiento de servicios de salud mental; derogar la Ley Núm. 116 de 12 de junio de 1980, conocida como "Código de Salud Mental de Puerto Rico" y establecer penalidades.

La Exposición de Motivos de esta medida establece que la salud mental es el estado de bienestar resultante de la interacción funcional entre la persona y su ambiente, y la integración armoniosa en su ser de un sinnúmero de factores, entre los que se encuentran; su percepción de la realidad y su interpretación de la misma; sus necesidades biológicas primarias y la forma de satisfacerlas; sus potenciales psíquicos, mentales y espirituales y el modo de elevarlos a su máximo nivel; su sentido del humor y su capacidad para disfrutar de los placeres genuinos que la vida nos ofrece; su confianza en sí mismo y el reconocimiento de sus limitaciones; su satisfacción ante sus logros y su entereza ante sus fracasos; su reconocimiento de sus derechos y obligaciones sociales como necesidades básicas para la convivencia sana y pacífica; su solidaridad con los valores en que cree y su respeto y tolerancia con los que discrepa; su capacidad para crecer y madurar a la luz de las experiencias de su propia vida y la de otros; su resonancia afectiva ante los sucesos alegres y tristes; y finalmente, su capacidad para dar y recibir amor generosamente.

La medida establece que velar por la salud mental de nuestro Pueblo, es y debe ser un asunto de entero interés para el Gobierno de Puerto Rico. La salud mental es elemento matriz de la sana convivencia y de una buena calidad de vida.

El Código de Salud Mental de Puerto Rico fue creado en virtud de la Ley Núm. 116 de 12 de junio de 1980, según enmendada. Desde entonces, los cambios en la vida del ciudadano puertorriqueño durante las últimas décadas han sido significativos. Estos cambios se han caracterizado por un aumento marcado en la incidencia de trastornos mentales en adultos y menores. Para enfrentarse a las exigencias del aumento de esos trastornos y a la necesidad de proveer servicios de salud mental adecuados a las personas que necesiten de éstos, han surgido una serie de reformas, incluyendo la Reforma de Salud en Puerto Rico, con la incorporación del cuidado coordinado (managed care), y de seguros y cubiertas de salud mental para toda la población médico indigente, lo que ha tenido un efecto trascendental en los servicios de salud mental que se ofrecen en Puerto Rico, dando paso así a nuevas opciones de tratamiento, recuperación y rehabilitación en el campo de la salud mental.

Para garantizar que estos servicios se ofrezcan dentro de los criterios de calidad que se establecen en esta Ley, es importante que el estado intervenga en la implantación de los procesos de asistencia técnica, facilitación, monitoria durante el proceso, evaluación, licenciamiento de todas las instituciones proveedoras de servicios de salud mental.

A tenor con los señalados cambios que hemos experimentado en los últimos años y siguiendo el compromiso de nuestro Gobierno de proveer mayor acceso a servicios de salud de calidad, esta Ley persigue el firme propósito de consignar la incorporación progresiva del avance tecnológico en el campo de la salud mental. De igual manera busca reformar sus servicios de manera tal, que sean comprensivos y continuados. Se persigue también un enfoque familiar y comunitario, en atención al entorno cultural y social, que garanticen a los ciudadanos que los reciben los derechos consagrados en nuestra constitución, así como la ética y la sensibilidad ante la problemática humana.

Para analizar la medida, los días 24 y 26 de mayo se celebraron audiencias públicas conjuntas de las Comisiones de Salud y Bienestar Social del Senado y de Salud de la Cámara. Se solicitaron ponencias a los siguientes organismos;

1. Asociación de Compañías de Seguros
2. Triple S
3. Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción
4. Administración de Seguros de Salud
5. Departamento de Salud
6. Alianza Pro Salud Mental
7. Consejo Estatal de Planificación de Salud Mental
8. Academia de Siquiatría
9. Fundación Puertorriqueña Pro Salud Mental
10. Colegio de Trabajadores Sociales
11. Asociación de Psicólogos de P.R.
12. Hospital San Juan Capestrano
13. Comité Legislativo de la Asociación Psiquiátrica Americana
14. Asociación Médica de Puerto Rico
15. Asociación Siquiatras para Niños y Adolescentes
16. Universidad Carlos Albizu
17. Colegio de Abogados
18. Asociación de Terapia Ocupacional
19. Departamento de la Familia
20. Oficina de Gerencia y Presupuesto
21. Colegio de Médicos Cirujanos
22. Asociación de Hospitales
23. Departamento de Justicia

24. Oficina del Procurador de Personas con Impedimento
25. Fundación Puertorriqueña para la Investigación y Prevención del Suicidio
26. Comisionado de Seguros
27. First Hospital Panamericano
28. Mepsi Center
29. Cruz Azul

De estos organismos, las Comisiones recibieron ponencias de las primeras diecinueve según enumeradas.

El Departamento de Salud y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción se expresaron en un mismo documento sobre esta medida. Haciendo un poco de historia sobre el desarrollo de programas de salud mental. Informaron que los servicios de salud mental han evolucionado grandemente desde la aprobación de la Ley Núm. 235 del 12 de mayo de 1945, conocida como Ley de Higiene Mental de Puerto Rico. Esta respondía mayormente a los criterios del modelo médico vigente para esa época en la práctica de la higiene mental (término utilizado en esa época y su aplicación se limitaba a los enfermos mentales que presentaban conducta violenta o antisocial, constituían un peligro potencial, alteraban el orden público o tenían casos ante los tribunales para responder de su capacidad y su responsabilidad mental ante la Ley.

Ante esta situación la Ley regía lo concerniente a las hospitalizaciones y a cómo atender este problema con el conocimiento de la época. La persona permanecía hospitalizada por tiempo indefinido, no había revisiones periódicas de tratamiento, y el criterio para dar de alta se limitaba a una remisión profunda de síntomas y signos, (difícil de conseguir en muchos casos ante la limitación de los recursos terapéuticos), y a la localización de los familiares cuando era posible, pues de hecho, muchas personas eran literalmente abandonadas en el hospital. Así por ejemplo, para la década de los años cuarenta y cincuenta, el Hospital de Psiquiatría de Río Piedras llegó a tener un censo de unas 1,000 personas en una institución con una capacidad de 380 a 400. Puerto Rico mantuvo esta Ley en vigencia hasta el 1979, cuando se declara inconstitucional al determinarse que una persona fue ingresada en un hospital psiquiátrico en contra de su voluntad, sin el debido proceso de ley otorgado por nuestra Constitución.

Como respuesta a este hecho, se redacta la Ley Núm. 116 del 12 de junio de 1980, conocida como el Código de Salud Mental. La misma presenta un compendio de leyes de los Estados Unidos, adaptadas a la situación de Puerto Rico. Esta se concentra en proveer los procedimientos para hospitalización voluntaria e involuntaria cumpliendo con el debido proceso de ley para no violar los derechos de las personas con trastornos mentales. La Ley 116 del 12 de junio de 1980 no provee para que las personas con trastornos mentales que no reúnan criterios de hospitalización puedan recibir tratamiento en otro nivel de cuidado, que eventualmente de no recibirlo, se convertirían en pacientes crónicos en continuo deterioro. Una serie de eventos históricos en el campo de la salud mental en Estados Unidos y Puerto Rico resaltan el hecho de que además de garantizar el debido proceso de ley según nuestra Constitución, también las personas con trastornos mentales tienen derecho a servicios de calidad y de tratamiento en ambientes comunitarios que le permitan funcionar al amparo de sus familias así como a la intervención de otros profesionales de la conducta para lograr esto. Entre estos eventos históricos, se pueden mencionar el "Mental Health Act" bajo la presidencia de John F. Kennedy en la década de los 60' ; los pleitos de grupo ("class suite action"), y las demandas individuales como el caso Wyatt v. Stickney en la década del 70'; y el caso de Robert Navarro Ayala v. Gobernador de Puerto Rico radicado en el 1974 todavía bajo la jurisdicción del Tribunal Federal.

La participación de la familia, profesionales y agencias de servicios, en el tratamiento de la persona con trastornos mentales dentro de los Consejos Estatales de Planificación de Salud Mental eran parte del paradigma de esta época.

El Departamento de Salud y ASSMCA mencionaron que los avances y el conocimiento en el campo de la Salud Mental adquirido para la década de los '80 continuaron el enfoque de ofrecer servicios de base comunitarias y atender a las personas con trastornos mentales, adultos y menores dentro del contexto de la familia. Sin embargo, toda la planificación y prestación de los servicios de salud mental público recaía exclusivamente sobre la gestión del gobierno, desde la perspectiva de lo que se pudiera hacer con los recursos disponibles. En esta época también, el paradigma ideal era la coordinación interagencial de los servicios, lo que se hacía de acuerdo a las directrices, metas y medios disponibles de cada agencia. Se delegaba en los recursos que tuvieran las personas con trastornos mentales y sus familias para obtener los servicios en distintos puntos y fechas, servicios que con mucha frecuencia no se podían obtener.

En la década de los '90 se implantan los procesos de Reforma de Salud en Estados Unidos y Puerto Rico, el concepto de cuidado coordinado, seguro y cubierta de salud para todos, acceso de servicios de calidad para todos, y el modelo de "carve-outs" o cubiertas especializadas para servicios de salud mental, así como las reformas de Bienestar Social, Judicial, de Justicia Juvenil y otras. La política pública del Gobierno para el desarrollo de un sistema de cuidado de salud mental contempla el proceso de privatización de servicios y facilidades de costo eficacia y la garantía de calidad en un ambiente de autosuficiencia económica en los distintos servicios o niveles de cuidado contratados. El Gobierno se reserva la función de asignar fondos, la supervisión y el monitoreo de dichos servicios.

El Departamento de Salud y ASSMCA endosan la medida por entender que la misma reúne los elementos necesarios para evolucionar el proceso de Reforma de Salud en Puerto Rico mediante el establecimiento del Sistema de Cuidado de Salud Mental, el cual provee los niveles de cuidado desde mayor intensidad (hospitalización) escalonando los distintos niveles de autonomía necesaria para la pronta recuperación de las personas, adultos y menores, con trastornos mentales y emocionales. Específica claramente que la hospitalización es un recurso valioso en unos momentos dados, cuando existen criterios clínicos para ello, pero provee para que las personas, una vez lograda su estabilización, disfrute de otro nivel de cuidado de mayor autonomía, bajo el apoyo de la comunidad y su familia.

Los niveles de cuidado son congruentes con el concepto de cuidado coordinado, el cual es necesario para la efectiva aplicación del mismo dentro de los modelos de privatización, de cubiertas de seguros de salud y de costoeficacia en proceso de implantación en estos momentos. Más importante aún, para las personas con trastornos mentales implica la oportunidad de recibir la intervención terapéutica mucho antes de presentar criterios de hospitalización a acuerdo de su nivel de severidad en el momento, evitando tener que llegar al deterioro o descompensación para una hospitalización.

La hospitalización, a pesar de ser uno de los servicios más costosos, de ser necesario clínicamente debe ser utilizada. Pero también se sabe en el campo de la Salud Mental que de no existir en la comunidad y bajo el amparo de las familias y sus seres significativos y proveerse otros niveles de cuidado de mayor autonomía y de diversas gradaciones de intensidad y frecuencia que se ajusten a las necesidades clínicas de las personas con trastornos mentales o emocionales, la recuperación se detiene, pero no así la condición, con el consabido círculo vicioso de descompensaciones, hospitalizaciones, entradas y salidas a los hospitales (síndrome de la puerta giratoria). Por esta razón, los niveles de cuidado son una gran incorporación en esta Ley en beneficio de todos los elementos participantes en un Sistema de Cuidado de Salud Mental y que mejora la calidad de vida de todos los ciudadanos de Puerto Rico.

El Departamento de Salud y ASSMCA apoyan la medida porque establece la práctica de la salud mental en Puerto Rico de acuerdo al conocimiento científico y social que hemos adquirido como civilización occidental. Establece la participación de los distintos profesionales de la conducta, trabajando en equipos profesionales inter y multidisciplinarios para mejorar y promover la recuperación de las personas, adultas y menores con trastornos mentales y emocionales en un espectro contínuo y evitar la cronicidad y el deterioro de éstos y sus familias. Este Proyecto provee para un sistema de cuidado de salud mental con la participación activa de todos aquellos profesionales facultados por ley y por las diferentes

disciplinas, para hacer diagnósticos en sus respectivas especialidades, recomendar tratamiento y proveerlo, ya sea en consulta o en consenso, según la urgencia de la situación, y así lograr el mayor bienestar de las personas en tratamiento. Cada profesional conserva sus responsabilidades y autoridad según le confieren sus respectivas disciplinas y leyes aplicables.

Este proyecto, incorpora el elemento de un sistema de colaboración entre las agencias de servicios gubernamentales que atienden a la misma población por diversos aspectos de sus problemas como familias y ciudadanos. Este sistema es importante para la atención eficiente de la personas con trastornos mentales, sus familias y todos los ciudadanos. Está dirigida a tratar a las personas como un todo dentro de un continuo de esfuerzos y actividades para lograr la recuperación en el tiempo más propicio y acelerar la incorporación de éstas y sus familias en la comunidad. Manteniendo su funcionalidad. Se dirige, además, a promover la aceptación de la enfermedad mental como una condición de salud, neutralizando las estigmas sociales, al reconocer que el problema de salud mental tiene distintas vertientes y es una responsabilidad compartida.

Reconocen el Departamento de Salud y ASSMCA la importancia de las Carta de Derechos a personas, adultos y menores, que necesitan, solicitan o están recibiendo tratamiento. Estas Cartas de Derechos reconocen la capacidad de recuperación de las personas de acuerdo a su condición, si se le provee el tratamiento adecuado. Reconocen y solicitan el apoyo para las personas que están en tratamiento por los familiares y entidades de protección que apliquen, para propiciar la participación de los niveles de cuidado de mayor autonomía en la comunidad y con otros seres significativos, y promover la pronta recuperación. Prohíbe la institucionalización de las personas en niveles de cuidado no necesarios una vez estabilizada la persona y evita que se repita la triste historia de abandonar a las personas con trastornos mentales en hospitales sin su familia y fuera de la comunidad. Ratifican, además, las Cartas de Derechos para adultos y menores, el derecho a crear servicios en proporción a las necesidades y la demanda por los mismos. Esta medida es más costo-eficiente a largo plazo, pues es menos costoso tener a las personas en tratamiento y en recuperación, que sin tratamiento creando múltiples problemas por su deterioro.

Expresa la Administración de Servicios Salud Mental y Contra la Adicción que el Sistema de Cuidado de Salud Mental según esbozado en este Proyecto y de acuerdo a los paradigmas modernos, provee las opciones necesarias para las personas con trastornos mentales. Esto es, incorpora procedimientos médico/psiquiátricos de terapia electrocompulsiva, restricción y aislamiento. Este proyecto exige el adiestramiento y la certificación de los profesionales que ejercen y apliquen los mismos, así como el mantenimiento y uso de protocolos.

El Colegio de Abogados, el Hospital San Juan Capestrano y Mepsi Center estuvieron representados por NAMI-Puerto Rico (Fundación Puertorriqueña Pro Salud Mental quien recomendó una serie de enmiendas que han sido consideradas en este informe).

La Asociación de Terapia Ocupacional de Puerto Rico expresó que agrupa a los profesionales de Terapia Ocupacional con licencia para la práctica de dicha profesión en Puerto Rico. Terapia Ocupacional es una de las profesiones que históricamente y en su origen han estado altamente relacionadas al campo de la Salud Mental.

Entiende la Asociación de Terapistas Ocupacionales que el proyecto protege a las personas que reciben servicios de salud mental y toma en consideración el proceso amplio e interdisciplinario de rehabilitación y el continuo de cuidado.

Por su parte, la Administración de Seguros de Salud de P.R. (ASES) expresó que su encomienda legislativa es servir como vehículo a través del cual se le ofrece el seguro de salud del Gobierno de Puerto Rico a cientos de miles de puertorriqueños. Tras un cuidadoso proceso de evaluaciones, se escogen a las aseguradoras con las cuales se contratará para que sirvan a las distintas regiones de la isla. A su vez, los contratos suscritos con las aseguradoras incluyen una amplia cubierta de salud mental, la cual incluye diagnóstico, tratamiento y mantenimiento de la salud mental de nuestros beneficiarios. La ASES está

consciente de la importancia que tiene el cuidado mental dentro del cuadro general de la salud, por lo tanto, endosa favorablemente este proyecto.

La Asociación de Psicólogos de Puerto Rico mencionó que uno de los problemas principales de nuestro país, Puerto Rico, es la salud mental. Este es el resultado de vivir dentro de un sistema social altamente competitivo que requiere la adaptación a múltiples demandas de ajustes y que además, requiere gran inversión de energía física y mental. Muchas de las mismas enfrentadas en forma simultánea. Como resultado de esto, un porciento alto de la población experimenta crisis de diversos niveles que incluyen reacciones psicológicas que evidencian una salud mental deteriorada.

La Asociación de Psicólogos puntualizó los siguientes aspectos del proyecto como aciertos de mucho valor.

1. Esta Ley provee y asegura los derechos de las personas que necesitan de servicios de salud mental para recibir tratamiento en su proceso de recuperación y/o rehabilitación, que le permitan eventualmente alcanzar un desempeño funcional.
2. Provee para que los servicios sean prestados en una forma eficaz y diligente.
3. Se utiliza el concepto persona, en vez de paciente, lo cual influye en envitar la estigmatización y destaca el valor de los seres humanos como ente activos dentro de su proceso de recuperación.
4. Pone énfasis en la participación de éstos en la toma de decisiones respecto a su tratamiento y a aquellos aspectos de su rehabilitación así como al manejo de la información confidencial de su expediente.
5. El proyecto reconoce y destaca la preparación de los profesionales de la salud mental en los equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios y terapéuticos. En la presente revisión ya se menciona a la figura del Psicólogo como uno de los profesionales de la salud mental.

El Consejo Estatal de Planificación de Salud Mental de Puerto Rico manifestó que este Proyecto de Ley protege a las personas que reciben servicios de salud mental, toma en consideración el proceso amplio e interdisciplinario de rehabilitación, intenta reducir la estigmación y reconoce la necesidad de la coordinación interagencial.

Por su parte la Alianza Comunitaria Pro Salud Mental mencionó que la organización da el apoyo para la aprobación de esta nueva Ley de Salud Mental, porque la misma brinda protección a las personas con condiciones emocionales o mentales que van en busca de servicios, le reconoce una carta de derechos, establece un continuo de tratamiento desde la fase aguda hasta el proceso de rehabilitación, vela por la confidencialidad del expediente, estableciendo parámetros claros para salvaguardarla, enfatiza que el modelo interdisciplinario es el más adecuado para atender esta población, dejando claro la responsabilidad de cada uno de los profesionales en el cuidado, señala responsabilidad a las personas con condiciones mentales y a sus familiares y le reconoce un espacio en la planificación, el tratamiento y la rehabilitación óptima del paciente.

El Dr. Salvador Santiago Negrón presidente de la Universidad Carlos Albizu, anteriormente conocida como Centro Caribeño de Estudios Postgraduados, expresó que luego de haber estudiado el Proyecto de Ley 3275, consideran que el mismo representa un proyecto que supera la ley presente, además, incorpora un elemento nuevo el cual apoyan totalmente, que es la Carta de Derechos de los Pacientes de Salud Mental. Esta Carta de Derechos es un primer paso para poner a Puerto Rico a la par con los países más avanzados del mundo.

La academia de Psiquiatría de Puerto Rico la Asociación Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes, la Sección de Psiquiatría de la Asociación Médica de Puerto Rico, y la Asociación Americana de Psiquiatría, Cap. de Puerto Rico brindaron una ponencia conjunta en donde cada grupo expresó sus opiniones y enmiendas al proyecto de ley.

Expresó este grupo que el médico psiquiatra es un profesional que luego de completar ocho años de estudios universitarios para obtener el grado de doctor en medicina; recibe al menos cuatro años adicionales de adiestramiento. Este adiestramiento incluye ciencias de la conducta (neurociencias, psicofarmacología, teorías psicológicas, psicopatología, diferentes modalidades de psicoterapias) y como integrar todos estos elementos en un enfoque biopsicosocial. Además de cuatro años de práctica clínica supervisada, altamente reglamentada por agencias acreditadoras en cuanto a su contenido y las competencias necesarias para la práctica. Aquellos que se subespecializan reciben un adiestramiento adicional. Al presente están acreditadas las subespecialidades de Psiquiatría de Niños y Adolescentes, Psiquiatría de la Adicción, Psiquiatría Geriátrica y Psiquiatría Forense. Esto lo acredita como el profesional de preparación más amplia y completa para al atención integral de todos los aspectos de la evaluación y tratamiento de personas con trastornos mentales.

Este grupo de Asociaciones entiende que es necesario hacer énfasis en la necesidad de que se le mantenga al psiquiatra en la posición que este profesional médico tiene en un sistema de servicios de salud mental, sobre todo en el aspecto hospitalario.

Entienden las Asociaciones de Psiquiatras que las funciones, deberes y responsabilidades de los psiquiatras no deben ser delegadas a otros profesionales no adiestrados en esta área.

Enfatizaron que en el ambiente hospitalario o médico-ambulatorio, el médico psiquiatra es el líder del equipo interdisciplinario de tratamiento. De ninguna manera esto debe interpretarse como una subestimación a las aportaciones de otros profesionales al tratamiento de los pacientes con trastornos mentales. Partiendo de la naturaleza biosicosocial de ser humano reconocen la necesidad de contar con otros profesionales que colaboren con ellos en el tratamiento y la rehabilitación de los pacientes. Sin embargo hay decisiones, que si bien deben consultarse con los demás miembros del equipo la decisión final no puede depender necesariamente del criterio de éstos. La decisión de hospitalizar, dar de alta de un hospital, o utilizar modalidades estrictamente médicas con la farmacoterapia, restricciones, aislamiento, terapias electroconvulsivas, desintoxicaciones, etc. son decisiones médicas, reguladas por los estándares de la práctica de la medicina. Estas decisiones tienen una responsabilidad médico-legal inherente a las mismas y por lo tanto no pueden estar supeditadas al juicio de otros profesionales no médicos. Las leyes que regulan la práctica de la psiquiatría en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a través del Tribunal Examinador de Médicos exige completa y total responsabilidad sobre dichos procedimientos médicos y obliga a volver a defender de manera enfática esta posición. De igual manera, es importante señalar que el médico generalista, no es un profesional especializado en el tratamiento de los trastornos mentales, sino que es un miembro del personal de apoyo.

Señalan estas asociaciones que el prejuicio y discrimen hacia los pacientes con trastornos mentales es una realidad que todavía persiste. Por otra parte, la evidencia científica establece que los trastornos mentales son condiciones médicas, muchas de ellas de naturaleza neurobiológica. Sin embargo, todavía hoy, en los arbores de nuevo milenio, nuestros pacientes sufren al limitárseles la accesibilidad a servicios médicos-psiquiátricos de calidad, incluyendo los medicamentos más efectivos. Esto es discrimen. Las restricciones impuestas por los planes médicos no tienen otro fundamento que consideraciones económicas. Paradógicamente, a la larga, estas restricciones resultan en intervenciones más costosas, sin tomar en cuenta el dolor que le causa al paciente, a la familia y a la sociedad. Cuestionan estas Asociaciones el porqué los pacientes de salud mental no reciben un trato igual al que reciben los pacientes con otras condiciones médicas. El P. de la C. 3275 hace justicia a estos pacientes en esta área. Explican que sin embargo, el trato igual también implica que los servicios médicos-psiquiátricos sean de la misma calidad de los servicios que se ofrecen a las otras condiciones médicas. Este principio se viola cada vez que se intenta otorgar a profesionales no médicos o a médicos no especializados en psiquiatría o sus subespecialidades las funciones que no les corresponden. Esta práctica fomenta el discrimen en contra de los pacientes con trastornos mentales, dándoles servicios por debajo de lo óptimo.

Señalan las Asociaciones de Psiquiatría que la calidad y efectividad de un servicio de salud depende especialmente de la calidad de la preparación de los profesionales que ofrecen este servicio. Por ende, tanto la prevención, como la restauración del estado de salud y la rehabilitación en esta edades requiere de conocimientos y estrategias que sólo se consiguen a través de un adiestramiento especializado.

Por su parte la Asociación de Seguros de Puerto Rico y Triple S Inc., centraron sus ponencias en el tema de la paridad promovida en el P. de la C. 3275 entre condiciones físicas y condiciones mentales. Respecto a este asunto las enmiendas sugeridas han sido consideradas como parte de este informe.

A la luz del nuevo milenio, y siguiendo el compromiso de esta administración de proveer mayor acceso a los servicios de salud, esta Ley tiene el firme propósito de reformar los servicios de salud mental provistos en Puerto Rico y garantizar a los ciudadanos que reciben servicios de salud mental los derechos consagrados en nuestro ordenamiento.

Por todo lo anteriormente expuesto vuestras Comisiones de Salud y Bienestar Social, de Gobierno y Asuntos Federales recomiendan la aprobación del P. de la C. 3275 con las enmiendas propuestas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Norma Carranza De León, M.D.
Presidenta
Comisión de Salud y Bienestar Social

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3009, el cual ha sido descargado de la Comisión Asuntos Urbanos e Infraestructura.

**"LEY**

Para denominar como "Edificio Ing. Julio A. Negroni Arizmendi", al nuevo edificio de oficinas técnicas principales de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, localizado en el Barrio Monacillos del Municipio de San Juan.

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico es una corporación pública creada en virtud de la Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941, según enmendada, con el fin de impulsar el bienestar general y aumentar la prosperidad mediante el desarrollo de las fuentes fluviales y de energía de Puerto Rico. Desde su creación, en el 1941, esta empresa de servicio público ha sido pilar del desarrollo económico y social del país, gracias al liderazgo visionario de los servidores públicos que han laborado y laboran en ella.

Entre los directores ejecutivos más destacados que han dirigido esta corporación pública se encuentra el Ing. Julio A. Negroni Arizmendi, quien fue nombrado luego de ejercer funciones durante treinta y un años en diferentes puestos profesionales y de supervisión en la Autoridad. Inició su carrera como Ingeniero Auxiliar en el 1941 y se desempeño como Ingeniero de Planificación, Jefe de Ingeniería, Director de Planificación, Director de Distribución y Ventas, entre otras plazas ejecutivas, hasta alcanzar los puestos de Subdirector Ejecutivo y Director Ejecutivo, siendo éste último el puesto administrativo de mayor rango en la empresa.

El ingeniero Negroni Arizmendi se jubiló en el 1975, luego de haberle servido con excelencia a esta corporación pública durante 34 años. Continuó sirviéndole a la Autoridad como miembro de la Junta de Gobierno hasta el 1979. Hoy, 20 años más tarde, el ingeniero Negroni Arizmendi continúa asesorando a la Junta de Gobierno de la Autoridad, lo cual demuestra su espíritu de servicio público, al haberle brindado, por más de medio siglo, su peritaje técnico y capacidad administrativa al pueblo de Puerto Rico.

El Ing. Julio A. Negroni Arizmendi es un profesional de méritos extraordinarios, que ha recibido múltiples distinciones, tanto en Puerto Rico, como en el exterior. Ha ofrecido asesoría técnica sobre el servicio de energía eléctrica en países tales como Panamá, Brasil, Ecuador, Antigua y la República Dominicana. Además, colaboró, durante 10 años, con la Administración de Energía Eléctrica del Departamento del Interior de los Estados Unidos de América.

Este distinguido profesional ha ocupado puestos de liderazgo en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, en el Instituto de Ingenieros y Electricistas de Puerto Rico, en el "Institute of Electrical and Electronic Engineers", en el Congreso Panamericano de Ingeniería y en otras sociedades técnicas internacionales. Ha publicado estudios técnicos que fueron presentados en conferencias celebradas en Europa, América Latina y Estados Unidos. Entre los honores que ha recibido se destaca la Medalla del Centenario del "Institute of Electrical and Electronic Engineers".

La obra del ingeniero Negroni Arizmendi en el campo de la ingeniería y en el servicio público merecen el reconocimiento del Pueblo de Puerto Rico, del cual es un hijo distinguido. Su labor sirve de ejemplo para las nuevas generaciones de técnicos y científicos que deben conducir a nuestro pueblo hacia la vanguardia del desarrollo tecnológico. Son valiosas sus aportaciones al crecimiento en general. Su gestión y su profundo compromiso profesional deben servir de guía y ejemplo para aquéllos que han seguido y siguen sus pasos en la labor de proveerle el servicio esencial de energía eléctrica a nuestros conciudadanos.

Nuestro pueblo debe brindarle un reconocimiento que trascienda a través del tiempo y las generaciones, un reconocimiento que inmortalice su fecunda gestión. Entendemos que se ofrece este reconocimiento a este insigne ingeniero y servidor público al denominar el edificio que alberga las oficinas técnicas principales de la Autoridad de Energía Eléctrica en Monacillos con su nombre.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Artículo 1.- Se denomina como "Edificio Ing. Julio A. Negroni Arizmendi", al nuevo edificio de oficinas técnicas principales de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, localizado en el Barrio Monacillos del Municipio de San Juan.

Artículo 2.- La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, sin sujeción a lo dispuesto en la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, según enmendada.

Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3419, el cual ha sido descargado de la Comisión Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos.

**"LEY**

Para enmendar el subinciso Segundo (c)(2) del inciso (E) del Artículo 4 de la Ley Núm. 13 de 2 de octubre de 1980, según enmendada, conocida como "Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño" , a los fines de establecer que en casos en que el grado de incapacidad del veterano haya sido establecido como

permanente, el veterano no vendrá obligado a presentar anualmente un solicitud de exención contributiva y para otros fines.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La Ley Núm. 13 de 2 de octubre de 1980, según enmendada, conocida como "Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño" concede una serie de derechos a los veteranos que han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en reconocimiento de los valiosos servicios prestados. Uno de los derechos concedidos es una exención en la contribución sobre la propiedad.

Actualmente el veterano permanentemente incapacitado no viene obligado a presentar anualmente constancia del grado de incapacidad para recibir tal beneficio, pero se le requiere solicitar la exención contributiva anualmente. Nos parece que ese requisito es innecesario debido al hecho de que ya se ha establecido la permanencia de la incapacidad. El requerirle una solicitud de exención anual representa un gasto innecesario de tiempo y recursos, cuando lo que debemos hacer es flexibilizar esos procedimientos.

La Carta de Derechos de los Veteranos Puertorriqueños fue creada con el propósito fundamental de mejorar la calidad de vida y el bienestar de esa distinguida clase. Facilitar cualquier trámite burocrático-administrativo relacionado con las necesidades de los veteranos incapacitados sería un paso adelante en esa dirección.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se enmienda el subinciso Segundo (c)(2) del inciso (E) del Artículo 4 de la Ley Núm. 13 de 2 de octubre de 1980, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 4.-Derechos concedidos por la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño.- Los siguientes derechos se conceden en beneficio del veterano:

A...
E. Derechos Realciondos con las Obligaciones Contributivas:
Primero: ...
Segundo: Contribución sobre la Propiedad
a) ...
b) ...
c) Exención aplicable a Veteranos con Incapacidades
...
1....

2. Certificación escrita de un funcionario del Departamento de Asuntos del Veterano, acreditando el grado de incapcidad que sufría el veterano el 1ero de enero inmediatamente anterior al año contributivo para el cual solicita la exención. En aquellos casos en que el grado de incapacidad del veterano haya sido establecido como permanente, el veterano no vendrá obligado a presentar anualmente constancia del grado de su incapacidad, bastando a estos efectos que el veterano radique con el colector una certificación a los efectos de que el grado de incapacidad se ha establecido como permanente. De ser el grado de incapacidad permanente no será necesario que radique una solicitud de exención annual, bastará con que presente la solicitud sólo al momento de pedir la exención por primiera vez.

. . ."

Sección 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2521, la cual ha sido descargada de la Comisión Asuntos Urbanos e Infraestructura.

**"RESOLUCION CONJUNTA**

Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, a que transfiera por el precio de un dólar ($1.00), el antiguo Parque de Bombas de Yabucoa a la Legión Americana, Puesto 64 de Yabucoa.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La Legión Americana está compuesta por hombres y mujeres que han luchado por preservar nuestra democracia y han participado en varios conflictos bélicos en representación de nuestra patria puertorriqueña. Muchos de ellos nunca regresaron, otros llegaron heridos y algunos lograron grandes méritos por su heroismo y en la lucha por la paz. En los diferentes pueblos de Puerto Rico, se han formado Puestos de estos compatriotas para luchar por los derechos de los veteranos y sus familias. Uno de estos es el "American Legion Post 64, Arturo Malavé", HC-02 Box 11442, Yabucoa, Puerto Rico, 00767.

Hasta el día de hoy, el Puesto 64 de la Legión Americana no cuentan con un local oficial para llevar a cabo sus reuniones y actividades. Actualmente el edificio de lo que era el Parque de Bombas de Yabucoa, está cerrado y en estado continuo de deterioro y abandono. Los legionarios están solicitando dicho local y es justo y necesario que este le sea traspasado a estos veteranos yabucoeños del Puesto 64, Legión Americana de Yabucoa.

**RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO**

Sección 1.-Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas, a que transfiera por el precio de un dólar ($1.00), el antiguo Parque de Bombas de Yabucoa a la Legión Americana, Puesto 64 de Yabucoa.

Sección 2.-La Legión Americana no podrá arrendar, traspasar o vender dichas facilidades. En caso de no utilizarse, esas facilidades revertirán al Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3013, el cual ha sido descargado de la Comisión de lo Jurídico.

**"LEY**

Para enmendar el Artículo 89 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de eliminar la frase "entrenado para atacar".

## EXPOSICION DE MOTIVOS

Los medios de comunicación en Puerto Rico con frecuencia denuncian casos lamentables de niños que han resultado gravemente heridos por ataques de animales feroces o con historial de ataques a seres humanos. Desafortunadamete, en muchas ocasiones no se han podido radicar cargos criminales contra los dueños de dichos animales, debido a que no se pueden probar los elementos que establece el artículo 89 del Código Penal vigente al establecer el delito, a los fines de probar que el animal que atacó e infirió grave daño a una persona estaba entrenado para atacar o si tiene un historial conocido de ataques a otras personas.

Es una realidad, que en comunidades densamente pobladas existen personas que tienen como mascotas, serpientes, perros de raza Pitbull Terriers, German Sheperds, Rottweilers, cocodrilos, tigres, entre otros. Cada vez más se producen agresiones y ataques por animales feroces por negligencia de sus dueños o por tenerlos en lugares altamente habitados. Las reacciones de dichos animales ante la presencia de personas es impredecible y una vez atacan un ser humano es casi imposible impedir que le ocasione grave daños, pues una vez muerden a una persona tienen la tendencia a no soltarlos.

Es hora de detener estos ataques y el al sufrimiento que ocasionan los mismos a las personas víctimas de ellos, en especial a los niños. Para el Ministerio Fiscal al igual que para la víctima de estos ataques por animales feroces o con historial de agresiones a seres humanos es muy difícil conseguir evidencia de que ese animal estaba entrenado para matar. Estos animales, por su naturaleza no necesitan ningún entrenamiento para atacar ni para matar, sin embargo por su propia naturaleza, aún sin ser mortificados, atacan a seres humanos. De igual manera, es sumamente difícil probar que ese animal feroz ha atacado anteriormente. Muchas veces las personas no denuncian esos casos por desconocimiento debido a que no consiguen testigos que declaren sobre la agresión o sobre ataques anteriores de ese animal en particular.

Esta medida pretende hacerle justicia a las personas que resultan víctimas de este tipo de ataques y agresiones, eliminando del Articulo 89 del Código Penal vigente dos (2) elementos requeridos para constituir dicho delito, que por ser tan difíciles de probar, tornan dicho Artículo en uno inoperante e inaplicable, teniendo como consecuencia el que criminalmente este tipo de casos queden impunes.

Esta Asamblea Legislativa pretende mediante la legislación propuesta disuadir a la ciudadanía de tener este tipo de animales feroces, peligrosos y que suelen atacar a los seres humanos en comunidades y áreas residenciales, poniendo en riesgo la vida, seguridad y salud de las personas e incluso de otros animales domésticos y así lograr que los casos que surjan puedan ser sometidos criminalmente ante nuestros tribunales y estén sujetos a la pena determinada.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 89 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 89.-Muerte y grave daño corporal por permitir animal feroz andar suelto.

Todo dueño de fiera salvaje o animal feroz que voluntariamente le permitiera andar suelto o no lo tuviere con la necesaria sujeción y debido a esto dicho animal matare o causare grave daño corporal a alguna persona que hubiere tomado todas las precauciones posibles a las que ordinariamente habría tomado cualquier persona prudente en igualdad de circunstancias, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años.

. . . . . ."

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

SRA. VICEPRESIDENTA: Le recordamos a los compañeros, estamos en un receso a partir de ahora por quince (15) minutos, y a partir de esos quince (15) minutos regresamos para terminar el Calendario que hemos leído en la noche de hoy.

**RECESO**

Transcurrido el receso, el Senado reanuda la sesión bajo la Presidencia del señor Charlie Rodríguez Colón.

SR. PRESIDENTE: Se reanuda la Sesión.

Tenemos el quinto Calendario, el sexto Calendario y tenemos dos (2) medidas que han sido descargadas. Una tiene que ver con la Ley de Armas y la otra tiene que ver con la Salud Mental, que espero que la de cada uno de ustedes esté en optimas condiciones, será atendida hoy, pero viene acompañado con un informe de la Comisión de Salud.

En relación al Proyecto de Retiro de la Telefónica, el mismo va a ser atendido en el día de mañana.

**CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA**

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 1697, titulado :

"Para enmendar el Artículo 7-03 del Capítulo VII de la Ley Núm. 54 de 30 de mayo de 1973, según enmendada, conocida como "Ley de Administración, Conservación y Policía de las Carreteras Estatales de Puerto Rico", a fin de requerir a todo jinete que transite por las carreteras que lleve en su vestimenta o en la indumentaria, montura del caballo, un elemento distintivo de seguridad para brindar protección a éste, al jinete, a su ejemplar y a los conductores; y para imponer penalidades."

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2367, titulado :

"Para adicionar un Artículo 13-A a la Ley Núm. 52 de 23 de febrero de 2000, a fin de reconocer expresamente la continuidad en el ejercicio de la Técnica de Emergencia Médica en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a toda persona autorizada bajo la Ley Núm. 46 de 30 de mayo de 1972 y

facultar, al Secretario de Salud o su representante autorizado, a la expedición de las licencias correspondientes."

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente.
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.
SR. DAVILA LOPEZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.
SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.
SR. DAVILA LOPEZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1898, titulado :

"Para crear la "Ley para regular los turnos de trabajo de los médicos internos y residentes en las instituciones hospitalarias de Puerto Rico"; establecer sus propósitos y funcionamiento."

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente.
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.
SR. DAVILA LOPEZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.
SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 2187, titulada :

"Para ordenar a la Administración de Rehabilitación Vocacional a mantener abiertas y operacionales las oficinas de servicios a estudiantes en los recintos universitarios, públicos y privados y para ordenar al Secretario de Justicia a no conceder a ningún funcionario o empleado de la Administración de Rehabilitación Vocacional representación legal y otros beneficios de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada."

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente.
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.
SR. DAVILA LOPEZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.
SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.
SR. DAVILA LOPEZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 1323, titulado :

"Para establecer el Comité Interagencial para el Estudio de la Violencia Doméstica en Puerto Rico."

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente.
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.
SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 2441, titulada :

"Para asignar a la Universidad de Puerto Rico la cantidad de doce millones quinientos mil (12,500,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas para la restauración del inmueble que comprende el Complejo de Medicina Tropical que se encuentra bajo la titularidad de dicha institución universitaria, localizado en el sector de Puerta de Tierra de San Juan; disponer que la asignación de los fondos será desembolsada en tres (3) partidas anuales recurrentes comenzando con una asignación de cuatro millones quinientos mil (4,500,000) dólares para el año fiscal 2000-2001 y las dos partidas restantes por la cantidad de cuatro millones (4,000,000) dólares cada una para los años fiscales subsiguientes 2001-2002 y 2002-2003; establecer que la Universidad de Puerto Rico cederá en usufructo, para el uso y disfrute por la Asamblea Legislativa un sesenta porciento (60%) del espacio disponible por un término inicial de treinta (30) años y disponer que al concluir el usufructo, se otorgará un contrato de arrendamiento por el valor nominal de un (1) dólar por un término adicional de setenta (70) años; y para autorizar el pareo de los fondos consignados."

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente.
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.
SR. DAVILA LOPEZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.
SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.
SR. DAVILA LOPEZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2077, titulado :

"Para enmendar el artículo 6 de la Ley Núm. 8 del 10 de octubre de 1987, para disponer que cualquier parte afectada por una determinación de la Junta de Planificación o la Administración de

Reglamentos y Permisos podrá recurrir mediante el recurso administrativo de apelación a la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones; enmendar el artículo 13.016 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico" para disponer que en relación a los términos, trámites y condiciones en cuanto a solicitudes de apelación en los casos específicos provenientes de decisiones de la Administración de Reglamentos y Permisos donde las competencias fueron transferidas de dicha agencia central al municipio, el foro apelativo lo será la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, en los casos de jurisdicción específica delegada, según lo establece el artículo 31(a) de la Ley Núm. 76 del 24 de junio de 1975, según enmendada."

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente.
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.
SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2592, titulado :

"Para enmendar el Capítulo 34 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como "Código de Seguros de Puerto Rico", con el propósito de disponer sobre los fines y propósitos del asegurador cooperativo, establecer unas definiciones generales referente al contenido de dicho Capítulo y enmendar sus disposiciones a fin de armonizarlas con la realidad actual del asegurador cooperativo y promover su desarrollo."

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente.
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.
SR. DAVILA LOPEZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.
SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2210, titulado :

"Para enmendar el Artículo 11.02 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", a fin de disponer unas normas adicionales relativas al uso de bicicletas."

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente.
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.
SR. DAVILA LOPEZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.
SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 2254, titulado :

"Para establecer la ley que crea el Programa Interagencial de Educación y para la Seguridad Pública adscrita al Departamento de Educación para primeros ofensores y en alto riesgo de convertirse en delincuentes habituales."

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente, solicitamos que esta medida se devuelva a la Comisión de Reglas y Calendario.

SR. PRESIDENTE: ¿El Proyecto del Senado 2254? ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se devuelve esta medida a la Comisión de Reglas y Calendario.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 3447, titulado :

"Para crear la "Ley de Armas de Puerto Rico" y derogar las Leyes Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, y la Núm. 75 de 13 de junio de 1953, según enmendada; a fin de unificar los requisitos para la concesión de las licencias de tener, poseer y portar armas, y las de tiro al blanco y de caza; establecer las sanciones y multas a imponerse; disponer que las sentencias que se impongan por incurrir en violaciones a esta Ley se cumplirán de manera consecutiva; establecer un registro de la venta de municiones; establecer un límite máximo a la cantidad de municiones que podrá obtener un tenedor de armas que no posea un permiso de tiro al blanco o de caza; limitar la cantidad de armas que podrán ser autorizadas a una persona que tenga licencia de armas; crear el Sistema de Registro Electrónico en la Policía de Puerto Rico; y para otros fines."

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, por favor concédame un turno posterior.

SR. PRESIDENTE: A la moción de un turno posterior, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Concurrente del Senado 58, titulado :

"Para otorgar la Orden Puertorriqueña de Excelencia Deportiva por sus hazañas atléticas, y declarar al licenciado Gilberto González Juliá como "Atleta del Siglo de Pista y Campo de Puerto Rico"."

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1634, titulado :

"Para establecer la Declaración de los Derechos y Obligaciones de la Persona Menor de Edad; adoptar la política pública del Gobierno de Puerto Rico para garantizar los derechos reconocidos a las personas menores de edad y disponer la responsabilidades del estado; redefinir el concepto de la "persona menor de edad" y el alcance del mismo en el ordenamiento jurídico civil vigente; disponer sobre la protección integral de los derechos y el reconocimiento expreso de la autoridad paterna y materna; prohibir expresamente el discrimen en las personas menores de edad; instituir como fuente de derechos ejercitables en armonía con la legislación vigente la asistencia del estado, la seguridad social, las medidas contra el abuso, la violencia física y el maltrato contra menores; reconocimiento de las libertades básicas del menor de edad y el derecho a la privacidad dentro del marco de la autoridad y supervición de los padres; y disponer los principios sobre la prestación de servicios de salud, las oportunidades para menores de edad con impedimentos físicos o mentales, el derecho a la educación, las oportunidades para el desarrollo deportivo y recreativo; reconocer la rehabilitación como principio fundamental en el sistema de justicia juvenil; y para otros fines relacionados."

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 3275, titulado :

"Para establecer las necesidades de tratamiento, recuperación y rehabilitación en salud mental; crear las "Cartas de Derecho" para adultos y menores que reciben servicios de salud mental; uniformar lo relativo a los procedimientos relacionados con estos derechos; establecer los principios básicos de los niveles de cuidado en el ofrecimiento de servicios de salud mental; derogar la Ley Núm. 116 de 12 de junio de 1980, conocida como "Código de Salud Mental de Puerto Rico" y establecer penalidades."

SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: ¿Estamos ante el Proyecto de Salud Mental?

SRA. CARRANZA DE LEON: 3275.

SR. PRESIDENTE: Muy bien, compañera senadora Carranza de León.

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Senador Fas Alzamora.

SR. FAS ALZAMORA: No hay ni objeción, ni expresión a favor. Simplemente nuestra abstención.

SR. PRESIDENTE: Muy bien. Regístrese la abstención del compañero.

SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente, para que se apruebe la medida como ha quedado enmendada.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Senador Fas Alzamora.

SR. FAS ALZAMORA: Creo que, sin ánimos a que se entienda que estamos en interrupción, pero nosotros queríamos expresarnos sobre esa medida y no se nos reconoció. Estamos parado la compañera Mercedes Otero y yo, y queremos expresarnos sobre la medida.

SR. PRESIDENTE: Compañero, lo que pasa es que como usted me dijo que se abstenía y que no habría de hacer expresiones, pues, yo entendí que se refería ...

SR. FAS ALZAMORA: A las enmiendas.

SR. PRESIDENTE: Ah, bueno, perdóneme, el compañero no fue claro. Como pidió abstención, pues ... Pero no hay problema alguno, estoy en la mejor disposición de escucharlo a usted y la distinguida senadora Otero de Ramos.

SR. FAS ALZAMORA: Pues yo voy a delegar nuestras expresiones a la compañera Otero de Ramos si se nos reconoce con mucho gusto.

SR. PRESIDENTE: Pues, compañero su expresión fue para delegar sus expresiones en las expresiones que habrá de vertir la senadora Otero de Ramos. Adelante, Senadora.

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, hace dos (2) años que nosotros venimos muy profundamente dedicando tiempo a este Proyecto de salud mental. El año pasado, apenas una (1) hora para terminar la Sesión, se trajo un proyecto de ciento y pico de páginas, el cual era muy difícil leerlo, adoptarlo como una medida de tanta importancia y tanta transcendencia para el pueblo puertorriqueño. Hemos estado laborando todo el tiempo con un Proyecto del Senado que yo consideré en aquel momento, hace más de tres (3) meses, que era el mejor proyecto. Un proyecto que se trabajó, pero con mucha delicadeza y que luego apareció que el Proyecto no procedía porque el que procedía era el de la Cámara. Estuve presente en todas las vistas de la Cámara, a pesar de que en algunos momentos el presidente Aramburu ni siquiera apareció a las vistas, y luego entonces traen un Proyecto de la Cámara, que no es el mejor, que es un Proyecto que tiene muchísimas lagunas. Y a pesar de que la compañera Norma Carranza y la Comisión le han hecho unos cambios profundos a dicho Proyecto, me parece que para nosotros en la Minoría es muy difícil después de un día, de un cansancio extenuante, desde las once de la mañana (11:00 a.m.), para aprobar ahora una medida que tiene sobre ciento y pico de páginas. Que ni yo misma siendo miembro de la Comisión la he podido leer porque me lo entregaron aquí a las siete y cuarenta de la noche (7:40 p.m.) y realmente estamos en el mismo procedimiento anterior. Como no podemos hacer unas enmiendas serias y responsables, como acostumbra la Minoría, pues es que nosotros nos vamos a abstener, indicándole a los compañeros que yo estoy segura que no hay ni un compañero de la Mayoría, excepto la compañera Norma Carranza, que ha leído en su totalidad dicho Proyecto.

Así es que vuelvo esta noche a decir lo que dije entonces. No hay una prisa para hacer un proyecto mal hecho, para hacer un proyecto que tiene muchas lagunas y sobre un tema tan importante como es la salud mental. Cuando ahora mismo en los informes que ha radicado la compañera, sabemos que en

Así es que vuelvo esta noche a decir lo que dije entonces. No hay una prisa para hacer un proyecto mal hecho, para hacer un proyecto que tiene muchas lagunas y sobre un tema tan importante como es la salud mental. Cuando ahora mismo en los informes que ha radicado la compañera, sabemos que en términos de la Tarjeta de Salud, es uno de los problemas que ha quedado, prácticamente, afectado por la misma Tarjeta de Salud y necesitamos saber cómo armoniza este Proyecto con los servicios que se ofrecen y además saber cómo contempla la salud mental. No solamente de los impedidos, de los confinados, de los menores, sino de toda la ciudadanía puertorriqueña.

Y por lo tanto, por las expresiones que he hecho, yo le solicito a estos compañeros que leamos primero ese Proyecto y luego entonces podríamos votar todos responsablemente, enmendando lo que haya que enmendar y realmente, pues atendiendo el problema que debe de atenderse con premura, que es el problema de salud mental en Puerto Rico.

SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente, tengo que solicitarle que usted me dé la oportunidad de hacer unos comentarios sobre el Proyecto.

SR. PRESIDENTE: Cómo no, compañera Carranza ...

SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Sin embargo, noto que el compañero Rodríguez Orellana esta de pie. Toda vez que usted va a finalizar el debate, vamos a darle oportunidad a Rodríguez Orellana a manifestarse.

SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Muchas gracias, señor Presidente.

En arras de mantener cierto equilibrio y salud mental, habiendo acabado de recibir el documento al que se refería la senadora Otero, de ciento cincuenta y nueve (159) páginas, pasada las once de la noche (11:00 p.m.) de este final de Sesión Legislativa, no estoy en condiciones de emitir un juicio ponderado, no estoy en la mejor posición para favorecerlo ni oponerme. Por lo tanto, deseo consignar mi abstención.

SR. PRESIDENTE: ¿¿Hay objeción? No habiendo objeción, se le consigna la abstención al compañero.

Compañero Fas Alzamora.

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, ante las expresiones de la compañera Mercedes Otero y el compañero Manuel Rodríguez Orellana y de mi persona y de toda nuestra Delegación, y creo que de todos los Senadores, porque de lo contrario sería aceptar que a la Mayoría se le dan unos proyectos con cierto privilegio antes que a las Minorías y sé que eso no sucede así, o entiendo que no sucede así, pues entonces lo que procede es que este Proyecto regrese a la Comisión. Y hago la Moción Privilegiada, que regrese a la Comisión para que se le dé la oportunidad a que todos los Senadores la lean.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hay objeción a la moción del compañero.

SR. PRESIDENTE: Habiendo objeción, aquellos que estén a favor, se servirán a decir que sí. Aquellos que estén en contra, se servirán decir que no.

Derrotada la solicitud del compañero.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Con el permiso de la compañera Norma Carranza. Tenemos público que nos visita en el Senado y es una obligación nuestra orientarlos relacionado con lo que dice el compañero Tony Fas.

Esta medida lleva mucho tiempo trabajándose en la Comisión de Salud del Senado. Que se compone de nueve (9) miembros, de los cuales dos (2) son del Partido Popular y uno (1) del Partido Independentista. Que han tenido suficientes meses para estudiar la medida. No se puede venir ahora a decir aquí a esta hora en el Hemiciclo del Senado que no han tenido tiempo de trabajar la medida.

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Vamos a reconocer a la compañera Carranza ...

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, entonces para un turno.

SR. PRESIDENTE: Los turnos de rectificación los vamos a conceder, pero quiero dar una oportunidad a que consuma un turno de debate sin que se entienda que va a dejar fuera los turnos de rectificación.

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, yo no he tomado ningún turno, yo lo que hice fue una moción. Por lo tanto, yo reclamo mi turno sobre la medida.

SR. MELENDEZ ORTIZ: No, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: El problema es que el compañero, primero me dijo que no se iba expresar, que se iba a abstener ...

SR. FAS ALZAMORA: No, no, no, no ...

SR. PRESIDENTE: ... luego me dijo que se iba expresar ...

SR. FAS ALZAMORA: No, no, no, no ..., señor Presidente ...

SR. PRESIDENTE: Perdóneme, perdoneme.

SR. FAS ALZAMORA: Yo me expresé en las enmiendas.

SR. PRESIDENTE: Compañero, por favor. Le estoy diciendo que usted me dijo primero que usted quería de no expresarse ...

SR. FAS ALZAMORA: ¡Yo sé lo que yo le dije!, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Pero, perdóneme ...

SR. FAS ALZAMORA: ¡Pues no me tiene que hacer el recuento porque yo sé lo que yo le dije!

SR. PRESIDENTE: Tranquilo, tranquilo.

SR. FAS ALZAMORA: ¡No, tranquilo ...! Yo lo que le estoy diciendo ...

SR. PRESIDENTE: ¿Pero, cuál es, cuál es su problema?

SR. FAS ALZAMORA: ¡Yo estoy reclamando mi turno!

SR. PRESIDENTE: Compañero ...

SR. FAS ALZAMORA: ¡Está demás lo que está diciendo el señor Presidente!

SR. PRESIDENTE: Compañero ...

SR. FAS ALZAMORA: ¡Yo reclamo mi turno!

SR. PRESIDENTE: ¡El compañero esta fuera de orden ahora y le voy a tumbar el micrófono! ¡Lo voy a reconocer cuando lo haga con respeto a la Presidencia! ¡Con mucho gusto lo voy a reconocer! ¡Cuando lo haga con respeto!

SR. FAS ALZAMORA: ¡Yo le he hablado con respeto siempre!

SR. PRESIDENTE: ¡Pues no lo voy a reconocer ahora!

Senadora Otero de Ramos.

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, es una cuestión de privilegio personal.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

SRA. OTERO DE RAMOS: Yo soy uno de los miembros de los dos (2) miembros del Partido Popular en esta Comisión. Yo quiero decirle al compañero que este Proyecto que se ha radicado aquí no es el Proyecto que se ha venido elaborando y estudiando por todo este tiempo. Este es un Proyecto nuevo, prácticamente. Un Proyecto que nosotros fuimos a la Comisión de la Cámara para poder ver las nuevas vistas públicas y un Proyecto, que siendo yo miembro de la Comisión, no lo pude leer porque me lo entregaron hoy a las siete de la noche (7:00 p.m.), como miembro. Y me abstuve en la votación de la Comisión porque creí, por las mismas razones, que era injusto que yo ahora valorara un proyecto que hubo que hacerle muchísimas enmiendas y la compañera posiblemente va a hablar sobre eso, pero esté no es el proyecto original de este Senado que le dedicamos todo el tiempo.

SR. PRESIDENTE: Estoy seguro que el compañero Portavoz cuando hizo el señalamiento no lo hizo en lo absoluto en ánimos de ofender o afectar la imagen de la distinguida Senadora, por lo cual vamos a declarar sin lugar su cuestión de privilegio personal porque no entendemos que hubo intención alguna del compañero ofenderla a usted en su capacidad legislativa.

Vamos a reconocer a la senadora ...

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Senadora Otero de Ramos.

SRA. OTERO DE RAMOS: Yo acepto su decisión, pero en justicia, también hay que asesorar y orientar a los que no fueron parte de esa Comisión, pero que también tienen derecho a saber qué fue lo que pasó con este Proyecto. No tengo ninguna objeción, porque quizás la compañera va a hablar sobre el asunto.

SR. PRESIDENTE: Vamos entonces a reconocer a la senadora Carranza, que no va a afectar los turnos de rectificación de los compañeros.

Senador Fas Alzamora.

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Así me gusta. Señor senador Fas Alzamora.

SR. FAS ALZAMORA: Siempre lo hemos hecho. Lo que quería es solicitarle mi turno de exposición. Porque cuando yo intervine que dije que nos absteníamos era en el turno de enmienda.

SR. PRESIDENTE: Le reconocemos su turno de exposición y ruego me excuse, es que pensé que usted había dicho que usted no iba a hacer ningunas expresiones. Pero, con mucho gusto lo habremos de escuchar.

Adelante.

SR. FAS ALZAMORA: Muchas gracias, señor Presidente.

Y es correcta su interpretación que dije que no iba hacer expresiones, que las iba a delegar en la compañera Senadora, hasta que el compañero Portavoz de la Mayoría hizo las expresiones que hizo. Se lo dije aquí, privadamente. Por lo tanto, eso cambia toda la situación y mis expresiones son muy simples y muy sencillas.

Es un Proyecto de mucha responsabilidad pública. La salud mental es un problema de grandes proporciones en nuestro país. Yo con mis expresiones jamás desmerecería el trabajo de la distinguida compañera, a quien siempre he reconocido en su responsabilidad profesional y legislativa. Como tampoco, bajo ninguna circunstancia, puede desmerecer de quien goza toda una confianza nuestra y representa a esta Delegación en esta Comisión, la compañera Mercedes Otero de Ramos. Y la compañera me ha dicho y nos ha traído ante nuestra consideración de que ha participado en todas y cada unas de las vistas. Pero aquí han venido una serie de enmiendas que han llegado hace un tiempo limitado del cual corrobora la información el distinguido compañero Portavoz de la Minoría del Partido Independentista y que motivó nuestra moción a que se regresara a la Comisión y que fue derrotada por la Mayoría Parlamentaria.

Mi turno, simplemente obedece a, con respeto, pero con profundidad y determinación, rechazar las expresiones del compañero de la Mayoría de que ha dicho que esto lleva tiempo, de que esto se ha analizado. Tiene razón, el Proyecto tiene tiempo, puede haber sido analizado. Lo que no ha sido analizado son las enmiendas finales. Y en un tema tan profundo y tan importante que estoy seguro que con la excepción de la compañera Norma Carranza, y no soy persona de atribuir en nada, dudo mucho, por no decir que nadie más, para no ofender si alguien más la leyó de la Mayoría Parlamentaria, lo dudo. Pero que sacándola a ella, dudo mucho que alguien más la haya leído de la Mayoría. Los que derrotaron mi moción de que regresara a Comisión. He dicho, y escucho esto, señor Presidente, en todas las administraciones, no me refiero a partidos políticos, que estos son los días que más se legisla y que más irresponsablemente se aprueban proyectos, con todas las administraciones. Las de mi partido y las de usted. Porque se traen los proyectos aquí a última hora y ...

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, el compañero esta fuera de orden.

SR. PRESIDENTE: ¿En qué consiste?

SR. MELENDEZ ORTIZ: En que esta acusándonos que aprobamos proyectos irresponsablemente. Aquí esta el fruto del trabajo de muchos meses de los distinguidos compañeros Senadores en las distintas

comisiones. El hecho de que se esté considerando a estas alturas, pues, estamos trabajando de acuerdo al Reglamento del Senado.

SR. PRESIDENTE: Estoy seguro que el compañero Fas Alzamora no ha tenido la intención de ofender a ningún compañero de la Mayoría Parlamentaria, por lo cual, con sumo pesar, tenemos que declarar sin lugar la cuestión de orden y esperamos que el compañero continúe ciñiéndose a la discusión del proyecto y escuchar de forma clara, precisa y serena los planteamientos que él esta haciendo.

Adelante, compañero.

SR. FAS ALZAMORA: Muchas gracias, señor Presidente.

Si hubiera ofendido a la Mayoría Parlamentaria, hubiera ofendido a la Minoría también. Porque hablé claramente, y me hubiera ofendido yo mismo, de que en los años que llevo en este Hemiciclo y en el que estuve cuatro (4) años en la Cámara, y en eso es mi opinión personal, no en animo de ofender, mi opinión y mi opinión es mi opinión, son los días estos últimos donde todas las administraciones populares y penepés, aprueban la mayor cantidad de proyectos y donde más irresponsablemente se aprueban los proyectos porque se vacían rápidos todos con el descargue, con el informe, con las enmiendas. Y lo hago en forma genérica, hablo de veinticuatro (24) años de experiencia. No le puedo echar culpa al Partido Independentista porque nunca ha sido mayoría, nunca. Así es que en eso los saco afuera. Pero tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista, en ese sentido, sucede esto mismo. Y yo respondo a los dictados de mi conciencia. Y creo que esto es un Proyecto, precisamente, que tiene un alcance tan profundo en el país al presente y al futuro que merece un análisis mucho más profundo. De no traer unas enmiendas a última hora donde no han sido notificados ninguno de los compañeros para que puedan analizarlo en forma rápida y efectiva. Y yo por eso solicite que se devolviera a Comisión. Con eso no muere el Proyecto, devolviéndolo a Comisión todavía teníamos unas horas adicionales para poder analizarlo.

Pero obviamente, la moción vino mía. Si hubiera venido de un compañero de Mayoría lo hubieran aprobado y teniendo los votos, mañana si era lo lógico lo hubieran aprobado. Pero como vino de mi parte, automáticamente la oposición es automática. Cada cual con sus consciencias. Yo no le voy a votar a favor a ese Proyecto, ni le voy a votar en contra. Puede tener muchas virtudes, a lo mejor es lo más positivo que se puede haber presentado. Pero yo no me siento en condición de poder votarle porque no he tenido la oportunidad de leer las enmiendas que le han tenido a la consideración la compañera de presentarle al mismo. Y en ese sentido, me sostengo en lo que le dije originalmente al señor Presidente, de que me habré de abstener y mi intervención solamente obedece a unas manifestaciones en su criterio, que respeto, del compañero Portavoz de la Mayoría, al hacer ver de que habíamos tenido todo el tiempo. El tiempo quizás lo tuvimos para el Proyecto, pero no para las enmiendas finales que se pretenden introducir y que se aprobaron con la abstención nuestra y de toda la Delegación.

Lo hecho, el planteamiento nuestro y lo repito, ya no en forma oficial porque fue derrotada. Pero creo que la forma más justa de bregar con un problema tan difícil y que todos, Mayoría y Minoría, estamos preocupados y que estoy seguro que caminamos en la misma dirección para atender ese problema es que pudiéramos tener la oportunidad a ver como las enmiendas benefician, desfavorecen el Proyecto y el Proyecto en sí como beneficia o desfavorece al Pueblo y sobre todo a las personas que padecen ese tipo de condición.

Muchas gracias, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, compañero. Vamos, finalmente, a escuchar a la que todos reconocen como la persona que diligentemente y responsablemente ha evaluado y ha analizado toda esta medida, la senadora Norma Carranza.

Adelante, señora Presidenta de la Comisión de Salud.

SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente, con todo el respeto que se merecen los compañeros que han vertido expresiones, yo quisiera decirle que el problema de salud mental es uno grave

en Puerto Rico y que nosotros seríamos muy irresponsables si en la noche de hoy, luego de haberse radicado este Proyecto el 2 de mayo, - estamos, ¿en qué fecha estamos ahora mismo?, en junio 24, Día de San Juan - y han tenido suficiente tiempo para leer una medida de ciento ochenta páginas que se lee en una semana. Aparte de eso, señor Presidente, nuestra Comisión ha estado trabajando arduamente durante todos estos días para traer unas enmiendas, que aceptamos que se han traído tarde, pero que se han discutido, precisamente, con la querida compañera Mercedes Otero. Le aceptamos y le recomendamos que si la Minoría aceptaba ...

SR. PRESIDENTE: Perdóneme, compañera, que es que se ha puesto de pie el distinguido caballero de San Germán, Ramos Comas.

¿Senador, con qué propósito se pone de pie?

SR. RAMOS COMAS: Para una pregunta, si me la puede contestar la compañera.

SR. PRESIDENTE: La compañera ...

SRA. CARRANZA DE LEON: Yo preferiría terminar mis expresiones y entonces posterior a eso contestarle, porque realmente no me han permitido explicar el Proyecto.

SR. PRESIDENTE: Yo creo que la compañera tiene razón. Vamos a escucharle primero y luego con mucho gusto la doctora Carranza le atiende su pregunta.

Adelante.

SR. RAMOS COMAS: Gracias por la cortesía de ella de contestarme luego.

SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente, este Proyecto se ha estado trabajando, como dije anteriormente, y lo conocemos desde hace dos (2) años. Hemos estado dándole seguimiento al problema de la salud mental y pensamos que este Proyecto que presentamos en esta noche, revisado, contiene todo lo que como médico de profesión yo recomendaría para atender las personas que reciben tratamiento mental.

En primer lugar, esta ley provee y asegura los derechos de las personas que necesitan de servicios de salud mental, para recibir tratamiento en su proceso de recuperación.

Me gustaría que me escucharan porque luego tienen las misma dudas y vamos a llegar al mismo problema, que no van a saber qué es lo que están aprobando.

Este Proyecto, en segundo lugar, provee para que los servicios sean prestados en forma eficaz y diligente.

En tercer lugar, se utiliza el concepto, por primera vez, de personas, en vez de usar pacientes lo cual influye en la estigmación y destaca el valor de los seres humanos como ente activo dentro de un proceso de recuperación.

En cuarto lugar, pone énfasis en la participación de éstos en la toma de decisiones respecto a su tratamiento y aquellos aspectos de su rehabilitación, así como le da al manejo de su caso la información confidencial de su expediente.

En quinto lugar, el Proyecto reconoce y destaca la preparación de los profesionales de la salud mental en algo que se estuvo discutiendo en el pasado sobre los equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios y terapeúticos.

Y finalmente, y con mucha satisfacción para esta servidora, recoge prácticamente todo lo que presentaba el Proyecto 1140, de trato igual al paciente de salud mental dándole todos los servicios que necesitan los pacientes o la personas que reciben tratamiento mental. Y creo que esta pieza es la más completa que podemos presentar en la noche de hoy para darle a las personas que reciben tratamiento de salud mental unos servicios de optima calidad. Además de todo eso está dentro de la política pública de nuestra administración y será adecuadamente atendido dentro de la Reforma de Salud.

Estas son mis palabras, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Si el senador Ramos Comas quiere hacer la pregunta ahora a la distinguida senadora Carranza De León, con mucho gusto.

Senador Ramos.

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

SR. RAMOS COMAS: Lo que pasa es que ayer en el turno de Peticiones la compañera senadora Norma Carranza radicó una petición por escrito que tenía que ver con esta medida y en la misma, pues, ella como que no estaba muy de acuerdo de la forma en que se había trabajado. ¿Y entonces, pues, yo quisiera preguntarle si esta petición en el día de ayer fue hecha por ella?

SRA. CARRANZA DE LEON: Antes que nada, quiero corregirle que hubo una equivocación, esto no es una petición y teníamos que circularlo. Fue un error en el proceso. Era una carta explicativa con relación con los procesos que habían sucedido con el Proyecto de la Cámara, que en el transcurso del trabajo, de referirlo de la Cámara al Senado, en el montaje de la pieza, hubo un mal manejo quedando unas páginas fuera del contenido y tuvimos que devolverlo para su montaje.

SR. RAMOS COMAS: Sí.

SRA. CARRANZA DE LEON: Explicamos nosotros todo el trabajo que hemos realizado con la pieza y entonces decidimos que como teníamos nuestro trabajo adelantado, en vez de devolverlo por segunda o tercera vez, continuar con nuestro trabajo que estaba adelantado. Y para conocimiento de los compañeros, habíamos circulado o queríamos circular eso con el informe, pero equivocadamente salió como una petición, lo cual ruego se disculpe.

SR. RAMOS COMAS: Sí, lo que pasa es que aquí presenta un orden cronológico de todas estas cosas que pasaron y entonces la pregunta mía es, luego de ver, aunque sabemos que lo de la petición usted nos lo aclaro, ¿cuándo entonces se termina de redactar el Proyecto? ¿No fue hoy a las cuatro de la tarde (4:00 p.m.)?

SRA. CARRANZA DE LEON: El Proyecto no, el Proyecto lo hemos trabajado durante toda la semana.

SR. RAMOS COMAS: Sí, pero me refiero con las enmiendas.

SRA. CARRANZA DE LEON: No, de compararlas y de releerlas para estar seguro que estábamos presentando el Proyecto totalmente ...

SR. RAMOS COMAS: O sea, que fue en el día de hoy, es lo que quiero aclarar. Que fue en el día de hoy que se compaginó.

SRA. CARRANZA DE LEON: No, en pasarlas.

SR. RAMOS COMAS: Sí, en pasarlas, ¿pero fue en el día de hoy?

SRA. CARRANZA DE LEON: Sí, señor.

SR. RAMOS COMAS: Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE: Bien. Senadora Otero de Ramos para su turno de rectificación. Tiene cinco (5) minutos.

SRA. OTERO DE RAMOS: Señora Presidenta, yo quiero que informe si este informe se discutió en la Comisión.

SRA. CARRANZA DE LEON: ¿El informe?

SRA. OTERO DE RAMOS: Sí, el informe final.

SRA. CARRANZA DE LEON: No, señora.

SRA. OTERO DE RAMOS: Okey.

SRA. CARRANZA DE LEON: Se circuló.

SRA. OTERO DE RAMOS: Se circuló a las cuatro y veintisiete (4:27) a mí. Que lo que hice fue firmar pero no se me entrego copia.

SRA. CARRANZA DE LEON: Bueno, pero si los demás compañeros no estaban el informe estaba ...

SRA. OTERO DE RAMOS: No, pero yo estoy hablando de mi, no estoy hablando de los compañeros.

Necesito que me conteste dos (2) preguntas que he tratado de buscar en el informe en estos momentos y no encuentro y fueron dos (2) preguntas que estaban en el aire.

Una es sobre, ¿como se recoge en la implantación de este Proyecto los servicios de salud a confinados?

SRA. CARRANZA DE LEON: Si nos permite un momento en lo que identificamos, hay una página y un artículo dedicado exclusivamente, donde se recoge toda la preocupación, señora Senadora.

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, que se me descuente de mis cinco (5) minutos.

SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente, para contestarle a la distinguida compañera. En la página 56, el Artículo 3.04 establece que "los derechos establecidos por esta Ley para los adultos que reciban servicios de salud mental le son aplicables a aquellos adultos cumpliendo sentencias o recluidos en instituciones penales o de siquiatría forense cuando los mismos no conflijan con las medidas de seguridad propias de la institución."

SRA. OTERO DE RAMOS: ¿Y cuando sea con las medidas de seguridad, que es la mayoría de los diecisiete mil (17,000) que están las instituciones?

No hay disposición porque esa pregunta usted sabe que se la hice a la Secretaria, que no se pudo contestar porque ahora mismo salud correccional se privatizó.

Que se busquen alternativas. Yo no estoy aquí en el animo de decirlo, pero que se busquen alternativas para que se enmiende y se aclare, realmente que van a hacer con los confinados que están en confinamiento y que necesitan la salud mental. Porque en estos momentos salud correccional se ha privatizado y la misma Secretaria dice que no es responsabilidad del Departamento de Salud, porque eso se ha hecho como condición de una decisión del juez federal.

Mi otra pregunta ...

SR. PRESIDENTE: Perdóneme.

SRA. CARRANZA DE LEON: Quiero añadirle a eso, señora Senadora, que usted recuerda, cuando discutimos, no había nada incluido sobre, y lo recogimos de usted y lo añadimos a esto para que nos sirva como base, especialmente a este tipo de personas que necesitan servicios de salud mental, pero también a otras personas como son los envejecientes y otros que también tienen esos problemas.

SRA. OTERO DE RAMOS: Sí, el problema es que al recogerlo le pusieron que no represente seguridad y realmente ahí habría que enmendarlo.

Y la otra pregunta es, ¿cuál es el costo de la implantación de este Proyecto?

SRA. CARRANZA DE LEON: Esa respuesta no podría tenérsela en estos momentos, señor Presidente, porque este Proyecto es muy amplio, la necesidad es bien grande y yo creo que ante la salud de las personas con problemas mentales no hay costo alguno para atenderlos.

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, yo perdí dos (2) minutos en lo que ella buscaba en el informe y usted estaba hablando y le pedí permiso para que esos dos (2) minutos me los descontara. Solamente quiero un (1) minuto de los dos (2).

SR. PRESIDENTE: Compañera tiene el minuto, adelante.

SRA. OTERO DE RAMOS: Gracias.

El problema más grande del costo no es que no se sepa, es que las aseguradoras que fueron a las vistas públicas indicaron claramente de que van a subir las primas porque el costo de la salud mental es uno demasiado oneroso para pueblo de Puerto Rico. Y yo creo que un plan que no tiene cuánto le va a costar, nos va a pasar igualito que nos está pasando con la Tarjeta en su aspecto operacional donde hay unas deudas que se siguen extendiendo, porque realmente se sigue acumulando lo que se necesita para sufragar los gastos de esta Ley.

Señor Presidente, yo creo que las aseguradoras deben someter un informe a la mayor brevedad posible para que indiquen cuánto es el costo de la implantación de este Proyecto de manera que nos

aseguremos que no es "ley muerta" sino que es ley activa y viva que va a redundar en beneficio de todos los seres humanos que tienen problemas de salud mental en este país.

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, compañera.

SRA. CARRANZA DE LEON: Nuevamente, le recuerdo a la compañera Senadora que el 1140 que dice, "paridad igual para los pacientes de salud mental", se recogió y que tenemos material abundante de un gran número de estados en la Nación Americana que ya han aprobado la paridad para los pacientes de salud mental y que podemos someterle toda esa información.

Señor Presidente, le ruego que se apruebe la medida como quedó enmendada.

SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay alguna objeción?

SRA. OTERO DE RAMOS: Hay objeción.

SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título.

SR. PRESIDENTE: Hay objeción de parte de la senadora Otero de Ramos.

Aquellos que estén a favor, se servirán a decir que sí. Aquellos que estén en contra, se servirán decir que no.

Aprobada la medida.

SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

SRA. CARRANZA DE LEON: Muchas gracias.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 3009, titulado :

"Para denominar como "Edificio Ing. Julio A. Negroni Arizmendi", al nuevo edificio de oficinas técnicas principales de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, localizado en el Barrio Monacillos del Municipio de San Juan."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 3419, titulado :

"Para enmendar el subinciso Segundo (c)(2) del inciso (E) del Artículo 4 de la Ley Núm. 13 de 2 de octubre de 1980, según enmendada, conocida como "Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño" , a los fines de establecer que en casos en que el grado de incapacidad del veterano haya sido establecido como permanente, el veterano no vendrá obligado a presentar anualmente un solicitud de exención contributiva y para otros fines."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que esta medida se deje en Asuntos Pendientes.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2521, titulada :

"Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, a que transfiera por el precio de un dólar ($1.00), el antiguo Parque de Bombas de Yabucoa a la Legión Americana, Puesto 64 de Yabucoa."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 3013, titulado :

"Para enmendar el Artículo 89 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de eliminar la frase "entrenado para atacar"."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se llamen el Proyecto de la Cámara 3447. Vamos a solicitar que se deje en Asuntos Pendientes para mañana.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se llamen los asuntos que estaban en turno posterior.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Concurrente de la Cámara 66, titulada :

"Para que la Asamblea Legislativa otorgue la Medalla de Excelencia Deportiva de la Legislatura de Puerto Rico a Don Reynaldo Luis "Pochy" Oliver Martínez, en reconocimiento a su vida dedicada a la juventud y al deporte puertorriqueño, por recomendación de la Comisión Conjunta de la Asamblea Legislativa para la concesión de este galardón."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 3367, titulado :

"Para reglamentar la práctica de Tecnología Veterinaria; crear la Junta Examinadora de Tecnólogos Veterinarios y Técnicos en Salud Animal de Puerto Rico; establecer sus funciones, poderes, deberes, facultades y fijar penalidades."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en la página 3, líneas 5 a la 17, eliminar todo su contenido. Página 4, líneas 1 a la 23, eliminar todo su contenido. Página 5, líneas 1 a la 23, eliminar todo su contenido. Página 6, líneas 1 a la 19, eliminar todo su contenido. En la líneas 19, eliminar a la 23, todo su contenido. Página 9, líneas 5 a la 23, eliminar todo su contenido. Página 14, líneas 12 a la 20, eliminar todo su contenido. Página 16, líneas 5 a la 23, eliminar todo su contenido. Página 18, líneas 3 a la 23, eliminar todo su contenido. Página 19, líneas 6 a la 16, eliminar todo su contenido. Página 20, líneas 5 a la 15, eliminar todo su contenido.

Esas son las enmiendas.

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se forme un tercer Calendario, y último, de Votación Final que incluya las siguientes medidas: Resolución Concurrente de la Cámara 66, Proyecto de la Cámara 3367, Proyecto de la Cámara 1697, Proyecto del Senado 2267, Proyecto del Senado 1898, Resolución Conjunta del Senado 2187, Proyecto de la Cámara 1333, Resolución Conjunta del Senado 2441, Proyecto del Senado 2077, Proyecto del Senado 2592, Proyecto del Senado 2210, Proyecto de la Cámara 3275, Proyecto de la Cámara 3009, Resolución Conjunta de la Cámara 2521, Proyecto de la Cámara 3013, Resolución Concurrente del Senado 58, Proyecto del Senado 1634; y que la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final.

SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz de que se forme un Calendario de Votación Final de las medidas que han sido enumeradas por él, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.

Fórmese un Calendario de Votación Final.

## CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas:

P. del S. 1634

"Para establecer la Declaración de los Derechos y Deberes de la Persona Menor de Edad, sus padres o tutores, y del Estado; adoptar la política pública del Gobierno de Puerto Rico para garantizar los derechos

reconocidos a las personas menores de edad y disponer las responsabilidades del estado; redefinir el concepto de la "persona menor de edad" y el alcance del mismo en el ordenamiento jurídico civil vigente; disponer sobre la protección integral de los derechos y el reconocimiento expreso de la autoridad paterna, materna o del tutor; prohibir expresamente el discrimen en las personas menores de edad; instituir como fuente de derechos que puedan ejercerse en armonía con la legislación vigente la asistencia del estado, la seguridad social, las medidas contra el abuso, la violencia física y el maltrato contra menores; reconocer las libertades básicas del menor de edad y el derecho a la privacidad dentro del marco de la autoridad y supervisión del padre, madre o tutor; disponer los principios sobre la prestación de servicios de salud, las oportunidades para menores de edad con impedimentos físicos o mentales, el derecho a la educación, las oportunidades para el desarrollo deportivo y recreativo; reconocer la rehabilitación como principio fundamental en el sistema de justicia juvenil; y para otros fines relacionados."

P. del S. 1898

"Para crear la "Ley para regular los turnos de trabajo de los médicos internos y residentes en las instituciones hospitalarias de Puerto Rico"; establecer sus propósitos y funcionamiento."

P. del S. 2077

"Para enmendar el artículo 6 de la Ley Núm. 8 del 10 de octubre de 1987, para disponer que cualquier parte afectada por una determinación de la Junta de Planificación o la Administración de Reglamentos y Permisos podrá recurrir mediante el recurso administrativo de apelación a la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones; enmendar el artículo 13.016 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico" para disponer que en relación a los términos, trámites y condiciones en cuanto a solicitudes de apelación en los casos específicos provenientes de decisiones de la Administración de Reglamentos y Permisos donde las competencias fueron transferidas de dicha agencia central al municipio, el foro apelativo lo será la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, en los casos de jurisdicción específica delegada, según lo establece el artículo 31(a) de la Ley Núm. 76 del 24 de junio de 1975, según enmendada."

P. del S. 2210

"Para enmendar el Artículo 11.02 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", a fin de disponer unas normas adicionales relativas al uso de bicicletas."

P. del S. 2367

"Para adicionar un Artículo 8-A al Artículo A y un Artículo 9-A al Artículo 9 de la Ley Núm. 52 de 23 de febrero de 2000, a fin de reconocer expresamente la continuidad en el ejercicio de la Técnica de Emergencia Médica en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a toda persona autorizada bajo la Ley Núm. 46 de 30 de mayo de 1972."

P. del S. 2592

"Para enmendar el Capítulo 34 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como "Código de Seguros de Puerto Rico", con el propósito de disponer sobre los fines y

propósitos del asegurador cooperativo, establecer unas definiciones generales referente al contenido de dicho Capítulo y enmendar sus disposiciones a fin de armonizarlas con la realidad actual del asegurador cooperativo y promover su desarrollo."

R. C. del S. 2187

"Para ordenar a la Administración de Rehabilitación Vocacional a restituir, mantener abiertas y operacionales las oficinas de servicios a estudiantes con impedimentos en los recintos universitarios, públicos y privados. "

R. C. del S. 2441

"Para asignar a la Universidad de Puerto Rico la cantidad de doce millones quinientos mil (12,500,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas para la restauración del inmueble que comprende el Complejo de Medicina Tropical que se encuentra bajo la titularidad de dicha institución universitaria, localizado en el sector de Puerta de Tierra de San Juan; disponer que la asignación de los fondos será desembolsada en tres (3) partidas anuales recurrentes comenzando con una asignación de cuatro millones quinientos mil (4,500,000) dólares para el año fiscal 2001-2002 y las dos partidas restantes por la cantidad de cuatro millones (4,000,000) dólares cada una para los años fiscales subsiguientes 2002-2003 y 2003-2004; establecer que la Universidad de Puerto Rico cederá en usufructo, para el uso y disfrute por la Asamblea Legislativa un sesenta por ciento (60%) del espacio disponible por un término inicial de treinta (30) años y disponer que al concluir el usufructo, se otorgará un contrato de arrendamiento por el valor nominal de un (1) dólar por un término adicional de setenta (70) años; y para autorizar el pareo de los fondos asignados."

R. Conc. del S. 58

"Para otorgar la Orden Puertorriqueña de Excelencia Deportiva por sus hazañas atléticas, y declarar al licenciado Gilberto González Juliá como "Atleta del Siglo de Pista y Campo de Puerto Rico"."

P. de la C. 1323

"Para establecer el Comité Interagencial para el Estudio de la Violencia Doméstica en Puerto Rico."

P. de la C. 1697

"Para enmendar el Artículo 7-03 del Capítulo VII de la Ley Núm. 54 de 30 de mayo de 1973, según enmendada, conocida como "Ley de Administración, Conservación y Policía de las Carreteras Estatales de Puerto Rico", a fin de requerir a todo jinete que transite por las carreteras que lleve en su vestimenta o en la indumentaria, montura del caballo, un elemento distintivo de seguridad para brindar protección a éste, al jinete, a su ejemplar y a los conductores; y para imponer penalidades."

P. de la C. 3009

"Para denominar como "Edificio Ing. Julio A. Negroni Arizmendi", al nuevo edificio de oficinas técnicas principales de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, localizado en el Barrio Monacillos del Municipio de San Juan."

P. de la C. 3013

"Para enmendar el Artículo 89 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de eliminar la frase "entrenado para atacar"."

P. de la C. 3275

"Para establecer las necesidades de prevención, tratamiento, recuperación y rehabilitación en salud mental; crear las "Cartas de Derecho" para adultos y menores que reciben servicios de salud mental; uniformar lo relativo a los procedimientos relacionados con estos derechos; establecer los principios básicos de los niveles de cuidado en el ofrecimiento de servicios de salud mental; derogar la Ley Núm. 116 de 12 de junio de 1980, conocida como "Código de Salud Mental de Puerto Rico" y establecer penalidades."

P. de la C. 3367

"Para reglamentar la práctica de Tecnología Veterinaria; crear la Junta Examinadora de Tecnólogos Veterinarios y Técnicos en Salud Animal de Puerto Rico; establecer sus funciones, poderes, deberes, facultades y fijar penalidades."

R. C. de la C. 2521

"Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, a que transfiera por el precio de un dólar ($1.00), el antiguo Parque de Bombas de Yabucoa a la Legión Americana, Puesto 64 de Yabucoa."

R. Conc. de la C. 66.

"Para que la Asamblea Legislativa otorgue la Medalla de Excelencia Deportiva de la Legislatura de Puerto Rico a Don Reynaldo Luis "Pochy" Oliver Martínez, en reconocimiento a su vida dedicada a la juventud y al deporte puertorriqueño, por recomendación de la Comisión Conjunta de la Asamblea Legislativa para la concesión de este galardón."

**VOTACION**

Los P. del S. 1634; 2210; 2367; las R. C. del S. 2187; 2441; la R. Conc. del S. 58; los P. de la C. 1323; 3013; 3367 y la R. Conc. de la C. 66, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Manuel Rodríguez Orellana, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente.

TOTAL ..... 26

VOTOS NEGATIVOS

TOTAL ..... 0

VOTOS ABSTENIDOS

TOTAL ..... 0

Los P. del S. 1898; 2077; 2592 y el P. de la C. 3009, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente.

TOTAL ..... 25

VOTOS NEGATIVOS

TOTAL ..... 0

VOTOS ABSTENIDOS

Senador:

Manuel Rodríguez Orellana.

TOTAL ..... 1

El P. de la C. 1697 y la R. C. de la C. 2521, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente.

TOTAL ..... 25

VOTOS NEGATIVOS

Senador:

Manuel Rodríguez Orellana.

TOTAL ..... 1

VOTOS ABSTENIDOS

TOTAL ..... 0

El P. de la C. 3275, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock, Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente.

TOTAL ..... 18

VOTOS NEGATIVOS

TOTAL ..... 0

VOTOS ABSTENIDOS

Senadores:

Modesto Agosto Alicea, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas, Burno A. Ramos Olivera y Manuel Rodríguez Orellana.

TOTAL ..... 8

SR. PRESIDENTE: Por el resultado de la Votación, todas las medidas han sido aprobadas. Lo cual demuestra que el Senado ha cumplido con su responsabilidad en el día de hoy.

Agradecemos a todos los compañeros empleados del Senado por su trabajo y dedicación en el día de hoy. A los que van a permanecer aquí toda la noche, también, mi agradecimiento anticipado para que mañana podamos retornar y aprobar las medidas en el último día de aprobación de medidas de la presente Sesión Ordinaria y de la presente Asamblea Legislativa.

Próximo asunto.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hemos terminado los trabajos por el día de hoy. Solicitamos que el Senado recese hasta mañana, domingo, 25 de junio de 2000, a las dos en punto de la tarde (2:00 p.m.). Recordando al compañero y personal del Senado que mañana es el último día de aprobación de medidas y que estaremos aquí hasta la media noche.

SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la moción del compañero, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. El Senado de Puerto Rico recesa hasta el domingo, 25 de junio de 2000, a las dos de la tarde (2:00 p.m.).

# INDICE DE MEDIDAS
# CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA
# 24 DE JUNIO DE 2000


| MEDIDAS | PAGINA |
|---|---|
| PS 2456 | 7908 |
| PS 2489 | 7908 – 7909 |
| PS 2624 | 7909 |
| PC 3325 | 7909 |
| PC 2888 | 7909 – 7910 |
| PC 2995 | 7910 |
| PC 2969 | 7910 |
| RCC 2927 | 7911 |
| RCC 3173 | 7911 |
| RCC 3308 | 7911 |
| RCC 3421 | 7912 |
| RCC 3398 | 7912 |
| RCC 3410 | 7912 |
| RCC 3417 | 7913 |
| RCC 3411 | 7913 |
| RCC 3406 | 7913 |
| RCC 3408 | 7914 |

**MEDIDAS** ..... **PAGINA**

PS 1920 ..... 7914

PS 2303 ..... 7914

PS 2491 ..... 7915

PS 2489 ..... 7916

PS 2624 ..... 7916

RCS 2396 ..... 7916 - 7919

PC 3197 ..... 7919

RCC 2645 ..... 7920

R Conc S 70 ..... 7920

R Conc C 66 ..... 7920 - 7921

RCC 3325 ..... 7921

PS 1920 ..... 7921 - 7922

Sustitutivo PS 2570 ..... 7993

RCC 3163 ..... 7993 - 7994

RCC 3162 ..... 7994

PS 2189 ..... 7994 - 7995

PS 2613 ..... 7995

PS 2535 ..... 7995 - 7997

PS 2471 ..... 7997 - 7998

**MEDIDAS** ..... **PAGINA**

RCS 2531 ..... 7998 – 7999

RCS 2532 ..... 7999

RCC 3155 ..... 7999 – 8000

RCC 3389 ..... 8000 – 8001

RCC 3404 ..... 8001

RCC 3405 ..... 8001 – 8002

RCC 3407 ..... 8002

RCC 3419 ..... 8002

RCC 3420 ..... 8003

RCC 3429 ..... 8003 – 8004

RCC 3434 ..... 8004

RCC 3435 ..... 8004

RCC 3437 ..... 8005

PC 3367 ..... 8005 – 8006

PC 3064 ..... 8006 – 8007

RCC 3074 ..... 8007 – 8008

PS 1969 ..... 8008

PS 2281 ..... 8008

PS 2636 ..... 8008 – 8010

**MEDIDAS** ..... **PAGINA**

RCS 2535 ..... 8010 – 8011

PC 3363 ..... 8011

RCC 97 ..... 8012

RCC 3427 ..... 8012

RS 3539 ..... 8012

RCS 2188 ..... 8020

PS 1968 ..... 8021

PS 1920 ..... 8028 – 8029

RCS 2188 ..... 8030

PS 2613 ..... 8030 – 8031

PS 1560 ..... 8166

PS 2409 ..... 8166 – 8167

PS 2610 ..... 8167

PS 2610 ..... 8168

PC 3297 ..... 8168

PC 833 ..... 8168 – 8169

PC 2785 ..... 8169

PC 3007 ..... 8169 – 8170

PC 3232 ..... 8170

**MEDIDAS** ..... **PAGINA**

PC 2684 ..... 8171

PC 2582 ..... 8171

PC 2792 ..... 8171 – 8172

PC 2378 ..... 8172 – 8174

PC 2705 ..... 8174

Sustitutivo PC 400 ..... 8174

PC 3119 ..... 8175

PC 1729 ..... 8175

RCC 2926 ..... 8175 – 8176

PC 3501 ..... 8176

PS 2521 ..... 8176 – 8177

RCS 2438 ..... 8177

PC 3160 ..... 8177

RCC 3109 ..... 8177 – 8178

PC 3160 ..... 8178 – 8179

PC 2205 ..... 8179

PC 544 ..... 8179 – 8180

PC 3008 ..... 8180

PC 2729 ..... 8180

**MEDIDAS** ..... **PAGINA**

PC 2737 ..... 8180

PC 3020 ..... 8181

PC 3067 ..... 8181 – 8182

PC 3476 ..... 8182

PC 3528 ..... 8182

PC 2958 ..... 8182 – 8183

PS 2610 ..... 8183 – 8184

PS 2299 ..... 8184

PS 2283 ..... 8184 – 8185

PS 2577 ..... 8185 – 8186

PS 2578 ..... 8186

RCS 2557 ..... 8186

RCS 2558 ..... 8186 – 8187

RCS 2559 ..... 8187

RCS 2560 ..... 8187

RCS 2561 ..... 8187 – 8188

RCS 2562 ..... 8188

RCS 2563 ..... 8188

PS 2489 ..... 8189

**MEDIDAS** ..... **PAGINA**

PS 1920 ..... 8192 – 8193

RCS 2396 ..... 8194

R Conc S 70 ..... 8194

PS 2535 ..... 8194 – 8195

RCC 3429 ..... 8195

PS 2170 ..... 8196 – 8197

PS 2207 ..... 8214 – 8215

PC 2443 ..... 8215

PC 2998 ..... 8215

RCS 2196 ..... 8216

RCS 2038 ..... 8216 – 8217

RCS 2205 ..... 8217

RCS 2510 ..... 8217

RCC 2883 ..... 8218

RCC 3422 ..... 8218

RCC 3433 ..... 8218 – 8219

PC 1697 ..... 8456

PS 2367 ..... 8456 – 8457

PS 1898 ..... 8457

**MEDIDAS** ..... **PAGINA**

RCS 2187 ..... 8457

PC 1323 ..... 8458

RCS 2441 ..... 8458

PS 2077 ..... 8458 – 8459

PS 2592 ..... 8459

PS 2210 ..... 8459

PS 2254 ..... 8460

PC 3447 ..... 8460

R Conc S 58 ..... 8460

PS 1634 ..... 8461

PC 3275 ..... 8461 – 8470

PC 3009 ..... 8470

PC 3419 ..... 8470

RCC 2521 ..... 8471

PC 3013 ..... 8471

R Conc C 66 ..... 8471

PC 3367 ..... 8471 - 8472